

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 19 de diciembre de 2018, se reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Licenciado Obdulio Ávila Mayo, representante suplente del Partido Acción Nacional; Maestra Marcela Guerra Castillo, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo (así como el representante suplente, Licenciado Adalid Martínez Gómez); Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano y Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza, representante propietario de MORENA. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días, señoras y señores Consejeros y representantes. _____

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para el día de hoy por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar. ____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 16 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para su realización., _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Continúe con la sesión. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispense la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispensa la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. ____ Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. _____

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____
Continúe con la sesión. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el orden del día. _____
Quisiera en primera instancia proponerle a este Consejo General que se retiren del orden del día los Proyectos de Resolución, identificados en el mismo con los números 2.2 al 2.6, se trata de Proyectos de Resolución que tienen que ver con los casos de afiliación indebida por parte de algunos partidos políticos. _____

Y dado que estamos justamente en una etapa de análisis a partir del Grupo de Trabajo que se ha planteado, creo que es pertinente que primero este Consejo General determine lo conducente a propósito de los Lineamientos o de las consideraciones que sobre este punto se han venido trabajando, antes de que se continúe con este procedimiento. _____

Entiendo que estos procedimientos están en el orden del día, porque no podían no estar, fueron votados por la Comisión de Quejas y Denuncias, fueron turnados para su inclusión al orden del día, las áreas técnicas del Instituto no pueden obviar su inclusión; pero creo que es un gesto, éste es el momento para plantearlo en la construcción que hemos venido haciendo conjunta para que puedan ser discutidos a la luz de lo que se ha venido trabajando. _____

Les propondría también, si me permiten, incluiría aquí, y estaríamos retirando esos 5 apartados del orden del día, el 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, los que tienen que ver con afiliaciones. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenos días a todas y todos. _____

Primero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que nos fórmula el Consejero Presidente de retirar estos Proyectos de Resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores que fueron procesados ya por la Comisión de Quejas y Denuncias, y creo que en el marco del Proyecto de regularización de registros y padrones de militantes de los partidos políticos, conviene hacer una pausa y seguir revisando la forma en que hacia adelante trabajaremos con los partidos políticos para cumplir este objetivo. _____

Adicionalmente, Consejero Presidente, quisiera proponer que el apartado 6.3, que es un Proyecto de Acatamiento de una Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionado con fiscalización, también lo retiremos del orden del día, porque hemos recibido observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización que requerirán algún tiempo adicional para su procesamiento., y dado que esta Sentencia no tiene una fecha de acatamiento

obligatorio para el Consejo General, podríamos traerlo en la próxima sesión del Consejo General._____

Consejero Presidente, ésta es la propuesta, gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Primero, para pronunciarme sobre la propuesta que usted ha formulado de retirar los apartados 2.2 al 2.6, no compartiría la propuesta que se está formulando en la mesa, son procedimientos que ya han agotado su instrucción, son faltas que en los distintos casos ya han sido o no acreditadas, derivado de esa investigación, y con independencia del procedimiento que se está siguiendo, que yo he acompañado en las distintas reuniones de trabajo y seguiré acompañando porque me parece que sin duda es un compromiso de esta institución colaborar con los partidos políticos para resolver un problema que sí existe, que es un problema de consistencia de sus padrones de afiliados._____

Ese mecanismo que se puede establecer y que se está construyendo, no guarda relación con los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, porque en los casos de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores estamos hablando de infracciones que en su caso ya fueron o no acreditadas, y que están asociadas al ejercicio de derechos de ciudadanas y ciudadanos, no es una cuestión administrativa solamente de corregir un Padrón o un conjunto de padrones de afiliados por parte de los partidos políticos, sino son afectaciones a los derechos a la afiliación y al no uso de datos personales sin el consentimiento de ciudadanas y ciudadanos en casos concretos y específicos; por lo que, habiéndose agotado la instrucción, me parece que hay un conjunto de precedentes que ya se han establecido en este Consejo General que incluso han sido impugnados por los distintos partidos políticos y que también han sido confirmados por la Sala Superior, por lo que los Procedimientos Ordinarios Sancionadores me parece que tienen que seguir su curso._____

En este momento no veo una razón para que no sigan el curso correspondiente, y eventualmente en los tiempos que tengamos que emitir los Reglamentos, los Lineamientos o las normas necesarias para poder regularizar una situación que en este momento está irregular y que ha sido manifestada por los distintos actores políticos, por lo que no compartiría el retiro de estos apartados del orden del día. _____
Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para apoyar la propuesta que usted ha formulado respecto a retirar estos apartados del orden del día, creo que ha sido un trabajo muy benéfico para revisar este tema el que ha coordinado la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, que incluso ha presentado ya una posibilidad de emitir algunas normas, un procedimiento específico para atender el esquema de la actualización de los padrones de militantes de los partidos políticos, han sido reuniones muy productivas con las representaciones de los partidos políticos y se ha seguido un Protocolo riguroso para el trabajo, también ha habido mucha participación de las representaciones de los partidos políticos, incluso de los representantes propietarios en esta mesa del Consejo General, por eso me parece que es pertinente que por el momento no se desahoguen estos apartados. _____

También quiero mencionar un detalle que me parece de fundamental importancia, no se estaría lastimando absolutamente ninguna norma al retirar los apartados, no hay caducidad en el desahogo de los procedimientos y, por tanto, podemos hacerlo un poco más adelante, una vez que tengamos, insisto el procedimiento que ha coordinado de una manera estupenda la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenos días a todas y a todos. No estoy sorprendido de la propuesta Consejero Presidente, pero sí la lamento mucho. Por supuesto que hay normativas que se vulneran al prosperar una propuesta de este tipo como es el caso del artículo 17 constitucional. _____

Aquí hay ciudadanas y ciudadanos que están esperando que una autoridad del Estado mexicano, palabra que por cierto les gusta decir mucho a ustedes, que este Instituto, que se les dé justicia y vienen fundados estos Proyectos de Resolución, y se está pidiendo a los partidos políticos que se les dé de baja y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. _____

Creo que, por 2 ó 3, no sé cuántas reuniones ha habido de trabajo, no se puede ir por encima de la Constitución Política. _____

Sí lamento esa propuesta, además está presuponiendo que los resultados de esas reuniones de trabajo van a llevar a que se cambien estos Proyectos de Resolución, no sabemos cómo va a ser el resultado de estos procedimientos que ya están en curso, ordinarios sancionadores. _____

Sí lamento que no se le haga justicia a ciudadanas y ciudadanos, a quien este Instituto se debe. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

También de manera breve me parece importante presentar un argumento a la reflexión que ha formulado el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, pero efectivamente, cuando los militantes de los partidos políticos o las personas que consideran, lo digo con mayor precisión, consideran que han sido afiliadas de manera indebida por los partidos políticos, han presentado estos escritos. _____

La pretensión esencial que están formulando es que sean retirados de los padrones de los militantes, y debo decir que los partidos políticos han notificado en estos casos a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que han procedido a dar las bajas de los ciudadanos, es decir, la pretensión ha sido ya atendida por las propias instituciones políticas que son denunciadas en estos casos, y solo quedaría pendiente la parte que tiene que ver con la relación en este procedimiento sancionador con el Instituto Nacional Electoral. _____

Por eso me parece que en rigor no estaríamos lastimando ninguna otra norma. Yo me referí básicamente al tema de la caducidad, es decir, que podemos desahogar con mayor posterioridad el tema. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

También en vía de moción, creo que no podemos o no tenemos ni un solo argumento para afirmar que la pretensión principal de que quien presenta una queja por una afiliación indebida sea que se le baje del Padrón, es uno de los resarcimientos necesarios ante una violación. _____

Pero, el administrar justicia también implica imponer las sanciones ante infracciones, y en los casos que se está solicitando que se retiren del orden del día, ya las infracciones no solamente son un alegato por parte de quien presenta la denuncia, no solamente son una pretensión por parte de quien presenta la denuncia, son casos en los que en todos los que se están declarando fundados ya está acreditada por esta institución la indebida afiliación. _____

Me parece que no podemos presuponer cuál es la pretensión que tienen los denunciantes cuando acuden al Instituto. _____

Lo que sí podemos y debemos hacer es cumplir con nuestras obligaciones como institución garante de estos derechos y encargada de resolver estos procedimientos. _

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenos días a todas y a todos. Tampoco estaría de acuerdo con que se retiraran del orden del día los apartados que van del 2.2 al 2.6. _____

Es cierto que hemos llevado a cabo reuniones de trabajo para ver la posibilidad de hacer Lineamientos para la regularización de las afiliaciones a los partidos políticos, pero justo una de las vertientes de análisis que tenemos es verificar si se podrían suspender los procedimientos que tenemos en trámite. _____

Pedimos la opinión técnica de la Dirección Jurídica y también de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, sin embargo, lo que nos respondieron es que eso no se podía llevar a cabo. _____

Me parece que no tenemos ningún asidero legal para hacer el retiro de estos procedimientos que ya han cumplido con todo el proceso que se establece en las normas, ya tenemos una Resolución, ya se hicieron todas las indagatorias, considero que, incluso, podríamos incurrir en una dilación injustificada de la Resolución. _____

Coincido con lo que dice el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña que eso podría implicar una vulneración al artículo 17 constitucional. _____

Es cierto que quizá uno de los agravios de las personas que acuden es que se les quite de los padrones de los partidos políticos; pero no es el único, también tiene como agravio que se les haya originalmente afiliado de manera indebida. Eso es lo que hemos sancionado en muchas ocasiones aun y cuando ya no se encuentren en los padrones de los partidos políticos. _____

Por lo tanto, considero que se encuentran fundados estos procedimientos, ya se hizo la investigación debida por el área conducente, no veo ningún motivo para que en este momento nosotros retiremos el análisis de estos casos, tenemos todos los elementos para hacerlo, y no hacerlo sí podría implicar una vulneración a derechos fundamentales. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, **Ciro Murayama.** _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. _____

En efecto ha habido reuniones de trabajo a las que hemos asistido algunas Consejeras y Consejeros Electorales, no todos, en el ánimo de encontrar una solución de fondo a un problema que se presenta una y otra vez, ¿qué es?, que partidos políticos de diferente historia, algunos con décadas de existencia han sido denunciados, efectivamente, por ciudadanos que expresan no haber dado su consentimiento para estar en los padrones de militantes, y esto lo hacen gracias al avance de la transparencia y a que los padrones son públicos. _____

Y sabemos que la Ley de Archivos, incluso, y las obligaciones de conservar la documentación es posterior a la creación de muchos de los partidos políticos. Y, en efecto, nosotros hemos sancionado reiteradas veces a los partidos políticos por tener militantes de los que no consta la documentación que respalde esas afiliaciones, incluso pudieron haber estado afiliados, pero si el partido no lo puede demostrar, se le da la razón al ciudadano. _____

Considero que lo que se está proponiendo no es ni suspender los procedimientos, no se dijo así, sino simplemente no desahogarlos en esta sesión en espera de tener los Lineamientos de qué vamos a hacer con los padrones, de hecho la pretensión inicial era traer esos Lineamientos a la sesión de hoy, pero para reforzar el Proyecto de Resolución garantizando los derechos de las militancias de los partidos políticos, convenimos que siguiésemos trabajando a lo largo del mes de enero y en la próxima sesión se pueda traer el Proyecto y tengamos así una ruta para enfrentar este problema, que pase no solo por la sanción, porque las sanciones, lamentablemente no corrigen hoy lo que se hizo en el pasado, y los ciudadanos haya sanción o no, lo que consiguen es que se les dé de baja de los padrones. _____

Es decir, las sanciones económicas no van a los ciudadanos, es decir, el efecto práctico para el ciudadano denunciante creo que hay que mantenerlo, y no considero, además, que deban de cambiarse los Proyectos y su sentido. Ya veremos si tenemos

una política para la modernización y actualización de los padrones si existen atenuantes, y quizá eso es lo que vamos a discutir, pero me parece que ni vulneramos ningún derecho ni afectamos a los ciudadanos que enuncian si estos procedimientos los vemos bajo el cristal de una política de solución de largo plazo del problema de los padrones, en los cuales han estado involucrados absolutamente todos los Partidos Políticos Nacionales, hay que decirlo. _____

Entonces, si lo que estamos es por iniciar un periodo de actualización de los respaldos de los padrones y eso nos permite salir de esta dinámica de sanción y no corrección, sino hacia un escenario donde estos problemas puedan ir siendo solventados, me parece que nada perdemos, entonces también he de decir que el marco legal para hacer esto es el Reglamento del propio Consejo General, ¿cuántas veces hemos retirado asuntos, procedimientos de esta misma naturaleza?, y nadie se ha desgarrado las vestiduras. _____

Consejeros Electorales que hoy se oponen, cuántas veces no han pedido tiempo, no han pedido que se retiren las cosas y se ha concedido, entonces, sin cambiar de criterio, sin modificar los Proyectos que más adelante tendrán que venir en sus términos aquí, pues yo sugiero que podamos tener una amplitud de visión mayor, teniendo ya el marco donde le vamos a dar solución de fondo a estos problemas, y eso a mí me parece adecuado. _____

Resolver problemas es parte de lo que le corresponde a las autoridades, del Estado mexicano. Hay quien tiene cargos de responsabilidad y en vez de resolver problemas, los genera. No es mi caso, votaré a favor. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenos días a todas y a todos. _____

Quiero tomar el uso de la voz porque me parece importante la petición que se formula para retirar estos Puntos de Acuerdo. _____

Parto de la base que el proceso no es el proceso por sí mismo, sino que tiene una finalidad, y creo que afortunadamente hoy hemos encontrado una finalidad y un sentido de ser de estos procedimientos. _____

Se había estado sancionando de manera continua a los partidos políticos y hoy en un momento en que se está atajando un punto de fondo, que es un punto no menor, sino que es un punto que tiene que ver con el cómo solucionamos un problema para regularizar los padrones de todos y cada uno de los partidos políticos. _____

Si ésa es la dinámica, me parece que es viable ahora que podamos retirar estos asuntos para el próximo mes de enero, cuando estamos pensando en construir el Modelo que nos va a ayudar a fomentar esta nueva regularización de todos los padrones de los partidos políticos, y eso va a seguir fortaleciendo al Sistema que tenemos, el Sistema Electoral, el Sistema Democrático. _____

No soy ajena a las peticiones que hacen las personas que vinieron hasta acá, pero precisamente porque no soy ajena es que las personas que vinieron a reclamar la indebida afiliación, ya está atendido su tema, ya están desafiliados, ya se pasó en ese momento, el derecho político ya está protegido y garantizado. _____

El otro tema es, vamos a dar tiempo cómo se termina de construir para de manera integral darle una respuesta a todos estos procedimientos que no nada más son los 5 que se están presentando aquí, sino que son muchos procedimientos que todavía están en sustanciación, que todavía están siguiendo un cauce, y que si bien es cierto, no va a parar porque se tiene que terminar de desahogar, se tiene que hacer armónico con el Modelo que se está construyendo para la regularización. _____

De ahí que creo que de aquí a enero próximo, válidamente que se está terminando de ver de forma integral, puede esperar esta solución. _____

Hay una parte esencial de las sanciones, si las sanciones es que inhiban las conductas o también que nos ayuden a cómo reparar las conductas infractoras. Y en este caso el tema ya se está atendiendo a partir de todos los partidos políticos, lo cual me parece que es un buen momento para que aliniemos y fortalezcamos los sistemas de todos los partidos políticos, al margen de que en su momento se impondrán las sanciones correspondientes por las conductas infractoras. _____

Si éste es el camino y he visto que todos los partidos políticos en las mesas de diálogo están en esa misma dirección, me parece que podemos esperar un mes más, y no pasa nada, porque ninguno de los asuntos que tenemos aquí está próximo a caducar, todos los asuntos están en los tiempos predeterminados para que puedan resolverse. _____

Creo que, esta alineación que se pueda dar, no va a generar ninguna problemática y tampoco tiene que ver con una afectación a la tutela judicial efectiva, primero porque estamos dentro de los tiempos que la propia Ley nos marca para emitir la Resolución, y dentro de esos tiempos se emitirá la propia Resolución que corresponda, alineada a un Proyecto que va a resolver un tema y un problema mayor en el Sistema. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Dado que no hay consenso respecto de la propuesta que formuló esta Presidencia, procede tomar una votación diferenciada respecto del orden del día. _____

Secretario del Consejo, le pido que proceda en esos términos. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Efectivamente les propongo a ustedes... _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por supuesto, incluyendo en la votación en lo general en el orden del día la propuesta que, entiendo, no fue objetada por nadie que planteó el Consejero Electoral Benito Nacif respecto del apartado 6.3. _____

Proceda Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día, excluyendo de esta votación por lo que hace a los apartados que van del 2.2 al 2.6 e incluyendo la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif de retirar el apartado 6.3. _____

Quienes estén a favor, de aprobar el orden del día en estos términos, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado en votación económica (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora someteré a la consideración en lo particular la propuesta que hizo el Consejero Presidente de retirar los apartados del 2.2 al 2.6. _____

Los que estén a favor de retirarlos, sírvanse manifestarlos, si son tan amables. _____
8 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Se aprueba el orden del día retirando los apartados antes señalados por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto del orden del día aprobado) _____

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL _____

CONSEJO GENERAL _____

SESIÓN EXTRAORDINARIA _____

ORDEN DEL DÍA _____

19 DE DICIEMBRE DE 2018 _____

10:00 HORAS _____

1.- Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. _____

2.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)_____

2.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-524/2017._____

2.2.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la violación al derecho político de libre afiliación de diversas personas y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.____

2.3.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017, iniciado con motivo de la presentación de sendas denuncias en contra del Partido Político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a al derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de los datos personales de los denunciantes._____

2.4.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018, iniciado con motivo de diversas quejas presentadas por doscientos noventa y siete ciudadanos en contra del Partido Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida afiliación al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos y documentos personales._____

2.5.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona, en contra de Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su registro como representante de NA ante mesa directiva de casilla sin su consentimiento y la probable violación a su derecho de libertad de afiliación, respectivamente, conductas que presuntamente fueron realizadas mediante la indebida utilización de sus datos personales.

2.6.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por de Adán Magdaleno Alcalá, María del Carmen Alcalá Muñoz, Crysna Yaneth Islas Holguin, Magali Almanza Gutiérrez, Roberto Esli Manuel Ramírez Romero y David Gonzalo Hernández Temoltzi, en contra del partido político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales.

2.7.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por diversos ciudadanos en contra del Partido Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación de dicho ciudadano, al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.

2.8.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto

del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018, iniciado con motivo de la presentación de sendas denuncias en contra del partido político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales. _____

2.9.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018 aperturado con motivo de las quejas presentadas ante esta autoridad electoral a través de oficios signados por servidores públicos de órganos desconcentrados de este Instituto en diversas entidades federativas, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos, aspirantes al cargo de supervisores electorales y/o capacitadores asistentes electorales, que se encontraron en el padrón del partido político Nueva Alianza presuntamente sin su consentimiento. _____

2.10.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018 aperturado con motivo de los oficios remitidos por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, así como por la Vocal Secretaria de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Chiapas, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos, que se encontraron en el padrón del Partido Político Nueva Alianza presuntamente sin su consentimiento. _____

2.11.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto

del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018 iniciado con motivo de los oficios remitidos por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, así como por la Vocal Secretaria de la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Chiapas, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de distintos ciudadanos en el padrón de militantes del Partido Político Nueva Alianza, presuntamente sin su consentimiento.

2.12.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018, iniciado con motivo de la presentación de sendas denuncias en contra del Partido Político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador- asistente electoral para el proceso electoral 2017-2018 y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales.

2.13.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018, iniciado con motivo del escrito presentado por Pedro Urbina Prieto, a través del cual hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de dicho ciudadano como Representante Suplente ante el Consejo Local de este Instituto en Chihuahua y militante del partido político Nueva Alianza, en ambos casos, sin su consentimiento.

2.14.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por Linda Paola López Quintero, Leydi Elizabeth Rodríguez Montelongo, Rubí Alejandra Ibáñez Ochoa, Domingo Antonio Lugo Garza, Jessica Claudina Hernández Carrión, Brenda Lizet Orozco González, Karely Lucía Elizalde Félix, Alejandra Carolina Alcaraz Luevanos, Adriana García Severiano, Mónica Berenice Enríquez Sánchez, Edgar Sánchez Valiente e Ivette García Ruvalcaba, en contra de Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la indebida utilización de sus datos personales. _____

2.15.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por Adelaida Rivera Ochoa y Francisco Javier Aguilar Tejeda en contra del partido político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales. _____

2.16.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por Alma Dolores Maldonado Llanes, Araceli Yepiz Velázquez y Adriana Lucia Diez Marina Montes, ciudadanas que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral para el proceso electoral 2017-2018, en contra del partido político Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de las ciudadanas y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. _____

2.17.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018 que se deriva de la queja presentada por Jorge Luis García Delgadillo, quien presentó escrito por el cual, hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la afiliación del partido Nueva Alianza presuntamente sin su consentimiento, para lo cual, en su caso, se utilizaron sus datos personales._____

2.18.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018, iniciado con motivo de la queja presentada por Guillermo Ibarra Parga, por supuestas violaciones a la normativa electoral, atribuibles al partido político Nueva Alianza, consistentes en la presunta afiliación indebida del mencionado ciudadano al partido político en cita, sin que hubiere mediado consentimiento alguno, derivado de diversas consultas efectuadas por dicho ciudadano, en la página electrónica de este Instituto, en el apartado Afiliados por partido político, siendo que el ciudadano en comento._____

2.19.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por las ciudadanas Araceli Pérez Obregón y Socorro Melissa Estrada Garza, así como del ciudadano Gerardo Cortez Jiménez en contra del Partido Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación de dicho ciudadano, al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

2.20.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018 derivado del Cuaderno de Antecedentes aperturado con motivo de oficio signado por los Vocales Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado

de Nayarit, mediante el cual hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos en padrones de militantes de partidos políticos nacionales que aspiraban al cargo de Supervisor Electoral y/o Capacitador – Asistente Electoral, dentro del Proceso Electoral Local que se celebró en 2016 – 2017, en el estado de Nayarit, presuntamente sin su consentimiento._____

3.- Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo del mes, que junto con el que sigue en su orden, será tomado como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el apartado 1.2 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. (Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019)_____

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las autoridades electorales locales para el primer trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. _____

5.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de miembros de los Ayuntamientos de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas. (Partidos Políticos y Candidato Independiente)._____

6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a

sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización._

6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, recaída en el recurso de apelación identificado como SG-RAP-9/2018._____

6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-49/2018._____

6.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con el número SM-RAP-121/2018._____

6.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-139/2018._____

6.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-231/2018 y acumulado._____

6.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-235/2018 y su acumulado SUP-RAP-286/2018._____

6.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-243/2018._____

6.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Guadalajara, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-258/2018._____

7.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____

8.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____

9.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____

10.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional denominado "Morena". (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____

- 11.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada "Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana". (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____
- 12.- (A petición de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera) Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional denominada "Parlamento Ciudadano Nacional". (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)_____
- 13.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Informe sobre la implementación del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica)_____
- 14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan de Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. (Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica)_____
- 15.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el Resolutivo Quinto del Acuerdo INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra nacionalidad. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)_____
- 16.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros

Electoral de los Organismos Públicos Locales de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)_____

17.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)_____

18.- (A petición del Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018. (Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019)_____

19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sancionadores de queja y oficiosos en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)_____

19.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática y del C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB._____

19.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de Morena con registro local en el estado de Durango, identificado como INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO._____

19.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra

del Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, identificado como INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH.

19.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición “Por Chihuahua al Frente”, integrada por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como en contra de su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Meoqui, el C. Ismael Pérez Pavía, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

19.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato a Senador por Mayoría Relativa, postulado por la otrora Coalición denominada “Por México al Frente” integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF/UTF/675/2018.

19.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP.

19.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Elío Molina Salinas, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL.

19.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL._____

20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos. (Comisión de Fiscalización) _____

21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las consultas planteadas por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional y por el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato. (Comisión de Fiscalización)_____

22.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019. (Comisión del Registro Federal de Electores)_____

23.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y

los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. (Comisión del Registro Federal de Electores)_____

24.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del modelo de la credencial para votar en territorio nacional y desde el extranjero. (Comisión del Registro Federal de Electores)_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Dé cuenta del primer punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto es el relativo al Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Integrantes del Consejo General, está a su consideración este Tercer Informe Trimestral. _____

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. _____

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se consideran constituyen infracciones a la Ley en la materia, mismo que se compone en este caso de 20 apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Para reservar el apartado 2.1, por favor. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Si no hay ninguna otra intervención en este sentido, me parece que podemos proceder a votar los Proyectos de Resolución identificados en el orden del día actualizado con los números 2.2 a 2.20, por favor Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados que van del 2.2 al 2.20, considerando para el caso del apartado 2.9 la fe de erratas circulada previamente. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1447/2018, INE/CG1448/2018, INE/CG1449/2018, INE/CG1450/2018, INE/CG1451/2018, INE/CG1452/2018, INE/CG1453/2018, INE/CG1454/2018, INE/CG1455/2018, INE/CG1456/2018, INE/CG1457/2018, INE/CG1458/2018, INE/CG1459/2018, INE/CG1460/2018, INE/CG1461/2018, INE/CG1462/2018, INE/CG1463/2018, INE/CG1464/2018 e INE/CG1465/2018) Ptos. 2.2 al 2.20 _____

INE/CG1447/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017
DENUNCIANTES: VÍCTOR PÉREZ
MEZO Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA VIOLACIÓN AL DERECHO POLÍTICO DE LIBRE AFILIACIÓN DE DIVERSAS PERSONAS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
Nueva Alianza	Partido político nacional denominado Nueva Alianza
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron ochenta y cuatro escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida a *Nueva Alianza* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin:

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
1	Víctor Pérez Mezo	17/mayo/2017 ¹
2	Erick Morales López	12/mayo/2017 ²
3	José Ramón Fernández Colín	20/mayo/2017 ³
4	Anaid Martínez Arreola	19/mayo/2017 ⁴
5	María Isabel Cisneros Salazar	17/mayo/2017 ⁵
6	Antonia Jáuregui Ramírez	23/mayo/2017 ⁶
7	Lucio González Alvarado	23/mayo/2017 ⁷
8	Yuridia Ramírez Montes	16/mayo/2017 ⁸

¹ Visible a página 3, legajo 1 del expediente

² Visible a páginas 8-15, legajo 1 del expediente

³ Visible a página 36, legajo 1 del expediente

⁴ Visible a página 39, legajo 1 del expediente

⁵ Visible a páginas 42-43, legajo 1 del expediente

⁶ Visible a página 46, legajo 1 del expediente

⁷ Visible a página 49, legajo 1 del expediente

⁸ Visible a página 52-53, legajo 1 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
9	Azael Olmos Bello	19/mayo/2017 ⁹
10	Miguel Ángel Olmos Bello	19/mayo/2017 ¹⁰
11	Rafael Ávila Blancas	19/mayo/2017 ¹¹
12	Alejandro Tijerina Salazar	18/mayo/2017 ¹²
13	Ulises Medina Arellano	19/mayo/2017 ¹³
14	Fernando Armenta Escalante	19/mayo/2017 ¹⁴
15	Lilia Verenice Ruiz Colín	17/mayo/2017 ¹⁵
16	Oscar López Vázquez	17/mayo/2017 ¹⁶
17	Obed Rodríguez Valle	17/mayo/2017 ¹⁷
18	Juan Gilberto Aguilar Aceves	16/mayo/2017 ¹⁸
19	María del Carmen Palmeros Palmeros	19/mayo/2017 ¹⁹
20	Angélica del Carmen Castillo Montejó	16/mayo/2017 ²⁰
21	Iván Alberto Cazarín Caloca	19/mayo/2017 ²¹
22	Jorge Antonio Aguilar Cuesta	19/mayo/2017 ²²
23	Sandino Camacho Valenzuela	16/mayo/2017 ²³
24	Javier Ramírez Hernández	17/mayo/2017 ²⁴
25	Laura Liliana López Ornelas	19/mayo/2017 ²⁵
26	Oscar Ramírez Aladro	15/mayo/2017 ²⁶
27	Aurora González Prado	18/mayo/2017 ²⁷
28	Teresita Ortega Cortés	18/mayo/2017 ²⁸
29	Teresa Guadalupe Hernández Lezama	19/mayo/2017 ²⁹
30	María Esperanza Meléndez Tlacuilo	19/mayo/2017 ³⁰
31	María Teresa Pérez Dávila	19/mayo/2017 ³¹

⁹ Visible a página 58, legajo 1 del expediente

¹⁰ Visible a página 60, legajo 1 del expediente

¹¹ Visible a página 62, legajo 1 del expediente

¹² Visible a página 64, legajo 1 del expediente

¹³ Visible a página 71, legajo 1 del expediente

¹⁴ Visible a página 75, legajo 1 del expediente

¹⁵ Visible a página 78, legajo 1 del expediente

¹⁶ Visible a página 81, legajo 1 del expediente

¹⁷ Visible a página 84, legajo 1 del expediente

¹⁸ Visible a página 87, legajo 1 del expediente

¹⁹ Visible a página 94, legajo 1 del expediente

²⁰ Visible a páginas 97-98, legajo 1 del expediente

²¹ Visible a página 101-102, legajo 1 del expediente

²² Visible a página 106, legajo 1 del expediente

²³ Visible a página 111, legajo 1 del expediente

²⁴ Visible a página 119, legajo 1 del expediente

²⁵ Visible a página 122, legajo 1 del expediente

²⁶ Visible a página 126, legajo 1 del expediente

²⁷ Visible a página 129, legajo 1 del expediente

²⁸ Visible a página 132, legajo 1 del expediente

²⁹ Visible a página 135, legajo 1 del expediente

³⁰ Visible a página 138, legajo 1 del expediente

³¹ Visible a página 141, legajo 1 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
32	Omar Hassan Bravo Hernández	19/mayo/2017 ³²
33	Sergio Juan Guevara Calixto	19/mayo/2017 ³³
34	Adriana Gómez Cárdenas	17/mayo/2017 ³⁴
35	Armando Bañuelos Toledo	19/mayo/2017 ³⁵
36	Martha Alvarado Vidaña	19/mayo/2017 ³⁶
37	Gustavo Garza Turrubiates	16/mayo/2017 ³⁷
38	Faviola Araceli Sosa Orosco	16/mayo/2017 ³⁸
39	Jesús Manuel Almazán Cano	16/mayo/2017 ³⁹
40	Lorenzo Arturo Parga Amado	16/mayo/2017 ⁴⁰
41	Beatriz Ramírez Vergara	19/mayo/2017 ⁴¹
42	Yesica Margarita Chión Quintana	19/mayo/2017 ⁴²
43	Graciela Arista Mendoza	16/mayo/2017 ⁴³
44	Jesús Omar Arias Villa	26/mayo/2017 ⁴⁴
45	María Alejandra Barrales Cruz	29/mayo/2017 ⁴⁵
46	Lilia Adriana Sánchez García	02/junio/2017 ⁴⁶
47	Fernando Luis Manzanilla Prieto	07/junio/2017 ⁴⁷
48	María José de Santos Pérez	06/junio/2017 ⁴⁸
49	Marco Aurelio González Gama	12/junio/2017 ⁴⁹
50	Laura Ornelas Rivera	12/junio/2017 ⁵⁰
51	Alejandro González López	07/junio/2017 ⁵¹
52	Esteban Flores de Hoyos	13/junio/2017 ⁵²
53	Gabriel López Olguín	23/junio/2017 ⁵³
54	Mary Carmen Ochoa Méndez	28/mayo/2017 ⁵⁴

³² Visible a página 144, legajo 1 del expediente

³³ Visible a página 147, legajo 1 del expediente

³⁴ Visible a páginas 152-155, legajo 1 del expediente

³⁵ Visible a página 159, legajo 1 del expediente

³⁶ Visible a página 162, legajo 1 del expediente

³⁷ Visible a página 165, legajo 1 del expediente

³⁸ Visible a página 173, legajo 1 del expediente

³⁹ Visible a páginas 175-176, legajo 1 del expediente

⁴⁰ Visible a páginas 180-181, legajo 1 del expediente

⁴¹ Visible a página 185, legajo 1 del expediente

⁴² Visible a página 189, legajo 1 del expediente

⁴³ Visible a página 192, legajo 1 del expediente

⁴⁴ Visible a página 196, legajo 1 del expediente

⁴⁵ Visible a página 201, legajo 1 del expediente

⁴⁶ Visible a páginas 204-205, legajo 1 del expediente

⁴⁷ Visible a página 209, legajo 1 del expediente

⁴⁸ Visible a página 212, legajo 1 del expediente

⁴⁹ Visible a página 217, legajo 1 del expediente

⁵⁰ Visible a página 219 bis, legajo 1 del expediente

⁵¹ Visible a página 222, legajo 1 del expediente

⁵² Visible a página 227, legajo 1 del expediente

⁵³ Visible a página 231, legajo 1 del expediente

⁵⁴ Visible a página 235, legajo 1 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
55	Midory Lizbeth Hernández Hernández	19/mayo/2017 ⁵⁵
56	Victoria Lezama Porras	04/julio/2017 ⁵⁶
57	Dulce María Bello Monfil	30/junio/2017 ⁵⁷
58	Azucena María Romero Gómez	04/julio/2017 ⁵⁸
59	Cuauhtémoc Dolores Flores	26/junio/2017 ⁵⁹
60	Jorge Armador Tlatilolpa	28/junio/2017 ⁶⁰
61	José de Jesús Gómez Valle	20/julio/2017 ⁶¹
62	Licón Felipe Ríos Gallegos	18/julio/2017 ⁶²
63	Félix Ciprián Hernández	31/julio/2017 ⁶³
64	María Guadalupe Balderas Mata	07/agosto/2017 ⁶⁴
65	María de Lourdes Martínez Martínez	07/agosto/2017 ⁶⁵
66	Nazarín Vargas Armenta	17/agosto/2017 ⁶⁶
67	Jorge Francisco Antonio González Cervantes	28/agosto/2017 ⁶⁷
68	Bibiana Palacios Varela	19/mayo/2017 ⁶⁸
69	Raúl Ramírez García	19/mayo/2017 ⁶⁹
70	Mario Román Vega Díaz	15/mayo/2017 ⁷⁰
71	María del Carmen Suárez Beltrán	16/mayo/2017 ⁷¹
72	Santiago Blanco Córdoba	18/mayo/2017 ⁷²
73	Rosario Chontal Morales	18/mayo/2017 ⁷³
74	José Ramón Hernández Hernández	07/septiembre/2017 ⁷⁴
75	Rosa Carmina Rumbo Serna	02/octubre/2017 ⁷⁵
76	José Armando Campos Téllez	03/octubre/2017 ⁷⁶
77	Blanca Yazmín Sosa Lechuga	10/octubre/2017 ⁷⁷

- ⁵⁵ Visible a página 237, legajo 1 del expediente
⁵⁶ Visible a páginas 239-240, legajo 1 del expediente
⁵⁷ Visible a página 255, legajo 1 del expediente
⁵⁸ Visible a páginas 245-246, legajo 1 del expediente
⁵⁹ Visible a página 258, legajo 1 del expediente
⁶⁰ Visible a página 263, legajo 1 del expediente
⁶¹ Visible a página 276, legajo 1 del expediente
⁶² Visible a página 281, legajo 1 del expediente
⁶³ Visible a páginas 285-286, legajo 1 del expediente
⁶⁴ Visible a página 301, legajo 1 del expediente
⁶⁵ Visible a página 304, legajo 1 del expediente
⁶⁶ Visible a páginas 309-312, legajo 1 del expediente
⁶⁷ Visible a página 322, legajo 1 del expediente
⁶⁸ Visible a página 327, legajo 1 del expediente
⁶⁹ Visible a página 330, legajo 1 del expediente
⁷⁰ Visible a página 336, legajo 1 del expediente
⁷¹ Visible a página 339, legajo 1 del expediente
⁷² Visible a páginas 342-343, legajo 1 del expediente
⁷³ Visible a páginas 346-347, legajo 1 del expediente
⁷⁴ Visible a página 375, legajo 1 del expediente
⁷⁵ Visible a página 612, legajo 1 del expediente
⁷⁶ Visible a página 616, legajo 1 del expediente
⁷⁷ Visible a página 634, legajo 1 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
78	Ana Karina Rojo Pimentel	05/octubre/2017 ⁷⁸
79	Ricardo Serrano Fernández	05/octubre/2017 ⁷⁹
80	Arturo Rodríguez Reyes	11/octubre/2017 ⁸⁰
81	Luisa Fernanda Pérez Mata	12/octubre/2017 ⁸¹
82	Paúl Christian Rodríguez Hernández	11/mayo/2017 ⁸²
83	Arturo Alonso Avelar	13/junio/2017 ⁸³
84	Irving Vargas Ramírez	09/junio/2017 ⁸⁴

2. Registro, reserva de admisión y determinación del emplazamiento.⁸⁵ Mediante proveídos de catorce de julio, treinta y uno de agosto, diez de octubre y tres de noviembre, todos de dos mil diecisiete, así como veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las denuncias planteadas, quedando registradas como un solo **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017**.

Asimismo, se reservó lo conducente a la admisión y emplazamiento de las partes, hasta en tanto se culminará la etapa de investigación.

3. Admisión.⁸⁶ El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se admitieron a trámite las referidas quejas, reservándose el emplazamiento a las partes, hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto.

4. Diligencias de investigación.⁸⁷ Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, los días treinta y uno de agosto, diez de octubre, tres y dieciséis de noviembre, todos de dos mil diecisiete, se emitieron acuerdos en los que requirió a la DEPPP y a

⁷⁸ Visible a páginas 638-639, legajo 1 del expediente

⁷⁹ Visible a página 644, legajo 1 del expediente

⁸⁰ Visible a página 648, legajo 1 del expediente

⁸¹ Visible a página 651, legajo 1 del expediente

⁸² Visible a página 1576, legajo 2 del expediente

⁸³ Visible a página 1672, legajo 2 del expediente

⁸⁴ Visible a página 1681-1682, legajo 2 del expediente

⁸⁵ Visibles a páginas 266-270, 353-362, 620-629, 654-660, legajo 1 y 1726-1733, legajo 3 del expediente, respectivamente

⁸⁶ Visibles a páginas 836-849, legajo 1 y 1726-1733, legajo 3 del expediente, respectivamente

⁸⁷ Visibles a páginas 353-362, 620-629, 654-660 y 836-849 legajo 1, 1580-1586, 1633-1637, 1676-1679, 1689-1695 y 1702-1705 legajo 2 del expediente, respectivamente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Nueva Alianza proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de los denunciantes; de igual manera mediante proveídos de dieciocho de mayo, quince, diecinueve y veintinueve de junio y siete de agosto, también de dos mil diecisiete, dictados dentro del cuaderno de antecedentes número UT/SCG/CA/PCR/CG/26/2017 agregado en el expediente en que se actúa, se ordenaron diversos requerimientos con el mismo objeto, los cuales fueron desahogados como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
31/08/2017	NA	INE-UT/6649/2017 ⁸⁸	Sin respuesta
	DEPPP	INE-UT/6650/2017 ⁸⁹	05/09/2017 Correo institucional ⁹⁰
10/10/2017	NA	INE-UT/7677/2017 ⁹¹	27/10/2017 Oficio RNA 173/2017 ⁹²
	DEPPP	INE-UT/7678/2017 ⁹³	11/10/2017 Correo institucional ⁹⁴
03/11/2017	NA	INE-UT/8301/2017 ⁹⁵	13/11/2017 Oficio RNA 192/2017 ⁹⁶
	DEPPP	INE-UT/8309/2017 ⁹⁷	08/11/2017 Correo institucional ⁹⁸
16/11/2017	NA	INE-UT/8575/2017 ⁹⁹	Sin respuesta
	DEPPP	INE-UT/8576/2017 ¹⁰⁰	21/11/2017 Correo institucional ¹⁰¹
18/05/2017	NA	INE-UT/4355/2017 ¹⁰²	24/05/2017 Escrito ¹⁰³
	DEPPP	INE-UT/4356/2017 ¹⁰⁴	23/05/2017 Correo institucional ¹⁰⁵

⁸⁸ Visible a página 363, legajo 1 del expediente

⁸⁹ Visible a página 372, legajo 1 del expediente

⁹⁰ Visible a páginas 367-371, legajo 1 del expediente

⁹¹ Visible a página 630, legajo 1 del expediente

⁹² Visible a página 698 y sus anexos a páginas 699-706, legajo 1 del expediente

⁹³ Visible a página 633, legajo 1 del expediente

⁹⁴ Visible a páginas 666-667, legajo 1 del expediente

⁹⁵ Visible a página 662, legajo 1 del expediente

⁹⁶ Visible a página 711 y sus anexos a páginas 712-720, legajo 1 del expediente

⁹⁷ Visible a página 665, legajo 1 del expediente

⁹⁸ Visible a páginas 708-709, legajo 1 del expediente

⁹⁹ Visible a página 853, legajo 1 del expediente

¹⁰⁰ Visible a página 856, legajo 1 del expediente

¹⁰¹ Visible a páginas 863-864, legajo 1 del expediente

¹⁰² Visible a página 1596, legajo 2 del expediente

¹⁰³ Visible a página 1609 y su anexo a página 1610, legajo 2 del expediente

¹⁰⁴ Visible a página 1595, legajo 2 del expediente

¹⁰⁵ Visible a página 1611, legajo 2 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
15/06/2017	NA	INE-UT/5320/2017 ¹⁰⁶	22/06/2017 Oficio RNA 097/2017 ¹⁰⁷
19/06/2017	DEPPP	INE-UT/5352/2017 ¹⁰⁸	23/06/2017 Correo Institucional ¹⁰⁹
29/06/2017	DEPPP	INE-UT/5558/2017	04/07/2017 Correo Institucional ¹¹⁰
07/08/2017	NA	INE-UT/5925/2017 ¹¹¹	14/08/2017 Oficio RNA 129/2017 ¹¹²

5. Vistas a ciudadanas. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete,¹¹³ se ordenó dar vista a las ciudadanas que a continuación se citan, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con los formatos de afiliación que, para cada caso, aportó *Nueva Alianza*; dicha diligencia, se notificó y desahogó conforme al siguiente cuadro:

No.	Ciudadanas	Oficio Fecha de notificación	Respuesta SI/NO Síntesis
1	Anaid Martínez Arreola	INE/14JDE-CM/1138/2017 ¹¹⁴ 28/noviembre/2017	NO
2	Graciela Arista Mendoza	INE/JDE20-CM/00968/2017 ¹¹⁵ 27/noviembre/2017	NO
3	Luisa Fernanda Pérez Mata	INE/JDE07-TAM/VE/2169/2017 ¹¹⁶ 23/noviembre/2017	NO

6. Emplazamiento.¹¹⁷ El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a *Nueva Alianza*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las

¹⁰⁶ Visible a página 1642, legajo 2 del expediente

¹⁰⁷ Visible a página 1654 y sus anexos a páginas 1655-1657, legajo 2 del expediente

¹⁰⁸ Visible a página 1680, legajo 2 del expediente

¹⁰⁹ Visible a página 1701, legajo 2 del expediente

¹¹⁰ Visible a páginas 1696-1697 y su anexo a páginas 1698-1700, legajo 2 del expediente

¹¹¹ Visible a página 1706, legajo 2 del expediente

¹¹² Visible a página 1717 y su anexo a página 1718, legajo 2 del expediente

¹¹³ Visibles a páginas 836-849, legajo 1 del expediente

¹¹⁴ Visible a páginas 1062-1067, legajo 2 del expediente

¹¹⁵ Visible a páginas 1077-1079, legajo 2 del expediente

¹¹⁶ Visible a 1144-1146, legajo 2 del expediente

¹¹⁷ Visibles a páginas 1417-1431 y 1726-1733, legajo 2 del expediente, respectivamente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

pruebas que estimara pertinentes. Para dar cumplimiento a lo ordenado, se desarrollaron diligencias conforme a lo siguiente:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>Nueva Alianza</i>	INE-UT/9702/2017 ¹¹⁸	Citatorio: 26/diciembre/2017 Cédula: 27/diciembre/2017 Plazo: 28 de diciembre de 2017 al 04 de enero de 2018	Oficio RNA 005/2018 09/enero/2018 ¹¹⁹
	INE-UT/0823/2018 ¹²⁰	Citatorio: 25/enero/2018 Cédula: 26/enero/2018 Plazo: 29 de enero al 02 de febrero de 2018	Sin respuesta

7. Alegatos.¹²¹ El quince de enero y dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Víctor Pérez Mezo	INE/JDE10-VER/243/2018 ¹²²	Citatorio: 19 de enero de 2018 Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Erick Morales López	INE/JD09-VER/00139/2018 ¹²³	Citatorio: 17 de enero de 2018 Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
José Ramón Fernández Colín	INE-JDE24-MEX/VE/VS/0261/18 ¹²⁴	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Anaid Martínez Arreola	INE/14JDE-CM/00672/2018 ¹²⁵	Cédula: 14 de marzo de 2018 Plazo: 15 a 22 de marzo de 2018	Sin respuesta
María Isabel Cisneros Salazar	INE/DGO/JD04/VS/0110/2018 ¹²⁶	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta

¹¹⁸ Visible a página 1433, legajo 2 del expediente

¹¹⁹ Visible a página 1486 y sus anexos a páginas 1487-1489, legajo 2 del expediente

¹²⁰ Visible a página 1736, legajo 3 del expediente

¹²¹ Visibles a páginas 1495-1500 legajo 1 y 2203-2210 legajo 3, del expediente

¹²² Visible a páginas 1835-1845, legajo 3 del expediente

¹²³ Visible a páginas 2131-2144, legajo 3 del expediente

¹²⁴ Visible a páginas 1550-1555, legajo 2 del expediente

¹²⁵ Visible a páginas 2409-2412, legajo 3 del expediente

¹²⁶ Visible a páginas 2336-2338, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Antonia Jáuregui Ramírez	INE/JAL/JDE16/VS/0023/2018 ¹²⁷	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Lucio González Alvarado	INE/08 JDE-CM/00206/2018 ¹²⁸	Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Yuridia Ramírez Montes	INE/JDE05/VS/0074/2018 ¹²⁹	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Azael Olmos Bello	INE/JDE10-VER/247/2018 ¹³⁰	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Miguel Ángel Olmos Bello	INE/JDE10-VER/243/2018 ¹³¹	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Rafael Ávila Blancas	INE/JD09-VER/00140/2018 ¹³²	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Alejandro Tijerina Salazar	INE/JDE05TAB/0301/2018 ¹³³	Cédula: 23 de enero de 2018 Plazo: 24 al 30 de enero de 2018	Escrito ¹³⁴ 26/enero/2018
Ulises Medina Arellano	INE/VS/043/2018 ¹³⁵	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Fernando Armenta Escalante	INE/BC/JLE/VS/167/2018 ¹³⁶	Cédula: 17 de enero de 2018 Plazo: 18 al 24 de enero de 2018	Sin respuesta
Lilia Verenice Ruiz Colín	INE/JDE/03/VS/179/18 ¹³⁷	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Oscar López Vázquez	INE/JDE/03/VS/180/18 ¹³⁸	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta

¹²⁷ Visible a páginas 2080-2083, legajo 3 del expediente

¹²⁸ Visible a páginas 1994-1996, legajo 3 del expediente

¹²⁹ Visible a páginas 2057-2060, legajo 3 del expediente

¹³⁰ Visible a páginas 1802-1812, legajo 3 del expediente

¹³¹ Visible a páginas 1813-1823, legajo 3 del expediente

¹³² Visible a páginas 1943-1956, legajo 3 del expediente

¹³³ Visible a páginas 2321-2332, legajo 3 del expediente

¹³⁴ Visible a página 2333, legajo 3 del expediente

¹³⁵ Visible a páginas 1972-1976, legajo 3 del expediente

¹³⁶ Visible a páginas 1524-1527, legajo 2 del expediente

¹³⁷ Visible a páginas 2047-2051, legajo 3 del expediente

¹³⁸ Visible a páginas 2061-2065, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Obed Rodríguez Valle	INE/JDE/03/VS/181/18 ¹³⁹	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Juan Gilberto Aguilar Aceves	INE/BC/JLE/VS/169/2018 ¹⁴⁰	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
María del Carmen Palmeros Palmeros	INE/JD-08VER/0222/2018 ¹⁴¹	Cédula: 24 de enero de 2018 Plazo: 25 al 31 de enero de 2018	Sin respuesta
Angélica del Carmen Castillo Montejo	INE/JDE-05/VS/043/2018 ¹⁴²	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Escrito ¹⁴³ 23/enero/2018
Iván Alberto Cazarín Caloca	VS No. 54/2018 ¹⁴⁴	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Jorge Antonio Aguilar Cuesta	INE/CHIS/JDE09/VS/028/18 ¹⁴⁵	Cédula: 23 de enero de 2018 Plazo: 24 al 30 de enero de 2018	Sin respuesta
Sandino Camacho Valenzuela	INE/JDE12-VER/0182/2018 ¹⁴⁶	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Javier Ramírez Hernández	Estrados ¹⁴⁷	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Laura Liliana López Ornelas	INE-JAL-JDE11-VE-0114-2018 ¹⁴⁸	Citatorio: 07 de marzo de 2018 Cédula: 08 de marzo de 2018 Plazo: 09 a 15 de marzo de 2018	Sin respuesta
Oscar Ramírez Aladro	INE/JDE10-PUE/0137/2018 ¹⁴⁹	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Aurora González Prado	INE/09JDE/VE/VS/164/2018 ¹⁵⁰	Citatorio: 17 de enero de 2018 Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Escrito ¹⁵¹ 25/enero/2018

¹³⁹ Visible a páginas 2052-2056, legajo 3 del expediente

¹⁴⁰ Visible a páginas 1759-1767, legajo 3 del expediente

¹⁴¹ Visible a páginas 1965-1970, legajo 3 del expediente

¹⁴² Visible a páginas 1570-1574, legajo 2 del expediente

¹⁴³ Visible a páginas 2038-2040, legajo 3 del expediente

¹⁴⁴ Visible a páginas 1520-1522, legajo 2 del expediente

¹⁴⁵ Visible a páginas 2372-2373, legajo 3 del expediente

¹⁴⁶ Visible a páginas 1908-1919, legajo 3 del expediente

¹⁴⁷ Visible a páginas 1888-1906, legajo 3 del expediente

¹⁴⁸ Visible a páginas 2397-2406, legajo 3 del expediente

¹⁴⁹ Visible a páginas 2291-2300, legajo 3 del expediente

¹⁵⁰ Visible a páginas 2243-2246, legajo 3 del expediente

¹⁵¹ Visible a páginas 2067-2076, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Teresita Ortega Cortés	INE/09JDE/VE/VS/166/2018 ¹⁵²	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Teresa Guadalupe Hernández Lezama	INE/VSD/045/18 ¹⁵³	Cédula: 23 de enero de 2018 Plazo: 24 al 30 de enero de 2018	Sin respuesta
María Esperanza Meléndez Tlacuilo	INE/JDE10-PUE/0138/2018 ¹⁵⁴	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
María Teresa Pérez Dávila	INE/JDE10-PUE/0139/2018 ¹⁵⁵	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Omar Hassan Bravo Hernández	INE/JDE/VE/VS/0110/2018 ¹⁵⁶	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Sergio Juan Guevara Calixto	INE/VSD/022/18 ¹⁵⁷	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Adriana Gómez Cárdenas	INE/VS/JLE/NL/110/2018 ¹⁵⁸	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Armando Bañuelos Toledo	INE/CHIS/JDE09/VS/027/18 ¹⁵⁹	Citatorio: 22 de enero de 2018 Cédula: 23 de enero de 2018 Plazo: 24 al 30 de enero de 2018	Sin respuesta
Martha Alvarado Vidaña	INE/05JD/VE/084/2017 ¹⁶⁰	Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Gustavo Garza Turrubiates	INE/JDE07-TAM/VE/0179/2018 ¹⁶¹	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Faviola Araceli Sosa Orosco	INE/OAX/JD02/VS/0020/2018 ¹⁶²	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta

¹⁵² Visible a páginas 2239-2242, legajo 3 del expediente

¹⁵³ Visible a páginas 2301-2303, legajo 3 del expediente

¹⁵⁴ Visible a páginas 2286-2290, legajo 3 del expediente

¹⁵⁵ Visible a páginas 2266-2276, legajo 3 del expediente

¹⁵⁶ Visible a páginas 2247-2254, legajo 3 del expediente

¹⁵⁷ Visible a páginas 2304-2310, legajo 3 del expediente

¹⁵⁸ Visible a páginas 1772-1778, legajo 3 del expediente

¹⁵⁹ Visible a páginas 2368-2371, legajo 3 del expediente

¹⁶⁰ Visible a páginas 1786-1788, legajo 3 del expediente

¹⁶¹ Visible a páginas 1987-1990, legajo 3 del expediente

¹⁶² Visible a páginas 1535-1539, legajo 2 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Jesús Manuel Almazán Cano	INE/JDE09/100/2018 ¹⁶³	Cédula: 17 de enero de 2018 Plazo: 18 al 24 de enero de 2018	Sin respuesta
Lorenzo Arturo Parga Amado	INE/JDE09/101/2018 ¹⁶⁴	Cédula: 17 de enero de 2018 Plazo: 18 al 24 de enero de 2018	Sin respuesta
Beatriz Ramírez Vergara	INE/GTO/04JDE/VS/033/18 ¹⁶⁵	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Yesica Margarita Chi6n Quintana	INE/JDE02/VS/043/2018 ¹⁶⁶	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Graciela Arista Mendoza	INE/JDE20-DF/059/2018 ¹⁶⁷	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Jesús Omar Arias Villa	INE/BC/JLE/VS/168/2018 ¹⁶⁸	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
María Alejandra Barrales Cruz	INE/JDE12/VE/752/18 ¹⁶⁹	Cédula: 27 de marzo de 2018 Plazo: 28 de marzo al 03 de abril de 2018	Escrito ¹⁷⁰ 02/abril/2018
Lilia Adriana Sánchez García	INE/JD05/VSD/0147/2018 ¹⁷¹	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Fernando Luis Manzanilla Prieto	Estrados ¹⁷²	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
María José de Santos Pérez	INE/JDE10-PUE/0140/2018 ¹⁷³	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Marco Aurelio González Gama	INE/JDE10-VER/239/2018 ¹⁷⁴	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta

¹⁶³ Visible a páginas 1557-1559, legajo 2 del expediente

¹⁶⁴ Visible a páginas 1560-1562, legajo 2 del expediente

¹⁶⁵ Visible a páginas 2103-2106, legajo 3 del expediente

¹⁶⁶ Visible a páginas 2122-2128, legajo 3 del expediente

¹⁶⁷ Visible a páginas 2008-2016, legajo 3 del expediente

¹⁶⁸ Visible a páginas 2032-2033, legajo 3 del expediente

¹⁶⁹ Visible a páginas 2453-2458, legajo 3 del expediente

¹⁷⁰ Visible a páginas 2472-2473, legajo 3 del expediente

¹⁷¹ Visible a páginas 2311-2319, legajo 3 del expediente

¹⁷² Visible a páginas 1541-1549 legajo 1 y 2220-2227 legajo 3, del expediente

¹⁷³ Visible a páginas 2277-2287, legajo 3 del expediente

¹⁷⁴ Visible a páginas 1794-1797, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Laura Ornelas Rivera	INE/JDE-VER/238/2018 ¹⁷⁵	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Alejandro González López	INE/JDE13/PUE/0197/2018 ¹⁷⁶	Cédula: 17 de enero de 2018 Plazo: 18 al 24 de enero de 2018	Sin respuesta
Esteban Flores de Hoyos	INE/JDE-01-TAM/0191/18 ¹⁷⁷	Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Gabriel López Olguín	INE/03/JDE-CM/0160/2018 ¹⁷⁸	Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Mary Carmen Ochoa Méndez	INE/JDE10-VER/240/2018 ¹⁷⁹	Citatorio: 19 de enero de 2018 Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Midory Lizbeth Hernández Hernández	INE/JD09-VER/00141/2018 ¹⁸⁰	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Victoria Lezama Porras	INE/JD16-VER/0239/2018 ¹⁸¹	Citatorio: 18 de enero de 2018 Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Dulce María Bello Monfil	INE/JDE10-VER/237/2018 ¹⁸²	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Escrito ¹⁸³ 19/enero/2018
Azucena María Romero Gómez	INE/JD16-VER/0240/2018 ¹⁸⁴	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Cuauhtémoc Dolores Flores	INE/JDE/VE/0039/2018 ¹⁸⁵	Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Escrito ¹⁸⁶ 29/enero/2018
Jorge Armador Tlatilolpa	INE/JDE/VS/0190/2018 ¹⁸⁷	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta

¹⁷⁵ Visible a páginas 1798-1801, legajo 3 del expediente

¹⁷⁶ Visible a páginas 2254-2261, legajo 3 del expediente

¹⁷⁷ Visible a páginas 1979-1986, legajo 3 del expediente

¹⁷⁸ Visible a páginas 1992-1993, legajo 3 del expediente

¹⁷⁹ Visible a páginas 1824-1834, legajo 3 del expediente

¹⁸⁰ Visible a páginas 1957-1962, legajo 3 del expediente

¹⁸¹ Visible a páginas 1925-1936, legajo 3 del expediente

¹⁸² Visible a páginas 1790-1793, legajo 3 del expediente

¹⁸³ Visible a páginas 1921-1923, legajo 3 del expediente

¹⁸⁴ Visible a páginas 1937-1942, legajo 3 del expediente

¹⁸⁵ Visible a páginas 2195-2198, legajo 3 del expediente

¹⁸⁶ Visible a páginas 2200-2201, legajo 3 del expediente

¹⁸⁷ Visible a páginas 2262-2265, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
José de Jesús Gómez Valle	INE-JAL-JD04-VS-0133/2018 ¹⁸⁸	Citatorio: 19 de enero de 2018 Cédula: 20 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Escrito ¹⁸⁹ 25/enero/2018
Lincoln Felipe Ríos Gallegos	INE/JLE/0069/2018 ¹⁹⁰	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
Félix Ciprián Hernández	INE/01JDE-CHIS/VS/027/2018 ¹⁹¹	Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	Sin respuesta
María Guadalupe Balderas Mata	Estrados ¹⁹²	Cédula: 15 de enero de 2018 Plazo: 16 al 22 de enero de 2018	Sin respuesta
María de Lourdes Martínez Martínez	Estrados ¹⁹³	Cédula: 15 de enero de 2018 Plazo: 16 al 22 de enero de 2018	Sin respuesta
Nazarín Vargas Armenta	INE/JLE/VS/0045/2018 ¹⁹⁴	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Jorge Francisco Antonio González Cervantes	INE/JDE11-VER/2386/2018 ¹⁹⁵	Cédula: 27 de marzo de 2018 Plazo: 28 de marzo a 03 de abril de 2018	Sin respuesta
Bibiana Palacios Varela	Estrados ¹⁹⁶	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Raúl Ramírez García	INE/JD11-VER/0489/2018 ¹⁹⁷	Citatorio: 19 de enero de 2018 Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
Mario Román Vega Díaz	INE/JD11-VER/0490/2018 ¹⁹⁸	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Escrito ¹⁹⁹ 26/enero/2018

¹⁸⁸ Visible a páginas 2094-2100, legajo 3 del expediente

¹⁸⁹ Visible a página 2101, legajo 3 del expediente

¹⁹⁰ Visible a páginas 1750-1755, legajo 3 del expediente

¹⁹¹ Visible a páginas 1782-1785, legajo 3 del expediente

¹⁹² Visible a página 1503, legajo 2 del expediente

¹⁹³ Visible a página 1502, legajo 2 del expediente

¹⁹⁴ Visible a páginas 2146-2148, legajo 3 del expediente

¹⁹⁵ Visible a páginas 2466-2469, legajo 3 del expediente

¹⁹⁶ Visible a páginas 1861-1864, legajo 3 del expediente

¹⁹⁷ Visible a páginas 1871-1877, legajo 3 del expediente

¹⁹⁸ Visible a páginas 1851-1854, legajo 3 del expediente

¹⁹⁹ Visible a página 2179, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
María del Carmen Suárez Beltrán	INE/JD11-VER/0491/2018 ²⁰⁰	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Escrito ²⁰¹ 22/enero/2018
Santiago Blanco Córdoba	INE/JD11-VER/0492/2018 ²⁰²	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Rosario Chontal Morales	INE/JD11-VER/0493/2018 ²⁰³	Citatorio: 19 de enero de 2018 Cédula: 22 de enero de 2018 Plazo: 23 al 29 de enero de 2018	Sin respuesta
José Ramón Hernández Hernández	INE/JDE10-VER/241/2018 ²⁰⁴	Cédula: 23 de enero de 2018 Plazo: 24 al 30 de enero de 2018	Sin respuesta
Rosa Carmina Rumbo Serna	INE/MICH/JDE01/VS/170/18 ²⁰⁵	Cédula: 27 de febrero de 2018 Plazo: 28 de febrero a 06 de marzo de 2018	Sin respuesta
José Armando Campos Téllez	INE/MICH/JDE01/VS/286/18 ²⁰⁶	Cédula: 05 de abril de 2018 Plazo: 06 a 12 de abril de 2018	Sin respuesta
Blanca Yazmín Sosa Lechuga	INE/COAH/JDE05/VE/042/2018 ²⁰⁷	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Ana Karina Rojo Pimentel	INE/JDE 22-CM/00559/2018 ²⁰⁸	Cédula: 21 de marzo de 2018 Plazo: 22 a 28 de marzo de 2018	Sin respuesta
Ricardo Serrano Fernández	INE/JDE 22-CM/00202/2018 ²⁰⁹	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Arturo Rodríguez Reyes	INE/06JDE/VE/0119/2018 ²¹⁰	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Luisa Fernanda Pérez Mata	INE/JDE07-TAM/VE/0849/2018 ²¹¹	Citatorio: 14 de marzo de 2018 Cédula: 15 de marzo de 2018 Plazo: 16 a 23 de marzo de 2018	Sin respuesta

²⁰⁰ Visible a páginas 1856-1859, legajo 3 del expediente

²⁰¹ Visible a páginas 2182-2183, legajo 3 del expediente

²⁰² Visible a páginas 1866-1869, legajo 3 del expediente

²⁰³ Visible a páginas 1879-1885, legajo 3 del expediente

²⁰⁴ Visible a páginas 1846-1849, legajo 3 del expediente

²⁰⁵ Visible a páginas 2438-2441, legajo 3 del expediente

²⁰⁶ Visible a páginas 2461-2464, legajo 3 del expediente

²⁰⁷ Visible a páginas 2042-2045, legajo 3 del expediente

²⁰⁸ Visible a páginas 2414-2423, legajo 3 del expediente

²⁰⁹ Visible a páginas 2017-2020, legajo 3 del expediente

²¹⁰ Visible a páginas 1528-1533, legajo 2 del expediente

²¹¹ Visible a páginas 2425-2431, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

Personas Denunciantes	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Paúl Christian Rodríguez Hernández	Estrados ²¹²	Cédula: 16 de febrero de 2018 Plazo: 19 a 23 de febrero de 2018	Sin respuesta
Arturo Alonso Avelar	INE/JDE04/VS/128/2018 ²¹³	Cédula: 19 de enero de 2018 Plazo: 22 al 26 de enero de 2018	Sin respuesta
Irving Vargas Ramírez	INE/JDE12/VE/425/18 ²¹⁴	Citatorio: No aplica Cédula: 20 de febrero de 2018 Plazo: 21 al 27 de febrero de 2018	Sin respuesta
Denunciado			Oficios RNA 018/2018, RNA 020/2018, RNA 025/2018 y RNA 032/2018 ²¹⁶ 25/enero/2018, 26/enero/2018, 26/enero/2018 y 13/febrero/2018
<i>Nueva Alianza</i>	INE-UT/0427/2018 ²¹⁵	Citatorio: 17 de enero de 2018 Cédula: 18 de enero de 2018 Plazo: 19 al 25 de enero de 2018	
	INE-UT/1601/2018 ²¹⁷	Citatorio: 17 de enero de 2018 Cédula: 19 de febrero de 2018 Plazo: 20 al 26 de febrero de 2018	Sin respuesta

8. Vista a ciudadanas. Mediante proveído de primero de marzo de dos mil dieciocho,²¹⁸ se ordenó dar vista a dos ciudadanas, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con los formatos de afiliación aportados por *Nueva Alianza*; dicha diligencia, se notificó y desahogó conforme al siguiente cuadro:

²¹² Visible a página 2211, legajo 3 del expediente

²¹³ Visible a páginas 2351-2354, legajo 3 del expediente

²¹⁴ Visible a páginas 2235-2238, legajo 3 del expediente

²¹⁵ Visible a páginas 1507-1517, legajo 2 del expediente

²¹⁶ Visible a páginas 1768-1770, 1779-1780, 2034-2035 y 2184-2191, legajo 3 del expediente, respectivamente

²¹⁷ Visible a páginas 2213-2218, legajo 3 del expediente

²¹⁸ Visibles a páginas 2339-2347, legajo 3 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Ciudadanas	Oficio Fecha de notificación	Respuesta SI/NO Síntesis
1	Lilia Verenice Ruiz Colín	INE/JDE/03/VS/298/18 ²¹⁹ 02/marzo/2018	NO
2	Yuridia Ramírez Montes	INE/JDE05/VE/426/2018 ²²⁰ 05/marzo/2018	SÍ Desconoce el formato de afiliación aportado por <i>Nueva Alianza</i> , toda vez que la letra y firma que ahí aparecen no corresponden a las suyas, ya que nunca lo firmó.

9. Escisión. Por acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho,²²¹ a consideración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se determinó escindir el procedimiento respecto de la ciudadana **Yuridia Ramírez Montes** para que fue conocido en el diverso procedimiento UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018; lo anterior, tomando en cuenta que la investigación de las conductas denunciadas por los demás ciudadanos ya había culminado, y en este supuesto, se advertía la realización de mayores diligencias de investigación.

10. Resolución INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

11. Recurso de Apelación SUP-RAP-384/2018. El uno de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso recurso de apelación, a fin de impugnar la determinación emitida por el *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

12. Pérdida de registro de *Nueva Alianza*. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declaró la pérdida de registro del citado instituto político.

²¹⁹ Visible a páginas 2380-2383, legajo 3 del expediente

²²⁰ Visible a páginas 2376-2379, legajo 3 del expediente

²²¹ Visibles a páginas 2339-2347, legajo 3 del expediente

13. Elaboración del proyecto. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución.

14. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y veinticinco de enero de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse lo siguiente:

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

3

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...
SEGUNDO.- *Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.*
...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso

que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,²²² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante a *Nueva Alianza*.

²²² Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional *Nueva Alianza* para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que *Nueva Alianza* pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, iniciado en contra del otrora Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, en términos de lo argumentado en el Considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

TERCERO. Se vincula al otrora Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:

No.	Persona denunciante
1	Víctor Pérez Mezo
2	Erick Morales López
3	José Ramón Fernández Colín
4	Anaid Martínez Arreola
5	María Isabel Cisneros Salazar
6	Antonia Jáuregui Ramírez
7	Lucio González Alvarado
8	Azael Olmos Bello
9	Miguel Ángel Olmos Bello
10	Rafael Ávila Blancas
11	Alejandro Tijerina Salazar
12	Ulises Medina Arellano
13	Fernando Armenta Escalante
14	Lilia Verenice Ruiz Colín

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante
15	Oscar López Vázquez
16	Obed Rodríguez Valle
17	Juan Gilberto Aguilar Aceves
18	María del Carmen Palmeros Palmeros
19	Angélica del Carmen Castillo Montejo
20	Iván Alberto Cazarín Caloca
21	Jorge Antonio Aguilar Cuesta
22	Sandino Camacho Valenzuela
23	Javier Ramírez Hernández
24	Laura Liliana López Ornelas
25	Oscar Ramírez Aladro
26	Aurora González Prado
27	Teresita Ortega Cortés
28	Teresa Guadalupe Hernández Lezama
29	María Esperanza Meléndez Tlacuilo
30	María Teresa Pérez Dávila
31	Omar Hassan Bravo Hernández
32	Sergio Juan Guevara Calixto
33	Adriana Gómez Cárdenas
34	Armando Bañuelos Toledo
35	Martha Alvarado Vidaña
36	Gustavo Garza Turrubiates
37	Faviola Araceli Sosa Orosco
38	Jesús Manuel Almazán Cano
39	Lorenzo Arturo Parga Amado
40	Beatriz Ramírez Vergara
41	Yesica Margarita Chión Quintana
42	Graciela Arista Mendoza
43	Jesús Omar Arias Villa
44	María Alejandra Barrales Cruz
45	Lilia Adriana Sánchez García
46	Fernando Luis Manzanilla Prieto
47	María José de Santos Pérez
48	Marco Aurelio González Gama
49	Laura Ornelas Rivera
50	Alejandro González López
51	Esteban Flores de Hoyos
52	Gabriel López Olguín
53	Mary Carmen Ochoa Méndez

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPM/CG/26/2017

No.	Persona denunciante
54	Midory Lizbeth Hernández Hernández
55	Victoria Lezama Porras
56	Dulce María Bello Monfil
57	Azucena María Romero Gómez
58	Cuauhtémoc Dolores Flores
59	Jorge Armador Tlatilolpa
60	José de Jesús Gómez Valle
61	Licóln Felipe Ríos Gallegos
62	Félix Ciprián Hernández
63	María Guadalupe Balderas Mata
64	María de Lourdes Martínez Martínez
65	Nazarín Vargas Armenta
66	Jorge Francisco Antonio González Cervantes
67	Bibiana Palacios Varela
68	Raúl Ramírez García
69	Mario Román Vega Díaz
70	María del Carmen Suárez Beltrán
71	Santiago Blanco Córdoba
72	Rosario Chontal Morales
73	José Ramón Hernández Hernández
74	Rosa Carmina Rumbo Serna
75	José Armando Campos Téllez
76	Blanca Yazmín Sosa Lechuga
77	Ana Karina Rojo Pimentel
78	Ricardo Serrano Fernández
79	Arturo Rodríguez Reyes
80	Luisa Fernanda Pérez Mata
81	Paúl Christian Rodríguez Hernández
82	Arturo Alonso Avelar
83	Irving Vargas Ramírez

En términos de ley al otrora Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1448/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

DENUNCIANTES: GABRIELA FERNANDA
ESPINOZA BLANCAS Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017, INICIADO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS DENUNCIANTES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Ley de Partidos</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>NA o Nueva Alianza</i>	Partido Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. ¹ El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017.

En el citado acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de los ciudadanos que se señalan en el siguiente cuadro y se determinó

¹ Visible a fojas 124 a 133 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación:

No.	Nombre del quejoso
1	Gabriela Fernanda Espinoza Blancas
2	Miguel Ángel Aguilar Vela
3	Constancio Fidel Domínguez Aguilar
4	Laura del Carmen Sánchez López
5	Lilia Gómez Bahena
6	Beatriz Adriana Zizaña Maldonado
7	Karina Juárez Diéguez
8	Juliana Yolanda González Mateos
9	Cindy Gabriela Sánchez Albineda
10	Zuany Garrido Jaramillo
11	Javier Alejandro Montes Guerrero
12	Yolanda González Mendoza
13	María Adolfinia Poot Canche
14	Beatriz Poot Canche
15	Amanda Lemus Torres
16	Maribel Jiménez Rangel
17	Raúl Ramírez Méndez
18	Armando Acuña Talavera
19	Zaira Abad Hernández
20	María Cristina Santana Tello

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 04 de diciembre de 2017²		
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
04/12/2017	NA	INE-UT/9066/2017 ³
	DEPPP	INE-UT/9067/2017 ⁴

² Visible a fojas 124 a 133 del expediente.

³ Visible a foja 142 del expediente.

⁴ Visible a foja 141 del expediente.

II. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTOS⁵.

Mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de los ciudadanos que se señalan en el siguiente cuadro y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación:

No.	Nombre del quejoso
1	Edith de los Santos de la Cruz Arellano
2	Miriam del Rosario Marín Macías
3	María Fernanda Sandoval Flores
4	Noemí Balanzar Sánchez
5	Lenin Vladimir Estrada Avilés
6	Adrián Emmanuel Dzib Delgado
7	María de Lourdes Hernández Lara
8	Araceli de la Cruz Cruz
9	Efraín Aguilón Cancino
10	Rafael Cancino Velázquez
11	Amado Domínguez Nicolás
12	Neide Zamudio Perez
13	Alma Noemí Torres Sosa
14	Marcelo Iván Flores Castillo
15	Yolanda Margarita Bórquez Iturralde
16	Yariela María Araujo Cota
17	Araceli Domínguez González
18	Erika Rodríguez Yescas
19	Daniel Rodríguez de los Santos
20	Martin Castañeda García
21	Jair González López
22	Mayra Climas David
23	Julio Cesar Astudillo Alvarado
24	Miguel Ángel Lugo Martínez
25	José Bonifacio Gutiérrez Pérez
26	Estefany García Meléndez
27	Fany Rico Ramírez
28	Janeth Becerril Reyes
29	Luisa Guadalupe Molina Hurtado
30	Samanta Joos González

⁵ Visible a fojas 978 a 991 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 27 de diciembre de 2017 ⁶		
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
27/12/2017	NA	INE-UT/9777/2017 ⁷
	DEPPP	INE-UT/9776/2017 ⁸

III. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTOS⁹. A través de proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de los ciudadanos que se señalan en el siguiente cuadro y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación:

No.	Nombre del quejoso
1	Eugenio Domínguez Rodríguez
2	José Elías Vasconcelos Reyes
3	Antonio Romero Escamilla
4	Juana Isabel Briones Hernández
5	Geovanni Alberto Rodríguez Pérez
6	Jorge Gabriel Domínguez Martínez
7	María Esther Sedas Soto
8	María del Refugio Calvillo Puentes
9	Francisco Javier Ruvalcaba Martínez
10	Amalia Aguirre Rivera
11	Teresa Torres Mena
12	Ninive Oyuki Lovera Gorra
13	Sandra Luz Soto Jiménez
14	Nydia Janeth Ramírez López
15	Nuria Lizeth Chávez López
16	César Efrén Romo Romo
17	Luz del Alba López Gómez
18	Bernardino Muñoz Berroterán
19	Amyr Alberto Salcido Carrillo
20	José Eugenio Quiroz Longoria

⁶ Visible a fojas 978 a 991 del expediente.

⁷ Visible a foja 1025 del expediente.

⁸ Visible a foja 1024 del expediente.

⁹ Visible a fojas 1348 a 1363 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

21	Mario Alejandro Butrón Ocampo
22	Marisa Fernanda Acevedo Juárez
23	J David López Ramírez
24	Gabriel López López
25	Miguel Ángel García Meza
26	Nora Alejandra Martínez Salas
27	María de los Ángeles Arrezola Zúñiga
28	Diana Briseño Báez
29	M. Eva Cervantes Cruz
30	Rosa María Pedroza
31	María de Rosario Muñoz Arenas
32	Clara Cabrera Camacho
33	Rosalba Martínez Moreno
34	Emma Nunutzi Rosales Martínez
35	Leodan Antonio Pizarro
36	Carlos Alberto Castillo Martínez
37	Beatriz Adela Gocobachi Neyoy
38	Claudia García Moreno
39	Arturo Recillas Piñón
40	Nancy Yesenia Santos Martínez
41	Oscar Manuel Romero Nava
42	Orlando Arias Pérez
43	Marco Antonio Hernández Márquez
44	Ana Lilia Sánchez Aguedo
45	Yuri Manuel Rodríguez Monreal
46	Karla Verónica Rabelo Hernández
47	Arnulfo González Rogero
48	Soledad Sánchez Pérez
49	Beatriz Arely Saucedo Ramírez
50	Javier Anguiano Canizales
51	Francisco Antonio Izquierdo Hernández
52	Enoc Jiménez Muñoz
53	José Rafael Partida Lambaren
54	Cintia Yanet Campos Guerrero
55	Adriana Cárdenas García
56	Issi Merari Segura Ramón
57	Everardo Rodríguez Borbón
58	Marivel García Arévalos
59	Jhoan Alba Pérez
60	Rodulfo García Carranza
61	María del Carmen Carreto Díaz
62	Marcos Emanuel Ramos de la Cruz
63	César Fabián Toledo Ríos
64	Ma. Luiza Reyes Gasca

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

Así mismo se tuvo por recibida la documentación presentada por Eunice Jazmín Delgado Rendón y de Lázaro Guadalupe Hoyos Cancino, no obstante, de dicha documentación se advirtió que no fue remitido el escrito de queja presentando por los ciudadanos, por lo que se requirió a los Vocales de las respectivas juntas distritales para que remitieran el escrito de queja de dichos ciudadanos.

De igual forma se recibió el escrito de queja de Celina Evelyn López Martínez, no obstante, dicho escrito fue remitido en copia simple, por lo que, en el citado proveído se requirió al Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Nuevo León, para que remitiera el escrito de queja original de la citada ciudadana.

Aunado a lo anterior, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 19 de enero de 2018 ¹⁰		
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
19/01/2018	NA	INE-UT/0616/2018 ¹¹
	DEPPP	INE-UT/0615/2018 ¹²

IV. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTOS¹³. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de los ciudadanos que se señalan en el siguiente cuadro y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación:

No.	Nombre del quejoso
1	Celina Evelyn López Martínez
2	Lázaro Guadalupe Hoyos Cancino

¹⁰ Visible a fojas 1348 a 1363 del expediente.

¹¹ Visible a foja 1372 del expediente.

¹² Visible a foja 1371 del expediente.

¹³ Visible a fojas 1893 a 1906 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 07 de marzo de 2018 ¹⁴		
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
07/03/2018	NA	INE-UT/2221/2018 ¹⁵
	DEPPP	INE-UT/2220/2018 ¹⁶

V. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTOS¹⁷.

Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho se tuvo por admitido el trámite del procedimiento respecto de la ciudadana que se señala en el siguiente cuadro y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación:

No.	Nombre del quejoso
1	Eunice Jazmín Delgado Rendón

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 19 de abril de 2018 ¹⁸		
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
19/04/2018	NA	INE-UT/4753/2018 ¹⁹
	DEPPP	INE-UT/4754/2018 ²⁰

¹⁴ Visible a fojas 1893 a 1906 del expediente.

¹⁵ Visible a foja 1915 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 1918 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 2002 a 2010 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 2002 a 2010 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 2016 del expediente.

²⁰ Visible a foja 2019 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

VI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN²¹. A efecto de contar con elementos suficientes para la integración del expediente en que se actúa, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó requerir a la *DEPPP*, proveído que fue notificado en los siguientes términos:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio
16/05/2018	<i>DEPPP</i>	INE-UT/7208/2018 ²²

VII. EMPLAZAMIENTO.²³ El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar a *NA*, a través de su representante propietario ante el *Consejo General* de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes acuerdo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/9892/2018 ²⁴	Citatorio: ²⁵ 22 de junio de 2018. Cédula: ²⁶ 25 de junio de 2018. Plazo: 26 de junio al 2 de julio de 2018.	Escrito de 03 de julio de 2018 ²⁷

VIII. REQUERIMIENTO A NUEVA ALIANZA²⁸. En atención a la información proporcionada por *NA* al momento de contestar el emplazamiento, mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso, se determinó requerir al citado instituto político, a efecto de que realizara diversas precisiones, acuerdo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/11864/2018 ²⁹	Notificación: 25 de julio de 2018 Plazo: 26 al 30 de julio de 2018	Escrito recibido el 30 de julio de 2018 ³⁰

²¹ Visible a fojas 2037 a 2040 del expediente.

²² Visible a foja 2043 del expediente.

²³ Visible a fojas 2047 a 2066 del expediente.

²⁴ Visible a foja 2087 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 2088 a 2108 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 2109 a 2110 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 2118 a 2133 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 2134 a 2137 del expediente.

²⁹ Visible a foja 2142 del expediente.

³⁰ Visible a fojas 2147 a 2157

IX. ALEGATOS³¹. Mediante acuerdo de primero de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente asunto, a fin de que formularan alegatos que a su derecho convinieran.

X. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *NA*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

XI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *NA*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

XII. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declaró la pérdida de registro del citado instituto político.

XIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

XIV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme

³¹ Visible a fojas 2160 a 2167 del expediente.

a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *NA*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. *Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:*

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante acuerdos de cuatro y veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, diecinueve de enero, siete de marzo y diecinueve de abril de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que NA impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de NA como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que NA haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *NA* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,³² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

³² Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Artículo 95.

...

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,³³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGS MIME*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. En términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución, se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por:

No	Ciudadanos	No	Ciudadanos
1	Javier Alejandro Montes Guerrero	60	Sandra Luz Soto Jiménez
2	Yolanda González Mendoza	61	Nínive Oyuki Lovera Gorra
3	Zuany Garrido Jaramillo	62	Teresa Torres Mena
4	Cindy Gabriela Sánchez Albineda	63	Francisco Javier Ruvalcaba Martínez
5	Juliana Yolanda González Mateos	64	Amalia Aguirre Rivera
6	Lilia Gómez Bahena	65	Nuria Lizeth Chávez López
7	Beatriz Adriana Zizaña Maldonado	66	César Efrén Romo Romo
8	Karina Juárez Diéguez	67	José Eugenio Quiroz Longoria
9	Laura del Carmen Sánchez López	68	Bernardino Muñoz Berroterán
10	Constancio Fidel Domínguez Aguilar	69	Amyr Alberto Salcido Carrillo
11	Miguel Ángel Aguilar Vela	70	Luz del Alba López Gómez
12	Gabriela Fernanda Espinoza Blancas	71	Mario Alejandro Butrón Ocampo
13	Amanda Lemus Torres	72	Marisa Fernanda Acevedo Juárez

³³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

No	Ciudadanos	No	Ciudadanos
14	Beatriz Poot Canché	73	J David López Ramírez
15	María Adolfinia Poot Canché	74	Gabriel López López
16	Maribel Jiménez Rangel	75	Nora Alejandra Martínez Salas
17	Armando Acuña Talavera	76	Miguel Ángel García Meza
18	Raúl Ramírez Méndez	77	M. Eva Cervantes Cruz
19	Zaira Abad Hernández	78	María de los Ángeles Arrezola Zúñiga
20	María Cristina Santana Tello	79	Diana Briseño Báez
21	Edith de los Santos de la Cruz Arellano	80	Rosa María Pedroza
22	Miriam del Rosario Marín Macías	81	Oscar Manuel Romero Nava
23	María Fernanda Sandoval Flores	82	Beatriz Adela Gocobachi Neyoy
24	Noemí Balanzar Sánchez	83	Arturo Recillas Piñón
25	Lenin Vladimir Estrada Avilés	84	Nancy Yesenia Santos Martínez
26	Adrián Emmanuel Dzib Delgado	85	Marco Antonio Hernández Márquez
27	María de Lourdes Hernández Lara	86	Claudia García Moreno
28	Efraín Aguilón Cancino	87	Orlando Arias Pérez
29	Rafael Cancino Velázquez	88	Eunice Jazmín Delgado Rendón
30	Amado Domínguez Nicolás	89	Carlos Alberto Castillo Martínez
31	Neide Zamudio Pérez	90	Leodan Antonio Pizarro
32	Araceli de la Cruz Cruz	91	María del Rosario Muñoz Arenas
33	Yolanda Margarita Bórquez Iturralde	92	Marcos Emanuel Ramos de la Cruz
34	Alma Noemí Torres Sosa	93	Yuri Manuel Rodríguez Monreal
35	Marcelo Iván Flores Castillo	94	Arnulfo González Rogero
36	Samanta Joos González	95	Ana Lilia Sánchez Águedo
37	Luisa Guadalupe Molina Hurtado	96	Karla Verónica Rabelo Hernández
38	Mayra Climas David	97	Clara Cabrera Camacho
39	Martin Castañeda García	98	Rosalba Martínez Moreno
40	Yariela María Araujo Cota	99	Emma Nunutzi Rosales Martínez
41	Erika Rodríguez Yescas	100	José Rafael Partida Lambaren
42	Araceli Domínguez González	101	Jhoan Alba Pérez
43	Estefany García Meléndez	102	Adriana Cárdenas García
44	Julio Cesar Astudillo Alvarado	103	Cintia Yanet Campos Guerrero
45	Miguel Ángel Lugo Martínez	104	Marivel García Arévalos
46	José Bonifacio Gutiérrez Pérez	105	Everardo Rodríguez Borbón
47	Jair González López	106	Issi Merari Segura Ramón
48	Daniel Rodríguez de los Santos	107	Beatriz Arely Saucedá Ramírez
49	Fany Rico Ramírez	108	Francisco Antonio Izquierdo Hernández
50	Janeth Becerril Reyes	109	Enoc Jiménez Muñoz
51	Eugenio Domínguez Rodríguez	110	Javier Anguiano Canizales
52	José Elías Vasconcelos Reyes	111	Lázaro Guadalupe Hoyos Cancino
53	Antonio Romero Escamilla	112	Celina Evelyn López Martínez
54	Geovanni Alberto Rodríguez Pérez	113	Rodolfo García Carranza
55	María del Refugio Calvillo Puentes	114	César Fabián Toledo Ríos
56	Jorge Gabriel Domínguez Martínez	115	Soledad Sánchez Pérez

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

No	Ciudadanos	No	Ciudadanos
57	María Esther Sedas Soto	116	María del Carmen Carreto Díaz
58	Juana Isabel Briones Hernández	117	Ma. Luiza Reyes Gasca
59	Nydia Janeth Ramírez López		

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a:

No	Ciudadanos	No	Ciudadanos
1	Javier Alejandro Montes Guerrero	60	Sandra Luz Soto Jiménez
2	Yolanda González Mendoza	61	Nínive Oyuki Lovera Gorra
3	Zuany Garrido Jaramillo	62	Teresa Torres Mena
4	Cindy Gabriela Sánchez Albineda	63	Francisco Javier Ruvalcaba Martínez
5	Juliana Yolanda González Mateos	64	Amalia Aguirre Rivera
6	Lilia Gómez Bahena	65	Nuria Lizeth Chávez López
7	Beatriz Adriana Zizaña Maldonado	66	César Efrén Romo Romo
8	Karina Juárez Diéguez	67	José Eugenio Quiroz Longoria
9	Laura del Carmen Sánchez López	68	Bernardino Muñoz Berroterán
10	Constancio Fidel Domínguez Aguilar	69	Amyr Alberto Salcido Carrillo
11	Miguel Ángel Aguilar Vela	70	Luz del Alba López Gómez
12	Gabriela Fernanda Espinoza Blancas	71	Mario Alejandro Butrón Ocampo
13	Amanda Lemus Torres	72	Marisa Fernanda Acevedo Juárez
14	Beatriz Poot Canché	73	J David López Ramírez
15	María Adolfinia Poot Canché	74	Gabriel López López
16	Maribel Jiménez Rangel	75	Nora Alejandra Martínez Salas
17	Armando Acuña Talavera	76	Miguel Ángel García Meza
18	Raúl Ramírez Méndez	77	M. Eva Cervantes Cruz
19	Zaira Abad Hernández	78	María de los Ángeles Arrezola Zúñiga
20	María Cristina Santana Tello	79	Diana Briseño Báez
21	Edith de los Santos de la Cruz Arellano	80	Rosa María Pedroza
22	Miriam del Rosario Marín Macías	81	Oscar Manuel Romero Nava
23	María Fernanda Sandoval Flores	82	Beatriz Adela Gocobachi Neyoy
24	Noemí Balanzar Sánchez	83	Arturo Recillas Piñón

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017

No	Ciudadanos	No	Ciudadanos
25	Lenin Vladimir Estrada Avilés	84	Nancy Yesenia Santos Martínez
26	Adrián Emmanuel Dzib Delgado	85	Marco Antonio Hernández Márquez
27	María de Lourdes Hernández Lara	86	Claudia García Moreno
28	Efraín Aguilón Cancino	87	Orlando Arias Pérez
29	Rafael Cancino Velázquez	88	Eunice Jazmín Delgado Rendón
30	Amado Domínguez Nicolás	89	Carlos Alberto Castillo Martínez
31	Neide Zamudio Pérez	90	Leodan Antonio Pizarro
32	Araceli de la Cruz Cruz	91	María del Rosario Muñoz Arenas
33	Yolanda Margarita Bórquez Iturralde	92	Marcos Emanuel Ramos de la Cruz
34	Alma Noemí Torres Sosa	93	Yuri Manuel Rodríguez Monreal
35	Marcelo Iván Flores Castillo	94	Arnulfo González Rogero
36	Samanta Joos González	95	Ana Lilia Sánchez Águedo
37	Luisa Guadalupe Molina Hurtado	96	Karla Verónica Rabelo Hernández
38	Mayra Climas David	97	Clara Cabrera Camacho
39	Martin Castañeda García	98	Rosalba Martínez Moreno
40	Yariela María Araujo Cota	99	Emma Nunutzi Rosales Martínez
41	Erika Rodríguez Yescas	100	José Rafael Partida Lambaren
42	Araceli Domínguez González	101	Jhoan Alba Pérez
43	Estefany García Meléndez	102	Adriana Cárdenas García
44	Julio Cesar Astudillo Alvarado	103	Cintia Yanet Campos Guerrero
45	Miguel Ángel Lugo Martínez	104	Marivel García Arévalos
46	José Bonifacio Gutiérrez Pérez	105	Everardo Rodríguez Borbón
47	Jair González López	106	Issi Merari Segura Ramón
48	Daniel Rodríguez de los Santos	107	Beatriz Arely Saucedá Ramírez
49	Fany Rico Ramírez	108	Francisco Antonio Izquierdo Hernández
50	Janeth Becerril Reyes	109	Enoc Jiménez Muñoz
51	Eugenio Domínguez Rodríguez	110	Javier Anguiano Canizales
52	José Elías Vasconcelos Reyes	111	Lázaro Guadalupe Hoyos Cancino
53	Antonio Romero Escamilla	112	Celina Evelyn López Martínez
54	Geovanni Alberto Rodríguez Pérez	113	Rodolfo García Carranza
55	María del Refugio Calvillo Puentes	114	César Fabián Toledo Ríos
56	Jorge Gabriel Domínguez Martínez	115	Soledad Sánchez Pérez
57	María Esther Sedas Soto	116	María del Carmen Carreto Díaz
58	Juana Isabel Briones Hernández	117	Ma. Luiza Reyes Gasca
59	Nydia Janeth Ramírez López		

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1449/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018
DENUNCIANTES: ISIDRO MARTINEZ CRUZ Y
OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018, INICIADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CIUDADANOS EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
Nueva Alianza	Partido Nueva Alianza
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹ El presente procedimiento deriva de doscientas noventa y siete (297)² quejas presentadas por ciudadanos, quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistente en la presunta afiliación indebida de los mismos, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye a *Nueva Alianza*.

El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte de *Nueva Alianza*.

En el acuerdo en cita, así como en diversos, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

II. Diligencia de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

¹ Visible a páginas 1125-1149 del expediente.

² Inicialmente se presentaron doscientas noventa y siete quejas, no obstante, mediante acuerdo de cinco de marzo del año en curso, se ordenó escindir al procedimiento ordinario sancionador identificado como **UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017**, la queja presentada por **Eunice Jazmín Delgado Rendón**, dado que existe identidad en la pretensión de la persona denunciante, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De igual forma, mediante acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, se ordenó escindir la queja presentada por **Susana Olivares Martínez**, toda vez que la ciudadana en cita, presentó queja por su presunta afiliación indebida en contra del Partido Acción Nacional, por lo que se llevó a cabo la investigación respectiva dentro del expediente **UT/SCG/Q/CBP/JD41/MEX/4/2018**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

Acuerdo de 24 de enero de 2018 ³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
Nueva Alianza	INE-UT/1087/2018⁴ 01 de febrero de 2018	RNA030/2018 ⁵ 09 de febrero de 2018; Oficio sin número ⁶ 08 de febrero de 2018; y RNA034/2018 ⁷ 13 de febrero de 2018
DEPPP	INE-UT/1088/2017⁸ 01 de febrero de 2018	Correo electrónico ⁹ 05 de febrero de 2018

Acuerdo de 13 de febrero de 2018 ¹⁰		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficios-Fechas de respuesta
DEPPP	INE-UT/1718/2017¹¹ 20 de febrero de 2018	Correo electrónico ¹² 23 de febrero de 2018

Acuerdo de 13 de febrero de 2018 ¹³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficios-Fechas de respuesta
Nueva Alianza	INE-UT/1719/2018¹⁴ 20 de febrero de 2018	RNA049/2018 ¹⁵ 23 de febrero de 2018 RNA042/2018 ¹⁶ 26 de febrero de 2018 RNA041/2018 ¹⁷ 26 de febrero de 2018 Escrito sin numero ¹⁸ 26 de febrero de 2018 RNA037/2018 ¹⁹ 26 de febrero de 2018 RNA052/2018 ²⁰ 28 de febrero de 2018

³ Visible a páginas 1125-1149 del expediente.

⁴ Visible a página 1150 del expediente.

⁵ Visible a página 1989 del expediente

⁶ Visible a páginas 2168-2169 y anexos de 2170-2182 del expediente.

⁷ Visible a página 2627 y anexos de 2628-2674 del expediente

⁸ Visible a página 1151 del expediente.

⁹ Visible a páginas 1674-1679 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 3279-3310 del expediente.

¹¹ Visible a página 3320 del expediente.

¹² Visible a páginas 3484-3489 del expediente.

¹³ Visible a páginas 3279-3310 del expediente.

¹⁴ Visible a página 3321 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 3523 y anexos de 3524-3550 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 3624 y anexos de 3625-3636 del expediente.

¹⁷ Visible a página 3637 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 3642-3643 y anexos de 3644-3661 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 3669 y anexos de 3670-3814 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 3856 y anexos de 3857-3896 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

Acuerdo de 13 de febrero de 2018 ¹³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficios-Fechas de respuesta
		RNA056/2018 ²¹ 01 de marzo de 2018 RNA060/2018 ²² 02 de marzo de 2018 RNA065/2018 ²³ 05 de marzo de 2018

Acuerdo de 05 de marzo de 2018 ²⁴		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
Nueva Alianza	INE-UT/2336/2018²⁵	RNA082/2018 ²⁶ 15 de marzo de 2018 Escrito sin numero ²⁷ 14 de marzo de 2018
DEPPP	INE-UT/2337/2017²⁸ 09 de marzo de 2018	Correo electrónico ²⁹ 13 de marzo de 2018

Acuerdo de 22 de marzo de 2018 ³⁰		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
Nueva Alianza	INE-UT/3733/2018³¹ 26 de marzo de 2018	Escrito sin numero ³² 02 de abril de 2018 RNA095/2018 ³³ 28 de marzo de 2018
DEPPP	INE-UT/3734/2017³⁴ 26 de marzo de 2018	Correo electrónico ³⁵ 27 de marzo de 2018

III. Escisión. En fecha cinco de marzo del año en curso³⁶ y visto el escrito de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, signado por Eunice Jazmín Delgado Rendón, se advirtió que por la misma causa se encontraba instruyéndose diverso

²¹ Visible a páginas 4022 y anexos de 4023-4060 del expediente.

²² Visible a páginas 4137 y anexos de 4138-4147 del expediente.

²³ Visible a páginas 4187 y anexos de 4188-4199 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 4104-4126 del expediente.

²⁵ Visible a página 4757 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 5007 y anexos 5008-5017 del expediente.

²⁷ Visible a páginas 5095 y anexos 5096-5097 del expediente.

²⁸ Visible a página 4495 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 4760-4761 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 5070-5084 del expediente.

³¹ Visible a página 5194 del expediente.

³² Visible a páginas 5135-5136 y anexos 5137-5146 del expediente.

³³ Visible a páginas 5201 y anexos de 5202-5214 del expediente.

³⁴ Visible a página 5197 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 5199-5200 del expediente.

³⁶ Visible a páginas 4104-4126 del expediente.

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave de expediente **UT/SCG/Q/YGM/JD05/QRO/46/2017** y dado que existe identidad en la pretensión de la persona denunciante, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias sobre la queja de Eunice Jazmín Delgado Rendón, lo procedente, conforme a Derecho, se ordenó escindir las constancias originales que obran en el expediente en que se actúa.

Ahora bien, en escrito de dos de abril³⁷, y visto el escrito signado por Susana Olivares Martínez de once de enero de 2018, se advierte que la ciudadana de mérito presentó queja por su presunta afiliación indebida en contra del Partido Acción Nacional, en ese sentido, toda vez que el presente asunto se instruyó en contra del Partido Nueva Alianza, se considera necesario escindir el escrito de queja presentando por Susana Olivares Martínez, así como las constancias atinentes a fin de integrar las mismas al diverso procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave de expediente **UT/SCG/Q/CBP/JD41/MEX/4/2018** instrumentado en contra del Partido Acción Nacional.

Lo anterior dado que existe identidad en la pretensión de la persona denunciante con aquella que se enlista en el mencionado procedimiento.

IV. Desistimiento. María de los Ángeles Teco Varela, denunciante en el presente procedimiento sancionador ordinario, presentó escrito en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

...me permito desistirme del procedimiento en contra del partido Nueva Alianza por así convenir a mis intereses personales...

Derivado de lo anterior, se previno a la citada ciudadana para que ratificara su intención de desistirse de la queja presentada. Como consecuencia de ello, mediante escrito de doce de marzo del presente año, la quejosa confirmó directamente su intención de no proseguir con las etapas del presente procedimiento.³⁸

³⁷ Visible a páginas 5227-5230 del expediente.

³⁸ Visible a página 5042 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

V. Emplazamiento.³⁹ El nueve de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento a *Nueva Alianza*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Nueva Alianza INE-UT/4483/2018 ⁴⁰	Citatorio: 16 de abril de 2018. ⁴¹ Cédula: 17 de abril de 2018. ⁴² Plazo: 18 al 24 de abril de 2018.	Sin numero ⁴³ 24 de abril de 2018

VI. Alegatos.⁴⁴ El veinticinco de abril de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Nueva Alianza INE-UT/5981/2018 ⁴⁵	Citatorio: ⁴⁶ 02 de mayo de 2018. Cédula: ⁴⁷ 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 a 10 de mayo de 2018.	Escrito sin numero ⁴⁸ 09 de mayo de 2018 Escrito sin número en alcance 10 de mayo de 2018 ⁴⁹ Escrito en alcance

³⁹ Visible a páginas 5252-100 del expediente.

⁴⁰ Visible a página 5361 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 5357-5360 del expediente.

⁴² Visible a páginas 5362-5363 del expediente.

⁴³ Visible a páginas 5406-5411 y anexos 5412-5527 del expediente.

⁴⁴ Visible a páginas 5537-5561 del expediente.

⁴⁵ Visible a página 5585 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 5586-5589 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 5590-5591 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 5726-5729 y anexos 5730-5735 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 5812 y anexos de 5813-5814 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
		11 de mayo de 2018 ⁵⁰ Escrito en alcance 19 de julio de 2018 ⁵¹

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Isidro Martínez Cruz Oficio: INE/OAX/JL/VS/0708/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
2	Norma Luisa Labastida Navarrete Oficio: INE-JDE28/MEX/VS/0393/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Escrito del 14/05/2018 ⁵²
3	María de Lourdes Rosas Pichardo Oficio: INE/JDE-02/VE/893/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
4	Mariana Marisalvia Trejo Trujillo Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 07 de mayo de 2018 Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018	Sin respuesta
5	Ramona de Alba Landeros Oficio: INE-JAL-JDE04-VS-0897-2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
6	Enrique López Correa Oficio: INE-JDE33-MEX/VE/VS/209/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
7	José Alfredo Piña Moreno Oficio: INE-JDE29-MEX/VE/469/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
8	Gabriela Larios Martínez Oficio: INE/05JDE/VE/0343/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
9	Luis Ernesto Rangel de Lira Oficio: INE/SLP/02JDE/VS/182/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
10	Juan Carlos Farías González Oficio: INE/JDE03/VS-YUC/354/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
11	Claudia Ivet López Nava Oficio: INE/MOR/JDE-05/VS/838/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
12	Karla Giselle Rojas Lezama Oficio: INE/MOR/JDE-05/VS/837/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
13	Itzel Leticia Díaz Hernández Oficio: INE-JDE34/MEX/VS/254/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Sin respuesta
14	Erika Vázquez Pérez Notificado por Estrados	Estrados 10 de mayo de 2018 Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018	Sin respuesta
15	Luis Alfonso Moreno Durazo Oficio: INE/05JDE-SON/VE/1744/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
16	Jorge Jonattan Gómez Córdoba Oficio: INE/JDE12-VER/0904/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Escrito del 14/05/2018 ⁵³

⁵⁰ Visible a páginas 5966 y anexos de 5967-5972 del expediente.

⁵¹ Visible a páginas 7893 y anexos de 7894--7897 del expediente.

⁵² Visible a página 7044 del expediente.

⁵³ Visible a página 6651 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
17	Kevin Jesús Argueta Hernández Por estrados y con hermana	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
18	Tania Morales Flores Oficio: JDE03-MEX/VS/177/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
19	Cristina Alicia Beltrán Hurtado Oficio: INE/07JDE/VE/0650/2018	Cédula: 18 de junio de 2018. Plazo: 19 al 25 de junio de 2018.	Sin respuesta
20	Juan Antonio Quiñones Ramírez INE/JD03/VS/0337/2018	Cédula: 15 de junio de 2018. Plazo: 18 al 22 de junio de 2018.	Escrito del 15/06/2018 ⁵⁴
21	Secundino Ávalos Sandoval Oficio: INE/MICH/JDE01VS/330/18	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
22	Irving Herrera Torres Oficio INE/BC/JLE/VS/1224/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
23	Alejandro Martínez Portugal Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 07 de mayo de 2018 Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018	Sin respuesta
24	Guadalupe Anahit Lucero Díaz Oficio: INE/JDE/03/VS/469/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
25	Liliana Pavello Ramírez Oficio: INE-MEX-14JDE/VS/1115/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
26	Mónica Mancilla Ortiz Oficio: INE/JDE-02/VE/894/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
27	Miriam Yudith Miranda Osuna Oficio: INE/SIN/CD05/P/0695/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
28	Flor Iliana Navarro Ríos Oficio: INE/JDE01-SON/VS/1039/2018	Citatorio: 11 de junio de 2018. Cédula: 12 de junio de 2018. Plazo: 13 al 19 de junio de 2018.	Sin respuesta
29	Ana Karen Rodríguez Ortega Oficio: JDE01/0496/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
30	María Isabel Sanabria Sánchez Oficio: INE/01JD/VS/464/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
31	Roberto Eduardo Cárdenas Campos Oficio: INE/JDE/02/VS/310/18	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Escrito del 09/05/2018 ⁵⁵
32	Javier Jesús Guerrero Castelar Oficio: INE/VED/408/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
33	Elisa Liwdmila Rivera Rangel Oficio: VS No. 470/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
34	Leonardo de Jesús Licea Cayetano Oficio: INE/SLP/02JDE/VS/181/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
35	Cruz Ochoa García Oficio: INE/TAM/03JDE/0867/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 9 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
36	Benito Juárez Orona Oficio: INE/JDE05/NL/577/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta

⁵⁴ Visible a página 7919 del expediente.

⁵⁵ Visible a página 6959 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
37	Gerardo Castillo Terrazas Oficio: INE/JDE09/552/2018	Cédula: 14 de mayo de 2018. Plazo: 15 al 21 de mayo de 2018.	Sin respuesta
38	María Teresa Muñoz Arenas	Cédula: 01 de junio de 2018. Plazo: 4 al 08 de junio de 2018.	Sin respuesta
39	Iván Alejandro Meza Fierro Oficio INE/BC/JLE/VS/1226/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
40	Daniel Mancebo Cortés Oficio: INE/OAX/JDE08/VS/317/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
41	Xóchitl Guadalupe Vargas López Oficio: INE/OAX/JDE08/VS/318/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
42	Erika Candelaria Moreno Hernández Oficio: INE/JDE05/NL/578/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
43	Patricia Ortiz Valenzuela Oficio: INE-JAL-JDE20-VE-0649-2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
44	Raymundo Castañeda Cárdenas Oficio INE/JDE03/VS/1084/18	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
45	José Luis Ramos Madrigal Oficio: INE/JDE03/VS-YUC/355/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
46	Francisco Javier Reyna Saavedra Oficio: INE/JDE07/VS/178/2018	Cédula: 06 de julio de 2018. Plazo: 09 al 13 de julio de 2018.	Sin respuesta
47	Omar Concha Lerma Oficio: INE/07/JDE/VE/202/2018	Cédula: 05 de julio de 2018. Plazo: 06 al 12 de julio de 2018.	Sin respuesta
48	Jorge Domínguez Segura Oficio: INE/SLP/03JDE/VS/0243/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
49	Aurelia Maldonado Ortiz Oficio: INE/SLP/03JDE/VS/0244/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
50	Ana Karina Velo Bejarano Oficio: INE/BS/JDE08/969/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
51	Genoveva Espejo López Oficio: INE/JD08-VER/1102/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
52	Guadalupe Baizan Rosales Oficio: INE/JD08-VER/1103/2018	Cédula: 10 de mayo de 2018. Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
53	María Isabel Rangel López Oficio: INE/SIN/CD05/P/0693/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
54	Raúl Barreras Gaxiola Oficio: INE/SIN/CD05/P/0696/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
55	José Antonio Caudillo Coral Oficio: INE/JDE03/VS-YUC/356/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
56	Gildardo Cervantes Geraldo Oficio: INE/BCS/JDE01/VE/0370/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
57	Carlos Cota Pedrín Oficio: INE/BCS/JDE01/VE/0398/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
58	Ángel Valdez Agundez Oficio INE/BCS/JDE01/VE/0372/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
59	Brenda Lastenia García Cárdenas Oficio: INE/JLE/MEX/VS/682/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
60	Juan Martin Segura Ortiz Oficio: INE/JD02/QRO/VS/138/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
61	Omar Vega Contreras Oficio: INE-JDE09-MEX/VS/408/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
62	Omar Alejandro Colín Escamilla Oficio: INE-JDE09-MEX/VS/409/2018	Cédula: 10 de mayo de 2018. Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
63	Agustín Juárez Lorenzo Oficio: INE/JD06/VE-VS/170/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 07/05/2018 ⁵⁶
64	Gregorio Marcelo Elías Oficio: INE/JD06/VE-VS/171/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 07/05/2018 ⁵⁷
65	Guadalupe Camacho Pérez Oficio: INE/JD06/VE-VS/169/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 07/05/2018 ⁵⁸
66	Itzel Álvarez González Oficio: INE/JD10-VER/1466/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
67	Perla Leticia Domínguez Aquino Oficio: INE/JD10-VER/1467/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
68	Carlos Alejandro Galván Cortes Oficio: INE/JD04-VER/1483/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
69	Alcibiades de Dios Campos Oficio: INE/JD04/VS/0507/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
70	Gladys Santiago Carrera Oficio: INE/JD04/VS/0508/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
71	Luz Adriana Sarracino Sansores Oficio: INE/JD04/VS/0509/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
72	Jazmín Rodea Rendón Oficio: INE-JDE-34-MEX/VS/259/2018	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
73	María Dolores Molinero Calvo Oficio: INE/JD11/MICH/VE/210/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
74	Adriana Mata Zamarrón Oficio: INE/TAM/08JDE/1243/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
75	Anaid Gutiérrez Sánchez Oficio: INE/SLP/02JDE/VS/185/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
76	Roberto García García Oficio: INE/OAX/JD01/VS/0230/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
77	Donaji Estrada Figueroa Oficio: INE/JDE/VS/0632/2018	Cédula: 05 de junio de 2018. Plazo: 06 al 12 de mayo de 2018.	Sin respuesta
78	Mónica Alicia López Barrón Oficio INE/VS/JDE09NL/0445/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta

⁵⁶ Visible a página 5901 del expediente.

⁵⁷ Visible a página 5902 del expediente.

⁵⁸ Visible a página 5900 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
79	Jesús Homero Sánchez Pequeño Oficio: INE/VS/JDE09NL/0446/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
80	María Isabel Hernández Sandoval Oficio: INE/JD04-VER/1490/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. A Plazo: 7 al 14 de mayo de 2018.	Escrito del 07/05/2018 ⁵⁹
81	Fermín Martínez Antúnez Oficio: INE/OAX/JDE04/VS/0358/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
82	Efraín Higinio Anacleto Oficio: INE/OAX/JDE04/VS/0357/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
83	Abel Vargas Gabino Oficio: INE/OAX/JDE04/VS/0357/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
84	Bernardo Rodríguez Landa Oficio: INE/01JD/VS/465/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
85	Ignacio Rodríguez Bernal Oficio: INE/01JD/VS/466/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
86	Claudia Lizbeth Almeida Cruz	Sin constancia de notificación	
87	Javier Vázquez Soto Oficio: INE/JD06SIN/VS/1446/2018	Cédula: 31 de mayo de 2018. Plazo: 01 al 07 de junio de 2018.	Escrito del 05/06/2018 ⁶⁰
88	Dalila de la Cruz de la Cruz Oficio: INE/JDE05TAB/1566/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
89	Raymundo Luna Ríos Oficio: Notificada por estrados	Estrados 08 de mayo de 2018 Plazo: 09 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
90	Eduardo Palacios Sarmiento Oficio: INE/JD04-VER/1481/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
91	Miguel Ángel Pineda Germán Oficio: INE/SIN/CD05/P/0694/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018	Sin respuesta
92	Noemí Rodea Sánchez Oficio: Notificada por estrados	Estrados 07 de mayo de 2018 Plazo: 08 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
93	Juan Andrés Rivera Torres Oficio: INE/MICH/JDE01/VS/331/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
94	David Mejorada Ordoñez Oficio: INE/MICH/JDE01/VS/332/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
95	Verónica Araceli Ramírez Ortiz Oficio: INE-JAL-JDE09-VS-0159-2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
96	Cesar Ochoa Flores Oficio: INE/TAM/03JDE/0865/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
97	Sergio Alexis Cárdenas Barreras Oficio: Por Estrados	Estrados 18 de junio de 2018. Plazo: 19 al 25 de junio de 2018.	Sin respuesta
98	Cesar Antonio Quiroz Hernández Oficio: No 471/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
99	Nora Isela Chavarin Borquez Oficio: INE/07JDE/VE/0653/2018	Cédula: 29 de junio de 2018. Plazo: 02 al 06 de julio de 2018.	Sin respuesta

⁵⁹ Visible a página 5697 del expediente.

⁶⁰ Visible a páginas 7486-7487 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
100	Emanuel Guzmán Lozoya Oficio: INE/VS/JDE08/971/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
101	Isael Chun Ovalle Oficio: INE/12JDE/VE/349/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
102	Oswaldo Samuel Anaya Servín Oficio: INE/JDE03QRO/1179/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
103	Nancy María Estrella Zamora Guerra Oficio: INE-23-JDE-MEX/VE/VS/514/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
104	Antonio Jiménez Sabalza Oficio: INE/08JDE/VS/315/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
105	Jovita Barrón Castillo Oficio: INE/JD05-VER/1553/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
106	Alejandra Tejero Díaz Oficio: INE/JD11-VER/3215/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
107	Oscar Alejandro Valencia Tejero Oficio: INE/JD11-VER/3216/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
108	María del Carmen Pérez Sánchez Oficio: INE-JD10-MEX/VE/179/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
109	Elvira Flores Pérez Oficio: INE/MOR/JDE05/VS/0839/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
110	David Israel Castolo Rodríguez Oficio: INE/JAL/JDE15/VE/578/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
111	Tania Ortiz Vargas Oficio: INE-JD10-MEX/VE/178/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
112	Christian Daniel Correa Garza Oficio: INE/SLP/06JDE/VE/093/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
113	Héctor Ceballos Rodríguez Oficio INE-MEX-JDE08/VS/0306/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
114	Maribel González Velarde Oficio INE/BC/JLE/VS/1227/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
115	María de los Ángeles Pacheco Ocaña Oficio: INE-JAL-JDE14-VE-0280-2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
116	Julián Oliveros Leyva Oficio: INE/MICH/JDE01/VS/333/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
117	Cristóbal Ortega Almanza Oficio: INE/MICH/JDE01/VS/344/18	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
118	Georgina Teresa Vázquez Hernández Oficio: INE/01JD/VS/0467/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
119	Mario Sánchez Guzmán Oficio: INE/JDE20-DF/00499/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Escrito del 14/05/2018 ⁶¹
120	Mónica Belén Soto Oficio: INE/14JDE-CM/00990/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta

⁶¹ Visible a páginas 6457-6458 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
121	Cristina Rogel Pérez Oficio: INE/14JDE-CM/00990/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
122	Janett Spargo Cruz Oficio: INE/JDE07-HGO/VS/1180/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
123	Teresa Sánchez Estrada Oficio: INE/HGO/06JDE/VS/0346/2018	Cédula: 10 de mayo de 2018. Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
124	Itzel Gallardo Domínguez Oficio: INE/02JDE/VE/0519/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
125	Cinthia Anahí Girado García Oficio: INE/JDE09/553/2018	Cédula: 17 de mayo de 2018. Plazo: 18 al 24 de mayo de 2018.	Sin respuesta
126	Yaneth Montoya Gutiérrez Oficio: INE/JDE/09/554/2018	Cédula: 22 de mayo de 2018. Plazo: 23 al 29 de mayo de 2018	Sin respuesta
127	Antonio Lira Ramos Se notifica por Estrados	Estrados 9 de mayo de 2018 Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018	Sin respuesta
128	Norma Alicia Pérez Ortiz Oficio: INE/06JD/0716/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
129	Tania Idalia Juárez Zavaleta Oficio: INE/JDE10-CM/0693/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 11/05/2018 ⁶²
130	Elsa Maribel Martínez Cruz Oficio: Se notificó por Estrados	Estrados 04 de mayo de 2018 Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
131	Yoana Prado García Oficio: INE/VE/JDE09/NL/0440/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
132	Miguel Ángel Limón Villanueva Oficio: INE/VS/JDE09NL/0448/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
133	Irasema Lisseth Maldonado Arredondo Oficio: INE/VE/JDE09/NL/0449/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
134	Josué Obed Ayala Álvarez Oficio: INE/VS/JDE09NL/0439/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
135	Silvia Marisol Avilés Gutiérrez Oficio: INE06JDE-SON/CD/0710/2018	Cédula: 08 de junio de 2018. Plazo: 11 al 15 de junio de 2018.	Sin respuesta
136	Efrén Adrián Robles Monjarras Oficio: INE/NAY/02JDE/644/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018	Sin respuesta
137	Roselia Ortiz Ayala Oficio: INE/VE/382/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Sin respuesta
138	Sandra Rebeca Nájera Adame Notificación por comparecencia	Cédula: 04 de junio de 2018. Plazo: 5 al 11 de junio de 2018	Sin respuesta
139	Patricia Álvarez Pedroza Notificación por comparecencia	Cédula: 05 de junio de 2018. Plazo: 6 al 12 de junio de 2018	Sin respuesta
140	Juan Carlos Velasco Guzmán Oficio: INE-JAL-JDE04-VS-0898-2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Sin respuesta
141	Isael Juan Carlos Andrade Márquez Oficio: INE-JALJDE13-VE-0249/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta

⁶² Visible a página 6199 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
142	Teresa Trinidad Sachifias Juárez Oficio: INE/JD04-VER/1480/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Escrito del 08/05/2018 ⁶³
143	Angélica Gabriela Heredia Guerrero Oficio INE/JLE-CM/04576/2018	Cédula: 05 de mayo de 2018. Plazo: SIN EFECTOS.	Escrito del 08/05/2018 ⁶⁴
144	Brenda Máyla Rico García Oficio INE/GTO/JDE-02-VE/211/18	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
145	Patricia Ortega Téllez Oficio INE/GTO/JDE-02-VE/211/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
146	Saúl de Jesús López Muñoz Oficio: INE/08JDE/VS/311/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
147	Florencio Torres Gamas Oficio: INE/JD02TAB/2552/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 09/05/2018 ⁶⁵
148	Antonia Pereyra Hernández Oficio: INE/JDE02TAB/2553/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 9 al 15 de mayo de 2018.	Escrito del 08/05/2018 ⁶⁶
149	Eduardo Raúl Ortiz Lozano Oficio: Por Estrados	Cédula: 13 de junio de 2018. Plazo: 14 al 20 de junio de 2018.	Sin respuesta
150	Norma Andrea Miranda Coronado Oficio: INE-JDE07-MEX/VS/0385/2018	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
151	Víctor Hugo Flores Carro Oficio: INE/JDE03-TLAX/32918	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
152	Isaí Flores Pérez Oficio: Fue notificado por Estrados	Estrados 04 de mayo de 2018 Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
153	Oscar Ordoñez Xahuentitla Oficio: INE/JDE-02/TX/0361/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
154	Adelaida Navarro Dávila Oficio: INE-JAL-JDE18-VS-0187-2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 09/05/2018 ⁶⁷
155	Hortencia García Tapia Oficio: INE/SIN/CD05/P/0692/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
156	Ivonne Karla María Rico Labrada Oficio INE/GTO/JDE-02-VE/207/18	Cédula: 04 de Mayo de 2018 Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
157	Blanca Ivonne Bravo González Oficio: INE/VED/408/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
158	María Guadalupe López Cruz Oficio: INE/SLP/JD05/VS/0154/2018	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 8 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
159	Lizbeth Magally Prott Maldonado Oficio: INE/VS-JLE-VER/0460/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Escrito del 08/05/2018 ⁶⁸

⁶³ Visible a página 5774 del expediente.

⁶⁴ Visible a páginas 6830-6834 del expediente.

⁶⁵ Visible a página 6487 del expediente.

⁶⁶ Visible a página 6496 del expediente.

⁶⁷ Visible a página 5993 del expediente.

⁶⁸ Visible a página 5771 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
160	Lorena Reyes Salazar Oficio: INE/JDE09-VER/0875/2018	Cédula: 04 de Mayo de 2018 Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
161	Laura Andrea Elena Ochoa Martínez Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 04 de mayo de 2018 Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
162	Mario Franco de la Cruz Oficio: INE/JDE02-ZAC/0942/2018	Cédula: 16 de mayo de 2018. Plazo: 17 al 23 de mayo de 2018.	Sin respuesta
163	Jorge Luis Cabral Salinas Oficio: INE/JDE02-ZAC/0942/2018	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
164	Víctor Manuel Rocha Herrera Oficio: INE/JDE/324/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
165	Fernanda Araiza Rodríguez Oficio: Se notificó por Estrados	Estrados 07 de mayo de 2018 Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
167	Lucio Trejo Tovar Oficio: INE/SLP/03JDE/VS/0242/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
168	Jesús Omar Martínez Martínez Oficio: INE/SLP/03JDE/VS0249/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
169	Emmanuel Ávila Cedillo Oficio: Se notificó por Estrados	Estrados 03 de mayo de 2018 Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
170	Kassandra Yasmani Orozco Urquidi Oficio: INE/BS/JDE08/972/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
171	Martín Rene Cruz Valenzuela Oficio: INE/JDE07-TAM/VE/1388/2018	Cédula: 06 de junio de 2018. Plazo: 07 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta
172	Luz María Moya Fierro Oficio: INE/JDE-05/VS/0413/2018	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
173	Luis Antonio Rascón Guerrero Oficio: INE/JD/0731/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
174	Hugo Javier Acuña Oficio: INE/06JD/0717/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
175	Azucena Sánchez Ortega Oficio: INE/06JD/0718/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
176	Guadalupe Varela Ortiz Oficio: INE/06JD/0719/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
177	Itiel Grecia Carmona Lomelí Oficio: INE/JD10-VER/1468/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
178	Rubén Jácome Sánchez Oficio: INE/JD10-VER/1469/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
179	Jesús Arturo Pereyra Ríos Oficio: INE/VS/JDE08/0973/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
180	Cynthia Jocelin Pacheco Martínez Oficio: INE/JDE-01-TAM/1308/18	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
181	Nancy Sarahy Alfaro Torres Oficio: INE-JDE37-MEX/VS/278/2018	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
182	Yta Andegui Sayonara Rojas de la Cruz Oficio: INE/JDE/03/VS/470/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
183	Reyna Sohumaly Rojas de la Cruz Oficio: INE/JDE/03/VS/470/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
184	Magali de Jesús Limón Mendoza Oficio: INE/OAX/JD02/VS/0281/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
185	Luis Felipe Moreno Aguilar Oficio: INE/JDE06TAB/BS/0495/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
186	José Daniel López Mazariego Oficio: INE/JDE06TAB/BS/0495/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
187	Elia Maris González Osuna Oficio: INE/24JDE-MEX/VE/VS/1551/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
188	Marisol Garduño Nieto Oficio: INE-JDE09-MEX/VS/407/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Sin respuesta
189	Alba Rocío Cruz Cruz Oficio: INE-JDE19-MEX/VE/0203/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
190	Zaida Gabriela Serna Rodríguez Oficio: INE/VS/JDE09NL/0442/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
191	Brenda Verenice Alvarado García Oficio: INE/VS/JDE09NL/0443/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
192	Karen Elisama Rivera Luna Oficio: INE/VS/JDE09NL/0444/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
193	Yonatan Alexis Rodríguez Hernández Oficio INE/VS/JDE09NL/0441/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
195	Miguel Ángel Parra Orozco Oficio: INE/MICH/JDE05/VS/0248/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Escrito del 04/05/2018 ⁶⁹
196	Arodhy Valdemar Avelino Aguilar Oficio: Se notificó por Estrados	Estrados 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
197	Yasmín Ruiz Morán Oficio: INE/JD02/VE/0943/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Escrito del 16/05/2018 ⁷⁰
198	Karen Arianna Yáñez Camacho Oficio: INE/MOR/JDE05/VS/0840/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
199	Alejandro Martínez Ignacio Oficio: INE/OAX/JDE08/VS/319/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
200	José Eduardo Abad Flores Oficio: INE/JDE03/VS/472/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
201	Cristian Isabel Josefina Santana Hernández Oficio: INE/JDE03/VS/472/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
202	Ever Javier Villarreal Pérez Oficio: INE/CHIS/JDE09/VS/194/18	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
203	Llinmi Rolando Camas Chacón Oficio: INE/CHIS/JDE09/VS/194/18	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta

⁶⁹ Visible a página 5778 del expediente

⁷⁰ Visible a páginas 7401-7404 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
204	Leticia del Carmen Quiroz Portillo Oficio: INE/JD07/SIN/0587/2018	Cédula: 19 de junio de 2018. Plazo: 20 al 26 de junio de 2018.	Sin respuesta
205	Benito Palma Solís Oficio: INE/09JDE-GRO/VE/500/2018	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
206	Margarita Mondragón Fabela Oficio: INE/COL/JDE02/1172/2018	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
207	Irán Eduardo Moreno Cárdenas Oficio: INE/SLP/JD01/348/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
208	Eduardo Díaz Medina Oficio: INE/SLP/JD01/349/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
209	Cristian Efrén Armijo Belmares Oficio: INE/SLP/JD01/350/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
211	Micaelina Ocampo Martínez Oficio INE/VS/607/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
212	Miriam del Carmen López Sebastián Oficio: INE/JD11-VER/3217/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
213	Uriel Ramón Rodríguez Yoshizaki Oficio: INE/JD11-VER/3218/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
214	Osberto Aquino Santiago Oficio: INE/JD11-VER/3219/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
215	Vladimir Sánchez Hernández Oficio: INE/JD11-VER/3219/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
216	Martha Dalia Alvarado Yovera Oficio: INE/JD11-VER/3219/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
217	Carmen de Jesús Meza Jacobo Oficio: INE/SIN/05JDE/VE/0691/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
218	Cindy Nayeli Cartagena Manrique Oficio: INE/JD11-VER/3222/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
219	Karla Elvira Ramírez Quiroz Oficio: INE/JDE/325/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
220	Mayra Sánchez Pérez Oficio: INE/JD-02/TX/0362/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Escrito del 16/05/2018 ⁷¹
221	Beatriz Favila Soriano Oficio: INE-JDE19-MEX/VE/0204/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
222	María Luisa Camacho Morales Oficio INE/GTO/JDE-02-VE/208/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
223	Carlos Zárate Palomares Oficio INE/GTO/JDE-02-VE/209/18	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
224	Andrea Michelle Luna Aguilera Oficio INE/04JDE-SON/VE/1043/2018	Cédula: 28 de junio de 2018. Plazo: 29 de junio al 05 de julio de 2018.	Sin respuesta
225	Manuel Enrique Bautista Pérez Oficio INE/04JDE-SON/VE/0842/2018	Cédula: 28 de junio de 2018. Plazo: 29 de junio al 05 de julio de 2018.	Sin respuesta

⁷¹ Visible a páginas 7158-7159 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
226	Gabriel Melesio Moroyoqui Acuña Oficio: INE/07JDE/VE/0654/2018	Cédula: 18 de junio de 2018. Plazo: 19 al 25 de junio de 2018.	Sin respuesta
227	Laura del Socorro Pedroza Villegas Oficio: INE/SLP/02JDE/VS/180/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
228	Raúl Ramírez Solís Oficio: INE/JDE06/VS/391/2018	Cédula: 02 de octubre de 2018. Plazo: 03 al 09 de octubre de 2018.	Sin respuesta
229	Maximiliano Tovar Flores Oficio: INE/BC/JLE/VS/1229/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
230	Rebeca Ríos Núñez Oficio: INE/BC/JLE/VS/1230/2018	Cédula: 10 de mayo de 2018. Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
231	Arsenio Santiago Guerrero Oficio: INE/BC/JLE/VS/1231/2018	Cédula: 10 de mayo de 2018. Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
232	Alejandro Cuevas Gutiérrez Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 10 de mayo de 2018 Plazo: 11 al 17 de mayo de 2018.	Sin respuesta
233	Ingrid Olympia González Sánchez Oficio: INE/BC/JLE/VS/1233/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
234	Saraluz Saavedra Barrera Oficio: INE-JDE31-MEX/VS/075/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
235	José Guadalupe Jiménez Hernández Oficio: INE-JDE31-MEX/VS/076/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
236	Flor Gabriela Alejandro Mimila Notificado por Estrados	Estrados 03 de mayo de 2018 Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
237	Guadalupe Miramón Roldan Oficio: INE/JDE10-PUE/1097/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
238	Edith Cuenca Piza Oficio: INE-JDE27-MEX/VS/458/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
239	Rosa Isela Macías Yescas Oficio: JD01/1496/2018	Cédula: 06 de junio de 2018. Plazo: 7 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta
240	Cesar Márquez Pérez Oficio: INE/VS/549/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
241	José Octavio González Díaz Oficio: JD01/1407/2018	Cédula: 06 de junio de 2018. Plazo: 7 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta
242	Jorge Alberto López Sosa Oficio: INE/JDE03/VS-YUC/420/2018	Cédula: 08 de junio de 2018. Plazo: 11 al 15 de junio de 2018.	Sin respuesta
243	Sergio Martínez Olivares Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 03 de mayo de 2018 Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	Sin respuesta
244	Yazmín López Olivares Oficio: Notificado por Estrados	Estrados 04 de mayo de 2018 Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
245	José Luis Guerrero Hernández Oficio: INE/TAM/06JDE/VE/284/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
246	Pedro Alejandro Juárez Orona Oficio: INE/JDE05/NL/579/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
247	Javier Guzmán Lucio	Sin constancia de notificación	

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
248	Martha Lyssette Martínez Landeros Se notificó por estrados.	Estrados 07 de mayo de 2018 Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
249	Karin Viridiana Cerdán González Oficio: INE/JD08-VER/1104/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
250	Vicente Báez Santamaría Oficio: INE/JLE07/VS/1321/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
251	Osvaldo Aquino Ramírez Oficio: INE/JLE07/VS/1323/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
252	Sujey Martínez Cadena Oficio: INE/JLE07/VS/1322/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
253	Martín Contreras Valdez Oficio: INE-JDE13-MEX/VS/312/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
254	Llarelly Sugey Montoya Espinoza Oficio: INE/03JDE/SIN/VS/444/2018	Cédula: 14 de mayo de 2018. Plazo: 15 al 21 de mayo de 2018.	Sin respuesta
255	Emma Ofelia García Castro Oficio: INE/03JDE/SIN/VS/445/2018	Cédula: 15 de mayo de 2018. Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
256	Daniela Paola Zazueta Vega Oficio: INE/03JDE/SIN/VS/446/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Sin respuesta
257	Rentería Ramos Astrid Karely Oficio: INE/03JDE/SIN/VS/447/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Sin respuesta
258	Obed Chaparro Leyva Oficio: INE/07JDE/VE/0655/2018	Cédula: 15 de junio de 2018. Plazo: 18 al 22 de junio de 2018.	Sin respuesta
259	Nallely Torres Loaiza Oficio: INE/JDE02/BCS/VS/093/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
260	Cynthia Michelle Rivera Manríquez Oficio: INE/JDE02/BCS/VS/094/2018	Cédula: 12 de noviembre de 2018. Plazo: 13 al 20 de noviembre de 2018	Sin respuesta
261	Fabiola Guadalupe López Ortiz Oficio: INE/BCS/JDE01/VE/0398/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
262	Juan Carlos Martínez Osuna Oficio INE/BCS/JDE01/VE/0374/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
263	Griselda Gómez Contreras Oficio: INE/BCS/JDE01/VE/0398/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 08 al 14 de mayo de 2018.	Sin respuesta
264	Iván Ernesto Aguilar Navarro Oficio: INE/BCS/JDE01/VE/376/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
265	Juan Carlos Vázquez Jiménez Oficio: INE/CHIS/JDE03/VE/1759/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
266	Domingo Cruz García Oficio: INE/CHIS/JDE03/VE/1760/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
267	Edilberto Espinoza Córdova Oficio: INE/CHIS/JDE03/VE/1761/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
268	María Lucía Rea Vizquerra Oficio: S/N	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
269	Fermín Agustín Cardeña Serna Oficio: INE/GTO/04JDE/VS/275/18	Cédula: 06 de junio de 2018. Plazo: 7 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
270	Gabriela Castillo Ávila Oficio: INE/GTO/04JDE/VS/277/18	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 08 al 14 de junio de 2018.	Sin respuesta
271	Yadira Rosales Salazar Notificado: Por estrados	Estrados 6 de junio. Plazo: 9 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta
272	Guillermina Jiménez Estrada Oficio: INE/GTO/04/JDE/VS/279/18	Cédula: 06 de junio de 2018. Plazo: 7 al 13 de junio de 2018.	Sin respuesta
273	Claudia Hernández Flores Notificado por Estrados	Estrados del 07 de junio de 2018. Plazo: 13 al 19 de junio de 2018.	Sin respuesta
274	José Manuel Ibarra Martínez INE/JDE03/VS/0344/2018	Cédula: 20 de junio de 2018. Plazo: 21 al 27 de junio de 2018.	Escrito del 21/06/2018 ⁷²
275	Lizett Martínez Alderete Oficio: Oficio INE/BC/JD03/1042/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
276	Laura del Carmen Sánchez López Oficio: INE/CHIS/JDE03/VE/1762/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
277	Alejandro Pérez Vázquez Oficio: INE/05JD/VE/0305/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
278	Antonia Vázquez Oficio: INE/JDE0943/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018.	Sin respuesta
279	Francisco Javier Negrete Sabino Oficio: INE/OAX/JD05/VS/0593/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
280	Yareli Ramírez Viera Oficio: INE/OAX/JD05/VS/0593/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
281	Elsa María Estupiñón López Oficio: INE/JDE-05/VS/0411/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Escrito del 11/05/2018 ⁷³
282	Perla Nallely Vizcarra Gallegos Oficio: INE/JDE-05/VS/0411/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Escrito del 11/05/2018 ⁷⁴
283	Karla Marcela López Ramírez Oficio: INE/JDE-05/VS/0410/2018	Cédula: 11 de mayo de 2018. Plazo: 14 al 18 de mayo de 2018.	Escrito del 11/05/2018 ⁷⁵
284	Luis Andrés Chávez Bustamante Oficio: Se notificó por Estrados	Estrados 15 de mayo de 2018 Plazo: 16 al 22 de mayo de 2018.	Sin respuesta
285	Alba Ivet Alvarado Piedra Oficio: JD01/117/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Escrito del 08/05/2018 ⁷⁶
286	Pedro Santoyo López Oficio: INE/02JDE/0194/2018	Cédula: 08 de mayo de 2018. Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta
287	José Agustín Estrada Martínez Oficio: INE/JDE/326/2018	Cédula: 07 de mayo de 2018. Plazo: 8 al 14 de mayo de 2018	Sin respuesta
288	Deylhy Alba Peña Oficio: INE/JDE09-VER/0876/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Sin respuesta

⁷² Visible a página 7141 del expediente

⁷³ Visible a página 7141 del expediente

⁷⁴ Visible a página 7135 del expediente

⁷⁵ Visible a página 7129 del expediente

⁷⁶ Visible a páginas 5892-5893 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
289	Lorena Rodríguez Arriola Oficio: INE/JDE01-ZAC/1010/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Sin respuesta
290	David Josué Gaucin Ibarra Oficio: INE/JDE01-ZAC/1011/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Escrito del 10/05/2018 ⁷⁷
291	Gerardo Guerrero Cerda Oficio: INE/JDE01-ZAC/1012/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Sin respuesta
292	Lourdes Moncerrat Villegas Estrada Oficio: INE/JDE01-ZAC/1013/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 7 al 11 de mayo de 2018	Escrito del 05/05/2018 ⁷⁸
293	Trinidad Cornelia Mantes Anguamea Oficio: INE/03JDE-SON/VS/01306/2018	Citatorio: 02 de octubre de 2018. Cédula: 03 de octubre de 2018. Plazo: 04 al 10 de octubre de 2018.	Sin respuesta
294	Juan Carlos Borbón Yáñez Oficio: INE/03JDE-SON/VS/01307/2018	Cédula: 02 de octubre de 2018. Plazo: 03 al 09 de octubre de 2018.	Sin respuesta
295	Jesús Ramona Anguamea Quiñonez Oficio: INE/03JDE-SON/VS/01307/2018	Citatorio: 02 de octubre de 2018. Cédula: 03 de octubre de 2018. Plazo: 04 al 10 de octubre de 2018.	Sin respuesta
296	Ana Alejandra Corrales Rivera Oficio INE/JDE05-BC/VS/598/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 4 al 10 de mayo de 2018	Sin respuesta
297	Carlos Ernesto Pérez Escamilla Oficio: INE/SLP/JD05/VS/0154/2018	Cédula: 07 de junio de 2018. Plazo: 8 al 14 de junio de 2018	Sin respuesta

Es importante precisar que *Nueva Alianza* informó, esencialmente, que cuenta con documentación soporte de la afiliación de diversos ciudadanos denunciantes, razón por la cual la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con el oficio de respuesta atinente a cada uno de ellos.

VII. Resolución INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VIII. Recurso de apelación SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

⁷⁷ Visible a páginas 7434-7435 y 7748-7749 del expediente

⁷⁸ Visible a página 7436 del expediente

IX. Pérdida de registro de *Nueva Alianza*. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

X. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*.

XI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; disposiciones que se

encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

“2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro”

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de nueve de

mayo y once de junio, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“**SEGUNDO.** - Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.”

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro, en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en la denuncia interpuesta por los ciudadanos referidos con antelación quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que: *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIFE*; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la *Ley de Partidos* y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,⁷⁹ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1º, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

⁷⁹ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,⁸⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

⁸⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de la denuncia presentada por los quejosos materia de la presente determinación, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos siguientes:

No	Ciudadano
1	Isidro Martínez Cruz
3	María de Lourdes Rosas Pichardo
5	Ramona de Alba Landeros
7	José Alfredo Piña Moreno
9	Luis Ernesto Rangel de Lira
11	Claudia Ivet López Nava
13	Itzel Leticia Díaz Hernández
15	Luis Alfonso Moreno Durazo
17	Kevin Jesús Argueta Hernández
19	Cristina Alicia Beltrán Hurtado
21	Secundino Ávalos Sandoval
23	Alejandro Martínez Portugal
25	Liliana Pavello Ramírez
27	Miriam Yudith Miranda Osuna
29	Ana Karen Rodríguez Ortega
31	Roberto Eduardo Cárdenas Campos
33	Elisa Liwdmila Rivera Rangel
35	Cruz Ochoa Gracia
37	Gerardo Castillo Terrazas
39	Iván Alejandro Meza Fierro
41	Xóchitl Guadalupe Vargas López
43	Patricia Ortiz Valenzuela

2	Norma Luisa Bastida Navarrete
4	Mariana Marisalvia Trejo Trujillo
6	Enrique López Correa
8	Gabriela Larios Martínez
10	Juan Carlos Farías González
12	Karla Giselle Rojas Lezama
14	Erika Vázquez Pérez
16	Jorge Jonathan Gómez Córdoba
18	Tania Morales Flores
20	Juan Antonio Quiñones Ramírez
22	Irving Herrera Torres
24	Guadalupe Anahit Lucero Díaz
26	Mónica Mancilla Ortiz
28	Flor Iliana Navarro Ríos
30	María Isabel Sanabria Sánchez
32	Javier Jesús Guerrero Castelar
34	Leonardo de Jesús Licea Cayetano
36	Benito Juárez Orona
38	María Teresa Muñoz Arenas
40	Daniel Mancebo Cortes
42	Erika Candelaria Moreno Hernández
44	Raymundo Castañeda Cárdenas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Ciudadano
45	José Luis Ramos Madrigal
47	Omar Concha Lerma
49	Aurelia Maldonado Ortiz
51	Genoveva Espejo López
53	María Isabel Rangel López
55	José Antonio Caudillo Coral
57	Carlos Cota Pedrín
59	Brenda Lastenia García Cárdenas
61	Elena Vega Contreras
63	Agustín Juárez Lorenzo
65	Guadalupe Camacho Pérez
67	Perla Leticia Domínguez Aquino
69	Alcibiades de Dios Campos
71	Luz Adriana Sarrancino Sansores
73	María Dolores Molinero Calvo
75	Anaid Gutiérrez Sánchez
77	Donaji Estrada Figueroa
79	Jesús Homero Sánchez Pequeño
81	Fermín Martínez Antúnez
83	Abel Vargas Gabino
85	Ignacio Rodríguez Bernal
87	Javier Vázquez Soto
89	Raymundo Luna Ríos
91	Miguel Ángel Pineda Germán
93	Juan Andrés Rivera Torres
95	Verónica Araceli Ramírez Ortiz
97	Sergio Alexis Cárdenas Barreras
99	Nora Isela Chavarín Borquez
101	Israel Chun Ovalle
103	Nancy María Estrella Zamora Guerra
105	Jovita Barrón Castillo
107	Oscar Alejandro Valencia Tejero
109	Elvira Flores Pérez
111	Tania Ortiz Vargas
113	Héctor Ceballos Rodríguez
115	María de los Ángeles Pacheco Ocaña
117	Cristóbal Ortega Almanza
119	Mario Sánchez Guzmán
121	Cristina Rogel Pérez
123	Teresa Sánchez Estrada
125	Cinthia Anahí Grado García
127	Antonio Lira Ramos
129	Tania Idalia Juárez Zavaleta
131	Yoana Prado García

46	Francisco Javier Reyna Saavedra
48	Jorge Domínguez Segura
50	Ana Karina Velo Bejarano
52	Guadalupe Baizan Rosales
54	Raúl Barreras Gaxiola
56	Gildardo Cervantes Geraldo
58	Ángel Valdez Agundez
60	Juan Martín Segura Ortiz
62	Omar Alejandro Colín Escamilla
64	Gregorio Marcelo Díaz
66	Itzel Álvarez González
68	Carlos Alejandro Galván Cortes
70	Gladys Santiago Carrera
72	Jazmín Rodea Rendón
74	Adriana Mata Zamarrón
76	Roberto García García
78	Mónica Alicia López Barrón
80	María Isabel Hernández Sandoval
82	Efraín Higinio Anacleto
84	Bernardo Rodríguez Landa
86	Claudia Lizbeth Almeida Cruz
88	Dalila de la Cruz de la Cruz
90	Eduardo Palacios Samiento
92	Noemí Rodea Sánchez
94	David Mejorada Ordoñez
96	Cesar Ochoa Flores
98	Cesar Antonio Quiroz Hernández
100	Emanuel Guzmán Lozoya
102	Oswaldo Samuel Anaya Servín
104	Antonio Jiménez Sabalza
106	Alejandra Tejero Díaz
108	María del Carmen Pérez Sánchez
110	David Israel Castolo Rodríguez
112	Christian Daniel Correa Garza
114	Maribel González Velarde
116	Julián Oliveros Leyva
118	Georgina Teresa Vázquez Hernández
120	Mónica Belén Soto
122	Janett Spargo Cruz
124	Itzel Gallardo Domínguez
126	Yaneth Montoya Gutiérrez
128	Norma Alicia Pérez Ortiz
130	Elsa Maribel Martínez Cruz
132	Miguel Ángel Limón Villanueva

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Ciudadano
133	Irasema Lisseth Maldonado Arredondo
135	Silvia Marisol Avilés Gutiérrez
137	Roselía Ortiz Ayala
139	Patricia Álvarez Pedroza
141	Manuel Andrade Márquez
143	Angélica Gabriela Heredia Guerrero
145	Patricia Ortega Téllez
147	Florencio Torres Gamas
149	Eduardo Raúl Ortiz Lozano
151	Víctor Hugo Flores Carro
153	Oscar Ordoñez Xahuentitla
155	Hortencia García Tapia
157	Blanca Ivonne Bravo González
159	Lizbeth Magally Prott Maldonado
161	Laura Andrea Elena Ochoa Martínez
163	Jorge Luis Cabral Salinas
165	Fernanda Araiza Rodríguez
167	Lucio Trejo Tovar
169	Emmanuel Ávila Cedillo
171	Martín Rene Cruz Valenzuela
173	Luis Antonio Rascón Guerrero
175	Azucena Sánchez Ortega
177	Itiel Grecia Carmona Lomelí
179	Jesús Arturo Pereyra Ríos
181	Nancy Sarahy Alfaro Torres
183	Reyna Sohumaly Rojas de la Cruz
185	Luis Felipe Moreno Aguilar
187	Elia Maris González Osuna
189	Alba Rocío Cruz Cruz
191	Brenda Verenice Alvarado García
193	Yonatan Alexis Rodríguez Hernández
195	Miguel Ángel Parra Orozco
197	Yasmín Ruiz Morán
199	Alejandro Martínez Ignacio
201	Cristian Isabel Josefina Santana Hernández
203	Llinmi Rolando Camas Chacón
205	Benito Palma Solís
207	Irán Eduardo Moreno Cárdenas
209	Cristian Efrén Armijo Belmares
211	Micaelina Ocampo Martínez
213	Uriel Ramón Rodríguez Yoshizaki
215	Vladimir Sánchez Hernández
217	Carmen de Jesús Meza Jacobo

134	Josué Obed Ayala Álvarez
136	Efrén Adrián Robles Monjaras
138	Sandra Rebeca Nájera Adame
140	Juan Carlos Velasco Guzmán
142	Teresa Trinidad Sachifas Juárez
144	Brenda Mayela Rico García
146	Saúl de Jesús López Muñoz
148	Antonia Pereyra Hernández
150	Norma Andrea Miranda Coronado
152	Isaí Flores Pérez
154	Adelaida Navarro Dávila
156	Ivonne Karla María Rico Labrada
158	María Guadalupe López Cruz
160	Lorena Reyes Salazar
162	Mario Franco de la Cruz
164	Víctor Manuel Rocha Herrera
166	
168	Jesús Omar Martínez Martínez
170	Kassandra Yasmani Orozco Urquidi
172	Luz María Moya Fierro
174	Hugo Javier Acuña
176	Guadalupe Varela Ortiz
178	Rubén Jácome Sánchez
180	Cynthia Jocelin Pacheco Martínez
182	Yta Andegui Sayonara Rojas de la Cruz
184	Magali de Jesús Limón Mendoza
186	José Daniel López Mazariego
188	Marisol Garduño Nieto
190	Zaida Gabriela Serna Rodríguez
192	Karen Elisama Rivera Luna
194	María de los Ángeles Teco Varela
196	Arodhy Valdemar Avelino Aguilar
198	Karen Arianna Yáñez Camacho
200	José Eduardo Abad Flores
202	Ever Javier Villarreal Pérez
204	Leticia del Carmen Quiroz Portillo
206	Margarita Mondragón Fabela
208	Eduardo Díaz Medina
210	
212	Miriam del Carmen López Sebastián
214	Osberto Aquino Santiago
216	Martha Dalia Alvarado Yovera
218	Cindy Nayeli Cartagena Manrique

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IMC/JD09/OAX/8/2018

No	Ciudadano
219	Karla Elvira Ramírez Quiroz
221	Beatriz Favila Soriano
223	Carlos Zárate Palomares
225	Manuel Enrique Bautista Pérez
227	Laura del Socorro Pedroza Villegas
229	Maximiliano Tovar Flores
231	Arsenio Santiago Guerrero
233	Ingrid Olympia González Sánchez
235	José Guadalupe Jiménez Hernández
237	Guadalupe Miramón Roldan
239	Rosa Isela Macías Yescas
241	José Octavio González Díaz
243	Sergio Martínez Olivares
245	José Luis Guerrero Hernández
247	Javier Guzmán Lucio
249	Karin Viridiana Cerdán González
251	Osvaldo Aquino Ramírez
253	Martín Contreras Valdez
255	Emma Ofelia García Castro
257	Renteria Ramos Astrid Karely
259	Nallely Torres Loaiza
261	Fabiola Guadalupe López Ortiz
263	Gricelda Gómez Contreras
265	Juan Carlos Vázquez Jiménez
267	Edilberto Espinoza Córdova
269	Fermín Agustín Cardeña Serna
271	Yadira Rosales Salazar
273	Claudia Hernández Flores
275	Lizett Martínez Alderete
277	Alejandro Pérez Vázquez
279	Francisco Javier Negrete Sabino
281	Elsa María Estupiñón López
283	Karla Marcela López Ramírez
285	Alba Ivet Alvarado Piedra
287	José Agustín Estrada Martínez
289	Lorena Rodríguez Arriola
291	Gerardo Guerrero Cerda
293	Trinidad Cornelia Mantes Anguamea
295	Jesús Ramona Anguamea Quiñonez
297	Carlos Ernesto Pérez Escamilla

220	Mayra Sánchez Pérez
222	María Luisa Camacho Morales
224	Andrea Michelle Luna Aguilera
226	Gabriel Melesio Moroyoqui Acuña
228	Raúl Ramírez Solís
230	Rebeca Ríos Núñez
232	Alejandro Cuevas Gutiérrez
234	Saraluz Saavedra Barrera
236	Flor Gabriela Alejandro Mimila
238	Edith Cuenca Piza
240	Cesar Márquez Pérez
242	Jorge Alberto López Sosa
244	Yazmín López Olivares
246	Pedro Alejandro Juárez Orona
248	Martha Lyssette Martínez Landeros
250	Vicente Báez Santamaría
252	Sujey Martínez Cadena
254	Llarelly Suguey Montoya Espinoza
256	Daniela Paola Zazueta Vega
258	Obed Chaparro Leyva
260	Cinthia Michelle Rivera Manríquez
262	Juan Carlos Martínez Osuna
264	Iván Ernesto Aguilar Navarro
266	Domingo Cruz García
268	María Lucía Rea Vizguerra
270	Gabriela Castillo Ávila
272	Guillermina Jiménez Estrada
274	José Manuel Ibarra Martínez
276	Laura del Carmen Sánchez López
278	Antonia Vázquez
280	Ramírez Viera Yareli
282	Perla Nallely Vizcarra Gallegos
284	Luis Andrés Chávez Bustamante
286	Pedro Santoyo López
288	Deylhy Alba Peña
290	David Josué Gaucin Ibarra
292	Lourdes Moncerrat Villegas Estrada
294	Juan Carlos Borbón Yáñez
296	Ana Alejandra Corrales Rivera

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

INE/CG1450/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018
DENUNCIANTES: ANA LEYVA CERVANTES Y
GEORGINA CORTES ESCALONA
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ANA LEYVA CERVANTES Y GEORGINA CORTES ESCALONA, EN CONTRA DE NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU REGISTRO COMO REPRESENTANTE DE NA ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA SIN SU CONSENTIMIENTO Y LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN, RESPECTIVAMENTE, CONDUCTAS QUE PRESUNTAMENTE FUERON REALIZADAS MEDIANTE LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GLOSARIO	
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>NA o Nueva Alianza</i>	Partido Político Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron, en la UTCE, dos escritos de queja signados por igual número de ciudadanas quienes, denunciaron en esencia, lo siguiente:

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA DE PRESENTACIÓN	HECHOS DENUNCIADOS
1	Ana Leyva Cervantes ¹	18/diciembre/2017	

¹ Visible a fojas 01 a 06 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA DE PRESENTACIÓN	HECHOS DENUNCIADOS
2	Georgina Cortes Escalona ²	26/diciembre/2017	Su registro como representante de NA ante mesa directiva de casilla sin su consentimiento, mediante la indebida utilización de sus datos personales, así como, en uno de los casos, la probable violación a su derecho de libertad de afiliación.

II. REGISTRO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.³ Mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la UTCE determinó registrar las denuncias presentadas por Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona como **Cuaderno de Antecedentes** identificado con la clave **UT/SCG/CA/ALC/JD04/OAX/82/2017**, con el propósito de que la autoridad instructora se allegara de los elementos necesarios que permitieran presumir la probable transgresión a la normativa electoral por parte de NA, ordenando los siguientes requerimientos:

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
NA	Se solicitó lo siguiente: 1) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registradas Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona.	INE-UT/9834/2017 29/12/2017 ⁴	Sin respuesta

² Visible a fojas 07 a 13 del expediente.

³ Visible a fojas 14 a 21 del expediente.

⁴ Visible a foja 30 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	<p>2) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original o copia certificada del expediente en que obren las constancias del procedimiento de afiliación correspondiente, en especial, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>3) En caso de que su respuesta al inciso a) sea en sentido negativo, indique si con anterioridad, dichas ciudadanas se encontraban afiliadas al instituto político que representa y de ser así, sírvase proporcionar la información y documentación referida en el inciso que antecede.</p> <p>4) Informe si acreditó como representantes ante mesas directivas de casilla a las siguientes ciudadanas:</p> <p>-Ana Leyva Cervantes, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 1, de la sección 2042 de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en 2015 y 2016.</p> <p>-Georgina Cortes Escalona, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 2, de la sección 1267, en Morelia, Michoacán, en 2015.</p> <p>5) De ser afirmativa su respuesta:</p>		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	<p>-Informe la fecha en que acreditó a las ciudadanas referidas en el inciso que precede, precisando el tipo de representación para las que fueron nombradas, esto es, propietarias o suplentes.</p> <p>-Proporcione la documentación que presentó ante las autoridades correspondientes para dicho registro.</p> <p>-Aporte el escrito de consentimiento o documento que acredite la autorización de las ciudadanas de referencia para ejercer dicha representación.</p> <p>-Remita el original o copia certificada del expediente en que obren las constancias del procedimiento llevado a cabo para tal fin, en particular, el nombramiento respectivo.</p> <p>-Señale los tipos de procesos electorales para el que fueron nombradas como representantes del Partido Nueva Alianza ante la mesa directiva de casilla indicada en el numeral que antecede.</p>		
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del	<p>Se solicitó lo siguiente:</p> <p>1. Informe si Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona actualmente se encuentran registradas en Padrón de Afiliados y/o</p>		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Instituto Nacional Electoral	<p>en el Sistema de Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes del Partido Nueva Alianza.</p> <p>2. En su caso, indique la fecha en que las ciudadanas en comento, fueron inscritas en dicho padrón y/o acreditados en ese Sistema, remitiendo el original o copia certificada legible del expediente donde obren las constancias de acreditación respectiva.</p> <p>3. En caso de que su respuesta al inciso a) sea en sentido negativo, precise si con anterioridad, las ciudadanas de referencia se encontraban afiliadas al Partido Nueva Alianza. En caso afirmativo sírvase proporcionar la información y documentación referida en el inciso que antecede.</p>	<p>INE-UT/9835/2017</p> <p>29/12/2017⁵</p>	<p>Correo electrónico de 05/01/2018⁶</p>
Vocales Ejecutivos de las 04 Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto en los estados de Oaxaca y Quintana Roo	<p>Se solicitó lo siguiente:</p> <p>1. Señale si obra en sus archivos o sistemas documentación que ampare la acreditación de:</p> <p>-Ana Leyva Cervantes, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 1, de la sección 2042 de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en 2015 o 2016.</p> <p>-Georgina Cortes Escalona, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 2, de la sección</p>		

⁵ Visible a foja 29 del expediente.

⁶ Visible a fojas 42 a 43 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	<p>1267, en Morelia, Michoacán, en 2015.</p> <p>2. De ser afirmativa su respuesta:</p> <p>a) Informe la fecha en que fueron acreditadas las referidas ciudadanas en el numeral que precede, precisando el tipo de representación para la que fueron nombradas, esto es, propietarias o suplente.</p> <p>b) Remita el original o copia certificada del expediente en que obren las constancias relativas a dicho nombramiento.</p> <p>c) Señale los tipos de procesos electorales para los que fueron nombradas como representantes del Partido Nueva Alianza ante las mesas directivas de casilla indicadas en el numeral que precede.</p> <p>d) Remita copia certificada de las actas de la Acta Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de las casillas mencionadas, que obren en los archivos de dichos órganos desconcentrados.</p>	<p>Correo electrónico</p>	<p>Oficio INE- QR/JDE/04/VS/0002/2018</p> <p>05/01/2018⁷</p> <p>Oficio INE/OAX/JDE04/VE/0003/2018</p> <p>11/01/2018⁸</p>

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó el requerimiento que se describe a continuación:

⁷ Visible a fojas 39 a 41 del expediente.

⁸ Visible a foja 44 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO⁹			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas de este Instituto en los estados de Oaxaca y Michoacán	<p>Se solicitó lo siguiente:</p> <p>1. Señale si obra en sus archivos o sistemas documentación que ampare la acreditación de:</p> <p>-Ana Leyva Cervantes, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 1, de la sección 2042 de la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en 2015 o 2016.</p> <p>-Georgina Cortes Escalona, como representante ante la mesa directiva de casilla Contigua 2, de la sección 1267, en Morelia, Michoacán, en 2015.</p> <p>2. De ser afirmativa su respuesta:</p> <p>a) Informe la fecha en que fueron acreditadas las referidas ciudadanas en el numeral que precede, precisando el tipo de representación para la que fueron nombradas, esto es, propietaria o suplente.</p> <p>b) Remita el original o copia certificada del expediente en que obren las constancias relativas a dicho nombramiento.</p> <p>c) Señale los tipos de procesos electorales para los que fueron nombradas como representantes del Partido Nueva Alianza ante las mesas directivas de casilla indicadas en el numeral que precede.</p>	Correo electrónico	<p>Oficio 08-JD-MICH/OF/VS/044/24-01-18</p> <p>26/01/2018¹⁰</p> <p>INE/OAX/JL/VS/0118/2018</p> <p>29/01/2018¹¹</p>

⁹ Visible a fojas 46 a 49 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 54 a 61 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 62 a 68 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO⁹			
SUJETO REQUERIDO Y FECHA DEL ACUERDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	d) Remita copia certificada de las actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de las casillas mencionadas, que obren en los archivos de dichos órganos desconcentrados.		

IV. CIERRE DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Y APERTURA DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO.¹² En atención a las respuestas formuladas por Vocales de las Juntas Locales Ejecutivas de este Instituto en los estados de Oaxaca y Michoacán, por acuerdo de siete de febrero de dos mil dieciocho, se determinó el cierre del Cuaderno de Antecedentes UT/SCG/CA/ALC/JD04/OAX/82/2017, al existir elementos suficientes para considerar una posible transgresión a la normativa electoral por parte del instituto político denunciado, en consecuencia se ordenó la apertura del respectivo procedimiento sancionador ordinario, a fin de conocer las conductas denunciadas por Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona.

V. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.¹³ En su oportunidad se admitió a trámite el procedimiento citado el rubro y se ordenó emplazar a NA, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del presente asunto, proveído que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/1441/2018 ¹⁴ 14/02/2018	Citatorio: ¹⁵ 13 de febrero de 2018. Cédula: ¹⁶ 14 de febrero de 2018. Plazo: 15 al 21 de febrero de 2018.	21/febrero/2018 ¹⁷

¹² Visibles a fojas 69 a 72 del expediente.

¹³ Visible a fojas 84 a 89 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 95 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 96 a 102 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 103 a 104 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 113 a 114 del expediente.

VI. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *NA*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *NA* interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VIII. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

IX. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación, el registro como representante ante mesa directiva de casilla y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de NA, en perjuicio de las ciudadanas que han sido señaladas a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdo de doce de febrero del año en curso; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que las quejas o denuncias hayan sido admitidas, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *NA* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *NA* como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *NA* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación en contra de *NA*, o su inscripción como representantes ante mesa directiva de casilla por el citado instituto político.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, NA ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹⁸ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya

¹⁸ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ALC/JD04/OAX/25/2018

*elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciados no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMMIME*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMMIME*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Ana Leyva Cervantes y Georgina Cortes Escalona.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

¹⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ADÁN MAGDALENO ALCALÁ, MARÍA DEL CARMEN ALCALÁ MUÑOZ, CRYRNA YANETH ISLAS HOLGUIN, MAGALI ALMANZA GUTIÉRREZ, ROBERTO ESLI MANUEL RAMÍREZ ROMERO Y DAVID GONZALO HERNÁNDEZ TEMOLTZI, EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018

GLOSARIO	
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>NA o Nueva Alianza</i>	Partido Político Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE* seis escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible violación a su derecho de libertad de afiliación, atribuida a NA y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA RECEPCIÓN UTCE
1	Adán Magdaleno Alcalá ¹	30/enero/2018
2	María del Carmen Alcalá Muñoz ²	31/enero/2018
3	Crysna Yaneth Islas Holguín ³	31/enero/2018
4	Magali Almanza Gutiérrez ⁴	31/enero/2018

¹ Visible a fojas 01 a 04 del expediente.

² Visible a fojas 05 a 08 del expediente.

³ Visible a fojas 09 a 10 del expediente.

⁴ Visible a fojas 11 a 12 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA RECEPCIÓN UTCE
5	Roberto Esli Manuel Ramírez Romero ⁵	09/febrero/2018
6	David Gonzalo Hernández Temoltzi ⁶	09/febrero/2018

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO⁷. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018.

En el citado acuerdo se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de Adán Magdaleno Alcalá, María del Carmen Alcalá Muñoz, Crysna Yaneth Islas Holguin, Magali Almanza Gutiérrez, Roberto Esli Manuel Ramírez Romero y David Gonzalo Hernández Temoltzi, y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
27/02/2018 ⁸	NA	INE-UT/1935/2018 ⁹	05/03/2018 Oficio RNA 064/2018 ¹⁰
	DEPPP	INE-UT/1936/2018 ¹¹	28/02/2018 Correo institucional ¹²

III. EMPLAZAMIENTO.¹³ El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar a *NA*, a través de su representante propietario ante el *Consejo General* de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto

⁵ Visible a fojas 13 a 18 del expediente.

⁶ Visible a fojas 19 a 22 del expediente.

⁷ Visible a fojas 23 a 30 del expediente.

⁸ Visible a fojas 23 a 30 del expediente.

⁹ Visible a foja 37 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 46 a 49 del expediente.

¹¹ Visible a foja 40 del expediente.

¹² Visible a fojas 41 a 43 del expediente.

¹³ Visible a fojas 93 a 101 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018

a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/3933/2018 ¹⁴	Citatorio: ¹⁵ 02 de abril de 2018. Cédula: ¹⁶ 03 de abril de 2018. Plazo: 04 al 10 de abril de 2018.	Sin respuesta

IV. VISTA PARA ALEGATOS¹⁷. Mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, con las actuaciones que integran el presente asunto, a fin de que formularan los alegatos que a su derecho conviniera, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/6049/2018 ¹⁸	Citatorio: ¹⁹ 03 de mayo de 2018. Cédula: ²⁰ 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Escrito signado por el representante propietario de NA ante el Consejo General de este Instituto recibido en esta Unidad el día 11/mayo/2018 ²¹

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Adán Magdaleno Alcalá INE-JAL-JDE03-VE-1038-2018 ²²	Cédula: 14 de mayo de 2018. ²³ Plazo: 15 al 21 de mayo de 2018.	Sin respuesta
2	María del Carmen Alcalá Muñoz INE-JAL-JDE03-VE-1039-2018 ²⁴	Cédula: 14 de mayo de 2018. ²⁵ Plazo: 15 al 21 de mayo de 2018.	Sin respuesta

¹⁴ Visible a foja 107 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 108 a 114 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 115 a 116 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 121 a 125 del expediente.

¹⁸ Visible a foja 129 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 130 a 134 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 135 a 136 del expediente.

²¹ Visible a fojas 141 a 150 del expediente.

²² Visible a foja 181 del expediente.

²³ Visible a fojas 182 del expediente.

²⁴ Visible a foja 177 del expediente.

²⁵ Visible a foja 178 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
3	Crysa Yaneth Islas Holguin INE/JDE09/547/2018 ²⁶	Cédula: 18 de mayo de 2018. ²⁷ Plazo: 21 al 25 de mayo de 2018.	Sin respuesta
4	Magali Almanza Gutiérrez INE/JDE09/548/2018 ²⁸	Cédula de notificación por estrados: 17 de mayo de 2018. ²⁹ Plazo: 18 al 24 de mayo de 2018.	Sin respuesta
5	Roberto Esli Manuel Ramírez Romero JDE/04/VS/0516/2018 ³⁰	Cédula: 09 de mayo de 2018. ³¹ Plazo: 10 al 16 de mayo de 2018.	Sin respuesta
6	David Gonzalo Hernández Temoltzi INE/JD11-VER/3223/2018 ³²	Citatorio: 07 de mayo de 2018. ³³ Cédula: 08 de mayo de 2018. ³⁴ Plazo: 09 al 15 de mayo de 2018.	Sin respuesta

V. VISTA A CIUDADANO³⁵. Mediante escrito de alegatos *NA* exhibió copia simple de las constancias de afiliación del ciudadano Roberto Esli Manuel Ramírez Romero, por lo que, con la finalidad de respetar el debido proceso, así como su garantía de audiencia, mediante Acuerdo de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al ciudadano en comento, para que expresara lo que a su derecho conviniera, mismo que fue notificado conforme a lo siguiente:

No	Quejoso – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Roberto Esli Manuel Ramírez Romero JDE/04/VS/0744/2018 ³⁶	Cédula: 01 de agosto de 2018. ³⁷ Plazo: 02 al 08 de agosto de 2018.	Sin respuesta

VI. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *NA*, en virtud de no haber obtenido por lo menos

²⁶ Visible a foja 169 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 170 a 171 del expediente.

²⁸ Visible a foja 175 del expediente.

²⁹ Visible a fojas 172 del expediente.

³⁰ Visible a foja 153 del expediente.

³¹ Visible a fojas 154 a 155 del expediente.

³² Visible a foja 166 del expediente.

³³ Visible a fojas 161 a 163 del expediente.

³⁴ Visible a fojas 164 a 165 del expediente.

³⁵ Visible a fojas 121 a 125 del expediente.

³⁶ Visible a foja 210 del expediente.

³⁷ Visible a fojas 211 a 212 del expediente.

el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *NA*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VIII. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

IX. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *NA*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMA/JD03/JAL/32/2018

Asimismo, debe precisarse que *NA* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *NA* como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *NA* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *NA*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *NA* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,³⁸ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando,

³⁸ Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,³⁹ se precisa que

³⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia:

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Adán Magdaleno Alcalá, María del Carmen Alcalá Muñoz, Crysna Yaneth Islas Holguin, Magali Almanza Gutiérrez, Roberto Esli Manuel Ramírez Romero Y David Gonzalo Hernández Temoltzi, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Adán Magdaleno Alcalá, María del Carmen Alcalá Muñoz, Crysna Yaneth Islas Holguin, Magali Almanza Gutiérrez, Roberto Esli Manuel Ramírez Romero Y David Gonzalo Hernández Temoltzi

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

INE/CG1452/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018
DENUNCIANTES: JORGE ALBERTO
ULISES AYALA Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR DIVERSOS CIUDADANOS EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO, AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Nueva Alianza:	Partido Nueva Alianza
Quejosos o denunciantes:	Jorge Alberto Ulises Ayala Pérez, Cesar Eloy Peralta López, María Fernanda Barragán Ramírez, Víctor Noel Carrillo Pompa, Deyanira Elizabeth Reynosa Soto, Tania Evelin Contreras Barrientos, Guillermo Cisneros Salazar, José Miguel Valles Rodríguez, Tania Ortiz Vargas, Luis Arturo Gaona López, Carlos Fernando Valenzuela Neudert, Martha Cecilia Ochoa Rendón, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Felipe de Jesús Méndez Garduza y Hernán de la Rosa Sánchez
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

A N T E C E D E N T E S

I. PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS. El presente procedimiento se deriva de los oficios que fueran remitidos por personal de las diferentes Juntas Ejecutivas de este Instituto en todo el territorio nacional, con motivo de diversos escritos de queja presentados por diversos ciudadanos y que aparecieron registrados como afiliados en el padrón de *Nueva Alianza*, mismos que se enlistan a continuación:

No.	Oficio de remisión	Nombre del quejoso	Entidad	Fecha del escrito de queja
1	INE/BC/JD03/0191/2018	Jorge Alberto Ulises Ayala Pérez	Baja California	23 de enero de 2018 ¹
2	INE/BC/JD03/0190/2018	Cesar Eloy Peralta López	Baja California	19 de enero de 2018 ²
3	INE/JDE01/VS/181/2018	María Fernanda Barragán Ramírez	Baja California	02 de febrero de 2018 ³
4	INE/JDE09/167/2018	Víctor Noel Carrillo Pompa	Chihuahua	17 de enero de 2018 ⁴
5	INE/COAH/JDE02/VE/056/2018	Deyanira Reynosa Soto	Coahuila	20 de enero de 2018 ⁵
6	INE/VE/131/2018	Tania Evelin Contreras Barrientos	Durango	12 de enero de 2018 ⁶
7	INE/DGO/JD04/VE/025/2018	Guillermo Cisneros Salazar	Durango	25 de enero de 2018 ⁷
8	INE/DGO/JD04/VE/025/2018	José Miguel Valles Rodríguez	Durango	23 de enero de 2018. ⁸
9	INE-JD10-MEX/VE/077/2018	Tania Ortiz Vargas	Estado de México	06 de febrero de 2018 ⁹
10	INE/JDE/03/VS/470/17	Luis Arturo Gaona López	Morelos	20 de diciembre de 2017. ¹⁰
11	INE/SLP/01JDE/VE/119/2018	Vannelly Ivette Pérez Rodríguez	San Luis Potosí	11 de enero de 2018

¹ Visible a página 02 del expediente

² Visible a página 08 del expediente

³ Visible a página 66 del expediente

⁴ Visible a página 21 del expediente.

⁵ Visible a página 59 del expediente.

⁶ Visible a página 18 del expediente.

⁷ Visible a página 77 del expediente.

⁸ Visible a página 72 del expediente.

⁹ Visible a página 82 del expediente.

¹⁰ Visible a página 94 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

No.	Oficio de remisión	Nombre del quejoso	Entidad	Fecha del escrito de queja
12	INE/03-JDE-SON/VS/0122/2018	Carlos Fernando Valenzuela Neudert	Sonora	02 de febrero de 2018 ¹¹
13	INE/03-JDE-SON/VS/130/2018	Martha Cecilia Ochoa Rendón	Sonora	02 de febrero de 2018 ¹²
14	INE/05JDE-SON/VE/0459/2018	Sergio Alberto Camou de la Cruz	Sonora	08 de febrero de 2018 ¹³
15	JDE/04/VS/0255/2018	Felipe de Jesús Méndez Garduza	Tabasco	19 de diciembre de 2017 ¹⁴
16	JDE/04/VS/0255/2018	Hernán de la Rosa Sánchez	Tabasco	01 de febrero de 2018 ¹⁵

II. REGISTRO, REMISIÓN DE ESCRITO SIGNADO POR VANNELLY IVETTE PÉREZ RODRÍGUEZ AL PARTIDO DENUNCIADO, ADMISIÓN, DETERMINACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.¹⁶ Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas la denuncias planteadas, quedando registradas como procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018.

Cabe señalar que en relación al escrito firmado por la ciudadana Vannelly Ivette Pérez Rodríguez, no se advirtió la intención de presentar una queja o denuncia por actos o hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa electoral atribuibles a *Nueva Alianza*, como lo es la indebida afiliación y, considerando que en su escrito de once de enero del año en curso, dirigido al instituto político denunciado, en el que indica: *yo no desconosco (sic) mi afiliación al partido Nueva Alianza solo quiero solicitar mi baja por así convenir mis intereses personales*, por lo que se concluye que dicha ciudadana solicita su desafiliación como militante y baja en el registro interno de *Nueva Alianza*.

En ese sentido, esta autoridad nacional remitió el escrito original de referencia, con sus respectivos anexos, al partido de referencia, para que sea éste quien determinara lo que en derecho corresponda, ordenándose glosar copia certificada

¹¹ Visible a página 34 del expediente.

¹² Visible a página 86 del expediente.

¹³ Visible a página 112 del expediente.

¹⁴ Visible a página 101 del expediente.

¹⁵ Visible a página 615 del expediente.

¹⁶ Visibles a páginas 7-14 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

de dicho documento al expediente citado al rubro, para los efectos legales a que haya lugar.

Asimismo, se admitió a trámite, y se reservó emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación, de igual manera, es necesario señalar que, de los escritos de queja recibidos, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados de los partidos políticos, así como al instituto político denunciado, para que proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>Nueva Alianza</i>	INE-UT/1914/2018 ¹⁷	01/03/2018 ¹⁸ Primer escrito 01/03/2018 ¹⁹ Segundo escrito 02/03/2018 ²⁰ Tercer escrito 02/03/2018 ²¹ Cuarto escrito
<i>DEPPP</i>	INE-UT/1915/2018 ²²	25/02/2018 Correo institucional ²³

III. EMPLAZAMIENTO²⁴. El tres de abril de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a *Nueva Alianza*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>Nueva Alianza</i> INE-UT/4059/2018 ²⁵ 05/04/2018	Citatorio: 04 de abril de 2018. Cédula: 05 de abril de 2018. Plazo: 06 al 12 de abril de 2018.	Escrito signado por el representante suplente del <i>Nueva Alianza</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 12 de abril de 2018 ²⁶

¹⁷ Visible a página 137 del expediente

¹⁸ Visible a páginas 145 a 174 del expediente

¹⁹ Visible a páginas 175 a 184 del expediente

²⁰ Visible a páginas 185 a 191 del expediente

²¹ Visible a páginas 229 a 235 del expediente

²² Visible a página 140 del expediente

²³ Visible a páginas 141-143 del expediente

²⁴ Visible a páginas 334-340 del expediente.

²⁵ Visible a página 346 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 358 a 359 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

IV. ALEGATOS.²⁷ El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>Nueva Alianza</i> INE-UT/9011/2018 ²⁸ 11/06/2018	Citatorio: 11 de junio de 2018. Cédula: 12 de junio de 2018. Plazo: 13 al 20 de junio de 2018.	Escrito signado por el representante propietario de <i>Nueva Alianza</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 19 de junio de 2018 ²⁹

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jorge Alberto Ulises Ayala Pérez INE-UT/4943/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	No da respuesta
2	Cesar Eloy Peralta López INE-UT/4944/2018	Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	Escrito recibido el 03 de agosto de 2018, mediante el cual indica que la firma plasmada en la cédula de afiliación.
3	María Fernanda Barragán Ramírez INE-UT/4945/2018	Cédula: 09 de mayo de 2018. Plazo: 10 al 16 de mayo de 2017.	No da respuesta
4	Víctor Noel Carrillo Pompa INE-UT/4946/2018	Cédula: 18 de mayo de 2018. Plazo: 21 al 25 de mayo de 2018.	No da respuesta
5	Deyanira Elizabeth Reynosa Soto INE-UT/4947/2018	Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	No da respuesta
6	Tania Evelin Contreras Barrientos INE-UT/4948/2018	Cédula: 01 de mayo de 2018. Plazo: 02 al 08 de mayo de 2018.	No da respuesta
7	Guillermo Cisneros Salazar INE-UT/4949/2018	Citatorio: 01 de mayo de 2018. Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	Escrito recibido el 07 de mayo 2018, mediante el que indica que no reconozco el formato de afiliación.
8	José Miguel Valles Rodríguez INE-UT/4950/2018	Citatorio: 01 de mayo de 2018. Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	Escrito recibido el 17 de mayo de 2018, mediante el cual presenta alegatos.

²⁷ Visible a páginas 360 a 364 del expediente.

²⁸ Visible a página 503 del expediente.

²⁹ Visible a página 530 a 533 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAUAP/JD03/BC/41/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
9	Tania Ortiz Vargas INE-UT/4951/2018	Citatorio: 02 de mayo de 2018. Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 al 10 de mayo de 2018.	No da respuesta
10	Luis Arturo Gaona López INE-UT/4952/2018	Citatorio: 03 de mayo de 2018. Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 al 11 de mayo de 2018.	No da respuesta
11	Carlos Fernando Valenzuela Neudert INE-UT/4953/2018	Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	No da respuesta
12	Martha Cecilia Ochoa Rendón INE-UT/4954/2018	Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	No da respuesta
13	Sergio Alberto Camou de la Cruz INE-UT/4955/2018	Cédula: 02 de mayo de 2018. Plazo: 03 al 09 de mayo de 2018.	No da respuesta
14	Felipe de Jesús Méndez Garduza INE-UT/4956/2018	Cédula: 03 de mayo de 2018. Plazo: 04 al 10 de mayo de 2017.	No da respuesta
15	Hernán de la Rosa Sánchez INE-UT/4957/2018	Citatorio: 03 de mayo de 2018. Cédula: 04 de mayo de 2018. Plazo: 07 de 11 de mayo de 2018.	No da respuesta

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VII. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político

denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,³⁰ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido *Nueva Alianza*, incluyendo a la ciudadana Vannelly Ivette Pérez Rodríguez.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la *Constitución*, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos

³⁰ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional *Nueva Alianza* para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que *Nueva Alianza* pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,³¹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

³¹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10°), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8°. (I Región) 1 K (10°), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos Jorge Alberto Ulises Ayala Pérez, Cesar Eloy Peralta López, María Fernanda Barragán Ramírez, Víctor Noel Carrillo Pompa, Deyanira Elizabeth Reynosa Soto, Tania Evelin Contreras Barrientos, Guillermo Cisneros Salazar, José Miguel Valles Rodríguez, Tania Ortiz Vargas, Luis Arturo Gaona López, Carlos Fernando Valenzuela Neudert, Martha Cecilia Ochoa Rendón, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Felipe de Jesús Méndez Garduza y Hernán de la Rosa Sánchez, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político *Nueva Alianza*, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos Jorge Alberto Ulises Ayala Pérez, Cesar Eloy Peralta López, María Fernanda Barragán Ramírez, Víctor Noel Carrillo Pompa, Deyanira Elizabeth Reynosa Soto, Tania Evelin Contreras Barrientos, Guillermo Cisneros Salazar, José Miguel Valles Rodríguez, Tania Ortiz Vargas, Luis Arturo Gaona López, Carlos Fernando Valenzuela Neudert, Martha Cecilia Ochoa Rendón, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Felipe de Jesús Méndez Garduza, Hernán de la Rosa Sánchez y Vannelly Ivette Pérez Rodríguez.

En términos de ley al otrora partido político *Nueva Alianza*; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1453/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

DENUNCIANTES: CÉSAR DAVID SALDÍVAR
MELENDREZ Y OTROS

NCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>NA o Nueva Alianza</i>	Partido Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>INAI</i>	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

A N T E C E D E N T E S

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.¹ El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018.

En el citado acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de César David Saldivar Melendrez, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, Umbelina Mena López, Jesús Roberto Gómez López, Jesús Roberto

¹ Visible a fojas 115 a 125 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

Herrera Avena, Iván Martínez Castro, René Sánchez Prado, Minerva Reyes Lizarraga, Sergio Armando Sarmiento Navarro, Oscar Eduardo Ramos Hernández, Itzel Estephania Mendoza Magallanes, Patricia Escageda Cruz, Dulce Guadalupe López Pichardo, Juan Antonio Bulnes Muñoz, Andrea Magaly Salgado Flores, Juan Carlos Rojas Ortiz y Narciso Gómez Balam y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 29 de marzo de 2018			
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
29/03/2018 ²	NA	INE-UT/3931/2018 ³	05/04/2018 Oficio RNA 112/2018 ⁴ y 16/04/2018 Escrito signado por la Delegada de Afiliación del Comité de Dirección Estatal en Sinaloa ⁵
	DEPPP	INE-UT/3932/2018 ⁶	04/04/2018 Correo institucional ⁷

También se tuvo por recibido el escrito de queja presentado por Armando Barrón Saucedo, no obstante, dicho escrito fue remitido en copia simple, por lo que, en el citado proveído se requirió al Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa, para que remitiera el escrito de queja original del citado ciudadano.

² Visible a fojas 115 a 125 del expediente.

³ Visible a foja 141 del expediente.

⁴ Visible a fojas 149 a 156 del expediente.

⁵ Visible a fojas 247 a 249 del expediente.

⁶ Visible a foja 140 del expediente.

⁷ Visible a fojas 144 a 146 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

Aunado a lo anterior, en el mismo proveído se tuvo por recibida la queja presentada por Nicolás López Leyva y se determinó reservar cualquier pronunciamiento respecto de la misma, toda vez que el ciudadano ya había presentado una queja por los mismos hechos denunciados, la cual había sido resuelta por el Consejo General el veintiocho de febrero del año en curso y se encontraba *sub iudice*, toda vez que había sido impugnada ante la Sala Superior.

II. ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho⁸, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador referente a Armando Barrón Saucedo y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Acuerdo de 08 de mayo de 2018			
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
08/05/2018 ⁹	NA	INE-UT/6401/2018 ¹⁰	23/05/2018 Escrito signado por la Delegada de Afiliación del Comité de Dirección Estatal de Sinaloa ¹¹
	DEPPP	INE-UT/6402/2018 ¹²	10/05/2018 Correo institucional ¹³

III. EMPLAZAMIENTO.¹⁴ El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar a *NA*, a través de su representante propietario ante el *Consejo General* de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto

⁸ Visible a fojas 283 a 295 del expediente.

⁹ Visible a fojas 283 a 295 del expediente.

¹⁰ Visible a foja 306 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 325 a 327 del expediente.

¹² Visible a foja 305 del expediente.

¹³ Visible a fojas 309 a 311 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 334 a 350 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes acuerdo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
NA INE-UT/11994/2018 ¹⁵	Citatorio: ¹⁶ 30 de julio de 2018. Cédula: ¹⁷ 31 de julio de 2018. Plazo: 01 al 07 de agosto de 2018.	Escritos de 07/08/2018 ¹⁸ y 09/08/2018 ¹⁹ , respectivamente, signados por el representante propietario de NA ante el Consejo General de este Instituto.

Adicionalmente, en dicho acuerdo se determinó remitir documentación relacionada con Juan Antonio Bulnes Muñoz al *INAI*.

Dicho acuerdo fue notificado conforme a lo siguiente:

Fecha de acuerdo	Sujeto a notificar	Oficio	Fecha de Respuesta
26/07/2018 ²⁰	INAI	INE-UT/11995/2018 ²¹	Oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/305/ 18 09/08/2018 ²²

IV. REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL INAI²³. Mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/305/2018, signado por el Director General de Evaluación, Investigación y Verificación del sector público del INAI, solicitó a esta autoridad diversa documentación relacionada con Juan Antonio Bulnes Muñoz. Por lo que, a través de acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó remitir copia certificada de la documentación solicitada.

Dicho acuerdo fue notificado conforme a lo siguiente:

¹⁵ Visible a foja 374 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 375 a 387 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 388 a 389 del expediente.

¹⁸ Visible a foja 406 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 413 a 416 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 334 a 350 del expediente.

²¹ Visible a foja 392 del expediente.

²² Visible a foja 412 del expediente.

²³ Visible a fojas 417 a 421 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto a notificar	Oficio	Fecha de Respuesta
16/08/2018	Director General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del INAI	INE-UT/12624/2018 ²⁴	Oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/384/ 2018 30/08/2018 ²⁵

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *NA*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *NA*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VII. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declaró la pérdida de registro del citado instituto político.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

²⁴ Visible a foja 425 del expediente.

²⁵ Visible a foja 430 del expediente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *NA*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA PRESENTADA POR NICOLAS LÓPEZ LEYVA.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

En el caso, este Consejo General considera que el presente asunto debe desecharse, respecto de Nicolás López Leyva, pues se advierte que se actualiza la

causal de improcedencia prevista en los artículos 466, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo segundo, fracción III) del Reglamento de Quejas, toda vez que, respecto de los hechos denunciados por el quejoso, ya existe una resolución definitiva.

En efecto, las disposiciones contenidas en los numerales antes referidos, señalan lo siguiente:

LGIPE

Artículo 466.

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

...

- c) Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal Electoral, y

Reglamento de Quejas

Artículo 46

Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario

...

2. La queja o denuncia será improcedente cuando:

...

- III. Por actos o hechos imputados a la misma persona, que hayan sido materia de otra queja o denuncia, cuya resolución sea definitiva.

En el caso que nos ocupa, Nicolás López Leyva presentó previamente escrito de queja en contra de NA, en el que denunció los mismos hechos que los referidos en el presente procedimiento, el cual fue sustanciado mediante el diverso

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, y resuelto el veintiocho de febrero del año en curso, por este Consejo General mediante resolución identificada con la clave INE/CG120/2018.

En dicho fallo, se determinó imponer a NA, una multa correspondiente a 515.83 (quinientos quince puntos ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.90 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 90/100 M.N.), por la indebida afiliación de Nicolás López Leyva.

Dicha resolución fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que fue radicada bajo la clave SUP-RAP-47/2018 y resuelta el veinticinco de abril del año en curso, en el sentido de confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Por lo anterior, y toda vez que, respecto de los hechos denunciados por el quejoso, ya existe una resolución definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 466, numeral 2, inciso b), de la *LGIFE* y 46, numeral 3, fracción II del *Reglamento de Quejas*, se declara el desechamiento del presente procedimiento sancionador ordinario, respecto de la queja presentada por Nicolás López Leyva.

TERCERO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIFE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIFE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante acuerdos de veintinueve de marzo y ocho de mayo, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *NA* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *NA* como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *NA* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *NA* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,²⁶ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*****

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los

²⁶ Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.

- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,²⁷ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMM*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se desecha la queja presentada por Nicolás López Leyva, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

²⁷ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CDSM/JD04/JAL/48/2018

SEGUNDO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por César David Saldívar Melendrez, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, Umbelina Mena López, Jesús Roberto Gómez López, Jesús Roberto Herrera Avena, Iván Martínez Castro, René Sánchez Prado, Minerva Reyes Lizarraga, Sergio Armando Sarmiento Navarro, Oscar Eduardo Ramos Hernández, Itzel Estephania Mendoza Magallanes, Patricia Escageda Cruz, Dulce Guadalupe López Pichardo, Juan Antonio Bulnes Muñoz, Andrea Magaly Salgado Flores, Juan Carlos Rojas Ortiz, Armando Barrón Saucedo y Narciso Gómez Balam, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta resolución.

TERCERO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

CUARTO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Tercero de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Nicolás López Leyva, César David Saldívar Melendrez, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, Umbelina Mena López, Jesús Roberto Gómez López, Jesús Roberto Herrera Avena, Iván Martínez Castro, René Sánchez Prado, Minerva Reyes Lizarraga, Sergio Armando Sarmiento Navarro, Oscar Eduardo Ramos Hernández, Itzel Estephania Mendoza Magallanes, Patricia Escageda Cruz, Dulce Guadalupe López Pichardo, Juan Antonio Bulnes Muñoz, Andrea Magaly Salgado Flores, Juan Carlos Rojas Ortiz, Armando Barrón Saucedo y Narciso Gómez Balam

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1454/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

DENUNCIANTE: BRIANDA AMAIRANI
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018 APERTURADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE ESTA AUTORIDAD ELECTORAL A TRAVÉS DE OFICIOS SIGNADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO EN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A TRAVÉS DE LOS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS, ASPIRANTES AL CARGO DE SUPERVISORES ELECTORALES Y/O CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES, QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Comisión:</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Nueva Alianza:	Partido Nueva Alianza
Quejosos o denunciantes:	Brianda Amairani Hernández Rodríguez, José Trinidad Bermea Wong, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Víctor Efrén Durazo Mayboca y Charito Yuridia Paz de León.
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

A N T E C E D E N T E S:

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de nueve de mayo del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018** como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto a los ciudadanos siguientes:

No.	Nombre del quejoso
1	Brianda Amairani Hernández Rodríguez
2	José Trinidad Bermea Wong
3	Sergio Alberto Camou de la Cruz
4	Víctor Efrén Durazo Mayboca
5	Charito Yuridia Paz de León

Asimismo, se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

Asimismo, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados de Nueva Alianza, así como al citado instituto político, para que proporcionara información respecto de las afiliaciones detectadas.

¹ Visible en las páginas 32 a 39 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

II. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Toda vez que había transcurrido el plazo otorgado a *Nueva Alianza* para cumplir el requerimiento de información señalado en el punto anterior, sin que eso ocurriera, el cinco de junio del año en curso², se ordenó requerir nuevamente al citado partido político para que proporcionara información acerca de dos afiliaciones detectadas

III. VISTA A LOS QUEJOSOS. Toda vez que la DEPPP contestó que los referidos Ciudadanos se encontraron dentro del padrón de afiliados del partido político, y Nueva Alianza aportó constancias en copia simple respecto de dos quejosos, mediante Acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho³, se ordenó poner a la Vista de los ciudadanos las referidas documentales, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

IV. EMPLAZAMIENTO. El veinticuatro de agosto del año en curso,⁴ se ordenó el emplazamiento a Nueva Alianza, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia certificada de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/12746/2018 ⁵	Nueva Alianza	veintiocho de agosto de dos mil dieciocho	Cuatro de septiembre de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>En relación a Víctor Efrén Durazo Mayboca, precisó que se acredita la debida afiliación al haber presentado copia simple formato de afiliación.</p> <p>Asimismo menciona que a solicitado información a los Comités de las Entidades Federativas involucradas sin obtener respuesta.</p>

² Visible en las páginas 85 a 88 del expediente

³ Visible en las páginas 95 a 98 del expediente

⁴ Acuerdo visible en fojas de la 134 a 142 del expediente.

⁵ Visible en fojas de la 145 a 153 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VII. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INE. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. *Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:*

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de nueve de mayo y once de junio, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,⁶ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

⁶ Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/BAHR/JD07/SIN/118/2018

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,⁷ se precisa que

⁷ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10°), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL**

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Brianda Amairani Hernández Rodríguez, José Trinidad Bermea Wong, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Víctor Efrén Durazo Mayboca y Charito Yuridia Paz de León, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Brianda Amairani Hernández Rodríguez, José Trinidad Bermea Wong, Sergio Alberto Camou de la Cruz, Víctor Efrén Durazo Mayboca y Charito Yuridia Paz de León.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8°. (I Región) 1 K (10°.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

INE/CG1455/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018
DENUNCIANTE: RICARDO QUIROZ ÁLVAREZ Y
OTROS CIUDADANOS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018 APERTURADO CON MOTIVO DE LOS OFICIOS REMITIDOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO POR LA VOCAL SECRETARIA DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN CHIAPAS, A TRAVÉS DE LOS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS, QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018

COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Nueva Alianza:	Partido Nueva Alianza
Quejosos o denunciantes:	Ricardo Quiroz Álvarez, Norma Cruz Álvarez Law, Cecilia Serrano Moreno, Blanca Patricia Martínez Gómez, José Luis Morales Pérez y María del Socorro Cárdenas Núñez.
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

ANTECEDENTES

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de nueve de mayo del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto de los ciudadanos siguientes:

No.	Nombre del quejoso
1	Ricardo Quiroz Álvarez
2	Norma Cruz Álvarez Law
3	Cecilia Serrano Moreno
4	Blanca Patricia Martínez Gómez
5	José Luis Morales Pérez

Asimismo, se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

Por otro lado, se previno a la ciudadana María del Socorro Cárdenas Núñez a efecto de que presentara copia de su credencial para votar con fotografía, a efecto de admitir su queja en el presente procedimiento.

Asimismo, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados de *Nueva Alianza*, así como al citado instituto político, para que proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas.

¹ Visible en las páginas 26 a 34 del expediente.

II. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Toda vez que había transcurrido el plazo otorgado a *Nueva Alianza* para cumplir el requerimiento de información señalado en el punto anterior, sin que eso ocurriera, el treinta de mayo del año en curso, se ordenó requerir nuevamente al citado partido político para que proporcionara información acerca de las afiliaciones detectadas.

III. DESAHOGO DE PREVENCIÓN, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El once de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogada la prevención realizada a la ciudadana María del Socorro Cárdenas Núñez; asimismo, se admitió a trámite el presente procedimiento de sanción respecto a la citada ciudadana y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento.

Finalmente, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si María del Socorro Cárdenas Núñez, se encontraba registrada dentro del Padrón de Afiliados de *Nueva Alianza*, así como al citado instituto político, para que proporcionaran información respecto de la afiliación detectada.

IV. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. El veintiséis de junio del año en curso, toda vez que había transcurrido el plazo otorgado a *Nueva Alianza* para cumplir el requerimiento de información señalado en el punto anterior, sin que eso ocurriera, se ordenó requerir nuevamente al citado partido político para que proporcionara información acerca de la afiliación en el padrón de militantes del citado partido político respecto de María del Socorro Cárdenas Núñez.

V. EMPLAZAMIENTO. El seis de julio de dos mil dieciocho,² se ordenó el emplazamiento a *Nueva Alianza*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

² Acuerdo visible en las páginas 145 a la 152 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/11296/2018 ³	<i>Nueva Alianza</i>	Diez de julio de dos mil dieciocho	Diecisiete de julio de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>En relación a Ricardo Quiroz Álvarez, precisó que existe imposibilidad de entregar el formato de afiliación, pues en el momento en que se realizó la misma no existía la obligación para el partido político de contar con ese documento; no obstante, señala que al día de hoy el ciudadano en mención se encuentra desafiado, para lo cual anexa copia simple del escrito signado por la Delegada Estatal de Afiliación y por la Presidenta del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza en el estado de Guerrero.</p> <p>Por lo que respecta a las ciudadanas Cecilia Serrano Moreno y Norma Cruz Álvarez Law, aportó copia simple las constancias de afiliación respectivas.</p>

VI. ALEGATOS Y VISTA A LAS QUEJOSAS. Mediante acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En el mismo proveído se ordenó dar vista a las quejosas Cecilia Serrano Moreno y Norma Cruz Álvarez Law, con copia simple del formato de afiliación que aportó el partido político denunciado a efecto de que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación de esa determinación manifestaran lo que a su derecho conviniera.

³ Visible en la página 154 a 167 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/11872/2018 ⁴	Nueva Alianza	Veintiséis de julio de dos mil dieciocho	Dos de agosto de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>En relación a Ricardo Quiroz Álvarez, precisó que existe imposibilidad de entregar el formato de afiliación, pues en el momento en que se realizó la misma no existía la obligación para el partido político de contar con ese documento, no obstante, señala que al día de hoy el ciudadano se encuentra desafiliado, para lo cual anexa copia simple del escrito signado por la Delegada Estatal de Afiliación y por la Presidenta del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza en el estado de Guerrero.</p> <p>Por lo que respecta a las ciudadanas Cecilia Serrano Moreno y Norma Cruz Álvarez Law, aportó copia simple de las constancias de afiliación respectivas y solicitó que las mismas sean valoradas al momento de dictarse la resolución.</p>
INE//BC/JLE/VS/2230/2018 ⁵	Norma Cruz Álvarez Law	Veintiséis de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE//BC/JLE/VS/2230/2018 ⁶	Cecilia Serrano moreno	Veintiséis de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE//BC/JLE/VS/2230/2018 ⁷	Blanca Patricia Martínez Gómez	Veinticinco de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA

⁴ Visible en las páginas 185 a la 196 del expediente.

⁵ Visible en las páginas 200 a la 207 del expediente.

⁶ Visible en las páginas 208 a la 216 del expediente

⁷ Visible en las páginas 217 a la 222 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/RQA/CG/127/2018

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE//BC/JLE/VS/2230/2018 ⁸	María del Socorro Cárdenas Núñez	Veinticinco de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/05JD/VE/0491/2018 ⁹	José Luis Morales Pérez	Veintiséis de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/JLE/VS/0668/2018 ¹⁰	Ricardo Quiroz Álvarez	Veintisiete de julio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA

VII. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VIII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

IX. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

X. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

XI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INE. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada los días trece y catorce de diciembre

⁸ Visible en las páginas 223 a la 228 del expediente

⁹ Visible en las páginas 231 a la 241 del expediente

¹⁰ Visible en las páginas 243 a la 251 del expediente

de dos mil dieciocho, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante acuerdos de nueve de mayo y once de junio, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL*

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹¹ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. *Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

¹¹ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹² se precisa que

¹² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8°. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA**

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Ricardo Quiroz Álvarez, Norma Cruz Álvarez Law, Cecilia Serrano Moreno, Blanca Patricia Martínez Gómez, José Luis Morales Pérez y María del Socorro Cárdenas Núñez, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Ricardo Quiroz Álvarez, Norma Cruz Álvarez Law, Cecilia Serrano Moreno, Blanca Patricia Martínez Gómez, José Luis Morales Pérez y María del Socorro Cárdenas Núñez.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1456/2018

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE:**

UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018

DENUNCIANTE: ANA KAREN CAMPOS PEÑA Y
OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018 INICIADO CON MOTIVO DE LOS OFICIOS REMITIDOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO POR LA VOCAL SECRETARIA DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN CHIAPAS, A TRAVÉS DE LOS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE DISTINTOS CIUDADANOS EN EL PADRÓN DE MILITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018

Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Nueva Alianza:	Partido Nueva Alianza
Quejosos o denunciantes:	Ana Karen Campos Peña, José Alfredo Ruíz Contreras, Flor Argentina Trejo Ochoa, Miriam Bigurra Prom, Elisa Flores Martínez, Yuridia Saavedra Aguilar, Olivia Chávez Martínez, Saúl Octavio Jiménez Sánchez, Dulce Marisela Pérez Castañeda, Bianca Deisi Torres Rivera, Juan Jesús Silva Zapata, Manuel Acosta Osuna, Enedina Avelino López, Martina Corrales Villalobos, María del Carmen Tristan Rivas, Erick Hernández Carreón, Dulce Rocío Cañez Sifuentes, Christian Manuel Bovadilla Ortega, Martha Alicia Rentería Reynoso, Rocío Sierra Arredondo, Juan Uriel Muro Salinas y Mayra Geraldine Moya Medina.
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

<i>UTCE o Unidad Técnica:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE
--------------------------------------	---

A N T E C E D E N T E S

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales de los quejosos para ese fin, admitiéndose el asunto por todos ellos.

Asimismo, se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se concluyera con las diligencias de investigación ordenadas en dicho proveído, consistentes en requerimientos de información, a la *DEPPP* y al denunciado, a efecto de que informaran si los quejosos se encontraban inscritos en el padrón de afiliados de *Nueva Alianza*.

II. CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. Mediante correos electrónicos recibidos desde la cuenta institucional del titular de la *DEPPP*, el Director Ejecutivo remitió la información solicitada por la Unidad Técnica.

Del mismo modo, mediante escrito signado por el representante del otrora partido político nacional, dio cumplimiento parcial al requerimiento de información formulado por la *UTCE* y solicitó una prórroga para cumplimentar en sus términos el proveído citado en el punto que antecede.

III. VISTA. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, la Unidad Técnica tuvo por presentado al Titular de la *DEPPP*, dando cumplimiento al

¹ Visible a foja 136 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018

requerimiento de información que le fue formulado y concedió al partido denunciado la prórroga que solicitó para entregar la totalidad de la información que le fue requerida.

Asimismo, ordenó dar vista a **Rocio Sierra Arrendondo**, con la copia simple del **formato de solicitud de afiliación**, aportado por el partido político denunciado, para que, en el improrrogable plazo de tres días, manifestara lo que su derecho conviniera, respecto de la documental referida.

VII. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

IV. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Por proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica requirió a la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, para que informara si Rocio Sierra Arredondo había presentado algún escrito haciendo manifestaciones respecto de la vista referida con antelación y, en caso afirmativo, remitiera a la brevedad el original de dicho escrito.

Al respecto, cabe señalar que el órgano subdelegacional referido, en su oportunidad, informó no haber recibido escrito alguno de contestación por parte de la quejosa mencionada.

VIII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

IX. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declaró la pérdida de registro del citado instituto político.

XI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

XI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano superior de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- *Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.*

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-384/2018, confirmando la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es incuestionable que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior, es inconcuso que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro, se cumple a cabalidad, configurando el extremo respectivo de la hipótesis legal en estudio.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AKCP/JD05/SIN/133/2018

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

De igual manera, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento, determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, así como los derechos y prerrogativas con que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos los derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de las obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inobjetable que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento; es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95,

párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A idéntica conclusión arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015, derivado de la cancelación de su registro al otrora partido político nacional denominado Partido Humanista.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

*5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada, por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que **resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.**

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la *Constitución*, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1, párrafo 3, de la Ley Fundamental.

² Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido por el artículo 17 de la *Constitución*,³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Ana Karen Campos Peña, José Alfredo Ruíz Contreras, Flor Argentina Trejo Ochoa, Miriam Bigurra Prom, Elisa Flores Martínez, Yuridia Saavedra Aguilar, Olivia Chávez Martínez, Saúl Octavio Jiménez Sánchez, Dulce Marisela Pérez Castañeda, Bianca Deisi Torres Rivera, Juan Jesús Silva Zapata, Manuel Acosta Osuna, Enedina Avelino López, Martina Corrales Villalobos, María del Carmen Tristan Rivas, Erick Hernández Carreón, Dulce Rocío Cañez Sifuentes, Christian Manuel Bovadilla Ortega, Martha Alicia Rentería Reynoso, Rocío Sierra Arredondo, Juan Uriel Muro Salinas y Mayra Geraldine Moya Medina, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Ana Karen Campos Peña, José Alfredo Ruíz Contreras, Flor Argentina Trejo Ochoa, Miriam Bigurra Prom, Elisa Flores Martínez, Yuridia Saavedra Aguilar, Olivia Chávez Martínez, Saúl Octavio Jiménez Sánchez, Dulce Marisela Pérez Castañeda, Bianca Deisi Torres Rivera, Juan Jesús Silva Zapata, Manuel Acosta Osuna, Enedina Avelino López, Martina Corrales Villalobos, María del Carmen Tristan Rivas, Erick Hernández Carreón, Dulce Rocío Cañez Sifuentes, Christian Manuel Bovadilla Ortega, Martha Alicia Rentería Reynoso, Rocío Sierra Arredondo, Juan Uriel Muro Salinas y Mayra Geraldine Moya Medina; **en términos de ley** al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales electorales; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1457/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018
DENUNCIANTES: DIANA YESENIA VEGAS
HERNÁNDEZ Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
Nueva Alianza	Partido Nueva Alianza
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

1. Denuncias. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron treinta y cuatro escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida a *Nueva Alianza* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

No.	Nombre del quejoso	Fecha de presentación
1	Diana Yesenia Vegas Hernández	11/mayo/2018 ¹
2	Josefina Mata	15/mayo/2018 ²

¹ Visible a foja 03 del expediente.

² Visible a foja 09 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

No.	Nombre del quejoso	Fecha de presentación
3	Jidde Mariela Ortega Castro	15/mayo/2018 ³
4	José Luis Morales Chávez	17/mayo/2018 ⁴
5	Zaira Lucía García Hidalgo	14/mayo/2018 ⁵
6	Anselmo Hernández Bautista	15/mayo/2018 ⁶
7	Deniz Jorge Torres Hernández	11/mayo/2018 ⁷
8	Jesús Carlos Cota	03/mayo/2018 ⁸
9	Francisco Santisteban Montañó	03/mayo/2018 ⁹
10	Erika Judith Vizcarra Amezcuita	11/mayo/2018 ¹⁰
11	Gabriel Cruz Méndez	11/mayo/2018 ¹¹
12	Luz Elena Hernández Robles	18/mayo/2018 ¹²
13	Nicolás Bonilla Márquez	10/mayo/2018 ¹³
No.	Nombre del quejoso	Fecha de presentación
14	Maribel Rico Ortiz	11/mayo/2018 ¹⁴
15	Jonathan García Montiel	30/mayo/2018 ¹⁵
16	María Virginia López Álvarez	30/mayo/2018 ¹⁶
17	Julio César Bruno Velasco	11/mayo/2018 ¹⁷
18	José Luis Molina Leal	22/mayo/2018 ¹⁸
19	Brenda Azucena Rendón Ríos	18/mayo/2018 ¹⁹
20	Oscar Ramón López Torres	22/mayo/2018 ²⁰
21	Carlos Manuel Hernández Blanco	22/mayo/2018 ²¹
22	Kithzia Saely Rivera Esparza	22/mayo/2018 ²²
23	Yesmin Ramona Mokay Espinoza	24/mayo/2018 ²³
24	Irvin Esteban Guerrero Martínez	24/mayo/2018 ²⁴
25	Andric Joseph Laurido Pablo	28/mayo/2018 ²⁵

³ Visible a foja 15 del expediente.

⁴ Visible a foja 21 del expediente.

⁵ Visible a fojas 28 y 29 del expediente.

⁶ Visible a foja 37 del expediente.

⁷ Visible a foja 45 del expediente.

⁸ Visible a foja 58 del expediente.

⁹ Visible a foja 63 del expediente.

¹⁰ Visible a foja 67 del expediente.

¹¹ Visible a foja 73 del expediente.

¹² Visible a foja 79 del expediente.

¹³ Visible a foja 85 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 96 del expediente.

¹⁵ Visible a foja 224 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 225 del expediente.

¹⁷ Visible a foja 113 del expediente.

¹⁸ Visible a foja 120 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 126 del expediente.

²⁰ Visible a foja 130 del expediente.

²¹ Visible a foja 136 del expediente.

²² Visible a fojas 695 a 696 del expediente.

²³ Visible a foja 151 del expediente.

²⁴ Visible a foja 157 del expediente.

²⁵ Visible a foja 165 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

No.	Nombre del quejoso	Fecha de presentación
26	María Amparo Gómez Salas	29/mayo/2018 ²⁶
27	Teresa Torres Martínez	29/mayo/2018 ²⁷
28	María Luisa García Zacarías	29/mayo/2018 ²⁸
29	Yoana Vanessa Martínez Lozano	10/mayo/2018 ²⁹
30	Joel Amir Herrerías Torres	16/mayo/2018 ³⁰
31	José Pablo Velarde Serrano	29/mayo/2018 ³¹
32	Julieta Montenegro Duran	29/mayo/2018 ³²
33	María Patricia Janin Liceaga Santiago	30/mayo/2018 ³³
34	Rosa Gloria Mendoza García	30/mayo/2018 ³⁴

2. Registro, admisión, y reserva de emplazamiento. Mediante proveído de once de junio de dos mil dieciocho³⁵, se tuvieron por recibidas las denuncias, quedando registradas como un solo procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave **UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018**.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

3. Diligencias de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir, en distintos momentos, a los sujetos que se indican a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio- Fecha de notificación	Oficio- Fecha de respuesta
11/06/2018 ³⁶	Nueva Alianza	INE-UT/9224/2018 ³⁷ 12 de junio de 2018	Oficio RNA 222/2018 ³⁸ 15 de junio de 2018

²⁶ Visible a foja 171 del expediente.

²⁷ Visible a foja 177 y 178 del expediente.

²⁸ Visible a foja 185 del expediente.

²⁹ Visible a foja 188 del expediente.

³⁰ Visible a foja 193 del expediente.

³¹ Visible a fojas 198 a 199 del expediente.

³² Visible a foja 205 del expediente.

³³ Visible a foja 211 del expediente.

³⁴ Visible a foja 217 del expediente.

³⁵ Visible a fojas 226 a 235 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 226 a 235 del expediente.

³⁷ Visible a foja 240 del expediente.

³⁸ Visible a fojas 289 a 311 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio- Fecha de notificación	Oficio- Fecha de respuesta
			Oficio RNA 234/2018 ³⁹ 20 de junio de 2018 Escrito ⁴⁰ signado por la Delegada de afiliación del Comité de Dirección Estatal en Sinaloa 21 de junio de 2018
	DEPPP	INE-UT/9231/2018 ⁴¹ 12 de junio de 2018	Correo institucional ⁴² 14 de junio de 2018
18/07/2018 ⁴³	Nueva Alianza	INE-UT/11776/2018 ⁴⁴ 19 de julio de 2018	Escrito ⁴⁵ signado por el representante propietario ante el Consejo General de este Instituto 24 de julio de 2018
Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
10/08/2018 ⁴⁶	Nueva Alianza	INE-UT/12563/2018 ⁴⁷ 13 de agosto de 2018	Escrito ⁴⁸ signado por el representante propietario ante el Consejo General de este Instituto 16 de agosto de 2018
27/08/2018 ⁴⁹	Nueva Alianza	INE-UT/12802/2018 ⁵⁰ 28 de agosto de 2018	Escrito ⁵¹ signado por el representante propietario ante el Consejo General de este Instituto 31 de agosto de 2018

4. Resolución INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

³⁹ Visible a fojas 338 a 369 del expediente.

⁴⁰ Visible a fojas 370 a 405 del expediente.

⁴¹ Visible a foja 236 del expediente.

⁴² Visible a fojas 286 a 288 del expediente.

⁴³ Visible a fojas 653 a 660 del expediente.

⁴⁴ Visible a foja 666 del expediente.

⁴⁵ Visible a foja 675 del expediente.

⁴⁶ Visible a fojas 707 a 713 del expediente.

⁴⁷ Visible a foja 721 del expediente.

⁴⁸ Visible a fojas 753 a 770 del expediente.

⁴⁹ Visible a fojas 785 a 790 del expediente.

⁵⁰ Visible a foja 800 del expediente.

⁵¹ Visible a fojas 805 a 810 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

5. Recurso de apelación SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

6. Perdida de registro del Partido Nueva Alianza. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la perdida de registro del citado instituto político.

7. Elaboración de Proyecto. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

8. Sesión de la Comisión de Quejas. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Benito Nacif Hernández, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que las quejas o denuncias se hayan admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la quejas o denuncias hayan sido admitidas, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que las quejas o denuncias se hayan admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO. - Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la *Ley de Partidos* y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,⁵² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

⁵² Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciados no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,⁵³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Diana Yesenia Vegas Hernández, Josefina Mata, Jidde Mariela Ortega Castro, José Luis Morales Chávez, Zaira Lucía García Hidalgo, Anselmo Hernández Bautista, Deniz Jorge Torres Hernández, Jesús Carlos Cota, Francisco Santisteban Montaña, Erika Judith Vizcarra Amezcua, Gabriel Cruz Méndez, Luz Elena Hernández Robles, Nicolás Bonilla Márquez, Maribel Rico Ortiz, Jonathan García Montiel, María Virginia López Álvarez, Julio César Bruno Velasco, José Luis Molina Leal, Brenda Azucena Rendón

⁵³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DYVH/JD03/COAH/150/2018

Ríos, Oscar Ramón López Torres, Carlos Manuel Hernández Blanco, Kithzia Saely Rivera Esparza, Yesmin Ramona Mokay Espinoza, Irvin Esteban Guerrero Martínez, Andric Joseph Laurido Pablo, María Amparo Gómez Salas, Teresa Torres Martínez, María Luisa García Zacarías, Yoana Vanessa Martínez Lozano, Joel Amir Herrerías Torres, José Pablo Velarde Serrano, Julieta Montenegro Duran, María Patricia Janin Liceaga Santiago y Rosa Gloria Mendoza García, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Diana Yesenia Vegas Hernández, Josefina Mata, Jidde Mariela Ortega Castro, José Luis Morales Chávez, Zaira Lucía García Hidalgo, Anselmo Hernández Bautista, Deniz Jorge Torres Hernández, Jesús Carlos Cota, Francisco Santisteban Montaña, Erika Judith Vizcarra Amezcuita, Gabriel Cruz Méndez, Luz Elena Hernández Robles, Nicolás Bonilla Márquez, Maribel Rico Ortiz, Jonathan García Montiel, María Virginia López Álvarez, Julio César Bruno Velasco, José Luis Molina Leal, Brenda Azucena Rendón Ríos, Oscar Ramón López Torres, Carlos Manuel Hernández Blanco, Kithzia Saely Rivera Esparza, Yesmin Ramona Mokay Espinoza, Irvin Esteban Guerrero Martínez, Andric Joseph Laurido Pablo, María Amparo Gómez Salas, Teresa Torres Martínez, María Luisa García Zacarías, Yoana Vanessa Martínez Lozano, Joel Amir Herrerías Torres, José Pablo Velarde Serrano, Julieta Montenegro Duran, María Patricia Janin Liceaga Santiago y Rosa Gloria Mendoza García.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1458/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018
DENUNCIANTE: PEDRO URBINA PRIETO
DENUNCIADO: NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018, INICIADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR PEDRO URBINA PRIETO, A TRAVÉS DEL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE DICHO CIUDADANO COMO REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL CONSEJO LOCAL DE ESTE INSTITUTO EN CHIHUAHUA Y MILITANTE DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, EN AMBOS CASOS, SIN SU CONSENTIMIENTO

G L O S A R I O

COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018

Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIFE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Nueva Alianza:	Partido político Nueva Alianza
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de once de junio del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la supuesta indebida afiliación; el presunto registro como representante suplente ante el Consejo Local del *INE* en Chihuahua y el consecuente uso de sus datos personales, por parte de *Nueva Alianza*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto de la presunta afiliación indebida y uso indebido de datos Pedro Urbina Prieto con tal fin.

Por otro lado, se previno al denunciante a efecto de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que ocurrió el registro como *Suplente de Representante Legal Estatal* de *Nueva Alianza*, denunciado.

Asimismo, se ordenó requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a efecto de que informara si dicho ciudadano se encontró registrado dentro del Padrón de Afiliados de *Nueva Alianza*, así como al citado instituto político, para que proporcionara información respecto de la afiliación detectada.

De igual forma, se reservó lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

II. DESAHOGO DE PREVENCIÓN, PRÓRROGA Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.² El once de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a Pedro Urbina Prieto, desahogando el requerimiento de información que le fue formulado a través del proveído de once de julio del mismo año, al tiempo que se concedió prórroga a *Nueva Alianza*, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el mismo acuerdo.

¹ Visible en las páginas 7 a 13 del expediente.

² Visible en las páginas 40 a 44 del expediente.

Además, se requirió al Presidente del Consejo Local del *INE* en Chihuahua, para que precisará si, el denunciante fue registrado como representante de *Nueva Alianza* ante dicho Consejo.

III. AMONESTACIÓN PÚBLICA Y NUEVO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.³ El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al Presidente del Consejo Local de este Instituto en Chihuahua, desahogando el requerimiento de información que le fue formulado.

En el mismo acuerdo se hizo efectivo el apercibimiento decretado a *Nueva Alianza* en el proveído de once de julio del mismo año, amonestándosele públicamente, al tiempo que se le requirió nuevamente la misma información.

IV. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al denunciado para que proporcionara diversa información relacionada con el nombramiento de Pedro Urbina Prieto como representante de dicho instituto político ante el órgano delegacional del *INE* en Chihuahua.

Mediante escrito recibido el seis de septiembre de dos mil dieciocho, el representante propietario de *Nueva Alianza* ante el *Consejo General*, dio respuesta a dicho requerimiento.

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018.⁴ En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de

³ Visible en las páginas 56 a 59 del expediente.

⁴ Visible en la página de internet

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98354/CGex201809-12-dp-11.pdf>

impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VII. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la *Comisión*, celebrada los días trece y catorce de diciembre dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38,

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 23, párrafo primero, inciso j) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación, el posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrar a quienes lo representen ante este Instituto y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio del ciudadano que ha sido señalado a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que se actualizan causales de **desechamiento y sobreseimiento**, de conformidad con lo siguiente:

a) Desechamiento

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 46, párrafo 1, fracción I, del *Reglamento de Quejas*, que establece:

1. *La queja o denuncia será desechada de plano, cuando:*

I. El denunciado sea un partido político agrupación política que, con anterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, respecto de éstos...

...

Como se advierte, la actualización del desechamiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia no se haya admitido.

En el escrito de denuncia presentado por Pedro Urbina Prieto, señaló que *Nueva Alianza*, entre otros motivos de inconformidad, lo registró como **representante legal suplente** de éste ante Consejo Local del *INE* en Chihuahua, lo cual constituye un abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrar a quienes lo representen ante este Instituto, para lo cual presuntamente se **usaron indebidamente sus datos personales**.

Sin embargo, toda vez que en principio no se contaban con elementos suficiente para determinar la admisión del presente procedimiento por lo que hace al **registro** del denunciante como **representante suplente** del instituto político denunciado ante el órgano delegacional de este Instituto en Chihuahua, se reservó su admisión en lo tocante a dicha conducta, hasta en tanto se contaran con elementos suficientes para decretar su admisión.

Siendo el caso, no se emitió el acuerdo de admisión en relación a dicha falta, con lo que se actualiza el primer requisito de procedencia para determinar el desechamiento.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con anterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Al respecto, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional, ha quedado **firme**.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, párrafo 1, fracción I, del *Reglamento de Quejas*, se declara el **desechamiento** del presente procedimiento sancionador ordinario en relación a la conducta previamente precisada.

b) Sobreseimiento

Su fundamento se encuentra establecido en el artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

En el escrito de denuncia presentado por Pedro Urbina Prieto, señaló que *Nueva Alianza*, lo registró como **militante**, para lo cual usaron indebidamente sus datos personales

Mediante acuerdo de **once de junio de dos mil dieciocho**, se admitió a trámite la denuncia, por lo que hace al presunto **registro como militante y uso de datos personales del denunciante** con tal fin, en contra de *Nueva Alianza*.

En ese sentido, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Tal y como ha quedado precisado, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG1301/2018, en el que se aprobó el dictamen relativo a la pérdida del registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional.

Dicha resolución que confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-384/2018.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional, ha quedado firme.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/PUP/JD06/CHIH/158/2018

Así, se declara el **sobreseimiento** del presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que hace las conductas descritas en el presente apartado, de conformidad con lo previsto en los artículos 466, numeral 2, inciso b), de la *LGIPE* y 46, numeral 3, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en la denuncia interpuesta por Pedro Urbina Prieto quien, en esencia, alegaba la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se cómo ha quedado precisado, se actualizan las causales de desechamiento y sobreseimiento en el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafos 1, fracción I y 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,⁵ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*

⁵ Consultable en la liga electrónica <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada, por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que **resulta incuestionable la voluntad del quejoso a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.**

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la *Constitución*, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1, párrafo 3, de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que el denunciante no forme parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esa persona tampoco deberá ser considerada para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que el quejoso a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, forme parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de que se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,⁶ se precisa que

⁶ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN**

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **DESECHAMIENTO** del procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de *Nueva Alianza*, con motivo de las conductas descritas en el apartado a) del Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. Se declara el **SOBRESEIMIENTO** del procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de *Nueva Alianza*, con motivo de las conductas descritas en el apartado b) del Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

TERCERO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

CUARTO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Pedro Urbina Prieto; **en términos de ley** al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018

INE/CG1459/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018
DENUNCIANTES: LINDA PAOLA LÓPEZ
QUINTERO Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LINDA PAOLA LÓPEZ QUINTERO, LEYDI ELIZABETH RODRÍGUEZ MONTELONGO, RUBÍ ALEJANDRA IBÁÑEZ OCHOA, DOMINGO ANTONIO LUGO GARZA, JESSICA CLAUDINA HERNÁNDEZ CARRIÓN, BRENDA LIZET OROZCO GONZÁLEZ, KARELY LUCÍA ELIZALDE FÉLIX, ALEJANDRA CAROLINA ALCARAZ LUEVANOS, ADRIANA GARCÍA SEVERIANO, MÓNICA BERENICE ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, EDGAR SÁNCHEZ VALIENTE E IVETTE GARCÍA RUVALCABA, EN CONTRA DE NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
INE/Instituto	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
NA o Nueva Alianza	Partido Nueva Alianza
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron, en la UTCE, once escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible violación a su derecho de libertad de afiliación, atribuida a *NA* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA DE PRESENTACIÓN
1	Linda Paola López Quintero ¹	01/junio/2018
2	Leydi Elizabeth Rodríguez Montelongo ²	04/junio/2018
3	Rubí Alejandra Ibáñez Ochoa ³	04/junio/2018

¹ Visible a fojas 01 a 09 del expediente.

² Visible a fojas 10 a 14 del expediente.

³ Visible a fojas 15 a 21 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA DE PRESENTACIÓN
4	Domingo Antonio Lugo Garza ⁴	04/junio/2018
5	Jessica Claudina Hernández Carrión ⁵	04/junio/2018
6	Brenda Lizet Orozco González ⁶	06/junio/2018
7	Karely Lucía Elizalde Félix ⁷	11/junio/2018
8	Alejandra Carolina Alcaraz Luevanos ⁸	11/junio/2018
9	Adriana García Severiano ⁹	12/junio/2018
10	Mónica Berenice Enríquez Sánchez ¹⁰	13/junio/2018
11	Edgar Sánchez Valiente ¹¹	13/junio/2018

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.¹² Mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, la UTCE determinó integrar el expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018.

En dicho acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de Linda Paola López Quintero, Leydi Elizabeth Rodríguez Montelongo, Rubí Alejandra Ibáñez Ochoa, Domingo Antonio Lugo Garza, Jessica Claudina Hernández Carrión, Brenda Lizet Orozco González, Karely Lucía Elizalde Félix, Alejandra Carolina Alcaraz Luevanos, Adriana García Severiano, Mónica Berenice Enríquez Sánchez y Edgar Sánchez Valiente y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la realización de los siguientes requerimientos:

⁴ Visible a fojas 22 a 27 del expediente.
⁵ Visible a fojas 28 a 33 del expediente.
⁶ Visible a fojas 34 a 39 del expediente.
⁷ Visible a fojas 40 a 45 del expediente.
⁸ Visible a fojas 47 a 56 del expediente.
⁹ Visible a fojas 58 a 64 del expediente.
¹⁰ Visible a fojas 65 a 69 del expediente.
¹¹ Visible a fojas 70 a 76 del expediente.
¹² Visible a fojas 78 a 85 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
NA	INE-UT/10594/2018 ¹³	Escrito de 05/07/2018 ¹⁴ mediante el cual solicita prórroga. Escrito de 10/07/2018 ¹⁵ Escrito recibido el 17/07/2018 ¹⁶
DEPPP	INE-UT/10595/2018 ¹⁷	04/07/2018 Correo institucional ¹⁸

III. PRÓRROGA. En atención a lo solicitado, mediante proveído de once de julio del año en curso, se concedió la prórroga solicitada, acuerdo que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto requerido	Oficio
NA	INE-UT/11483/2018 ¹⁹

IV. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho²⁰, se tuvo por recibido el escrito de queja de Ivette García Ruvalcaba, se admitió a trámite y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En igual sentido con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la realización de los siguientes requerimientos:

¹³ Visible a foja 95 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 103 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 104 a 111 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 160 a 164 del expediente.

¹⁷ Visible a foja 98 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 100 a 102 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 118 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 185 a 192 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LPLQ/JD04/VER/171/2018

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
NA	INE-UT/12055/2018 ²¹	03/08/2018 Escrito ²²
DEPPP	INE-UT/11056/2018 ²³	31/07/2018 Correo institucional ²⁴

V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A efecto de contar con elementos suficientes para la integración del expediente en que se actúa, el veintisiete de agosto del año en curso, se ordenó requerir de nueva cuenta a NA.

Requerimiento que fue diligenciado conforme a lo siguiente:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
NA	INE-UT/12821/2018 ²⁵	03/08/2018 Escrito ²⁶

VI. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de NA, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, NA, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VIII. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declaró la pérdida de registro del citado instituto político.

²¹ Visible a foja 211 del expediente.

²² Visible a fojas 225 a 232 del expediente.

²³ Visible a foja 214 del expediente.

²⁴ Visible a fojas 215 a 216 del expediente.

²⁵ Visible a foja 260 del expediente.

²⁶ Visible a foja 264 del expediente.

IX. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por

parte de *NA*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de veintiocho de junio y veintiséis de julio, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el

primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que NA impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable,

es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de NA como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *NA* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *NA*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *NA* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,²⁷ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

²⁷ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,²⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

²⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Linda Paola López Quintero, Leydi Elizabeth Rodríguez Montelongo, Rubí Alejandra Ibáñez Ochoa, Domingo Antonio Lugo Garza, Jessica Claudina Hernández Carrión, Brenda Lizet Orozco González, Karely Lucía Elizalde Félix, Alejandra Carolina Alcaraz Luevanos, Adriana García Severiano, Mónica Berenice Enríquez Sánchez, Edgar Sánchez Valiente e Ivette García Ruvalcaba, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGSMIME*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Linda Paola López Quintero, Leydi Elizabeth Rodríguez Montelongo, Rubí Alejandra Ibáñez Ochoa, Domingo Antonio Lugo Garza, Jessica Claudina Hernández Carrión, Brenda Lizet Orozco González, Karely Lucía Elizalde Félix, Alejandra Carolina Alcaraz Luevanos, Adriana García Severiano, Mónica Berenice Enríquez Sánchez, Edgar Sánchez Valiente e Ivette García Ruvalcaba.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1460/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018
DENUNCIANTES: ADELAIDA RIVERA OCHOA
Y OTRO
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ADELAIDA RIVERA OCHOA Y FRANCISCO JAVIER AGUILAR TEJEDA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
INE/Instituto	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
NA o Nueva Alianza	Partido Nueva Alianza
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE* dos escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible violación a su derecho de libertad de afiliación, atribuida a *NA* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA RECEPCIÓN UTCE
1	Adelaida Rivera Ochoa ¹	04/06/2018
2	Francisco Javier Aguilar Tejeda ²	13/06/2018

¹ Visible a foja 07 del expediente.

² Visible a foja 12 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.³ El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018.

En el citado acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de Adelaida Rivera Ochoa y Francisco Javier Aguilar Tejeda y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, la autoridad instructora ordenó la realización de los requerimientos que se describen a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
27/06/2018	NA	INE-UT/10687/2018 ⁴	05/07/2018 Escrito signado por el representante propietario de NA ante el Consejo General de este Instituto ⁵ , por el que solicita prórroga para dar respuesta
	DEPPP	INE-UT/10688/2018 ⁶	05/07/2018 Correo institucional ⁷

El once de julio de dos mil dieciocho⁸, a través de acuerdo dictado por el Titular de la *UTCE*, se concedió prórroga a *NA* para dar contestación al requerimiento formulado. Dicho proveído fue notificado como se señala a continuación:

³ Visible a fojas 16 a 23 del expediente.

⁴ Visible a foja 29 del expediente.

⁵ Visible a foja 36 del expediente.

⁶ Visible a foja 32 del expediente.

⁷ Visible a fojas 34 a 35 del expediente.

⁸ Visible a foja 38 a 41 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018

Fecha de acuerdo	Sujeto	Oficio	Fecha de Respuesta
11/07/2018	NA	INE-UT/11537/2018 ⁹	Sin respuesta

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A efecto de contar con elementos suficientes para la integración del expediente en que se actúa, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó requerir de nueva cuenta a NA, proveído que fue notificado en los siguientes términos:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
09/08/2018	NA	INE-UT/12500/2018 ¹⁰	Sin respuesta

El siete de septiembre de dos mil dieciocho, con el objeto de contar con los elementos suficientes para la debida integración del presente expediente, se dictó un nuevo requerimiento a NA, mismo que fue notificado en los siguientes términos:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
07/09/2018	NA	INE-UT/12990/2018 ¹¹	Sin respuesta

IV. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de NA, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

V. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, NA, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la

⁹ Visible a foja 45 del expediente.

¹⁰ Visible a foja 70 del expediente.

¹¹ Visible a foja 80 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018

determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VI. PERDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38,

párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *NA*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierte que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de veintisiete de junio de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...
SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.
...

Asimismo, debe precisarse que *NA* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARO/JD03/GRO/179/2018

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de NA como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que NA haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de NA.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *NA* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. *Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere

¹² Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹³ se precisa que

¹³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGS MIME*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de las denuncias presentadas por Adelaida Rivera Ochoa y Francisco Javier Aguilar Tejeda, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *LGS MIME*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Adelaida Rivera Ochoa y Francisco Javier Aguilar Tejeda.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

INE/CG1461/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018
DENUNCIANTES: ALMA DOLORES
MALDONADO LLANES Y OTROS.
DENUNCIADO: NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ALMA DOLORES MALDONADO LLANES, ARACELI YEPIZ VELÁZQUEZ Y ADRIANA LUCIA DIEZ MARINA MONTES, CIUDADANAS QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE LAS CIUDADANAS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Nueva Alianza:</i>	Partido político Nueva Alianza
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.¹ Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin de Alma Dolores Maldonado Llanes,

¹ Visible a páginas 25 a 31 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

Araceli Yepiz Velázquez y Adriana Lucia Diez Marina Montes en contra de *Nueva Alianza*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

Asimismo, se ordenó requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a efecto de que informara si las ciudadanas se encontraban registradas dentro del Padrón de Afiliados de *Nueva Alianza*, así como al citado instituto político, para que proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas.

II. PRÓRROGA.² El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se concedió prórroga a *Nueva Alianza*, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo descrito en el punto que antecede.

III. EMPLAZAMIENTO.³ El veintisiete de julio de dos mil dieciocho,⁴ se ordenó el emplazamiento a *Nueva Alianza*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El partido denunciado no dio respuesta al emplazamiento, no obstante haber sido debidamente notificado, tal y como se esquematiza a continuación:

OFICIO	CITATORIO	CÉDULA
INE-UT/12002/2018 ⁵	27/07/2018	30/07/2018

² Visible en las páginas 43 a 46 del expediente.

³ Visible en las páginas 64 a 70 del expediente.

⁴ Acuerdo visible en las páginas 64 a 70 del expediente.

⁵ Visible en la página 76 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

IV. ALEGATOS. Mediante acuerdo de siete de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Ninguna de las partes hizo valer su derecho para formular alegatos en el presente asunto, no obstante, haber sido debidamente notificados, tal y como se esquematiza a continuación:

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

SUJETO PROCESAL	OFICIO	CITATORIO	CÉDULA
<i>Nueva Alianza</i>	INE-UT/13008/2018 ⁶	11/09/2018	12/09/2018
Alma Dolores Maldonado Llanes	INE/04JDE- SON/VS/1223/2018 ⁷	Notificación por estrados ⁸ 14/09/2018	
Araceli Yepiz Velázquez	INE-UT/13006/2018 ⁹	03/10/2018	04/10/2018
Adriana Lucia Diez Marina Montes	INE-UT/13007/2018 ¹⁰	Se atendió directamente con la interesada	13/09/2018

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

⁶ Visible en la página 116 del expediente.

⁷ Visible en la página 128 del expediente

⁸ De conformidad con el escrito de queja, visible a página 5 del expediente, la quejosa señaló a los estrados de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Sonora, como domicilio para oír y recibir notificaciones.

⁹ Visible en la página 141 del expediente.

¹⁰ Visible en la página 146 del expediente.

VII. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la *Comisión*, celebrada los días trece y catorce de diciembre dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta

utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de las ciudadanas que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdos de nueve de mayo y once de junio, ambos de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para

determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse lo siguiente:

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Al respecto, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ADML/JD04/SON/192/2018

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente **sobreseer** el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹¹ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

¹¹ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada, por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que **resulta incuestionable la voluntad de las quejas a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliadas o militantes al Partido Nueva Alianza.**

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la *Constitución*, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1, párrafo 3, de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que las denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que las quejas a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellas de las cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹² se precisa que

¹² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN**

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de *Nueva Alianza*, con motivo de las denuncias presentadas por Alma Dolores Maldonado Llanes, Araceli Yepiz Velázquez y Adriana Lucia Diez Marina Montes, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Alma Dolores Maldonado Llanes, Araceli Yepiz Velázquez y Adriana Lucia Diez Marina Montes; **en términos de ley** al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

INE/CG1462/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018

DENUNCIANTE: JORGE LUIS GARCÍA
DELGADILLO

DENUNCIADO: NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018 QUE SE DERIVA DE LA QUEJA PRESENTADA POR JORGE LUIS GARCÍA DELGADILLO, QUIEN PRESENTÓ ESCRITO POR EL CUAL, HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA AFILIACIÓN DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO, PARA LO CUAL, EN SU CASO, SE UTILIZARON SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
Nueva Alianza	Partido Nueva Alianza

GLOSARIO	
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹ El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta afiliación indebida de Jorge Luis García Delgadillo, y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión a *Nueva Alianza*, así como al ciudadano denunciante.

II. Diligencia de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 5 de julio de 2018 ²		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Fecha de respuesta
<i>Nueva Alianza</i>	05 de julio de 2018 ³	12 de julio de 2018 ⁴
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE	INE-UT/11268/2018⁵ 09 de julio de 2018	Correo electrónico de 10 de julio de 2018 ⁶

¹ Visible a páginas 6-12 del expediente.

² Visible a páginas 6-12 del expediente.

³ Visible a página 15 del expediente.

⁴ Visible a página 23 y anexo en página 24 del expediente.

⁵ Visible a página 19 del expediente.

⁶ Visible a páginas 20-21 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018

III. Emplazamiento.⁷ El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento a *Nueva Alianza*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Fecha de respuesta
Nueva Alianza INE-UT/11904/2018 ⁸	Citatorio: 25 de julio de 2018 ⁹ Cédula: 26 de julio de 2018 ¹⁰ Plazo: 27 de julio al 02 de agosto de 2018	02 de agosto de 2018 ¹¹

IV. Resolución INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

V. Recurso de apelación SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VI. Pérdida de registro de Nueva Alianza. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

⁷ Visible a páginas 25-29 del expediente.

⁸ Visible a página 32 del expediente.

⁹ Visible a páginas 33-36 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 37-38 del expediente.

¹¹ Visible a página 42 y anexo en página 43 del expediente.

VII. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*.

VIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la referida Comisión analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta

utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio del ciudadano que ha sido señalado a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

“2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro”

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, la queja que dio origen al presente procedimiento, fue admitida mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“SEGUNDO. - Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.”

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de *Nueva Alianza* como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro, en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en la denuncia interpuesta por Jorge Luis García Delgadillo quien, en esencia, alegaba la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que: *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLGD/JD05/JAL/200/2018

de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIFE*; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la *Ley de Partidos* y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹² que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.**

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad del quejoso a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido Nueva Alianza.

¹² Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces partido político nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que el denunciante no forme parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esa persona tampoco deberá ser considerada para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que el quejoso a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, forme parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquel que se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹³ se precisa que

¹³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de la denuncia presentada por Jorge Luis García Delgadillo, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Jorge Luis García Delgadillo. **En términos de ley** al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

INE/CG1463/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018
DENUNCIANTE: GUILLERMO IBARRA
PARGA
DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO
NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR GUILLERMO IBARRA PARGA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES AL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA DEL MENCIONADO CIUDADANO AL PARTIDO POLÍTICO EN CITA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO, DERIVADO DE DIVERSAS CONSULTAS EFECTUADAS POR DICHO CIUDADANO, EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE ESTE INSTITUTO, EN EL APARTADO AFILIADOS POR PARTIDO POLÍTICO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGSMI</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>PANAL</i>	Partido político Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIA.¹ En once de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral escrito de queja signado por Guillermo Ibarra Parga, a través del cual hizo del conocimiento de esta autoridad electoral, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la indebida utilización de sus datos personales.

¹ Visible a fojas 01 a 06 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018

No.	Nombre del quejoso	Oficio	Fecha de recepción UTCE	Entidad Federativa
1	GUILLERMO IBARRA PARGA	JD01/1651/2018	11/07/2018	CHIHUAHUA

REGISTRO, ADMISIÓN DE LA DENUNCIA Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.² Mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo, el cual quedó registrado bajo la clave UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018, e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, ordenando la reserva del emplazamiento, hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto.

Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del procedimiento, en las fechas que se indican, se acordaron las siguientes diligencias:

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
PANAL	<p>a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encontraba registrado el ciudadano en comento. Para tal efecto se ordenó anexar al requerimiento, en sobre cerrado, copia simple y legible de la credencial para votar de dicho ciudadano.</p> <p>b) De ser afirmativa su respuesta, informara la fecha de alta en el referido padrón y remitiera el original o copia certificada de</p>	<p>INE- UT/11968/2018³ 26/julio/2018</p>	<p>Respuesta⁴ 31/julio/2018</p>

² Visible a fojas 07 a 13 del expediente.

³ Visible a fojas 20 a 23 del expediente.

⁴ Visible a foja 33 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
	<p>los expedientes en que obren las constancias de afiliación correspondientes donde conste la manifestación de voluntad del ciudadano, para ser afiliado a dicho partido político.</p> <p>c) De ser negativa su respuesta, indicara si anteriormente el ciudadano fue afiliado y la fecha de su baja en el referido padrón; asimismo, remita el original o copia certificada del expediente en que obren las constancias del procedimiento de desafiliación correspondiente.</p>		
DEPPP	<p>Informará si el ciudadano denunciante se encuentra registrados en el padrón de afiliados del partido político Nueva Alianza.</p> <p>En su caso, indicara la fecha a partir de la cual se les dio de alta en dicho padrón y remitiera los originales o copia certificada de los expedientes donde obraran las constancias de afiliación respectivas.</p> <p>De ser negativa su respuesta, indicara si anteriormente el ciudadano fue afiliado y la fecha de su baja en el referido padrón; asimismo, remita el original o copia certificada del expediente en que obren las</p>	<p style="text-align: center;">INE- UT/11969/2018⁵ 26/julio/2018</p>	<p style="text-align: center;">Respuesta DEPPP-2018-9469⁶ 26/julio/2018</p>

⁵ Visible a foja 24 del expediente.

⁶ Visible a foja 25 a 26 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GIP/JD01/CHIH/211/2018

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
	constancias del procedimiento de desafiliación correspondiente		

III. EMPLAZAMIENTO⁷. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PANAL*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputó y aportara los medios de prueba que consideraran pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/12648/2018 ⁸ 04/junio/2018	Citatorio: ⁹ 20 de agosto de 2018. Cédula: ¹⁰ 21 de agosto 2018. Plazo: 22 al 28 de agosto de 2018.	Escrito signado por el representante del <i>PANAL</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 28 de agosto de 2018 ¹¹

IV. ALEGATOS.¹² Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

⁷ Visible a fojas 46 a 50 del expediente.

⁸ Visible a foja 55 del expediente.

⁹ Visible a fojas 56 a 58 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 59 a 60 del expediente.

¹¹ Visible a foja 65 del expediente.

¹² Visible a fojas 66 a 69 del expediente.

Denunciado

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/12948/2018 ¹³ 10/julio/2018	Citatorio 04/septiembre/2018 ¹⁴ Cédula: 05/septiembre/2018 ¹⁵ Plazo: 06 al 12 de septiembre de 2018.	No formuló alegatos.

Denunciante

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Guillermo Ibarra Parga INE/JDE01/3069/2018 ¹⁶	Cédula: 04/septiembre/2018 ¹⁷ Plazo: 05 al 11 de septiembre de 2018.	No dio respuesta

V. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VI. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VII. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

¹³ Visible a foja 70 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 71 a 72 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 73 a 74 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 79 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 80 a 81 del expediente.

VIII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, así como la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Presidenta de esa Comisión, y

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a las quejas y/o denuncias que dieron origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del

COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PANAL*, en perjuicio de Guillermo Ibarra Parga.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio**.

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Como se precisó en el apartado de Antecedentes, la queja que dio origen al presente procedimiento, fue admitida mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse lo siguiente:

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Al respecto, debe precisarse que el *PANAL* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro del *PANAL* como partido político nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que el *PANAL* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en la denuncia de Guillermo Ibarra Parga, quien en esencia, alegaba la violación a su derecho político de afiliación, en contra del *PANAL*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Como consecuencia de lo anterior, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la

liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, el *PANAL* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente **sobreseer** el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹⁸ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. *Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando,

¹⁸ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al *PANAL*.

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces *PANAL* para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los organismos públicos locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que el *PANAL* pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁹ se precisa que

¹⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia:

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de la denuncia presentada por Guillermo Ibarra Parga en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los organismos públicos locales electorales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a Guillermo Ibarra Parga.

En términos de ley al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos organismos públicos locales electorales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”

INE/CG1464/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTES: GERARDO CORTEZ
JIMÉNEZ Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LAS CIUDADANAS ARACELI PÉREZ OBREGÓN Y SOCORRO MELISSA ESTRADA GARZA, ASÍ COMO DEL CIUDADANO GERARDO CORTEZ JIMÉNEZ EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO, AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Nueva Alianza:</i>	Partido Nueva Alianza
<i>Quejosos o denunciantes:</i>	Araceli Pérez Obregón, Socorro Melissa Estrada Garza y Gerardo Cortez Jiménez
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

ANTECEDENTES

I. PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS. El cuatro y quince de mayo, así como el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se recibieron diversos oficios, firmados por los Vocales Ejecutivos y/o Secretarios de la Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en los estados de Querétaro, Coahuila y Nuevo León, mediante los cuales remiten los escritos de queja firmados por Araceli Pérez Obregón, Socorro Melissa Estrada Garza y Gerardo Cortez Jiménez, a través de los cuales denunciaron que supuestamente fueron afiliados de manera indebida al padrón de militantes de *Nueva Alianza*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron sus datos personales sin su autorización.

II. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTO Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de veinte de julio del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento sancionador ordinario señalado con anterioridad respecto de los ciudadanos siguientes:

No.	Nombre de los quejosos
1	Araceli Pérez Obregón
2	Socorro Melissa Estrada Garza
3	Gerardo Cortez Jiménez

Asimismo, se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas, y se determinase la pertinencia o no de realizar nuevas diligencias de investigación.

¹ Visible a fojas 25 a 31.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018

Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la *DEPPP* informara si los *quejosos* se encontraban registrados dentro del padrón de afiliados de *Nueva Alianza* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tales afiliaciones; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si los referidos ciudadanos aparecían en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento de los *denunciantes*, respecto de la afiliación materia de controversia.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales requerimientos.

Respuesta de la *DEPPP*.²

Acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho				
No	Nombre del quejoso	Entidad	Oficio	Respuesta
1	Araceli Pérez Obregón	Querétaro	INE-UT/11916/2018 ³	Baja 14/05/218, sin fecha de afiliación
2	Socorro Melissa Estrada Garza	Coahuila		Baja 15/05/2018, con fecha de afiliación 13/02/2015
3	Gerardo Cortez Jiménez	Nuevo León		Baja 27/06/2018, sin fecha de afiliación

Respuesta de *Nueva Alianza*.⁴

Acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho		
Oficio <i>UTCE</i>	Estatus	Ciudadano
INE-UT/11915/2018 ⁵	cancelado	Araceli Pérez Obregón. Anexó copia simple de la cédula de afiliación de 17/01/2017, y la solicitud de baja del padrón de afiliados de 04/05/2018.
	cancelado	Gerardo Cortez Jiménez, anexó la impresión de pantalla del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los partidos políticos del INE respecto del estatus.

² Visible a fojas 49 a 50.

³ Visible a foja 48

⁴ Visible a fojas 51 a 60.

⁵ Visible a foja 44

III. SOLICITUD DE PRÓRROGA. El treinta de julio de dos mil dieciocho, *Nueva Alianza* al dar contestación al requerimiento de información, manifestó, entre otras cuestiones, que: *Con la finalidad de realizar una revisión exhaustiva de los archivos partidarios para verificar si encuentra afiliados los ciudadanos que denuncian una probable afiliación indebida, solicito atentamente una prórroga del plazo otorgado para que de ser el caso se integre la documentación correspondiente y acatar los fines conducentes.*

IV. DILIGENCIA ADICIONAL. El dieciséis de agosto del año en curso,⁶ el Titular de la *UTCE* acordó otorgar un plazo improrrogable de tres días hábiles a *Nueva Alianza* para el efecto de que entregara las fechas de alta en su padrón, así como el soporte de su baja del padrón y las constancias de afiliación correspondientes.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tal requerimiento.

Respuesta de Nueva Alianza:⁷

Acuerdo dieciséis de agosto de dos mil dieciocho		
Oficio <i>UTCE</i>	Nombre del quejoso	Respuesta
INE- UT/12618/2018 ⁸	Socorro Melissa Estrada Garza	Afiliada a Nueva Alianza el 13/05/2015 y desafiliada el 15/05/2018 . Anexó copia simple de la cédula de afiliación y solicitud de baja del padrón de afiliados.

V. EMPLAZAMIENTO. El veintiocho de agosto del año en curso,⁹ se ordenó el emplazamiento a *Nueva Alianza* para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

⁶ Visible a fojas 76 a 79.

⁷ Visible a fojas 88 a 93.

⁸ Visible a foja 84

⁹ Visible a fojas 99 a 103.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GCJ/JD01/NL/212/2018

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Emplazamiento				
Oficio	Sujeto Emplazado	Fecha de Notificación	Fecha de respuesta	Pruebas Ofrecidas
INE-UT/12874/2018 ¹⁰	<i>Nueva Alianza</i>	03/09/18	010/09/18 ¹¹	El partido político denunciado manifestó que acredita las debidas afiliaciones de Araceli Pérez Obregón y Socorro Melissa Estrada Garza, en razón de haber remitido los formatos de afiliación. Respecto de Gerardo Cortez Jiménez, el Comité Estatal de Nueva Alianza en Nuevo León, reporta estatus de cancelado. ¹²

VI. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria, celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

VII. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. El primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza* interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

VIII. PERDIDA DE REGISTRO DE NUEVA ALIANZA. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la perdida de registro del citado instituto político.

IX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del presente Proyecto de Resolución para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

¹⁰ Visible a foja 109.

¹¹ Visible a foja 117

¹² Visible a fojas 59 a 60.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, las quejas que dieron origen al presente procedimiento, fueron admitidas mediante Acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en las diversas denuncias interpuestas por ciudadanos quienes, en esencia, alegaban la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Partidos* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *Ley de Partidos*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso

que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la Ley de Partidos y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,¹³ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la *cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.*

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de los quejosos a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliado o militante al Partido *Nueva Alianza*.

¹³ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

En este sentido, la determinación de esas personas implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional *Nueva Alianza* para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que los denunciantes no formen parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esas personas tampoco deberán ser consideradas para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que *Nueva Alianza* pretenda registrarse como partido político local, verifique que los quejosos a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, formen parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁴ se precisa que

¹⁴ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA**”

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario incoado con motivo de las denuncias presentadas por las ciudadanas Araceli Pérez Obregón, Socorro Melissa Estrada Garza y el ciudadano Gerardo Cortez Jiménez, en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en el artículo 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político *Nueva Alianza*, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

NOTIFÍQUESE. Personalmente a Araceli Pérez Obregón, Socorro Melissa Estrada Garza y Gerardo Cortez Jiménez.

En términos de ley al otrora partido político *Nueva Alianza*; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1465/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018
DENUNCIANTE: GRISELDA MILLÁN DE LEÓN
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018 DERIVADO DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES APERTURADO CON MOTIVO DE OFICIO SIGNADO POR LOS VOCALES EJECUTIVO Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN EL ESTADO DE NAYARIT, MEDIANTE EL CUAL HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS EN PADRONES DE MILITANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR – ASISTENTE ELECTORAL, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL QUE SE CELEBRÓ EN 2016 – 2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT, PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GLOSARIO	
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Nueva Alianza</i>	Partido Nueva Alianza
<i>Quejosa</i>	Griselda Millán de León
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

ANTECEDENTES

I. El presente procedimiento se deriva del Cuaderno de Antecedentes que fue instaurado con motivo de la supuesta afiliación indebida de ciudadanos que aspiraban al cargo de Supervisor Electoral y/o Capacitador Asistente – Electoral, relacionado con el Proceso Electoral Local 2016-2017, en el estado de Nayarit, y que aparecieron registrados como afiliados en padrones de los Partidos Políticos Nacionales (en el caso, en el padrón de Nueva Alianza).

II. De igual manera, es necesario señalar que, en el Cuaderno de Antecedentes ya referido, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados de los partidos políticos, así como a los institutos políticos correspondientes, para que proporcionaran

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018

información respecto de las afiliaciones detectadas; enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con dicha diligencia.

Respuesta de la DEPPP

Expediente	N° Oficio	Fecha de recepción de Oficialía de Partes de la Secretaria Ejecutiva del INE	Contenido del oficio
UT/SCG/CA/CG/5/2017	INE/DEPPP/DE/DPPF/0512/2017 ¹	24/02/2017	Informó que de la búsqueda efectuada en sus archivos, se localizó en el padrón de militantes del Partido Nueva Alianza a Griselda Millán de León, con fecha de afiliación 07 de julio de 2013.

Respuesta de Nueva Alianza

Expediente	N° Oficio	Fecha de recepción de Oficialía de Partes de la Secretaria Ejecutiva del INE	Contenido del oficio
UT/SCG/CA/CG/5/2017	S/N ²	22/Febrero/2017	Informó que Griselda Millán de León no es militante de <i>Nueva Alianza</i> al no encontrar su registro en el padrón de afiliados.

III. Con los resultados obtenidos de la investigación preliminar, se instruyó dar vista a cada uno de los ciudadanos respecto de los que se tramita el Cuaderno de Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, a continuación, se da cuenta del desahogo realizado por la denunciante en relación con dicha diligencia:

¹ Visible a páginas 47 a 50 del expediente.

² Visible a páginas 46 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018

Expediente	Ciudadana	Oficio con el cual se dio vista	Fecha de desahogo de vista	Contenido de desahogo de vista de la ciudadana
UT/SCG/CA/CG/5/2017	Griselda Millán de León	INE-UT/2937/2017 ³	Escrito recibido en la <i>UTCE</i> el 25 de abril de 2017.	Manifestó fue seleccionada como Supervisora Electoral para trabajar en el Proceso Electoral 2014-2015 y en el enero de 2015 le fue informado que aparecía en el listado de afiliados de <i>Nueva Alianza</i> , sin embargo, nunca le ha interesado pertenecer a partido político alguno.

IV. En su oportunidad,⁴ se dictó acuerdo de cierre en el citado Cuaderno y se ordenó que, en su momento, se iniciaran los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su negativa respecto de la afiliación materia de controversia; en su momento, se realizó el análisis de los ciudadanos respecto de los que se ordenó apertura de procedimiento, y se les agrupó por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente; en el caso, el presente procedimiento se inició respecto de *Nueva Alianza* y la ciudadana que enseguida se enlista:

Expediente	Ciudadano	Proceso
UT/SCG/CA/CG/5/2017	Griselda Millán de León	Local Nayarit 2016 - 2017

R E S U L T A N D O

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso,⁵ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración –a partir del

³ Visible a página 68 del expediente

⁴ **UT/SCG/CA/CG/5/2017** (7 de junio de 2017).

⁵ Visible en las páginas 165 a 173 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018

Acuerdo de cierre del Cuaderno de Antecedentes **UT/SCG/CA/CG/5/2017-** del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto de **Griselda Millán de León**, ordenándose el emplazamiento a *Nueva Alianza*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/12164/2018 ⁶	<i>Nueva Alianza</i>	03 de agosto de 2018	10 de agosto de 2018. Escrito en alcance 13 de agosto de 2018	<i>Nueva Alianza</i> aportó copia simple de la certificación del formato de afiliación, así como de la credencial para votar de la denunciante.

II. ALEGATOS Y VISTA A LA QUEJOSA. Mediante acuerdo de siete de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En el mismo proveído se ordenó dar vista a la *quejosa*, con copia simple del formato de afiliación que aportó el partido político denunciado a efecto de que en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la mencionada determinación manifestara lo que a su derecho conviniera.

⁶ Visible en la página 191 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/13041/2018 ⁷	<i>Nueva Alianza</i>	12 de septiembre de 2018.	No hubo respuesta	No aplica

Denunciante:

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE/NAY/JDE03/VS/2219/2018 ⁸	Griselda Millán de León	13 de septiembre de 2018.	14 de septiembre de 2018	<p>Manifestó que, en el mes de junio de 2015, recibió copia certificada del formato de afiliación que supuesta firmó, desconociendo la rúbrica que lo calza, por lo que, acudió a denunciar la falsificación del documento ante la Fiscalía General del Estado.</p> <p>Señala que posteriormente, como resultado de peritaje se concluyó que la firma cuestionada</p>

⁷ Visible a página 252 del expediente.

⁸ Visible a página 259 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GML/JL/NAY/220/2018

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
				<p>no corresponde al patrón gráfico de la quejosa, y que, nunca ha pertenecido a partido político alguno.</p> <p>Anexó copia simple de oficio 007/2016 firmado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la mesa de trámite número dos, oficio C-5/3819/16 signado por el perito criminalista en grafoscopía y documentoscopía, acuerdo de recepción de Dictamen pericial y escrito de solicitud de copias certificadas dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Región III del Sistema Penal con sede en Compostela, Nayarit, mesa dos.</p>

III. RESOLUCIÓN INE/CG1301/2018. En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó el Dictamen relativo a la pérdida de registro de *Nueva Alianza*, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

IV. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-384/2018. EL primero de octubre del año en curso, *Nueva Alianza*, interpuso el recurso de apelación de referencia, a fin de impugnar la determinación emitida por este *Consejo General*, identificada con la clave INE/CG1301/2018.

V. PÉRDIDA DE REGISTRO DE *NUEVA ALIANZA*. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala Superior* confirmó la resolución INE/CG1301/2018, en la cual se declara la pérdida de registro del citado instituto político.

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VII. SESIÓN DE LA *COMISIÓN*. En la Nonagésima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada los días trece y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

Lo anterior es así, toda vez que este órgano colegiado es competente para conocer tanto de los hechos denunciados en el presente asunto como para, además, pronunciarse sobre la procedencia o no del procedimiento, respecto a la queja y/o denuncia que dio origen al procedimiento sancionador ordinario citado al rubro.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *Nueva Alianza*, en perjuicio de la ciudadana que ha sido señalada a lo largo de la presente determinación.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO.

El artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, **deberán ser examinadas de oficio.**

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la *UTCE*, de elaborar un Proyecto de Resolución en el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de las causales.

En el caso, esta autoridad considera que el presente asunto debe sobreseerse.

La afirmación anterior, encuentra sustento en los siguientes razonamientos:

En principio, se considera necesario insertar el contenido del artículo 466, párrafo 2, inciso b), de la *LGIPE*, a saber:

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

...

Como se advierte, la actualización del sobreseimiento, en el supuesto transcrito, depende de dos elementos:

1. Que la queja o denuncia se haya admitido.

Ahora bien, como se precisó en el apartado de Antecedentes, la queja que dio origen al presente procedimiento, fue admitida mediante Acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho; es decir, el primer requisito para determinar que procede el sobreseimiento, esto es, que la queja o denuncia haya sido admitida, se cumple en el presente asunto.

2. Que el partido político denunciado haya perdido su registro, con posterioridad a que la queja o denuncia se haya admitido.

Al respecto, debe señalarse que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el *Consejo General* aprobó el *DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*, identificado con la clave INE/CG1301/2018.

En la señalada determinación, el órgano máximo de dirección de esta autoridad electoral nacional estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

...

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

...

Asimismo, debe precisarse que *Nueva Alianza* impugnó la resolución aquí señalada y que, en sesión del pasado veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la *Sala*

Superior resolvió el medio de impugnación de clave SUP-RAP-384/2018 y confirmó la pérdida del registro del partido político en mención.

En tal sentido, toda vez que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 189, fracción I, inciso c), la sentencia emitida por la señalada autoridad jurisdiccional es definitiva e inatacable, es de establecerse que la determinación respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza como Partido Político Nacional, ha quedado firme.

Por lo anterior resulta inconcuso, que el segundo requisito establecido en la legislación ya citada, es decir que *Nueva Alianza* haya perdido su registro en el caso se configura dicho elemento.

Ahora bien, como se razonó previamente, el procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, tuvo su origen en la denuncia interpuesta por Griselda Millán de León quien, en esencia, alegaba la violación a su derecho político de afiliación, en contra de *Nueva Alianza*.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*, establece que *El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.*

Asimismo, en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la *LGPP* establece como causal de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, el porcentaje de la votación señalada en el párrafo anterior.

En consecuencia, el artículo 96, párrafo 2, de la Ley General en comento determina que con la cancelación o pérdida del registro de un partido político se extinguirá su personalidad jurídica, derechos y prerrogativas con las que contaba, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones en materia de fiscalización hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Bien entonces, dicho ente político perdió su personalidad jurídica, así como todos sus derechos y prerrogativas que establecen la *Constitución*, la *LGPP*, y demás normatividad aplicable, a excepción de sus obligaciones que en materia de fiscalización tiene, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos ante dicha autoridad fiscalizadora, así como la liquidación de su patrimonio.

Por lo anterior, si al día que se emite el presente fallo, *Nueva Alianza* ha dejado de existir como instituto político por haber perdido su registro como tal, es inconcuso que, en la especie, ya no existe persona jurídica que esté en aptitud de responder de las irregularidades materia del presente procedimiento, es decir, el ente político denunciado ya no cuenta con el carácter de Partido Político Nacional, por lo que no puede ser sujeto a sanción en procedimiento administrativo sancionador alguno.

En consecuencia, se estima procedente sobreseer el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la *Constitución*; y 466, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE; 94, párrafo 1, inciso b), 95, párrafo 1, y 96, párrafo 2, de la *LGPP* y 46, párrafo 3, fracción II, del Reglamento de Quejas del *INE*.

A similares consideraciones arribó este órgano resolutor, al emitir la determinación **INE/CG182/2016**,⁹ que resolvió el procedimiento administrativo sancionador UT/SCG/Q/CG/122/PEF/137/2015.

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que el artículo 95, párrafo 5, de la *LGPP*, establece lo siguiente:

Artículo 95.

...

5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de

⁹ Consultable en la liga electrónica
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81336/CGex201604-06-rp-3-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*los municipios y Distritos, condición con la **cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.***

Bajo esta perspectiva, si bien es cierto que en esta resolución no se aborda el fondo de la *litis* planteada por las razones expuestas a lo largo del presente considerando, también lo es que resulta incuestionable la voluntad de la quejosa a que se refiere este fallo de no pertenecer en calidad de afiliada o militante al Partido Nueva Alianza.

En este sentido, la determinación de esa persona implica el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, por lo que su tutela y protección debe ser observada por los órganos del Estado y demás entes de interés público, en términos de lo establecido en el artículo 1°, párrafo tercero de la Ley Fundamental.

Por esta razón, se vincula a:

- a) Al entonces Partido Político Nacional Nueva Alianza para que, de ser el caso que dicho instituto político pretenda registrarse como partido político local en alguna de las entidades federativas en las cuales haya cumplido los requisitos que establece la porción normativa transcrita, verifique que la denunciante no forme parte del padrón de afiliados en las entidades donde obtenga su registro, por lo que esa persona tampoco deberá ser considerada para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la conservación de su registro como instituto político local.
- b) A los Organismos Públicos Locales de cada una de las entidades federativas para que, de ser el caso que Nueva Alianza pretenda registrarse como partido político local, verifique que la quejosa a que alude el presente fallo, bajo ninguna circunstancia, forme parte del padrón de militantes de ese instituto a nivel local. Lo anterior, excepción hecha de aquellos de los cuales se acredite su libre voluntad de afiliarse al partido político local, con posterioridad al dictado de la presente Resolución.
- c) A la *DEPPP*, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el cumplimiento de la presente determinación.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara el **sobreseimiento** del procedimiento sancionador ordinario, incoado con motivo de la denuncia presentada por Griselda Millán de León, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

TERCERO. Se vincula al otrora partido político Nueva Alianza, a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que procedan conforme a lo ordenado en la parte final del Considerando Segundo de la presente Resolución.

Notifíquese personalmente a Griselda Millán de León; **en términos de ley** al otrora partido político Nueva Alianza; por **oficio** a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a los treinta y dos Organismos Públicos Locales y, por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

¹⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 2.1, que fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

He reservado este apartado porque en los términos en los que me pronuncié en la Comisión de Quejas y Denuncias no comparto el sentido del Proyecto de Resolución que se trae a consideración de este Consejo General._____

Permítanme recordar de qué se trata este procedimiento, y digo recordar porque no es la primera vez que en este Consejo General conocemos de los hechos relacionados con este expediente; todo deriva de la denuncia que una Consejera Electoral del Instituto Electoral del estado de Jalisco presenta en contra, principalmente del Consejero Presidente de ese Instituto Electoral, así como de los distintos Directores Ejecutivos y el Secretario Ejecutivo._____

La razón por la que inicia el procedimiento, de hecho, lo inicia vía JDC ante el Tribunal Electoral alegando, lo que ella considera varias afectaciones a sus derechos, en primer lugar, que no se le entregó información que ella solicitó, es decir, hizo un conjunto de requerimientos tanto al Consejero Presidente como a las áreas técnicas de la institución y en más de 1 año 5 meses, no recibió respuesta a los mismos._____

En segundo lugar, el hecho de que se le haya excluido de formar parte de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional en ese Organismo Público Local._____

Y en tercer lugar, lo que ella señala que son actos de agresión en distintas sesiones del propio Consejo General en las discusiones que se dieron en torno a las mismas, y alega que existe un tema de violencia política en razón de género._____

Cuando en un primer momento resuelve el expediente la Sala Superior, el JDC, la Sala establece que sí se acredita que no se le entregó la información que había

solicitado porque se tardó un 1 año 5 meses en recibir esa información, sí se acredita que fue excluida indebidamente, señala el Tribunal Electoral, de la Comisión del Servicio Profesional Electoral aunque posteriormente fue incorporada en un Acuerdo distinto del Consejo General, pero en esa Sentencia se señala que es responsabilidad del Consejero Presidente haberla excluido, ¿por qué del Consejero Presidente?, porque él hizo la propuesta._____

El detalle que llamará la atención siempre es que una propuesta no se gana con el hecho de hacerla, requiere al menos 4 votos de 7, y en ese caso tuvo 4 votos de 7, pero la Sala señala que es responsabilidad del Consejero Presidente esa decisión.____

Y después de señalar que se quedan acreditados estos 2 hechos, señala que no se acredita un tema de violencia política en razón de género, pero nos ordena que se dé vista al Instituto para que nosotros nos pronunciemos respecto de si existe o no un tema de acoso laboral. Esto primero, trae una larga discusión de ida y vuelta con el Tribunal Electoral a partir de varias impugnaciones sobre cuál era la vía adecuada, si la vía adecuada para tramitar este procedimiento era un Procedimiento Ordinario Sancionador o era un procedimiento de remoción de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales._____

Sigo sosteniendo que el procedimiento adecuado no es el Procedimiento Ordinario Sancionador, porque la vía que se ha establecido para que este Consejo General pueda conocer de conductas indebidas por parte de las Consejeras y los Consejeros, ya sean Electorales o Presidentes de los Organismos Públicos Locales, es la vía del Procedimiento de Remoción, y las causales por las que este Instituto que puede conocer son aquellas previstas en el artículo 102, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. _____

Sin embargo, en este caso no entraré a esa discusión porque el Tribunal Electoral decidió que era por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador, y ya está firme la vía por la que se tiene que tramitar. Creo que, es inadecuado, sin embargo, es una decisión del Tribunal Electoral y en eso, se atiende como una especie de acatamiento.

Pero, ahora vámonos al fondo. Cuando nos ordena que nosotros determinemos si existe o no existe acoso laboral, este Consejo General se pronuncia sobre ellos y lo vota este Consejo General, señalando que no hay un tema de acoso laboral, que las expresiones de las que se duele la denunciante son expresiones emitidas por sus compañeras y compañeros, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que no estamos ante un tema de acoso laboral, se resuelve infundado en ese sentido y nuevamente es impugnado ante el Tribunal Electoral y la Sala Superior lo revoca para ordenarnos que hagamos un análisis integral de todas las conductas, es decir, de aquellas que ya dio por acreditadas el Tribunal Electoral y de aquellas que nos ordenó analizar a nosotros. _____

Y ahora el Proyecto de Resolución propone declarar fundado el procedimiento al considerar que hay una cuestión de acoso laboral. _____

No comparto el sentido del Proyecto de Resolución porque me parece que no podemos obviar qué es lo que nos están ordenando. No nos ordenó el Tribunal Electoral que nos pronunciáramos sobre si el hecho de no dar información era correcto o incorrecto, el Tribunal Electoral ya señaló que es incorrecto, y además, comparto el principio de lo que señaló el Tribunal Electoral, estoy absolutamente de acuerdo que no es correcto que ningún Consejero Presidente o ninguna Consejera Presidenta le niegue información a cualquiera de los integrantes del Consejo General, absolutamente de acuerdo con, digamos, la conclusión a la que llega la Sala Superior, pero, no nos ordenó pronunciarnos sobre eso, nos ordenó pronunciarnos sobre si en el caso hay acoso laboral, y después el segundo elemento tiene que ver con la exclusión, por parte de la Comisión hacia la Consejera Electoral. Y ahí, si bien es cierto que hay una verdad legal que el Tribunal Electoral definió en cuanto a que el responsable es el Consejero Presidente, me parece que no podemos obviar el contexto para efecto de determinar si estos 2 hechos conllevan un acto de acoso laboral, porque no fue el Consejero Presidente el que decidió que se excluyera, fue el que se decidió hacer una propuesta y la votó el Consejo General, y la mayoría del

Consejo General votó en un sentido y esto es algo que no podemos obviar para generar o no un contexto de acoso. _____

Creo que es relevante tener en cuenta que para que haya un tema de acoso laboral, también tiene que haber una sistematicidad; hay criterios establecidos por las propias instancias jurisdiccionales, de cuándo estamos ante un caso de acoso laboral. _____

Aquí hay irregularidades, no tengo la menor duda, pero además, ni siquiera la podría tener jurídicamente porque el Tribunal Electoral ya se pronunció, ya dijo el Tribunal Electoral que estuvo mal lo que hizo el Consejero Presidente, e insisto, lo comparto; pero de eso a considerar que el hecho de negar información solicitada, información que por cierto era información pública según la página de transparencia, lo cual no quita la obligación del Consejero Presidente de haber dado respuesta a los escritos. _
Pero, no me parece que podamos llegar al punto de acreditar un acoso laboral por no dar una respuesta a información que además ya era información pública por las leyes de transparencia, y por el hecho de haber hecho una propuesta en el marco de una sesión del Consejo General. _____

Creo que, es importante que analicemos exactamente cuál es la infracción que nos ordenaron investigar y a la luz de ésta, contrario a lo que propone el Proyecto de Resolución que se somete a nuestra consideración y en los mismos términos que lo señalé en la Comisión de Quejas y Denuncias, no considero que existen y que se colman los elementos para acreditar un acoso laboral. _____

Por lo que mi postura es que, más allá de que la Sala Superior pareciera querer llevarnos a declararlo fundado, nos dio plenitud de jurisdicción, y en plenitud de jurisdicción me pronuncio porque se declare infundado el procedimiento. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

¿Me permite una pregunta? Solamente para claridad. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Adelante. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Lo que estaría planteando, para efectos en su momento de la votación, es que el Punto Resolutivo Segundo se declarara infundado, el Punto Resolutivo Primero ya infundado, sería una votación. Solamente para efectos habría que votar en particular el Proyecto de Acuerdo a lo que, si entendí bien, usted está planteando el Punto Resolutivo Segundo, ¿cierto? _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Cierto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

La primera vez que vimos este asunto mencioné que la vía por la cual lo estábamos conociendo no era la idónea, sigo considerando que no es la vía correcta para conocer este tipo de procedimientos. _____

Lo único que ha cambiado de aquella ocasión ahora es la Resolución de un JDC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 524/2017, en donde la quejosa manifestó que la vía por la cual estábamos tramitando el procedimiento no era correcta. Y en esa ocasión la Sala Superior lo que le dijo es: No me puedo pronunciar en este momento por ese agravio, porque ese tipo de impugnaciones se tienen que hacer valer de manera inmediata. Es decir, que la quejosa lo debió de haber hecho valer cuando se le notificó el Acuerdo admisorio. Al no haberlo hecho así lo que considera la Sala Superior es que consintió la vía por la cual estábamos tramitando este procedimiento. _____

En ese orden de ideas, desde mi perspectiva, la Sala Superior no validó esta vía, sino lo que hizo en ese JDC fue decirnos: Analiza integralmente la demanda, analiza también los planteamientos que se hicieron en sesiones públicas y analiza todos los elementos probatorios que obran en el expediente, es decir, haz una valoración

integral dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador en que se actúa. Porque de eso ya se podía pronunciar. _____

Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto considero que tendríamos nosotros la posibilidad de hacer un reencauzamiento de este procedimiento a un procedimiento de remoción contra Consejeros Electorales; me parece que a ningún fin práctico nos llevaría hacer eso, en el sentido de que, incluso, por la entidad de la conducta que se logra acreditar, creo que sería coincidente la Resolución del procedimiento de remoción contra Consejeros Electorales con la Resolución que nos están proponiendo en el Procedimiento Ordinario Sancionador, por lo menos desde la postura que tengo. _____

Entonces, un reencauzamiento en este momento a lo único que nos orillaría sería a tener a lo mejor una dilación injustificada en este procedimiento en la Resolución del mismo e, incluso, a lo mejor tener también actos de molestia en perjuicio de las partes involucradas sin que se pueda cambiar la Resolución a la que se está arribando. _____

A diferencia de aquella vez, en esta ocasión sí me voy a pronunciar por el fondo y no tanto exclusivamente por la vía en la cual estamos conociendo este caso. _____

¿Qué conductas se acreditan en este procedimiento? Dos particularmente, la negativa reiterada de dar la información a la Consejera Electoral, y la exclusión de esta Consejera Electoral de las Comisiones. En ambos casos, la Sala Superior consideró que se acreditaban las conductas, en el primero dijo que diversos funcionarios le habían negado solicitudes de información de manera reiterada a la Consejera Electoral. _____

En el segundo caso, dijo que se le había excluido indebidamente, y utiliza esta palabra la Sala Superior, de la integración de Comisiones. En ese sentido, la Sala Superior nos ordena analizar la posible actualización de acoso laboral, considerando estos elementos. _____

Ahora ¿qué información se le negó a la Consejera Electoral? y creo que eso es muy relevante; desde luego, comparto que no se puede justificar que se le niegue ningún tipo de información a una Consejera o Consejero Electoral, sin embargo, creo que

aquí hay un agravio adicional en el hecho de que la información que se le negó, paralizó las funciones de la Comisión del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral que ella estaba presidiendo._____

Por ejemplo, ella lo que pedía eran las estructuras de diversas áreas, esta información se le negó por instrucciones directas del Consejero Presidente, instrucciones que incluso obran por escrito en un memorándum que él le mandó a diversas áreas, hubo sesiones en donde la Consejera Electoral, en su carácter de Consejera Presidenta de la Comisión del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, citó a diversos Directores para que dijeran por qué no daban información o la proporcionaran en ese momento, y lo que decían era que no tenían facultades para dar la información hasta que se los instruyera el Consejero Presidente o su equipo de trabajo._____

Esto implicó que, durante 5 sesiones de esa Comisión, de octubre del año 2014 a octubre del año 2015 no pudieran hacer absolutamente nada, no tenían insumos para trabajar, se le dio después parcialmente información ya hasta que se inició el Procedimiento en la vía jurisdiccional._____

Ahora, ¿por qué se dice que se excluyó indebidamente a esta Consejera Electoral de la integración de Comisiones?, porque ella estaba propuesta en el Acuerdo que se puso a consideración del Consejo General del Organismo Público Local de Jalisco para integrar varias Comisiones, entre ellas, la Comisión del Servicio Profesional Electoral, sin embargo, en la sesión el Consejero Presidente solicitó que se sustituyera a la Consejera Electoral por otra Consejera Electoral que, desde su perspectiva tenía más experiencia en los temas del Servicio Profesional._____

Eso implicó que a ella se le dejara en muy pocas Comisiones, y una vulneración al Reglamento Interior del Consejo General del Organismo Público Local de Jalisco que determina que se tiene que procurar una integración equitativa de las Comisiones.____

La Consejera Electoral que propuso el Consejero Presidente que integrara la Comisión del Servicio Profesional en lugar de la Consejera Electoral agraviada en este asunto quedó integrando 7 Comisiones Permanentes y esta Consejera Electoral tan solo 3 Comisiones Permanentes._____

En ese sentido, comparto el Proyecto de Resolución que se nos está presentando, me parece que sí se acredita la actualización de acoso laboral ejercido por el Consejero Presidente en perjuicio de esta Consejera Electoral _____

Es cierto que por ejemplo, solamente hubiera quedado en una tentativa la propuesta del Consejero Presidente de que no se le incluyera en la Comisión del Servicio Profesional a esta Consejera Electoral si no hubiera sido esta propuesta por otros Consejeros y Consejeras del Organismo Público Local, pero sin embargo, lo cierto es que la conducta que hicieron estos otros Consejeros es una conducta aislada, lo que hizo el Consejero Presidente fue una conducta sistemática dirigida en contra de esta Consejera Electoral y por eso se acredita exclusivamente en el caso de él el acoso laboral que nos pidió la Sala Superior que revisáramos. _____

Es importante señalar que incluso durante la sesión del Consejo General, 2 Consejeras Electorales, incluyendo la Consejera Electoral que promovió este procedimiento, le hicieron notar al Consejero Presidente que se estaba dejando en muy pocas Comisiones a esta Consejera Electoral y, por lo tanto, no se estaba guardando una equidad en la integración de las Comisiones por parte de los Consejeros Electorales, y no obstante eso, puso sobre la mesa la propuesta, la votó y la defendió. _____

Por lo tanto, creo que estos elementos que además la Sala Superior ya consideró acreditados, hacen que debamos de considerar que el Proyecto de Resolución que se nos está presentando es correcto, es fundado y se actualiza el acoso laboral cometido por el Consejero Presidente del Organismo Público Local, en perjuicio de esta Consejera Electoral. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

De forma breve, para acompañar el sentido del Proyecto de Resolución, solo me distancio respecto al Punto Resolutivo Tercero, que es la vista al Órgano Interno de Control del Organismo Público Local. A mi juicio, debe ser esta misma autoridad la que debiera establecer una sanción. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para manifestar lo que ya hice en la Comisión, pero el por qué estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto. Ha sido muy clara la exposición de hechos que ha presentado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, y precisamente creo que ése es el punto central de este tema. _____

El punto central es que, esas conductas que ya fueron generadas, dentro del concepto de acoso laboral, son conductas hostiles, que precisamente se dieron de una manera reiterada y que no pueden estar generándose desde los órganos colegiados. _____

Y el acoso laboral, sí tenemos que ser muy claros que no nada más es en el sentido de un acoso de manera vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que también puede ser de manera horizontal, y es entre colegas, y esa conducta al estar interrumpiendo de manera continua el trabajo y la información que se le pedía para el desarrollo del trabajo no fue casual, incluso la propia Consejera Electoral acudió a la vía que el mismo Consejero Presidente le propuso, y aun así no se le dio la información, y aun así siguieron y continuaron los actos. _____

Nada más quiero señalar que esos comportamientos o actitudes o actos que se muestran contrarios, precisamente, a una persona y que eso está avalado también por la propia doctrina y los análisis que se hacen respecto del acoso laboral o el hostigamiento laboral, son cosas que deben concluir, que deben terminar en los

órganos, con actitudes que no pueden ser permitidas, y en este caso por más de un año y en varias ocasiones, y de ahí veo la Sistemática y la reiteración, en varias ocasiones se fue presentando. _____

De ahí que estoy de acuerdo con la propuesta que se formula en el Proyecto de Resolución, incluso también en la medida de enviar al Órgano Interno de Control Interno, toda vez que en nosotros no tenemos esa posibilidad, ya también por definición jurisdiccional, de aplicar las sanciones intermedias, sino que solo se nos da una facultad que es la remoción, pero estas conductas de manera integral no son de esa entidad suficiente para aplicar la sanción a la que nosotros nos es permitido. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. _____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenos días a todas y a todos. _____

Coincido con la reflexión y el análisis que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín sobre este asunto. _____

En principio creo que, desde luego, sería complicado acreditar todos los extremos de lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho respecto a lo que se debe de entender como acoso laboral, entre otras cosas dice la Sala de la Suprema Corte de la Nación que el “mobbing”, también como se le conoce a este tema de acoso laboral, es cuando se presentan conductas en el entorno laboral que tiene por objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir o controlar o destruir. _____

Creo que, estas conductas que ha tenido acreditada la Sala Superior de una negativa de información a una Consejera Electoral cuando lo solicitó concretamente en poco más de 20 oficios que dirige a todos los Directores Ejecutivos del Organismo Público

Local en Jalisco y que no recibe, en efecto, una respuesta de cada uno de estos Directores hasta mucho tiempo después, pero que sí recibe un memorándum en donde le hace ver el Consejero Presidente que cualquier cuestión administrativa es competencia de la Presidencia o del Secretario Ejecutivo y, por lo tanto, la invita a que directamente con él vea estos temas de los que estaba solicitando información. _____

Esto no se tiene acreditado si la Consejera Electoral acudió o no al Consejero Presidente para pedir esta información, si hubo o no un diálogo con él, en fin. _____

Creo que, desde luego, esta situación la tuvo acreditada la Sala Superior la negativa de información. _____

Pero, lo que no se acredita, desde mi punto de vista, es que el memorándum que le manda el Consejero Presidente le haya provocado toda esta sensación que dice la Suprema Corte qué significa el acoso laboral. _____

Pareciera ser que estamos hablando casi de una situación emocional, psicológica que provoca un infierno prácticamente en los trabajos, no es ajeno a algunos de nosotros lo que hemos podido padecer algunos trabajos así; pero creo que en este caso concreto no se da por parte del Consejero Presidente esta Sistemática para provocar este acoso laboral o esta sensación de acoso laboral. _____

Por otro lado, como decía también la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, al proponer la configuración de las Comisiones en el Organismo Público Local de Jalisco, el Consejero Presidente lo que hace es una propuesta, no hace una imposición, no impone a los demás Consejeros lo que tenían que votar en ese sentido. _____

Y desde luego el órgano colegiado asume o tiene que asumir la responsabilidad de lo que se vota. _____

En este sentido, creo que por eso tampoco desde mi punto de vista se acredita que por no integrar más Comisiones, se pueda responsabilizar al Consejero Presidente de una actitud de acoso laboral. _____

Por lo tanto, coincido con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, no creo que sea fundada la imputación de acoso laboral que se le hace al Consejero

Presidente del Organismo Público Local de Jalisco y, por lo tanto, votaría en contra en este punto. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenos días a todas las personas que están en este recinto y a los que nos ven y escuchan vía Internet. _____

Creo que, precisamente lo que acaba de decir el Consejero Electoral Enrique Andrade, que parece muy interesante de si ese memorándum tuvo algún efecto o no y también la integración de las Comisiones, ya está totalmente determinado por la propia Sala Superior. _____

Si nosotros leemos en la sentencia recaída al juicio ciudadano 1679 de 2016, precisamente que presentó Erika Ruvalcaba Corral en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, precisamente en la página 109 se refiere a la Sala Superior a ese memorándum que acaba de hacer referencia el Consejero Electoral y dice que el memorándum en cuestión únicamente refiere que la organización administrativa del Instituto le corresponde a determinados órganos y se le solicita que cualquier asunto relacionado con esa organización se trate con los mismos. _____

Pero, también ya dijo la Sala Superior que ese memorándum es una comunicación interna, porque inclusive, para que también lo tengamos muy claro, se dudaba hasta de la veracidad, de que hubiera existido esa comunicación, y que con ello no daba respuesta a la solicitud de la quejosa. Entonces eso ya fue determinado por la propia Sala Superior. _____

También señaló que la información que puso a disposición finalmente un año y 9 meses después, si no mal recuerdo, era inoportuna e incompleta, eso ya fue una cuestión de la propia Sala Superior._____

Y en relación con la integración de las Comisiones también, si leemos la propia sentencia que les estoy comentando, que luego uno puede encontrar cosas muy interesantes, dice en la página 131 que: “el actuar que a la proponente se le obstaculizó el ejercicio de su cargo, puesto que con dicha exclusión, de las 3 Comisiones de las que formaba parte pasó a integrar solo 2, siendo la integrante del Organismo Público Electoral con menor número de Comisiones, lo cual no puede considerarse como un actuar acorde con el profesionalismo y la igualdad que debe imperar en el órgano colegiado”._____

Entonces, eso también, y más adelante también dice que esa era una circunstancia que el propio Consejero Presidente del Organismo Público Local tendría que estar cuidando para que no fuera a incurrirse en esta situación._____

Entonces, aquí la circunstancia de este asunto es que precisamente las conductas que pueden haber causado algún tipo de acoso laboral ya están acreditadas, y la propia Sala Superior en la última sentencia que emitió en relación con este asunto y que por cierto nos revocó nuestro Acuerdo, precisamente dice que no solamente veamos lo que ocurrió en las sesiones del Consejo General de ese Organismo Público Local de Jalisco, sino que también lo viéramos todo a la luz de lo que ya había quedado acreditado en el expediente._____

Y por eso, sí apoyo el sentido del Proyecto._____

Ahora, que también tengo que decir que a raíz de que se presentó este juicio ciudadano, empezaron a cambiar la manera de organizarse en el Organismo Público Local de Jalisco, sí, es cierto, se volvieron a revisar la integración de las Comisiones, antes inclusive de que se emitiera la sentencia por la Sala Superior, que también la Sala Superior lo considera, pero dice: “bueno, la conducta de haberla excluido ahí quedó”._____

También, en relación con la falta de la información, también eso ya quedó acreditado por la propia Sala Superior. _____

Entonces aquí me parece que nosotros como Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no tenemos demasiada amplitud para actuar porque finalmente ya son actos que quedaron acreditados ante la Sala Superior, y precisamente en relación con ese memorándum que es el 14, 15 del año 2015 y también con la integración de las Comisiones. _____

Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias que ya fueron acreditadas ante la propia Sala Superior y así lo determinó en esta sentencia del juicio ciudadano 1679 de 2016, y llegar a la conclusión que se deriva de esta situación. _____

Ahora, yo decía, también ya hubo cambios en el propio Organismo Público Local y ojalá que sigan trabajando de una manera más adecuada como ya lo están haciendo, pero sí hay que dejar esto como ya plasmado en una determinación. _____

Y ahora, ¿que esto da para la remoción?, no, no da, entonces, yo estoy diciendo que no hay que remover ni al Presidente del Organismo Público Local ni tal vez a las demás personas que estuvieron involucradas con esta circunstancia, y lo que se está proponiendo, si no mal recuerdo del Proyecto de Resolución, es que se dé vista al Órgano Interno de Control para que él, en su caso, determine la sanción que corresponda. _____

Pero, creo que cuando se trata del funcionamiento de un órgano colegiado, que hay irregularidades en lo que hacen las distintas áreas, es muy importante que se tomen las determinaciones para ir mejorando las circunstancias. _____

Y aquí creo que hay esta situación, y les digo, ya quedó acreditada ante el órgano electoral, porque precisamente, la Consejera Electoral tuvo la precaución de pedirle información vía oficio, y entonces quedó acreditada que pidió en 22 ocasiones la misma información a diversos servidores públicos del Organismo Público Local, y eso lo acreditó ante la propia Sala Superior. _____

Y lo que hizo el Consejero Presidente en ese momento fue solamente de remitirnos este memorándum que nunca realmente, ni siquiera se tenía el acuse de recibido, digo, sí a la Consejera Electoral que estaba inconforme con la manera en que se estaba manejando el órgano, pero ni siquiera que se lo hubiera dado a las demás áreas. _____

Entonces, yo por eso sí voy con el sentido del Proyecto de Resolución, que se le dé vista al Órgano Interno de Control, y solamente tratando que de verdad las cosas ahí sigan mejorando, y ojalá también sea un llamado a los Organismos Públicos Locales y a todos los órganos electorales, en materia electoral para que vean la manera en que pueden mejorar su funcionamiento, y que quede claro que la información no se puede negar, y que quede claro que los servidores que pertenecen a un Instituto Electoral tienen que también hacer caso a lo que se diga por las demás Consejeras y Consejeros Electorales, aunque no sean los Presidentes. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Permítanme intervenir, motivado por esta última parte de la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, y señalando de ante mano que coincido en este punto con el razonamiento hecho por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Creo que, adicionalmente a la pregunta que le formulé en su momento, luego de su intervención, a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y para efectos de la votación, lo que tendría que votarse de manera particular porque uno es consecuencia de otro, es que el Punto Resolutivo Tercero siga la suerte en su caso, del Punto Resolutivo Segundo. _____

El Punto Resolutivo Tercero ordena la vista como lo acaba de mencionar la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, como consecuencia de que se declara fundado en el Punto Resolutivo Segundo en contra del Presidente, entonces, en su momento le

pediría al Secretario del Consejo, que sean estos 2 Resolutivos que siguen la suerte el uno del otro, sean votados de manera particular atendiendo el planteamiento originalmente formulado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. ____ Pero, quisiera aprovechar esta oportunidad para retomar la reflexión final de la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, porque creo que es muy pertinente. _____

Déjenme decirlo así, porque esto es un mensaje que me gustaría, aprovechando el caso en específico, transmitir a todos los Organismos Públicos Locales Electorales y a todos los órganos colegiados en materia electoral, creo que la reflexión en este sentido vale para todos los órganos del Sistema Nacional de Elecciones, con independencia de que estemos hablando de organismos administrativos o bien de organismos jurisdiccionales, al Sistema Nacional de Elecciones todos tenemos que cuidar, y ese todos es un todos incluyente. _____

El funcionamiento de todos los órganos, como los que integran este Sistema que son colegiados, requiere de una altísima responsabilidad con independencia del rol específico que jueguen sus miembros, Consejeros Electorales, Presidentes o Presidentas, y me atrevo decir también Magistrados, Magistradas o Presidentes. ____

Tenemos una enorme responsabilidad que es la de ser los garantes de derechos políticos fundamentales y garantes de las reglas del juego democrático. _____

En el caso específico de los Organismos Públicos Locales Electorales, me parece que la construcción de consensos, y quiero decirlo no sin algunos momentos complejos, este órgano es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, este órgano en su vida ha pasado momentos complicados, pero creo que ha cumplido con la sociedad mexicana organizando elecciones libres, transparentes y confiables, en virtud de la alta responsabilidad de quienes entendemos la complejidad del funcionamiento de un órgano colegiado y de la responsabilidad, me atrevo a decir corresponsabilidad, que supone un funcionamiento de dicho órgano. _____

Creo que, eso tiene que traducirse en el caso específico como un mensaje de atención a los Organismos Públicos Locales Electorales, en este caso el que nos ocupa al Órgano Público Local Electoral del estado de Jalisco, es un órgano que efectivamente lo ha mencionado la Consejera Electoral Adriana Favela, ha venido mejorando, no sin tropiezos, su funcionamiento, pero esto implica una gran responsabilidad de los 7 miembros que lo integran, una responsabilidad del Presidente que tiene que coordinar los trabajos del colegiado y una responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes del Consejo General que tiene responsabilidades específicas en ese funcionamiento colegiado. _____

Y creo que este asunto, con independencia de cómo termine específicamente, porque estamos hablando de un Procedimiento Ordinario Sancionador, mandatado por el Tribunal Electoral, en fin, esta historia ya la han comentado mis colegas. _____

Creo que, es un buen llamado de atención de que siempre es pertinente valorar y ponderar la actuación de cada uno de los miembros de un órgano colegiado para mejorar su funcionamiento, es mi convicción luego de haber dado un seguimiento a lo que ha ocurrido en dicho órgano electoral que, por cierto, ya ha sido objeto de una renovación parcial por parte de este Consejo General, que ha mejorado. _____

Pero, los casos contenidos en ese expediente me parece que evidencian que no siempre fue así, y esto con independencia del caso en específico me parece que es un buen ejemplo de un llamado de atención para que todas las Consejeras y Consejeros y todas las Presidentas y Presidentes del Sistema Nacional de Elecciones asuman su responsabilidad en la construcción, nada sencilla, sin duda, compleja ciertamente, de un órgano colegiado, porque son garantes de los derechos y de las reglas del juego democrático, y eso para poder asumir la alta responsabilidad y aprender a convivir y a construir juntos. _____

Déjenme decirlo de una manera muy coloquial; para que haya un problema, se necesitan 2, y eso implica que todos los miembros de los órganos colegiados, como ha ocurrido en este, asuman el rol de altísima responsabilidad que deben jugar. Y la

confianza, he insistido, una y otra vez, que es un cheque en blanco que este Consejo General en sus nombramientos ha planteado._____

Creo que, es un momento oportuno, para hacer una reflexión, coincido con lo señalado por la Consejera Electoral Adriana Favela, somos órganos que estamos permanentemente escrutados y debemos tener una capacidad, una vocación de construcción de acuerdos, pero sobre todo, hacer bien el trabajo._____

Eso creo que es un buen llamado de atención, y aunque estamos hablando de un caso específico, me parece que todos quienes integramos el Sistema Nacional de Elecciones, y me refiero no solamente a quienes formamos parte de los órganos de decisión, sino a todos y cada uno de los funcionarios que laboran para, insisto, garantizar derechos políticos y para velar por el cumplimiento de las reglas de la democracia, tenemos una responsabilidad producto sí de un escrutinio público, pero sobre todo una vocación que no podemos claudicar._____

Creo que, es un buen momento para hacer un llamado, sobre todo en la última sesión del Consejo General del 2018, a menos que se nos mandate lo contrario, pero bueno, estamos a punto de arrancar un periodo de pausa que interrumpe plazos, para poder comenzar con esta reflexión a la que invito a todos los miembros del Sistema Nacional de Elecciones, no solo directivos de los órganos administrativos sino también a todos y cada uno de los funcionarios que integramos este Sistema derivado de la Reforma del año 2014._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Solo para sumarme a esta reflexión que usted ha formulado a este importante tema, también en atención a la reflexión de la Consejera Electoral Adriana Favela, pero quisiera apuntar que en la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales nos vamos a dar a la tarea de revisar un conjunto de aspectos que permitan garantizar esta colegiabilidad de los órganos electorales, en este caso, de los órganos

electorales de los estados de tipo administrativo, que son con los que directamente tiene competencia el Instituto Nacional Electoral. _____

Nos preocupan de manera sensible casos como éste donde eventualmente se pueda limitar el acceso a la información para el cumplimiento de las funciones de alguna de las Consejeras o de alguno de los Consejeros Electorales, y habrá que revisar con mucho cuidado las normas expedidas y evidentemente, propiciar las condiciones para que estos casos no se repliquen bajo ninguna consideración. _____

Tampoco es deseable que en la integración de las Comisiones de los órganos electorales de los estados se pueda privilegiar la integración de Comisiones de cierta manera, debe haber un trato absolutamente igualitario para todos los Consejeros, y una distribución acordada entre los Consejeros de las responsabilidades en los propios órganos electorales de los estados. _____

Hemos visto casos como el que ahora ha ocurrido con este procedimiento que lleva ya varios meses en su desahogo y que, por supuesto, insisto, no es deseable. _____

Bien lo ha mencionado la Consejera Electoral Adriana Favela, las condiciones en el interior de este órgano electoral se han mejorado, pero evidentemente no podemos permitir que casos como éste se repliquen en otros contextos. _____

Por eso justamente en el Programa de Trabajo de la Comisión de Vinculación para el año que sigue, estamos revisando aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la forma en que trabajan los órganos electorales, cómo horizontalizan la información, cómo se toman las decisiones correspondientes, cómo es el trato entre los propios Consejeros Electorales para evitar circunstancias de acoso laboral como el que, se ve en este procedimiento de manera específica. _____

Así que, en atención a estas reflexiones Consejero Presidente, sumaremos estas actividades a las de la Comisión de Vinculación y hemos, insisto, lo informo, iniciado estos trámites para presentar, incluso, algunas propuestas de modificaciones al Reglamento que rige la remoción, en su caso, de los propios Consejeros de los órganos electorales de los estados. _____

No vamos a permitir estancos en las presidencias de los Consejos Generales de estas instituciones, ni tratos discriminatorios en la forma en que se trabaja, ni tampoco vamos a permitir que haya ocasiones en las cuales, por ejemplo, los documentos para las sesiones de los Consejos Generales o de las Comisiones, circulen prácticamente sobre la mesa para que lo revisen de bote pronto los Consejeros Electorales y no tengan tiempo de analizar ese tipo de información. _____

Vimos algunos casos relativos, por ejemplo, a los acuerdos en materia de registro de candidaturas, que llama poderosamente la atención de cómo se desahogaron en estos órganos electorales, en algunos de ellos, no quiero generalizar el punto, pero evidentemente hace falta que esta institución tome algunas medidas en términos normativos para poder corregir estas situaciones y homogeneizar un trabajo mucho más horizontal, más colegiado, más respetuoso entre los integrantes de estos órganos. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Dado que no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le ruego que en los términos que le indiqué, tome la votación sobre este punto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto Consejero Presidente. _____

Les propongo una votación en lo general, excluyendo de la misma por lo que hace a los Puntos Resolutivos Segundo y Tercero, para que sean votados en lo particular. ____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 2.1. _____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, excluyendo, insisto, los Puntos Resolutivos Segundo y Tercero, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora, someto a su consideración, en lo particular, los Puntos Resolutivos Segundo y Tercero, en el sentido del Proyecto de Resolución que ha sido circulado previamente, como viene en el Proyecto. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario del Consejo. _____

Hay una moción del Consejero Electoral José Roberto Ruiz. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, estoy dándome cuenta que requiero que se tome la votación uno por uno, porque no es compatible. ____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: De acuerdo, tiene toda la razón el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, porque está de acuerdo con el Punto Resolutivo Segundo, pero en su intervención expresó no estar de acuerdo con el Punto Resolutivo Tercero, razón por la cual hay que diferenciar la votación Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

En caso de que los Resolutivos que van a ser materia de votación en lo particular se modifiquen, pasando de fundados a infundados, creo que sería conveniente una revisión de todo el documento para que no solamente cambien las conclusiones, sino las premisas y los argumentos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Así se hará, en su caso, Consejero Electoral, proceda usted Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo particular el Punto

Resolutivo Segundo del Proyecto que está a su consideración, como viene en el Proyecto, es decir, fundado. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

4 votos. _____

¿En contra? 7 votos. _____

No es aprobada la consecuencia es que es infundado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), y 7 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Y ahora someteré a su consideración el Punto Resolutivo Tercero. _____

Quienes estén a favor, en el sentido del Proyecto, que era la consecuencia, sírvanse manifestarlo, simplemente por certeza. _____

4 votos. _____

¿En contra? 7 votos. _____

No es aprobado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 7 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Y como bien indicaba el Consejero Electoral Benito Nacif, como consecuencia de esta votación se modificará para ser consiste en los considerandos correspondientes. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1466/2018) Pto. 2.1 _____

INE/CG1466/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016
QUEJOSA: ERIKA CECILIA RUVALCABA
CORRAL
DENUNCIADOS: GUILLERMO AMADO
ALCARAZ CROSS, CONSEJERO
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE JALISCO Y OTROS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE SUP-JDC-524/2017¹

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<i>Código Electoral de Jalisco</i>	Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco

¹ Consultable a fojas 2401 a 2474 del legajo 4 del expediente principal.

INE	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Medios de Impugnación	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
OPLE	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

ANTECEDENTES

I. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. El seis de julio del dos mil dieciséis, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de diversos actos atribuidos al Consejo General del *OPLE*.

El mencionado medio de impugnación quedó radicado en el expediente identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1679/2016, del índice de la *Sala Superior*.

II. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR. En sesión pública de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la *Sala Superior* dictó sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales SUP-JDC-1679/2016, en la cual, entre otras cuestiones, determinó dar vista a esta autoridad administrativa electoral nacional, a fin de conocer de las conductas de algunos de los integrantes del Consejo General del *OPLE*, que presuntamente constituyen acoso laboral, consistentes en agresiones verbales en contra de la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, que pueden constituir infracción a la normativa electoral.

III. REMISIÓN DE EXPEDIENTE. Mediante oficio SGA-JA-3182/2016, el Actuario adscrito a la *Sala Superior* remitió a esta autoridad, el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales señalado en el apartado que antecede.

IV. CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTO. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la *UTCE* tuvo por recibido el expediente del medio de impugnación mencionado y ordenó la integración del cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/TEPJF/CG/90/2016; asimismo, ordenó requerir a Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, lo siguiente:

Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis	Fecha de notificación
--	-----------------------

1- Indique el nombre de los Consejeros Electorales respecto de quiénes considera haber recibido acoso laboral o que realizaron o realizan acciones que le han impedido desempeñar correctamente sus funciones como Consejera Electoral.

9/11/2016

2- De ser el caso, señale las fechas de las sesiones de Comisión o de Consejo General o actos públicos en los que haya sido objeto de conductas que a su consideración constituyan actos de acoso laboral; así como los videos o grabaciones de audio en los que consten tales hechos.

Oficio INE-UT/11594/2016

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

V. DESAHOGO A REQUERIMIENTO. Mediante escrito² de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral desahogó el requerimiento mencionado en el apartado que antecede.

VI. CIERRE DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la *UTCE* declaró el cierre del cuaderno de antecedentes referido y ordenó iniciar el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en contra de los Consejeros Electorales del *OPLE*, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y de quien resulte responsable.

VII. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO³. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Titular de la *UTCE* ordenó registrar el procedimiento sancionador ordinario mencionado el cual quedó radicado con el número de expediente UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016; asimismo, admitió la queja presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y ordenó emplazar a Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejeros Electorales del *OPLE*.

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
1	Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12149/2016⁴ 28/11/2016	Notificación: 06/12/16 Plazo: 06/12/16 al 13/12/16	El 13 de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta al emplazamiento. ⁵
2	Sayani Mozka Estrada, Consejera Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12150/2016⁶ 28/11/2016	Notificación: 05/12/16 Plazo: 05/12/16 al 12/12/16	El 12 de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta al emplazamiento ⁷

² Consultable a fojas 3262 a 3267 del anexo VI del expediente.

³ Consultable a fojas 24 a 34 del legajo I del expediente principal.

⁴ Consultable a foja 56 del expediente.

⁵ Consultable a fojas 1095 a 1947 del expediente.

⁶ Consultable a foja 52 del expediente.

⁷ Consultable a fojas 131 a 575 del expediente.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
3	Mario Alberto Ramos González, Consejero Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12151/2016 ⁸ 28/11/2016	Notificación: 05/12/16 Plazo: 05/12/16 al 12/12/16	El 12 de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta al emplazamiento ⁹
4	Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12152/2016 ¹⁰ 28/11/2016	Notificación: 05/12/16 Plazo: 05/12/16 al 12/12/16	El 13 de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió respuesta al emplazamiento ¹¹

VIII. ALEGATOS¹². En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Titular de la *UTCE* ordenó dar vista a la denunciante y denunciados para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
1	Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, Consejera Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12500/2016 ¹³ 14/12/2016	Notificación: 20/12/16 Plazo: 20/12/16 al 10/01/17	El 10 de enero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de alegatos ¹⁴
2	Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Electoral del <i>OPLE</i> .	INE-UT/12504/2016 ¹⁵ 14/12/2016	Notificación: 20/12/16 Plazo: 20/12/16 al 10/01/17	El 10 de enero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de alegatos ¹⁶

⁸ Consultable a foja 48 del expediente.

⁹ Consultable a fojas 576 a 777 del expediente.

¹⁰ Consultable a foja 88 del expediente.

¹¹ Consultable a fojas 778 a 1094 del expediente.

¹² Consultable a fojas 1948 a 1951 del expediente

¹³ Consultable a foja 1959 del expediente.

¹⁴ Consultable a fojas 2007 a 2009 del expediente.

¹⁵ Consultable a foja 1991 del expediente.

¹⁶ Consultable a fojas 2010 a 2016 del expediente.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
3	Sayani Mozka Estrada, Consejera Electoral del <i>OPEL</i> .	INE-UT/12502/2016 ¹⁷ 14/12/2016	Notificación: 22/12/16 Plazo: 22/12/16 al 12/01/17	El 12 de enero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de alegatos ¹⁸
4	Mario Alberto Ramos González, Consejero Electoral del <i>OPEL</i> .	INE-UT/125012016 ¹⁹ 14/12/2016	Notificación: 20/12/16 Plazo: 20/12/16 al 10/01/17	El 9 de enero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta de alegatos ²⁰
5	Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del <i>OPEL</i> .	INE-UT/12503/2016 ²¹ 14/12/2016	Notificación: 21/12/16 Plazo: 21/12/16 al 11/01/17	El 10 de enero de dos mil diecisiete, se recibió respuesta a alegatos ²²

IX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, el Titular de la *UTCE* ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. El uno de marzo de dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, en su Vigésima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, ordenó reencauzar el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado como procedimiento de remoción previsto en el Reglamento de este Instituto para la Designación y la Remoción de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Electorales Locales.

XI. ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO DE LA *UTCE*. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE*, en cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias, reencauzó el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado a procedimiento de remoción previsto en el Reglamento de este Instituto para la Designación y la Remoción de Consejeros

¹⁷ Consultable a foja 1967 del expediente.

¹⁸ Consultable a fojas 2025 a 2030 del expediente.

¹⁹ Consultable a foja 1963 del expediente.

²⁰ Consultable a fojas 1996 a 2006 del expediente.

²¹ Consultable a foja 1978 del expediente.

²² Consultable a fojas 2017 a 2024 del expediente.

Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Electorales Locales.

XII. IMPUGNACIÓN ANTE LA SALA SUPERIOR. Los días dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y Sayani Mozka Estrada promovieron, ante la *Sala Superior*, sendos juicios electorales, para impugnar las determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias, y de la *UTCE*, mencionadas en los puntos X y XI que anteceden.

Los aludidos medios de impugnación quedaron registrados con las claves SUP-JE-17/2017, SUP-JE-18/2017, SUP-JE-19/2017 y SUP-JE-20/2017, respectivamente.

Mediante sendos acuerdos de diez de abril de dos mil diecisiete, la *Sala Superior* determinó reencauzar los juicios electorales SUP-JE-17/2017, SUP-JE-18/2017 y SUP-JE-20/2017 a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, los cuales quedaron radicados en los expedientes SUP-JDC-235/2017, SUP-JDC-236/2017 y SUP-JDC-237/2017, respectivamente.

XIII. SENTENCIAS DE LA SALA SUPERIOR. El once de abril de dos mil diecisiete, la *Sala Superior* dictó sentencia en el juicio electoral SUP-JE-19/2017, promovido por Griselda Beatriz Rangel Juárez, en el sentido de desechar de plano la demanda al haber sido presentada de manera extemporánea.

En la misma fecha, ese órgano jurisdiccional electoral resolvió, de manera acumulada, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-235/2017, SUP-JDC-236/2017 y SUP-JDC-237/2017, en el sentido de revocar las determinaciones asumidas por la Comisión de Quejas y Denuncias y de la *UTCE* mencionadas en los apartados X y XI que anteceden.

Asimismo, ese órgano jurisdiccional especializado ordenó a la *UTCE* elaborar un nuevo proyecto con base en los argumentos expuestos por los integrantes de la aludida Comisión relativas al cambio de vía para conocer y resolver la queja presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

XIV. ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REENCAUZAMIENTO. En cumplimiento a lo ordenado por la *Sala Superior*, el Titular de la *UTCE* elaboró la nueva propuesta para reencauzar el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado a procedimiento de remoción de Consejeros Electorales, a fin de someterla a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias.

XV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto determinó, por mayoría de votos, rechazar el aludido proyecto de reencauzamiento, ordenando que la queja presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, continúe siendo tramitada como procedimiento sancionador ordinario, y en su oportunidad, se someta a su análisis y discusión, el respectivo proyecto para resolver el fondo del asunto.

XVI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, el Titular de la *UTCE* ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente.

XVII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Primera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por mayoría de votos de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Beatriz Claudia Zavala Pérez, con el voto en contra del Consejero Electoral y Presidente de esa Comisión José Roberto Ruiz Saldaña, respecto a la vía de procedimiento en que se resuelve.

XVIII. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INE. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto emitió la Resolución identificada con la clave INE/CG189/2017, en la cual declaró infundado el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado.

XIX. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. Disconforme con la resolución mencionada en el antecedente XVIII, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual quedó radicado en el expediente clasificado con la clave SUP-JDC-524/2017.

XX. SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la *Sala Superior* dictó sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-524/2017²³, en el sentido de revocar la Resolución INE/CG189/2017. Las consideraciones, en lo que interesa, y el único Punto Resolutivo de esa determinación son al tenor siguiente:

[...]

VI. Estudio de fondo.

[...]

6.2. Materia del procedimiento sancionador de origen. Falta de exhaustividad y congruencia.

[...]

6.2.3. Caso concreto. Como ya se ha expuesto, la actora, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto local, promovió el juicio ciudadano SUP-JDC 1679/2016 en el que reclamó diversos actos que atribuyó a integrantes del Consejo General del Instituto local.

En el mencionado juicio ciudadano, la Sala Superior advirtió que la ahora actora estaba inconforme con distintos actos y hechos, de los que aquí interesa resaltar los siguientes:

- 1) La negativa a entregarle documentos e información que había solicitado repetidamente.**

²³ Consultable a fojas 2401 a 2474 del legajo 4 del expediente principal.

2) *La exclusión de la actora en la integración de las diversas comisiones que se formaron en el instituto local.*

3) *El acoso laboral, manifestado por agresiones verbales en las sesiones del Consejo General del Instituto local.*

Ahora, para la Sala Superior los puntos marcados con los números 1) y 2) fueron materia del juicio ciudadano, y respecto de los cuales se resolvió:

A. *Consideró fundados los argumentos relacionados con la negativa a entregar a la actora la información que había solicitado, a pesar de que, en su carácter de consejera, los funcionarios requeridos tenían el deber de dar respuesta a sus solicitudes y entregarle la información.*

B. *Calificó de fundados pero inoperantes los argumentos relacionados con la exclusión de la actora de las comisiones conformadas. Fundado, porque se tuvo por acreditado que la enjuiciante fue excluida indebidamente de las comisiones, pero inoperante porque el instituto electoral modificó los acuerdos a través de los cuales se conformaron las comisiones e incorporó a la denunciante. De esta manera, se ordenó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto local que realizara todas las acciones necesarias a fin de salvaguardar y garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de los integrantes de dicho consejo, para lo cual debía instruir y dictar las medidas administrativas indispensables a fin de ordenar a todos los órganos del instituto que atendieran con la debida diligencia y oportunidad las peticiones de información de los consejeros, y para que en la integración de las comisiones internas todos los consejeros ocuparan un número similar de este tipo de órganos.*

Con relación al acoso laboral aducido por la actora, esta Sala Superior consideró que ese tema no era materia del juicio ciudadano, sino que en todo caso debía ser considerado como una queja que debía ser conocida por el INE.

Por ello, se determinó enviar las constancias originales con las cuales se había integrado el expediente del medio de impugnación al rubro indicado, para que, en plenitud de atribuciones y en el ámbito de su competencia, fuera el Consejo General, el órgano en conocer la denuncia de acoso laboral.

Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional se concretó a resolver el planteamiento de la actora en cuanto a su derecho político-electoral de ejercer su encargo por ser competente para ello, pero no del acoso laboral denunciado por la actora, lo cual es competencia del Consejo General.

En este sentido, le correspondía a esa autoridad administrativa realizar una investigación integral sobre el acoso laboral denunciado por la actora, en términos de lo resuelto por esta Sala en su ejecutoria SUP-JDC-1679/2016, y tomaren cuenta los hechos probados en ésta, al tratarse de eventos vinculados entre sí, que sustentaron la denuncia de acoso laboral.

*Establecido lo anterior, esta Sala superior considera que **el Consejo General redujo de manera incorrecta el análisis de las conductas denunciadas por la parte demandante, al contenido de las expresiones hechas durante el desarrollo de las diversas sesiones públicas celebradas por el órgano local electoral y mencionadas por la demandante en su escrito que dio origen al referido juicio ciudadano y al procedimiento sancionador.***

Ello es así, porque la demanda inicial constituye un todo en el que la demandante hizo una narrativa de hechos y actos complejos, que a su criterio debían llevar a la conclusión de que fue víctima de acoso laboral, en tanto que se le impidió el libre desempeño de sus funciones a partir de acciones intimidatorias u obstructivas de su actuar.

De esta manera, cada una de las conductas y circunstancias afirmadas en la demanda de origen, fueron parte de una narrativa amplia, de la que a juicio de la actora es posible desprender características de sistematicidad y prolongación en el tiempo, que a la postre podrían llevar a la conclusión de que sufrió acoso laboral.

*Con base en lo señalado, **el estudio a cargo de la responsable no se debió limitar a analizar si las expresiones realizadas durante las sesiones del órgano electoral representaban, en forma aislada, conductas de acoso laboral.***

*Por el contrario, **la responsable debió analizar el conjunto de hechos que quedaron probados ante esta Sala Superior y los distintos hechos que fueron probados como consecuencia de la investigación que realizó en el***

procedimiento sancionador, para estar en aptitud de determinar, si cada uno de esos hechos analizado en lo individual y luego de manera contextual en relación con los demás hechos probados y con las circunstancias de tiempo y de duración de las conductas, podía llevar a concluir que existió o no acoso laboral.

Es decir, la responsable debió partir de los hechos probados ante esta Sala Superior, tales como la exclusión de la demandante en la integración de comisiones del órgano electoral local y la negativa injustificada de entregarle información necesaria para el desempeño de sus funciones como consejera, así como de las circunstancias relativas al tiempo en el que estas irregularidades se mantuvieron vigentes.

Asimismo, debió analizar si esos hechos y circunstancias, relacionados con las expresiones realizadas durante las sesiones públicas, que también quedaron probadas y el resto de material probatorio con el que contaba podían llevar a encontrar elementos que dieran consistencia a la hipótesis sostenida por la demandante, relativa a que los integrantes del consejo electoral a los que hizo referencia en su demanda realizaron actos sistemáticos, continuados y relacionados entre sí, que se tradujeron en acoso laboral y en el impedimento de su desempeño pleno como funcionaría electoral.

No es obstáculo a lo señalado, que la Sala Superior haya impuesto consecuencias a los hechos que tuvo por acreditados desde la perspectiva de violación a derechos político-electorales de la demandante e, incluso, haya exigido a las autoridades señaladas como responsables en el juicio SUP-JDC-1679/2016 garantías de no repetición de los actos de molestia relativos a la exclusión de la actora en la integración de comisiones y la negativa de entregarle información necesaria para sus funciones.

Ello es así, porque si bien la responsable no podía pronunciarse en el sentido de si esas conductas concretas debían o no ser motivo de imposición de alguna sanción en el procedimiento sancionador electoral, esa circunstancia no impedía que las tomara en cuenta como hechos probados dentro de un contexto o narrativa amplia, a partir de la cual la actora pretende acreditar que existieron conductas que a su juicio son sistemáticas, continuadas e interrelacionadas que se tradujeron en acoso laboral en su perjuicio.

VII. Efectos de la presente sentencia

Con base en lo razonado, se debe revocar la Resolución impugnada para que la autoridad responsable dicte una nueva en la que, a partir de los hechos probados ante esta Sala Superior en el juicio SUP-JDC-1679/2016, de las circunstancias de duración de esas conductas, de los diversos hechos probados durante el procedimiento sancionador electoral y del resto de pruebas que obran en dicho procedimiento analice si existieron o no actos de acoso laboral en perjuicio de la actora.

Ello implicará el análisis de la demanda original en su integridad, la apreciación de los hechos que quedaron probados ante esta Sala Superior, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la determinación de cuáles son los hechos que quedaron probados en el procedimiento sancionador electoral y cuál es el alcance de todas las pruebas desahogadas en relación con lo denunciado, todo ello en relación con la narración completa de la demandante y de la hipótesis planteada en su demanda, a efecto de generar conclusiones en el sentido de si la hipótesis se constata o no.

El sentido de lo resuelto hace innecesario el examen del resto de los agravios relacionados con el alcance de las pruebas que valoró la responsable o la omisión de analizar alguna de las sesiones mencionadas en la demanda original, porque la autoridad responsable quedará vinculada por efecto de esta ejecutoria a analizar integralmente la demanda, incluidos los planteamientos sobre todas las sesiones públicas mencionadas en la demanda de origen y los demás elementos probatorios en los términos señalados y, a partir de una nueva valoración integral, dictar una nueva resolución.

Lo resuelto no prejuzga sobre el resultado del nuevo análisis al que se vincula a la autoridad responsable, porque la valoración y el examen al que queda sujeta lo hará en plenitud de las facultades que la ley le concede, dentro del procedimiento ordinario sancionador en el que actúa.

VIII. RESOLUTIVO:

ÚNICO. *Se revoca la resolución impugnada para el efecto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dicte una nueva en los términos señalados en las consideraciones de este fallo.*
[...]

Lo subrayado es de esta Resolución.

XXI. RECEPCIÓN DE LA SENTENCIA. En proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete²⁴, el Titular de la *UTCE* tuvo por recibida la sentencia dictada por la Sala Superior, así como las constancias originales del expediente al rubro indicado.

XXII. REQUERIMIENTO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL *OPLE*. Mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE* requirió a la Secretaria Ejecutiva del *OPLE* a fin de que proporcionara el domicilio de diversos servidores públicos de esa autoridad administrativa electoral local, el cual fue desahogado el inmediato día veintiséis.

XXIII. EMPLAZAMIENTO A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL *OPLE*²⁵. En proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE* ordenó emplazar a los siguientes funcionarios o ex–funcionarios públicos del *OPLE*.

No.	Emplazado	Oficio	Fecha de notificación	Plazo para desahogar emplazamiento	Fecha de contestación al emplazamiento
1	Luis Rafael Montes De Oca Valadez Ex Secretario Ejecutivo	INE-UT/8423/2017 ²⁶	29/11/2017	Del 30/11/2017 al 06/12/2017	05/12/2017 ²⁷

²⁴ Consultable a fojas 2475 a 2480 del legajo 4 del expediente.

²⁵ Consultable a fojas 2631 a 2664 del legajo 4 del expediente.

²⁶ Consultable a fojas 2692 a 2696 del legajo 5 del expediente.

²⁷ Consultable a fojas 3002 a 3013 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No.	Emplazado	Oficio	Fecha de notificación	Plazo para desahogar emplazamiento	Fecha de contestación al emplazamiento
2	Ernesto Gerardo Castellanos Silva Ex Director de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales	INE-UT/8424/2017 ²⁸	13/11/2017	Del 14/11/17 al 21/11/17	21/11/2017 ²⁹
3	Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora Ex Directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales	INE-UT/8425/2017 ³⁰	13/11/2017	Del 14/11/17 al 21/11/17	21/11/2017 ³¹
4	Luis Gabriel Mota Ex Director General y Ex Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica	INE-UT/8426/2017 ³²	No se pudo realizar la notificación ³³	No se pudo realizar la notificación	No se pudo realizar la notificación
5	Juan Carlos Franco Jiménez Ex Director de Administración y Finanzas	INE-UT/8427/2017 ³⁴	Estrados ³⁵ 22/11/2017	Del 23/11/17 al 29/11/17	29/11/2017 ³⁶
6	Moisés Pérez Vega Ex Director de Educación Cívica	INE-UT/8428/2017 ³⁷	14/11/2017	Del 15/11/17 al 22/11/17	22/11/2017 ³⁸
7	José de Jesús Gómez Valle Ex Director de Comunicación Social	INE-UT/8429/2017 ³⁹	14/11/2017	Del 15/11/17 al 22/11/17	22/11/2017 ⁴⁰

²⁸ Consultable a fojas 2697 a 2700 del legajo 5 del expediente.

²⁹ Consultable a fojas 2929 a 2933 del legajo 5 del expediente.

³⁰ Consultable a fojas 2701 a 2704 del legajo 5 del expediente.

³¹ Consultable a fojas 2934 a 2938 del legajo 5 del expediente.

³² Consultable a foja 2705 del legajo 5 del expediente.

³³ Consultable a fojas 2706 a 2709 del legajo 5 del expediente.

³⁴ Consultable a foja 2710 del legajo 5 del expediente.

³⁵ Consultable a fojas 2711 a 2718 del legajo 5 del expediente.

³⁶ Consultable a fojas 2939 a 2942 del legajo 5 del expediente.

³⁷ Consultable a fojas 2719 a 2751 del legajo 5 del expediente.

³⁸ Consultable a fojas 2943 a 2950 del legajo 5 del expediente.

³⁹ Consultable a fojas 2752 a 2781 del legajo 5 del expediente.

⁴⁰ Consultable a fojas 2951 a 2954 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No.	Emplazado	Oficio	Fecha de notificación	Plazo para desahogar emplazamiento	Fecha de contestación al emplazamiento
8	Ramiro Feliciano Garzón Contreras Ex Director de Informática	INE-UT/8430/2017 ⁴¹	13/11/2017	Del 14/11/17 al 21/11/17	21/11/2017 ⁴²
9	Olga Patricia Vega Guzmán Ex Directora de la Unidad de Transparencia e Información Pública	INE-UT/8431/2017 ⁴³	22/11/2017	Del 23/11/17 al 29/11/17	No presentó escrito
10	Carlos Alberto Silva Moreno Ex Director de la Unidad Editorial	INE-UT/8432/2017 ⁴⁴	21/11/2017	Del 22/11/17 al 28/11/2017	28/11/2017 ⁴⁵
11	Héctor Javier Díaz Sánchez Ex Director de la Unidad Técnica de Fiscalización	INE-UT/8433/2017 ⁴⁶	14/11/2017	Del 15/11/17 al 22/11/17	22/11/2017 ⁴⁷
12	Álvaro Fernando Munguía Martínez Ex Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral	INE-UT/8434/2017 ⁴⁸	13/11/2017	Del 14/11/17 al 21/11/17	21/11/2017 ⁴⁹ El escrito carece de firma autógrafa
13	Jorge Alberto Alatorre Flores Ex Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral	INE-UT/8435/2017 ⁵⁰	22/11/2017	Del 23/11/17 al 29/11/17	29/11/2017 ⁵¹

⁴¹ Consultable a fojas 2782 a 2785 del legajo 5 del expediente.

⁴² Consultable a fojas 2955 a 2959 del legajo 5 del expediente.

⁴³ Consultable a fojas 2786 a 2823 del legajo 5 del expediente.

⁴⁴ Consultable a fojas 2824 a 2827 del legajo 5 del expediente.

⁴⁵ Consultable a fojas 2960 a 2963 del legajo 5 del expediente.

⁴⁶ Consultable a fojas 2828 a 2857 del legajo 5 del expediente.

⁴⁷ Consultable a fojas 2964 a 2967 del legajo 5 del expediente.

⁴⁸ Consultable a fojas 2858 a 2861 del legajo 5 del expediente.

⁴⁹ Consultable a fojas 2968 a 2972 del legajo 5 del expediente.

⁵⁰ Consultable a fojas 2862 a 2865 del legajo 5 del expediente.

⁵¹ Consultable a fojas 2973 a 2976 del legajo 5 del expediente.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

No.	Emplazado	Oficio	Fecha de notificación	Plazo para desahogar emplazamiento	Fecha de contestación al emplazamiento
14	Ana Violeta Iglesias Escudero Ex Directora de Prerrogativas a Partidos Políticos	INE-UT/8436/2017 ⁵²	14/11/2017	Del 15/11/17 al 22/11/17	22/11/2017 ⁵³
15	Tlacaél Jiménez Briseño Ex Director Jurídico	INE-UT/8437/2017 ⁵⁴	14/11/2017	Del 15/11/17 al 22/11/17	22/11/2017 ⁵⁵

XXIV. REQUERIMIENTO AL OPLE DE JALISCO Y AL DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES DE LA DIRECCION JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL⁵⁶. Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE* requirió a la Secretaria Ejecutiva del *OPLE* a fin de que proporcionara el domicilio de los ex Consejeros Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada, el cual fue desahogado el inmediato día quince.

Asimismo, se requirió a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, información para poder realizar la localización de Luis Gabriel Mota, Ex Director General y Ex Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, mismo que fue desahogado el inmediato día trece.

XXV. EMPLAZAMIENTO A LUIS GABRIEL MOTA, EX DIRECTOR GENERAL Y EX DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA⁵⁷. En proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la *UTCE* ordenó emplazar al siguiente ex–funcionario público del *OPLE*.

⁵² Consultable a fojas 2866 a 2895 del legajo 5 del expediente.

⁵³ Consultable a fojas 2977 a 2980 del legajo 5 del expediente.

⁵⁴ Consultable a fojas 2896 a 2928 del legajo 5 del expediente.

⁵⁵ Consultable a fojas 2981 a 2984 del legajo 5 del expediente.

⁵⁶ Consultable a fojas 2985 a 2991 del legajo 5 del expediente.

⁵⁷ Consultable a fojas 3021 a 3029 del legajo 5 del expediente.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

No.	Emplazado	Oficio	Fecha de notificación	Plazo para desahogar emplazamiento	Fecha de contestación al emplazamiento
1	Luis Gabriel Mota Ex Director General y Ex Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica	INE-UT/9744/2017 ⁵⁸	22/01/2018	Del 23/01/2018 al 29/01/2018	29/01/2018 ⁵⁹

XXIV. ALEGATOS⁶⁰. En acuerdo de siete de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* ordenó dar vista a la denunciante y denunciados para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
1	Erika Cecilia Ruvalcaba Corral , Consejera Electoral	INE-UT/1269/2018 ⁶¹ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/18 ⁶²
2	Guillermo Amado Alcaraz Cross , Consejero Presidente	INE-UT/1265/2018 ⁶³ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	20/02/18 ⁶⁴
3	Sayani Mozka Estrada , Ex Consejera Electoral	INE-UT/1267/2018 ⁶⁵ 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/2018	20/02/18 ⁶⁶

⁵⁸ Consultable a fojas 3054 a 3063 del legajo 5 del expediente.

⁵⁹ Consultable a fojas 3065 a 3068 del legajo 5 del expediente.

⁶⁰ Consultable a fojas 3069 a 3073 del legajo 5 del expediente.

⁶¹ Consultable a fojas 3133 a 3140 del legajo 5 del expediente.

⁶² Consultable a fojas 3248 a 3266 del legajo 5 del expediente.

⁶³ Consultable a fojas 3085 a 3092 del legajo 5 del expediente.

⁶⁴ Consultable a fojas 3222 a 3228 del legajo 5 del expediente.

⁶⁵ Consultable a fojas 3101 a 3104 del legajo 5 del expediente.

⁶⁶ Consultable a fojas 3243 a 3245 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
4	Mario Alberto Ramos González, Ex Consejero Electoral	INE-UT/1268/2018 ⁶⁷ 7/02/2018	No se pudo realizar la notificación	21/02/2018 ⁶⁸
5	Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral	INE-UT/1266/2018 ⁶⁹ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	20/02/18 ⁷⁰
6	Luis Rafael Montes De Oca Valadez, Ex Secretario Ejecutivo	INE-UT/1270/2018 ⁷¹ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁷²
7	Ernesto Gerardo Castellanos Silva, Ex Director de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales	INE-UT/1271/2018 ⁷³ 7/02/2018	Notificación: 19/02/2018 Plazo: 20/02/2018 al 26/02/2018	21/02/2018 ⁷⁴
8	Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Ex Directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales	INE-UT/1272/2018 ⁷⁵ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	20/02/18 ⁷⁶

⁶⁷ Consultable a fojas 3197 a 3203 del legajo 5 del expediente.

⁶⁸ Consultable a fojas 3272 a 3274 del legajo 5 del expediente.

⁶⁹ Consultable a fojas 3125 a 3132 del legajo 5 del expediente.

⁷⁰ Consultable a fojas 3219 a 3221 del legajo 5 del expediente.

⁷¹ Consultable a fojas 3093 a 3100 del legajo 5 del expediente.

⁷² Consultable a fojas 3270 a 3271 del legajo 5 del expediente.

⁷³ Consultable a fojas 3149 a 3152 del legajo 5 del expediente.

⁷⁴ Consultable a fojas 3279 a 3281 del legajo 5 del expediente.

⁷⁵ Consultable a fojas 3153 a 3160 del legajo 5 del expediente.

⁷⁶ Consultable a fojas 3239 a 3240 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
9	Luis Gabriel Mota , Ex Director General y Ex Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica	INE-UT/1273/2018 ⁷⁷ 7/02/2018	Notificación: 20/02/2018 Plazo: 21/02/2018 al 27/02/2018	20/02/18 ⁷⁸
10	Juan Carlos Franco Jiménez , Ex Director de Administración y Finanzas	INE-UT/1274/2018 ⁷⁹ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁸⁰
11	Moisés Pérez Vega , Ex Director de Educación Cívica	INE-UT/1275/2018 ⁸¹ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁸²
12	José de Jesús Gómez Valle , Ex Director de Comunicación Social	INE-UT/1276/2018 ⁸³ 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/18	20/02/18 ⁸⁴
13	Ramiro Feliciano Garzón Contreras , Ex Director de Informática	INE-UT/1277/2018 ⁸⁵ 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/18	20/02/18 ⁸⁶

⁷⁷ Consultable a fojas 3209 a 3216 del legajo 5 del expediente.

⁷⁸ Consultable a fojas 3229 a 3230 del legajo 5 del expediente.

⁷⁹ Consultable a fojas 3161 a 3169 del legajo 5 del expediente.

⁸⁰ Consultable a fojas 3268 a 3269 del legajo 5 del expediente.

⁸¹ Consultable a fojas 3141 a 3148 del legajo 5 del expediente.

⁸² Consultable a fojas 3275 a 3276 del legajo 5 del expediente.

⁸³ Consultable a fojas 3117 a 3120 del legajo 5 del expediente.

⁸⁴ Consultable a fojas 3241 a 3242 del legajo 5 del expediente.

⁸⁵ Consultable a fojas 3105 a 3108 del legajo 5 del expediente.

⁸⁶ Consultable a fojas 3231 a 3232 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
14	Olga Patricia Vega Guzmán , Ex Directora de la Unidad de Transparencia e Información Pública	INE-UT/1278/2018 ⁸⁷ 7/02/2018	No se pudo realizar la notificación	No presentó escrito
15	Carlos Alberto Silva Moreno , Ex Director de la Unidad Editorial	INE-UT/1279/2018 ⁸⁸ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁸⁹
16	Héctor Javier Díaz Sánchez , Ex Director de la Unidad Técnica de Fiscalización	INE-UT/1280/2018 ⁹⁰ 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/18	20/02/18 ⁹¹
17	Álvaro Fernando Munguía Martínez , Ex Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral	INE-UT/1281/2018 ⁹² 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/18	20/02/18 ⁹³
18	Jorge Alberto Alatorre Flores , Ex Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral	INE-UT/1282/2018 ⁹⁴ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁹⁵

⁸⁷ Consultable a fojas 3204 a 3208 del legajo 5 del expediente.

⁸⁸ Consultable a fojas 3179 a 3187 del legajo 5 del expediente.

⁸⁹ Consultable a fojas 3277 a 3278 del legajo 5 del expediente.

⁹⁰ Consultable a fojas 3121 a 3124 del legajo 5 del expediente.

⁹¹ Consultable a fojas 3235 a 3236 del legajo 5 del expediente.

⁹² Consultable a fojas 3109 a 3112 del legajo 5 del expediente.

⁹³ Consultable a fojas 3233 a 3234 del legajo 5 del expediente.

⁹⁴ Consultable a fojas 3170 a 3178 del legajo 5 del expediente.

⁹⁵ Consultable a fojas 3282 a 3283 del legajo 5 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

No	NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN PLAZO	FECHA DE FORMULACIÓN DE ALEGATOS
19	Ana Violeta Iglesias Escudero, Ex Directora de Prerrogativas a Partidos Políticos	INE-UT/1283/2018 ⁹⁶ 7/02/2018	Notificación: 14/02/2018 Plazo: 15/02/2018 al 21/02/2018	21/02/2018 ⁹⁷
20	Tlacaél Jiménez Briseño, Ex Director Jurídico	INE-UT/1284/2018 ⁹⁸ 7/02/2018	Notificación: 13/02/2018 Plazo: 14/02/2018 al 20/02/18	20/02/18 ⁹⁹

XXV. OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE. El tres de octubre de dos mil dieciocho, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del *OPLE* del estado de Jalisco, presentó escrito ante la oficialía de partes de la Junta Local de este Instituto en el estado de Jalisco, mediante el cual ofrece lo que denomina “prueba superviniente” consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación identificada con la clave 66836/2018 de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del estado de Jalisco, que contiene las actuaciones de la carpeta de investigación FED/PEPADE/UNAI-JAL/0000864/2016.

XXVI. DESECHAMIENTO DE PRUEBA. En acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Titular de la *UTCE* determinó que no había lugar a admitir la probanza de referencia, en razón de que, de su contenido, no se advirtió que **guardara relación directa o indirecta con los hechos controvertidos** materia del presente procedimiento.

XXVII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, el Titular de la *UTCE* ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente.

⁹⁶ Consultable a fojas 3188 a 3196 del legajo 5 del expediente.

⁹⁷ Consultable a fojas 3284 a 3285 del legajo 5 del expediente.

⁹⁸ Consultable a fojas 3113 a 3116 del legajo 5 del expediente.

⁹⁹ Consultable a fojas 3237 a 3238 del legajo 5 del expediente.

XXVIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en el que se propuso declarar fundado el presente procedimiento por lo que respecta a la conducta atribuible al Consejero Presidente del OPLE Jalisco, mismo que se aprobó por mayoría de votos de las Consejeras Electorales Beatriz Claudia Zavala Pérez, Adriana Margarita Favela Herrera, con el voto en contra del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández.

XXIX. SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En la sesión del Consejo General de esta fecha, el máximo órgano de decisión analizó el proyecto aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias, determinando, por mayoría de siete votos de los Consejeros, rechazar el proyecto primigenio, bajo las directrices, motivos y fundamentos que sustentan la presente Resolución y, en consecuencia, ordenar el engrose correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo General es competente para conocer y resolver el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, así como en lo determinado por la *Sala Superior* en su sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1679/2016; de ahí que se surta la competencia en favor de este órgano colegiado, para realizar el pronunciamiento respectivo, y en su caso, determinar o no la existencia de una infracción de carácter administrativa susceptible de ser sancionada, en este caso, el presunto acoso laboral del que dice fue objeto la hoy denunciante, por parte de diversos servidores y/o ex servidores del organismo público electoral en el estado de Jalisco.

Cabe destacar, que el mencionado órgano jurisdiccional especializado, al dictar la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-524/2017, declaró inoperante el concepto de agravio relativo a que la materia de queja que hoy nos ocupa, debía ser conocida mediante un procedimiento de remoción de Consejeros Electorales y no en procedimiento sancionador ordinario.

Lo anterior, porque, a consideración de la jurisdicción, lo inoperante del concepto de agravio radicó en que la demandante no impugnó, en tiempo y forma, el acuerdo en el cual la *UTCE* admitió la queja mediante un procedimiento sancionador ordinario, caso en el cual, la denunciante consintió ese acto.

Asimismo, la mencionada *Sala Superior*, al resolver los diversos juicios electorales SUP-JE-102/2016 y SUP-JE-107/2016, así como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-5/2017, se pronunció en el sentido que, **asuntos similares al que ahora se resuelve, deben ser conocidos a través del procedimiento sancionador ordinario**, toda vez que es la vía en que la *UTCE* puede llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre los hechos que son motivo de denuncia y determinar si éstos pueden afectar el debido desempeño del encargo de la denunciante y evaluar si trasciende al funcionamiento del órgano electoral del que forma parte.

En este contexto, **el INE es competente para conocer respecto de las conductas probablemente violatorias de la normativa electoral, cuando éstas afecten el correcto funcionamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales**, por parte de los Consejeros Electorales, en este caso del *OPLE*, con base en las siguientes consideraciones:

Conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la *Constitución*, las autoridades a cargo de la organización de las elecciones, se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccional en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, pues en ambos casos, la finalidad que persigue el órgano reformador de la Carta Magna es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta

función que les es encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normativa aplicable.

En este sentido, entre los principios que rigen el actuar de las autoridades electorales se encuentra el de profesionalismo, mismo que deben cumplir los integrantes de los Organismos Públicos Electorales Locales, entre ellos, los Consejeros Electorales.

Tal principio, impone el deber de preparación en profesiones que la legislación requiera de una autorización expresa y especial por parte del Estado, dada su complejidad, o bien, su trascendencia en la vida de los habitantes del Estado.

Por ello, en las entidades federativas, se debe garantizar, entre otros aspectos, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme lo establece nuestra *Constitución*, y las leyes, debiendo ser profesionales en el desempeño de su encargo.

En esa lógica, el sistema electoral cuenta con órganos administrativos permanentes, como son los institutos electorales (nacional y locales) en los que, el profesionalismo, es la premisa en su actuar, en tanto que las funciones que realizan tales órganos y funcionarios, requieren de alta calificación profesional para llevar a cabo una serie de actos técnicos y materiales de basta complejidad que, concatenados, conforman los procesos electorales federal y locales.

En este sentido, el *INE* tiene facultades para conocer de los hechos que motivaron la denuncia, consistentes en presuntos actos que constituyen acoso laboral atribuidos al Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, a la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel, a los entonces Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, al ex Secretario Ejecutivo Luis Rafael Montes de Oca Valadez, así como a los diversos Ex Directores de área Ernesto Gerardo Castellanos Silva, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Luis Gabriel Mota, Juan Carlos Franco Jiménez, Moisés Pérez Vega, José de Jesús Gómez Valle, Ramiro Feliciano Garzón Contreras, Olga Patricia Vega Guzmán, Carlos Alberto Silva Moreno, Héctor Javier Díaz Sánchez, Álvaro Fernando Munguía

Martínez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Ana Violeta Iglesias Escudero y Tlacaél Jiménez Briseño, todos del *OPLE*, presuntamente perpetrados en contra de la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano colegiado el planteamiento hecho por el ex Secretario Ejecutivo y los ex Directores de área del *OPLE*, relativo a que esta autoridad carece de competencia para conocer y resolver sobre los hechos motivo de denuncia que se les atribuye, porque, a su consideración, la autoridad competente para conocer y resolver la controversia es la Contraloría General de ese Instituto Electoral local.

Al respecto, es pertinente indicar, como ya se mencionó, que la competencia para conocer del presente asunto se da, conforme a la vista ordenada por la *Sala Superior* al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-524/2017, en la cual, la jurisdicción ordenó remitir el presente asunto a esta autoridad electoral nacional, a fin de que conozca y, en su caso, sancione las faltas denunciadas por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Lo anterior, en el entendido de que el estudio del presente asunto se debe llevar de una forma integral y no de manera aislada, contrario a como lo pretenden los denunciados, razón por la cual, no es conforme a Derecho dividir la continencia de la causa, a fin de cumplir con los parámetros exigidos por el Tribunal Electoral, en el fallo que por esta vía se cumplimenta.

Del mismo modo, tampoco les asiste la razón a los denunciados cuando señalan que esta autoridad carece de competencia para conocer y resolver sobre los hechos motivo de la denuncia que se les atribuye, toda vez que el catálogo de servidores públicos a que hace referencia el artículo 478 de la LGIPE, se refiere única y exclusivamente a servidores este Instituto Nacional Electoral, y no así a personal dependiente del *OPLE*.

Ello es así, ya que, como ya se mencionó, de conformidad con lo resuelto por la *Sala Superior* al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-524/2017, el análisis

de la queja planteada por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral se debe llevar de una forma integral y no de manera aislada, además de incluir los hechos que quedaron probados ante la Sala Superior, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que necesariamente incluye el actuar del ex Secretario Ejecutivo y los ex Directores de área del OPLE, por lo que respecta a la negativa injustificada de entregarle información necesaria para el desempeño de sus funciones como consejera.

Por tanto, se concluye que esta autoridad es competente para conocer y resolver sobre las conductas atribuidas a la totalidad de los sujetos denunciados.

SEGUNDO. ESTUDIO DEL FONDO

1. Planteamiento de la quejosa en la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1679/2016.

De la lectura integral del escrito de impugnación signado por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, mismo que motivó el juicio para la protección de los derechos político-electorales SUP-JDC-1679/2016, se advierte que la denunciante argumentó, sustancialmente, lo siguiente:

- **De manera reiterada se la ha negado información**, la cual es necesaria para ejercer el cargo de Consejera Electoral en el OPLE, dado que desde dos mil catorce ha requerido información a diferentes áreas del Instituto electoral local sin que le hayan proporcionado ésta, bajo el argumento que por instrucciones del Consejero Presidente no era posible otorgársela.
- Desde octubre de dos mil catorce, **en forma sistemática ha sido excluida para integrar las distintas comisiones del Consejo General del OPLE**, en razón que solo integraba dos comisiones permanentes y una temporal en comparación con otros consejeros.
- **El acuerdo IEPC-ACG-031/2016**, aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo General del OPLE, **vulnera su derecho de ejercicio al cargo en condiciones de igualdad, porque se le excluye de participar en la**

comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, dado que fue la única integrante de la Comisión temporal del Servicio Profesional Electoral que no formó parte de la nueva comisión con el carácter permanente, con lo cual existe un trato diferenciado del resto de los consejeros.

- **Es la Consejera que menos comisiones integraba, al formar parte de dos comisiones permanentes (Educación Cívica y Organización Electoral) y una temporal (Reglamentos), es decir, menos de las tres a las que tiene derecho conforme al artículo 136 del Código Electoral de Jalisco, en tanto que, el resto de los Consejeros participaban en más de tres comisiones.**
- **Argumenta que la participación de la hoy quejosa para integrar la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, fue modificada por el Consejero Presidente durante la sesión en la que se aprobó dicha comisión, esto, porque ella votó en contra de la creación e integración de la Comisión de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.**
- **Con base en lo anterior, a consideración de la denunciante, los actos mencionados han afectado su dignidad como consejera, ya que constituyen un castigo ante su manera de votar.**
- **Los integrantes del Consejo General del OPLE, la acosan laboralmente, en razón de que durante el desarrollo de diversas sesiones públicas de ese órgano colegiado, en particular la llevada a cabo el veintidós de enero de dos mil dieciséis, se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo General, el Proyecto de Acuerdo con el cual se pretendía dar cumplimiento a lo ordenado por el INE, mediante Acuerdo INE/CG865/2016, a fin de nombrar a los Directores y Secretario Ejecutivo del mencionado Instituto electoral local.**

En la mencionada sesión pública, **al disentir de la propuesta presentada, fue motivo para ser agredida de manera verbal por el Consejero Presidente y otros Consejeros Electorales, al llevar a cabo “constantes descalificaciones” y “ataque personal”.**

- **El Consejero Presidente ha consentido que durante las sesiones se permitan alusiones personales hacia ella**, lo cual es contrario a lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral local, siendo que los artículos 137 del Código Electoral de Jalisco, y 7 fracciones IV y V, del citado Reglamento, prevén que el Presidente del Consejo debe garantizar el orden de las sesiones, lo que, en el particular, no ha ocurrido.
- Se vulnera su derecho político-electoral de ejercer el cargo, dado que se pretende disminuir, menoscabar y limitar el ejercicio de su función, así como incidir en la determinación de su voto, dado que **las intervenciones de los Consejeros Electorales exceden el límite a una discusión ríspida o debate al interior del órgano colegiado.**
- En la sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, al abordar asuntos generales, **el Consejero Presidente no accedió a tratar un tema propuesto por ella, en tanto que sí lo ha hecho respecto de peticiones hechas por otros Consejeros** y cita, como ejemplo, la sesión de veintidós de enero de ese año, en la cual una Consejera solicitó, retirar un asunto del orden del día.

Ahora bien, en desahogo al requerimiento hecho por la *UTCE* en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la denunciante argumentó, en síntesis, lo siguiente:

- **En las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral**, celebradas los días treinta y uno de octubre y treinta y uno de diciembre, ambas de dos mil catorce, veintitrés de enero, veintisiete de marzo y cinco de octubre de dos mil quince, **se le negó información, lo cual quedó acreditado en términos de lo resuelto por la Sala Superior**, al dictar la

sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1679/2016.

- En la sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, **los consejeros denunciados aprobaron un acuerdo en el cual se excluyó a la quejosa de integrar comisiones, en términos de lo considerado por la Sala Superior** en la mencionada ejecutoria.
- **Los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, han ejercido acoso laboral en su contra, en las sesiones públicas celebradas por el Consejo General del OPLE los días veintidós y veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de mayo, diez, veintitrés y veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, al haber hecho alusiones personales, que en su concepto, constituyen agresiones verbales.**

Finalmente, al formular alegatos, la denunciante adujo, sustancialmente, lo siguiente:

- Está acreditada la falta de entrega de información y exclusión de comisiones, en términos de la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1679/2016; sin embargo, esas conductas no han sido sancionadas como parte del acoso laboral de la cual ha sido objeto desde octubre de dos mil catorce.
- Las declaraciones hechas por los sujetos denunciados, vulneran lo previsto en el Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral local, en razón de que se trata de temas que no forman parte del respectivo orden del día, como lo es que la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada la acusó de solicitar plazas a cambio de su voto, lo que considera un hecho falso.
- Las manifestaciones hechas por los sujetos denunciados no están al amparo del derecho de la libertad de expresión, el cual tiene límite en lo previsto en

el Reglamento de Sesiones del Consejo General del *OPLE*, que prohíbe las alusiones personales, razón por la cual, la participación de los integrantes del Consejo General de ese Instituto, se deben ceñir a los asuntos listados en el orden del día, en tanto que el Consejero Presidente debe conservar el orden, lo que en el particular, no ocurrió.

2. Excepciones y defensas.

En la etapa de emplazamiento y alegatos, el Consejero Presidente del *OPLE* Guillermo Amado Alcaraz Cross, la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel, así como los entonces Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada y Mario Alberto Ramos González argumentaron, en síntesis, lo siguiente:

- Respecto de la negativa de entregar información y la indebida exclusión de la quejosa de comisiones del *OPLE*, considera que ambas conductas fueron juzgadas oportunamente por la *Sala Superior* dentro del expediente SUP-JDC-1679/2016 que da motivo al presente procedimiento, por lo que debe aplicar la eficacia refleja de la cosa juzgada, pues consideran que dichos hechos ya fueron analizados, resueltos y sancionados por el máximo tribunal en la materia.
- Sobre la exclusión indebida de comisiones, los denunciantes aducen que contrario a lo alegado por la quejosa, se le ha incluido activamente en la integración de dichos órganos colegiados, lo que se acredita con los acuerdos IEPC-ACG-083/2015 y IEPC-ACG-306/2015, de los cuales se advierte que la quejosa formaba parte del Grupo de Seguimiento al Cumplimiento de la Paridad de Género en las Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 y de la Comisión Temporal de Reglamentos; así como la modificación del artículo 33 del Reglamento Interior del Instituto, aprobada por acuerdo IEPC-ACG-039/2016, donde establece que al momento de la integración de las Comisiones, deberá procurarse la participación equitativa de los Consejeros Electorales; y por último, la modificación realizada a la integración de distintas comisiones aprobada por acuerdo IEPC-ACG-040/2016, IEPC-ACG-48/2016 e IEPC-

ACG-049/2016, donde se advierte que la quejosa integra 3 Comisiones Permanentes y 2 temporales.

- Asimismo, aducen que en la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1679/2016, se declararon como inoperantes los conceptos de agravio relativos a la exclusión de comisiones, expuestos por la denunciante, por lo que, opera la eficacia refleja de la cosa juzgada.
- Niegan categóricamente la presunta falta de aplicación del artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local, habida cuenta que en todo momento se protegió la libertad de expresión, siendo que la prohibición de hacer alusiones personales, no es absoluta, y las expresiones vertidas durante las sesiones del Consejo General no pueden ser consideradas calumniosas, faltas de respeto o tolerancia respecto de su posición frente a diferentes proyectos de acuerdo.
- El citado artículo 35, prevé que las alusiones personales están prohibidas, sin embargo, esa prohibición solo se actualiza cuando pudiesen generar controversias y discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del día, lo que en el particular no ocurre, en razón de que los debates y discusiones se centraron en los propios asuntos del orden del día.
- Respecto a las alusiones personales, supuestamente en contra de la quejosa en diversas sesiones del Pleno del Consejo General del *OPLE*, así como la falta de conducción de manera respetuosa y conforme a los principios de la función electoral, refieren que éstas se emitieron dentro de los límites de la libertad de expresión, en el contexto de las deliberaciones y análisis propios de los asuntos agendados, en los que se externaron diferentes posturas a efecto de defender el contenido de determinado proyecto y, eventualmente, incidir en el pensar de los demás integrantes del Consejo General del *OPLE*.
- En ningún momento se argumentó que la quejosa era la que menor calificación había obtenido, sino que, lo que se argumentó, fue que algunos

compañeros que se proponían como directores alcanzaron un mejor puntaje que ella en los exámenes aplicados, todo ello, con el propósito de destacar la actuación de las propuestas que se analizaban para ocupar los cargos de director o directora del *OPLE*, sin que existiese el ánimo de menoscabar o agraviar a la quejosa.

- Por lo que hace al presunto acoso laboral en contra de la denunciante, refieren que se ha respetado en todo momento el ejercicio legal del cargo que detenta Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, pues se le ha incluido activamente en las discusiones que surgen en el seno del Consejo General, así como en su calidad de integrante de Comisiones.
- Con relación a la supuesta acusación relativa a que la quejosa solicitó plazas a cambio del sentido de su voto, refieren que al tratarse de temas concernientes a los recursos públicos, se produjo dentro de los parámetros de la legalidad, pues inclusive, la *Sala Superior* ha señalado que cuando se cuestiona la actuación respecto del manejo de recursos públicos de los gobernantes, si bien constituye una crítica severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma está protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral.
- Manifiestan que de las versiones estenográficas de las sesiones que obran en autos, se desprende que en ningún momento se ha obstaculizado las funciones, ni vertido alusiones personales o agresiones verbales dirigidas a la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, sino que sus participaciones han sido encaminadas al cumplimiento de las atribuciones que la ley les confiere como Consejeros Electorales.
- Refieren que en una entrevista concedida por la quejosa a medios de comunicación el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se contradijo respecto de las supuestas alusiones personales, tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

“P: Oiga consejera, hizo señalamientos hasta de amenazas...”

(...)No en todo había acuerdo para, para resolver ese tema... una de las posturas... en lo personal era que teníamos que integrar algunas áreas, por ejemplo Editorial con Comunicación Social... teníamos que hacer además una reestructuración. Finalmente ahí se manifestaron, quiero pensar que se malinterpretaron, algunas posturas que se dijeron en mesa de trabajo, privada y acá en la sesión pública del 22 de enero eso se malinterpretó.

P: Fue el día que la acusaron...

ER: Sí. En aquel momento justo por el nombre de la institución no se aclaró, no se... pues decidimos guardar silencio porque ya la situación era muy compleja...

(...)

En aquel momento lo que yo decía era que, por ejemplo, en Presidencia sí existen cuatro... había 2 o 3 ahora hay cuatro asesores, antes creo que había 3, etcétera. Yo hice un comentario en una reunión privada, lo digo aquí, porque bueno ya se supo, yo hice un comentario algo sarcástico porque había una propuesta, de hecho fue como una contrapropuesta, porque había una respuesta de... nosotros tenemos un asesor y un asistente, cada consejero, entonces había la propuesta de retirarnos al asistente, entonces yo dije ah bueno, pues como Presidencia que tiene tanto asesores, chofer y etcétera".

Por su parte, Ernesto Gerardo Castellanos Silva, ex Director de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales del *OPLE*, en esencia, adujo lo siguiente:

- Que el veintisiete de diciembre de dos mil catorce, recibió el oficio SPE/002/2014, en el cual la quejosa, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Servicio Profesional Electoral, le requirió información sobre los movimientos de personal del *OPLE* correspondiente al periodo de enero a diciembre de ese año, así como un informe sobre relaciones laborales en el mismo periodo.
- Que, en esa misma fecha, mediante oficio 001/2014 desahogó el requerimiento formulado, en el sentido de informar que esa Secretaría Técnica no contaba con la información solicitada.

Asimismo, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, ex Directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros del *OPLE* argumentó, sustancialmente, lo siguiente:

- Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, recibió el oficio SPE/007/2015, mediante el cual la quejosa le requirió un informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área.
- Durante la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebrada el veintisiete de marzo de dos mil quince, informó a la quejosa, que en esa misma fecha recibió, vía correo electrónico, una comunicación del Secretario Ejecutivo del *OPLE*, en la cual le hizo de su conocimiento que cualquier solicitud relacionada con las cuestiones de organización o administración de esa autoridad electoral local, debían ser dirigidas y canalizadas al Consejero Presidente o al Secretario Ejecutivo, conforme a lo previsto en el artículo 143, párrafo 2, fracción 22 (sic), del Código Electoral del Estado de Jalisco.
- Asimismo, que recibió el memorándum 14/15 de Presidencia del propio *OPLE*, en el cual se le informó que cualquier asunto relacionado a la organización administrativa del Instituto electoral local le corresponde al Presidente, en coadyuvancia con el Secretario Ejecutivo.
- Que con motivo de las mencionadas comunicaciones, le era jurídicamente imposible cumplir lo requerido por la quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 484, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral de Jalisco, dado que es causa de responsabilidad administrativa inmiscuirse en cuestiones que competan a otros órganos del Instituto.
- Que conforme a lo establecido en el artículo 14, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, vigente al momento de los hechos motivo de denuncia, los directores tienen el deber de rendir informes a las comisiones, sin embargo, ese deber jurídico no es absoluto, dado que se circunscribe a los asuntos que les son propios, conforme a lo previsto en el numeral 25, del citado Reglamento.
- Que la información requerida, relativa a la estructura, era del conocimiento de la quejosa, en razón que, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, el Consejo General del *OPLE* es competente para aprobar el anteproyecto de su presupuesto, en el cual participó la denunciante.

- Por otra parte, que conforme a lo establecido en el artículo 2, fracción IX, del Reglamento Interior del *OPLE*, es deber de los directores formular los manuales de procedimientos correspondientes a su área, sin embargo, esa obligación está supeditada a los Lineamientos que emita la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto Electoral local, lo cual ocurrió hasta el quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum 002/2017 PRESIDENCIA, razón por la cual, al momento en que fue requerida la información por parte de la denunciante, ésta era inexistente y materialmente imposible cumplir lo solicitado por la quejosa.
- En este contexto, la conformación de la estructura y procedimientos del *OPLE* y la información relativa corresponden al Consejo General de ese Instituto, representado por el Consejero Presidente, quien es auxiliado administrativamente por el Secretario Ejecutivo, sin que los restantes órganos se deban inmiscuir en sus atribuciones.

De igual forma, los denunciados que enseguida se enlistan, al desahogar el correspondiente emplazamiento, admiten haber recibido los oficios que se precisan, en los que la quejosa les requirió determinada información, a saber:

DENUNCIADO	OFICIO Y FECHA DE REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN REQUERIDA
JUAN CARLOS FRANCO JIMÉNEZ, ex Director de Administración y Finanzas del <i>OPLE</i>	SPE/001/2014	1.1 Informe sobre movimientos de personal del Instituto Electoral local durante el periodo de enero-diciembre 2014.
	27/Diciembre/2014	1.2 Informe sobre relaciones laborales en el mismo periodo.
	SPE/003/2015 24/Enero/2015	Informe sobre capacitadores asistentes electorales, coordinadores centrales, distritales y operativos de capacitación y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Ordinario

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

DENUNCIADO	OFICIO Y FECHA DE REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN REQUERIDA
		correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
	SPE/006/2015 26/Marzo/2015	3.1 Informe sobre movimientos de personal del Instituto Electoral local del 1 de enero 2014 al 07 de marzo 2015. 3.2 Informe sobre relaciones laborales en el mismo periodo enero de 2014 a marzo de 2015.
LUIS GABRIEL MOTA, ex Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE	SPE/002/2015	Informe sobre capacitadores asistentes electorales, coordinadores centrales, distritales y operativos de capacitación y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
	24/Enero/2015	
MOISÉS PÉREZ VEGA, entonces Director de Educación Cívica del OPLE	SPE/005/2015	1.1 Informe sobre capacitadores asistentes electorales Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
	25/Marzo/2015	1.2 Informe sobre Coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del mismo Proceso Electoral Local.
	SPE/008/2015 25/Marzo/2015	Informe sobre Coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015).
LUIS GABRIEL MOTA, ex Director General del OPLE JUAN CARLOS FRANCO JIMÉNEZ, ex Director de Administración y Finanzas del OPLE MOISÉS PÉREZ VEGA, entonces Director de Educación Cívica del OPLE JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ VALLE, entonces Director de Comunicación Social del OPLE	SPE/007/2015 25/Marzo/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos del área correspondiente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

DENUNCIADO	OFICIO Y FECHA DE REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN REQUERIDA
<p>RAMIRO FELICIANO GARZÓN CONTRERAS, entonces Director de Informática del OPLE</p> <p>CARLOS ALBERTO SILVA MORENO, ex Director de la Unidad Editorial del OPLE</p> <p>HÉCTOR JAVIER DÍAZ SÁNCHEZ, ex Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del OPLE</p> <p>JORGE ALBERTO ALATORRE FLORES, Director de Participación Ciudadana del OPLE</p> <p>ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO, entonces Directora de Prerrogativas a Partidos Políticos del OPLE</p> <p>TLACAÉL JIMÉNEZ BRISEÑO, entonces Director Jurídico del OPLE</p>		
RAMIRO FELICIANO GARZÓN CONTRERAS , entonces Director de Informática del OPLE	<p>SPE/010/2015</p> <p>25/Marzo/2015</p>	Informe sobre Coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
LUIS RAFAEL MONTES DE OCA VALADEZ , ex Secretario Ejecutivo del OPLE	<p>SPE/011/2015</p> <p>26/Marzo/2015</p>	<p>1. Informe sobre movimientos de personal del Instituto Electoral local del 1 de enero de 2014 al 25 de marzo de 2015.</p> <p>2. Informe sobre relaciones laborales en el mismo periodo.</p> <p>3. Organigramas de todas las áreas.</p>

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

DENUNCIADO	OFICIO Y FECHA DE REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN REQUERIDA
		<p>4. Relación de nombres y adscripción de Capacitadores Asistentes Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012</p> <p>5. Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales operativos y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.</p> <p>6. Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de informática del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.</p> <p>7. Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.</p> <p>8. Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.</p>

Al respecto, los mencionados denunciados adujeron, en esencia, similares argumentos a los hechos valer por Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, ex Directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros del *OPLE*, en el sentido de que, el veintisiete de marzo de dos mil quince, recibieron, vía electrónica, comunicados del entonces Secretario Ejecutivo de esa autoridad administrativa electoral local, relativas a que todos los asuntos relacionados con la organización y administración del Instituto debían ser dirigidos y canalizados al Consejero Presidente o al aludido Secretario Ejecutivo, razón por la cual les era jurídicamente imposible cumplir lo requerido por la quejosa, a fin de no incurrir en responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 484, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral de Jalisco.

De igual forma, los denunciados argumentan que, conforme a lo establecido en el artículo 14, fracción VI, del Reglamento Interior del OPLE, vigente al momento de los hechos motivo de denuncia, los directores tienen el deber de rendir informes a las comisiones, sin embargo, ese deber jurídico no es absoluto, dado que se circunscribe a los asuntos que les son propios, conforme a lo previsto en el numeral 25, del citado Reglamento.

Asimismo, refirieron que, sobre la información relativa a la estructura de sus áreas, ésta era del conocimiento de la denunciante, en razón que, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, el Consejo General del OPLE es competente para aprobar el anteproyecto de su presupuesto, en el cual participó la quejosa.

Por otra parte, los denunciados argumentan que les era imposible proporcionar la información requerida por la quejosa, consistente en los manuales de sus áreas, porque si bien es cierto que, conforme a lo establecido en el artículo 2, fracción IX, del Reglamento Interior del *OPLE*, los directores de área tienen el deber de elaborar los manuales de procedimientos correspondientes a su área, también lo es que, esa obligación está supeditada a los Lineamientos que emita la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral local, lo cual ocurrió hasta el quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum 002/2017 PRESIDENCIA, razón por la cual, al momento en que fue requerida esa información la misma era inexistente.

En otro orden de ideas, cabe precisar que Álvaro Fernando Munguía Martínez y Olga Patricia Vega Guzmán, entonces Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral y ex Directora de la Unidad de Transparencia e Información Pública, respectivamente, ambos del *OPLE*, no desahogaron el correspondiente emplazamiento.

No es óbice a lo anterior que, en el caso de Álvaro Fernando Munguía Martínez haya presentado el correspondiente escrito por el cual pretendió desahogar el emplazamiento, dado que su presentación fue extemporánea.

Las excepciones y defensas argüidas por los denunciados, serán analizadas al resolver el fondo del asunto, dada su estrecha relación entre sí, con los hechos materia de denuncia; amén de que ninguna de ellas amerita un previo y especial pronunciamiento, más allá de aquellas que ya fueron atendidas en el apartado de competencia de la presente Resolución.

3. Fijación de la *litis*.

La *litis* en el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, se constriñe esencialmente, en determinar lo siguiente:

- Si los hechos motivo de denuncia consistentes en la omisión de proporcionar información para el adecuado ejercicio de su cargo,
- En su momento, la exclusión de comisiones y,
- Las presuntas agresiones verbales durante sus intervenciones en las sesiones de Consejo General del *OPLE*.

Todas ellas, en contra de la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, analizadas de manera aislada y, en su conjunto, constituyen o no acoso laboral en su contra.

Lo anterior, en razón de que, a decir de la quejosa, de manera reiterada se la ha negado información, la cual es necesaria para ejercer el cargo de Consejera Electoral en el *OPLE*, pues la ha requerido a diferentes áreas del Instituto electoral local sin que le hayan proporcionado, bajo el argumento que *por instrucciones del Consejero Presidente no era posible otorgársela*.

Refiere que en forma sistemática, ha sido excluida para integrar las distintas comisiones del Consejo General del *OPLE*, en razón que sólo integraba dos comisiones permanentes y una temporal en comparación con los otros consejeros del propio órgano electoral local.

Por último, refiere que los integrantes del Consejo General del *OPLE*, la acosan laboralmente, en razón de que durante el desarrollo de diversas sesiones públicas de ese órgano colegiado, fue agredida de manera verbal, al llevarse a cabo “*constantes descalificaciones*” y “*ataque personal*”.

4. Marco normativo aplicable.

En un primer momento, se hará alusión a las disposiciones que regulan el derecho a la libertad de expresión, habida cuenta que esta autoridad debe realizar el estudio atinente de los hechos denunciados, a la luz del ejercicio de este tipo de derechos fundamentales, a fin de emitir la resolución que en Derecho corresponda.

Así pues, conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7, de la *Constitución*, 19, numerales 1, 2 y 3, incisos a) y b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 13, numeral del 1 al 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión e información, son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar.

No obstante, el ejercicio de esos derechos, en términos de la normativa constitucional y en los tratados de derechos humanos, integrados al sistema jurídico nacional, se considera que no es absoluta, sino que al ejercerlos, no se debe vulnerar el pleno goce de otros derechos fundamentales.

Esto es, de las aludidas disposiciones se advierte lo siguiente:

- Los gobernados no deben ser molestados por causa de sus opiniones. Así, el derecho reconocido en la mencionada normativa, no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley.
- Así, no se puede restringir el derecho de libertad de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para diarios, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios para efecto de impedir la comunicación y la difusión de ideas y opiniones.
- Además, se proscribe la inquisición judicial o administrativa respecto de la manifestación de las ideas, a menos que en el ejercicio de ese derecho se conculque la moral, la protección de la seguridad nacional, la salud, la vida privada

o los derechos de otros gobernados, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Acoso laboral

En cuanto a la violencia o acoso laboral, se debe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe acoso laboral (*mobbing*) cuando se presentan conductas, en el entorno laboral, que tiene por objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir¹⁰⁰.

De la misma forma, la doctrina ha identificado al *mobbing* o acoso laboral, como la presión laboral tendenciosa o tendente a la autolimitación de un trabajador mediante su denigración¹⁰¹.

El acoso laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante la cual, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica que, incluso, pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que, en muchos casos, inducen al trabajador a renunciar.

No obstante, a pesar de su frecuente ocurrencia y los devastadores efectos psicológicos y aún físicos que tales actuaciones generan en quien debe soportarlas, sólo hasta comienzos de este siglo empezaron a darse respuestas legislativas a dicho fenómeno en algunos países de Europa. En efecto, en varios Estados europeos han sido adoptadas normatividades tendentes a evitar y sancionar este tipo de conductas que constituyen el denominado acoso laboral.

Así, por ejemplo, Suecia promulgó la Disposición relativa a las medidas a adoptar contra toda forma de persecución psicológica en el trabajo y definió la persecución

¹⁰⁰ Cfr. ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. Tesis 1a.CCLII/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Primera Sala, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 138 Tesis Aislada (Laboral).

¹⁰¹ GIMENO, Lahoz Ramón, *La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde la óptica de un juez)*, Valladolid, España, 2005, Editorial Lex Nova, p. 82

psicológica, como “recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles emprendidas contra trabajadores/as individuales, de tipo ofensivo, de tal modo que suponen el aislamiento de estos trabajadores/as del colectivo que opera en el lugar de trabajo”.

En igual sentido, la Ley Belga del 11 de junio de 2002 relativa a la protección contra la violencia y el acoso moral o sexual en el trabajo, define el acoso moral, como: “las conductas abusivas y reiteradas de todo género, externas o internas a la empresa o institución, que se manifiesten principalmente en comportamientos, palabras, intimidaciones, actos, gestos y escritos unilaterales, que tengan por objeto o por efecto atentar a la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un trabajador, o de otra persona a la que este capítulo le sea aplicable con ocasión de la ejecución de su trabajo, poner en peligro su empleo o crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

El Código de Trabajo francés, también incluye una tipificación de la conducta de acoso moral, según la cual “Ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una degradación de las condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos y su dignidad, de alterar su salud física o mental o de comprometer su futuro profesional”.

El Código de Trabajo de Noruega, por su parte, estipula que “los trabajadores no serán sometidos al acoso ni a otra conducta impropia y el trabajo deberá ser organizado de tal forma que no ofenda la dignidad del trabajador”.

En la región de Lazio, Italia, existe, igualmente, una regulación del acoso moral adoptada en 2001, mediante la Disposición para prevenir y combatir el fenómeno del *mobbing* en el lugar de trabajo, según la cual el acoso moral se configura con “las acciones y comportamientos discriminatorios o vejatorios prolongados en el tiempo, en el lugar de trabajo y dirigidos hacia trabajadores por cuenta ajena, públicos o privados, y realizados por el empresario o por otros compañeros, caracterizándose esta práctica como una auténtica forma de persecución psicológica o violencia moral”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado otra definición del término, según la cual, el *mobbing* es “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta”.

Si bien en otros países como España, el acoso laboral no ha tenido reconocimiento legislativo, tal conducta ha sido sancionada, y defendidos los derechos de las víctimas, por vía judicial. Los jueces laborales, siguiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en materia de respeto por la dignidad del trabajador, han examinado en sus sentencias las características y efectos que produce esta variedad de acoso en el trabajador.

Así pues, partiendo de la jurisprudencia constitucional sobre integridad moral, entendida ésta como una manifestación directa de la dignidad humana, comprensiva tanto de las facetas de la personalidad como de aquellas “de la identidad individual, el equilibrio psicológico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano”, en múltiples ocasiones los jueces laborales se han pronunciado respecto de la ocurrencia de esta conducta, llegando incluso, en un fallo reciente, a reconocer la incapacidad laboral permanente y absoluta por dicha causa.

En efecto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidió conceder tal incapacidad a una mujer de 29 años de edad que se desempeñaba como auxiliar de clínica en un centro veterinario y quien fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de su jefe. El Tribunal arribó a esa conclusión en consideración a las severas secuelas psicológicas producidas por la situación de acoso denunciada, pues la joven sufría trastorno depresivo, estrés postraumático y crisis de angustia, por lo cual, el Tribunal reconoció su derecho a una pensión habida consideración a la incapacidad producida por las lesiones sufridas.

En América, los avances legislativos en la materia han sido mucho menos significativos que aquellos alcanzados en varios de los Estados europeos. En buena parte de los países latinoamericanos, a pesar de haberse presentado iniciativas parlamentarias en materia de prevención, control y sanción de las conductas

relacionadas con el acoso en el lugar de trabajo, éstas, en su mayoría, no han logrado ser concretadas. La protección de las víctimas de conductas de hostigamiento laboral ha tenido lugar más bien por la vía judicial, como se verá a continuación.

En Argentina existen dos cuerpos normativos provinciales que constituyen importantes avances en la lucha contra la violencia laboral en los ámbitos públicos de las provincias. Se trata de la Ley 4.148 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia Laboral en el Sector Público, de la provincia de Misiones, y la Ley 12.434 de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en los Ámbitos del Estado provincial, de la provincia de Santa Fe.

Con todo, en este país, al igual que en otros tantos del continente, a pesar de la carencia de legislaciones concretas en la materia, los jueces, mediante la interpretación sistemática del ordenamiento, han protegido los derechos de quienes se han visto ofendidos con conductas de hostigamiento en los ámbitos laborales.

Así, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Colombia, emitió en abril de 2005, un fallo mediante el cual ordenó remitir al tribunal de origen un proceso en el cual el demandante invocaba como causal de despido indirecto la persecución laboral sufrida, después de haber declarado la nulidad del rechazo de la demanda interpuesta.

Para ello, el juez colegiado reconoció la ocurrencia de “*mobbing*” y precisó que éste “se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador que desarrolla como reacción graves problemas psicológicos duraderos, es decir que, se trata de un proceso destructivo sutil que puede llevar a la discapacidad permanente”, por lo cual consideró que, en virtud del principio in dubio pro operario, el tribunal que había rechazado la demanda, debió ponderar los factores de persecución laboral alegados y valorarlos adecuadamente.

En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, determinó recientemente, que toda conducta “abusiva y persecutoria”, así como el acoso sexual en perjuicio de los trabajadores, desplegada por el empleador, constituye

una justa causa de despido del agresor. Tal regla jurisprudencial, fue pronunciada con ocasión de la demanda presentada por el subgerente de una empresa, al considerar que su despido había sido injustificado. No obstante, el cuerpo colegiado consideró que dicho despido estaba justificado, pues su conducta había configurado una injuria grave.

En Chile, se ha dado protección a las víctimas de conductas de acoso en el lugar de trabajo por vía judicial, ya que no existe normatividad específica en dicha materia. Ejemplo de ello lo constituye el fallo dictado por el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano el 8 de junio de dos mil dieciséis, en el cual se pronunció a favor de una mujer que se desempeñaba como vendedora en un almacén de cadena, a quien le fue diagnosticado trastorno adaptativo agudo mixto, en situación de *mobbing* (enfermedad considerada de carácter laboral), por presentar depresión y percepciones negativas hacia el entorno laboral, problemas de sueño, angustia, pánico y ansiedad, ocasionados por el hostigamiento a que se vio sometida por parte de su supervisora durante un período aproximado de dos años. Por dicha causa, la actora dio por terminado el contrato, de manera unilateral, con fundamento en el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, e interpuso una demanda solicitando el pago de una compensación por despido indirecto.

El juez accedió a su pretensión y ordenó al empleador pagar a la demandante una indemnización por los años de servicio, aumentada en un 50%, y otra suma por concepto de indemnización por daño moral derivado de la enfermedad profesional de la que la demandada fue encontrada culpable. Realizó para ello un ejercicio de hermenéutica jurídica, a partir de una comprensión sistemática de diversas disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico chileno que brindan protección a las víctimas de acoso moral en el ámbito laboral, al igual que de instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, y de aquellos que reconocen los derechos a la no discriminación en el trabajo, a la igualdad ante la ley y la igual protección de ésta a todas las personas.”

De lo señalado, se puede apreciar que el acoso o violencia, en el ámbito laboral, está constituido por una serie de acciones que tiene por objeto menoscabar la honra, la dignidad de las personas, su estabilidad emocional, e incluso su integridad

física con el objeto de aislar a una persona en concreto, o bien, generar una actitud propicia o complaciente para los deseos o intereses del agente hostigador o agresor.

Al respecto, la tesis LXXXV/2016, de rubro *ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL*¹⁰², emitida por la *Sala Superior*, refiere que la violencia o acoso laboral se traducen en una forma de discriminación que está constituida por una serie de acciones que tienen por objeto menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional e incluso la integridad física de las personas a fin de aislarlas.

Por tanto, las acciones que se presenten entre quienes integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, de manera injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, constituyen una transgresión a los principios de profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo.

En efecto, el acoso laboral es una conducta que constituye una infracción en términos de lo previsto en los artículos 8, fracciones I, VI y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 61, fracciones I, VI, XVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, pues implica:

- a) Abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.
- b) Constituyen una falta de respeto y rectitud.
- c) Entrañan incumplimiento a disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, y, en todos los casos, se apartan de los principios de

¹⁰² Localizable en:

<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXV/2016&tpoBusqueda=S&sWord=ACOSO,LABORAL,CONSTITUYE,UN,IMPEDIMENTO,PARA,EL,EJERCICIO,DEL,CARGO,,CUANDO,SE,ACREDITA,EN,CONTRA,DE,ALG%C3%9A,INTEGRANTE,DE,UN,%C3%93RGANO,ELECTORAL>

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰³, ha determinado que para llevar a cabo la investigación de hechos relacionados con acoso laboral se deberá considerar los siguientes aspectos:

- Analizar la conducta denunciada como acoso laboral para diferenciarla de una conducta inherente a las exigencias del empleo, cargo o comisión, así como de las funciones asignadas a quien se queja.
- Determinar el ámbito espacial en que ocurrió el acoso laboral para caracterizarlo como sucedido en el ámbito del trabajo.
- Aplicar el *estándar de la persona razonable* como mecanismo de interpretación del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad.

En consecuencia, determinar que una persona es víctima de acoso laboral cuando sostiene que ha padecido una conducta que una persona razonable consideraría suficientemente abusiva o dominante como para alterar las condiciones de su empleo y crear un ambiente laboral opresivo.

- Establecer qué elementos acreditan la **intencionalidad** de quien sea probable responsable; y
- Evaluar las relaciones de poder, formales o informales, entre las personas involucradas.

¹⁰³ De conformidad con el Acuerdo Plenario 9/2005 y Acuerdo General de Administración número III/2012, localizables en: <https://www.scjn.gob.mx/Documents/AGA-III-2012.pdf>

Libertad de expresión

Cabe destacar que la libre expresión, bajo cualquier medio, es uno de los pilares fundamentales para el Estado Constitucional Democrático de Derecho. En nuestro país, el artículo 6° de la *Constitución* reconoce la libertad fundamental de expresión, y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho con democracia representativa.

Lo anterior se advierte en el texto de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 24/2007, de rubro siguiente: ***LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO.***¹⁰⁴

En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble dimensión: por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública.

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a las personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, votar y ser votado, entre otros.

Por su parte, en su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre, bien informada y, por

¹⁰⁴ [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1522

tanto, para la toma de decisiones de interés público, más allá del interés individual, lo que es imprescindible en una democracia representativa.

Es por ello, que el espectro protector de la libertad de expresión es diverso, según la dimensión en la que se ejerce:

En la dimensión colectiva, existen expresiones que gozan de una protección más amplia, como ocurre con las que se presentan en el contexto de cuestiones o personas políticas, públicas o con proyección política, en cambio, en la dimensión individual, el margen de protección del discurso es moderado cuando se trate de un interés meramente individual.

Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea la concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera privada.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e información planteada o respecto a los partidos contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, como condiciones para ejercer el derecho de sufragio de manera informada.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión.

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la perspectiva interamericana, privilegian aquella información que resulte útil para forjar una opinión pública e informada y únicamente aceptan las limitantes válidas en una sociedad democrática.

Por lo que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de ingresar al debate público; empero, su ámbito de apertura no corresponde necesariamente

a la intensidad que deben soportar los servidores públicos, cuando el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a sus actividades públicas.

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de sus integrantes o de personas con trascendencia pública.

En este sentido, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, una democracia constitucional requiere de un debate *desinhibido, vigoroso y completamente abierto sobre los asuntos públicos, y que puede incluir expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces ataques severos hacia el gobierno y funcionarios públicos.*

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que las expresiones que se emiten en el contexto del Proceso Electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y de igual forma, ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas de interés general, público, o con proyección pública.

Lo anterior tiene su base en la Jurisprudencia 11/2008, emitida por la *Sala Superior*, de rubro **LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO**, en la que se señala lo siguiente:

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.¹⁰⁵

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* y *Kimel vs. Argentina*, que ello obedece principalmente al carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones que realizan dichas personas, desde luego, sin que por ello se llegue al extremo de considerarlas privadas de derechos.

Por tanto, indicó que cuando el discurso se orienta a criticar a personas con proyección pública, debe garantizarse la posibilidad de que exista un discurso fuerte y amplio en su contra, y el nivel de intromisión admisible será mayor que cuando se dirige a personas con una proyección privada, desde luego, con la condición fundamental de que el discurso se relacione con asuntos vinculados con su actividad pública.

Restricciones a la libertad de expresión

En este apartado, se debe precisar que la libertad de expresión, al igual que opera con el resto de derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

Así, el artículo 6° de la *Constitución* establece que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público.

¹⁰⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.

Esto es, nuestra Constitución Política establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, y ello también se prevé en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1° y 133, de la Constitución), en los artículos 13, párrafos 1 y 2, y numeral 11, párrafos 1 y 2, luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad.

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.

Sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público, o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con algún otro derecho.

Bajo estas consideraciones, cuando se encuentre en debate la libertad de expresión frente al derecho al honor o vida privada de una persona cuya actividad tenga trascendencia para la comunidad general, tendrá que hacerse un ejercicio de ponderación que tome en consideración el tipo de actividades que desarrolla o realiza, el impacto o magnitud de esas actividades, la temporalidad, la vinculación con las circunstancias que le dan proyección pública, el contexto, así como la proporcionalidad de la medida.

Por otra parte, también se debe tener en consideración, en lo conducente, lo previsto en los artículos 7 y 35, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE, dado que será materia de pronunciamiento en el estudio de fondo de esta Resolución.

Así pues, la normativa reglamentaria establece que son atribuciones del Presidente la de conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo; así como garantizar el orden de las sesiones.

Además, en el curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, así como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del día. En dicho supuesto, el Presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas conductas conminándolo a que se conduzca en los términos previstos en el Reglamento.

5. Análisis del caso.

Como una cuestión previa es menester tomar en consideración, para efectos de la resolución del presente asunto, que la *Sala Superior* si bien tuvo por probados determinados hechos denunciados por la quejosa, lo cierto es que su estudio en lo individual (negativa de entregar información y exclusión de comisiones) no se avocó a determinar la existencia o no de la figura de acoso laboral.

Lo anterior es así, ya que con base en lo razonado por la jurisdicción, la quejosa hizo del conocimiento de la autoridad jurisdiccional hechos que consideraba podían constituir infracción a las normas y principios legales que rigen la actuación de algunos integrantes del citado Consejo General, a fin de que se analizaran los actos desplegados y se determinara lo que en Derecho procediera por la ejecución de esos actos; sin embargo, a decir del propio órgano jurisdiccional, el tema relativo al acoso laboral del que dice fue objeto la quejosa, no es competencia de la *Sala Superior* dejando en plenitud de jurisdicción del Consejo General de este Instituto determinar si existía o no acoso laboral a partir del análisis conjunto de los hechos denunciados.

Así pues, a efecto de determinar si en el particular, existió o no acoso laboral en contra de la denunciante, en primer lugar, se partirá de los hechos que se tuvieron acreditados ante la *Sala Superior*, al dictar la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1679/2016 en los temas específicos de **falta de entrega de información y exclusión indebida de comisiones**, en los términos en que se ordenó su estudio por parte del propio órgano jurisdiccional, y la posterior conclusión a la que arriba este Instituto, con base en el análisis de los elementos constitutivos del acoso laboral, figura exclusiva que se analiza en la presente causa.

Enseguida, se analizará el tema relativo a las supuestas agresiones verbales, a la luz de la valoración de las pruebas que obran en el sumario y, finalmente, se llevará a cabo un estudio conjunto de los hechos motivo de queja, atendiendo a las circunstancias de tiempo y duración de las conductas.

5.1 Hechos acreditados por la *Sala Superior*.

,De la lectura integral de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la *Sala Superior* en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1679/2016, se advierte que los hechos que han quedado acreditados para efectos de los agravios planteados en el referido juicio ciudadano, son los siguientes:

5.1.1 *Negativa de entregar información atribuible al Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos Directores y Ex Directores del OPLE.*

Sobre el planteamiento de la quejosa, relativo a la omisión de proporcionar información para el debido desempeño de su cargo como Consejera Electoral del OPLE, la *Sala Superior* declaró, al dictar sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1679/2016, fundado el correspondiente concepto de agravio, cuya parte considerativa, en lo que interesa, es al tenor siguiente:

[...]

C O N S I D E R A N D O

[...]

DÉCIMO.

[...]

*Respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle diversa información a pesar de haberla solicitado de manera oportuna y reiterada, se considera **fundada** conforme a lo siguiente.*

[...]

En la especie, en las constancias que obran en autos existen varias solicitudes de diversas fechas suscritas por la ahora enjuiciante dirigidas a distintos funcionarios, en virtud de las cuales requiere se le proporcione información que considera necesaria para el ejercicio de su encargo.

Tales documentales obran en el expediente tanto en copia simple aportada por la ahora actora como copia certificada aportada por la autoridad responsable.

En virtud de lo anterior, es claro que no existe controversia entre las partes respecto a las solicitudes y requerimientos de información que la ahora actora ha realizado, por lo que en términos del artículo 15, apartado 1, in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se trata de un hecho reconocido.

Las documentales en cuestión son:

- Acuse de recibo del escrito SPE/001/2014 de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, en virtud del cual se solicita al Director de Administración y Finanzas del citado instituto diversa información sobre el personal que labora en el mismo;*
- Escrito SPE/002/2015 de veinticuatro de enero de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del citado instituto;*
- Escrito SPE/003/2015 de veinticuatro de enero de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Administración y Finanzas del citado instituto;*
- Escrito SPE/005/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Educación Cívica del citado instituto;*

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

- Escrito SPE/006/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Administración y Finanzas del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Informática del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Educación Cívica del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Administración y Finanzas del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director General del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información a la Directora de Prerrogativas a Partidos Políticos del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información a la Directora de Unidad de Transparencia e Información Pública del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información a la Directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Participación Ciudadana del citado instituto;

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director Jurídico del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Comunicación Social del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de la Unidad de Fiscalización del citado instituto;
- Escrito SPE/007/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de la Unidad de Editorial del citado instituto;
- Escrito SPE/008/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Educación Cívica del citado instituto;
- Escrito SPE/009/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Organización, Geografía y Estadística Electoral del citado instituto;
- Escrito SPE/010/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Director de Informática del citado instituto, y
- Escrito SPE/0011/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Derivado de la documentación relacionada, se observa que la ahora actora, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y, en ejercicio de sus funciones como Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del citado organismo público electoral ha dirigido en distintas fechas - veintiséis de diciembre de dos mil catorce; veinticuatro de enero; veinticuatro y veinticinco de marzo, todos de dos mil quince- varias solicitudes de información relacionadas con la estructura, procesos y procedimientos de las distintas áreas de dicho organismo, a distintos funcionarios –Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo y directores del instituto-.

Como se determinó, al analizar el marco normativo aplicable, los integrantes del Consejo General del multicitado instituto tienen la atribución de requerir la información que estimen necesaria para el ejercicio de sus funciones y los funcionarios del instituto tienen la obligación de dar respuesta a dichas solicitudes, proporcionar la información que se les requiere o, en su caso, mencionar las razones por las cuales se encuentra impedidos para entregárselas, así como notificar al solicitante dicha respuesta.

En el caso, se advierte que varias de las solicitudes se dirigieron directamente a los titulares de las direcciones del instituto, los cuales, en términos del artículo 13, apartado 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, tienen la obligación de proporcionar los datos y la información sobre asuntos propios que le sean solicitados o dar respuesta en el sentido de que no cuentan con dicha información.

También, existe una solicitud dirigida al Secretario Ejecutivo, el cual, acorde con lo establecido con el artículo 7, apartado 1, fracción VI, del reglamento interior en cuestión, tiene el deber de colaborar y proporcionar la información que se le pida, en los términos de la normatividad aplicable, o bien, justificar la respuesta negativa correspondiente.

Importa destacar que, además de los oficios ya referidos, la ahora actora emitió cinco oficios de veintiuno de enero de dos mil quince por virtud de los cuales, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Servicio Profesional

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

del multicitado instituto, convoca a la sesión ordinaria de dicha comisión el veintitrés de enero de dos mil quince, al Secretario Ejecutivo y a los directores Jurídico; de Administración y Finanzas; de Educación Cívica, y de Organización, Geografía y Estadística, todos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el efecto de solicitarles que asistieran a dicha sesión.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del citado reglamento, en el cual se establece que las comisiones, por conducto de su presidente, pueden convocar a sus sesiones a cualquier funcionario, para que exponga un asunto o proporcione la información que estimen necesaria, conforme al orden del día correspondiente.

Conforme a lo expuesto, se advierte que la ahora actora dirigió diversas solicitudes de información a través de los canales institucionales correspondientes, y dichas solicitudes fueron recibidas por los funcionarios a las cuales se encontraban dirigidas, sin que tal situación se encuentre controvertida en el presente asunto.

Ahora bien, la autoridad responsable, al controvertir lo alegado por la actora respecto de la omisión de proporcionarle la omisión solicitada, manifestó en su informe circunstanciado lo siguiente:

"En ningún momento se ha negado información alguna a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, para el debido desempeño de su encargo.

Resulta relevante precisar que la información solicitada a los directores del Instituto, no corresponde al ámbito de competencia de las direcciones, ya que corresponde al ámbito administrativo y operativo del instituto, lo cual, es atribución exclusiva de la Presidencia y, en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva, tal como en su momento se hizo del conocimiento de la Consejera Electoral mediante memorándum 14/15 Presidencia, de conformidad con el artículo 143, párrafo 2 fracción XXII del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Al respecto, la información referida se encontró a su disposición en todo momento, ya que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha

información administrativa se publica mensualmente en la página de internet de este instituto, no obstante lo anterior, le fue entregada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral por instrucciones del Consejero Presidente con motivo del ajuste presupuestal que ella aprobó como integrante del Consejo General en el mes de mayo de 2015 mediante Acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-157/2015. Igualmente, le fue entregada la información con motivo de la aprobación del presupuesto del año en curso, mediante Acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-304/2015, así como la reestructuración institucional de este organismo electoral, mediante Acuerdo IEPC-ACG-016/2016.

De lo expuesto, resulta evidente que, contrario a lo señalado en el escrito de impugnación, la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en su carácter de Presidenta de la Comisión temporal del Servicio Profesional Electoral, recibió todas las facilidades para cumplir con el objeto de ese órgano técnico".

De la respuesta anterior, se advierte que, en concepto de la autoridad responsable, se ha dado respuesta a las solicitudes de información emitidas por la enjuiciante, en virtud de que, dicha información se encuentra en el portal de transparencia del instituto en cuestión o en los acuerdos que al respecto señala.

*Sin embargo, **dicha respuesta resulta insuficiente para considerar que los funcionarios del instituto han dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la normatividad aplicable.***

*Lo anterior, porque, como se mencionó, **las y los Consejeros Electorales cuentan con la atribución de solicitar la información que requieran para el ejercicio de su encargo y los directores del instituto tienen la obligación de dar respuesta a dichas solicitudes.***

Esta obligación implica que el funcionario requerido tiene que dar respuesta a la solicitud emitida, ya sea proporcionando la información que se les pide cuando se trata de asuntos propios, o bien, justificando la negativa correspondiente, ya sea por inexistencia de la información; por tratarse de cuestiones ajenas a su competencia, entre otros.

Asimismo, tienen la obligación de comunicar dicha respuesta al integrante del Consejo General citado que la haya requerido.

De las constancias que obran en autos no se advierte que los directores a los cuales se les requirió determinada información hayan emitido la respuesta correspondiente y, mucho menos que la hubieran hecho del conocimiento de la ahora actora.

Por otra parte, en la respuesta contenida en el informe circunstanciado, la autoridad responsable también aduce que la información solicitada "...corresponde al ámbito administrativo y operativo del instituto, lo cual, es atribución exclusiva de la Presidencia y, en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva, tal como en su momento se hizo del conocimiento de la Consejera Electoral mediante memorándum 14/15 Presidencia...".

Dicho memorándum es del tenor siguiente:

"Presidencia 14/15

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Erika Ruvalcaba Corral
Consejera Electoral.

De: Guillermo Amado Alcaraz Cross
Consejero Presidente.

Fecha: 25 de marzo de 2015.

Por este conducto me permito enviarle un saludo y a la vez hacer de su conocimiento que con fundamento en la fracción 22 (sic) del artículo 143 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la organización administrativa del Instituto le corresponde a la Presidencia y, en coadyuvancia, a la Secretaría Ejecutiva.

Por lo tanto, le solicito que cualquier asunto relativa a ella, lo trate con el suscrito o el secretario ejecutivo.

Agradezco sus finas atenciones".

Importa destacar, que el referido memorándum consta en el expediente en que se actúa, al haber sido aportado tanto por la promovente junto con su escrito de demanda como por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, por lo que no existe controversia en cuanto a la existencia y la recepción del documento, de tal forma que en términos del artículo 15, apartado 1, in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se trata de un hecho reconocido.

Tampoco se considera que lo aducido por la responsable resulte suficiente para considerar que se ha dado respuesta a la solicitud de información formulada por la actora.

Esto es así, porque el memorándum en cuestión únicamente refiere que la organización administrativa del instituto le corresponde a determinados órganos y se le solicita que cualquier asunto relacionado con ella se trate con los mismos.

Al respecto, debe considerarse que, entre las constancias que obran en autos, se encuentra el escrito SPE/0011/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

En ese sentido, con independencia de lo correcto o incorrecto del contenido del memorándum en cuestión, lo cierto es que la actora dirigió una específica solicitud de información a los funcionarios encargados de la organización administrativa.

Por ende, lo aducido por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado relativo a que con dicho memorándum se dio respuesta a las solicitudes de información a la ahora actora resulta erróneo, porque:

1. La demandante dirigió una solicitud de información a los funcionarios que el propio memorándum menciona como encargados de la organización administrativa.

2. En virtud de dicho memorándum no se le da respuesta a las solicitudes de información giradas por la Consejera Electoral en ejercicio de sus funciones, sino que únicamente se le refiere que cualquier asunto relacionado con la organización administrativa la debe tratar directamente con dichos funcionarios.

3. Con dicha respuesta, en forma alguna se subsana la obligación de los funcionarios requeridos de dar la contestación que en Derecho proceda a la solicitud de información, máxime que del contenido del memorándum no se hace referencia o se emite como respuesta a dichas solicitudes.

Establecido lo anterior, se tiene que la autoridad responsable al rendir un alcance a su informe circunstanciado, mediante escrito de veinticinco de agosto del presente año, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veintinueve siguiente, firmado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, realizó nuevas manifestaciones en torno a la omisión de proporcionar la información solicitada por la promovente conforme al tenor siguiente:

"En otro orden de ideas, hago de su conocimiento que la suscrita fui designada como secretaria ejecutiva de este organismo electoral el trece de mayo del año en curso, por lo que todos los días a partir de mi incorporación al presente cargo reviso correspondencia, comunicaciones y asuntos pendientes de resolución, por lo que el día veinticinco de agosto del presente año al encontrarme realizando dichas tareas advertí la existencia del memorándum identificado con el número 015/2015, Presidencia, firmado por el Consejero Presidente de este organismo electoral, en el cual gira las instrucciones precisas al entonces secretario ejecutivo para que la solicitud de la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, presentada mediante oficio SPE/0011/2015 recibida por la oficina de Presidencia de este instituto el día veintiséis de marzo de dos mil quince, fuera atendida y tramitada.

Conforme lo anterior, al sobrevenir a mi conocimiento, y ahora de Usted, un documento que pone de manifiesto que el Consejero Presidente ordenó atender la solicitud de la consejera hoy quejosa...solicito...sobresea el presente juicio por carecer absolutamente de materia ya que no existe causa de pedir de la actora que no hay sido atendida y garantizada mediante lo informado en el presente".

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

El memorándum a que se refiere el escrito en alcance al informe circunstanciado es del contenido siguiente:

"Presidencia 015/2015

MEMORÁNDUM

Para: Luis Rafael Montes de Oca Valdez
Secretario Ejecutivo.

De: Guillermo Amado Alcaraz Cross
Consejero Presidente

Fecha: 26 de marzo de 2015.

Asunto: Para su atención

Por este conducto le remito oficio SPE/0011/2015 signado por la Consejera Erika Ruvalcaba, lo anterior para su atención y trámite".

Importa precisar que, el memorándum en cuestión fue objetado por la ahora demandante mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el primero de septiembre, para lo cual anexó la documentación siguiente:

- Memorándum 14/15 de veinticinco de marzo de dos mil quince, por virtud del cual el Consejero Presidente del citado instituto local manifiesta a la ahora actora que cualquier asunto relativo a la organización administrativa debe tratarlo con el signante o con el Secretario Ejecutivo;*
- Minuta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el veintisiete de marzo de dos mil quince por la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;*
- Orden del día de la sesión ordinaria programada para el veintisiete de marzo de dos mil quince, de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;*

- Escrito SPE/0011/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora solicita diversa información al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;

- Minuta de la quinta sesión ordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil quince por la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, e

- Informe anual de veintisiete de octubre de dos mil quince del seguimiento y actividades de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 2014-2015.

[...]

Ahora bien, con independencia de la disputa en torno a la autenticidad del documento, lo cierto es que el contenido del mismo en forma alguna puede servir de base para concluir que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a su obligación de dar contestación a las solicitudes de información realizadas por la Consejera Electoral.

En efecto, dicho documento constituye únicamente una documentación interna en virtud de la cual, el Consejero Presidente del multicitado instituto le comunica al Secretario Ejecutivo del mismo, el contenido del oficio suscrito por la ahora actora en el cual solicita diversa información y le ordena atenderlo y dar trámite.

En virtud de lo anterior, es claro que con dicho documento en forma alguna se da respuesta a la solicitud formulada por la Consejera Electoral, pues el contenido del mismo se limita a establecer que la petición será atendida.

Por tanto, es claro que con dicho memorándum no se da cumplimiento al deber que tienen los funcionarios del instituto de responder a los requerimientos de información formulados por los integrantes del Consejo General referido, pues sólo hace referencia a que dicha solicitud será atendida.

Tampoco existe constancia que el memorándum en cuestión haya sido hecho del conocimiento de la ahora actora.

De hecho, es necesario destacar que el memorándum en cuestión tiene por fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, en tanto que el escrito en alcance al informe circunstanciado y por el cual se aportó al presente juicio el documento en cuestión, se recibió por esta Sala Superior, hasta el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, lo que significa que **hasta dicho momento procesal había transcurrido más de un año sin que se hubiera dado respuesta a las solicitudes de información de la promovente.**

Además, **con el contenido de dicho memorándum, en forma alguna se subsana la obligación de los funcionarios requeridos de dar la contestación que en Derecho proceda a la solicitud de información, máxime que del contenido del memorándum no se hace referencia o se emite como respuesta a dichas solicitudes.**

Por ende, lo aducido por la autoridad responsable en su escrito en alcance al rendir su informe circunstanciado relativo a que con dicho memorándum se dio respuesta a las solicitudes de información a la ahora actora resulta erróneo.

Ahora bien, mediante escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el doce siguiente, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, realizó nuevas manifestaciones en torno a la omisión en comento:

"Tal como se ha manifestado en los diversos escritos presentados ante esa autoridad jurisdiccional, la parte actora en el juicio que nos ocupa obtuvo la información solicitada y descrita en su escrito de demanda teniendo acceso a ella, en el enlace electrónico siguiente:

<http://www.iepcjalisco.org.mx/transparencia2/articulo-8.php>., como información pública, sin embargo, no obstante lo anterior, el día de hoy adjunto al presente, copia certificada de los documentos que le fueron remitidos a la consejera electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, mediante oficio 290/2016 Presidencia, registrado con el número de folio 00909, con

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

lo cual permite acreditar el envío de la información solicitada por parte de la consejera demandante. Anexo I.

Asimismo, no omito manifestarle que la documentación referida, aunque le fue remitida físicamente y por correo electrónico institucional, la asistente de la consejera electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, de nombre Leslie Yohali Ramírez Gómez, se negó a recibir la notificación correspondiente, tal como consta en la cédula de notificación, constancia de notificación y constancia de envío de correo electrónico que se exhiben en copia certificada. Anexo II.

Por otra parte me permito reiterarle a esta autoridad que la información relativa a los perfiles de quienes ocupan los puestos de la estructura, instrumentos de evaluación del desempeño, plan de trabajo y cronograma de actividades no es posible entregarlos, toda vez que es información inexistente, ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, no tiene un servicio profesional electoral, situación conocida por todos los Consejeros Electorales, razón por la cual el Instituto se encuentra inmerso en un proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante la figura de concurso público interno, en términos de lo establecido en el artículo 34 de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, tal como se desprende de la comunicación oficial plasmada en los oficios INE/DESPEN/1267/2016 y 198/2016 Presidencia, mismos que fueron del conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, de la cual, la consejera demandante también forma parte. Anexo III".

Como se advierte, la autoridad responsable realiza manifestaciones en el sentido de que ha dado respuesta a las solicitudes de información realizadas por la ahora actora y que ha hecho de su conocimiento tal respuesta. Para demostrar su dicho anexa copia certificada de la documentación siguiente.

- Oficio No. 290/2016 de siete de septiembre del año en curso por virtud del cual el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco remite a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral lo siguiente:

*"Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral
Consejera Electoral*

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Instituto Electoral y de Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente.

Por medio del presente le remito la siguiente información:

Plantilla del personal eventual 2011 y 2012

Plantilla del personal de base y eventual 2014

Plantilla del personal de base y eventual 2015

Organigrama base y eventual 2014 y 2015

Programa anual de actividades 2014 y 2015

Información publicada en el portal de internet oficial www.iepcialisco.org.mx; en el apartado de transparencia, artículo 8, información fundamental, fracciones V y VI.

La relativa a los perfiles de quienes ocupan los puestos de la estructura, instrumentos de evaluación de desempeño, plan de trabajo, manual de procesos, de inducción y cronograma de actividades no es posible entregárselos toda vez que es información que no existe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo".

La documental referida tiene valor probatorio pleno, al constituir un instrumento expedido por un organismo público electoral local competente, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 14, apartado 1, inciso a, apartado 4 con relación al 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a lo transcrito se advierte que el pasado siete de septiembre, el Consejero Presidente emitió respuesta al oficio SPE/0011/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, en virtud del cual la actora le solicitó diversa información.

- Cédula de notificación de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud del cual notificó personalmente a la ahora actora el contenido del oficio No. 290/2016 transcrito, la cual es del tenor siguiente:

[Se insertan imágenes]

- Copia certificada de la constancia de notificación el ocho de septiembre de dos mil dieciséis realizada en las oficinas correspondientes a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral en la cual se manifiesta:

"Encontrándome constituido en la finca marcada con el número 2370 de la calle Florencia, de la colonia Italia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el suscrito Asistente de Archivo, Eric Quezada Chavira hago constar que siendo las once horas con cuatro minutos del ocho de septiembre de dos mil dieciséis me constituí física y legalmente en la oficina de la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, la cual se encuentra en el primer piso en el área de Consejeros Electorales del domicilio en que se actúa a efecto de notificar el contenido del oficio 290/2016 de Presidencia y sus respectivos anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo electoral, a las catorce horas con cuarenta y siete minutos del siete de septiembre del presente año y registrados bajo el número de folio 00909, siendo atendido por Leslie Yohali Ramírez Gómez en su carácter de asistente de la consejera electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral quien manifestó al suscrito que no podía recibir la notificación hasta que los documentos fueran revisados por la consejera electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, motivo por el cual procedí a dejarle los referidos documentos".

Las documentales referidas tienen valor probatorio pleno, al constituir instrumentos expedidos por un organismo público electoral local competente, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 14, apartado 1, inciso a, apartado 4 con relación al 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a la documentación transcrita se observa que la respuesta emitida respecto a la solicitud de información realizada por la ahora promovente le fue notificada de manera personal el ocho de septiembre de dos mil dieciséis en las oficinas que ocupa dentro del inmueble en el cual se ubica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

En esas circunstancias, se tiene que la autoridad responsable, además de emitir la respuesta que estimo apegada a Derecho respecto de la solicitud

formulada, también la hizo del conocimiento de la requiriente, sin que tal situación se encuentre controvertida en las constancias que obra en autos.

Importa destacar que mediante requerimiento de veintiocho de septiembre del presente año, el Magistrado Instructor ordenó dar vista a la ahora actora con copia simple del escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el cual realiza las manifestaciones que han sido analizadas, así como de la documentación previamente transcrita, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Lo anterior, con objeto de respetar su garantía de audiencia y con fundamento en el artículo 78, párrafo primero, fracción III, incisos a) y b), del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En contestación a dicho requerimiento, por escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el cinco siguiente, la ahora actora dio cumplimiento al requerimiento formulado el veintiocho de septiembre y en el cual manifestó:

"EXPONGO:

Que de conformidad con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, comparezco a dar cumplimiento al requerimiento de 28 de septiembre del presente año, para objetar en cuanto a su contenido y alcance probatorio, el escrito presentado en este juicio por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el día 12 de septiembre de 2016.

I. Objeción en cuanto a su contenido

Objeto el contenido de los documentos presentados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco porque es incompleta respecto de lo solicitado, además que es totalmente inoportuna y constituye un reconocimiento expreso de que dicha información no fue entregada hace ya dos años, cuando fue solicitada. A continuación, detallo la documentación solicitada, entregada y faltante.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Información solicitada	Documento mediante el cual se solicitó	Fecha de solicitud	Fecha de entrega de información
a) Movimientos del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco durante los meses de septiembre y octubre de 2014.	Sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.	31 de octubre de 2014 26 de diciembre de 2014	No entregada
b) Proyecto de estructura eventual para el Proceso Electoral 2014-2015	Oficio SPE/001/2014	31 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015	No entregada
c) Informe, relación y comparativo de los movimientos del personal de este Instituto, durante el periodo que comprende del 1 de enero 2014 al 25 de marzo de 2015, con cortes mensuales, incluyendo pero no limitado a:	Oficio SPE/002/2014 Sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.	24 de marzo de 2015	No entregada
· Altas y bajas de personal · Cambios de puesto · Cambios de adscripción · Comisiones entre áreas de adscripción · Tabulador de puestos del Instituto			
d) Informe, desglose y comparativo del total de las relaciones laborales que sostiene este Instituto, durante el periodo que comprende del 1 de enero 2014 al 25 de marzo de 2015, con cortes mensuales, incluyendo pero no limitado a:	Sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del	27 de marzo de 2015	
· Nombre del puesto			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Información solicitada	Documento mediante el cual se solicitó	Fecha de solicitud	Fecha de entrega de información
<ul style="list-style-type: none"> · Perfil del puesto · Nombre completo de quien ocupa el puesto · Perfil de quien ocupa el puesto · Salario de acuerdo al tabulador · Salario real del puesto · Área de adscripción · Temporalidad del puesto (Permanente, eventual y/o por tiempo determinado). · Fecha de Inicio y vencimiento del contrato e) Informe de todos los órganos del Instituto que incluya: <ul style="list-style-type: none"> · Organigramas o Personal de base, central o Personal eventual, central y distrital · Perfiles de los puestos que confirman su estructura · Perfiles de quienes ocupen los puestos de su estructura · Tipo de contrato de cada puesto, señalando fecha de Inicio y de vencimiento · Manual de procesos · Manual de inducción · Instrumentos de evaluación del desempeño · Plan de trabajo y cronograma de actividades 	<p>Estado de Jalisco.</p> <p>SPE/002/2015</p> <p>SPE/003/2015</p> <p>Oficios del SPE/005/2015 al SPE/011/2015 mediante los cuales se solicita al presidente y a todos los directores la información descrita, para poder llevar a cabo la sesión de la comisión de 27 de marzo de 2015.</p> <p>Sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.</p>	5 de octubre de 2015	<p>No entregada</p> <p>Informa que no existe. En septiembre 2016</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Información solicitada	Documento mediante el cual se solicitó	Fecha de solicitud	Fecha de entrega de información
· Avances en objetivos generales y específicos	Sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Se deja constancia de la información solicitada desde octubre de 2014 al 5 de octubre de 2015).		<p>Entregada en septiembre 2016</p> <p>Informa que no existe. En septiembre 2016</p> <p>Entregada en septiembre 2016</p> <p>No entregada</p> <p>No entregada</p> <p>Entregada en septiembre 2016</p> <p>Informa que no existe. En septiembre 2016</p> <p>No entregada</p> <p>No entregada</p>

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

Información solicitada	Documento mediante el cual solicitó	Fecha de solicitud	Fecha de entrega de información
			<p>Informa que no existe. En septiembre 2016</p> <p>No entregada</p>
Información no entregada del 31 de octubre de 2014 al 03 de octubre de 2016			
Información no existente, según oficio No. 290/2016			
Información entregada, según oficio No. 290/2016			

II. Objeción del alcance probatorio

Como ya quedó asentado en el punto anterior, la documentación entregada por la Secretaria Ejecutiva es incompleta. Con independencia de ello, dicha información entregada en este momento resulta irrelevante para reparar el agravio aducido en mi escrito inicial de demanda toda vez que tal y como se ha manifestado en diversas ocasiones, la información requerida fue en mi carácter de Presidenta de la Comisión del Servicio profesional, que tal y como lo prevé el artículo 136 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ocupé durante un año.

El propósito de aquella solicitud era posibilitar el desarrollo de las sesiones ordinarias de la comisión del servicio de fechas 31 de octubre, 31 de

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

diciembre de 2014 y 23 de enero, 27 de marzo y 5 de octubre de 2015, cuyo propósito era dar seguimiento a la incorporación del instituto al servicio profesional electoral, lo que ya ocurrió. Por tanto, resulta evidente que la ausencia de información oportuna me impidió absolutamente ejercer mi cargo como presidenta de dicha comisión.

La entrega de esta información (además incompleta) en este momento es un reconocimiento expreso por parte de la autoridad responsable que dicha información no fue entrega en tiempo y que por tanto mi agravio resulta procedente. Hecho hace irreparable ya que el resultado fue menoscabar y anular el ejercicio de mi cargo en mi calidad de consejera electoral".

*Establecido lo anterior, lo **fundado** de la omisión radica en la circunstancia de que al analizar el marco normativo aplicable, los integrantes del Consejo General del multicitado instituto tienen la atribución de requerir la información que estimen necesaria para el ejercicio de sus funciones y los funcionarios del instituto tienen la obligación de dar respuesta a dichas solicitudes, proporcionar la información que se les requiere o, en su caso, mencionar las razones por las cuales se encuentra impedidos para entregárselas, así como notificar al solicitante dicha respuesta.*

*A pesar de la existencia de esta obligación se tiene que varias de las solicitudes se dirigieron directamente a **los titulares de las direcciones del instituto**, los cuales, en términos del artículo 13, apartado 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, **tienen la obligación de proporcionar los datos y la información sobre asuntos propios que le sean solicitados o dar respuesta en el sentido de que no cuentan con dicha información, sin que hasta el momento se advierte que hayan dado respuesta a las mismas y, mucho menos, notificado la respectiva respuesta.***

*También, existe una solicitud dirigida al **Secretario Ejecutivo**, el cual, acorde con lo establecido con el artículo 7, apartado 1, fracción VI, del reglamento interior en cuestión, **tiene el deber de colaborar y proporcionar la información que se le pida**, en los términos de la normatividad aplicable, o bien, justificar la respuesta negativa correspondiente.*

*Sin embargo, el oficio dirigido tanto al Consejero Presidente como al Secretario Ejecutivo **obtuvo la respuesta que dichos funcionarios estimaron pertinentes más de un año después de haberse realizado la solicitud**, por lo que es claro que **no puede considerarse un cumplimiento eficaz y profesional** del deber que tenían dichos funcionarios, máxime que la actora manifiesta que **la información no sólo es tardía sino también incompleta**.*

*Con dicho actuar **se ha obstaculizado el ejercicio de las atribuciones de la actora**, entre las cuales, **destaca la posibilidad de requerir información a los órganos del instituto para el ejercicio de sus funciones**.*

*Al respecto, debe considerarse que **la responsable no sólo proporcionó la información tardíamente, sino que fue hasta el momento en que la actora instó a este órgano jurisdiccional que obtuvo una respuesta parcial** –ya que no todos los órganos solicitados le dieron respuesta–.*

[...]

Lo resaltado es de esta Resolución.

De lo trasunto, se advierte que el mencionado órgano jurisdiccional especializado, llevó a cabo una relación pormenorizada de las solicitudes de información que la quejosa presentó para el desempeño de su cargo como Consejera Electoral y como Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

La citada *Sala Superior* declaró fundado el concepto de agravio, de conformidad con los siguientes argumentos:

- El Consejero Presidente, los entonces Secretario Ejecutivo y los titulares de distintas Direcciones del *OPLE*, omitieron proporcionar a la quejosa, de forma oportuna y completa, diversa información que solicitó en el ámbito de sus atribuciones, la cual era necesaria para el debido desempeño de su cargo.

- Los mencionados servidores públicos, tenían el deber jurídico de colaborar y proporcionar la información que se les requiriera y, en su caso, fundar y motivar debidamente la negativa para hacerlo.
- El Consejero Presidente y el entonces Secretario Ejecutivo, ambos del *OPLE*, dieron respuesta a una de las peticiones de la quejosa, transcurrido más de un año de haberse presentado la solicitud.
- La entrega de información tardía e incompleta, se considera como una actuación ineficaz y no profesional.
- La autoridad responsable proporcionó la información de forma incompleta y tardíamente, hasta el momento en que la denunciante promovió el respectivo medio de impugnación.
- Con la falta de entrega de información, en tiempo y forma, se ha obstaculizado el ejercicio del cargo de la quejosa.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expresados por los ex Directores de área denunciados, cabe destacar que la *Sala Superior* ya se pronunció expresamente, en el sentido que éstos tenían el deber de proporcionar la información requerida, lo cual no ocurrió, dado que las peticiones fueron dirigidas a cada uno de ellos, sin que existiera una respuesta.

En efecto, el mencionado órgano jurisdiccional, al analizar el memorándum “Presidencia 14/15”, relativo a que los asuntos sobre la organización administrativa del Instituto Electoral local le correspondían al Consejero Presidente en coadyuvancia con el Secretario Ejecutivo, consideró, que esa respuesta era insuficiente para dar contestación a la quejosa, lo cual calificó como indebido, por lo siguiente:

- 1. La demandante dirigió una solicitud de información a los funcionarios que el propio memorándum menciona como encargados de la organización administrativa.**

2. En virtud de dicho memorándum no se le da respuesta a las solicitudes de información giradas por la Consejera Electoral en ejercicio de sus funciones, sino que únicamente se le refiere que cualquier asunto relacionado con la organización administrativa la debe tratar directamente con dichos funcionarios.

3. Con dicha respuesta, en forma alguna se subsana la obligación de los funcionarios requeridos de dar la contestación que en Derecho proceda a la solicitud de información, máxime que del contenido del memorándum no se hace referencia o se emite como respuesta a dichas solicitudes.

Lo anterior, se encuentra vinculado con el pronunciamiento realizado por la propia *Sala Superior*, en el sentido que, los titulares de las direcciones del Instituto, en términos del artículo 13, apartado 1, fracción VI, del Reglamento Interior del *OPLE*, tienen la obligación de proporcionar los datos y la información sobre asuntos propios que le sean solicitados, o dar respuesta en el sentido de que no cuentan con dicha información

De igual forma, el Secretario Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 7, apartado 1, fracción VI, del citado Reglamento, tiene el deber de colaborar y proporcionar la información que se le pida, en los términos de la normatividad aplicable, o bien, justificar la respuesta negativa correspondiente.

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad, que la quejosa argumentó, en desahogo al requerimiento hecho por la *UTCE* mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que la falta de entrega de información se acredita con las copias certificadas de las minutas de trabajo correspondientes a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebradas los días treinta y uno de octubre y treinta y uno de diciembre, ambas de dos mil catorce, veintitrés de enero, veintisiete de marzo y cinco de octubre de dos mil quince.

Las citadas constancias obran en autos del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, a las cuales se les otorga valor **probatorio pleno**, dado que se tratan de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I,

inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, cuya autenticidad y contenido no están controvertidas y menos aún desvirtuados en autos.

Ahora bien, de la lectura integral de las mencionadas constancias, en lo que interesa, se advierte lo siguiente:

-SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE

La mencionada sesión tuvo como objeto el análisis y discusión de los siguientes temas:

- 1) Análisis de los movimientos del personal del *OPLE* durante los meses de septiembre y octubre de dos mil catorce.
- 2) Análisis de las relaciones laborales del *OPLE*.
- 3) Análisis del proyecto de estructura eventual del *OPLE*, con motivo del Proceso Electoral dos mil catorce-dos mil quince.

En su oportunidad, la denunciante, en su carácter de Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, solicitó al Secretario Técnico que informara sobre cada uno de los puntos del orden del día.

El aludido Secretario Técnico argumentó, en cada caso, que no contaba con información alguna, y al ser cuestionado por la quejosa sobre las gestiones que había llevado a cabo ante la Dirección de Administración y Finanzas del *OPLE*, para obtener la información que se le había requerido, el Secretario Técnico adujo que se había reunido con el Consejero Presidente para hacer de su conocimiento sobre el requerimiento de información, en tanto que, éste último le informó que estaba en la mejor disposición de proporcionar la información, la **cual se estaba generando y, en su oportunidad, sería remitida a todos los Consejeros.**

Asimismo, el Secretario Técnico informó que no tenía atribuciones para solicitar información a las diferentes Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral local.

-SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

En esta sesión, la quejosa requirió al Director de Administración y Finanzas del *OPLE*, para que rindiera un informe sobre la relación de movimientos del personal de ese Instituto en el periodo de enero a diciembre de dos mil catorce, así como un informe sobre las relaciones laborales que sostiene ese Instituto en el aludido periodo.

En respuesta, en cada caso, el mencionado Director argumentó que no cuenta con facultades para entregar esa información, dado que ello es mediante las *instrucciones del Consejero Presidente que se recaba y entrega la información requerida*; por tanto, *una vez que el Consejero Presidente lo instruyera*, o bien, su equipo de trabajo, se llevaría a cabo la integración de la información, la cual sería proporcionada cuando *así recibiera instrucciones del Consejero Presidente*.

-SESIÓN ORDINARIA DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE

En la sesión, se trataron temas relacionados con los informes rendidos por el Secretario Ejecutivo y titulares de las distintas Direcciones administrativas del *OPLE*, con relación al organigrama y bases eventuales, manual de procesos, manual de inducción e instrumentos de evaluación del desempeño; asimismo, sobre el seguimiento al informe del Director de Administración y Finanzas que quedó pendiente en la diversa sesión de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

De la lectura integral del acta de la mencionada sesión ordinaria, se advierte que el Secretario Ejecutivo, Director de Educación Cívica y Director Jurídico argumentaron, en cada caso, estar preparando la información requerida y que en su momento *se proporcionaría por conducto de la Presidencia* de ese Instituto Electoral local.

En efecto, el Secretario Ejecutivo adujo que *“se está trabajando en la información que solicitó la comisión a las direcciones del instituto”*, las cuales tienen la instrucción que se atienda la petición a la brevedad y que se remita por medio de la Presidencia del Instituto.

Por su parte, el Director de Educación Cívica argumentó que *“se está elaborando un documento que explica la plantilla de base y eventual y las funciones que*

desarrolla cada empleado para este Proceso Electoral... Éste será turnado a la Presidencia del Instituto para que esta lo haga llegar a la Comisión”.

Asimismo, el Director Jurídico manifestó que “*se está trabajando en el informe*” porque la información no existe en los términos en que fue requerida por la Comisión, por tanto, conforme a la instrucción que había recibido, la información correspondiente, sería remitida a la brevedad por medio de la Presidencia de ese Instituto local.

El Director de Administración y Finanzas informó que seguían avanzado en lo solicitado pero aún no estaba completo, lo anterior, en razón que el área de recursos humanos se estaba avocando a la recepción de documentación y de altas en el Seguro Social.

Finalmente, en el acta de la mencionada sesión ordinaria, se hizo constar la inasistencia del Director de Organización Electoral a fin de rendir el correspondiente informe sobre su área.

-SESIÓN ORDINARIA DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

Esta sesión, tuvo por objeto analizar y discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Análisis de las listas de Coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación, así como la de Capacitadores-asistentes, del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
- 2) Análisis de las listas del personal eventual de las áreas de Capacitación, Organización e informática contratados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
- 3) Revisión de la plantilla del OPLE.
- 4) Revisión de los Planes de trabajo de las Direcciones del Instituto electoral local y avances respecto del calendario de actividades.
- 5) Propuesta para los criterios de evaluación y seguimiento del desempeño de los Directores de esa autoridad administrativa electoral local.

De la lectura a la correspondiente acta, se advierte que la quejosa, en su carácter de Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, cuestionó a la Directora de la Secretaría Técnica si contaba con información sobre algún tema a tratar en esa sesión, a lo que respondió que *“no se tiene información al respecto de ningún punto a tratar en el orden del día”* y agregó que en esa fecha recibió un correo electrónico del entonces Secretario Ejecutivo de ese Instituto con copia al Consejero Presidente y al Director General, con el siguiente mensaje:

“... De conformidad con lo establecido en el artículo 143, párrafo 2, fracción 22 (sic) del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la organización y administración del Instituto es facultad del Consejero Presidente quien podrá auxiliarse para tal efecto en el Secretario Ejecutivo.

En este sentido, y por instrucciones del Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo informa que cualquier solicitud relacionada con las cuestiones de organización o administración de este Instituto electoral deberá ser dirigida y canalizada al Consejero Presidente o al suscrito Secretario Ejecutivo...”

Asimismo, la entonces Directora de la Secretaría Técnica argumentó que llevó a cabo la gestión correspondiente para obtener la información ante el Director General del Instituto, sin embargo, este funcionario le informó que lo haría del conocimiento del Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo para *“darle el cauce legal a que haya”*.

También, la aludida servidora pública dio cuenta que el veinticuatro de marzo de ese año, la quejosa, en su carácter de Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, emitió oficios a todas las direcciones del Instituto, mediante las cuales requirió la información relativa a los temas a desahogar en esa sesión, en tanto que, el inmediato día veinticinco, recibió el memorándum número 14/15 de la Presidencia de esa autoridad administrativa electoral local, con el siguiente mensaje:

“...con fundamento en la fracción 22 (sic) del artículo 143 del Código Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Jalisco, la organización administrativa del instituto le corresponde a la Presidencia y, en coadyuvancia, a la Secretaría Ejecutiva.

Por tanto, le solicito que *cualquier asunto relativo a ella, lo trate con el suscrito o el secretario ejecutivo...*

-SESIÓN ORDINARIA DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE

En esta sesión, al tratar asuntos generales, la quejosa, en su carácter de Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, argumentó que esta era la quinta sesión que esa Comisión llevaba a cabo, sin que a esa fecha se hubiera recibido la información que se había requerido en las sesiones anteriores, esto es, las celebradas los días treinta y uno de octubre y treinta y uno de diciembre, ambas de dos mil catorce, veintitrés de enero y veintisiete de marzo, de dos mil quince, lo cual se hacía del conocimiento de los integrantes de esa Comisión para los efectos a que hubiera lugar.

5.1.2 Exclusión de comisiones atribuibles al Presidente, Guillermo Amado Alcaraz Cross y de los Consejeros Electorales del OPLE, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez

Con relación a este planteamiento de la denunciante, la *Sala Superior* tuvo por acreditada esa irregularidad, en los siguientes términos:

[...]

CONSIDERANDO

[...]

DÉCIMO.

[...]

En lo que respecta a la exclusión de comisiones, el agravio se considera fundado pero inoperante.

La exclusión se considera indebida, porque con dicho actuar la promovente se le obstaculizó el ejercicio de su cargo puesto que con dicha exclusión de las tres comisiones de las que formaba parte pasó a integrar sólo dos, siendo la integrante del Organismo Público Electoral con menor número de comisiones, lo cual no puede considerarse como un

actuar acorde con el profesionalismo y la igualdad que debe imperar en un órgano colegiado.

Sin embargo, la calificación de inoperancia estriba en la circunstancia de que la autoridad responsable modificó los acuerdos originalmente impugnados.

En su escrito de demanda de seis de julio de dos mil dieciséis, la ahora actora impugna entre otros actos:

1. El acuerdo IEPC-ACG-030/2016, mediante el cual se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el seguimiento a los actos preparatorios para la implementación del voto de los jaliscienses en el extranjero y tecnologías de la información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, por considerar que fue indebidamente excluida de su conformación.

2. El acuerdo IEPC-ACG-031/2016, mediante el cual: a) aprueba la creación e integración de la Comisión permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; b) determina el órgano que servirá de enlace y que estará a cargo de la atención de los asuntos del servicio profesional; c) adecua la estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la rama administrativa, y d) aprueba la relación del personal que ocupa los cargos y puestos que se integran al Servicio Profesional Electoral Nacional, de ese organismo electoral por considerar que fue indebidamente excluida de la integración de esa comisión.

La pretensión de la actora consiste en que se revoquen dichos acuerdos a fin de que se le incluya en la conformación de dichas comisiones.

La causa de pedir estriba en la circunstancia que alega que fue indebidamente excluida de participar como consejera en dichas comisiones dada su posición crítica con respecto a la forma en la cual se adoptan las decisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

El veintitrés de agosto el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco celebró sesión extraordinaria, en virtud de la cual aprobó, entre otras cuestiones, los actos siguientes:

1. Acuerdo IEPC-ACG-039/2016 de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el que aprueba modificar los artículos 7 y 33 del Reglamento Interior de ese organismo electoral.

En dicho acuerdo, específicamente en el considerando V, se propuso modificar dichos artículos a efecto de regular y garantizar la máxima publicidad en la actuación de las y los Consejeros Electorales, así como a la equidad en la integración de las comisiones internas de dicho organismo electoral. La propuesta de reforma al reglamento fue en los siguientes términos:

"Artículo 7.

1. Corresponde a los Consejeros Electorales las atribuciones siguientes:

...

XI. Asistir a las reuniones de trabajo a las que sean convocados de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, debiendo quedar registro de la versión estenográfica del desarrollo de las mismas en medios auditivos o visuales, la cual servirá como base para elaborar la minuta correspondiente, misma que deberá ser firmada por los Consejeros Electorales participantes, así como por el Secretario Ejecutivo en su caso; además de que las mismas deberán ser transmitidas en tiempo real en el portal oficial de internet del instituto, lo anterior con el objeto de garantizar el principio rector de la función electoral de máxima publicidad.

Artículo 33.

1. Las comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les confiere el código, los acuerdos y resoluciones que emiten el propio Consejo General; al

momento de su integración, deberá procurarse la participación equitativa de los Consejeros Electorales".

Tal y como se advierte en el acuerdo primero, las modificaciones al reglamento propuestas fueron aprobadas.

2. Acuerdo IEPC-ACG-040/2016 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual aprueba la modificación en la integración de las comisiones permanentes de Organización Electoral; de Prerrogativas a Partidos Políticos, y de Seguimiento al Servicio Profesional Nacional, así como en la Comisión Temporal de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.

En virtud de dicho acuerdo, específicamente en el considerando VII, se determinó que, a efecto de obtener una distribución más equitativa en la integración de diversas comisiones internas del citado Consejo General, se proponía modificar su conformación.

A raíz de la modificación propuesta la ahora actora, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, pasó a formar parte de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Nacional y de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.

Asimismo, se le designó como Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral. Tal y como se advierte en el acuerdo primero, las modificaciones propuestas fueron aprobadas.

Los acuerdos de referencia fueron remitidos por escrito de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis signado por la Secretaria Ejecutiva del citado instituto, y recibido en la Oficialía de Parte de esta Sala Superior en la propia fecha.

A tales documentales se le atribuye valor probatorio pleno, al constituir instrumentos expedidos por un organismo público electoral local competente, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 14, apartado 1, inciso a, apartado 4 con relación al 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

*Derivado de lo anterior, se advierte que **la autoridad responsable modificó los acuerdos originalmente impugnados a efecto de incluir a la ahora actora como integrante de diversas comisiones internas del citado organismo público electoral local.***

Esto es así, porque con la modificación aprobada a la integración de las comisiones, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral pasó a formar parte de las comisiones de Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio Profesional Nacional, así como la de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.

En esas circunstancias, si la pretensión de la actora al impugnar los acuerdos originalmente controvertidos, en los que alegaba, en esencia, que había sido excluida indebidamente de conformar las comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Nacional, así como la de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, entonces es claro que la autoridad responsable posteriormente modificó la conformación de dichas comisiones a fin de integrar a la ahora actora en las mismas, con lo cual se ve colmada la pretensión de la impetrante en lo referente a integrar tales comisiones.

[...]

Lo resaltado es de esta Resolución.

De la transcripción, de la aludida sentencia de la *Sala Superior*, en lo que interesa, se advierte que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, consideró que la

quejosa efectivamente fue excluida indebidamente de las Comisiones, al ser la única Consejera que integraba el menor número de éstas.

Asimismo, cabe destacar que la denunciante adujo, al desahogar el correspondiente requerimiento formulado por la *UTCE* mediante Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que en la sesión del Consejo General del *OPLE*, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis, fue indebidamente excluida de integrar comisiones.

Ahora bien, en autos del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, obra la versión estenográfica de la mencionada sesión pública, a la cual se le otorga valor **probatorio pleno**, dado que se trata de una documental pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado en autos.

De la lectura integral de la citada versión estenográfica, se advierte que en su momento se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo General local, el Proyecto de Acuerdo, el cual, entre otras cuestiones, se pronunciaba en lo relativo a la creación e integración de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, de la cual formaría parte la ahora quejosa.

No obstante, una vez que se dio cuenta con el Proyecto de Acuerdo, **el Consejero Presidente del OPLE, propuso una modificación** a la integración de esa Comisión, en el sentido de sustituir a la denunciante por otra de las integrantes de ese órgano colegiado, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra.

El aludido Consejero Presidente adujo, a fin de motivar la sustitución, lo siguiente:

[...]

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Muchas gracias secretaria, previo a sujetar a consideración de las Consejeras y

consejeros del presente punto del orden. *Quiero justificar una modificación que voy a presentar en este momento y que obedece a algo que perdí de vista, dentro de los miembros de este consejo hay uno, uno sólo que de manera ya transitó por el servicio profesional y que me parece que debe estar integrada en esa comisión, no había visto, no había considerado esta parte y me parece que es muy valiosa o deberá ser muy valiosa su participación y en esos términos quiero modificar la integración de la comisión, para que la consejera Beatriz Rangel, pueda acompañarnos en los trabajos de ella y en esos términos la propuesta que formulo para que podamos integrar esta comisión es que queda integrada tal cual, pero en que en lugar de la consejera Erika Ruvalcaba, pudiera quedar integrada la consejera Beatriz Rangel, en esos términos pongo a consideración de las consejera y consejeros el presente punto del orden del día[...]*

En este sentido, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez y las Consejeras Electorales Virginia Gutiérrez Villalvazo y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral se pronunciaron en contra de la propuesta hecha por el Consejero Presidente, sustancialmente porque ello constituía violación al principio de igualdad en la integración de Comisiones del Consejo General, en razón que la quejosa pasaría a formar parte de tres comisiones y no de cuatro, siendo la que menos comisiones integraba.

En efecto, la denunciante argumentó, en su demanda primigenia, que la integración de comisiones resultaba desproporcionada en razón que los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel Juárez integraban siete comisiones cada uno de ellos, las Consejeras Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo y Sayani Mozka Estrada formaban parte de seis comisiones cada una de ellas, el consejero José Reynoso Núñez integraba cuatro comisiones y la quejosa solo integraba tres comisiones.

En este contexto, como lo determinó la *Sala Superior* al dictar la mencionada sentencia de mérito, la quejosa fue indebidamente excluida de la integración de comisiones y no fue sino hasta que promovió el correspondiente medio de impugnación que procedieron a modificar los acuerdos relativos a la integración de esos órganos colegiados.

Por lo expuesto, la Sala Superior determinó que la exclusión indebida de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en la integración de Comisiones, se le obstaculizó el debido ejercicio del cargo, en los términos expuestos por el aludido órgano jurisdiccional especializado.

5.1.3 Falta de actuar con el debido profesionalismo del Consejero Presidente del OPLE Guillermo Amado Alcaraz Cross

Por otra parte, la *Sala Superior* determinó que el Consejero Presidente del OPLE no actuó con el debido profesionalismo, obstaculizando el correcto ejercicio del cargo de la quejosa, como se advierte de la siguiente transcripción:

[...]

CONSIDERANDO

[...]

DÉCIMO.

[...]

Establecido lo anterior debe considerarse que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones.

En ese sentido, entre los principios que rigen el actuar de las autoridades electorales se encuentra el del profesionalismo.

El profesionalismo es un principio que rige en materia electoral, que deben cumplir los integrantes de los Organismos Públicos Electorales Locales, entre ellos los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General.

Tal principio de profesionalismo impone el deber de preparación en profesiones que la legislación requiere de una autorización expresa y especial por parte del Estado, dada su complejidad o bien su trascendencia en la vida de los habitantes del Estado.

Así en las entidades federativas, se debe garantizar, entre otros aspectos, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo que determinen las leyes, siendo profesionales en el desempeño de su encargo.

Es ese sentido, el sistema electoral cuenta con órganos administrativos permanentes, como son los institutos electorales (federal y locales) en los que el profesionalismo es la premisa en su actuar, en tanto que las funciones que realizan tales órganos y funcionarios requiere de alta calificación profesional para llevar a cabo una serie de actos técnicos y materiales de alta complejidad que, concatenados, conforman los procesos electorales federal y locales.

*Importa precisar que **el profesionalismo también tiene por objeto que ese conocimiento especializado y técnico sea utilizado en una correcta aplicación de la legislación, en virtud de la cual, las autoridades y sobre todo las que conforman un órgano colegiado ejerzan sus funciones sin menoscabar u obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de alguno o algunos de sus integrantes**, porque precisamente lo que se busca con la dicha colegiación es que las decisiones se adopten atendiendo a los diversos puntos de vista que pueden existir.*

Bajo esa perspectiva, resulta claro que el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del

Estado de Jalisco no ha actuado con el debido profesionalismo al obstaculizar el ejercicio del cargo de la actora, al haberla excluido indebidamente de comisiones sin ninguna justificación y haber entregado la información solicitada de manera tardía.

[...]

Lo resaltado es de esta Resolución.

Con base en los anteriores argumentos, la *Sala Superior* tuvo por **acreditado** un indebido proceder atribuible al Presidente del *OPLE* de Jalisco, Guillermo Alcaráz Cross, por su falta de profesionalismo al obstaculizar, el ejercicio del cargo de la actora, al haberla excluido indebidamente de comisiones sin ninguna justificación y haber entregado la información solicitada de manera tardía.

No obstante, y toda vez que el propio órgano jurisdiccional no se pronunció respecto de la conducta relativa al acoso laboral, sino, únicamente sobre los tópicos que han quedado transcritos, el pronunciamiento que realiza esta autoridad se analizará en apartados posteriores.

5.2 Pronunciamiento sobre las presuntas agresiones verbales de los denunciados a la quejosa, atribuibles al Presidente y de los Consejeros Electorales del *OPLE*, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez

En primer lugar, cabe destacar que la denunciante argumenta que, en las sesiones públicas del Consejo General del *OPLE*, celebradas los días veintidós y veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de mayo, diez, veintitrés y veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, fue agredida de manera verbal por diversos Consejeros Electorales integrantes de ese órgano colegiado; en tanto que, el Consejero Presidente faltó a su deber de conducir las sesiones de manera adecuada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, párrafo 1, fracciones V, IX y X, del Reglamento de Sesiones del Consejo General de ese Instituto Electoral local, al no aplicar el diverso numeral 35 de la citada normativa reglamentaria.

Asimismo, es importante tener en cuenta que de la lectura integral de los escritos presentados por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, se advierte que la denunciante señala a los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez, y al Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, como las personas de quienes ha recibido agresiones verbales, dado que, en la sesión pública de veintidós de enero de dos mil dieciséis, las Consejeras Electorales Sayani Mozka Estrada y Griselda Beatriz Rangel Juárez, la acusaron de haber solicitado plazas a cambio de su voto, en tanto que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, en sesión de veinticinco del mes y año en cita, cuestionó la capacidad de la denunciante para ocupar el cargo, al manifestar que la calificación que obtuvo en el examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), fue la más baja y, que incluso, comparó su calificación con la de los Directores sujetos a ratificación, lo que en su opinión, se trata de expresiones ofensivas e irrespetuosas.

Por otra parte, la quejosa aduce que el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, toleró las conductas en que incurrieron los mencionados Consejeros Electorales, al no aplicar el Reglamento de Sesiones del Consejo General de ese Instituto Electoral local.

Con relación a las restantes sesiones públicas, cabe precisar que Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta, de forma genérica, que se hicieron alusiones personales sin precisar, qué expresiones o frases son las que considera como agresiones verbales, menos aún, identifica qué persona hizo determinada manifestación.

En este sentido, a fin de estar en posibilidad de resolver lo que en Derecho corresponda, es menester tener en consideración el contexto en que se desarrollaron las sesiones del Consejo General del *OPLE*, dado que, de llevar a cabo un análisis aislado de las intervenciones de los integrantes de ese órgano colegiado, tendría como consecuencia causar un agravio tanto a la denunciante como a los denunciados.

Por tanto, en el particular, se tendrán en consideración las **versiones estenográficas** que obran en autos del procedimiento sancionador ordinario al

rubro identificado, a las cuales se les otorga valor **probatorio pleno**, dado que se tratan de documental públicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no están controvertidas y menos aún desvirtuados en autos.

- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS Y SU CONTINUACIÓN EL INMEDIATO DÍA VEINTICINCO.

En su denuncia, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que, durante la sesión de veintidós de enero de dos mil dieciséis, al discutir el Proyecto de Acuerdo por el cual se pretendía dar cumplimiento al diverso acuerdo del *INE* identificado con la clave INE/CG865/2015, consistente en designar al Secretario Ejecutivo y Directores Ejecutivos de ese *OPLE*, recibió agresiones verbales al disentir de la propuesta sometida a consideración del órgano colegiado.

Ahora bien, de la lectura integral de la versión estenográfica de la mencionada sesión pública, se advierte sustancialmente, lo siguiente:

Durante el desarrollo de la sesión pública en cita, como punto nueve del orden del día, se sometió a consideración del Pleno del Consejo General del *OPLE* el “*PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA AL SECRETARIO EJECUTIVO Y A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES TÉCNICAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL*”.

En el mencionado Proyecto de Acuerdo, se propuso ratificar a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones y de las Unidades Técnicas de ese Instituto Electoral local.

En uso de la voz, la Consejera Electoral María Virginia Gutiérrez Villalvazo argumentó que la propuesta era contraria a los considerandos veinte, veintiuno y veintidós del acuerdo INE/CG865/2015 de este Instituto, así como al punto diez de los Lineamientos aprobados en esa determinación, razón por la cual, de ser el caso, emitiría voto particular.

En su intervención, la denunciante **Erika Cecilia Ruvalcaba Corral** se pronunció en contra del Proyecto de Acuerdo, en los siguientes términos:

Si, muchas gracias. En el mismo sentido, deseo manifestar mi voto en contra por las mismas razones ¿no?, este acuerdo el 865 se aprobó por los miembros del Consejo General del INE el día nueve de octubre, entiendo que se nos notifica al OPLE el día trece de octubre ¿no?, se nos confirma esta notificación ya vía correo electrónico el veinte de noviembre por parte del área de vinculación de este OPLE entendiéndolo así que tenemos hoy un... la fecha de vencimiento, no sé si estoy en lo cierto y el día de ayer veintiuno de enero de dos mil dieciséis se nos notifica esta única propuesta ¿no? que viene en este sentido pero me parece también que no cumple con algunos requisitos ¿no? de procedimentales también, como son la valoración curricular, la entrevista, etcétera, algunos otros criterios que están previstos ya en el acuerdo ¿no?, me permito citar alguno de ellos que sería: "...el objeto de este lineamiento entre otros es sentar las bases comunes y requisitos mínimos aplicables para todos los casos en que se tengan que designar funcionarios y evitar la posible vulneración a la autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales por la eventual intromisión de factores externos en el ejercicio de dicha facultad autónoma", en el punto veintiuno dice: "...a través de esta decisión se garantizará la autonomía de las autoridades electorales y se enfatizará la responsabilidad que los conseje...(SIC) " que en este caso los titulares desempeñaran en su encargo, se pretende evitar que estén vinculados por nombramientos realizados previamente lo cual consolida la autonomía de los órganos locales y a través de esta dicha autonomía se podría garantizar la celebración de los procesos electorales con estricto apego a la normativa aplicable y respetando los derechos político-electorales de los ciudadanos y con esto no quiere decir que no pongo en duda que pudieran o no contar, es decir, no pongo en duda la honorabilidad y la capacidad, etcétera, quizás pudieran contar con todo esto pero me parece que el procedimiento no fue el adecuado o no sé si adecuado sea lo correcto pero me parece que no cumple con algunos criterios por esa razón mi voto será en contra, con mucho respeto gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Por otra parte, la Consejera Electoral **Sayani Mozka Estrada** argumentó, lo siguiente:

Bueno a mí una vez más, como ha sucedido en otras ocasiones, me llama muchísimo la atención que algunas Consejeras se conduzcan con medias

verdades, que el principio de objetividad no se respete y que aquí se diga que esta propuesta no fue discutida; tengo anotaciones en mi libreta, fotografías en mi celular de varias sesiones que tuvimos de trabajo para poder llegar a un acuerdo, es decir, esta propuesta no nos la remitieron ayer consejera perdón, se remitió porque pues de manera oficial nos la hacen llegar evidentemente. Me llama mucho la atención consejera Erika Ruvalcaba que hagas alusión a lineamiento y te refieras por ejemplo al punto veintiuno, en el que se dice que se tomará una decisión de manera autónoma y llama mucho la atención porque estamos ratificando algo que aprobamos o estamos queriendo ratificar, la propuesta es ratificar, algo que con autonomía el veinticuatro de enero de dos mil quince votamos y que votaste tú al menos en una propuesta. Por otro lado y en apego a esa objetividad me permito decir que el día diecisiete de diciembre del dos mil quince y como parte de la deliberación a la que tuvimos que abrirnos para poder construir una propuesta, la consejera Erika Ruvalcaba tuvo el acierto, el atino, ante las dificultades presupuestales que plantea esta institución que se va a haber en la necesidad de hacer un recorte, como todo mundo lo sabe ¿no?, de plantear, y una propuesta apoyada por el consejero José Reynoso que es quien más lamento que haya apoyado esa propuesta y no me extraña de la consejera Virginia, un chofer, solicitó un chofer, tres asesores y un asistente, para que pudiéramos llegar a construir acuerdos ¿no?, de esa magnitud se plantea al menos en mí persona que yo me ponga a negociar con mis colegas Consejeras y consejeros la posibilidad de construir un acuerdo, a la luz de estos hechos el diecisiete de diciembre lo tengo aquí anotado, entonces bueno creo que hay una falta de seriedad al respecto y no sólo eso, yo le pregunté aquel día a la consejera Erika porque me pareció incluso que podía parecer alguna broma, un chascarrillo ante la situación que tiene esta institución de déficit presupuestal y de impago a todo el personal, solicitar un chofer, tres asesores y un asistente, y a la pregunta de si era con cargo a su salario la consejera tranquilamente me dijo que no, que ella quería que el instituto pagara también a estas personas, entonces sobre la base de consideraciones para negociar nombramientos se pone o se amaga o se sale de entrada con la posibilidad de que si no se aprueba esto entonces yo no apruebo o no voy con las propuestas ¿no?, es bastante caricaturesco, si da risa, es muy sorprendente, llama la atención ¿no? que se tenga este cinismo y esta falta de seriedad y de respeto para con el personal del instituto, para con la institución, pero sobre todo para con la ciudadanía, es cuanto.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Asimismo, la Consejera Electoral **Griselda Beatriz Rangel Juárez** hizo el siguiente pronunciamiento:

Muchas gracias Consejero Presidente. Habiendo sido testigo de lo que acaba de señalar la consejera Sayani, lo suscribo, pero quisiera enfatizar que este lineamiento del Instituto Nacional Electoral que precisamente pretende preservar la autonomía de los organismos públicos electorales locales tiene previsto como una de las atribuciones que los institutos electorales de los estados podremos adoptar es precisamente la ratificación que hoy se propone en esta mesa y en ese sentido no se está incurriendo en ninguna irregularidad o apartándonos del sentido del lineamiento referido, en ese sentido creo que la propuesta que se ha formulado aquí atiende a que hasta este momento no existe un señalamiento, procedimiento administrativo que se haya instaurado en contra de ninguno de los propuestos para ser ratificados y que a lo largo de varias, no solo de una, sino de varias jornadas electorales, de varios procedimientos de preparación y desarrollo, de diversos procesos electorales se han demostrado capacidad y hoy cuentan con una probada experiencia, en ese sentido creo que si las circunstancias conllevan a una reestructuración, a una reingeniería de esta estructura eso es otro momento, hoy estamos en plenitud ejerciendo una atribución que es someter a consideración de este órgano la ratificación de todos y cada uno de los directores que son titulares de las áreas de este instituto, es cuanto.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

El Consejero Electoral José Reynoso Núñez también manifestó estar en contra de la propuesta sometida a consideración de ese órgano colegiado, al tener observaciones de procedimiento y de contenido. En cuanto a procedimiento, porque, en su opinión, hacía falta llevar a cabo las entrevistas y valoración curricular, en razón de que hasta ese momento desconocía la curricula de las personas propuestas; sobre contenido, consideró que de las catorce propuestas solo tres eran mujeres, lo que a su juicio, se debía observar el principio de paridad de género al interior de esa autoridad administrativa electoral local. Asimismo, el mencionado servidor público argumentó que los acuerdos se asumen por decisiones mayoritarias o por consenso, y en el particular, se trataba de un acuerdo por consenso, dado que se requería de cuando menos cinco votos para su aprobación, a fin de fortalecer la autonomía del órgano de autoridad.

Enseguida, en uso de la voz, la Consejera Electoral **Erika Cecilia Ruvalcaba Corral** argumentó lo siguiente:

Si, muchas gracias Presidente. Nada más también omití decir que me reservo también el derecho de voto particular en caso de que aplicara así, igual que la consejera Virginia, gracias.

Por otra parte, el Consejero Electoral **Mario Alberto Ramos González** adujo lo siguiente:

Gracias Presidente. Bien pues yo en primer lugar yo quiero reconocer que en este proceso de discusión, este punto para atender el lineamiento del INE, el Presidente mostró total apertura para discutir este punto, tuvimos diversas reuniones y me parece, me preocupa, al menos no vi yo el caso de que se hayan presentado alternativas o algunas otras opciones ¿no?, a mí me parece que la propuesta que hace del Presidente del personal que se plantea ratificar cuenta con toda la experiencia y los méritos necesarios para ostentar y llevar a cabo este cargo como lo hemos visto que lo han realizado ¿no? a mí me hubiera gustado tener la posibilidad para, como dice el compañero, generar los consensos, haber tenido currículum, propuestas de alternativa o alguna propuesta para alguna metodología, de discusión, de análisis, de evaluación, de entrevistas, me parece que no hubo el tiempo suficiente, a lo mejor no tuvieron tiempo los compañeros que manifiestan en este momento votar en contra para poder presentar o compartirnos otros perfiles que hubieran dado la oportunidad de analizar y de comparar ¿no?, me preocupa mucho lo que dice el consejero, mi compañero José Reynoso de que no conoce los currículum de las personas que vienen en la propuesta del Presidente, yo le quiero recordar a mi compañero que ya votó por siete de ellos recién nosotros estuvimos como consejeros, recuerdo que usted ya votó compañero por Director de Participación Ciudadana, de la Unidad Editorial, de Educación Cívica, de Transparencia, el Director General, Prerrogativas, Secretaría Técnica, personal con el que hemos trabajado ya más de un año, me preocupa mucho que la vez pasada haya votado sin haber revisado sus currículum, haya votado a favor de todos ellos y ahora desconozca que no conoce los currículum y también me preocupa que del resto del personal, de los otros siete directores no se haya tomado la molestia de revisar su currículum ¿no?, creo que han estado muy ocupados para ver, yo conozco a los catorce directores, incluso el secretario ejecutivo, conozco sus currículum, he tenido la oportunidad de trabajar y por eso externo mi opinión de que son personal profesional, calificado, capacitado pero aún así yo hubiera estado abierto, no creo que sean los mejores del país o del planeta pero hubiera estado abierto a recibir un currículum a propuesta alternativa ¿no?; me sorprende que estemos en este momento, en esta mesa cuando tuvimos sesenta días hábiles para poder haber revisado otros currículum, yo no traje más currículum porque el personal que la propuesta del Presidente pretende y somete a nuestra consideración para ratificar me parece que es el personal

adecuado, ojalá que hubieran tenido la gentileza, el tiempo de haber presentado una propuesta alternativa en cualquiera de estas direcciones y tal vez yo hubiera apoyado esa propuesta, es mi opinión Presidente.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En respuesta a la intervención inmediata anterior, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez sostuvo que su voto era en contra de la propuesta, en razón de que no se cumplían los requisitos, entre otros, el de autonomía, principio rector de la función electoral. Respecto a la curricula de las personas propuestas, el aludido servidor público argumentó que se refería a que no se habían presentado en ese momento, en tanto que el lineamiento establece que la aprobación o la ratificación de las direcciones, de las directoras y de los directores se debía sustentar en la valoración curricular y la entrevista respectiva, lo que hasta ese momento no se había hecho.

Por otra parte, la Consejera Electoral **Sayani Mozka Estrada** argumentó, en su segunda intervención, lo siguiente:

Bien. Llama mucho la atención también la intervención del consejero José Reynoso, con quien he tenido la fortuna de intercambiar muchos puntos de vista durante la gestión que tenemos, el tiempo de gestión, me parece intención de diálogo franco todas las veces que tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista, llama la atención consejero José que hayas reservado todas estas observaciones para hacerlas este día y hoy aquí en donde de manera sumamente delicada, me parece, y por eso digo con verdades a medias, estas señalando que este acuerdo va en contra de los principios rectores de autonomía porque son contrasentido lo que estás planteando en términos de lo que aprobaste el veinticuatro de enero de dos mil catorce, cuando a estas mismas personas las votaste a favor, entonces primer elemento que pongo es no entender ¿por qué en aquel momento si se actuó con autonomía y ahora no?, por eso es una ratificación, los Lineamientos establecen todos esos puntos que efectivamente has puesto sobre la mesa, que todo mundo conocemos, para los casos intuyo yo que no se conocen del personal, que no se conoce, siendo una ratificación efectivamente puede ser de interpretación o no pero ahí es donde si diría “ojo” en llamar a que no estamos cumpliendo con la autonomía, porque insisto en el contrasentido que supone lo que estas mencionando ahora, pero no en su momento cuando votaste el veinticuatro de enero; por otro lado es sumamente cuestionable tu presupuesto teórico que vienes a plantear aquí, porque es un presupuesto finalmente de que los acuerdos se llega por la vía del

consenso, hay ríos de tinta en teoría política sobre otras perspectivas, Jacques Rancière te diría justamente lo contrario doctor ¿sí?, te diría que la base también para construir el consenso es el desacuerdo, el acuerdo se construye no por la vía sólo del consenso y para poder llegar a construir cinco votos se necesita dialogar, se necesita sentar, hacer propuestas con argumentos más allá de pedir un chofer, tres asesores y un asistente como vía de vehículo para poder dialogar y construir en este Consejo un elemento de democracia, de lógica y de consenso como al que le estás apostando y que creo le apostamos todos; nada más si quisiera decir, porque me preocupa mucho que el representante de Movimiento Ciudadano haga alusión a que aquí se están poniendo en vilo los principios rectores de la función electoral, me parece que solo está escuchando usted una, dos, voces y quisiera hacer el punto de contraste y añadir a lo que ha dicho el consejero Mario, puesto que sí estuvimos trabajando, tengo fotografías aquí no creo que sea necesario mostrarlas, donde hemos estado trabajando en una posible reingeniería, donde se estuvo trabajando en la posibilidad de qué direcciones dejar fusionar si o no, hasta que llegó un momento en que dejó de haber diálogo, entonces donde está la invitación del consejero José a trabajar por el consenso y los cinco votos cuando de repente se canceló el diálogo y ojo, voy a decir que hubo un momento también que a mí me generó bastante malestar en este intento de ponernos, de intentar ponernos de acuerdo y otra vez esas argucias de la consejera Virginia de venir a decir que no se había tratado la propuesta que había presentado el consejero Presidente y tuya consejero José de decir que a otra propuesta pues se te estaba dando madruquete cuando un siete de enero nos habían enviado la propuesta para discutirla, entonces esas cosas yo no me presto a seguir escuchando verdades a medias y si quisiera puntualizarlas, es cuanto.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Posteriormente, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross**, se pronunció en los siguientes términos:

Agradezco muchísimo su participación ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, cerramos esta segunda ronda y le concedemos ¿ya? ¿declinas? Ok, había solicitado la voz pero en este momento declina. Efectivamente no es fácil una decisión de este tipo, este Presidente está valorando por supuesto, el resultado de este proceso que acabamos de superar y lo demás que ha hecho el instituto a partir de esta estructura que se ha constituido en una estructura profesional. Hace un momento en la reunión previa hacia lectura del perfil académico de nuestros directores y bueno de catorce directores o trece directores y un secretario general tenemos doce de ellos con el grado de

maestría y tenemos además un doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, entonces este tipo de cosas más los resultados que le han ofrecido al instituto me parece que no dejan dudas sobre la necesidad de mantener una estructura de este calibre, que le sigan rindiendo cuentas por supuesto a través del instituto, a la ciudadanía jalisciense. Efectivamente el objeto del lineamiento que estamos debatiendo en su cumplimiento en este momento tiene que ver con la autonomía de este instituto y planteé algunos mecanismos para que lo hagamos, mecanismos que nosotros previamente habíamos agotado, si se refiere a una configuración previa que pudiera obstaculizar el desarrollo de nuestras atribuciones pero esa fue una situación que nosotros superamos una vez integrados y no se refería a estos directores que nosotros ya elegimos, se refería a quienes una vez entrados en el cargo ya formaban parte de la institución a los que tampoco tacharía, al final debo de recordar que yo soy parte, soy producto de la formación de este instituto y pronunciarme en un sentido contrario sería estarme negando, yo soy parte de él y creo que los cuadros que produce este instituto son de la mejor calidad. En cuanto a la paridad y su integración a las áreas debo recordar también ese proceso que ya superamos en el que de seis espacios que resolvimos, siete espacios, tres fueron para mujeres, yo caminaría por esa ruta por supuesto, sin embargo no lo haría en perjuicio de quienes han hecho bien su trabajo y que sin defecto tuvieran que salir de esta institución para darle cabida a un nuevo personaje, a una nueva persona que se integrara a trabajar para el instituto, yo esperaré a que a otro proceso como el superado ya en algún momento ante los espacios que se encontraran abiertos pudiéramos efectivamente de manera paulatina ir integrando a estos perfiles femeninos para que este instituto se enriquezca como ha sido ya la participación política de las mujeres y la riqueza que le ha dado por supuesto al ámbito político; y no quisiera dejar de mencionar que hicimos un esfuerzo dentro de estos debates que hemos estado celebrando, estas reuniones para crecer en el tema de las mujeres, hubo en algún momento la propuesta para que lleváramos a cabo la creación de un área, sin por supuesto crecer económicamente, para que entonces tuviera cabida un espacio que únicamente atendiera temas relacionados con la igualdad de género, con el género en sí y con la no discriminación, no encontramos el consenso en ese momento sin embargo me parece que el esfuerzo fue muy bueno ¿no? y quien hoy de alguna manera señaló que no estamos impulsando en este ejercicio la participación de las mujeres me pareció que perdió de vista esta propuesta y el debate que se suscitó en torno a ella. Por todo esto este servidor está convencido de su propuesta, es una propuesta que por supuesto pasó por los cauces procedimentales que señala el acuerdo, yo me senté con

ellos, yo revisé los currículums, yo formulé la propuesta al final esta es una atribución que le corresponde al Presidente y en esos términos es que actuó esta presidencia y la propuesta ahí está, ya la conocen, yo no me atrevería a cuestionar a ninguno de ellos y menos inobjetivamente. Como autoridades y como patrones tenemos que cumplir con dos cosas particularmente, como autoridades con fundar y motivar nuestras decisiones, así que la simple negativa a ratificar me parece insuficiente como para que ellos puedan dejar de estar participando en esta institución, simplemente porque no estamos motivando el por qué hoy estamos rechazando que ellos se mantengan trabajando para esta institución; y segundo, como patrones tenemos que justificar, hay un catálogo para los servidores públicos que debe de cumplirse y ante la irregularidad o la falta del cumplimiento de estas obligaciones que se desprenden de este catálogo entonces procederíamos a través de un procedimiento a fincar alguna responsabilidad que pudiera derivar en la separación de ellos, en esos términos yo apelo a la consciencia de todos, yo apelo a que mantengamos lo que ya ofrece esta estructura, a esa experiencia acumulada, a esos cuadros que han sido creados aquí y por supuesto a que nos conduzcamos como las autoridades que somos y como los patrones que somos, privilegiando por supuesto la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos en términos del artículo primero constitucional, en esos términos me parece que debíamos de estar presentando nuestras propuestas, nuestros debates para que entonces podamos llegar a una propuesta que nos permita salir adelante con este tema. Estas son las palabras que quería dirigirles este Presidente y si no existe alguna otra participación le pediría al Secretario que sujete a la votación de los miembros de este Consejo el acuerdo.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

El resultado de la votación correspondiente a la propuesta sometida consideración del Pleno del *OPLE* fue la siguiente: cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross; y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, José Reynoso Núñez y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

En este sentido, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local informó que, conforme a lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral nacional, para la aprobación de la propuesta de acuerdo se requería de una mayoría calificada, es decir, cuando menos cinco votos, lo que en el particular no ocurrió, razón por la cual,

en términos de lo previsto en el Reglamento de Sesiones de ese órgano colegiado, lo procedente conforme a Derecho, era llevar a cabo una segunda votación.

Enseguida, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** argumentó lo siguiente:

Perdón Secretario. Me parece que no alcanzamos a generar el convencimiento que se requiere para rescatar todo esto que acabo de exponer y en esos términos si quiero promover en atención a las sugerencias que han hecho algunos representantes de los partidos, que se abra un espacio para la deliberación, en ese sentido creo que lo conducente es un receso, lo propondría para que en el término de una hora nos reuniéramos aquí y que en ese momento decidiéramos si la necesidad de este receso tuviera que ser más amplia sujetarla nuevamente a la consideración de los que aquí estamos compartiendo la mesa, en esos términos Secretario te solicito que les preguntes a las Consejeras y los consejeros si aprueban el receso que se propone.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

La propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos, y una vez concluido éste, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** adujo lo siguiente:

Agradecemos la paciencia, estamos en un proceso como el que han atestiguado en el que vale la pena mantenernos en el diálogo hasta agotar la última oportunidad que nos permita salir avante con él y en ese sentido siendo las diecisiete horas con cincuenta y un minutos, una vez retomada esta sesión quiero proponer nuevamente un receso ya que en la plática que hemos tenido los consejeros y un servidor se presentan algunas sugerencias y alternativas para que podamos resolver esto de la mejor manera, en ese sentido y con el ánimo de poder integrar la visión de todos los consejeros es que vamos a proceder a un trámite o a un conjunto de reuniones para efecto de poder valorar algunas sugerencias que se están presentando y agotar el procedimiento que el propio lineamiento nos señala para poder presentar alguna propuesta, estaremos en ese sentido entonces agotando lo que el procedimiento señala... el lineamiento perdón y la propuesta es que nos reunamos nuevamente el día lunes en punto de las tres de la tarde para que podamos llevar a cabo todo este proceso que se encuentra reseñado ahí, esto es revisar el currículum de estas sugerencias, tener unas entrevistas con estas personas y entonces estar en condiciones de formular una propuesta que pueda estar bien sustentada, en esos términos la propuesta es esa y le pido al Secretario que la sujete a la consideración de los miembros de este Consejo Electoral.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

La propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos, cuya sesión pública se reanudó el lunes veinticinco de enero de dos mil dieciséis, a las quince horas cuatro minutos.

En este sentido, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** manifestó lo siguiente:

Bueno pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Previo a cualquier otra cosa y en virtud de la inquietud que fue formulada en esta sesión antes de ser interrumpida por el receso acordado, quiero proponer un nuevo receso para que una vez que quienes tenían la inquietud de revisar a profundidad este proceso y ya tienen los currículums que fueron la base de la decisión que esta Presidencia tomó a la hora de formular la propuesta para la ratificación de los directores y con el ánimo de que ellos puedan tener el acercamiento que requieren, para entonces reflexionar sobre la decisión que tenemos que tomar aquí, es que solicito una nueva suspensión en este procedimiento, nuevo receso, para que podamos desahogar este ejercicio, lo hago insisto con el ánimo de cubrir las inquietudes y generar mejores condiciones para que podamos resolver este tema sin la necesidad de prolongarnos más en el procedimiento; para estos efectos propongo que entremos en receso de inmediato y que este receso dure hasta las veintiuna horas, lo que nos dará el espacio suficiente para que los consejeros en su conjunto podamos sentarnos a platicar con quienes han sido propuestos para mantenerse en la dirigencia de las áreas de esta institución. Le solicito Secretario que sujete a la consideración de los miembros de este Consejo la propuesta que acabo de formular. Se concede el uso de la voz a la consejera Virginia Gutiérrez.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En uso de la voz, la Consejera Electoral Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo argumentó que la propuesta del Consejero Presidente no era acorde a lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de Sesiones, dado que lo procedente era llevar a cabo una segunda ronda, en su caso, tener por no aprobado el acuerdo que se sometió a consideración, y ser presentada otra propuesta en una sesión posterior, debiendo agotar el procedimiento que se debió seguir antes de presentar la propuesta de acuerdo.

Por otra parte, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez adujo que se debía agotar el procedimiento y cumplir el lineamiento relativo a llevar a cabo la entrevista y valoración curricular, cuya propuesta debía ser presentada una vez concluido lo anterior.

Enseguida, la Consejera Electoral **Sayani Mozka Estrada** expresó lo siguiente:

Si, muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas y todos. Pues simplemente para reiterar que efectivamente estamos en este receso porque se solicitó que en procedimiento el consejero Reynoso, me parece que de manera pertinente, hizo una observación respecto de que se agotara, el que se presentaran los currículums de la propuesta que nos hizo llegar el Presidente, así como las entrevistas, él mismo pues puso sobre esta mesa el que se hicieran entrevistas, me parece que no existe ningún impedimento para que durante este proceso... perdón durante este receso se puedan formular, se puedan hacer las entrevistas y respecto del... ciertamente el mecanismo que habría que definirse, que entiendo el Presidente nos tienes que formular y en aras de atender el principio de máxima publicidad, yo sí quisiera dejar aquí puesto sobre la mesa que las entrevistas sean de carácter público y que sean transmitidas por internet en vivo ¿verdad? y en ese sentido me parece que podemos agotar entrar en otro receso y plantear la mecánica de trabajo para hacer las entrevistas y regresar a las nueve de la noche como nos está proponiendo Presidente, es cuanto.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En su intervención, la denunciante Consejera Electoral **Erika Cecilia Ruvalcaba Corral** dijo lo siguiente:

Gracias consejero Presidente. Bueno yo nada más por asuntos procedimentales también estaría a favor de agotar la votación en el momento en que nos encontramos según el reglamento, si nos apegamos a él tendríamos que ir ya directo a la votación y por supuesto que estaría a favor de en otro momento, en otra sesión tal y como lo establece también el reglamento y por conducto del Presidente, la propuesta que él tenga a bien hacernos llegar y agotando el procedimiento que el Presidente indique para ello, entonces iniciar un nuevo procedimiento pero en otra sesión, tal como lo establece el procedimiento, es mi única consideración, estaría por supuesto que a favor de

hacer las entrevistas que tenga a bien presentarnos y agotar el procedimiento que usted establezca, es cuanto gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Por otra parte, el Consejero Electoral **Mario Alberto Ramos González** se pronunció en los siguientes términos:

Si gracias Presidente. A ver ya no entendí bien, la sesión pasada hubo tres compañeros del Consejo que votaron en contra de la propuesta del Presidente argumentando faltas en el procedimiento, argumentaron que no conocían los currículums, argumentaron que no había habido tiempo suficiente para conocer la propuesta del Presidente lo cual en este receso pues pensamos, nos convencieron y nos convencimos que era mejor darle... bueno aquellos que ya habíamos leído los currículums darles una releída, yo le agradezco al compañero José tan atinada propuesta porque me dio la oportunidad de ver, actualizar el currículum de los directores dado que ya había algunos meses que los había leído, me di cuenta de algunas cosas que han hecho; pero repito, no entiendo bien porque el hecho, bueno así quedó manifestado aquí, por el cual votaron en contra la propuesta que hizo el Presidente es porque no conocían los currículums, porque no había habido tiempo suficiente a conocer las propuestas, no entiendo por qué ahora los más apurados porque se vote esta propuesta... ahora preguntaría ¿van a votarla a favor? ya vieron los currículums, o la van a votar en contra no entiendo, entonces yo creo que para hacer congruentes hay que atender la petición del consejero José Reynoso, se nos han circulado los currículum, los hemos leído y también coincido con la consejera Sayani y en el ánimo de este principio rector que nos rige de máxima publicidad estoy a favor de que se realicen entrevistas en este momento a los directores y que se transmitan vía internet, gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

La Consejera Electoral **Griselda Beatriz Rangel Juárez** manifestó lo siguiente:

Muchas gracias consejero Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas, los presentes. Creo que para mí lo importante en este momento es fijar una postura frente a la propuesta que nos formula el Consejero Presidente y coincidiría ya a estas alturas con otras posturas que han presentado mis colegas, estoy de acuerdo en que no hay nada que se oponga a que en el marco del artículo 44, párrafo 1, del reglamento continuemos en receso para agotar lo que fue una inquietud de uno de los integrantes de este órgano colegiado que es el consejero José Reynoso y de esa manera podamos llegar a cerrar este punto

que nos marca el principio una segunda votación; creo que en ese sentido le daríamos a este procedimiento un mayor alcance y estaría de acuerdo igualmente con que las entrevistas se transmitieran a través de internet ¿no? para darlo a conocer bajo el principio de máxima publicidad, que es uno de los principios que rigen la función electoral, en ese sentido mi postura en este sentido sería a favor de mantener el receso, es cuanto señor Presidente.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En segunda ronda, la denunciante Consejera Electoral **Erika Cecilia Ruvalcaba Corral** argumentó lo siguiente:

Si, muchas gracias Presidente. Yo nada más insistir que es un asunto de procedimiento, que estamos en un receso para regresar directamente a la votación, pero estoy por supuesto, porque también fue uno de mis argumentos, aunque tengo otros, que no se agotaron las etapas de las entrevistas y otra serie de criterios, evaluación curricular, que por cierto el currículum se nos hizo llegar ayer, bueno a mí a las no sé, diez, once de la noche y agradezco que así haya sido, agradezco tener la oportunidad de tener las entrevistas en este o en otro momento, eso está bien nada más que tuvimos sesenta días hábiles desde el trece de octubre que se nos notificó para haber agotado todo esto y a eso me refiero, a eso me refería el viernes pasado con que no teníamos... no habíamos agotado y no teníamos estos elementos, me congratulo que no sé quién lo reflexionó y que en este momento se esté intentando subsanar, no estoy tan segura de que sea lo correcto en este momento pero si es la mayoría y está a favor y estaré a favor de lo mismo y si no fuera el caso de que prospere en este momento el acuerdo, pues en otro momento el acuerdo que usted presente con una ruta trazada previa ¿sí?, eso es lo único que solicitaría, gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En este sentido, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez adujo que tuvieron sesenta días hábiles para desahogar el procedimiento de valoración curricular y entrevistas para ratificar a las directoras y directores, en tanto que, se pretendía llevar a cabo ese procedimiento en unas cuantas horas, sin conocer cuáles serían los criterios para la valoración curricular y cuáles para la realización de las entrevistas.

Por otra parte, la **Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada** expresó lo siguiente:

Bueno yo al igual que mi colega el consejero Mario Ramos tampoco estoy entendiendo, efectivamente tuvimos sesenta días para agotar este procedimiento y llama la atención que no fue sino en la sesión del viernes que ustedes se pronunciaron por realizar entrevistas y revisar los currículums, es decir también omitieron curiosamente en todos los ejercicios que tuvimos uno y otro y otro el poner en la mesa el que se realizaran las entrevistas y el que se revisaran los currículums, entonces es de llamar la atención que en este momento la consejera Erika Ruvalcaba y el consejero José Reynoso hagan alusión a que es necesario agotarlo cuando en los reiterados ejercicios que tuvimos de reunión, de tratar de construir un acuerdo, de tratar de llegar al consenso, como bien lo dijiste consejero José, se optó por llegar aquí sin ese procedimiento y efectivamente fue uno de los elementos, que tú consejero José Reynoso pusiste en la pasada sesión para que se declarara un receso, es cuanto Presidente.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

El Consejero Electoral **Mario Alberto Ramos González** adujo lo siguiente:

Gracias Presidente. Bueno también hay que decir algo, yo creo que de la lectura del currículum de directores que tienen aquí diez, quince años, cuatro, cinco procesos electorales, de la lectura no vamos a poder determinar su permanencia o no, yo creo que todos los consejeros que estamos aquí hemos visto, hemos vivido con eso un Proceso Electoral, hemos conocido de su trabajo yo creo que hay más elementos para ratificar o no ratificar a los directores más allá del currículum, sin embargo bueno ya tenemos los currículum, tenemos las entrevistas yo entiendo que la propuesta del Presidente la hizo en ese sentido porque al final era la ratificación del personal que conocemos ¿no?, ahorita aunque leamos el currículum yo creo hay muchos elementos materiales de la experiencia que tuvimos con ellos, que hemos trabajado, que nos darán la oportunidad de decir si se ratifica no se ratifica ¿no?, entonces quiero comentar esto porque también es... digo pensar que si nos tomamos dos o tres días para leer el currículum, por lo que comentaban ahorita porque el currículum llegó en la noche, cuantas veces hay que leerlo para conocer si hemos visto el trabajo de los directores ¿no?, podemos estar a favor o en contra del trabajo de algunos de ellos, del desempeño pero nada más digo para no prestarnos a querer sorprender con esto.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En su intervención, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** se pronunció en los siguientes términos:

Muchas gracias consejero Mario Ramos, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno de aprobarse el receso que se propone y para agotar este ejercicio que es en cumplimiento de la inquietud que ha sido presentada por aquí, sin que desde esa perspectiva este servidor considere que la propuesta fue formulada de manera limitada o no fue exhaustiva, atiende perfectamente el lineamiento creo que las cosas están planteadas, me parece que tendré que hacer una reunión o una serie de entrevistas públicas que serán transmitidas vía internet, las preguntas podrán ser de cualquier tipo siempre que se relacionen con el área para la cual están propuestos a su ratificación, eso me parece que le dará a los consejeros la libertad de formularlas, me parece que el número dependerá de un tiempo que debemos de darle a cada uno para poder agotar este ejercicio en el término que va de las cuatro de la tarde o dieciséis horas a las veintiuna horas y esto nos lleva a la necesidad de una entrevista de veinte minutos por cada uno, me parece que este puede ser el mecanismo para que sorteemos esta nueva etapa en este proceso que estamos desahogando; en esos términos y por no haber otra intervención le solicito al Secretario que sujete a la votación de los miembros de este Consejo la aprobación del receso que se propone.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

La propuesta formulada por el Consejero Presidente, consistente en decretar un receso para llevar a cabo las entrevistas respectivas, fue aprobada por mayoría de cuatro votos, en tanto que la sesión pública se reanudaría a las veintiuna horas del día veinticinco de enero de dos mil dieciséis.

Reanudada la mencionada sesión pública, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** expresó lo siguiente:

Buenas noches a todos y una vez que hemos agotado el receso a partir de haber concluido el ejercicio que lo motivó retomamos la sesión siendo las veintiún horas con cinco minutos del día veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Adelante Secretario.

[...]

Bienvenido Daniel. Bueno una vez que hemos superado este ejercicio y que retomamos la sesión, lo que resta por supuesto para agotar esta etapa procedimental relativa a la necesidad de cumplir con una votación que tiene como característica particular ser de mayoría calificada es que sometemos si no hay alguna otra intervención la votación del Punto de Acuerdo en segundo término. Le solicitaría al Secretario que pregunte a las Consejeras y consejeros si se aprueba el presente punto del orden del día, perdón, sí claro adelante.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En seguida, la Consejera Electoral **Sayani Mozka Estrada** argumentó lo siguiente:

Bien Presidente muchas gracias. Yo quisiera agradecer finalmente a mis colegas Consejeras y consejeros por el ejercicio que durante estas horas llevamos a cabo en entrevistar a las propuestas que nos hace el Consejero Presidente para ratificar a los actuales directores en su cargo, me parece que ha sido un ejercicio virtuoso en el que participamos seis Consejeras y consejeros, yo agradezco a cada uno de los directores y de las directoras, no quiero que mi intervención se entienda como... como decirlo, más bien quisiera que se entienda como un agradecimiento a la experiencia de la cual dieron sobrada cuenta en las intervenciones, el compromiso para con esta institución nos dejan saber que hay necesidad de hacer mejoras por supuesto, nos dejan saber de su compromiso para mejorar ustedes mismos pero me parece y pudieron ver en vivo en *livestream* quienes se conectaron a nuestro canal, que ustedes hacen posible que esta institución saliera en un Proceso Electoral con una reforma político-electoral del gran calado que tiene la reforma y podemos entregar buenas cuentas a la ciudadanía porque ustedes acaban de refrendar en las entrevistas en qué consistió su aporte, en ese sentido adelante que mi voto será a favor, agradezco a los consejeros que aún cuando no votaron a favor de hacer las entrevistas estuvieron ahí, estuvimos en un estupendo ánimo los siete y es cuanto Presidente.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

En uso de la palabra, el Consejero Electoral **Mario Alberto Ramos González** hizo el siguiente pronunciamiento:

Gracias Presidente. Antes de someter a una segunda votación la ratificación de los directores me gustaría lanzar algunas preguntas a aquellos consejeros que en todo caso voten por la negativa de ratificarlos como fue en la sesión pasada y les agradecería mucho que nos contestaran este Consejo, que les contestaran a los directores, que le contestaran a los ciudadanos ¿cuál es el argumento para

despedir de este instituto al maestro Jorge Alatorre, un extraordinario académico de la Universidad de Guadalajara, director de Participación Ciudadana, con dos maestrías, doctorando, impulsor del tablero electoral, también tuvo un gran desempeño en la gira universitaria durante el pasado Proceso Electoral, experto en participación ciudadana y transparencia?; también les pediría a mis compañeros consejeros que tengan por votar en la negativa, que me digan ¿cuál es la deficiencia o error laboral que cometió el maestro Luis Gabriel Mota con veintiún años de experiencia en la materia electoral, observador electoral en Brasil, trece años dentro de este instituto, experto en educación cívica y de organización electoral y que por cierto sacó mayor calificación que la consejera Erika en el examen realizado por el CENEVAL y aplicado por el INE para el proceso de designación de los actuales consejeros?; o que me digan también ¿cuál es la razón para que Álvaro Munguía maestro en Derecho Electoral, profesionalizado en este instituto, experto en organización electoral deje de trabajar en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana?; o ¿cuál es el error o la deficiencia que cometió Carlos Silva, de hecho finalista también para ocupar el cargo como consejero electoral en este que estamos nosotros y también de mayor puntaje que la consejera Erika?; ¿con qué argumento compañeros consejeros despedirán a Luis Montes de Oca cuando obtuvo incluso mayor puntaje en esta misma evaluación que tuvimos que hizo el CENEVAL que usted compañero José Reynoso?, le recuerdo que el Secretario Ejecutivo obtuvo un mayor puntaje, estoy hablando de elementos objetivos, una prueba que realizó el CENEVAL por encargo del INE y bueno el Secretario tiene catorce años de experiencia en el instituto; o también ¿cuál es el argumento para despedir al maestro José Gómez Valle como Director de Comunicación Social, excelente académico también, doctor o doctorado... doctorando perdón tiene una trayectoria profesional?; o también que me contesten por favor y que le contesten a todos ¿cuál es la razón por la que la maestra Violeta Iglesias que tuvo una excelente participación en el pasado Proceso Electoral en la organización de los debates, que también fue considerada para ocupar el cargo de Fiscal Especial en Delitos Electorales y que su calificación del mismo examen que les estoy hablando en el proceso de asignación de consejeros también fue mayor en puntaje y en promedio que la consejera Erika Ruvalcaba? ¿cuál es la razón para que deje de trabajar en este instituto?; y así también les pregunto ¿cuál fue el error que cometió la directora Patricia Vergara quien también obtuvo más calificación que la consejera Erika y que tiene este instituto con las mejores calificaciones en transparencia según el órgano garante, el ITEI?; quiero también que me respondan ¿cuál es el argumento para despedir a Juan Carlos Franco y sus treinta años de experiencia en el ámbito administrativo y gubernamental?; o a Tlacaél Jiménez, candidato para ser Fiscal Especial en Delitos Electorales, extraordinario abogado de experiencia académica, especialista en derecho y que obtuvo el mismo puntaje que usted consejero compañero José Reynoso en el examen aplicado por el CENEVAL; ¿cuál es el motivo por el cual también Ramiro Garzón

dejará de trabajar en este instituto, cuando a su cargo estuvo la creación, implementación del mecanismo electrónico más moderno para votar en unas elecciones en México y es un ejemplo mundial?; o ¿por qué Héctor Díaz tiene que dejar de laborar en este instituto al que ha pertenecido durante once años y ha realizado un excelente papel en la dirección, primero de prerrogativas y ahora en la de fiscalización?, ya voy a concluir, digo también que me respondan por favor ¿qué error o deficiencia cometió la directora de Secretaría Técnica, Miriam Gutiérrez cuando estuvo trabajando con todos nosotros en las comisiones, estuvo todos los domingos con la compañera Virginia Gutiérrez, con José y con un servidor, trabajando en la Comisión de Quejas y Denuncias y tuvo un excelente desempeño?, me gustaría que me dijeran también ¿qué error cometió o porque se debe ir de aquí? consejeros José y consejera Virginia, ustedes les consta que este trabajo con la Secretaría Técnica fue muy excelente; por último ¿cuál es el argumento objetivo? porque yo lo que les estoy presentando son argumentos objetivos, son datos, no son cifras que yo me haya inventado, son un concurso en el que participamos todos y me faltan por mencionar, de la revisión de los currículum, de las entrevistas también, olvidaba mencionarles ¿cuál es el argumento objetivo para despedir al doctor Moisés Pérez Vega, quien él es que obtuvo mayor calificación en el mismo examen del CENEVAL por encargo del INE que la compañera Erika, que la compañera Virginia y que el compañero José?, a mí me gustaría que me dijeran ¿por qué el doctor Moisés Pérez Vega tiene que dejar de trabajar en este instituto? con argumentos por favor objetivos, y creo que estos argumentos objetivos nos permitirán tomar una decisión sensata, congruente y eso lo que les pediría en caso de que alguien vote en contra de la propuesta del Presidente, es cuanto Presidente muchas gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Continuando con la sesión, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** adujo lo siguiente:

Bienvenido Octavio ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno en virtud de que han sido agotadas las participaciones, le solicito Secretario que consulte a las Consejeras y consejeros si es de aprobarse el presente punto del orden del día.

El resultado de la votación correspondiente a la propuesta sometida consideración del Pleno del *OPLE* fue la siguiente: cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross; y tres

votos en contra de los Consejeros Electorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, José Reynoso Núñez y Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

En este sentido, dado que se trataba de la segunda votación, en términos de lo previsto en el artículo 44, del Reglamento de Sesiones de ese Instituto Electoral local, la propuesta de acuerdo no fue aprobada.

Enseguida, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** adujo lo siguiente:

Muchas gracias Secretario. Pero además y en términos del propio artículo 44 y en virtud de que ha persistido esta votación que no obstante obtiene una mayoría, no alcanza la mayoría calificada, quiero sujetar a consideración del Consejo la posibilidad de presentar este punto del orden en una sesión diferente para su discusión y votación, en esos términos queda a su consideración la propuesta. Ok, entonces en virtud de no haber consideraciones señor Secretario le solicito que someta a la votación de las Consejeras y consejeros la propuesta que formula esta Presidencia.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

Una vez que fue aprobada ésta última propuesta, el Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross** dio por concluida la sesión pública, en los siguientes términos:

Muchas gracias Secretario y en esos términos, bueno las cosas se mantienen de la forma en que se encuentran hasta ahora hasta que sujetemos nuevamente esta votación, muchísimas gracias buenas noches, siendo las veintiuna horas con diecisiete minutos damos por concluida la presente sesión, gracias.

Ahora bien, de lo expuesto, a consideración de esta autoridad, de la lectura integral de la versión estenográfica correspondiente a la sesión pública del Consejo General del Instituto Electoral local, celebrada el día veintidós de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día veinticinco, **no se advierte** que los integrantes de ese órgano colegiado, en particular los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez y del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, hayan emitido expresiones que puedan

constituir agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Lo anterior es así, dado que **los pronunciamientos hechos por los Consejeros Electorales locales están dentro del contexto del análisis y discusión del asunto que fue sometido a su consideración**, consistente en la propuesta de acuerdo para ratificar o no al Secretario Ejecutivo, a los Titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral local, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por este Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG865/2015.

En efecto, cada uno de los Consejeros Electorales locales expresó su posicionamiento sobre la propuesta sometida a su consideración, argumentando las razones por las cuales votarían a favor o en contra, según cada caso.

En este sentido, si bien de la citada versión estenográfica se advierten alusiones a la denunciante, ello en modo alguno puede constituir agresión verbal porque, como se anunció, las expresiones hechas por los denunciados están dentro del contexto del debate del asunto sometido a su consideración, dado que, la naturaleza de un órgano colegiado estriba en la diversidad de opiniones e incluso, en el disenso respecto del sentido o consideraciones que sustentan una determinación del órgano de autoridad, sin que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes expresan puedan ser objeto de censura o autorización de sus pares, pues esto constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los integrantes de un órgano colegiado.

En efecto, esta autoridad administrativa electoral nacional como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sustentado similar criterio relativo a que el debate, en una sociedad democrática, adquiere su manifestación más amplia y los límites de la libertad de expresión amparan temas de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e informada, siempre y cuando esa libertad no exceda los límites constitucionales como los derechos de terceros.

Asimismo, que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, razón por la cual, las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes en el contexto del debate político devienen válidas, de ahí que, sin las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura no existe una sociedad democrática.

De igual forma, conforme a la experiencia, es un hecho conocido que hay asuntos que se someten a consideración del órgano colegiado, que dada su naturaleza son complejos, en tanto que, su análisis y discusión, pueden generar un debate amplio, fuerte, desinhibido y vehemente, en que los integrantes del órgano de autoridad aduzcan razones para motivar el sentido de su voto a favor o en contra de la propuesta, de la cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, en todo o en parte, sin que el mero hecho de expresar un disenso por unos, y la coincidencia de otros, se llegue a considerar que se trata de agresiones.

Lo anterior es así, dado que se debe privilegiar y garantizar la libertad de expresión de los integrantes del órgano colegiado, siempre y cuando no se excedan los límites de ese derecho fundamental y que esas manifestaciones estén dentro del contexto del debate generado por el asunto que se ha sometido a su consideración.

Esto es así, porque la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral se pronunció en contra de la propuesta de ratificar a los mencionados funcionarios electorales, al considerar que no se había agotado el procedimiento relativo a valoración curricular y entrevistas, en tanto que, el Proyecto de Acuerdo sometido a su conocimiento, le había sido entregado un día antes de esa sesión pública, es decir, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, cuando habían tenido un plazo de sesenta días hábiles para cumplir lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral nacional.

Ante la posición de la denunciante, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada debatió sobre el tema, en el sentido de que tuvieron varias sesiones de trabajo para analizar y discutir la propuesta de acuerdo, razón por la cual no se podía afirmar que un día antes de la mencionada sesión pública se había hecho entrega del proyecto respectivo, argumentación que fue apoyada por los Consejeros Electorales

Griselda Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, sin que la denunciante emitiera un pronunciamiento sobre ese señalamiento.

Aunado a lo anterior, la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada adujo que, en la reunión de trabajo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la cual se analizó el tema de la ratificación del Secretario Ejecutivo y Titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas de esa autoridad administrativa electoral local, la denunciante argumentó que, ante las dificultades presupuestales que presentaba ese Instituto local, existía la necesidad de “un recorte”, y no obstante ello, solicitó un chofer, tres asesores y un asistente para poder llegar a un acuerdo.

A consideración de esta autoridad, lo anterior no es constitutivo de agresión verbal, dado que en el particular, las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada están dentro del contexto del debate generado por la propuesta que fue sometida a consideración del órgano colegiado, al considerar que sí existieron reuniones previas para analizar y discutir el tema de ratificar o no a los titulares de las mencionadas áreas ejecutivas y técnicas, en la cual, se tuvo en consideración el presupuesto otorgado al Instituto Electoral local, previendo la necesidad de un “recorte” dado el déficit presupuestal existente, sin que fuera admisible la contratación de personal adicional para la denunciante.

En efecto, las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada corresponden a un auténtico debate sobre la propuesta a discusión, en la cual expone razones por las cuales se debía aprobar el Proyecto de Acuerdo en sus términos, contra-argumentando lo sostenido por la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral en el sentido de que existieron reuniones previas para formular la propuesta que fue presentada, en particular, precisa que una de esas reuniones se llevó a cabo el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y hace una narración breve de lo que en ella se discutió, incluido el tema presupuestal y la presunta pretensión de la denunciante de que se contratara un chofer, tres asesores y un asistente.

De lo anterior, esta autoridad arriba a la conclusión de que los argumentos de la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada fueron emitidos en ejercicio de sus atribuciones, relacionadas con su derecho a la libertad de expresión, a fin de motivar el sentido de su voto, sin que en modo alguno, esas expresiones se puedan

considerar como agresiones verbales, dado que, la denunciante tuvo la oportunidad de argumentar o contra-argumentar que la reunión de trabajo mencionada por la Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada no se llevó a cabo, o bien que se trataron temas distintos, en su caso, que no se pronunció sobre la contratación de un chofer, tres asesores y un asistente, sino que, en su siguiente intervención se limitó a precisar que de ser aprobada la propuesta emitiría voto particular.

Por otra parte, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González cuestionó su capacidad para ejercer el cargo al comparar la calificación que la denunciante obtuvo en el examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), con aquéllas calificaciones obtenidas por las personas sujetas a ratificación, lo que en su consideración constituye agresión verbal, al ser manifestaciones ofensivas.

A juicio de esta autoridad, las manifestaciones hechas por el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González están dentro del contexto del debate de la propuesta sometido a consideración del Consejo General del Instituto Electoral local, sin que constituyan acoso laboral por agresiones verbales.

Lo anterior es así, porque el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González en ejercicio de sus atribuciones y derecho de libertad de expresión, se pronunció a favor de ratificar a las personas que se desempeñaban como Secretario Ejecutivo, Directores de área y titulares de las Unidades Técnicas de esa autoridad administrativa electoral local, quienes en su opinión, tenían amplia y comprobada experiencia en el ejercicio del cargo, sin que de sus razonamientos se advierta que haya cuestionado la capacidad de la denunciante en el ejercicio del cargo de consejera electoral, sino que, para sustentar su argumentación de votar a favor de la mencionada ratificación, llevó a cabo una valoración con base en elementos objetivos como es el resultado que obtuvieron en el examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), cuyo resultado fue público.

Esto es así, dado que la mención de los resultados de las respectivas evaluaciones que obtuvieron quienes participaron en el procedimiento de designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, no se concretó

exclusivamente a la calificación de la denunciante, sino también de otros integrantes del Consejo General del *OPLE*, lo cual como se dijo, está dentro del contexto del debate del asunto sometido a su consideración.

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que si bien el Consejero Ramos González sacó a colación durante la discusión del tema que en ese momento se ventilaba, las calificaciones obtenidas por los Directores o funcionarios del *OPLE* sobre quienes se discutía su remoción o permanencia y, las comparó o contrastó con aquellas obtenidas por la propia denunciante y otros, a consideración de quien hoy resuelve, ese simple hecho, por sí mismo, no entraña alguna infracción, habida cuenta que esa información –calificaciones del CENEVAL- posee el carácter de pública y, por tanto, pudo servir como soporte para sustentar su pretensión dentro del debate, ya que esa información es corroborable y de acceso ilimitado entre la propia ciudadanía.

Sirven de apoyo, en este caso, los siguientes criterios orientadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Época: Novena Época

Registro: 174899

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIII, Junio de 2006

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 74/2006

Página: 963

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas

en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Época: Novena Época

Registro: 168124

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIX, Enero de 2009

Materia(s): Común

Tesis: XX.2o. J/24

Página: 2470

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

En este contexto, es un hecho público y notorio, que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461, numeral 1, de la *LGIPE*, que en sesiones de seis y veinte de junio de dos mil catorce, este Consejo General emitió, respectivamente, los siguientes acuerdos: **1)** INE/CG44/2014, por el que se aprueban los *“LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES”* y, **2)** INE/CG69/2014, por el que se aprueba el *“MODELO DE CONVOCATORIA”* para la designación de los mencionados funcionarios electorales locales.

Ahora bien, conforme a lo establecido en apartado décimo noveno de los mencionados Lineamientos, así como en la convocatoria respectiva, el procedimiento de selección y designación de Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estaba constituido por las siguientes etapas: **1)** Verificación de los requisitos legales; **2) Examen de conocimientos;** **3)** Ensayo presencial; **4)** Valoración curricular y, **5)** Entrevista. **Los resultados de cada una de esas etapas fue público mediante su difusión en la página de internet de este Instituto.**

En este contexto, es inconcuso para esta autoridad, que las manifestaciones hechas por el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, en modo alguno pueden considerarse como agresión verbal, dado que se pronunciaron sobre el contexto de la discusión de la ratificación de diversos servidores públicos de ese Instituto Electoral local, a fin de motivar el sentido de su votación.

Así, pues, las alusiones o referencias proferidas por el Consejero Electoral Ramos González, en modo alguno pueden interpretarse con una finalidad de denostar o poner entre dicho la capacidad de la hoy denunciante para ocupar el cargo que actualmente ejerce como miembro del Consejo General del *OPLE*, sino que las mismas son entendidas, de conformidad con el contexto de la discusión que quedó asentada en la versión estenográfica de la sesión que se llevaba a cabo, para establecer que dichos servidores resultaban aptos, al menos en el ámbito de conocimientos, según su criterio, para ser ratificados en el cargo que cada uno ostentaba en las Direcciones o Unidades que integran ese *OPLE*; lo cual hizo evidente al expresar que las calificaciones que obtuvieron varios de ellos en el

examen practicado por el CENEVAL, a los aspirantes a Consejeros Electorales de *OPLES*, resultaron superiores, incluso, a aquellas obtenidas por la propia Consejera Electoral hoy denunciante.

Finalmente, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross faltó a su deber de conducir adecuadamente las sesiones públicas del órgano colegiado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de ese Instituto Electoral local, dado que toleró que los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez hicieran alusiones personales a la denunciante, que en su concepto constituyen agresiones verbales.

A juicio de esta autoridad, lo argumentado por la denunciante deviene **infundado**, dado que las conductas de los Consejeros Electorales denunciados no constituyen infracción alguna, en razón de que sus manifestaciones fueron hechas en el contexto de sus atribuciones y del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, mismas que en todo momento fueron circunscritas al tema que en ese momento se estaba tratando al seno del máximo órgano de decisión de ese Instituto Electoral local; por tanto, se arriba a la conclusión de que el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no faltó a su deber de conducir la sesión pública, sino que privilegió la libre expresión de ideas en el análisis y discusión del asunto que sometió a consideración del pleno del mencionado órgano colegiado.

Por otra parte, no pasa inadvertido que la denunciante aduce que el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco prohíbe las alusiones personales que generen controversias o discusiones ajenas a los asuntos propuestos en el orden del día, sin embargo, a consideración de esta autoridad, en el particular, no se actualiza esa hipótesis reglamentaria, porque como se ha expuesto en párrafos precedentes, las manifestaciones hechas por los Consejeros Electorales denunciados están dentro del contexto del debate del asunto sometido a su consideración.

Por las razones expuestas, esta autoridad concluye que los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel

Juárez, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no llevaron a cabo conductas que constituyan agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, dado que, del texto y contexto de la versión estenográfica de la sesión pública en análisis, las manifestaciones hechas por los denunciados, están dentro de los límites del ejercicio de sus atribuciones, así como de su derecho a la libertad de expresión.

En otro orden de ideas, la denunciante argumenta que derivado de la sesión de veintidós de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día veinticinco, recibió diversos “**ataques en medios masivos de comunicación**” por el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, así como por el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, y para acreditar su dicho, la quejosa ofreció como elementos de prueba dos notas periodísticas y dos entrevistas, alojadas en medios electrónicos.

Ahora bien, obra en autos el acta circunstanciada de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, elaborada por la *UTCE* en la cual certificó el contenido de las páginas de internet precisadas por la denunciante, a la cual se le otorga valor **probatorio pleno**, dado que se trata de una documental pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuada en autos.

En cuanto a las dos notas periodísticas ofrecidas por la quejosa, de la citada documental se advierte lo siguiente:

[...]

Enseguida, se procedió a ingresar al tercer vínculo identificado como:
<http://expedientesafondo.net/2016/01/23/nace-cartel-electoral-en-iepc-jalisco-exigen-cuotas-a-alcaraz-cross-urge-extirpar-a-corruptos-consejeros/>



Nace 'cartel' electoral en IEPC Jalisco; exigen cuotas a Alcaraz Cross; urge extirpar a corruptos consejeros

0 Comentarios



Iván García Medina

Lo que ocurrió ayer viernes 22 de enero en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) ya es el colmo del desgobierno y caos que priva en la entidad. Los consejeros sembrados en ese instituto por el PAN –¡qué asco de dirigencia blanquiazul hay en esta entidad!- José Reynoso y Virginia Gutiérrez Villavazo, así como la que instaló Alfredo Barba, la consejera Erika Cecilia Rubalcaba Corral, actuaron como cartel y exigieron al presidente del órgano electoral, Guillermo Alcaraz Cross, ¡cuotas para dejarlo trabajar!

Por ello, votaron en contra un acuerdo que requería cinco votos para ratificar a los actuales directores y funcionarios de mando en el IEPCJ y forzarán a una nueva designación de servidores públicos que organicen las elecciones.

La mención del hecho que hacen Mural y Milenio hoy sábado 23 de enero exhibe el estado de cosas que hay en la política jalisciense. Leamos Mural en Cúpula: **“LO QUE LE FALTABA al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana...**

“A LA PROFUNDA crisis económica que enfrenta el IEPC, se suman los desacuerdos para nombrar o designar a sus directivos.

“EN JALISCO, el titular del Instituto, Guillermo Alcaraz, optó por ratificar a todo su equipo, sin embargo...

“EN UNA PRIMERA votación en el Pleno del Consejo general no logró los 5 votos que pidió el INE, por lo que el lunes volverá a votarse.

“LO PREOCUPANTE ES la forma -y el fondo-, ya que la consejera Érika Ruvalcaba fue ‘balconcada’, pues su compañera Sayani Moska la acusó de pedir un chofer, 3 asesores y un asistente a cambio de su voto.

“POR LO VISTO, en el IEPC se están esforzando y poniendo todo lo que está de su parte para que el INE sea el que organice la elección de 2018. ¡Plooop!”.

Si eso no lo indigna, apreciado lector, ahora leamos Función Sabatina, la columna de trascendidos de Milenio: “El día de ayer en la sesión del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco los consejeros debían aprobar el dictamen en el que se ratificaría a los 12 directores de área y al secretario ejecutivo que les tocó sacar adelante el pasado proceso electoral. Para ello se requerían cinco votos, pero resulta que las consejeras Erika Cecilia Rubalcaba Corral, Virginia Gutiérrez Villalvazo y el Consejero José Reynoso votaron en contra y no se aprobaron, lo que implicaría remover a toda la estructura técnica del organismo, y el despido injustificado que traería la promoción de juicios de indemnización para lo cual el IEPC no está preparado económicamente.

“Lo que huele muy mal es que los angelitos que votaron en contra, trascendió que habrían vendido al presidente Guillermo Alcaraz Cross su voto a favor, a cambio de chofer personal, meter familiares a la nómina, que les cambiara el carro, les comprara nuevos equipos de cómputo y que les deje meter a ellos tres consejeros seis de las 12 direcciones a ratificar, lo que quiere decir que quieren apoderarse por la vía del chantaje de la mitad de los directores del servicio profesional electoral ¿y la nieve?”.

Bien, estamos ante una fractura corriente, corriente, en el seno del órgano electoral que debe dar confianza a los ciudadanos y hoy va rumbo al garete.

Si el INE los nombró, el INE que despida a semejantes sicarios de la política, y si el gobernador Aristóteles Sandoval no suma a los partidos decentes que pudieran quedar en Jalisco para que en la Cámara de Diputados, Congreso del Estado o en el mismo IEPCJ se concluya con estos desmanes, pues pobres elecciones habrá en Jalisco en el 2018.

Guillermo Alcaraz Cross debe mantener la dignidad acorde a un presidente de una institución como la del IEPCJ e impedir la operación del Cartel Electoral de Jalisco.
¡Pufffff!

Las imágenes anteriormente insertas, corresponden al medio digital Expedientes A Fondo, con el siguiente eslogan “Más ayuda la prensa que crítica, que la que adula”, en las mismas se observa la imagen de dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino, quienes al parecer son Consejeros Electorales, y debajo de esta se observa una noticia de veintitrés de enero de dos mil dieciséis, cuyo encabezado y contenido de manera medular refieren:

CAMPAÑAS

Nace “cartel” electoral en IEPC Jalisco; exigen cuotas a Alcaraz Cross; urge extirpar a corruptos consejeros

Iván García Medina

Lo que ocurrió ayer viernes 22 de enero en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) ya es el colmo del desgobierno y caos que priva en la entidad. Los consejeros sembrados en ese instituto por el PAN – ¡qué asco de dirigencia blanquiazul hay en esta entidad!- José Reynoso y Virginia Gutiérrez Villalvazo, así como la que instaló Alfredo Barba, la consejera Erika Cecilia Rubalcaba Corral, actuaron como cartel y exigieron al presidente del órgano electoral, Guillermo Alcaraz Cross, ¡cuotas para dejarlo trabajar!

Por ello, votaron en contra un acuerdo que requería cinco votos para ratificar a los actuales directores y funcionarios de mando en el IEPCJ y forzarán a una nueva designación de servidores públicos que organicen las elecciones.

La mención del hecho que hacen Mural y Milenio hoy sábado 23 de enero exhibe el estado de cosas que hay en la política jalisciense. Leamos Mural en Cúpula: “LO QUE LE FALTABA al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana...

“A LA PROFUNDA crisis económica que enfrenta el IEPC, se suman los desacuerdos para nombrar o designar a sus directivos.

“EN JALISCO, el titular del Instituto, Guillermo Alcaraz, optó por ratificar a todo su equipo, sin embargo...

“EN UNA PRIMERA votación en el Pleno del Consejo general no logró los 5 votos que pidió el INE, por lo que el lunes volverá a votarse.

“LO PREOCUPANTE ES la forma -y el fondo-, ya que la consejera Érika Ruvalcaba fue ‘balconeadada’, pues su compañera Sayani Moska la acusó de pedir un chofer, 3 asesores y un asistente a cambio de su voto.

“POR LO VISTO, en el IEPC se están esforzando y poniendo todo lo que está de su parte para que el INE sea el que organice la elección de 2018. ¡Plooop!”.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

Si eso no lo indigna, apreciado lector, ahora leamos Función Sabatina, la columna de trascendidos de Milenio: “El día de ayer en la sesión del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco los consejeros debían aprobar el Dictamen en el que se ratificaría a los 12 directores de área y al secretario ejecutivo que les tocó sacar adelante el pasado Proceso Electoral. Para ello se requerían cinco votos, pero resulta que las Consejeras Erika Cecilia Rubalcaba Corral, Virginia Gutiérrez Villalvazo y el Consejero José Reynoso votaron en contra y no se aprobaron, lo que implicaría remover a toda la estructura técnica del organismo, y el despido injustificado que traería la promoción de juicios de indemnización para lo cual el IEPC no está preparado económicamente.

“Lo que huele muy mal es que los angelitos que votaron en contra, trascendió que habrían vendido al presidente Guillermo Alcaraz Cross su voto a favor, a cambio de chofer personal, meter familiares a la nómina, que les cambiara el carro, les comprara nuevos equipos de cómputo y que les deje meter a ellos tres consejeros seis de las 12 direcciones a ratificar, lo que quiere decir que quieren apoderarse por la vía del chantaje de la mitad de los directores del servicio profesional electoral ¿y la nieve?”.

Bien, estamos ante una fractura corriente, corriente, en el seno del órgano electoral que debe dar confianza a los ciudadanos y hoy va rumbo al garete.

Si el INE los nombró, el INE que despida a semejantes sicarios de la política, y si el gobernador Aristóteles Sandoval no suma a los partidos decentes que pudieran quedar en Jalisco para que en la Cámara de Diputados, Congreso del Estado o en el mismo IEPCJ se concluya con estos desmanes, pues pobres elecciones habrá en Jalisco en el 2018.

*Guillermo Alcaraz Cross debe mantener la dignidad acorde a un presidente de una institución como la del IEPCJ e impedir la operación del Cartel Electoral de Jalisco.
¡Pufffff!*

Del contenido de la nota se advierte que los Consejeros Electorales Erika Cecilia Rubalcaba Corral, Virginia Gutiérrez Villalvazo y José Reynoso votaron en contra de ratificar a los 12 directores de área y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Finalmente, se ingresó a la cuarta y última liga de internet identificada como:
<http://elrespetable.com/2016/01/23/ambicion-de-consejeros-pone-en-crisis-a-instituto-electoral/>

El Respetable

CONGRESOGOBIERNOPARTIDOS

AMBICIÓN DE CONSEJEROS PONE EN CRISIS A INSTITUTO ELECTORAL

NOTICIAS

• 10:00 AM 23/01/2016 • 12:00 PM 23/01/2016 • 12:00 PM 23/01/2016 • 12:00 PM 23/01/2016

COMPARTIR

f

tw

g+

in

li

in



Los consejeros del IEPCEJ: Virginia Gutiérrez, José Reynoso y Erika Cecilia Ruvalcaba.

POR INTERESES PERSONALES INTENTAN CORRER A 14 DIRECTORES; ACUSAN A CONSEJEROS DE PEDIR ESPACIOS Y BENEFICIOS PERSONALES

En la sesión del 23 de enero se mostró una clara fractura al interior del consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCEJ). El desacuerdo estriba en la pretensión de los consejeros José Reynoso, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez, de repartirse en cuotas la estructura del servicio profesional electoral, lo que implica que se deberán despedir a 14 directores, que por cierto, fueron los responsables de sacar adelante la pasada elección.

El presidente del IEPCEJ, Guillermo Alcaraz Cross propuso un punto en el orden del día, para ratificar en su trabajo a los 14 directores de área que componen el servicio profesional electoral del organismo electoral. Para aprobarlo se requerían cinco votos, pero para sorpresa de los presentes, los tres consejeros referidos votaron en contra la permanencia de los 14 directores, con lo que ahora deberán ser todos separados de sus puestos. El grave problema reside en que esta decisión no se motivó en ningún argumento. Nada se dijo de por qué se pretende correr a toda esta gente. Los tres consejeros no expresan ninguna razón que sea causa justificada para suspender en su trabajo a quienes llevaron a cuestras la pasada elección y llevan hasta 14 años de antigüedad en sus cargos.

TODO INDICA QUE TRES CONSEJEROS TRATAN DE REMOVER A LOS 14 DIRECTORES DE SUS PUESTOS, PARA LUEGO REPARTIRSE LAS VACANTES MEDIANTE CUOTAS PARTIDISTAS.

Al respecto, en la sesión del pleno de los consejeros, celebrada el pasado viernes 23 de enero, las consejeras Sayani Moska y Beatriz Itangel, acusaron a la consejera Erika Ruvalcaba Corral de solicitar en reunión previa un chofer, tres asesores y algunos empleos para recomendados suyos, a cambio de su voto en la sesión plenaria.

460

Fuentes de El Respetable hacen saber que los afectados, todos directores con varios años de antigüedad en la función electoral, harán valer sus derechos laborales y se inconformarán por el despido injustificado, provocado por la ambición desmedida y los intereses inconfesables de los tres consejeros que, señalan también, son alentados por el PAN para chantajear y obtener posiciones en el instituto para incidir en las decisiones de un organismo que debe conducirse con imparcialidad.

También se deja saber que en el Instituto Nacional Electoral se estaría valorando sancionar, con su separación del cargo, a los consejeros que con su actuar le pueden provocar severo daño patrimonial al instituto por la vía de indemnizaciones millonarias y demandas laborales por despido injustificado. Esto debido a que despedir sin un motivo justificado a un trabajador con mucha antigüedad, se perfila como una segura demanda laboral perdida, justo cuando el organismo electoral adolece de recursos para afrontar sus compromisos ordinarios.

Esta ambición por repartirse como botín político el instituto, puede ser el error que lleve a la separación de su cargo como consejeros de José Reynoso, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez, quienes hasta el momento ya gozan del repudio total de los trabajadores de base del IEPCEJ, que ven como su pretensión de colocar amigos, familiares y recomendados, atenta contra sus derechos laborales y la estabilidad financiera del OPLE.



El presidente del IPEC, Álvaro Coss.

Habrà que ver qué opina el gobernador de Jalisco, el Congreso y el INE: de estas diferencias internas que no costarán a los contribuyentes varios millones de pesos por demandas e indemnizaciones por despidos que no debería ocurrir sin motivos y razones claras. Hasta hoy la opacidad y la falta de argumentos brillan por su ausencia en un organismo que debiera ser un ejemplo de participación, respeto a la legalidad y transparencia.

ETIQUETA CONSEJEROS IPEC

COMPARTIR

f t g+ @ J in

Dicha página corresponde a la versión digital del medio El Respetable, de la cual se desprende el encabezado **AMBICIÓN DE CONSEJEROS PONE EN CRISIS A INSTITUTO ELECTORAL**, debajo de este se observa la imagen de los consejeros del IEPC: Virginia Gutiérrez, José Reynoso y Erika Cecilia Ruvalcaba.

Del contenido de la nota se puede observar entre lo más relevante, lo siguiente:

POR INTERESES PERSONALES INTENTAN CORRER A 14 DIRECTORES; ACUSAN A CONSEJEROS DE PEDIR ESPACIOS Y BENEFICIOS PERSONALES

En la sesión del 23 de enero se mostró una clara fractura al interior del consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco - IEPCEJ-. El desacuerdo estriba en la pretensión de los consejeros José Reynoso, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez, de repartirse en cuotas la estructura del servicio profesional electoral, lo que implica que se deberán despedir a 14 directores, que por cierto, fueron los responsables de sacar adelante la pasada elección.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

El presidente del IEPCEJ, Guillermo Alcaraz Cross propuso un punto en el orden del día, para ratificar en su trabajo a los 14 directores de área que componen el servicio profesional electoral del organismo electoral. Para aprobarlo se requerían cinco votos, pero para sorpresa de los presentes, los tres consejeros referidos votaron en contra la permanencia de los 14 directores, con lo que ahora deberán ser todos separados de sus puestos. El grave problema reside en que esta decisión no se motivó en ningún argumento. Nada se dijo de por qué se pretende correr a toda esta gente. Los tres consejeros no expresan ninguna razón que sea causa justificada para suspender en su trabajo a quienes llevaron a costas la pasada elección y llevan hasta 14 años de antigüedad en sus cargos.

TODO INDICA QUE TRES CONSEJEROS TRATAN DE REMOVER A LOS 14 DIRECTORES DE SUS PUESTOS, PARA LUEGO REPARTIRSE LAS VACANTES MEDIANTE CUOTAS PARTIDISTAS.

Al respecto, en la sesión del pleno de los consejeros, celebrada el pasado viernes 23 de enero, las Consejeras Sayani Moska y Beatriz Rangel, acusaron a la consejera Erika Ruvalcaba Corral de solicitar en reunión previa un chofer, tres asesores y algunos empleos para recomendados suyos, a cambio de su voto en la sesión plenaria.

Fuentes de El Respetable hacen saber que los afectados, todos directores con varios años de antigüedad en la función electoral, harán valer sus derechos laborales y se inconformarán por el despido injustificado, provocado por la ambición desmedida y los intereses inconfesables de los tres consejeros que, señalan también, son alentados por el PAN para chantajear y obtener posiciones en el instituto para incidir en las decisiones de un organismo que debe conducirse con imparcialidad.

También se deja saber que en el Instituto Nacional Electoral se estaría valorando sancionar, con su separación del cargo, a los consejeros que con su actuar le pueden provocar severo daño patrimonial al instituto por la vía de indemnizaciones millonarias y demandas laborales por despido injustificado. Esto debido a que despedir sin un motivo justificado a un trabajador con mucha antigüedad, se perfila como una segura demanda laboral perdida, justo cuando el organismo electoral adolece de recursos para afrontar sus compromisos ordinarios.

Esta ambición por repartirse como botín político el instituto, puede ser el error que lleve a la separación de su cargo como consejeros de José Reynoso, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez, quienes hasta el momento ya gozan del repudio total de los trabajadores de base del IEPCEJ, que ven como su pretensión de colocar amigos, familiares y recomendados, atenta contra sus derechos laborales y la estabilidad financiera del OPLE.

Habrá que ver qué opina el gobernador de Jalisco, el Congreso y el INE de estas diferencias internas que no costarán a los contribuyentes varios millones de pesos por demandas e indemnizaciones por despidos que no debería ocurrir sin

motivos y razones claras. Hasta hoy la opacidad y la falta de argumentos brillan por su ausencia en un organismo que debiera ser un ejemplo de participación, respeto a la legalidad y transparencia.

[...]

Las notas periodísticas, transcritas en su parte conducente, conforme al criterio reiteradamente sustentado por la *Sala Superior*, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 38/2002, con el rubro *NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA*, sólo constituyen indicios sobre los hechos que en ellas se relatan.

Ahora bien, de las constancias de autos, así como de la lectura integral de ambas notas periodísticas, se advierte que no existen elementos de prueba de los cuales se pueda arribar a la convicción de que el contenido de esas notas se pueda atribuir a los Consejeros Electorales denunciados, razón la cual, no pueden ser consideradas como agresiones verbales de éstos en contra de la quejosa.

Esto es así, porque con relación a la nota periodística intitulada “*Nace ‘cartel’ electoral en IEPC Jalisco; exigen cuotas a Alcaraz Cross; urge extirpar a corruptos consejeros*”, se advierte que la autoría se atribuye a Iván García Medina, quien en ejercicio de su derecho de libertad de expresión e información narra, lo que a su parecer, ocurrió en la sesión pública de veintidós de enero de dos mil dieciséis, en el Consejo General del OPLE.

Por otra parte, en cuanto a la nota relativa a “*AMBICIÓN DE CONSEJEROS PONE EN CRISIS A INSTITUTO ELECTORAL*”, si bien no se identifica el nombre de la persona que se atribuya la autoría, lo cierto es que, se trata de la publicación de un periódico en internet, esto es, se trata de un ejercicio periodístico y, por tanto, amparado por el derecho a la libertad de expresión y de información, lo cual tampoco puede ser atribuido a alguno de los consejeros que hoy son denunciados.

En este contexto, se concluye que las citadas notas periodísticas, cuya autoría no es posible atribuir a los Consejeros Electorales denunciados, no constituyen elementos idóneos para acreditar que la quejosa fue agredida verbalmente o

calumniada, dado que se trata de un ejercicio periodístico, que se encuentra protegido por el derecho a la libertad de expresión e información.

Por otra parte, en cuanto a las entrevistas ofrecidas por la quejosa, de la citada acta circunstanciada, se advierte lo siguiente:

[...]

Acto seguido, mediante la utilización de un equipo de cómputo perteneciente a este Instituto, se ingresó al buscador Google el primer vínculo identificado como <https://www.youtube.com/watch?v=dCND2mqGuTE&feature=youtu.be>, el cual nos remite al portal de YouTube mx. En dicho sitio se advierte la publicación de un video por el “Canal 44”, con la leyenda: *Entrevista: Mario Ramos, consejero electoral del IEPC Jalisco*, con fecha de publicación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y debajo de ésta, se advierte la siguiente frase: *Mario Ramos nos habla sobre la fractura interna que sufre el IEPC actualmente*, entrevista “*vía telefónica*” que se ordena agregar en disco compacto.



**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

Publicado el 27 ene. 2016

Mario Ramos nos habla sobre la fractura interna que sufre el IEPC actualmente.

MOSTRAR MÁS

COMENTARIOS



Agrega un comentario público...



El texto de la citada entrevista, es al tenor siguiente:

Conductora. *Para abundar sobre lo mismo. Maestro un gusto en saludarle. ¿Cómo está?*

Consejero Electoral IEPC. *Buenas tardes Josefina, Buenas tardes a Belén, un gusto, muy bien, gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio*

Conductora. *Al contrario, muchísimas gracias Maestro. Que es lo que está ocurriendo cuando, por lo reportes que nos ha dado nuestro compañero Omar García, pareciera que hay dos bandos dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, usted ha pedido explicaciones, a otros Consejeros de por qué intentan cesar a estos trece directores y a un Secretario, es así la percepción, es correcta, qué es lo que ocurre?.*

Consejero Electoral IEPC. *Sí Josefina, mira, el INE nos mandó que ratificáramos o designáramos a los directores, no, en nuestro caso son trece y un Secretario Ejecutivo, y bueno el plazo se vencía para tener esta sesión el viernes pasado, he, tuvimos reuniones previas, evidentemente para analizar, discutir, cuál era la mejor situación, este, nuestros compañeros consejeros, los tres José Reynoso, Virginia Gutiérrez y Erika Ruvalcaba, he, bueno, se han opuesto a la ratificación de los Directores, no...*

(Inaudible)

Conductora. *¡Hola!*

(Inaudible)

Conductora. *Inaudible. Esta comunicación, con el Consejero Electoral, Mario Ramos para que termine de darnos su punto de vista en torno a esto, que ocurre allá en el interior de este Instituto.*

Recordarle con la información de nuestro compañero Omar García, que el viernes pasado hubo una sesión, en donde se presentaron varias acusaciones, (inaudible), choferes, asistentes, y, he, para votar si se quedaban o no, estos trece directores y un Secretario Ejecutivo, se retoma la sesión el lunes y bueno, sigue en vilo la situación de estos trabajadores.

Maestro adelante, le estábamos escuchando.

Consejero Electoral IEPC. *Sí, discúlpame, se cortó. Ah, entonces comentaban que tres de los siete consejeros han votado en contra de la ratificación de los directores, lo más grave es que no han dado ningún argumento, no, en la primer sesión argumentaron que no conocían los currículums, esto me parece totalmente absurdo, por que siete de estos catorce directores, nosotros, este nuevo consejo nosotros los designamos hace un año, entonces votaron por ellos, no sé si en aquel momento no revisaron los currículums, pero también son*

directores con los que hemos trabajado más de un año, los directores con los que sacamos el Proceso Electoral y no quiero decir que no haya perfiles mejores, más capacitados al interior o al exterior del Instituto, no es el asunto, yo creo que incluso podría haber personas que pudieran ocupar estos cargos de una mejor manera, pero me parece que a nadie nos gustaría que nos despidieran sin decirnos el por qué, sin una evaluación de desempeño, sin argumentar que, yo creo que durante todo este tiempo se han observado, alguna deficiencia en su trabajo, tuvieron que haberla externado, hubieran levantado las actas administrativas, en fin, nada más en esta oportunidad que nos da el INE, pues ellos manifestaron que estos directores no deben seguir, me parece una actitud totalmente injusta para los directores, pero también irresponsable para el Instituto y para las finanzas públicas del estado, a nosotros nos acarrearía una erogación de poco más de diez millones de pesos, sin duda un despido injustificado, estos directores va a ir al Tribunal y van a ganar, estas, estos juicios y nosotros tendríamos que pagarles y todo por y nada más con la finalidad de tener nuevos directores y también lo grave es que ellos no han presentado propuestas, alternativas, no han traído otros perfiles, no han presentado currículums, para argumentar tengo aquí un currículum de alguien que puede desempeñar mejor el trabajo, que el administrador que tenemos, entro en dos mil dos, tiene dieci., catorce años, han estado aquí cuatro o cinco presidentes y lo han ratificado, porque es una persona técnica, talentosa eficiente, eficaz, pero puede haber alguien más que pudiera desempeñar mejor, el trabajo que él, tendrían que decir quien, no, y eso es lo que no ha ocurrido.

Conductora Belén Zapata. *Consejero Mario Ramos le saludo Belén Zapata. He Consejero qué opinión tiene de estos análisis que se han hecho sobre esta pues, diferencia de opiniones al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el sentido del que trasfondo es político, y no necesariamente un tema de revisar, como usted lo ha dicho los perfiles, y sobre todo la viabilidad de que continúen o no de estos consejeros.*

Consejero Electoral IEPC. *Por supuesto Belén, gracias, yo creo que si es político, porque si no ya hubieran argumentado, algunas deficiencias, de los directores, hubieran presentado mejores*

No yo creo que lo que está ocurriendo, acontece en muchos gobiernos municipales en instituciones públicas que una vez que llegan nuevos titulares quieren despedir a todos para poner compromisos políticos, amigos, familiares, etc.. yo creo que de fondo es lo que está ocurriendo, yo creo que la sociedad está cansada de esto. Estos despidos injustificados generan una carga muy fuerte al final

Y te lo digo Belén porque en una, al final en esta sesión en la que expresaron que su voto era en contra, porque, por fallas en el procedimiento, porque no conocían, los currículums, o porque no se habían entrevistado a los directores, bueno, dimos un receso, el lunes se circularon los currículums y se hicieron las entrevistas y bueno sin argumentar en la sección, posterior a las entrevistas el por qué o si del resultado de la revisión de currículum si en el resultado de las

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

entrevistas, tenían elementos para votar en contra, pues que lo hicieran saber, pero tampoco lo dijeron, no lo hicieron, entonces desde mi punto de vista digo yo, creo que al final está de fondo otra intención, otra pretensión, traer personas, o que nos repartamos las direcciones, no, bajo otro esquema el cual, los cuatro directores que estamos, no estamos de acuerdo y repito no es que yo considere que los catorce directores sean las personas más capaces, y eficientes del estado o del país, no, creo que a lo mejor puede haber a lo mejor en algunas direcciones, quienes puedan desempeñar mejor esto, pero no es la manera, en todo caso, tenemos que trabajar en evaluar el desempeño, este, y en presentar propuestas, perfiles más adecuados, más calificados

Conductora. *Maestro Mario Ramos, quien tendría esa intención de repartirse los puestos.*

Consejero Electoral IEPC. *Pues yo creo que los tres consejeros que están votando en contra no, este, no sé dónde, si sea un asunto de ellos, no conocemos, nunca nos han dicho quienes sean sus propuestas, a lo mejor el conocerlas mejor las propuestas, podríamos saber si se las están sugiriendo, pidiendo, si están atendiendo a un compromiso de otra parte, ahorita no lo tenemos, no me atrevería yo a asegurar que alguien esté detrás de ellos, a lo mejor son solo ellos. Ya la Consejera Sayani en algún momento lo ratificó la consejera (inaudible) La consejera Erika Ruvalcaba pidió su cambio de voto en la contratación de un chofer, de tres asesores, de una secretaria, eso es totalmente cierto, estábamos los siete consejeros cuando nos íbamos a poner a discutir eso y eso ella lo puso de condición para su voto.*

Después, se incrementaron las peticiones, cual era, que se fueran todos los directores que ninguno tenía de continuar, que teníamos que nombrar otros, yo creo que esto es, lo que está sucediendo es lamentable, es grave, incluso hay coincidencias ente los consejeros de que podemos, estamos trabajando, estamos pensando en una reestructuración del Instituto, a lo mejor no necesitamos catorce directores, no tenemos presupuesto, hay presupuesto insuficiente, tenemos que revisar los sueldos también, los sueldos tiene que ir a la baja, tenemos que transitar un modelo de servicio profesional electoral..

(inaudible)

Sin señal

Trabajadores que están ahorita tengan la oportunidad de participar y gente que este en el exterior y que desee participar lo pueda hacer, no, yo creo que es hacia donde tenemos que caminar, pero no en un reparto de cuotas, de meter a los familiares, amigos, este, bajo el chantaje, sin argumentos, creo que no es válido, no, nada más precisar que en esta ocasión el INE determinó que esta ratificación o designación tendría que cumplir con el requisito de tener cinco votos no, no la mayoría simple que tenemos siempre de cuatro contra tres, ahora requiere cinco, es por eso que siempre estamos trabados en este momento.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Conductora Belén Zapata. Claro, Consejero, como queda la imagen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en dos aspectos básicamente, el presupuesto que como bien lo hemos venido informando hay una situación seria respecto a las finanzas del IEPC, pero también en cuanto a la (inaudible)

Consejero Electoral IEPC. Pues más lamentablemente mal Belén, se ha difundido en los medios que tenemos un déficit en este momento, además de treinta millones de pesos, se les deben los finiquitos a los trabajadores eventuales que tuvimos en el Proceso Electoral, se deben los aguinaldos de todo personal permanente del Instituto que somos (inaudible)..del Congreso, estamos en eso, sabemos que con el presupuesto aprobado no vamos a tener la capacidad de desarrollar y cumplir con atribuciones que tenemos como la participación ciudadana, la educación cívica en fin, entonces con este tipo de actitudes, acciones y ciertos temas son los que estamos visibilizando no, querer tener un chofer para movernos, querer tener tres asesores, tener una secretaria, es muy lamentable, o aventarnos de manera irresponsable a despedir a catorce directores que la mayoría tienen entre diez y quince años de trabajo, va significar un golpe muy duro para las finanzas del Instituto que no va poder solventar, entonces yo creo que sí, desafortunadamente yo creo que habrá una percepción negativa por parte de los ciudadanos, porque yo creo que al final los temas que estamos visibilizando son estos, no estamos hablando por ejemplo, que también en la sesión del viernes aprobamos una comisión de género y no discriminación o de otros trabajos que estamos haciendo en este momento no.

Conductora. He, hay Maestro Mario, tenemos tantas preguntas y tan poco tiempo, pero es una imagen que se ha venido deteriorando, bueno pues recuerdo que el presidente de este Instituto a que, quería un incremento salarial, ahora que bueno que lo escucha míos que hay que revisar los salarios, incluso hacia la baja y entorno a lo que estaba comentando ahorita a través twitter, el cuentabiente rojinegro, precisamente lanza esa pregunta, dice y que opina el Consejero Ramos de los trabajos que desde junio no nos pueden liquidar.

Consejero Electoral IEPC. Sí, bueno si dos cosas, primero lo de los sueldos recordaran que ya desde el año pasado, de marzo, nosotros decidimos reducir los sueldos de los consejeros, una reducción no, te has dado cuenta que los sueldos de los consejeros no los fijábamos nosotros, estaban establecidos en la Constitución, sin embargo, pero de todas maneras yo creo que..

(Inaudible)

(Sin señal)

Que funcionarios del Instituto, de los directores de los asesores de los jefes de departamento son elevados, son más altos que los sueldos que están en el sector público, entonces, si hacemos una reducción no pasa nada, todavía tendrían un buen sueldo y respecto a los trabajadores que salieron de la institución en julio creo que nos hicieron el favor de apoyarnos en el proceso como personal eventual, son los primero que tenemos en la lista para poder pagar una vez que

tengamos los recursos; Hay una solicitud que el presidente ha hecho al gobierno del estado de una ampliación presupuestal, que nos ha explicado y sabemos que el gobierno del estado también pasa por dificultades económicas y no ha habido los recursos. Hay una promesa de irnos entregando también los recursos, porque al final no fue un mal manejo de los recursos, hubo gastos, este, superiores que no estaban contemplados y el proceso trajo, al final, desde el inicio del año no se había aprobado un presupuesto suficiente para sacar adelante el Proceso Electoral.

Pues decirle a los trabajadores eventuales que están esperando, que cuenten con la seguridad de que se les va entregar los recursos, ya, desafortunadamente no fue en el momento, en el que tendría que ser y muchos trabajadores nos están esperando, pero se les va pagar a todos, incluso se les va a pagar primero que al personal de planta, se les empezara a pagar este, a los que reciben menos ingreso y así va incrementando hasta que seamos los últimos en cuestión del aguinaldo, los jefes de departamento, directores y consejeros, no.

Conductora Belén Zapata. *Consejero, preguntarle por último, no le estarán dando más elementos a quienes han pedido desde hace tiempo la desaparición de los Institutos electorales locales y dejarle ya la responsabilidad de las elecciones totalmente al INE*

Consejero Electoral IEPC. *Híjole, yo creo que sí, con este tipo de escándalos, con este tipo de actitudes sobre todo de acciones, pues yo creo que muy retrogradas no, premodernas, de reparto de cuotas, etc., por supuesto que eso ya no se concibe en este momento, yo creo que sería muy lamentable que en el caso de Jalisco se desapareciera el organismo electoral, ha sido un organismo en el que incluso, por el INE ha sido reconocido en su trabajo, en el Proceso Electoral, salió bien, hubo una buena colaboración, en muchos aspectos el instituto había innovado, en electrónica en resultados electorales preliminares, los partidos políticos ha habido alternancia aquí, no ha habido mayores disgustos o impugnaciones trascendentes que hayan descalificado sobre todo a este consejo y a esta elección en el desempeño del trabajo de este Instituto.*

Yo creo que no están las condiciones para que desaparezca, si creo que esto una mala percepción, una mala imagen o argumentos para que alguien diga que el Instituto debe desaparecer pero al final creo que es un asunto que vamos a resolver y debemos resolver muy pronto, yo espero que los compañeros consejeros reflexionen concienticen que la actitud que han consumido en este momento es absurda, creo que si nos dice haber tal director se tiene que ir por esto y por esto otro vamos a apoyar y a respaldar de que así sea, pero tiene que haber una causa justificada y si presentan otros perfiles no se cual, los vamos a aprobar.

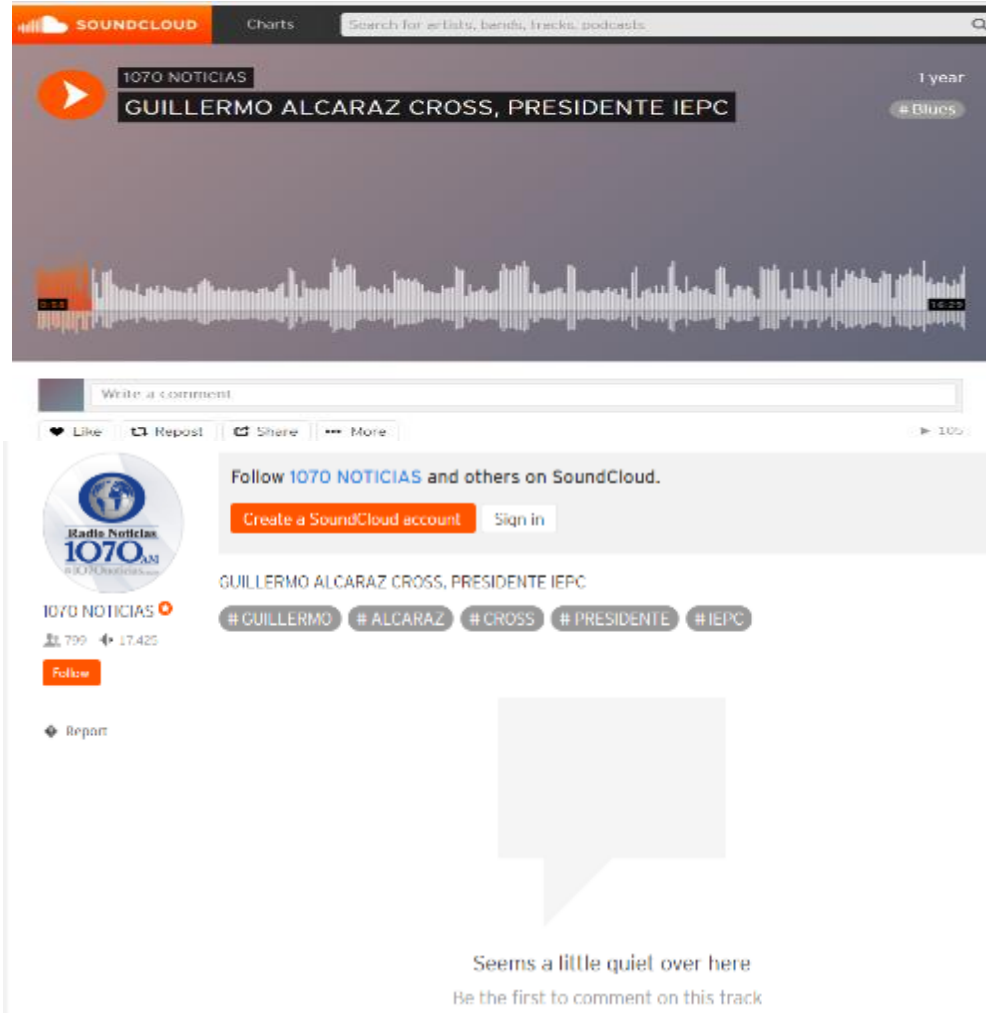
Pero ya queremos escuchar a los directores, que nos digan algo, no.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

Conductora. Claro, Consejero muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que le da a Señal Informativa. Seguiremos muy pendientes del tema y muy buenas tardes.

Consejero Electoral IEPC. Gracias Belén gracias Josefina, un saludo al auditorio.

Posteriormente, se ingresó a la segunda liga de internet identificada como <https://soundcloud.com/1070-noticias/guillermo-alcaraz-cross-presidente-iepc>, desplegándose el siguiente resultado:



Se trata del medio electrónico correspondiente a Radio Noticias 1070 AM, 1070noticias.com.mx, en el cual de manera simultánea, se reproduce un audio

con una duración de dieciséis minutos veintinueve segundos, en el que se puede escuchar una entrevista vía telefónica con quien identifican como Guillermo Alcaraz Cross, Consejero Presidente del IEPC del Estado de Jalisco. Asimismo, se observan las siguientes frases: ***Follow 1070 NOTICIAS and others on SoundCloud. GUILLERMO ALCARAZ CROSS, PRESIDENTE IEPC.***

El texto del mencionado audio, es al tenor siguiente:

Voz hombre.- Son las 8 con 36 minutos, 8:36, bueno, lo dicho Paty, en el Instituto Electoral qué estará sucediendo?, por lo pronto, un acuerdo que requiera de cinco votos de los Consejeros el pasado viernes, pues simplemente no pudo salir adelante, porque tres votaron en contra, los trascendidos hablan, inclusive de otras cosas, de que votaron en contra de ésta ratificación de Directores y Funcionarios de mando en el Instituto Electoral para forzar una nueva designación de servidores públicos que organicen las elecciones, pero por otras razones, porque querían, bueno, algunos privilegios, insisto, esto es lo que en los trascendidos se ha dicho. Pero qué sucede realmente en el Instituto Electoral en las últimas fechas. Es lo que queremos platicar directamente con el presidente de éste Instituto, con Guillermo Alcaraz Cross, a quien ya saludamos.

Voz Paty.- Así es, cómo está presidente, muy buenos días

Guillermo Alcaraz.- Muy bien, buenos días, cómo están? Gracias por darme el espacio para platicar

Voz hombre.- Nombre pues muchas gracias por tomarme la llamada, qué ocurre en el Instituto, realmente hay desacuerdos importantes entre los Consejeros, realmente hay quienes quieren sacar algún privilegio especial, qué está ocurriendo?

Guillermo Alcaraz.- Mira, el INE emite un lineamiento el año pasado en el que se nos solicita que para evitar que nosotros vengamos cargando alguna condición instintiva en que actuemos con libertad, ratifiquemos a los Directores o designemos a nuevos, no?, esto es, evitando de alguna manera que esa estructura que le damos pudiera estar contaminada o relacionada con alguna fuerza política en el Estado, en ese sentido, y a partir de la actuación de aquéllos en la manera que se han conducido, que me parece es adecuada, de que los conozco hace quince años, yo me atreví a sugerir la ratificación completa no?. Al final me parece que los resultados que ha presentado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a partir de una alternancia que se ha permitido por las condiciones que hemos generado, pues es parte de ésta estructura sólida y profesional. En esos términos yo presento, por supuesto, un acuerdo de ratificación que al final no alcanza los cinco votos que solicita el lineamiento que te comento. Es una votación calificada que, bueno, tendrá que sujetarse nuevamente a una votación para efecto de que podamos resolver éste tema, si no alcanzamos ésta votación calificada, bueno, tendríamos que ver qué procede

jurídicamente, pero ahora nos encontramos a la mitad de éste proceso que permitirá, por supuesto, decidir qué sigue en éste contexto. Yo insisto, a mí me preocupa que como parte de éste proceso, debamos privarnos de la experiencia y de la capacidad que han mostrado quienes hasta ahora nos han acompañado en la labor electoral.

Voz Paty.- *Oiga presidente, es cierto que hubo quien condicionó su voto a cambio de que les dieran algunas prebendas, algunos beneficios, un asistente, un vehículo, en fin, cosas así?*

Guillermo Alcaraz.- *Mira, nosotros estamos pasando por un proceso a la par de reingeniería, usted conoce la condición económica del Instituto, lo que nos obliga, por supuesto, a hacer ajustes importantes, dentro de los escenarios que se han planteado, hubo alguna sugerencia en este sentido no?, hay que fortalecer a los Consejeros y eso, bueno, en defecto de la propia estructura. Nosotros nos opusimos, me refiero a quienes han acompañado el acuerdo de ratificación y bueno, eso no, no prosperó, la próxima semana estaremos presentando ya, un esquema de reingeniería que presentará oportunidad para que el Instituto pueda superar ésta situación por la que se encuentra y hacerle frente al objeto de subyación, es objeto constitucional. Yo creo que en medio de todo esto hay una concepción equivocada de un término que se llama colegialidad. El Instituto Nacional Electoral ha platicado con los diferentes Organismos Públicos Locales electorales y nos ha pedido que nos colegiemos para tomar decisiones, sin embargo, me parece que hay quien ha considerado que esa colegialidad está basada en un reparto caprichoso de espacios y bueno, eso me parece que no es. Colegialidad es sentarnos, debatir, discutir y votar en consecuencia con disensos, con disensos, con consensos y disensos, pero siempre anteponiendo al interés del Instituto y me parece que ahorita el interés del Instituto es mantener una estructura fuerte y profesional, con un costo que le permita hacerle frente al objeto de (inentendible)*

Voz hombre.- *Sustituir Directores y Secretarios, bueno, implicaría que a la vez se tuvieran que pagar finiquitos de quienes están actualmente, estamos en lo correcto?*

Guillermo Alcaraz.- *Mira, al final podría ser, podría ser, quienes nos acompañan en este Instituto, promedian alrededor de diez años sirviéndole y a partir de ahí, bueno... ellos han creado algunos derechos, recordemos que las relaciones laborales, se basan en tres pilares fundamentales, uno de ellos es la subordinación y ellos, de alguna manera, se encuentran subordinados a las decisiones del Consejo. En esos términos ellos podrían acudir a alguna instancia a solicitar que se les reconozca ese derecho que han adquirido y por supuesto una compensación, en contra de lo que sería una separación sin una justificación clara.*

Voz hombre.- *Híjole presidente, la verdad es que... pues están viendo la tempestad y no se hincan, no? me parece que este podría ser una de las frases que podríamos externar con un Instituto Electoral que no tiene un presupuesto*

que alcance, con críticas por parte de algunos sectores de la sociedad hacia el mismo, porque bueno, pues resulta, aún y con todo, oneroso, costoso y estar pidiendo, en estos momento, algún tipo de privilegios por parte de algunos de los Consejeros, no, bueno..., pues en qué mundo estamos viviendo?

Guillermo Alcaraz.- *Sí, me parece, yo partiría, insisto, de lo que comenté hace unos momentos, es una estructura que le ha dado resultados al Instituto, que lo ha hecho salir adelante con su objeto que es, la función estatal de organizar procesos electorales. Tenemos en frente, la necesidad de atender mecanismos de participación ciudadana, están debatiendo en este momento, las normas que le dan forma a estos medios de participación para la ciudadanía y bueno... debilitar a la institución de ésta manera, me parece que no es lo más responsable. En éstos términos, nosotros mantendremos la defensa de quienes hasta hoy nos han entregado resultados y bueno, seguiremos debatiendo hasta completar éste proceso y esperar al final qué resulta.*

Voz Paty.- *Presidente, sin embargo, usted acaba de mencionar que la próxima semana se presentará el esquema de reingeniería y trasciende que ese esquema, pues incluye disminuir la cantidad de Directores, no? de los doce que no se quieren en este momento renovar o que han tenido, pues, la oposición de algunos Consejeros entonces se disminuiría a cuatro, qué tan cierto es esto?*

Guillermo Alcaraz.- *Mira, por ley, hay cinco áreas fundamentales que subsisten, entre ellas, por supuesto, la Secretaría, está jurídico, está la Unidad de Fiscalización, está la Secretaría Técnica de Comisiones y eh... una más que en este momento se me escapa, sin embargo trataríamos de involucrar un área más que permita la recepción de todas las atribuciones que le corresponden al Instituto, eso por supuesto, le restaría la necesidad de una estructura mucho más amplia y una coordinación más estrecha a partir de una sola figura que coordine la operación. Entonces me parece que ese esquema podría funcionar y estaríamos evitando que esa estructura se mantenga del tamaño que se encuentra actualmente.*

Voz hombre.- *Bueno presidente, y de no llegar al consenso entonces, que vendría a ocurrir? Ya en definitiva tendrían que buscar nuevos directores y nuevo secretario?*

Guillermo Alcaraz.- *Tendríamos que agotarlo como bien dices, si al final no alcanzamos la ratificación, tendríamos que analizar qué seguiría porque, si bien ellos no son ratificados en un cargo, tampoco se encuentran en una causal de terminación de la relación laboral. Entonces, estamos en el análisis jurídico de esa parte y bien, yo insistiría, ellos no son ratificados, significa que no para el ejercicio de determinado cargo, pero de ninguna manera están incurriendo en una causa que les impida seguirle sirviendo al Instituto y en esa parte nos encontramos no?, tratar de encontrar el punto adecuado que nos permita resolverlos sin el mayor impacto económico para la institución.*

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016**

Voz hombre.- *Guillermo Alcaraz Cross, como presidente del Instituto Electoral, en caso de que sea real, aquello de que algunos Consejeros, están pidiendo a cambio de aprobar de la ratificación de Directores y Secretario, bueno, que estén pidiendo privilegios especiales, contratación de amigos de ellos, vehículos, etcétera, se prestaría Guillermo Alcaraz a este juego perverso, por utilizar un término.*

Guillermo Alcaraz.- *De ninguna manera, lo has visto en mi actuación, yo he salido públicamente a defender en la sesión a ésta estructura y por supuesto que no está el Instituto como para ceder al tipo de estas cosas, en lo personal Guillermo Alcaraz no cederá, mantendrá la oportunidad de que en algún momento podamos revisar la actuación de los directores, de encontrarse algún defecto que pudiera (inentendible) que no están de acuerdo con la ratificación y los lleváramos a un procedimiento a través del cual, sí resulte entonces que es necesario separarlos, lo haremos, pero de otra manera no, nuestra obligación como autoridad es fundar y motivar y como patrón, justificar una salida y en esos términos estaremos actuando*

Voz hombre.- *Pues qué bueno que se tenga esa convicción, presidente porque si de por sí el Instituto en malas condiciones, no nos podría platicar en estos momentos cuál es el escenario que tienen, sobre todo en materia presupuestal?*

Guillermo Alcaraz.- *Mira, nosotros recibimos ciento veintiocho millones de ciento cincuenta y ocho solicitados, de alguna manera trataremos de salir adelante con este presupuesto, nosotros vamos a ajustar, a partir de esta ingeniería que te comento, nuestro cargo económico a este presupuesto que fue otorgado y bueno, esperaremos a que en alguna momento pueda fortalecerse la institución. Nosotros le mostraremos a la ciudadanía la austeridad con la que nos hemos manejado. Nosotros no pudimos hacer un ajuste de este tipo el año pasado porque teníamos un Proceso Electoral en frente, teníamos una estructura que heredamos profesional igualmente pero amplia, que quizás hoy no sea necesaria y en esos términos estaremos resolviéndolo, nosotros demostraremos que la austeridad en el Instituto es un principio y que a partir de él le entregaremos cuentas a la ciudadanía jalisciense, y bueno, a partir de esto, esperamos que algunos actores respondan a ésta... a éste esfuerzo que hace la institución.*

Voz hombre.- *Tenemos participación, Pepe Plasencia, en este momento pregunta: "y la reducción de salarios para cuándo?"*

Guillermo Alcaraz.- *Es parte, es parte de esa reingeniería, va junto con pegado, no podríamos nosotros solamente llegar a un ajuste estructural, sin además replantear la retabulación de los salarios porque no nos alcanzaría, no sería suficiente para hacerle frente al ejercicio fiscal de este año.*

Voz hombre.- *Entonces, van a reducirse salarios?*

Guillermo Alcaraz.- *Vamos, lo estamos analizando, de entrada no habrá un incremento, te recuerdo que los Consejeros ya nos reducimos en promedio un*

veinticinco por ciento... un doce por ciento, perdón, el año pasado y estaremos tratando de que la estructura lo haga en una medida igual.

Voz hombre.- *Bueno, por lo pronto, entonces no aumentos, ese sí es un hecho.*

Guillermo Alcaraz.- *No, eso es un hecho*

Voz Paty.- *Ni por supuesto, de personal tampoco no?*

Guillermo Alcaraz.- *No, de... por el contrario, ajustaremos a la estructura a que ellos también sufran un impacto proporcional respecto de su salario.*

Voz Paty.- *Presidente, y la deuda que se tiene con extrabajadores?*

Guillermo Alcaraz.- *Parte de esa reingeniería tendrá que tener como fin resolverla. Nosotros vamos a hacer este planteamiento para que queden los ahorros que nos permitan ir cubriendo en el ejercicio los compromisos que tenemos del ejercicio anterior. En esos términos yo calculo que estaremos saliendo adelante con este... con este tema importante, siempre que, por supuesto, no nos veamos sujetos a un tipo de cargas económicas como las que pudieran derivarse de un despido como el que están pretendiendo algunos Consejeros.*

Voz Paty.- *Ya*

Voz hombre.- *Bueno, entonces eh... de momento, la cosa un poquito entrampada, presidente, cuándo la nueva sesión en la que se pretenderá o se procurará, perdón, sacar adelante a los Directores?*

Guillermo Alcaraz.- *El día de hoy nosotros nos estaremos reuniendo en punto de las tres de la tarde, de las quince horas, este proceso que te comento se trata de, por tratarse de una votación calificada, de una primera votación, si ésta no resulta una siguiente votación que es la que estaremos agotando hoy y si al final no logramos el consenso necesario, en términos de la calificación que pide el lineamiento, podríamos nosotros aprobar en la próxima sesión, se lleve a cabo un nuevo debate y votación respecto de este mismo punto, que al final en este momento no lo veamos, estaríamos concluyendo nuestro proceso*

Voz hombre.- *Bueno, pues a ver qué termina por suceder, por lo pronto ya hubo ventaneados, ventanearon, por lo menos, a los tres Consejeros que han ido en contra y también hubo señalamientos, inclusive, en ese tenor, de lo ya dicho, pues había quien pedía chofer, tres asesores y un asistente a cambio de su voto, nada más en ese tenor, sí se dio?*

Guillermo Alcaraz.- *Sí hubo alguna propuesta en ese sentido, pero me parece que la cordura llegó y me parece que también salió del debate, sí hubo la sugerencia.*

Voz hombre.- No bueno, pues me parece que no entienden la realidad que se está viviendo, entonces en el Instituto no?

Guillermo Alcaraz.- Me parece que hace falta pero yo confío que en los próximos días llegará la cordura a la institución.

Voz Paty.- Pues ojalá

Voz hombre.- El INE puede intervenir en todo esto o les concede autonomía?

Guillermo Alcaraz.- Tenemos autonomía, el INE nada más fijó un lineamiento para que cumpliéramos con ésta ratificación o designación de nuevos Directores, lo demás es un proceso que tendremos que agotar nosotros.

Voz hombre.- Bien, algo que guste agotar el presidente del Instituto Electoral, aquí entre el público de Radio 1070?

Guillermo Alcaraz.- Nada, que tengan la confianza de que este Instituto cumplirá con su función, que le rendirá cuentas al Estado y lo hará de una manera austera.

Voz hombre.- Y es lo que se espera efectivamente presidente. Pues nosotros agradecidos y emplazados para un charla posterior ya cuando se acomoden todas las cosas y nos platique con detalle acerca de ésta reingeniería.

Guillermo Alcaraz.- Con todo gusto, compartimos un desayuno.

Voz hombre.- Perfecto, claro que sí.

Voz Paty.- Muy bien, gracias presidente.

Guillermo Alcaraz.- Un abrazo a los dos

Voz Paty.- Gracias muy buenos días.

Voz hombre.- Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, bueno pues lo platicó con mucha decencia y respeto pero esto es real, hubo tres Consejeros, pues que querían despacharse con la cuchara grande y sacar ventaja a esa ratificación de funcionarios, de Directores y de Secretario en el Instituto Electoral, cómo? Bueno pidiendo prebendas, pidiendo beneficios personales y para sus cercanos, para sus allegados.

Voz Paty.- O sea tú me das plazas para mi gente, contrátame asesores, un chofer, yo te doy mi voto para que ratifiques a todo el equipo no?

Voz hombre.- Esto, bueno... tiene muchos nombres no? pero me los reservo para aquello de no te entumes... no te entumas, pero simplemente decimos: "no se vale, es terrible, es lamentable, es muy bajo, no es lo que se espera" de Consejeros electorales, de quien se supone velan porque las cosas marchen bien

en los procesos electorales, gentes con probidad, gente que está ahí, más por la intención de servir a la ciudadanía que por sacar beneficios personales y podemos seguirle aquí pero me parece que cualquier agregado que aportemos en este momento, pues simplemente es un “sueño guajiro”

Voz Paty.- *Pues afortunadamente, afortunadamente no se dieron y pues vamos a ver qué surge de estas negociaciones pero pues lo que esperamos es justamente esa reingeniería que de lo que se trata más bien es de adelgazar esa cantidad de personas que finalmente...*

Voz hombre.- *También esperamos que sea real ésta reingeniería*

Voz Paty.- *Porque la verdad es que en un año en el que no hay Proceso Electoral, pues esperamos que no haya tanto personal ni tanto gasto*

Voz hombre.- *Claro*

Voz Paty.- *Y eso sí, a quien se le debe, ya trabajó, bueno, pues también que se les pague, es parte de lo que nos comenta el presidente.*

Voz hombre.- *Bueno, vámonos a la pausa, continuamos con más, no se vaya*

[...]

En cuanto a las citadas entrevistas, dado que se trata de audio y video, se consideran pruebas documentales técnicas, las cuales, *per se*, tienen valor probatorio indiciario, no obstante, al estar adminiculadas con la citada acta circunstanciada a la cual se le otorgó valor probatorio pleno, por ser una documental pública, se debe reconocer que las mencionadas entrevistas también tienen valor probatorio pleno, dado que está acreditada su existencia y contenido, cuya autenticidad no está controvertida y menos aún desvirtuada en autos. Lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, incisos a) y c), y 462, párrafos 2 y 3, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracciones I, inciso a), y III y 27, párrafos 1, 2, 3 y 5, del *Reglamento de Quejas*.

Ahora bien, de la lectura integral de ambas entrevistas, se advierte que las mismas fueron realizadas en un auténtico ejercicio periodístico, en que los locutores abordaron el tema relativo a la ratificación de diversos funcionarios del *OPLE*, con motivo de la sesión pública del Consejo General de ese Instituto Electoral local, celebrada el veintidós de enero de dos mil dieciséis.

En efecto, las citadas entrevistas se realizaron bajo el amparo del derecho de libertad de expresión y de información, dado que la aludida ratificación o no de servidores públicos electorales es un asunto de interés general para la ciudadanía, razón por la cual, cuestionaron a los Consejeros Electorales Guillermo Amado Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González, sobre lo discutido en esa sesión pública.

En este sentido, si bien de la lectura de las mencionadas entrevistas se advierten declaraciones de los Consejeros Electorales denunciados que se pueden considerar como fuertes o que pueden causar molestia, lo cierto es que éstas son coincidentes con los argumentos vertidos en la sesión pública de ese órgano colegiado, de veintidós de enero de dos mil dieciséis, concluida el inmediato día veinticinco, las cuales, se han considerado en párrafos precedentes como emitidas en ejercicio del derecho de libertad de expresión y en ejercicio de atribuciones de los aludidos Consejeros Electorales.

Así pues, en modo alguno se puede considerar que los Consejeros Electorales Guillermo Amado Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González agredan verbalmente a la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en medios masivos de comunicación, en razón de que fueron los medios de comunicación los que llevaron a cabo diversos cuestionamientos, a los cuales se les dio respuesta, sin que se advierta una tendencia a agredir a la quejosa, sino que esos medios de comunicación retomaron la discusión, en particular, de un posible conflicto al interior del Consejo General del mencionado Instituto Electoral local.

Por tanto, esta autoridad arriba a la conclusión de que los Consejeros Electorales Guillermo Amado Alcaraz Cross y Mario Alberto Ramos González no agredieron verbalmente a la denunciante, dado que, de las constancias de autos, no se advierten elementos de convicción para considerar lo contrario.

Robustece lo anterior la tesis 1a./J. 38/2013, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el

denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* y *Kimel vs. Argentina*, que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas. Amparo directo 28/2010"

- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

La denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que en la sesión pública de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González hizo alusiones hacia su persona, en el sentido de que no tiene voz propia, sino que actúa por conducto de uno de los consejeros, en tanto que el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, no aplicó el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local, asimismo señala que al abordar asuntos generales, el Consejero Presidente no accedió a tratar un tema propuesto por ella, en tanto que sí lo ha hecho respecto de peticiones hechas por otros Consejeros

A consideración de esta autoridad, no obstante que la argumentación de la denunciante es genérica, dado que no precisa en qué momento de la sesión de ese órgano colegiado, se llevó a cabo la supuesta alusión hacia su persona, de una lectura integral de la versión estenográfica que nos ocupa, se advierte que en el último punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Generales, el Consejero Electoral José Reynoso Núñez propuso al Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross que sometiera a votación un Punto de Acuerdo, en el sentido de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, se presentara una propuesta de acuerdo para dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral nacional mediante Acuerdo INE/CG865/2015, relativo a la ratificación o no del Secretario Ejecutivo y Titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral local.

Ahora bien, con motivo de ese tema, el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González argumentó lo siguiente:

Presidente yo quiero pedirle de favor que ni siquiera someta a consideración ese punto, en realidad me parece un punto absurdo, de hecho me parece una propuesta tramposa consejero porque quienes se han interpuesto sistemáticamente a llegar a un acuerdo han sido ustedes, los que votaron en contra, repito, votaron en contra, no dicen por qué votan en contra, no presentan propuesta y ahora quieren que en veinticuatro horas lo resolvamos, ¿saben qué es eso? Quieren hacernos ver como que nosotros no estamos cumpliendo, ¡no! Yo le pido de favor que ni siquiera lo ponga a consideración, porque no voy a

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

aceptar como caer a una trampa y que haya una votación de cuatro, tres, tres, que les urge que cumplamos el acuerdo del INE en menos de veinticuatro horas o votar si votamos, es absurdo, es una trampa ¿Sí? Nosotros nos hemos reunido, ustedes consejero se han negado a platicar con nosotros, se han negado a reunirnos, se han negado a presentar propuestas, lo nombraron a usted vocero cuando las dos Consejeras tienen voz y voto en este Consejo, no se pueden sentar con nosotros, no quieren hablar con el Presidente, no quieren hablar con nosotros, solo puede hablar el Presidente con usted, discúlpeme que lo diga pero así es y ahora quieren aquí en esa sesión decir que en veinticuatro horas lo resolvamos, pues dennos la sorpresa a lo mejor ya se reunieron con el Presidente, hay un acuerdo, están tomadas en cuenta sus propuestas o van a votar a favor de la propuesta del Presidente ¡Vámonos! Entonces sí estoy de acuerdo y en veinticuatro horas lo resolvemos, es una trampa, le pido de favor que ni siquiera lo ponga a consideración, gracias.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

De lo anterior, a juicio de esta autoridad, no se advierte que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González hiciera alusiones personales hacia la denunciante, menos aún que se le agrediera verbalmente, sino que su argumentación, estuvo dentro del contexto de la discusión del tema sometido a consideración del Pleno del Consejo General del *OPLE*.

Esto es así, dado que el consejero electoral denunciado fijó su postura ante la propuesta hecha por el Consejero Electoral José Reynoso Núñez, en ejercicio de sus atribuciones y de su derecho a la libertad de expresión para pronunciarse sobre una propuesta que se dio en ese momento, durante el desarrollo de la sesión en la que sostuvo su disenso en someter a votación como Punto de Acuerdo para que, en el plazo de veinticuatro horas, se presentara una propuesta para dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015, emitido por el *INE*.

En efecto, de la lectura de lo transcrito, así como de las constancias de autos, en modo alguno se advierte que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González haya ofendido o calumniado a la quejosa Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, menos aún que la haya agredido de manera verbal, sino que llevó a cabo un pronunciamiento fuerte sobre la propuesta sometida a consideración del órgano colegiado, en el sentido de resolver en un plazo de veinticuatro horas sobre la ratificación o no de las personas que se desempeñaban como Secretario Ejecutivo,

Directores de área y Titulares de las Unidades Técnicas de ese Instituto Electoral local, cuando lo cierto era, en consideración del denunciado, que se habían negado a dialogar o a presentar propuestas para ese fin.

En este contexto, es inconcuso que, en este particular, no se actualizó lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del *OPLE*, dado que la argumentación del consejero electoral denunciado está dentro del contexto del debate del asunto sometido a su consideración.

Por tanto, se arriba a la conclusión de que el Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, no llevaron a cabo conductas que constituyan agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Asimismo, por lo que respecta al señalamiento de que, al abordar asuntos generales, el Consejero Presidente no accedió a tratar un tema propuesto por ella, en tanto que sí lo ha hecho respecto de peticiones hechas por otros Consejeros, a consideración de esta autoridad, de una lectura integral de la versión estenográfica que nos ocupa, se advierte que en el último punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Generales, la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral solicitó al Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross la ruta institucional para dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral nacional mediante Acuerdo INE/CG865/2015, relativo a la ratificación o no del Secretario Ejecutivo y Titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral local.

Ahora bien, con motivo de ese tema, se argumentó lo siguiente:

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: *Gracias Presidente, gracias a todos los presentes. En los mismos términos de la consejera Virginia Gutiérrez, me uniría a su solicitud en términos también del cumplimiento del artículo 5 del Reglamento Interior y también solicitaría de la manera más atenta se es que se tiene en este momento, no lo sé, la ruta institucional que usted tenga a bien marcar para el cumplimiento del acuerdo CG/865/2015, muchas gracias, es cuánto.*

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Recibo la solicitud y la atiendo por supuesto.*

[...]”

De lo anterior a juicio de esta autoridad, no se advierte que el Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, se negara a tratar el tema propuesto por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ya que como se advierte de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente manifestó tener por recibida la solicitud planteada, la cual sería atendida.

Máxime que, el tema planteado por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral era el relativo al cumplimiento del acuerdo CG/865/2015, el cual fue atendido por parte de los integrantes del Consejo General del OPLE en la subsecuente sesión extraordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil dieciséis.

- SESIÓN PÚBLICA DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que en la sesión pública de trece de mayo de dos mil dieciséis, los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada hicieron alusiones en contra de su persona, relativas a acusaciones de reparto de Directores y de que no tiene voz propia, en tanto que el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross no aplicó el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local.

No obstante que la argumentación de la denunciante es genérica, de la lectura integral de la versión estenográfica correspondiente a la sesión pública del Consejo General del OPLE, celebrada el trece de mayo de dos mil dieciséis, en los Punto de Acuerdo cinco a doce del orden del día, consistentes en “*ACUERDOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE HACE LA DESIGNACIÓN DE MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ, COMO SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO, A HÉCTOR JAVIER DIAZ SÁNCHEZ, COMO DIRECTOR JURÍDICO, A HUGO PULIDO MACIEL, COMO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A MARCELINO PÉREZ CARDIEL, COMO DIRECTOR DE EDUCACIÓN CÍVICA, A MARÍA DE LOURDES ECHEVERRÍA AYALA,. COMO TITULAR DE LA UNIDAD*

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A TLACAEEL JIMÉNEZ BRISEÑO COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, A MARÍA ROSAS PALACIOS, COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN; ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN EN LOS CARGOS DE ALVARO FERNANDEZ MUNGUÍA, COMO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, JORGE A LA TORRE FLORES, COMO DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO, COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE PRERROGATIVAS Y MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ MORA COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, se advierte que los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada argumentaron lo siguiente:

[...]

Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Gracias presidente, quiero mencionar de manera anticipada que votare a favor de la propuesta, lo hare por la responsabilidad y la congruencia que hemos tenido durante todo este tiempo, sabemos que debemos acatar el lineamiento del INE, desafortunadamente nos tardamos más meses de los que debimos haber decidido esto y bueno es publica mi posición respecto a este tema, ustedes saben que yo mencioné durante las sesiones en aquellas en las que tres de nuestros consejeros votaron en contra de que se quedaran todos los directores, y yo les pedí en aquel momento dos cosas, una: que explicaran y dieran las razones y los argumentos por lo cual los directores tenían que dejar sus cargos, dos: si tenía propuestas o perfiles que los presentarán y que argumentaran porque eran mejores esas propuestas que otras, hoy no creo que estemos tomando la mejor decisión desafortunadamente así es, es un órgano colegiado y las decisiones se toman por mayoría, el INE nos impuso que teníamos que decidir eso con cinco votos y de nueva cuenta yo les pediría de nueva cuenta a mis tres compañeros consejeros que nos metieron en esta absurda dinámica, que nos pudieran decir de nuevo porque razón el maestro Luis Montes de Oca quien ya hemos reconocido todos su trabajo impecable, extraordinario, profesional, que nos dijeran porque se tienen que ir y cuáles son las fallas en su desempeño, irregularidades, delitos, pecados, no sé, que cometió para que lo tengamos que despedir el día de hoy de manera injustificada, y de la misma forma me gustaría saber porque se tiene que ir Luis Gabriel Mota, Director General, que también tiene muchos años en esta institución, como Director de Educación Cívica, al Doctor Moisés Pérez Vega que también hizo un excelente trabajo en la Unidad Editorial y también en la Dirección de Educación Cívica, me gustaría también saber la razón por la cual también se tiene que ir Juan Carlos Franco, extraordinario administrador que también tiene más de una

década en esta institución, y ha manejado los números de manera impecable y también la maestra Patricia Vergara quien ha pasado muchos años en esta institución, en Educación Cívica, como consejera y ahora como encargada de la Unidad de Transparencia, entonces yo le pediría a mis compañeros ya que no lo hicieron en estos meses, ya que no lo hicieron en las reuniones previas y privadas, me gustaría que aquí ante los partidos políticos, ante nosotros, y sobre todo ante los que estamos despidiendo de manera injustificada de que nos dieran los argumentos de porque se tienen que ir y también que argumentaran las razones de las personas que van a ocupar estos cargos, quiero decir de nueva cuenta, con mucha responsabilidad, que voy a dar un voto de confianza a las personas que llegan el día de hoy, sin duda es una excelente oportunidad para muchos que se van a integrar a esta institución, trabajaremos con ello, haremos un trabajo imparcial, profesional y cuentan con todo el respaldo y no quiero que se malinterprete que esto es un asunto de tachar o descalificar a las personas que se integran, mis respeto para todos ellos, sin embargo, no comparto, no coincido con la decisión que se ha tomado; yo lo dije en esta mesa, lo dije en alguna entrevista, lo publiqué en algún artículo, lamentablemente nuestros compañeros no nos tomaron la palabra, a mí me hubiera gustado que hubiéramos evaluado el desempeño de los que ahora se van, que hubiéramos hecho una convocatoria, que hubiéramos evaluado los perfiles, hubiéramos hecho exámenes, entrevistas, etcétera y estoy seguro de muchos de los que ahora se van se hubieran quedado si hubiéramos tenido un criterio objetivo y que no hubiera sido esta dinámica que me parece más un reparto de posiciones, un asunto en el que parece que se están privilegiando afinidades personales o intereses de otra índole, quiero fijar esta postura, con mucho respeto para mis compañeros consejeros, en lo personal en este punto hemos diferido hay una divergencia de criterios; yo nomas les pediría eso por respeto a todos que pudieran responder de nuevo a estas preguntas, que estado esperando desde hace algunos meses que me lo digan. Muchas gracias.

[...]

Consejera Electoral, maestra Sayani Mozka Estrada: Pues adelante también, en el mismo sentido que se ha expresado el consejero Mario Ramos, sin embargo, teniendo voz propia siempre, quiero decir que no estoy conforme con todos los perfiles que se han puesto para llegar a un consenso que difícilmente diría que fue producto del dialogo sino que la necesidad de cumplir con un lineamiento que nos pauta el INE, porque durante todos estos meses esta decisión hubo quienes decidieron actuar en bloque y no dialogar cada quien de manera individual y en una mesa de diálogo con siete voces, aunque estas voces puedan tener posiciones, como bien lo dijo el consejero José, que no comparten, que no se comparten, en ese sentido no comparto por ejemplo, el hecho de que simplemente por currículum y dado que la Dirección de Educación Cívica comporta una de las atribuciones sino que la atribución

fundamental de los OPLES, cuando no existe Proceso Electoral y solo particularizo trayectorias, me refiero a la propuesta que está aquí para ocupar la Dirección de Educación Cívica, este va a pasar a transparencia por supuesto, es información pública y ustedes podrán hacer el comparativo, los medios de comunicación, los ciudadanos a quienes les tenemos que rendir cuentas respecto de la elaboración de una política pública que vaya el sentido de fortalecer las capacidades ciudadanas, cuando estamos desprendiendo de su cargo de manera injustificada al Doctor Moisés Pérez Vega quien tiene un doctorado en investigación en ciencias sociales, que tiene una maestría en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es egresado de la licenciatura en estudios políticos y gobierno con quien, no es secreto todo mundo lo sabe, me toco compartir trayectoria estudiantil con él y me siento muy orgullosa por cierto de que haya podido venir a este instituto años antes de que yo llegara como consejera electoral y que diera muestras de su trabajo y de los resultados que le ha blindado a esta institución y el compromiso que tiene, podría particularizar en otros casos pero me quiero referir a este y voy a ser muy enfática en pedirle y lo digo desde aquí, evidente a todo mundo, no es un cheque en blanco, pero voy a ser muy enfática en seguir el trabajo del maestro Marcelino Pérez Cardiel dado que me parece que no cumple, comparando trayectorias comparando currículas, con la trayectoria esperada para un cargo de la investidura y envergadura que tiene y sobre todos de las atribuciones y responsabilidades que tiene la Dirección de Educación Cívica, no le doy un cheque en blanco y de hecho aquí digo una cosa, han pasado ocho meses desde que el Consejero Reynoso asumió la presidencia de la Comisión de educación Cívica y en todo este tiempo no se ha citado a ninguna sesión de trabajo, supongo que no es excusa que estuviéramos en esta transición, que tuviéramos que tomar algunas decisiones, porque debajo de cada titular hay una estructura eficaz, comprometida para sacar adelante el trabajo, entonces al igual que a todas la propuestas que están aquí, por supuesto, les daré puntual seguimiento esperando el compromiso y resultados de trabajo, les agradezco a quienes pasaron por estas direcciones, la Dirección de Educación Cívica, la Dirección de transparencia, por supuesto al Secretario al maestro Luis Montes de Oca a quien aprecio y en todo momento da ejemplo de lo que es la responsabilidad institucional, por supuesto al maestro Luis Mota, a quien ocupaba la titularidad de la Dirección de Administración, en fin a todas estas personas, que hoy día en aras de sacar un acuerdo institucional tendrán que desprenderse de su cargo, el sentido de mi voto será a favor con esas salvedades que he expresado esta tarde. Es cuánto.

[...]

(Lo subrayado es de esta Resolución)

A juicio de esta autoridad, las manifestaciones hechas por los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada en modo alguno constituyen agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, dado que se emitieron al amparo de su derecho de libertad de expresión y en ejercicio de sus atribuciones para motivar el sentido de su voto, en cuanto a la propuesta que fue sometida a su consideración.

De lo trasunto, se advierte que las manifestaciones de los denunciados en forma alguna se circunscriben, de manera exclusiva a la quejosa, sino que su pronunciamiento es genérico respecto de aquellos consejeros que desde un inicio se opusieron a la ratificación del Secretario Ejecutivo, Directores de área y Titulares de las Unidades Técnicas, en cuyas intervenciones solicitaron, dentro del debido debate y escrutinio, que se expresaran las razones objetivas para oponerse a ciertas designaciones o ratificaciones de funcionarios.

De este modo, el hecho de solicitar argumentos de hecho y de derecho respecto de determinada votación, no se puede considerar que actualizan agresiones verbales, puesto que todos los servidores públicos, sobre todo aquellos que tienen capacidad de decisión, deben sustentar debidamente sus determinaciones, cuestión misma que era la que en ese momento se exigía a la hoy quejosa, entre otros consejeros.

En efecto, como se razonó en párrafos precedentes, el tema relativo a la designación del Secretario Ejecutivo y Directores de área constituye un asunto complejo, dado que ello implica una reestructuración en la organización y funcionamiento del Instituto Electoral local, razón por la cual es razonable que las discusiones se tornen abiertas, amplias, fuertes y vehementes, sin que el hecho de que los integrantes del Consejo General de esa autoridad administrativa electoral local expresen sus argumentos a favor o en contra de la propuesta, constituyan agresiones verbales.

En este sentido, se arriba a la conclusión de que los argumentos de los Consejeros Electorales Mario Alberto Ramos González y Sayani Mozka Estrada fueron emitidos en ejercicio de sus atribuciones, relacionadas con su derecho a la libertad de expresión, a fin de motivar el sentido de su voto; por tanto, es inconcuso que, en el

caso, no se actualizó lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE.

- SESIÓN PÚBLICA DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

La denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral argumenta que en la sesión pública de diez de agosto de dos mil dieciséis, los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, la agredieron verbalmente al mostrar falta de respeto y tolerancia con relación a la posición de la quejosa, sobre el Proyecto de Acuerdo de presupuesto, con el objeto de distorsionar su propuesta e “invisibilizar” y anular su participación y punto de vista.

De la lectura integral de la versión estenográfica correspondiente a la mencionada sesión pública, se advierte que se sometió a consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local, el *PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE*, correspondiente al punto número doce del orden del día, cuyas intervenciones, en lo que interesa, son al tenor siguiente:

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si gracias, bueno yo nada más para comentar como lo hice en las mesas de trabajo y ahorita en la previa, ya con la oportunidad de estar con los partidos políticos, manifiestar que el sentido de mi voto tendría que ser en contra, por la razón que expuse de no estar de acuerdo con el cuarenta y tres por ciento adicional, que de manera automática se agrega al salario, como una compensación por Proceso Electoral, a partir de septiembre, sería no, entonces el gasto se generaría solo en dos mil diecisiete sería de tres millones setecientos treinta y un mil seiscientos ochenta y seis y yo lo que puse en la mesa en dos ocasiones, son algunos acuerdos del INE, si me permiten le daré lectura, es 1 INE/CG1061/2015 es el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA PROPONE LAS OBLIGACIONES Y LAS MEDIDAS DE

RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, LAS CUALES SE DERIVAN DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; así mismo el acuerdo INE/JGE112/2016, que es el ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES PARA OTORGAR UNA COMPENSACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON MOTIVO DE LAS LABORES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015 – 2016, DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DERIVARON DE LOS PROCESOS ELECTORALES 2014 – 2015. Y bueno aquí lo que yo exponía, es que, podríamos tomar estos documentos como ejemplo base y buscar la ruta, que aplicara también legalmente a nuestro OPLE para que la compensación se diera de una manera similar a la que asume el INE, bueno, que es el referente que encontré, que se expuso en la mesa y a mí me parece que este 43%, que veo que bajó, ahora a un 33%, se da la compensación, pero se da por todo el periodo del Proceso Electoral y a mí me parece, con todo respecto, excesiva en este marco de austeridad, luego después de esta reestructura, no, por la que pasamos luego de todo esta situación financiera, que atravesó el instituto y que tuvieron que despedir una cantidad de personas, no, además todavía eso, todavía no salimos de los problemas que eso acarreó, yo no estaría de acuerdo, porque no me parece congruente, lo que también expuse y eso aplicaría únicamente o excluir al Consejo General, se hizo un ejercicio para ver como impactaba, aplicar el 4% al salario mínimo, conforme establece el consejo nacional de representantes del consejo nacional de los salarios mínimos que aprobó para este dos mil dieciséis, que establece un 4% al salario mínimo y que en este año no se ha tenido un impacto en este instituto, entonces bueno, me parece importante, que en lugar de este 43%, excesivo para mi gusto, en todo caso atender la parte del impacto presupuestal para el poder adquisitivo de los trabajadores del instituto y me parece que eso tendría un fundamento legal, porque no encuentro en el 43%, con mucho respeto, ya lo he dicho y lo digo aquí también, no encuentro el fundamento legal que le de sustento a todo el Proceso Electoral, me parece que podemos buscar otra ruta, buscando la forma, no la encontramos, de todas maneras, por esa razón, mi voto sería en contra, porque no estoy de acuerdo, lo sigo reconociendo que se bajó de ese 43% propuesta inicial a un 33% y me sigue pareciendo excesivo, en este contexto de racionalidad y de austeridad presupuestal y tampoco estaría de acuerdo, también lo he manifestado, una contratación de eventuales, casi en ningún momento del próximo año, a lo mejor hay algún análisis en las áreas tal vez de organización y de educación cívica o quizás solo con organización como una excepción en el mes de diciembre o quizás en noviembre, pero, básicamente a mí me parece excesivo ese número de ciento cuarenta y dos

personas o ciento treinta y tantas personas, que va estar desde enero, parece que ayer se llegó al acuerdo que fuera a partir de mayo, tampoco estaría de acuerdo que fuera a partir de mayo, yo creo que con la estructura que tiene el instituto, podría ser suficiente, salvo que se justificara, excesivamente justificada, exhaustivamente, quizás de algunas figuras, para los últimos meses del próximo año en organización, pero incluso hasta podríamos esperar hasta el dos mil dieciocho, toda vez que en el INE no se contratan personal eventual y las atribuciones que tenemos ahora, pues ya no son las mismas que teníamos a partir de la reforma. Es cuanto, gracias.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Muchas gracias consejera, es un tema que habíamos abordado por supuesto en la previa y ante el hecho de venirse a tocar nuevamente en esta mesa, me veo en la obligación de citarlos, porque es la propuesta en este sentido. Me parece que el Instituto Nacional Electoral no es parámetro para este instituto, cuando menos en el desdoblamiento de la estructura, porque nosotros no tenemos una estructura desconcentrada que atienda los trabajos distritales, el Instituto Nacional Electoral, sí, cuenta con estructura desconcentrada distritalmente, creo que de alguna manera le ofrece esa posibilidad de despegar el trabajo al interior del estado, en esos términos y atendiendo a un proceso de igual magnitud, es que se pretende este desdoblamiento, por supuesto que serán atendidas todas las propuestas, que han sido formuladas en esta mesa; respecto del 4%, cito el artículo 45 de la ley de servidores, que señala que nunca y de ninguna manera debemos de disminuir el salario de los trabajadores, pero debemos mantenerlos como se encuentran para salvaguardar principios, como la austeridad, la responsabilidad, la equidad y me parece que no se encuentra en ninguna situación como esta, de este tipo, si nosotros nos exponemos a una serie de ajustes, vamos a alcanzar en algún momento, la posibilidad de encontrarnos frente a un escenario que venimos superando y no vamos a exponer la sobrevivencia del instituto, cuando menos la económica, a un escenario como el que estamos superando; horas extraordinarias, la jornada se amplía, necesariamente tenemos que cubrir esas horas extraordinarias, no es un capricho, por supuesto obedece a una necesidad, es un cumplimiento legal con los trabajadores, qué hacemos, proponemos un sobresueldo un 33% que de alguna manera cubra ese trabajo extraordinario, de lo contrario tendríamos que hacer cálculos que quizás nos llevarían a un escenario, que tenga un impacto mucho más amplio para el instituto electoral, si hacemos el cálculo del 33% que se está proponiendo y lo multiplicamos por el número de meses que no esté el proceso, porque el proceso al final concluye ya por diciembre, estamos hablando de agosto, que es el caso que se presentó en el dos mil quince a final estamos alcanzando tres meses, solo estamos superando al instituto nacional con un mes, me parece que, ese desdoblamiento y esa coordinación de actividades desde el centro, requieren por supuesto de un estímulo un poquito mayor que el del Instituto Nacional Electoral, podemos

cambiar la fórmula, podemos dejar de dar un 33% acompañado al salario y podemos dividir tres meses de bono en el proceso y me parece que el impacto económico al final, es el mismo, entre uno y otro mecanismo, ese es el motivo por el cual se decidió esta propuesta, por supuesto voy a atender en un momento más los ajustes que me ofrecen o que me solicitan las Consejeras, que lo han hecho con puntualidad, me refiero en términos que concretamente en qué debe darse el ajuste, pero no lo voy a hacer de manera irresponsable, tengo que ver con los directores en un momento, resolverlo de manera inmediata y que esta resolución se de en esta misma sesión, esos fueron los motivos que llevaron a esta presidencia a tomar una decisión de este tipo, cuando menos la propuesta, si lo vamos a resolver, bueno eso tendrá que ser por parte de todos los que integramos este órgano de dirección. Muchísimas gracias; ¿alguien más desea hacer uso de la voz?. Adelante consejero.

[...]

Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Gracias presidentes, bueno, ahora que ya tenemos por costumbre anunciar el sentido de nuestro voto, yo quiero anunciar también el mío será a favor y será a favor precisamente contraria aquí a lo que se ha argumentado aquí por los compañeros que van a votar en contra, por una, bueno dos razones principalmente; primero voy a votar a favor, porque este presupuesto no está considerando el incremento al salario, creo que hemos mencionado aquí, es conocido de este consejo, pero también de la opinión pública que hemos estado haciendo un esfuerzo para reducir los gastos, hemos llegado en este consejo, eliminar algunos gastos que había antes, seguro de gastos médicos, gastos de representación, gasolina, muchos, ir en este momento a plantear un incremento del 4%, que hemos calculado, consideramos cerca de cuatro millones de pesos que impactaría el presupuesto de este instituto no solo este año, todos los años, ya no podría haber una reducción, por eso voy a votar a favor, porque no estamos en condiciones de incrementar los salarios de nadie, hoy escuchaba una entrevista del Secretario de Finanzas del Estado y mencionó que tiene una reunión nacional con Hacienda y lo que se prevé es que no habrá incrementos presupuestales a nivel federal, ni a nivel estatal, como podríamos salir ante la opinión pública así, si nos vamos a incrementar el 4%, como vamos a llegar con el ejecutivo, como vamos a llegar con el legislativo, a pedirle un incremento al salario cuando otras instituciones del gobierno del estado, no se ha aumentado el salario, entonces, por eso es una de las razones por la que voy a votar a favor, y otra también, porque atiende a la austeridad, porque, felicito al presidente por estas mesas que hemos tenido, se han atendido, muchas observaciones de todo y coincido con muchos que han planteado mis compañeros José Reynoso, la consejera Erika, en fin y sé que todavía podemos hacer un esfuerzo más allá y quiero solicitar que se analice, con todo respeto, se eliminen algunas partidas del presupuesto que creo que no son congruentes con esta política de austeridad que este consejo ha promovido y estas partida

que voy a proponer que se quiten equivalen poco más de diez millones de pesos, rondan quince millones, dependiendo a lo que podamos acordar, para ser responsables y congruentes con esta autoridad que la ciudadanía está reclamando, quiero señalar tres programas operativos de educación cívica que me parece que lamentablemente, no se ajustan a la austeridad a la cual nos debemos sujetar; en primer lugar y ya lo habíamos hablado en las reuniones de trabajo el programa de cultura política democrática solicita dos millones novecientos cincuenta mil pesos, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos promover la cultura política democrática, pero aquí se plantea promover formación de casas de la democracia municipales, cuantas casas municipales, ciento veinticinco casas de promover la cultura de la democracia, a mí me parece que es una acción innecesaria, absurda y carente de un sentido de responsabilidad, de austeridad, recordemos ya han sido muy criticadas las casas de enlace de los diputados, ahora el instituto va a salir a formar casas de la promoción de la democracia, creo que debemos de promover, pero sin poner casas, claro se puede llegar y se planteó, convenios con municipios, pero y luego quién las atiende, contratamos personal o los gobiernos municipales van a poner personas ahí o prestadores de servicio, creo que hay otras maneras y creo que debemos ser más creativos para promover la educación cívica, y también quiero comentar también, que la Dirección de Educación Cívica, solicita de forma inexplicable en su presupuesto, seiscientos treinta y tres mil quinientos pesos, para gasolina, lo que significaría cincuenta y dos mil setecientos noventa y un pesos al mes, para una oficina de ocho personas, estamos hablando como de seis mil quinientos pesos al mes por trabajador en esa dirección, no sé qué está pasando en esa dirección, no sé por qué se están planteando estas cuestiones; también hace una solicitud que me parece se también se tendría que precisar, dado que parece que se duplican algunas funciones y me refiero de nuevo a la Dirección de Educación Cívica, que está solicitando para la difusión de la educación cívica tres millones novecientos mil pesos, esta cantidad es para ejercer principalmente en radio y televisión, ya por eso digo que coincidimos, hay un presupuesto muy importante en la dirección de comunicación, además de que creo que es la que debe atender, debe ejercer y planea la estrategia de comunicación, entonces yo creo que también debemos omitir esta cantidad presupuestada y en todo caso, se analice si hay un programa muy específico que está planteando educación cívica que no se esté atendiendo para su difusión por comunicación social, pues que se atienda, para viáticos en el país, dicha área también solicita casi medio millón de pesos, lo que también nuevamente reitero contraviene con la política de austeridad, en cuanto a este mismo programa, estoy de acuerdo en fomentar la cultura democrática, nada más les pediría que de ese programa que he mencionado de más de dos millones novecientos mil pesos, que si quede lo del concurso de ensayo, de tesis, de cine, me parece ayudarnos y además no requiere un gasto excesivo, bueno y también hay un programa que plantea la educación cívica, la Dirección de Educación Cívica, que es el de investigación electoral y necesita

quinientos diecisiete mil quinientos pesos y bueno, en este programa de investigación observo que también están pidiendo gasolina y viáticos, quiero mencionar que creo que este programa de investigación en temas electorales es muy importante, de hecho desde la comisión de estudios electorales, la cual presido, ahorita tenemos un proyecto que está liderando de manera responsable el Director de Participación Ciudadana el maestro Jorge A la Torre Flores, además académico y tiene experiencia en investigación y este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la cultura política en el estado, dicho proyecto conjunta el talento, capacidad y la trayectoria de otros miembros de este instituto que tienen experiencia como es el caso del doctor Moisés Pérez Vega, también el doctorando José Gómez Valle, el maestro Álvaro Munguía, que también tiene mucha experiencia en estudios de opinión y también podemos echar mano y pedir apoyo al doctor en ciencias sociales más reciente incorporación y contratación de hecho el presidente el doctor Francisco González Vallejo, que también tiene experiencia académica, lo que quiero decir es que si podemos trabajar en investigación en estudios electorales, pero podemos echar mano del personal que está en el instituto que tiene experiencia, pero además, podemos hacer convenios con universidades, no creo que poniendo un proyecto de investigación de más de quinientos mil pesos para considerar gasolina y viáticos, estemos atendiendo la política de austeridad; por último, en este tema de educación cívica hay un programa de formación de futuros ciudadanos que solicita cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos y también pretende duplicar funciones, generando materiales de difusión, cuando estas son atribuciones del área de comunicación social y también de la unidad editorial; por último y también coincido con el consejero Reynoso en el área de la dirección de informática, se están solicitando ocho millones ochocientos mil pesos, creo, nomás quiero que se revise esta cantidad, para contratar equipo de comunicación, me parece una cantidad muy importante y considero que se contrate en dos mil diecisiete, no es necesario, yo lo que le propongo presidente que este equipo se puedan contratar en el dos mil dieciocho, no obstante que, ya se hizo un análisis y se redujo la contratación de este equipo, como bien ya la Secretaría Ejecutiva ya nos hizo saber, entonces ya nada más pediría que se pusiera a consideración en estas dos direcciones tanto de educación cívica como de informática se pudieran hacer estas reducciones y también la transferencia del proyecto de investigación de estudios electorales, que me parece importante, pero pondría a su consideración que pasara a formar parte de la Dirección de Participación Ciudadana, por los argumentos que he dicho, por el trabajo que ya se está realizando, por la experiencia del Director de Participación Ciudadana en investigación académica, es cuanto presidente.

[...]

Consejera Electoral, maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez: Gracias Consejero Presidente, bueno, yo quisiera referirme, en primer lugar al trabajo que se llevó a cabo previo a unos días de esta sesión y quisiera destacar por qué no fue del consenso, considero yo, el incrementarnos el 4%, se hizo un cálculo, resulta que cada uno de los Consejeros Electorales estaríamos ganando cinco mil pesos, poco más al mes, de hacerse este incremento, si nosotros lo trasladamos exponencialmente a todo el año estaríamos ganando poco más de sesenta mil pesos cada uno, no sé cuál fue el monto que se calculó para el Consejero Presidente pero es un poco superior, en ese sentido si lo multiplicamos serían trescientos sesenta mil pesos de salarios únicamente más lo que impacta en otro tipo de prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera, entonces, es importante señalar que, esta cuestión no es, no se es algo irrelevante, es sumamente importante, no estamos aprobando, incluyendo en este presupuesto ese 4% por lo que implica, porque en este caso estaría también favoreciendo a los Consejeros Electorales, consejera y consejeros, y por otro lado el incremento de la carga de trabajo para el personal en su conjunto, si es exponencial, sí es y si requiere el pago de una compensación y esta compensación del 33%, me parece que si es adecuada, es pertinente, no es para todo el año, no queda como un derecho que se perpetua y que se incrementa, termina cuando termina el Proceso Electoral y no estamos hablando de cuando se decreta el fin del proceso, si no en el mes de agosto y este incremento no favorece a las Consejeras y Consejeros Electorales, en ese sentido me parece que esa fue la racionalidad que su impulso y me parece que era necesaria destacarla, creo Consejero Presidente que, si bien el consejero José Reynoso no aceptó la propuesta de hacer un receso, en lo personal yo sí creo que en términos del artículo 38 de nuestro reglamento de sesiones, que se refiere a las mociones, dice, es moción de orden toda proposición que tengan alguno de los objetivos siguientes, solicitar algún receso durante la sesión, eso que se han hecho propuestas importantes y creo, es mi convicción, de que antes de someter a votación, este punto del orden del día, se decreta un receso para hacer las adecuaciones pertinentes y pudiéramos reanudar a la continuación de la sesión con un acuerdo ponderado, que yo invitaría a mis compañeros colegas que se han pronunciado de votar en contra, pudieran votar a favor, es cuanto Consejero Presidente.

[...]

Consejera Electoral, maestra Sayani Mozka Estrada: Muchas gracias presidente, representantes de partidos, Consejeras y consejeros, yo quisiera pedirle Consejero Presidente como lo hizo a su vez en distintas sesiones de trabajo, en particular en una se suele decir que los números no mienten, me parece que se puede poner aquí sobre la mesa una serie de consideraciones, válidas todas, sin embargo para tomar decisiones cuenta mucho tener la referencia del impacto presupuestal ya que estamos hablando de números, yo

solicité en una de las reuniones que se nos expusiera lo equivalente a lo que sería el gasto del 4% al salario de lo que representaría en términos del gasto y lo que representaría el 33% a efectos de poder tener, además, un comparativo precisamente, en este caso con la propuesta que hizo la consejera Erika de que tomáramos en cuenta el criterio del INE, me parecía que podía ser un buen criterio, no, toda vez que hablaba de dos meses, sin embargo se hizo el cálculo y el 33% representa una cantidad superior a la que podrían representar dos meses, ahora bien, se han puesto consideraciones, la consejera Beatriz en relación al tema de los eventuales, igualmente el representante del PAN, igualmente la consejera Erika, el consejero José, me parece que, yo también solicitaría que se hiciera ese receso para analizar a profundidad estos aspectos y que si solicito señor presidente que en el Proyecto de Acuerdo se haga esta referencia a este dato que fue producto además del trabajo de manera conjunta que evidencia en términos numéricos la relevancia en términos presupuestales en lo que representa un 4%, yo no he anunciado el sentido de mi voto, no, pero me queda claro que por uno de los aspectos por los que voy a votar a favor es porque no se incrementará el salario en un 4%, es cierto que tenemos una responsabilidad de ir actualizando la base salarial de todos los trabajadores en este instituto incluso si así lo fuera pertinente, sin embargo de cara a la ciudadanía, a mí me parece que esta consejería, yo en lo personal debo de actuar con muchísima responsabilidad porque cómo le explico a los ciudadanos que mi salario, el salario de los trabajadores de esta institución que vela además por los intereses de los valores democráticos de los ciudadanos, se suben el sueldo un 4% siendo que el salario promedio de los mexicanos está muy por debajo de los salarios que se tienen en este instituto, me parecería un acto de irresponsabilidad frente a la ciudadanía aprobar un incremento del 4% y por lo mismo me parece válido que se revise el incremento del 33% o en este caso, ya sea, a partir de los últimos dos meses o bien, que se valore el que pudiera contratarse a partir del dos mil dieciocho, es cuanto presidente.

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si muchas gracias, nada más para no desvirtuar lo que se ha trabajado, el ejercicio y lo que se propuso por parte de una servidora, es evaluar, hicimos un ejercicio pero como era el impacto nada más en lo que se refería a la plantilla laboral, exceptuando al Consejo General, inclusive a algunos directores, eso es lo que decía, de hecho ahí tengo un correo de la secretario en donde así se puede demostrar y en ningún momento, nada más para no desvirtuar el sentido de mi intervención, no, como pareciera ser, no se si no me entendí bien o no me expliqué bien aquí con alguno de mis compañeras y compañeros.

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: No, con todo respeto lo digo, no se si no me expliqué bien, pero el objetivo de analizar el impacto del 4% era pensando en la plantilla laboral, para suplir este 43%, que se da de manera para mi gusto excesiva, no, de manera general a partir de que inicia el Proceso Electoral, era buscar una forma de encontrar un fundamento legal, además de que no se ha cubierto en tres años para que el dos mil diecisiete aplicara y ahí había también un dato, que era interesante, que eran tres millones seiscientos mil pesos aproximadamente durante todo el año, aplicando 4% que equivale por cierto al salario presidente de sus dos asesores y de sus dos coordinadores, dos asesores con ochenta mil pesos mensuales y otros dos con el sueldo de setenta y dos mil pesos, también ese ejercicio se hizo, se hizo el comparativo, el sueldo de sus cuatro asesores de presidencia, equivale a aplicar el 4% a todo el personal, obviamente y lo dije y lo reitero, así están los correos inclusive, aplicando el 4% y era sólo un ejercicio y era sólo una idea, para buscar la forma de no aplicar este 43% que no encuentro el fundamento, lo digo, lo repito, por eso es que busqué, para mi si es una referencia el Instituto Nacional Electoral, por eso es que busqué y traje a esta mesa estos acuerdos para ver como el INE lo pudo resolver, no, para ponerlo a su consideración, entiendo que no tuvo eco, sin embargo por supuesto no se puso en la mesa el incremento del sueldo de nosotros, jamás, eso es muy importante y sería muy irresponsable decir lo contrario, por lo mismo expongo y aclaro, si no me expliqué bien y ahora lo aclaro en esta oportunidad que agradezco de hacerlo y con mucho respeto, que ese 4% es el impacto que se ejercería de la misma manera que se ejerce por ejemplo el 43% adicional, ahora 33 y no sé si se llegue a otro dato, no sé, sería muy bueno incluso, pero yo estaré en contra de ese porcentaje de esa forma, entonces, ese porcentaje se aplica, excluyendo al Consejo General, si, de la misma forma se aplicaría la propuesta que hice el 4%, que me parece que tiene una base legal, eso era todo he, es nada más porque es importante y es parte de nuestra responsabilidad comunicar con certeza, gracias.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, quiero poner en esta mesa nada más que en este dialogo que sostuvimos la consejera y yo, hubo alusiones y hubo una serie de elementos que en algún momento se alegaron prohibidos, no todas las alusiones y no todos los diálogos que se desarrollan en estas mesas están prohibidos, solo aquellas que nos llevan a un debate que nada tiene que ver con el punto de la orden del día y lo específico pues, porque debemos de privilegiar por supuesto el dialogo, la expresión, en esos términos es que quiero dejarlo muy patente, no obstante la consejera se refiere directamente a un servidor, este dialogo me parece que es enriquecedor para los debates, hablo ahí, ya abundé sobre el tema, por lo tanto me reservaría en este momento. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?. Bueno en esos términos y atendiendo la atribución que me corresponde y la solicitud que formulan las Consejeras Beatriz Rangel y Sayani Mozka y con el ánimo de

entrevistarme con los directores para plantearles lo que se ha formulado en esta mesa, revisar el impacto que esto traería y la posibilidad de un ajuste aun mayor a lo que hemos venido tratando en términos de austeridad, es que propongo, declaro más bien en este momento un receso de treinta minutos, para que nos estemos reuniendo nuevamente a las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, en atención a que hay una consideración de que el tiempo sería insuficiente para abordar lo que tenga que abordar, me parece que, además me siento convencido de esto, es que abriremos este periodo a dos horas, bueno nos estaríamos viendo por aquí a las veinte horas con diez minutos. Muchísimas gracias.

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Gracias, nada más para rectificar, entonces del voto en el extranjero eran diez millones treinta mil quinientos, distribuidos entre comunicación social, organización e informática, ¿ahorita cuanto quedaría del voto en el extranjero? y comunicación social eran quince millones doscientos sesenta mil, ¿en cuánto quedaría?.

Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: Si, las cifras se están calculando en el área de administración y lo que hacía referencia al programa de difusión que era de tres millones y que quedará fuera, eso es de Organización Electoral, enfocado al voto en el extranjero.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, a ver, para ver nada más los totales y conocer como quedó, por ejemplo aquí en organización tenía diez millones doscientos sesenta y nueve mil, ¿ahí es en donde se le disminuye tres millones? a ver...

Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: Se disminuye en la parte de organización electoral en el voto en el extranjero, los números los damos a conocer en cuanto administración tenga ya las cifras, se están impactando con todas estas modificaciones.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: A ok, entonces no tenemos los datos, a perdón, entendí que los teníamos, por ejemplo en informática, si no para tomar nota, a ver como quedamos, en informática había un total de dieciséis millones ochocientos sesenta y cinco, entiendo que se redujo, también; en educación cívica estaba en ocho millones ciento diecisiete, este también es impactado, en editorial son dos millones trescientos setenta y uno, para ver los totales y cuáles son los proyectos que se impactan de cada uno, en participación ciudadana son treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y tres, no, doce millones trescientos cuarenta y siete es el dato y ¿lo otro es para el proyecto de participación social?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Como aclaración de la participación social, se presupuestó por separado y suman cuarenta y tres millones en general, esto implica por supuesto la construcción de esta estructura desconcentrada que atiende en cada región del estado, municipio, Distrito, un mecanismo, exactamente y se presupuesta por separado, es importante recordar lo que señaló la consejera Sayani, es un dinero que esté disponible para el momento en que se requiera, nada más aspirarlo a tenerlo, recibirlo.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ese es el que se aprobó en el punto anterior, entonces, lo que pasa es que en el resumen, venían estos treinta y dos millones, lo tengo aquí como una duda, pero estaban también doce millones trescientos cuarenta y siete, ¿esa es nada más la que corresponde a participación ciudadana?

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Son cuarenta y cinco millones es un conjunto, tiene que ver con la estructura, por un lado y el costo que pudiera llevarnos el despliegue, logística.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Pero si teníamos identificado cuanto era lo que correspondía solamente a participación, ¿verdad?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, les voy a solicitar que vayamos solicitando el uso.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, nada más yo para concluir con la dudas para que ya de manera general.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, participación fue aprobado por cuarenta y cinco millones, ok, dentro de este rubro, de este monto, está incluido el crecimiento de la estructura, lo que requerimos para eso, en términos personales y por supuesto la logística, pero eso formó parte de un acuerdo que ya fue aprobado.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ya y este otro proyecto que se agrega de educación a participación, ya incrementaría al área de participación, también en el presupuesto impacta al presupuesto de participación.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, quiero insistir la otra cantidad que se aprobó no será parte de la ministración que vaya administrar este instituto, es una previsión que se tiene por ahí en cumplimiento

de un transitorio que nos obligó a hacerlo y que por supuesto responde a la necesidad de tener un recurso que facilite el mecanismo ante la posibilidad de que la ciudadanía solicite su participación.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si, eso lo entiendo, pero en el proyecto de participación a final de cuentas, mi pregunta es, cuanto quedaría, nomás sin este otro ejercicio, en caso de darse, cuánto quedaría; y en administración ¿quedaron veintiocho millones ciento noventa mil, finalmente ahí sí?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Así es, y recuerdo y hago del recuerdo de todos aquí, que obedeció esa cantidad de recursos a que en términos de la ley de servidores tenemos que absorber como parte del Impuesto Sobre la Renta, para los aguinaldos.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ok, y en consejeros ¿disminuye la cantidad de dos millones doscientos cincuenta y un mil doscientos?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si disminuye en virtud de que los viajes que se tenían previstos, que eran alrededor de veinticuatro, se reducen solamente a seis.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Perfecto, y ¿presidencia queda igual, con dos millones cincuenta y cinco?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: La presidencia no sufre impacto, salvo en la parte de la contratación de la partida mil, que se refleja en una partida diferente.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Ok, pues entonces ahorita mi duda sería para lo del voto en el extranjero, ¿si queda en diez millones treinta mil y comunicación social si quedan los quince millones doscientos sesenta? Y tenía la duda también, había un rubro, un proyecto en informática que era de mantenimiento urna electrónica, tres millones de pesos y yo solicitaba si teníamos algún fundamento o una cotización que todavía no me queda como claro.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Si, ese presupuesto se mantiene, me parece que es una urna que le ha dado servicio a la ciudadanía en Jalisco y que hay que mantener vigente, en esos términos se está haciendo un análisis del número de urnas que hasta hoy se han evaluado, se hizo un diagnóstico, se promedió por el número de urnas que tenemos y nos llevaron a la cantidad que se ve reflejada en el presupuesto.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Tres millones, pero ¿hay alguna o podría tener acceso a la documentación que respalda este dato?.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Por supuesto consejera.

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: A muchas gracias, es cuanto.

Consejero Presidente, maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Gracias consejera. En segunda ronda.

Consejero Electoral, maestro Mario Alberto Ramos González: Una precisión también del comentario anterior, la consejera se aventó como diez rondas, en ese caso, le pediría.

[...]

Lo subrayado es de esa resolución.

De lo anterior, a juicio de esta autoridad, las intervenciones de los Consejeros Electorales denunciados se hicieron dentro del contexto de la discusión de la propuesta de acuerdo sometida a consideración del Pleno del *OPLE*, sin que de ellas se advierta una falta de respeto o intolerancia a la postura asumida por la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

En efecto, de la lectura integral de la versión estenográfica que nos ocupa, se arriba a la conclusión de que los integrantes de ese órgano colegiado fijaron su postura ante la propuesta de acuerdo para aprobar el Programa Anual de Actividades, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, a fin de motivar el sentido de su voto, sin que esas expresiones se puedan considerar como agresiones verbales en contra de la quejosa, dado que no se le insultó, calumnió, menos aún se le limitó en el ejercicio de sus atribuciones.

Los Consejeros Electorales denunciados emitieron sus razonamientos en ejercicio de sus atribuciones y de su derecho fundamental de libertad de expresión, como también lo hizo la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, sin que se le limitara

en sus intervenciones a ninguno de los consejeros que hicieron uso de la palabra a fin de fijar su postura respecto de las propuesta que se sometía a su consideración, e incluso, en la parte final de la discusión, el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross respondió a todos los cuestionamientos de la denunciante, como se puede advertir de la transcripción en su parte atinente.

Ahora bien, el mero hecho de disentir del proyecto, de formular una propuesta distinta, de hacer manifestaciones en pro o en contra de la propuesta original o de la nueva, está dentro del contexto de análisis y discusión, a fin de emitir un pronunciamiento para aprobar o rechazar, en primer término, el Proyecto de Acuerdo sometido a consideración del pleno del órgano colegiado, en su caso, de someter a votación la propuesta o propuestas realizadas, sin que ello, implique agresión verbal en contra de la quejosa.

Esto es así, dado que es inconcuso que ante la pluralidad de opiniones en un órgano colegiado, se emitan argumentos para coincidir o disentir de las propuestas sometidas a consideración de sus integrantes, a fin de sustentar de manera razonada su voto, sin que el hecho de no compartir la postura o criterio de la denunciante implique que se le está agrediendo de manera verbal, sino que cada consejero electoral expone su particular punto de vista, fundando y motivando su determinación, lo cual no significa que ante la no coincidencia en criterios, exista falta de respeto y menos aún tolerancia hacia la propuesta hecha por cualquiera de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local y, en esta particular, de la quejosa.

En este sentido, es inconcuso para esta autoridad, que no se agredió verbalmente a la denunciante y, menos aún, que se pretendiera anular su participación, sino por el contrario, se garantizó su derecho de intervenir en la discusión del asunto sometido a su conocimiento y resolución; por tanto, a consideración de esta autoridad no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 35, del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral local.

- SESIÓN PÚBLICA DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, CONCLUIDA EL INMEDIATO DÍA VEINTICINCO.

Finalmente, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral aduce que en la sesión pública de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la cual concluyó el inmediato día veinticinco, los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, hicieron alusiones hacia su persona, en el sentido de que, al promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales, cuya sentencia motivó la instauración del procedimiento al rubro identificado, impedía el dialogo interno.

Cabe destacar que la argumentación de la denunciante es genérica, dado que no precisa en qué momento de la sesión pública se emitieron esas manifestaciones, sin embargo, de la lectura integral de la versión estenográfica de la sesión pública que nos ocupa, se advierte lo siguiente:

Al tratar el punto cinco del orden del día, correspondiente al “*PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, DE PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS Y DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, ASÍ COMO, EN LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO*”, se advierte lo siguiente:

[...]

Consejera Electoral, licenciada Erika Cecilia Ruvalcaba Corral: Si muchas gracias, bueno de igual manera agradezco la moción que hace mi compañero el consejero José Reynoso, la consejera Virginia y de igual forma como ya lo comenté en la sesión inicial de la que estamos dando continuidad el día de hoy, yo preferiría que este asunto lo dejáramos para cuando el tribunal resuelva el

procedimiento que está ahí pendiente, yo creo que habría que respetar esa, pues ese trámite que tuve que iniciar en esa instancia y a mí me parece que si es importante resolver nosotros la forma de trabajo, pero incluso con el receso del día de ayer me parece que no sería suficiente, me parece que esa propuesta que se hizo insisto yo estaba de vacaciones tres días, regresé y ya estaba la notificación para la sesión, me presento con mucho gusto a la sesión, pero también veo que esa propuesta se hace sin consenso, o sea, se viene a una sesión sin consenso, la propuesta de la integración de comisiones y de la modificación al reglamento tampoco tenía un consenso, entonces no me parece que sea pertinente en este momento continuar con estos puntos del orden del día y si solicitaría de nueva cuenta de la manera más atenta respetar el procedimiento que se encuentra pendiente en la Sala Superior, es cuanto, gracias.

[...]

Consejera Electoral, maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez: Muy buenos días, muchas gracias Consejero Presidente, efectivamente el día veintitrés tuvimos una sesión, determinamos hacer un receso para la reflexión, estuvimos presentes los partidos políticos, todos los que estamos integrando este órgano colegiado y de una reflexión mesurada, objetiva y muy responsable es de la que voy ahora a expresar mi punto de vista, me parece que existen distintas vías posibles de interpretar la propuesta del acuerdo presentada en esta sesión el día veintitrés, como ya lo señalé y que se mantiene hasta el día de hoy veinticinco de agosto, nos encontramos ante una situación que se ha caracterizado por un desequilibrio entorno a la integración de comisiones en primer lugar, en segundo lugar, ante una fractura motivada en parte por esta situación y por tanto para alcanzar acuerdos y tercero un recurso presentado ante la Sala Superior del tribunal que argumenta esta situación entre otras que ya se han detallado, tanto ese desequilibrio como las dificultades para lograr acuerdos son situaciones que pueden minar la fortaleza de esta institución, frente a ello tenemos dos posibles cursos de acción, creo que ya han sido señalados, esperar a que el tribunal decida y se mantenga un desequilibrio que puede atenderse o tomar medidas inmediatas que restituyan un cierto orden y tengan impactos presentes y futuros, es claro que esperar a que el tribunal decida pudiendo actuar con lo que ya se observa como solucionable, implica continuar inexplicablemente afectando el dialogo interno y la presencia de este instituto, en el recurso presentado se argumentan otras quejas de las cuales la instancia que lo atiende dará cuenta en caso de encontrarlas o no sustentadas, porque insisto, la integración de las comisiones no es el único agravio que se esgrime, se esgrimen otros hechos, otros elementos que efectivamente debe de resolver el tribunal y solamente este órgano colegiado, evidentemente esta resolución deja parcialmente sin materia el recurso presentado, la propuesta, sin embargo ello supone un reconocimiento de ese argumento de queja y un

puede temprano de dialogo, cuando dejar sin materia representa atender el reclamo legitimo con oportunidad, no elegir esa vía puede también ser interpretado como desatender el compromiso contraído con la institución y lo que ésta garantiza, yo interpreto esta propuesta a la que hemos concurrido a revisar el día de hoy como un esfuerzo por poner en esta instancia de discusión y pluralidad, la posibilidad de ir reconstruyendo la institucionalidad a través de la puesta en común de nuestras visiones pluralmente diferentes, desde esa interpretación es que yo desde este momento me permito o me pronuncio por apoyar esta propuesta, que considero que estamos avanzando en una solución, que estamos reconociendo que hay una inequidad, insisto y recojo una expresión que aquí se ha señalado, no nos corresponde resolver la cuestión de fondo, esa no la vamos a resolver nosotros, para eso está una instancia jurisdiccional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero creo que sí, yo invitaría a reflexionar a mis compañeros consejeros a que tomemos esta decisión precisamente para partir desde ahí a fundar una nueva gobernabilidad, es cuanto Consejero Presidente.

(Lo subrayado es de esta Resolución)

A consideración de esta autoridad administrativa electoral nacional, las expresiones hechas por la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, en forma alguna constituyen agresiones verbales en contra de la denunciante, por el contrario, la aludida funcionaria electoral razonó que existía un desequilibrio en la integración de las comisiones de ese órgano colegiado, sin que fuera necesario esperar la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aprobar el acuerdo que fue sometido a su consideración.

En efecto, la consejera electoral denunciada reconoció que existían dificultades al interior del Instituto Electoral local, sobre todo para que los integrantes del Consejo General llegaran a diversos acuerdos, no obstante lo anterior, se debían implementar las acciones necesarias para fortalecer a la institución, en los cuales se propusieran las soluciones sin necesidad de esperar a que la *Sala Superior* resolviera sobre un medio de impugnación.

En este sentido, con las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez en modo alguno se hace alusión a la persona de la denunciante, su argumentación va encaminada a la construcción de acuerdos, de

dar solución a una problemática como es la integración de las comisiones de ese órgano colegiado.

La Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez se pronunció a favor de remediar una situación que, si bien era del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no era necesario esperar a que éste resolviera, sino que era posible implementar acciones concretas para garantizar la participación de los integrantes del aludido órgano colegiado.

En este contexto, a consideración de esta autoridad, las manifestaciones hechas por la consejera electoral denunciada están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, así como de su derecho de ejercer el cargo, en el sentido de emitir un pronunciamiento ante la propuesta de acuerdo en análisis, a fin de votar a favor o en contra, sin que ello implique una falta de respeto hacia la quejosa.

Lo anterior es así, dado que la propuesta sometida a la consideración del pleno del Consejo General del Instituto Electoral local correspondió a la modificación en la integración de diversas comisiones permanentes, entre ellas, la de Organización Electoral, la de Prerrogativas a Partidos Políticos, y la de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la comisión temporal de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.

De lo anterior, no se advierte que las manifestaciones hechas por la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez constituyan agresiones verbales en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, menos aún que, con el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por la quejosa, se haya impedido el diálogo entre los integrantes de ese órgano colegiado, sino que las manifestaciones hechas por la funcionaria electoral denunciada están dentro del contexto del debate del asunto sometido a consideración.

Sin que la disidencia entre los razonamientos de la quejosa con los de otros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local, impliquen agresiones verbales, falta de respeto o falta de tolerancia, sino que, como se ha expuesto en

párrafos precedentes, se debe privilegiar la discusión amplia, que si bien puede ser dura, fuerte, vehemente o incluso que puede provocar molestia, lo cierto es que, cada integrante de ese órgano colegiado, debe fundar y motivar el sentido de su voto, respetando en todo momento los límites a la libertad de expresión, así como del ejercicio de su cargo.

Por tanto, esta autoridad arriba a la conclusión de que, los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, no agredieron verbalmente a la denunciante y, menos aún, que se le faltara al respeto.

Ahora bien, de lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que, en el particular, **no están acreditadas** las agresiones verbales atribuidas a los Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Beatriz Rangel Juárez y Mario Alberto Ramos González, así como el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross del *OPLE*.

5.3 ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE ACOSO LABORAL EN CONTRA DE LA QUEJOSA.

Previo al pronunciamiento que corresponde a las conductas denunciadas, así como la responsabilidad respecto de cada uno de los sujetos a las que le son atribuidas, conviene recordar que, en cuanto a la violencia o acoso laboral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe acoso laboral (*mobbing*) cuando se presentan conductas, en el entorno laboral, que tiene por objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir.

De la misma forma, la doctrina ha identificado al *mobbing* o acoso laboral, como la presión laboral tendenciosa o tendente a la autolimitación de un trabajador mediante su denigración.

De lo señalado, se puede apreciar que el acoso o violencia, en el ámbito laboral, está constituido por una serie de acciones que tiene por objeto menoscabar la

honra, la dignidad de las personas, su estabilidad emocional, e incluso, su integridad física con el objeto de aislar a una persona en concreto, o bien, generar una actitud propicia o complaciente para los deseos o intereses del agente hostigador o agresor.

En el caso, es importante traer a colación, de manera ilustrativa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido disposiciones normativas que tienen por objeto combatir, de manera destacada, las acciones de violencia y acoso laboral.

En efecto, el Comité de Gobierno y Administración del Máximo Tribunal del país, emitió el Acuerdo III/2012 por medio del cual se dictaron las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicho documento, se reconoce que el acoso laboral deriva de una serie de actos o comportamientos, sea en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de trabajo o con motivo de este, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCLII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 138, que dice:

ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA.

El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la

organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agrava por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.

De lo trasunto, se advierte que para que exista acoso laboral dentro de una relación laboral, se deben actualizar los siguientes elementos:

- El objetivo sea intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a **excluirlo** de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar y destruir.
- La agresividad o el hostigamiento laboral ocurra, bien entre **compañeros** del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores jerárquicos.
- Las conductas se presenten **sistemáticamente**, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituir acoso.

-La dinámica en la conducta hostil **se desarrolle según los hechos relevantes** descritos en la demanda.

Dicho lo anterior, esta autoridad procederá a analizar el conjunto de hechos que quedaron probados ante la *Sala Superior*, así como aquellos que fueron probados como consecuencia de la investigación que se realizó. Lo anterior, a efecto de estar en aptitud de determinar, si cada uno de esos hechos, que fueron analizados en lo individual, y luego de manera contextual, en relación con las circunstancias de tiempo y de duración de las conductas, constituyen o no acoso laboral en contra de la quejosa.

En ese sentido, se procederá a verificar la participación de los sujetos denunciados, por cuanto hace a cada una de las conductas materia de la queja y que fueron debidamente acreditadas ***-tales como la exclusión de la demandante en la integración de comisiones del órgano electoral local, la negativa injustificada de entregarle información necesaria para el desempeño de sus funciones como consejera, y las presuntas agresiones verbales de las que dice fue objeto,*** así como las circunstancias relativas al tiempo en el que estas irregularidades se mantuvieron vigentes, para posteriormente analizar si esos hechos y circunstancias, y el resto de material probatorio que obra en autos, puede llevar a encontrar elementos que acrediten actos sistemáticos, continuados y relacionados entre sí, que pudieran traducirse en acoso laboral y en el impedimento de su desempeño pleno como funcionaria electoral.

Lo anterior, en el entendido que, de manera previa, deberán excluirse los hechos que no fueron probados ante esta autoridad y, consecuentemente, la responsabilidad de los sujetos a quienes se les atribuye.

Lo anterior, sin que el orden de su estudio genere alguna afectación a la quejosa, en tanto que lo realmente importante es abordar, de manera exhaustiva, cada uno los motivos de inconformidad planteados por esta última en su escrito de denuncia.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sirve de sustento a lo anterior, la razón esencial de la tesis de jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

5.3.1. CONDUCTAS DENUNCIADAS EN TORNO A SUPUESTAS AGRESIONES VERBALES DIRIGIDAS EN CONTRA DE LA QUEJOSA, COMO ELEMENTO DE ACOSO LABORAL.

- ***Agresiones verbales, atribuidas a las y los Consejeros Electorales del OPLE, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez.***

Como quedó de manifiesto en apartados precedentes, no quedaron acreditadas las supuestas **agresiones verbales atribuidas** al Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales del **OPLE, Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez.**

Lo anterior, debido a que, como se razonó previamente, de las manifestaciones realizadas por las y los consejeros denunciados durante el desarrollo de diversas sesiones del Consejo General del **OPLE**, celebradas los días veintidós y veinticinco de enero, veintisiete de abril, trece de mayo, diez, veintitrés y veinticinco de agosto, todas de dos mil dieciséis, no se demuestra, ni de manera individual ni conjunta, que éstas hayan estado dirigidas a agredir, de manera clara e inequívoca, a la ahora quejosa, ni mucho menos que constituyeran un acto hostil, como elemento constitutivo de acoso laboral, tendente a desvirtuar o disminuir su actividad profesional como Consejera Electoral.

Ello, se insiste, en virtud de que dichas intervenciones se manifestaron dentro del propio debate de los temas a tratar en las sesiones públicas, para lo cual, se expresó, en cada caso, las razones objetivas que respaldaban la postura de las y los consejeros denunciados, en relación a los tópicos sometidos a su consideración, circunstancia que se encuentra amparada por el derecho de libertad de expresión que les asiste como integrantes del órgano de gobierno de la autoridad electoral local en el estado de Jalisco.

Por dichas razones, y toda vez que las **únicas conductas** atribuidas a las y los consejeros denunciados **Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel Juárez**, se circunscriben a las supuestas agresiones verbales dirigidas en contra de la quejosa durante el desarrollo de diversas sesiones públicas del OPLE, mismas que han quedado previamente desestimadas, es que **se concluye en la inexistencia de cualquier tipo de responsabilidad atribuida a las y los consejeros mencionados en el procedimiento sancionador en que se actúa**, por hechos que pudieran constituir acoso laboral o *mobbing* en contra de la quejosa.

- ***Falta de intervención del Consejero Presidente respecto las agresiones verbales dirigidas en contra de la quejosa y negativa de tratar temas propuestos por la quejosa en una de las sesiones.***

Como consecuencia de las razones que sustentan la determinación asumida en el apartado que antecede, tampoco resulta factible atribuir responsabilidad, respecto a este hecho, en lo individual, al Consejero Presidente, **Guillermo Amado Alcaraz Cross**, toda vez que la conducta irregular que le es atribuida, exclusivamente por cuanto hace al tema que se analiza, se hace depender de la existencia de las agresiones verbales dirigidas en contra de la quejosa durante el desarrollo de diversas sesiones públicas del OPLE, las cuales, a decir de esta última, no debieron ser permitidas por el primero de los mencionados.

Sin embargo, al no quedar acreditada esa supuesta conducta irregular atribuida a la y los consejeros previamente identificados, tampoco resulte factible imputar responsabilidad al Consejero Presidente denunciado, pues, como se mencionó en párrafos precedentes, las intervenciones identificadas por la quejosa en su escrito de denuncia, proferidas por los Consejeros Electorales antes señalados, se encontraban amparadas por el principio de libertad de expresión.

De ahí que el Consejero Presidente no estuviera obligado a garantizar el orden, o bien, que debiera forzosamente que reprimir algún tipo de comentario o discusión que en el desarrollo de las sesiones se emitieron, con alguna medida establecida para tal efecto, toda vez que dichos comentarios o temáticas que salieron a la luz durante el desahogo de los puntos del orden del día que se discutían se

encontraban debidamente justificados y dentro del marco de respeto y legalidad debidos.

Lo mismo acontece respecto a la presunta negativa por parte del Consejero Presidente de tratar un tema propuesto por ella, en tanto que sí lo ha hecho respecto de peticiones hechas por los otros Consejeros, pues tal y como quedó evidenciado en párrafos precedentes, la única solicitud que la quejosa sometió a consideración del consejero denunciado, fue recibida y atendida por este último, en los términos ya mencionados.

De ahí que, por cuanto hace a estos hechos que, en lo individual se analizan, se analiza, deba declararse **INFUNDADO** el procedimiento.

5.3.2. NEGATIVA DE ENTREGAR INFORMACIÓN A LA QUEJOSA COMO ELEMENTO DE ACOSO LABORAL.

De conformidad con lo resuelto por la *Sala Superior*, así como del análisis de las constancias que obran en el expediente al rubro indicado, esta autoridad electoral concluye que si bien, se demostró la omisión de entrega de información por parte del Presidente, del Secretario Ejecutivo y de los Directores de diversas áreas del *OPLE* de Jalisco, en perjuicio de la quejosa, lo cual, a decir de la Sala Superior en su resolución, derivó en una obstaculización en el desempeño del encargo de la denunciante *-en particular, como Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral-* también lo es que dicha falta, tal y como se verá, no actualiza, por sí misma ni en automático, la figura jurídica reprochable de acoso laboral en contra de la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, atento a lo siguiente:

En principio, debe tomarse en consideración que la *Sala Superior*, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-524/2017, tuvo por acreditado, que tanto el Presidente y el Secretario Ejecutivo, así como los entonces titulares de las distintas áreas del *OPLE*, omitieron dar contestación formal a las peticiones formuladas por parte de la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, quien, en virtud del cargo que ostenta, goza de atribuciones legales y reglamentarias para realizar los requerimientos de

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

información a las distintas áreas que conforman el organismo público electoral local, en aquella entidad.

La información solicitada a cada una de las distintas áreas, así como la fecha en que se llevó a cabo y el tema de lo solicitado, se resumen en el siguiente cuadro esquemático:

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora	Directora de la Unidad de Secretaría Técnica	SPE/007/2015	26/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
		SPE/001/2014	27/12/2014	Informe sobre movimientos de personal del OPLE del periodo enero-diciembre 2014.
				Informe sobre relaciones laborales del periodo enero-diciembre 2014
		SPE/003/2015	24/01/2015	Informe sobre capacitadores asistentes electorales, coordinadores centrales, distritales y operativos de capacitación y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
Juan Carlos Franco Jiménez	Ex Director de Administración y Finanzas	SPE/006/2015	26/03/2015	Informe sobre movimientos de personal del OPLE del 1°enero de 2014 al 7 de marzo diciembre 2015.
				Informe sobre relaciones laborales del 1°enero de 2014 al 7 de marzo diciembre 2015.
		SPE/007/2015	26/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Moisés Pérez Vega	Ex Director de Educación Cívica/actualmente Consejero	SPE/005/2015	25/03/2015	Informe sobre asistentes electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012
				Informe sobre coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación electoral 2011-2012
		SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
				Informe sobre coordinadores centrales, distritales,

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
		SPE/008/2015	25/03/2015	operativos y subcoordinadores de capacitación del proceso local ordinario 2014-2015
José de Jesús Gómez Valle	Ex Director de Comunicación Social;	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Ramiro Feliciano Garzón Contreras	Ex Director de Informática/Encargado de la Jefatura de la Unidad de Informática.	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
		SPE/010/2015	25/03/2015	Informe sobre coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del proceso local ordinario 2014-2015
Carlos Alberto Silva Moreno	Ex Director de la Unidad Editorial.	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
Héctor Javier Díaz Sánchez	Ex Director de la Unidad Técnica de Fiscalización/Director Jurídico.	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Álvaro Fernando Munguía Martínez	Ex Director de Organización, Geografía y Estadística/Director de Organización Electoral.	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
		SPE/009/2015	25/03/2015	Informe sobre coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del proceso local ordinario 2014-2015
Jorge Alberto Alatorre Flores	Ex Director de Participación Ciudadana.	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Ana Violeta Iglesias Escudero	Ex Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos/Jefa de la Unidad de			Informe sobre la estructura, procesos y

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
	Prerrogativas a Partidos Políticos.	SPE/007/2015	25/03/2015	procedimientos de su área
Tracael Jiménez Briseño	Ex Director Jurídico/ Jefe de la Unidad de Fiscalización	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Olga Patricia Vega Guzmán	Ex Directora de la Unidad de Transparencia	SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
Luis Gabriel Mota	Ex Director General/Ex Director de Capacitación	SPE/002/2015	24/01/2015	Informe sobre capacitadores asistentes electorales, coordinadores centrales, distritales y operativos de capacitación y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012
		SPE/007/2015	25/03/2015	Informe sobre la estructura, procesos y procedimientos de su área
				Informe sobre movimientos de personal del Instituto Electoral local del 1 de

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
Guillermo Almaraz Cross y Luis Rafael Montes de Oca Valadez	Presidente y Ex Secretario Ejecutivo	SPE/011/2015	26/03/2015	enero de 2014 al 25 de marzo de 2015.
				Informe sobre relaciones laborales en el mismo periodo.
				Organigramas de todas las áreas.
				Relación de nombres y adscripción de Capacitadores Asistentes Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
				Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.
				Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de informática del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

NOMBRE	PUESTO	OFICIO	FECHA	INFORMACIÓN SOLICITADA
				Relación de nombres y adscripción de coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

De las solicitudes antes referidas, se desprende que la información solicitada versó sobre **tópicos similares, mediante sendos escritos dirigidos a distintas áreas** que conforman el *OPLE*; incluso, en algunos casos, **la misma solicitud fue dirigida en idénticos términos, y mediante el mismo oficio, a las distintas áreas**, así como al Presidente y al entonces Ex Secretario Ejecutivo del propio órgano electoral local.

Es decir, el oficio **SPE/001/2014** fue dirigido sólo a un área específica, a saber, al Director de Administración y Finanzas.

Los oficios **SPE/002/2015, SPE/003/2015 y SPE/005/2015**, constituyen solicitudes de información que se formularon, en lo individual al Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Director de Administración y Finanzas y al Director de Educación Cívica, respectivamente, pero cuyo contenido, respecto de lo requerido, es idéntico para los tres casos.

El diverso **SPE/006/2015**, se dirigió únicamente al Director de Administración y Finanzas , sobre información específica y no compartida con otras más.

En lo relativo al oficio **SPE/007/2015**, fue remitido a 13 áreas distintas, en la misma fecha y, obviamente, se solicitó el mismo contenido.

Por lo que hace a los diversos **SPE/008/2015, SPE/009/2015 y SPE/010/2015**, se dirigió cada uno a un área específica, a saber, al Director de Educación Cívica,

Director de Organización Electoral y Dirección de Informática, respectivamente; no obstante la petición de información en los tres casos fue similar.

Finalmente, cabe mencionar que en lo que respecta al oficio **SPE/011/2015**, este fue dirigido al Presidente del OPLE con copia de atención para el Secretario Ejecutivo del mismo órgano electoral, el cual constituye una recopilación de todas las peticiones que se formularon de manera individual a las distintas áreas que conforman el Instituto Electoral local, a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores.

Por otra parte, cabe mencionar que del contenido de las actas de las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebradas los días treinta y uno de octubre y treinta y uno de diciembre, ambas de dos mil catorce, veintitrés de enero, veintisiete de marzo y cinco de octubre de dos mil quince, en las cuales la hoy denunciante fungió como Presidenta, y en donde se desprende las respuestas que de manera directa contestaron los titulares de las áreas a quienes previamente se les solicitó la información a través de los correspondientes oficios, se observa que la justificación que en la mayoría de los casos se dio para no atender las peticiones formuladas por Erika Ruvalcaba, fue que la información **estaba siendo procesada** y que, en su momento, **sería remitida por conducto del Consejero Presidente**, en coadyuvancia con el Secretario Ejecutivo, y no así por conducto de éstos y, en otros, se argumentó que la información **no se encontraba en poder de los Directores denunciados** -por no ser información que se encontrara en el ámbito de sus funciones.

Por otra parte, cobra relevancia el hecho de que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al rendir el informe circunstanciado con motivo de la interposición del juicio ciudadano SUP-JDC-1679/2016, mediante el oficio 584/2016, de quince de julio de dos mil dieciséis, refirió lo siguiente:

*“En ningún momento se ha negado información alguna a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, para el debido desempeño de su encargo. Resulta relevante precisar que la información solicitada a los directores del Instituto, **no corresponde al ámbito de competencia de las direcciones, ya que corresponde al ámbito administrativo y operativo del instituto, lo cual,***

es atribución exclusiva de la Presidencia y, en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva, tal como en su momento se hizo del conocimiento de la Consejera Electoral mediante memorándum 14/15 Presidencia, de conformidad con el artículo 143, párrafo 2 fracción XXII del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

De las anteriores constancias, se puede advertir que si bien, como lo señaló la Sala Superior en su resolución, existen elementos para desprender una omisión indebida por parte de los servidores hoy denunciados de proporcionar información a la Consejera Ruvalcaba Corral, esto no quiere decir que se actualice una infracción o ilícito administrativo diverso, como lo es el *mobbing* o acoso laboral, habida cuenta que no se aprecian conductas sistemáticas, reiteradas o uniformes, dirigidas a hostigar, demeritar, opacar, amedrentar o menoscabar física o emocionalmente a quien hoy se duele.

Esto es así, porque como se precisó párrafos arriba, de las conductas omisivas que se demostraron y que se vinculan con la causa que en el presente procedimiento se analiza, no se advierten indicios ni pruebas directas o indirectas, que permitan suponer conductas premeditadas, orquestadas o convenidas de parte de los exdirectores, entonces Secretario Ejecutivo y Presidente, que lleven a la conclusión de que, la razón para no proporcionar la información, fuese con la intención de lesionar la esfera de Derechos de quien hoy denuncia, sino, a lo más, de una ausencia de probidad y profesionalismo al no atender los requerimientos de un superior -para el caso de los servidores públicos que fungieron como titulares de las distintas áreas del OPLE- como del Presidente, -al no dar un trato igualitario a sus pares dentro de un órgano de decisión colegiada-.

Se afirma lo anterior, toda vez que como se ha dicho, la razón que prevaleció en la mayoría de los casos en que los funcionarios del OPLE hoy denunciados, justificaron la no entrega, fue porque, a su decir, la información se encontraba en etapa de procesamiento y, que, en su oportunidad, sería despachada por conducto de la presidencia.

Así las cosas, como se ha dicho, si bien es cierto que está demostrada la omisión en la entrega de información a una Consejera Electoral, solicitada en el ámbito de

sus atribuciones, también lo es que la justificación para no hacerlo, se centró en cumplir una instrucción proveniente de un superior como lo es el propio Presidente del órgano en el cual laboraban, lo cual, si bien, no es correcto, toda vez que debieron dar respuesta oportuna y eficaz a la petición que en su momento les hizo la Consejera hoy denunciante, ello, por sí mismo no colma los elementos que se deben actualizar para determinar la conducta de acosos laboral, en los términos dispuestos para ello por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, conforme a lo resuelto por la propia Sala Superior, dicho memorándum *“únicamente refiere que la organización administrativa del instituto le corresponde a determinados órganos y se le solicita que cualquier asunto relacionado con ella se trate con los mismos”* sin que ello se desprenda de forma objetiva/o contundente que el Consejero Presidente haya obstaculizado o prohibido la entrega de la información a la denunciante por parte de las áreas a las que requirió la misma.

En efecto, tal y como ha quedado debidamente establecido en el apartado de *Marco Normativo* de la presente Resolución, la máxima autoridad jurisdiccional en el País, ha determinado, con base en las características propias de la infracción de acoso laboral o *mobbing*, los elementos que deben configurarse para poder estar en aptitud de declarar la comisión de una falta de esta naturaleza, a saber:

- Que el objetivo sea intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a **excluirlo** de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar y destruir.
- La agresividad o el hostigamiento laboral ocurra, bien entre **compañeros** del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores jerárquicos.
- Las conductas se presenten **sistemáticamente**, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituir acoso.
- La dinámica en la conducta hostil **se desarrolle según los hechos relevantes** descritos en la demanda.

Al respecto, de un análisis, en principio, aislado de la presente conducta, así como de los presuntos agentes a quienes se les atribuye su realización, del caudal probatorio que obra agregado al expediente, esta autoridad electoral nacional no advierte, de forma indiciaria ni mucho menos de manera directa, que la omisión de entrega de información que se les atribuye, sea con un objetivo determinado tendente a intimidar opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ni mucho menos a excluirla. Asimismo, tampoco se observa un comportamiento hostil y sistemático alrededor de los hechos denunciados por la quejosa en sus intervenciones procesales.

A este respecto, conviene resaltar que, como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de la información contenida en los oficios analizados, salvo el oficio SPE/001/2014 y SPE/011/2015, fueron emitidos, a trece distintas áreas, el mismo día, es decir, el veinticuatro de marzo de dos mil quince; de modo tal que la no respuesta oportuna de estas áreas, no puede concebirse como una conducta sistemática que se dio por parte de todos ellos, bajo el tamiz del número de servidores que fueron requeridos, dado que para ello, debe tenerse presente que la petición de información fue detonada en un mismo momento; de ahí que la conducción similar que dieron los titulares de área a estas peticiones, si bien, como se ha dicho, no fue correcta, tampoco engendra en automático, un acoso laboral o mobbing, en contra de la denunciante.

Para dar claridad a la anterior afirmación, a continuación se desglosa la información solicitada de la siguiente manera:

1. Información sobre el personal que labora en el OPLE, por el periodo de enero a diciembre de dos mil catorce, dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas. Oficio SPE/001/2014, de 26 de diciembre de 2014.
2. Información relativa a Capacitadores Asistentes Electorales y Coordinadores Centrales, Distritales y Operativos de capacitación, así como subcoordinadores de Capacitación, todos para el proceso local ordinario 2011-2012; dirigida a los Directores de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Administración y Finanzas y, Educación Cívica, todos del OPLE de

Jalisco. Oficios SPE/002/2015, SPE/003/2015 y SPE/005/2015; de 24 de marzo de 2015.

3. Información sobre el personal que labora en el OPLE, por el periodo del uno de enero de 2014 a siete de marzo de 2015, dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas. Oficio SPE/006/2015; de 24 de marzo de 2015.
4. Informe de estructura procesos y procedimientos de distintas áreas, dirigida a los Directores de Informática; Educación Cívica; Administración y Finanzas; Dirección General; de Prerrogativas a Partidos Políticos; Unidad de Transparencia e Información Pública; Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de Consejeros Electorales de Participación Ciudadana; Jurídico; Organización, Geografía y Estadística Electoral; Comunicación Social; Unidad de Fiscalización; Unidad de Editorial y; de Educación Cívica. Oficio SPE/007/2015; de 24 de marzo de 2015.
5. Información relativa a Capacitadores Asistentes Electorales y Coordinadores Centrales, Distritales y Operativos de capacitación, así como subcoordinadores de Capacitación, todos para el proceso local ordinario 2014-2015; dirigida a los Directores de Educación Cívica, Organización, Geografía y Estadística Electoral y de Informática, todos del OPLE de Jalisco. Oficios SPE/008/2015, SPE/009/2015 y SPE/010/2015; de 24 de marzo de 2015.

De igual modo, al analizar la manera en que ocurrieron los hechos, esta autoridad no advierte la forma en que la omisión reclamada, puede traducirse en actos de hostigamiento o agresividad de parte de éstos hacia la denunciante, toda vez que si bien existen varias peticiones que les fueron formuladas, -en algunos casos 4 solitudes a una misma área- en todos los supuestos, salvo el dirigido a través del oficio SPE/001/2014, se realizaron en una misma fecha, de ahí que no podamos hablar de una sistematicidad, al no advertirse un método o forma ordinaria de actuar de uno o varios de los sujetos involucrados, tendente a menoscabar o lesionar la esfera emocional o física de quien hoy denuncia.

En efecto, a través de los oficios SPE/001/2014, SPE/003/2015, SPE/006/2015 y SPE/007/2015, la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, solicitó diversa información a Juan Carlos Franco Jiménez Ex Director de Administración y Finanzas, relacionada con los movimientos del personal y relaciones laborales del

OPLE en los periodos de enero a diciembre de 2014 y del 1° enero de 2014 al 7 de marzo diciembre 2015, así como información de capacitadores asistentes electorales, coordinadores centrales, distritales y operativos de capacitación y subcoordinadores de capacitación del Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012.

Asimismo, a través de los oficios SPE/005/2015, SPE/007/2015 y SPE/008/2015, la citada Consejera Electoral, solicitó diversa información a Moisés Pérez Vega, Ex Director de Educación Cívica, sobre asistentes electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012, coordinadores centrales, distritales, operativos y subcoordinadores de capacitación electoral en los periodos 2011-2012 y 2014-2015, así como la estructura, procesos y procedimientos de su área.

Sin embargo, como ya se dijo, esto **no acredita la sistematicidad** en el actuar de los ex Directores, ya que si bien, se trató de diversas solicitudes de información, las mismas fueron realizadas sobre tópicos similares, pero respecto de diversos periodos de tiempo, y en los casos señalados, las solicitudes fueron realizadas el mismo día, por lo cual, no se advierte la existencia de un proceder constante, por parte de estos funcionarios, en lo individual, ni en su conjunto, tendente en omitir proporcionar a la quejosa cualquier tipo de información que les fuera requerida a sus áreas.

Ahora bien, por cuanto hace a la responsabilidad del Presidente y Secretario Ejecutivo del OPLE de Jalisco, a consideración de esta autoridad, tampoco puede llevar a concluir su responsabilidad en la conducta que se denuncia de acoso laboral o mobbing, habida cuenta que, por lo que respecta al primero de los enunciados, se tiene, en primer lugar, la existencia del memorándum 14/15, tantas veces referido, en el que únicamente refiere que la organización administrativa del instituto le corresponde a determinados órganos y se le solicita que cualquier asunto relacionado con ella se trate con los mismos, sin precisar que sólo aquella que fuese solicitada por la hoy denunciante, fuese atendida por su conducto.

En segundo término, se tiene el oficio SPE/011/2015, signado por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en el cual pidió al Presidente Guillermo Amado Alcaráz Cross, le proporcionara la información que previamente solicitó a los titulares de área, mismos que han quedado precisados en este mismo apartado.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Asimismo obra el **memorándum Presidencia 015/2015**, firmado por el Consejero Presidente del OPLE en el cual gira las instrucciones precisas al entonces secretario ejecutivo para que la solicitud de la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, presentada mediante oficio SPE/0011/2015 recibida por la oficina de Presidencia de este instituto el día veintiséis de marzo de dos mil quince, fuera atendida y tramitada, cuyo contenido es del tenor siguiente:

“Presidencia 015/2015

MEMORÁNDUM

Para: Luis Rafael Montes de Oca Valdez Secretario Ejecutivo.

De: Guillermo Amado Alcaraz Cross Consejero Presidente

Fecha: 26 de marzo de 2015.

Asunto: Para su atención

Por este conducto le remito oficio SPE/0011/2015 signado por la Consejera Erika Ruvalcaba, lo anterior para su atención y trámite”.

De los anteriores elementos de prueba, esta autoridad resolutora no aprecia, de modo indiciario ni tampoco con pruebas directas o indirectas, que su actuar omisivo respecto de la información que pidió la Consejera Ruvalcaba Corral, fuese producto de una acción pre concertada tendente a acosarla laboralmente, sino que, a lo más, denota un proceder poco profesional que derivó en obstaculizar el ejercicio de ésta en sus funciones como miembro del órgano de dirección del OPLE de Jalisco, tal y como lo refirió la Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1679/2016.

A este respecto, conviene tener presente que si bien la *Sala Superior* hizo referencias particulares sobre el actuar del presidente del OPLE sobre la no entrega de información, las mismas fueron referidas en el marco de la *litis* que en dicho procedimiento se sustanciaba, sin que estas conclusiones deban ser replicadas por esta autoridad al resolver la presente causa, toda vez que la conducta analizada en el presente expediente, tiene como propósito, determinar o no la existencia de *mobbing* sobre la hoy quejosa.

Así pues, la emisión del memorandum 14/15, solo demuestra que el Consejero Presidente, hizo del conocimiento de la denunciante que lo relativo a que los

asuntos sobre la organización administrativa del Instituto Electoral local le correspondían al Consejero Presidente en coadyuvancia con el Secretario Ejecutivo, sin que esto, pueda considerarse como un mandato dirigido a obstaculizar la información que previamente solicitó la hoy quejosa.

Ahora bien, del oficio SPE/011/2015, se advierte la petición formal por parte de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral hacia el propio Presidente, para que, por su conducto, le fuese proporcionada toda la información que de forma previa había requerido de los titulares de área.

Dicha petición fue atendida a través del memorándum Presidencia 15/2015, mediante la cual el Presidente del *OPLE Jalisco* solicitó la coadyuvancia del Secretario Ejecutivo para atender y dar trámite al oficio SPE/0011/2015 presentado por la denunciante, es decir fue el Presidente quien en última instancia dio la indicación de atender la solicitud de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Además, obra en el expediente el oficio 290/2016¹⁰⁷ de siete de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el Consejero Presidente de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral lo siguiente:

*“Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral
Consejera Electoral
Instituto Electoral y de Ciudadana del Estado de Jalisco
Presente.*

*Por medio del presente le remito la siguiente información:
Plantilla del personal eventual 2011 y 2012
Plantilla del personal de base y eventual 2014
Plantilla del personal de base y eventual 2015
Organigrama base y eventual 2014 y 2015
Programa anual de actividades 2014 y 2015*

¹⁰⁷ Visible a fojas 3204 del anexo 6 del expediente

Información publicada en el portal de internet oficial www.iepcialisco.org.mx; en el apartado de transparencia, artículo 8, información fundamental, fracciones V y VI.

La relativa a los perfiles de quienes ocupan los puestos de la estructura, instrumentos de evaluación de desempeño, plan de trabajo, manual de procesos, de inducción y cronograma de actividades no es posible entregárselos toda vez que es información que no existe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo”.

De las documentales mencionadas, se concluye que el Presidente del OPLE, mediante el memorándum 14/15 de veinticinco de marzo de dos mil quince, se hizo del conocimiento de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral que los asuntos sobre la organización administrativa del Instituto Electoral local le correspondían al Consejero Presidente en coadyuvancia con el Secretario Ejecutivo. Posteriormente, se observa la petición formal por parte de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral -oficio SPE/011/2015, de veintiséis de marzo de dos mil quince- para que le otorgaran toda la información que previamente solicitó a las distintas áreas y, mediante el oficio 290/2016 de siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente Alcaráz Cross dio la respuesta que estimó apegada a Derecho respecto de la solicitud formulada por la hoy quejosa.

Así las cosas, si bien sobre este aspecto, la Sala Superior estimó que la información proporcionada por Guillermo Alcaráz Cross resultó incompleta e ineficaz para efectos de acreditar la omisión en la entrega de información, habida cuenta que la misma se otorgó más de un año después de que fue requerida por la integrante del Consejo General del OPLE, lo cierto es que para efectos del análisis de los elementos del acoso laboral, no acredita por sí mismo, el carácter evidente, pre concertado, direccionado y sistemático en el actuar del Presidente y Ex Secretario Ejecutivo, en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ni mucho menos un ánimo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, o bien, con la intención de agredirla, controlarla o destruirla, sino una desatención y falta de providad y profesionalismo en su desempeño como cabeza del órgano electoral local en Jalisco.

Por las razones expuestas, es que a consideración de este Consejo General, la falta de entrega de la información requerida por la quejosa por parte del Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos los **Ex Directores del OPLE** no evidencia, *per se*, los elementos del *acoso laboral o mobbing*, toda vez que, se insiste, si bien existió una omisión de entrega de información, tal conducta derivó **de hechos particulares y aislados, y por conducto de personas diferentes, de las cuales no se puede advertir la sistematicidad, en lo individual, respecto de cada uno de los funcionarios electorales denunciados**, tendentes a intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, o bien, con la intención de satisfacer una necesidad de agredirla, controlarla o destruirla.

Esto es, el elemento de **sistematicidad** requerido para actualizar el acoso laboral denunciado por la quejosa, debió implicar que la conducta irregular atribuida a cada uno de los sujetos denunciados fuera reiterada y dirigida a menoscabarla; sin embargo, ésta sólo aconteció como un hecho aislado, respecto de cada uno de los denunciados, en su individualidad, sin que exista algún otra conducta que les pueda ser atribuida, tendente a intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la demandante.

Y si bien, el oficio dirigido tanto al Consejero Presidente como al Secretario Ejecutivo obtuvo la respuesta que dichos funcionarios estimaron pertinentes más de un año después de haberse realizado la solicitud, esta autoridad estima que aplican las mismas consideraciones respecto a que no se advierte, aun de manera indiciaria, que la falta de respuesta a la solicitud de información realizada mediante el oficio **SPE/011/2015**, en el contexto del análisis de los elementos del acoso laboral denunciado haya estado dirigida a intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, o bien, con la intención de agredirla, controlarla o destruirla.

De igual forma, tampoco se observa que se haya tratado de una **conducta sistemática**, en tanto que la solicitud de información, cuya omisión de entrega es alegada por la denunciante, se realizó en una sola ocasión mediante el oficio de referencia, sin que, de las constancias que obran en el expediente, se pueda

desprender una constante por parte del funcionario indicado en negar la información solicitada por la ahora quejosa, durante el tiempo de su gestión.

De ahí que, por cuanto hace a estos hechos que, en lo individual se analizan, se analiza, deba declararse **INFUNDADO** el procedimiento.

5.3.3. EXCLUSIÓN INDEBIDA DE UNA DE LAS COMISIONES QUE INTEGRAN EL OPLE.

- ***Exclusión indebida de la quejosa por parte del Presidente Consejero del OPLE de integrar una de las comisiones del OPLE de Jalisco***

De manera previa a examinar este apartado, cabe mencionar que conforme a lo determinado por la *Sala Superior* al resolver los recursos de apelación **SUP-RAP-298/2016 y acumulados, SUP-RAP-498/2016, SUP-RAP-511/2016 y SUP-RAP-616/2017**, por regla general, la integración de las comisiones es una **función operativa** de los órganos administrativos electorales, cuya regulación le corresponde determinar el propio órgano electoral de que se trate; y que los Lineamientos que dispuso el Legislador para su funcionamiento son mínimos, en los que la autoridad administrativa electoral tiene la **amplia libertad para integrar las comisiones**, solamente respetando **el número de integrantes y de comisiones en las cuales pueden participar**, de conformidad con las normas aplicables.

No obstante, el caso que se analiza constituye una excepción a lo demás precedentes, únicamente porque respecto del tema que se analiza, la Sala Superior ordenó llevar a cabo el análisis de la conducta denunciada a la luz de un posible acoso laboral.

Respecto del tema que nos ocupa, la denunciante adujo, al desahogar el correspondiente requerimiento formulado por la *UTCE* mediante Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, que en la sesión del Consejo General del *OPLE*, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis, fue indebidamente excluida de integrar comisiones de manera igualitaria, en relación con sus compañeros consejeros del máximo órgano de dirección del *OPLE* de Jalisco.

Así pues, en autos del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, obra la versión estenográfica de la sesión pública de treinta y uno de junio de dos mil dieciséis, a la cual se le otorga valor **probatorio pleno**, dado que se trata de una documental pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado en autos.

De la lectura integral de la citada versión estenográfica, se advierte que, en su momento, se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo General local, diversos proyectos de acuerdo, entre los cuales, se encontraba el relativo a la *creación e integración de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información, durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho*, comisión en la cual, a decir de la denunciante, se le excluyó de la posibilidad de participar.

La parte relativa a la discusión del citado punto del día versó en los siguientes términos:

“[...]

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Muchas gracias, secretaria, le solicite continúe con la sesión.

Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: El siguiente punto del orden del día corresponde al **PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGÍAS DE LA**

INFORMACIÓN, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO .

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Previo a sujetarlo a la consideración de los consejeros, le solicito secretaria que lea los Puntos de Acuerdo.*

Secretaria Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: *Si señor presidente.*

PRIMERO. *Se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Actos Preparatorios para la implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información, durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho de este instituto electoral, en términos del considerando VI del presente Acuerdo.*

SEGUNDO. *Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientes.*

TERCERO. *Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, y publique se en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, así como en el portal oficial de internet de este organismo electoral.*

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Muchas gracias, secretaria, queda a la consideración de los miembros de este consejo, el presente punto del orden del día. Se concede el uso de la voz al consejero José Reynoso.*

Consejero Electoral, doctor José Reynoso Núñez: *Muchas gracias presidente, muy buenas tardes a todas y a todos, voy a fijar mi posición respecto de este punto del orden del día que se somete a nuestra consideración, que es la creación de esta comisión para el seguimiento a los actos preparatorios para la implementación del voto de los jaliscienses en el extranjero y tecnologías de la información durante la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, mi voto va a ser en contra, por la razones que explico a continuación; me voy a referir en primer lugar a la forma de construir acuerdos en un órgano colegiado; en segundo lugar la necesidad de*

que exista equidad en la integración de las comisiones y en tercer lugar a mi posición en respecto a mi participación en esta comisión. Me refiero entonces al primer punto, forma de construir los acuerdos en un órgano colegiado como este, considero que en la definición de las prioridades y los énfasis, deben de estar presentes en las distintas perspectivas de quienes integramos este órgano máximo de dirección, la propuesta de la creación de esta comisión integra solo una visión parcial de las prioridades, que las y los integrantes de los consejos queremos enfatizar y excluyo otras propuestas, igualmente importante es que también fueron planteadas y que están siendo ahora excluidas, habría evitar que las decisiones de los órganos colegiados prevaleciera la cultura político jerárquico decisionista, marcada por la cultura presidencialista dominante en nuestra región latinoamericana, esta cultura de toma de decisiones, parece precisamente contradictoria, con el diseño de toma de decisiones colegiadas, mas parlamerizado en el que habría de tener un estilo de toma de decisiones más consensual, especialmente y me refiero especialmente en decisiones estructurales, como la integración de las comisiones, se debería de considerar el máximo consenso posible. El segundo punto es el equidad en esta integración y creo que es fundamental diferenciar dos etapas, en la forma de como se ha integrado las comisiones en este consejo, la primera es la que se llevó a cabo, cuando tomamos nuestra posesión de nuestros cargos y decidimos cada quien a cuales nos integraríamos; la segunda etapa fue cuando se creó una comisión que desequilibró la integración de las comisiones acordada al inicio de nuestro cargo, porque su creación excluyo de participar en ella a tres integrantes del consejo, que solo nos enteramos de su creación e integración, cuando se notificó la sesión respectiva; el día de hoy existía la oportunidad de subsanar ese vicio de origen, con una propuesta que integrara las distintas visiones sobre el instituto, la participación equitativa de todas y todos en las nuevas comisiones y creo que esta oportunidad se está perdiendo; cual es mi posición al respecto, para esta comisión, porque estoy siendo propuesta para integrarla, agradezco la propuesta que se me hace, para la participación en esta comisión, pero considero que en tanto se excluya a otro integrante del consejo en la participación equitativa de las comisiones, no puedo aceptar que se me incluya, lamento entonces tener que declinarle en la participación, en esta comisión, de cualquier forma reconozco y agradezco a la consejera Sayani Mozka y a la consejera Beatriz, el esfuerzo para contribuir a llegar a un acuerdo que lamentablemente esta vez no se puedo concretar. Es cuanto, muchas gracias.

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: Gracias consejero. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno yo si quiero referirme a la exposición que acaba de hacer el consejero Reynoso, por supuesto que en toda estructura debe de haber un orden organizacional, en este caso al presidente le corresponde hacer la propuesta para la integración, bien comenta el consejero en una primera oportunidad, cada uno decidió la manera en cómo se iba integrar las comisiones y en su momento me pareció, quien se integró a mas comisiones que otros y me parece que era un desequilibrio con sentido, en términos numéricos, hoy de repente ante la posibilidad de integrar estas dos comisiones, salta, un señalamiento en el sentido de un supuesto desequilibrio en su integración , lo desconozco, estamos a punto de integrar dos comisiones, una que se refiere al voto en el extranjero y que me parece medular, no obstante de los tiempos tan holgados pareciera para llegar a la jornada de dos mil dieciocho, me parece que Jalisco no tiene una primera experiencia en este sentido y necesita construir a partir de las experiencias ajenas un modelo que le permita hacer frente a esta nueva obligación, entonces me parece oportuno que en estos momentos estemos integrando esta comisión, oportuno también parece que fuera una doctora en asuntos internacionales y quien de alguna manera ha recibido instrucción en Alemania, quien pudiera integrar esta comisión, es lamentable pues que en este momento el consejero decida rechazar esta oportunidad de participar cuando pudo aportarle demasiado, me parece, a la construcción de los trabajos que se iban a derivar de esta comisión, y más lamentablemente me parece púes, si esta decisión llega a tomar se en ese sentido, es ahora con desanimo, porque no estamos en condiciones los consejeros de decir sí o no, tomamos la responsabilidad que nos otorga el Consejo General, sin embargo, este presidente podría tomar la decisión en este momento de modificar la propuesta a efecto de que él pudiera darle cause a esa inquietud y dejar de participar en esta comisión que me parece de los más relevante. En cuanto a la exclusión que refiere, concretamente se refiera a la comisión de género y yo quisiera puntualizarle sobre el desánimo que presentó, cuando hablamos sobre la necesidad de visibilizar el tema de las mujeres y la creación de una unidad, por supuesto la necesidad de una titular en ella, lo que nos llevó a crear una comisión que hoy propone la creación ya de una unidad y que le da cause y visibiliza a las mujeres en este Instituto, entonces, de cualquier manera me parece lamentable la decisión que toma el consejero, pudo sumar muchísimo a los trabajos de la construcción del voto en el extranjero y bueno, quisiera hacer mía la propuesta que hace en este momento el consejero, me parece

que en este momento, no puede ser una decisión unilateral, no podrá rechazar una decisión que tomemos los consejeros respecto a su participación y responsabilidad dentro de una comisión, sin embargo, tratando de ser sensible hago mía la propuesta y por supuesto sujeto al voto de este consejo la oportunidad de que él no forme parte, en caso de que tomemos una decisión en ese sentido, bueno me atrevería a proponer en último momento, una vez tomada esta decisión, quien integraría los trabajos de esta comisión, por supuesto en el espacio que deja en estos momentos el consejero Reynoso, en estos términos le pido secretaria que consulte a los miembros de este consejo si es de aprobarse la exclusión del consejero Reynoso de la integración de la Comisión de Voto en el Extranjero.

Secretaría Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: *Sí señor presidente. Consejeras y Consejeros Electorales, me permito consultarles el sentido de su voto respecto al presente punto que acaba de exponer el presidente*

[...]

Secretaría Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: *Por unanimidad señor presidente.*

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Consecuentemente, me permito proponer en este momento para afecto de la nueva integración de esta comisión al Consejero Mario Ramos, queda a consideración de ustedes la propuesta. En virtud de no haber consideraciones, le solicito secretaria que ponga al voto de Consejeras y consejeros la integración de la comisión con la nueva propuesta.*

Secretaría Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: *Sí señor presidente. Consejeras y Consejeros Electorales, me permito consultarles el sentido de su voto respecto al presente punto que acaba de exponer el presidente*

[...]

Secretaría Ejecutiva, maestra María de Lourdes Becerra Pérez: *Se aprueba por mayoría, con cuatro votos a favor y tres en contra.*

[...]

De lo anterior se advierte que, una vez que se dio cuenta con el Proyecto de Acuerdo, el Consejero José Reynoso Núñez, manifestó, entre otras cuestiones, su declinación a la propuesta de ser integrante de la citada Comisión Temporal para el Seguimiento de los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información.

En virtud de lo anterior el Consejero Presidente del *OPLE*, sometió a la consideración los integrantes del pleno la declinación formulada por el Consejero José Reynoso Núñez y una vez aprobada, propuso al Consejero Mario Ramos en su lugar, propuesta que fue aprobada por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra.

En este orden de ideas, de la citada versión estenográfica, no se advierte pronunciamiento alguno por parte de la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en el sentido de querer formar parte de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Actos Preparatorios para la Implementación del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero y Tecnologías de la Información, ni algún otro pronunciamiento de las y los Consejeros Electorales tendentes a excluirla de la posibilidad de formar parte de la citada comisión.

Por esta razón, por cuanto a la integración de la comisión antes referida, esta autoridad concluye en que no existen elementos para poder afirmar, siquiera en grado indiciario, que la hoy quejosa haya tenido la intención de formar parte de ella y que, de alguna u otra manera, se le haya obstaculizado para acceder a un lugar dentro de la integración de esa instancia colegiada.

En otras palabras, no es posible arribar a la conclusión, a la luz de la infracción que se analiza, de que existe acoso laboral en contra de la denunciante, respecto de un acto en el cual no se advierte la intención de ésta en participar; ergo, la sola designación de otros consejeros diversos a la denunciante para integrar la comisión que se estudia, no puede ser constitutiva de acoso laboral, habida cuenta que, se insiste, no obra prueba alguna en la que se acredite que Erika Cecilia Ruvalcaba

Corral, haya tenido la intención de participar y que su “presunta exclusión” fuese producto de una acción preconcertada para impedirle acceder al cargo pretendido.

Por otra parte, del análisis a la demanda original presentada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, se desprende que ésta manifestó que, desde octubre de dos mil catorce, ha sido objeto de exclusión para formar parte de las comisiones, señalando al respecto que **fue excluida de la propuesta de integrar la Comisión de Organización Electoral**, aprobada mediante Acuerdo IEPC-ACG-030/2014, lo cual tuvo que enmendarse mediante el Acuerdo IEPC-ACG-034/2014.

Sobre el particular, es necesario precisar que de conformidad con las constancias que corren agregadas al sumario que se analiza, obra la copia certificada del acuerdo IEPC-ACG-030/2014, de seis de octubre de dos mil catorce, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el que se aprobó la integración de las comisiones de ese Instituto Electoral local, en los siguientes términos:

“[...]”

VII. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES. *Que, la propuesta del Consejero Presidente para la integración de las comisiones permanentes, para los próximos tres años es la siguiente:*

COMISIONES PERMANENTES DEL IEPC	INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES
<i>Adquisiciones y Enajenaciones</i>	<i>Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo</i>
	<i>Mtra. Sayani Mozka Estrada</i>
<i>Educación Cívica</i>	<i>Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Sayani Mozka Estrada</i>
	<i>Dr. José Reynoso Núñez</i>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

COMISIONES PERMANENTES DEL IEPC	INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES
<i>Organización Electoral</i>	<i>Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo</i>
	<i>Mtro. Mario Alberto Ramos González</i>
<i>Investigación y Estudios Electores</i>	<i>Mtra. Sayani Mozka Estrada (Presidente)</i>
	<i>Mtro. Mario Alberto Ramos González</i>
	<i>Dr. José Reynoso Núñez</i>
<i>Quejas y denuncias</i>	<i>Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo (Presidente)</i>
	<i>Dr. José Reynoso Núñez</i>
	<i>Mtro. Mario Alberto Ramos González</i>
<i>Participación Ciudadana</i>	<i>Mtro. Mario Alberto Ramos González (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Sayani Mozka Estrada</i>
	<i>Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez</i>
<i>Prerrogativas y Partidos Políticos</i>	<i>Dr. José Reynoso Núñez (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Sayani Mozka Estrada</i>
	<i>Mtro. Mario Alberto Ramos González</i>

VIII. PROPUESTA DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE REGLAMENTOS. Que, para el análisis particular de los Reglamentos vigentes, resulta procedente la creación de la comisión temporal de Reglamentos; consecuentemente, el Consejero Presidente propone para la aprobación del Consejo General, la creación de la comisión referida, así como su integración para el periodo que resulte necesario, a efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente, en los términos siguientes:

COMISIÓN TEMPORAL DEL IEPC	INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES TEMPORALES
<i>Reglamentos</i>	<i>Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez</i>
	<i>Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral</i>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

Asimismo, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación del Servicio Profesional Electoral, contemplado por el artículo 41, Base V, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo señalado en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es que el Consejeros Presidente propone para la aprobación de este Consejo General, la creación de la comisión de Servicio Profesional, así como su integración y la cual tendrá vigencia hasta que se lleve a cabo la implementación del citado Servicio en este organismo electoral, quedando integrada en los términos siguientes:

COMISIÓN TEMPORAL DEL IEPC	INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES TEMPORALES
<i>Servicio Profesional Electoral</i>	<i>Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral (Presidente)</i>
	<i>Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez</i>
	<i>Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo</i>

[...]”

De la anterior cita, se desprende que la hoy denunciante integró la Comisión Permanente de Educación Cívica, en su carácter de Presidente, así como las Comisiones Temporales de Reglamentos y del Servicio Profesional Electoral, en esta última con el carácter de Presidente.

Asimismo, obra la versión estenográfica de la sesión pública de esa misma fecha, en la cual se aprobó el citado acuerdo, documentales mismas a las cuales se les otorga valor **probatorio pleno**, dado que se tratan de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado en autos.

De la lectura integral de la citada versión estenográfica, se advierte que en su momento se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo General local, el Proyecto de Acuerdo, el cual, entre otras cuestiones, se pronunciaba en lo relativo a la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales, incluida la integración de la Comisión Permanente de Organización Electoral.

En virtud de lo anterior, una vez que se dio cuenta con el Proyecto de Acuerdo, el Consejero Presidente del *OPLE*, puso a consideración de las y los Consejeros Electorales el Proyecto de Acuerdo el cual fue aprobado por unanimidad de votos, sin que existiere manifestación alguna respecto a la integración propuesta.

En este sentido, este órgano resolutor no puede, bajo los elementos de prueba antes enunciados, determinar que existe acoso laboral derivado de la exclusión de la quejosa en la integración de comisiones, cuando no se demuestra, siquiera de modo indiciario que Erika Cecilia Ruvalcaba Corral tuviese en algún momento, la intención de ser incluida en alguna otra comisión diferente a aquellas en las que formó parte, habida cuenta que, tenía expedito su derecho, como integrante del máximo órgano de decisión al interior del *OPLE*, de manifestarse en contra o, en su caso, oponerse mediante su voto en contra de la integración de dichas comisiones. De ahí que se concluya que sus afirmaciones a este respecto, no encuentren un asidero probatorio mínimo que puedan generar convicción en esta autoridad sobre la veracidad de su dicho.

En el mismo orden de ideas, obra en el expediente que se resuelve copia certificada del acuerdo IEPC-ACG-034/2014, de veinticinco de octubre de dos mil catorce, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual se modificó la integración de las comisiones de Organización Electoral y de Prerrogativas a Partidos Político, en los siguientes términos:

“[...]

VI. DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS. *Que, conforme al antecedente 6° del presente Acuerdo, en sesión extraordinaria de seis de octubre, el Consejo General de este instituto aprobó la integración de las comisiones de este organismo electoral, entre las cuales designó a los Consejeros Electorales, Mario Alberto Ramos González, Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo y Griselda Beatriz Juárez, como integrantes de la Comisión de Organización Electoral, confiriendo a esta última el cargo de presidenta de la citada comisión; de igual forma se designó a los Consejeros Electorales, Sayani*

Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González y José Reynoso Nuñez como integrantes de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, confiriendo a este último el cargo de presidente de la referida comisión.

VII. DE LA PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN. *Que, a efecto de obtener una distribución más equilibrada en los trabajos que se realizan en las comisiones de este organismo electoral, el Consejero Presidente propone modificar la integración de las Comisiones de Organización Electoral, y de Prerrogativas y Partidos Políticos, para quedar de la manera siguiente:*

- **Comisión de Organización Electoral:** *Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo y Griselda Beatriz Rangel Juárez, esta última con el cargo de presidenta.*
- **Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos:** *Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, Alberto Ramos González y Jose Reynoso Núñez, este último con el cargo de presidente.*

[...]"

Aunado a lo anterior, también se encuentra glosado al presente procedimiento, la versión estenográfica de la sesión pública celebrada en misma fecha, de la que se advierte que, en su momento, se sometió a consideración del Pleno de ese Consejo General local, el Proyecto de Acuerdo referido párrafos arriba, donde se propuso la modificación de las Comisiones de Organización Electoral y de Prerrogativas a Partidos Políticos, bajo el argumento de una distribución más equilibrada en los trabajos que se realizan en las comisiones del organismo electoral de Jalisco, donde se incluyó como integrante de la Comisión de Organización Electoral a la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

A las constancias antes referidas, se les otorga valor **probatorio pleno**, dado que se trata de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIFE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado en autos.

Del contenido de la versión estenográfica que nos ocupa, se advierte que una vez que se dio cuenta con el Proyecto de Acuerdo, el Consejero Presidente del *OPEL*,

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

puso a consideración de las y los Consejeros Electorales el Proyecto de Acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, sin que, de igual forma, se aprecie alguna manifestación de parte de la denunciante o de otro consejero, que abundara sobre las razones del cambio en la integración de las comisiones o sobre algún tipo de exclusión hacia la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Por otra parte, continuando con el análisis de la demanda original que nos atañe, se desprende que la denunciante refiere que se le impidió manifestar su interés de participar en la integración de la *Comisión de Género y no Discriminación*, ya que se enteró de su creación e integración, apenas veinticuatro horas antes de que dicha propuesta fuese sometida a la consideración del Consejo General del OPLE de Jalisco.

Al respecto, obra en el expediente copia certificada del acuerdo IEPC-ACG-004/2016, de veintidós de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante el cual se aprobó la integración de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, de ese organismo electoral, en los términos siguientes:

COMISIÓN	INTEGRACIÓN
De igualdad de Género y de No Discriminación	Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez (PRESIDENTA)
	Consejera Electoral Sayani Mozka Estrada
	Consejero Electoral Mario Alberto Ramos González

De igual forma, en autos del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, obra la versión estenográfica de la mencionada sesión pública, a la cual se le otorga valor **probatorio pleno**, dado que se trata de una documental pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGIPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado en autos.

De la lectura integral de la citada versión estenográfica, se advierte que, al someterse a la aprobación de los miembros del Consejo General del OPLE los puntos del orden del día a desarrollarse en la sesión extraordinaria, la Consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, sometió a la consideración de los consejeros, retirar el punto relativo a la creación e integración de una *comisión de igualdad de género y no discriminación*, por considerar que el tema no se había tratado al interior del Consejo.

Dicha propuesta fue respaldada por el Consejero José Reynoso Núñez, quien abundó en señalar que el proyecto de creación e integración de la citada comisión, no fue analizado en la mesa de consejeros, así como por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, quien acompañó la propuesta de retirar el punto del orden del día, manifestando además, su intención de pertenecer a esa comisión.

En virtud de lo anterior, **el Consejero Presidente del OPLE**, solicitó al Secretario Ejecutivo que sometiera a consideración de los miembros del Consejo General, el orden del día y, en su caso, la propuesta de la Consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo de retirar el punto 8 relativo a la creación e integración de una *comisión de igualdad de género y no discriminación*. Manifestando además, que el seno del Consejo General es el lugar indicado para tratar la propuesta de creación e integración de la citada comisión.

La intervención del aludido Consejero Presidente fue en los términos siguientes:

[...]

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Sin embrago y citando a Benjamín, por supuesto que tuvimos una mesa, efectivamente el punto no se trató en ella, ya una vez notificado y previo a esta reunión también era un espacio adecuado para haber manifestado que no se estaba conforme y quizás en ese momento lo hubiéramos resuelto sin la necesidad de venirlo a tratar aquí ¿no?, en la forma, el fondo por supuesto que tenemos que desahogarlo en esta mesa, entonces me parece que al final si hubo un espacio pues para el pronunciamiento, que bueno que hoy en esta mesa pública, como bien decía la consejera Sayani, se está extendiendo, digo dejamos pasar uno importante que era el previo, estamos a tiempo de sujetar a la votación la inclusión o no de este punto del orden del día y bueno me*

parece que lo que procede en este sentido es que lo hagamos de esa manera ¿no?, ya tenemos una propuesta que se formuló en el sentido de retirarla, tenemos una propuesta original que incluye y en esos términos yo creo que si no hay ninguna otra intervención, le pediría al Secretario que sujete a ña consideración de los miembros de este Consejo la propuesta original, para que se vote en caso de que esta resulte a favor necesariamente ya no votaríamos la otra porque la excluye y de lo contrario si esta no resulta favorable, procederíamos entonces a votar la propuesta que formula la consejera Virginia Gutiérrez ¿de acuerdo? Secretario solicito que pregunte a los miembros de este Consejo en votación económica si se aprueba el presente punto del orden del día en la propuesta original.

Secretario Ejecutivo, maestro Luis Rafael Montes de Oca Valadez: Claro. Consejeras y Consejeros Electorales en votación económica les consulto si se aprueba el orden del día originalmente propuesto, los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano por favor. Aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra.

[...]

Respecto de esta propuesta, conviene citar las disposiciones que aplican respecto de la conformación e integración de comisiones del OPLE de Jalisco, a saber:

De las Atribuciones del Consejo General

Artículo 134.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

[...]

XXXVIII. Aprobar, a propuesta del Consejero Presidente, la integración de las comisiones de:

- a) *Adquisiciones y Enajenaciones;*
- b) *Educación Cívica;*
- c) *Organización Electoral;*

- d) *Investigación y Estudios Electorales;*
- e) *Quejas y Denuncias; y*
- f) ***Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Instituto.***

[...]

Artículo 136.

1. *El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral.*

2. *Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación Cívica; Participación Ciudadana; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; de Investigación y Estudios Electorales, de Adquisiciones y Enajenaciones, y de Quejas y Denuncias funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar **hasta en tres de las comisiones antes mencionadas**; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.*

[...]

Artículo 137.

1. *El Consejero Presidente del Instituto tiene las **atribuciones** siguientes:*

XX. Proponer para su aprobación al Consejo General a los integrantes de:

- a) *La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones;*
- b) *La Comisión de Educación Cívica;*
- c) *La Comisión de Organización Electoral;*

- d) *La Comisión de Investigación y Estudios Electorales; y*
- e) *La de Quejas y Denuncias.*

De los artículos citados, se advierte que es atribución del Consejero Presidente del OPLE, presentar la propuesta de integración de las comisiones permanentes y temporales; no obstante, la fracción XXXVIII del artículo 134 del Código Electoral, confiere la atribución de aprobar dichas integraciones al Consejo General.

Por su parte el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece lo siguiente:

“[...]

Artículo 43. Forma de tomar acuerdos y resoluciones.

1. Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría simple. Salvo los casos en que el Código exija una mayoría calificada.
2. La votación se tomará contando en primer término el número de votos a favor y, en su caso, el número de votos en contra. El sentido de la votación quedará asentado en los Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes aprobados, así como en el Acta respectiva.
3. Una vez iniciado el proceso de votación, el Presidente no podrá conceder el uso de la palabra para continuar con la discusión del asunto, salvo que se solicite alguna moción de orden exclusivamente para aclaración del procedimiento específico de votación.

En virtud de lo anterior, el acuerdo IEPC-ACG-004/2016, relativo a la creación e integración de Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, fue sometido a consideración del Pleno del Consejo General local –como máximo órgano de dirección- el cual fue aprobado por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra de sus miembros, de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación supra señalada, del que no se desprende que haya existido alguna limitación tendente a coartar el derecho de la quejosa de manifestar su intención de participar

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016

en dicha comisión, independientemente de que no fuera propuesta en la integración presentada por el Consejero Presidente.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad resolutora, que la *Sala Superior* al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1679/2016, refirió que quedó acreditada la indebida exclusión de la ahora actora por parte del Consejero Presidente **Guillermo Amado Alcaraz Cross**, de la integración de una de las comisiones del citado Instituto -Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral- siendo que, previo a la interposición del mencionado medio de impugnación, era la Consejera que integraba el menor número de comisiones en comparación con sus pares, como se advierte a continuación:

Integrante del Consejo General del OPLE	Comisiones Permanentes	Comisiones Temporales	Total de Comisiones
Mario Alberto Ramos González	6	1	7
Griselda Beatriz Rangel Juárez	5	2	7
Sayani Mozka Estrada	5	1	6
María Virginia Gutiérrez Villalvazo	5	1	6
José Reynoso Núñez	4	0	4
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral	2	1	3

Lo anterior en virtud de que, mediante sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente del *OPLE* sometió a consideración del Consejo General un Proyecto de Acuerdo, en el cual, entre otras cuestiones, se propuso la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de la cual, en principio, formaría parte la ahora quejosa; no obstante ello, durante el desarrollo de dicha sesión, el aludido funcionario público propuso la modificación de la integración de la misma, sometiendo a consideración del pleno de ese órgano colegiado la sustitución de la denunciante por otra Consejera Electoral, lo cual quedó aprobado por una mayoría de cuatro votos.

Al respecto, cabe indicar que de la lectura integral de la versión estenográfica de la sesión de referencia *-cuya autenticidad y contenido no está controvertida y menos aún desvirtuado, razón por la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas-*, se desprende que, el aludido Consejero Presidente, a fin de motivar la sustitución propuesta, manifestó lo siguiente:

[...]

Consejero Presidente maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross: *Muchas gracias secretaria, previo a sujetar a consideración de las Consejeras y consejeros del presente punto del orden. Quiero justificar una modificación que voy a presentar en este momento y que obedece a algo que perdí de vista, dentro de los miembros de este consejo hay uno, uno sólo que de manera ya transitó por el servicio profesional y que me parece que debe estar integrada en esa comisión, no había visto, no había considerado esta parte y me parece que es muy valiosa o deberá ser muy valiosa su participación y en esos términos quiero modificar la integración de la comisión, para que la consejera Beatriz Rangel, pueda acompañarnos en los trabajos de ella y en esos términos la propuesta que formulo para que podamos integrar esta comisión es que queda integrada tal cual, pero en que en lugar de la consejera Erika Ruvalcaba, pudiera quedar integrada la consejera Beatriz Rangel, en esos términos pongo a consideración de las consejera y consejeros el presente punto del orden del día[...]*

No obstante, si bien la *Sala Superior* determinó que la Consejera Erika Ruvalcaba fue indebidamente “excluida” de la comisión permanente del Servicio Profesional Electoral, esto, por sí mismo, no actualiza acoso laboral, lo que es materia de *Litis* de este procedimiento sancionador, pues aun cuando la jurisdicción consideró que con esta exclusión se obstaculizó el ejercicio del cargo de la referida Consejera Electoral y que el actuar del Consejero Presidente no fue acorde con el profesionalismo e igualdad que debe imperar en un órgano colegiado, **estas afirmaciones parten de un criterio de interpretación que ese órgano jurisdiccional efectuó al resolver el juicio para la protección de los derechos**

político-electorales, lo cual no puede servir de base para imponer una sanción en un procedimiento sancionador en atención a los principios que deben prevalecer en los procedimientos de esta naturaleza.

Esto es así, porque para el análisis de infracciones en materia administrativa electoral como la que nos ocupa, invariablemente el operador jurídico debe aplicar los principios del derecho punitivo, entre los cuales, se encuentra el de **tipicidad** y el de **presunción de inocencia**, los cuales se refieren, por cuanto hace al primero, a que la conducta que se estime reprochable, debe estar prevista en una norma jurídica de forma estricta, a efecto de que los destinatarios conozcan las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia; y, respecto del segundo principio, a la garantía que tiene todo gobernado de ser considerado inocente de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario.

Con base en lo anterior, resulta inconcuso concluir, que dentro de los elementos que constituyen la conducta de acoso laboral, a decir de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra el de **sistematicidad**, la cual es entendida como *una serie de actos o comportamiento hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo*¹⁰⁸, lo cual no se tiene por demostrado en el presente asunto.

Es decir, de las constancias que integran el procedimiento que se resuelve, **no existe ninguna evidencia objetiva y contundente de que el hecho de no participar en la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral, sea parte de una acción o conjunto de acciones, reiteradas por parte del sujeto denunciado, tendente a obstaculizar el ejercicio de la función electoral de la Consejera denunciada y, por tanto, se trate de acoso laboral; sino a lo más, de una conducta individual, no justificada y reprochable, pero que en modo alguno cumple con los extremos para demostrar la infracción pretendida, es decir, acoso laboral.**

¹⁰⁸ Tesis aislada identificada con la clave 1a. CCLII/2014 (10a.), de rubro "ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA"

Lo anterior, es de vital importancia, habida cuenta que para el caso de la presunta responsabilidad del Consejero Presidente, sólo existe evidencia de que éste en un primer momento, incluyó en una propuesta a la hoy denunciante para que formara parte de la Comisión del Servicio Profesional Electoral y, en un segundo momento, una propuesta para excluirla, con base en las consideraciones que expuso al seno del propio Consejo General, sin que se advierta que dicho sujeto tuviese una condición preponderante o que, de manera evidente y sin justificación, haya pretendido influir a ultranza, en la decisión que tomaron los consejeros para aprobar la decisión final en favor de la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez para integrar esa comisión.

Otro elemento a considerar, lo constituye el hecho de que las comisiones, al interior de los órganos electorales, en su mayoría, **se constituyen como auxiliares del máximo órgano de dirección del Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones**, siendo que este órgano es el que, en última instancia administrativa, resuelve en definitiva los asuntos previamente aprobados por las comisiones, y en este caso, **no existe evidencia de que la Consejera Electoral haya sido privada de participar en la votación y discusión de acuerdos y resoluciones sometidos a consideración del Consejo General del OPLE de Jalisco**, lo cual sí podría constituir una obstaculización al ejercicio de su función como consejera electoral, a la luz de un acoso laboral.

En este sentido, en diversos precedentes la *Sala Superior* ha determinado que la integración de los órganos electorales, incluyendo las comisiones, es un asunto que corresponden a la organización interna de las propias autoridades electorales, sobre los cuales corresponde decidir a sus miembros.

Así, en el SUP-JDC-1177/2013, la jurisdicción consideró que las determinaciones relativas a la integración y presidencia de las comisiones ordinarias del órgano (electoral) constituyen asuntos de su administración interior, sobre los cuales corresponde decidir a sus integrantes de manera autónoma e independiente, dada su naturaleza jurídica.

En el SUP-RAP-0616/2017, mediante el cual se impugnó el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se estableció la integración de comisiones temporales y permanentes, la *Sala Superior* consideró que “...la integración de las **comisiones es una función operativa del Instituto Nacional Electoral, cuya regulación le corresponde determinar**; y que los *Lineamientos que dispuso el Legislador para su funcionamiento son mínimos*”.

Además, señaló que no existía prohibición expresa para que la renovación de las comisiones fuera total y que “...el INE tenía amplia libertad para integrar las comisiones, solamente respetando en número de integrantes y de comisiones en las cuales pueden participar, es decir, hasta cuatro comisiones por consejero electoral...”

Ergo, en este caso, tampoco existe disposición en la normatividad local que imponga la obligación al Consejo General del OPLE de Jalisco ni al Consejero Presidente, que la propuesta de integración de determinada Comisión sea de una u otra forma, siempre que no excede el máximo permitido por la norma, que consiste en que cada Consejero Electoral no puede pertenecer a más de 3 comisiones permanentes,¹⁰⁹ en cuyo caso se trataría de una infracción distinta a la que en este caso se estudia.

Por lo anterior, el hecho de que la Consejera denunciada no haya sido incluida en la propuesta de integración de la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral formulada por el Consejero Presidente no actualiza, en sí mismo, acoso laboral en contra de aquélla, pues no existe ningún medio de prueba que acredite objetivamente que ello fue con la finalidad de causarle un daño y afectarle en el ejercicio de su cargo, más aun si se toma en consideración que la conformación de las comisiones es una cuestión de organización y administración interna de las autoridades electorales que les compete a los propios órganos de dirección.

¹⁰⁹ Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Artículo 136. [...] Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

En el mismo sentido, el actuar de los Consejeros Electorales Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez, no constituyen infracción alguna en el contexto del análisis de la conducta denunciada en el presente procedimiento, ya que si bien es cierto el Consejero Presidente del OPLE, en apego a sus atribuciones, propuso la modificación a la integración de una de las comisiones y el hecho que la mayoría de los Consejeros votaran a favor de la propuesta realizada, trajo como consecuencia que la denunciante dejara de integrar la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, **ello no pone de relieve una conducta de acoso laboral contra la impetrante, ya que la diversidad en los criterios de los integrantes y por ende las posturas conforme a sus votos, es sinónimo de pluralidad en la integración de dicho órgano y no de acoso laboral necesariamente.**

Máxime que con ese solo hecho, no se advierte un ánimo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, lo anterior debido a que la decisión de aprobar y realizar la eventual modificación a la integración de la cita Comisión, fueron hechas en el contexto de sus atribuciones, mismas que en todo momento fueron circunscritas al tema que en ese momento se estaba tratando al seno del máximo órgano de decisión del OPLE.

En este orden, se concluye que los Consejeros Electorales Guillermo Amado Alcaraz Cross, Sayani Mozka Estrada, Mario Alberto Ramos González, Griselda Beatriz Rangel Juárez, no llevaron a cabo conductas que constituyan acoso laboral por exclusión de formar parte de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, en contra de la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, de ahí que, por cuanto hace a estos hechos que, en lo individual se analizan, se analiza, deba declararse **INFUNDADO** el procedimiento.

5.4 ADMINICULACIÓN DE LAS CONDUCTAS Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Ahora bien, del análisis en su conjunto de las conductas denunciadas, consistentes en 1) Las presuntas agresiones verbales durante sus intervenciones en las sesiones de Consejo General del *OPLE*, 2) La falta de entrega de información a la ahora quejosa y 3) Su indebida exclusión de comisiones, esta autoridad concluye que, analizadas en su conjunto y concatenadas unas con otras, **no constituyen acoso laboral** en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Ello se estima así, dado que las conductas denunciadas no satisfacen los elementos del acoso laboral, en términos de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada identificada con la clave 1a. CCLII/2014 (10a.), de rubro “**ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA**”, misma que señala:

“ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA.

El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agrava por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.

De lo trasunto, se advierte que para que exista acoso laboral dentro de una relación laboral, se deben actualizar los siguientes elementos:

- El objetivo sea intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a **excluirlo** de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar y destruir.
- La agresividad o el hostigamiento laboral ocurra, bien entre **compañeros** del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores jerárquicos.
- Las conductas se presenten **sistemáticamente**, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituir acoso.
- La dinámica en la conducta hostil **se desarrolle según los hechos relevantes** descritos en la demanda.

En el caso, tal y como se analizó en la presente Resolución, tenemos que no se encuentra acreditado -en el contexto de análisis de la figura de acoso laboral- que la exclusión de la denunciante en la integración de comisiones del órgano electoral local y la negativa injustificada de entregarle información necesaria para el desempeño de sus funciones como consejera, acrediten *per se* la figura de acoso laboral en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Lo anterior en virtud de que dichos hechos se dieron en contextos, lugares y personas diversas de las cuales no se puede advertir un actuar sistemático, ni mucho menos encuentran una relación entre sí, al tratarse de hechos aislados en circunstancias diversas.

Lo anterior en virtud de que se trata de hechos particulares y aislados de diversos miembros del *OPLE*, los cuales no se pueden traducir en actos o comportamientos hostiles con como objetivo el intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la denunciante. Tampoco se advierte una agresividad ni hostigamiento laboral ya que por una parte la información solicitada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral al Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos Directores y Ex Directores del *OPLE*, como se analizó, en algunos casos no se encontraba en poder de los requeridos, puesto que dicha información no se

encontraba dentro del ámbito de sus respectivas competencias, aunado al hecho de que la información requerida fue en realizada en similares términos a las diversas áreas por lo que la omisión en la entrega de información no fue de forma dolosa ni con el ánimo de hostigar laboralmente a la denunciante.

Por lo expuesto, ante las acciones y conductas que motivaron la denuncia, las cuales no quedaron acreditadas en el contexto de la conducta materia de estudio en el presente procedimiento, esta autoridad arriba a la conclusión que, en el particular, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral no fue acosada laboralmente por el Consejero Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos Ex Directores del OPLE, en tanto que, como se indicó, las conductas desplegadas, no tuvieron como objetivo menoscabar a la quejosa, en el ejercicio y goce de sus derechos, como integrante del citado Instituto local.

En consecuencia, es que resulte **INFUNDADO** el procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, instaurado en contra del Consejero Presidente del OPLE, Guillermo Amado Alcaraz Cross, de la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, de los entonces Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada y Mario Alberto Ramos González, así como de los otrora Secretario Ejecutivo, Luis Rafael Montes de Oca Valadez y Directores de área Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Luis Gabriel Mota, Juan Carlos Franco Jiménez, Moisés Pérez Vega, José De Jesús Gómez Valle, Ramiro Feliciano Garzón Contreras, Olga Patricia Vega Guzmán, Carlos Alberto Silva Moreno, Héctor Javier Díaz Sánchez, Álvaro Fernando Munguía Martínez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Ana Violeta Iglesias Escudero, Ernesto Gerardo Castellanos Silva y Tlacaél Jiménez Briseño, todos del *OPLE Jalisco*.

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución federal,¹¹⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, previsto en el artículo 79 de la Ley de Medios.

¹¹⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario al rubro señalado, instaurado en contra del Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, de la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, de los entonces Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada y Mario Alberto Ramos González, así como de los otrora Secretario Ejecutivo, Luis Rafael Montes de Oca Valadez y Directores de área Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Luis Gabriel Mota, Juan Carlos Franco Jiménez, Moisés Pérez Vega, José De Jesús Gómez Valle, Ramiro Feliciano Garzón Contreras, Olga Patricia Vega Guzmán, Carlos Alberto Silva Moreno, Héctor Javier Díaz Sánchez, Álvaro Fernando Munguía Martínez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Ana Violeta Iglesias Escudero, Ernesto Gerardo Castellanos Silva y Tlacaél Jiménez Briseño, todos del *OPLE*, en términos de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. NOTIFIQUESE: Personalmente a la denunciante Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, así como a los sujetos denunciados Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, de la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, de los entonces Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada y Mario Alberto Ramos González, así como de los otrora Directores de área Luis Rafael Montes de Oca Valadez, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Luis Gabriel Mota, Juan Carlos Franco Jiménez, Moisés Pérez Vega, José De Jesús Gómez Valle, Ramiro Feliciano Garzón Contreras, Olga Patricia Vega Guzmán, Carlos Alberto Silva Moreno, Héctor Javier Díaz Sánchez, Álvaro Fernando Munguía Martínez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Ana Violeta Iglesias Escudero, Ernesto Gerardo Castellanos Silva y Tlacaél Jiménez Briseño, todos del *OPLE*; por **estrados**, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460, de la *LGIFE*; 28, 29, 30 y 31, del Reglamento de Quejas.

En su oportunidad, **archívese** el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado, como asunto total y definitivamente concluido.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE SUP-JDC-524/2017.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones por las que no comparto las consideraciones contenidas en la Resolución aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo General.

Sobre el particular, se determinó declarar **infundado el procedimiento** que se inició con motivo de la resolución SUP/JDC/524/2017, que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cual revocó la determinación impugnada y ordenó al Instituto se realizara un análisis integral de la demanda, se apreciaran los hechos que quedaron probados ante la autoridad jurisdiccional, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la determinación de cuáles son los hechos que quedaron probados en el procedimiento sancionador electoral y cuál es el alcance de todas las pruebas desahogadas en relación con lo denunciado, todo ello en relación con la narración completa de la demandante y de la hipótesis planteada en su demanda.

Litis

- Determinar sobre los hechos motivo de denuncia consistentes en la omisión reiterada de proporcionar información para el adecuado ejercicio de su cargo;
- Determinar si existió una exclusión injustificada de comisiones que se formaron en el OPL; y,
- Las presuntas agresiones verbales durante sus intervenciones en las sesiones de Consejo General del OPL.

Motivo del disenso

No se comparte lo razonado y aprobado por la mayoría de los integrantes de este Consejo General, toda vez que considero que las conductas atribuidas al Consejero Presidente del OPL Guillermo Amado Alcaraz Cross fueron debidamente acreditadas, tales como la falta de entrega de información que derivó en una



obstaculización de su desempeño como Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral; así como de su indebida exclusión de comisiones ocasionando una ausencia de profesionalismo e igualdad de condiciones dentro del órgano colegiado del OPL.

En razón de lo anterior, estimo que sí se acreditó el acoso laboral en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, toda vez que esas acciones y conductas generaron un ambiente laboral difícil para la denunciante, al no tener los insumos necesarios para desempeñar debidamente el cargo, conforme a las atribuciones que la ley de la materia le otorga y, por el contrario, fue obstaculizada en ese ejercicio, disminuyendo, limitando o menoscabando su actividad laboral.

Sin embargo, contrario a lo señalado la resolución que fue aprobada se encuentra motivada por consideraciones que se no se comparten y que son del tenor siguiente:

Negativa de entregar información a la quejosa como elemento de acoso laboral.

Al respecto, la resolución señala que de un análisis aislado de la conducta así como de los presuntos agentes a quienes se les atribuye su realización y del caudal probatorio que obra agregado al expediente, se concluye que no se advierte de forma indiciaria ni mucho menos de manera directa, que la omisión de entrega de información que se les atribuye a los denunciados, sea con un objetivo determinado tendente a intimidar opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ni mucho menos a excluirla. Asimismo, tampoco se observa un comportamiento hostil y sistemático alrededor de los hechos denunciados por la quejosa en sus intervenciones procesales.¹

En el mismo sentido, se consideró que de los elementos de prueba, no se aprecia de modo indiciario ni tampoco con pruebas directas o indirectas, que su actuar omisivo respecto de la información que pidió la Consejera Ruvalcaba Corral, fuese producto de una acción pre concertada tendente a acosarla laboralmente, sino que, a lo más, denota un proceder poco profesional que derivó en obstaculizar el ejercicio de ésta en sus funciones como miembro del órgano de dirección del OPLE de Jalisco, tal y como lo refirió la Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1679/2016.²

¹ Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG1466/2018, página 194.

² *Ibid.*, 197.

Aunado a lo anterior, se señala que la Sala Superior estimó que la información proporcionada por Guillermo Alcaráz Cross resultó incompleta e ineficaz para efectos de acreditar la omisión en la entrega de información, habida cuenta que la misma se otorgó más de un año después que fue requerida por la integrante del Consejo General del OPLE, lo cierto es que para efectos del análisis de los elementos del acoso laboral, no acredita por sí mismo, el carácter evidente, pre concertado, direccionado y sistemático en el actuar del Presidente y Ex Secretario Ejecutivo, en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, ni mucho menos un ánimo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, o bien, con la intención de agredirla, controlarla o destruirla, sino una desatención y falta de probidad y profesionalismo en su desempeño como cabeza del órgano electoral local en Jalisco.³

Por lo anterior, se concluyó que la falta de entrega de la información requerida por la quejosa por parte del Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos Ex Directores del OPL no evidencia, per se, los elementos del acoso laboral o mobbing, toda vez que, se insiste, si bien existió una omisión de entrega de información, tal conducta derivó de hechos particulares y aislados, y por conducto de personas diferentes, de las cuales no se puede advertir la sistematicidad, en lo individual, respecto de cada uno de los funcionarios electorales denunciados, tendentes a intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la quejosa, con miras a excluirla de la organización, o bien, con la intención de satisfacer una necesidad de agredirla, controlarla o destruirla.⁴

Exclusión indebida de una de las Comisiones que integran el OPL.

Sobre el particular, en la resolución aprobada se determinó que bajo los elementos de prueba contenidos en el expediente no es posible determinar que existe acoso laboral derivado de la exclusión de la quejosa en la integración de comisiones, cuando no se demuestra, siquiera de modo indiciario que Erika Cecilia Ruvalcaba Corral tuviese en algún momento, la intención de ser incluida en alguna otra comisión diferente a aquellas en las que formó parte, habida cuenta que, tenía expedito su derecho, como integrante del máximo órgano de decisión al interior del OPLE, de manifestarse en contra o, en su caso, oponerse mediante su voto en contra de la integración de dichas comisiones. De ahí que se concluya que sus

³ *Ibid.*, 199.

⁴ *Ibid.*, 200.

afirmaciones a este respecto, no encuentren un asidero probatorio mínimo que puedan generar convicción en esta autoridad sobre la veracidad de su dicho.⁵

Aunado a lo anterior, se expuso que si bien la Sala Superior determinó que la Consejera Erika Ruvalcaba fue indebidamente “excluida” de la Comisión permanente del Servicio Profesional Electoral, esto por sí mismo, no actualiza acoso laboral, lo que es materia de Litis de este procedimiento sancionador, pues aun cuando la jurisdicción consideró que con esta exclusión se obstaculizó el ejercicio del cargo de la referida Consejera Electoral y que el actuar del Consejero Presidente no fue acorde con el profesionalismo e igualdad que debe imperar en un órgano colegiado, estas afirmaciones parten de un criterio de interpretación que ese órgano jurisdiccional efectuó al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales, lo cual no puede servir de base para imponer una sanción en un procedimiento sancionador en atención a los principios que deben prevalecer en los procedimientos de esta naturaleza.⁶

Asimismo, respecto a la presunta responsabilidad del Consejero Presidente, de la exclusión de Comisiones sólo existe evidencia que éste en un primer momento, incluyó en una propuesta a la hoy denunciante para que formara parte de la Comisión del Servicio Profesional Electoral y, en un segundo momento, una propuesta para excluirla, con base en las consideraciones que expuso al seno del propio Consejo General, sin que se advierta que dicho sujeto tuviese una condición preponderante o que, de manera evidente y sin justificación, haya pretendido influir a ultranza, en la decisión que tomaron los consejeros para aprobar la decisión final en favor de la Consejera Electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez para integrar esa comisión.⁷

Por las consideraciones apuntadas, se concluyó que el actuar de los denunciados no constituyen infracción alguna en el contexto del análisis de la conducta denunciada en el procedimiento, ya que si bien es cierto el Consejero Presidente del OPLE, en apego a sus atribuciones, propuso la modificación a la integración de una de las comisiones y el hecho que la mayoría de los Consejeros votaran a favor de la propuesta realizada, trajo como consecuencia que la denunciante dejara de integrar la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, ello no pone de relieve una conducta de acoso laboral contra la impetrante, ya que la diversidad en los criterios de los integrantes y por ende las

⁵ *Ibid.*, 211.

⁶ *Ibid.*, 219.

⁷ *Ibid.*, 221.

posturas conforme a sus votos, es sinónimo de pluralidad en la integración de dicho órgano y no de acoso laboral necesariamente.⁸

Adminiculación de las conductas y determinación de responsabilidad.

Al respecto, se consideró en la resolución que no se encontraba acreditada la figura de acoso laboral, en razón de la exclusión de la denunciante en la integración de comisiones del órgano electoral local y la negativa injustificada de entregarle información necesaria para el desempeño de sus funciones como consejera, acrediten per se la figura de acoso laboral en contra de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

Lo anterior, en virtud que dichos hechos se dieron en contextos, lugares y personas diversas de las cuales no se puede advertir un actuar sistemático, ni mucho menos encuentran una relación entre sí, al tratarse de hechos aislados en circunstancias diversas, por lo cual se señala que se tratan de hechos particulares y aislados de diversos miembros del OPL, los cuales no se pueden traducir en actos o comportamientos hostiles como objetivo el intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la denunciante.


Asimismo, no se advierte una agresividad ni hostigamiento laboral ya que por una parte la información solicitada por Erika Cecilia Ruvalcaba Corral al Presidente, Ex Secretario Ejecutivo y diversos Directores y Ex Directores del OPLE, como se analizó, en algunos casos no se encontraba en poder de los requeridos, puesto que dicha información no se encontraba dentro del ámbito de sus respectivas competencias, aunado al hecho que la información requerida fue realizada en similares términos a las diversas áreas por lo que la omisión en la entrega de información no fue de forma dolosa ni con el ánimo de hostigar laboralmente a la denunciante.⁹

Hechos que acreditan el acoso laboral o mobbing.

Al respecto, sostengo que las acciones llevadas a cabo y de las cuales se acreditó la falta de entrega de información y la indebida exclusión de comisiones, analizadas en su conjunto y concatenadas las pruebas que integran el expediente, sí acreditan la responsabilidad del Consejero Presidente del OPL Guillermo Amado Alcaraz Cross, al actualizarse el acoso laboral o mobbing en contra de la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

⁸ *Ibid.*, 223.

⁹ *Ibid.*, 226.



En este sentido, no se comparte lo aprobado por la mayoría de los integrantes de este Consejo General, toda vez que el análisis integral de los elementos de pruebas y los recabados por esta autoridad acreditan una pluralidad y variedad de elementos que permiten demostrar la existencia del hecho que se pretende probar, máxime cuando estos elementos guardan estrecha relación con la persona que llevó a cabo su ejecución, como a continuación se demuestra.

Falta de entrega de información, conforme a lo resuelto por la Sala Superior y a diversas documentales públicas:

- Se probó la omisión de entrega de información por parte de los Ex Directores de diversas áreas del OPL de Jalisco, de lo cual se advierten indicios respecto de la posible responsabilidad indirecta y/o conducta irregular por parte del ex funcionario en cita, omisiones que concatenadas entre sí pudieron haber contribuido en la comisión del acoso laboral.
- Quedó acreditado que en ejercicio de sus funciones la quejosa dirigió en diversas fechas solicitudes de información relacionadas con la estructura, procesos y procedimientos de las distintas áreas del OPL en Jalisco, a distintos funcionarios, al Secretario Ejecutivo y al Consejero Presidente, sin que se hayan atendido sus solicitudes o fueron atendidas fuera de tiempo.
- Se acreditó que la información solicitada no fue entregada a la ahora actora derivado de un diverso oficio por el que el Consejero Presidente del OPL, Guillermo Amado Alcaraz Cross, informó que la misma sería proporcionada por conducto de éste o del Secretario Ejecutivo, siendo el caso que, desde octubre de 2014 a octubre de 2015, la información no fue entregada.

En este sentido, es claro que las conductas acreditadas fueron adoptadas a partir de la instrucción dada por el Consejero Presidente del OPL, lo cual genera un indicio respecto al acoso laboral que se ejerció en contra de la denunciante.

Indebida exclusión de comisiones, conforme a lo resuelto por la Sala Superior y a diversas documentales públicas:

- Se acreditó que la quejosa fue excluida indebidamente de Comisiones, específicamente en razón que era la única Consejera que integraba el menor número de éstas, con lo cual, se le obstaculizó para el debido desempeño de sus funciones, y con esa actuación, se incurrió en falta de actuar con el debido profesionalismo e igualdad.

- Se acreditó que la integración de Comisiones resultaba desproporcionada en razón que los Consejeros Mario Alberto Ramos González y Griselda Beatriz Rangel Juárez integraban 7 comisiones cada uno de ellos; las Consejeras Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo y Sayani Mozka Estrada formaban parte de 6 comisiones cada uno de ellas, el Consejero José Reynoso Núñez integraba 4 comisiones y la quejosa sólo integraba 3 comisiones.
- La resolución jurisdiccional concluyó que la exclusión indebida de Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, en la integración de Comisiones, en tanto que era la Consejera que menos de éstas integraba, se le obstaculizó el debido ejercicio del cargo.

En este contexto, la exclusión indebida de la quejosa en la integración de una de las Comisiones, fue consecuencia inmediata y directa de la propuesta motivada por el Consejero Presidente del OPL, bajo ese contexto, es que se estime que las conductas desplegadas son indicios en torno al acoso laboral ejercido en contra de la Consejera Electoral, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral.

A juicio del suscrito, conforme a las consideraciones expuestas se comprobó que el acoso que sufrió la Consejera Electoral se generó a partir de los actos que realizó uno de sus propios colegas -el Consejero Presidente del OPL- quien asumió que la información solicitada por la denunciante no correspondía al ámbito de competencia de las direcciones a las que les fue requerida, pues de acuerdo a su apreciación, esa información era del ámbito administrativo y operativo del Instituto y por ende era atribución exclusiva de la Presidencia en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva entregar la información solicitada, asimismo que era su atribución el solicitar la exclusión de la denunciante de las Comisiones.

En el mismo sentido, es de señalarse que aun y cuando el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo conforman una línea de mando con las áreas que integran dicho órgano electoral, lo anterior no era impedimento para que toda aquella solicitud de información realizada por la Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, recibiera una respuesta o, en su caso, le fuera entregada en tiempo y forma, máxime si se trataba de un cargo que forma parte de la estructura orgánica del OPLE, como lo es el caso de la Consejera Electoral.

No debe perderse de vista que la Consejera Electoral Erika Cecilia Ruvalcaba Corral realizó un total de 22 solicitudes de información a distintas áreas del OPL, información que la denunciante estimó necesaria para el desempeño de su encargo, en su carácter de entonces Presidenta de la Comisión Temporal del Servicio

Profesional Electoral del OPLE Jalisco, las cuales no fueron atendidas o bien fueron atendidas fuera de tiempo, lo que implicó que se obstaculizara o limitara las funciones que tenía a cargo.

Ahora bien, conforme a lo señalado los únicos hechos acreditados son imputables al Consejero Presidente del OPLE Guillermo Amado Alcaraz Cross, quien actuó de manera directa, haciéndose valer de sus facultades extraordinarias, ya sea mediante la propuesta de modificación en la integración de las Comisiones, para excluir a la quejosa; así como a través del memorándum 14/15, por el que asumió que la información solicitada por la denunciante era del ámbito administrativo y operativo del Instituto y que era atribución exclusiva de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva el ser entregada por su conducto.

En suma, se considera que existían los elementos suficientes para determinar fundado el procedimiento, toda vez que fueron acreditadas las conductas desde un enfoque integral, pues se afectó directamente el derecho de la quejosa de desempeñar su cargo como Consejera Electoral en un ambiente laboral adecuado al haberse obstaculizado el ejercicio de las atribuciones; ello, al quedar plenamente acreditado que los hechos que motivaron la denuncia se desarrollaron de manera sistemática y concatenados por parte del Consejero Presidente del OPLE y tuvieron como objetivo menoscabar a la quejosa, en el ejercicio y goce de sus derechos, como integrante del citado Instituto local.

Por las razones expresadas no acompaño las consideraciones contenidas en la Resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales.



JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo al Procedimiento mediante el cual se realiza el sorteo del mes, que junto con el que sigue en su orden, será tomado como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el apartado 1.2 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Sírvase a proceder al sorteo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros y representantes, como ustedes saben conforme al procedimiento previsto en el artículo 254, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el apartado 1.2 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, los cuales establecen que el Consejo General durante el mes de diciembre del año previo a la elección sorteará un mes del calendario, que junto con el que sigue en su orden serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. _____

Por otro lado, vale la pena recordar que el sorteo realizado en el mes de enero del presente año para el Proceso Electoral 2017-2018 tuvo como resultado el mes de febrero y consecuentemente marzo. Por lo que la integración de las mesas se realizó primordialmente con la ciudadanía nacida en esos meses. _____

Así con el objeto de garantizar a la ciudadanía su participación para el proceso en curso se tomaron las previsiones pertinentes para que la base de la insaculación no

recayera en las y los ciudadanos que recién participaron en la Jornada Electoral celebrada el pasado 1 de julio. _____

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del pasado 4 de septiembre, se aprobó que en el sorteo del mes que se lleve a cabo para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, deberán excluirse los meses de enero, febrero y marzo, dichas previsiones se establecieron en el Acuerdo INE/CG1232/2018 en el Considerando 38 y en el Punto Segundo del Acuerdo. _____

En cumplimiento al precepto legal citado, y para la realización del sorteo que se menciona, se ha preparado un contenedor transparente colocado al frente de esta mesa, en el cual con el auxilio de la compañera Claudia Verdín y el compañero Auric Orozco se excluirán los meses de enero, febrero y marzo. _____

Les pido muestren y separen primero enero, febrero, enero por favor se excluye. _____

Después febrero por favor, también para ser excluido. _____

Y se referencia al Acuerdo correspondiente de este órgano colegiado. _____

Y finalmente, marzo. _____

Muchas gracias Compañera Claudia Verdín. _____

Esos 3 meses serán excluidos, y a continuación les pido incorporar los meses del año restantes a cada una de las 9 cápsulas, empezando por abril. _____

Mayo, por favor. _____

Junio. _____

Julio. _____

Agosto. _____

Septiembre. _____

Octubre. _____

Noviembre. _____

Finalmente, diciembre. _____

Ahora, le agradeceré al Licenciado Auric Alexis Calvo que gire, por favor, el contenedor. _____

Muchas gracias. _____

Claudia Verdín si es tan amable, de extraer la esfera y decirnos cuál es el mes. _____
Julio. _____

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, el mes obtenido en el Sorteo es el mes de julio, que, junto con el siguiente mes, el de agosto, servirán de base para la selección de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, en términos del artículo 254 de la Ley de la materia, durante las elecciones del próximo 2 de junio de 2019. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las autoridades electorales locales para el primer trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenos días a todas y todos, Consejeras, Consejeros, miembros de los partidos políticos, honorable Consejo General. _____

En este criterio de distribución de los tiempos entre autoridades electorales, este criterio de distribución de tiempos de radio y televisión establecido en porcentajes como es el 25 por ciento para las autoridades electorales locales, y el 75 por ciento

para el Instituto Nacional Electoral, se ha aplicado desde la Reforma Electoral del 2014 como todos sabemos, y para aquellas entidades que no celebran Proceso Electoral, que para el año 2019 serán 27 estados. _____

Cabe recordar que este criterio de distribución de tiempos se aplicará con el Modelo de Distribución de Pauta Igualitario que se estableció también por este Instituto entre los partidos políticos y las autoridades electorales, y recientemente ajustado, evidentemente por el Instituto Nacional Electoral, para operar a partir del primer trimestre del año 2019. _____

Por lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional acompaña el Proyecto de Acuerdo correspondiente. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora representante. _____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que corresponde. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 4. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1467/2018) Pto. 4 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ORDINARIO FEDERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN

ANTECEDENTES

- I. Asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales, cuarto trimestre de dos mil dieciocho.** El doce de septiembre de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el cuarto trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”*, identificado como INE/CG1259/2018.
- II. Catálogo Nacional de Emisoras 2019.** El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en la décima primera sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y el periodo ordinario durante dos mil diecinueve, para dar cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se actualiza el catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas”* identificado como INE/ACRT/85/2018. Publicación ordenada mediante el diverso INE/CG1422/2018.

CONSIDERACIONES

Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y televisión

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos y candidatos, siendo independiente en sus decisiones y funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

2. El artículo 35, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj) en relación con el inciso n) del mismo; 162, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, inciso a) y 6, numeral 1, incisos e) e i) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es competencia del Consejo General aprobar la asignación trimestral de tiempos en radio y televisión destinado a las autoridades electorales.

Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad con la normativa aplicable

4. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11, numerales 1, 3 y 4 del Reglamento de la materia, disponen que el Instituto, por conducto de este Consejo General,

determinará la asignación, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos.

5. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 181 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; señalan que el Instituto tendrá a su disposición fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral hasta el doce por ciento **(12%)** del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, lo cual se traduce en el total semanal siguiente:

TIPO DE EMISORA	TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO	
	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	54 minutos 36 segundos	40 minutos 15 segundos
Concesionarias de uso público y social	25 minutos 12 segundos	

6. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al Instituto durante el periodo ordinario, se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales y locales en forma igualitaria el cincuenta por ciento **(50%)**, y el cincuenta por ciento **(50%)** restante, se distribuirá entre el Instituto y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total semanal siguiente:

TIPO DE EMISORA	TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES ELECTORALES	
	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	27 minutos 18 segundos	20 minutos 7.5 segundos
Concesionarias de uso público y social	12 minutos 36 segundos	

7. De conformidad con el artículo 11, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se determina la asignación de tiempos en radio y televisión para las autoridades electorales, con base en el criterio específico de distribución semanal siguiente:

En aquellas entidades en que no se celebrarán elecciones locales, a las autoridades electorales locales que hayan presentado oportunamente su solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará aproximadamente un veinticinco por ciento **(25%)** del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento **(75%)** restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines.

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde no se celebre un Proceso Electoral Local, durante el periodo ordinario es el siguiente:

TIPO DE EMISORA	AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	
	25%		75%	
	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	6 minutos 49 segundos	5 minutos 1.8 segundos	20 minutos 29 segundos	15 minutos 5.6 segundos
Concesionarias de uso público y social	3 minutos 9 segundos		9 minutos 27 segundos	

8. Las autoridades electorales deben presentar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos las solicitudes de tiempo en radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines, con treinta días de anticipación al inicio del trimestre correspondiente y en la medida de lo posible, deberán acompañar a su solicitud los materiales respectivos, lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos 161; 164, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 11, numerales 2, 3 y 4 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

En ese sentido, las autoridades electorales locales, contempladas para la asignación que por esta vía se aprueba, siempre que presenten la respectiva solicitud en tiempo y forma, son las siguientes

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
Aguascalientes	Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
	Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
Baja California	Instituto Estatal Electoral de Baja California
	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California
Baja California Sur	Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
	Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur
Campeche	Instituto Electoral del Estado de Campeche
	Tribunal Electoral del Estado de Campeche
Chiapas	Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
	Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
	Fiscalía de Delitos Electorales
Chihuahua	Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
	Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua
Ciudad de México	Instituto Electoral Ciudad de México
	Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Coahuila	Instituto Electoral de Coahuila
	Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
	Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila
Colima	Instituto Electoral del Estado de Colima
	Tribunal Electoral del Estado de Colima
Durango	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango
	Tribunal Electoral del Estado de Durango
Guanajuato	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
	Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
Guerrero	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
	Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
	Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero
Hidalgo	Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
	Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
	Subprocuraduría de Asuntos Electorales
Jalisco	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
	Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
México	Instituto Electoral del Estado de México
	Tribunal Electoral del Estado de México
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
Michoacán	Instituto Electoral de Michoacán
	Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
Morelos	Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
	Tribunal Electoral del Estado de Morelos
	Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos
Nayarit	Instituto Estatal Electoral de Nayarit
	Tribunal Estatal Electoral de Nayarit
Nuevo León	Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
	Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
	Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León
Oaxaca	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
	Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
Puebla	Instituto Electoral del Estado
	Tribunal Electoral del Estado de Puebla

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
Querétaro	Instituto Electoral del Estado de Querétaro
	Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
Quintana Roo	Instituto Electoral de Quintana Roo
	Tribunal Electoral de Quintana Roo
San Luis Potosí	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del estado de San Luis Potosí
Sinaloa	Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
	Tribunal Electoral de Sinaloa
Sonora	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
	Tribunal Estatal Electoral de Sonora
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora
Tabasco	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
	Tribunal Electoral de Tabasco
Tamaulipas	Instituto Electoral de Tamaulipas
	Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
Tlaxcala	Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
	Tribunal Electoral de Tlaxcala
Veracruz	Organismo Público Local Electoral de Veracruz
	Tribunal Electoral de Veracruz
Yucatán	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán
	Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
Zacatecas	Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

9. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades electorales y al Instituto Nacional Electoral se utilizará con la transmisión de mensajes de treinta segundos, la adecuación no puede ser exacta, por lo que una vez que se haya determinado el total de spots correspondientes, en caso de que existan fracciones restantes y estas puedan ser optimizadas, serán asignadas al Instituto Nacional Electoral.
10. Para aquellas autoridades electorales de las entidades federativas en las que durante el trimestre en que se asignan tiempos en radio y televisión, se

celebren Procesos Electivos Especiales, tales como referéndums, elección de comités ciudadanos y otros que impliquen la participación directa de la ciudadanía, la distribución de tiempos se hará de conformidad con lo siguiente:

- a) Del tiempo disponible en radio y televisión correspondiente al periodo ordinario, cuarenta por ciento **(40%)** se asignará al Instituto Nacional Electoral; cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral; y el veinte por ciento **(20%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales que hayan presentado la solicitud correspondiente al trimestre que se trate.

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde se celebre un Proceso Electivo Especial, durante el periodo ordinario es el siguiente:

TIPO DE EMISORA	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL		AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES	
	40%		40%		20%	
	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	10 minutos 55.2 segundos	8 minutos	10 minutos 55.2 segundos	8 minutos	5 minutos 27.6 segundos	4 minutos
Concesionarias de uso público y social	5 minutos 2.4 segundos		5 minutos 2.4 segundos		2 minutos 24 segundos	

- b) Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo Especial de que se trate; y
- c) Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas en las que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este y presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta días previos a aquel en que se celebra la jornada correspondiente.

11. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3; y 43, numerales 12 y 13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el caso de las autoridades electorales locales que habiendo solicitado tiempos en radio y televisión no remitan el material correspondiente, de conformidad con los calendarios y órdenes de transmisión que determine la Junta General Ejecutiva, dicho tiempo quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral.

Fundamentos para la emisión del Acuerdo

<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>
Artículo 41, Base III, apartado A, inciso g).
<i>Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales</i>
Artículos 30, numeral 1, inciso h); 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj) en relación con el inciso n); 160, numeral 1; 161; 162, numeral 1, inciso a); 164, numeral 1; 181 y 182, numeral 1, incisos a) y b).
<i>Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral</i>
Artículos 4, numerales 1 y 2, inciso a); 6, numeral 1, incisos e) e i); 8, numerales 1 y 2; 11, numerales 1, 2, 3 y 4; y 43, numerales 12 y 13.

En razón de los antecedentes, consideraciones y fundamentos señalados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina la asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales locales durante el primer trimestre del año dos mil diecinueve, correspondiente al periodo ordinario, de conformidad con los siguientes criterios específicos:

- a) A las autoridades electorales locales en las entidades en las que no se celebren elecciones locales, que hayan presentado oportunamente su solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará un veinticinco por ciento **(25%)** del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes

iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento **(75%)** restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines.

- b) A las autoridades electorales de las entidades federativas en las que durante el primer trimestre del año dos mil diecinueve se celebren Procesos Electivos Especiales y que presenten oportunamente su solicitud se les asignará: cuarenta por ciento **(40%)** al Instituto Nacional Electoral; cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral; y el veinte por ciento **(20%)** restante se dividirá en partes iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales.

Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo Especial de que se trate.

Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades en que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de éste y presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta días previos a que se celebre la jornada correspondiente.

SEGUNDO. En caso de que las autoridades electorales no hayan realizado la solicitud correspondiente, el tiempo que les corresponda será utilizado por el Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. El presente Acuerdo resultará aplicable durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. Asimismo, será aplicable en las entidades federativas con Proceso Electoral 2018-2019, en tanto no inicie la respectiva etapa de precampaña.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con auxilio de las Juntas Locales Ejecutivas correspondientes, notifique el presente Acuerdo a cada una de las autoridades electorales locales.

QUINTO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos una vez aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de miembros de los Ayuntamientos de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración el Proyecto de Dictamen Consolidado y el de Resolución mencionados. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

En relación con estos Proyectos de Dictamen Consolidado y de Resolución, en los mismos términos que lo hice en la Comisión de Fiscalización, acompañaré los Proyectos que la Comisión somete a consideración del Consejo General. _____

Solamente solicitaría votaciones diferenciadas respecto de distintos puntos, por una parte, respecto de la matriz de precios que está siendo empleada, que es la misma que se utilizó en el pasado Proceso Electoral Ordinario concurrente, que fue uno de mis motivos de disenso en ese punto. _____

En un segundo lugar por la disminución en diversos criterios de sanción también en los términos de lo que ha sido discutido en la fiscalización de los Procesos Electorales Ordinarios. _____

En tercer lugar, por lo que hace a la reducción ministerial que pasó del 50 por ciento al 25 por ciento de reducción. _____

Y en cuarto lugar por lo que hace al tratamiento de la subsanación que se da en el oficio de errores y omisiones. _____

Pediría que estos 4 puntos, por favor, se sometan a votación en lo particular para poder acompañar el Proyecto en lo general. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para efectos de la votación en realidad es que respecto al conjunto de criterios de disminución yo necesito que se tome aparte el que tiene que ver con egreso no reportado, es decir, que estaba en más de 100 por ciento, y ahora está en 100. _____

Creo que, este órgano colegiado debiera reflexionar nuevamente sobre esa pertinencia de tal criterio, es decir, hacemos un esfuerzo para encontrar el egreso no reportado, pero no hay sanción. En realidad, es lo que de suyo tenían que haber reportado, la sanción sería si a ese monto se le agregase algo más. _____

Creo que, ahí no estamos haciéndole justicia al esfuerzo de quienes están haciendo la fiscalización. _____

Sobre ese criterio sí me mantengo aparte, los demás si ya bajaron las Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo he reflexionado, creo que se podría pasar de alguna forma; pero a éste sí no le encuentro absolutamente ninguna razonabilidad. _____

En suma, sobre ese criterio de reducción tomar aparte la votación respecto del egreso no reportado, ya en lo demás se vería la votación. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente._____

Brevemente, con el afán de explicar la razonabilidad del criterio que adoptó la Comisión de Fiscalización respecto al gasto no reportado._____

Cuando la Unidad Técnica de Fiscalización lo detecta, lo comprueba, el infractor sufre 2 consecuencias después de haber incurrido en el gasto, uno es que tiene que además de haber incurrido en el gasto, pagarlo al Instituto Nacional Electoral como multa. Y dos, con la valuación más alta que se desprenda de la matriz de precios._____

La lógica de este criterio es que es suficientemente inhibitorio, puesto que al final del día, estarán pagando el 200 por ciento porque no solamente incurrirán en el gasto, sino además tendrán que solventar la multa por la misma cantidad estimada en el nivel más alto de la matriz de precios._____

Ésa es la lógica detrás del criterio que ha propuesto y confirmado este Consejo General de sanción por gasto no reportado Consejero Presidente._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Éste es uno de los criterios, yo no coincido con el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña de aceptar los demás criterios que se han modificado, éste forma parte de los criterios que no comparto porque, efectivamente, el tema de que se adopte el valor más alto de la matriz de precios no es una sanción, es un mecanismo que hemos establecido para garantizar que no se beneficie un partido político por no reportar un gasto, si hay un gasto que no reportó, éste puede ser el más alto o el más bajo de la matriz de precios, pero si utilizamos cualquiera que no sea el más alto, existe la posibilidad de que el partido político haya gastado el valor más alto y se esté beneficiando por el hecho de no reportar._____

No es una sanción como tal, es una garantía de estar incorporando el valor que le correspondería eventualmente, y que no sabemos cuál es por la omisión del partido político, pero no acompaño que eso se considere una sanción. Y lo que se está estableciendo, efectivamente, es el monto involucrado, exclusivamente que es aquello que omitió reportar el partido político. _____

Me mantengo en lo que discutimos en la fiscalización ordinaria, resulta que ahora reducimos las sanciones en lugar de tomar una medida distinta, y hay una reducción que me parece que es incomprensible y que, efectivamente, va en contra de las propias funciones de fiscalización que tenemos y del efecto que tiene el no reporte de gastos, porque el efecto que tiene el no reporte de gastos es el que no podamos detectar si un sujeto regulado alcanzó o rebasó el tope de gasto de campaña que es una de las principales medidas de igualdad que se ha establecido en nuestro Sistema Jurídico, que tiene, incluso como consecuencia puede llevar hasta la anulación de una elección, por lo que no comparto ese criterio dentro de los demás, en esa parte me separo de lo que señala el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Por otra parte, pediría solamente que se incorporara esto, creo que es en lo general, hay una, no está bien referido en el Proyecto la votación en la Comisión de Fiscalización porque en la Comisión pedí que se excluyeran los mismos puntos que estoy pidiendo ahora y no están reflejados todos en el Proyecto, solo para que se haga el ajuste correspondiente en el Proyecto. Esto creo que se puede incluir en lo general. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación. ____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Les propongo a ustedes 3 votaciones, una en lo general, incluyendo en ella las fe de erratas que se circularon previamente, y el ajuste que propone la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, pero excluyendo de esa votación en lo general las 4

consideraciones que en su primera intervención hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Y luego para otra votación en lo particular por lo que hace a la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que hace referencia de excluir de esta votación en lo general, por el criterio de ingreso no reportado. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 5, incluyendo en esta votación en lo general las fe de erratas circuladas previamente, el ajuste que solicita la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, y excluyendo de la misma las consideraciones que hicieron la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estas condiciones, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora someteré a su consideración, en el orden en que fueron presentadas, primero, por lo que hace en lo particular, las propuestas, las 4 consideraciones de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, primero en el sentido del Proyecto. _____

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto en estos 4 casos, sírvanse manifestarlo, si son tan amables, como viene en el Proyecto. _____

9 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobados en lo particular estos 4 criterios por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración, por lo que hace a la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en relación al ingreso no reportado. _____

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto, por favor. _____

9 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

INE/CG1468/2018 _____

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de miembros de los Ayuntamientos de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1469/2018) Pto. 5_____

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BEJUCAL DE OCAMPO, CATAZAJÁ, CHICOASÉN, EL PORVENIR, MONTECRISTO DE GUERRERO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, SAN ANDRÉS DURAZNAL, SANTIAGO EL PINAR, SOLOSUCHIAPA Y TAPILULA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATO INDEPENDIENTE)

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, así como de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, a los cargos de miembros de los Ayuntamiento de los Municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo De Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las precampañas de los candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y locales-.

III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

IV. El veintiocho de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 115, 4° sección, el Decreto número 514, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas ordenando en su artículo cuarto transitorio, las reformas y adiciones al Código de Elecciones y Participación Ciudadana y demás ordenamientos aplicables en el ámbito local.

V. El seis de junio de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/CG45/2014, se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

VI. El treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 117, el Decreto número 520, por el que se establece la vigésima reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, difundándose en esa misma fecha, en el mismo periódico oficial el Decreto número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

VII. El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.

VIII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo **INE/CG398/2017**, a través del cual ejerce la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los Procesos Electorales 2017-2018.

IX. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de representación proporcional.

Inconforme con el referido Acuerdo, el tres de abril de dos mil diecisiete, Morena, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación, identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-131/2017.

Una vez desahogados los trámites de ley, en sesión pública celebrada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad confirmó el Acuerdo CF/005/2017, emitido por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

X. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018.

XI. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el Acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con

las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogados los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del Acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

XII. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017 por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

XIII. Mediante Sesión de treinta de octubre del dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas, aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/054/2017**, por el que se resolvió el proyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual de este organismo electoral local, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

XIV. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

XV. En sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo **INE/CG615/2017**, por medio del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el Acuerdo referido el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática presentaron diversos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG615/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con la clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y SUP-RAP-787/2017, para posteriormente ser turnados a la ponencia de la magistrada presidenta Janine M. Otálora Malassis, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, confirmando el Acuerdo impugnado.

XVI. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo **INE/CG22/2018**, por el que se aprueba el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales nacionales en el sistema de registro nacional de proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de Fiscalización, así como la invitación y Lineamientos para el proceso de refrendo 2018, de conformidad con el artículo 359 bis del mismo ordenamiento.

Inconformes con el Acuerdo de mérito, el partido Morena interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo **INE/CG22/2018**, mismo que quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del expediente **SUP-RAP-13/2018**, para posteriormente turnarlo a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el recurso referido, en sesión pública de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el Acuerdo impugnado.

XVII. Mediante sesión de veintidós de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/013/2018** por el que, a propuesta de la comisión permanente de asociaciones políticas, se establecen los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos durante el ejercicio 2018.

XVIII. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo **CF/001/2018** por el que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.

XIX. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo **INE/CG85/2018**, por el que se determinó no enviar el oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular.

Inconformes con el Acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil dieciocho respectivamente los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo **INE/CG85/2018**, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-21/2018, SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el Acuerdo impugnado.

XX. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo **CF/003/2018** por el que se modifica el artículo segundo del Anexo 2, del Acuerdo **CF/012/2017**, mediante el cual se determinaron los alcances de revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña

del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso

XXI. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo **INE/CG150/2018** por el que se aprueba el modelo para la operación del sistema para el registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, generales y ante mesas directivas de casilla, para el Proceso Electoral 2017–2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo.

XXII. El primero de julio de dos mil dieciocho, se celebró la Jornada electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

XXIII. Derivado de los resultados obtenidos en las sesiones de cómputo celebradas entre el día cuatro y siete de julio de dos mil dieciocho, actores e Institutos Políticos promovieron medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

XXIV. El veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el Expediente TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018, TEECH/JDC/252/2018 y acumulados, declaró la invalidez de la elección del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas.

XXV. El seis de septiembre dos mil dieciocho, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente SX/-JRC-229/2018, SX/-JRC-230/2018 y SX/-JRC-689/2018 acumulados, declaró la invalidez de la elección del Ayuntamiento de San Andrés Duraznal,

XXVI. El doce de septiembre dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo **INE/CG1305/2018**, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería integrada por las Consejeras Electorales Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y Adriana Margarita Favela Herrera, así como los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández.

XXVII. En misma fecha, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente SX/-JDC-819/2018, confirmo la sentencia TEECH/JNE-M/011/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-M/012/2018,

TEECH/JNE-M/013/2018, TEECH/JNE-M/014/2018, TEECH/JNE-M/090/2018 y TEECH/JI-M/0140/2018 del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, decretó la nulidad de la elección para integrar el Ayuntamiento de Solosuchiapa, Chiapas.

XXVIII. El catorce de septiembre dos mil dieciocho, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias SX-JRC-308/2018 y SX-JRC-311/2018 acumulados, confirmó el resolutivo TECH/JNE-M/091/2018, del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas anuló las elecciones para integrar el Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas.

XXIX. En misma fecha, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-320/2018, declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas.

XXX. El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación de Chiapas, a propuesta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo **IEPC/CG-A/189/2018**, por el que, da respuesta al escrito de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia de Oxchuc, Chiapas, mediante el cual solicitó celebrar sus elecciones municipales a través del sistema de usos y costumbres, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, con número de expediente TEECH/JDC/019/2017 y acumulados.

XXXI. El treinta de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-REC-1356/2018, SUP-REC-1357/2018 y SUP-REC-1358/2018 al diverso SUP-REC-1321/2018, confirmó la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Xalapa de ese Tribunal, en el expediente SXJDC-837/2018, SX-JDC-838/2018, SX-JDC-839/2018 y SX-JDC-849/2018 acumulados, que declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas.

XXXII. En misma fecha, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-1282/2018 y sus acumulados SUP-REC-1288/2018, SUP-REC-1291/2018 y SUP-REC-1292/2018 confirmó la resolución emitida por el Tribunal Local del estado de Chiapas, de treinta y uno de agosto de este año, en el Expediente TEECH/JNE-M/011/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-M/043/2018, TEECH/JNE-M/044/2018, TEECH/JNE-M/124/2018, que

decretan la nulidad de la elección para integrar el Ayuntamiento de Santiago el Pinar, Chiapas.

XXXIII. El treinta de septiembre del año en curso se expidió el **Decreto 310**, mismo que fue publicado en el periódico oficial del estado de Chiapas, número 398, dictado por el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, convoca a Elección Extraordinaria para elegir integrantes de los Ayuntamientos Municipales de Solosuchiapa, el Porvenir, Santiago el Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo, todos del estado de Chiapas, a celebrarse el veinticinco de noviembre del año dos mil dieciocho.

XXXIV. El primero de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones realizó la declaratoria de conclusión del Proceso Local Electoral Ordinario 2017-2018.

XXXV. El cinco de octubre de dos mil dieciocho el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo **IEPC/CG-A/194/2018** por el que a propuesta del Consejero Presidente de ese organismo electoral local, se emitió la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para elegir miembros de Ayuntamiento de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo De Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas.

XXXVI. En misma fecha, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el Acuerdo **IEPC/CG-A/195/2018**, mediante el cual que aprobó el calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para las elecciones de miembros de Ayuntamiento de los Municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo De Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas.

XXXVII. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, dio inicio el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

XXXVIII. En misma fecha, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el Acuerdo **IEPC/CG-A/199/2018**, mediante el cual expidió la convocatoria con sus anexos, para el registro de candidaturas independientes a miembros de Ayuntamiento de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula

San Pedro, Montecristo De Guerrero, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, Chiapas, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

XXXIX. En misma fecha, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/200/2018**, mediante el cual determinó el monto y distribución del financiamiento público para gastos de campaña a otorgarse a los partidos políticos con acreditación y registro ante este Organismo Electoral Local en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en estado de Chiapas.

XL. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el Acuerdo **IEPC/CG-A/202/2018** mediante el cual fijó los topes de gastos de campaña electorales que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y sus precandidatos, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

XLI. En misma fecha, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/203/2018** por el que se ratifican y adecúan diversos Acuerdos aprobados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, relativo a los temas de “paridad de género”, “candidatura común”, “candidaturas independientes”, “elección consecutiva y/o reelección”, “acreditación de representantes de partidos y candidatos independientes ante consejos municipales”, “régimen de excepción”, y “registro de candidaturas”, en lo que aplique únicamente para la elección de integrantes del Ayuntamiento en los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

XLII. Mediante Acuerdo **IEPC/CG-A/204/2018**, de ocho de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió los criterios extraordinarios para la integración de los Consejos Municipales Electorales con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

XLIII. Del periodo del ocho al quince de octubre de dos mil dieciocho transcurrió el plazo para que los partidos políticos presentaran solicitud para formar coaliciones o candidaturas comunes, sin que el Organismo Público Local recibiera solicitud alguna, por lo que dichos Institutos Políticos participarán de forma individual en la

Jornada Electoral Extraordinaria 2018 a celebrarse el veinticinco de noviembre del año en curso.

XLIV. El diecisiete de octubre de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto del Electoral, emitió el Acuerdo **INE/CG1361/2018**, mediante el cual aprobó el plan integral y calendarios de coordinación para los Procesos Electorales Locales extraordinarios, derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018, en los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago del Pinar, Tapilula , Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero, en el estado de Chiapas, y en los municipios de San Dionisio del mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca.

XLV. El treinta y uno de octubre siguiente, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió el Acuerdo **INE/CG1380/2018**, mediante el cual se aprobó la modificación de los plazos para la fiscalización de las precampañas, apoyo ciudadano y campañas de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2017-2018.

XLVI. El seis de noviembre del presente año, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/221/2018**, mediante el cual determinó el financiamiento público para gastos de campaña del candidato independiente que se postuló para la elección de Miembros de Ayuntamiento en el marco Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

XLVII. En esa misma fecha, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo **IEPC/CG-A/222/2018**, mediante el cual determinó el límite del financiamiento privado que podrá recibir durante el periodo de campaña el candidato independiente que se postula para la elección de Miembros de Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

XLVIII. El doce de noviembre de la presente anualidad, mediante Acuerdo **IEPC/CG-A/225/2018**, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la solicitud de sustitución presentada por Morena, a partir de la renuncia del candidato a tercer Regidor Propietario de la planilla de miembros de Ayuntamiento del Municipio de Catazajá, Chiapas, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

XLIX. El veinticinco de noviembre se llevó a cabo la Jornada Electoral en los municipios de Bejucal De Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Provenir, Montecristo De Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

L. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de Fiscalización elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, inciso a), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Mismo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, fue aprobado en lo general por unanimidad de los Consejeros Electorales presentes, las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández; y, en lo particular, con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, en cuanto hace al porcentaje de reducción de ministración, la disminución a los diversos criterios de sanción y a la matriz de precios utilizada, así como el tratamiento que le ha dado al Oficio de Errores y Omisiones.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.

2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a

cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

4. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6; así como en el penúltimo párrafo del mencionado artículo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente mediante la integración exclusiva de Consejeros Electorales designados por el Consejo General, contando con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.

9. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

10. Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.

11. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes presenten respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.

12. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de campaña en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios, para cada uno de los candidatos a cargo de elección

popular, registrados para cada tipo de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

13. Que de conformidad con el artículo 45, fracción XXI de la Constitución Política del estado libre y soberano de Chiapas, es una atribución del Congreso del Estado emitir la convocatoria para elecciones extraordinarias en los términos que señalen las leyes.

14. Que en apego a lo dispuesto en el artículo 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los candidatos independientes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto, los informes de campaña respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto, aplicación y destino de dichas erogaciones. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

Acorde a lo anterior, el artículo 1 del Reglamento de Fiscalización establece que es de orden público, observancia general y obligatoria, entre otros, para los candidatos independientes, incluyendo las inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, así como la rendición de cuentas.

Por lo tanto, los candidatos independientes, son los sujetos que harán frente a las obligaciones en materia de fiscalización y en su caso, de las responsabilidades administrativas que se actualicen derivado de la revisión de los informes de campaña.

15. Que de conformidad con los artículos 80 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 428 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los de los partidos políticos.

16. Que de conformidad con el artículo 426 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que

presenten los candidatos independientes sobre el origen y destino de los recursos por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

17. De conformidad con el Acuerdo **IEPC/CG-A/195/2018** emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, se establecen los periodos de fiscalización, y los periodos de precampaña intercampaña y campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario, en el estado de Chiapas, concretándose los siguientes:

	PRECAMPAÑA	INTERCAMPAÑA	CAMPAÑA
	22/10/2018	27/10/2018	07/11/2018
	26/10/2018	06/11/2018	21/11/2018

18. De conformidad con el Acuerdo **IEPC/CG-A/202/2018** emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se determinaron los topes de gastos de campaña que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes, sus Candidatos, y Candidatos Independientes, en el Marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para la elección de miembros de Ayuntamiento en los Municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Solusuchiapa, Tapilula, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, mismo que se indica a continuación:

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO								
CVE	Municipio	20% UMA (A)	L.N.(B)	DURACIÓN CAMPAÑA (C)	DENSIDAD POBLACIÓN (D)	COND.GE OGRAFS (E)	PROM. DE VALORES (D+E)/2=F	TOPE MÁXIMO DE GASTO DE CAMPAÑA EXTRAORDINARIA (AxBxCxF)
10	Bejucal de Ocampo,	15.09	5,047	0.50	1.66	1.00	1.33	50,645.89
16	Catazajá,	15.09	12,940	0.50	1.66	1.33	1.495	145,960.29
29	Chicoasén	15.09	4,092	0.50	1.66	1.00	1.33	41,062.61
70	El Porvenir	15.09	8,652	0.50	1.66	1.00	1.33	86,821.52
85	Solusuchiapa	15.09	4,999	0.50	1.66	1.00	1.33	50,164.22
92	Tapilula	15.09	8,130	0.50	1.66	1.00	1.33	81,583.33
116	Montecristo de Guerrero	15.09	4,923	0.50	1.66	1.33	1.495	55,530.33
117	San Andrés Duraznal	15.09	2,677	0.50	1.66	1.00	1.33	26,863.29
118	Santiago el Pinar	15.09	2,240	0.50	1.66	1.00	1.33	22,478.06
124	Rincón Chamula San Pedro	15.09	4,319	0.50	1.66	1.00	1.33	43,340.52

19. Que los partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones, son los sujetos obligados a presentar los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos que se postulan al cargo de Presidente Municipal, correspondientes al

Proceso Electoral Local Extraordinario correspondientes en el estado de Chiapas, son aquellos con registro o acreditación local, siendo por tanto, los sujetos que harán frente a las obligaciones en materia de fiscalización y en su caso, de las responsabilidades administrativas que se actualicen derivado de la revisión de los informes de campaña.

Sin embargo, transcurrido el periodo para que los partidos políticos presentaran solicitud para formar coaliciones o candidaturas comunes la cual abarcó del periodo del ocho al quince de octubre de dos mil dieciocho, sin que el Organismo Público Local recibiera solicitud alguna, consecuentemente dichos Institutos Políticos participarán de forma individual en la Jornada Electoral Extraordinaria 2018.

20. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, mediante Acuerdo **IEPC/CG-A/200/2018** el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas de ese Organismo Local, determinó el monto y la distribución del financiamiento público para gastos de campaña a otorgarse a los partidos políticos con acreditación y registro ante ese Organismo Electoral Local en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para elegir miembros del Ayuntamiento de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Solosuchiapa, Tapilula, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Rincón Chamula San Pedro, Chiapas:

PARTIDO POLÍTICO	FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA
	(50% DEL FINAN. PUBL. ORD.2018)
Partido Acción Nacional	\$6,835,704.90
Partido Revolucionario Institucional	\$15,453,071.73
Partido de la Revolución Democrática	\$6,867,802.95
Partido del Trabajo	\$1,703,989.61
Partido Verde Ecologista de México	\$23,686,982.82
Movimiento Ciudadano	\$1,703,989.61
Nueva Alianza	\$1,703,989.61
Chiapas Unido	\$8,363,462.45
MORENA	\$8,762,301.32
Partido Encuentro Social	\$1,703,989.61

PARTIDO POLÍTICO		FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA	
		(50% DEL FINAN. PUBL. ORD.2018)	
Podemos Mover Chiapas		\$8,414,215.78	
TOTAL		\$85,199,480.42¹	

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
PAN	INE/CG1107/2018	PRIMERO	33.1	1_C8_P3	\$140,377.80	\$78,958.97
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C12_P3	\$17,965.80	\$17,965.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C2_P3	\$4,594.20	\$4,594.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C9_P3	\$24,421.80	\$24,421.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C14_P3	\$95,752.80	\$95,752.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C1_P3	\$564.20	\$564.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C8_P3	\$4,271.80	\$4,271.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C13_P3	\$9,107.80	\$9,107.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C16_P3	\$4,477.57	\$4,477.57
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C4_P2	\$3,859.32	\$3,859.32
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C5_P3	\$19,320.93	\$19,320.93
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C10_P3	\$2,609.38	\$2,609.38
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C11_P3	\$34,015.04	\$34,015.04
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C17_P3	\$853.93	\$853.93

¹ No obstante que el monto señalado haya sido publicado de esta manera en el acuerdo **IEPC/CG-A/200/2018**, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el monto total corresponde a \$85,199,500.00.

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C18_P3	\$44,832.20	\$44,832.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C19_P3	\$306.74	\$306.74
	SUMA					\$345,912.48
PRD	INE/CG1107/2018	TERCERO	33.3	3_C6_P3	\$103,254.45	\$29,777.65
	INE/CG1107/2018	TERCERO	33.3	3_C7_P3	\$6,699.62	\$6,699.62
	INE/CG1107/2018	TERCERO	33.3	3_C3_P3	\$9,027.20	\$9,027.20
	INE/CG1107/2018	TERCERO	33.3	3_C5_P3	\$32,395.89	\$32,395.89
	INE/CG1107/2018	TERCERO	33.3	3_C8_P3	\$8.77	\$8.77
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C12_P3	\$18,050.85	\$18,050.85
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C2_P3	\$4,594.20	\$4,594.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C9_P3	\$24,583.00	\$24,583.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C14_P3	\$96,236.40	\$96,236.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C1_P3	\$564.20	\$564.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C8_P3	\$4,271.80	\$4,271.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C13_P3	\$9,188.40	\$9,188.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C16_P3	\$4,498.76	\$4,498.76
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C4_P2	\$3,877.59	\$3,877.59
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C5_P3	\$19,412.39	\$19,412.39
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C10_P3	\$2,621.74	\$2,621.74
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C11_P3	\$34,176.06	\$34,176.06
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C17_P3	\$857.97	\$857.97
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C18_P3	\$45,044.44	\$45,044.44
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C19_P3	\$308.19	\$308.19
	SUMA					\$346,195.12
PT	INE/CG1107/2018	QUINTO	33.5	4_C3_P3	\$20,338.54	\$1,624.40
	INE/CG1107/2018	QUINTO	33.5	4_C6_P3	\$1,209.00	\$1,209.00
	INE/CG1107/2018	QUINTO	33.5	4_C7_P3	\$9,873.07	\$9,873.07
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C2_P2	\$403.00	\$403.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C4_P3	\$13,288.97	\$13,288.97

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C11_P3	\$2,874.26	\$2,874.26
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C16-P3	\$2,814.62	\$2,814.62
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C17_P3_BIS	\$112,279.39	\$112,279.39
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C7_P3	\$9,658.44	\$9,658.44
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C5_P3	\$6,495.43	\$6,495.43
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C3_P2	\$44,513.42	\$44,513.42
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C6_P3	\$416,626.42	\$416,626.42
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C17_P3	\$38,356.08	\$38,356.08
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C2_P3	\$2,337.40	\$2,337.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C9_P3	\$28,367.97	\$28,367.97
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C13_P3	\$200,595.66	\$200,595.66
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C1_P2	\$644.80	\$644.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C10_P3	\$7,657.00	\$7,657.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C12_P3	\$48,198.80	\$48,198.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C8_P3	\$9,658.44	\$9,658.44
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C14-P3	\$19,316.88	\$19,316.88
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C15-P3	\$1,609.74	\$1,609.74
	INE/CG952/2018	CUARTO			\$1,549.26	\$1,549.26
	SUMA					\$979,952.45
MC	IEPC/UTF/046/2015	CUARTO			\$63,770.00	\$40,009.00
	IEPC/UTF/067/2015	TERCERO			\$63,770.00	\$63,770.00
	IEPC/UTF/067/2015	CUARTO			\$63,770.00	\$63,770.00
	IEPC/UTF/024/2015	CUARTO			\$61,380.00	\$58,307.99
	IEPC/UTF/024/2015	QUINTO			\$200,098.00	\$200,098.00
	INE/CG248/2018	CUARTO		1	\$754.90	\$754.90
	INE/CG248/2018	CUARTO		2	\$3,774.50	\$3,774.50
	INE/CG248/2018	CUARTO		3	\$8,199.38	\$8,199.38
	INE/CG248/2018	CUARTO		4	\$5,876.69	\$5,876.69

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG248/2018	CUARTO		5	\$10,420.73	\$10,420.73
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7-C1-P2	\$54,816.28	\$54,816.28
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7_C3_P2	\$806.00	\$806.00
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7_C4_P3	\$12,331.80	\$12,331.80
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7_C5_P3	\$31,837.00	\$31,837.00
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7-C2-P2	\$3,869.81	\$3,869.81
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7_C6_P3	\$76,679.52	\$76,679.52
	INE/CG1107/2018	SEXTO	33.6	7_C7_P3	\$6.39	\$6.39
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C12_P3	\$4,475.25	\$4,475.25
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C2_P3	\$1,128.40	\$1,128.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C9_P3	\$6,045.00	\$6,045.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C14_P3	\$23,857.60	\$23,857.60
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	33.12	10_C1_P3	\$80.60	\$80.60
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C8_P3	\$1,047.80	\$1,047.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C13_P3	\$2,256.80	\$2,256.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C16_P3	\$1,115.35	\$1,115.35
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C4_P2	\$961.35	\$961.35
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C5_P3	\$4,812.81	\$4,812.81
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C10_P3	\$649.99	\$649.99
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C11_P3	\$8,480.75	\$8,480.75
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C17_P3	\$212.71	\$212.71
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C18_P3	\$11,167.63	\$11,167.63
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO SEGUNDO	34.12	10_C19_P3	\$76.41	\$76.41
	SUMA					\$701,696.44
NUAL	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C2-P3	\$11,849.75	\$11,849.75
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C12_P3 BIS	\$813.51	\$813.51
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C12_P3	\$2,603.48	\$2,603.48
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C4-P3	\$886.60	\$886.60

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C5-P3	\$2,176.20	\$2,176.20
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C7-P3	\$483.60	\$483.60
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C10_P3	\$19,263.40	\$19,263.40
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C1-P3	\$403.00	\$403.00
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C3-P3	\$58,032.00	\$58,032.00
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6-C6-P3	\$177,723.00	\$177,723.00
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C8_P3	\$3,627.00	\$3,627.00
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C9_P3	\$37,479.00	\$37,479.00
	INE/CG1107/2018	SÉPTIMO	33.7	6_C11_P3	\$627,471.00	\$627,471.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO CUARTO	33.14	11_C1_P2	\$2,418.00	\$2,418.00
	SUMA					\$945,229.54
MORENA	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C6_P3	\$236,195.45	\$132,193.19
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C17_P3	\$21,744.98	\$21,744.98
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C2_P3	\$1,289.60	\$1,289.60
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C9_P3	\$72,137.00	\$72,137.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C13_P3	\$484,325.40	\$484,325.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C1_P2	\$403.00	\$403.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C10_P3	\$4,352.40	\$4,352.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C12_P3	\$27,323.40	\$27,323.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C8_P3	\$5,475.60	\$5,475.60
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C14-P3	\$10,951.20	\$10,951.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C15-P3	\$912.60	\$912.60
	INE/CG952/2018	TERCERO			\$7,967.66	\$7,967.66
	SUMA					\$769,076.03
PES	INE/CG1107/2018	NOVENO	33.9	9_C1_P3	\$5,239.00	\$5,239.00
	INE/CG1107/2018	NOVENO	33.9	9_C2_P3	\$300.00	\$300.00
	INE/CG1107/2018	NOVENO	33.9	9_C3_P3	\$100.00	\$100.00
	INE/CG1107/2018	NOVENO	33.9	9_C3_P3_BIS	\$262.58	\$262.58
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C4_P3	\$1,464.42	\$1,464.42

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C11_P3	\$316.74	\$316.74
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C16-P3	\$310.17	\$310.17
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C17_P3_BIS	\$12,372.96	\$12,372.96
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C7_P3	\$1,064.34	\$1,064.34
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C5_P3	\$715.78	\$715.78
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C3_P2	\$4,905.29	\$4,905.29
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C6_P3	\$45,911.36	\$45,911.36
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C17_P3	\$4,226.76	\$4,226.76
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C2_P3	\$241.80	\$241.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C9_P3	\$14,024.40	\$14,024.40
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C13_P3	\$94,140.80	\$94,140.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C10_P3	\$806.00	\$806.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C12_P3	\$5,239.00	\$5,239.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12_C8_P3	\$1,064.34	\$1,064.34
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C14-P3	\$2,128.68	\$2,128.68
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO TERCERO	33.13	12-C15-P3	\$177.39	\$177.39
	INE/CG952/2018	QUINTO			\$1,549.26	\$1,549.26
	SUMA					\$196,561.07
PCU	INE/CG1107/2018	DÉCIMO	33.10	14-C11-P3	\$440,882.00	\$330,113.29
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO	33.10	14-C10-P3	\$13,540.00	\$13,540.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO	33.10	14_C3_P3	\$10,826.28	\$10,826.28
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO	33.10	14-C13-P3	\$114,929.52	\$114,929.52
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO	33.10	14_C14_P3	\$26,295.00	\$26,295.00
	SUMA					\$495,704.09
PMC	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C13-P3	\$205,127.00	\$ 47,661.08
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C2-P3	\$403.00	\$403.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C6-P3	\$4,030.00	\$4,030.00

PARTIDO POLÍTICO	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN					
	RESOLUCIÓN	RESOLUTIVO	CONSIDERANDO	CONCLUSIÓN SANCIONATORIA	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTO PENDIENTE
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C12-P3	\$19,505.20	\$19,505.20
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C5-P3	\$326.00	\$326.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C16-P3	\$7,697.37	\$7,697.37
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO PRIMERO		15-C9-P3	\$5,491.51	\$5,491.51
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO QUINTO	33.15	13_C5_P3 Y 13_C1_P3_BIS	\$403.00	\$403.00
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO QUINTO	33.15	13_C2_P3	\$563.22	\$563.22
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO QUINTO	33.15	13_C1_P3	\$245.44	\$245.44
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO QUINTO	33.15	13_C3_P3	\$1,047.80	\$1,047.80
	INE/CG1107/2018	DÉCIMO QUINTO	33.15	13_C4_P3	\$159.01	\$159.01
	SUMA					\$87,532.63

En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los sujetos obligados antes enlistados al mes de diciembre de dos mil dieciocho, si bien tienen saldos por pagar, los mismos son menores a la cantidad de ministración del financiamiento público, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

Por otra parte, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los **Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México**, al mes de diciembre de dos mil dieciocho, no tiene saldos pendientes por pagar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

21. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización² corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece:

“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

Tesis LXXVII/2016

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al*

² La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”

salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016. —Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato. — Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. —30 de marzo de 2016. —Unanimidad de votos. — Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados. — Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros. —Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. —22 de junio de 2016. — Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.

22. En consecuencia, mediante Acuerdo **IEPC/CG-A/221/2018** el Consejo General determinó el límite del financiamiento público respectivamente que podrá recibir durante el periodo de campaña del candidato independiente que se postula para la elección de miembros de ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, determinando la cantidad de:

CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018.				
MONTO OTORGADO POR CONCEPTO FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA AL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO	SUMA DEL PORCENTAJE DEL PADRON ELECTORAL QUE PRESENTA EL TOTAL DE MUNICIPIOS CON ELECCIÓN EXTRAORDINARIA, CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018 CO RESPECTO AL PADRÓN TOTAL	FINANCIAMIENTO DETERMINADO PARA EL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA LA CAMPAÑA LOCAL ORDINARIA DE 30 DIAS	FINANCIAMIENTO PÚBLICO DETERMINADO PARA EL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA LA CAMPAÑA LOCAL EXTRAORDINARIA DE 15 DIAS	
(A)	(B)	(A x B)= C	(C/30) x 15	
\$1,703,989.611	1.73450%	\$29.555.70	\$14,777.85	

Dicho monto será distribuido de conformidad con lo señalado en el artículo 163 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de lo que desprendió que el único Candidato Independiente cuya solicitud de registro fue aprobada por el Consejo General de ese Órgano Local, se le brindara la siguiente cantidad:

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO					
CONSEC	MUNICIPIO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018
13	CHICOASÉN	ISAIAS	OVILLA	COYAZO	\$7,388.93

23. Mediante Acuerdo **IEPC/CG-A/222/2018** el Consejo General determinó el límite del financiamiento privado respectivamente que podrá recibir durante el periodo de campaña el candidato independiente que se postula para la elección de miembros de ayuntamiento en el Proceso Electoral Local extraordinario 2018.

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO						
CVE	Municipio	TOPE MÁXIMO DE GASTO DE CAMPAÑA EXTRAORDINARIA	LÍMITE DE APORTACIÓN DE INDIVIDUAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	LÍMITE DE APORTACIÓN INDIVIDUAL DE SIMPATIZANTE	FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2015 (B)	LÍMITE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO
		(A)	(A*10%)	(A*0.5%)	(B)	(A-B)
10	Bejucal de Ocampo,	50,645.89	\$5,064.59	\$253.23	0	
16	Catazajá,	145,960.29	\$14,596.03	\$729.80	0	
29	Chicoasén	41,062.61	\$4,106.26	\$205.31	\$7,388.93	\$33,673.68
70	El Porvenir	86,821.52	\$8,682.15	\$434.11	0	
85	Solusuchiapa	50,164.22	\$5,016.42	\$250.82	0	
92	Tapilula	81,583.33	\$8,158.33	\$407.92	0	
116	Montecristo de Guerrero	55,530.33	\$5,553.03	\$277.65	0	
117	San Andrés Duraznal	26,863.29	\$2,686.33	\$134.32	0	
118	Santiago el Pinar	22,478.06	\$2,247.81	\$112.39	0	
124	Rincón Cholula	43,340.52	\$4,334.05	\$216.70	0	

24. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de campaña, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los candidatos independientes y los candidatos postulados por los partidos políticos al cargo de miembro de Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado³ representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

³ Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que *"Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos..."*.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.

25. Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó los informes presentados por los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de campaña de los candidatos independientes y candidatos al cargo de miembros de los Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia al candidato independiente, así como a los partidos políticos, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

26. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 3; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 200, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones

administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña respecto de los Ingresos y Gastos de los candidatos independientes y de los candidatos de los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Que las infracciones en que incurran los candidatos independientes serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Organismo Público Local Electoral del estado de Chiapas para que, en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales.

Por lo que hace a la capacidad económica la autoridad nacional electoral tomó en consideración la información presentada por los candidatos en el informe de capacidad económica establecido en el artículo 223 Bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto el candidato independiente presentó el informe en comento.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 200, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera los estados de cuenta bancarios (de ser el caso) de cuentas abiertas a nombre de los candidatos independientes que actualizaron infracciones en la materia, en las instituciones de crédito del Sistema Financiero Mexicano.

27. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos, candidatos y candidatos independientes-; así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la

normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

En ese sentido, la autoridad electoral procedió a clasificar y analizar toda la información y documentación presentada por los sujetos obligados, aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los institutos políticos con los candidatos y autoridades y se efectuó una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares, medios Impresos e internet; por lo que en su caso, se hizo del conocimiento de los entes políticos las observaciones que derivaron de la revisión realizada, mismas que fueron atendidas por éstos en el momento procesal oportuno.

28. Registro extemporáneo de operaciones, Sistema Integral de Fiscalización. De conformidad con el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, la obligación de reportar operaciones en tiempo real, obedece al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato.

En virtud de lo anterior, el Reglamento de Fiscalización fue modificado para sancionar el registro de operaciones fuera del plazo previsto en dicho cuerpo dispositivo – desde que ocurren las operaciones de ingresos y egresos hasta tres días posteriores a su realización— como una falta sustantiva.

Cabe señalar que en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la Tesis X/2018⁴, la cual establece el momento contable en debe hacerse el registro contable de un bien o servicio, que para mayor referencia se transcribe a continuación:

FISCALIZACIÓN. EL REGISTRO DE OPERACIONES EN TIEMPO REAL DE PRECampaña Y Campaña DEBE REALIZARSE EN CADA MOMENTO CONTABLE DE UN BIEN O SERVICIO.- De la interpretación de los artículos 59 y 60 de la Ley de Partidos Políticos; 17, numerales 1 y 2; 18, numerales 1 y 2; 33, numeral 2, inciso a); 38, numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como de los principios de transparencia y

⁴ *Recurso de apelación. SUP-RAP-210/2017.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—14 de septiembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretaria: Gabriela Figueroa Salmorán.*

rendición de cuentas, se advierte que los partidos políticos deben registrar a través del sistema de contabilidad en línea, las operaciones de precampaña y campaña sobre una base de flujo de efectivo, respetando la partida doble, esto es, el cargo y el abono, lo cual también implica que respecto de un mismo bien y/o servicio, registren cada uno de los momentos contables por los cuales transite un concepto de ingreso o gasto, pues representan momentos económicos distintos. Esto es, el plazo de “tres días posteriores” previsto en el Reglamento de Fiscalización, para el registro contable de operaciones, aplica tanto para ingresos, a partir de que se realicen, como para egresos, desde el momento en que ocurran, en el entendido de que, los ingresos se realizan cuando se reciben en efectivo o en especie, y los egresos ocurren cuando se pagan, se pactan o se recibe el bien o servicio. En consecuencia, con independencia del cargo y el abono en su contabilidad, los partidos deben reconocer en forma total y en tiempo real las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que le afecten económicamente, pues las transacciones se pueden efectuar en diferentes momentos derivado del desfase de tiempos entre una y otra, que puede fluctuar desde minutos, días, meses o años.

Ahora bien, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

No obstante, lo anterior, es indispensable tener en cuenta que mientras más tiempo tarde el sujeto obligado en hacer el registro, menos tiempo y oportunidad tienen la autoridad fiscalizadora para realizar sus funciones de vigilancia de los recursos. En consecuencia, para evitar imponer un solo criterio de sanción que, en algunos casos pudiera llegar a ser desproporcionado, se ponderó graduarlo en periodos para sancionar de manera menos severa a aquellos movimientos que mayor oportunidad de vigilancia permitiera a la autoridad; cuando el periodo de fiscalización fuera menor se incrementó la sanción; y para aquellos casos en los que la fiscalización se viera prácticamente impedida por la entrega extemporánea, se aplicaría un criterio de sanción mayor.

29. Que al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0038/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, incisos d) y e), del Reglamento de Fiscalización, cuando se trate de Partidos Políticos Nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, opera la regla especial

establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en atención al principio de que la regla especial prevalece sobre la general), y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado para los efectos.

30. Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó cada uno de los informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las campañas de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a los partidos políticos y candidatos independientes, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones e irregularidades en la etapa de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, para elegir miembros del Ayuntamiento de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El Porvenir, Solosuchiapa, Tapilula, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, son los siguientes:

30.1 Partido Acción Nacional.

30.2 Partido Revolucionario Institucional.

- 30.3** Partido de la Revolución Democrática.
- 30.4** Partido del Trabajo.
- 30.5** Partido Verde Ecologista de México.
- 30.6.** Nueva Alianza.
- 30.7** Movimiento Ciudadano.
- 30.8** Morena
- 30.9** Partido Encuentro Social
- 30.10** Partido Chiapas Unido
- 30.11** Podemos Mover a Chiapas
- 30.12** Isaías Ovilla Coyazo

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones e irregularidades en las campañas extraordinarias a los cargos de miembros de los Ayuntamientos, son los siguientes:

30.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **1-C2**.
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **1-C1-V**.

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

- a)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 1-C2**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
1-C4	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$10,315.00.”</i>	\$10,315.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,

el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan⁵.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe

⁵ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza

la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁶:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se

⁶ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la

individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión **1-C4** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.⁷

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$10,315.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

⁷ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización⁸.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

⁸ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el

ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 1-C4

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$10,315.00 (diez mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **15%** (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$1,547.25 (mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.)** ¹⁰

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,547.25 (mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión **1-C1-V**.

No.	Conclusión
1-C1-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”</i>

De la falta descrita, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de

las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen

la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹¹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

¹¹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera previa** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos, al haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.¹²

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos extemporáneos, **de manera previa** a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Conclusión
<i>"1-C1-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración."</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

¹² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos con anterioridad al plazo establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización¹³.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

¹³ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traduce **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Conclusión 1-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 4 eventos con anterioridad a su fecha de realización, pero de manera extemporánea.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

¹⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1 (una)** Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea (4), cantidad que asciende a un total de **\$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **1** Falta de carácter formal: conclusión **2-C2**.
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **2-C3**.
- c) **3** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **2-C1-V, 2-C2-V y 2-C3-V**.

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 18 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 2-C2.**

No.	Conclusión
2-C2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de la transferencia del saldo de la cuenta bancaria por un importe de \$39.93.”</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus

candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En este sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁵:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de

¹⁵ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.

- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida por el partido político, consistente en una omisión.

No.	Conclusión
2-C2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de la transferencia del saldo de la cuenta bancaria por un importe de \$39.93.”</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionado con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados¹⁶.

En la conclusión **2-C2** el Sujeto Obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.¹⁷

De la valoración del artículo se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la

¹⁶ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

¹⁷ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la conducta infractora observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El ente político materia de análisis cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una **FALTA FORMAL**, en la que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determinen. Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la conducta por el partido político.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno

de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **10** (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 2-C3.**

¹⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

No.	Conclusión	Monto involucrado
2-C3	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$3,225.00.”</i>	\$3,225.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹⁹.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

¹⁹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la

documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²⁰:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

²⁰ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión **2-C3** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.²¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$3,225.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

²¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización²².

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

²² "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el

ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 2-C3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$3,225.00 (tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

²³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$483.75 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 75/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$483.75 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 75/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones **2-C1-V, 2-C2-V y 2-C3-V**.

No.	Conclusión
2-C1-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 16 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
2-C2-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
2-C3-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,

inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento de los sujetos obligados a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los

candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones

legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²⁴:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los

²⁴ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de la que son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones **2-C1-V, 2-C2-V y 2-C3-V** de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 21 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera posterior** a su celebración.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos, al haber sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.²⁵

²⁵ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos con posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
<i>2-C1-V. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 16 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
<i>2-C2-V. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
<i>2-C3-V. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a”</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización²⁶.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

²⁶ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **diversas faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 2-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 16 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁷

²⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea (16), cantidad que asciende a un total de **\$6,448.00 (seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$6,448.00 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 2-C2-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral,

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 2 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a

²⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea (2), cantidad que asciende a un total de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 2-C3-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 3 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

²⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea (3), cantidad que asciende a un total de \$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **3-C1.**
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **3-C2.**

A continuación se desarrollan los apartados en comentario:

a) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 3-C1.**

Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
3-C1	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$1,984.92.”</i>	\$1,984.92

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad del mismo en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara la aclaración que considerara procedente, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligados respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.

- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por

medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación³⁰:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)

³⁰ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la

individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se presente.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 3-C1** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.³¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad observada:

<p><i>“El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$1,984.92.”</i></p>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la

³¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable

de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente³²:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valorará aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y

³² Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos³³ y 127 del Reglamento de Fiscalización³⁴.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de

³³ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

³⁴ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 3-C1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,984.92 (mil novecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁵

³⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$1,984.92 (mil novecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,984.92 (mil novecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 3-C2**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
3-C2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$17,400.00.”</i>	\$17,400.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,

el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan³⁶.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe

³⁶ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza

la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación³⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se

³⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la

individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión **3-C2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.³⁸

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$17,400.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

³⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización³⁹.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

³⁹ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el

ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 3-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

⁴⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.4 PARTIDO DEL TRABAJO.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **2** Faltas de carácter formales: conclusiones **4-C1** y **4-C3**.
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **4-C4**

c) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **4. E-1 y 4-C2-V**.

d) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **4-C1-V**.

e) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **4-C2 y 4-C7**

A continuación se desarrollan los apartados en comentario:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 54, numeral 1, inciso b) y c); 59, numeral 1, 246, numeral 1, inciso j) y 277 numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 4-C1 y 4-C3**.

No.	Conclusión
4-C1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los avisos de apertura y los estados de cuenta o en su caso, los detalles de movimientos de los meses noviembre y diciembre de las 3 cuentas bancarias aperturadas para el manejo de recursos para la campaña, así como el contrato de apertura y tarjeta de firmas de una cuenta bancaria.”</i>
4-C3	<i>El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura, contrato, tarjeta de firma y los estados de cuenta o en su caso, los detalles de movimientos de los meses noviembre y diciembre de la cuenta bancaria.</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...*”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la

determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁴¹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

⁴¹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
<i>Conclusión 4-C1. El sujeto obligado omitió presentar los avisos de apertura y los estados de cuenta o en su caso, los detalles de movimientos de los meses noviembre y diciembre de las 3 cuentas bancarias aperturadas para el manejo de recursos para la campaña, así como el contrato de apertura y tarjeta de firmas de una cuenta bancaria.</i>	<i>Omisión</i>
<i>Conclusión 4-C3. El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura, contrato, tarjeta de firma y los estados de cuenta o en su caso, los detalles de movimientos de los meses noviembre y diciembre de la cuenta bancaria.</i>	<i>Omisión</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1).

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados⁴².

En las conclusiones **4-C1** y **4-C3** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, inciso b) y c); 59, numeral 1, 246, numeral 1, inciso j) y 277 numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización.⁴³

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

⁴² En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

⁴³ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos

que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴⁴

⁴⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **20** (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$1,612.00** (Mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis. Conclusión 4-C4.

A continuación se presenta, la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

No.	Conclusión	Monto involucrado
4-C4	<i>“El sujeto obligado omitió presentar un aviso de contratación por concepto propaganda utilitaria y publicidad (de cualquier tipo), por un monto total de \$14,777.99.”</i>	\$14,777.99

En consecuencia, al haber omitido presentar el aviso de contratación de aquellos contratos celebrados durante el periodo de campaña, dentro de los tres días posteriores a su suscripción, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis, por un importe de \$14,777.99 (catorce mil setecientos setenta y siete pesos 99/100 M.N.).

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados fueron omisos en presentar respuesta alguna a las observaciones realizadas por la autoridad

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”*, del Título Octavo *“De la Fiscalización de Partidos Políticos”* de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido informar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de los contratos celebrados durante el periodo de campaña, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.⁴⁵

⁴⁵ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión **4-C4** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió⁴⁶ presentar los avisos de los contratos que celebró durante la campaña correspondiente, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, relacionados registro de egresos por concepto de propaganda utilitaria y publicidad (de cualquier tipo), por un monto total de \$14,77799 (catorce mil setecientos. setenta y siete pesos 99/100 M.N.), durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión del sujeto obligado, consistente en no haber presentado los avisos de los contratos que celebró durante las campañas en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en el Informe de campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, atentando a lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.

⁴⁶ ⁴⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido del Trabajo omitió presentar los avisos de contratación de los acuerdos que celebró durante un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, y por tanto al no ser oportuna su presentación impidió circular la información con los proveedores contratados. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido del Trabajo sucedió la irregularidad atribuida al Partido del Trabajo, sucedió durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Chiapas.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

En la conclusión **4-C4** el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.⁴⁷

⁴⁷ **Ley General de Partidos Políticos. -Artículo 61.** 1. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:(...) **f)** Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: (...) **III.** La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los lineamientos que éste emita. (...) **Artículo 62.** 1. El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General. 2. Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafo del contrato respectivo que contenga: a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; b) El objeto del contrato; c) El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y e) La penalización en caso de incumplimiento.(...) **Reglamento de Fiscalización.- Artículo 207._Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares** (...) 3. De conformidad con lo señalado en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos, los contratos que se celebren en campañas y precampañas, deberán ser informados por parte de la Comisión a través de la Unidad Técnica

De los artículos antes señalados se impone a los partidos políticos el deber de presentar los contratos que celebren durante las campañas en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la presentación de servicios de que se trate.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación de las operaciones de los sujetos obligados, y así poder circularizar la información con los proveedores de los mismos, con el propósito de que se cumpla con lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza, por ello establecen la obligación de presentar los contratos que celebró durante la correspondiente campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al instituto por medios electrónicos con base a los Lineamientos que emita éste.

Cabe destacar que los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis, del Reglamento de

*al Consejo General, en un plazo máximo de 3 días posteriores a su recepción, para comprobar el contenido de los avisos de contratación, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita el Consejo General. 4. Cualquier modificación a dichos contratos deberá ser notificada en los plazos establecidos en el artículo 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III de la Ley de Partidos, al Consejo General y a la Comisión, con las motivaciones señaladas en el inciso anterior para los mismos efectos, remitiendo copia de la modificación respectiva. (...) **Artículo 261 Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación.** 1. Los sujetos obligados durante precampañas y campañas contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la presentación del aviso de contratación, previa entrega de los bienes o a la prestación del servicio de que se trate. Los bienes y servicios contratados que tengan como finalidad la precampaña o campaña y sean contratados antes del inicio de los periodos de precampaña o campaña y por los cuales deba presentarse un aviso de contratación, deberán avisarse en un plazo máximo de seis días naturales siguientes al inicio del periodo que corresponda a cada cargo de elección. Cuando con el ejercicio ordinario concurren procesos electorales, los avisos de contratación que correspondan al ejercicio ordinario, se deberán presentar en el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. 2. Los sujetos obligados en los procesos electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto de la contratación. b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a). Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA, se deberá considerar el monto total pactado en el contrato. 3. Los sujetos obligados que así lo deseen, podrán presentar los avisos de contratación que celebren, independientemente del monto y del bien o servicio contratado. 4. Cuando exista modificación a los contratos enviados el sujeto obligado deberá presentar a través del aplicativo, el aviso modificatorio correspondiente dentro de los tres días siguientes a la fecha en la que se suscriba el convenio modificatorio. En todos los casos se deberá adjuntar el contrato, con las firmas autógrafas, y deberá contener al menos la información establecida en el artículo 62, numeral 2, de la Ley de Partidos.*

Fiscalización, señalan que la notificación de los avisos de contratación podrá ser mediante medios electrónicos. Al respecto, los sujetos obligados deberán utilizar el aplicativo denominado “Avisos de Contratación en Línea”, disponible dentro del Sistema Integral de Fiscalización.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

En ese entendido, al no presentar los contratos que celebró durante la correspondiente campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, el sujeto obligado incumplió con el principio de legalidad, impidiendo circular de manera oportuna la información con los proveedores que permitiría constatar las operaciones realizadas durante los periodos fiscalizados.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la legalidad y certeza en el destino de los recursos en los procesos electorales son valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no presente los contratos que celebren durante la campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues reflejó la deliberada intención de los sujetos obligados, de no someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de los recursos con los que contaron durante la campaña, lo que resulta inadmisibles en un Estado de derecho.

Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la omisión de la presentación de los contratos celebrados por parte del sujeto obligado con los proveedores.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su origen, manejo, custodia y destino, misma que efectúa la autoridad con los proveedores para efectos del cruce de información respectiva.

En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar los contratos que celebró durante la correspondiente campaña en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, en tanto que la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General de Partidos Políticos, el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por dicha omisión, se presenten conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.

Así, los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización, tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de presentar los contratos celebrados durante el periodo de campaña que celebren los partidos políticos.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis normativas previstas en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos que debe prevalecer en los procesos electorales respecto al origen, monto y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en el destino de los recursos erogados por el sujeto obligado infractor, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio

Calificación de la falta

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Conclusión 4-C4

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se consideró que la irregularidad atribuible al sujeto obligado, que consistió en no dar aviso, a la autoridad fiscalizadora, en los tres días posteriores a la celebración de los contratos por concepto propaganda utilitaria y publicidad (de cualquier tipo), realizados durante la correspondiente campaña, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña al cargo de \$14,77799 (catorce mil setecientos. setenta y siete pesos 99/100 M.N.) presentado por el sujeto obligado correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$14,77799 (catorce mil setecientos. setenta y siete pesos 99/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴⁸

⁴⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **3%** (tres por ciento) sobre el monto involucrado **\$14,777.99** Catorce mil setecientos setenta y siete pesos 99/100 M.N., cantidad que asciende a un total de **\$369.45** (Trescientos sesenta y nueve pesos 45/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$369.45** (Trescientos sesenta y nueve pesos 45/100 M.N.)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: 4. E-1 y 4-C2-V**

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
4. E-1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el gasto de una lona por un importe de \$210.00”</i>	\$210.00”
4-C2-V	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$3,650.00”</i>	\$3,650.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de

salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁴⁹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por

⁴⁹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 4. E-1 y 4-C2-V** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto del gasto de una lona por un importe de \$210.00 (doscientos diez pesos 00/100 M.N.) y gastos operativos de los eventos realizados por un monto de \$3,650.00 (tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con

lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁵⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>"El sujeto obligado omitió presentar el gasto de una lona por un importe de \$210.00"</i>
<i>"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$3,650.00"</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según

⁵⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan*

a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.

4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.

5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.

6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.

7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento.

8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir

cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad de palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos

por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

“Artículo 297.

Objetivo de las visitas

1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Artículo 298.

Concepto

1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible

la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe presentado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁵¹ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁵².

⁵¹ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

⁵² “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 4. E-1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$210.00 (Doscientos diez pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$210.00 (doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración

⁵³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$210.00 (doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 4-C2-V

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Electoral Local Extraordinario 2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$3,650.00 (tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el

⁵⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,650.00 (tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión **4-C1-V**

No.	Conclusión
4-C1-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 13 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración”</i>

De la falta descrita, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de

la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es*

responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar

la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁵⁵:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

⁵⁵ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 13 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera previa** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 13 eventos, al haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.⁵⁶

⁵⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 13 eventos extemporáneos, **de manera previa** a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Conclusión
<i>4-C1-V “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 13 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración”</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 13 eventos con anterioridad al plazo establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización⁵⁷.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

⁵⁷ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Conclusión 4-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 13 eventos con anterioridad a su fecha de realización, pero de manera extemporánea.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1 (una) Unidad de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea (13), cantidad que asciende a un total de **\$1,047.80 (Mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.)**.

⁵⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,047.80 (Mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
4-C2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en el periodo normal, por un importe de \$800.00.</i>	\$800.00
4-C7	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$2,600.00.</i>	\$2,600.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;

así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos*

los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y*”.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan⁵⁹.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

⁵⁹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁶⁰:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones

⁶⁰ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 4-C2 y 4-C7 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.⁶¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en el periodo normal, por un importe de \$800.00.

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$2,600.00.

⁶¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinaria 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización⁶².

⁶² "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebat

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Conclusión 4-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶³

⁶³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **5% (cinco por ciento)** sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, del cálculo de sanción se desprende que el instituto político no alcanza ni una Unidad de Medida y Actualización, por lo cual la sanción queda sin efectos.

Conclusión 4-C7

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

⁶⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **2 Faltas de carácter formal: conclusiones 5-C1 y 5-C2.**
- b) **1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5-C1-V.**
- c) **2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5-C2-V y 5-C3-V.**

d) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **5-C3**.

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras del artículo 102, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 5-C1 y 5-C2**.

No.	Conclusión
5-C1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o detalle de movimientos de 5 cuentas bancarias.”</i>
5-C2	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o detalle de movimientos de 3 cuentas bancarias.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar

cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó

ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido

para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁶⁵:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

⁶⁵ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
<i>5-C1. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o detalle de movimientos de 5 cuentas bancarias.</i>	<i>Omisión</i>
<i>5-C2. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o detalle de movimientos de 3 cuentas bancarias..</i>	<i>Omisión</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1).

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados⁶⁶.

En las conclusiones **5-C1** y **5-C2** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.⁶⁷

⁶⁶ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: *“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

⁶⁷ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las

disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **20** (veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁶⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión **5-C1-V**.

No.	Conclusión
5-C1-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 6 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”</i>

De la falta descrita, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de

salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:

- a. Programa Anual de Trabajo.
- b. Informe de Avance Físico-Financiero.
- c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello

dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁶⁹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

⁶⁹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 6 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera previa** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos, al haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.⁷⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos extemporáneos, **de manera previa** a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Conclusión
<i>“5-C1-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 6 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

⁷⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos con anterioridad al plazo establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización⁷¹.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

⁷¹ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobador las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 5-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 6 eventos con anterioridad a su fecha de realización, pero de manera extemporánea.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1 (una) Unidad de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea (6), cantidad que asciende a un total de **\$483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁷² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones **5-C2-V** y **5-C3-V**.

No.	Conclusión
5-C2-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
5-C3-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 7 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:

- a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
- a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional

Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁷³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones

⁷³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

siguientes: a) *Eficacia*: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) *Idoneidad*: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) *Juridicidad*: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) *Oportunidad*: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) *Razonabilidad*: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de la que son originalmente responsables.

Señalado lo anterior, a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones **5-C2-V** y **5-C3-V** de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 8 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera posterior** a su celebración.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos, al haber sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.⁷⁴

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos con posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
<i>“5-C2-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
<i>“5-C3-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 7 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

⁷⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización⁷⁵.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

⁷⁵ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **diversas faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 5-C2-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 1 evento con posterioridad a su fecha de realización.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea (1), cantidad que asciende a un total de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

⁷⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 5-C3-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 7 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea (7), cantidad que asciende a un total de **\$2,821.00 (dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,821.00 (dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,

⁷⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 5-C3**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
5-C3	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de dos operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$4,180.00”</i>	\$4,180.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.

- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan⁷⁸.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

⁷⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁷⁹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones

⁷⁹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión **5-C3** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.⁸⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de dos operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$4,180.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

⁸⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización⁸¹.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su

⁸¹ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el

período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 5-C3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$4,180.00 (cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸²

⁸² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **15% (quince por ciento)** sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$627.00 (seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$627.00 (seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.6 NUEVA ALIANZA.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones 6-C1, 6-C2, 6-C2 BIS y 6-C3.

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6-E-1 y 6-C1-V.

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 246, numeral 1, inciso j) y 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 6-C1, 6-C2, 6-C2 BIS y 6-C3.**

No.	Conclusión
6-C1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o los detalles de movimientos del mes de noviembre de las 7 cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos de campaña. Cabe señalar que la sanción de la falta por la omisión de no presentar el estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre, se encuentra reflejado en el ID 6, conclusión 6-C3.”</i>
6-C2	<i>“El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso), por un monto de \$10,017.45, de forma extemporánea.”</i>
6-C2 BIS	<i>“El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso) de un gasto por concepto de materiales y suministros o propaganda institucional, por un monto de \$4,760.73, de forma extemporánea.”</i>
6-C3	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o los detalles de movimientos del mes de diciembre de las 8 cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos de campaña.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente

Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien

las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁸³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos

⁸³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no

presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
6-C1. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o los detalles de movimientos del mes de noviembre de las 7 cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos de campaña. Cabe señalar que la sanción de la falta por la omisión de no presentar el estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre, se encuentra reflejado en el ID 6, conclusión 6-C3.	Omisión
6-C2. El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso), por un monto de \$10,017.45, de forma extemporánea.	Omisión
6-C2 BIS. El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso) de un gasto por concepto de materiales y suministros o propaganda institucional, por un monto de \$4,760.73, de forma extemporánea.	Omisión
6-C3. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta o los detalles de movimientos del mes de diciembre de las 8 cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos de campaña.	Omisión

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1).

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados⁸⁴.

En las conclusiones **6-C1**, **6-C2**, **6-C2 BIS** y **6-C3** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 246, numeral 1, inciso j) y 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.⁸⁵

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida

⁸⁴ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: *"En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas."*

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación."

⁸⁵ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los

elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a Nueva Alianza, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **40** (cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$3,224.00** (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1,

⁸⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones 6-E-1 y 6-C1-V.**

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
6-E-1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el gasto de 3 bardas y 1 lonas por un importe de \$1,666.00”</i>	\$1,666.00
6-C1-V	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$1,972.00.”</i>	\$1,972.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:

- a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
- a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por

medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁸⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)

⁸⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis

y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 6-E-1 y 6-C1-V** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de bardas, lonas y eventos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁸⁸

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>"El sujeto obligado omitió presentar el gasto de 3 bardas y 1 lonas por un importe de \$1,666.00"</i>
<i>"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$1,972.00."</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

⁸⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
- 4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
- 5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*
- 6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.*
- 7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorratará en los términos que establece el Reglamento.*
- 8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.*
- 9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.*
- 10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto*

con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible

el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el

periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁸⁹:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

⁸⁹ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁹⁰ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁹¹.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

⁹⁰ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

⁹¹ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante

la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 6-E-1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,666.00 (mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

⁹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$1,666.00 (mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,666.00 (mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 6-C1-V

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que

⁹³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

asciende a un total de **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.7 MOVIMIENTO CIUDADANO.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario, 2018, en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **1** Falta de carácter formal: conclusión **7-C3**.
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **7-C1-V**
- c) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **7-C1 y 7-C2**.

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión

sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 7-C3.**

No.	Conclusión
7-C3	<i>“El sujeto obligado presento un aviso de contratación de forma extemporánea.”</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y

candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En este sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con

determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁹⁴:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

⁹⁴ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida por el partido político, consistente en una omisión.

No.	Conclusión
7-C3	<i>“El sujeto obligado presento un aviso de contratación de forma extemporánea.”</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionado con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados⁹⁵.

En la conclusión **7-C3** el Sujeto Obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 261 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.⁹⁶

De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

⁹⁵ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

⁹⁶ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la conducta infractora observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por

sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El ente político materia de análisis cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una **FALTA FORMAL**, en la que se viola el mismo valor común, toda

vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la conducta por el partido político.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la

normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹⁷

⁹⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **10** (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00** (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión **7-C1-V**.

No.	Conclusión
7-C1-V	<i>"El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración."</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de

fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁹⁸:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA**

⁹⁸ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 3 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera posterior** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos, al haber sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.⁹⁹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
7-C1-V “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

⁹⁹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización¹⁰⁰.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

¹⁰⁰ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 7-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 3 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁰¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de \$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

¹⁰¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
7-C1	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones por un importe de \$22,000.99</i>	\$22,000.99
7-C2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones en el periodo normal, por un importe de \$73,486.22</i>	\$73,486.22

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y*”.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o

coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹⁰².

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

¹⁰² Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁰³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

¹⁰³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 7-C1 y **7-C2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.¹⁰⁴

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones por un importe de \$22,000.99</i>

<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones en el periodo normal, por un importe de \$73,486.22</i>

¹⁰⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización¹⁰⁵.

¹⁰⁵ “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 7-C1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$22,000.99 (veintidós mil pesos 99/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁰⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$1,100.05 (mil cien pesos 05/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,100.05 (mil cien pesos 05/100 M.N.)**.

Conclusión 7-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

¹⁰⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$73,486.22 (setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 22/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$3,674.31 (tres mil seiscientos setenta y cuatro mil pesos 31/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,674.31 (tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 31/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.8 MORENA

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter formal: conclusión **8-C1**.
- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **8-C3**.
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **8-C4**.
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **8-I1**.

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 59, numeral 1 del RF: **conclusión 8-C1**.

No.	Conclusión
8-C1	<i>El sujeto obligado omitió aperturar 10 cuentas bancarias de sus candidatos.</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...*”

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello

dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En este sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza

la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁰⁸:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se

¹⁰⁸ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida por el partido político, consistente en una omisión.

No.	Conclusión
8-C1	<i>El sujeto obligado omitió aperturar 10 cuentas bancarias de sus candidatos.</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionado con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados¹⁰⁹.

¹⁰⁹ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,

En la conclusión **8-C1** el Sujeto Obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 59, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.¹¹⁰

De la valoración del artículo se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por

constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación."

¹¹⁰ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la conducta infractora observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El ente político materia de análisis cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una **FALTA FORMAL**, en la que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la conducta por el partido político.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo

criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹¹¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 10 UMA por cada cuenta no aperturada, lo que en la especie corresponde a **100**

¹¹¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(cien) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$8,060.00** (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión: 8-C3.**

Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
8-C3	<i>“El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de apoyo económico a Representantes Generales y de Casilla, por un monto de \$53,592.84”</i>	\$53,592.84

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad del mismo en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de

conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara la aclaración que considerara procedente, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligados respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos

políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹¹²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen

¹¹² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se presente.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido

político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 8-C3** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por concepto de representantes de casilla realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹¹³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad observada:

<i>“El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de apoyo económico a Representantes Generales y de Casilla, por un monto de \$53,592.84”</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y

¹¹³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹¹⁴:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valorará aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

¹¹⁴ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹¹⁵ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹¹⁶, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que

¹¹⁵ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)”

¹¹⁶ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8-C3

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$53,592.84 (cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹¹⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$53,592.84 (cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostentamiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$53,592.84 (cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹¹⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 8-C4**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
8-C4	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de veintinueve operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de corrección por un importe de \$36,704.00</i>	\$36,704.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del

conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.

c) Informes de campaña.

- 3) Informes presupuestales:
- a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o

coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹¹⁸.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

¹¹⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹¹⁹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

¹¹⁹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 8-C4 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.¹²⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de veintinueve operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de corrección por un importe de \$36,704.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

¹²⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización¹²¹.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su

¹²¹ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el

período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8-C4

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$36,704.00 (treinta y seis mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²²

¹²² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$5,505.60 (cinco mil quinientos cinco pesos 60/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,505.60 (cinco mil quinientos cinco pesos 60/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 8-I1.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
8-11	<i>“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte consistente en factura, contrato de prestación de servicios, copia del pago, cheque y/o transferencia bancaria por \$425.00.”</i>	\$425.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido

o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación

requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹²³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando

¹²³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando **20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe los gastos realizados durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de presentar documentación soporte de gastos realizados, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas., conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.¹²⁴

¹²⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada:

““El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte consistente en factura, contrato de prestación de servicios, copia del pago, cheque y/o transferencia bancaria por \$425.00.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los gastos realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.¹²⁵

Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

¹²⁵ "Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o**

de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a

esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8-I1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no comprobar los gastos realizados, durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$425.00 (cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **50% (cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$212.50 (doscientos doce pesos 50/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$212.50 (doscientos doce pesos 50/100 M.N.)**.

¹²⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.9 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **3** Faltas de carácter formal: conclusiones **9-C1, 9-C2-Bis y 9-C3.**
- b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **9-C2.**
- c) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **9-C6 y 9-C-I1.**
- d) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **9-C1-V**

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 246, numeral 1, inciso j) y 261 bis, numeral 1 del RF: **conclusiones 9-C1, 9-C2-Bis y 9-C3.**

No.	Conclusión
9-C1	<i>El sujeto obligado omitió presentar estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre de 6 cuentas bancarias.</i>

No.	Conclusión
9-C2-Bis	<i>El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso) de un gasto por concepto de materiales y suministros o propaganda institucional de forma extemporánea.</i>
9-C3	<i>El sujeto obligado omitió presentar estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre de 2 cuentas bancarias.</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a

continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con

determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹²⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

¹²⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
<i>Conclusión 8-C1. El sujeto obligado omitió presentar estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre de 6 cuentas bancarias.</i>	<i>Omisión</i>
<i>Conclusión 8-C2-Bis. El sujeto obligado presentó un aviso de contratación (primer aviso) de un gasto por concepto de materiales y suministros o propaganda institucional de forma extemporánea.</i>	<i>Omisión</i>
<i>Conclusión 8-C3. El sujeto obligado omitió presentar estado de cuenta o detalle de movimientos del mes de diciembre de 2 cuentas bancarias.</i>	<i>Omisión</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1).

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados¹²⁸.

En las conclusiones **8-C1, 8-C2-Bis y 8-C3** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 246, numeral 1, inciso j) y 261 bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.¹²⁹

¹²⁸ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

¹²⁹ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La

obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culpable de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos

con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹³⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **30** (treinta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$2,418.00** (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹³⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 9-C2**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
9-C2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1 operación en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$ 700.00.</i>	\$700.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad

de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:

- a) Programa Anual de Trabajo.
- b) Informe de Avance Físico-Financiero.
- c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la

determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹³¹.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la

¹³¹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹³²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y

¹³² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 9-C2 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.¹³³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1 operación en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$ 700.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

¹³³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización¹³⁴.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su

¹³⁴ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el

período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 9-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹³⁵

¹³⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **5% (cinco por ciento)** sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, del cálculo de sanción se desprende que el instituto político no alcanza ni una Unidad de Medida y Actualización, por lo cual la sanción **queda sin efectos**.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: 9-C6 y 9-C-I1.**

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
9-C6	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$4,631.48.</i>	\$4,631.48
9-C-I1	<i>El sujeto obligado omitió presentar el gasto de cuatro mantas, dos banderas, 1 bocina y un micrófono lonas por un importe de \$2,246.40.</i>	\$2,246.40

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electoral y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no

tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de

calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹³⁶:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

¹³⁶ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 9-C6 y 9-C-11** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de representantes de casilla, mantas banderas y bocinas realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con

lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹³⁷

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$4,631.48.</i>
<i>El sujeto obligado omitió presentar el gasto de cuatro mantas, dos banderas, 1 bocina y un micrófono lonas por un importe de \$2,246.40.</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los

¹³⁷ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendientes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*

3. *La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
4. *El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
5. *El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*
6. *El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.*
7. *El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorratará en los términos que establece el Reglamento.*
8. *El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.*
9. *El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.*
10. *La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.*
11. *La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”*

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo

administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad de palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹³⁸ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹³⁹, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

¹³⁸ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

¹³⁹ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante

la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 20 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 9-C6

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$4,631.48 (cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 48/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

¹⁴⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$4,631.48** (cuatro mil seiscientos treinta y un mil pesos 48/100 M.N).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,631.48** (cuatro mil seiscientos treinta y un mil pesos 48/100 M.N).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 9-C-I1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$2,246.40 (dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que

¹⁴¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

asciende a un total de **\$2,246.40** (dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,246.40** (dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión **9-C1-V**.

No.	Conclusión
9-C1-V	<i>El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.</i>

De la falta descrita, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación

que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los*

sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original

para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en

los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁴²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

¹⁴² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, **de manera previa** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento, al haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.¹⁴³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento extemporáneo, **de manera previa** a su celebración. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Conclusión
<i>9-C1-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.</i>

¹⁴³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con anterioridad al plazo establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización¹⁴⁴.

¹⁴⁴ "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes

jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 9-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 1 evento con anterioridad a su fecha de realización, pero de manera extemporánea.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1 (una)** Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.)

¹⁴⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.10 PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de campaña en el marco del **Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas**, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **3** Faltas de carácter formal: conclusiones: **10-C1, 10-C4 y 10-C5.**
- b) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **10-E-1 y 10-C4-V.**
- c) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **10-C1-V.**
- d) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **10-C2-V y 10-C3-V.**
- e) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **10-C2 y 10-C3.**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III y 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 33, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso b) y c); 59, numeral 1; 127, numeral 1; 150, numeral 2; 152; 207, numerales 3 y 4; 261 bis; 277 numeral 1, inciso e) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 10-C1, 10-C4 y 10-C5.**

No.	Conclusión
10-C1	<i>“El sujeto obligado omitió abrir 8 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de las y los candidatos.”</i>
10-C4	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 8 operaciones de egresos por transferencia en especie, por un importe total de \$72,499.52.”</i>
10-C5	<i>“El sujeto obligado presentó el aviso de contratación extemporáneamente.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que

considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁴⁶:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta

¹⁴⁶ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
"10-C1. El sujeto obligado omitió abrir 8 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de las y los candidatos."	Omisión
"10-C4. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 8 operaciones de egresos por transferencia en especie, por un importe total de \$72,499.52."	Omisión

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
<i>"10-C5. El sujeto obligado presentó el aviso de contratación extemporáneamente."</i>	<i>Omisión</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1).

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público,

esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados¹⁴⁷.

En las conclusiones **10-C1, 10-C4 y 10-C5** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III y 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 33, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, inciso b) y c); 59, numeral 1; 127, numeral 1; 150, numeral 2; 152; 207, numerales 3 y 4; 261 bis; 277 numeral 1, inciso e) y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.¹⁴⁸

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de

¹⁴⁷ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

¹⁴⁸ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio

impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a

determinar la gravedad de la falta. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **100** (cien) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: 10-E-1 y 10-C4-V**

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
10-E-1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el gasto de 3 bardas por un importe de \$1,344.00.”</i>	\$1,344.00
10-C4-V	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto de propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$1,276.00.”</i>	\$1,276.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,

inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los

candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁵⁰:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por

¹⁵⁰ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 10-E-1 y 10-C4-V** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de bardas, propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, en la entidad referida,

incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹⁵¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>"El sujeto obligado omitió presentar el gasto de 3 bardas por un importe de \$1,344.00."</i>
<i>"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto de propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$1,276.00."</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según

¹⁵¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendientes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan*

a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.

4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.

5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.

6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.

7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento.

8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados."

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir

cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno,

porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la

norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁵²:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,

¹⁵² Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹⁵³ y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹⁵⁴

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán

¹⁵³ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

¹⁵⁴ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de**

FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 10-E-1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁵⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

¹⁵⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 10-C4-V

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁵⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

¹⁵⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 10-C1-V**.

No.	Conclusión
10-C1-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”</i>

De la falta descrita, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que

consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.

- b. Informe anual.
- c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁵⁷:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA**

¹⁵⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera previa** a su celebración.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos, al haber sido registrados con anterior al plazo indicado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.¹⁵⁸

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos extemporáneos, **de manera previa** a su celebración. A continuación, se refiere la irregularidad observada:

Conclusión
<i>“10-C1-V. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

¹⁵⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos con anterioridad al plazo establecido por la normatividad, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización¹⁵⁹.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

¹⁵⁹ “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traduce **en una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 10-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 4 eventos con anterioridad a su fecha de realización, pero de manera extemporánea.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁶⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1 (una) Unidades de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea (4), cantidad que asciende a un total de \$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**.

¹⁶⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones **10-C2-V** y **10-C3-V**.

No.	Conclusión
10-C2-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
10-C3-V	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 eventos de la agenda de actos públicos, con posterioridad a la fecha de su realización.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de

la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

1) Informes del gasto ordinario:

- a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
- a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. **Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
- a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien

las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁶¹:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA**

¹⁶¹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de la que son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando 20 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones **10-C2-V y 10-C3-V** de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 3 eventos de la agenda de actos públicos, **de manera posterior** a su celebración.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos, al haber sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.¹⁶²

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a su realización, esto es, extemporáneos. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
10-C2-V <i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”</i>
10-C3-V <i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 eventos de la agenda de actos públicos, con posterioridad a la fecha de su realización.”</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad

¹⁶² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización¹⁶³.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

¹⁶³ “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **diversas faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 10-C2-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 2 eventos con posterioridad a su fecha de realización.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁶⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

¹⁶⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 10-C3-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 1 evento con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁶⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea (1), cantidad que asciende a un total de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

¹⁶⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones **10-C2 y 10-C3**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
10-C2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las operaciones en el periodo extraordinario, por un importe de \$9,300.00.”</i>	\$9,300.00
10-C3	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de nueve operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de corrección por un importe de \$145,033.24.”</i>	\$145,033.24

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos

presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:

- a) Informes trimestrales.
- b) Informe anual.
- c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los

candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹⁶⁶.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

¹⁶⁶ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁶⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los

¹⁶⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no

presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 20** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones **10-C2** y **10-C3** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.¹⁶⁸

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas., por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

10-C2 “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las operaciones en el periodo extraordinario, por un importe de \$9,300.00.”

¹⁶⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

10-C3 “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de nueve operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de corrección por un importe de \$145,033.24.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización¹⁶⁹.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

¹⁶⁹ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 10-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$9,300.00 (nueve mil trescientos pesos 00/100 M.N.).

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁷⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el

¹⁷⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 10-C3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$145,033.24 (ciento cuarenta y cinco mil treinta y tres pesos 24/100 M.N.).

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁷¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$21,754.99 (veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.).**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Chiapas Unido, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el

¹⁷¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$21,754.99 (veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.11 PODEMOS MOVER A CHIAPAS

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que la irregularidad en que incurrió el sujeto obligado es la siguiente:

a) **1 Falta de carácter formal: conclusión 11. E-1.**

A continuación se desarrolla el apartado en comento:

a) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión: 11. E-1.**

Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
11. E-1	<i>“El sujeto obligado omitió reportar el gasto de seis bardas y dos lonas por un importe de \$2,565.50”</i>	\$2,565.50

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través

del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad del mismo en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara la aclaración que considerara procedente, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligados respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁷²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su

¹⁷² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se presente.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 11. E-1** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar su egreso por concepto de seis bardas y dos lonas por un importe de \$2,565.50 (dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.) realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gasto realizado, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹⁷³

¹⁷³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad observada:

<i>“El sujeto obligado omitió reportar el gasto de seis bardas y dos lonas por un importe de \$2,565.50”</i>
--

Dicha irregularidad se llevo a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable

de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁷⁴:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valorará aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y

¹⁷⁴ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹⁷⁵ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁷⁶

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de

¹⁷⁵ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

¹⁷⁶ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **20** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 11. E-1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$2,565.50 (Dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$2,565.50 (Dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Podemos Mover a Chiapas, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,565.50** (dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30.12 ISAÍAS OVILLA COYAZO

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

- a) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **12-C1**
- b) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **12-C2 y 12-C1-V**.
- c) Imposición de la sanción.

A continuación se desarrollan los apartados en comentario:

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora de los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: **Conclusión 12-C1.**

No.	Conclusión
12-C1	<i>El sujeto obligado omitió presentar el informe de campaña.</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que fenecido el término para la presentación de los informes de ingresos y gastos durante el periodo de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización advirtió la omisión en dar cumplimiento a dicha obligación, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

Ante la ausencia absoluta del informe de ingresos y gastos, y de conformidad con el Acuerdo INE/CG085/2018, resultó innecesario el envío del oficio de errores y omisiones ya que el insumo básico para su emisión es inexistente. Sin embargo, no por ello se dejó de respetar el derecho de audiencia de los sujetos regulados, toda vez que se diseñó un mecanismo apropiado que, entre otras cosas, les permite a los sujetos obligados subsanar la falta y alegar lo que a su derecho corresponda.¹⁷⁸

Así, con la finalidad de garantizar el debido proceso al candidato involucrado, al advertirse la omisión en la entrega del informe, de conformidad con el Acuerdo CF/001/2018, la Comisión de Fiscalización instruyó a la Unidad Técnica de Fiscalización que, una vez concluido el plazo establecido para la presentación del informe de ingresos y gastos identificara a aquellos sujetos regulados que fueran omisos en dar cumplimiento a dicha obligación y, de manera electrónica, les notificara el supuesto de omisión en que incurrieron para que en un plazo de 3 días contados a partir del siguiente a su notificación, presentaran el informe a través del Sistema Integral de Fiscalización, precisando de forma clara que en caso de no presentar su informe, se resolvería lo que en derecho correspondiera.

Al respecto, una vez fenecido el plazo para la presentación del informe correspondiente, derivado del plazo otorgado mediante Acuerdo CF/001/2018, el candidato independiente de mérito fue omiso en su presentación.

¹⁷⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos identificados como SUP-RAP-21/2018 y SUP-RAP-23/2018.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto

obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar el informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en presentar el informe del periodo de campaña conforme a lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado omitió presentar el informe del periodo de campaña, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Descripción de la Irregularidad observada
<i>El sujeto obligado omitió presentar el informe de campaña.</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe **culpa** en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir presentar el informe de ingresos y gastos de campaña, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ¹⁷⁹.

De los artículos señalados se desprende que los candidatos independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos

¹⁷⁹ Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (...) n) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo; (...). Artículo 431. 1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de legalidad en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en materia de fiscalización, radica en buena medida en el diseño de las mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el ente político al ser omiso en presentar los Informes de Campaña Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, vulnera y obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas.

En consecuencia, al no tener certeza del origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta de fondo** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el **inciso c)** del presente considerando.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 12-C2 y 12-C1-V**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
12-C2	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$1,157.87</i>	\$1,157.87
12-C1-V	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto gastos de propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$4,012.04.</i>	\$4,012.04

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de cinco días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de campaña, conforme a lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.¹⁸⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de campaña contraviniendo lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de

¹⁸⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$1,157.87</i>
<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF gastos por concepto gastos de propaganda y gastos operativos de los eventos realizados, por un monto de \$4,012.04.</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los sujetos obligados.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia

respecto de los informes de campaña presentados, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁸¹:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento

¹⁸¹ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales¹⁸², y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁸³.

De los artículos señalados se desprende que los candidatos independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

¹⁸² Artículo 431. 1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos: (...).

¹⁸³ “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el **inciso c)** del presente considerando.

c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a las conclusiones 12-C1, 12-C2 y 12-C1-V.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 12-C1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar el informe de campaña.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en la omisión de omitió presentar el informe del periodo de campaña durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 12-C2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **GRAVES ORDINARIAS**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de **\$1,157.87** (mil ciento cincuenta y siete pesos 87/100 M.N.), durante el periodo de campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,157.87** (mil ciento cincuenta y siete pesos 87/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Conclusión 12-C1-V

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **GRAVES ORDINARIAS**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de **\$4,012.04** (cuatro mil doce 04/100 M.N.), durante el periodo de campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$4,012.04** (cuatro mil doce 04/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁸⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes el monto a imponer sería el siguiente:

¹⁸⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; **II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	12-C1	Omisión de presentar informes de campaña caso 1	\$8,212.52	20% del tope de gastos de campaña	\$8,140.60
b)	12-C2	Egreso no reportado	\$1,157.87	100%	\$1,128.40
b)	12-C1-V	Egreso no reportado	\$4,012.04	100%	\$3,949.40
Total					\$13,218.40

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el candidato independiente¹⁸⁵, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Capacidad Económica (15% de A)
\$945,000.00	\$141,750.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con

¹⁸⁵ Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del quince por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Isaías Ovilla Coyazo** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **164** (ciento sesenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$13,218.40** (trece mil doscientos dieciocho pesos 40/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.1** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Acción Nacional**, las siguientes sanciones:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **1-C4**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,547.25 (mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **1-C1-V**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.2** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Revolucionario Institucional**, las siguientes sanciones:

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión **2-C2**.

Una multa que asciende **10** (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **2-C3**.

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$483.75 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 75/100 M.N.)**.

c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 2-C1-V, 2-C2-V y 2-C3-V.

Conclusión 2-C1-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$6,448.00 (seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**

Conclusión 2-C2-V

Una reducción del **25% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 2-C3-V

Una reducción del **25% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)**.

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.3** de la presente Resolución, se imponen al **Partido de la Revolución Democrática**, las sanciones siguientes:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3-C1.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,984.92 (mil novecientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **3-C2**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.4** de la presente Resolución, se imponen **Partido del Trabajo**, las siguientes sanciones:

a) 2 Falta de carácter formal: Conclusión **4-C1** y **4-C3**.

Una multa que asciende a **20 (veinte)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$1,612.00 (Mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **4-C4**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$369.45 (trescientos sesenta y nueve pesos 45/100 M.N.)**.

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **4. E-1** y **4-C2-V**

Conclusión 4.E-1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$210.00 (doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 4-C2-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,650.00 (tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **4-C1-V**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$1,047.80 (Mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.)**.

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **4-C2 y 4-C7**

Conclusión 4-C2

Del cálculo de sanción se desprende que el instituto político no alcanza ni una Unidad de Medida y Actualización, por lo cual la sanción queda sin efectos.

Conclusión 4-C7

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$390.00 (trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)**.

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.5** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Verde Ecologista de México**, las sanciones siguientes:

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones **5-C1 y 5-C2**.

Una multa que asciende a **20 (veinte)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **5-C1-V**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.)**.

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **5-C2-V** y **5-C3-V**.

Conclusión 5-C2-V.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 5-C3-V

una reducción del **25% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,821.00 (dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.)**.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **5-C3**.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$627.00 (seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)**.

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.6** de la presente Resolución, se imponen a **Nueva Alianza**, las siguientes sanciones:

a) 4 Faltas de carácter formal: conclusiones **6-C1**, **6-C2**, **6-C2 BIS** y **6-C3**.

Una multa que asciende a **40 (cuarenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)**.

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6-E-1 y 6-C1-V.

Conclusión 6-E-1

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,666.00 (mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 6-C1-V

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.7** de la presente Resolución, se imponen a **Movimiento Ciudadano**, las siguientes sanciones:

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 7-C3.

Una multa que asciende a **10 (diez)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C1-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)**.

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 7-C1 y 7-C2.

Conclusión 7-C1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,100.05 (mil cien pesos 05/100 M.N.)**.

Conclusión 7-C2

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,674.31 (tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 31/100 M.N.)**.

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.8** de la presente Resolución, se imponen a **Morena**, las siguientes sanciones:

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 8-C1.

Una multa que asciende a **100 (cien)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-C3.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$53,592.84 (cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.)**.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-C4.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$5,505.60 (cinco mil quinientos cinco pesos 60/100 M.N.)**.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8-I1.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$212.50 (doscientos doce pesos 50/100 M.N.)**.

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.9** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Encuentro Social**, las siguientes sanciones:

a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 9-C1, 9-C2-Bis y 9-C3.

Una multa que asciende a **30 (treinta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)**.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9-C2.

Del cálculo de sanción se desprende que el instituto político no alcanza ni una Unidad de Medida y Actualización, por lo cual la sanción queda sin efectos.

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 9-C6 y 9-C-I1.

Conclusión 9-C6

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,631.48 (cuatro mil seiscientos treinta y un mil pesos 48/100 M.N.)**.

Conclusión 9-C-I1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,246.40 (dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.)**.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9-C1-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.)**.

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.10** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Chiapas Unido**, las siguientes sanciones:

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones: 10-C1, 10-C4 y 10-C5.

Una multa que asciende a **100 (cien)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10-E-1 y 10-C4-V.

Conclusión 10-E-1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,344.00 (mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 10-C4-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10-C1-V.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**.

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10-C2-V y 10-C3-V.

Conclusión 10-C2-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 10-C3-V

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10-C2 y 10-C3.

Conclusión 10-C2

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 10-C3

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$21,754.99 (veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)**.

DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.11** de la presente Resolución, se imponen **Partido Podemos Mover a Chiapas**, las siguientes sanciones:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11. E-1.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,565.50 (dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.)**.

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **30.12** de la presente Resolución, se imponen al **Candidato Independiente Isaías Ovilla Coyazo**, las sanciones siguientes:

- a) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **12-C1**
- b) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **12-C2 y 12-C1-V**.

Una multa equivalente a **164 (ciento sesenta y cuatro)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$13,218.40 (trece mil doscientos dieciocho pesos 40/100 M.N.)**.

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al Tribunal Electoral del estado de Chiapas, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

DÉCIMO CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

DÉCIMO QUINTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos al candidato independiente, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

DÉCIMO SEXTO. Se vincula a los partidos políticos, a través del representante acreditado ante ese organismo público local, para que una vez que hayan sido notificados del contenido de esta Resolución y el Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, de manera inmediata notifiquen la misma a sus candidatos; hecho

que sea, esos institutos políticos deberán remitir de forma expedita a la Unidad Técnica de Vinculación de este organismo nacional las constancias atinentes.

DÉCIMO SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el considerando 20 de la presente Resolución.

DÉCIMO OCTAVO. Se instruye al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

DÉCIMO NOVENO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

VIGÉSIMO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

VIGÉSIMO PRIMERO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta haya quedado firme.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar una síntesis de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días posteriores a los que ésta haya causado estado. _____

Del mismo modo le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone de 8 apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o bien, en su caso, solicitar la realización de una ronda de discusión en lo general. _____

Dado que no hay reserva alguna, Secretario del Consejo, proceda a la votación de los 8 apartados. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como los apartados que van del 6.1 al 6.8, tomando en consideración las fe de erratas asociadas a los apartados 6.1, 6.4, 6.5 y 6.6. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG1470/2018, INE/CG1471/2018, INE/CG1472/2018, INE/CG1473/2018, INE/CG1474/2018, INE/CG1475/2018, INE/CG1476/2018 e INE/CG1477/2018 Ptos. 6.1 al 6.8) _____

INE/CG1470/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA EN EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO COMO SG-RAP-9/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación de Resolución. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución identificada con los números **INE/CG533/2017** e **INE/CG548/2017** respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el doce de enero de dos mil dieciocho, el Partido de Baja California interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG533/2017** e **INE/CG548/2017**, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), en el expediente identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-9/2018**.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil dieciocho, determinando en los Puntos Resolutivos, lo que se transcribe a continuación:

*“**PRIMERO.** Se **revoca** parcialmente el Dictamen y la resolución controvertidos, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de dicha sentencia.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

SEGUNDO. *Se ordena al Consejo General del INE emita una nueva determinación conforme a lo expuesto en el apartado de efectos de esta sentencia.”*

IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SG-RAP-9/2018 tuvo por efecto **revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con los números de acuerdo INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017 respectivamente**, para los efectos ordenados por la Sala Regional Guadalajara por lo que se procede a la modificación de dichos documentos. Así, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio de dos mil dieciséis.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el siete de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar el Dictamen Consolidado y la Resolución dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados con los números de acuerdo **INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017** respectivamente, por lo que hace al **Partido de Baja California**, en consecuencia, se procede a la modificación de dichos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón al **estudio de fondo y efectos** de la sentencia recaída en el expediente SG-RAP-9/2018 la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo. *Del análisis de la demanda se advierte que el recurrente expresa esencialmente los siguientes motivos de disenso:*

(…)

AGRAVIO 2. CONCLUSIÓN 9, VIÁTICOS Y PASAJES, DESTINO DEL RECURSO PÚBLICO. FINALIDAD PARTIDISTA DEL GASTO

Respecto de la conclusión 9, reprocha que en los requerimientos que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, en ninguno se le solicitó que acreditara la calidad de miembro que tenían las personas que acudieron a la Ciudad de México, y de las cuales no se pudo comprobar la totalidad de viáticos derivado de la multa mencionada.

Por lo anterior considera que se violenta el derecho humano de legalidad y debida fundamentación y motivación, pues de transgredió la garantía de audiencia que protege el derecho humano al debido proceso, el cual está consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como en el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Indica que en el Dictamen se establece que las multas eran en virtud de que no se acreditó la calidad de miembros partidistas de todas y cada una de las personas que acudieron a realizar los viajes y gestiones a la Ciudad de México.

Aduce que del análisis de los dos requerimientos y de sus contestaciones, queda probado que desde la primera contestación al primer oficio de aclaración se mencionó para efectos de qué se estaba realizando el viaje, por lo cual al dar la descripción de los acuerdos que se fueron a gestionar, que eran también referentes a las multas relacionadas con la elección de 2016, con eso era suficiente para tener por acreditada la vinculación del viaje con el acto partidista y el gasto.

Se inconforma de que en la resolución impugnada se mencione que no se pudo vincular el gasto, puesto que las personas que gestionaron el viaje no pertenecen al Partido de Baja California; al respecto destaca el recurrente que

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

estas personas sí son miembros del partido y que la autoridad en ninguno de los dos requerimientos, les pidió que acreditaran la calidad de miembros o cargos partidistas que tenían las personas que hicieron el viaje mencionado.

Sostiene que se transgredió el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos,¹⁰ y que el Dictamen estuvo mal fundado, pues sí se cumplieron con los requerimientos mencionados en dicho artículo.

*Estima que se vulneró la garantía de audiencia, así como lo establecido en los artículos 290, 291 y 294 del Reglamento de Fiscalización,¹¹ y la aplicación exacta del artículo 294 en comentario, en virtud de que en el Dictamen se estableció que las personas que asistieron a los viajes, a los que se les pagaron los viáticos, no habían acreditado ser militantes y miembros del partido, sin embargo, en ninguno de los dos requerimientos se les pidió que acreditaran la calidad partidista, por lo cual asegura que se transgredió la tesis de rubro: **“INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LOS PRECANDIDATOS PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES”.***

ESTUDIO DEL AGRAVIO 2.

*En principio cabe señalar que acorde a lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1 de la Ley de Medios, en el Recurso de Apelación la Sala debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. Así, esta Sala Regional estima –una vez suplido en su deficiencia el agravio- **parcialmente fundado** el reproche del recurrente.*

*Lo **fundado** del agravio estriba en el incumplimiento de la garantía de la legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal por cuanto hace a la suficiente fundamentación y motivación.*

*En el primer oficio de errores y omisiones se observó al Partido de Baja California que de la verificación en el SIF, en específico a la subcuenta de Viáticos y Pasajes” se localizaron **pólizas que, por su concepto, no se vinculaban con las actividades del partido, tal como se muestran en el siguiente cuadro:***

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Proveedor	Importe
Agosto	Normal	EG	28	17/10/2016	11/08/2016	Viajes internacionales Monarca	\$7, 623. 00
Noviembre	Normal	EG	30	03/01/2017	04/11/2016	Viajes Monarca	11, 208. 00

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

<i>Periodo de la Operación</i>	<i>Tipo de Póliza</i>	<i>Subtipo de Póliza</i>	<i>Número de Póliza</i>	<i>Fecha de Registro</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Importe</i>
Diciembre	Normal	EG	59	11/01/2017	09/12/2016	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	4,215.00
						Total	\$23,046.00

*Por lo cual se le solicitó presentar en el SIF **las aclaraciones que a su derecho convinieran**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.*

En la respuesta al primer oficio de errores y omisiones, el Partido de Baja California señaló:

-Que adjuntaba las cartas de objeto partidista donde vinculaba el gasto realizado.

-Respecto de la póliza de egresos 28, señaló que este gasto se realizó por la visita al INE en la Ciudad de México para llevar a cabo una reunión de trabajo sobre el oficio número INE/UTF/DA-F/13212/16 de errores y omisiones derivadas a la revisión de gabinete del informe anual 2015.

-Con relación la póliza de egresos 30, indicó que este gasto se efectuó para llevar a cabo una reunión de trabajo con funcionarios del INE en la Ciudad de México para aclarar puntos de los acuerdos INE/CG573/2016 e INE/CG574/2016 de las sanciones impuestas por el INE, así como del acuerdo INE/CG657/2016 del remanente del financiamiento público de campaña no ejercido durante el Proceso Electoral 2015-2016.

-En cuanto a la póliza de egresos 59, mencionó que se efectuó este viaje para diferentes actividades partidistas en la Ciudad de México, como se relataba en la carta adjunta en el SIF a esta póliza.

Agregó que se presentaban en el anexo 23 de ese oficio.

*En el segundo oficio de errores y omisiones la Unidad Técnica determinó que del análisis a las aclaraciones y documentación presentada, se constató que el Partido de Baja California presentó cartas de autorización de gastos, sin embargo, **omitió vincular las erogaciones realizadas con las actividades del partido** solicitados por la autoridad, por lo cual se le solicitaba nuevamente **presentar en el SIF las aclaraciones que a su derecho convinieran**.*

En la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, el partido indicó que en el anexo 9 presentaba las cartas de comisión donde se vinculaba el gasto.

*Así las cosas, en el Dictamen Consolidado se estableció que del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto obligado en el periodo de ajuste 2 en el SIF, se determinaba que el Partido de Baja California presentó las facturas del gasto correspondiente boletos de avión y expedición de boletos, fotografías de personal del partido, oficio de contestación de la primera vuelta del oficio de errores y omisiones del informe anual 2015 y cartas de autorización de gastos, sin embargo, **la evidencia proporcionada no permitía vincular el gasto, ya que se desconocía si el personal que tomó parte como beneficiario de los gastos incurridos era del partido.***

Por tal razón, la observación no quedó atendida; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.

En consecuencia, se determinó como conclusión 9 que el sujeto obligado omitió entregar la evidencia necesaria para vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido, por un monto de \$23, 046.00.

Ahora bien, la exigencia que se establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a hipótesis normativa.

Tratándose de la debida motivación basta que la autoridad exprese los razonamientos sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde más allá de lo estrictamente necesario para que se comprenda el razonamiento expresado.

En este sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que no proporcionen elementos al gobernado para defender sus derechos, o bien, impugnar aquéllos.

Es decir, el gobernado debe conocer la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad y quedar plenamente capacitado para desvirtuarlos.

*Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y **expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.***

Al respecto, cabe precisar que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.

Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración con la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá revocar el acto impugnado; y, en segundo caso, consiste en una violación material de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos.

Al respecto son ilustrativas las jurisprudencias de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA”; “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR; “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA”, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE” Y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL”

Así las cosas, en el caso concreto se advierte que para arribar a la conclusión sancionatoria 9, en el Dictamen Consolidado la responsable se limita a señalar que la evidencia proporcionada por el Partido de Baja California no permitía

vincular el gasto, ya que se desconocía si el personal que tomó parte como beneficiario de los gastos incurridos era del partido.

*Lo anterior evidencia que la responsable no puntualizó de manera adecuada y suficiente, las razones particulares o causas inmediatas que tuvo consideración para concluir lo anterior, así que con su actuar **incurrió en la falta de fundamentación y motivación suficiente que exige el artículo 16 constitucional, párrafo primero.***

La responsable transgredió la garantía de legalidad en su vertiente de falta de motivación porque su afirmación es tan imprecisa que no proporciona elementos al recurrente para defender sus derechos.

Es decir, no dio a conocer la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó para concluir que la evidencia proporcionada por el Partido de Baja California no permitía vincular el gasto con un fin partidista, ni los fundamentos y los motivos por los que el recurrente debía demostrar que el personal que tomó parte beneficiario de los gastos incurridos era del partido; para así concluir que debía sancionársele por incumplir con lo dispuesto en el artículo 25, inciso n), de la Ley General de Partidos Políticos.

La autoridad tiene la obligación de darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente; se deben exponer los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.

*Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la tesis de rubro: **“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.”***

CUARTO. Efectos

“(…)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

*b) Se **revoca** la conclusión 9, para efectos de que el Consejo General del INE emita una nueva resolución con fundamentación y motivación suficiente en la que, a partir de los elementos probatorios que obran en el expediente y en el SIF, resuelva lo que en derecho proceda y exponga la conclusión atinente y en la parte conducente de la Resolución que emita, las circunstancias particulares por las cuales se concluya si es o no conforme a Derecho tener al partido recurrente dando cumplimiento a sus obligaciones en materia de fiscalización.*

La responsable deberá considerar el principio procesal “non reformatio in peius” (no reformar en perjuicio), la resolución recurrida no debe ser modificada en disfavor del imputado el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo; pues lo peor puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada, ya que si pudiera correr el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, es seguro que nunca haría valer su protesta

(...)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado como **SG-RAP-9/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veintisiete de enero de la misma anualidad, mismo que

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

asciende a \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de fiscalización anual ordinaria.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Baja California, sujeto al procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante el Dictamen número sesenta y tres emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Baja California	\$9,610,689.93 ¹

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el Partido Baja California no cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, por lo que tal como lo indica el Dictamen número sesenta y tres emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el presente Acuerdo.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no

¹ Es importante destacar que, según el acuerdo original, es decir, el Dictamen cuarenta y nueve emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California se aprobó el monto anual de \$9,740,564.12 para las actividades ordinarias permanentes del Partido Baja California, no obstante, el registro del Partido Encuentro Social de Baja California, modificó los montos anuales originalmente previstos para los partidos políticos, quedando como resultado, para el Partido Baja California, la suma de la ministraciones emitidas de enero a abril más las ministraciones previstas de mayo a diciembre, tal como se cuantifica en la tabla.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

5. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con los números de acuerdo **INE/CG533/2017** e **INE/CG548/2017** respectivamente, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **5.2.2, conclusión 9** del Dictamen Consolidado; y considerando **18.1.1, inciso b), conclusión 9** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Guadalajara, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 9** del Dictamen Consolidado correspondiente al **Partido de Baja California**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente la resolución impugnada, respecto a la motivación y fundamentación de la conclusión 9.	Se revoca la conclusión 9 para efectos de que el Consejo General del INE emita una nueva resolución con fundamentación y motivación suficiente en la que, a partir de los elementos probatorios que obran en el expediente y en el SIF.	Conclusión 9. Por lo que hace a la Póliza de Egreso No. 59, la observación queda atendida , en atención al análisis de la documentación presentada por el sujeto obligado. Por lo que hace a las pólizas de egresos 28 y 30 la observación no quedó atendida, porque el partido no vinculó los gastos realizados con sus actividades.	En el Dictamen y en la Resolución.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica la **Resolución** número **INE/CG548/2017**, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis”, en la parte conducente al Partido Baja California en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

“5.2.2 Partido de Baja California - Baja California

(...)

Viáticos y Pasajes

- ♦ *De la verificación en el SIF, en específico a la sub cuenta de “Viáticos y pasajes” se localizaron pólizas que, por su concepto, no se vinculan con las actividades del partido, tal como se muestra en el siguiente cuadro:*

<i>Período de la Operación</i>	<i>Tipo de Póliza</i>	<i>Subtipo de Póliza</i>	<i>Número de Póliza</i>	<i>Fecha de Registro</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Importe</i>
Agosto	Normal	EG	28	17/10/2016	11/08/2016	Viajes Internacionales Monarca	\$7,623.00
Noviembre	Normal	EG	30	03/01/2017	04/11/2016	Viajes Monarca	11,208.00
Diciembre	Normal	EG	59	11/01/2017	09/12/2016	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	4,215.00
						Total	\$23,046.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/11135/2017, de fecha 04 de julio de 2017.

Con escrito de respuesta, SF/PBC/011/2017 de fecha el 8 de agosto de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe.

“ (...)

**SE EFECTUO UNA REVISION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS
MENCIONADAS EN EL CUADRO QUE ANTERIOR Y VERIFICAMOS**

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

*QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACION LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA (...)*

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada en el periodo de ajuste por el sujeto obligado en el SIF, se constató que el PBC presentó cartas de autorización de gastos, sin embargo, omitió vincular las erogaciones realizadas con las actividades del partido.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/12709/2017, de fecha 29 de agosto de 2017.

Con escrito de respuesta, SF/PBC/020/2017 de fecha el 5 de septiembre de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe.

“(...)

*EN RELACION A ESTE PUNTO EN EL **ANEXO 9** PRESENTAMOS LAS
CARTAS DE COMISION DONDE SE VINCULA EL GASTO (...)*

Del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto obligado en el periodo de ajuste 2 en el SIF, se determinó lo siguiente:

El PBC presentó las facturas del gasto correspondiente boletos de avión y expedición de boletos, fotografías de personal del partido, oficio de contestación de la primera vuelta del oficio de errores y omisiones del informe anual 2015 y cartas de autorización de gastos, sin embargo, la evidencia proporcionada no permite vincular el gasto, ya que se desconoce el personal que tomo parte como beneficiario de los gastos incurridos sean del partido. Por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de LGPP. **(Conclusión 9.PBC/BC)**

No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia relativa al recurso de apelación promovido por el Partido de Baja California que obra en el expediente SG-RAP-9-2018, a valorar de nueva cuenta la documentación presentada por el

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

PBC, con el fin de fundar y motivar debidamente la omisión presentar la evidencia necesaria para vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido.

Así las cosas, esta autoridad se dio a la tarea de realizar una nueva revisión a los datos que obran, tanto en el expediente como en el SIF, a efecto de motivar de manera suficiente las razones que llevaron a sancionar al recurrente. De la verificación a la documentación soporte consistente en: pólizas contables y balanza de comprobación del ejercicio 2016 y demás documentación relativa a los gastos por concepto de “viáticos y pasajes”; se constató que dichos registros contables amparan la cantidad de \$23,046.00 los cuales cubren la totalidad de los gastos de transporte aéreo observados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

<i>Período de la Operación</i>	<i>Tipo de Póliza</i>	<i>Subtipo de Póliza</i>	<i>Número de Póliza</i>	<i>Fecha de Registro</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Importe</i>	<i>Referencia</i>
Agosto	Normal	EG	28	17/10/2016	11/08/2016	Viajes Internacionales Monarca	\$7,623.00	1
Noviembre	Normal	EG	30	03/01/2017	04/11/2016	Viajes Monarca	11,208.00	2
Diciembre	Normal	EG	59	11/01/2017	09/12/2016	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	4,215.00	3
Total							\$23,046.00	

Por lo que respecta a la póliza PE-28/08-16, que se señala con (1) en la columna referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo siguiente:

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.

RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA).

CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO DURANTE EL PROCEDO ELECTORAL 2015-2016.

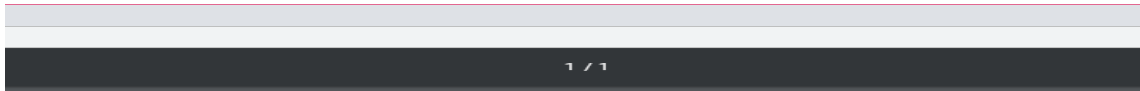
**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA.

SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO

(...).”

Ahora bien, como documentación anexa al escrito anterior adjuntó escrito sin número ni fecha, mismo que no especifica a quien va dirigido, signado por la Lic. Gabriela Espinoza Loza, Titular del Órgano Interno del Partido de Baja California, como se muestra a continuación:



POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO EL GASTO DE LA FACTURA NO. 21502837 POR LA CANTIDAD DE \$ 7,333.00 (SON SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) DEL CUAL SE EFECTUÓ POR MOTIVO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL TRASLADO A LAS OFICINAS DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARAR DUDAS SOBREL EL OFICIO NUM. INE/UTF/DA-F/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADA A LA REVISION DE GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA).

Autorizo


LIC. GABRIELA ESPINOSA LOZA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO
Partido de Baja California

Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto obligado presentó factura con folio 21502837, de fecha 12/08/2016, expedida por “Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”; además un escrito denominado “*carta de justificación*”, como se muestra a continuación:

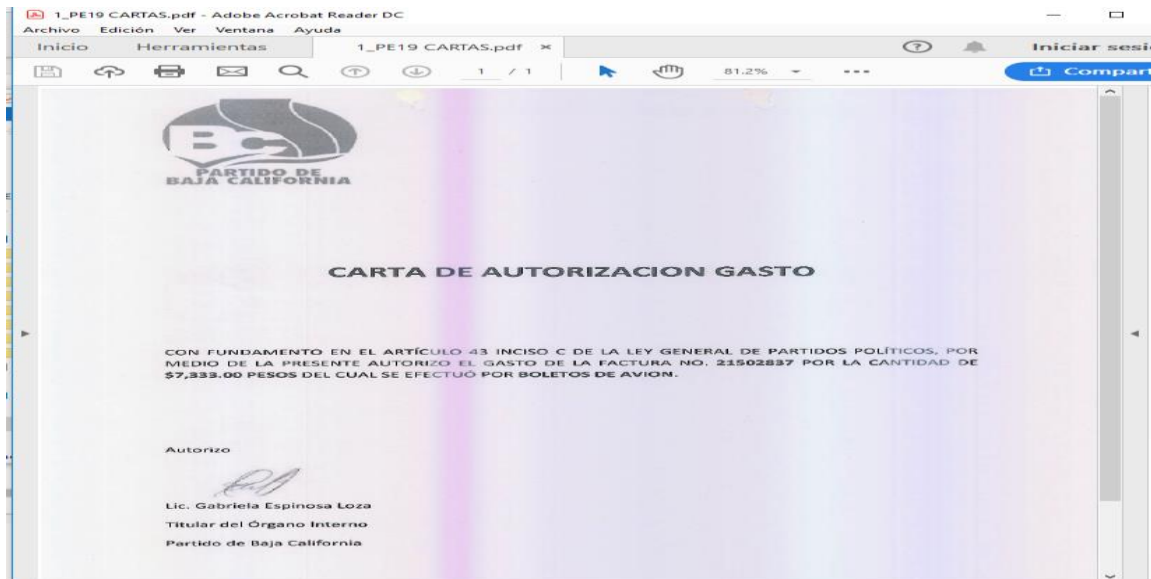
CONSEJO GENERAL ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018

Número de Póliza	Ejercicio	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Período de operación
28	2016	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO

Los datos con (*) son requeridos.

*Tipo de evidencia:
TODAS

Nombre Archivo	Clasificación	Fecha Alta	Estatus	Vista Previa Archivos
PE19 CARTAS.pdf	CARTA DE JUSTIFICACION	17/10/2016 11:59	Activa	
PE19 XML.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	17/10/2016 11:59	Activa	
PE19 TRANSFER.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	17/10/2016 11:59	Activa	
PE19 FACTURAS.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	17/10/2016 11:59	Activa	
PE19 VALIDA.jpg	OTRAS EVIDENCIAS	17/10/2016 14:47	Activa	



Del análisis a dichos documentos se puede constatar, que el sujeto obligado fue omiso en señalar el personal o prestador de servicios del partido que fue comisionado para la realización de las actividades que argumenta estaban relacionadas con el oficio de errores omisiones al que hace alusión; en el mismo sentido no establece de manera precisa la fecha en el que se llevaron a cabo dichas actividades, en virtud de que “la carta de autorización de gasto” mediante la cual

pretendió subsanar la observación de mérito, carece de fecha de emisión, de tal suerte que para esta autoridad fue imposible establecer que el comprobante fiscal con el que soportó dicho gasto, coincidiera con la fecha en la que se expidió la multicitada carta de autorización.

Lo anteriormente expuesto se fundamenta en la obligación establecida en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que a la letra se transcribe:

*“(...) **Artículo 25.***

1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...)”

*(...) **n)** Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (...)”*

Por lo anterior, esta autoridad concluyó que, la sola presentación de una “carta de autorización de gasto” expedida por el órgano interno de finanzas, no es suficiente por si sola para demostrar de manera fehaciente que el gasto realizado se haya utilizado de manera “exclusiva” para actividades propias del partido y no así para actividades o intereses particulares, en virtud de que no presenta elementos que den certeza del personal comisionado, las actividades llevadas a cabo, el periodo de tiempo en el que se llevaron a cabo dichas actividades, fecha de emisión del documento, firma de la persona comisionada. Por tal razón la observación **no quedó atendida** por un monto de **\$7,623.00. (Conclusión 9)**

Por lo que respecta a la póliza PE-30/11-16, que se señala con (2) en la columna referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo siguiente:

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.

RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA).

CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

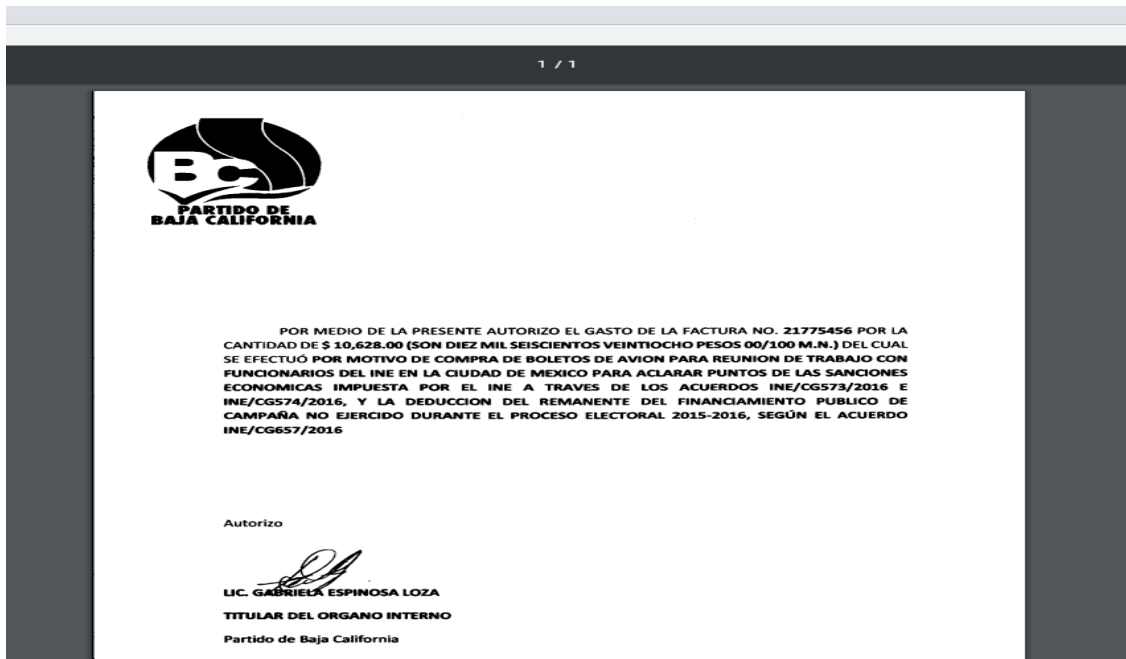
ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016.

Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA.

SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO

(...).”

Ahora bien, como documentación anexa al escrito anterior adjuntó escrito sin número ni fecha, mismo que no especifica a quien va dirigido, signado por la Lic. Gabriela Espinoza Loza, Titular del Órgano Interno del Partido de Baja California, como se muestra a continuación:



Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto obligado presentó factura con folio 21775456, de fecha 09/11/2016, expedida por “Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”, así como factura

CONSEJO GENERAL ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018

folio “CEMXL 3135” expedida por “Viajes Internacionales Monarca S.A. de C.V.”; dos escritos denominados “*carta de justificación*”, como se muestra a continuación:

Número de Póliza	Ejercicio	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Periodo de operación
30	2016	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE

Los datos con (*) son requeridos.

*Tipo de evidencia: TODAS

Nombre Archivo	Clasificación	Fecha Alta	Estatus	Vista Previa Archivos
PE31 CARTA 2.pdf	CARTA DE JUSTIFICACION	03/01/2017 18:35	Activa	
PE31 CARTA.pdf	CARTA DE JUSTIFICACION	03/01/2017 18:35	Activa	
PE31 VALIDA 2.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	03/01/2017 18:35	Activa	
PE31 VALIDA.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	03/01/2017 18:35	Activa	
PE31 TRANSFER.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	03/01/2017 18:35	Activa	
PE31 FACT 2.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	03/01/2017 18:35	Activa	



**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**



Del análisis a dichos documentos se puede constatar, que el sujeto obligado fue omiso en señalar el personal o prestador de servicios del partido que fue comisionado para la realización de las actividades que argumenta estaban relacionadas con las resoluciones a las que hace alusión; en el mismo sentido no establece de manera precisa la fecha en la que se llevaron a cabo dichas actividades, en virtud de que “la carta de autorización de gasto” mediante la cual pretendió dar subsanación a la observación de mérito, carece de fecha de emisión, de tal suerte que para esta autoridad fue imposible establecer que el elemento temporal del comprobante fiscal con el que soportó dicho gasto, coincidiera con la fecha en la que se expidió la multicitada carta de autorización.

Lo anteriormente expuesto se fundamenta en la obligación establecida en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que a la letra se transcribe:

*“(…) **Artículo 25.***

1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)”

*“(…) **n)** Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (…)”*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Por lo anterior, esta autoridad concluyó que, la sola presentación de una “carta de autorización de gasto” expedida por la Tesorería del partido político, no es suficiente por si sola para demostrar de manera fehaciente que el gasto realizado se haya utilizado de manera “exclusiva” para actividades propias del partido y no así para actividades o intereses particulares, en virtud de que no presenta elementos que den certeza del personal comisionado, las actividades llevadas a cabo, el periodo de tiempo en el que se llevaron a cabo dichas actividades, fecha de emisión del documento, firma de la persona comisionada. Por tal razón la observación **no quedó atendida** por un monto de **\$11,208.00. (Conclusión 9)**

Por lo que respecta a la póliza PE-59/12-16, que se señala con (3) en la columna referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo siguiente:

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.

RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA).

CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016.

Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA.

SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO

(...).”

Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto obligado presentó factura con folio 21775456, de fecha 09/11/2016, expedida por

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

“Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”, así como factura folio “CEMXL 3135” expedida por “Viajes Internacionales Monarca S.A. de C.V.”, además presentó escrito sin número ni fecha, mismo que va dirigido al Lic. Jesús Camacho, Secretario de Finanzas del CEE del Partido de Baja California, signado por el C. Mario Conrad Favela Díaz, Secretario de Comunicación Social del CEE Partido de Baja California, el cual establece lo que a la letra se transcribe:

“Tijuana, Baja California, 18 de noviembre de 2016.

*Lic. Jesus Camacho
Secretario de Finanzas del CEE del Partido de Baja California
Presente.*

Por medio de la presente me permito enviarle un afectuoso saludo. La presente carta es para solicitar de la manera más atenta la reposición de gastos del viaje efectuado por su servidor y por el Secretario de la Juventud del Comité Estatal a la Ciudad de México en donde se realizaron las siguientes actividades partidistas:

- *Se procesó la Firma Electrónica avanzada para poder cumplir con los requisitos del nuevo Sistema para recepción de materiales de radio y televisión para los partidos políticos que promueve el Instituto Nacional Electoral.*
- *Asistimos a la Jornada de Inducción y capacitación para el uso del módulo de entrega electrónica de estrategias de transmisión.*
- *Se asistió a las oficinas del Senado de la Republica donde se tuvo una reunión con el equipo de Trabajo del Senador de Baja California Marco Blasquez para discutir distintos temas de interés para el Estado.*
- *Se asistió al congreso de la Unión donde se tuvieron pláticas con distintos Diputados de Baja California sobre temas relacionados con sus comisiones y propuestas legislativas para el Estado.*

Anexo envió algunas fotografías como comprobante de las actividades y así mismo envió los comprobantes (facturas) de los distintos gastos realizados.

Agradezco de antemano su apoyo para reponer los gastos efectuados lo antes posible.

Atentamente

*Mario Conrad Favela Díaz
Secretario de comunicación Social del CEE Partido de Baja California”*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Del análisis a la documentación presentada se puede constatar, que para este caso en específico, el sujeto obligado proporciona elementos a efecto de hacer del conocimiento de esta autoridad el nombre y cargo del personal del partido que fue comisionado, asimismo enuncia de manera detallada las actividades que fueron realizadas, así como el nexo que existe en cuanto a estas y la actividad partidista, en igual sentido la fecha de emisión del documento coincide con la fecha de compra del pasaje aéreo observado, adicionalmente el sujeto obligado adjuntó evidencias fotográficas que coadyuvaron a esclarecer el objeto del gasto. Por tal razón la observación **quedó atendida**, por un monto de **\$4,215.00**

(...)

Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 del Partido de Baja California.

(...)

9. PBC/BC. El sujeto obligado omitió vincular el gasto realizado con actividades del partido por un monto de \$18,831.00 (\$7,623.00+\$11,208.00).

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de LGPP.

(...)."

B. Modificación a la Resolución.

La Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SG-RAP-9/2018** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG548/2017** relativas al **Partido de Baja California**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **18.1.1**, inciso **b)**, conclusión **9**, en los términos siguientes:

"(...)

18.1 Baja California

18.1.1. Partido de Baja California

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado relativas al Partido de Baja California, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo las actividades ordinarias del comité en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político, son las siguientes:

(...)

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) y 9

(...)

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos: conclusiones 8² y 9.

No.	Conclusión	Monto involucrado
8	(...)	(...)
9	<i>“El sujeto obligado omitió entregar la evidencia necesaria para vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido, por un monto de \$18,831.00</i>	\$18,831.00

De las faltas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través de los oficios de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de diez y

² Esta conclusión quedó firme en la sentencia SG-RAP-9/2018.

cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas y entre otros el instituto político fue omiso en responder en relación con las observaciones analizadas en el presente apartado.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando cuatro** del presente Acuerdo.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Por lo que hace a las conclusiones referidas y observadas en el Dictamen Consolidado se identificó que las conductas desplegadas por el instituto político corresponden a una omisión, toda vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, violentando así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.³

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político.

Descripción de la irregularidad observada
(...)
<i>“9.PBC El sujeto obligado omitió entregar la evidencia necesaria para vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido, por un monto de \$18,831.00.”</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El instituto político cometió diversas irregularidades al reportar gastos por concepto de “boletos de avión” que carecen de objeto partidista por un importe de **\$18,831.00** (\$7,623.00+\$11,208.00). contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2016.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California.

³**Ley General de Partidos Políticos.** “Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos: n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro.

En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros y actividades en ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo anterior, sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.

Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales aplicables.

Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las actividades siguientes:

- Actividades ordinarias permanentes,

- Gastos de campaña, y
- Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:

- Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,
- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma Legislación Electoral ⁴, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para

4 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que tendrá las siguientes modalidades: **1)** financiamiento público; **2)** financiamiento por la militancia; **3)** financiamiento de simpatizantes; **4)** autofinanciamiento y, **5)** financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos⁵.

5 Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;(...)”.

Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar

relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En ese sentido, las faltas consistentes en omitir destinar el financiamiento allegado exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado erogaciones para la adquisición de “boletos de avión” por un monto de **\$18,831.00** (\$7,623.00+\$11,208.00), que no encuentran vinculación con el objeto partidista que deben observar los gastos, detectadas durante la revisión de los informes anuales, por si mismas constituyen diversas faltas sustantivas o de fondo, porque con dichas infracciones se acreditan la vulneración directa al bien jurídico tutelado de legalidad.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas señaladas en las **conclusiones (...) y 9** es el de legalidad, así como el uso adecuado de los recursos del partido político para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en

razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado, cometió varias irregularidades que se traduce en diversas faltas de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, en la que se viola el mismo valor común y se transgrede lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando cuatro** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8

(...)

Conclusión 9

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista, por concepto de “gastos de viaje” por un importe de \$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), durante el ejercicio 2016.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

- El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes Anuales relativos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto

⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con una sanción económica equivalente al **100% (ciento por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a un total de **\$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de Baja California, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

7. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de Baja California en la resolución INE/CG548/2017 consistieron en:

Sanciones en Resolución INE/CG548/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-9/2018
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.1.1 correspondiente al Partido de Baja California de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: (...) b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 8(...) y 9 (...) Conclusión 9	En atención a que la Sala Regional Guadalajara revocó la Conclusión 9 , y derivado del análisis de la información contenida en el Sistema Integral de Fiscalización; la observación respecto a la Póliza de Egreso No. 59, queda atendida ; por lo que hace a las pólizas 28 y 30 la observación no quedó atendida .	PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.1.1 correspondiente al Partido de Baja California de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: (...) b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 8(...) y 9 (...) Conclusión 9

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018**

Sanciones en Resolución INE/CG548/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-9/2018
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$23,046.00 (Veintitrés mil cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) .		Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **Partido de Baja California** la sanción siguiente:

“R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **18.1.1** correspondiente al **Partido de Baja California** de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:

(...)

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) y **9**

(...)

Conclusión 9

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**.

(...)”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado **INE/CG533/2017** y de la Resolución **INE/CG548/2017**, aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-9/2018**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **Partido Baja California** dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Baja California para que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Hágase del conocimiento al Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que la presente Resolución haya causado estado.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1471/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-49/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG219/2018** e **INE/CG220/2018** respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el seis de abril de dos mil dieciocho, la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, otrora aspirante a candidata independiente a Diputada Local por el V Distrito del estado de Querétaro, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución identificada con el número **INE/CG220/2018**, quedando radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León (en adelante Sala Regional Monterrey), identificado con la clave alfanumérica **SM-RAP-49/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo **TERCERO**, lo que a continuación se transcribe:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

“TERCERO. Respecto de la conclusión 2, conforme a lo expresado en el apartado de efectos de esta sentencia se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emita una nueva resolución.”

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto que, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SM-RAP-49/2018 tuvo por efecto **modificar parcialmente la Resolución INE/CG220/2018**, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

V. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

a) El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/46051/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios de la C. María Fernanda Estefanía López Félix.

b) El seis y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficios números 214-4/7943741/2018 y 214-4/7943754/2018, respectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a la solicitud de información señalada en el inciso previo.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución, identificada con el número INE/CG220/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas determinaciones, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG219/2018** e **INE/CG220/2018**, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de dejar sin efectos la **conclusión 2**, del Considerando **34.12** respecto de la entonces aspirante a candidata independiente a diputada local, **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos **3 y 4** de la sentencia recaída en el expediente SM-RAP-49/2018, relativos al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Monterrey, determinó lo que a continuación se transcribe:

“3. ESTUDIO DE FONDO

La recurrente impugna la Resolución INE/CG220/2018, en la que se le impuso una multa por un total de 20,835.24 -veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N., por irregularidades en su informe de ingresos y egresos para la obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, en Nuevo León [(sic): Querétaro]], conforme a lo siguiente:

(...)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

b) Conclusión 2. *Omisión de dar aviso de las cuentas bancarias, así como presentar los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero y febrero de dos mil dieciocho.*

Inconforme con lo anterior, hace valer los siguientes agravios:

1. Conclusión 2. *Que la Resolución es ilegal, toda vez que contrario a lo establecido por la autoridad responsable, el dos de marzo, a las diecisiete horas con dieciséis minutos, capturó en el SIF, el contrato bancario, el estado de cuenta y conciliaciones de los meses de enero y febrero de la presente anualidad, que le fueron requeridos, por lo que no existe omisión alguna que sancionar.*

(...)

En el caso que se resuelve, el INE impuso sanción a la apelante al estimar que incumplió con el deber de presentar dar aviso de las cuentas bancarias, así como presentar los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil dieciocho.

La recurrente afirma en ocasión de este recurso, que contrario a lo que resolvió la autoridad electoral, no incurrió en la falta porque sí presentó lo solicitado; para demostrarlo exhibe con su escrito de apelación, el acuse del ingreso de documentación al SIF.

(...)

En criterio de esta Sala, fue incorrecto que se sancionara a la actora a partir de la omisión de respuesta al oficio de errores y omisiones, cuando en los hechos, sí había presentado al SIF lo pedido.

*En la especie, la recurrente manifiesta que el Consejo General de forma ilegal la sancionó pues dejó de considerar que, respecto de la conclusión 2, relativa a la omisión de dar aviso de las cuentas bancarias, así como presentar los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil dieciocho, **el dos de marzo capturó en el SIF dicha información**, de ahí que en su concepto no existe la omisión que motivó la multa impuesta.*

(...)

En síntesis, previo a la imposición de alguna sanción, la autoridad debe tener certeza de la existencia de la conducta.

Establecido el marco normativo y el marco de actuación que acorde a éste corresponde a la autoridad fiscalizadora y a los sujetos obligados, tenemos que, en el caso, en efecto, la autoridad administrativa electoral sancionó a la actora, sin observar que, en tiempo, esto es, dentro del plazo otorgado para ello, había cumplido lo pedido en el oficio de errores y omisiones, pues como se demuestra ingresó al SIF la documentación requerida.

De la motivación del Dictamen correspondiente, lo que se desprende determinó a la autoridad a afirmar no subsanada la omisión que dio a conocer a María Fernanda Estefanía López Félix, fue no haber recibido una respuesta por escrito al oficio de errores y omisiones.

La omisión de respuesta al oficio de errores y omisiones, no podía, en criterio de esta Sala, traducirse en sí misma, o justificar, el tener por acreditada la falta; máxime cuando en el SIF, como se prueba, existe prueba suficiente de que sí se había ingresado la documentación pedida, dentro del plazo dado para ello.

*Así, si bien la obligación de las y los aspirantes a candidaturas independientes es presentar los informes y documentación que acredite en términos de la legislación aplicable el cumplimiento del deber de rendición de cuentas, y también lo es facilitar, en todo tiempo a la autoridad el desarrollo de la fiscalización a su cargo, **ello no implica que ante la falta de respuesta al oficio de errores y omisiones**, la autoridad quede relevada de realizar una final revisión en el sistema, para constatar si se mantiene el estatus de omisión o de inconsistencia que dio a conocer en el multicitado oficio de errores y omisiones.*

En el caso, al momento de emitir el referido oficio la Unidad Técnica solicitó a María Fernanda Estefanía López Félix que exhibiera la documentación relativa a cuentas bancarias, contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones de los meses de enero y febrero, respecto de las utilizadas para el manejo de los recursos de obtención del apoyo ciudadano, para lo cual se le otorgó un plazo de siete días naturales⁶.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

En efecto, la aspirante no dio una respuesta por escrito a ese oficio, pero sí atendió, en los hechos, lo pedido, pues como confirma el examen realizado por esta Sala Regional al SIF, efectivamente como afirmó en el escrito de recurso de apelación, a partir del requerimiento contenido en el oficio presentó la documentación que en él se solicitó.

En consecuencia, no es ajustado a derecho que la autoridad fiscalizadora, el veintitrés de marzo al emitir la resolución impugnada, determinara en el apartado 34.12, en lo que atiende a la conclusión 2, que la apelante había sido omisa en dar aviso de las cuentas bancarias, así como de presentar los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero y febrero, y en consecuencia había incumplido lo dispuesto en los artículos 251, párrafo 2, inciso c) y 286, párrafo 1, inciso c) del Reglamento.

(...)

Ello es así, puesto que la actora cumplió dentro del plazo con lo pedido, ello ocurrió en alimentación directa de la información y la documentación al SIF, con trece días de antelación a la presentación del Dictamen respectivo, tiempo en el cual la Unidad Técnica estuvo en posibilidad de constatar en la medida de las omisiones que había identificado, si estas se mantenían o no.

En tales condiciones, la decisión controvertida debe ser modificada para dejar sin efectos el análisis y sanción de la conclusión 2, con el fin de que en su lugar, atendiendo a los hechos demostrados, concretamente a la presentación de documentación al SIF, en una nueva decisión que dicte, el Consejo General resuelva lo que en derecho proceda.

(...)

La recurrente impugna la Resolución INE/CG220/2018, en la que se le impuso una multa por un total de 20,835.24 -veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N., por irregularidades en su informe de ingresos y egresos para la obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, en Nuevo León [(sic): Querétaro)], conforme a lo siguiente:

(...)

4. EFECTOS

Toda vez que resultó fundado el agravio de ilegalidad de la sanción impuesta con motivo de la conclusión 2, procede modificar, en lo que fue materia de impugnación la resolución INE/CG220/2018, emitida por el Consejo General, a fin de dejar sin efectos dicha conclusión, y en una nueva resolución que dicte, analice y, en su caso, tome en cuenta la documentación presentada por la recurrente el dos de marzo de dos mil dieciocho.

*Realizado lo anterior, el Consejo General, deberá informar a esta Sala Regional del cumplimiento a la presente sentencia, **dentro de las veinticuatro horas** siguientes, para lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten, primero vía correo electrónico a la cuenta cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx, y posteriormente en original o copia certificada por el medio más rápido.*

(...)"

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado como **SM-RAP-49/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

En función de lo anterior, al haber existido una temporalidad para recabar el apoyo ciudadano, específicamente, del 8 de enero al 6 de febrero de la presente anualidad, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, mismo que asciende a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo anterior, en virtud de que dicha actualización de medida durante el dos mil dieciocho ocurrió hasta el 1° de febrero de 2018.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017.

5. Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG219/2018** y la Resolución identificada como **INE/CG220/2018**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.4.13, conclusión 2** del Dictamen Consolidado y el considerando **34.12, conclusión 2** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 2** del Dictamen Consolidado correspondiente a la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación, para lo cual se realizaron acciones en congruencia con el sentido de la sentencia, como se detalla a continuación:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
<i>“TERCERO. Respecto de la conclusión 2, conforme a lo expresado en el apartado de efectos de esta sentencia se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emita una nueva resolución.”</i>	Se deja sin efectos la conclusión 2 del considerando 34.12	Conclusión 2: Se deja sin efectos, derivado del análisis de la documentación presentada por la entonces aspirante a candidata independiente.	En el Dictamen y en la Resolución, se deja sin efectos la conclusión 2 .

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número **INE/CG219/2018**, así como la Resolución identificada con el número **INE/CG220/2018** en la parte conducente a la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

“3.4.13 MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX

(...)

ID	Observación	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/21542/18				
2	Cuentas de balance Bancos <i>El sujeto obligado no reportó en el SIF las cuentas bancarias, adicionalmente, no presentó los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las</i>	SIN EFECTOS De la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado omitió registrar las cuentas bancarias, así como presentar los contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero y febrero del 2018, por tal razón la observación no quedo atendida.	3.4.13C2 En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, queda sin efectos.		

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

ID	Observación	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/21542/18				
	<p>cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos de obtención del apoyo ciudadano. Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los contratos de apertura de las cuentas bancarias correspondientes. • Los estados de cuenta bancarios correspondientes. • Las conciliaciones bancarias correspondientes. • Las aclaraciones que a su derecho convengan. <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 54, numerales 4, 5, 6 y 8, 102, numeral 3; 241, numeral 1, inciso c); 251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del RF.</p>	<p>En acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey, en la ejecutoria SM-RAP-52/2018, se procedió a analizar de nueva cuenta la documentación presentada por la aspirante para determinar lo siguiente:</p> <p>De la revisión al SIF, se constató que el sujeto obligado si registró cuenta bancaria y adjuntó la documentación requerida consistente en estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero y febrero del 2018, por tal razón la observación quedó sin efectos.</p>			

B. Modificación a la Resolución.

Al haberse dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SM-RAP-49/2018** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG220/2018** relativas a la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, este Consejo General únicamente debería abocarse a la modificación de la parte conducente, no obstante lo anterior, ha sido criterio de este órgano colegiado que en el caso de aspirantes a candidatos independientes se impone una sola sanción por la totalidad de las irregularidades en que estos incurran, tomando en consideración la capacidad económica con que estos cuentan, por lo que en el presente Acuerdo se modificara el apartado de imposición en los términos siguientes:

“34.12 C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX.

Previo al análisis de la conclusión sancionatoria descrita en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de la irregularidad encontrada en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de la conclusión ahí realizada, se desprende que la irregularidad en que incurrió la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX** es la siguiente:

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. [En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey esta conclusión y su respectiva sanción queda SIN EFECTOS]

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1 [La Sala Regional Monterrey dejó firme esta conclusión]

c) Imposición de la sanción.

(...)

c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a la conclusión 1.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 1.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza, realizando la presentación de manera extemporánea, pero durante el periodo de ajuste.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo de ajuste el informe del periodo de Obtención del Apoyo Ciudadano durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales¹.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y

¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

CUADRO A.					
Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	2	SIN EFECTOS	SIN EFECTOS	SIN EFECTOS	SIN EFECTOS
b)	1	Informe extemporáneo	N/A	10% del tope de gastos	\$ 20.835.24
Total					\$20.835.24

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción se debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018

En este sentido, con el fin de acatar lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional se recabó la información necesaria y actual para comprobar y valorar la capacidad económica del sujeto infractor, por lo cual, esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/46051/2018 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado correspondientes a los meses de enero a al último generado del año dos mil dieciocho.

Por lo anterior, mediante oficios 214-4/7943741/2018 y 214-4/7943754/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de enero a octubre del año dos mil dieciocho, de la cuenta radicada en la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, S. A. a nombre de la C. María Fernanda Estefanía López Félix, informando lo siguiente:

Institución Bancaria	Mes (2018)	Saldo final
BBVA Bancomer, S. A.	Enero	\$ 6,097.28
	Febrero	\$ 9,910.07
	Marzo	\$ 8,563.23
	Abril	\$ 20,683.68
	Mayo	\$ 5,844.40
	Junio	\$ 9,239.99
	Julio	\$ 14,675.94
	Agosto	\$ 24,414.09
	Septiembre	\$ 12,940.85
	Octubre	\$ 49.65

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016, se considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la capacidad económica del candidato independiente, con la finalidad de conocer la capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se cuenta, en la especie, el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el documento que permite tener una capacidad **real y actual** del sujeto infractor, por lo que, para efectos de considerarse una sanción se tomará como base la información contenida en el estado de cuenta del mes de octubre de 2018², el cual reporta un saldo final **de \$49.65 (cuarenta y nueve pesos 65/100 M.N.)**.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes:

² Lo anterior, en razón que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta un retraso natural supeditado al flujo de datos que las entidades del sector financiero proporcionan a la misma, de esta forma, resulta pertinente tomar en consideración la información que comprende el tercer trimestre fiscal del año dos mil dieciocho, a efecto de dar celeridad a lo mandatado por el órgano jurisdiccional.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

Saldo final (A) 31 de agosto de 2018	Capacidad Económica (30% de A)
\$ 49.65	\$ 14.89

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a la conducta observada aquí analizada sería mayor al saldo referido en el **CUADRO A**, este Consejo General concluye que la sanción a imponer a la **C. María Fernanda Estefanía López Félix** por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

7. Que la sanción originalmente impuesta a la entonces aspirante a candidata independiente **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, en la resolución **INE/CG220/2018**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG220/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SM-RAP49/2018
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.12 de la presente Resolución, se impone a la C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX , en su carácter de aspirante a candidata independiente, la sanción siguiente:	La Sala Regional Monterrey determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante respecto a la conclusión 2 , ordenándose a este órgano colegiado el análisis de la documentación presentada por la	DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.12 de la presente Resolución, se impone a la C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX , en su carácter de aspirante a candidata independiente, la sanción siguiente:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

Sanciones en resolución INE/CG220/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SM-RAP49/2018
<p>a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.</p> <p>Una multa equivalente a 276 (doscientos setenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$20,835.24 (veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N.).</p>	<p>recurrente y determinar lo que en derecho correspondiera.</p> <p>Por lo anterior, se valoró la documentación presentada en el SIF y se determinó dejar sin efectos la observación, para posteriormente analizar la capacidad económica de dicha ciudadana y determinar la sanción correspondiente.</p>	<p>a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2 [Queda sin efectos]</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.</p> <p>Una Amonestación Pública.</p>

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone a la entonces aspirante a candidata independiente, **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, la siguiente sanción:

“R E S U E L V E

(...)

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **34.12** de la presente Resolución, se impone a la **C. MARÍA FERNANDA ESTEFANÍA LÓPEZ FÉLIX**, en su carácter de aspirante a candidata independiente, la sanción siguiente:

- a) 1** Falta de carácter formal: **Conclusión 2 [Queda sin efectos]**
- b) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**

Una **Amonestación Pública.**

(...)”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-49/2018**

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado **INE/CG219/2018** y la Resolución **INE/CG220/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **6 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-49/2018**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a la **C. María Fernanda Estefanía López Félix**, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1472/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-121/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el número **INE/CG1147/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional (en adelante PAN), presentó recurso de apelación para inconformarse con las sanciones impuestas mediante la Resolución **INE/CG1147/2018**, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León (en adelante Sala Regional Monterrey), por lo cual se ordenó su registro con la clave de expediente **SM-RAP-121/2018**.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, determinando en los Puntos Resolutivos **PRIMERO** y **SEGUNDO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**PRIMERO.** Se **modifica**, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución INE/CG1147/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en esta sentencia.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

SEGUNDO. *Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de este fallo.”*

IV. Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación se ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución en la que se cuantifique congruentemente el monto de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional por las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2.

Toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este Consejo General a través de la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y de los candidatos a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, al resolver el recurso de apelación identificado como **SM-RAP-121/2018**, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave **INE/CG1147/2018**, a fin de revocar las sanciones impuestas al PAN por las conclusiones identificadas con los números **1_C16_P2** y **1_C24_P2**, al no existir congruencia entre el porcentaje de las sanciones y su monto líquido, por lo que se procede a modificar la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos **TERCERO y CUARTO** de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SM-RAP-121/2018, relativa al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Monterrey, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

3. ESTUDIO DE FONDO.

(…)

“3.2. No existe certeza en el cálculo de las sanciones impuestas al PAN en virtud de las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2.

Asiste la razón al PAN en cuanto a la incongruencia del cálculo de la liquidez de las multas impuestas por las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2 en relación al porcentaje de sanción determinado inicialmente.

Al calcular las referidas sanciones, la responsable razonó lo siguiente:

a) Conclusión 1_C16_P2

*Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$157,590.08 (ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos 08/100 M.N.)**.*

*En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$23,692.51 (veintitrés mil seiscientos noventa y dos pesos 51/100 M.N.)**.*

b) Conclusión 1_C24_P2

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

*elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$883,969.97 (ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.)**.*

*En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$132,595.50 (ciento treinta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 50/100 M.N.)**.*

*De lo anterior, se observa que, en ambas conclusiones, la autoridad refiere que la sanción equivaldría al **5% (cinco por ciento) del monto involucrado**, sin embargo, al definir el monto final de cada una, la cantidad resultante no corresponde a dicho porcentaje, como se muestra a continuación:*

Conclusión		Monto involucrado (A)	% de sanción (B)	Monto de la sanción en la Resolución INE/CG1147/2018	Cantidad resultante de multiplicar (A) X (B) [5% por el monto involucrado]
1_C16_P2	"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 12 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$157,950.08."	\$157,950.08	5% sobre el monto involucrado	\$23,692.51	\$7,897.50
1_C24_P2	"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 52 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación."	\$883,969.97	5% sobre el monto involucrado	\$132,595.50	\$44,198.49

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Así, se advierte que asiste la razón al PAN en cuanto a la incongruencia en el cálculo del monto de ambas sanciones, por lo cual éstas deben revocarse a fin de que el Consejo General emita una nueva determinación en la que subsane tal irregularidad.

Por otra parte, el señalamiento de que la “sanción a imponerse será la reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes”, debe entenderse como la mecánica por la cual habrá de hacerse efectiva la sanción impuesta y no como una sanción en sí misma.

Es decir, la retención de dicho porcentaje de ministraciones se efectuará únicamente hasta alcanzar la cantidad que la autoridad responsable cuantifique por cada una de las multas.

4. EFECTOS

Conforme a lo expuesto, lo procedente es:

4.1. Modificar la Resolución INE/CG1147/2018 a fin de revocar las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional por las conclusiones identificadas con los números 1_C16_P2 y 1_C24_P2, al no existir congruencia entre el porcentaje de las sanciones y su monto líquido.

4.2 En consecuencia, se **ordena** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución en la que cuantifique congruentemente el monto de las referidas sanciones.

4.3 Dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que cumpla lo ordenado, la referida autoridad deberá informarlo a esta Sala Regional adjuntando copia certificada de las constancias que lo acrediten.

4.4 Se **apercibe** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en caso de incumplir lo ordenado, se le aplicará el medio de apremio que corresponda en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

(...).

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado como **SM-RAP-121/2018**.

En ese sentido, toda vez que la Sala Regional Monterrey únicamente ordenó la modificación de las conclusiones **1_C16_P2** y **1_C24_P2**, correspondientes al **inciso d)**, del **considerando 28.1 “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**, de la Resolución identificada como **INE/CG1147/2018**¹, de lo que se advierte que la conclusión **1_C5_P1**, la cual fue analizada en el mismo inciso que las que fueron materia de análisis y de las que se ordenó la modificación correspondiente, quedando intocadas las consideraciones que sustentan la misma, lo procedente es acatar lo mandatado por la autoridad jurisdiccional sin que sufra modificación alguna dicha conclusión.

En ese sentido, se obviarán las consideraciones que no fueron materia de análisis de la autoridad jurisdiccional, por lo que se procede a cuantificar el monto de las sanciones a imponer al PAN por las referidas conclusiones.

En ese sentido, cabe precisar que para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta

¹ Resolución sobre las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido.

Bajo esa tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional, sujeto al procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 006/01/2018 emitido por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$23,326,249.12

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la capacidad económica del partido político infractor, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el Partido Acción Nacional cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD	MONTO TOTAL DE LA SANCION	MONTO DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE OCTUBRE DE 2018	MONTOS POR SALDAR
INE/CG797/2015	526,626.90	251,490.34	275,163.56
TOTAL			275,163.56

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente al mes de octubre de 2018 de \$275,163.56 (doscientos setenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 56/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partidos, pues aun cuando tengan la obligación de pagar

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018

las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar las obligaciones pecuniarias que pudieran establecerse en el presente Acuerdo.

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las conclusiones **1_C16_P2** y **1_C24_P2** de la Resolución correspondiente al **Partido Acción Nacional**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación, para lo cual se realizan las siguientes acciones, en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Modificar en lo que fue materia de impugnación, específicamente las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2.	Que se emita una nueva resolución, en la que se cuantifique congruentemente el monto de las sanciones.	Se procede a cuantificar la sanción correspondiente a las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2, conforme al 5% del monto involucrado en cada una de ellas.

Al efecto, no se omite mencionar que dentro del estudio realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, al elaborar la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, específicamente en el considerando 28.1, inciso d), se analizó una tercera irregularidad, la cual no fue materia de análisis ni pronunciamiento de la Sala Regional Monterrey.

En consecuencia, dentro del estudio y acatamiento que nos ocupa, se realiza el siguiente estudio:

“(…)

28.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **1_C5_P1**, **1_C16_P1**, y **1_C24_P2**.

(...)

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
1_C5_P1	"...."	\$45,594.80
1_C16_P2	"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 12 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$157,950.08."	\$157,950.08
1_C24_P2	"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 52 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación."	\$883,969.97

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada, sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado que hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos 92 presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En ese orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos

los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior...”.

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En ese tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización, también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno, y en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan².

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

² Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación, y de manera solidaria en los candidatos.

En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En ese contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos, y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de

³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando **vigésimo primero** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 1_C5_P1, 1_C16_P2 y 1_C24_P2 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en

tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.⁴

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de cinco operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$45,594.80.”</i>
<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 12 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$157,950.08.”</i>
<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 52 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.”</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los

⁴ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización⁵.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la

⁵ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, **dentro de los plazos que la propia norma establece.**

No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por los sujetos obligados.

Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento ***per se*** no es una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro **dentro de los plazos específicos** y a través del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la infracción.

Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello **resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.**

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018

Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que **los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas**, desde la presentación de los informes, hasta la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia.

Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos.

No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.

No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es subsanable.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **vigésimo primero** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 1 C5 P1

(...)

Conclusión 1_C16_P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$157,590.08 (ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos 08/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$157,590.08 (ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa pesos 08/100 M.N.)⁷

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,897.50 (siete mil ochocientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.)**.

⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

⁷ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 1_C24_P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$883,969.97 (ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.)**.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$883,969.97 (ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.).⁹

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el

⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

⁹ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$44,198.50 (cuarenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 50/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...).

6. Las sanciones impuestas al PAN en la resolución **INE/CG1147/2018**, lo determinado por la Sala Regional Monterrey, particularmente por lo que toca a las conclusiones **1_C16_P2** y **1_C24_P2**, quedan de la siguiente manera:

Sanciones en resolución INE/CG1147/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SM-RAP-121/2018
<p>PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes sanciones:</p> <p>(...)</p> <p>d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1_C5_P1, 1_C16_P1, y 1_C24_P2.</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 1_C16_P2</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la</p>	<p>La Sala Regional Monterrey, determinó lo siguiente:</p> <p>1. Modificar la resolución INE/CG1147/2018, a fin de revocar las sanciones impuestas al PAN por las conclusiones 1_C16_P2 y 1_C24_P2, al no existir congruencia entre el porcentaje de las sanciones y su monto líquido.</p> <p>2. Ordenó que este Consejo General debía emitir una nueva determinación en la que se cuantificara congruentemente el monto de las referidas sanciones.</p>	<p>Como quedo precisado en los antecedentes de la presente, si bien el inciso d), del considerando 28.1, se refería al análisis de tres irregularidades, al haber sido materia de análisis y modificación lo relativo a dos de las infracciones, la modificación y acatamiento de mérito únicamente versa sobre dichas conclusiones, quedando intacto el análisis y sanción relativa a la conclusión 1_C5_P1.</p> <p>PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes sanciones:</p> <p>(...)</p> <p>d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Sanciones en resolución INE/CG1147/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SM-RAP-121/2018
<p>cantidad de \$23,692.51 (veintitrés mil seiscientos noventa y dos pesos 51/100 M.N.).</p> <p>Conclusión 1_C24_P2</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$132,595.50 (ciento treinta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 50/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>		<p>1_C5_P1, 1_C16_P1, y 1_C24_P2.</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 1_C16_P2</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$7,897.50 (siete mil ochocientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.). En cumplimiento a lo ordenado en el SM-RAP-121/2018.</p> <p>Conclusión 1_C24_P2</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$44,198.50 (cuarenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 50/100 M.N.). En cumplimiento a lo ordenado en el SM-RAP-121/2018.</p> <p>(...)</p>

7. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el inciso b) del Resolutivo **PRIMERO**, del

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-121/2018**

Considerando 28.1, de la Resolución **INE/CG1147/2018**, para quedar en los siguientes términos:

“R E S U E L V E

(...)

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **28.1** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Acción Nacional**, las siguientes sanciones:

(...)

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **1_C5_P1, 1_C16_P1, y 1_C24_P2.**

(...)

Conclusión: 1_C16_P2

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,897.50 (siete mil ochocientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.).**

Conclusión: 1_C24_P2

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$44,198.50 (cuarenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 50/100 M.N.).**

(...).”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica** la parte conducente la Resolución **INE/CG1147/2018**, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, en los términos precisados en los Considerandos **5 y 6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica.

TERCERO. Infórmese a la **Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-121/2018**.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de San Luis Potosí, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, a efecto de que se proceda al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos quinto y sexto del presente Acuerdo con relación a la resolución **INE/CG1147/2018**.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1473/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-139/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1112/2018** y la Resolución **INE/CG1113/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Coahuila.

II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**, el quince de agosto del dos mil dieciocho, Morena presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionados, mismo recurso que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veinte de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente **SM-RAP-139/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

***"PRIMERO** Se modifica la resolución impugnada, conforme a lo razonado en el apartado de efectos de esta sentencia.*

***SEGUNDO.** Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a lo señalado en el presente fallo.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.”

IV. Derivado de lo anterior, respecto del Considerando **39.4**, en la ejecutoria antes citada se ordenó modificar la resolución impugnada, únicamente por cuanto hace al inciso **c)** conclusiones **6_C8_P1**, **6_C25_P2** y **6_C29_P2**, toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste parcialmente la razón a MORENA; pues menciona existe una falta de certeza y de congruencia en la resolución impugnada, toda vez que los montos utilizados para realizar la individualización de las sanciones no coinciden con los precisados en el “Anexo II-A” del Dictamen, por lo que se debe realizar una nueva individualización de la sanción; todas del Resolutivo **SEXTO** de la citada Resolución, por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SM-RAP-139/2018**.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

3. Que la Sala Superior resolvió modificar la Resolución **INE/CG1113/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

4. En ese sentido, en el Considerando CUARTO del **ESTUDIO DE FONDO** dentro de los apartados **4.2** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SM-RAP-139/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“CUARTO. Estudio de fondo.

(...)

4.2. No se vulneró el principio de certeza en la conclusión 6_C27_P2, no obstante, sí se vulneró respecto de las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2 de la Coalición

MORENA aduce que la autoridad responsable modifica y contradice sus propios argumentos y montos en las siguientes conclusiones pertenecientes a la Coalición:

No.	Conclusión	Monto involucrado
6_C8_P1	<i>“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$571,550.09”</i>	\$571,550.09
6_C25_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$14,137.46 al ámbito Federal y \$150,185.10”</i>	\$150,185.10
6_C27_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$113,449.52”</i>	\$113,449.52
6_C29_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$421,357.18”</i>	\$421,357.18

Ello, ya que del contenido del cuerpo del Dictamen y de las cédulas de detalle en el “Anexo II-A” perteneciente al mismo, se obtienen montos distintos, por lo que, a consideración de MORENA se vulnera el principio de certeza al no saber qué montos son utilizados para imponer la sanción correspondiente, lo cual dejó al recurrente en estado de indefensión.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Por lo anterior, el apelante estima que el Consejo General emitió una resolución sin la debida fundamentación y motivación, en virtud de que estableció sanciones desproporcionales y excesivas, toda vez que los montos para determinar los gastos no reportados no coinciden y son contradictorias.

Esta Sala Regional estima que no le asiste la razón al recurrente respecto la conclusión 6_C27_P2, no obstante, le asiste la razón en relación a las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2.

(...)

4.2.3. La discrepancia de los montos por los que se sanciona a MORENA en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2, vulnera el principio de certeza

• 6_C8_P1

Del “Anexo II-A” del Dictamen, remitido por la autoridad responsable, se advierte que, en el apartado “Internet- Directo”, se cita la conclusión sancionada y se realiza el siguiente desglose por la propaganda en internet no reportada:

[Se inserta cuadro]

Por otra parte, del anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los errores y omisiones de la Coalición, se advierte que la Comisión de Fiscalización llegó a la siguiente conclusión respecto de la conclusión 6_C8_P1:

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de:

- Gastos de propaganda consistente en 12 producciones y ediciones de video valuados en \$84,451.20*
- Gastos de propaganda consistente en 6 servicios de jingle valuados en \$34,800.00*
- Gastos de propaganda consistente en el arrendamiento de una camioneta valuada en \$104,400.00 por mes dando un total por dos meses de \$208,800.00*
- Gastos de propaganda consistente en arrendamiento de 5 camionetas valuadas en \$603.20 por un día dando un total \$ 3,016.00*
- Gastos de propaganda consistente en la impresión de 1,300 calcomanías valuadas en \$3,315.00*
- Gastos de propaganda consistente en la impresión de 1,700 volantes valuadas en \$5,916.00*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- *Gastos de propaganda consistente en la compra de 50 banderas valuadas en \$8,700.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la compra de chaleco valuado en \$290.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de 2 pendones con lona valuados en \$1392.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de 3 equipos de sonido valuados en \$41,760.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la compra de un megáfono valuado en \$58.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de un cámara profesional valuado en \$110,000.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el arrendamiento de un automóvil valuado en \$2,500.00 por mes dando un total de \$5,000.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la compra de una gorra valuada en \$58.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la compra de 50 playeras valuadas en un total de \$5,220.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de la renta de 2 salones de eventos valuados en un total de \$4,988.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la renta de 120 sillas valuadas en un total de \$1,392.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de 2 perifoneo valuados en \$10,440.00*
 - *Gastos de propaganda consistente en la compra de 7 mesas valuadas en un total de \$7,153.89*
 - *Gastos de propaganda consistente en el servicio de 5 ediciones de imagen valuadas en un total de \$34,800.00*
- Por un monto total de \$571,550.09*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.”

Finalmente, en la conclusión 6_C8_P1 de la Resolución, se refiere que derivado del monitoreo en internet que realiza la autoridad administrativa, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$571,550.09 (quinientos setenta y un mil quinientos cincuenta pesos 09/100 M.N.).

Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado, es decir, \$571,550.09 (quinientos setenta y un mil quinientos cincuenta pesos 09/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En lo que respecta a MORENA se le sancionó con el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$452,781.98 (cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 98/100 M.N.).

• 6_C25_P2

Ahora, por lo que respecta a la omisión atribuida al apelante de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de viñetas, del “Anexo II-A”, en el apartado “Monitoreo Vía Púb– Directo”, se advierte lo siguiente:

[Se inserta cuadro]

Del citado anexo, en el apartado “Monitoreo Vía Púb-Prorratio”, se inserta la siguiente información:

[Se inserta cuadro]

Las cantidades citadas de las dos tablas anteriores pertenecientes al “Anexo II-A” del Dictamen son: \$123,867.60 (ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y siete pesos 60/100 M.N.) y \$12,324.82 (doce mil trescientos veinticuatro pesos 82/100 M.N.), las cuales dan un monto total \$136,192.42 (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.).

En el anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los errores y omisiones de la Coalición, a Comisión de Fiscalización determinó que en 6_C25_P2:

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de:

- 21 espectaculares valuados en \$98,879.27 correspondiendo al ámbito local \$84,886.58, con fundamento en el artículo 218 bis del RF.*
- 60 bardas valuadas en \$57,568.20 correspondiendo al ámbito local \$57,423.43, con fundamento en el artículo 218 bis del RF con lo dispuesto en el inciso d).*
- 2 carteleros valuados en \$7,875.09 correspondiendo en su totalidad al ámbito local.*

Correspondiendo un monto total de \$14,137.46 al ámbito Federal y \$150,185.10 al ámbito local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En la resolución impugnada, el Consejo General determinó que en la conclusión 6_C25_P2, que MORENA omitió reportar en el SIF los egresos generados por los diversos conceptos señalados en las viñetas correspondiendo un monto total de \$14,137.46 (catorce mil ciento treinta y siete pesos 46/100 M.N.) al ámbito Federal y \$150,185.10 (ciento cincuenta mil ciento treinta y siete pesos 46/100 M.N.) al ámbito local.

Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado, es decir, \$150,185.10 (ciento cincuenta mil ciento ochenta y cinco mil pesos 10/100 M.N.), ya que únicamente se estaba calificando lo correspondiente a la revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Coahuila de Zaragoza.

En lo que respecta a MORENA se le sancionó con una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$118,976.64 (ciento dieciocho mil novecientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.).

• Conclusión 6_C29_P2

Del “Anexo II-A”, en el apartado “Visitas a eventos-Directo”, se advierte lo siguiente:

[Se inserta cuadro]

En el apartado “Visitas a eventos-Prorrrateo” del “Anexo II-A”, se desprende la siguiente información:

[Se inserta cuadro]

Las cantidades de las dos tablas anteriores pertenecientes al “Anexo II-A”, son: \$285,180.77 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta pesos 77/100 M.N.) y \$137,985.21 (ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 21/100 M.N.), las cuales suman un monto total de \$423,165.98 (cuatrocientos veintitrés mil ciento sesenta y cinco pesos 98/100 M.N.).

En el anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los errores y omisiones de la Coalición, la Comisión de Fiscalización determinó que en la conclusión 6_C29_P2:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de:

- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por arrendamiento de automóvil correspondiente a 1 día valuado en \$2,500.00 dando un total de \$7,500.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 1 rentas de escenario valuado en 4,176.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 9 renta de equipo de sonido valuado en \$17,684.33 dando un total de \$141,474.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 750 sillas rentadas valuadas en 8.00 por pieza dando un total de \$6,000.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 8 servicio de Artista (Payasos, grupos de danza, zancos, botargas y lucha libre) valuado en 1,800.32 dando un total de \$14,402.56*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 1 grupo musical valuado en 4,640.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 86 vinilonas valuadas en 29.00 por pieza dando un total de \$2,494.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 7 lonas para hacer sombra en evento valuada en 694.84 dando un total de \$4,863.88*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 6825 calcomanías valuadas en 2.55 por pieza dando un total de \$17,403.75*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 11 servicios de perifoneo valuados en 5,220.00 cada uno dando un total de \$57,420.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 363 playeras valuadas en 104.40 por pieza dando un total de \$37,897.20*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 5850 volantes valuados en 3.48 por pieza dando un total de \$4,095.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 4 mantas valuadas en 81.20 dando un total de \$324.80*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 4 chalecos valuados en 290.00 por pieza dando un total de \$696.00*
- De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 1 mesa valuada en 1,021.98 por pieza*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 680 microperforados valuados en 27.84 por pieza dando un total de \$18,931.20*
 - *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 2 drones valuados en 13,920.00 por servicio dando un total de \$27,840.00*
 - *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 100 sombrillas valuadas en \$66.47 dando un total de \$6,647.00*
 - *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 1 pantalla fija valuada en \$58,000.00*
 - *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 241 alimentos valuados en \$199.00 cada uno dando un total de \$47,959.00*
 - *De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por 25 servicios de autobuses valuados en \$2,320.00 dando un total de \$58,000.00*
- Un monto total de \$563,421.00 correspondiendo al ámbito local \$421,357.18*
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.”*

En la resolución impugnada, el Consejo General determinó que en la conclusión 6_C29_P2, que MORENA omitió reportar en el SIF los egresos generados por los conceptos señalados en las viñetas, por un monto total de \$421,357.18 (cuatrocientos veintiún mil trescientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.).

Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado, es decir, \$421,357.18 (cuatrocientos veintiún mil trescientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.).

En lo que respecta a MORENA se le impuso una sanción consistente en una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$333,799.16 (trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).

De lo anterior, esta Sala Regional estima que es fundado el agravio del apelante, ello toda vez que de la revisión del anexo “Anexo II-A” del Dictamen, las observaciones de la Coalición y de la Resolución, se advierte que se vulneraron los principios de certeza y congruencia, ya que existe una

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

discrepancia entre las cantidades que MORENA omitió reportar en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2. Tal como se demuestra a continuación:

Conclusión	Anexo II-A	Resolución
6_C8_P1	\$449,750.06	\$571,550.09
6_C25_P2	\$136,192.42	\$164,322.56
6_C29_P2	\$423,165.98	\$421,357.18

Por lo expuesto, esta Sala Regional estima que no es conforme a Derecho la individualización de las sanciones impuestas a MORENA, por cuanto hace a las referidas conclusiones, porque no existe certeza de cuál es el monto involucrado para calcular el porcentaje que debe pagar el recurrente.

Por tanto, lo procedente es modificar la resolución impugnada para efectos de dejar insubsistentes las sanciones impuestas en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2 del apartado 39.3, al existir una falta de certeza y de congruencia en la resolución impugnada, toda vez que los montos utilizados para realizar la individualización de las sanciones no coinciden con los precisados en el “Anexo II-A” del Dictamen, por lo cual se dejó al recurrente en estado de indefensión.”

Asimismo, mediante el apartado de **efectos**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“Efectos

Al haber resultado fundados los agravios relativos a las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2, lo procedente es:

5.1. Modificar la resolución impugnada, para efectos de dejar insubsistentes las sanciones impuestas en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2 del apartado 39.3, a fin de que el Consejo General emita una nueva determinación, en la que exista congruencia y certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-A” del Dictamen, tomando en consideración lo aquí resuelto, a fin de que determine lo que en Derecho corresponda y, en su caso, reindividualice las sanciones.

5.2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo General deberá informar a esta Sala Regional la decisión que emita, remitiendo las constancias respectivas.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

5.3. Se apercibe a la referida autoridad que, en caso de incumplir con lo ordenado dentro del plazo fijado, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios.”

(...)

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizara la siguiente modificación a la resolución impugnada:

Conclusión	
Conclusión original 6_C8_P1	<i>“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$571,550.09”</i>
Efectos	Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y motivada, respecto de la conclusión 6_C8_P1, en la que exista congruencia y certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-A” del Dictamen consolidado.
Acatamiento	Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado “Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de dejar insubsistentes las sanciones impuestas y reindividualizar con el monto del Anexo II-A.
Conclusión original 6_C25_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$14,137.46 al ámbito Federal y \$150,185.10”</i>
Efectos	Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y motivada, respecto de la conclusión 6_C25_P2, en la que exista congruencia y certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-A” del Dictamen.
Acatamiento	Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado “Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de dejar insubsistentes las sanciones impuesta y reindividualizar con el monto del Anexo II-A.
Conclusión original 6_C29_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$421,357.18”</i>
Efectos	Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y motivada, respecto de la conclusión 6_C29_P2, en la que exista congruencia y certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-A” del Dictamen.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Conclusión	
Acatamiento	Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado “Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de dejar insubsistentes las sanciones impuestas y reindividualizar con el monto del Anexo II-A.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, la capacidad económica del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia” sujeta al procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdos INE/CG339/2017 e IEC/CG/200/2017 emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila, se les asignó financiamiento público federal y local para actividades ordinarias en el ejercicio 2018 de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente tabla:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido del Trabajo	\$236,844,348 (Federal)
Morena	\$15,930,241.70 (Local)
Partido Encuentro Social	\$250,958,840 (Federal)

Dado que el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social cuentan con financiamiento federal, de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹.

¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica de los infractores, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido mediante oficio INE/UTVOLPL/6607/2018 el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio INE/JLC/VE/597/18 suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila mediante el cual informó los saldos pendientes por pagar de los partidos políticos.

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la Sanción	Deducciones realizadas al mes de junio de 2018	Montos por saldar	Total
Morena	SER-PSC-22/2017 SER-PSC-23/2017	\$75,490.00	\$75,490.00	\$0.00	\$1,608,661.41
	INE/CG820/2016 SM-RAP18/2014	\$570,970.03	\$570,970.03	\$0.00	
	INE/CG127/2017	\$285,159.43	\$285,159.43	\$0.00	
	INE/CG313/2017	\$4,817,963.48	\$3,982,562.42	\$835,401.06	
	INE/CG447/2017	\$773,260.35	\$0.00	\$773,260.35	
	INE/CG530/2017	\$301,507.06	\$301,507.06	\$0.00	

De igual forma, y por cuanto hace a los Partidos del Trabajo y Encuentro Social, en atención a que dichos entes políticos únicamente cuentan con financiamiento federal, se tomará en consideración, a efecto de graduar su capacidad económica, las sanciones que les hayan sido impuestas respecto de dicho financiamiento, tal y como se detalla a continuación:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

PARTIDO DEL TRABAJO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17	FEDERAL	\$2,759,155.96	\$77,464.83	\$0.00
INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52	FEDERAL	\$2,754,623.04	\$96,711.44	\$26,235.20
INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53	FEDERAL	\$877,106.58	\$1,454.97	\$0.00
INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10	FEDERAL	\$1,847,419.82	\$41,390.12	\$0.00
INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15	FEDERAL	\$890,772.35	\$31,578.62	\$0.30
INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12	FEDERAL	\$37,537,538.96	\$7,975,288.21	\$23,813,938.75
SRE-PSC-84/2018-PRIMERO	FEDERAL	\$161,720.00	\$161,720.00	\$0.00
SRE-PSC-84/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$80,600.00	\$80,600.00	\$0.00
SRE-PSC-85/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$49,972.00	\$49,972.00	\$0.00
Total:		\$46,958,908.71	\$8,516,180.19	\$23,840,174.25

ENCUENTRO SOCIAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10	FEDERAL	\$8,477,280.00	\$0.49	\$0.00
SRE-PSC-40/2018-TERCERO	FEDERAL	\$75,490.00	\$75,490.00	\$0.00
Total:		\$8,552,770.00	\$75,490.49	\$0.00

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe hacer mención que de las sanciones a las que se vieron acreedores los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, a partir de las resoluciones aprobadas el seis de agosto del dos mil dieciocho, por el Consejo General del

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018

Instituto Nacional Electoral, no han quedado firmes, ello derivado de los medios de impugnación interpuestos por los partidos infractores.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias de los partidos políticos infractores, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el **Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017**, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutive respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

6. Asimismo, mediante Acuerdo IEC/CG/011/2018, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula **NOVENA**, el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:

Elección de Ayuntamientos:

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PT	100%
MORENA	100%
PES	100%

Quedando de la siguiente manera las aportaciones de los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”:

- Ayuntamientos:

Partido Político	(A)Financiamiento para de Gastos Campaña	(B)Cláusula NOVENA	(C)Aportación individual (A*B)	(D)Total Aportado (Suma Columna C)	(E)Porcentaje de Aportación ((C*100)/D)
MORENA	\$4,779,072.51	100%	\$4,779,072.51	\$6,032,593.93	79.22%
PT	\$626,760.71	100%	\$626,760.71		10.39%
PES	\$626,760.71	100%	\$626,760.71		10.39%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’²**.

²Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)

*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a Gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.***

(…)

*En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante***

de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.

*De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.***

(...)”

[Énfasis añadido]

7. Modificación a la Resolución INE/CG1113/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la Resolución **INE/CG1113/2018** en lo tocante a su considerando **39.3**, en los siguientes términos:

39.4 Coalición “Juntos Haremos Historia”

(...)

c) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **6_C8_P1**, **6_C25_P2**, (...), **6_C29_P2** y (...).

(...)

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización:

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

No.	Conclusión	Monto involucrado
6_C8_P1	<i>“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$449,750.06”</i>	\$449,750.06
6_C25_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$12,324.82 al ámbito Federal y \$123,867.60”</i>	\$136,192.42
(...)		
6_C29_P2	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$423,165.98”</i>	\$423,165.98
(...)		

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones **6_C8_P1**, **6_C25_P2**, (...), **6_C29_P2** y (...) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por diversos conceptos, establecidos en el Dictamen Consolidado, y realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>"Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$449,750.06"</i>
<i>"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$12,324.82 al ámbito Federal y \$123,867.60"</i>
(...)
<i>"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$423,165.98"</i>
(...)

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

(...)

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

(...)

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 6_C8_P1

- Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$449,750.06** (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado **\$449,750.06** (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 06/100 M.N.) cantidad que asciende a un total de **\$449,750.06** (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos Historia de cada uno de los partidos,²⁹⁵ este Consejo General determina que la sanción a imponer a **MORENA** en lo individual, la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$356,292.00** (trescientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **579** (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$46,667.40** (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).

En este orden de ideas, al **Partido Encuentro Social** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **579** (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$46,667.40** (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 6_C25_P2

- Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$136,192.42** (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado **\$136,192.42** (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.) cantidad que asciende a un total de **\$136,192.42** (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos Historia de cada uno de los partidos,²⁹⁷ este Consejo General determina que la sanción a imponer a **MORENA** en lo individual, la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$107,891.64** (ciento siete mil ochocientos noventa y un pesos 64/100 M.N.).

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **175** (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$14,105.00** (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).

En este orden de ideas, al **Partido Encuentro Social** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **175** (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$14,105.00** (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

Conclusión 6_C29_P2

Es menester señalar que existe una causa de impedimento por parte de esta autoridad para **modificar la sanción** impuesta por cuanto hace a la presente conclusión en este acatamiento, ya que de hacerlo se estaría vulnerado lo estipulado en el principio jurídico procesal “*non reformatio in peius*”, esto es, que la resolución recurrida no debe ser modificada en disfavor del reo, en el entendido que lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

En torno al tema, es necesario precisar que la obligación de observar los principios generales del derecho se traduce en el deber, por parte del Juzgador –lo cual es extensivo a las autoridades administrativas cuando ejercen funciones fiscalizadoras e imponen sanciones derivado de lo anterior- de aplicar lo establecido en el párrafo cuarto, artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”

Por lo que, en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional y derivado de lo establecido en el criterio sustentado, en la tesis 1255/54, aprobada por unanimidad de votos de la primera de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a la letra:

“APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS). El principio jurídico procesal de non reformatio in peius consiste en que el Juez de segundo grado no puede agravar la situación jurídica del quejoso, como apelante, cuando el Ministerio Público se conforma con la sentencia de primer grado, esto es, que no interpone el medio impugnatorio de la apelación ni expresa agravios. El ámbito de la prohibición de la reformatio in peius, se traduce en que la resolución recurrida no debe ser "modificada en disfavor del reo", pues lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. Si quienes hacen valer el recurso de apelación pudieran correr el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, es seguro que nunca haría valer su protesta respecto del fallo de primera instancia, pues, por el contrario, se confirmarían con frecuencia, desgraciadamente, con resoluciones injustas. Por tanto, existe siempre reformatio in peius, si el nuevo fallo es más gravoso que el antiguo. Por otra parte, no se agrava la situación jurídica del acusado, cuando la pena señalada en el fallo de segundo grado es igual a la que fijó el Juez del conocimiento en su resolución” [1]

En este orden de ideas, no se procederá a la modificación de la sanción por cuanto hace a la presente conclusión, para que de esta manera no se violenten los derechos derivados de los principios generales del derecho, conforme al estudio de este Considerando.

[1] Consultable en la página 99, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen VI, Segunda Parte.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado **\$421,357.18** (cuatrocientos veintiún mil trescientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.) cantidad que asciende **\$421,357.18** (cuatrocientos veintiún mil trescientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos Historia de cada uno de los partidos,⁶ este Consejo General determina que la sanción a imponer a **MORENA** en lo individual, la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$333,799.16** (trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **543** (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$43,765.80** (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco peso 80/100 M.N.).

En este orden de ideas, al **Partido Encuentro Social** en lo individual, se impone la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **543** (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$43,765.80** (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco peso 80/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

⁶ De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

R E S U E L V E

(...)

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **39.6** de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, las siguientes sanciones:

(...)

c) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **6_C8_P1**, **6_C25_P2**, (...), **6_C29_P2**, y (...).

Conclusión 6_C8_P1

MORENA

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$356,292.00** (trescientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 06/100 M.N.).

Partido del Trabajo

Una multa que asciende a **579** (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$46,667.40** (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).

Partido Encuentro Social

Una multa que asciende a **579** (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$46,667.40** (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).

Conclusión 6_C25_P2

MORENA

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$107,891.64** (ciento siete mil ochocientos noventa y un pesos 64/100 M.N.).

Partido del Trabajo

Una multa que asciende a **175** (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$14,105.00** (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).

Partido Encuentro Social

Una multa que asciende a **175** (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$14,105.00** (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).

(...)

Conclusión 6_C29_P2

MORENA

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$333,799.16** (treientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).

Partido del Trabajo

Una multa que asciende a **545** (quinientas cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$43,765.80** (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).

Partido Encuentro social

Una multa que asciende a **543** (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$43,765.80** (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).

(...)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

9. Que la sanción originalmente impuesta a la coalición “Juntos Haremos Historia” en el inciso **c)** conclusiones **6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2** del considerando **39.4** de la Resolución **INE/CG1113/2018** Resolutivo **SEXTO**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1113/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SM-RAP-139/2018	
Inciso c)	Sanción	Inciso c)	Sanción
<p>Conclusión 6_C8_P1 “Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$571,550.09”</p>	<p>Conclusión 6_C8_P1 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$452,781.98 (cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 98/100 M.N.). Partido del Trabajo Una multa que asciende a 736 (setecientos treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$59,231.60 (cincuenta mil doscientos treinta y un pesos 60/100 M.N.). Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 736 (setecientos treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$59,231.60 (cincuenta mil doscientos treinta y un pesos 60/100 M.N.).</p>	<p>Conclusión 6_C8_P1 “Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de \$449,750.06”</p>	<p>Conclusión 6_C8_P1 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$356,292.00 (trescientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Partido del Trabajo Una multa que asciende a 579 (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$46,667.40 (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 579 (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$46,667.40 (cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).</p>
<p>Conclusión 6_C25_P2 “El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$14,137.46 al ámbito Federal y \$150,185.10”</p>	<p>Conclusión 6_C25_P2 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$118,976.64 (ciento dieciocho mil novecientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.). Partido del Trabajo Una multa que asciende a 193 (ciento noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para</p>	<p>Conclusión 6_C25_P2 “El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un monto total de \$12,324.82 al ámbito Federal y \$123,867.60”</p>	<p>Conclusión 6_C25_P2 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$107,891.64 (ciento siete mil ochocientos noventa y un pesos 64/100 M.N.). Partido del Trabajo Una multa que asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$14,105.00</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

Resolución INE/CG1113/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SM-RAP-139/2018	
Inciso c)	Sanción	Inciso c)	Sanción
<p>el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$15,555.80 (quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 193 (ciento noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$15,555.80 (quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Conclusión 6_C29_P2 "El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de \$421,357.18"</p>	<p>el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$15,555.80 (quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 193 (ciento noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$15,555.80 (quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Conclusión 6_C29_P2 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$333,799.16 (trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).</p> <p>Partido del Trabajo Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro social Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p>	<p>(catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$14,105.00 (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Conclusión 6_C29_P2 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$333,799.16 (trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).</p> <p>Partido del Trabajo Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro social Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p>	<p>(catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro Social Una multa que asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$14,105.00 (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Conclusión 6_C29_P2 MORENA Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$333,799.16 (trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.).</p> <p>Partido del Trabajo Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Encuentro social Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).</p>

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018**

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1113/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en la resolución de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Coahuila, en los términos precisados en los Considerandos **7, 8 y 9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-139/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del estado de Coahuila para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Coahuila, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1474/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SUP-RAP-231/2018 Y ACUMULADO

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG1152/2018** e **INE/CG1153/2018**, respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.

II. Recurso de apelación. Inconformes con las determinaciones referidas en el antecedente anterior, el diez de agosto de dos mil dieciocho, los Representantes Propietarios de los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, interpusieron recursos de apelación ante la autoridad responsable para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG1152/2018** e **INE/CG1153/2018**, respectivamente, los cuales fueron recibidos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el quince de agosto de los corrientes, y se ordenó integrar los expedientes **SUP-RAP-231/2018** y **SUP-RAP-264/2018**.

III. Turno. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, se ordenó integrar los expedientes **SUP-RAP-231/2018** y **SUP-RAP-264/2018**, para su sustanciación.

IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, en sesión pública celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió el recurso referido, en los siguientes términos:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

“RESUELVE”

PRIMERO. Se **acumula** el expediente SUP-RAP-264/2018 al diverso SUP-RAP-231/2018, por ser éste el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional, debiéndose glosar copia certificada de la presente sentencia a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se **revoca la conclusión 7_28-P2**, contenida en el Dictamen Consolidado, así como la respectiva sanción establecida en la Resolución INE/CG1153/2018 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

(...)”

V. Derivado de lo anterior, toda vez que la autoridad jurisdiccional determinó revocar en lo conducente, la conclusión **7_28_P2**, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a “camiones”, para el efecto de analizar las pólizas presentadas por los partidos accionantes así como los documentos vinculados a las mismas, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, de manera que merezca realizar de nueva cuenta el análisis de los candidatos posiblemente beneficiados dentro del Dictamen Consolidado INE/CG1152/2018; y finalmente, reindividualizar la sanción de la conducta debidamente fundada y motivada, en la Resolución INE/CG1153/2018. Así, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional integrantes de la coalición “Por Tabasco al Frente”.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SUP-RAP-231/2018 y acumulado**.

3. Que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen Consolidado y la respectiva Resolución impugnada en lo relativo a la conclusión **7_28_P2**, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a “camiones”, y su respectiva sanción impuesta en el resolutivo Séptimo, a efecto que esta autoridad analice las pólizas presentadas por los partidos apelantes, así como los documentos vinculados con las mismas, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco para la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

4. Que, por lo anterior y en razón del Considerando “**CUARTO. Agravios y estudio de fondo**”, de la sentencia **SUP-RAP-231/2018**, la Sala Superior, determinó **fundados** los agravios hechos valer por el apelante como a continuación se transcribe:

“(…)

“CUARTO. Agravios y estudio de fondo”

(…)

Conclusión 7_28_P2 (Partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática)

(…)

Los actores se duelen de la imposición de la sanción incoada en su contra, pues argumentan haber registrado contablemente y de manera oportuna, los

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

gastos erogados por concepto de transportación de personas al evento político denominado “cierre de campaña del candidato a gobernador de Tabasco, Gerardo Gaudiano Roviroso”.

(...)

Refieren que la responsable, en el oficio de errores y omisiones, la responsable mediante un cuadro señaló hallazgos derivados de la visita de verificación; asimismo, manifiestan haberlo retomado para efecto de dar respuesta, por lo que incorporó una columna al final en el que señalan la póliza, que a su juicio amparan los gastos. Refieren que proporcionan las imágenes de las pólizas emitidas por el sistema integral de fiscalización, en las que se asienta como concepto de gastos el de “transporte”.

(...)

*Se califican **parcialmente fundados** los disensos de la coalición recurrente, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a “camiones”, en virtud de las siguientes consideraciones:*

(...)

*Se advierte únicamente, por lo que hace a los gastos identificados como “uso de camiones”, **que le asiste la razón a la coalición recurrente**, puesto que, en la respuesta del oficio de errores y omisiones presentó diversas facturas, a fin de subsanar los rubros observados, sin que en dicho proceso se hayan tomado en consideración los gastos registrados en el periodo 2, PC/DR-4/JUN-18, que obran a foja 154, 155 y 156 de la respuesta del oficio de errores y omisiones, y en el que, afirman los recurrentes corresponden a los gastos identificados con los consecutivos 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relativos, al hallazgo “camiones” y reportados en la contabilidad ID 44709 de Neyda Beatriz García Martínez, con folio INE-VV-0018472, pólizas DR.4.PC2, DR.5.PC2 y DR.6.PC2 respectivamente.*

Lo anterior es así, ya que del Dictamen Consolidado y la Resolución controvertida no se advierte que la responsable las haya examinado para considerarlas o no suficientes a fin de subsanar la observación, sino que, categóricamente afirmó que “de la respuesta dado por la coalición y la documentación presentada en el SIF, no logró Identificar de los requisitos de verificación, lo que les fue observado”.

La calificativa del agravio se robustece, dado lo hallado por este tribunal en el Sistema Integral de Fiscalización, donde se advierte el registro de contabilidad

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

de dichos gastos el día trece de julio del presente año, diversas evidencias entre ellas, el recibo de aportación de militantes en especie, credencial de elector, el bien aportado, su cantidad y costo promedio, entre otros datos, conjuntamente a las fotografías de los camiones contratados.

(...)

*En razón a lo que ha quedado evidenciado, esta Sala Superior estimo parcialmente **fundados** los disensos de la coalición recurrente, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados o “camiones”, por lo que, en vía de consecuencia, la responsable deberá analizar las pólizas referidas, así como los documentos registrados de manera vinculada con las referidas pólizas, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, de manera que merezcan nuevamente el análisis de los candidatos posiblemente beneficiados, así como la reindividualización de la sanción, o en todo caso, la sanción de la conducta debidamente fundada y motivada.*

(...)”

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-231/2018 y acumulado en el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente:

“(...)”

QUINTO. Efectos.

Al haber resultado parcialmente fundados los agravios relativos a la conclusión 7_28-P2, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a “camiones”, se revoca la parte conducente del Dictamen Consolidado, así como la sanción impuesta en la Resolución INE/CG/1153/2018 por el Consejo General del INE, a efecto de que la responsable analice las pólizas referidas, así como los documentos registrados de manera vinculada con las referidas pólizas, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, de manera que merezcan nuevamente el análisis de los candidatos posiblemente beneficiados, así como la reindividualización de la sanción, o en todo caso, la sanción de la conducta debidamente fundada y motivada y, con base en ello, resuelva si se acredita o no la infracción.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO

Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a esta sentencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que el Consejo General del INE apruebe la resolución respectiva.

(...)"

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que los partidos políticos sujetos a sanción cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga.

En este sentido, el Acuerdo **CE/2017/029** emitido por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Tabasco, le asignó como financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el año 2018
Partido Acción Nacional	\$6,572,657.07
Partido de la Revolución Democrática	\$20,577,121.25
Movimiento Ciudadano	\$5,503,731.35

Asimismo, es oportuno mencionar que los partidos políticos en comento están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Además, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, los partidos políticos integrantes de la coalición recurrente, de manera individual, cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Partido Político	Resolución	Monto de la Sanción	Deducciones realizadas al mes de noviembre de 2018	Montos por saldar	Total
Partido Acción Nacional	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Partido de la Revolución Democrática	Resolución INE/CG254/2018	\$3,897,750.23	\$857,380.05	\$3,040,370.18	\$3,718,385.29
	CE/2018/077				
	INE/CG1153/2018	\$678,015.11	\$0.00	\$678,015.11	
Movimiento Ciudadano	INE/CG1153/2018	\$180,215.12	\$0.00	\$180,215.12	\$180,215.12
TOTAL					\$3,898,600.41

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional no cuenta con saldo pendiente, el Partido de la Revolución Democrática tiene un saldo pendiente de \$3,718,385.29 (tres millones setecientos dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 29/100 M.N.); y finalmente, el Partido Movimiento Ciudadano cuenta con un saldo pendiente de \$180,215.12 (ciento ochenta mil doscientos quince pesos 12/100 M.N.), al mes de noviembre del año dos mil dieciocho, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tengan la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.

7. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG1152/2018 y la Resolución identificada como INE/CG1153/2018, este Consejo General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en la conclusión **7_28_P2** únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a "camiones", en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó la conclusión **7_28_P2**, únicamente por cuanto hace a los hallazgos identificados con los numerales 76, 77, 78, 89, 90 y 91 relacionados a "camiones", esta autoridad

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

electoral valoró y examinó de nueva cuenta las pólizas y su documentación soporte, que presentaron los partidos recurrentes en respuesta al oficio de errores y omisiones y registrada en el Sistema Integral de Fiscalización para subsanar las observaciones realizadas, específicamente lo señalado en el expediente identificado como SUP-RAP-231/2018 y acumulado.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la misma:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se revoca la conclusión 7_28_P2, contenida en el Dictamen Consolidado, INE/CG1153/2018 así como la respectiva sanción establecida en la resolución INE/CG1153/2018, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en esta ejecutoria.	Se revoca la parte conducente del Dictamen Consolidado, así como la sanción impuesta en la Resolución INE/CG1153/2018, por el Consejo General del INE, a efecto de que la responsable analice las pólizas referidas, así como los documentos registrados de manera vinculada con las referidas pólizas, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, de manera que merezcan nuevamente el análisis de los candidatos posiblemente beneficiados, así como la reindividualización de la sanción, o en todo caso, la sanción de la conducta debidamente fundada y motivada y, con base en ello, resuelva si se acredita o no la infracción.	En cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta autoridad procedió a valorar nuevamente la documentación y razonamientos expuestos por el sujeto obligado, a fin de determinar si las observaciones fueron subsanadas, de manera que merezca nuevamente el análisis de los candidatos posiblemente beneficiados. Ésta autoridad observó que por cuanto hace a los gastos identificados con (B) en la columna SUP-RAP-231-2018 del Anexo 28_P2 del presente Dictamen, después de agotar la búsqueda en todos los registros contables, no se logró identificar los registros contables por los gastos observados. Por tal razón la observación no quedó atendida. Por lo que se concluye que el sujeto obligado omitió reportar en el Sistema Integral de Fiscalización los egresos 4 conceptos de gastos de propaganda valuados en \$15,476.00 así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en \$467,700.00.

Derivado del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG1152/2018, relativo al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por la Coalición “Por Tabasco al frente”, en los términos siguientes:

“(…)

Tabasco

Coalición “Por Tabasco al Frente”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

(...)
**Todos los Cargos
Procedimientos de Fiscalización
Visitas de verificación**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió															
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18																			
85	<p>Todos los Cargos de Procedimientos de Fiscalización</p> <p>Visitas de verificación</p> <p>De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 26 del oficio INE/UTF/DA/37602/18</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.- Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario".- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.- El o los avisos de contratación respectivos.	<p>Respuesta:</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240, del RF, se hacen las siguientes aclaraciones (...)</p> <p>Véase Anexo R1_P2 del presente Dictamen</p>	<p>No Atendida</p> <p>No Atendida</p> <p>Del análisis a lo manifestado, así como a la documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (1) en la columna de referencia del Anexo 28_P1 del presente Dictamen, se logró identificar los registros contables por concepto de los gastos observados, que además cumplen con la documentación exigida por el RF, como son cotizaciones, contratos de aportación, muestras y recibos de aportación. Por tal razón la observación quedó atendida en este punto.</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (2) en la columna de referencia del Anexo 28_P1 del presente Dictamen, después de agotar la búsqueda en todos los registros contables, no se logró identificar los registros contables por los gastos observados. Por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>14589</td><td>Juan Enoc Alvarado Ribon</td><td>Gastos De Propaganda</td><td>Servicio</td><td>1,287.60</td></tr><tr><td>14356</td><td>Gabriel Ramos León</td><td>Gastos De Propaganda</td><td>Servicio</td><td>4,044</td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	14589	Juan Enoc Alvarado Ribon	Gastos De Propaganda	Servicio	1,287.60	14356	Gabriel Ramos León	Gastos De Propaganda	Servicio	4,044	<p>7_28_P2</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos el sujeto obligado omitió reportar 2 servicio de gastos de propaganda valuados en \$15,476.00, así como 264 unidades para Transporte de Personal valuados en \$ 589,498.10.</p>	<p>Egreso no reportado.</p>	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del RF</p>
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																	
14589	Juan Enoc Alvarado Ribon	Gastos De Propaganda	Servicio	1,287.60																	
14356	Gabriel Ramos León	Gastos De Propaganda	Servicio	4,044																	

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

ID	Observación	Respuesta	Análisis					Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió												
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18																				
	<ul style="list-style-type: none">En caso de que correspondan a aportaciones en especie:<ul style="list-style-type: none">El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.En caso de una transferencia en especie:<ul style="list-style-type: none">Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.El recibo interno correspondiente.En todos los casos:<ul style="list-style-type: none">El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.La evidencia fotográfica de los gastos observados.Las aclaraciones que a su derecho convengan.	<table><tr><td>14355</td><td>Juan Ismael De La Cruz Domínguez</td><td>Transporte De Personal</td><td>Unidad</td><td>4,060.00</td></tr><tr><td>14355</td><td>Juan Ismael De La Cruz Domínguez</td><td>Transporte De Personal</td><td>Unidad</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>14625</td><td>Félix Alberto Jiménez López</td><td>Gastos De Propaganda</td><td>Servicio</td><td>928.00</td></tr><tr><td>14279</td><td>Roberto Contreras Esquivel</td><td>Gastos De Propaganda</td><td>Servicio</td><td>5,354.00</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II - A Dictamen, "Visitas a eventos - Directo" Cons. 18 y 19.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar Gastos de Propaganda en \$15,476.00, así como 264 unidades para Transporte de Personal en \$ 589,498.10.</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dicho Gastos de Propaganda y Transporte beneficiaron a los candidatos siguientes:</p>	14355	Juan Ismael De La Cruz Domínguez	Transporte De Personal	Unidad	4,060.00	14355	Juan Ismael De La Cruz Domínguez	Transporte De Personal	Unidad	1,500.00	14625	Félix Alberto Jiménez López	Gastos De Propaganda	Servicio	928.00	14279	Roberto Contreras Esquivel	Gastos De Propaganda	Servicio	5,354.00
14355	Juan Ismael De La Cruz Domínguez	Transporte De Personal	Unidad	4,060.00																		
14355	Juan Ismael De La Cruz Domínguez	Transporte De Personal	Unidad	1,500.00																		
14625	Félix Alberto Jiménez López	Gastos De Propaganda	Servicio	928.00																		
14279	Roberto Contreras Esquivel	Gastos De Propaganda	Servicio	5,354.00																		

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

ID	Observación	Respuesta	Análisis				Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18							
									</

Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-RAP-231/2018 y Acumulado.

Tabasco

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Coalición “Por Tabasco al Frente”

(...)

**Todos los Cargos
Procedimientos de Fiscalización
Visitas de verificación**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18				
85	<p>Todos los Cargos de Procedimientos de Fiscalización</p> <p>Visitas de verificación</p> <p>De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes.</p> <p>Lo anterior se detalla en el Anexo 26 del oficio INE/UTF/DA/37602/18</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: - El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa. - Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. - El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados. 	<p>Respuesta:</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240, del RF, se hacen las siguientes aclaraciones (...)</p> <p>Véase Anexo R1_P2 del presente Dictamen</p>	<p>No Atendida</p> <p>Esta autoridad en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria recaída en el expediente SUP-RAP-231/2018, procedió a valorar nuevamente las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado.</p> <p>Del análisis a lo manifestado, así como a la documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:</p> <p>Cabe señalar que, si bien por cuanto hace a los gastos identificados con (A) en la columna SUP-RAP-231-2018 del Anexo 28_P2 del presente Dictamen, no fueron materia de análisis por parte de la Sala Superior se señalan para efectos de claridad, como se detalla a continuación: se logró identificar los registros contables por concepto de los gastos observados, en la contabilidad id 44709 correspondiente a la candidata Neyda Beatriz García Martínez en las pólizas PC/DR-4/26-06-2018, PC/DR-5/26-06-2018 y PC/DR-6/26-06-2018, que además cumplen con la documentación exigida por el RF, como son cotizaciones, contratos de aportación, muestras y recibos de aportación y por lo tanto se tuvieron como atendidas.</p> <p>En otro orden de ideas, y acatando la ejecutoria dictada por la Sala Superior, esta autoridad observó que por cuanto hace a los gastos identificados con (B) en la columna SUP-RAP-231-2018 del Anexo 28_P2 del presente Dictamen, después de agotar la búsqueda en todos los registros contables, no se logró identificar los registros contables por los gastos observados. Por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se</p>	<p>7_28_P2</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 4 conceptos de gastos de propaganda valuados en \$15,476.00 así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en \$467,700.00.</p> <p>El prorrateo a los candidatos y candidatas beneficiados se indica en el Anexo II – A Dictamen</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	Egreso no reportado.	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																																																										
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18																																																														
	<p>- El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>• En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>- Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.</p> <p>• En caso de una transferencia en especie:</p> <p>- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>- El recibo interno correspondiente.</p> <p>• En todos los casos:</p> <p>- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>- La evidencia fotográfica de los gastos observados.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p>		<p>utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>14589</td><td>Juan Enoc Alvarado Ribon</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>Servicio</td><td>1,287.60</td></tr><tr><td>14355</td><td>Juan Ismael de la Cruz Domínguez</td><td>Transporte de Personal</td><td>Unidad</td><td>4,060.00</td></tr><tr><td>14355</td><td>Juan Ismael de la Cruz Domínguez</td><td>Transporte de Personal</td><td>Unidad</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>14625</td><td>Félix Alberto Jiménez López</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>Servicio</td><td>928.00</td></tr><tr><td>14279</td><td>Roberto Contreras Esquivel</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>Servicio</td><td>5,354.00</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II - A Dictamen, "Visitas a eventos - Directo". En el Consecutivo. 18 y 19.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 4 Gastos de Propaganda en \$15,476.00, así como 235 unidades para Transporte de Personal en \$467,700.00</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dicho Gastos de Propaganda y Transporte beneficiaron a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio de conformidad al prorrateo</th></tr><tr><td>Gerardo Gaudiano Rovirosa</td><td>44717</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>917.93</td></tr><tr><td>María Guadalupe Rodríguez Gaona</td><td>44741</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>10.07</td></tr><tr><td>Gerardo Gaudiano Rovirosa</td><td>44717</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>5295.76</td></tr><tr><td>María Guadalupe Rodríguez Gaona</td><td>44741</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>58.08</td></tr><tr><td>Jaime Mier Y Teran Suarez</td><td>44742</td><td>Gastos de Propaganda</td><td>5,150.40</td></tr><tr><td>Gerardo Gaudiano Rovirosa</td><td>44717</td><td>Gastos De Propaganda</td><td>4,043.76</td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	14589	Juan Enoc Alvarado Ribon	Gastos de Propaganda	Servicio	1,287.60	14355	Juan Ismael de la Cruz Domínguez	Transporte de Personal	Unidad	4,060.00	14355	Juan Ismael de la Cruz Domínguez	Transporte de Personal	Unidad	1,500.00	14625	Félix Alberto Jiménez López	Gastos de Propaganda	Servicio	928.00	14279	Roberto Contreras Esquivel	Gastos de Propaganda	Servicio	5,354.00	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio de conformidad al prorrateo	Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos de Propaganda	917.93	María Guadalupe Rodríguez Gaona	44741	Gastos de Propaganda	10.07	Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos de Propaganda	5295.76	María Guadalupe Rodríguez Gaona	44741	Gastos de Propaganda	58.08	Jaime Mier Y Teran Suarez	44742	Gastos de Propaganda	5,150.40	Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos De Propaganda	4,043.76			
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																																																												
14589	Juan Enoc Alvarado Ribon	Gastos de Propaganda	Servicio	1,287.60																																																												
14355	Juan Ismael de la Cruz Domínguez	Transporte de Personal	Unidad	4,060.00																																																												
14355	Juan Ismael de la Cruz Domínguez	Transporte de Personal	Unidad	1,500.00																																																												
14625	Félix Alberto Jiménez López	Gastos de Propaganda	Servicio	928.00																																																												
14279	Roberto Contreras Esquivel	Gastos de Propaganda	Servicio	5,354.00																																																												
Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio de conformidad al prorrateo																																																													
Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos de Propaganda	917.93																																																													
María Guadalupe Rodríguez Gaona	44741	Gastos de Propaganda	10.07																																																													
Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos de Propaganda	5295.76																																																													
María Guadalupe Rodríguez Gaona	44741	Gastos de Propaganda	58.08																																																													
Jaime Mier Y Teran Suarez	44742	Gastos de Propaganda	5,150.40																																																													
Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Gastos De Propaganda	4,043.76																																																													

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

ID	Observación	Respuesta	Análisis				Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18							
			Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Transporte de Personas	127,407.33			
			Víctor Hugo Morato Del Ángel	44892	Transporte de Personas	5,715.96			
			Neyda Beatriz García Martínez	44709	Transporte de Personas	8,976.71			
			Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Transporte de Personas	19,450.55			
			Mileidy Aracely Quevedo Custodio	44737	Transporte de Personas	849.45			
			Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Transporte de Personas	15,886.55			
			Jaime Mier Y Teran Suarez	44742	Transporte de Personas	3,813.45			
			Blanca Estela Pulido de La Fuente	44931	Transporte de Personas	600.05			
			Gerardo Gaudiano Rovirosa	44717	Transporte de Personas	223,037.51			
			Jaime Mier Y Teran Suarez	44742	Transporte de Personas	53,538.20			
			Blanca Estela Pulido de La Fuente	44931	Transporte de Personas	8,424.60			
			El importe de los gastos no reportados que se determinó por prorrateo se detalla en el anexo II-A Dictamen, en el apartado de "Visitas a eventos – prorrateo". En el Consecutivo del 1 al 6.2.						

(...)"

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior, dentro del expediente SUP-RAP-231/2018 y acumulado.

9. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-231-2018 y acumulado, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG1153/2018 relativas a la Coalición "Por Tabasco al Frente" en el estado de Tabasco, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del **inciso b)** dentro del **Considerando 38.7 COALICIÓN "POR TABASCO AL FRENTE"**, relativo a la **Conclusión 7_28_P2**, en los términos siguientes:

"(...)"

38.7 COALICIÓN “POR TABASCO AL FRENTE”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

b) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...), 7_28_P2, (...).

(...)

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: (...), 7_28_P2, (...).**

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
7_C28_P2	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 4 conceptos de gastos de propaganda valuados en \$15,476.00 así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en \$467,700.00.</i>	\$483,176.00 ¹
(...)	(...)	(...)

(...)

El monto involucrado es la suma de los gastos por concepto de 4 conceptos de gastos de propaganda valuados en **\$15,476.00** así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en **\$467,700.00**.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente,

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones** (...), **7_28_P2**, (...) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de transporte de personal, propaganda, pago a representantes de casilla y publicidad en Facebook realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.²

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

(...)
<i>"7_C28_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 4 conceptos de gastos de propaganda valuados en \$15,476.00 así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en \$467,700.00."</i>
(...)

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, concretándose en dicha entidad

² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen las coaliciones en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

“Artículo 297.

Objetivo de las visitas

1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Artículo 298.

Concepto

1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe presentado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente³:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las

3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁴ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁵, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de

⁴ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

⁵ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando Veinticuatro de la Resolución que por esta vía se modifica**, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el **Considerando veintiséis de la Resolución que por esta vía se modifica**, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, '*COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE*'.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

(...)

Conclusión 7 C28 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$483,176.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**⁶.

- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado \$483,176.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$483,176.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

⁶ El monto involucrado es la suma de los gastos por concepto de 4 servicios de gastos de propaganda valuados en **\$15,476.00** así como 235 unidades para Transporte de Personal valuados en **\$467,700.00**.

⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Acción Nacional** en lo individual es la correspondiente al **20.13% (veinte punto trece por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$97,263.32 (noventa y siete mil doscientos sesenta y tres pesos 32/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **63.01% (sesenta y tres punto cero uno por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$304,449.19 (trescientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.)**.

Finalmente, a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al **16.85% (dieciséis punto ochenta y cinco por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$81,415.15 (ochenta y un mil cuatrocientos quince pesos 15/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

10. Que la sanción originalmente impuesta a los Partidos integrantes de la Coalición “Por Tabasco al frente”, en la Resolución **INE/CG1153/2018**, consistió en:

Sanción en resolución INE/CG1153/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SUP-RAP-231/2018 y acumulado
<p>SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 38.7 de la presente Resolución, se imponen a los partidos integrantes de la otrora coalición “Por Tabasco al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>b) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: (...), 7_28_P2, (...).</p> <p><u>Conclusión 7 28 P2</u></p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$121,781.29 (ciento veintiún mil setecientos ochenta y un pesos 29/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$381,194.18 (trescientos ochenta y un mil ciento noventa y cuatro pesos 18/100 M.N.).</p>	<p>En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-231/2018 y acumulado, se modifica la conclusión 7_C28_P2 del Dictamen Consolidado, así como el apartado b) del Considerando 38.7 en el cuerpo de la Resolución y en el Resolutivo SÉPTIMO.</p>	<p>SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 38.7 de la presente Resolución, se imponen a los partidos integrantes de la otrora coalición “Por Tabasco al Frente”, las sanciones siguientes</p> <p>b) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: (...), 7_28_P2, (...)</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 7 28 P2</u></p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$97,263.32 (noventa y siete mil doscientos sesenta y tres pesos 32/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$304,449.19 (trescientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.).</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

Sanción en resolución INE/CG1153/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SUP-RAP-231/2018 y acumulado
Movimiento Ciudadano La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$101,938.14 (ciento un mil novecientos treinta y ocho pesos 14/100 M.N.) .		Movimiento Ciudadano La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$81,415.15 (ochenta y un mil cuatrocientos quince pesos 15/100 M.N.) .

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo el **Resolutivo SÉPTIMO** queda en los siguientes términos:

“(…)

R E S U E L V E

“(…)

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **38.7** de la presente Resolución, se imponen a los partidos integrantes de la otrora coalición “**Por Tabasco al Frente**”, las sanciones siguientes:

(…)

b) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones (...), 7_28_P2, (...).**

(…)

Conclusión 7_28_P2
Partido Acción Nacional

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

hasta alcanzar la cantidad de **\$97,263.32 (noventa y siete mil doscientos sesenta y tres pesos 32/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$304,449.19 (trescientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.)**.

Movimiento Ciudadano

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$81,415.15 (ochenta y un mil cuatrocientos quince pesos 15/100 M.N.)**

(...)"

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG1152/2018** y la Resolución **INE/CG1153/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **8, 9, 10 y 11** del presente Acuerdo.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-231/2018
Y ACUMULADO**

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-231/2018 y acumulado**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del Estado de Tabasco y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Considerando 24 de la Resolución que por esta vía se modifica.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1475/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-235/2018 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-286/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG/1110/2018** y la Resolución, identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, interpusieron recursos de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la parte conducente de la resolución aludida; integrándose bajo los números SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018.

Ahora bien, en virtud de existir identidad en el acto impugnado y la autoridad responsable, se decretó la acumulación del expediente SUP-RAP-286/2018 al diverso SUP-RAP-235/2018.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en el **SEGUNDO** punto resolutivo, lo que se transcribe a continuación:

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

*“**SEGUNDO.** Se **revoca parcialmente** el dictamen y resolución impugnados para los efectos precisados en esta ejecutoria.”*

Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación **SUP-RAP-235/2018 y su acumulado SUP-RAP-286/2018**, se determinó:

“

- *Revocar las conclusiones **10_C13_P2** y **10_C22_P2** y dejar sin efectos las sanciones correspondientes.*
- *Revocar la conclusión **10_C23_P2**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.*
- *Revocar la conclusión **10_C47_P3**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión.*
- *Revocar la conclusión **10_C46_P3**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones:*
 - *Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro *Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad*.*
 - *Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el libro “*Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad*”, tuvo un propósito partidista de campaña.”*

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-235/2018 y su acumulado SUP-RAP-286/2018 tuvo por efecto modificar parcialmente el Dictamen INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018, se procede a la modificación de ambos documentos, lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en ese sentido, conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, se presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

2. Que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, en lo que refiere a las conclusiones 10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3 del Considerando 33.10 correspondiente a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que se procede a la modificación de los documentos, únicamente para los efectos precisados en la resolución SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018. A fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a modificar el Dictamen y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del considerando SEXTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

“(…)

SEXTO. Estudio de la controversia. Por razón de método, el análisis de la controversia se expondrá en apartados conforme a los conceptos de agravio hechos valer por los recurrentes, agrupando en su caso, el estudio de algunas conclusiones por temáticas.

Por tanto, el análisis se expondrá en dos rubros fundamentales:

A) Conclusiones que impugna de manera individual el partido Movimiento Ciudadano.

B) Conclusiones que impugnan de manera conjunta los partidos Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática.

“(…)

B) Conclusiones que impugnan de manera conjunta los partidos Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática.

Las conclusiones que impugnan tanto Movimiento Ciudadano como el Partido de la Revolución Democrática son:

[cuadro]

“(…)

II. Conclusiones 10 C13 P2 y 10 C22 P2

A) Temática.

<i>N°</i>	<i>Conclusión</i>	<i>Sanción Individual al PRD</i>
<i>10_C13_P2</i>	<i>El sujeto obligado reportó egresos por concepto de propaganda colocada fuera del territorio por \$586,660.80</i>	<i>\$355,633.78</i>
<i>10_C22_P2</i>	<i>El sujeto obligado reportó egresos por concepto de propaganda colocada fuera del ámbito geográfico de su competencia por \$53,332.80</i>	<i>\$32,330.34</i>

Al respecto, la autoridad responsable expuso en el dictamen consolidado y en la resolución impugnada que el sujeto obligado incumplió su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, específicamente las relativas a gastos de campaña en el proceso electoral de la Ciudad de México.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Ello, porque registró gastos que no encuentran vinculación con la obtención del voto y el periodo de campaña, consistentes en egresos por la colocación de espectaculares fuera del territorio de la Ciudad de México, en contravención a lo previsto en los artículos 25, párrafo 1, inciso n) y 76, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos.

La autoridad responsable fundó su decisión en la tesis LXIII/2015 de esta Sala Superior de rubro: GASTOS DE CAMPAÑA ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.

B) Agravios.

El recurrente aduce que es indebida la conclusión de la autoridad responsable dado que la propaganda electoral tuvo como propósito beneficiar a la candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los espectaculares fueron colocados en sitios considerados como parte del área metropolitana del Valle de México dirigidos a la población flotante y en tránsito que entra y sale de la Ciudad de México.

C) Tesis de la decisión.

A juicio de esta Sala Superior es fundado el planteamiento del partido político recurrente dado que es posible concluir objetivamente que la propaganda electoral consistente en espectaculares, sí tuvieron como propósito la obtención del voto y estaba relacionada con la campaña de la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

D) Consideraciones que sustentan la decisión.

El artículo 41, párrafo segundo, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases en materia de financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entre otras directrices, prevé que el financiamiento público, a que tienen acceso los partidos políticos, se debe destinar para el sostenimiento de: 1) Las actividades ordinarias permanentes; 2) Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales; y 3) las de carácter específico.

De conformidad con el artículo 25, párrafo 1, inciso n), de la Ley General de Partidos Políticos es obligación de los partidos políticos aplicar el financiamiento exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

El artículo 76, párrafo 3, de la ley citada, prevé que todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones.

Por su parte, el artículo 242, párrafos 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos de campaña como aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas; en tanto que la propaganda electoral tiene el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas.

En esta lógica, el artículo 32, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral prevé que se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa.

En tanto que el párrafo 2 del mencionado numeral indica que tratándose de propaganda electoral colocada en espectaculares en los que no se haga referencia a alguno o algunos de los candidatos, se considerará como criterio para determinar el beneficio el ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios.

Finalmente, se debe referir que esta Sala Superior emitió la tesis LXIII/2015 de rubro: GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, conforme a la cual, para determinar la existencia de un gasto de campaña, se debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos:

a) Finalidad. Que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano;

b) Temporalidad. Se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,

c) Territorialidad. La cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Conforme al marco legal, reglamentario y jurisprudencial apuntado esta Sala Superior concluye que el elemento preponderante para determinar la existencia de un gasto de campaña es que tenga como propósito obtener el sufragio en favor del candidato que es postulado por el partido político.

En caso, de la propaganda como la que nos ocupa, esto es, de espectaculares, se logra su propósito en la medida en que se presenta al candidato en cuestión de frente a la ciudadanía con la finalidad de conseguir el sufragio en su favor.

De manera ejemplificativa se muestra uno de dichos espectaculares:

[imagen]

Ahora bien, dichos espectaculares, conforme a la información contenida en los anexos del dictamen consolidado fueron colocados en las autopistas México-Toluca, México-Cuernavaca, México-Querétaro y en el periférico en un tramo ubicado en el municipio de Tlanepantla, por lo que su ubicación correspondió a las entidades federativas de Morelos y el Estado de México, no así de la Ciudad de México.

Empero, a juicio de este órgano jurisdiccional dicha circunstancia fáctica no implica que el gasto erogado se haya destinado para un fin distinto a la campaña, en la medida en que su propósito era la obtención del sufragio en favor de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En la inteligencia que la ubicación territorial de la propaganda es un elemento que corrobora de manera complementaria el propósito y naturaleza de la propaganda de campaña.

Esto es así, si se toma en consideración la disposición apuntada del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, conforme a la cual, tratándose de propaganda electoral colocada en espectaculares en los que no se haga referencia a alguno o algunos de los candidatos, se considerará como criterio para determinar el beneficio, el ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios.

Esto es, cuando en la propaganda se omita hacer referencia expresa a la candidatura, se deberá determinar el beneficio en función de la ubicación territorial de los espectaculares en cuestión, situación que en el caso no acontece, dado que en los espectaculares se identificó de manera expresa a la candidatura beneficiada con la propaganda.

Dicha posición jurisdiccional es congruente con lo establecido en la tesis de esta Sala Superior que ha sido anotada, conforme a la cual los elementos para

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

identificar un gasto de campaña son la finalidad, la temporalidad y la territorialidad.

En cuanto a los primeros dos elementos se cumplen dado que la finalidad de los espectaculares fue la presentación de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de obtener el sufragio, en tanto que su temporalidad fue durante la campaña electoral.

Por lo que hace al elemento de territorialidad, la mencionada tesis indica que la autoridad debe verificar el área geográfica donde se lleve a cabo.

En esta verificación de territorio que indica la tesis, tenemos que los espectaculares fueron colocados en las autopistas México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Querétaro y en el periférico en un tramo ubicado en el municipio de Tlanepantla, es decir, en vías de comunicación de acceso y salida a la Ciudad de México, en las cuales, conforme a las máximas de la experiencia, transitan ciudadanos que viajan de las entidades federativas a la ciudad y viceversa.

Por lo que, se considera que la propaganda tuvo como propósito la presentación de la candidatura para la obtención del sufragio durante la época de campaña electoral, y estuvo dirigida específicamente a la población flotante que se desplaza a la Ciudad de México.

En esta lógica, a juicio de este órgano jurisdiccional el partido político recurrente no incumplió su obligación de destinar el financiamiento exclusivamente para los fines que le fue entregado, puesto que los recursos de campaña estuvieron dirigidos a la obtención del voto.

Sin que se pueda considerar que se hubiere destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias o específicas o para un fin no partidista, pues, como vimos, la erogación tuvo como propósito la colocación de espectaculares con propaganda electoral de la elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior, no limita las facultades de la autoridad responsable para determinar, analizando las circunstancias particulares de cada caso, si la colocación de la propaganda electoral en un ámbito territorial distinto al del cargo de elección por el cual se compite actualiza una infracción distinta en la normativa electoral.

En consecuencia, lo procedente es revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos las sanciones impuestas al partido político apelante.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

III. Conclusión 10 C23 P2

A) Temática.

10_C23_P2	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de propaganda exhibida en internet por \$156,600.00.</i>
------------------	---

Del monitoreo realizado por la autoridad administrativa electoral, se detectaron once videos de candidatos para los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputaciones locales y Alcaldías publicados en las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, respectivamente, que no fueron reportados por la coalición de la que formaba parte el partido recurrente, por lo que la autoridad procedió a valorar el costo de dichos videos y determinó que el recurrente omitió reportar gastos de propaganda en Internet por un monto de \$156,600.00 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos pesos).

Los videos detectados por la autoridad en Internet fueron:

[cuadro]

B) Agravios.

*El apelante aduce **falta de exhaustividad** por parte de la autoridad responsable, pues afirma que, en la respuesta otorgada al segundo oficio de errores y omisiones de la autoridad responsable, mediante escrito SF-JL-COA-CDMXCAM-022-2018, específicamente en su anexo 7, informó respecto del debido registro contable de los videos detectados por la responsable, para lo cual aportó las pólizas respectivas, las cuales inserta en su demanda, sin que la responsable las tomara en consideración.*

C) Tesis de la decisión.

*Es sustancialmente **fundado** el concepto de agravio del recurrente relativo a la **falta de exhaustividad**, pues del anexo 7 de su escrito SF-JL-COA-CDMXCAM-022-2018 por el que se dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones de la autoridad fiscalizadora se advierte que efectivamente el sujeto obligado hizo referencia a las pólizas con las que presuntamente se acredita el gasto erogado por concepto de los once videos difundidos en Internet, detallando por cada video la póliza que supuestamente ampara el gasto cuestión, en el entendido que las pólizas están ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización.*

De tal manera, el sujeto obligado respondió de manera oportuna (al dar respuesta al oficio de errores y omisiones), respecto de los gastos que

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

consideró la autoridad como no reportados, sin que la autoridad responsable se pronunciara al respecto en el dictamen consolidado o en la resolución impugnada, en el sentido de determinar si con dicha documentación está reportado y acreditado el gasto o, si, por lo contrario, las pólizas son insuficientes y no solventan la observación formulada.

D) Consideraciones que sustentan la decisión.

Efectivamente, de la revisión al anexo 7 del escrito SF-JL-COACDMX-CAM-022-2018, por el que el sujeto obligado dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones de la autoridad responsable, se advierte que se indicaron los números de pólizas que presuntamente amparan el gasto erogado por cada uno de los videos difundidos en redes sociales que detectó la autoridad fiscalizadora, conforme a lo siguiente:

[cuadro]

Sin embargo, la autoridad responsable no se pronuncia en su dictamen consolidado o en la resolución impugnada, si con dichas pólizas está demostrado el gasto o, si, por lo contrario, la documentación es insuficiente.

En efecto, la autoridad responsable únicamente expone con relación a los videos que han sido referidos, que de la verificación del SIF no se encontró evidencia de los gastos realizados por el sujeto obligado detectados durante los procedimientos de monitoreo de Internet, por tal razón, la observación quedó no atendida.

Por tanto, dado que el sujeto obligado, en respuesta al oficio de errores y omisiones, con el propósito de demostrar el gasto erogado aludió a una serie de pólizas (las cuales están ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización), la autoridad responsable debió pronunciarse con relación a dicha documentación.

*En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior resulta sustancialmente **fundado** el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de exhaustividad, por lo que lo procedente es revocar la **conclusión 10_C23_P2**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

IV. Conclusión 10 C47 P3

A) Temática.

10-C47-P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 1 casa de campaña y 4 eventos valuados en \$280,650.01</i>
------------------	--

La autoridad administrativa electoral concluyó, a partir de las visitas de verificación a eventos públicos, que se observaron diversos gastos generados por concepto de una casa de campaña y cuatro eventos que no fueron reportados por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente (el número 2 en la columna REFERENCIA DE DICTAMEN indica los conceptos que consideró la autoridad como no solventados).

[cuadros]

B) Agravios.

*El apelante aduce **falta de exhaustividad** de la autoridad responsable pues al momento de dar respuesta al tercer oficio de errores y omisiones, mediante escrito SF/JL/COACDMX/CAM/024/2018, específicamente en su anexo 13, refirió la documentación que presuntamente ampara los gastos realizados en los eventos observados, para lo cual inserta en su demanda capturas de pantalla del Sistema Integral de Fiscalización e imágenes de pólizas, con las cuales desde su óptica se acredita el reporte de los gastos.*

C) Tesis de la decisión.

*Es sustancialmente **fundado** el concepto de agravio del recurrente relativo a la **falta de exhaustividad**, pues del anexo 13 de su escrito SF/JL/COACDMX/CAM/024/2018, por el que dio respuesta al tercer oficio de errores y omisiones de la autoridad fiscalizadora, se advierte que efectivamente el sujeto obligado hizo referencia a las pólizas con las que presuntamente se acredita el gasto erogado en los cuatro eventos y la casa de campaña, las cuales están ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización, detallando en su anexo el número de póliza y el concepto de gasto en cuestión.*

De tal manera, el sujeto obligado contestó manera oportuna (al dar respuesta al oficio de errores y omisiones), respecto de los gastos que consideró la autoridad como no reportados, sin que la autoridad responsable se pronunciara al respecto en el dictamen consolidado o en la resolución impugnada, en el sentido de determinar si con dicha documentación está reportado y acreditado el gasto o, si, por lo contrario, las pólizas son insuficientes y no solventan la observación formulada.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

D) Consideraciones que sustentan la decisión.

Efectivamente, de la revisión al anexo 13 del escrito SF/JL/COA-CDMX/CAM/024/2018, por el que el sujeto obligado dio respuesta al tercer oficio de errores y omisiones de la autoridad responsable, se advierte que el sujeto obligado formuló una serie de manifestaciones e indicó los números de pólizas que presuntamente amparan el gasto erogado por cada concepto en específico durante los eventos y casa de campaña que detectó la autoridad fiscalizadora...

[cuadro]

Sin embargo, la autoridad responsable no se pronuncia en su dictamen consolidado o en la resolución impugnada, si con dichas pólizas y/o manifestaciones está demostrado el gasto o, si, por lo contrario, la documentación es insuficiente.

En efecto, la autoridad responsable únicamente expone con relación a los eventos y casa de campaña que han sido referidos, que respecto de los hallazgos localizados en las actas de verificación señalados con (2) en la columna "Referencia", se constató que el sujeto obligado omitió registrar los gastos correspondientes por lo que se refiere a este punto no quedó atendida la observación.

Por tanto, dado que el sujeto obligado, en respuesta al tercer oficio de errores y omisiones, con el propósito de demostrar el gasto erogado aludió a una serie de pólizas y las mismas están ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización, la autoridad responsable debió pronunciarse con relación a dicha documentación.

*En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior resulta sustancialmente **fundado** el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de exhaustividad, por lo que lo procedente es revocar la **conclusión 10_C47_P3**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

V. Conclusión 10 C46 P3

A) Temática.

10-C46-P3	<i>"El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado 'Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad', aunado que el mismo no cumple con fines partidistas." Por \$232;000.00</i>
------------------	---

La autoridad responsable consideró que si bien el sujeto obligado registró la póliza PN3/DR-156/30-06-18, en donde se registraron los gastos inherentes a la presentación del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, se omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y distribución del libro; aunado a que el libro no cumple fines partidistas.

B) Agravios.

Afirma el partido político recurrente la falta de exhaustividad de la autoridad responsable pues mediante escrito SF/JL/COACDMX/CAM/024/2018, por el que dio respuesta al tercer oficio de errores y omisiones de la autoridad responsable, aportó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18 con las que se acreditan los gastos relativos a la elaboración, producción y distribución del libro al que hizo referencia la autoridad responsable, a fin de sustentar su dicho inserta imagen de las dichas pólizas.

Por otra parte, aduce, que es indebida la conclusión de la responsable relativa a que el libro no cumple con fines partidistas, pues el mismo trata sobre la vida de la candidata a la Jefatura de Gobierno María Alejandra Barrales Magdaleno, enfoca temas políticos y trayectoria política, por lo que dicha publicación tuvo fines proselitistas.

C) Tesis de la decisión.

*Es sustancialmente **fundado** el concepto de agravio relativo a la falta de exhaustividad, pues efectivamente, el sujeto obligado al dar respuesta al tercer oficio de errores y omisiones, pretendió acreditar el gasto erogado por concepto de la elaboración, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, mediante dos pólizas, las cuales están registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, sin que se hubieren tomado en consideración por la autoridad responsable al momento de formular su conclusión.*

*De igual manera, a juicio de este órgano jurisdiccional el dictamen consolidado **resulta incongruente** pues por una parte se afirma que el objetivo de la publicación biográficas es dar a conocer su trayectoria y sus principales logros,*

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

tanto personales como servidora pública, misma que pone a disposición de la ciudadanía en general, a través de sus redes sociales, mismas que utiliza para promover su candidatura, adicionalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que la difusión del material en cita se realiza durante el periodo de campaña generando un beneficio directo a la citada candidatura.

*Sin embargo, en la conclusión de la autoridad responsable expone: El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado 'Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad', **aunado que el mismo no cumple con fines partidistas.***

D) Consideraciones que sustentan la decisión.

Efectivamente, el sujeto obligado al dar respuesta al tercer oficio de errores y omisiones pretendió acreditar el gasto erogado por concepto de la elaboración, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, mediante dos pólizas, las cuales están registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.

[imágenes]

Sin embargo, la autoridad responsable al momento de elaborar el dictamen consolidado y dictar la resolución impugnada no se pronunció con relación a dichas pólizas, a fin de exponer si las mismas resultaban insuficientes o suficientes para solventar la omisión de reportar la erogación en cuestión.

Al respecto, en el dictamen consolidado se expone que del análisis a la respuesta proporcionada, así como de la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado llevó a cabo el registro contable de la póliza PN3/DR-156/30-06-18, donde se registró los gastos inherentes a la presentación del libro observado, sin embargo, omitió realizar el registro de los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad.

*En este orden de ideas, se debe resaltar que en el tercer oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora requirió al sujeto obligado, entre otras cuestiones, con relación al libro en comento **“que en caso de que correspondan a aportaciones en especie”** se exhibiera la documentación que soportara dicha aportación, al tiempo que de las pólizas ingresadas al Sistema Integral de Fiscalización se advierte la leyenda **“aportación de simpatizantes”**, por lo que la autoridad debió esclarecer si dichos documentos eran suficientes o insuficientes para solventar su requerimiento en el sentido de que los libros fueron una aportación de simpatizantes o producto de una erogación del sujeto obligado.*

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Ahora bien, a juicio de este órgano jurisdiccional existe incongruencia en el dictamen consolidado, pues por una parte a partir de lo previsto en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la tesis de esta Sala Superior LXIII/2015 de rubro GASTOS DE CAMPAÑA ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, la responsable consideró que el objetivo de la publicación biográficas es dar a conocer su trayectoria y sus principales logros, tanto personales como servidora pública, misma que pone a disposición de la ciudadanía en general, a través de sus redes sociales, mismas que utiliza para promover su candidatura, adicionalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que la difusión del material en cita se realiza durante el periodo de campaña generando un beneficio directo a la citada candidatura.

*No obstante, la autoridad concluye que dicha **publicación no cumple con fines partidistas**, por lo que determinó responsabilidad para el sujeto obligado y le impuso una sanción económica.*

*En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior lo procedente es revocar la **conclusión 10_C46_P3**, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable en plenitud de atribuciones:*

- Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad.*
- Supere la incongruencia detectada en el dictamen consolidado y determine si el libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, tuvo un propósito partidista de campaña.*

(...)

SÉPTIMO. Efectos. *Conforme a lo expuesto en esta ejecutoria esta Sala Superior determina con relación al dictamen consolidado INE/CG1110/2018 y la resolución INE/CG1111/2018, “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA AL CARGO DE JEFE DE GOBIERNO, DIPUTADOS LOCALES Y ALCALDES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:*

(...)

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

- *Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos las sanciones correspondientes.*
- *Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.*
- *Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión.*
- *Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones:*
- *Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad.*
- *Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el libro “Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”, tuvo un propósito partidista de campaña.*

(...)”

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, dando cumplimiento, revocando las conclusiones aludidas del Considerando 33.10, en los términos que se precisan en la misma.

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADO SUP-RAP-286/2018

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-235/2018 y su acumulado SUP-RAP-286/2018**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país,¹⁷ mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

¹⁷De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos sujetos al procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$57,248,474.97
Partido de la Revolución Democrática	\$77,417,426.45
Movimiento Ciudadano	\$29,420,417.54

Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen saldos pendientes por pagar:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de las deducciones realizadas al 11 de octubre de 2018	Montos por saldar	Total
1	Partido Acción Nacional	SRE-PSC-161/2018 (multa)	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$436,215.72
		INE/CG790/2018 (reducción)	\$1,911.00	\$1,911.00	\$0.00	
		INE/CG950/2018 (reducción)	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	
		INE/CG1042/2018 (reducción)	\$6,576.46	\$6,576.46	\$0.00	
		INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$430,192.91	\$0.00	\$430,192.91	
		INE/CG1291/2018 INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$6,022.81	\$0.00	\$6,022.81	
3	Partido de la Revolución Democrática	INE/CG779/2015 (reducción)	\$4,823,248.00	\$3,859,972.48	\$963,275.52	\$1,116,162.63
		INE/CG790/2018 (reducción)	\$7,031.92	\$7,031.92	\$0.00	
		INE/CG810/2018 (reducción)	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	
		INE/CG950/2018 (reducción)	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de las deducciones realizadas al 11 de octubre de 2018	Montos por saldar	Total
		INE/CG1042/2018 (reducción)	\$8,895.57	\$8,895.57	\$0.00	
		INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$1,466,382.57	\$1,466,382.57	\$0.00	
		INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$129,925.15	\$0.00	\$129,925.15	
		INE/CG1291/2018 INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$22,961.96	\$0.00	\$22,961.96	
6	Movimiento Ciudadano	INE/CG790/2018 (reducción)	\$2,657.56	\$2,657.56	\$0.00	\$650,202.36
		INE/CG810/2018 (reducción)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
		INE/CG950/2018 (reducción)	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	
		INE/CG1042/2018 (reducción)	\$3,378.73	\$3,378.73	\$0.00	
		INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$641,544.57	\$0.00	\$641,544.57	
		INE/CG1291/2018 INE/CG1111/2018 (reducciones)	\$8,657.79	\$0.00	\$8,657.79	

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los institutos políticos aludidos, cuentan con financiamiento local y tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el presente Acuerdo.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica por financiamiento

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado;

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición parcial para contender a diversos cargos de elección (1 Jefatura de Gobierno, 33 Diputaciones Locales y 16 Alcaldías), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Coalición “Por la CDMX al Frente”

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante Resolución IECM-RS-CG-39/2017 aprobada en sesión pública celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial denominada “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula Décima Tercera el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:

Elección de Jefe de Gobierno

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	40%
PRD	50%
MC	40%

Elección de Diputados Locales

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	30%
PRD	25%
MC	30%

Integrantes de los Ayuntamientos

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	30%
PRD	25%
MC	30%

Cabe señalar que en el convenio se determinó como porcentaje de aportación de financiamiento de los partidos integrantes según la candidatura, éste no determina el grado de participación de cada integrante tuvo en la misma; no obstante lo anterior, del análisis a dichos porcentajes a la luz de información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Sujeto Obligado	Financiamiento Público para campaña	Financiamiento Público transferido a la COA	Factor
	A	B	$(B*100A)/B=C$
PAN	28,624,237.49	10,369,704.55	16.48%

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sujeto Obligado	Financiamiento Público para campaña	Financiamiento Público transferido a la COA	Factor
PRD	38,708,713.23	38,146,975.96	60.62%
MC	14,710,208.76	14,416,004.58	22.91%
Total COA	82,043,159.48	62,932,685.09	100.00%

En ese sentido, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.**¹⁸

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)

*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador** y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al **celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de***

¹⁸Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.

(...)

*En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.***

*De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.***

(...)”

[Énfasis añadido]

5. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las conclusiones **10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3** del Dictamen Consolidado correspondiente a la Coalición por la CDMX al frente, esta autoridad electoral emite una nueva determinación considerando lo siguiente:

(...)

- *Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos las sanciones correspondientes.*
- *Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable*

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.

- *Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión.*
- *Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones:*
- *Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad.*
- *Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el libro “Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”, tuvo un propósito partidista de campaña.*

(...)”

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
<ul style="list-style-type: none"> •Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos las sanciones correspondientes. •Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad 	<p>Se modifica la resolución impugnada respecto de las conclusiones 10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3 del Considerando 33.10</p>	<p>Conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2. Se dejan sin efectos.</p> <p>Conclusiones 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3. Se valoró en su integridad</p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sentencia	Efectos	Acatamiento
<p><i>responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.</i></p> <p>•Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión.</p> <p>•Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones:</p> <p>•Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro <i>Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad</i>.</p> <p>•Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el libro <i>"Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad"</i>, tuvo un propósito partidista de campaña.</p>	<p>Coalición por la CDMX al frente.</p>	<p>toda la evidencia entregada en su momento por parte del sujeto obligado y se realizó la individualización correspondiente.</p>

Que, en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG1110/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

apartado 10, conclusiones **10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los siguientes términos:

“(…)

10. Por la CDMX al Frente

(…)

- Respecto a la conducta observada en las conclusiones **10_C13_P2 y 10_C22_P2**, se dejan sin efectos las sanciones correspondientes, quedando de la forma siguiente:

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18					SUP-RAP-235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumpli ó
Propaganda colocada en la vía pública Se observaron pólizas por concepto de propaganda en vía pública, que no presentan la totalidad de la documentación soporte, los casos en comento se detallan a continuación:					En esta verificación de territorio que indica la tesis, tenemos que los espectaculares fueron colocados en las autopistas México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Querétaro y en el periférico en un tramo ubicado en el municipio de Tlanepantla, es decir, en vías de comunicación de acceso y salida a la Ciudad de México, en las cuales, conforme a las máximas de la experiencia, transitan ciudadanos que viajan de las entidades federativas a la ciudad y viceversa. Por lo que, se considera que la propaganda tuvo como propósito la presentación de la candidatura para la obtención del sufragio durante la época de campaña electoral, y estuvo	Revocada De la revisión al SIF, determinó lo siguiente: El sujeto obligado presentó las pólizas señaladas en el cuadro que antecede, con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales, evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios debidamente suscritos, las hojas membretadas y muestras de la publicidad colocada en la vía pública, dicha documentación cumple con	Sin efectos		
REFERENCIA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA	FEC HA	IMPORTE \$	DOCUMENTACIÓN FALTANTE					
PN2/DR-50/05-18	Provisión F-845 Operación Total En Exteriores S.A. de C.V. - Publicidad Instalación y/o Colocación de Carteleras Digitales, Vallas Digitales, Espectaculares y Espectaculares Digitales	24-05-18	301,596.99	• Contratos de prestación de servicios. • Hojas membretadas • Informe pormenorizado					
PN2/DR-50/05-18	Provisión F-845 Operación Total en Exteriores S.A. de C.V. - Publicidad Instalación y/o Colocación de Carteleras Digitales, Vallas Digitales, Espectaculares y Espectaculares Digitales	24-05-18	248,130.96	• Contratos de prestación de servicios.					
PN2/DR-52/05-18	Provisión F-846 Operación Total en Exteriores S.A. de C.V. Publicidad en Vallas y Pubiparking Mayo 2018	24-05-18	77.337.2	• Contratos de prestación de servicios. • Muestras y/o fotografías					
PN2/DR-71/05-18	Prorrato de F-101servicio de Renta de Espacios Publicitarios en	24-05-18	117.535.64	• Contratos de prestación de servicios.					

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18					SUP-RAP-235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumpli ó
	Dovelas del Sistema Colectivo Metro de La Ciudad de México (Stc) Líneas 1, 2 Y 7					dirigida específicamente a la población flotante que se desplaza a la Ciudad de México.	los requisitos establecidos en la normatividad; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó atendida.		
PN2/DR-50/05-18	Provisión F-845 Operación Total En Exteriores S.A. de C.V. - Publicidad Instalación y/o Colocación de Carteleras Digitales, Vallas Digitales, Espectaculares y Espectaculares Digitales	24-05-18	61,86 6.04	• Contratos de prestación de servicios.		En esta lógica, a juicio de este órgano jurisdiccional el partido político recurrente no incumplió su obligación de destinar el financiamiento exclusivamente para los fines que le fue entregado' puesto que los recursos de campaña estuvieron dirigidos a la obtención del voto.			
Total:			\$806,466.83						
<p>Se le solicita presentar mediante el SIF, lo siguiente:</p> <p>-La documentación señalada en la columna "Documentación faltante" del cuadro que antecede.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, numeral 1, 143, y 205, 209, 378 del RF.</p>									
<p>Derivado de los monitoreos de espectaculares y propaganda colocada en vía pública se detectó propaganda colocada fuera del territorio de la Ciudad de México, al respecto esta autoridad procedió a realizar el análisis con la finalidad de determinar si, el gasto por este concepto constituye un gasto de campaña.</p> <p>El caso en comento se detalla en el Anexo 14.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la LGIPE, se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.</p> <p>Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.</p> <p>Por otra parte, el artículo 242, del citado ordenamiento, señala que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, con acreditación local y locales, las coaliciones y los candidatos independientes registrados para la obtención del voto.</p> <p>De conformidad con la Tesis LXIII/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que al rubro dice "GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN", se establecen los siguientes criterios para poder considerar un gasto de campaña:</p> <p>"a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano;</p> <p>b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampana siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido</p>					<p>En esta verificación de territorio que indica la tesis, tenemos que los espectaculares fueron colocados en las autopistas México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Querétaro y en el periférico en un tramo ubicado en el municipio de Tlanepantla, es decir, en vías de comunicación de acceso y salida a la Ciudad de México, en las cuales, conforme a las máximas de la experiencia, transitan ciudadanos que viajan de las entidades federativas a la ciudad y viceversa.</p> <p>Por lo que, se considera que la propaganda tuvo como propósito la presentación de la candidatura para la obtención del sufragio durante la época de campaña electoral, y estuvo dirigida específicamente a la población flotante</p>	Revocada	Sin efectos		
						En acatamiento a lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la observación quedó atendida.			

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18	SUP-RAP-235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,</p> <p>c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica."</p> <p>Énfasis Añadido</p> <p>En ese sentido, de conformidad con la Tesis jurisprudencial supra transcrita, esta autoridad no puede pasar desapercibido que el objetivo de dicha propaganda tiene como finalidad esencial promover la candidatura al cargo de la Jefatura de Gobierno por la Coalición denominada "Por la CDMX al Frente", durante el periodo de campaña; sin embargo, el elemento de Territorialidad no se cumple ya que dicha propaganda se encuentra colocada en diversa entidad federativa para la cual se encuentra contendiendo, específicamente en el Estado de México, por lo cual el presente gasto no se vincula con una actividad propia al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 a celebrarse en la Ciudad de México, toda vez que no genera un beneficio directo a la citada candidatura.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF, si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior con fundamento 25 numeral 1 inciso n) de la LGPP.</p>	<p>que se desplaza a la Ciudad de México.</p> <p>En esta lógica, a juicio de este órgano jurisdiccional el partido político recurrente no incumplió su obligación de destinar el financiamiento exclusivamente para los fines que le fue entregado' puesto que los recursos de campaña estuvieron dirigidos a la obtención del voto.</p>				

- Por lo que hace a la conducta observada en la conclusión 10_C23_P2, se valoran las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por concepto de publicidad en redes sociales reportada en el SIF; quedando de la forma siguiente:

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18	SUP-RAP- 235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>Monitoreo Internet</p> <p>Derivado del monitoreo en internet, se observó propaganda que el sujeto obligado omitió reportar en los informes de campaña. Como se muestra en el Anexo 28.</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: - El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa. 	<p>Al juicio de la Sala Superior resulta sustancialmente fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de exhaustividad por lo que precedente es revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la</p>	<p>No atendida</p> <p>De la verificación al SIF y el análisis de la respuesta del sujeto obligado, se determinó los siguiente:</p> <p>De los 11 spot, señalados por la Sala, el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (1) en la columna "Referencia del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales, los contratos de prestación de servicios debidamente suscritos, así como sus respectivas muestras, las cuales coinciden con los testigos señalados; por tal razón, por tal razón, por lo que se refiere a estos testigos la observación quedó atendida.</p>	<p>10_C23_P2</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar diversos gastos, detectados del monitoreo en internet por \$145,000.00</p>	<p>Egreso no reportado</p>	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF-</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18	SUP-RAP- 235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió															
<p>- Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario".</p> <p>- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>• En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.</p> <p>- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>- Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</p> <p>• En caso de una transferencia en especie:</p> <p>- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>- El recibo interno correspondiente.</p> <p>• En todos los casos:</p>	<p>autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México.</p>	<p>Respecto los testigos señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado indicó pólizas en donde registró gastos por concepto de propaganda exhibida en redes sociales, omitió presentar las muestras que permitan corroborar que los gastos señalados, corresponden con los monitoreados; por lo que se refiere a este punto, la observación no quedó atendida.</p> <p>Por lo que se refiere a los testigos señalados con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado indicó pólizas en donde registró gastos por concepto de propaganda exhibida en redes sociales, las muestras no corresponden con los observados en los tickets identificados con los números 92801-92768, 92623-92590, 122721-122688, 124380-124347 y 124364-124331, respectivamente; por lo que se refiere a este punto, la observación no quedó atendida</p> <p>Adicionalmente, respecto a los tickets señalados con (4) (inmueble) en la columna "Referencia" del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, de la verificación al SIF, no se encontró evidencia de los gastos realizados por el sujeto obligado detectados durante los procedimientos de monitoreo a Internet, así mismo no fue objeto de impugnación ante la sala; por tal razón, por lo que refiere a estos puntos, la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>2770</td><td>N Media S de RL de CV</td><td>Páginas de Internet</td><td>Servicio</td><td>\$11,600.00</td></tr><tr><td>2609</td><td>Datapolis SC</td><td>Inmueble</td><td>Servicio</td><td>\$29,000.00</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el Anexo II-A, "Propaganda en Vía Pública" Cons. 2, 3 y 4.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar gastos detectados en redes</p>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	2770	N Media S de RL de CV	Páginas de Internet	Servicio	\$11,600.00	2609	Datapolis SC	Inmueble	Servicio	\$29,000.00			
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																
2770	N Media S de RL de CV	Páginas de Internet	Servicio	\$11,600.00																
2609	Datapolis SC	Inmueble	Servicio	\$29,000.00																

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18	SUP-RAP- 235/2018 y acumulado	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																																																																														
<p>- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>- El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>- Muestras y/o fotografías de la propaganda.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1; 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143, numeral 1, inciso d), fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF.</p>		<p>sociales, valuados por \$145,000.00¹⁹, como se detalla a continuación:</p> <table><tr><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Publicidad no Localizada</th><th>Importe con IVA</th><th>Importe a acumular</th></tr><tr><td>Publicidad en páginas de internet</td><td>Servicio</td><td>10</td><td>11,600.00</td><td>\$116,000.00</td></tr><tr><td>Inmueble</td><td>Servicio</td><td>1</td><td>29,000.00</td><td>\$29,000.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>\$145,000.00</td></tr></table> <p>Asimismo, de las evidencias se constató que dicha propaganda benefició de forma directa a la candidata siguiente:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de contabilidad</th><th>Rubro</th><th>Beneficio</th></tr><tr><td>Santiago Taboada Cortina</td><td>49491</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td>Ana Julia Hernández Pérez</td><td>47662</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td rowspan="2">María Alejandra Berrales Magdaleno</td><td rowspan="2">40988</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>23,200.00</td></tr><tr><td>Inmueble</td><td>29,000.00</td></tr><tr><td>María de Lourdes Amaya Reyes</td><td>49562</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td>Karen Quiroga Anguiano</td><td>47658</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td>Evelyn Parra Álvarez</td><td>49563</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>11,600.00</td></tr><tr><td>Elizabeth Mateos Hernández</td><td>47657</td><td>Propaganda exhibida en páginas de</td><td>23,200.00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$133,400.00</td></tr></table> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que un spot benefició a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio</th></tr><tr><td>Christian Damián Von Roehrich De La Isla</td><td>49605</td><td>Propaganda exhibida en páginas de internet</td><td>3,294.99</td></tr><tr><td>Héctor Barrera Marmolejo</td><td>49566</td><td>Propaganda exhibida en páginas de internet</td><td>3,176.45</td></tr><tr><td>Santiago Taboada Cortina</td><td>49491</td><td>Propaganda exhibida en páginas de internet</td><td>5,128.56</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$11,600.0</td></tr></table> <p>El prorrateo se detalla en el anexo II-A, “Internet – Prorrateo” Cons. 1.1 al 1.3.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	Concepto	Unidad de medida	Publicidad no Localizada	Importe con IVA	Importe a acumular	Publicidad en páginas de internet	Servicio	10	11,600.00	\$116,000.00	Inmueble	Servicio	1	29,000.00	\$29,000.00	Total				\$145,000.00	Nombre	ID de contabilidad	Rubro	Beneficio	Santiago Taboada Cortina	49491	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00	Ana Julia Hernández Pérez	47662	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00	María Alejandra Berrales Magdaleno	40988	Propaganda exhibida en páginas de	23,200.00	Inmueble	29,000.00	María de Lourdes Amaya Reyes	49562	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00	Karen Quiroga Anguiano	47658	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00	Evelyn Parra Álvarez	49563	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00	Elizabeth Mateos Hernández	47657	Propaganda exhibida en páginas de	23,200.00	TOTAL			\$133,400.00	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio	Christian Damián Von Roehrich De La Isla	49605	Propaganda exhibida en páginas de internet	3,294.99	Héctor Barrera Marmolejo	49566	Propaganda exhibida en páginas de internet	3,176.45	Santiago Taboada Cortina	49491	Propaganda exhibida en páginas de internet	5,128.56	TOTAL			\$11,600.0			
Concepto	Unidad de medida	Publicidad no Localizada	Importe con IVA	Importe a acumular																																																																															
Publicidad en páginas de internet	Servicio	10	11,600.00	\$116,000.00																																																																															
Inmueble	Servicio	1	29,000.00	\$29,000.00																																																																															
Total				\$145,000.00																																																																															
Nombre	ID de contabilidad	Rubro	Beneficio																																																																																
Santiago Taboada Cortina	49491	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00																																																																																
Ana Julia Hernández Pérez	47662	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00																																																																																
María Alejandra Berrales Magdaleno	40988	Propaganda exhibida en páginas de	23,200.00																																																																																
		Inmueble	29,000.00																																																																																
María de Lourdes Amaya Reyes	49562	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00																																																																																
Karen Quiroga Anguiano	47658	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00																																																																																
Evelyn Parra Álvarez	49563	Propaganda exhibida en páginas de	11,600.00																																																																																
Elizabeth Mateos Hernández	47657	Propaganda exhibida en páginas de	23,200.00																																																																																
TOTAL			\$133,400.00																																																																																
Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio																																																																																
Christian Damián Von Roehrich De La Isla	49605	Propaganda exhibida en páginas de internet	3,294.99																																																																																
Héctor Barrera Marmolejo	49566	Propaganda exhibida en páginas de internet	3,176.45																																																																																
Santiago Taboada Cortina	49491	Propaganda exhibida en páginas de internet	5,128.56																																																																																
TOTAL			\$11,600.0																																																																																

En relación a la conducta observada en la conclusión 10_C46_P3, se valoran las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por concepto

¹⁹ Dicho monto se modificó en virtud que, con la documentación presentada, se solventó el monto de \$11,600.00, correspondiente a un video de publicidad en una página de internet, quedando pendiente lo correspondiente a 10 videos.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado “Mujer de Palabra, una historia en la Ciudad”, y se determina si el libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, tuvo o no un propósito partidista de campaña quedando de la forma siguiente:

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>Derivado del monitoreo en Internet se observó que el sujeto obligado omitió reportar en los informes respectivos gastos en los informes por concepto de un libro denominado "Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad", al respecto esta autoridad procedió a realizar el análisis con la finalidad de determinar si, el gasto por este concepto constituye un gasto de campaña, como se muestra en el Anexo 43.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la LGIPE, se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.</p> <p>Ahora bien, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.</p> <p>Por su parte, la Tesis LXIII/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, titulada "GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN", donde se establecen los criterios para poder considerar un gasto de campaña, mismos que se describen a continuación:</p> <p>"a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano;</p> <p>b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,</p> <p>c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica."</p> <p><i>Énfasis Añadido</i></p>	<p>En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior lo procedente es revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable en plenitud de atribuciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, producción y distribución del libro: "Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad." • Supere la incongruencia detectada en el dictamen consolidado y determine si el libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, tuvo un propósito partidista de campaña. 	<p>Atendida</p> <p>De la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18, señaladas, en las cuales se observa el registro de la aportación relacionada con la elaboración, producción y edición del libro denominado "Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad"; y en la póliza PN3/DR-156/30-06-18 se aprecia el registro del gasto relacionado con la distribución de dicho libro; pólizas que cuentan con el soporte documental respectivo, por lo que la observación quedó atendida.</p> <p>Ahora bien, del análisis a la publicación en comento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la LGIPE, así como la Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con clave alfanúmero LXII/2015, de rubro "GASTOS DE CAMPAÑA, ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN", el libro "Mujer de Palabra, una historia</p>			

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p><i>En ese sentido, de conformidad con la citada normatividad y la Tesis jurisprudencial supratranscrita, esta autoridad no puede pasar desapercibido que el objetivo de la publicación biográfica, es dar a conocer su trayectoria y sus principales logros, tanto personales como servidora pública, misma que pone a disposición de la ciudadanía en general, a través de sus redes sociales, mismas que utiliza para promover su candidatura; adicionalmente, esta autoridad no para desapercibido que la difusión de material en cita se realiza durante el periodo de campaña, generando un beneficio directo a la citada candidatura.</i></p> <p><i>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</i> -<i>El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</i> -<i>Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario".</i> -<i>El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</i> -<i>El o los avisos de contratación respectivos.</i> • <i>En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</i> -<i>El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</i> -<i>El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</i> -<i>El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.</i> -<i>Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</i> -<i>Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</i> • <i>En caso de una transferencia en especie:</i> -<i>Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</i> -<i>Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</i> -<i>El recibo interno correspondiente.</i> 		<p><i>en la Ciudad", tuvo por objeto difundir la imagen, trayectoria profesional como servidora pública, y principales logros, generando un beneficio directo a su candidatura, vinculándose con el objeto partidista de la campaña; por tal razón, por lo que se refiere este punto, la observación quedó atendida.</i></p>			

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>• En todos los casos:</p> <p>-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>-El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>-Muestras y/o fotografías de la propaganda.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1; 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143, numeral 1, inciso d), fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF.</p>					

Por último, en relación a la conducta observada en la conclusión 10_C47_P3, se valoran las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por concepto eventos públicos y casa de campaña reportado en el SIF; quedando de la forma siguiente:

No.	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
141	<p>Visitas de verificación</p> <p>De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes de campaña. Como se muestra en el Anexo 44.</p> <p>Asimismo, deberá vincular los gastos de eventos políticos que realice con el número identificador de la agenda de eventos que reporte en el SIF, de conformidad con el artículo 127 del RF.</p>	<p>“... En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior resulta sustancialmente fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de exhaustividad, por lo que lo procedente es revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad</p>	<p>Atendida</p> <p>De la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales, contratos de prestación de servicios, las evidencias de pago, así como las muestras respectivas mediante las cuales se corroboró que los gastos efectuados de los eventos y casa de</p>			

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

No.	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP- 235/2018 y SUP-RAP- 286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <p>En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <p>-El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>-Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario".</p> <p>-El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>-El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>-El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.</p>	<p>responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña materia de la conclusión..."</p>	<p>campana, correspondientes a los señalados en el Anexo 15_P3, del presente Dictamen que a continuación se enuncian: PC1/IG-12/06-18, PN1-849/DR-849-06-18, PN2/DR-18/06-18, PN2/DR-12-06-18, PN2/DR-12-06-18, PN1/DR-20/05-18, PC1/DR-43/07-18 (Concentradora) PC2/DR-3/17-08 (Directo), PC1/DR-43/07-18 (Concentradora) PC2/DR-3/17-08 (Directo), PC1/DR-43/07-18 (Concentradora) PC2/DR-3/17-08 (Directo), PC1/DR-43/07-18 (Concentradora) PC2/DR-3/17-08 (Directo), PN1/DR-100/05-18, PC1/DR-43/07-18 (Concentradora) PC2/DR-3/07-18 (Directo), PN2/DR-46/06-18, PN3/DR-08/06-18, PN3/DR-05/06-18, PN3/DR-05/06-18, PC2/DR-40/07-2018, PN1/DR-753-PRORREATEO/06-18 PN1/DR-754-PRORRATEO/06-18, PN2/DR-25/06-2018, PN1/DR-62/04-2018, PN2/DR-2/04-2018, PN1/DR-11/05-2018, PN1/DR-11/05-2018, PN1/DR-753-PRORREATEO/06-18</p>			

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

No.	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP- 235/2018 y SUP-RAP- 286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>-Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>-Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.</p> <p>En caso de una transferencia en especie:</p> <p>-Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>-El recibo interno correspondiente.</p> <p>En todos los casos:</p> <p>-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>-El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>-La evidencia fotográfica de los gastos observados.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral</p>		<p>PN1/DR-754-PRORRATEO/06-18, PN2/DR-56/06-2018, PN2/DR-25/05-2018, PN2/DR-60/06-2018, PN1/DR-12/04-2018 PN2/DR-17/05-2018, PC3/DR-29/06-2018, PN1/DR-753-PRORRATEO/06-18 PN1/DR-754-PRORRATEO/06-18, PN1/DR-753-PRORRATEO/06-18 PN1/DR-754-PRORRATEO/06-18, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018, PN3-DR-11/06-2018; por tal razón, la observación quedó atendida.</p>			

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

No.	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP- 235/2018 y SUP-RAP- 286/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240 del RF.					

(...)"

En este orden de ideas, se han realizado las modificaciones a la parte conducente Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente número **SUP-RAP-235/2018 y Acumulado**.

6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **33.10**, conclusiones **10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la multicitada Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los términos siguientes:

(...)

33.10 COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) **10_C23_P2**, (...).

(...)

g) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **10_C13_P1** y **10_C22_P2**

(...)

i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **10_C46_P3**.

(...)

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones:** (...) **10_C23_P2**, (...).

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
10_C23_P2	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de propaganda exhibida en internet por \$145,000.00</i>	\$145,000.00

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de las sanciones considerando además que las mismas no afecten sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando veintitrés de la presente resolución.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones** (...) 10_C23_P2, (...), 10-C47-P3, (...) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de propaganda, exhibida en la vía pública, renta de inmuebles, propaganda exhibida en internet espectaculares, casas de campaña, entre otros, realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la ciudad de México

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.²⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el proceso electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

²⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
- 4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
- 5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.

7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento.

8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por este Instituto en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen las coaliciones en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

“Artículo 297.

Objetivo de las visitas

1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Artículo 298.

Concepto

1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes.”

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del proceso electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe presentado.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²¹:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

21 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos²² y 127 del Reglamento de Fiscalización²³.

²² Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) *Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)*

²³ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque

registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

analizados en el considerando veintitrés de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el Considerando veintitrés de la presente resolución, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, *'COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE'*.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

(...)

Conclusión 10 C23 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al /Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁴

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

²⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado **\$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 16% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$23,896.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$87,899.00 (ochenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al 23% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$33,219.50 (treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos 50/100 M.N.)**

(...)

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de Los artículos 25, numeral 1, inciso n) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos: Conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2.

No.	Conclusión	Monto involucrado
10_C13_P2	<i>“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de propaganda colocada fuera del territorio por \$586,660.80”</i>	\$586,660.80
10_C22_P2	<i>“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de propaganda colocada fuera del ámbito geográfico de su competencia por \$53,332.80”</i>	\$53,332.80

Conclusión 10 C13 P2

La presente conclusión quedó sin efectos en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/218**.

Conclusión 10 C22 P2.

La presente conclusión quedó sin efectos en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/218**.

(...)

i) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos: **conclusión 10_C46_P3**.

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

No.	Conclusión	Monto involucrado
10_C46_P3	<i>“El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado ‘Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad’, aunado que el mismo no cumple con fines partidistas.”</i>	\$232,000.00

Conclusión 10 C46 P3

En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene que, de la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18, de las cuales se desprende la aportación relacionada con la elaboración, producción y edición del libro denominado *“Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”*; y con la póliza PN3/DR-156/30-06-18 se desprende el gasto relacionado con la distribución de dicho libro, dichas pólizas cuentan con el soporte documental respectivo. Asimismo de la valoración realizada por esta autoridad se determinó que dicho libro tuvo por objeto difundir la imagen, trayectoria profesional como servidora pública, y principales logros, generando un beneficio directo a su candidatura, vinculándose con el objeto partidista de la campaña; por tal razón, por lo que se refiere este punto, la observación **quedó atendida**.

7. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, en la resolución **INE/CG1111/2018** en su resolutivo **DÉCIMO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo:

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) 10_C23_P2</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10 C23 P2</u></p>		<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) 10_C23_P2, (...)</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10 C23 P2</u></p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado \$156,600.00 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$25,807.68 (veinticinco mil ochocientos siete pesos 68/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$94,930.92 (noventa y cuatro mil novecientos treinta pesos 92/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$35,877.06 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.)</p>		<p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado \$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$23,896.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$87,899.00 (ochenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$33,219.50 (treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos 50/100 M.N.)</p>
<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) 10_C47_P3</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10_C47_P3</u></p>	<p>Se dio por atendida.</p>	<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...)10_C47_P3.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10_C47_P3</u></p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de \$280,650.01(doscientos ochenta mil seiscientos cincuenta pesos 01/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$46,251.12 (cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y uno pesos 12/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$170,130.04 (ciento setenta mil ciento treinta pesos 04/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$64,296.92 (sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 92/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>		<p>En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene que, de la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales, contratos de prestación de servicios, evidencias de pago, así como las muestras respectivas, documentación con la que se corroboraron los gastos efectuados de los eventos señalados la presente conclusión; por tal razón, la observación quedó atendida.</p>
<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p>	<p>En acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedaron sin efectos.</p>	<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p>g) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10_C13_P1 y 10_C22_P2</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10_C13_P2</u></p> <p>Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de \$586,660.80 (quinientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$96,681.70 (noventa y seis mil seiscientos ochenta y un pesos 70/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$355,633.78 (trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$134,403.99 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos tres pesos 99/100 M.N.).</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10_C22_P2</u></p>		<p>g) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10_C13_P1 y 10_C22_P2</p> <p>(...)</p> <p><u>10_C13_P1 y 10_C22_P2</u></p> <p>Las presentes conclusiones quedaron sin efectos en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/218.</p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p>Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de \$53,332.80 (cincuenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$8,789.25 (ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$32,330.34 (treinta y dos mil trescientos treinta pesos 34/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$12,218.54 (doce mil doscientos dieciocho pesos 54/100 M.N.).</p>		
<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición "Por la CDMX al Frente", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10_C46_P3.</p> <p>(...)</p>	<p>Se dio por atendida.</p>	<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición "Por la CDMX al Frente", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10_C46_P3.</p> <p>(...)</p>

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018
<p><u>Conclusión 10 C46 P3</u></p> <p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado (\$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)), cantidad que asciende a un total de \$464,046.40. (cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.).</p> <p>Partido Acción Nacional:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$76,467.20 (setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.)</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$281,276.80 (doscientos ochenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 80/ 100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$106,302.40 (ciento seis mil trescientos dos pesos 40/ 100 M.N.).</p>		<p><u>Conclusión 10 C46 P3.</u></p> <p>En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene que, de la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18, de las cuales se desprende la aportación relacionada con la elaboración, producción y edición del libro denominado "Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad"; y con la póliza PN3/DR-156/30-06-18 se desprende el gasto relacionado con la distribución de dicho libro, dichas pólizas cuentan con el soporte documental respectivo, por lo que la observación quedó atendida.</p>

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone a la **Coalición “Por la CDMX al Frente”**, las sanciones siguientes:

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **33.10** de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Por la CDMX al Frente”**, las sanciones siguientes:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018**

(...)

**d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...)
10_C23_P2 (...)**

(...)

Conclusión 10 C23 P2

Partido Acción Nacional:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$23,896.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$87,899.00 (ochenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)**.

Movimiento Ciudadano:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$33,219.50 (treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos 50/100 M.N.)**

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-235/2018 Y
SU ACUMULADOSUP-RAP-286/2018

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen **INE/CG1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobados en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en los Considerandos **5** y **6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-235/2018** y **SUP-RAP-286/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1476/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-243/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante de este Instituto), aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG1152/2018** e **INE/CG1153/2018**, respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.

II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el antecedente anterior, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable a fin de controvertir la resolución **INE/CG1153/2018**.

A través del acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior acordó turnar el expediente SUP-RAP-243/2018 a la ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho, resolvió el recurso referido, en los siguientes términos:

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

“RESUELVE

***ÚNICO.** Se **revoca** el Dictamen Consolidado y la Resolución Impugnados, únicamente en la parte relativa a los gastos de **alimentos (coffe break)**, atinentes a la **conclusión 1_C11_P1**, para los efectos precisados en el considerando final de esta ejecutoria.
(...)”*

IV. Derivado de lo anterior, mediante el recurso de apelación SUP-RAP-243/2018, la autoridad jurisdiccional determinó revocar en lo conducente, la conclusión **1_C11_P1**, para el efecto de valorar los argumentos y pruebas aportados por el Partido Revolucionario Institucional, específicamente la relacionada con el servicio de *coffe break* asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por el Partido Revolucionario Institucional.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SUP-RAP-243/2018**.

3. Que el diez de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió **revocar** el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, únicamente en la parte relativa a los gastos de alimentos (*coffe break*) asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, observados en la conclusión **1_C11_P1**, a efecto que esta autoridad valore de nueva cuenta los argumentos y pruebas aportados por el partido accionante, y en plenitud de atribuciones resolver si se acredita o no la omisión de reporte de los mismos, ello con fundamento en el artículo 47, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Que, por lo anterior y en razón del Considerando “**4. Estudio de fondo**”, de la sentencia **SUP-RAP-243/2018**, la Sala Superior, determinó **fundados** los agravios hechos valer por el apelante como a continuación se transcribe:

“(…)

4. Estudio de fondo.

(…)

4.3. Conclusiones relativas a la omisión de reportar diversos egresos en el SIF

4.3.1. Falta de exhaustividad al analizar las pruebas y argumentos aportados por el partido político

*En otro orden de ideas, en el **agravio cuarto** aduce el recurrente que le causa perjuicio la resolución impugnada, en relación con la omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización diversos egresos.*

(…)

Tesis de la decisión

(...)

*En otra parte, se estima **fundado** el agravio del recurrente, específicamente por el siguiente concepto:*

*- Gastos de **alimentos (coffe break)** relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo (**conclusión 1_C11_P1**).*

Puesto que la autoridad incurrió en falta de exhaustividad al dejar de analizar los argumentos y pruebas aportados para desvirtuar tal irregularidad, en contravención al artículo 17 constitucional.

(...)

b) Estudio del agravio que se considera fundado

*En cambio, se estima esencialmente **fundado** el agravio del recurrente, **por el concepto que específicamente se indica:***

*a) El partido recurrente aduce que el gasto de **alimentos (coffe break)** relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo (**conclusión 1_C11_P1**), no se registró debido a que la candidata asistió en calidad de invitada a las instalaciones de CANACINTRA, el cual -según refiere- está soportado con el oficio de invitación de siete de mayo del año en cita, c u y asistencia fue confirmada mediante oficio de quince de mayo posterior.*

En tal sentido, le asiste la razón al partido recurrente al sostener la falta de exhaustividad en que incurrió la autoridad responsable, al pronunciarse sobre la respuesta y documentación soporte que el instituto político aportó, por el concepto específico antes detallado.

(...)

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

*Según se lee, los conceptos con observación (1) –tal como se indicó en el diverso **anexo PRI_OBS-**, son los gastos por los cuales se logró identificar el registro contable y la documentación exigida por el Reglamento de Fiscalización.*

En cambio, el concepto observado con número 2 (alimentos), es el único por el cual no se logró identificar el registro contable.

*Advirtiéndose que en las conclusiones contenidas en el **anexo PRI_OBS** - específicamente en el apartado relativo a la conclusión **1_C11_P1-**, la autoridad responsable no justificó por qué de todos los gastos vinculados con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, solamente el relativo a alimentos (coffe break) **no se tuvo por solventado.***

*Siendo que, **por todos los conceptos** vinculados con dicho evento, la entonces candidata a Gobernadora –en respuesta al oficio de errores y omisiones- informó que había asistido como invitada.*

En tal sentido, tampoco se advierte que la autoridad se hubiera pronunciado sobre las pruebas que el partido ofreció en el procedimiento fiscalizador, para justificar que la candidata había acudido al evento como invitada y, con ello, desvirtuar la omisión de reporte de los gastos asociados al evento relatado.

*De ahí que, en tal sentido, le asista la razón al partido inconforme, pues la autoridad responsable incurrió en falta de exhaustividad al dejar de pronunciarse sobre la totalidad de argumentos y probanzas aportadas para desvirtuar la observación contenida en la conclusión **1_C11_P1**, **específicamente la relacionada con el servicio de coffe break asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho.***

(...)”

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-243/2018 en el Considerando “**5. Decisión**”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente:

“(...

5. Decisión.

*Al resultar fundado el agravio enderezado vinculado con los gastos de **alimentos (coffe break)** relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo (**conclusión 1_C11_P1**), lo procedente es **revocar** el Dictamen Consolidado y la Resolución combatidos, únicamente, por lo que se refiere a ese concepto.*

*Lo anterior, a efecto de que la responsable valore los argumentos y pruebas aportados por el partido, con la intención de desvirtuar las irregularidades en comento **y en plenitud de atribuciones**, resuelva si se acredita esta Infracción.*

(...)”

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga.

En este sentido, el Acuerdo **CE/2017/029** emitido por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Tabasco, le asignó como financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el año 2018
Partido Revolucionario Institucional	\$20,074,226.56

Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Además, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que la condición

CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018

económica del infractor no puede entenderse de manera estática dado que es evidente que va evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido Político	Resolución	Monto de la Sanción	Deducciones realizadas al mes de noviembre de 2018	Montos por saldar	Total
Partido Revolucionario Institucional	Resolución INE/CG254/2018	\$2,073,205.64	\$836,426.10	\$1,236,779.54	\$1,982,196.55
	Resolución CE/2018/077				
	Resolución INE/CG1153/2018	\$745,417.01	\$0.00	\$745,417.01	

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$1,982,196.55 (un millón novecientos ochenta y dos mil ciento noventa y seis pesos 55/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.

7. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG1152/2018** y la Resolución **INE/CG1153/2018**, este Consejo General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en la parte relativa a los gastos de alimentos (*coffe break*), observados en la conclusión **1_C11_P1**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, en lo que fue materia de impugnación, únicamente la parte correspondiente a los gastos de alimentos (*coffe break*) asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, observados en la conclusión **1_C11_P1** del Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, esta autoridad electoral valoró y examinó los planteamientos formulados por el apelante en el recurso de mérito, específicamente en lo señalado en el expediente identificado como SUP-RAP-243/2018.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se revoca el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, únicamente en la parte relativa a los gastos de alimentos (<i>coffe break</i>) , atinentes a la conclusión 1_C11_P1), para los efectos precisados en el considerando final de esta ejecutoria.	<p>Al resultar fundado el agravio vinculado con los gastos de alimentos (<i>coffe break</i>) relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo (conclusión 1_C11_P1), lo procedente es revocar el Dictamen Consolidado y la Resolución combatidos, únicamente, por lo que se refiere a ese concepto.</p> <p>Lo anterior, a efecto de que la responsable valore los argumentos y pruebas aportados por el partido, con la intención de desvirtuar las irregularidades en comento y en plenitud de atribuciones, resuelva si se acredita esta Infracción.</p>	<p>En cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta autoridad procedió a valorar nuevamente las aclaraciones realizadas por el partido accionante.</p> <p>Del análisis de lo manifestado, así como a la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, se determinó que, por cuanto hace a los gastos referidos en el consecutivo 45 e identificados con (3) en la columna de referencia del Anexo 11_P1 del Dictamen, se logró identificar la documentación consistente en el oficio de invitación y respuesta de este, para acudir al evento impartido por el CONACINTRA, lo cual se constató en el apartado de documentación adjunta correspondiente al periodo de corrección del periodo 1, en la contabilidad 44718 correspondiente a la candidata Georgina Trujillo Zentella. Por tal razón la observación quedó atendida en este punto.</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

Sentencia	Efectos	Acatamiento
		Cabe señalar que las consideraciones respecto a los demás gastos observados en el Dictamen ahora impugnado, no relacionados con el concepto de coffe break, al no haber sido materia de revocación por de la Sala Superior, siguen lo en los mismos términos originales

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG1152/2018, relativo al apartado **“3.2 Partido Revolucionario Institucional”**, específicamente en el rubro denominado **“Todos los cargos, Procedimiento de Fiscalización, Visitas de Verificación”** del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, en los términos siguientes:

“(…)

Tabasco

3.2 Partido Revolucionario Institucional

Todos los Cargos

Procedimientos de Fiscalización

Visitas de verificación

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/32923/18	Oficio núm. PRI/SFA/0252/2018				
38	Todos los Cargos Procedimientos de Fiscalización Visitas de verificación De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a	“En aclaración a la observación de la autoridad contenidas en el anexo 28, Donde la autoridad observa gastos realizados en	No atendida Del análisis a lo manifestado, así como a la documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:	1_C11_P1 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por	Egreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió										
	Oficio: INE/UTF/DA/32923/18	Oficio núm. PRI/SFA/0252/2018														
	<p>eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes, como se detalla en el Anexo 28 del oficio INE/UTF/DA/32923/18</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <p>• En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <p>- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.</p> <p>- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El o los avisos de contratación respectivos.</p>	<p>eventos no reportadas en los informes; con el objeto de desvirtuar la observación manifiesto que estas se encuentran registradas en los cuadros siguientes: (...)”</p> <p>Véase Anexo R1_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (1) en la columna de “Referencia” del Anexo 11_P1 del presente Dictamen, se logró identificar los registros contables por concepto de los gastos observados, que además cumplen con la documentación exigida por el RF, como son cotizaciones, contratos de aportación, muestras y recibos de aportación Por tal razón la observación quedó atendida en este punto.</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (2) en la columna de referencia del Anexo 11_P1 del presente Dictamen, después de agotar la búsqueda en todos los registros contables, no se logró identificar los registros contables por los gastos observados; constándose que omitió reportar 26 gastos. Por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios</p> <p>(Pesos)</p> <table><tr><td>Id matriz de precios</td><td>Proveedor</td><td>Concepto</td><td>Unidad de medida</td><td>Importe con IVA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA						<p>concepto de 1 Alimento, 115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 13 Equipos de Sonido, 3 Grupos Musicales, 1 Inmuebles, 2 Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto de \$183,576.50.</p> <p>El prorrateo a los candidatos y candidatas beneficiados se indica en el Anexo II – A Dictamen</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el</p>		
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA												

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis					Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																																																			
	Oficio: INE/UTF/DA/32923/18	Oficio núm. PRI/SFA/0252/2018																																																											
	<p>• En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>- Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.</p> <p>• En caso de una transferencia en especie:</p> <p>- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>- El recibo interno correspondiente.</p> <p>• En todos los casos:</p> <p>- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p>		<table><tr><td>14279</td><td>Roberto Contreras Esquivel</td><td>Equipo de Sonido</td><td>Servicio</td><td>5,353.84</td></tr><tr><td>14272</td><td>Cesar Sastre Gonzalez</td><td>Perifoneo</td><td>Servicio</td><td>5,900.00</td></tr><tr><td>2871</td><td>Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv</td><td>Mobiliario</td><td>Servicio</td><td>17,993.57</td></tr><tr><td>16733</td><td>Lilia Suni Ramirez Cruz</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>1288</td><td>Rafael Alberto Perez Ic</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>4,640.00</td></tr><tr><td>12906</td><td>Kaiman Entretenimiento o S.A. De C.V.</td><td>Alimentos</td><td>Servicio</td><td>4624.21</td></tr><tr><td>17259</td><td>Karen Rubi Perez Rovirosa</td><td>Servicio</td><td>Servicio</td><td>21,100.01</td></tr><tr><td>1563</td><td>Exhibiciones Y Espacios Publicitarios Sa de Cv</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>1,392.00</td></tr><tr><td>2185</td><td>Marco Antonio Chavez Bustillos</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>4,176.00</td></tr><tr><td>20222</td><td>Eventos y Banquetes del Sureste S. de R.L. de C.V.</td><td>Alquiler de inmueble</td><td>Servicio</td><td>22,712.80</td></tr><tr><td>16729</td><td>Gabriel Ramos Leon</td><td>Alquiler de inmueble</td><td>Servicio</td><td>1,500.00</td></tr></table>	14279	Roberto Contreras Esquivel	Equipo de Sonido	Servicio	5,353.84	14272	Cesar Sastre Gonzalez	Perifoneo	Servicio	5,900.00	2871	Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv	Mobiliario	Servicio	17,993.57	16733	Lilia Suni Ramirez Cruz	Animadores	Servicio	1,000.00	1288	Rafael Alberto Perez Ic	Animadores	Servicio	4,640.00	12906	Kaiman Entretenimiento o S.A. De C.V.	Alimentos	Servicio	4624.21	17259	Karen Rubi Perez Rovirosa	Servicio	Servicio	21,100.01	1563	Exhibiciones Y Espacios Publicitarios Sa de Cv	Animadores	Servicio	1,392.00	2185	Marco Antonio Chavez Bustillos	Animadores	Servicio	4,176.00	20222	Eventos y Banquetes del Sureste S. de R.L. de C.V.	Alquiler de inmueble	Servicio	22,712.80	16729	Gabriel Ramos Leon	Alquiler de inmueble	Servicio	1,500.00	costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.		
14279	Roberto Contreras Esquivel	Equipo de Sonido	Servicio	5,353.84																																																									
14272	Cesar Sastre Gonzalez	Perifoneo	Servicio	5,900.00																																																									
2871	Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv	Mobiliario	Servicio	17,993.57																																																									
16733	Lilia Suni Ramirez Cruz	Animadores	Servicio	1,000.00																																																									
1288	Rafael Alberto Perez Ic	Animadores	Servicio	4,640.00																																																									
12906	Kaiman Entretenimiento o S.A. De C.V.	Alimentos	Servicio	4624.21																																																									
17259	Karen Rubi Perez Rovirosa	Servicio	Servicio	21,100.01																																																									
1563	Exhibiciones Y Espacios Publicitarios Sa de Cv	Animadores	Servicio	1,392.00																																																									
2185	Marco Antonio Chavez Bustillos	Animadores	Servicio	4,176.00																																																									
20222	Eventos y Banquetes del Sureste S. de R.L. de C.V.	Alquiler de inmueble	Servicio	22,712.80																																																									
16729	Gabriel Ramos Leon	Alquiler de inmueble	Servicio	1,500.00																																																									

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis					Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																							
	Oficio: INE/UTF/DA/32923/18	Oficio núm. PRI/SFA/0252/2018																															
	<p>- El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>- La evidencia fotográfica de los gastos observados.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240, del RF.</p>		<table><tr><td>5087</td><td>Promocionales</td><td>Utillería</td><td>Pieza</td><td>800.40</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>Promocio</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Manufacturas</td><td>nal</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>en Plastico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>S.A de Cv</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el Anexo II – A Dictamen</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 1 Alimento, 1 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 1 Coffee Break, 3 Drones, 12 Equipos de Sonido, 3 Grupos Musicales, 1 Inmuebles, 2 Perifoneo, 1 Planta de Luz valuados en \$183,576.50.</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dichos espectaculares beneficiaron a varios candidatos.</p> <p>El prorrateo se detalla en el Anexo II – A Dictamen</p>	5087	Promocionales	Utillería	Pieza	800.40		y	Promocio				Manufacturas	nal				en Plastico					S.A de Cv								
5087	Promocionales	Utillería	Pieza	800.40																													
	y	Promocio																															
	Manufacturas	nal																															
	en Plastico																																
	S.A de Cv																																

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-RAP-243/2018.

**Todos los Cargos
Procedimientos de Fiscalización
Visitas de verificación**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18				
38	<p>Todos los Cargos</p> <p>Procedimientos de Fiscalización</p> <p>Visitas de verificación</p> <p>De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes, como se detalla en el Anexo 28 del oficio INE/UTF/DA/32923/18</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa. Las evidencias del pago y, en caso de que éstos 	<p>“En aclaración a la observación de la autoridad contenidas en el anexo 28, Donde la autoridad observa gastos realizados en eventos no reportados en los informes; con el objeto de desvirtuar la observación manifiesto que estas se encuentran registradas en los cuadros siguientes: (...)”</p> <p>Véase Anexo R1_P1 del presente Dictamen.</p>	<p>No atendida</p> <p>Esta autoridad en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria recaída en el expediente SUP-RAP-243/2018, procedió a valorar nuevamente las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado.</p> <p>Del análisis a lo manifestado, así como a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente:</p> <p>Del análisis a lo manifestado, así como a la documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados en el consecutivo (45) señalados con (3) en la columna de referencia del Anexo 11_P1 del presente Dictamen se logró identificar la documentación consistente en el oficio de invitación y respuesta de este, para acudir al evento impartido por el CONACINTRA, lo cual se constató en el apartado de documentación adjunta correspondiente al periodo de</p>	<p>1_C11_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 1 Alimento, 115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 11 Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto</p>	<p>Egreso no reportado</p>	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concret a	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18				
	<p>hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.</p> <p>- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>• En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>- Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.</p> <p>• En caso de una transferencia en especie:</p>		<p>corrección del periodo 1. La documentación antes mencionada, por concepto de los gastos observados, en la contabilidad 44718 correspondiente a la candidata Georgina Trujillo Zentella. Por tal razón la observación quedó atendida en este punto.</p> <p>Cabe señalar que las siguientes consideraciones que hace esta autoridad, al no haber sido materia de revocación por parte de la Sala Superior, siguen en los mismos términos originales, y únicamente se señalan para efectos de claridad, como se detalla a continuación:</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (1) en la columna de “Referencia” del Anexo 11_P1 del presente Dictamen, se logró identificar los registros contables por concepto de los gastos observados, que además cumplen con la documentación exigida por el RF, como son cotizaciones, contratos de aportación, muestras y recibos de aportación. Por tal razón la observación quedó atendida en este punto.</p> <p>Por cuanto hace a los gastos identificados con (2) en la columna de referencia del Anexo 11_P1 del presente Dictamen, después de agotar la búsqueda en todos los registros contables, no se logró identificar los correspondientes a los gastos observados; constándose que omitió reportar 16 de éstos.</p>	<p>de \$178,952.29</p> <p>El prorrateo a los candidatos y candidatas beneficiados se indica en el Anexo II – A Dictamen</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>		

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concret a	Artículo que incumplió																																			
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18																																							
	<p>- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>- El recibo interno correspondiente.</p> <p>• En todos los casos:</p> <p>- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>- El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>- La evidencia fotográfica de los gastos observados.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240, del RF.</p>		<p>Por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios</p> <p>(Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>14279</td><td>Roberto Contreras Esquivel</td><td>Equipo de Sonido</td><td>Servicio</td><td>5,353.84</td></tr><tr><td>14272</td><td>Cesar Sastre Gonzalez</td><td>Perifoneo</td><td>Servicio</td><td>5,900.00</td></tr><tr><td>2871</td><td>Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv</td><td>Mobiliario</td><td>Servicio</td><td>17,993.57</td></tr><tr><td>16733</td><td>Lilia Suni Ramirez Cruz</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>1288</td><td>Rafael Alberto Perez Ic</td><td>Animadores</td><td>Servicio</td><td>4,640.00</td></tr><tr><td>17259</td><td>Karen Rubi Perez Rovirosa</td><td>Servicio</td><td>Servicio</td><td>21,100.01</td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	14279	Roberto Contreras Esquivel	Equipo de Sonido	Servicio	5,353.84	14272	Cesar Sastre Gonzalez	Perifoneo	Servicio	5,900.00	2871	Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv	Mobiliario	Servicio	17,993.57	16733	Lilia Suni Ramirez Cruz	Animadores	Servicio	1,000.00	1288	Rafael Alberto Perez Ic	Animadores	Servicio	4,640.00	17259	Karen Rubi Perez Rovirosa	Servicio	Servicio	21,100.01			
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																																					
14279	Roberto Contreras Esquivel	Equipo de Sonido	Servicio	5,353.84																																					
14272	Cesar Sastre Gonzalez	Perifoneo	Servicio	5,900.00																																					
2871	Desarrollo Publicitario Anduaga Sa De Cv	Mobiliario	Servicio	17,993.57																																					
16733	Lilia Suni Ramirez Cruz	Animadores	Servicio	1,000.00																																					
1288	Rafael Alberto Perez Ic	Animadores	Servicio	4,640.00																																					
17259	Karen Rubi Perez Rovirosa	Servicio	Servicio	21,100.01																																					

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis					Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM-COA/TAB/002-18								
			1563	Exhibiciones Y Espacios Publicitarios Sa De Cv	Animadores	Servicio	1,392.00			
			2185	Marco Antonio Chavez Bustillos	Animadores	Servicio	4,176.00			
			20222	Eventos Y Banquetes Del Sureste S. De R.L. De C.V.	Alquiler de inmueble	Servicio	22,712.80			
			16729	Gabriel Ramos Leon	Alquiler de inmueble	Servicio	1,500.00			
			5087	Promocionales Y Manufacturas En Plastico Sa De Cv	Utilleria Promocional	Pieza	800.40			
			<p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el Anexo II – A Dictamen</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Dron, 11 Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto de \$178,952.29</p>							

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/37602/18	Oficio núm. CAM- COA/TAB/002-18				
			<p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dichos espectaculares beneficiaron a varios candidatos.</p> <p>El prorrateo se detalla en el Anexo II – A Dictamen</p>			

(...)"

9. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-243/2018, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG1153/2018, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del Considerando **"38.1 Partido Revolucionario Institucional"** relativo al **inciso d)** y específicamente en la conclusión **1_C11_P1**, en los siguientes términos:

"(...)

38.1 Partido Revolucionario Institucional.

(...)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: (...)**
1_C11_P1, (...).

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
1_C11_P1	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 1 Alimento, 115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 11 Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto de \$178,952.29</i>	\$178,952.29
(...)	(...)	(...)

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones (...)** **1_C11_P1, (...)**, del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de (gasto por conceptos de tres carteleras, gastos generados por concepto de cinco videos, gastos generados por concepto de Alimento, aplaudidores, artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 13 Equipos de Sonido, 4 Grupos Musicales, 2 Inmuebles, 2 Perifoneo, 2 Planta de Luz, gastos generados por concepto de 1 equipo de Sonido, 1 Inmueble y 2 Grupos musicales, por concepto de 1 equipo de sonido, 1 perifoneo y 1 planta de luz, gastos generados por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral) realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

(...)
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 1 Alimento, 115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 11 Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto de \$178,952.29
(...)

(...)

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

Conclusión 1 C11 P1

(...)

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.).**

(...)

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.).**

¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.)**.

(...)"

10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional en la Resolución **INE/CG1153/2018**, consistió en:

Sanción en Resolución INE/CG1153/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-243/2018
<p>PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.1 de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...), 1_C11_P1, (...).</p> <p><u>Conclusión 1 C11 P1</u></p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$183,576.50 (ciento ochenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.)</p>	<p>En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-243/2018, se dio por atendida la observación hecha al partido accionante en la conclusión 1_C11_P1 del Dictamen Consolidado, relativa al no reporte de alimentos (coffe break) relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por lo que se modificó el monto involucrado de la conclusión y la sanción impuesta en la Resolución impugnada.</p>	<p>PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.1 de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...), 1_C11_P1, (...).</p> <p><u>Conclusión 1 C11 P1</u></p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.).</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo se modifica el **Resolutivo PRIMERO** para quedar en los siguientes términos:

(...)

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **38.1** de la presente Resolución, se impone a Partido Revolucionario Institucional, las sanciones siguientes:

(...)

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **conclusiones (...), 1_C11_P1, (...).**

Conclusión 1_C11_P1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.).**
(...)”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG1152/2018** y la Resolución **INE/CG1153/2018**, aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **8, 9, 10 y 11** del presente Acuerdo.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018**

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-243/2018**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del Estado de Tabasco y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el considerando 24 de la Resolución que por esta vía se modifica.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1477/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-258/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1095/2018** e **INE/CG1096/2018** respectivamente, relativos a la revisión de los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de las Candidatas y Candidatos Independientes al cargo de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, el **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, otrora candidato independiente al cargo de Senador, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG1096/2018**, mismo que fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-258/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que se transcribe a continuación:

*“**ÚNICO.** Se **revoca** parcialmente la resolución impugnada, en lo que fue materia de estudio, para los efectos precisados en la sentencia.”*

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de apelación SG-RAP-258/2018 tuvo por efecto **revocar** en lo que fue materia de impugnación **la Resolución INE/CG1096/2018**, también lo es que el Dictamen Consolidado **INE/CG1095/2018** forma parte de la motivación de la Resolución que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Guadalajara, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos, con fundamento en los artículos 426, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; en consecuencia, se presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios, derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de las Candidatas y Candidatos Independientes al cargo de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar parcialmente la Resolución INE/CG1096/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución, se modifican ambas determinaciones, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG1095/2018** e **INE/CG1096/2018**, respectivamente, emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de dejar sin efectos la Resolución controvertida, por lo que hace a las conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3, respecto del otrora Candidato Independiente a Senador en Baja California Sur, C.

Lorenzo Ricardo García de León Coria, se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos **CUARTO y QUINTO** de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SG-RAP-258/2018, relativos al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Guadalajara, determinó lo que a continuación se transcribe:

“CUARTO. Estudio de Fondo

(...) este órgano colegiado considera que le asiste la razón al recurrente, pues se considera que la resolución en efecto resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 16 en cita, pues no se encuentra debidamente motivada.

(...) a juicio de este órgano colegiado, la mera referencia a los eventos cuya omisión de reportar el gasto respectivo se le reclama al recurrente, sin que se aporte mayor descripción ni soporte documental que permita descubrir el origen de la actividad, ni la idoneidad de la calificación de gasto no reportado que le otorga la responsable, resulta insuficiente para identificar plenamente las conductas observadas en la conclusión del Dictamen a estudio, pues no permite una adecuada defensa por parte del recurrente, por las razones que se exponen enseguida, por lo que se concluye que el Dictamen no se encuentra adecuadamente motivado.

(...) como se desprende la información que integra la tabla notificada al hoy candidato con el oficio de errores y omisiones, se advierte que, en caso de las actividades relativas a los proveedores Compañía Sudcaliforniana, S.A. de C.V. y Patricia Rubio Cruz, cuyo gasto tuvo por no reportado la autoridad fiscalizadora, aparecen consignados dos eventos idénticos en todo, en tanto que por lo que se refiere al proveedor Francisco Uscanga Castro, se consignan cuatro eventos exactamente iguales.

En ninguno de los eventos se precisa si se trata de operaciones distintas o de la misma, pero en todo caso, con la información proporcionada por el recurrente al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, se tuvieron por solventadas parcialmente las omisiones materia de las observaciones, para calificar finalmente de no solventadas, cuatro de ellas, una por proveedor, sin que se justifique en el Dictamen la razón por la que la información aportada por el entonces candidato fue insuficiente en dichos casos, cuando aparentemente tienen el mismo origen.

Tampoco existe razonamiento alguno en el que se analice el porqué de la existencia de actividades con un mismo folio de aviso de contratación, ni uno diverso mediante el cual se valore la documentación aportada en el SIF por el entonces candidato, y que permita identificar la existencia de la falta.

De la misma manera en el Dictamen impugnado también se pasa por alto precisar si el monto de dichas omisiones localizadas a partir de los avisos de contratación realizados por el recurrente, así como los montos derivados de los avisos mismos, fueron o no contabilizados para arribar al monto total de gastos de campaña ejercidos, para determinar el impacto que tuvieron las infracciones determinadas por la responsable y la gravedad de las mismas.

*Derivado de lo anterior, es que esta autoridad jurisdiccional, estima que el acto controvertido no se encuentra adecuadamente motivado, y, en consecuencia, considera al agravio expuesto por el recurrente **fundado** y suficiente para revocar la Resolución en cuestión.*

(...)

QUINTO. Efectos

- 1. Se deja sin efectos la resolución controvertida, por lo que ve a las conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3.*
- 2. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir otra en la que, tomando en consideración lo razonado en esta sentencia, de manera fundada y motivada, analizando la totalidad de las constancias allegadas por el recurrente durante el proceso de fiscalización, se pronuncie*

nuevamente sobre la existencia o inexistencia de las omisiones atribuidas al entonces candidato.

3. En caso de declarar la existencia de dichas omisiones, precise las cantidades y conceptos susceptibles de conformar el total de gastos de campaña ejercidos, sin que puedan ser contabilizados en rubros diversos, con el propósito de evitar duplicidad en los cargos.

4. Dado que la sanción impuesta al recurrente fue derivada del cúmulo de conclusiones, como se aprecia del resolutivo tercero, visible a foja mil doscientos cuarenta y uno del acto controvertido, y algunas de éstas no fueron materia de impugnación, deberá individualizar de nueva cuenta la sanción, en el entendido de que en ningún caso podrá ser superior a la establecida en el acto que por este medio se revoca. (...)"

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado como **SG-RAP-258/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido.

5. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1096/2018**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **13.3**, conclusiones **13.3-C6-P3** y **13.3-C8-P3** del Dictamen Consolidado **INE/CG1095/2018** y el Considerando **25.3**, inciso **b)**, conclusión **13.3-C8-P3** e inciso **c)**, conclusión **13.3-C6-P3** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Guadalajara, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las **conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3** del Dictamen Consolidado y la Resolución referidos, en la parte que correspondiente al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Se revoca parcialmente la resolución impugnada, en lo que fue materia de estudio, específicamente apartado 13.3 , conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3 del Dictamen Consolidado INE/CG1095/2018 y el considerando 25.3 , inciso b) , conclusión	Se deja sin efectos la resolución controvertida, por lo que hace a las conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3 . En consecuencia, la autoridad responsable deberá emitir otra, en la que, de manera fundada y motivada, analizando la	Conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3: Después de realizar un análisis exhaustivo a los gastos registrados en SIF por el sujeto obligado fue posible identificar todos los avisos de contratación de los proveedores Compañía Editora Sudcaliforniana S. A. de C. V., Jonás	En el Dictamen y en la Resolución, se consideran las conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
13.3-C8-P3 e inciso c) , conclusión 13.3-C6-P3 de la respectiva Resolución	totalidad de las constancias allegadas por el recurrente durante el proceso de fiscalización, se pronuncie nuevamente sobre la existencia o inexistencia de las omisiones atribuidas al entonces candidato.	Uscanga Castro; y, Patricia Rubio Cruz; por tal razón se consideraron atendidos toda vez que se pudo identificar la provisión o registro del gasto en el SIF. Derivado de lo anterior, al inexistir gastos no reportados el sujeto obligado no excedió el tope de gastos del periodo de campaña.	

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número **INE/CG1095/2018**, así como la Resolución identificada con el número **INE/CG1096/2018**, relativos a la revisión de los Informes de campaña de los ingresos y gastos de las Candidatas y Candidatos Independientes al cargo de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, en la parte conducente al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

“(…)

13.3 C. Lorenzo Ricardo García de León Coria Candidato Independiente al cargo de Senador MR por el estado de Baja California Sur.

Id	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Escrito: CI/LRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018				
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
20			Sin efectos	13.3-C6-P3		

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Id	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Respuesta Escrito: C/VRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p><i>Del análisis a lo registrado en el módulo de "Avisos de contratación", se identificaron gastos que no fueron reportados en el informe correspondiente. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente oficio.</i></p> <p><i>Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <p><i>- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</i></p> <p><i>- Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias.</i></p> <p><i>- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</i></p> <p><i>- Muestras y/o fotografías de lo contratado.</i></p>	<p><i>"(...) Para efecto de solventar este punto, en la cedula contenida en el Anexo 1 que se adjunta al presente, encontrará en las ultimas 5 columnas los datos del registro ante el sistema de Fiscalización, conteniendo; fecha, periodo, subtipo, numero e importe. Los cuales solventan la observación (...)."</i></p> <p>Véase Anexo R1-P3 del presente Dictamen</p>	<p>Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y la documentación presentada en el SIF se determinó lo siguiente:</p> <p>De los avisos de contratación señalados con (1) en la columna denominada "Referencia" del Anexo 4-P3 se constató que el monto reportado en el módulo de avisos de contratación coincide con lo registrado en gastos en el SIF; por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto.</p> <p>Sin embargo, en relación a lo señalado con (2) en la columna denominada "Referencia" del Anexo 4-P3 se detectó que presentó los avisos de contratación; sin embargo, omitió registrar los gastos en medios impresos por \$93,056.36, de producción por \$34,800.00 y por servicios de publicidad en internet por \$278,400.00; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>No obstante, derivado de que el entonces candidato independiente contravirtió la determinación de este Consejo General, la Sala Regional Guadalajara en la sentencia dictada en el recurso de apelación SG-RAP-258/2018, revocó parcialmente la resolución INE/CG1096/2018, y la parte atinente del Dictamen Consolidado INE/CG1095/2018, ordenándose analizar</p>	<p>[Sin efectos en acatamiento a la sentencia SG-RAP-258/2018]</p>		

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Id	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Escrito: C/ LRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018				
	<p>- El registro de la provisión correspondiente, de los gastos que no han sido reportados en la contabilidad.</p> <p>- El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>- Papel de trabajo donde se identifique los registros contables (pólizas) de cada gasto observado, asimismo, se debe identificar los pagos realizados y las fechas tentativas para liquidar en su totalidad dichas erogaciones.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c), y e), de la LGIPE; 61, numeral 1, inciso f, fracción III y 62, numeral 2 de la LGPP; 27, 33, numeral 1, incisos a) y b); 38, numeral 1 y 5; 126, 127, 207, numerales 3 y 4; 278, numeral 1, inciso a) y 296, numeral 1, del RF.</p>		<p>de nueva cuenta la información y documentación que obraba en el SIF, fundar y motivar la nueva determinación.</p> <p>Derivado de lo anterior, se analizó el <u>Anexo 1 notificado en su momento en el Oficio de errores y omisiones</u>, mismo que fue renombrado como ANEXO 4-P3 BIS del presente Acuerdo, toda vez que la Sala Regional Guadalajara analiza la irregularidad en comento a partir de dicho anexo, por lo que se determina lo siguiente:</p> <p>De los avisos de contratación identificados con (a) en la columna "Ref" del ANEXO 4-P3 BIS no se identificó el registro del gasto en SIF motivo por el cual se siguen considerando en el ANEXO 4-P3 del presente Dictamen.</p> <p>De los avisos de contratación identificados con (b) en la columna "Ref" del ANEXO 4-P3 BIS se pudo identificar el registro del gasto en SIF, motivo por el cual no se consideran en el ANEXO 4-P3 del presente Dictamen.</p> <p>De los avisos de contratación identificados con (c) en la columna "Ref" del ANEXO 4-P3 BIS se identificó que se trata de avisos de contratación duplicados, mismos que no debieron considerarse en el ANEXO 1 en su momento, motivo por el cual no se</p>			

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Id	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																	
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Escrito: CI/LRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018																					
			<p>consideran en el ANEXO 4-P3 del presente Dictamen.</p> <p>En un segundo momento, esto es, como parte del análisis a la respuesta del sujeto obligado y en atención al mandato emitido por el órgano jurisdiccional, esta autoridad electoral determinó que después de realizar un análisis exhaustivo a los gastos registrados en SIF por el sujeto obligado fue posible identificar la provisión o registro del gasto en el SIF de todos los avisos de contratación de los proveedores Compañía Editora Sudcaliforniana S. A. de C. V., Jonás Uscanga Castro, y Patricia Rubio Cruz; específicamente en las pólizas que se detallan a continuación:</p> <table><tr><th>Proveedor</th><th>Referencia contable</th></tr><tr><td rowspan="8">Compañía Editora Sudcaliforniana SA de CV</td><td>PN-DR-14/05-18</td></tr><tr><td>PN-DR-2/05-18</td></tr><tr><td>PN-DR-7/06-18</td></tr><tr><td>PN-DR-13/06-18</td></tr><tr><td>PN-DR-19/06-18</td></tr><tr><td>PN-EG-11/06-18</td></tr><tr><td>PN-EG-23/06-18</td></tr><tr><td>PN-EG-51/06-18</td></tr><tr><td>Jonás Uscanga Castro</td><td>PN-EG-12/05-18</td></tr><tr><td rowspan="3">Patricia Rubio Cruz</td><td>PN-DR-13/04-18</td></tr><tr><td>PN-EG-06/04-18</td></tr><tr><td>PN-DR-20/05-18</td></tr></table>	Proveedor	Referencia contable	Compañía Editora Sudcaliforniana SA de CV	PN-DR-14/05-18	PN-DR-2/05-18	PN-DR-7/06-18	PN-DR-13/06-18	PN-DR-19/06-18	PN-EG-11/06-18	PN-EG-23/06-18	PN-EG-51/06-18	Jonás Uscanga Castro	PN-EG-12/05-18	Patricia Rubio Cruz	PN-DR-13/04-18	PN-EG-06/04-18	PN-DR-20/05-18			
Proveedor	Referencia contable																						
Compañía Editora Sudcaliforniana SA de CV	PN-DR-14/05-18																						
	PN-DR-2/05-18																						
	PN-DR-7/06-18																						
	PN-DR-13/06-18																						
	PN-DR-19/06-18																						
	PN-EG-11/06-18																						
	PN-EG-23/06-18																						
	PN-EG-51/06-18																						
Jonás Uscanga Castro	PN-EG-12/05-18																						
Patricia Rubio Cruz	PN-DR-13/04-18																						
	PN-EG-06/04-18																						
	PN-DR-20/05-18																						

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Id	Observación	Respuesta	Análisis		Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió										
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Escrito: CI/LRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018															
			<table><tr><td></td><td>PN-EG-15/05-18</td></tr><tr><td></td><td>PN-EG-15/06-18</td></tr><tr><td></td><td>PN-EG-36/06-18</td></tr><tr><td></td><td>PN-EG-40/06-18</td></tr><tr><td></td><td>PC-DR-2/07-18</td></tr></table>		PN-EG-15/05-18		PN-EG-15/06-18		PN-EG-36/06-18		PN-EG-40/06-18		PC-DR-2/07-18				
	PN-EG-15/05-18																
	PN-EG-15/06-18																
	PN-EG-36/06-18																
	PN-EG-40/06-18																
	PC-DR-2/07-18																
			Por tal razón esta autoridad fiscalizadora tiene certeza respecto al registro de los gastos observados, en consecuencia, la observación quedó sin efectos .														
(...)	(...)	(...)	(...)		(...)	(...)	(...)										
23	<p>Tope de gastos</p> <p>De la revisión realizada al informe y los registros contables realizados durante la campaña, se observó que el sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña, por un monto de \$309,350.83. Lo anterior se detalla en el cuadro siguiente:</p> <table><tr><td>Excedente</td><td>\$309,350.83</td></tr><tr><td>Tope de gastos</td><td>\$2,864,222.00</td></tr><tr><td>Total de gastos</td><td>\$3,173,572.83</td></tr><tr><td>Gastos</td><td>\$2,864,222.00</td></tr></table>	Excedente	\$309,350.83	Tope de gastos	\$2,864,222.00	Total de gastos	\$3,173,572.83	Gastos	\$2,864,222.00		<p>Atendida</p> <p>Se observó que el monto de los gastos realizados excede el tope de gastos.</p> <p>No obstante, derivado de que el entonces candidato independiente controvertió la determinación de este Consejo General, la Sala Regional Guadalajara en la sentencia dictada en el recurso de apelación SG-RAP-258/2018, revocó parcialmente la resolución INE/CG1096/2018, y la parte atinente del Dictamen Consolidado INE/CG1095/2018, ordenándose analizar de nueva cuenta la información y documentación que obra en el SIF, a efecto de fundar y motivar su determinación.</p> <p>En atención al mandato emitido por el órgano jurisdiccional, esta autoridad electoral determinó lo siguiente:</p>		13.3-C8-P3 [Sin efectos en acatamiento a la sentencia SG-RAP-258/2018]				
Excedente	\$309,350.83																
Tope de gastos	\$2,864,222.00																
Total de gastos	\$3,173,572.83																
Gastos	\$2,864,222.00																

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Id	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/39318/18 Fecha de vencimiento: 10-07-18	Escrito: CI/LRGLC/033/2018 Fecha del escrito: 11-07-2018				
			Del análisis a la conclusión 13.3-C6-P3 se determinó la inexistencia de gastos no reportados; por lo anterior se realizaron los ajustes correspondientes, tal y como se detalla en el ANEXO I y II del presente Acuerdo , por lo que el sujeto obligado no excedió el tope de gastos del periodo de campaña, por lo tanto, la observación quedó sin efectos.			

(...)"

B. Modificación a la Resolución.

Que la Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SG-RAP-258/2018** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1096/2018** relativas al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del **Considerando 25.3**, relativo a las **conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3**, en los términos siguientes:

"25.3 LORENZO RICARDO GARCÍA DE LEÓN CORIA

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3 y 13.3-C4-P3 V [La Sala Regional Guadalajara dejó firme estas conclusiones]

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C8-P3. [Queda sin efectos, al haber quedado atendida la observación la conclusión 13.3-C6-P3]

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C6-P3. [Queda sin efectos, al haber quedado atendida la observación]

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C1-P3-V.3 [La Sala Regional Guadalajara dejó firme esta conclusión]

e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V. [La Sala Regional Guadalajara dejó firme estas conclusiones]

f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2 y 13.3-C7-P3. [La Sala Regional Guadalajara dejó firme estas conclusiones]

g) Imposición de sanción.

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) (...)

b) La sanción quedo sin efectos, toda vez que en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara no existe rebase al tope de gastos de campaña.

c) La sanción quedo sin efectos, toda vez que en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara la conclusión quedó atendida.

(...)

g) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a las conclusiones **13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3, 13.3-C4-P3 V, 13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2, 13.3-C7-P3, 13.3-C1-P3-V, 13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para

¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Ahora bien, de conformidad con lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, como ya fue razonado y explicado en el considerando 5 del presente Acuerdo, se modifica la sanción en los términos del cuadro siguiente, no obstante, se destaca que por lo que hace a las conclusiones **13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3, 13.3-C4-P3 V, 13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2, 13.3-C7-P3, 13.3-C1-P3-V, 13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V**, el órgano jurisdiccional determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por lo que dichos montos quedan intocados. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3 y 13.3-C4-P3 V	Formales	N/A	40 UMA	\$3,224.00
f)	13.3-C2-P1	Tiempo real	\$78,689.99	3%	\$2,337.40
f)	13.3-C4-P2	Tiempo real	\$85,277.86	3%	\$2,498.60
f)	13.3-C7-P3	Tiempo real	\$204,315.31	3%	\$6,125.60
d)	13.3-C1-P3-V	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	N/A	1 UMA por evento	\$1,370.20

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
e)	13.3-C2-P3-V	Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración	N/A	1 UMA por evento	\$886.60
e)	13.3-C3-P3-V	Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración	N/A	1 UMA por evento	\$1,450.80
Total					\$17,893.20

(...)

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica² del candidato independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **222 (doscientas veintidós)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$17,893.20 (diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

7. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato independiente, **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, en la resolución **INE/CG1096/2018**, consistió en:

² Es importante señalar que la capacidad económica del C. Lorenzo Ricardo García de León Coria, ascendía a lo siguiente:

Ingresos (A)	Capacidad Económica (20% de A)
\$1,300,000.00	\$260,000.00

Lo anterior, derivado del informe de capacidad económica que presentó el entonces Candidato Independiente, consideraciones que quedaron intocadas por la Sala Regional Guadalajara en la resolución que por esta vía se acata.

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Sanciones en resolución INE/CG1096/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-258/2018
<p>TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 25.3 de la presente Resolución, se impone al C. Lorenzo Ricardo García de León Coria, en su carácter candidato independiente, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3 y 13.3-C4-P3 V.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C8-P3.</p> <p>c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C6-P3.</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C1-P3-V.3</p> <p>e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V.</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2 y 13.3-C7-P3.</p> <p>Una multa equivalente a 3,225 (tres mil doscientos veinticinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo</p>	<p>Las conclusiones 13.3-C6-P3 y 13.3-C8-P3 quedaron sin efectos, ya que se constató el registro en el SIF de los gastos que amparaban los avisos de contratación y, en consecuencia, no se acreditó rebase al tope de gastos de campaña.</p>	<p>TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 25.3 de la presente Resolución, se impone al C. Lorenzo Ricardo García de León Coria, en su carácter candidato independiente, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones 13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3 y 13.3-C4-P3 V.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C8-P3. [Queda sin efectos, al haber quedado atendida la observación]</p> <p>c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C6-P3. [Queda sin efectos, al haber quedado atendida la observación]</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13.3-C1-P3-V.3</p> <p>e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V.</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo:</p>

**CONSEJO GENERAL
ACATAMIENTO SG-RAP-258/2018**

Sanciones en resolución INE/CG1096/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-258/2018
monto equivale a \$259,935.00 (doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).		Conclusiones 13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2 y 13.3-C7-P3. Una multa equivalente a 222 (doscientas veintidós) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$17,893.20 (diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.).

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al otrora candidato independiente, **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, la siguiente sanción:

“R E S U E L V E

(...)

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 25.3 de la presente Resolución, se impone al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, en su carácter candidato independiente, las sanciones siguientes:

- a) 4 Faltas de carácter formal: Conclusiones **13.3-C1-P1, 13.3-C3-P2, 13.3-C5-P3 y 13.3-C4-P3 V.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **13.3-C8-P3. [Queda sin efectos]**
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **13.3-C6-P3. [Queda sin efectos]**
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **13.3-C1-P3-V.3**
- e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **13.3-C2-P3-V y 13.3-C3-P3-V.**
- f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **13.3-C2-P1, 13.3-C4-P2 y 13.3-C7-P3.**

Una multa equivalente a **222 (doscientas veintidós)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$17,893.20 (diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.)**. (...)"

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado **INE/CG1095/2018** y la Resolución **INE/CG1096/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **6** y **8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-258/2018**.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos al **C. Lorenzo Ricardo García de León Coria**, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificado el Acuerdo de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que Informe del contenido de los Acuerdos que hemos aprobado tanto a la Sala Superior, como a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes. _____

Del mismo modo le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Este Proyecto de Acuerdo es algo muy importante, porque obviamente es el instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. _____

Aquí en este Proyecto de Acuerdo ya se están fijando las fechas para que las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Nacional den el aviso a esta institución y procedan a llevar a cabo sus asambleas y también a recabar las diversas afiliaciones. _____

También algo muy importante es que se está previendo la utilización de una aplicación que sea diseñada por esta institución, una aplicación móvil similar a la que se utilizó para la obtención del apoyo ciudadano en caso de las candidaturas

independientes, pero que obviamente se está perfeccionando precisamente para poder de alguna manera erradicar las distintas circunstancias que se dieron en aquel otro procedimiento, se están tomando medidas para que esta aplicación sea su uso mucho más seguro, y que solamente cuando se capture el original de la Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral es cuando se puede realmente recabar esta afiliación y teniendo otros candados de seguridad. _____

Esto es muy importante también resaltarlo, porque obviamente estamos aprendiendo de las experiencias anteriores en el uso de una aplicación que finalmente algunas personas quisieron hacer cosas indebidas utilizando credenciales de almacenes comerciales, utilizando licencias de conducir, utilizando formatos que simulaban la Credencial para Votar que ha expedido esta institución. _____

Obviamente estamos previendo todas estas circunstancias, ojalá que cuando ya se tenga la aplicación se puedan hacer las pruebas pertinentes para asegurarnos que efectivamente esa aplicación que se está desarrollando cuente con todos estos candados de seguridad. _____

Se va a tomar la fotografía viva, presencial de la persona que esté afiliándose para la creación de un Partido Político Nacional. _____

También se va a recabar la firma de la o el ciudadano y se va a enviar la información capturada. _____

En relación con este envío de la información, se está proponiendo que además del código que se les mande a las personas que están recabando estas afiliaciones, también se tenga un candado para poder verificar a quién pertenece ese código, a qué me estoy refiriendo; que si yo estoy recabando la afiliación, por ejemplo, de Adriana Favela, que es mi nombre, entonces cuando se mande esa información a la persona que la está recabando, tenga un número, un código, pero a su vez también tenga el nombre de la persona para saber que es la afiliación de esa persona y no de otra. _____

También se está previendo que cada una de las afiliaciones, “que se vayan obteniendo” se verifiquen obviamente para darla por buena, se verifique junto con el documento que forma parte de la afiliación, que sería que realmente se trata de la

Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y no algún otro documento, y eso también se está dejando claro en el anexo uno, en las correcciones y precisiones que la Consejera Electoral Claudia Zavala ha estado elaborando, y que precisamente dicen que durante el proceso de solicitud de registro y hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en el presente instructivo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la organización o Agrupación Política Nacional interesada envíen o entreguen, se considerarán preliminares, en tanto que estarán sujetas a la revisión correspondiente._____

Esto obviamente es muy importante también dejarlo claro para que no se cause confusión y se piense, por las agrupaciones u organizaciones interesadas en constituirse en Partido Político Nacional, que ya porque recabaron una solicitud de afiliación, ésta ya es válida por sí misma, sino que falta hacer todo el procedimiento de revisión._____

Y obviamente también en este Proyecto de Acuerdo se está previendo que en todo momento se garantice o se respete la garantía de audiencia de las organizaciones o agrupaciones interesadas en constituir un Partido Político a nivel Nacional, para que cuando haya algún tipo de inconsistencia inmediatamente se le notifique y estas personas interesadas puedan conocer de qué se trata la inconsistencia y alegar lo que a su derecho convenga._____

Me parece que este esfuerzo que se hace desde la institución es muy importante también para ir modernizando lo que en algún momento dado también van a formar parte de los padrones de los partidos políticos a nivel nacional, y obviamente esta aplicación también puede tener alguna otra utilidad y sería también, muy factible que se pudiera utilizar en algún momento para modernizar los padrones de los partidos políticos que ya tienen su registro, pero aquí lo resalto porque si empezamos bien desde un principio, entonces es más fácil que todos los datos en relación con los afiliados se tengan ya concentrados en un archivo electrónico, verificados por la institución y que sepamos que efectivamente las personas que están manifestando su afiliación para crear un nuevo Partido Político Nacional, realmente se trata de esas personas y no que haya una suplantación de la identidad._____

Entonces, también pediría, en serio, a las áreas involucradas que tomen en cuenta lo que se dice en este Proyecto de Acuerdo, que atiendan las inquietudes que hemos expresado en las distintas Comisiones, y que de verdad esa aplicación que se vaya a utilizar tenga todos estos candados de seguridad. _____

Entonces, propondría que estas anotaciones y observaciones que ha hecho la Consejera Electoral Claudia Zavala también se tomen como parte del anexo uno que es el instructivo, que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional. _____

Esto creo que sería muy útil para dejar claridad. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Permítanme intervenir. _____

El pluralismo político es la base de cualquier Sistema Democrático, vigoriza el debate público y contribuye a que la ciudadanía tenga mayores opciones entre las cuales ejercer sus derechos políticos tanto el derecho a militar, a participar a través de una organización, ejerciendo el derecho de asociación política, como a partir del ejercicio del voto. _____

De ahí que los partidos políticos sean al mismo tiempo una expresión del derecho de asociación de las y los ciudadanos, es decir, ver a los partidos políticos como los ha definido la modernidad, como los ha definido la democracia en la modernidad, es decir, como centros de agregación de consensos, como también, por otro lado, la principal herramienta para que las y los ciudadanos participen en la toma de las decisiones públicas. _____

Justo por ese doble carácter, que inherentemente detentan las organizaciones partidistas, es que en numerosas ocasiones en esta mesa, pero también antes, desde los espacios de la academia, he sostenido que una democracia siempre debe tener las puertas abiertas para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, las puertas del sistema de partidos en un Sistema Democrático plural, diverso como el mexicano, de entrada al Sistema de Partidos Políticos, me parece que deben estar abiertas, del

mismo modo que las puertas de salida cuando no existe el respaldo ciudadano, deben estar igualmente abiertas. _____

Eso me ha llevado, en su momento, a manifestar mi disenso respecto de la modificación que la Reforma 2007-2008 implicó al abrir la puerta a nuevas fuerzas políticas solamente cada seis años, pero en todo caso como autoridad electoral son las reglas que se han pactado por parte de los actores políticos, y son las reglas que estamos aplicando. _____

Más allá del evidente distanciamiento de muchos sectores de la población respecto de los asuntos públicos, lo cual representa, por cierto, un problema global de las democracias y de los bajos niveles de confianza que en la actualidad registran los partidos políticos, en el mundo y en México, aun hoy es imposible y en esto quiero ser enfático, es imposible imaginar una democracia sin partidos políticos. _____

Ahí en donde no hay partidos políticos como entidades aglutinadoras del consenso de las y los ciudadanos, simple y sencillamente no hay democracia. _____

Por ello es trascendente el instructivo que estamos analizando en este punto del orden del día, y que desde mi perspectiva, más que un conjunto de simples procedimientos administrativos, lo que se plantea aprobar es el mapa para que una organización de ciudadanos pueda competir en el futuro por los poderes públicos a través del Sistema de Partidos Políticos, obteniendo, por supuesto, un registro como tal. _____

Para clarificar esta hoja de ruta y que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a la competencia electoral como Partidos Políticos Nacionales es conveniente tener presente lo siguiente: _____

Primero, el plazo para notificar al Instituto Nacional Electoral el interés de conformar un partido político irá del 7 al 31 de enero del año 2019, la notificación deberá presentarse por escrito, incluyendo los detalles establecidos en el Proyecto de Acuerdo que estamos analizando. _____

Segundo, se deberán celebrar al menos 20 asambleas estatales, tal como lo dispone la Ley en las que se acredite la participación de 3 mil ciudadanos en cada una de ellas

o bien 200 asambleas distritales con la participación en cada una de al menos 300 personas con Credencial para Votar. _____

Es particularmente importante destacar que ya sea en la modalidad estatal o distrital en cada asamblea el Instituto Nacional Electoral debe certificar, si es el caso, que las personas asistieron libremente, que conocieron y aprobaron los documentos básicos del partido político en formación y que eligieron tanto a los Delegados, como a los suplentes que integrarán, que concurrirán a la Asamblea Nacional Constituyente al final del proceso. _____

Tercero, numéricamente conforme lo establece la Legislación se necesitará acreditar la manifestación individual de afiliación de al menos 233 mil 945 ciudadanas y ciudadanos, que representan el 0.26 por ciento del Padrón Electoral establecido en la Ley, con corte al 1 de julio de 2018. _____

Y además cada manifestación deberá contener la fecha en la que se expresa la voluntad de adherirse al partido político que se está formando. _____

Debo subrayar que las manifestaciones de afiliación desde 1996 deben ser individuales. _____

Cuarto, para aquellas afiliaciones que se realicen al margen de las asambleas se deberá utilizar la aplicación que ha señalado y explicitado la Consejera Electoral Margarita Favela en los términos establecidos en el presente Acuerdo. _____

Y quinto, el último requisito que quiero destacar, es que se incluya un régimen de excepción para el acopio de firmas, vía el aplicativo mencionado, en los 238 Municipios en los que se ha identificado problemas de conectividad y catalogados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como de alta marginación. _____

Para concluir permítanme subrayar dos aspectos. El primero, es que todas las organizaciones interesadas en conformar un Partido Político Nacional deberán transparentar sus gastos mensuales y que el Instituto Nacional Electoral fiscalizará dichos recursos. _____

El segundo, es que el incremento de partidos no supone un aumento del financiamiento público destinado por la Constitución Política a fortalecer el pluralismo, habrá una partida en el caso de que haya partidos políticos de nueva formación

específica; pero esto no supone la alternación de la fórmula sobre la cual se computa el financiamiento ordinario y de gastos de campaña, en su caso, para los partidos políticos. Lo digo de otra manera, más partidos no significa más dinero, sino más actores entre los cuales se distribuye el dinero determinado mediante la fórmula constitucional. _____

Ello debido a que la Reforma Electoral de 2007 estableció parámetros fijos para el cálculo de la bolsa de financiamiento público, lo que significa que el tamaño de dicha bolsa para los partidos políticos es el mismo para 8, para 10, para 9, para 12, para los que sean. _____

Estoy convencido de que los partidos políticos constituyen organizaciones que faciliten la articulación de consensos, como mencionaba, en las sociedades modernas que por definición son complejas, no hay ninguna sociedad moderna que sea uniforme, no hay ninguna sociedad moderna que sea sencilla, no hay ninguna sociedad moderna que no sea plural, por eso el sistema de partidos, el pluralismo partidista es inherente a toda forma de gobierno democrática. _____

Los partidos políticos son organizaciones que facilitan la expresión de dicha pluralidad política, que se confronten y participen en instancias de decisión pública ya sea como minorías o como mayorías; la ineludible dialéctica de la que depende y siempre ha dependido la democracia. _____

Una sociedad democrática debe tener múltiples formas para expresarse y de ofrecer opciones de participación política por una simple y sencilla razón: no hay sociedades únicas, hay sociedades monolíticas. _____

El reconocimiento a ese pluralismo ha sido la base sobre la que se construyó la democracia mexicana y sobre la que tenemos que seguir recreando. _____

Muchas gracias. _____

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, y después el Consejero Electoral Benito Nacif. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:
Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenas tardes a todos, Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos._____

El día de hoy se presenta el Proyecto de Acuerdo por el que este Consejo General expide el instructivo que deberán de observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional y así como con diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin._____

Esta representación manifiesta el total acuerdo con el presente Proyecto, y agradecemos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Consejera Electoral Adriana Favela la disposición de entablar un diálogo directo con los partidos políticos, y a la misma Dirección Ejecutiva con el Maestro Patricio Ballados y su equipo de trabajo._____

Mi intervención va a ser muy puntual, y ésta es derivada de las deliberaciones hacia el interior de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y en las que esta representación externó algunas sugerencias en la cuales se podría eficientar la detección de la doble afiliación tanto para partidos políticos como para la propia autoridad electoral, se quedó pendiente proponer una redacción que permita a todos los actores políticos ajustarse a las disposiciones legales._____

Me voy a referir específicamente a lo que establece el artículo 96, inciso b) del instructivo en discusión y que, resumiendo, establece sobre la doble afiliación a una organización y a un partido político._____

La propuesta del instructivo establece que si el partido político no da respuesta al requerimiento hecho por la autoridad o no presenta el original del formato de afiliación, la afiliación se contará como válida para la organización, y en este sentido y dado que en este supuesto se da por sentada la doble afiliación y que solamente contará para la organización, debe de manera rápida y expedita darse de baja del Padrón de Afiliados de manera automática, del partido político que cuenta con el registro anterior._____

En este sentido, se proporcionará una depuración automática a los partidos políticos, y al mismo tiempo la autoridad tendrá datos actualizados de las bases de datos de los

Partidos Políticos Nacionales y de los de nueva creación, para la conservación de registro de los partidos políticos. _____

En concreto, proponemos la siguiente redacción, estamos hablando, del artículo 96, el primer párrafo quedaría igual. _____

El inciso a), queda también igual. _____

Y en el inciso b), en la parte final agregaríamos el siguiente párrafo, textualmente dice, la propuesta es: "...el partido político deberá de dar de baja de la base de datos de su Padrón de Afiliados, las duplicidades y deberá de informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para mantener los padrones actualizados...". _____

Ésa es la redacción que proponemos, la hice llegar a la Presidencia y al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Maestro Patricio Ballados, se le hago llegar en este momento al Secretario del Consejo. _____

Con lo anterior, quiero señalar, se logra mantener un Padrón de Afiliados de los partidos políticos actualizado, por parte de los partidos políticos, pero también por parte de la autoridad administrativa electoral. _____

Está con negritas la propuesta de redacción. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Este instructivo dirigido a las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos, lo que busca es dar las reglas que tienen que seguir para cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Política y la Ley, para que haciendo ejercicio de los derechos de los ciudadanos, el Sistema de Partidos Políticos pueda enriquecerse con la incorporación de nuevas propuestas, nuevas plataformas, nuevas ofertas para la ciudadanía. _____

La Consejera Electoral Adriana Favela, el Consejero Presidente, han explicado con claridad el contenido de este importante documento, con el cual entramos a la fase para que quienes han estado esperando los últimos 6 años para constituir un partido

político, puedan iniciar el trabajo de convencimiento a la ciudadanía, con el objetivo de obtener las afiliaciones, celebrar las asambleas, ya sea distritales o estatales, con el propósito de acreditar los requisitos. _____

Quisiera en mi intervención referirme a un aspecto nada más, de este instructivo, que creo que es el aspecto novedoso porque, por primera vez, gracias a la experiencia, al trabajo de innovación tecnológica que se ha venido desarrollando en el Instituto Nacional Electoral, se pondrá a disposición de estas organizaciones, una vez que se registre, un Sistema de Tecnología de la Información para poder realizar la afiliación, de manera que se genere una Cédula Digital de afiliados, cada vez que se registra una afiliación, esencialmente podrán hacer las afiliaciones utilizando dispositivos móviles, es decir, teléfonos celulares de manera completamente libre, y además lo podrán hacer en las sedes de las Asambleas cuando las realicen, habrá 2 momentos de afiliación en las Asambleas y por otro lado en la modalidad que escojan, en puntos fijos, incluso, puede ser en la calle abordando directamente a la ciudadanía, pero utilizando un dispositivo móvil. _____

Este esquema de afiliación necesariamente requiere la presencia física del ciudadano, eso es muy importante aclararlo, porque la experiencia que tuvimos hace un año con las cédulas de apoyo ciudadano para el registro de candidatos independientes, había alguna confusión en la opinión pública respecto de si se podía hacer sin presencia física del ciudadano, en ese caso eran auxiliares, en este caso será personal de estas organizaciones y tiene que haber un contacto con el ciudadano que se está afiliando. _ La Cédula Digital incorporará esencialmente 4 archivos digitales, la fotografía o la imagen del anverso, otro del reverso de la Credencial para Votar, en este aspecto es igual a la captura de firmas de apoyo ciudadano, necesita forzosamente la firma del ciudadano que también se capturará por este aplicativo. _____

Y un elemento novedoso es que va ser un requisito que se tome la foto viva, como se describe en el texto, del ciudadano que está afiliándose a una organización que busca constituirse como partido político. _____

Este elemento es muy importante que ahora se convierte en obligatorio, porque la captura de este dato biométrico permitirá que el Sistema de Verificación Automatizada

del Biométrico con el biométrico de respaldo con el que cuenta el Registro Federal de Electores garantice que efectivamente el ciudadano que se está afiliando en ese momento lo está haciendo con la identidad que registró ante el Instituto Nacional Electoral al momento de obtener su Credencial para Votar y que efectivamente cada Cédula viene acompañada de un ciudadano real que existe y que está registrado ante el Instituto Nacional Electoral. _____

Hay nuevos elementos que son resultado del aprendizaje que tuvimos el año pasado y de las observaciones que hizo la Sala Superior en diferentes sentencias relacionadas con el registro de candidatos independientes el año pasado. _____

Dos aspectos que creo que es importante resaltar, uno es que estas cédulas son rastreables, tiene la propiedad de la trazabilidad que generará certeza de que la Cédula que se capturó es una Cédula con la cual se podrá después hacer la revisión en caso de que lo soliciten las organizaciones, porque tendrá características que le den un sello a cada uno de los archivos que se incorporan a la Cédula. _____

Un segundo aspecto es que la verificación se hará mediante un esquema probado, automatizado que no estará sujeto a interpretación por parte del personal del Instituto Nacional Electoral, sino esencialmente es la misma tecnología que se utiliza para la verificación automatizada de huellas dactilares, solo que en esta ocasión el biométrico que se estará utilizando será la imagen del rostro de los ciudadanos y se comparará con el biométrico que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral en el Registro Federal de Electores. _____

De esta manera se brinda certeza, seguridad jurídica, y se prepara el Instituto Nacional Electoral para garantizar algo que la Sala Superior ha insistido atinadamente, que es garantizar el derecho de audiencia de las organizaciones cuando quieran conocer y despejar cualquier duda, este Sistema permitirá hacerlo con contundencia. _____

Consejero Presidente, muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Solo para enfatizar algunos de los puntos que ya de alguna manera se han tocado en las intervenciones previas pero que me parecen importantes en este caso._____

En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que formula el Partido del Trabajo para que en el Lineamiento 96, en el inciso b) se haga el agregado en los términos que leyó._____

Evidentemente, con los procedimientos que hemos seguido para poder dar de baja a las personas que son afiliadas indebidamente a los partidos políticos, me parece un mecanismo preventivo adecuado para el propio partido político, por tal motivo, me parece que es una adición pertinente en términos de la propuesta que formuló el Partido del Trabajo, insisto, como una adición al artículo 96, inciso b) de los Lineamientos cuya redacción se le ha entregado aquí a la Secretaría del Consejo General._____

Esa primera parte la acompaño._____

Luego, creo que es importante que se tome en consideración que la Legislación establece con toda claridad que el Padrón que se tiene que utilizar para la constitución de los nuevos partidos políticos es el que fue utilizado en la Jornada Electoral, en este caso, del 2018, la del 1 de julio, y esa fue una cifra de 89 millones 338 mil 701 personas, por lo tanto, el universo de personas afiliadas en global para que los partidos políticos pudieran constituirse tiene que ser con 233 mil 945 al menos, es decir, el 0.26 del Padrón Electoral en estos términos establecidos por la Legislación._____

Ahora, hay un detalle que me parece de fundamental importancia enfatizar: nosotros estamos teniendo especial cuidado en regular el tema de la realización de las Asambleas, hay todo un procedimiento que indica con claridad, lleva de la mano a las organizaciones que quieren constituir a los nuevos partidos políticos para que establezcan la comunicación pertinente con las instancias del Instituto Nacional Electoral para que se organice quién es el Vocal que va a hacer la certificación respectiva y cuál va a ser el procedimiento específico que se va a seguir en cada una

de estas Asambleas, más allá de si las organizaciones que se quieren constituir, quieren utilizar Asambleas Estatales o las Asambleas Distritales, 20 como mencionó el Consejero Presidente en las estatales, 200 al menos en lo que se refiere a las distritales. Hasta ahí sin problema. _____

Pero, hay un pequeño detalle que vale la pena recuperar de la experiencia previa. Hace algunos años, cuando algunas organizaciones quisieron constituirse como partidos políticos, y me refiero concretamente a una cuya denominación era “Rumbo a la Democracia”, esta institución le negó el registro por afiliación corporativa. _____

Este es un punto de fundamental importancia, los Lineamientos están regulando expresamente la prohibición a la afiliación corporativa, en los términos establecidos por la propia Constitución Política. _____

En ese caso, esa organización presentó documentación que indicaba con claridad que había una afiliación de gente que formaba parte de algunos sindicatos, cuyos dirigentes estaban también pretendiendo ser los dirigentes del nuevo partido político, y al hacerse el análisis integral de esta situación se negó el registro y ese tema fue convalidado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____

Así que, sí quiero hacer énfasis en el punto de la negación a la afiliación corporativa. _ El otro punto tiene que ver con los quóruns de las Asambleas, que pareciera un tema de forma, pero que al final de cuentas es el tema de fondo, porque si las personas que son invitadas para estar presentes en el desahogo de las Asambleas, terminan por ingresar al recinto donde se va a llevar a cabo la Asamblea, pero luego se salen, y antes de que empiece la Asamblea no se tiene el quórum correspondiente, es un hecho que esas Asambleas no van a tener ningún efecto legal concreto. _____

Y también ese mismo ejemplo, en ese proceso de constitución de partidos políticos en el 2008, revisamos cómo la Unión Nacional Sinarquista también tuvo problemas con las Asambleas Estatales, concretamente la que se celebró en San Luis Potosí y la que tuvo verificativo en Coahuila, ¿por qué? Porque ingresaban, el Notario Público iba registrando los nombres de las personas con sus credenciales de elector y todo esto, pero salían por una puerta distinta. _____

Así que, cuando se instaló formalmente la Asamblea, no había el quórum legal correspondiente y quedó plenamente asentado en las actas que en ese caso levantó el Vocal Secretario de la Junta Local de Coahuila concretamente, en donde en un recinto había doble puerta y entonces no se tenía el quórum al momento del desahogo de la Asamblea. _____

Sí habían entrado los 3 mil, pero al instalarse formalmente la Asamblea, ya no estaban esos 3 mil y, en consecuencias, las Asambleas no contaron para la Constitución Política de ese partido político y no logró la constitución por ese hecho. __
Y un tema que me parece también de fundamental importancia, que en esta ocasión lo aclaran con mucha pertinencia los Lineamientos, es el tema relativo a qué ocurre cuando una persona decide acudir a una Asamblea a manifestar su intención de apoyo a una organización que quiere constituirse como partido político, y luego acude en un segundo momento, en un momento posterior a otra Asamblea de una organización distinta. _____

Aquí los Lineamientos están diciendo claramente y es la parte del artículo 95 de los Lineamientos, está diciendo con toda claridad que se va a descontar a esa persona no solamente de la membresía total para apuntar el punto 26, sino también de los quórums de las Asambleas correspondientes. _____

Esta parte es de fundamental importancia, creo que lo deben tener perfectamente en cuenta las organizaciones que quieran constituirse como partidos políticos. _____

Reitero el caso, que es una de las modificaciones centrales respecto de los Lineamientos anteriores, si una persona va a una Asamblea de una organización que está queriendo conseguir la realización de las Asambleas que ha decidido, estatales o distritales. Y luego esa persona va a una segunda Asamblea de una organización distinta; cuando desahoguemos el proceso de verificación para ver con quién se queda, y si finalmente no se contesta o decide que va con la segunda, entonces del quórum de la primera Asamblea esa persona será retirada y evidentemente la parte que expresó con mucha pertinencia la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _
Cuando nosotros hagamos la revisión total de estos supuestos, entonces habremos descontado a estas personas asistentes a la primera Asamblea de los quórum

correspondientes y, por tanto, algunas organizaciones podrían perder los quórum de estas Asambleas y, por consecuencia, no lograr el propósito. _____

Quiero ser enfático en esa parte, está claramente redactado en el Lineamiento, creo que es mejor que lo pongamos de esta manera en los propios Lineamientos. _____

Finalmente quiero agradecerle a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, particularmente a la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, la coordinación de este documento, porque es una Comisión que en el cierre de año le ha tocado un trabajo verdaderamente exhaustivo. _____

Enhorabuena también por los Lineamientos, yo los aprobaré, incluida, insisto, la propuesta del Partido del Trabajo. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante del Partido Acción Nacional. _____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para una intervención breve, en primer lugar, un agradecimiento a la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que aceptó la propuesta del Partido Acción Nacional para que la App pudiera incorporar los horarios que habíamos propuesto. _____

Y en segundo lugar, reflexionar acerca de que la aceptación de los nuevos partidos políticos contribuye a que el Sistema de Partidos Políticos no muera de inanición. _____

Sin embargo, la aceptación indiscriminada también puede contribuir a erosionar el prestigio público del mismo. _____

Por eso este instructivo constituye el procedimiento que regula una aspiración y garantiza que el pluralismo democrático sea legal y legítimo y no artificioso o voluntarista. _____

Por esa razón esta representación avala la propuesta del instructivo que el día de hoy se presente ante el Pleno del Consejo General. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Con relación a este tema que estamos tratando ya lo ha comentado la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Quisiera proponer algunas modificaciones, no hablar de asociación, creo que cuando fuimos a la Comisión me expresé mal y se tomó en otro sentido, pero ya tenemos la aplicación de las modificaciones respectivas que propondría para que sean impactas en el propio Acuerdo. _____

Y en este punto sí quisiera solicitar nada más que se verificaran bien las fechas que estamos poniendo para la mesa del control, porque me surgieron algunas dudas que hemos estado ahora comentando también en coordinación con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que ha estado haciendo la revisión, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y la propia área, para entregarle al Secretario del Consejo, al titular de la Dirección las propias propuestas que propiamente serían de forma para que pudieran ser impactadas. _____

Hay un tema específico nada más, que está un tanto relacionado también con el artículo 96, en el cual nos hacemos cargo de estas afiliaciones que pueden ser dobles, cuando una persona, una ciudadana o un ciudadano están afiliados a un partido político, pero deciden dar su afiliación a una organización. En particular el tema, que es el último párrafo del artículo 96, en el que nosotros señalamos que las y los afiliados a las organizaciones, aquí es lo importante, que obtengan su registro como Partido Político Nacional, y que se hubiesen encontrado duplicados en los Partidos Políticos Nacionales o Locales con registro vigente, deben ser dados de baja por la Dirección de los padrones respectivos. _____

El tema es aquí si es necesario que la organización obtenga su registro. _____

En la Comisión discutimos, y fue parte del diálogo que entablamos con los partidos políticos, el que bastaba que la persona quisiera afiliarse a otra organización para que dejara su afiliación previa a un partido político. _____

Aquí sugeriría que elimináramos la parte, es que obtenga su registro como partido político, que lo dejáramos abierto siempre cuando esté en otra organización, pero que sí le hagamos del conocimiento, le notifiquemos al partido político esta situación, que será dada de baja, porque en principio ellos son los que dan de baja de sus afiliados a las personas, y después lo hacen del conocimiento a la Dirección Ejecutiva para que a su vez procedamos nosotros como Instituto a darlo de baja de los padrones. _____

De ahí en fuera, todas las demás observaciones y también en el Punto de Acuerdo presentaría el párrafo que leyó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela para que quede bien claro cuál va a ser el funcionamiento de esta revisión que se va a hacer y en qué momento se va a hacer. Propondría algunas adiciones también al Punto de Acuerdo, que también han sido ya revisadas por parte del Área Técnica y no contrasta en nada en la propuesta que se nos está formulando, simplemente es como una forma de precisar algunas cuestiones que se tienen en el Punto de Acuerdo y que dan claridad a cómo vamos a operar con este Sistema. _____

Por supuesto, reconozco el trabajo que se ha hecho a partir de la experiencia que tuvimos con la aplicación en el caso de los independientes, hemos tratado de atender todos aquellos espacios de mejora que se abrieron, pero también de dejar claro frente a las situaciones de hecho inaceptables que sucedieron en el momento de la recabación en candidaturas independientes, hemos tratado de enfrentar aquí. _____

Una de las propuestas es precisamente que el Sistema de seguridad sea verificado por un Notario Público previamente para que el acuse de recibo que se les va a dar a las organizaciones o a los auxiliares que están recabando las afiliaciones, evidentemente quede constatado que ese acuse, si hubiera alguna modificación al archivo electrónico, necesariamente se va a tener que reflejar y si hubiera alguna modificación, para que pueda tener efectos legales ese propio acuse de recibo. _____

Sería cuanto Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. _____

Quiero hacer una intervención, subrayando la importancia del Proyecto de Acuerdo, más allá del procedimiento que seguiremos, y tiene que ver con el hecho de que estamos abriendo la puerta, porque así lo mandata la Constitución Política y las leyes, a la creación de nuevos partidos políticos, impulsados, formados por ciudadanos que no se reconocen en los partidos políticos existentes, y que esta posibilidad de asociarse para participar en política, para ocupar cargos de representación y de gobierno, corresponde con un principio de la vida democrática que señala que a diferencia de lo que ocurre en sistemas autoritarios, las minorías tienen derecho a existir, a organizarse y, eventualmente, a volverse mayorías. _____

El 9 de julio del año 2014, 3 meses después de la creación del Instituto Nacional Electoral, en esta misma mesa aprobamos el registro de 3 partidos políticos nuevos, uno de esos partidos compitió, no solo refrendó su registro en 2015, sino que hoy ocupa la Presidencia de la República, es decir, fue el diseño constitucional vigente el que permitió que una fuerza política, que ni siquiera tenía registro, llegara por méritos propios a la arena electoral institucional, y después se hiciera, gracias al respaldo popular, del Gobierno de la República. Eso solo puede ocurrir en un marco democrático que ya existía antes del 1 de julio de este año. _____

Y lo que estamos diciendo es que ese marco democrático va a seguir vigente, y que vamos a permitir que los ciudadanos se apropien de sus derechos y los ejerzan, por supuesto, con toda imparcialidad desde el Instituto Nacional Electoral. _____

El Instituto Nacional Electoral, ni alimenta la creación de nuevos partidos políticos, ni la frena, es decir, quienes lleguen será por méritos propios y por cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma. _____

A lo largo de las 2 últimas décadas, que creo yo es cuando México puede reclamar que tiene un Sistema Plural de Partidos, una democracia, han nacido 13 Partidos

Políticos Nacionales y 11 han desaparecido porque no han contado con el respaldo de la ciudadanía en las urnas. _____

Solo hay 2 partidos políticos que han ido a las urnas por primera vez en el siglo XXI, que perduran, que son Movimiento Ciudadano, que originalmente fue Convergencia por la Democracia, y MORENA. _____

En 1999 Democracia Social, el Partido de Centro Democrático, la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia nacieron. Tres años después México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana. En 2005 nació el Partido Socialdemócrata y Nueva Alianza. En 2014, ya lo recordaba, 3, MORENA, el Partido Humanista y Encuentro Social. Y de todos estos que he enunciado solo 2 se han mantenido, que haya una puerta giratoria de entrada y salida es una condición para que el Sistema de Partidos Políticos no se vuelva un club cerrado, sino un Sistema que exprese las voluntades de los ciudadanos. _____

Creo que, el conjunto de avances que se presentan en el Proyecto de Resolución a nuestra consideración, tiene 2 propósitos. Uno, facilitar a los ciudadanos que se organizan para participar en política. _____

El registro de sus militantes de los ciudadanos que quieren ser parte de las nuevas fuerzas políticas. _____

Y por otro lado incrementar la certeza, incluso, dar seguridad a los ciudadanos de que sus nombres no estarán siendo utilizados de manera arbitraria y abusiva, es decir, que verifiquemos que cada uno de los nombres que se presenten de los militantes corresponda a gente que de manera libre y voluntaria, obviamente, quiso formar parte de los partidos políticos y que no se trató de una operación de conseguir nombres para vaciarlos en un listado que se presenta a la autoridad. _____

Hemos visto que estas prácticas indeseables no fueron aisladas en el Proceso Electoral que concluyó. _____

Hemos dicho que así como no se puede defraudar la voluntad popular depositada en las urnas, tampoco se puede usar el nombre de los ciudadanos para simular respaldo político, ya sea para obtener una candidatura independiente o para formar un partido político. _____

Entonces el Proyecto de Acuerdo que tenemos a nuestra consideración, enriquecido con las sugerencias de los propios partidos políticos, incrementa la seguridad y nos va a permitir tener mayor certeza acerca de la autenticidad de qué tan genuinos son los apoyos de los partidos políticos. _____

Creo que, aunque se trata de un acto, que ojalá no fuera cada 6 años, porque, en efecto, se limita un derecho fundamental, en buena hora que se puede abrir el Sistema de Partidos Políticos y dependerá no de esta autoridad el que llegue 1, 2, 3 o eventualmente ninguno, dependerá del apoyo genuino, auténtico que logren reunir estas organizaciones. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Primero quiero comenzar agradeciendo la apertura de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, desde luego, comenzando por su Presidenta, la Doctora Adriana Favela, por la buena recepción que tuvieron a las observaciones que mandé. _____

Y también, desde luego, al Secretario Técnico de la Comisión, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, le mandé una serie de observaciones desde el sábado, las ha ido impactando, todavía el día de ayer algunas adicionales también las ha estado trabajando, me ha explicado un par de observaciones, por qué a lo mejor no sería pertinente que se incorporaran, estoy de acuerdo con la explicación, en su mayoría encuentro todo incorporado y agradezco mucho esa deferencia. _____

Hay una cuestión que me acabo de percatar en la madrugada cuando estaba revisando una de las últimas versiones de este instructivo en la que no había reparado, me parece que hemos sido muy cuidadosos con el tema de la protección de los datos personales, no obstante, en el artículo 99 se menciona: "...los registros serán revisados a través de la visualización en el Sistema de Cómputo respectivo de la información remitida por la organización, en dicho Sistema se mostrará el nombre

de la persona asociada y la causa por la cual no ha sido contabilizada, conforme a lo establecido en el presente instructivo._____

Cada registro será revisado en presencia de los representantes o personas designadas por la organización, quienes con la finalidad de manifestar lo que a su derecho convenga, podrán tomar imágenes de las pantallas que se revisen, debiendo proteger los datos personales en ellas contenidos._____

Asimismo, se dejará constancia en el Acta que al efecto se emita sobre los registros cuyas imágenes fueron obtenidas por la organización, mismas que solo podrán ser utilizadas por la misma para formular aclaraciones a esta autoridad, tendentes a acreditar la validez de la afiliación respectiva...”._____

En ese sentido, me parece que tenemos nosotros que prever la destrucción de los datos con los que se queden estas organizaciones políticas, sobre todo, si no logran concretar su registro como partido político._____

Existe una disposición expresa de la Ley de Protección de Datos Personales, que señala que esto es una cosa que nosotros tenemos que cuidar para efectos de la protección de los datos; el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales dice que: “...el responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente Ley._____

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para la realización de una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales...”._____

Entonces, la sugerencia en este caso específico sería que pusiéramos un artículo transitorio en donde se instruyera a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales para que prevean un procedimiento para la destrucción de estas imágenes con los datos que se van a quedar estas organizaciones. _____

Es un dato sensible el que van a conservar, porque es el nombre del ciudadano o la ciudadana asociada con cierta inclinación política, porque pensaban formar parte de un partido político. _____

Entonces sí es algo que tenemos nosotros que resguardar. _____

Sugeriría que pusiéramos como plazo para la destrucción de estos datos personales los 3 meses siguientes a que hayan quedado firmes los acuerdos o resoluciones mediante los cuales las Agrupaciones Políticas Nacionales, perdón, mientras de los cuales se haya determinado la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de las agrupaciones como nuevos partidos políticos. _____

Entonces, creo que con esto podría quedar cubierta esta circunstancia para que tengamos ya cerrado todo el círculo de la protección de datos personales, que es algo que hemos cuidado mucho en este instructivo. _____

Ahora, por lo que hace a la propuesta del artículo 96 del instructivo, me parece que este artículo en sus términos está correcto, establece un procedimiento que nosotros no podemos obviar, para hacer la desafiliación de personas que están en un partido político, incluso nosotros mismos no podríamos hacer esa desafiliación, sino que la tiene que hacer el propio partido político y también tiene que pasar por una verificación para saber qué ocurrió primero, la afiliación al Partido Político Nacional o el apoyo que se manifestó a la agrupación en el partido político en sí, por decirlo de alguna forma. _____

Entonces, estoy de acuerdo con el artículo 96 en los términos en que está plasmado en el instructivo, sin embargo, no conozco la redacción que propone el representante del Partido del Trabajo, entonces, me gustaría poderla revisar también para decir con mayor certeza si efectivamente no podría acompañar esa propuesta. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente en funciones. _____

Antes que nada, señalo un par de cosas. _____

La primera, voy a acompañar en lo general el Proyecto de Acuerdo y el instructivo que se pone a nuestra consideración. _____

Y en segundo lugar, reconocer y agradecer el trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la apertura que existió tanto de la Consejera Electoral Adriana Favela, como de la Consejera Electoral Claudia Zavala, para ir buscando qué ajustes eran necesarios para darle la mejor consistencia al Proyecto que el día de hoy se trae a nuestra consideración. _____

Sí me parece que es una cuestión relevante garantizar, en plenitud, los derechos de las y los ciudadanos a poder afiliarse a un partido político, afiliarse para crear un nuevo partido político, y así poder participar en la vida pública por vías diversas a aquellas con las que hoy contamos. _____

En este sentido, creo que el Proyecto sí abreva de muchas de las experiencias que tenemos y nos permitirá atender y garantizar con certeza la conformación de nuevos partidos políticos, si esa es la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos, al menos 0.26 por ciento de la Lista Nominal. _____

Ahora, sí me quisiera referir a 3 cuestiones específicas. _____

La primera tiene que ver con el planteamiento que no sé si entendí bien de la Consejera Electoral Dania Ravel y tiene que ver con el planteamiento de la Consejera Electoral Claudia Zavala. Me parece que el numeral 96, en su último párrafo, sí se tiene que ajustar. _____

Coincido con el planteamiento de la Consejera Electoral Claudia Zavala, porque el último párrafo del artículo 96 del instructivo es incongruente con los párrafos anteriores, porque entre los párrafos anteriores se señala cuándo una afiliación a un partido político queda como del partido político, cuándo una afiliación de la organización queda de la organización, dependiendo del momento, de la forma de captarla, de cuál es la más reciente, etcétera. _____

Pero, al final se dice que solamente se van a bajar del padrón de partidos, si el partido político en formación obtiene su registro. Eso está equivocado, se bajan por el hecho de que el ciudadano se está afiliando a un partido político en formación. _____

En el momento que manifiesta su voluntad a pertenecer a lo que será el partido político “b”, ya está tomando la decisión de no pertenecer al partido político “a”, porque si no estaríamos con la incongruencia de que un militante sigue manteniendo los derechos inherentes a la militancia en un partido político vigente, pues en la expectativa a ver si se crea el otro, si no se crea el segundo sigo manteniendo mis derechos, si sí se crea el segundo sí brinco. _____

Esto es contrario a la lógica misma de la afiliación individual que está prevista tanto en la Constitución, como en la Ley. _____

Por lo que creo que sí se tiene que ajustar y solo en relación a la propuesta que hizo la Consejera Electoral Claudia Zavala, me parece que hay un punto que tendría que quedar claro, porque ahora volviendo a leer creo que hay un punto que tiene que quedar claro. Se decía las y los afiliados a organizaciones que hubiesen encontrado duplicados con los partidos políticos con registro vigente serán dados de baja, el detalle es en los términos de los incisos anteriores, es decir, cuando lo que prevalece es la afiliación a la organización. _____

Solo para dejarlo muy claro y muy expreso, pero sí dejando clara esa regla, incluso, es la regla que estaba vigente, me parece con buenas razones, desde el instructivo que dio lugar a los 3 partidos políticos que se crearon en el 2014. _____

Por lo que me parece que este último párrafo, sí se tendría que ajustar. _____

Hay una cuestión de mera forma que comentaba con la Consejera Electoral Adriana Favela, pediría que se pudiera incorporar, es en el numeral 31, insisto, es una cuestión de forma que habla de cuando el ciudadano se afilia sin contar con la Credencial para Votar, tiene el formato que da el Registro, dice que se tiene que identificar con otra identificación oficial. De acuerdo, nada más que pone una lista cerrada de identificaciones, me parece que en lugar de decir “entre las que están éstas”, decir “entre otras”: _____

Dejar muy claro, si presente otra oficial no hay ningún problema, esto lo comentaba con la Consejera Electoral Adriana Favela, precisamente para no limitarnos de una forma injustificada. _____

Por último hay un punto en el que yo aquí pediría una votación diferenciada, porque en este punto no puedo coincidir con la mayoría de los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, soy partidaria a la postura que manifestó el Consejero Electoral Benito Nacif, me refiero específicamente a lo que es el numeral 64 del instructivo que tiene que ver con los horarios en los que se pueden afiliarse las ciudadanas y los ciudadanos, se establece que solamente se podrán obtener registros válidos de las 6:00 horas a las 22:00 horas. Yo eso no lo puedo acompañar. _____

Las limitaciones a un derecho fundamental tienen que estar previstas en Ley, y esto es una limitación a un derecho fundamental, no es que a las 23:00 horas no puedo ejercer mi derecho de afiliación o a las 24:00 horas no puede ejercer mi derecho de afiliación. _____

Entiendo el problema y entiendo la preocupación que está detrás de esta regla, y tiene que ver con la experiencia que vivimos con las candidaturas independientes en el Proceso Electoral pasado, donde tuvimos una circunstancia atípica que no derivaba de una afiliación a las 24:00 horas, sino que de pronto se tuvieron afiliaciones masivas a las 03:00 de la mañana y desde un mismo domicilio. Esa sistematicidad, por supuesto, que preocupa, es una sistematicidad que se pudo frenar al advertir la sistematicidad y revisar con mayor cuidado los registros que se recibieron en ese momento. _____

Pero, no por el hecho de que haya habido una conducta indebida, que haya empleado un horario específico se elimina el poder afiliarse en horarios distintos, esto porque también es absolutamente válido que alguien se afilie a las 10:00 o 11:00 de la noche, y de una forma absolutamente genuina, si alguna persona que está en una organización que quiere conformar un partido político nuevo acude a una cena, está con un comensal a un lado, están platicando y lo termina convenciendo de afiliarse a su partido político, y ya son las 11:00 de la noche qué le va a decir: “ah, te pido que te

afilies, pero por favor mañana búscame a las 6:00 de la mañana porque no puedes ejercer tu derecho en este momento”._____

Por Dios, sí pensaría que se puede afiliar a las 11:00 de la noche le puede tomar los datos y lo puede cargar en su aplicación, porque ésa sería la consecuencia de esta limitación. Insisto, me parece que nuestra revisión tiene que ser escrupulosa cuando advertimos sistematicidades, porque no solamente es a las 4:00 de la mañana, si había lugares donde estaban recabando de pronto fotocopias, una tras otra, tras otra, miles de fotocopias en un mismo lugar a las 3:00 de la mañana, si quitamos las 3:00 de la mañana lo van a hacer a las 3:00 de la tarde._____

O sea, el problema no es un problema de horario, es un problema de prácticas y esas prácticas donde se vuelven sospechosas, es, insisto, cuando son sistemáticas, pero me parece que esa sospecha ante una práctica sistemática no puede limitar como tal un derecho como es el derecho de afiliación que no solamente está previsto constitucionalmente, sino también convencionalmente, y es una obligación del Estado Mexicano. Y creo que hacer una limitación de esta naturaleza sí sería una medida opuesta al principio de progresividad al que estamos obligados como autoridad._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional._____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente._____

Sí, sobre ese mismo tema, este asunto de gran relevancia, el Proyecto de Acuerdo para expedición de instructivo para construir nuevos partidos políticos, me permito manifestar lo siguiente:_____

Estuvimos muy presentes en la Convocatoria de la Presidenta Adriana Favela en la Comisión respectiva, y constatamos, bueno, primero el cuerpo de todo este pre Dictamen, la constitución de nuevos partidos nacionales en los artículos 9 y 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan, no solo ciudadanos pueden asociarse para construir un partido político. _____

Segundo, porque en el caso de las organizaciones gremiales que no puede formar partidos políticos, también estamos muy de acuerdo, primero. _____

También que las organizaciones políticas que pretenden constituirse como partidos políticos deberán notificar por escrito su propósito entre el 7 y el 31 de enero de 2019, por supuesto que sí. Deberán de tener al menos 233 mil 945 ciudadanos afiliados. _____

El Instituto Nacional Electoral en su caso implementará el uso de una aplicación móvil para recabar todos los apoyos, y la App tomará una fotografía viva del reverso de la Credencial de Elector, así como los partidos políticos tenemos el compromiso de facilitar también la voluntad de pertenecer o no a un partido político por parte de los ciudadanos. _____

En cuanto a la captura de la Credencial que debe de ser legible, estamos también de acuerdo con que contenga la fotografía, clave de elector, la firma, el reconocimiento óptico, el código de identificación de credencial, el código de respuesta rápida y también el código de barras. _____

De febrero de 2019 a enero del 2020 las organizaciones deberán de recabar a sus afiliados. _____

Nosotros apoyamos la misiva de Acción Nacional en el caso de que solo se podrán recabar registros de los datos de las personas que desean pertenecer a la organización de las 6:00 a las 22:00 horas. _____

Sin embargo, por lo vertido por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, creo muy pertinente que como se trata de un derecho, sí se debe de tomar en consideración la postura de la propia Consejera Electoral. _____

También se puede dar el supuesto de una doble afiliación entre las organizaciones y los partidos políticos. Nosotros secundamos en sus términos la adición que propone el Partido del Trabajo en su artículo 96, sección B, para este asunto. _____

Y en cuanto a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que dará vista a los partidos políticos para presentar manifestación original al ciudadano, también estamos muy de acuerdo. _____

En otro punto, cuando el partido político presente Cédula de Afiliación más antigua a la asamblea de la organización, se le dará la afiliación a dicha organización y se le quita al partido político. Estamos de acuerdo porque finalmente lo que cuenta, ese fue un tema a discusión en la propia Comisión, que esto facilita la voluntad, digo, que los partidos políticos debemos de facilitar la voluntad explícita de los ciudadanos de pertenecer a tal o cual partido político, es un derecho, ya se ha dicho y lo constatamos. _____

Y finalmente, la constitución de un nuevo partido político deberá ser aprobada el 1 de julio del 2020, por todo lo anterior vertido, acompañamos el Proyecto con la adición del Partido del Trabajo y tomando en cuenta los preceptos que acaba de vertir la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señora representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante suplente del Partido Acción Nacional. _____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Sí, la propuesta que realizó el Partido Acción Nacional se hace basado en la preocupación que existe, producto de experiencias anteriores, de la afiliación corporativa, del hecho de la práctica que se da no diría cotidianamente, pero se da con recurrencia, de utilizar horarios en los cuales aparecen un número considerable de afiliados que evidentemente no está respondiendo a ninguna lógica sana para la constitución de los partidos políticos. _____

Decía la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que hay una limitación de los derechos, yo haría un símil con la afiliación a los partidos políticos; la afiliación a

los partidos políticos tiene un horario, no puede uno manifestar el interés de ingresar a cualquier Instituto partidista y hacerlo fuera de ciertos horarios de atención, o de ciertos canales electrónicos, algunas afiliaciones en línea que se han señalado. _____
En mi criterio no creo que se violente, al contrario, se le da certeza al procedimiento de afiliación, a estos nacientes institutos partidistas. Por eso la propuesta de Acción Nacional. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Obdulio Ávila. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Comparto el punto de vista que expresó la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, lo manifesté así en la Comisión. _____

Entiendo la preocupación detrás de poner esta regulación respecto a que las cédulas de afiliación que se hagan entre 11:00 de la noche y 6:00 de la mañana, se declararán improcedentes automáticamente. _____

Efectivamente, como lo dijo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, estamos aquí ante el derecho a afiliarse a un partido político, el derecho de asociación, y un derecho político fundamental que, si lo restringes, y ésta es una restricción, tiene que ser a partir de una finalidad constitucionalmente válida, tiene que ser además una medida efectiva y tiene que ser además una medida proporcional. ____

No me queda claro que esta restricción se ajuste a este test de constitucionalidad, creo que generaría además problemas operativos al momento de ponerlo en práctica, porque automáticamente una afiliación que se recibió a las 23:01 horas se tendría que declarar improcedente; quizás en una asamblea se tardaron un poco más de lo esperado realizar las afiliaciones, estaríamos dando de baja voluntades que de otra manera están plenamente confirmadas de afiliación, integración a un partido político en formación. _____

Creo que, hay otras medidas que se pueden tomar en la revisión de las afiliaciones si encontramos sistematicidad y pruebas, indicios de filiación corporativa o de alguna otra posible irregularidad en el proceso de afiliación, que se pueden tomar a partir del dato de la hora. _____

Ahora el dato de la hora que tenemos con certeza es el de la hora en el cual se suben los archivos, la hora a la que se captura la Cédula de Afiliación va a depender si tiene ese dispositivo prendido o apagado en su celular o en su tableta quien está realizando la afiliación. _____

No es algo que podamos tener la certeza de que efectivamente se hizo, la certeza que tenemos es en el momento en que los archivos suben y se descargan en el Sistema que tiene el Instituto Nacional Electoral, no a la hora en el cual se capturó. ____

Creo que, es una regla que generaría complicaciones, creo que la forma correcta de atenderlo es buscando algunas prácticas sistemáticas donde se pueda incurrir en irregularidades en el proceso de afiliación, pero eso tendrá que hacerlo la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con la ayuda del Registro Federal de Electores, a partir de eso hacer una propuesta a este Consejo General respecto a esos casos. _____

Creo que, invalidar automáticamente porque la afiliación se hizo después de las 11 de la noche, me parecería un poco excesivo, Consejero Presidente. _____

Es cuanto, gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Únicamente para hacer 2 acotaciones. Me decía el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos que podíamos agregar la propuesta del término que tienen las organizaciones que no obtienen su registro como partido político para destruir los datos personales con los que se queden cuando capturen imágenes de 3 meses, que

lo podríamos incluir en el artículo 118 del instructivo en donde nosotros ya estamos previendo un plazo para destrucción de la información que nosotros conservamos, entonces eso ya queda, digamos, consistente en la lectura del propio instructivo._____
Con relación al artículo 96, ya me hizo favor el Secretario Ejecutivo de pasarme la propuesta de redacción del representante del Partido del Trabajo y me parece que es adecuada, entonces también la acompañaré._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario del Consejo, hay una moción de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Perdón, tengo algunas observaciones de forma que no cambian el sentido del Proyecto._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela._____

Y dado que está esta moción, y antes de proceder a la votación, simple y sencillamente lo omití por tiempo en mi primera intervención, solo quiero agradecer el trabajo que se ha desarrollado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y por la Presidenta de la misma, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, y con el reconocimiento que otros colegas le han hecho._____

Secretario del Consejo, por favor continúe con la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente._____

Como les mencionaba, en los elementos que se pusieron sobre la discusión en la mesa, tomé nota de las siguientes que podrían ir en la votación en lo general; uno por

lo que hace a la propuesta que hizo el representante del Partido del Trabajo para incorporar un párrafo adicional al artículo 96 en los términos que él lo señaló._____

Después, las propuestas de correcciones de forma que hicieron tanto la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala como la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela._____

La incorporación al artículo 118, a propuesta de la Consejera Dania Ravel, que es el tiempo para destrucción de los documentos que hayan quedado ya firmes en ese periodo._____

Y, además, la corrección de forma al numeral 31 que hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Y no sé si la última propuesta que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por lo que hace a los horarios eso iría en una votación en lo particular, por lo que alcanzo a entender de la deliberación, ¿cierto?_____

Entonces esa la separaría para una votación en lo particular._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario del Consejo, hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero Presidente._____

Entiendo que en la votación en lo general vendría el engrose que señalaron las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela y Beatriz Claudia Zavala, así como no sé si estaría en la votación en lo general lo relativo a la modificación al numeral que tiene que ver en qué momento se dan de baja de los partidos políticos._____

Sí, en los términos que se señalaron creo que iría en lo general, no escuché que alguien se manifestara en contra de esa después de la aclaración que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra para una moción la Consejera Electoral Dania Paola Ravel._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Para mencionar que también mandé algunas observaciones de forma para que se consideren en la votación. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Secretario del Consejo, por favor continúe con la votación. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entonces todo ese conjunto de elementos que ya mencionaba incorporando esta última intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín igual que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel como observaciones de forma, lo sometería a su consideración en lo general, y solamente separaré por lo que hace al numeral referente a los horarios. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 7, considerando en esta votación en lo general el conjunto de argumentos que expuse cuando les hice la propuesta de la votación. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente _____

Ahora someto a su consideración, en lo particular, por lo que hace a los horarios. Primero como es tradición, como viene el Proyecto de Acuerdo que está a su consideración. _____

Como viene en el Proyecto de Acuerdo, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. .
4 votos. _____

¿En contra? 7 votos. _____

No es aprobado por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 7 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Para certeza solamente, someteré a consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, para modificar ese numeral en los términos que ella lo propuso. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

7 votos. _____

¿En contra? 4 votos. _____

Con la modificación que propuso la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a los horarios, es aprobada esa propuesta por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1478/2018) Pto. 7 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN

ANTECEDENTES

- I. Con fecha trece de noviembre de dos mil siete, fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre dichas reformas se estableció en el artículo 41, Base I, segundo párrafo que sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse individual y libremente a ellos, por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
- II. El día veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, la Ley General de Partidos Políticos, en la que, entre otros temas, en su Título Segundo, Capítulo I, se regularon los requisitos y procedimientos en materia de constitución de partidos políticos nacionales.
- III. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin.

CONSIDERANDO

Atribuciones del Instituto

1. De acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución), en relación con los numerales 29, párrafo 1; y 30, párrafos 1, incisos a) y b), y 2, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (en adelante el Instituto) es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, y entre sus fines se encuentran contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 7, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), corresponde al Instituto la atribución relativa al registro de los partidos políticos nacionales.
3. Según lo establecido en el artículo 32, párrafo 1, inciso b), fracción I de la LGIPE, el Instituto tendrá entre sus atribuciones para los procesos electorales federales, la relativa al registro de los partidos políticos nacionales.
4. Asimismo, el artículo 55, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establecen que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP) tiene las siguientes atribuciones:
 - a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales y realizar las actividades pertinentes;
 - b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en dicha Ley para constituirse como partido político e integrar el expediente respectivo para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General.

5. Así también, el artículo 16 de la LGPP establece que:

“Artículo 16.

1. *El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.*

2. *Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación.”*

Derecho de asociación

6. El derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución, el cual, en su parte conducente, establece que: *“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (...)”*.
7. El artículo 35 de la Constitución, en su fracción III, establece que es prerrogativa de los ciudadanos *“Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)”*.
8. Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución, en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP señala que: *“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo (...). Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”*.

9. Por su parte, el artículo 2, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP, dicta que son derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos, en relación con los partidos políticos: *“asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.”*
10. Aunado a lo anterior, el artículo 3, párrafo 2 de la LGPP, señala que es derecho exclusivo de las y los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:
- a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras.
 - b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
 - c) Cualquier forma de afiliación corporativa.

Requisitos constitutivos

11. El artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b), de la LGPP establece los requisitos que deberá cumplir la organización de ciudadanas y ciudadanos que pretenda obtener su registro como partido político nacional, señalando que:

“Artículo 10.

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional (...) deberán obtener su registro ante el Instituto (...)

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y (...)”

12. Asimismo, el artículo 11 de la LGPP dispone lo siguiente:

“Artículo 11.

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, (...) informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, (...).

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.”

13. Por su parte, el artículo 12 de la LGPP establece que para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente:

“a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del

porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.”

14. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6070/2018, la DEPPP solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (en adelante DERFE), informara sobre la cantidad de ciudadanos que representa el 0.26% del Padrón Electoral, utilizado en la Elección Federal del uno de julio del año en curso, a fin de determinar el número de afiliadas y afiliados que deberán tener las organizaciones interesadas en obtener el registro como partido político nacional. Oficio que tuvo respuesta a través del diverso identificado como INE/DERFE/1580/18, de fecha cinco de octubre dos mil dieciocho, señalando que el padrón electoral nacional utilizado en la elección del 1 de julio de 2018, consta de 89,332,031 (ochenta y nueve millones trescientas treinta y dos mil treinta y un) personas y que el padrón electoral de extranjeros consta de 646,670 (seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta), lo que suman la cantidad de 89,978,701 (ochenta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil setecientos un) personas, por lo que dicho porcentaje corresponde a la cantidad de 233,945 (doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco).

Celebración de asambleas

15. A efecto de dar cabal cumplimiento al principio de certeza que debe regir todas las actividades de este Instituto, es indispensable que las organizaciones que busquen obtener su registro como partido político nacional informen a este Instituto con precisión la fecha y lugar en que se celebrarán cada una de las asambleas estatales o distritales.
16. La finalidad de la celebración de las asambleas estatales o distritales consiste en que las y los asistentes conozcan y aprueben los documentos básicos del interesado en obtener el registro como partido político nacional al cual pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación formal de afiliación, que se formen las listas de afiliados y que se elijan las y los delegados propietarios y suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP. Por lo anterior, se considera inaceptable que la finalidad de las asambleas se desvirtúe a partir de la práctica de actividades de diversa naturaleza como podrían ser la celebración de sorteos, rifas, cursos, conciertos o cualquier otra ajena al objeto referido, o que se encuentre

condicionada a la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otro tipo de recompensa, mismas que podrían atentar en contra del principio de libertad de afiliación previsto en el artículo 2, párrafo 1, de la citada Ley.

17. A fin de garantizar que los datos de la ciudadanía que manifieste su afiliación a alguna organización en proceso de constitución como partido político nacional, durante el desarrollo de una asamblea estatal o distrital, sean verificados con el padrón electoral en el que se vean reflejados los movimientos realizados por ella, el corte del padrón electoral que se utilice para efectos de verificar su situación registral deberá ser el más cercano a la fecha de celebración de la asamblea.
18. El artículo 14, párrafo 1 de la LGPP, establece que “el costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes”. En ese sentido, resulta congruente con lo anterior que, en caso de que las organizaciones en proceso de constitución de un partido político nacional informen a este Instituto la programación de una asamblea y éstas no acudan a celebrarla sin haber realizado la cancelación de la misma con oportunidad, implica que el personal designado por esta autoridad acuda al lugar de la misma de manera infructuosa y esto genere un gasto innecesario de recursos con cargo al presupuesto del Instituto. En consecuencia, resulta congruente con lo establecido en el referido artículo 14, párrafo 1 de la LGPP que esta autoridad haga responsable a la organización que incumpla con brindar el aviso necesario a la autoridad a efecto de evitar su traslado al lugar programado para la celebración de la misma si ésta no se llevará a cabo, por lo que la organización deberá cubrir los gastos generados por su omisión.

Documentos Básicos

19. En los artículos 35, 37, 38, 39 y 43 de la LGPP, en relación con los artículos 29, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 85, 89 y 94 de la misma ley, así como en la Jurisprudencia 20/2018 sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), se establecen cuáles son los Documentos Básicos con que deben contar los partidos políticos, así como sus contenidos mínimos. Por lo que la Declaración de Principios, Programa de

Acción y Estatutos, respectivamente, de todas aquellas organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político nacional, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

“Artículo 37.

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

- a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
- b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;
- c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;
- d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y
- e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 38.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

- a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;
- b) Proponer políticas públicas;
- c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y
- d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:

- a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;
- b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;
- c) Los derechos y obligaciones de los militantes;
- d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;
- e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;
- f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos;

- g) *La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;*
- h) *La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen;*
- i) *Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos;*
- j) *Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y*
- k) *Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva.*

Artículo 43.

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

- a) *Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;*
- b) *Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;*
- c) *Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;*
- d) *Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;*
- e) *Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;*
- f) *Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y*
- g) *Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.*

2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas.”

20. La Sala Superior del TEPJF, en sesión celebrada el día uno de marzo de dos mil cinco, aprobó y declaró formalmente obligatoria la Jurisprudencia 3/2005, en la que describe seis elementos mínimos que, deben contener los Estatutos de los partidos políticos nacionales para considerarse democráticos, en los términos siguientes:

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus Estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral Federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el

mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-781/2002. Asociación Partido Popular Socialista. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-259/2004. José Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos.

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 122".

Manifestación formal de afiliación

21. La manifestación formal de afiliación a que hace alusión el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGPP así como aquellas que sustentan las listas de afiliadas y afiliados a que se refiere el inciso b), fracción V, del mismo artículo, deben reflejar de manera cierta y objetiva que la voluntad de adhesión de cada ciudadana y ciudadano guarda vigencia y actualidad en relación con el procedimiento de solicitud de registro como partido político nacional. En razón de lo anterior, con el fin de brindar certeza a las y los interesados, se estima necesario que las manifestaciones formales de afiliación contengan la fecha en la cual la ciudadanía manifiesta su voluntad de adherirse al partido político que se pretende constituir, fecha que debe pertenecer al proceso de registro que inicia en enero de 2019 así como las leyendas que manifiesten que la persona no se ha afiliado a ninguna otra organización que se encuentre solicitando su registro, que su afiliación es libre, voluntaria e individual.

Asimismo, se requiere que los datos asentados en las citadas manifestaciones formales de afiliación coincidan con los que obran en el padrón electoral, los cuales deberán corresponder a personas con registro vigente.

Durante el proceso de solicitud de registro, y hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en el presente Acuerdo y el Instructivo que se adjunta al mismo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la organización o agrupación política nacional interesada envíen o entreguen se considerarán preliminares, en tanto están sujetas a la revisión —tanto por lo que hace a la información capturada o enviada como a su integridad— y los cruces —con el padrón electoral y los padrones de partidos políticos y otras organizaciones— necesarios para garantizar su validez y autenticidad.

22. Al respecto, para el registro de asistentes a las asambleas estatales o distritales que celebre la organización en su proceso de constitución como partido político nacional, estando presente la o el funcionario del Instituto designado para certificar la celebración de la asamblea, cada ciudadana o ciudadano suscribirá la manifestación formal de afiliación impresa que le será proporcionada por este Instituto, a efecto de garantizar la autenticidad de la afiliación, así como la libre afiliación de la o el ciudadano.
23. Por lo que hace a las y los afiliados en el resto del país, esto es, aquellos que no asistan a las asambleas, al no haber forma de que un funcionario de este Instituto pueda verificar la manifestación libre de la voluntad de la ciudadanía ni su presencia ante la organización al momento de afiliarse, esta autoridad ha desarrollado una aplicación móvil para recabar las afiliaciones de la ciudadanía. La misma permitirá a las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional recabar la información de las personas que soliciten afiliarse al mismo, sin la utilización de papel para la elaboración de manifestaciones formales de afiliación. Esta herramienta tecnológica facilitará a la autoridad verificar y validar las afiliaciones preliminares enviadas por la organización, pues con ello se podrá conocer la situación registral en el padrón electoral de dichas personas, generará reportes para verificar los nombres y el número de afiliaciones recibidas por las organizaciones, otorgará certeza sobre la autenticidad de las afiliaciones presentadas por cada organización, evitará errores en el procedimiento de captura de información, garantizará la protección de datos personales y reducirá los tiempos para la verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados con que debe contar la organización.

Cabe señalar que el sistema de seguridad de la aplicación móvil será certificado ante notario público para garantizar la consistencia e integridad de la información recabada por los auxiliares mediante la APP y recibida por el Instituto, la cual conforma el expediente electrónico de cada afiliación.

A diferencia de lo ocurrido durante la obtención de apoyo ciudadano para quienes aspiraban a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, las y los auxiliares o gestores acreditados por las organizaciones para recabar afiliaciones solo podrán hacerlo para una sola organización. Por lo tanto, será vigente el primer registro del o la auxiliar debidamente acreditado por la organización ante esta autoridad conforme a lo establecido en el numeral 57 del Instructivo.

Lo anterior debido a que, a diferencia de los procesos de participación ciudadana donde el respaldo se da para un solo propósito claramente definido, al adherirse a un partido político se ejerce el derecho de asociación consagrado en el artículo noveno de la Constitución. Lo anterior, conlleva derechos y obligaciones permanentes los cuales deberán contemplar, al menos, aquellos establecidos en los artículos 40 y 41 de la LGPP. En ese sentido, los Auxiliares que apoyen a una organización deberán conocer y ayudar a difundir la propuesta de documentos básicos de la organización e informar a la ciudadanía del alcance y responsabilidades de afiliarse al mismo.

La aplicación móvil que se utilizará para recabar los datos de la ciudadanía que pretenda afiliarse al partido político en proceso de constitución es compatible con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) que funcionen con los sistemas operativos *iOS 8.0* y *Android 5.0* en adelante.

Dichos dispositivos móviles no serán proporcionados a las organizaciones por el Instituto, puesto que el número de equipos a utilizar dependerá de la cantidad de auxiliares que colaboren con éstas en la captura de datos de las afiliaciones, quienes harán el siguiente procedimiento con su dispositivo móvil, previa descarga de la aplicación:

- A) Acceso a la App
- B) Captura de la fotografía del original de la credencial para votar (anverso y reverso) emitida por este Instituto a favor de la o el ciudadano que hace su manifestación formal de afiliación
- C) Proceso de reconocimiento de código QR o código de barras.

- D) Tomar de la fotografía viva (presencial), en ese momento, de la persona que hace su manifestación formal de afiliación
- E) Recaba la firma de la o el ciudadano
- F) Envío de la información capturada

La información referida, esto es, las imágenes del anverso y reverso del original de la credencial para votar emitida por este Instituto a favor de la o el ciudadano que haga su manifestación formal de afiliación, la fotografía viva y la firma de la persona que se afilia (a quien debe pertenecer la credencial para votar) son los elementos mínimos que se requieren para cumplir con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGPP (nombre, apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar) y para constatar la voluntad libre e individual de la ciudadanía para afiliarse a un partido político en formación.

Asimismo, la obligatoriedad de la fotografía viva de la persona, es un mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su credencial para votar emitida por este Instituto con la finalidad de afiliarla a un partido político en formación sin su consentimiento o conocimiento; es decir, al contar con la fotografía viva de la persona, este Instituto tendrá certeza de que la persona que está presentando el original de su credencial para votar expedida por este Instituto a la o el auxiliar de la organización en proceso de constitución como partido político, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está manifestando su voluntad de afiliarse de manera libre e individual. Para tales efectos esta autoridad realizará la comparación de los datos biométricos que obran en las bases de datos del padrón electoral, contra la fotografía viva que se tome a través de la aplicación móvil. Con ello, se podrá evitar que personas que tengan a la mano credenciales para votar con fotografía de las que no son titulares puedan utilizarlas para generar un registro. Este hecho es por demás relevante, pues se tiene acreditado (ver considerando 24) que el hecho de que la toma de fotografía viva “opcional” durante el proceso de recabar apoyos para candidaturas independientes en 2017-2018 facilitó que se intentara —infructuosamente— presentar apoyos no válidos.

Por su parte, resulta necesario precisar que para realizar la captura de las manifestaciones formales de afiliación a través de la aplicación móvil, no se necesita contar con algún tipo de conocimiento especializado o técnico; sin embargo, a fin de brindar la instrucción necesaria para su utilización, la DEPPP

brindará capacitación a las organizaciones, así como al personal designado por la misma sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal web. Asimismo, pondrá a disposición el material didáctico en la página del Instituto.

Ahora bien, de acuerdo con la *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares* (ENDUTIH) 2017, en México existían 64.7 millones de usuarias y usuarios con teléfonos inteligentes, con un aumento de 4.1 millones en comparación con 2016. Es decir, por lo menos 8 de cada 10 usuarias y usuarios en el país cuentan con un teléfono celular inteligente. Adicionalmente, de las y los usuarios con teléfonos celulares inteligentes, 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus respectivos teléfonos celulares el año pasado.^[1]

Conforme a lo anterior, y considerando que el uso de dispositivos móviles se ha incrementado, esta autoridad concluye que la utilización de la aplicación móvil no implica una carga extraordinaria para las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, por el contrario, facilita el registro de la ciudadanía a afiliarse, garantiza la certeza de la información presentada al Instituto y disminuye el costo que implicaría la utilización de papel para reproducir las manifestaciones formales de afiliación.

A este respecto, cabe mencionar que, mediante Acuerdo INE/CG387/2017, del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, sobre el registro de candidaturas independientes a los distintos cargos federales de elección popular durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, esta autoridad aprobó el uso de una aplicación móvil similar para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura independiente. Si bien dicho Acuerdo fue impugnado, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, recaída al Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-0841/2017 y acumulados, confirmó el contenido de dicho Acuerdo y determinó lo siguiente:

“Ahora, esta Sala Superior estima que la Aplicación Móvil no es un requisito adicional a los que debe cumplir un aspirante a candidato independiente para ser registrado, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que se trata de un mecanismo de obtención del apoyo

^[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones, <http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-713-millones-de-usuarios-de-internet-y-174-millones-de-hogares-con-conexion-este-servicio>, consultado el 13 de diciembre de 2018.

ciudadano, y los datos que se recaben a través de él, únicamente sustituye el mecanismo tradicional de recolección de las cédulas de respaldo y la copia de la credencial para votar exigidas por la Ley, esto es, ya no será necesario que los aspirantes presenten tales documentos físicamente.

No pasa desapercibido que los numerales 4 y 39 de los Lineamientos señalan que los archivos que se generen a partir de la aplicación móvil sustituirán a las cédulas de respaldo ciudadano. Sin embargo, tales disposiciones deben interpretarse en el sentido de que los referidos archivos digitales sustituyen los documentos físicos en los que anteriormente se recababan las cédulas de apoyo ciudadano.

En efecto, si bien los artículos 371, 383, inciso c), fracción VI, de la LEGIPE, se refieren a la cédula de respaldo ciudadano, no señalan que necesariamente deba constar en un documento físico. En este sentido, la generación y resguardo de los referidos apoyos de manera electrónica no es incompatible con el propio concepto de cédula de respaldo ciudadano.

Por lo tanto, se estima que resulta válido que haciendo uso de los avances tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como el que nos ocupa para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los apoyos que se emiten en favor de quien aspira a una candidatura independiente.

De ese modo, la sustitución del método de obtención de la cédula no implica añadir un requisito y tampoco eliminarla, ya que toda la información requerida para ella es la misma que se requiere para la cédula, sólo que ahora será recabada, mediante una aplicación móvil.

Así, una vez cumplido el procedimiento marcado en los Lineamientos, a partir de recabar el apoyo mediante dicha aplicación, se contará con la información requerida por el artículo 383, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por tanto, es claro que los Lineamientos impugnados, no introducen un nuevo requisito, sino que proporcionan elementos tecnológicos para lograr el cumplimiento de uno de los ya establecidos en la ley, como es, obtener el apoyo ciudadano requerido en la legislación electoral federal.

Verificación del documento base de la afiliación a través de la APP

- 24.** En la experiencia del proceso para recabar el apoyo ciudadano por parte de aspirantes a candidaturas independientes durante el proceso electoral federal 2017-2018, en el cual se utilizó una aplicación móvil por primera vez, se encontraron una serie de irregularidades en algunos apoyos cuyos datos habían sido encontrados en la lista nominal de manera preliminar. Entre estas

se encuentra el documento inválido y la simulación de la Credencial para Votar. En el caso del documento inválido, se intentó acreditar la existencia de un apoyo ciudadano sin estar en presencia de una Credencial para Votar vigente. Esto fue posible debido a que se capturó la imagen de un documento distinto a la Credencial para Votar y se ingresaron datos personales válidos de manera manual. En el caso de la simulación, se utilizó una plantilla o formato parecido a una Credencial para Votar, colocando de manera manual los datos solicitados por la aplicación móvil para acreditar el apoyo ciudadano.

La captura de un soporte documental inválido así como el uso de una plantilla o formato donde se colocaron los datos necesarios para que éstos fueran extraídos por la aplicación móvil simulando que dicho formato era una Credencial para Votar, iba en contra de lo establecido en la normativa correspondiente, ya que se omitió la captura de la imagen de una Credencial para Votar original que debía ser exhibida por la o el ciudadano dispuesto a otorgar su apoyo para que la aplicación móvil hiciera el proceso de reconocimiento óptico de caracteres. Además, generó incertidumbre sobre la forma en que se obtuvieron los datos de las personas que supuestamente brindaron su respaldo a un o una aspirante, pues sin tener el soporte documental de los mismos, fueron identificados en el sistema como preliminarmente válidos.

En razón de lo anterior, esta autoridad llevará a cabo la verificación del documento base de la manifestación formal de afiliación de la ciudadanía, misma que las organizaciones obtengan a través de la aplicación móvil; esto es, se verificará la autenticidad del documento que sirva de base para la afiliación que en todo caso debe ser el original de la credencial para votar vigente que emite este Instituto a las y los ciudadanos.

No hacer la revisión de los documentos que sirvan para obtener la manifestación formal de afiliación a las organizaciones interesadas en constituirse en partidos políticos nacionales, propiciaría que se utilicen fotocopias o imágenes de la credencial para votar o algún otro documento (como licencias de conducir, tarjetas de farmacias, monederos electrónicos, entre otras) o plantilla o credencial simulada a la que se agreguen los datos contenidos en la lista nominal de electorales, con el objetivo de que la aplicación móvil reporte la supuesta “afiliación”, y que indebidamente se validen manifestaciones que no tengan como sustento la presentación del original de la credencial para votar de la o el ciudadano, contraviniendo así los principios de certeza y legalidad.

Precisamente para garantizar la autenticidad de las manifestaciones formales de afiliación y tener certeza de que las organizaciones que lleguen a obtener su registro como partido político nacional en realidad sí cuentan con el número de afiliados que la LGPP exige, resulta indispensable para esta autoridad revisar el documento que sirva de base para recabar las manifestaciones de afiliación.

Es de destacar que la exigencia del original de la credencial para votar expedida por el INE para sustentar la manifestación formal de afiliación, guarda similitud con aquella del apoyo ciudadano para las y los aspirantes a una candidatura independiente, lo cual fue validado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el juicio ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-98/2018 en la sesión de fecha 22 de marzo de 2018, descartando la posibilidad de utilizar la fotocopia de una credencial de elector para recabar el apoyo a favor de una o un aspirante a una candidatura independiente.

En esa sentencia, la Sala Superior reiteró que, en los lineamientos que rigen el empleo de la aplicación diseñada por el INE, la autoridad electoral exigió entre los requisitos de operación de la aplicación móvil, la necesidad de incluir la imagen del anverso y reverso del original de la credencial, como elemento que permite corroborar la autenticidad de dicho apoyo, ya que constituye uno de los signos identificadores de la presencia física de la ciudadana o ciudadano ante el auxiliar, y de su consentimiento implícito para otorgar el respaldo a una candidatura.

Por tanto, la Sala Superior consideró que la presentación de fotografías de fotocopias de credenciales para votar desvirtúa la finalidad de la aplicación y genera incertidumbre respecto a la obtención del apoyo ciudadano. También puntualizó que, de aceptar las capturas de fotocopias de las credenciales de elector, no se tendría certeza de que las y los aspirantes y auxiliares se hayan apersonado frente a la o el ciudadano para solicitar su apoyo, o podría llegar a estarse frente a un posible uso ilícito de información comercial o no comercial de las y los ciudadanos sin su consentimiento, entre otras malas prácticas o conductas, cuya opacidad haría ineficaz el sistema de verificación del INE.

Antecedente de indebida afiliación

- 25.** Este Consejo General toma en consideración los antecedentes de indebida afiliación que han dado lugar al inicio de procedimientos ordinarios

sancionadores. En efecto, existen miles de quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación de todos y cada uno de los partidos políticos nacionales.

En la mayoría de los asuntos en que se denuncia indebida afiliación, se ha verificado que los partidos políticos nacionales no cuentan con las cédulas de afiliación, que son los documentos idóneos para acreditar la debida afiliación de una ciudadana o ciudadano a determinado partido político; de ahí que en esos casos las quejas resultan fundadas. Ante tal realidad, es necesario contar con afiliaciones que llenen todos los requisitos de ley y que puedan constatar la libre voluntad de las personas para pertenecer o no a un partido político en formación o a uno con registro, así como a cambiar de afiliación de manera libre. Por ello, el procedimiento de afiliación contenida en el presente Acuerdo, así como las reglas para determinar qué afiliación debe prevalecer cuando se esté en presencia de duplicidades, garantizan de forma adecuada el derecho a la libre afiliación de la ciudadanía.

Caso de excepción para afiliaciones fuera de asambleas

26. Tomando en consideración que existen algunas comunidades en donde hay un impedimento material o tecnológico para recabar las afiliaciones a través de la Aplicación Móvil, este Consejo General estima necesario establecer mecanismos que permitan maximizar y equilibrar la participación de la ciudadanía que resida en municipios en los que exista desventaja material para ejercer su derecho de asociación, sin menoscabo alguno, mediante la aplicación de un régimen de excepción.

En ese sentido, es necesario acudir a mediciones objetivas, realizadas por instituciones del Estado mexicano para determinar aquellas zonas que deberán recibir un tratamiento especial. Así, el índice de marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población (en adelante Conapo) con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada quinquenalmente, mide la carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Para ello, el Conapo valora las dimensiones de educación, vivienda, distribución de población e ingreso por trabajo y clasifica a los municipios en cinco estratos con base en el grado de marginación. La utilización de este índice brindará elementos objetivos para conocer aquellos municipios que,

dado su grado muy alto de marginación, podrían optar por la utilización complementaria del registro de afiliaciones en papel.

A efecto de fortalecer tal determinación, acompaña al presente, identificado como Anexo 3 el listado de 283 municipios con muy alto grado de marginación, que fue elaborado a partir de la información difundida por el Conapo. El referido Listado servirá para que las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, tengan certeza acerca de los municipios en los que podrán recabar afiliaciones, de manera opcional, por el método definido en el régimen de excepción. Al respecto, es preciso tener en cuenta que sólo podrán recolectar en papel las manifestaciones formales de afiliación de la ciudadanía cuyo domicilio se encuentre en esos municipios, conforme al Padrón Electoral.

27. Para el caso de las y los afiliados en el resto del país, el padrón electoral que será utilizado para verificar la situación registral de la ciudadanía será con corte al 31 de enero de 2020, conforme a lo establecido en el ya citado artículo 16, párrafo 2 de la LGPP.

Asamblea Nacional Constitutiva

28. Del contenido de los artículos 12, párrafo 1, inciso b) y 15, párrafo 1, inciso c) de la LGPP se desprende que la asamblea nacional constitutiva del partido político deberá celebrarse en el mes de enero del año anterior al de la elección, y a fin de dotar al Instituto de los tiempos suficientes para realizar las tareas de certificación de las mencionadas asambleas, recepción de las solicitudes y documentación conducente y elaboración de los respectivos expedientes, se hace necesario establecer una fecha límite para la realización de las asambleas nacionales constitutivas con el objeto de que este Instituto pueda tomar las providencias necesarias para el desahogo de sus obligaciones legales en esta materia.

Solicitud de registro

29. Conforme al artículo 15 de la LGPP, la organización interesada que haya realizado los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, deberá presentar su solicitud de registro ante este Instituto

en el mes de enero de dos mil veinte, acompañándola con los documentos siguientes:

- “a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;*
- b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, (...) a que se refieren los artículos 12 (...) de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital; y*
- c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales (...) y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.”*

Respecto de las listas nominales de afiliados previstas en el inciso b) señalado, se considera necesario precisar que, en todos los casos, las afiliaciones deberán recabarse siguiendo los procedimientos y las previsiones contenidas en el presente Acuerdo y el Instructivo que le acompaña. Ello, en el entendido que tal como se ha señalado, hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en el mismo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la organización o agrupación política nacional interesada envíen o entreguen, se considerarán preliminares, en tanto están sujetas a la revisión y los cruces necesarios para garantizar su validez y autenticidad

Doble afiliación

- 30.** El artículo 18 de la LGPP, establece que se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación; asimismo en el numeral 2 señala:

“2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.”

Para tales efectos, esta autoridad, a través del Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP) realizará un cruce de las y los afiliados válidos de cada Organización contra los de las demás organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, así como entre éstos y los afiliados a los partidos políticos nacionales y locales con registro vigente.

Resulta relevante precisar que se considerará la afiliación “más reciente”, aquella cuya obtención o captura —en términos de la cédula, asamblea o registro en la aplicación— fue posterior, con independencia de la fecha en que las mismas fueron presentadas o enviadas a esta autoridad.

Garantía de audiencia

31. Las organizaciones contarán en todo momento con acceso a un portal *web* en el que podrán verificar el reporte estadístico, que les mostrará el total de registros enviados al Instituto mediante la aplicación móvil, el número de registros para envío a compulsa contra el padrón electoral, de registros con inconsistencias, de registros en procesamiento, duplicados y en mesa de control, de los cuales se mostrará también un listado que contendrá la información obtenida a través de la aplicación, relativa a los nombres de quienes manifestaron su voluntad de afiliarse al partido político nacional en formación. Asimismo, contarán con acceso al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos en el que se concentrarán todos los registros y los nombres de las y los afiliados a la organización. Lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del derecho a la afiliación y los derechos y obligaciones que derivan del ejercicio del mismo.

Cabe mencionar que la garantía de audiencia podrá ejercerse únicamente respecto de los registros que en la Mesa de Control esta autoridad haya identificado como no válidos o con inconsistencias, independientemente de la causa. Lo anterior, toda vez que resultaría infructuoso realizar la revisión de los registros sin inconsistencias puesto que la modificación de su estatus no causaría beneficio alguno a la organización en proceso de constitución como partido político nacional.

De igual manera resultaría ineficaz llevar a cabo la revisión de los registros de las y los afiliados a las organizaciones que debido al número de asambleas celebradas no se encontrarían en aptitud de presentar su solicitud de registro, razón por la cual esta autoridad considera necesario establecer como número mínimo de asambleas celebradas como requisito para la solicitud de la garantía de audiencia. Por ello, las organizaciones podrán ejercer su garantía de audiencia, una vez que hayan acreditado haber reunido al menos la mitad del número mínimo de asambleas requeridas por la Ley para su registro y hasta el 15 de enero de 2020.

Confidencialidad de datos personales

- 32.** Las organizaciones interesadas, así como sus auxiliares, serán responsables del tratamiento de datos personales de las personas afiliadas a los partidos políticos nacionales en formación durante el tiempo en el cual conserven, tengan acceso y utilicen dicha información, por lo que estarán sujetas a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas; en ese sentido, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular. Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley citada, al momento de que la DEPPP le informe a las organizaciones que han cumplido con los requisitos de la notificación de intención se generará un aviso de privacidad integral para cada una de éstas, el cual deberá estar publicado en el portal de Internet del Instituto y, en caso de tenerlo, en el portal de las organizaciones.

De igual forma, en la manifestación formal de afiliación, conforme a los artículos 9; 17, fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 del Reglamento de la misma Ley, y Trigésimo cuarto de los Lineamientos de Aviso de Privacidad, de manera previa al tratamiento de datos personales deberá mostrarse a las y los particulares un aviso de privacidad simplificado y, una vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse a recabar las mismas.

De manera general, las organizaciones, así como las y los auxiliares que para el efecto autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley de la materia referida.

En ese sentido, es fundamental identificar a cada una de las y los auxiliares de las organizaciones, así como la información que han recabado a través de la aplicación informática, a efecto de constatar el tratamiento adecuado de los datos personales recabados y, en su caso, determinar cualquier responsabilidad de la cual pudieran ser sujetos. Por lo que aquella información de las personas afiliadas, que sea remitida a esta autoridad por algún auxiliar que no hubiese sido plenamente identificado y/o no hubiese entregado la responsiva sobre el uso de datos personales, no podrá ser considerada para el número de afiliaciones que debe reunir la organización de que se trate. Lo anterior, no es óbice para dar vista a las autoridades competentes.

- 33.** Los datos personales de las y los integrantes de las organizaciones, de sus auxiliares, así como de sus afiliadas y afiliados, que obren en los archivos de este Instituto, estarán protegidos de conformidad con lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los artículos 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que son información confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste. En tal virtud, las y los servidores públicos de este Instituto que intervengan en el tratamiento de datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos por la Ley. Asimismo, en el tratamiento de datos personales, las y los servidores públicos de este Instituto deberán observar los principios de licitud, calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad, confidencialidad y finalidad para la que fueron recabados.

Tiempo para resolver

- 34.** Con fundamento en el artículo 19 de la LGPP y con base en el dictamen que someta a consideración el Secretario Ejecutivo, previo conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Consejo General del Instituto, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro resolverá:
- a) Cuando proceda, expedir el certificado correspondiente haciendo constar el registro, mismo que surtirá efectos a partir del uno de julio del año anterior al de la elección, en este caso, el uno de julio de dos mil veinte.
 - b) En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados.

En ambos casos la Resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el TEPJF.

- 35.** En virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, es conveniente que el Consejo General del Instituto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, párrafo 1, inciso jj), en relación con el inciso m) del mismo numeral, de la LGIPE, emita el Instructivo que acompaña el presente Acuerdo, a fin de precisar los elementos objetivos con los que constatará el cumplimiento de los

requisitos y procedimientos señalados por la Ley para constituirse en partido político nacional.

36. En el caso de que las agrupaciones políticas nacionales con registro vigente ante el Instituto, manifiesten su interés en constituirse como partido político nacional, resulta necesario que se acredite ante el Instituto que las dirigencias o representantes legales de las respectivas agrupaciones políticas aprobaron solicitar su registro como partido político nacional y cumplir con los requisitos y el procedimiento previstos en la LGPP y el presente Instrumento.

Fiscalización

37. De acuerdo con lo establecido por el artículo 199, párrafo 1, inciso I) de la LGIPE, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, tiene entre sus facultades fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto.
38. De conformidad con los artículos 11, numeral 2 de la LGPP, y 236, numeral 1, inciso b) y 272 del Reglamento de Fiscalización, las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en partido político, a partir del aviso que den a este Instituto de su intención, y hasta la resolución sobre la procedencia del registro, deberán informar mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

Consultas

39. Con el fin de garantizar los principios de certeza y legalidad, rectores de la materia, así como el de publicidad respecto de las consultas referentes al presente Instrumento acordadas por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, las cuales son aplicables a todas y todos los sujetos del mismo y que deben ser conocidos por la totalidad de las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político nacional, al igual que todos aquellos actos y resoluciones de su competencia que la Comisión determine, resulta necesario que las mismas deban ser publicadas en la página electrónica del Instituto.
40. Para efecto de realizar una revisión objetiva, con mayor precisión y rapidez, de los requisitos constitutivos señalados en la LGPP, atendiendo con ello al

principio de certeza con que debe realizar su actuación, esta autoridad considera pertinente establecer la participación de la DERFE, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y de los órganos desconcentrados del propio Instituto, como coadyuvantes de la DEPPP, para establecer los sistemas y el apoyo técnico necesario que permitan verificar que las organizaciones que presenten su solicitud hayan satisfecho los requisitos señalados en la Ley para la celebración de sus asambleas y en la presentación de su solicitud de registro.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9; 35, fracción III; y 41, párrafo segundo bases I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; 32, párrafo 1, inciso b), fracción I; 44, párrafo 1, inciso jj); 55, párrafo 1, incisos a) y b); y 199, párrafo 1, inciso I) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo 1, incisos a) y b); 3, párrafos 1 y 2; 7, párrafo 1, inciso a); 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b); 11; 12; 14, párrafo 1; 15, párrafo 1, inciso c); 18; 19; 35; 37; 38; y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 9; 15; 16; y 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso m) de la primera Ley invocada, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba el *Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin*, en términos del anexo uno que forma parte integral del presente acuerdo.

Segundo. La interpretación de los casos específicos vinculados con la implementación de este Instructivo corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, incluso aquellos que no se encuentren previstos expresamente.

Asimismo, dicha Comisión, a más tardar el 31 de enero de 2019 expedirá los Lineamientos para la operación de mesa de control y la garantía de audiencia.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el *Diario Oficial de la Federación*, en los estrados y en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral.

ANEXO UNO

INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capítulo Único Disposiciones generales.

1. El presente Instructivo establece el procedimiento que deberán seguir las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos y agrupaciones políticas nacionales interesadas en constituirse como partido político nacional, así como la metodología que observarán las diversas instancias del Instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales efectos.
2. El presente Instructivo es de observancia general y obligatoria para las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos y agrupaciones políticas nacionales interesadas en constituirse como partido político nacional, así como para el Instituto Nacional Electoral.
3. Para efectos del presente Instructivo se entenderá por:
 - a) Afiliada (o): La ciudadana o el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político nacional en formación en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;
 - b) Aplicación Móvil: Solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar las manifestaciones formales de afiliación de las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, así como para llevar un registro de las y los auxiliares de éstas y verificar el estado registral de las y los ciudadanos que se afilien a dichas organizaciones.
 - c) Auxiliar/Gestor (a): Personas que ayudan a recabar las manifestaciones formales de afiliación.

- d) CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de Lectura Mecánica de la Credencial para Votar;
- e) Código QR: Código de Respuesta Rápida incluido en el reverso de la credencial para votar;
- f) Código de barras: Código de barras de una dimensión incluido en el reverso de la credencial para votar;
- g) Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
- h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- i) Credencial para votar: Original de la Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral ya sea en territorio nacional o en el extranjero.
- j) Expediente electrónico: Conjunto de archivos que conforman el registro de afiliación captado mediante la aplicación móvil el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, imagen de la firma de la o el ciudadano y fotografía viva de la o el ciudadano.
- k) DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
- l) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
- m) Documentos Básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.
- n) Fotografía viva: Imagen de la persona que voluntariamente, libre e individualmente manifiesta su afiliación al partido político en formación, tomada a través de la Aplicación Móvil en el momento en que se encuentra presente ante una o un auxiliar;
- o) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;
- p) Instructivo: Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin;
- q) LGPP: Ley General de Partidos Políticos;
- r) Manifestación: Manifestación formal de afiliación;
- s) Organización: Agrupación política nacional u organización de ciudadanas y ciudadanos interesada en obtener su registro como partido político nacional.
- t) Partido Político: Partido Político Nacional;
- u) Portal *web*: Sistema de cómputo en la que se cargarán los datos de los afiliados en el resto del país recabados a través de la aplicación móvil.
- v) Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto;
- w) Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP): Herramienta informática en la cual se concentrará la base de datos de todas y todos los afiliados a las organizaciones, en el que éstas

capturarán los datos de sus afiliaciones recabadas según el régimen de excepción y en el que se mostrarán los reportes finales sobre el número de afiliadas y afiliados.

- x) UTF: Unidad Técnica de Fiscalización;
 - y) UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática;
 - z) Vocal designado (a): Vocal Ejecutivo (a), Secretario (a), de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica o del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral designado (a) para certificar la celebración de alguna asamblea.
4. Los plazos señalados en el presente Instructivo se encuentran establecidos en días hábiles, son fatales e inamovibles y no habrá excepciones. Se entenderán por días hábiles, todos los días con excepción de sábados, domingos, los inhábiles en términos de ley y los que comprenda el período de vacaciones institucionales.
5. Sólo se considerarán válidas las notificaciones realizadas en días y horas hábiles, en los plazos y con las formalidades previstas en el presente Instructivo, entendiendo por días hábiles los señalados en el numeral anterior y por horas hábiles de 9:00 a 18:00 horas. Cualquier notificación que se realice al Instituto deberá efectuarse con documentos originales y de manera personal.
6. El uso de la aplicación móvil a que se refiere el presente Instructivo, hace las veces de la denominada Manifestación, por lo que las personas que se afilien a través de la misma, serán sumadas a las que se obtengan mediante asambleas y mediante el régimen de excepción para acreditar que se cuenta con el número mínimo de afiliadas y afiliados que exige la Ley a quienes pretenden constituirse como Partido Político.

Durante el proceso de solicitud de registro y hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en el presente Instructivo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la organización o agrupación política nacional interesada envíen o entreguen, se considerarán, preliminares, en tanto están sujetas a la revisión —tanto por lo que hace a la información capturada o enviada como a su integridad— y los cruces —con el padrón electoral y los padrones de los partidos políticos y otras organizaciones— necesarios para garantizar su validez y autenticidad.

TÍTULO II DE LA NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN

Capítulo Único De la notificación al Instituto

7. La organización que pretenda constituirse como Partido Político deberá notificar por escrito tal propósito al Instituto, dentro del periodo comprendido del 7 al 31 de enero del año 2019, en días y horas hábiles, entendiendo por éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
8. El escrito de notificación deberá dirigirse al Consejo General y entregarse en la DEPPP sita en calle Moneda número 64, Colonia Tlalpan Centro I, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.
9. Dicho escrito de notificación deberá estar firmado de manera autógrafa por quien o quienes funjan como representantes legales de la organización y, en el caso de las agrupaciones políticas con registro, su representante deberá estar acreditado ante la DEPPP.

El texto de la notificación deberá incluir, al menos, lo siguiente:

- a) Denominación de la organización;
- b) Nombre o nombres de sus representantes legales;
- c) Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como números telefónicos en donde se les pueda localizar;
- d) Denominación preliminar del Partido Político a constituirse, así como la descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos;
- e) Tipo de asambleas (estatales o distritales) que llevará a cabo la organización para satisfacer el requisito señalado en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP;
- f) Correo electrónico de la organización, así como el tipo de cuenta de usuario para autenticarse, ya sea a través de Google o Facebook, toda vez que dicho correo será fundamental para el acceso a la aplicación

móvil que deberá utilizarse para recabar las afiliaciones, así como para recibir notificaciones; y

10. El escrito de notificación deberá estar acompañado de la documentación siguiente:

- a) Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la constitución de la organización;
- b) Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que acredite fehacientemente la personalidad de quien o quienes suscriben la notificación de intención de constituirse como Partido Político, por parte de la organización;
- c) En el caso de las agrupaciones políticas nacionales, los requisitos previstos en los incisos a) y b) anteriores, se sustituyen por el certificado de registro expedido por el Consejo General o, en su caso, certificación expedida por el Secretario Ejecutivo, con el cual acredite su registro vigente como agrupación política nacional y constancia del registro de las y los dirigentes o representantes de la agrupación ante el Instituto, con la cual se acredite la personalidad de quien o quienes representan legalmente a la agrupación política que pretenda obtener el registro como Partido Político;
- d) Carta firmada por la o el representante de la organización en la que manifieste que acepta notificaciones vía correo electrónico relacionadas con los procedimientos establecidos en el presente Instructivo; y
- e) Medio óptico en el que se contenga el emblema del Partido Político en formación que aparecerá en las manifestaciones formales de afiliación, el cual deberá exhibirse en formato GIF, JPG, JPEG o PNG y con una dimensión máxima de 150 kb.

Toda la documentación señalada en los numerales 9 y 10 del presente Instructivo deberá ser entregada en un sólo acto.

11. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación referida en los numerales 8, 9 y 10 del presente Instructivo, la DEPPP comunicará a la organización el resultado del análisis de la documentación presentada.
12. En caso de que la organización incumpliére alguno de los requisitos señalados en los numerales citados, se procederá en los términos siguientes:
 - a) La DEPPP hará del conocimiento de la organización el error u omisión detectado, mediante oficio dirigido a su representante legal.
 - b) La organización contará con un plazo improrrogable de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para subsanar los errores u omisiones que le fueron notificados y manifestar lo que a su derecho convenga.
 - c) En caso de que no se presente aclaración alguna dentro del plazo señalado o no se cumpla con los requisitos mencionados, se tendrá por no presentada la notificación respectiva, lo cual será informado por escrito al representante legal de la organización.

La organización podrá presentar una nueva notificación, siempre y cuando se realice dentro del plazo señalado en el numeral 7 del presente Instructivo, es decir del 7 al 31 de enero de 2019.
13. Aquellas organizaciones, cuyas notificaciones respectivas hayan sido aceptadas en tiempo y forma, a partir de la notificación que le realice la DEPPP, podrán continuar con el procedimiento para su constitución como Partido Político, para lo cual deberán cumplir los requisitos y observar el procedimiento señalado en la LGPP y en el presente Instructivo.
14. En caso de que las organizaciones designen como su o sus representantes legales, a personas diversas de las que se hubieren notificado a este Instituto en términos del inciso b), del numeral 9 del presente Instructivo, o revoquen tal designación o designaciones, deberán notificarlo a la DEPPP dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización del acto.

TÍTULO III DE LAS ASAMBLEAS

Capítulo Primero De la programación de las asambleas estatales o distritales

- 15.** Una vez que la DEPPP haya notificado a la organización que su notificación de intención resultó procedente, por lo menos 10 días hábiles antes de dar inicio al proceso de realización de la primera asamblea estatal o distrital, según sea el caso, y a más tardar el 30 de noviembre de 2019, la organización, a través de su o sus representantes legales acreditados, comunicará por escrito a la DEPPP la agenda de la totalidad de las asambleas, la cual deberá incluir los datos siguientes:
- a) Tipo de asamblea (estatal o distrital);
 - b) Fecha y hora del evento;
 - c) Orden del día, mismo que deberá contener exclusivamente:
 - c.1) Verificación del quórum,
 - c.2) Aprobación de los documentos básicos,
 - c.3) Elección de las y los delegados propietarios y, en su caso, suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, y
 - c.4) Cualquier otro asunto que tenga un vínculo directo con la constitución del Partido Político;
 - d) Estado o distrito en donde se llevará a cabo;
 - e) Dirección completa del local donde se llevará a cabo la asamblea (calle, número, colonia, alcaldía o municipio y entidad);
 - f) Croquis de localización; y
 - g) Nombre de las personas que habrán de fungir como presidente (a) y secretario (a) en la asamblea de que se trate, incluyendo los datos necesarios para su ubicación previa, esto es números telefónicos y domicilios. Los domicilios que se señalen para la localización de las personas mencionadas, deberán estar comprendidos dentro de la entidad o distrito en que se celebre la asamblea.

16. Durante los períodos vacacionales institucionales, mismos que se darán a conocer con oportunidad, las organizaciones podrán celebrar asambleas; no obstante, al no ser días hábiles, las organizaciones deberán tenerlo presente para efecto de los plazos establecidos para notificar al Instituto la programación, cancelación o reprogramación de asambleas.
17. En el caso de las asambleas distritales, la organización deberá verificar que el domicilio señalado para celebrar su asamblea corresponda efectivamente al distrito en donde se pretende llevar a cabo la misma, para lo cual podrá consultar en la página electrónica del Instituto www.ine.mx la información que requiera sobre la delimitación de los distritos electorales.
18. La locación donde se lleve a cabo la asamblea deberá contar, por un lado, con las condiciones necesarias de infraestructura y servicios a fin de que la autoridad pueda dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la LGPP, y por el otro, con la capacidad suficiente para albergar la cantidad de asistentes que la organización contemple.
19. Es responsabilidad exclusiva de la organización gestionar los permisos de las autoridades competentes en caso de que la asamblea se realice en un lugar público.
20. En caso de cancelación de una asamblea programada, la organización, a través de su o sus representantes legales, lo comunicarán por escrito a la DEPPP con al menos 5 días hábiles, en el caso de asambleas estatales, o 2 días hábiles, en el caso de asambleas distritales, de antelación a la fecha prevista para realizar la asamblea. Dicha comunicación será notificada por la DEPPP vía correo electrónico a la o el Vocal designado (a) a más tardar el día siguiente de su recepción, y posteriormente será enviado por mensajería.
21. La reprogramación de una asamblea deberá comunicarse por escrito a la DEPPP, cumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 15 del presente Instructivo, respetando los plazos siguientes:
 - a) Para el caso de asamblea estatal con un mínimo de 8 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
 - b) En el caso de asamblea distrital con cuando menos 5 días hábiles de antelación a la celebración de la misma.

22. Aquella asamblea cuyo escrito de solicitud no contenga los requisitos establecidos en el numeral 15 del presente Instructivo, no será programada para su celebración, por lo que no podrá llevarse a cabo. La DEPPP hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico a más tardar el día siguiente
23. La DEPPP mediante oficio dirigido a la o el Vocal designado (a) de la Junta que corresponda, procederá a comunicar la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la asamblea, así como el nombre de las y los miembros de la organización que fungirán como Presidente (a) y Secretario (a) de la misma. Lo anterior, para que dicho (a) funcionario (a) asista a la asamblea y extienda, cuando proceda, las certificaciones a que se refiere el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracciones I, II y III de la LGPP. Dicho oficio será notificado por correo electrónico a la o el Vocal designado (a) a más tardar al día siguiente de su entrega, y posteriormente será enviado por mensajería.

Capítulo Segundo

De los actos previos a la celebración de las asambleas

24. La o el Vocal designado (a) se comunicará con la o el Presidente o Secretario (a) acreditados por la organización con mínimo 5 días de anticipación a la realización de la asamblea, en el caso de las estatales, o con 3 días, en el caso de las distritales, para coordinar las actividades relativas a la preparación de la misma.
25. En caso de que dentro de dichos plazos no haya sido posible la localización de las personas acreditadas por la organización, la o el Vocal designado elaborará un informe circunstanciado de los intentos de localización, mismo que remitirá por correo electrónico a la DEPPP a más tardar al día siguiente, y en original dentro de los 2 días hábiles, a efecto de que se proceda a la cancelación de la asamblea, quedando a salvo el derecho de la organización para su reprogramación. La DEPPP hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico, a más tardar al día siguiente.
26. Las y los responsables de la organización deberán presentarse en el lugar del evento, con cuando menos 2 horas de antelación al inicio del mismo con el fin de colaborar en las tareas de preparación de la asamblea.

- 27.** Si el evento se realiza en un espacio abierto, la organización deberá delimitar, con los elementos a su alcance, el perímetro del área dentro de la cual se verificará el acto, dejando de preferencia un solo acceso.
- 28.** En caso de que la organización no se presente en el lugar programado para la celebración de la asamblea, en la fecha y hora señaladas, deberá realizar el reembolso al Instituto del costo de la certificación de la asamblea. Lo anterior, salvo que exista caso fortuito o causa de fuerza mayor debidamente acreditada y validada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que haya impedido la presencia de la organización.

Para tales efectos, la o el Vocal designado enviará a la DEPPP y a la Dirección Ejecutiva de Administración, un informe especificando los gastos erogados, siendo responsabilidad de ésta última llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar el cobro a la organización de los gastos efectuados.

El monto correspondiente deberá ser cubierto por la organización, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud de pago. La organización no podrá llevar a cabo una asamblea en la entidad o distrito, según sea el caso, respecto de la cual aún no haya realizado el pago de los gastos generados.

Capítulo Tercero

Del registro de asistentes a las asambleas

- 29.** La organización deberá convocar a la ciudadanía para que se presente en el lugar donde tendrá verificativo la asamblea, con al menos 1 hora de anticipación a la señalada para dar inicio al evento, a fin de proceder a la identificación, registro, suscripción de manifestación y contabilización de quienes decidan afiliarse.
- 30.** Las personas que asistan a la asamblea y deseen pertenecer al Partido Político en formación, deberán llevar consigo el original de su credencial para votar vigente, para identificarse y poder registrar su asistencia, la cual sólo será válida si el domicilio de la credencial corresponde a la entidad federativa o distrito, según sea el caso, en que se realice la asamblea. En ninguna circunstancia se permitirá que las y los organizadores del evento presenten la credencial para votar de quien o quienes pretendan afiliarse.

- 31.** En caso de que las personas mencionadas no cuenten con el original de su credencial para votar porque ésta se encuentra en trámite, podrán presentar el comprobante de solicitud ante el Registro Federal de Electores, acompañado de una identificación original con fotografía expedida por alguna institución pública, entre otras, las siguientes: pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia de conducir o credencial expedida por el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Por ningún motivo se aceptarán, como identificación, credenciales expedidas por algún Partido Político, organización política o institución privada.
- 32.** Únicamente las personas asistentes a la asamblea que deseen pertenecer al Partido Político, deberán entregar al personal del Instituto el original de su credencial para votar, a fin de que éste proceda a realizar la búsqueda de sus datos en el padrón electoral del distrito o entidad correspondiente y a imprimir, en su caso, la respectiva manifestación, la cual una vez leída por la persona y estando de acuerdo con su contenido, deberá ser suscrita ante el personal del Instituto.
- 33.** El Vocal designado podrá ampliar el período de registro de asistencia solamente en los siguientes supuestos:
- a) Cuando a la hora programada para el inicio de la asamblea aún haya personas esperando en la fila de registro y no se haya constituido el quórum legal necesario para iniciarla. En este caso el registro continuará hasta que ya no exista persona alguna esperando en la fila correspondiente. De alcanzarse el quórum antes de que se concluya el registro de las personas formadas en la fila, se podrá dar inicio a la asamblea y continuar el registro hasta el momento en que inicie la votación.
 - b) En la hipótesis de que a la hora fijada para el inicio de la asamblea no exista el quórum legal y no haya personas esperando en la fila para su registro, la o el Vocal designado informará al responsable de la organización el tiempo que esperará 60 minutos para que se integre el quórum legal requerido.
- 34.** Durante el registro de asistentes a la asamblea, las y los representantes de la organización apoyarán exclusivamente, y a solicitud de la o el Vocal designado, para efectos de preservar su desarrollo ordenado y ágil.

- 35.** La o el Vocal designado no recibirá manifestaciones de quienes no registren personalmente su asistencia a la asamblea en términos del presente Instructivo.

Capítulo Cuarto **De la celebración y certificación de la asamblea**

- 36.** La celebración de las asambleas distritales o estatales invariablemente deberá ser certificada por un Vocal designado (a). Esta o este funcionario (a) en apego a los principios rectores de las actividades del Instituto, y bajo su más estricta responsabilidad, deberá informar en el acta que al efecto se levante, sobre cualquier situación irregular que se presente antes, durante y después de la asamblea, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar. De ser posible, se asentará en el acta el o los nombres de las personas involucradas en los incidentes reportados.
- 37.** Aquellas actividades que pretendan agregar atractivos especiales para conseguir la asistencia de la ciudadanía, por ejemplo: la celebración de rifas, promesas de contratación de trabajo, compromisos de solución en la regularización de la tenencia de la tierra, promesas del otorgamiento de servicios, impartición de cursos, espectáculos y cualquier tipo de obsequios materiales, dádivas, etc., invalidarán la asamblea.

Asimismo, invalidará la asamblea la intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente a la constitución de partidos políticos.

En este último caso, con las constancias de los hechos anteriores, el titular de la DEPPP dará vista al Secretario Ejecutivo para los efectos legales conducentes.

- 38.** El desarrollo ordenado de la asamblea y la seguridad del personal del Instituto que asista a su certificación, serán responsabilidad de la organización y de los representantes legales de la misma.
- 39.** La o el Vocal designado, sólo podrá dar autorización para el inicio de la celebración de la asamblea una vez que físicamente cuente con un número de manifestaciones igual o superior al exigido por el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGPP y siempre y cuando en el recinto permanezca el número mínimo de afiliadas y afiliados requerido en dicho artículo.

- 40.** Las decisiones que tome la asamblea deberán ser resultado de la aprobación de al menos el 50% más 1 de las y los afiliados registrados por el Vocal designado.
- 41.** Las asambleas deberán realizarse conforme al siguiente orden del día:
- a) Verificación del quórum,
 - b) Aprobación de los documentos básicos, mismos que debieron darse a conocer previamente a las y los afiliados y deberán reunir los requisitos establecidos en el presente Instructivo,
 - c) Elección de los delegados propietarios y, en su caso, suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, y
 - d) Cualquier otro asunto que tenga un vínculo directo con la constitución del Partido Político;
- 42.** Para ser electo delegada o delegado a la asamblea nacional constitutiva, se requerirá:
- a) Estar presente en la asamblea estatal o distrital de que se trate,
 - b) Pertenecer al distrito o entidad en la que se lleve a cabo la asamblea,
 - c) Estar inscrito en el Padrón Electoral, y
 - d) Encontrarse afiliado (a) al Partido Político en formación.
- 43.** La o el Vocal designado hará constar en el acta de certificación de la asamblea, de manera precisa e invariable, lo siguiente:
- a) El número de personas que concurrieron a la asamblea y suscribieron voluntariamente la manifestación;
 - b) Los mecanismos utilizados por el personal del Instituto para determinar que las personas asistieron libremente y manifestaron fehacientemente su voluntad de afiliarse al Partido Político en formación;
 - c) Los resultados de la votación obtenida para aprobar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos.
La o el Vocal designado deberá levantar constancia respecto a si dichos documentos básicos fueron hechos del conocimiento de las y los asistentes a la asamblea con anterioridad a su eventual aprobación.
 - d) Los nombres completos de las personas electas como delegados (as) propietarios (as) y, en su caso, suplentes que deberán asistir a la asamblea nacional constitutiva y los resultados de la votación mediante la cual fueron electos.

- e) Los elementos que le permitieron constatar si en la realización de la asamblea existió o no intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el Partido Político de que se trate.
 - f) Incluirá como anexos o apéndices de las actas los siguientes documentos:
 - f.1) Los originales de las manifestaciones de las personas que concurrieron y participaron en la asamblea distrital o estatal, selladas, foliadas y rubricadas por la o el Vocal designado.
 - f.2) La lista de asistencia de los participantes que concurrieron a la asamblea, la cual deberá corresponder con las manifestaciones y será elaborada por el Instituto. Dicha lista deberá contener de cada afiliado el nombre completo y su estatus registral, además de estar sellada, foliada y rubricada por la o el Vocal designado. Si bien la LGPP establece que las listas deberán contener domicilio completo, clave de elector y folio de la credencial, por tratarse de datos personales, se excluirán de las mismas; no obstante, dichos datos obrarán en los archivos físicos o electrónicos de este Instituto;
 - f.3) Un ejemplar de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos aprobados en la asamblea que corresponda, los cuales deberán estar sellados, foliados y rubricados por la o el Vocal designado.
- 44.** El acta de certificación de cada asamblea distrital o estatal, según sea el caso, contendrá el nombre, cargo, firma autógrafa y sello de la o el Vocal designado. El original con sus respectivos anexos será remitido por la o el Vocal designado a la DEPPP para integrar el expediente de la organización; no obstante, al representante legal de la misma se le entregará un tanto del acta de certificación sin el anexo f.1) por contener datos personales.
- 45.** La totalidad de las asambleas estatales o distritales programadas por la organización, deberán celebrarse a más tardar un día antes de la fecha establecida para llevar a cabo la asamblea nacional constitutiva.
- 46.** De ser el caso que, a partir de lo asentado en el acta de certificación de la asamblea por la o el Vocal designado o inclusive en actos posteriores, se identifiquen hechos como los mencionados en el numeral 37 del presente Instructivo, corresponderá a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ordenar las diligencias necesarias a efecto de contar con mayores elementos para establecer la relevancia de los hechos ocurridos y, en razón de ello, pronunciarse sobre la validez de la asamblea.

Asimismo, de identificarse hechos probablemente constitutivos de delito o de faltas administrativas, la información y documentación relativa, se remitirá a la Secretaría Ejecutiva del Instituto a efecto de iniciar los procedimientos o dar vista a las autoridades competentes.

TÍTULO IV DE LAS Y LOS AFILIADOS

Capítulo Único De las listas de afiliadas y afiliados

47. Habrá dos tipos de listas de afiliados:

- a) Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas estatales o distritales realizadas; y
- b) Las listas de las y los afiliados con que cuenta la organización en el resto del país. Estas listas a su vez, procederán de dos fuentes distintas:
 - b.1) Aplicación informática; y
 - b.2) Régimen de excepción.

El número total de las y los afiliados con que deberá contar una organización para ser registrada como Partido Político, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del Padrón Electoral Federal señalado en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 12 de la LGPP, el cual corresponde a 233,945 (doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco) afiliados, para el proceso de registro de partidos políticos 2019-2020.

48. No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación exigido para obtener el registro como Partido Político, los registros que se ubiquen en los supuestos siguientes:

- a) Cuando no sea posible localizar en el padrón electoral los datos aportados por la organización;
- b) Aquellas que **tengan más de un año de antigüedad dentro del partido político en formación o que no** correspondan al proceso de registro en curso.

- c) Las que sean presentadas en más de una ocasión por una misma organización, supuesto en el cual sólo se contabilizará una afiliación.
- d) Las personas cuya situación registral se ubique dentro de los supuestos establecidos en el catálogo de bajas del Padrón Electoral.
- e) Las de las personas que al momento de la asamblea hubiesen presentado el comprobante de solicitud ante el Registro Federal de Electores y que, habiéndose cumplido la fecha para recoger la credencial para votar, no lo hayan hecho.
- f) Las que hayan sido recabadas mediante el régimen de excepción en municipios distintos a los establecidos para tal efecto.
- g) Las señaladas en los numerales 83 y 91 del presente Instructivo.

Las personas que participaron en una asamblea que no corresponde al ámbito estatal o distrital del domicilio asentado en su credencial para votar, así como aquellas cuyos datos asentados no correspondan con los que obran en el padrón electoral, serán descontadas del total de participantes a la asamblea respectiva; no obstante, en el primer caso citado, se deja a salvo su derecho de afiliación a efecto de ser contabilizadas para la satisfacción del requisito mínimo de afiliación previsto en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 10 de la LGPP en caso de satisfacer los requisitos para tal efecto.

49. En todos los casos las listas de afiliadas y afiliados deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Apellidos paterno y materno, nombre (s);
- b) Domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio y entidad);
- c) Clave de elector;
- d) Folio de la credencial para votar (OCR); y
- e) Estar sustentadas por las respectivas manifestaciones.

50. Las listas a la que se refiere el inciso a) del numeral 47 del presente Instructivo, serán elaboradas por las y los Vocales designados, conforme a los datos obtenidos durante la celebración de las asambleas estatales o distritales y según lo establecido en el capítulo VI del presente Instructivo.
51. Las listas a las que se refieren los incisos b.1) y b.2) del numeral 47 del presente Instructivo, serán elaboradas por la organización, de conformidad con los procedimientos que se describen en los dos títulos subsecuentes.
52. Se tendrá por no presentada la lista de afiliados que sea exhibida en cualquier formato o sistema de cómputo distintos a los señalados en el presente Instructivo.

TÍTULO V DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

Capítulo Primero

Del registro de la organización en el Portal *web* de la aplicación móvil

53. Una vez que haya resultado procedente la notificación de intención presentada por la organización, y dentro de los 5 días siguientes, la DEPPP procederá a capturar en el Portal *web* de la aplicación móvil, la información de cada una de las organizaciones.
54. Hecho lo anterior, se enviará a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la organización, la confirmación de su registro de alta en el Portal *web*, un número identificador (Id Solicitante), un usuario y un botón que contiene la liga del Portal *web* para que pueda ingresar.

Capítulo Segundo Del uso del Portal *web*

55. La organización podrá hacer uso del Portal *web* de la aplicación móvil para:
 - a) Dar de alta y de baja a sus Auxiliares.
 - b) Consultar el avance de la información recabada que estará sometida a revisión del documento base que es la credencial para votar.

- 56.** Para ingresar al Portal *web* lo hará con el usuario que le fue proporcionado y con la contraseña que utiliza para autenticarse en la cuenta de correo que proporcionó en su escrito de notificación de intención.

Capítulo Tercero

Del registro de las y los auxiliares

- 57.** Para dar de alta a sus auxiliares, la organización deberá remitir previamente por escrito dirigido a la DEPPP, los datos siguientes:
- a) Nombre (s);
 - b) Apellido Paterno;
 - c) Apellido Materno;
 - d) Fecha de nacimiento;
 - e) Número telefónico;
 - f) Clave de elector;
 - g) Correo electrónico asociado a Google o Facebook, especificando a cuál de ellos se encuentra vinculado; y

Asimismo, deberá adjuntar copia de la credencial para votar de cada uno de sus auxiliares y la responsiva firmada por cada uno de éstos donde manifiesten tener conocimiento de las obligaciones sobre el tratamiento de los datos personales recabados y la carta firmada de aceptación de recibir notificaciones vía correo electrónico en relación con los procedimientos establecidos en el presente Instructivo.

Una vez que los datos anteriores sean verificados y se tenga la validación, la organización estará en condiciones de dar de alta a sus auxiliares en el Portal *Web* y de iniciar con la obtención de las manifestaciones.

- 58.** Cada Auxiliar únicamente podrá recabar afiliaciones para una sola organización habiendo cumplido los requisitos señalados en el numeral anterior. La DEPPP verificará al momento de la entrega de esta información que se trate de una persona que no haya sido acreditada previamente por otra organización. En caso de que un Auxiliar recabe y envíe afiliaciones de una organización para la cual no obtuvo la autorización de la DEPPP, éstas no serán contabilizadas y se estará a lo señalado en el numeral 61.

- 59.** Dentro de los 5 días hábiles siguientes, la DEPPP constatará que haya sido remitida la información completa a que se refiere el numeral anterior. De ser así, mediante oficio dirigido a la organización, le indicará que ya se encuentra en aptitud de capturar en el módulo correspondiente del Portal Web, los datos referidos.
- 60.** Una vez que la organización realice el registro del Auxiliar, este último recibirá de manera inmediata en su cuenta de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar las afiliaciones correspondientes a la organización. A efecto de evitar confusión, la aplicación móvil que deberá ser utilizada para este proceso, es la identificada en color rosa para el ámbito federal denominada “Apoyo Ciudadano – INE”.
- 61.** Dentro de los primeros 5 días de cada mes, la DEPPP verificará la lista de auxiliares dados de alta por la organización a efecto de constatar, por un lado, que la información referida en el numeral 57 ha sido remitida a dicha instancia y por el otro, que el Auxiliar no haya sido acreditado previamente por otra organización. En caso de no haber entregado la documentación correspondiente, mediante oficio requerirá a la organización a efecto de que, en el plazo de 5 días hábiles contado a partir de la notificación, remita la información requerida. Agotado este último plazo sin recibir los datos requeridos o cuando se trate de auxiliares previamente acreditados por otra organización, y en caso de que el auxiliar hubiera empezado a recabar las manifestaciones antes de ser registrado en el Portal Web, la DERFE procederá a darlo de baja en el Portal web al auxiliar que se ubique en ese supuesto, lo que tendrá como consecuencia que la información recabada, dejará de ser considerada para el número mínimo requerido por la Ley sin importar su estatus.

Si al concluir el plazo para el registro de datos a través de la aplicación móvil la información referida en el numeral 57 del presente Instructivo no ha sido remitida a la DEPPP, los registros cargados por los auxiliares ubicados en tal supuesto, serán en definitiva señalados como registros no válidos.

Capítulo Cuarto

Del uso de la Aplicación Móvil para recabar las afiliaciones en el resto del país

- 62. La o el Auxiliar deberá autenticarse en la aplicación móvil para acceder a ésta; le solicitará la creación de una contraseña, la cual será de **uso exclusivo para cada Auxiliar** y, a partir de ello, podrá recabar la información concerniente a las afiliaciones en el resto del país, para lo cual podrá hacer uso de más de un dispositivo móvil. No obstante, el uso de la aplicación, la contraseña y la información que recabe, queda bajo la más estricta responsabilidad de la o el auxiliar registrado ante la DEPPP, así como de la organización.
- 63. La aplicación móvil contendrá los datos de la organización en el momento que la o el Auxiliar se autentique a través de ésta.
- 64. El envío de los registros recabados podrá realizarse durante las 24 horas del día.
- 65. La DEPPP brindará capacitación a las organizaciones, así como al personal designado por la misma sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal *web*. Asimismo, pondrá a disposición el material didáctico en la página del Instituto.

Capítulo Quinto

De la obtención de las afiliaciones a través de la Aplicación Móvil

- 66. La o el Auxiliar ingresará a la aplicación móvil para recabar las afiliaciones en el resto del país.
- 67. La información correspondiente a la organización que se mostrará en la Aplicación móvil es la siguiente:
 - a) Nombre; y
 - b) Emblema.
- 68. La o el Auxiliar identificará visualmente y seleccionará en la Aplicación móvil el tipo de Credencial para Votar que emite este Instituto y que la o el ciudadano presente en original al manifestar su afiliación a la organización.

- 69.** La o el Auxiliar, a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía del anverso y reverso del original de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que se afilia.
- 70.** La o el Auxiliar deberá seleccionar el recuadro que corresponda a la presentación de la Credencial para Votar original que la o el ciudadano exhiba en ese momento para hacer su manifestación formal de afiliación. De no ser así, no podrá avanzar con la siguiente etapa del proceso de captación de la afiliación.
- 71.** La o el Auxiliar, deberá verificar que las imágenes captadas sean legibles; particularmente por lo que hace a la fotografía, la clave de elector, la firma, el OCR, el CIC, el código QR y el código de barras.
- 72.** La Aplicación móvil realizará una captura del código QR o del código de barras, según el tipo de credencial del que se trate, a efecto de obtener el nombre completo, clave de elector y CIC de la credencial para votar de la persona que se afilia.
- 73.** La o el Auxiliar visualizará a través de la aplicación móvil los datos obtenidos del proceso de captura, mismos que no serán editables.
- 74.** La o el Auxiliar solicitará a la persona que se afilia la captura de la fotografía de su rostro a través de la Aplicación móvil, a efecto de que esta autoridad cuente con los elementos necesarios para constatar la autenticidad de la afiliación. En caso de negativa de la o el ciudadano, no podrá continuar con el procedimiento de obtención de la manifestación formal de afiliación.
- 75.** La o el Auxiliar solicitará a quien se afilie que ingrese su firma autógrafa a través de la Aplicación móvil en la pantalla del dispositivo.
- 76.** Una vez realizado lo indicado en el numeral anterior, al seleccionar el botón siguiente, la Aplicación móvil guardará de manera exitosa el registro, mostrando un mensaje con el número de folio de la afiliación guardada. El auxiliar deberá seleccionar “continuar” para seguir utilizando la aplicación.
- 77.** Todos los datos que sean capturados a través de la Aplicación móvil para la afiliación, se almacenarán con un mecanismo de cifrado de seguridad de información.

78. Para realizar el envío de las manifestaciones recabadas hacia el servidor central del Instituto, la o el Auxiliar deberá contar con algún tipo de conexión a Internet (celular u otra) en el dispositivo donde se encuentre la aplicación móvil, para que, a través de la funcionalidad de envío de datos, los registros capturados sean transmitidos al servidor central de este Instituto.
79. El envío de los registros recabados deberá llevarse a cabo a más tardar a las 24 horas siguientes del día en que sea presentada la solicitud de registro de la organización.
80. Una vez recibida la información en el servidor central del Instituto, el sistema emitirá un acuse de recibo a la o el Auxiliar, mismo que se enviará a su correo electrónico y el cual contendrá un código de integridad de cada uno de los registros que han sido cargadas al sistema, con el nombre de la ciudadana o del ciudadano que manifestó su interés de afiliarse a la organización. Además, señalará el número de registros recibidos y el folio de cada registro. Los acuses de recibo no contendrán datos personales, salvo el nombre de la o el ciudadano que suscribió la manifestación formal de afiliación a favor de la organización, para salvaguardar el principio de certeza.
81. Al ser recibida por el Instituto la información recabada, ésta se borrará de manera definitiva del dispositivo móvil.

Capítulo Sexto

De la verificación del número de afiliaciones obtenidas a través de la Aplicación Móvil

82. En el servidor central, ubicado en las instalaciones del Instituto, se recibirá la información recabada, transmitida desde los dispositivos móviles, por parte de la o el Auxiliar.
83. Todos los registros recibidos serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto desde el 1 de febrero de 2019 para la revisión de la información captada por las y los Auxiliares mediante la aplicación móvil, de las manifestaciones formales de afiliación; es decir, contra el documento base de ésta que es el original de la credencial para votar que emite este Instituto a favor de la ciudadanía, verificando que esos datos sean idénticos a los mostrados en la captura de la App. El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el Portal web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido en la Mesa de Control, salvo en el caso de que los registros

sean recibidos los últimos 10 días del mes de enero de 2020, en cuyo caso, la DEPPP contará con 20 días adicionales para su revisión.

84. En la Mesa de Control se considerarán como no válidos los registros siguientes:

- a) Aquellos cuya imagen no corresponda con el original de la credencial para votar que emite este Instituto a favor de la persona que se afilia;
- b) Aquellos cuya imagen del original de la credencial para votar que emite esta autoridad corresponda únicamente al anverso o reverso de la misma;
- c) Aquellos cuyo anverso y reverso no correspondan al original de la misma credencial para votar que emite este Instituto;
- d) Aquellos cuyo anverso y reverso sean de distintas credenciales para votar que emite este Instituto;
- e) Aquellos cuya imagen de la credencial para votar corresponda a una fotocopia sea en blanco y negro o a colores y, por ende, no corresponda al original de la credencial para votar que emite esta autoridad electoral;
- f) Aquellos cuya supuesta imagen de la credencial para votar no haya sido obtenida directamente del original de la credencial para votar que emite este Instituto y que debió ser presentada en físico al momento de la manifestación formal de afiliación de la ciudadanía;
- g) Aquellos cuya imagen de la credencial para votar que emite esta autoridad sea ilegible en los elementos descritos en el numeral 71 del presente Instructivo;
- h) Aquellos cuya fotografía viva (presencial) no corresponda con la persona a la que le pertenece la credencial para votar que emitió este Instituto a su favor, de conformidad con la comparación contra los datos biométricos con lo que se cuenta en el padrón electoral.
- i) Aquellos cuya fotografía no corresponda a una persona o siendo una persona, la imagen no haya sido tomada directamente de quien se afilie a la organización.
- j) Aquellos que no se encuentren respaldados por la firma, respecto de lo cual carecerá de validez un punto, una línea, una cruz, una paloma o una "X", y en general cualquier signo o símbolo, cuando no sea éste el que se encuentra plasmado en la credencial para votar.
- k) Aquellos en los que en la firma se plasme el nombre de una persona distinta a la que pertenece la imagen del original de la credencial para votar, siempre y cuando no sea el que se haya plasmado en ella;

85. La aplicación móvil estará disponible a partir del 1 de febrero de 2019; no obstante, la organización podrá iniciar a recabar la información que permita verificar las afiliaciones a partir del día siguiente al que la DEPPP le haya informado sobre la procedencia de su notificación de intención y haya dado de alta a sus auxiliares.
86. Los archivos que se generen a partir de la Aplicación móvil sustituyen a la manifestación formal de afiliación exigida por la Ley, dado que permite contar con la información requerida por la normatividad correspondiente.
87. La DERFE realizará la verificación de la situación registral de las personas cuyos datos fueron captados a través de la aplicación móvil en la base de datos del padrón electoral vigente al 31 de enero de 2020. El resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos, a más tardar dentro de los 25 días siguientes a la recepción de la solicitud de registro.

TÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Capítulo Primero Condiciones

88. La organización podrá optar —de forma adicional al uso de la aplicación informática— por el régimen de excepción, es decir, recabar la información concerniente a la manifestación formal de afiliación mediante manifestación física en las secciones localizadas en municipios identificados como de muy alta marginación y que publique el Instituto en su página electrónica. Asimismo, se podrá optar por la recolección en papel en aquellas localidades en donde la autoridad competente declare situación de emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto de la aplicación, únicamente durante el período en que se mantenga la emergencia.
89. Para tales efectos, en los municipios y localidades en los que resulta aplicable el régimen de excepción, sólo podrán recabarse la información de las afiliaciones de ciudadanas o ciudadanos cuyo domicilio se ubique en ellos.

Capítulo Segundo

Del formato de manifestación para afiliados en el resto del país

- 90.** En el presente apartado se establecen únicamente los requisitos que deben contener las manifestaciones de las personas que se registren en los municipios en los que sea aplicable el régimen de excepción.
- 91.** Las manifestaciones deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 2 del Acuerdo por el que fue aprobado el presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:
- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en formación;
 - b) En tamaño media carta;
 - c) Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;
 - d) Ordenadas alfabéticamente y por entidad federativa;
 - e) Contener los siguientes datos del afiliado: apellido paterno, apellido materno, y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio), entidad federativa, clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), firma autógrafa o huella digital del ciudadano;
 - f) Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, voluntaria e individual a la organización con intención de obtener el registro como Partido Político;
 - g) Contener, debajo de la firma de la o el ciudadano, la siguiente leyenda:
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como partido político nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2019-2020”;
 - h) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país bajo el régimen de excepción; y

- i) Contener el aviso de privacidad simplificado.
- 92.** No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación exigido para obtener el registro como Partido Político, las manifestaciones formales de afiliación que carezcan de alguno de los datos descritos en los incisos a), e), f) y g) del numeral anterior del presente Instructivo. Tampoco se contabilizarán las manifestaciones que se entreguen en papel y que correspondan a ciudadanas y ciudadanos cuyo domicilio no se ubique en los municipios y localidades en los que no resulte aplicable el régimen de excepción.

Capítulo Tercero

De la captura en el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP)

- 93.** Con el fin de contener en una sola base de datos la información de la totalidad de las y los afiliados a las organizaciones, éstas deberán llevar a cabo la captura de datos de sus afiliados en el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP), diseñado al efecto por la UNICOM, en coordinación con la DERFE y la DEPPP; el cual estará disponible a partir del 1° de febrero de 2019.
- 94.** A partir de esa fecha y una vez que la DEPPP haya aceptado su notificación, el o los representantes de la organización, debidamente acreditados, deberán solicitar, mediante escrito dirigido a la DEPPP, la clave de acceso correspondiente y la guía de uso sobre el referido sistema, mismos que serán entregados posteriormente y de manera personal en las instalaciones de la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento de la DEPPP.

TÍTULO VII DE LA DOBLE AFILIACIÓN

Capítulo Primero De los afiliados a más de una Organización

- 95.** La DEPPP, a través del Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP) realizará un cruce de las y los afiliados válidos de cada Organización contra los de las demás organizaciones en proceso de

constitución como partido político nacional. En caso de identificarse duplicados entre ellas, se estará a lo siguiente:

- a) Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se encuentre a su vez como válido en una asamblea de otra Organización, prevalecerá su manifestación de afiliación en la asamblea de fecha más reciente y no se contabilizará en la más antigua.
- b) Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se identifique como válido en los afiliados del resto del país, bajo el régimen de excepción o a través de la aplicación móvil, de otra Organización se privilegiará su afiliación en la asamblea.
- c) Cuando una o un afiliado de una Organización en el resto del país —a través de la aplicación móvil o bajo régimen de excepción— se localice como válido en el resto del país de otra Organización, prevalecerá la afiliación de fecha más reciente. De ser el caso de que ambas manifestaciones sean de la misma fecha, el Instituto, a través de la Junta Distrital más cercana, consultará al ciudadano para que manifieste en qué Organización desea continuar afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, la afiliación dejará de ser válida para ambas organizaciones.

Capítulo Segundo

De las y los afiliados a una Organización y uno o más partidos políticos

- 96.** La DEPPP, a través del Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP), realizará un cruce de las y los afiliados válidos de cada Organización contra los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales y locales con registro vigente. Para tales efectos se considerarán los padrones verificados y actualizados al mes anterior a la fecha de la celebración de la asamblea y, en el caso de las y los afiliados en el resto del país —a través de la aplicación móvil o bajo régimen de excepción—, con corte al 31 de enero de 2020. En caso de identificarse duplicados entre ellos, se estará a lo siguiente:
- a) La DEPPP dará vista a los partidos políticos correspondientes a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto, en el caso de partidos políticos nacionales, o de su Comité Estatal o equivalente, tratándose de partidos políticos locales, para que en el plazo de 5 días

hábiles presenten el original de la manifestación de la o el ciudadano de que se trate.

- b) Si el partido político no da respuesta al requerimiento o no presenta el original de la manifestación, la afiliación se contará como válida para la Organización. El partido político deberá dar de baja de la base de datos de su padrón de afiliados las duplicidades y deberá informar a la DEPPP para mantener los padrones actualizados.
- c) Si el partido político sí da respuesta y presenta el original de la manifestación, se procederá como sigue:
 - c.1) Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una asamblea de la Organización con el padrón de afiliados del partido y la afiliación a éste es de la misma fecha o anterior a la asamblea, se privilegiará la afiliación a la asamblea.
 - c.2) Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una asamblea de la Organización con el padrón de afiliados del partido y la afiliación a éste es de fecha posterior a la asamblea, el Instituto consultará a la o el ciudadano, a través de la Junta Distrital más cercana, para que manifieste en qué Organización o partido político desea continuar afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, prevalecerá la afiliación de fecha más reciente.
 - c.3) Si la duplicidad se presenta por cuanto a una o un afiliado de la Organización en el resto del país —a través de la aplicación móvil o bajo régimen de excepción— con el padrón de afiliados de un partido político, el Instituto consultará a la o el ciudadano, a través de la Junta Distrital más cercana, conforme al procedimiento señalado en el sub inciso anterior. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, prevalecerá la afiliación de fecha más reciente.

En los términos de los incisos anteriores, las y los afiliados a las organizaciones que se hubiesen encontrado duplicados con los partidos políticos nacionales o locales con registro vigente serán dados de baja a partir de la notificación que realice la DEPPP.

TÍTULO VIII
DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA
Capítulo Primero
De la solicitud

97. En todo momento, las organizaciones tendrán acceso al Portal *web* de la Aplicación móvil, así como al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP), en los cuales podrán verificar los reportes que les mostrarán el número de manifestaciones cargadas al sistema y los nombres de quienes las suscribieron, así como el estatus de cada una de ellas.
98. Las y los representantes de las organizaciones —previa cita— podrán manifestar ante la DEPPP lo que a su derecho convenga, únicamente respecto de aquellas afiliaciones que no hayan sido contabilizadas de conformidad con lo establecido en el numeral 48 del presente Instructivo. Lo anterior, una vez que hayan acreditado haber reunido al menos la mitad del número mínimo de asambleas requeridas por la Ley para su registro y hasta el 15 de enero de 2020.
99. Para tal efecto, la organización deberá solicitar por escrito a la DEPPP la asignación de fecha y hora para llevar a cabo la revisión de la información relativa a los registros que no hayan sido contabilizados. La DEPPP asignará fecha y hora para dicha revisión e informará a la organización el número de equipos de cómputo que serán utilizados para esos fines, a efecto de que la organización determine el número de personas que le apoyarán durante la revisión.

Las y los representantes de la organización y las personas que le apoyarán durante la revisión de la información de los registros, deberán presentarse con al menos 30 minutos de anticipación a la hora fijada para el inicio de la diligencia y deberán presentar el original de su identificación oficial con fotografía.

Los registros serán revisados a través de la visualización en el sistema de cómputo respectivo de la información remitida por la organización. En dicho sistema se mostrará el nombre de la persona afiliada y la causa por la cual no ha sido contabilizada conforme a lo establecido en el presente Instructivo. Cada registro será revisado en presencia de los representantes o personas designadas por la organización quienes, con la finalidad de manifestar lo que a su derecho convenga, podrán tomar imágenes de las pantallas que se

revisen debiendo proteger los datos personales en ellas contenidos. Asimismo, se dejará constancia en el acta que al efecto se emita, sobre los registros cuyas imágenes fueron obtenidas por la organización, mismas que sólo podrán ser utilizadas por la misma para formular aclaraciones a esta autoridad tendientes a acreditar la validez de la afiliación respectiva.

Se levantará un acta de la diligencia, en la cual la organización, en ejercicio de su garantía de audiencia, podrá manifestar lo que a su derecho convenga en relación con la revisión realizada. Asimismo, se adjuntará al acta un reporte con los datos de los registros revisados, su estatus y, en su caso, si la revisión y las manifestaciones realizadas por la organización implicaron alguna modificación de estatus, la cual también deberá ser firmada por las representaciones de las organizaciones y las y los funcionarios de la DEPPP que hayan intervenido.

100. De forma adicional a lo previsto en el numeral 97, a más tardar 40 días posteriores a la presentación de la solicitud de registro, la DEPPP le informará a la organización el número preliminar de afiliadas y afiliados recabados, así como su situación registral. A partir de ese momento, las organizaciones, durante los 5 días subsecuentes, podrán ejercer su garantía de audiencia únicamente respecto de los registros que no hayan sido revisados en alguna otra sesión o, si ya hubiesen sido revisados, sólo podrá manifestarse respecto de su situación registral en el padrón electoral.

Capítulo Segundo

De la forma de subsanar registros no contabilizados

101. Para que los registros que se encuentren dados de baja del padrón electoral por “Suspensión de Derechos Políticos”, puedan ser considerados válidos, será necesario que la organización presente original o copia certificada de documento expedido por autoridad competente que acredite que la persona se encontraba rehabilitada en sus derechos políticos a la fecha de celebración de la asamblea o al 31 de enero de 2020, si se tratare de afiliados en el resto del país. Asimismo, deberá acreditarse haber solicitado su actualización en el Registro Federal de Electores.
102. A fin de que los registros que se ubiquen como dados de baja por “Cancelación de trámite” o “Duplicado en padrón electoral”, puedan ser considerados válidos, será preciso que la organización presente copia fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo trámite ante el

Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción vigente en el padrón electoral.

- 103.** A efecto de que los “Registros no encontrados”, puedan ser considerados válidos es menester que la organización proporcione los datos correctos vigentes de la persona afiliada para realizar una nueva búsqueda en el padrón electoral.

TÍTULO IX DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS

Capítulo Único De su contenido

- 104.** La Declaración de Principios deberá contener los requisitos mínimos establecidos en el artículo 37 de la LGPP:
- a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
 - b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;
 - c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de los ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la LGPP prohíbe financiar a los partidos políticos;
 - d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; y,
 - e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.
- 105.** El Programa de Acción deberá determinar las medidas establecidas en el artículo 38 de la LGPP para:
- a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;
 - b) Proponer políticas públicas;
 - c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes; y,
 - d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

106. Los Estatutos deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 39 y 43 de la LGPP, en relación con los artículos 29, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 85, 89 y 94 de la misma ley, así como en las Jurisprudencias 3/2005 y 20/2018 sostenidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

I. Datos de identificación como Partido Político:

- a) La denominación del Partido Político; y,
- b) El emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos.

La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales.

II. Formas de afiliación:

- a) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;
- b) Los derechos y obligaciones de sus militantes que deberán puntualmente cumplir con el contenido en los artículos 40 y 41 de la LGPP;
- c) Las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades;
- d) La protección de los derechos fundamentales de las y los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son: voto activo y pasivo en condiciones de igualdad; el derecho a la información; la libertad de expresión; y el libre acceso y salida de los afiliados del partido;
- e) La forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos; y,
- f) La obligación de llevar un registro de afiliados del Partido Político.

III. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el Partido Político, incluyendo como órganos internos cuando menos, los siguientes:

- a) Una Asamblea Nacional u órgano equivalente, como principal centro decisor del Partido Político, el cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas, integrado con representantes de todas las entidades federativas o, cuando no sea posible, con un gran número de delegados o representantes;

- b) Un Comité Nacional u órgano equivalente, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;
- c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;
- d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;
- e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente de los órganos de dirección del partido, imparcial y objetivo;
- f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos;
- g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes;
- h) Contar con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas;
- i) Precisar el órgano encargado de solicitar al Instituto Nacional Electoral en su caso que organice la elección de sus órganos de dirección; y,
- j) Precisar el órgano encargado de aprobar coaliciones, frentes y fusiones, plataformas electorales y programas de gobierno correspondientes.

IV. Mecanismo de justicia interna que contemple cuando menos:

- a) El sistema de justicia intrapartidaria deberá tener una sola instancia;
- b) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones;
- c) Establecer mecanismos alternativos de solución de controversias;
- d) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas; y,
- e) El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas.

V. Asimismo, deberá contemplar las normas que determinen:

- a) Los actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, respecto a sus asuntos internos;
- b) Las normas que establezcan las funciones, facultades y obligaciones de los órganos internos;
- c) Los procedimientos para la integración y renovación periódica de los órganos internos, salvaguardando el principio de paridad de género, así como las acciones afirmativas;
- d) Los procedimientos democráticos para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, salvaguardando el principio de paridad de género, así como las acciones afirmativas;
- e) Los procedimientos especiales por medio de los cuales podrán renovarse los órganos de dirección del Partido Político;
- f) El régimen transitorio para la elección de sus órganos estatutarios;
- g) La posibilidad de revocación de cargos;
- h) Las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del Partido Político o públicos;
- i) El establecimiento de períodos cortos de mandato;
- j) La periodicidad con que deban celebrarse las Asambleas y sesiones de sus órganos;
- k) Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de las convocatorias tanto ordinariamente como extraordinariamente;
- l) El quórum de afiliados (as), delegados (as) o representantes necesarios para que sesionen válidamente los órganos estatutarios;
- m) El número mínimo de afiliadas o afiliados que podrá convocar a asamblea nacional o estatal en forma ordinaria y extraordinaria;
- n) La adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido;
- o) Que las elecciones internas se realicen mediante voto directo o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto;
- p) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;
- q) La obligación de sus candidatas y candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen;
- r) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; y,
- s) Los mecanismos de disolución o liquidación en caso de la pérdida de registro como partido político nacional.

TÍTULO X DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUTIVA

Capítulo Único De la asamblea nacional constitutiva

- 107.** La organización deberá informar por escrito a la DEPPP, la fecha, hora y lugar para la celebración de la asamblea nacional constitutiva, con un mínimo de 10 días hábiles previos a su realización, a efecto de que dicha Dirección Ejecutiva designe al funcionario del Instituto encargado de llevar a cabo la certificación de la celebración de la misma, en términos de lo previsto por el inciso b), párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP.
- 108.** En caso de cambio de fecha, hora o lugar para la celebración de la asamblea nacional constitutiva, la organización respectiva deberá informarlo a la DEPPP con al menos 5 días hábiles de anticipación.
- 109.** Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea nacional constitutiva, la o el Vocal designado entregará a la DEPPP el acta de certificación de dicha asamblea, misma que contendrá como anexos la lista de asistencia de las y los delegados elegidos en las asambleas estatales y distritales, y un ejemplar de los documentos básicos aprobados por ésta, debidamente sellados, foliados y rubricados por el Vocal designado.
- 110.** A fin de contar con el acta de la Asamblea Nacional Constitutiva, que se integrará al expediente de solicitud, antes del vencimiento del plazo previsto para su presentación, las asambleas nacionales constitutivas deberán celebrarse a más tardar el 29 de enero de 2020.
- 111.** No se requerirá acreditar por medio de las actas correspondientes que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito por el inciso a) del artículo 12, de la LGPP, toda vez que las y los Vocales designados certificaron su celebración y remitieron el acta respectiva a la DEPPP para integrar el expediente de registro del Partido Político en formación. Asimismo, tampoco será necesario verificar la residencia de las y los delegados durante la celebración de la asamblea nacional constitutiva puesto que la misma se llevó a cabo conforme fueron certificadas las asambleas estatales o distritales.

- 112.** Las listas de afiliados con los demás militantes con que cuente la organización en el país, no se certificará en el momento de celebración de la asamblea nacional constitutiva, ya que para tales efectos se estará a lo dispuesto en los títulos III, IV, V, VI, VII y VIII del presente Instructivo.

TÍTULO XI DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Capítulo Único Plazos y requisitos

- 113.** La organización deberá presentar por escrito ante la DEPPP la solicitud de registro dentro del periodo comprendido del 6 al 31 de enero del año 2020, en días y horas hábiles, acompañada de la siguiente documentación:
- a) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos aprobados por sus miembros en la asamblea nacional constitutiva, en medio impreso y en medio magnético (en archivo de Word).
 - b) Manifestación firmada por la o el representante legal de la organización, en la que señale que las listas de afiliados con los que cuente la organización en el país a las que se refiere el inciso b), fracción V, del párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP han sido remitidas a este Instituto a través de la aplicación informática o cargadas al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos.
 - c) Las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los registros recabados mediante el régimen de excepción. Las manifestaciones se entregarán en cajas selladas, numeradas con respecto al total de cajas entregadas; ordenadas alfabéticamente y por entidad federativa, y siguiendo el orden progresivo de sus respectivas listas.
 - d) Toda vez que el expediente de las actas de asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales, según corresponda, y la de su asamblea nacional constitutiva, debidamente certificadas por el Vocal designado ya obra en los archivos de la DEPPP, se tendrá por cumplido el requisito a que se refiere el artículo 15, párrafo 1, inciso c) de la LGPP.

En ningún caso se aceptará integrar al expediente documentación alguna fuera del plazo establecido.

- 114.** Si de los trabajos de revisión de la documentación presentada junto con la solicitud de registro resulta que no se encuentra debidamente integrada o presenta omisiones, dicha circunstancia lo comunicará la DEPPP por escrito a la organización a fin de que, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga.
- 115.** En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el mes de enero de 2020, dejará de tener efecto la notificación formulada.
- 116.** De ser el caso, la DEPPP, en el acto de la recepción de solicitudes, informará al o a los representantes legales de la organización la fecha en que deberá presentarse a la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento de la DEPPP, a efecto de que, en presencia de un máximo de tres representantes legales de la organización acreditados ante el Instituto, se abran las cajas que contienen las manifestaciones formales de afiliación autógrafas y se proceda a contabilizarlas, levantando un acta que será firmada por las y los presentes y que formará parte integral del expediente.
- 117.** Si una vez contabilizadas las manifestaciones conforme a lo señalado en el presente Instructivo, y levantada el acta correspondiente por la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, se constata que éstas no se encuentran debidamente ordenadas en los términos previstos por el presente Instructivo, se le informará mediante escrito a la organización, a través de su o sus representantes legales acreditados, para que concurra a las instalaciones del Instituto a ordenar las manifestaciones. Esta actividad será realizada en presencia de una o un funcionario de la Dirección mencionada.
- 118.** Una vez concluido el proceso de registro, la documentación que haya presentado cada organización será resguardada por el Instituto hasta por un máximo de 6 meses, excepto aquella cuya resolución haya sido impugnada, así como la que se encuentre albergada en el sistema, misma que se conservará como documentación soporte presentada por la organización para la obtención de su registro como Partido Político Nacional. Si transcurrido dicho plazo, la documentación no ha sido retirada por los interesados, la misma será destruida sin responsabilidad para el Instituto, conforme al procedimiento establecido en la normatividad aplicable.

De igual forma, la documentación que obre en posesión de los auxiliares o la organización deberá ser destruida en un plazo no mayor a tres meses una vez concluido el proceso de registro o de la resolución en caso de ser impugnada, conforme a la normatividad y los procedimientos aplicables.

TÍTULO XII DE LA RESOLUCIÓN

Capítulo Único Del plazo para resolver

- 119.** Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Partido Político establecido en el párrafo 1, del artículo 15 de la LGPP, el Secretario Ejecutivo rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que solicitaron su registro como Partido Político.
- 120.** El día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, comenzará a computarse el plazo de 60 días al que se refiere el párrafo 1 del artículo 19 de la LGPP.
- 121.** La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos podrá implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento cabal de todos los requisitos de Ley por parte de las organizaciones, previa fundamentación y motivación.
- 122.** La DEPPP, con base en los resultados obtenidos de los análisis descritos, formulará el proyecto de dictamen de registro, lo remitirá al Secretario Ejecutivo para que, previo conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, éste a su vez lo someta a consideración del Consejo General el que resolverá sobre el otorgamiento de registro como Partido Político, en un plazo que no exceda de 60 días hábiles contados a partir de la presentación del informe referido en el numeral 119 del presente Instructivo.
- 123.** La DEPPP contará en todo momento con el apoyo técnico de la DERFE, de la UTF, de la UNICOM, y de los órganos desconcentrados del Instituto, para desarrollar las actividades señaladas en el presente Instructivo.

- 124.** Será facultad de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos desahogar las consultas que con motivo del presente Instructivo se presenten ante el Instituto, y solicitar la publicación de las contestaciones a las consultas realizadas por las organizaciones, en la página electrónica del Instituto.

TÍTULO XIII DE LA FISCALIZACIÓN

Capítulo Único

De la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que obtenga la organización.

- 125.** Las y los representantes legales o responsables del órgano de finanzas de cada una de las organizaciones, entregarán sus informes mensuales a la UTF, dentro de los primeros 10 días siguientes a que concluya el mes.
- 126.** La obligación de las organizaciones comienza a partir del mes siguiente en que notifiquen al Instituto su propósito de constituirse como Partido Político, y hasta que el Consejo General resuelva lo conducente sobre la solicitud de registro.
- 127.** El informe y la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los informes, se presentará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización o en su caso por lo definido por la Comisión de Fiscalización del Instituto.
- 128.** Los informes mensuales se elaborarán de conformidad con lo establecido en el formato "IM-4-OC"-DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS contenido en el acuerdo CG85/2012.
- 129.** Las organizaciones deberán realizar los siguientes avisos a la UTF:
- a) A más tardar dentro de los siguientes diez días posteriores a su solicitud de registro ante el Instituto, el nombre completo del responsable de finanzas, el domicilio y número telefónico de la Organización. En caso de que existan modificaciones en los responsables, se deberá avisar dentro de los siguientes diez días en que ocurra.

b) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento.

- 130.** Las Organizaciones, anexo al informe que presente, deberán presentar lo manifestado en el artículo 274 del Reglamento de Fiscalización.
- 131.** Los informes mensuales se presentarán en las oficinas que ocupa la UTF, sita en Calle de Moneda número 64, Primer Piso, Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, correo electrónico: unidad.fiscalizacion@ine.mx, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes (días y horas hábiles).
- 132.** El área encargada de revisar los informes mensuales presentados por las organizaciones será la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la UTF.
- 133.** La DEPPP hará del conocimiento de la UTF y con tiempo suficiente sobre las notificaciones de intención de las organizaciones que hubieran resultado procedentes.
- 134.** La UTF hará del conocimiento de la DEPPP sobre aquellas organizaciones que hubiesen incumplido con la obligación de presentar los informes a que se refiere el presente apartado.

ANEXO DOS

[Emblema de la organización]

[Etiqueta que emite el sistema]

[Nombre preliminar del partido político en formación]

DATOS DEL AFILIADO:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

FECHA DE AFILIACIÓN (día, mes, año) **201**

DOMICILIO:

CALLE

NO.EXT.

NO. INT.

COLONIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO

ENTIDAD

CLAVE DE ELECTOR:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOLIO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera libre, e individual a [nombre preliminar del partido político en formación]

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL AFILIADO

Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro como partido político nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2019-2020.

[Aviso de privacidad]



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
1	Chiapas	7004	Altamirano	Muy alto
2	Chiapas	7005	Amatán	Muy alto
3	Chiapas	7007	Amatenango del Valle	Muy alto
4	Chiapas	7014	El Bosque	Muy alto
5	Chiapas	7022	Chalchihuitán	Muy alto
6	Chiapas	7023	Chamula	Muy alto
7	Chiapas	7024	Chanal	Muy alto
8	Chiapas	7026	Chenalhó	Muy alto
9	Chiapas	7031	Chilón	Muy alto
10	Chiapas	7039	Huitiupán	Muy alto
11	Chiapas	7052	Las Margaritas	Muy alto
12	Chiapas	7056	Mitontic	Muy alto
13	Chiapas	7058	Nicolás Ruíz	Muy alto
14	Chiapas	7059	Ocosingo	Muy alto
15	Chiapas	7060	Ocotepec	Muy alto
16	Chiapas	7064	Oxchuc	Muy alto
17	Chiapas	7066	Pantelhó	Muy alto
18	Chiapas	7067	Pantepec	Muy alto
19	Chiapas	7075	Las Rosas	Muy alto
20	Chiapas	7076	Sabanilla	Muy alto
21	Chiapas	7077	Salto de Agua	Muy alto
22	Chiapas	7081	Simojovel	Muy alto
23	Chiapas	7082	Sitalá	Muy alto
24	Chiapas	7093	Tenejapa	Muy alto
25	Chiapas	7096	Tila	Muy alto
26	Chiapas	7098	Totolapa	Muy alto
27	Chiapas	7100	Tumbalá	Muy alto
28	Chiapas	7109	Yajalón	Muy alto
29	Chiapas	7110	San Lucas	Muy alto
30	Chiapas	7111	Zinacantán	Muy alto
31	Chiapas	7112	San Juan Cancuc	Muy alto
32	Chiapas	7115	Maravilla Tenejapa	Muy alto
33	Chiapas	7118	San Andrés Duraznal	Muy alto
34	Chiapas	7119	Santiago el Pinar	Muy alto
35	Chihuahua	8007	Balleza	Muy alto
36	Chihuahua	8008	Batopilas	Muy alto
37	Chihuahua	8012	Carichí	Muy alto
38	Chihuahua	8027	Guachochi	Muy alto
39	Chihuahua	8029	Guadalupe y Calvo	Muy alto
40	Chihuahua	8041	Maguarichi	Muy alto
41	Chihuahua	8046	Morelos	Muy alto
42	Chihuahua	8065	Urique	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
43	Chihuahua	8066	Uruachi	Muy alto
44	Durango	10014	Mezquital	Muy alto
45	Durango	10034	Tamazula	Muy alto
46	Guerrero	12002	Ahuacuotzingo	Muy alto
47	Guerrero	12003	Ajuchitlán del Progreso	Muy alto
48	Guerrero	12004	Alcozauca de Guerrero	Muy alto
49	Guerrero	12008	Atenango del Río	Muy alto
50	Guerrero	12009	Atlamajalcingo del Monte	Muy alto
51	Guerrero	12010	Atlixac	Muy alto
52	Guerrero	12012	Ayutla de los Libres	Muy alto
53	Guerrero	12016	Coahuayutla de José María Izazaga	Muy alto
54	Guerrero	12019	Copalillo	Muy alto
55	Guerrero	12020	Copanatoyac	Muy alto
56	Guerrero	12022	Coyuca de Catalán	Muy alto
57	Guerrero	12025	Cuautepec	Muy alto
58	Guerrero	12026	Cuetzala del Progreso	Muy alto
59	Guerrero	12028	Chilapa de Álvarez	Muy alto
60	Guerrero	12032	General Heliodoro Castillo	Muy alto
61	Guerrero	12036	Igualapa	Muy alto
62	Guerrero	12041	Malinaltepec	Muy alto
63	Guerrero	12042	Mártir de Cuilapan	Muy alto
64	Guerrero	12043	Metlatónoc	Muy alto
65	Guerrero	12045	Olinalá	Muy alto
66	Guerrero	12047	Pedro Ascencio Alquisiras	Muy alto
67	Guerrero	12051	Quechultenango	Muy alto
68	Guerrero	12052	San Luis Acatlán	Muy alto
69	Guerrero	12054	San Miguel Totolapan	Muy alto
70	Guerrero	12062	Tlacoachistlahuaca	Muy alto
71	Guerrero	12063	Tlacoapa	Muy alto
72	Guerrero	12065	Tlalixtaquilla de Maldonado	Muy alto
73	Guerrero	12069	Xalpatláhuac	Muy alto
74	Guerrero	12071	Xochistlahuaca	Muy alto
75	Guerrero	12072	Zapotitlán Tablas	Muy alto
76	Guerrero	12073	Zirándaro	Muy alto
77	Guerrero	12074	Zitlala	Muy alto
78	Guerrero	12076	Acatepec	Muy alto
79	Guerrero	12078	Cochoapa el Grande	Muy alto
80	Guerrero	12079	José Joaquín de Herrera	Muy alto
81	Guerrero	12081	Iliatenco	Muy alto
82	Hidalgo	13027	Huehuetla	Muy alto
83	Hidalgo	13078	Xochiatipan	Muy alto
84	Hidalgo	13080	Yahualica	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
85	Jalisco	14019	Bolaños	Muy alto
86	Jalisco	14061	Mezquitic	Muy alto
87	Michoacán de Ocampo	16008	Aguila	Muy alto
88	Michoacán de Ocampo	16092	Tiquicheo de Nicolás Romero	Muy alto
89	Michoacán de Ocampo	16101	Tzitzio	Muy alto
90	Nayarit	18005	Huajicori	Muy alto
91	Nayarit	18009	Del Nayar	Muy alto
92	Nayarit	18019	La Yesca	Muy alto
93	Oaxaca	20007	Asunción Ocotlán	Muy alto
94	Oaxaca	20012	Candelaria Loxicha	Muy alto
95	Oaxaca	20015	Coatecas Altas	Muy alto
96	Oaxaca	20016	Coicoyán de las Flores	Muy alto
97	Oaxaca	20020	Constancia del Rosario	Muy alto
98	Oaxaca	20024	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Muy alto
99	Oaxaca	20027	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Muy alto
100	Oaxaca	20029	Eloxochitlán de Flores Magón	Muy alto
101	Oaxaca	20037	Mesones Hidalgo	Muy alto
102	Oaxaca	20040	Huautepec	Muy alto
103	Oaxaca	20041	Huautla de Jiménez	Muy alto
104	Oaxaca	20048	Magdalena Mixtepec	Muy alto
105	Oaxaca	20050	Magdalena Peñasco	Muy alto
106	Oaxaca	20051	Magdalena Teitipac	Muy alto
107	Oaxaca	20058	Mazatlán Villa de Flores	Muy alto
108	Oaxaca	20065	Ixpantepec Nieves	Muy alto
109	Oaxaca	20069	La Pe	Muy alto
110	Oaxaca	20071	Pluma Hidalgo	Muy alto
111	Oaxaca	20085	San Agustín Loxicha	Muy alto
112	Oaxaca	20088	San Andrés Cabecera Nueva	Muy alto
113	Oaxaca	20095	San Andrés Paxtlán	Muy alto
114	Oaxaca	20099	San Andrés Tepetlapa	Muy alto
115	Oaxaca	20110	San Antonio Sinicahua	Muy alto
116	Oaxaca	20116	San Bartolomé Ayautla	Muy alto
117	Oaxaca	20117	San Bartolomé Loxicha	Muy alto
118	Oaxaca	20124	San Blas Atempa	Muy alto
119	Oaxaca	20126	San Cristóbal Amatlán	Muy alto
120	Oaxaca	20127	San Cristóbal Amoltepec	Muy alto
121	Oaxaca	20134	San Felipe Jalapa de Díaz	Muy alto
122	Oaxaca	20139	San Francisco Chapulapa	Muy alto
123	Oaxaca	20148	San Francisco Ozolotepec	Muy alto
124	Oaxaca	20149	San Francisco Sola	Muy alto
125	Oaxaca	20152	San Francisco Tlapancingo	Muy alto
126	Oaxaca	20155	San Ildefonso Sola	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
127	Oaxaca	20159	San Jerónimo Coatlán	Muy alto
128	Oaxaca	20162	San Jerónimo Taviche	Muy alto
129	Oaxaca	20163	San Jerónimo Tecóatl	Muy alto
130	Oaxaca	20167	San José del Peñasco	Muy alto
131	Oaxaca	20169	San José Independencia	Muy alto
132	Oaxaca	20170	San José Lachiguirí	Muy alto
133	Oaxaca	20171	San José Tenango	Muy alto
134	Oaxaca	20183	San Juan Bautista Tlachichilco	Muy alto
135	Oaxaca	20187	San Juan Coatzacoapam	Muy alto
136	Oaxaca	20189	San Juan Comaltepec	Muy alto
137	Oaxaca	20195	San Juan Diuxi	Muy alto
138	Oaxaca	20209	San Juan Mixtepec	Muy alto
139	Oaxaca	20211	San Juan Ozolotepec	Muy alto
140	Oaxaca	20212	San Juan Petlapa	Muy alto
141	Oaxaca	20214	San Juan Quiotepec	Muy alto
142	Oaxaca	20217	San Juan Tamazola	Muy alto
143	Oaxaca	20225	San Lorenzo	Muy alto
144	Oaxaca	20228	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	Muy alto
145	Oaxaca	20229	San Lorenzo Texmelúcan	Muy alto
146	Oaxaca	20231	San Lucas Camotlán	Muy alto
147	Oaxaca	20232	San Lucas Ojitlán	Muy alto
148	Oaxaca	20233	San Lucas Quiavini	Muy alto
149	Oaxaca	20234	San Lucas Zoquiápan	Muy alto
150	Oaxaca	20236	San Marcial Ozolotepec	Muy alto
151	Oaxaca	20240	San Martín Itunyoso	Muy alto
152	Oaxaca	20242	San Martín Peras	Muy alto
153	Oaxaca	20248	San Mateo del Mar	Muy alto
154	Oaxaca	20251	San Mateo Nejápam	Muy alto
155	Oaxaca	20252	San Mateo Peñasco	Muy alto
156	Oaxaca	20253	San Mateo Piñas	Muy alto
157	Oaxaca	20255	San Mateo Sindihui	Muy alto
158	Oaxaca	20259	San Miguel Ahuehuetitlán	Muy alto
159	Oaxaca	20263	San Miguel Coatlán	Muy alto
160	Oaxaca	20270	San Miguel Huautla	Muy alto
161	Oaxaca	20271	San Miguel Mixtepec	Muy alto
162	Oaxaca	20273	San Miguel Peras	Muy alto
163	Oaxaca	20274	San Miguel Piedras	Muy alto
164	Oaxaca	20276	San Miguel Santa Flor	Muy alto
165	Oaxaca	20277	Villa Sola de Vega	Muy alto
166	Oaxaca	20284	San Miguel Tilquiápan	Muy alto
167	Oaxaca	20297	San Pablo Tlajaltepec	Muy alto
168	Oaxaca	20302	San Pedro Atoyac	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
169	Oaxaca	20304	San Pedro Coxcattepec Cántaros	Muy alto
170	Oaxaca	20306	San Pedro el Alto	Muy alto
171	Oaxaca	20309	San Pedro Ixcatlán	Muy alto
172	Oaxaca	20311	San Pedro Jaltepetongo	Muy alto
173	Oaxaca	20312	San Pedro Jicayán	Muy alto
174	Oaxaca	20315	San Pedro Mártir	Muy alto
175	Oaxaca	20322	San Pedro Ocopetatlillo	Muy alto
176	Oaxaca	20326	San Pedro Sochiápam	Muy alto
177	Oaxaca	20328	San Pedro Taviche	Muy alto
178	Oaxaca	20337	San Pedro y San Pablo Ayutla	Muy alto
179	Oaxaca	20352	San Simón Zahuatlán	Muy alto
180	Oaxaca	20354	Santa Ana Ateixtlahuaca	Muy alto
181	Oaxaca	20355	Santa Ana Cuauhtémoc	Muy alto
182	Oaxaca	20367	Santa Catarina Mechoacán	Muy alto
183	Oaxaca	20372	Santa Catarina Yosonotú	Muy alto
184	Oaxaca	20374	Santa Cruz Acatepec	Muy alto
185	Oaxaca	20379	Santa Cruz Nundaco	Muy alto
186	Oaxaca	20382	Santa Cruz Tacahua	Muy alto
187	Oaxaca	20384	Santa Cruz Xitla	Muy alto
188	Oaxaca	20386	Santa Cruz Zenzontepec	Muy alto
189	Oaxaca	20389	Santa Inés Yatzeche	Muy alto
190	Oaxaca	20391	Santa Lucía Miahuatlán	Muy alto
191	Oaxaca	20392	Santa Lucía Monteverde	Muy alto
192	Oaxaca	20395	Santa María Apazco	Muy alto
193	Oaxaca	20396	Santa María la Asunción	Muy alto
194	Oaxaca	20406	Santa María Chilchotla	Muy alto
195	Oaxaca	20407	Santa María Chimalapa	Muy alto
196	Oaxaca	20412	Santa María Guianagati	Muy alto
197	Oaxaca	20426	Santa María Peñoles	Muy alto
198	Oaxaca	20428	Santa María Quiegolani	Muy alto
199	Oaxaca	20429	Santa María Sola	Muy alto
200	Oaxaca	20430	Santa María Tataltepec	Muy alto
201	Oaxaca	20433	Santa María Temaxcaltepec	Muy alto
202	Oaxaca	20435	Santa María Tepantlali	Muy alto
203	Oaxaca	20436	Santa María Texcatitlán	Muy alto
204	Oaxaca	20438	Santa María Tlaxiátlac	Muy alto
205	Oaxaca	20446	Santa María Yucuhiti	Muy alto
206	Oaxaca	20448	Santa María Zaniza	Muy alto
207	Oaxaca	20450	Santiago Amoltepec	Muy alto
208	Oaxaca	20451	Santiago Apoala	Muy alto
209	Oaxaca	20452	Santiago Apóstol	Muy alto
210	Oaxaca	20461	Santiago del Río	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
211	Oaxaca	20466	Santiago Ixtayutla	Muy alto
212	Oaxaca	20481	Santiago Nuyoó	Muy alto
213	Oaxaca	20485	Santiago Tapextla	Muy alto
214	Oaxaca	20494	Santiago Tlazoyaltepec	Muy alto
215	Oaxaca	20495	Santiago Xanica	Muy alto
216	Oaxaca	20497	Santiago Yaitepec	Muy alto
217	Oaxaca	20498	Santiago Yaveo	Muy alto
218	Oaxaca	20502	Santiago Zacatepec	Muy alto
219	Oaxaca	20509	Santo Domingo de Morelos	Muy alto
220	Oaxaca	20514	Santo Domingo Roayaga	Muy alto
221	Oaxaca	20517	Santo Domingo Tepuxtepec	Muy alto
222	Oaxaca	20529	Santos Reyes Yucuná	Muy alto
223	Oaxaca	20534	San Vicente Coatlán	Muy alto
224	Oaxaca	20535	San Vicente Lachixío	Muy alto
225	Oaxaca	20543	Tataltepec de Valdés	Muy alto
226	Oaxaca	20563	Yogana	Muy alto
227	Oaxaca	20567	Zapotitlán Lagunas	Muy alto
228	Puebla	21005	Acteopan	Muy alto
229	Puebla	21006	Ahuacatlán	Muy alto
230	Puebla	21010	Ajalpan	Muy alto
231	Puebla	21028	Camocuautla	Muy alto
232	Puebla	21036	Coyomeapan	Muy alto
233	Puebla	21049	Chiconcuautla	Muy alto
234	Puebla	21058	Chilchotla	Muy alto
235	Puebla	21061	Eloxochitlán	Muy alto
236	Puebla	21068	Hermenegildo Galeana	Muy alto
237	Puebla	21072	Huehuetla	Muy alto
238	Puebla	21077	Hueytlalpan	Muy alto
239	Puebla	21078	Huitzilán de Serdán	Muy alto
240	Puebla	21084	Ixtepec	Muy alto
241	Puebla	21107	Olintla	Muy alto
242	Puebla	21123	San Felipe Tepatlán	Muy alto
243	Puebla	21145	San Sebastián Tlacotepec	Muy alto
244	Puebla	21159	Teopantlán	Muy alto
245	Puebla	21162	Tepango de Rodríguez	Muy alto
246	Puebla	21167	Tepetzintla	Muy alto
247	Puebla	21183	Tlaola	Muy alto
248	Puebla	21195	Vicente Guerrero	Muy alto
249	Puebla	21217	Zoquitlán	Muy alto
250	San Luis Potosí	24003	Aquismón	Muy alto
251	San Luis Potosí	24031	Santa Catarina	Muy alto
252	Veracruz de Ignacio de la Llave	30018	Aquila	Muy alto



Listado de municipios con índice muy alto de marginación con base en información del Consejo Nacional de Población (2015)

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

#	Entidad	Clave municipio	Nombre municipio	Grado marginación 2015
253	Veracruz de Ignacio de la Llave	30019	Astacinga	Muy alto
254	Veracruz de Ignacio de la Llave	30020	Atlahuilco	Muy alto
255	Veracruz de Ignacio de la Llave	30025	Ayahualulco	Muy alto
256	Veracruz de Ignacio de la Llave	30037	Coahuatlán	Muy alto
257	Veracruz de Ignacio de la Llave	30050	Coxquihui	Muy alto
258	Veracruz de Ignacio de la Llave	30064	Chumatlán	Muy alto
259	Veracruz de Ignacio de la Llave	30067	Filomeno Mata	Muy alto
260	Veracruz de Ignacio de la Llave	30076	Ilamatlán	Muy alto
261	Veracruz de Ignacio de la Llave	30083	Ixhuatlán de Madero	Muy alto
262	Veracruz de Ignacio de la Llave	30103	Mecatlán	Muy alto
263	Veracruz de Ignacio de la Llave	30110	Mixtla de Altamirano	Muy alto
264	Veracruz de Ignacio de la Llave	30127	La Perla	Muy alto
265	Veracruz de Ignacio de la Llave	30137	Los Reyes	Muy alto
266	Veracruz de Ignacio de la Llave	30147	Soledad Atzompa	Muy alto
267	Veracruz de Ignacio de la Llave	30149	Soteapan	Muy alto
268	Veracruz de Ignacio de la Llave	30159	Tehuipango	Muy alto
269	Veracruz de Ignacio de la Llave	30165	Tepatlxaco	Muy alto
270	Veracruz de Ignacio de la Llave	30168	Tequila	Muy alto
271	Veracruz de Ignacio de la Llave	30170	Texcatepec	Muy alto
272	Veracruz de Ignacio de la Llave	30171	Texhuacán	Muy alto
273	Veracruz de Ignacio de la Llave	30184	Tlaquilpa	Muy alto
274	Veracruz de Ignacio de la Llave	30195	Xoxocotla	Muy alto
275	Veracruz de Ignacio de la Llave	30198	Zacualpan	Muy alto
276	Veracruz de Ignacio de la Llave	30201	Zongolica	Muy alto
277	Veracruz de Ignacio de la Llave	30202	Zontecomatlán de López y Fuentes	Muy alto
278	Veracruz de Ignacio de la Llave	30203	Zozocolco de Hidalgo	Muy alto
279	Yucatán	31010	Cantamayec	Muy alto
280	Yucatán	31019	Chemax	Muy alto
281	Yucatán	31022	Chikindzonot	Muy alto
282	Yucatán	31049	Mayapán	Muy alto
283	Yucatán	31092	Tixcacalcupul	Muy alto

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que se sirva proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Del mismo modo, le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Solamente para decir que en este asunto que tiene que ver con la expedición del Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, también aplicaría en lo conducente a algunas de las precisiones que se estuvieron haciendo en el punto anterior. _____

Por ejemplo, en relación con los asociados, entre otras circunstancias. _____

Entonces, solamente si se somete a votación que sea con esos ajustes que deben aplicarse. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Solo para hacer una propuesta en el sentido que el último día del plazo para la presentación de solicitudes, pueda ser de 24 horas, porque se están manejando horarios hábiles hasta las 18:00 horas entiendo. _____

Es práctica que cuando se concluye todo un plazo, ese último día es de 24 horas para recibir. Sería la propuesta. _____

Y no sé si fuese necesario, ahí sí lo consultaría, si habría que poner un Resolutivo sobre la entrada en vigor, precisamente, de este Proyecto de Acuerdo, porque luego no tenemos la certeza de cuándo se publica en el Diario Oficial. _____

Eso solo a manera de reflexión. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Nada más un comentario a propósito de este último planteamiento del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. _____

Nosotros tenemos una suspensión de plazos derivado de nuestro período de vacaciones legales, pero entiendo también que me están informando que el Diario Oficial de la Federación entra en receso en términos de publicación hasta el próximo 7 de enero de 2019. _____

La alternativa es que de todos modos los trámites se realizarán y es posible que la publicación sea el 7 de enero. _____

No sé si además se quiera especificar de alguna otra manera que entra en vigor en alguna otra fecha. _____

Mi única preocupación, retomando su planteamiento, es que a diferencia de otros casos en donde los involucrados directamente son partidos políticos que están representados en esta mesa, y se puede entender por una notificación inmediata, tal vez tratándose de una Convocatoria abierta a la ciudadanía valga la pena, que lo diga, esperarse a la publicación del Diario Oficial, que es un medio de comunicación general. _____

Insisto, tal vez habría que ponerlo explícitamente. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Compartiendo el dilema y no teniendo una diferencia con el dilema, creo que conviene más en este caso en un tema de conveniencia y de ejercicio de derechos, que entren en vigor con la aprobación del Consejo General y se ordene la publicación de inmediato en el Diario Oficial, por una razón, los plazos que están corriendo ya están corriendo. No hay un solo plazo que diga 5 días después de que entre en vigor va a pasar tal cosa, sino hay fechas firmes, a partir del 7 de enero y hasta el 31 de enero próximo pasa esto, a partir de tal fecha a tal fecha pasa esto. _____

Si se puede tener conocimiento por la publicación en la página del Instituto, que creo que se podría ordenar que se publique en la página del Instituto, opera en beneficio de las propias agrupaciones el hecho de que entre en vigor antes. Y creo que la falta de publicación no le generaría perjuicio alguno. _____

Me parece que sería muy prudente pedir que se haga una solicitud expresa de que en el Diario Oficial se publique tan pronto vuelva a entrar en circulación el Diario Oficial el día 7 de enero. _____

Esto visto, insisto, a la luz más bien de cómo generar las mejores condiciones para quienes podrán hacer uso de este instructivo. _____

Lo dejo nuevamente como un rebote de ideas, pero también sujeto a los planteamientos que se puedan hacer en la mesa. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

¿Me permite una pregunta? Abonando a la complejidad que nos ha invitado a reflexionar el Consejero Electoral Roberto Ruiz. _____

Estoy de acuerdo con lo que ha planteado, mi única preocupación es cuál es la fecha a partir de la cual comienzan a correr las impugnaciones, habida cuenta de que el día de mañana todas las fechas para impugnar Acuerdos del Consejo General se suspenden. _____

Tal vez la solución es que se intente ver con el Diario Oficial, pero ahí no podemos nosotros tener ninguna capacidad de decisión que se publique el 7 de enero, con lo cual, por cierto, coincide la fecha con la que se suspenden los plazos. Sin embargo, la duda tiene que ver con la fecha de impugnación. _____

Y no hay ningún problema, hoy mismo creo que se podría publicar en la página del Instituto, en fin. _____

Lo dejo nada más como reflexión adicional, me gustaría escuchar su reacción, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, ese es un argumento en donde se afectarían derechos si no nos vamos a publicación de Diario Oficial. _____

En mi intervención pensaba que solamente generaríamos beneficio, pero ahí podríamos generar una afectación. _____

Me parece que lo prudente sería efectivamente, hasta la publicación de Diario Oficial que entre en vigor para efectos, no poner para efectos de las impugnaciones, pero porque tiene efectos para las impugnaciones, sin embargo, sí publicarlo lo más pronto posible en la página para que puedan hacer uso de ello los interesados, con independencia de que la vigencia formal sea hasta la publicación en Diario Oficial. _____

Creo que, eso nos ayudaría a encontrar un punto de mejor acuerdo. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted? _____

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Con gusto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente y gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Creo que, es más práctico ponerle ahí que entra en vigor o bien con la aprobación por este Consejo General o al día hábil siguiente de la aprobación por parte del Consejo General, independientemente de la publicación en el Diario Oficial, creo que con eso estaríamos resolviendo el diferendo. _____

Aquí de lo que se trata es de que entre en vigor lo más rápido posible, si lo dejamos a Diario Oficial el detalle va a ser que estamos a expensas a la carga del Diario Oficial, entonces una de 2, o es con la aprobación por el Consejo General, o bien a partir del primer día hábil, dado que el periodo de vacaciones no estaría en posibilidades de ser desahogado el procedimiento. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Nuevamente mandando a la complejidad, hay un tema que ahora un poco cruzaba a la distancia con el Consejero Presidente, los plazos de impugnación no tienen que ver con los plazos de vigencia, tienen que ver con los plazos de conocimiento, van a poder tener conocimiento los interesados para poder impugnar en el momento que entra, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la vigencia como tal para poder hacer correr los plazos puede señalarse en una fecha, digamos, el día de hoy con la aprobación en el Consejo General o el primer día hábil siguiente que sería el 7 de enero y ordenar de cualquier forma la publicación lo más pronta posible en el Diario Oficial, y evidentemente los plazos para impugnar correrán a partir de la publicación en Diario Oficial, me parece. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Me da la impresión, que si no hay más intervenciones, podríamos avanzar con esta lógica que es el día hábil siguiente a la aprobación, en todo caso, de entrada ya es el 7 de enero. _____

Que se publique en el portal del Instituto, como se ha planteado, y proveer, digámoslo así, hacer todos los esfuerzos posibles para que se publique a la brevedad en el propio Diario Oficial cosa que eventualmente podría ocurrir antes de que entre en vigor, lo cual, para efectos de la publicidad creo que vendría a resolver el problema que se ha planteado, ¿de acuerdo?_____

Si no hay inconveniente, con esta modificación, Secretario del Consejo, someta a votación el Proyecto de Acuerdo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 8, incorporando en esta votación la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Favela a fin de que se hagan los ajustes derivados de la aprobación del punto previo, el punto 7, y que tienen impactos sobre este Proyecto._____

De la misma manera, la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, a fin de ampliar hasta las 24 horas el registro correspondiente, y por lo que hace a la entrada en vigor, se ordena, la publicación inmediata en el portal del Instituto, y su publicación a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 7 de enero, si es posible antes, y que entre en vigor el día siguiente de esta publicación. ____

Quienes estén a favor, de aprobar este Proyecto de Acuerdo en estos términos sírvanse manifestarlo si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. _____

Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose, de conformidad con los argumentos expuestos. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1479/2018) Pto. 8_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL AÑO 2020, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN

ANTECEDENTES

- I. Con la finalidad de ampliar los cauces de participación y representación política y como complemento del Sistema de Partidos Políticos, la Reforma Electoral de mil novecientos noventa y seis, estableció la figura de las Agrupaciones Políticas Nacionales como formas de asociación que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como para la creación de una opinión pública mejor informada.
- II. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación*, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, en cuyo Título segundo, Capítulo II, se encuentran reguladas las Agrupaciones Políticas Nacionales.
- III. El día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin.

Al tenor de los Antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

Atribuciones del Instituto

1. De acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución), en relación con los numerales 29, párrafo 1; y 30, párrafos 1, inciso a), y 2, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (en adelante el Instituto) es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, y entre sus fines se encuentran contribuir al desarrollo de la vida democrática.
2. Asimismo, el artículo 55, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establecen que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:
 - a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales y realizar las actividades pertinentes;
 - b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en dicha Ley para constituirse como agrupación política e integrar el expediente respectivo para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la Consideración del Consejo General.

Derecho de asociación

3. El derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución, el cual, en su parte conducente, establece: *“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (...)”*.

4. El artículo 35 de la Constitución, en su fracción III, establece que es prerrogativa de los ciudadanos *“Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)”*.

Agrupaciones Políticas Nacionales

5. La Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) precisa en su artículo 20, párrafo 1, que *“las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada”*.

Requisitos Constitutivos

6. El artículo 22, párrafo 1, de la LGPP, establece los requisitos que deben reunir las asociaciones de ciudadanos para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional, los cuales consisten en acreditar, ante el Instituto Nacional Electoral:
 - a) Que cuentan con un mínimo de 5,000 afiliados en el país;
 - b) Que cuentan con un órgano directivo de carácter nacional;
 - c) Que tienen delegaciones en cuando menos siete entidades federativas;
 - d) Que disponen de documentos básicos; y
 - e) Que se ostentan con una denominación distinta a la de cualquier otra Agrupación o Partido Político.
7. Así, se estima conveniente que el Consejo General del Instituto, con fundamento en los artículos 5 de la LGIPE y 22, párrafo 2, de la LGPP, defina y precise los elementos documentales que las asociaciones de ciudadanos deben presentar acompañando su solicitud, a fin de que este órgano máximo de dirección norme su juicio al evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, de manera tal que su análisis sobre las solicitudes presentadas se apegue a los principios rectores de certeza, objetividad y legalidad, sin que ello implique en modo alguno limitar los derechos políticos consagrados en la Constitución; sino por el contrario, tenga por finalidad garantizar a la ciudadanía que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con los extremos de la ley para constituirse en coadyuvantes del desarrollo de la vida

democrática y de la cultura política, así como formadoras de una opinión pública mejor informada.

Afiliados

8. Para acreditar contar con el número mínimo de 5,000 afiliados requerido por la Ley, esta autoridad considera que las asociaciones de ciudadanos deben presentar documentos que se constituyan en manifestaciones formales de afiliación en los que se refleje de manera cierta y objetiva la voluntad de adhesión de cada persona y que ésta guarda vigencia y actualidad en relación con el procedimiento de solicitud de registro como Agrupación Política Nacional.

Durante el proceso de solicitud de registro y hasta en tanto esta autoridad no otorgue el registro de Agrupación Política Nacional a la asociación interesada, aquellas personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la Agrupación Política Nacional tendrán la calidad de afiliados y, en caso de obtener el registro, inmediatamente serán afiliados de la misma.

En razón de lo anterior, con el fin de garantizar el principio de certeza con el que debe actuar esta autoridad electoral, se estima necesario que las manifestaciones de afiliación contengan la fecha en la cual las personas manifiestan su voluntad de adherirse a la agrupación que se pretende constituir, la cual debe estar comprendida entre el 1º de febrero de 2019 y la fecha de presentación de la solicitud de registro. Por su parte, se requiere que los datos de las personas asentados en las citadas manifestaciones de afiliación correspondan con los datos que obran en el padrón electoral como forma de garantizar que los afiliados gozan en plenitud de sus derechos político-electorales.

En este sentido se ha pronunciado la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al sostener la tesis XI/2002, que a la letra indica:

AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE PRETENDA OBTENER SU REGISTRO, DEBE ACREDITAR QUE SUS MIEMBROS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL. *La asociación ciudadana que pretenda su registro como Agrupación Política Nacional, en términos de la Legislación Electoral vigente, tiene la carga de demostrar que sus integrantes, en el número exigido por la ley, son ciudadanos inscritos en el padrón electoral, porque de esta forma queda demostrada la vigencia de*

sus derechos políticos, entre los que se cuenta el de asociación política. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que la interpretación de los artículos 36 y 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de cuatro de abril de mil novecientos noventa, llevan a concluir que mientras los ciudadanos no cumplan con la obligación de inscribirse en los padrones electorales, sus derechos político-electorales se encuentran suspendidos, y si conforme a los artículos 9o., y 35, fracción III, de la Constitución federal, la posibilidad de fundar o pertenecer a una asociación política está inmersa en el derecho político de asociación, se requiere estar inscrito en el padrón electoral para poder formar parte de ella.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-015/99. Unión Social Demócrata, A.C. 16 de julio de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-027/99. Asociación Ciudadana Heberto Castillo Martínez. 12 de octubre de 1999. Unanimidad de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: José Herminio Solís García.

La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 77 y 78.

9. En relación con el documento de manifestación formal de afiliación, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 57/2002 ha sostenido lo siguiente:

AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE ASOCIADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.

Las manifestaciones formales de asociación, para los efectos del requisito previsto en el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son el instrumento idóneo y eficaz para acreditar el número de asociados con que cuenta una asociación que pretenda obtener su registro como Agrupación Política Nacional, toda vez que tales documentos, sin lugar a dudas, contienen de manera expresa la manifestación de la libre e individual voluntad del ciudadano de asociarse para participar pacíficamente en los asuntos políticos de la República a través de la asociación de ciudadanos solicitante. Por otro lado, la lista de asociados es un simple auxiliar para facilitar la tarea de quien otorga el registro solicitado, en razón de que ésta únicamente contiene una relación de nombres de ciudadanos, en el que se anotan datos mínimos de identificación, y se conforma sobre la base de las manifestaciones formales de asociación, documentos que se deben presentar en original autógrafo, en razón de que, como quedó precisado, constituyen el instrumento idóneo y eficaz para sustentar la fundación de una Agrupación Política Nacional. En consecuencia, deben privilegiarse las manifestaciones formales de asociación, y no los listados de asociados, por lo que hay que considerar las manifestaciones de mérito para su posterior

verificación, según los procedimientos que apruebe para tal efecto el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con miras a determinar el número de asociados que efectivamente se acredita.

10. El padrón electoral que será utilizado para verificar la situación registral de la ciudadanía afiliada a la asociación en proceso de constitución como Agrupación Política Nacional será con corte al 31 de enero de 2020.

Doble afiliación

11. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Jurisprudencia histórica 60/2002, señaló que el ejercicio del derecho de asociación político-electoral no admite la afiliación simultánea a dos o más entes políticos, por lo que no se contabilizarán aquellas afiliaciones de un mismo ciudadano que sean presentadas simultáneamente por dos o más asociaciones solicitantes, para efectos de la satisfacción del requisito de afiliación exigido por el Ley General de Partidos Políticos para obtener el registro como Agrupación Política Nacional.

Delegaciones

12. Para el efecto de la acreditación del número mínimo de delegaciones exigida por la Ley, resulta ilustrativa la tesis CLIV/2002 sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación que a la letra indica:

AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. SU SEDE DIRECTIVA A NIVEL NACIONAL, CONSTITUYE UNA DE LAS DIEZ SEDES DELEGACIONALES.- *De la exigencia que establece el artículo 35, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de contar con un mínimo de siete mil asociados en el país y con un órgano directivo a nivel nacional; además, tener delegaciones en cuando menos diez entidades federativas, no se advierte la prohibición de que la sede nacional se contabilice como una delegación. En efecto, si la agrupación tiene una sede en alguna entidad federativa, en donde cuenta con el mayor número de afiliados, y por ello la consideran su sede a nivel nacional, no es factible considerar que ésta no es a su vez una delegación, pues esta acepción, en su concepto primario, implica el conjunto de personas que la integran, y un lugar a partir del cual desempeña sus actividades para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Por lo tanto, es posible que puedan fungir para efectos de registro, tanto la sede del órgano directivo a nivel nacional, como la sede delegacional de la agrupación en la misma entidad, pues la exigencia en comento tiene por finalidad que la agrupación cuente, en cada uno de los diez lugares, con miembros responsables de realizar las actividades necesarias*

para cumplir las finalidades y satisfacer sus cometidos y además, no existe impedimento material o jurídico alguno para la operancia de ambas en la misma sede, y mucho menos si se trata de la misma organización a nivel nacional.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-092/2002. Asociación denominada Coordinadora de Actividades Democráticas Independientes. 11 de junio de 2002. Unanimidad en el criterio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.

Notas: El contenido del artículo 35, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en la tesis, corresponde al artículo 22, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos.

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 80.

En ese sentido, esta autoridad considera necesario definir la documentación que resulte idónea para comprobar la existencia de las delegaciones estatales de las asociaciones en proceso de constitución como Agrupación Política Nacional, tomando en consideración que la delegación no se constituye únicamente por un espacio físico sino también por las personas que la conforman, de tal suerte que para acreditar la existencia de una delegación no basta con presentar documentación sobre un lugar sino también el funcionamiento de la delegación.

Documentos Básicos

13. El requisito de contar con documentos básicos en términos de lo señalado en el artículo 22, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, en una interpretación sistemática y funcional, se traduce en que tales documentos deben ser: a) Declaración de Principios, b) Programa de Acción y c) Estatutos; los cuales deberán apegarse a la Constitución y a la ley.
14. En los artículos 20, párrafo 1; 21 y 22, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, en relación con lo dispuesto, en lo conducente, en los artículos 35; 37; 38 y 39 de la misma ley, así como 3, párrafo 1, inciso d) y 121, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, se establece la naturaleza jurídica y la finalidad primordial de las agrupaciones políticas nacionales, al tiempo que se determina la única forma en que podrán participar en los Procesos Electorales Federales.

En virtud de que la legislación vigente no establece el contenido de los documentos básicos de las Agrupaciones Políticas, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos referidos, dado que las agrupaciones políticas nacionales comparten con los partidos políticos el atributo de ser asociaciones de ciudadanos, además de tener la posibilidad de contribuir activamente en el progreso de la democracia en México, este Consejo General estima pertinente fijar en el Instructivo e los contenidos mínimos de los Documentos Básicos de dichas agrupaciones, tomando como base algunos elementos de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de los partidos políticos. Lo anterior, con la finalidad de armonizar la constitución y el funcionamiento de las agrupaciones políticas nacionales conforme a valores básicos en democracia.

Asimismo, se deberá considerar lo establecido en los artículos 74, párrafo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 45; 70 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Denominación

15. A este respecto, la LGPP establece que las organizaciones deberán contar con una denominación distinta a la de otra agrupación o partido, para tales efectos, sirve de apoyo lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis LXXI/2015, que a la letra indica:

AGRUPACIONES POLÍTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL DEL REQUISITO DE DENOMINACIÓN DISTINTA AL DE OTRA AGRUPACIÓN O PARTIDO.—*De la interpretación armónica de los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos](#), y 35, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deriva que el requisito relativo a que la denominación adoptada por una agrupación para obtener el registro como partido político sea distinta a la de otras fuerzas políticas, persigue una finalidad constitucionalmente válida, dirigida a la protección del derecho de los mencionados institutos a ser identificables en el ámbito de su actuación; y desde otra arista a tutelar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudadanos para elegir de manera informada, libre y auténtica la opción política de su preferencia. En ese orden, cuando la autoridad administrativa electoral se pronuncia en relación con el registro solicitado por una agrupación debe efectuar un examen riguroso para asegurarse que la denominación sea distinta a la de otra agrupación o partido político y que no contenga elementos o rasgos que puedan generar confusión en*

las personas, lo que vulneraría principios esenciales que rigen el sufragio como son la libertad y autenticidad.

Quinta Época:

Recurso de apelación. [SUP-RAP-35/2005](#).—Recurrente: Convergencia.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de junio de 2005.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaría: Claudia Pastor Badilla.

Recurso de apelación. [SUP-RAP-75/2014](#).—Recurrente: Movimiento Ciudadano.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—2 de julio de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaría: Magali González Guillén.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 57 y 58.

Solicitud de Registro

16. El artículo 22, párrafo 2, de la LGPP, señala que la asociación interesada en obtener su registro como Agrupación Política Nacional deberá presentar a la autoridad electoral su solicitud de registro, junto con la documentación que se requiera, en el mes de enero del año anterior al de la elección.

Análisis sobre cumplimiento de requisitos

17. Para efecto de realizar una revisión objetiva, con mayor precisión y rapidez, de los requisitos constitutivos señalados en la LGPP, atendiendo con ello al principio de certeza con que debe realizar su actuación, esta autoridad considera pertinente contar con la participación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de la Unidad de Servicios de Informática y de los órganos desconcentrados del propio Instituto, como coadyuvantes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para establecer el sistema de cómputo, además del apoyo técnico y humano necesario que permitan a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos verificar que las organizaciones que presenten su solicitud hayan satisfecho los requisitos señalados en la ley.
18. Con base en lo dispuesto por el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE y con el objeto de verificar que la solicitud se encuentra debidamente acompañada de todos los documentos a los que se refiere el citado artículo 22 de la LGPP, este Consejo General, considera necesario que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, se encuentre facultada para realizar una revisión inicial de la citada documentación.

19. Las asociaciones solicitantes no podrán presentar en forma extemporánea la documentación necesaria para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 22, párrafo 1 de la LGPP; pues el comunicado por parte del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en relación con los resultados de la verificación inicial de la documentación, tiene como único fin dar a conocer a las solicitantes los requisitos respecto de los cuales fueron omisos para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en el caso de requisitos meramente formales, éstos puedan ser subsanados.

Criterio similar sostuvo la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia por la que resuelve el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano, SUP-JDC397/2008, al señalar:

“En efecto, esta Sala Superior ha sostenido reiteradamente, en asuntos tales como SUP-JDC-004/1997, SUP-JDC-005/1997, SUP-JDC-011/1997, SUPJDC-784/2002, SUP-JDC-788/2002, SUP-JDC-342/2005 y SUP-JDC-354/2005, que las solicitudes de registro de un partido político o Agrupación Política Nacional pueden encontrarse deficiencias insubsanables y subsanables. Las primeras atañen a elementos sustanciales en los requisitos exigidos para el registro, los cuales deben cubrirse durante el tiempo establecido por la ley, mientras que las subsanables son las que se refieren a aspectos accidentales, puramente formales, incidentales o de operatividad que no inciden en cuestiones fundamentales.

La diferencia se realiza en razón de que la subsanación de cuestiones secundarias no afecta a los documentos constitutivos que definieron la voluntad de los asociados para formar parte de la organización, en tanto que en las esenciales sí, para lo cual, sería necesario repetir todo el procedimiento constitutivo, lo que resulta inadmisibles jurídicamente, porque la ley define tiempos precisos para tal efecto, fijados en función del Proceso Electoral.”

20. El propio artículo 22, párrafos 3, 4 y 5, de la LGPP señala que el Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente; que en los casos en que proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo; y que, en caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. La

Resolución correspondiente deberá publicarse en el *Diario Oficial de la Federación*. El registro de las Agrupaciones Políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del primero de junio del año anterior al de la elección.

21. Conforme al artículo 43, párrafo 1, de la LGIPE, el Consejo General del Instituto está facultado para ordenar la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que así lo determine y, que conforme al artículo 7, párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, las Comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo y ejercen las facultades que les confieren las Leyes y los acuerdos y resoluciones del propio Consejo.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 9; 35, fracción III; y 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3; 20, párrafo 1; y 22, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, párrafo 1; 30, párrafos 1, inciso a) y 2; 43, párrafo 1; y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 22, párrafo 2; de la Ley General de Partidos Políticos y 44, párrafo 1, incisos m) y jj), de la Ley de la Materia, el Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se aprueba el “*Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin*”, en términos del anexo único que forma parte integral del presente Acuerdo.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo de forma inmediata en los estrados y en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral y a la brevedad posible en el *Diario Oficial de la Federación*.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente a su aprobación por este Consejo General.

ANEXO ÚNICO

INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL AÑO 2020, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN

I. Disposiciones generales.

1. El presente Instructivo establece el procedimiento que deberán seguir las asociaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como agrupación política nacional, así como la metodología que observarán las diversas instancias del Instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales efectos.
2. El presente Instructivo es de observancia general y obligatoria para las asociaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como agrupación política nacional, así como para el Instituto Nacional Electoral.
3. Para efectos del presente Instructivo se entenderá por:
 - a) Afiliada (o): La ciudadana o el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales suscriba de manera libre, voluntaria e individual la manifestación formal de afiliación a la agrupación política en formación.
 - b) Agrupación Política: Agrupación Política Nacional;
 - c) Asociación: Asociación de ciudadanos interesada en obtener su registro como agrupación política nacional;
 - d) LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
 - e) LGPP: La Ley General de Partidos Políticos;
 - f) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
 - g) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 - h) DEPPP: La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
 - i) DERFE: La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
 - j) DPPF: La Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento;
 - k) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;
 - l) Instructivo: El Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como agrupación política nacional en el año 2020, así como

diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin;

- m) Manifestación: Manifestación formal de afiliación;
 - n) Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral;
 - o) UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática;
 - p) Vocal: Vocal Ejecutivo o Secretario de la Junta Local o Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral designado para verificar la existencia de las delegaciones estatales de las asociaciones de ciudadanos interesadas en obtener el registro como Agrupación Política.
4. Los plazos señalados en el presente Instructivo se encuentran establecidos en días y horas hábiles, son fatales e inamovibles y no habrá excepciones.
5. Sólo se considerarán válidas las notificaciones realizadas en días y horas hábiles, en los plazos y con las formalidades previstas en el presente Instructivo. Cualquier notificación que se realice al Instituto deberá efectuarse con documentos originales y de manera personal.

II. De la solicitud de registro

6. La asociación deberá presentar por escrito ante la DEPPP la solicitud de registro dentro del periodo comprendido del 6 al 31 de enero del año 2020, en días y horas hábiles, entendiendo por éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Únicamente el día 31 de enero de 2020, las solicitudes podrán presentarse hasta las 24:00 horas.
7. La solicitud de registro deberá dirigirse al Consejo General, entregarse en la DEPPP en las oficinas de la DPPF, sita en calle Moneda número 64, Colonia Tlalpan Centro I, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

El texto de la solicitud deberá incluir:

- a) Denominación de la asociación interesada en obtener el registro como Agrupación Política;
- b) Nombre o nombres de su o sus representantes legales;

- c) Domicilio completo (calle, número, colonia y entidad federativa) para oír y recibir notificaciones, además de número telefónico y/o correo electrónico;
- d) Denominación preliminar de la Agrupación Política a constituirse, así como, en su caso, la descripción del emblema y el color o colores que la caractericen y diferencien de otras Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; y
- e) Firma autógrafa del representante o representantes legales.

Las solicitudes deberán presentarse en el formato que estará a disposición de las asociaciones, a partir del 6 de enero de 2020 en la página de Internet www.ine.mx en el apartado correspondiente a *Agrupaciones Políticas Nacionales en formación*.

8. La solicitud de registro deberá estar acompañada de la documentación siguiente:
- a) Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la constitución de la asociación. Deberá contener, al menos: fecha, hora y lugar de celebración, nombre completo y firma de quienes intervengan en ella, nombre de la asociación, los fines de la misma y precisar que en ese acto se constituye la asociación de ciudadanos.
 - b) Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que acredite fehacientemente la personalidad de quien o quienes suscriben la solicitud de registro como Agrupación Política, por parte de la asociación.
 - c) Manifestaciones formales de afiliación por cada uno (a) de al menos 5,000 afiliados (as), las cuales deberán presentarse y cubrir los términos establecidos en el numeral 10 del presente Instructivo.
 - d) Escrito firmado por el representante legal de la asociación, en el que señale que las listas de afiliados con los que cuenta ésta han sido remitidas a este Instituto a través Sistema de Registro de Asociaciones Políticas Nacionales.

- e) Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que se acredite fehacientemente que se cuenta con un órgano directivo a nivel nacional y cuando menos 7 delegados o delegadas en igual número de entidades federativas.
- f) Dos comprobantes del domicilio social de la sede nacional de la asociación de ciudadanos solicitante y de cada uno de los domicilios de cuando menos siete delegaciones a nivel estatal.

La documentación que se presente deberá estar invariablemente a nombre de la asociación o de sus representantes legales y podrá ser, entre otros: título de propiedad del inmueble; contrato de arrendamiento; contrato de comodato; documentación fiscal o comprobantes de pago de impuestos federales, locales o municipales; comprobante de servicio telefónico; comprobante de pago de servicio de energía eléctrica; o estados de cuenta bancaria, en los que se establezca con claridad el domicilio completo de tales sedes. En el caso de comprobantes de pago o estados de cuenta bancaria, no deberán tener una antigüedad mayor a 3 meses a la fecha de su presentación ante este Instituto.

Cabe señalar que únicamente podrá presentarse documentación respecto de un domicilio por cada entidad donde se ubiquen las delegaciones estatales y la sede nacional. De ser el caso, durante el procedimiento de verificación inicial de los requisitos a que se refiere el apartado VI del presente Instructivo, el Instituto requerirá a la asociación que precise el domicilio que prevalece.

- g) Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos que normen la vida interna de la Agrupación Política, aprobados por sus miembros, para lo cual deberá presentar un ejemplar impreso de cada uno de estos documentos, así como un disco compacto que contenga los mismos, en formato *Word*.
- h) Emblema y colores que distinguen a la Agrupación Política en formación, mismo que deberá presentarse en forma impresa a color y en disco compacto en formato jpg, png o gif.

9. En la documentación solicitada en los incisos anteriores, la asociación de ciudadanos deberá ostentarse en todos los casos y sin excepción alguna con una denominación distinta a cualquier otra Agrupación Política o Partido Político, sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones "Partido" o "Partido Político" en ninguno de sus documentos, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 20, párrafo 2, y 22, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos.

III. De las manifestaciones formales de afiliación (manifestaciones)

10. Las manifestaciones deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:
- a) Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar de la Agrupación Política que corresponda;
 - b) Presentarse en tamaño media carta;
 - c) Requisitadas con letra de molde **legible**, con tinta negra o azul;
 - d) Contener los siguientes datos del afiliado (a): apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio completo (calle, número, colonia y entidad federativa); clave de elector y firma autógrafa o huella digital del ciudadano (en caso de no poder o no saber escribir o firmar);
 - e) Contener fecha y la manifestación expresa de afiliarse de manera libre, voluntaria e individual a la Agrupación Política;
 - f) Contener, debajo de la firma de la o el ciudadano (a), la siguiente leyenda: "Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra asociación interesada en obtener el registro como Agrupación Política Nacional, durante el proceso de registro 2019-2020"; y
 - g) Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro de las y los afiliados (as) de la Agrupación Política en formación.

- h) Colocadas en orden alfabético en carpetas de dos argollas, de pasta dura; clasificadas por entidad federativa.
- 11.** No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación exigido para obtener el registro como Agrupación Política:
- a) Las y los afiliados (as) a 2 o más asociaciones en cualquier momento durante el proceso de registro y para estos únicos efectos.
 - b) Las manifestaciones que carezcan de alguno de los datos descritos en el numeral 10, incisos a), d), e) y f), del presente Instructivo o bien, cuando no sea posible localizar dichos datos en el padrón electoral.
 - c) Aquellas manifestaciones que no correspondan al proceso de registro en curso.
 - d) Las personas cuya situación registral se ubique dentro de los supuestos establecidos en el catálogo de bajas del Padrón Electoral.
 - e) Las que sean presentadas en más de una ocasión por una misma asociación, supuesto en el cual sólo se contabilizará una afiliación.

IV. De la captura de datos de los afiliados

- 12.** Con el fin de facilitar el procedimiento operativo de la verificación de datos de los afiliados a las asociaciones, éstas deberán llevar a cabo la captura de datos de todos sus afiliados en el “Sistema de Registro de Asociaciones Políticas”, diseñado al efecto por la UNICOM, en coordinación con la DERFE y la DEPPP; el cual estará disponible a partir del 1 de marzo de 2019.

En este sentido, a partir de la fecha antes mencionada, las asociaciones interesadas, deberán solicitar, mediante escrito dirigido a la DEPPP, la clave de acceso correspondiente y la guía de uso sobre el referido sistema, mismos que serán entregados posteriormente y de manera personal en las instalaciones de la DPPF.

En la misma fecha en que se entregue la clave de acceso, la DPPF brindará una asesoría de **carácter obligatorio** para los representantes legales de la asociación de ciudadanos, a efecto de orientarles sobre el procedimiento a seguir para la constitución de una Agrupación Política, pudiendo programarse sesiones adicionales para tales fines.

13. El sistema de cómputo mencionado, permitirá a las asociaciones imprimir las listas que deberán anexar a la solicitud de registro y las cuales contendrán apellido paterno, materno y nombre, domicilio completo y clave de elector de los afiliados, así como imprimir las etiquetas que deberán adherirse a cada una de las manifestaciones formales de afiliación.
14. Se tendrá por no presentada la lista de afiliados que sea exhibida en cualquier formato o sistema de cómputo distinto al señalado en el presente Instructivo.

V. Del contenido de los Documentos Básicos

15. La declaración de principios contendrá, por lo menos:
 - a. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
 - b. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;
 - c. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de todo tipo de entidades extranjeras; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la LGPP prohíbe financiar a los partidos políticos, así como el Reglamento de Fiscalización a las agrupaciones políticas nacionales.
 - d. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y
 - e. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

16. El programa de acción determinará las medidas para:

- a.** Alcanzar los objetivos de la agrupación política nacional;
- b.** Proponer políticas públicas;
- c.** Formar ideológica y políticamente a sus afiliados, y
- d.** Fomentar la participación activa de sus afiliados en los procesos electorales.

17. Los estatutos establecerán:

I. Datos de identificación como agrupación política:

- a) La denominación; y,
 - b) El emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otras agrupaciones políticas nacionales y de los partidos políticos nacionales.
- La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales.

II. Formas de afiliación:

- a) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros;
- b) Los derechos y obligaciones de los afiliados.

III. La estructura orgánica bajo la cual se organizará la agrupación política nacional, sin que en ningún caso pueda ser menor a la siguiente:

- a) Una asamblea nacional o equivalente, que será el órgano supremo.
- b) Un órgano ejecutivo nacional.
- c) Órganos ejecutivos estatales o equivalentes, en aquellas entidades federativas donde la agrupación política nacional tenga presencia.
- d) Un órgano interno de justicia.
- e) Una Unidad de Transparencia de la agrupación política nacional, que tendrá las funciones señaladas en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV. Asimismo, deberá contemplar las normas que determinen:

- a) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;
- b) Las normas, plazos y procedimientos de justicia interna, con los cuales se garanticen los derechos de los afiliados, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones;

- c) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a los Estatutos, así como la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva; y
- d) El órgano encargado de aprobar los acuerdos de participación con algún partido político o coalición para participar en procesos electorales federales, en su caso.

VI. Del procedimiento de verificación inicial de los requisitos

- 16. El proceso de verificación inicial de la documentación entregada por la asociación se llevará a cabo en la DPPF, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, de acuerdo al turno que se le haya asignado a la solicitante.
- 17. Al recibir la solicitud y sus anexos se procederá de la forma siguiente:
 - a) El personal del Instituto requerirá a la asociación la solicitud de registro así como la documentación soporte respectiva y consignará en el acuse de recibo correspondiente, la documentación recibida.
 - b) La solicitud y su documentación soporte será introducida en uno o más sobres, mismos que serán sellados y firmados por el representante de la asociación y un funcionario del Instituto para quedar en custodia de éste último, hasta su verificación inicial.
 - c) Asimismo, las manifestaciones serán depositadas en una o varias cajas las cuales serán selladas y firmadas por el representante de la asociación y un funcionario del Instituto para quedar en custodia de éste último, para su posterior verificación inicial.
 - d) El funcionario del Instituto entregará al representante de la asociación acuse de recibo de la solicitud y de sus anexos, precisando en el mismo que la verificación inicial de cada uno de ellos queda sujeta a su compulsión en la fecha que se indique de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior.

- 18.** En la fecha, hora y lugar que se le indique a la asociación, deberá asistir su representante legal con el fin de proceder a la verificación inicial de la documentación entregada como anexo a su solicitud. Dicha verificación inicial tendrá como único fin constatar junto con los funcionarios del Instituto, que la documentación entregada corresponde a lo consignado en la solicitud presentada. De tal acto se levantará un acta circunstanciada, la cual deberá signarse por un funcionario del Instituto y el representante legal de la asociación.

En caso de que el representante legal de la asociación no se presentara en la fecha, hora y lugar que le fue asignada, un funcionario del Instituto, ante la presencia de dos testigos, procederá a la verificación de la documentación entregada en el momento de la recepción de la solicitud. De tal acto se levantará un acta circunstanciada, la cual deberá estar firmada por el funcionario y los dos testigos antes mencionados.

- 19.** Si una vez realizada la verificación inicial de la documentación conforme a lo señalado en el presente Instructivo, y levantada el acta correspondiente por la DPPF, se constata que las manifestaciones no se encuentran debidamente ordenadas en los términos previstos por el presente Instructivo, se citará mediante escrito a la asociación para que concurra a ordenarlas, a través de su o sus representantes legales acreditados, a las instalaciones del Instituto. Esta actividad deberá estar concluida a más tardar el día hábil siguiente a la celebración de la verificación inicial y será realizada en presencia de un funcionario de la DPPF.
- 20.** Si de los trabajos de revisión de la documentación presentada junto con la solicitud de registro resulta que no se encuentra debidamente integrada o presenta omisiones, dicha circunstancia lo comunicará la DEPPP por escrito a la asociación a fin de que, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga.

Lo anterior, en el entendido de que la asociación, al dar respuesta al oficio emitido por la DEPPP, no podrá anexar documentación alguna para cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 8 del presente Instructivo, toda vez que los mismos guardan relación directa con los establecidos por el artículo 22, párrafo 1 de la LGPP, y deben presentarse sin excepción alguna en el plazo señalado en el párrafo 2 del mencionado artículo 22.

De presentarse documentación respecto a lo señalado en el párrafo anterior, la misma será considerada extemporánea y no será tomada en cuenta para la determinación que dicte el Consejo General respecto de su registro.

21. En caso de que no se presente aclaración alguna dentro del plazo establecido o no se subsanen las omisiones señaladas, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, lo cual será informado por escrito al representante legal de la asociación mediante notificación personal o conforme a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Del análisis del cumplimiento de los requisitos

22. Realizada la verificación inicial a que se refiere el capítulo VI del presente Instructivo, la DPPF constatará si la asociación de que se trate ha sido legalmente constituida, así como la personalidad de quien o quienes suscriben la solicitud de registro.
23. Se constatará que las manifestaciones contengan los datos señalados en el numeral 10 del presente Instructivo, a saber: membrete de la Agrupación Política en formación; apellidos (paterno y materno) y nombre (s); domicilio completo (calle, número, colonia y entidad federativa); y clave de elector; así como que contengan la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y las leyendas de adherirse a una sola agrupación, de manera voluntaria, libre y pacífica. Si no se encuentran algunos de los datos descritos o si dichas manifestaciones incurren en algunas de las inconsistencias señaladas en el numeral 11 del presente Instrumento, serán descontadas del número total de afiliados (as).
24. La DEPPP revisará que el total de las listas de afiliados (as) contengan los apellidos (paterno y materno) y el nombre (s); el domicilio y la clave de elector de los mismos, constatando que tales datos coincidan con los de las manifestaciones y que la asociación cuente con al menos 5,000 afiliados (as). No se contabilizarán los afiliados (as) registrados en las listas que no tengan sustento en dichas manifestaciones.
25. Asimismo, se verificará la existencia de las delegaciones estatales establecidas como requisito en la LGPP, para lo cual se contará con el apoyo de los órganos desconcentrados del Instituto. Esta verificación se llevará a cabo en la forma siguiente:

- a) La DEPPP comunicará al Vocal de la entidad que corresponda, el domicilio en que se encuentra la delegación de la asociación, con el fin de que gire instrucciones para verificar su existencia. A la comunicación respectiva se adjuntará copia de la documentación comprobatoria presentada por la asociación.
- b) El funcionario designado para llevar a cabo la verificación acudirá en días y horas hábiles al domicilio señalado, a efecto de constatar que se encuentra funcionando la delegación correspondiente, y procederá a levantar acta circunstanciada de la visita, así como de los elementos que estime convenientes para describir su funcionamiento. En caso de que constate el funcionamiento irregular de la delegación, así lo hará constar en el acta.

Para tales efectos, el funcionario realizará lo siguiente:

- b.1) Se cerciorará de que se encuentra en el domicilio señalado en la documentación comprobatoria, precisando en el acta los medios que lo llevaron a tal conclusión;
- b.2) Describirá las características del inmueble;
- b.3) Señalará si tocó el timbre, la puerta o interfón y cuántas veces lo realizó.
- b.4) Preguntará por la persona que suscribe el contrato de comodato, de arrendamiento o por el propietario del inmueble en caso de título de propiedad. Si se cuenta con el nombre del Delegado Estatal, se preguntará por el mismo.
- b.5) Si se encuentra la persona que se busca, se le preguntará su relación con la asociación.
- b.6) En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no sea la persona que se busca, deberá preguntarse si la conoce y si sabe cuál es su relación con la asociación. Además deberá preguntársele si guarda alguna relación con la asociación o con la persona que se busca.
- b.7) Deberá describir la identificación exhibida por la persona con quien se entienda la diligencia, y en caso de no proporcionarla describir su media filiación.
- b.8) De ser posible tomará fotografías de la diligencia.

- c) En el caso de que en el domicilio indicado, no se encuentre a persona alguna durante la primera visita, se dejará una notificación, indicando que la próxima visita se realizará a la misma hora del día hábil siguiente. En caso que no se encuentre a persona alguna en la segunda visita, el funcionario levantará acta circunstanciada de tal hecho, de la cual colocará copia en el acceso del domicilio.

El funcionario del Instituto en cualquier momento, si le es posible, consultará con los vecinos del domicilio sobre el funcionamiento de la delegación con el fin de verificarlo.

- d) Se llevarán a cabo como máximo dos visitas, en horas y días hábiles, a los domicilios que la asociación solicitante hubiera proporcionado. Sin que se pueda realizar otra u otras visitas, salvo que la DEPPP lo considere pertinente. En caso de que en ninguna de ellas se pueda constatar el funcionamiento de la delegación, ésta se tendrá por no acreditada. De lo anterior se levantará acta circunstanciada la que se remitirá a la DEPPP para integrarla al expediente respectivo.
- e) Corresponde a la asociación proporcionar el domicilio correcto y completo de sus sedes y asegurarse de que se encuentren funcionando regularmente, así como de que las personas que estén en ellas puedan proporcionar información sobre la existencia de la asociación interesada en el registro.
- f) Las verificaciones de delegaciones se llevarán a cabo en el periodo que comprende del 11 de febrero al 08 de marzo de 2020, en días hábiles entre las 9:00 y 18:00 horas (hora local).

- 26.** Las asociaciones no podrán realizar cambio de domicilio alguno respecto de sus delegaciones nacional y estatales una vez vencido el plazo legal para la presentación de la solicitud de registro ante el Instituto, puesto que de hacerlo, ésta sería considerada extemporánea toda vez que se tendría que presentar documentación comprobatoria del nuevo domicilio.

27. La DPPF analizará la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, a efecto de comprobar que dichos documentos básicos cumplan con los extremos a que se refiere el numeral 15 del presente Instructivo.
28. Concluido el proceso de registro, la documentación que haya presentado cada organización solicitante será resguardada por el Instituto hasta por un máximo de 6 meses. Si transcurrido dicho plazo, la documentación no ha sido retirada por los interesados, la misma será triturada sin responsabilidad para el Instituto, levantándose el acta correspondiente.
29. En caso de que las asociaciones designen como su o sus representantes legales a personas diversas de las que se hubieren notificado a este Instituto en términos del inciso b), del numeral 7 del presente Instructivo, deberán notificarlo a la DEPPP dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización del acto.

VIII. De la Comisión Examinadora

30. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Agrupación Política establecido en el párrafo 2, del artículo 22 de la LGPP, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de asociaciones que solicitaron su registro como Agrupación Política. El día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe referido, se tendrá por constituida la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos como Comisión Examinadora de las solicitudes de registro, la cual tendrá como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución de aquellas asociaciones que pretendan su registro como Agrupación Política. Asimismo, a partir de esa fecha comenzará a computarse el plazo de 60 días naturales al que se refiere el párrafo 3, del artículo 22 de la LGPP.
31. La Comisión Examinadora se reserva la atribución de fijar procedimientos de verificación adicionales con el fin de asegurar el cumplimiento cabal de todos los requisitos de ley por parte de las asociaciones que pretenden constituirse en Agrupación Política, lo que se fundará y motivará en el Proyecto de Resolución respectivo.

- 32.** La Comisión Examinadora, con el apoyo de la DEPPP, con base en los resultados obtenidos de los análisis descritos, formulará el Proyecto de Resolución de Registro como Agrupación Política, y el Consejo General resolverá sobre el otorgamiento del mismo en un plazo que no exceda de 60 días naturales, contados a partir de la presentación del informe referido en el numeral 30 del presente Instructivo.
- 33.** La Comisión Examinadora contará en todo momento con el apoyo técnico de la DEPPP, de la DERFE y de los órganos desconcentrados del Instituto, para desarrollar las actividades señaladas en el presente Instructivo, bajo la coordinación operativa de la primera Dirección Ejecutiva señalada. Asimismo, será facultad de la citada Comisión desahogar las consultas que con motivo del presente Instructivo se presenten ante el Instituto.

[Emblema de la asociación]	[Etiqueta que emite el sistema]																				
[Nombre preliminar de la agrupación política en formación]																					
<u>DATOS DEL AFILIADO:</u>																					
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO																				
NOMBRE (S)	FECHA DE <u>AFILIACIÓN</u> (día, mes, año) 201																				
DOMICILIO:																					
CALLE	NO.EXT.																				
NO. INT.	COLONIA																				
DELEGACIÓN O MUNICIPIO	ENTIDAD																				
CLAVE DE ELECTOR:																					
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
Manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera libre e individual a [nombre preliminar de la agrupación política en formación]																					
FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL AFILIADO																					
Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra asociación interesada en obtener el registro como agrupación política nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 2019-2020.																					
Aviso de privacidad																					

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Sírvanse proceder a lo conducente para la publicación, a la brevedad posible, del Acuerdo aprobado, en el Diario Oficial de la Federación. _____

Del mismo modo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Otro asunto que también es importante resaltar, este es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales, para el ejercicio de 2019. _____

Y aquí, estamos haciendo tal vez algo que les pueda parecer un poco fuera de lo que normalmente se hace, en el sentido de que estamos haciendo esta distribución, tomando en cuenta 7 partidos políticos que actualmente tienen el registro como partidos políticos a nivel nacional, y se está haciendo la distribución correspondiente. _

Pero, también estamos haciendo un ejercicio para el supuesto, que puede ser posible en el sentido de que se revoque la determinación de este Consejo General, que canceló el registro al Partido Encuentro Social como partido político a nivel nacional, y que lo pueda determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral. _____

¿Por qué se está previendo esta circunstancia? Porque hay una impugnación en la Sala Superior, que está pendiente de resolverse, y que puede ser que la resuelvan en algún momento, en el mes de diciembre o principios de enero, y tendríamos que tener

esa claridad de qué pasaría en caso, si otro Partido Político Nacional tuviera el registro, y en vez de ser 7, pues fueran entonces 8. _____

Se está haciendo la distribución conforme a lo que marca la propia Constitución y la Legislación. Y aquí están cada una de las cantidades. _____

Y se está, obviamente si no se da este supuesto que estamos nosotros previendo, esa circunstancia no tendrá ningún tipo de efecto, en caso de que no se revoque nuestra determinación de cancelarle el registro al Partido Encuentro Social, entonces, las cosas quedarán como están en el primer ejercicio, de distribuir el financiamiento público solamente entre los 7 partidos políticos que actualmente tienen su registro. ____

Entonces, ésa sería la explicación por qué tenemos estas 2 circunstancias, y también la razón por la cual se está previendo de esta manera, que les digo, puede parecer algo fuera de lo ordinario, pero por esta situación se está dando. _____

Ahora, también nada más recordar que en el mismo sentido se ha actuado, por ejemplo, cuando teníamos la posibilidad de tener un cierto número de candidaturas independientes y no sabíamos con exactitud al momento de estar previendo el propio financiamiento público, los tiempos en radio y televisión que les pudiera llegar a tocar. .

Y entonces se previeron distintos escenarios, ¿qué fue lo que hizo esta institución? Actuar en consecuencia con el escenario que se había estado actualizando en cada caso concreto. _____

Por eso es este Proyecto de Acuerdo en este sentido previendo estas 2 circunstancias. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del Partido del Trabajo. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenas tardes, señoras, señores Consejeros, Consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos. _____

Este día se nos presenta el Proyecto de Acuerdo por el que se distribuye el financiamiento público a los Partidos Políticos Nacionales para el año 2019. _____

No es ocioso desde nuestra perspectiva recordar que este financiamiento corresponde a una fórmula plasmada en la Constitución Política y en la Ley Electoral. _

Y precisamente porque no es un tema menor debemos recordar que el financiamiento público, que está plasmado en esta Constitución Política, permite alejar al Sistema de Partidos Políticos del financiamiento oscuro, ilícito o de los poderes fácticos. Esa es su principal virtud del financiamiento público. _____

Precisamente este Sistema de Partidos Políticos llevó el pasado 1 de julio a que una expresión popular tuviera, y que en la expresión popular nos diera un cambio de rumbo de 180 grados en la conducción del país, después de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y coacción del voto en el 2012, se llegó a las Elecciones del 2018 en donde la desesperación y el hartazgo y la desconfianza hacia la clase política enquistada en el aparato de Gobierno motivaron estos resultados. ____

Podemos decir muchas cosas del presupuesto a los partidos políticos, y tal vez sean válidas, pero desconocer las razones del origen del financiamiento, el génesis de la predominancia de los recursos públicos sobre el privado y las demás prerrogativas que como entes de interés público reciben los institutos políticos es negar nuestro propio pasado, y no lo podemos permitir ni tampoco que se dirijan o vamos a repetir los mismos errores. _____

Por eso es que hoy el Partido del Trabajo hace un llamado a los diversos actores políticos a reflexionar de manera profunda, madura, responsable y analizando todas las aristas del entramado político electoral mexicano, sin filias, sin fobias, a buscar nuevas formas o a eficientar las actuales del financiamiento público hacia los Partidos Políticos Nacionales y Locales. _____

Tampoco podemos estar ajenos a una nueva realidad nacional que demanda mayor participación de la ciudadanía en los temas de la administración, rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos. _____

Si nos quedamos con una mera simulación de “aquí no ha pasado nada, todo está bien”, estaríamos dándole la espalda a la confianza que los mexicanos depositaron a este movimiento de lo que el Partido del Trabajo es parte, de la denominada “cuarta transformación”. _____

No olvidamos a todos nuestros compañeros y amigos que se quedaron en el camino de la espera y desesperanza de haber cristalizado un nuevo futuro para nuestros hijos. _____

Hoy en esta responsabilidad que nos han depositado los mexicanos el pasado mes de julio, no debemos quedar en aspectos cosméticos o de “relumbrón”, pero también tenemos la responsabilidad de preservar y dar continuidad a este cambio que ya nadie puede parar, el despertar de los mexicanos ha llegado y ha incursado en la vida pública de México. _____

Por su atención muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Seré muy breve sobre este asunto también relevante, el Proyecto de Acuerdo por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019, que está basado en el artículo 41, base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el financiamiento público como el sostenimiento de sus actividades ordinarias y permanentes que se fijará anualmente. _
Y este Instituto, cabalmente ha cumplido con su función a través de la Comisión correspondiente para establecer el financiamiento público de cada Instituto político por este año que viene. _____

Sin embargo, no quiero pasar por alto el que todos los institutos políticos independientemente de los slogan de la cuarta transformación, etcétera o en el centro

del debate político tenemos y estamos obligados a defender el financiamiento público como un mecanismo que garantiza la democracia en nuestro país; el financiamiento público en un ejemplo a nivel mundial de cómo se hacen las cosas en México, independientemente de las críticas que a veces se dan por la erogación del mismo por parte de los partidos políticos, el financiamiento público sigue siendo un modelo que todos debemos y tenemos que defender porque éste asegura la vigencia del Sistema Nacional de Partidos._____

En el caso del Partido Revolucionario Institucional, nosotros avalamos este Proyecto, y además no queremos pasar por alto y decir que defenderemos todas las prerrogativas, todo el financiamiento público por ser parte fundamental de la democracia, y sobre todo, del Sistema de Partidos Políticos._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora representante._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 9, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1480/2018) Pto. 9_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DISTRIBUYE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2019

El financiamiento público federal para los Partidos Políticos Nacionales corresponde al importe total de \$4,965,828,351 (cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos M.N.), a saber:

Rubro de financiamiento público	Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	\$4,728,699,868
Actividades específicas	\$141,860,996
Franquicia postal	\$94,573,997
Franquicia telegráfica	\$693,490
Total	\$4,965,828,351

El financiamiento público que corresponde a cada Partido Político Nacional para el ejercicio 2019, es:

Partido Político	Rubro de financiamiento público				Monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres
	Actividades Ordinarias	Actividades Específicas	Franquicia Postal	Franquicia Telegráfica	
Partido Acción Nacional	\$861,398,068	\$25,841,942	\$13,510,571	\$99,070	\$25,841,942
Partido Revolucionario Institucional	\$811,420,068	\$24,342,602	\$13,510,571	\$99,070	\$24,342,602
Partido de la Revolución Democrática	\$396,987,946	\$11,909,638	\$13,510,571	\$99,070	\$11,909,638
Partido del Trabajo	\$347,180,586	\$10,415,418	\$13,510,571	\$99,070	\$10,415,418
Partido Verde Ecologista de México	\$378,990,057	\$11,369,702	\$13,510,571	\$99,070	\$11,369,702

Partido Político	Rubro de financiamiento público				Monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres
	Actividades Ordinarias	Actividades Específicas	Franquicia Postal	Franquicia Telegráfica	
Movimiento Ciudadano	\$365,030,158	\$10,950,905	\$13,510,571	\$99,070	\$10,950,905
Morena	\$1,567,692,985	\$47,030,789	\$13,510,571	\$99,070	\$47,030,789
Total	\$4,728,699,868	\$141,860,996	\$94,573,997	\$693,490	\$141,860,996

En el supuesto de que fuese revocada la declaratoria de pérdida de registro del otrora partido político Encuentro Social a nivel nacional, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá incluirse en la distribución del financiamiento público para el ejercicio dos mil diecinueve de acuerdo a lo siguiente:

Partido Político	Rubro de financiamiento público				Monto a destinar para el liderazgo político de las mujeres
	Actividades Ordinarias	Actividades Específicas	Franquicia Postal	Franquicia Telegráfica	
Partido Acción Nacional	\$818,916,859	\$24,567,506	\$11,821,749	\$86,686	\$24,567,506
Partido Revolucionario Institucional	\$770,239,930	\$23,107,198	\$11,821,749	\$86,686	\$23,107,198
Partido de la Revolución Democrática	\$366,596,671	\$10,997,900	\$11,821,749	\$86,686	\$10,997,900
Partido del Trabajo	\$318,085,941	\$9,542,578	\$11,821,749	\$86,686	\$9,542,578
Partido Verde Ecologista de México	\$349,067,318	\$10,472,019	\$11,821,749	\$86,686	\$10,472,019
Movimiento Ciudadano	\$335,470,837	\$10,064,125	\$11,821,749	\$86,686	\$10,064,125
Morena	\$1,506,824,883	\$45,204,747	\$11,821,749	\$86,686	\$45,204,747
Encuentro Social	\$263,497,429	\$7,904,923	\$11,821,749	\$86,686	\$7,904,923
Total	\$4,728,699,868	\$141,860,996	\$94,573,992	\$693,488	\$141,860,996

ANTECEDENTES

- I. En sesión extraordinaria del once de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG459/2018 por el que se emiten *Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, el que fue confirmado por la misma Sala mediante sentencia recaída al expediente de número SUP-RAP-140/2018.
- II. El primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir al titular de la Presidencia de la República, así como las senadurías y diputaciones del ámbito federal.
- III. En sesión ordinaria del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG1219/2018 por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019, en cuyo Resolutivo quinto se estableció:

“Quinto. - La distribución del financiamiento público para el ejercicio 2019 se llevará a cabo una vez que se tenga certeza del número de Partidos Políticos Nacionales que conservarán su registro, y éstos hayan adquirido definitividad y firmeza.”
- IV. En sesión extraordinaria del doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Dictámenes INE/CG1301/2018 e INE/CG1302/2018 relativos a la pérdida del registro de Nueva Alianza y Encuentro Social como Partidos Políticos Nacionales, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias celebradas el primero de julio de dos mil dieciocho.

- V. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-384/2018 en el que confirmó la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG1301/2018, relativa a la pérdida de registro como Partido Político Nacional del partido político Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias, celebradas el primero de julio del año en curso.
- VI. El otrora partido político Encuentro Social impugnó la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG1302/2018, relativa a la pérdida de registro como Partido Político Nacional, la resolución de dicho recurso se encuentra *sub judice*.
- VII. En sesión pública del 17 de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos conoció y aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019.

Al tenor de los Antecedentes que preceden; y

C O N S I D E R A N D O

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- 1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Política) en relación con los artículos 29; 30, numeral 1 y 2 así como 31, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, que se rige por los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, que tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Asimismo, el apartado B del mismo artículo de la Constitución Política, establece que al Instituto Nacional Electoral le corresponden, para los Procesos Electorales Federales, las actividades relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos.

2. El mismo artículo, en su párrafo segundo, Base I, estipula que los partidos políticos son entidades de interés público y que la Ley determinará las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Aunado a lo anterior, en la Base II señala que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y que éste se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

3. El artículo 15, numeral 1 señala que se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas; mientras que la votación válida emitida es aquella que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. El numeral 2 precisa que se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para los candidatos independientes y los votos nulos.
4. El artículo 31, numeral 3 prescribe que el Instituto Nacional Electoral no podrá alterar el cálculo para la determinación del financiamiento público de los partidos políticos, ni los montos que del mismo resulten, en razón de que los

recursos presupuestarios destinados para este fin, no forman parte del patrimonio del citado Instituto.

5. El artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción II estipula que son atribuciones del Instituto Nacional Electoral, en los Procesos Electorales Federales, el reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos Nacionales.
6. El artículo 55, numeral 1, inciso d) establece que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ministrar a los Partidos Políticos Nacionales el financiamiento público al que tienen derecho.
7. Los artículos 187; 188, numeral 1, inciso a) y 189, numeral 2, señalan que los Partidos Políticos Nacionales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades, siendo el Consejo General el que determine, en el presupuesto de egresos del Instituto, la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal; además, éste deberá disponer lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público competente, el costo en que éste incurra por la prestación de la franquicia telegráfica.

Ley General de Partidos Políticos

8. El artículo 7, numeral 1, inciso b) estipula que es atribución del Instituto Nacional Electoral el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos Nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal.
9. El artículo 23, numeral 1, inciso d) dispone que entre los derechos de los partidos políticos se encuentran el de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución Política.
10. El artículo 25, numeral 1, inciso n) señala que entre las obligaciones de los partidos políticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

11. El artículo 26, numeral 1, inciso b) prescribe que, entre las prerrogativas de los partidos políticos, se encuentra la de participar del financiamiento público para la realización de sus actividades.
12. El artículo 50 estipula que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá equitativamente y que éste deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y actividades específicas como entidades de interés público.
13. El artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción III, e inciso c), fracción III, dispone que las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido político serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
14. El artículo 69, numeral 1 señala que los Partidos Políticos Nacionales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.
15. El artículo 70, numeral 1, incisos a) y b) prescribe que el Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del Instituto, la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los Partidos Políticos Nacionales y que será asignada de forma igualitaria a éstos, y cuyo monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias en años no electorales, mientras que en años electorales ascenderá al cuatro por ciento.
16. El artículo 71, numeral 1 establece que las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio nacional. Mientras que el numeral 2 señala que el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes disposiciones.

De la aprobación del financiamiento público anual para 2019

17. El pasado veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, este Consejo General determinó, con el objeto de salvaguardar el principio de certeza que rige su actuar - y en atención al principio de anualidad presupuestaria que delimita la integración del Presupuesto de Egresos -, el financiamiento público para los Partidos Políticos Nacionales en el ejercicio 2019, de la siguiente manera:

ACUERDO INE/CG1219/2018	
Rubro de financiamiento público	Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	\$4,728,699,868
Actividades específicas	\$141,860,996
Franquicia postal	\$94,573,997
Franquicia telegráfica	\$693,490
Total	\$4,965,828,351

18. En este sentido, esta autoridad electoral distribuirá el financiamiento público anual para el ejercicio 2019, tomando en consideración a los siete Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro, así como los resultados electorales que derivaron de la Jornada Electoral del primero de julio de dos mil dieciocho.

Distribución del financiamiento público anual para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes

19. Con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso a) de la Constitución Política y 51, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, el monto total anual del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se distribuirá entre los partidos políticos de la siguiente manera: 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Distribución igualitaria

20. Así, el 30% de **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M.N.) asciende a la cantidad de **\$1,418,609,962** (mil cuatrocientos dieciocho millones seiscientos nueve mil novecientos sesenta y dos pesos M. N.). la que, al ser dividida entre los siete Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro resulta en un monto de **\$202,658,566** (doscientos dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos M. N.).

Distribución proporcional

21. Para calcular el 70% restante, esta autoridad electoral considera la Votación Nacional Emitida en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa; la que, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 15, numerales 1 y 2 de LGIPE resulta de deducir, de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos Nacionales que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para los candidatos independientes, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.
22. Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 41, Base II, inciso a) señala que la distribución se hará de acuerdo al porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, siendo el caso que para el cálculo se considera la Votación Nacional Emitida en los 300 Distritos Electorales uninominales por el *principio de mayoría relativa*, y no por el principio de representación proporcional, pues éste último se utiliza para la asignación de representantes políticos de partidos, según la fuerza electoral con la que cuenten en cada Circunscripción.
23. El veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, siendo la Votación Nacional Emitida de 50,415,455 (cincuenta millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y cinco) votos; asimismo el porcentaje de votos obtenido por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales respecto de la Votación Nacional Emitida es el siguiente:

Partido Político Nacional	Votación Nacional Emitida	Porcentaje
Partido Acción Nacional	10,033,157	19.90%
Partido Revolucionario Institucional	9,271,950	18.39%
Partido de la Revolución Democrática	2,959,800	5.87%
Partido del Trabajo	2,201,192	4.37%
Partido Verde Ecologista de México	2,685,677	5.33%
Movimiento Ciudadano	2,473,056	4.91%
Morena	20,790,623	41.24%
Total	50,415,455	100.00%

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

24. Así, el 70% de **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M.N.) equivalente a **\$3,310,089,906** (tres mil trescientos diez millones ochenta nueve mil novecientos seis pesos M. N.), deberá distribuirse entre los siete Partidos Políticos Nacionales, según el porcentaje de Votación Nacional Emitida obtenido en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, a saber:

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido Acción Nacional	19.90%	\$658,739,502
Partido Revolucionario Institucional	18.39%	\$608,761,502
Partido de la Revolución Democrática	5.87%	\$194,329,380
Partido del Trabajo	4.37%	\$144,522,020

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido Verde Ecologista de México	5.33%	\$176,331,491
Movimiento Ciudadano	4.91%	\$162,371,592
Morena	41.24%	\$1,365,034,419
Total	100.00%	\$3,310,089,906

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

25. Por ende, los montos que corresponden a cada Partido Político Nacional, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2019, son los siguientes:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades ordinarias¹
Partido Acción Nacional	\$202,658,566	\$658,739,502	\$861,398,068
Partido Revolucionario Institucional	\$202,658,566	\$608,761,502	\$811,420,068
Partido de la Revolución Democrática	\$202,658,566	\$194,329,380	\$396,987,946
Partido del Trabajo	\$202,658,566	\$144,522,020	\$347,180,586
Partido Verde Ecologista de México	\$202,658,566	\$176,331,491	\$378,990,057
Movimiento Ciudadano	\$202,658,566	\$162,371,592	\$365,030,158
Morena	\$202,658,566	\$1,365,034,419	\$1,567,692,985
Total	\$1,418,609,962	\$3,310,089,906	\$4,728,699,868

¹ El financiamiento para actividades ordinarias que se distribuye de manera igualitaria, fue redondeado a números enteros y ajustado a partir de la sumatoria de los montos que corresponden a cada partido político. En el caso del financiamiento que se distribuye de forma proporcional, éste se truncó y los pesos remanentes se asignaron por resto mayor a los partidos políticos, con lo que se obtiene la bolsa inicialmente calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

Distribución del financiamiento público anual para actividades específicas

26. De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso c) de la Constitución Política y el artículo 51, numeral 1, inciso c), fracción I de la LGPP, el financiamiento público anual para actividades específicas se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales de la siguiente forma: 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Distribución igualitaria

Así, el 30% de **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) asciende a la cantidad de **\$42,558,299** (cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos M. N.) la que, al ser dividida entre los siete Partidos Políticos Nacionales resulta en un monto de **\$6,079,757** (seis millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos M. N.).

Distribución proporcional

27. Para calcular el 70% restante, este Consejo General considera la Votación Nacional Emitida en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa. Así, el 70% de **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) equivale a **\$99,302,697** (noventa y nueve millones trescientos dos mil seiscientos noventa y siete pesos M. N.), monto que deberá distribuirse entre los siete Partidos Políticos Nacionales, según el porcentaje de Votación Nacional Emitida que hayan obtenido en la elección de diputados inmediata anterior por el principio de mayoría relativa:

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido Acción Nacional	19.90%	\$19,762,185
Partido Revolucionario Institucional	18.39%	\$18,262,845
Partido de la Revolución Democrática	5.87%	\$5,829,881
Partido del Trabajo	4.37%	\$4,335,661
Partido Verde Ecologista de México	5.33%	\$5,289,945

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Movimiento Ciudadano	4.91%	\$4,871,148
Morena	41.24%	\$40,951,032
Total	100.00%	\$99,302,697

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

28. Como resultado, los montos que corresponden a cada Partido Político Nacional por concepto de financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, son los siguientes:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades específicas²
Partido Acción Nacional	\$6,079,757	\$19,762,185	\$25,841,942
Partido Revolucionario Institucional	\$6,079,757	\$18,262,845	\$24,342,602
Partido de la Revolución Democrática	\$6,079,757	\$5,829,881	\$11,909,638
Partido del Trabajo	\$6,079,757	\$4,335,661	\$10,415,418
Partido Verde Ecologista de México	\$6,079,757	\$5,289,945	\$11,369,702
Movimiento Ciudadano	\$6,079,757	\$4,871,148	\$10,950,905
Morena	\$6,079,757	\$40,951,032	\$47,030,789
Total	\$42,558,299	\$99,302,697	\$141,860,996

² El financiamiento para actividades específicas que se distribuye de manera igualitaria, fue redondeado a números enteros y ajustado a partir de la sumatoria de los montos que corresponden a cada partido político. En el caso del financiamiento que se distribuye de forma proporcional, éste se truncó y los pesos remanentes se asignaron por resto mayor a los partidos políticos, con lo que se obtiene la bolsa inicialmente calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

Montos que los partidos políticos deberán destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio 2019

29. El artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGPP establece que los partidos políticos **deberán destinar** anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento público ordinario, es decir, **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) equivalentes al 3% de los **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M. N.) de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2019.
30. Una vez determinada la cifra anterior, los montos que los partidos políticos **deberán destinar** anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son:

Partido Político Nacional	Monto que deberá destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres ³
Partido Acción Nacional	\$25,841,942
Partido Revolucionario Institucional	\$24,342,602
Partido de la Revolución Democrática	\$11,909,638
Partido del Trabajo	\$10,415,418
Partido Verde Ecologista de México	\$11,369,702
Movimiento Ciudadano	\$10,950,905
Morena	\$47,030,789
Total	\$141,860,996

³ Para el caso de los montos que cada Partido Político deberá destinar para el desarrollo político de las mujeres, se asignó el financiamiento de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley, sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

Distribución del financiamiento público anual para franquicia postal

31. Mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral fijó como financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el rubro de franquicias postales para el ejercicio 2019 la cantidad de **\$94,573,997** (noventa y cuatro millones quinientos setenta y tres mil novecientos noventa y siete pesos M. N.).
32. Este monto se asigna de forma igualitaria entre los siete Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro, de conformidad con lo previsto por el artículo 70, numeral 1, inciso c) de la LGPP y 188, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, que señalan que de ninguna manera se les ministrará de forma directa. Así, el financiamiento para franquicia postal por Partido Político Nacional será de \$13,510,571 (trece millones quinientos diez mil quinientos setenta y un pesos M.N.).⁴

Distribución del financiamiento público anual para franquicia telegráfica

33. De conformidad con lo señalado en los artículos 69 y 71, numeral 2 de la LGPP, así como en los artículos 187 y 189, numeral 2 de la LGIPE, y en relación con las franquicias telegráficas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó como bolsa de financiamiento la cantidad de **\$693,490** (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos M.N.).
34. Ahora bien, en razón de que la Ley electoral no establece una fórmula para llevar a cabo su distribución entre los siete partidos políticos, se retoma aquella que es aplicada para la franquicia postal, es decir, una distribución igualitaria. De tal suerte que a cada Partido Político Nacional le corresponden **\$99,070** (noventa y nueve mil setenta pesos M.N.)⁵

⁴ Para el caso de la franquicia postal, dado que la distribución es igualitaria, se asignó el financiamiento sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

⁵ Para el caso de la franquicia telegráfica, dado que la distribución es igualitaria, se asignó el financiamiento sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

Financiamiento público anual total

35. Siendo el caso que para el ejercicio 2019 el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas para partidos políticos asciende a **\$4,965,828,351** (cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos M. N.).
36. El artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción III e inciso c), fracción III de la LGPP, dispone que las cantidades que en su caso se determinen para cada partido político serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

Actualización del supuesto de revocación de la declaratoria de pérdida de registro del partido político Encuentro Social

37. En virtud de que la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-383/2018 sobre la declaratoria de pérdida de registro del partido Encuentro Social está *sub judice*, y tomando en consideración que este Consejo General está obligado a vigilar y garantizar el acceso permanente a las prerrogativas de los partidos políticos, en el supuesto de que fuese revocada la declaratoria de pérdida de registro de Encuentro Social como Partido Político Nacional, deberá incluirse en la distribución del financiamiento público para el ejercicio dos mil diecinueve.

Por ello, este Consejo General determina aprobar, bajo la figura jurídica de condición suspensiva, la distribución del financiamiento público incluyendo al otrora partido político Encuentro Social, de acuerdo a lo siguiente:

Distribución igualitaria

38. El 30% de **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M.N.) asciende a la cantidad de **\$1,418,609,960** (mil cuatrocientos dieciocho millones seiscientos nueve mil novecientos sesenta pesos M. N.) la que, al ser dividida entre los ocho Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro

resulta en un monto de **\$177,326,245** (ciento setenta y siete millones trescientos veintiséis mil doscientos cuarenta y cinco pesos M. N.).

Distribución proporcional

39. Para calcular el 70% restante, esta autoridad electoral considera la Votación Nacional Emitida en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa; la que, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 15, numerales 1 y 2 de LGIPE resulta de deducir, de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos Nacionales que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para los candidatos independientes, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.
40. Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 41, Base II, inciso a) señala que la distribución se hará de acuerdo al porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, siendo el caso que para el cálculo se considera la Votación Nacional Emitida en los 300 Distritos Electorales uninominales por el *principio de mayoría relativa*, y no por el principio de representación proporcional, pues éste último se utiliza para la asignación de representantes políticos de partidos, según la fuerza electoral con la que cuenten en cada Circunscripción.
41. El veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, siendo la Votación Nacional Emitida de 51,762,995 (cincuenta y un millones setecientos sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco) votos; asimismo el porcentaje de votos obtenido por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales respecto de la Votación Nacional Emitida es el siguiente:

Partido Político Nacional	Votación Nacional Emitida	Porcentaje
Partido Acción Nacional	10,033,157	19.38%
Partido Revolucionario Institucional	9,271,950	17.91%
Partido de la Revolución Democrática	2,959,800	5.72%
Partido del Trabajo	2,201,192	4.25%
Partido Verde Ecologista de México	2,685,677	5.19%
Movimiento Ciudadano	2,473,056	4.78%
Morena	20,790,623	40.17%
Encuentro Social	1,347,540	2.60%
Total	51,762,995	100.00%

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

42. Así, el 70% de **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos M.N.) equivalente a **\$3,310,089,908** (tres mil trescientos diez millones ochenta nueve mil novecientos ocho pesos M. N.), deberá distribuirse entre los ocho Partidos Políticos Nacionales, según el porcentaje de Votación Nacional Emitida obtenido en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, a saber:

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido Acción Nacional	19.38%	\$641,590,614
Partido Revolucionario Institucional	17.91%	\$592,913,685
Partido de la Revolución Democrática	5.72%	\$189,270,426

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido del Trabajo	4.25%	\$140,759,696
Partido Verde Ecologista de México	5.19%	\$171,741,073
Movimiento Ciudadano	4.78%	\$158,144,592
Morena	40.17%	\$1,329,498,638
Encuentro Social	2.60%	\$86,171,184
Total	100.00%	\$3,310,089,908

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

- 43.** Por ende, los montos que corresponden a cada Partido Político Nacional, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2019, son los siguientes:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades ordinarias⁶
Partido Acción Nacional	\$177,326,245	\$641,590,614	\$818,916,859
Partido Revolucionario Institucional	\$177,326,245	\$592,913,685	\$770,239,930
Partido de la Revolución Democrática	\$177,326,245	\$189,270,426	\$366,596,671
Partido del Trabajo	\$177,326,245	\$140,759,696	\$318,085,941
Partido Verde Ecologista de México	\$177,326,245	\$171,741,073	\$349,067,318

⁶ El financiamiento para actividades ordinarias que se distribuye de manera igualitaria, fue redondeado a números enteros y ajustado a partir de la sumatoria de los montos que corresponden a cada partido político. En el caso del financiamiento que se distribuye de forma proporcional, éste se truncó y los pesos remanentes se asignaron por resto mayor a los partidos políticos, con lo que se obtiene la bolsa inicialmente calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades ordinarias⁶
Movimiento Ciudadano	\$177,326,245	\$158,144,592	\$335,470,837
Morena	\$177,326,245	\$1,329,498,638	\$1,506,824,883
Encuentro Social	\$177,326,245	\$86,171,184	\$263,497,429
Total	\$1,418,609,960	\$3,310,089,908	\$4,728,699,868

Distribución del financiamiento público anual para actividades específicas

44. De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso c) de la Constitución Política y el artículo 51, numeral 1, inciso c), fracción I de la LGPP, el financiamiento público anual para actividades específicas se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales de la siguiente forma: 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Distribución igualitaria

Así, el 30% de **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) asciende a la cantidad de **\$42,558,296** (cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos M. N.) la que, al ser dividida entre los ocho Partidos Políticos Nacionales resulta en un monto de **\$5,319,787** (cinco millones trescientos diecinueve mil setecientos ochenta y siete pesos M. N.).

Distribución proporcional

45. Para calcular el 70% restante, este Consejo General considera la Votación Nacional Emitida en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa. Así, el 70% de **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) equivale a **\$99,302,700** (noventa y nueve millones trescientos dos mil setecientos pesos M. N.), monto que deberá distribuirse entre los ocho

Partidos Políticos Nacionales, según el porcentaje de Votación Nacional Emitida que hayan obtenido en la elección de diputados inmediata anterior por el principio de mayoría relativa:

Partido Político Nacional	Porcentaje de Votación Nacional Emitida	Financiamiento Proporcional
Partido Acción Nacional	19.38%	\$19,247,719
Partido Revolucionario Institucional	17.91%	\$17,787,411
Partido de la Revolución Democrática	5.72%	\$5,678,113
Partido del Trabajo	4.25%	\$4,222,791
Partido Verde Ecologista de México	5.19%	\$5,152,232
Movimiento Ciudadano	4.78%	\$4,744,338
Morena	40.17%	\$39,884,960
Encuentro Social	2.60%	\$2,585,136
Total	100.00%	\$99,302,700

NOTA: Los cálculos de esta tabla se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin embargo, se muestran en sólo dos decimales por motivos de presentación.

- 46.** Como resultado, los montos que corresponden a cada Partido Político Nacional por concepto de financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, son los siguientes:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades específicas ⁷
Partido Acción Nacional	\$5,319,787	\$19,247,719	\$24,567,506
Partido Revolucionario Institucional	\$5,319,787	\$17,787,411	\$23,107,198
Partido de la Revolución Democrática	\$5,319,787	\$5,678,113	\$10,997,900
Partido del Trabajo	\$5,319,787	\$4,222,791	\$9,542,578
Partido Verde Ecologista de México	\$5,319,787	\$5,152,232	\$10,472,019
Movimiento Ciudadano	\$5,319,787	\$4,744,338	\$10,064,125
Morena	\$5,319,787	\$39,884,960	\$45,204,747
Encuentro Social	\$5,319,787	\$2,585,136	\$7,904,923
Total	\$42,558,296	\$99,302,700	\$141,860,996

Montos que los partidos políticos deberán destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio 2019

47. El artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGPP establece que los partidos políticos **deberán destinar** anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento público ordinario, es decir, **\$141,860,996** (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos M. N.) equivalentes al 3% de los **\$4,728,699,868** (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos

⁷ El financiamiento para actividades específicas que se distribuye de manera igualitaria, fue redondeado a números enteros y ajustado a partir de la sumatoria de los montos que corresponden a cada partido político. En el caso del financiamiento que se distribuye de forma proporcional, éste se truncó y los pesos remanentes se asignaron por resto mayor a los partidos políticos, con lo que se obtiene la bolsa inicialmente calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

M. N.) del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2019.

48. Una vez determinada la cifra anterior, los montos que los partidos políticos **deberán destinar** anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son:

Partido Político Nacional	Monto que deberá destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres ⁸
Partido Acción Nacional	\$24,567,506
Partido Revolucionario Institucional	\$23,107,198
Partido de la Revolución Democrática	\$10,997,900
Partido del Trabajo	\$9,542,578
Partido Verde Ecologista de México	\$10,472,019
Movimiento Ciudadano	\$10,064,125
Morena	\$45,204,747
Encuentro Social	\$7,904,923
Total	\$141,860,996

Distribución del financiamiento público anual para franquicia postal

49. Mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral fijó como financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el rubro de franquicias postales para el ejercicio 2019 la

⁸ Para el caso de los montos que cada Partido Político deberá destinar para el desarrollo político de las mujeres, se asignó el financiamiento de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley, sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el monto que deberán destinar en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

cantidad de **\$94,573,997** (noventa y cuatro millones quinientos setenta y tres mil novecientos noventa y siete pesos M. N.).

50. Este monto se asigna de forma igualitaria entre los ocho Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro, de conformidad con lo previsto por los artículos 70, numeral 1, inciso c) de la LGPP y 188, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, que señalan que de ninguna manera se les ministrará de forma directa. Así, el financiamiento para franquicia postal por Partido Político Nacional será de \$11,821,749 (once millones ochocientos veintiún mil setecientos cuarenta y nueve pesos M.N.).⁹

Distribución del financiamiento público anual para franquicia telegráfica

51. De conformidad con lo señalado en los artículos 69 y 71, numeral 2 de la LGPP, así como en los artículos 187 y 189, numeral 2 de la LGIPE, y en relación con las franquicias telegráficas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó como bolsa de financiamiento la cantidad de **\$693,490** (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos M.N.).
52. Ahora bien, en razón de que la Ley electoral no establece una fórmula para llevar a cabo su distribución entre los ocho partidos políticos, se retoma aquélla que es aplicada para la franquicia postal, es decir, una distribución igualitaria. De tal suerte que a cada Partido Político Nacional le corresponden **\$86,686** (ochenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos M.N.)¹⁰

Financiamiento público anual total

53. Siendo el caso que para el ejercicio 2019 el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas para partidos políticos asciende a **\$4,965,828,351** (cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos M. N.).

⁹ Para el caso de la franquicia postal, dado que la distribución es igualitaria, se asignó el financiamiento sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

¹⁰ Para el caso de la franquicia telegráfica, dado que la distribución es igualitaria, se asignó el financiamiento sin que los montos rebasaran la bolsa inicial calculada. El procedimiento anterior permite definir el financiamiento público en pesos, sin incluir centavos. Ahora bien, todos los cálculos fueron realizados tomando en cuenta todos los decimales.

54. El artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción III e inciso c), fracción III de la LGPP, dispone que las cantidades que en su caso se determinen para cada partido político serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
55. Lo anterior sería ejecutable una vez que se notifique la sentencia de la Sala Superior, con efectos a partir del mes de enero de dos mil diecinueve, para lo cual deberá informarse a los integrantes del Consejo General.

Fundamento legal para la adopción del presente Acuerdo

56. Los artículos 35, numeral 1 y 44, numeral 1, incisos k) y jj) de la LGIPE estipulan que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y tiene la atribución, entre otras, de vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la LGIPE y la LGPP.

Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, bases I, II y V, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, numeral 1 y 2; 29; 30, numerales 1 y 2; 31, numerales 1 y 3; 32, numeral 1, inciso b), fracción II; 35, numeral 1; 55, numeral 1, inciso d); 187; 188, numeral 1, incisos a) y c); 189, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inciso b); 23, numeral 1, inciso d); 25, numeral 1, inciso n); 26, numeral 1, inciso b); 50; 51, numeral 1, inciso a), fracciones III y V e inciso c), fracciones I y III; 69, numeral 1; 70, numeral 1, incisos a), b) y c); 71, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 44, numeral 1, incisos j) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. - Se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos

Nacionales para el año 2019, el cual fue aprobado mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, conforme a lo siguiente:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades ordinarias
Partido Acción Nacional	\$202,658,566	\$658,739,502	\$861,398,068
Partido Revolucionario Institucional	\$202,658,566	\$608,761,502	\$811,420,068
Partido de la Revolución Democrática	\$202,658,566	\$194,329,380	\$396,987,946
Partido del Trabajo	\$202,658,566	\$144,522,020	\$347,180,586
Partido Verde Ecologista de México	\$202,658,566	\$176,331,491	\$378,990,057
Movimiento Ciudadano	\$202,658,566	\$162,371,592	\$365,030,158
Morena	\$202,658,566	\$1,365,034,419	\$1,567,692,985
Total	\$1,418,609,962	\$3,310,089,906	\$4,728,699,868

Ahora bien, dado que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018 podría actualizarse el supuesto consistente en la revocación de la declaratoria de la pérdida de registro del Partido Político Encuentro Social, se aprueba la siguiente distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2019, para ejecutarse una vez que se notifique a este Instituto dicha resolución:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades ordinarias
Partido Acción Nacional	\$177,326,245	\$641,590,614	\$818,916,859
Partido Revolucionario Institucional	\$177,326,245	\$592,913,685	\$770,239,930
Partido de la Revolución Democrática	\$177,326,245	\$189,270,426	\$366,596,671
Partido del Trabajo	\$177,326,245	\$140,759,696	\$318,085,941
Partido Verde Ecologista de México	\$177,326,245	\$171,741,073	\$349,067,318
Movimiento Ciudadano	\$177,326,245	\$158,144,592	\$335,470,837
Morena	\$177,326,245	\$1,329,498,638	\$1,506,824,883
Encuentro Social	\$177,326,245	\$86,171,184	\$263,497,429
Total	\$1,418,609,960	\$3,310,089,908	\$4,728,699,868

Segundo. - Se aprueba la distribución del financiamiento público a partidos políticos para actividades específicas, correspondientes a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, para quedar como sigue:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades específicas
Partido Acción Nacional	\$6,079,757	\$19,762,185	\$ 25,841,942
Partido Revolucionario Institucional	\$6,079,757	\$18,262,845	\$ 24,342,602
Partido de la Revolución Democrática	\$6,079,757	\$5,829,881	\$ 11,909,638
Partido del Trabajo	\$6,079,757	\$4,335,661	\$ 10,415,418
Partido Verde Ecologista de México	\$6,079,757	\$5,289,945	\$ 11,369,702
Movimiento Ciudadano	\$6,079,757	\$4,871,148	\$ 10,950,905
Morena	\$6,079,757	\$40,951,032	\$ 47,030,789
Total	\$42,558,299	\$99,302,697	\$ 141,860,996

Ahora bien, dado que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018, podría actualizarse el supuesto consistente en la revocación de la declaratoria de la pérdida de registro del partido político Encuentro Social, se aprueba la siguiente distribución del financiamiento público a partidos políticos para actividades específicas, correspondientes a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019 para ejecutarse una vez que se notifique a este Instituto dicha resolución:

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades específicas
Partido Acción Nacional	\$5,319,787	\$19,247,719	\$24,567,506
Partido Revolucionario Institucional	\$5,319,787	\$17,787,411	\$23,107,198
Partido de la Revolución Democrática	\$5,319,787	\$5,678,113	\$10,997,900
Partido del Trabajo	\$5,319,787	\$4,222,791	\$9,542,578
Partido Verde Ecologista de México	\$5,319,787	\$5,152,232	\$10,472,019

Partido Político Nacional	Financiamiento Igualitario	Financiamiento Proporcional	Financiamiento para actividades específicas
Movimiento Ciudadano	\$5,319,787	\$4,744,338	\$10,064,125
Morena	\$5,319,787	\$39,884,960	\$45,204,747
Encuentro Social	\$5,319,787	\$2,585,136	\$7,904,923
Total	\$42,558,296	\$99,302,700	\$141,860,996

Tercero. - Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas serán ministrados en forma mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, excepto la mensualidad de enero, que será entregada a más tardar, dentro de los primeros quince días naturales. Las ministraciones, bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna, podrán ser entregadas fuera de las fechas previstas en el presente Acuerdo. En caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018 en el transcurso de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizará los ajustes requeridos en las ministraciones subsecuentes.

Cuarto. - Se aprueba el importe de financiamiento público que cada Partido Político Nacional **deberá destinar** para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres de la forma siguiente:

Partido Político Nacional	Monto que deberá destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
Partido Acción Nacional	\$25,841,942
Partido Revolucionario Institucional	\$24,342,602
Partido de la Revolución Democrática	\$11,909,638
Partido del Trabajo	\$10,415,418
Partido Verde Ecologista de México	\$11,369,702
Movimiento Ciudadano	\$10,950,905
Morena	\$47,030,789
Total	\$141,860,996

Ahora bien, dado que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018, podría actualizarse el supuesto consistente en la revocación de la declaratoria de la pérdida de registro del Partido Político Encuentro Social, se aprueba el siguiente importe de financiamiento público que cada Partido Político Nacional **deberá destinar** para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres:

Partido Político Nacional	Monto que deberá destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
Partido Acción Nacional	\$24,567,506
Partido Revolucionario Institucional	\$23,107,198
Partido de la Revolución Democrática	\$10,997,900
Partido del Trabajo	\$9,542,578
Partido Verde Ecologista de México	\$10,472,019
Movimiento Ciudadano	\$10,064,125
Morena	\$45,204,747
Encuentro Social	\$7,904,923
Total	\$141,860,996

Quinto. - El financiamiento público para el rubro de franquicias postales, cuyo monto total de **\$94,573,997** (noventa y cuatro millones quinientos setenta y tres mil novecientos noventa y siete pesos M. N.) fue aprobado mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, se distribuirá entre los siete Partidos Políticos Nacionales de forma igualitaria, es decir, cada uno podrá ejercer hasta **\$13,510,571** (trece millones quinientos diez mil quinientos setenta y un pesos M.N.);

Ahora bien, dado que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018, podría actualizarse el supuesto consistente en la revocación de la declaratoria de la pérdida de registro del Partido Político Encuentro Social, la

distribución del financiamiento público para el rubro de franquicias postales que fue aprobado mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, será distribuido entre los ocho Partidos Políticos Nacionales de forma igualitaria, es decir, cada uno podrá ejercer hasta **\$11,821,749** (once millones ochocientos veintiún mil setecientos cuarenta y nueve pesos M.N.)

Sexto. - Se distribuye el financiamiento público para el rubro de franquicias telegráficas que asciende a **\$693,490** (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos M. N.) aprobado mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, resultando para cada uno de los siete Partidos Políticos Nacionales con registro vigente la cantidad de **\$99,070** (noventa y nueve mil setenta pesos M.N.).

Ahora bien, dado que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-383/2018, podría actualizarse el supuesto consistente en la revocación de la declaratoria de la pérdida de registro del Partido Político Encuentro Social, la distribución del financiamiento público para el rubro de franquicias telegráficas aprobado mediante Acuerdo INE/CG1219/2018, se hará entre los ocho Partidos Políticos Nacionales con registro vigente, resultando para cada uno la cantidad de **\$86,686** (ochenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos M.N.).

Séptimo. - Los Partidos Políticos Nacionales estarán a lo señalado en los *Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*

Octavo. - Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-383/2018 informe a los integrantes del Consejo General el supuesto que será aplicable para la distribución del financiamiento público.

Noveno. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el presente Acuerdo.

Décimo. - Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario del Consejo. _____

Le pido que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional denominado "Morena". _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Estamos hablando del Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional, denominado MORENA, y quisiera resaltar algunos aspectos relevantes. _____

Primero, obviamente, se hace el estudio de las cuestiones formales de la preparación de la Asamblea correspondiente para llevar a cabo la modificación de los Estatutos, y también en una segunda etapa se hace el estudio de la constitucionalidad y legalidad de cada uno de los artículos o numerales que fueron modificados. _____

Y obviamente en el Proyecto de Resolución están las consideraciones que nos llevan a la conclusión, como se propone, de declarar la procedencia constitucional y legal de esas modificaciones. _____

También algo que es importante resaltar es que se presentaron diversas inconformidades por parte de personas que aparentemente están afiliadas a ese partido político, y la Sala Superior reencausa algunas, de esas inconformidades, y en el Proyecto de Resolución que hoy se somete a consideración también se está

haciendo un análisis o un pronunciamiento sobre estas cuestiones que ellos están planteado, porque desde la perspectiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a nosotros nos correspondería pronunciarnos al respecto, ya que estamos, precisamente, en ese análisis de las modificaciones a los Estatutos del partido político MORENA. _____

Entonces, eso es como se estuvo trabajando este Proyecto. _____

Y también algunas cuestiones respecto de las cuales se tenía alguna duda de los alcances en relación a los artículos que se están modificando. En relación con eso, hubo una comunicación bastante fluida con el partido político MORENA, para que nos especificara exactamente a qué se refería cada una de estas disposiciones donde se tenía algún tipo de duda para que entonces quedara muy claro a qué se refiere cada artículo, cuáles son las atribuciones de los distintos órganos, hasta dónde pueden actuar y qué le corresponde a cada uno de ellos, y eso también se está recogiendo en este Proyecto de Resolución que hoy se somete a consideración. _____

También hay una propuesta que se estuvo trabajando en esta mesa, para hacer unos cambios en relación con el artículo 73, si no mal recuerdo, del Estatuto, para que también se haga la precisión correspondiente a lo que se está denominando como Instituto Nacional de Formación Política, que estamos nosotros llegando a la conclusión que es un órgano interno de MORENA que no tiene personalidad ni patrimonios propios, y por esta razón todo lo relativo a la administración de los recursos que le confiera el propio partido político a este Instituto, se tiene ya sea a nivel Federal o Local, y la rendición de cuentas, estará a cargo del órgano competente, ya sea a nivel nacional y en las entidades federativas. _____

Esto es importante decirlo porque desde nuestro punto de vista, este Instituto Nacional de Información Política, sí tiene una autonomía, pero esa autonomía simplemente es de carácter académico, no es financiero, y por eso se hace esta precisión. _____

Por eso, estaría haciendo la propuesta de que se modifique un poco la redacción para dejar muy claro que tiene que ser a través de los órganos competentes a nivel nacional y en las entidades federativas, y esto impactaría en la página 57 del último párrafo, y también se estaría incorporando, ésta sería la propuesta, un Punto

Resolutivo Tercero para ordenar a MORENA, modificar este artículo 73 del Estatuto, simplemente para que esta precisión que nosotros ya estamos haciendo en el propio Proyecto, cuando estamos revisando la constitucionalidad y legalidad de este artículo, y a la conclusión que nosotros llegamos sea lo que también se recoja en su momento dado por el propio partido político ya de manera expresa en su Estatuto. _____

También tengo alguna otra propuesta, estamos diciendo que para evitar la generación de incertidumbre jurídica a la militancia sobre la integración y funcionamiento concreto que tendrá el órgano de formación y capacitación política, se está ordenando a MORENA emitir a la brevedad los Lineamientos citados a la consideración y, en su caso, aprobación del órgano competente una vez que entren en vigor las modificaciones. _____

Aquí podemos mejorar mucho la redacción. ¿Por qué hago referencia a esto? Estamos diciendo que a la brevedad. _____

Luego ya en el Punto Resolutivo Cuarto estamos diciendo que se está concediendo un plazo de 30 días naturales. _____

Creo que, si dejamos a la brevedad ya sabemos que es el plazo que se necesita en una cuestión de normalidad para llevar a cabo una circunstancia, y creo que así podemos darle al partido político esta situación de llevar a cabo la emisión de sus Reglamentos en el plazo que ellos tengan atendiendo a los nuevos Estatutos, las Convocatorias que tengan que hacer, los trabajos internos que tengan que hacer y después la aprobación y no estarlos limitando a que en 30 días naturales lo puedan estar haciendo. _____

Esa sería la propuesta. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Permítame intervenir solamente para hacer míos los planteamientos que señalaba justamente ahora y que se han circulado en una propuesta de agenda a los miembros del Consejo General, me parece que clarifican la naturaleza del órgano de formación política como parte, por cierto, obligada por la Ley de la estructura partidista y, sobre todo, respecto de la naturaleza que este tipo de órganos de formación tienen al

interior de los propios partidos políticos, son parte del partido político con independencia de que se les pueda conceder, digámoslo así, voluntad de cada partido político, digamos, autonomía en términos de los trabajos académicos o de investigación que realizan. _____

Por un lado, manteniendo, digámoslo así, la unicidad en términos de la responsabilidad financiera y de rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, el responsable ante este Instituto de la gestión financiera y del cumplimiento con las reglas de fiscalización es el partido político, no son los entes del propio partido político. _____

Y por otro lado, en la determinación de los programas de trabajo y de los propios Lineamientos del funcionamiento de ese Instituto, pero de cualquier otro órgano del propio partido político a la luz de lo que la reglamentación interna del partido político establece, es decir, finalmente los distintos órganos de dirección del partido político quienes son competentes para determinar las reglas de funcionamiento en pleno respeto a lo que son las normas constitucionales, las normas legales tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como de la Ley General de Partidos Políticos como de los distintos Reglamentos y Lineamientos que esta autoridad ha expedido, entiéndase Reglamento de Fiscalización, entre muchos otros. _
Entonces, justamente el ejercicio que se ha realizado y que queda mejor definido con la propuesta que hoy nos presenta, me parece, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, implica, creo, el parámetro legal y normativo suficiente para que este Instituto pueda determinar la constitucionalidad de este órgano. _____

Insisto, creo que la función y el Acuerdo que hoy se está tomando es un Acuerdo que sirve y servirá al propio partido político para definir los criterios de interpretación de la propia normatividad para que efectivamente, en la vida interna del partido político a partir de este documento básico fundamental pueda asumirse como compatible con el marco normativo aplicable impartido en primera instancia con la propia Constitución Política, que por cierto, eso es un dato, éste es el único caso de todo el entramado legal que hace de este órgano, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no un órgano de control de legalidad, sino en este caso, también de constitucionalidad, para la nota académica y como mención al margen. _____

Coincidió con el planteamiento del Proyecto de Resolución que se nos presenta por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, agradezco a los integrantes de la Comisión de Partidos Políticos, en particular a la Consejera Presidenta de la misma, a la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, al Consejero Electoral Benito Nacif por la puntiliosidad de la revisión que se ha realizado, y a las áreas técnicas en consecuencia. _____

No sé si hay alguna otra intervención. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para solicitar una votación diferenciada respecto al nuevo punto Resolutivo Tercero que se propone, y los que ahora serían Sexto y Séptimo. _____

Ya en algún voto particular de esta separación señalaría con más detalle las razones, pero tiene que ver con que creo, a mi juicio que se tenía que haber abordado el tema de esta instancia académica, Instituto de capacitación, con una premisa, que era nosotros como institución tendríamos una sola ventanilla en términos sí, así es, en efecto, pero al haber introducido estos conceptos de autoridad financiera y que no contara incluso con patrimonio propio, tengo la impresión que está o puede llegar a generar demasiado ruido al interior de ese Instituto político porque no sabemos al interior cómo se quieren, por lo menos con lo que se aportó, organizar. _____

Entonces, creo que la regla tendría que haber sido clara, tajante del órgano de finanzas es la ventanilla y después ahora sí que el Instituto Nacional Electoral no tiene reparo en cómo ellos quieran organizarse. _____

También me separo del nuevo sexto y séptimo, porque me parece que esos criterios o parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, son conceptos muy amplios que estamos fijándole al partido político, no coincido que se introduzcan. .

Y simplemente como ejemplo, que acompañaría en mi voto particular, en la página 44 del Proyecto de Resolución se viene sosteniendo que es legal, así como constitucional, una figura, sin embargo, inmediatamente dicen: “no obstante para garantizar a la militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a MORENA con A, B, C”. _____

Si ya esta autoridad está diciendo que tal tema en específico es constitucional, y legal, creo que el planteamiento de ya vincularlos para que la normatividad que sigue tenga cierto sentido, creo que es un paso que no estaríamos necesariamente que estar haciendo. _____

Entonces, ésas serían las razones que ya más a detalle formularé en un voto particular. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

De mi parte voy a acompañar el Proyecto de Resolución que se nos presenta, incluidas las propuestas que expresó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. También quisiera agradecer la atención que se sirvió prestar la representación del partido MORENA a las observaciones que fuimos formulando los Consejeros. _____

Me parece que la redacción, particularmente al punto que tiene que ver con el nuevo Resolutivo que alude al Instituto de Capacitación del partido político, es pertinente porque incluso en una respuesta de manera expresa el partido político nos ha referido que la autonomía de gestión a la que se refieren los Estatutos de este partido político a ese Instituto, tiene que ver con las cuestiones académicas. _____

Evidentemente, la parte presupuestal será manejada por las instancias competentes del partido político, e incluso se dice en esos términos en la adición. _____

Entonces, obviamente no estamos pidiendo que el partido político celebre un Consejo Político o una sesión del órgano competente correspondiente para modificar de inmediato los Estatutos, sino que quedará planteado para una sesión posterior que evidentemente en algún momento lo tendrán ustedes previsto. _____

Esa parte a mí me parece que clarifica, simplemente, en términos del diseño interno del propio partido político, es decir, no hay de parte de esta autoridad ninguna intromisión a la vida interna del partido político, pero sí una claridad que nos permite a

ambas instancias poder atender las competencias que nos corresponden en ese ámbito. _____

Entonces, a mí me gusta la redacción en los términos que la construyó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y la voy a apoyar. Me parece que simple y llanamente nos está dando claridad en términos de los propios argumentos de respuesta que el partido político nos dio a una consulta expresa sobre ese tema. _____

Así que, reconozco a la representación, que nos hayan apoyado con esta respuesta que, insisto, se cristaliza ahora en un Resolutivo específico, que de mi parte apoyo en sus términos, Consejero Presidente. _____

Es cuanto, gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Tengo 2 cuestiones con relación a este punto. _____

Una es de forma y otra sí es sustantiva, pero quise mencionar la de forma, porque de aprobarse implicaría la eliminación de un Punto Resolutivo. _____

En el Punto Resolutivo Segundo se dice que se requiere a MORENA para que remita a esta autoridad los Reglamentos y Lineamientos derivados de la Reforma a su Estatuto, una vez aprobados por el órgano competente para tal fin, a efecto de proceder conforme lo señala el artículo 36, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que lo tienen que remitir dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. _____

Luego el Punto Resolutivo Cuarto, por lo menos de la versión original, porque entiendo que se recorren con la propuesta que se ha circulado del Punto Resolutivo Tercero, dice: Se vincula a MORENA a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto para que en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, conozcan y aprueben el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los Lineamientos y Reglamento que regule la integración y funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política, así

como los demás Reglamentos que, en su caso, deriven de la aprobación de las Reformas a su Estatuto y aquí viene la parte que se repite con el Punto Resolutivo Segundo y lo remite a este Instituto dentro de los 10 días siguientes a su aprobación para efectos legales y reglamentarios conducentes de conformidad con lo expuesto en el Considerando 29 de esta Resolución. _____

En el Considerando 29 se refiere exactamente a lo mismo, vienen desagregados la reglamentación que tendrían que remitir. _____

Me parece que podemos obviar el Punto Resolutivo Segundo que únicamente está dando la instrucción al partido político para que nos remita los Reglamentos y los Lineamientos que deriven de la adecuación a sus Estatutos. _____

Creo que, podríamos obviarlo porque está subsumida la idea en el Punto Resolutivo Cuarto. _____

Algo que sí me preocupa en el fondo tiene que ver con el artículo 72 de los Estatutos, que dice: Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, ideológica y éticamente a los protagonistas del cambio verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa del voto en términos del artículo 43, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos. _____

Hasta ahí estamos bien. _____

Y luego dice: La capacitación y formación del Instituto incluirá de forma transversal un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, que se refiere específicamente al 3 por ciento que tienen que destinar los partidos políticos a la promoción de los liderazgos femeninos. _____

Esta parte me preocupa porque parece dar a entender que estos recursos se van a ejercer exclusivamente a través de este Instituto de formación política. Y lo cierto es que estos recursos no solamente sirven para temas de capacitación, sino de diagnóstico, investigación, etcétera. _____

Quisiera sugerir agregar en la parte considerativa lo siguiente, que se explique cuál es la finalidad de que los partidos políticos destinen el 3 por ciento de su financiamiento

para actividades ordinarias a la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres, señalando que dicho financiamiento se debe ejercer no solamente en cursos y talleres, sino también para investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, por lo que no puede entenderse que todo este 3 por ciento se va a poder ejercer a través de este Instituto Nacional de Formación Política. _____

Creo que, es importante porque la remisión al artículo expreso de la Ley General de Partidos Políticos habla exclusivamente de este 3 por ciento. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Consejera, ¿me permite una pregunta? Solamente para aclarar el planteamiento. _____

Lo que usted está planteando es que no se podría ejercer, si entendí mal le pido me lo haga saber, que no se podría ejercer el 3 por ciento, el gasto del 3 por ciento ese lo tienen que gastar, porque si no lo gastan los multamos, al que sea, es una obligación de Ley, pero usted me está diciendo que no podrían gastárselo, si entendí bien, solamente en las funciones que tenga este Instituto, sino que tendría que trascender el gasto. _____

Mi preocupación es, lo digo así como, si entendí bien, es si nosotros podemos decir en qué cosas se tiene que gastar ese 3 por ciento, porque me da la impresión de entrada que lo único que la Ley establece es que se tiene que gastar el 3 por ciento en la promoción y fortalecimiento político, de las mujeres, si lo hacen solo en cursos o si lo hacen solo en investigaciones, o si lo hacen solo en alguna otra vía me da la impresión, de entrada que la responsabilidad del Instituto es garantizar que se haya gastado, efectivamente, y no como ha ocurrido en otras ocasiones, en lentejas o lo que sea, ese gasto. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Sí, a mí me parece que justo cuando hacemos nosotros las revisiones vemos que se diversifica este gasto, que no se destine todo exclusivamente a una sola cuestión, que se hagan también diagnósticos e investigaciones, entonces me parece que tenemos

que propiciar que eso se haga así, creo que tan solo haciendo la aclaración en la parte de motivación del Proyecto de Acuerdo puede quedar un poco esta intención y este mensaje sin mayor inconveniente._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel._____

¿Me permite una segunda pregunta? y le ruego una disculpa._____

Mi preocupación, creo que vale la pena incluso discutirlo, pero me da la impresión que para que esa sea una vinculatoriedad, o sea, que esta decisión, no estoy diciendo que esté de acuerdo y tampoco estoy diciendo que esté en desacuerdo._____

Para que pueda tener una obligatoriedad general debería estar en algún tipo de Reglamento o Lineamiento y no en el Acuerdo de un partido político, porque hasta donde me acuerdo, y ya hemos aquí aprobado varios Estatutos, en ningún caso hemos establecido este tipo de obligatoriedad para otros partidos, y esto colocaría un partido específico, del que estamos ocupándonos en este momento en una situación de diferenciación respecto de otros partidos políticos._____

Insisto, creo que vale la pena discutir el tema, es una causa en la que no hay objeción, vamos juntos, pero yo no sé si sea para este partido político, y en este Acuerdo creo que debería ser eventualmente producto de una discusión más amplia en otro tipo de determinación de este Consejo General._____

Gracias por su respuesta._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente._____

Básicamente estoy pidiendo que se agregue en la parte considerativa del Acuerdo para que sirva como una guía de interpretación, no estoy pidiendo que se quede vinculante para el partido político, sino únicamente esta idea de cuál es la intención del 3 por ciento para que quede esto claro, pero no estoy pidiendo que forzosamente el partido político lo tenga que hacer de esa manera._____

Creo que, la preocupación se puede solventar poniendo una motivación de cuál es la finalidad del gasto del 3 por ciento que está etiquetado directamente para que los partidos políticos promuevan la formación de cuadros políticos de mujeres._____

Entonces, creo que con eso puede quedar solventado. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, **Ciro Murayama.** _____

El C. Consejero Electoral, Doctor **Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. _____

También concuerdo en la constitucionalidad primero, de la Reforma que hizo el partido a su máximo ordenamiento, y en la necesidad de que se precise desde ese máximo ordenamiento de la vida del partido, cuál es la naturaleza de este Instituto que están creando y cuáles son las obligaciones en materia de fiscalización para que quede claro que el conceder una autonomía al interior de un partido no exime de la obligación de rendición de cuentas de los recursos del partido político, que podrá ejercer con toda legalidad el propio Instituto. _____

Creo que, en el Proyecto de Resolución que se circuló, esto quedaba claro en la parte considerativa, pero no llegaba a verse reflejado en el propio Estatuto de MORENA, y me parece que para certeza del propio partido político y de nosotros como autoridad electoral, más vale que quede expreso también en el Estatuto, que serán las instancias encargadas de la rendición de cuentas las que también presentarán los gastos que ejerza el Instituto. _____

Y sobre las consideraciones del 3 por ciento, sí me parecería que iría en disonancia con lo que hemos hecho en otros casos. Es que, ¿en qué se puede gastar el 3 por ciento de los recursos destinados al fortalecimiento político de las mujeres?, está expresamente regulado en el Reglamento de Fiscalización, es que son obligaciones de fiscalización, que son parejas para todos los partidos Políticos. _____

Obviamente ese gasto no es limitativo a algunas actividades, no solo en cursos, puede haber diagnósticos, pero también puede no haberlos. _____

Si se destina todo el 3 por ciento a solo dar cursos y no hacer una investigación, los partidos políticos están cumpliendo, nosotros no debemos ir más allá de la Ley, al querer que se comporten de una determinada forma. Creo que, ahí ya estaríamos teniendo cierta injerencia en la vida interna. _____

Entonces, me parece que el Proyecto de Resolución como está, con la adición de la Consejera Electoral Adriana Favela, se fortalece. _____

Y lo otro, ya está resuelto, es que si hacemos una consideración sobre el 3 por ciento, también habría que hacer una consideración sobre actividades específicas y consideraciones sobre lo que ya está reglamentado con toda claridad, en otra parte de la norma, que es obligatoria para los partidos políticos. _____

Y los Proyectos de Acuerdo que simplemente repiten y repiten lo que ya está en otras normas, demuestran, creo, no la mejor práctica legislativa, se diría en otro lado, pero el motivar y sobremotivar y hacer rebuscados y largos los Proyectos, yo creo que lo que acaban haciendo es volverlos engorrosos. _____

Y lo que debemos de hacer para atender al principio de certeza es elaborar documentos lo más claro posibles, nosotros a veces nos enfrentamos a sentencias del Tribunal Electoral que no nos dan suficiente claridad, porque inician desde los fenicios las motivaciones. _____

Sugiero que seamos lo más claro posible, ya lo que está obligado en el Reglamento de Fiscalización está y lo que necesita precisarse es lo que señaló la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Hasta ahí me quedaría. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Entendiendo la preocupación que me expresaba el Consejero Presidente, creo que podríamos dejarlo como algo potestativo exclusivamente en la motivación para que dijera lo siguiente, que se explique cuál es la finalidad de que los partidos políticos destinen el 3 por ciento de su financiamiento para actividades ordinarias a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, señalando que dicho financiamiento se puede ejercer no solamente en cursos y

talleres, sino también para investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros. _____

Nada más eso, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Solamente para pronunciarme a una cuestión porque me llamó la atención un planteamiento que hizo el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña sobre este Punto Resolutivo en el que se ordenará a MORENA que ajuste el Estatuto en relación con el Instituto de Formación al que se ha estado haciendo referencia. _____

Señalaba que sentía que había una contradicción entre que dijéramos que era constitucional y, sin embargo, estuviéramos poniendo reglas específicas. _____

Acompaño como viene en el Proyecto de Resolución por 2 razones. En primer lugar porque fue el propio partido el que nos dijo cómo entendía ese Instituto, precisamente para no ser nosotros quienes entráramos a una definición de algo que es la propia autoorganización que corresponde a los partidos, se le preguntó a MORENA, se le dijo: ¿Tú qué entiendes cuando tu Estatuto dice esto?, ¿cuál es la traducción que tú le estás dando? _____

Porque esa era la base para determinar si era constitucional o no era constitucional, bajo las premisas que nos dijo MORENA sí es constitucional, podríamos haber tomado una opción “b”, que yo no creo que sería inadecuada tampoco, que es un poco a las interpretaciones que de pronto dice la Corte, decir: Ésta Ley es constitucional. Entendiendo esta Ley así, es decir, esta disposición siempre y cuando la interpretes de esta forma sí es constitucional. Creo que, eso era otra posibilidad. _____

Acompañé en discusiones bilaterales con las integrantes de la Comisión que sí se le formularan las preguntas a MORENA, un poco para que no fuéramos nosotros quienes interpretáramos qué es lo que pensábamos que MORENA quería decir con lo que decían sus estatutos. Ya ante la respuesta advertimos que no era un tema de preocupación, me refiero ante una interpretación constitucional. _____

Ahora plantear que se ajuste para que esto que nos dio el propio partido político como interpretación lo digan sus Estatutos para que haya una certeza respecto para todos los que lean esos Estatutos y que no sea necesario leer nuestra Resolución para darle un sentido específico a los Estatutos, me parece que eso favorece la certeza, y no interviene de una forma indebida en las decisiones y en la vida de éste o cualquier otro partido político._____

Por esas razones sí acompaño el hecho de que se incorpore este Punto de Acuerdo, en el entendido de que no es que nosotros estemos dando una interpretación unilateral, o una interpretación que solo bajo estas reglas sería constitucional, no, es que estamos dando una respuesta a la interpretación que nos dio el partido y que comparto, como dice el Proyecto, sí implica una interpretación, que hace que se considere constitucional la norma que se está estableciendo. Si me preguntan a mí, habría sido mucho más fácil que en el Estatuto se pusiera con mucha claridad: “hay una sola ventanilla para acudir al Instituto Nacional Electoral”, eso está establecido en la Ley, de cualquier forma._____

Pero, ahora sí que la redacción de los distintos artículos de los Estatutos están en manos de los partidos, y si aquí el término autonomía genera un poco de dudas, me parece que con esto ya la redacción específica que le pondrá el partido político corresponde al partido, pero será acorde al sentido que ya nos dijo el partido que era la intención con esa norma._____

Por lo que acompañaré la propuesta que nos formula la Comisión de Prerrogativas, reiterando en este punto también el reconocimiento de la apertura que ha habido de la Comisión en las discusiones que se han tenido sobre los distintos puntos que han subido a este Consejo General._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente._____

Creo que, precisamente ya ha quedado aquí muy claro cuál fue el trabajo que se hizo y por qué estamos haciendo algunas precisiones en relación con algunos artículos en específico, ya les había comentado en la primera intervención que la Sala Superior del Tribunal Electoral remitió al Instituto Nacional Electoral aquellas impugnaciones que se habían presentado por militantes de MORENA, entonces creo que fue una oportunidad muy importante que se nos da para ver también cómo las personas están leyendo el contenido de estos Estatutos. _____

Entonces, si hay alguna duda por eso también se dio el diálogo con el partido MORENA para saber exactamente cuál era la interpretación o lo que ellos realmente quisieron decir en relación con ciertos temas para que entonces ya quedara muy claro cuál era el alcance de cada uno de los artículos que se estaban cuestionando. _____

Y les digo que esta circunstancia ya queda plasmada en este Proyecto y creo que por eso estamos diciendo: “bueno, ya queda claro que la interpretación es ésta y si ésta es la interpretación, entonces sí es constitucional y legalmente válido lo que se está haciendo, o sea, lo que se está poniendo en el Estatuto, si no, no lo sería. _____

Pero, sí al momento en que tenemos esas impugnaciones o esas inconformidades planteadas ya por militantes de MORENA, por eso es la necesidad de irlo aclarando, entonces tal vez no pudimos ser tan directos como se quería ser o como lo planteaba el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, pero sí la idea fue eso, aclarar en cada caso qué era lo que estaba, qué fue lo que se aprobó, cuáles son los alcances de las distintas normas, y para que quede claro para todos precisamente por eso, y como ya lo dijo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, se está ordenando a MORENA que haga la aclaración correspondiente en el momento que tenga la oportunidad de convocar a los órganos competentes para hacer esos ajustes y por eso el Proyecto de Resolución está hecho de esta manera. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Suárez Garza, representante de MORENA. _____

El C. representante de MORENA, Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza:
Gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, en este caso que les está preocupando del 3 por ciento, creo que no debería de preocuparles mucho porque MORENA va a gastar mucho más que ese 3 por ciento, pueden estar seguros. _____

En primer lugar, porque es presidido por una mujer, le va a dar obviamente mucho a las mujeres en el partido político, y si no ha teniendo dinero ahora para hacerlo, creo que el próximo año sí lo va a tener, entonces, creo que va a dedicar una buena cantidad a las mujeres. _____

Por otra parte y antes de que se vote, para no perder la oportunidad, quiero en nombre del partido MORENA, darle las gracias a las y los Consejeros Electorales, por todo lo que han hecho para que estos ajustes a los Estatutos se puedan llevar a cabo. Quiero agradecer principalmente a la Consejera Electoral Adriana Favela, y obviamente también al Consejero Presidente Lorenzo Córdova, y a todos los demás Consejeros Electorales que intervinieron, dando consejos o mostrando voluntad para que se mejorara la redacción o el fundamento para estos nuevos Estatutos. A todos les agradezco mucho en nombre del partido político. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias a usted señor representante. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entiendo que por todo lo que se ha dicho, se pueden, excepto en la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña por lo que hace al nuevo Resolutivo, que pasaría a ser el Punto Resolutivo Segundo en caso de que votaran ustedes la eliminación del Segundo original como lo propuso la Consejera Electoral Dania Ravel, y lo que hace a los Puntos Resolutivos Sexto y Séptimo, el resto podría ir en una votación en lo general. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 10, incluyendo en esta votación en lo general la adenda propuesta originalmente por la Consejera Electoral Adriana Favela, la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de eliminar el Resolutivo Segundo, ya que sus argumentos están en el Cuarto, y en el considerando de manera potestativa por lo que hace al 3 por ciento para el fortalecimiento, de los recursos para el fortalecimiento de la vida política de las mujeres, y eliminando de esta votación el Resolutivo originalmente Tercero, el Sexto y el Séptimo como lo propuso el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra para una moción la Consejera Electoral Margarita Favela. ____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: En el Resolutivo Cuarto, que ahora tal vez cambiaría de número, quitar lo que dice de un plazo de 30 días naturales y nada más dejarlo a la brevedad posible, y obviamente hacer los impactos en la parte también considerativa, por favor. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Como ya lo había propuesto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero Presidente. _____

Solo a modo de moción, entendí que en la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela había una parte donde decía a la brevedad y en otra que daba un plazo. _____

Me parece que los plazos son necesarios para tener un parámetro temporal para que se tomen las medidas, sé que, en el cambio a los Estatutos, ese ajuste a los Estatutos

no requiere de un plazo; pero es que el plazo también está previsto para la aprobación de Reglamento, etcétera. _____

Creo que, lo que no debe de tener plazo es cuando se tiene que nombrar a Congreso para modificar los Estatutos en términos del Instituto. _____

Pero, las otras cuestiones que se están estableciendo me parece que si se pone a la brevedad es demasiado vago. No sé si se podría diferenciar una cuestión de la otra o si entendí mal el planteamiento. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Mi idea era ponerle a la brevedad posible que, inclusive, puede ser hasta menos de 30 días o más, se tendrían que adaptar también a las nuevas normas que están en los propios Estatutos y los nuevos órganos. _____

No sé si a lo mejor 30 días sea el plazo suficiente para hacer todos los Reglamentos, los nombramientos, entre otras circunstancias, por eso sugería que fuera a la brevedad posible en el entendido de que en cuanto tengan las condiciones y hagan cada uno de los actos correspondientes, obviamente van a tener que atender esta circunstancia. Esa era la propuesta de no poner un plazo en específico. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra para una moción la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero Presidente. _____

Una disculpa por llevarlo por mociones. _____

Puedo entender que tal vez 30 días ante esto pueda ser un plazo breve, no tendría inconveniente en que pusiéramos 60 días. Lo que me parece es que el plazo, porque los plazos son máximos, lo hacen en 5 minutos no hay problema, pero los plazos son

máximos para garantizar precisamente que los distintos actos se ajusten al Reglamento, porque tenemos el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que no lo tienen desde hace tiempo y se han hecho varios requerimientos. _ Precisamente para que eso no ocurra me parece que es indispensable que demos un plazo específico, estoy separando de esto la modificación estatutaria, por supuesto, el cambio de Estatutos es tan pronto, digamos, a la brevedad posible que es cuando se tenga en el siguiente Congreso. _____

Pero, para efectos de las normas reglamentarias sí me parece indispensable que demos un plazo cierto precisamente porque ya se han llevado actos sin contar con las normas reglamentarias. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Dado que hay un diferendo no hay otra vía más que resolverlo a través de una votación en lo particular. _____

Secretario del Consejo General, respecto a este punto en específico le pido que no lo someta a la votación en lo general, sino que se establezca una votación en lo particular. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Obviamente solamente por lo que hace a las Reformas reglamentarias, porque lo otro corre a la proximidad del Congreso, ¿cuándo? Cuando el partido político así lo resuelva. _____

Entonces habría 2 votaciones en lo particular, una por lo que hace a las preocupaciones del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y otra o bien definir un plazo específico de 60 días a o a la brevedad posible como se indicaba originalmente. _____

Siendo así, y excluyendo estas 2 consideraciones de la votación en lo general, consulto a ustedes si tiene a bien aprobar este Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día como el punto 10. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

Ahora someto a su consideración, en lo particular en el orden en que fueron propuestos, creo que podría ser en un solo paquete de votación, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, ¿sí?, o el Punto Resolutivo que es el Tercero, el originalmente Tercero para no confundirnos, Sexto y Séptimo, esos Puntos Resolutivos, eran el Quinto y el Sexto, o sea, los que eran originalmente numerados como el Tercero, Quinto y Sexto._____

Quienes estén a favor, de como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo._____

9 votos._____

¿En contra? 1 voto._____

Aprobados por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a estos ajustes a los que se hacía referencia, primero en la propuesta que hizo la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, que la disposición sea a la brevedad posible._____

Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.____

5 votos._____

¿En contra? 5 votos. _____

Se empata por 5 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 5 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández). _____

Consejero Presidente, se empata la votación y tal y como está dispuesto en el Reglamento, sin discusión someteré de nueva cuenta a su consideración la propuesta. _____

Quienes estén a favor, de que quede indicado “a la brevedad posible”, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

5 votos. _____

¿En contra? 4 votos. _____

Aprobada la frase “a la brevedad posible” por 5 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 4 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. _____

Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos y de la misma manera incorporar el voto particular que en su caso presente el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1481/2018) Pto. 10 _____

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO "MORENA"

ANTECEDENTES

- I. El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) mediante Resolución INE/CG94/2014 otorgó el registro como Partido Político Nacional a Morena, toda vez que cumplió con los requisitos de ley y con el procedimiento establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al momento de la solicitud de registro.
- II. El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del INE aprobó, mediante la Resolución identificada con la clave INE/CG251/2014 y en cumplimiento al Punto Segundo de la resolución mencionada en el antecedente I, diversas modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional denominado Morena (en adelante Morena).
- III. Morena se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), así como en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP).
- IV. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, se celebró el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que se aprobaron diversas modificaciones a su Estatuto, entre otros asuntos.
- V. Mediante oficio REPMORENAINE-422/2018, recibido el treinta de agosto del año en curso en la Oficialía de Partes Común del INE, el representante propietario de Morena ante el Consejo General (en adelante representante), informó a esta autoridad electoral de las modificaciones al Estatuto de dicho

partido político y remitió la documentación relativa a la realización del V Congreso Nacional Extraordinario.

- VI.** El cinco de septiembre del presente año, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto (en adelante DEPPP), recibió el oficio REPMORENAINE-433/2018, por medio del cual el representante, en alcance al oficio mencionado en el párrafo que antecede, presentó la documentación complementaria sobre la celebración del V Congreso Nacional Extraordinario, con la finalidad de sustentar las modificaciones realizadas a su Estatuto.
- VII.** El trece de septiembre del año en curso, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior), dictó diversos acuerdos en los autos de los expedientes SUP-JDC-452/2018, SUP-JDC-453/2018, SUP-JDC-454/2018, SUP-JDC-460/2018 y SUP-JDC-462/2018, integrados con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Aviud de la Fuente Plata, Gilberto Rafael Cantón Méndez, María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco, Erasmo García Flores y Jaime Hernández Ortiz, respectivamente, a fin de controvertir, medularmente, las modificaciones al Estatuto de Morena aprobadas en el V Congreso Nacional Extraordinario; ordenando enviar las constancias originales que integran los expedientes al Consejo General del Instituto, para que procediera conforme a derecho.

Los mencionados expedientes fueron recibidos en la Oficialía de Partes Común del INE el inmediato día catorce.

- VIII.** Asimismo, el catorce y veinte de septiembre del año en curso, se recibieron en la citada Oficialía de Partes Común los expedientes SUP-JE-54/2018 y SUP-AG-119/2018, integrados con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por María del Carmen Gómez Ortega, así como por Mauricio Rafael Ruiz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez, respectivamente, con la finalidad de controvertir las modificaciones al Estatuto de Morena aprobadas en el V Congreso Nacional Extraordinario.

La Sala Superior resolvió enviar las constancias originales que integran el expediente SUP-JE-54/2018 a este Consejo General para que procediera conforme a derecho; así como reencauzar el medio de impugnación establecido en el expediente SUP-AG-119/2018 a esta autoridad electoral administrativa para los efectos precisados en el acuerdo respectivo.

- IX.** El nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/6159/2018, INE/DEPPP/DE/DPPF/6160/2018, INE/DEPPP/DE/DPPF/6161/2018, INE/DEPPP/DE/DPPF/6162/2018, INE/DEPPP/DE/DPPF/6163/2018, INE/DEPPP/DE/DPPF/6164/2018 e INE/DEPPP/DE/DPPF/6165/2018, la DEPPP dio vista a Morena con los expedientes SUP-JDC-452/2018, SUP-JDC-453/2018, SUP-JDC-454/2018, SUP-JDC-460/2018, SUP-JDC-462/2018, SUP-JE-54/2018 y SUP-AG-119/2018, para que en un plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho correspondiera.
- X.** El dieciséis de octubre del año en curso, la DEPPP recibió del representante siete escritos con los que dio respuesta sobre las vistas precisadas en el punto que antecede.
- XI.** El doce de noviembre de dos mil dieciocho, la DEPPP, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6429/2018, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE copia del Estatuto modificado de Morena, a efecto de su revisión técnica en el ámbito de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y, en su caso, formulación de observaciones.
- XII.** El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6430/2018, la DEPPP comunicó al representante diversas observaciones de fondo a las modificaciones estatutarias, al tiempo que le requirió para que contestara los planteamientos formulados a éste y, en su caso, manifestara lo que a su derecho conviniera.
- XIII.** Mediante escrito recibido el veinte de noviembre del presente año en la Oficialía de Partes Común del INE, el representante suplente respondió el requerimiento indicado en el numeral que antecede.

- XIV.** El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, a través del oficio INE/UTF/DA/46811/18, comunicó a la DEPPP el resultado de la revisión especializada de aquellas modificaciones al Estatuto de Morena, con incidencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
- XV.** En sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos conoció el Anteproyecto de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto de Morena.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
2. El artículo 44, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE determina que es atribución del Consejo General del INE vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones a que están sujetos y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley y a la LGPP.

Modificaciones al Estatuto de Morena y comunicación al INE.

3. El artículo 25, párrafo 1, inciso I) de la LGPP establece la obligación de los partidos políticos de comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político.

Dicho plazo, en el caso concreto, transcurrió del veinte al treinta y uno de agosto del año en curso, ya que el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena se llevó a cabo el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, Morena cumplió con el plazo establecido en la citada Ley, toda vez que el representante comunicó a esta autoridad administrativa electoral las mencionadas modificaciones el treinta de agosto del año en curso, como se muestra a continuación:

AGOSTO 2018						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4. El día treinta de agosto y, en alcance, el cinco de septiembre de esta anualidad, Morena, por medio de su representante, remitió diversa documentación soporte, con la pretensión de acreditar que el V Congreso Nacional Extraordinario, en el que se aprobaron las modificaciones a su Estatuto, fue realizado conforme a su normatividad estatutaria. Dicha documentación constó de lo siguiente:

a) Copias Certificadas.

- Convocatoria al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.
- Publicación en estrados del Comité Ejecutivo Nacional, de la Convocatoria al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena.
- Publicación, en la página electrónica del partido, de la Convocatoria al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena.
- Lista de Quórum y Congressistas Asistentes al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.
- Lista de Congressistas Activos del V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.

- Acta del V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.

b) Originales.

- Guía para Congresistas Nacionales al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.
- Acreditaciones de Registro y Asistencia al V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho.

c) Otros.

- CD que contiene cuadro comparativo de las modificaciones al Estatuto de Morena, así como el texto aprobado por el pleno del V Congreso Nacional Extraordinario.
- Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones al Estatuto de Morena, así como el texto aprobado por el pleno del V Congreso Nacional Extraordinario.

Escritos de inconformidad presentados por militantes de Morena.

5. Las y los ciudadanos Aviud de la Fuente Plata, Gilberto Rafael Cantón Méndez, María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco, Erasmo García Flores, Jaime Hernández Ortiz, María del Carmen Gómez Ortega, Mauricio Rafael Ruíz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez, quienes se ostentan como militantes de Morena, presentaron escritos en los que expresan su inconformidad con diversas modificaciones al Estatuto de ese partido político, aprobadas por el V Congreso Nacional Extraordinario.

Los escritos de las y los ciudadanos precisados fueron interpuestos en diversas fechas y ante distintas autoridades jurisdiccionales en materia electoral, las cuales radicarón los medios impugnativos para su estudio y envío, en su caso, a la Sala Superior y posterior reenvío por parte de ésta al Consejo General del INE, conforme se indica:

Ciudadano/a inconforme	Tribunal que recibió el escrito	Fecha de recepción	Expedientes	Fecha de acuerdo Sala Superior	Fecha de notificación al INE
Aviud de la Fuente Plata	Sala Superior	23/08/2018	SUP-JDC-452/2018	13/09/2018	14/09/2018
Gilberto Rafael Cantón Méndez	Sala Superior	23/08/2018	SUP-JDC-453/2018	13/09/2018	14/09/2018
María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco	Sala Superior	23/08/2018	SUP-JDC-454/2018	13/09/2018	14/09/2018
Erasmus García Flores	Sala Superior	25/08/2018	SUP-JDC-460/2018	13/09/2018	14/09/2018
Jaime Hernández Ortiz	Sala Guadalajara	23/08/2018	SC-CA-298/2018 SUP-JDC-462/2018	13/09/2018	14/09/2018
María del Carmen Gómez Ortega	Tribunal Electoral del Estado de Querétaro	27/08/2018	SUP-JE-54/2018	13/09/2018	14/09/2018
Mauricio Rafael Ruíz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez	Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato	23/08/2018	TEEG-JPDC-132/2018 SUP-AG-119/2018	18/09/2018	20/09/2018

Asimismo, en los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-452/2018, SUP-JDC-453/2018, SUP-JDC-454/2018, SUP-JDC-460/2018 y SC-CA-298/2018, obran los documentos en los que consta la tramitación a los correspondientes escritos, ordenada en sede jurisdiccional a los órganos de Morena señalados como responsables, así como los informes circunstanciados rendidos, entre ellos, por la Presidencia de la Mesa Directiva del V Congreso Nacional Extraordinario. Con respecto a los expedientes SUP-JE-54/2018, TEEG-JPDC-132/2018 y SUP-AG-119/2018, no contienen constancias sobre la tramitación dada, en su caso, a los respectivos escritos.

Acuerdos emitidos por la Sala Superior.

6. La Sala Superior emitió sendos acuerdos plenarios en los expedientes SUP-JDC-452/2018, SUP-JDC-453/2018, SUP-JDC-454/2018, SUP-JDC-460/2018 y SUP-JDC-462/2018, en cada uno de los cuales determinó la improcedencia del respectivo juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Asimismo, ordenó enviar las constancias originales que integran los expedientes a este Consejo General para que procediera conforme a derecho.

Ahora bien, en la parte considerativa de cada uno de los acuerdos, sustancialmente, la Sala Superior determinó que lo conducente era encauzar los medios de defensa al Consejo General para que, en plenitud de sus atribuciones, al resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de lo acordado en el Congreso Nacional de Morena, analice si las modificaciones al Estatuto y a los procedimientos para la renovación de los órganos de dirección del citado partido político, limitan o no los derechos de los militantes.

Asimismo, en el expediente SUP-JE-54/2018, la Sala Superior resolvió desechar la segunda demanda del juicio electoral interpuesto por María del Carmen Gómez Ortega, así como enviar las constancias originales de la primera demanda al Consejo General del INE, para que, en plenitud de atribuciones, al momento de analizar las modificaciones estatutarias tome en consideración las impugnaciones que se le remitan y decida lo que en derecho corresponda. Por su parte, en el asunto general SUP-AG-119/2018, la Sala Superior acordó que es formalmente competente para conocer el juicio ciudadano promovido, así como reencauzar el medio de impugnación al Consejo General del INE para los efectos precisados en el acuerdo.

En esencia, la parte considerativa de ambos acuerdos plenarios establece que este Consejo General, en plenitud de sus atribuciones y al resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de lo acordado en el Congreso Nacional de Morena, debe analizar si las modificaciones a los Estatutos y procedimientos para la renovación de los órganos de dirección del citado partido político, limitan o no los derechos de los militantes.

Conocimiento de escritos de inconformidad en plenitud de atribuciones.

7. El examen integral de dichos escritos revela que los argumentos expuestos por los cuatro demandantes se relacionan con la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones estatutarias. Por ende, en términos de lo previsto en los artículos 44, párrafo 1, inciso j), de la LGIPE es atribución de este Consejo General vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones a que están sujetos y que sus actividades se desarrollen con apego a las normas electorales; y, de conformidad con el inciso l) del artículo 25 de la LGPP, éstos deben comunicar al INE cualquier modificación a sus

documentos básicos. Además, de acuerdo con los artículos 34, 35 y 36 del mismo ordenamiento, corresponde al INE revisar el proceso de reforma y contenido de la norma modificada, y declarar, de resultar procedente, su constitucionalidad y legalidad. Por lo que, como lo consideró la Sala Superior en los acuerdos dictados en cada uno de los expedientes de mérito, este Consejo General en plenitud de atribuciones y facultades debe tomar en consideración dichos escritos en este acto.

En efecto, la decisión de la autoridad jurisdiccional de enviar a este Instituto las demandas y sus anexos, así como las constancias originales que obran en los expedientes referidos, se basó en que los actos combatidos por los inconformes atañen a las modificaciones que el Congreso Nacional de Morena aprobó realizar a su Estatuto, cuya regularidad constitucional y legal concierne declarar a este máximo órgano de dirección por disposición expresa de la ley.

Plazo para resolver sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias

8. A partir del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que Morena, por medio de su representante, en alcance a su primer escrito remitió diversa documentación soporte para acreditar la realización del V Congreso Nacional Extraordinario, el Consejo General del INE contó con un plazo de treinta días para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de los cambios aprobados al Estatuto. El plazo se contabilizó tomando en consideración el *“AVISO relativo al primer periodo vacacional del personal del Instituto Nacional Electoral para el año 2018”*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio del presente año, conforme al cual no se contabilizaron, para el cómputo de cualquier plazo legal en materia electoral, los días comprendidos del diecisiete al veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, el plazo fenecía el once de octubre de dos mil dieciocho.

Sin embargo, derivado de los escritos y expedientes remitidos por la Sala Superior para su atención, señalados en el considerando 5 de esta Resolución, así como de los oficios de vista que de los mismos dio la DEPPP a Morena, los cuales fueron contestados el dieciséis de octubre del mismo año, el término para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las

reformas aprobadas se modificó. Aunado a lo anterior, conforme con lo previsto en el artículo 11 del *Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral* (en adelante Reglamento), aprobado mediante Acuerdo identificado como INE/CG272/2014 el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se formuló un requerimiento con observaciones de fondo al partido político el doce de noviembre de dos mil dieciocho, el cual fue respondido el día veinte siguiente, por lo que el aludido plazo de treinta días contó a partir del veintiuno de noviembre del año en curso.

Cabe señalar que, esta autoridad, en todo momento, tiene la facultad de requerir al partido político para solicitar información faltante o aclarar el sentido de alguna disposición o norma, conforme a lo señalado en el artículo 11 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Reglamento), aprobado mediante Acuerdo identificado como INE/CG272/2014 el diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

Verificación de la validez del V Congreso Nacional Extraordinario

9. En el presente apartado se analizará la validez legal y estatutaria del V Congreso Nacional Extraordinario, tomando en consideración los motivos de inconformidad expresados por diversos ciudadanos en sus respectivos escritos. Para ello, en el punto de análisis que corresponda, se mencionará el nombre del inconforme junto con la clave de expediente asignada por la Sala Superior, posteriormente, se expondrá un resumen de su motivo de disenso y enseguida se realizará el correlativo pronunciamiento de esta autoridad electoral.
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la LGIPE, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del INE, la DEPPP auxilió a la Comisión de Prerrogativas y Partidos

Políticos en el análisis de la documentación que presentó Morena, a efecto de verificar que la instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en el V Congreso Nacional Extraordinario se apegaran a la normatividad estatutaria aplicable.

11. El Congreso Nacional de Morena cuenta con la atribución de reformar el Estatuto del partido, en términos de lo dispuesto por el artículo 71º de su propia norma estatutaria, que a la letra señala:

“ ...

Artículo 71º. *La reforma a los documentos básicos requerirá la aprobación de un Congreso Nacional ordinario o extraordinario. Podrán proponer su reforma los distintos órganos de MORENA, los Protagonistas del cambio verdadero y la autoridad electoral.*

... ”

12. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizó la documentación presentada por Morena y, del estudio realizado, se constató que el V Congreso Nacional Extraordinario se realizó con apego a lo previsto en los artículos 34º, 35º, 36º y 41º Bis, primer párrafo, incisos b), c) y f), párrafo 3, del Estatuto vigente de dicho instituto político, debido a lo siguiente:

- a) Con fecha treinta y uno de julio del año en curso, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó al V Congreso Nacional Extraordinario.
- b) La Convocatoria fue signada por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y publicada, con más de una semana de antelación, en los estrados de dicho órgano de dirección, así como en la página electrónica de Morena.
- c) En el V Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, se encontraron presentes 1349 de los 2498 congresistas activos, lo que constituye una asistencia del 54%.

A este respecto, Aviud de la Fuente Plata (SUP-JDC-452/2018), manifiesta que el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena no contó con el quórum estatutario para llevarse a cabo, pues afirma que, al inicio de la sesión, se informó la presencia de 1321 (mil trescientos veintiún) congresistas de un universo de 2498 (dos mil cuatrocientos noventa y ocho) integrantes del citado congreso. Esto es, 52.88%. Sin embargo, al aprobarse las modificaciones estatutarias (punto siete del

orden del día), la votación fue: 695 (seiscientos noventa y cinco) votos a favor, 330 (trescientos treinta) votos en contra, y 200 (doscientas) abstenciones, lo que arroja un total de 1225 (mil doscientos veinticinco) congresistas presentes; es decir, el 49% respecto del total de integrantes del congreso.

Pronunciamiento. Al respecto, este Consejo General llega a la conclusión de que el inconforme parte de una premisa inexacta, al afirmar que el V Congreso Nacional Extraordinario careció de quórum para su realización, pues de la valoración conjunta a la documentación presentada por Morena para acreditar la integración, convocatoria y sesión estatutaria del citado órgano, en particular, los formatos individuales denominados “Acreditación de Registro y Asistencia” de los integrantes del Congreso Nacional y la lista certificada de congresistas activos al mismo, se comprueba la concurrencia efectiva de 1349 (mil trescientos cuarenta y nueve) congresistas, de un total de 2498 (dos mil cuatrocientos noventa y ocho), lo cual equivale a la asistencia del 54%. Es decir, el Congreso Nacional se instaló al superarse la presencia de la mitad más uno (1250), al asistir un total de 1349 delegadas y delegados.

Al respecto, cabe destacar que en la Guía para los Congresistas Nacionales, distribuida a los integrantes del V Congreso Nacional Extraordinario, misma que contiene el Reglamento respectivo, en su artículo 2. *Quórum*, dispone que el quórum se integra con la mitad más uno de las y los delegados efectivos, así como el momento para verificar y, en su caso, declarar la existencia del quórum legal para la instalación de dicho Congreso, al determinar que a las 10:30 horas del diecinueve de agosto de verificará y, en su caso, se declarará el quórum para instalar el mismo.

En adición a lo anterior, el artículo 34°, párrafo tercero del Estatuto de Morena prevé que: “(...) *El Congreso Nacional se instalará con la mitad más uno de los delegados y delegadas al Congreso (...)*”. En este sentido, el partido político acreditó fehacientemente que la instalación del V Congreso Nacional Extraordinario se realizó con apego a esta norma estatutaria; es decir, se verificó la existencia del quórum al momento de la instalación del Congreso antes del inicio formal de la sesión.

En relación con los 1225 (mil doscientos veinticinco) congresistas que el inconforme afirma votaron las modificaciones estatutarias, así como que no existe certeza sobre el resultado de la votación, pues el número de votos emitidos no corresponde a la cantidad de congresistas acreditados, se precisa que la verificación del quórum estatutario se realizó al instalarse el Congreso Nacional. Aunado a que, dada la naturaleza política de dicho órgano partidista, la gran cantidad de personas que lo integran y la complejidad logística para mantenerlas en orden o inamovibles durante su realización, se estima que aun cuando en apariencia disminuyó la asistencia, en realidad se mantuvo el quórum para sesionar válidamente, lo cual fue convalidado al votarse a favor las modificaciones al Estatuto por una mayoría de 695 (seiscientos noventa y cinco) congresistas (51.51%), de un total de 1349 (mil trescientos cuarenta y nueve) delegados asistentes.

Así, con sustento en el principio de conservación de los actos públicos electorales válidamente celebrados, se concluye la validez estatutaria del quórum durante la sesión del Congreso Nacional de cuenta.

- d) De conformidad con el Acta del V Congreso Nacional Extraordinario, una vez instalada la mesa directiva encargada de dirigir los trabajos del Congreso, se aprobó, por votación unánime, el Reglamento del mismo.
- e) Las modificaciones al Estatuto de dicho instituto político se aprobaron por 695 (51.51%) de los 1349 congresistas activos asistentes, lo que representa más de la mitad más uno (676) de los congresistas activos presentes.

Sobre este punto, Aviud de la Fuente Plata (SUP-JDC-452/2018), esencialmente, manifiesta que la aprobación de las modificaciones al Estatuto y procedimientos para la renovación de los órganos directivos de Morena, mediante votación a mano alzada, por un lado, violenta el artículo 36º estatutario, el cual determina la votación universal, secreta y en urnas para la elección de integrantes del Consejo Nacional; y, por otro, señala que la votación a mano alzada no cumple la formalidad establecida en el artículo 41º Bis, inciso f. numeral 3, del Estatuto, para la sesión de los órganos de dirección, consistente en que una vez instaladas las sesiones, los acuerdos serán con el voto de la mitad más uno de los presentes, situación que, a su consideración, se incumplió, al no garantizarse el voto directo a los congresistas, pues a su juicio la

mayoría de los asistentes al V Congreso Nacional Extraordinario no contaban con esa calidad, sino que también acudieron autoridades electas e invitados especiales, en términos de la convocatoria.

Por su parte, Mauricio Rafael Ruíz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez (SUP-AG-119/2018), estiman que la votación de la reforma estatutaria a mano alzada no tiene fundamento estatutario, aunado a que no se tiene certeza de quién votó efectivamente, toda vez que levantaron la mano personas que no tenían derecho a votar.

Al respecto, en la Guía para Congresistas Nacionales participantes en el V Congreso Nacional Extraordinario, misma que reproduce el Reglamento de dicho Congreso, en su artículo 6. *De la Votación*, prevé que las propuestas se pondrán a consideración de los congresistas, quienes en votación económica decidirán, en su caso, su aprobación. Asimismo, establece que el proceso se realizará con el apoyo del equipo técnico del Consejo Nacional de Elecciones.

En este sentido, la votación económica puede tener varias formas de manifestarse por las personas facultadas para sufragar, entre ellas, levantar la mano para determinar su asentimiento o negativa. Sobre el particular, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-JDC-1025/2013 señaló lo siguiente:

“El método de votación económica, tratándose de cuestiones electorales dentro del Partido Acción Nacional y en específico para la reforma de sus Estatutos, es un procedimiento ágil que consiste en la aprobación o desaprobación de una propuesta, por parte de las delegaciones, mediante "mano alzada", es decir, los asistentes manifiestan el sentido de su voto levantando la mano, a fin de que los escrutadores estén en aptitud de contabilizar la votación, de manera que, si ese voto es unánime o corresponde a una mayoría es posible determinar su sentido.

En consecuencia, dicho método implica la aceptación o rechazo a una propuesta determinada, por una amplia mayoría, o bien, por unanimidad de los presentes.

Dicho mecanismo no rompe con los principios democráticos constitucionales de certeza y seguridad jurídica, en tanto que es posible determinar con precisión el sentido del voto de las delegaciones que se congregan a expresar su voluntad.

En efecto, si al interior del partido la votación se da de manera económica, el voto de los afiliados se expresa de forma abierta, ello no

significa que el procedimiento carezca de certidumbre, pues puede contarse cuál es la voluntad expresada de los delegados, es decir, se pueden computar los votos que se expresen a través de dicho método de votación, dado que las sesiones del órgano deliberativo que se encarga de realizar las reformas a los Estatutos, están sujetas a la supervisión de los escrutadores que se encuentran presentes y que son los encargados de hacer el cómputo correspondiente.”

Por otro lado, el contexto del artículo 36° del Estatuto se refiere a una sesión de carácter electivo del Congreso Nacional de Morena, cuyo objeto es fijar las reglas básicas para la elección estatutaria de 200 (doscientos) integrantes del Consejo Nacional, para completar un total de 300 (trescientos) Consejeros y Consejeras Nacionales, en cuyas formalidades se prevé que la votación será universal, secreta y en urnas.

Por su parte, el artículo 41° Bis, inciso f., numeral 3, del Estatuto, establece como regla general que los acuerdos de todos los órganos de dirección y ejecución señalados en el artículo 14° estatutario, cuyo inciso g., comprende al Congreso Nacional del partido político, serán válidos con el voto de la mitad más uno de los presentes, sin que se distinga determinada forma de votación. De ahí que, acorde con el principio general del derecho relativo a que *donde la ley no distingue no es dable distinguir*, carece de sustento interpretar que todas las votaciones del Congreso Nacional deban hacerse de manera secreta y en urnas, pues como se demuestra, dicho órgano está facultado para determinar el tipo de votación a utilizarse, mientras se respete el principio de mayoría.

A juicio de este Consejo General, la votación económica en las sesiones de los órganos directivos de Morena es una modalidad formalmente compatible con la regla de la mayoría (voto de la mitad más uno de los presentes), prevista en el artículo 41° Bis, inciso f., numeral 3 estatutario, pues es un mecanismo capaz de brindar certeza de los votos emitidos a favor, en contra y las abstenciones, en su caso.

Es de explorado derecho que, en prácticamente todos los órganos colegiados, incluyendo los órganos legislativos, existe la posibilidad para el cuerpo electoral de votar en forma económica, con la misma validez que otras modalidades tales como la votación nominal, por cédula u otros mecanismos regulados en la normativa aplicable. Así, no

es indispensable que el Estatuto modificado establezca expresamente la votación a mano alzada en el artículo 41° Bis, inciso f., numeral 3, pues al no limitar las modalidades para lograr la mayoría exigida, los órganos del partido político están en aptitud de determinar la modalidad de votación que mejor se adecue a la sesión en desarrollo, mientras se tenga certeza del resultado de la votación.

- f) El V Congreso Nacional Extraordinario facultó, al Comité Ejecutivo Nacional y a la representación de Morena ante el Consejo General de este Instituto, para subsanar las observaciones y precisiones que realice esta autoridad electoral.

- 13. Por otro lado, del estudio realizado por esta autoridad, se advierte que las modificaciones al Estatuto fueron aprobadas por el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, fecha en la cual aún no terminaba formalmente el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Al respecto, Aviud de la Fuente Plata (SUP-JDC-452/2018) y Gilberto Rafael Cantón Méndez (SUP-JDC-453/2018), estiman que la modificación estatutaria transgrede el artículo 34, párrafo 2 de la LGPP, el cual establece un periodo de veda para aprobar modificaciones estatutarias durante el Proceso Electoral, el cual consideran que no había concluido cuando se realizó el V Congreso Nacional Extraordinario ni a la fecha de presentación del medio impugnativo del segundo inconforme. Lo anterior, toda vez que conforme a la Jurisprudencia 1/2002, emitida por la Sala Superior, el Proceso Electoral concluye hasta que el último acto o resolución de la etapa de resultados adquiere definitividad, así como por estarse en aquel momento en el contexto de expedición de constancias de mayoría relativa y representación proporcional a diputados y senadores. De ahí que estimen inválida la aprobación de la modificación al Estatuto y procedimientos determinados para la renovación de los órganos de dirección.

A consideración de esta autoridad electoral administrativa, las modificaciones al Estatuto aprobadas en el V Congreso Nacional Extraordinario son válidas, pues si bien es cierto que el artículo 34, párrafo 2, inciso a) de la LGPP dispone que la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos políticos, en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el Proceso Electoral y que en términos de la Jurisprudencia 1/2002 de la Sala Superior, el Proceso Electoral concluye hasta que el último acto o resolución

de la etapa de resultados adquiera definitividad, lo cual ocurrió el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, al resolver la Sala Superior los recursos de reconsideración presentados en contra de la asignación de diputados y senadores por representación proporcional, debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma contenida en dicho artículo, a la luz de su interpretación sistemática y teleológica, como se demuestra enseguida.

En la viabilidad de la interpretación teleológica en el presente caso, *mutatis mutandis*, se sustenta en criterios emanados del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, los tribunales de la Federación, en la tesis I.1o.A.E.78 K, de rubro “**INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA DUAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO**”, han sostenido que la interpretación conforme, como condición justificante de la decisión de la autoridad, es un criterio para la selección de la técnica interpretativa (literal, teleológica, histórica, restrictiva, extensiva, sistemática, entre otras), mediante la cual habrá de asignarse significado al enunciado normativo de que se trate, debiendo tenerse como válido el que resulte más adecuado o conforme con los principios y valores contenidos en la Norma Suprema. El texto íntegro de la tesis referida establece lo siguiente:

*“Época: Décima Época
Registro: 2017437
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 56, Julio de 2018, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: I.1o.A.E.78 K (10a.)
Página: 1503*

INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA DUAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó diversas funciones de la interpretación conforme, como principio, método hermenéutico y técnica de interpretación. Esta múltiple conceptualización permite tener como postulado fundamental la posibilidad de emplearla siguiendo dos reglas, consistentes, una, en interpretar las disposiciones jurídicas en concordancia con las normas constitucionales y, otra, en elegir entre los diversos sentidos interpretativos que admita un texto normativo, el que sea conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reglas precedentes denotan que, en el sistema jurídico mexicano, la llamada interpretación conforme es una herramienta metodológica de carácter dual, que funciona como regla interpretativa para determinar el significado de

enunciados normativos (fijación de las condiciones necesarias para la decisión judicial) y como criterio para calificar la validez del significado atribuido a los enunciados normativos (justificación de la decisión judicial). En el primer caso, no es más que una expresión de la interpretación sistemática que consiste en atribuir a una disposición un determinado significado, en armonía con el que se confiere a otras disposiciones previamente interpretadas (en este caso, normas de carácter constitucional), a partir de la presunción de que el derecho es un sistema dotado de unidad, coherencia y consistencia. Como condición justificante de la decisión judicial, la interpretación conforme es un criterio para la selección de la técnica interpretativa (literal, teleológica, histórica, restrictiva, extensiva, sistemática, etcétera), mediante la cual habrá de asignarse significado al enunciado normativo de que se trate, debiendo tenerse como válido el que resulte más adecuado o conforme con los principios y valores contenidos en la Norma Suprema.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 26/2018. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y otras. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez. Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Nota: Subrayado propio.

Tomando en cuenta este criterio jurisdiccional, se realiza la interpretación sistemática y teleológica del artículo 34, párrafo 2, inciso a) de la LGPP.

El artículo citado de la LGPP, establece:

“...

Artículo 34.

(...)

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el Proceso Electoral; (...).”

En este contexto normativo, acorde con una interpretación sistemática y teleológica del artículo 34, párrafo 2, inciso a) de la LGPP, se infiere que la finalidad perseguida por esta disposición consiste en que las normas internas de los partidos políticos no sean modificadas durante el desarrollo sustancial de un Proceso Electoral, acorde con el principio de certeza, traducido en el conocimiento general de la normativa interna que lo regirá, previo a su inicio formal.

En este sentido, si bien es cierto que al día diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, en que se aprobaron las modificaciones estatutarias, aún no concluía formalmente el Proceso Electoral Federal 2017-2018, resulta necesario ponderar esta circunstancia frente a la proximidad del inicio de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en los cuales Morena tiene derecho a participar, en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución.

Esto, pues es un hecho notorio que, a la fecha de realización del V Congreso Nacional Extraordinario, ya se habían desahogado en su totalidad las etapas de preparación de las elecciones federales, Jornada Electoral, así como Dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de la República, previstas en el artículo 208, párrafo 1, de la LGIPE. Es decir, a ese día ya se habían agotado de manera definitiva e inatacable la mayor parte de actos y procedimientos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, quedando únicamente por determinarse las declaraciones de validez y la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, así como la resolución por la Sala Superior de los medios de impugnación que, en su caso, se presentaran.

Por otro lado, de conformidad con el Plan Integral y Calendarios de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, aprobado por el Consejo General el seis de agosto de este año, mediante el Acuerdo INE/CG1176/2018, las fechas de inicio de los referidos procesos comiciales locales son:

Entidad	Inicio del PEL 20018-2019	
	Desde	Hasta
Aguascalientes	07/10/2018	13/10/2018
Baja California	09/09/2018	
Durango	01/11/2018	01/11/2018
Quintana Roo	06/01/2019	12/01/2019
Tamaulipas	09/09/2018	

Atento a las circunstancias señaladas, este Consejo General considera que debe tener preponderancia la decisión adoptada por el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena para modificar sus Estatutos, antes del inicio de los Procesos Electorales Locales en las entidades federativas precisadas, a

pesar de encontrarse culminando el proceso comicial federal, pues se trata de una medida cuya idoneidad y razonabilidad radican en cumplir eficazmente la finalidad y el mandato del artículo 34, párrafo 2, inciso a) de la LGPP, ante el inminente inicio de los procesos electivos correspondientes. Tal es así, pues el proceso de modificaciones estatutarias implica que este Consejo General realice la verificación de la validez del V Congreso Nacional Extraordinario y estudie el sentido de la reforma estatutaria, a fin de que pronuncie sobre su constitucionalidad y legalidad, en el ámbito de sus atribuciones, lo cual conlleva tiempo para desahogar el procedimiento relativo.

Por tanto, esta autoridad estima apegada a derecho la realización del V Congreso Nacional Extraordinario el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el que se aprobaron las modificaciones al Estatuto de mérito, en atención al derecho de Morena de modificar sus normas estatutarias antes del inicio de los próximos Procesos Electorales Locales.

14. Como resultado de lo señalado en los considerandos 9 al 13 de esta Resolución, se determina la validez del V Congreso Nacional Extraordinario de Morena.

Revisión de las modificaciones estatutarias por la Unidad Técnica de Fiscalización

15. Como se señaló en los antecedentes de esta Resolución, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, la DEPPP remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización copia del Estatuto reformado, con la solicitud de colaboración a efecto de realizar su revisión técnica en el ámbito de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y, en su caso, la formulación de observaciones.

El veintiuno de noviembre del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización respondió la solicitud en mención y remitió observaciones a las modificaciones estatutarias de Morena, relacionadas con la creación del Instituto Nacional de Formación Política, consistentes en los puntos siguientes:

- a) Los partidos políticos tienen la obligación de formar un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes; dicho

órgano al no tener personalidad jurídica propia y al ser parte del partido político es sujeto de fiscalización, de conformidad con el artículo 41, Base V, apartado B, último párrafo de la Constitución, ya que establece que *la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de sus campañas estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral*.

Dicha fiscalización se realiza al financiamiento público y privado que reciben los sujetos obligados, en dos vertientes:

- Lo establecido por el artículo 41, fracción II, de la Constitución, el cual establece que la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
 - Lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución, el cual establece que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
- b) Los sujetos obligados rinden cuentas, a través de sus comités ejecutivos nacionales y estatales para los ingresos y gastos de recursos federales y locales, respectivamente, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución.
- c) Se advierte que el Instituto Nacional de Formación Política, como órgano interno de Morena, será sujeto de fiscalización por parte del Consejo General del INE por medio de su Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización; asimismo, deberán observar y cumplir las reglas de fiscalización y rendición de cuentas definidas en las leyes y Reglamentos aplicables; dicha rendición de cuentas y la fiscalización deberá realizarse a través de los titulares de los órganos de finanzas responsables de la presentación de los informes por cada ámbito de

aplicación, de acuerdo a los preceptos constitucionales y demás normas en la materia.

Requerimiento de fondo formulado a Morena y respuesta

16. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, la DEPPP comunicó al representante diversas observaciones de fondo al Estatuto modificado y requirió a Morena para que contestara los planteamientos formulados, y, en su caso, manifestara lo que a su derecho conviniera.

El representante suplente respondió el requerimiento indicado mediante escrito recibido el veinte de noviembre del presente año en la Oficialía de Partes Común del INE, en el que manifiesta aclaraciones con respecto al propio requerimiento y al sentido de las modificaciones o adiciones estatutarias, cuyos puntos sustanciales expresan lo siguiente:

- a) Considera que el requerimiento fue extemporáneo, habida cuenta que, a su juicio, excede los plazos marcados en el Reglamento.

Al respecto, este Consejo General estima que el requerimiento formulado por la DEPPP, en apoyo a las atribuciones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, fue realizado en tiempo y forma, pues de la interpretación sistemática y funcional del artículo 25, numeral 1, inciso I) de la LGPP, en relación con los artículos 10, 11, 15, párrafo 2, inciso c), 16 y 17 del Reglamento, se desprende que la citada Dirección Ejecutiva está facultada para realizar requerimientos en caso de que exista alguna omisión en la documentación que deba presentarse o, en su caso, exista la necesidad de aclaración respecto de la documentación entregada y/o la validez estatutaria de las decisiones que se comunican, así como en caso de que exista alguna omisión en los requisitos que deben contener las modificaciones de que se trate en términos de la LGPP o el Reglamento, a fin de llevar a cabo el análisis correspondiente, los cuales podrán formularse dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a la última comunicación del partido político. En tal caso, a partir de la respuesta presentada por el partido político comenzará a correr el plazo de treinta días naturales a que se refiere el artículo 25, numeral 1, inciso I) de la LGPP.

- b) En relación con los cuestionamientos del requerimiento relacionados con el artículo 6° bis del Estatuto¹, el representante suplente manifiesta los 3 elementos insertos, serán valorados bajo los parámetros e indicadores que se establezcan en el reglamento respectivo, que demuestran en uno o muchos aspectos, el cumplimiento de las responsabilidades estatutarias de los militantes, sin dejar de aplicar los artículos 42°, 43° y 44° del propio Estatuto.

De igual forma señala que, añadir esos elementos de valoración, no impone ninguna carga a la militancia que aspire a cargos de dirección interna o a precandidaturas o candidaturas de elección popular, al contrario, son elementos para la toma de la decisión correspondiente.

En la lectura del precepto añadido, deben tenerse en cuenta los artículos 42°, 43°, 44°, incisos a, d, e, k, m, q y s, 46°, incisos c y d, 49° y 49° bis del Estatuto.

Asimismo, considera que tales elementos vinculantes son instrumentos que la Comisión Nacional de Elecciones debe valorar, adicionales a los que hasta la fecha ha utilizado al emitir sus dictámenes, incluyendo las responsabilidades del artículo 6° que no fue modificado.

¹ “...

a) ¿Cómo la Comisión Nacional de Elecciones valorará la trayectoria de aquellos que aspiren a ser candidato a un cargo interno o de elección popular?

b) ¿Cómo la Comisión Nacional de Elecciones valorará los atributos ético-políticos de aquellos que aspiren a ser candidato a un cargo interno o de elección popular?

c) ¿Cómo la Comisión Nacional de Elecciones valorará la antigüedad en la lucha por causas sociales de aquellos que aspiren a ser candidato a un cargo interno o de elección popular?

d) ¿Cómo la Comisión Nacional de Elecciones relacionará lo anterior con el cumplimiento de las responsabilidades señaladas en el artículo 6° del Estatuto?

e) ¿Cómo la Comisión Nacional de Elecciones hará la valoración de lo anterior?

f) Señalar si los candidatos tendrán derecho de audiencia y si el resultado de la valoración será notificado a los candidatos y el medio de impugnación previsto para ello.

g) Señalar si lo anterior, es una carga para la militancia.

h) ¿Cuáles serán, en su caso, los criterios objetivos, racionales y proporcionales que se establecerán en las bases para las convocatorias?

Asimismo, se requiere a Morena para que se pronuncie sobre si existen y, en caso afirmativo, cuáles son las limitantes en el ejercicio del derecho a ser votado, al interior del partido político, para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular, en aplicación de la disposición analizada del Estatuto...”

- c) Por lo que hace al planteamiento del requerimiento sobre el artículo 14°, inciso d., del Estatuto², el partido político manifiesta que los parámetros aplicables para que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinen los municipios en los que se habrá de elegir comités ejecutivos municipales, son los poblacionales, de densidad de militancia, así como coyunturales. En todo caso, todos ellos responden a la organización interna del partido y para efectos de sus estrategias políticas electorales.
- d) Tocante al cuestionamiento del artículo 41°, párrafo segundo estatutario³, Morena precisa que las facultades exclusivas del Consejo Nacional que no podrán delegarse al Comité Ejecutivo Nacional son las contenidas en los incisos a., b., c., d., y e., de dicho artículo.
- e) En relación con la primera pregunta formulada sobre la reforma al artículo 38°, párrafos segundo, tercero y quinto del Estatuto⁴, por lo que hace a las atribuciones del Consejo Nacional, son las que manifestó anteriormente. Y referente al Congreso Nacional, el partido político manifiesta que la lectura de la fracción normativa “(...) *Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas que les sean exclusivas a dichos órganos (...)*”, es en el sentido de que los documentos básicos son facultades exclusivas no delegables del Congreso Nacional. Por lo que todas las demás facultades del Congreso, son delegables.

Respecto a la segunda pregunta vinculada con el artículo estatutario citado⁵, Morena responde:

- En cualquier caso, coyuntural o no.

² “(...) exprese concretamente cuáles son las condiciones aplicables para que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinen los municipios en los que se habrá de elegir comités ejecutivos municipales (...)”.

³ “(...) precise los incisos que contienen las facultades exclusivas del Consejo Nacional que no podrán delegarse al Comité Ejecutivo Nacional (...)”.

⁴ a) ¿Cuáles son las atribuciones que el Consejo Congreso Nacional y el Consejo Nacional, podrán y no podrán delegar en el Comité Ejecutivo Nacional?

⁵ b) ¿En qué casos, durante qué periodo y en qué órganos del Partido, el CEN podrá, a propuesta de la Presidencia, nombrar a los delegados a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal para atender temas o, en su caso, funciones de dichos órganos?

- Durante el periodo en que sea necesario, conforme al Acuerdo que dicte el Comité Ejecutivo Nacional.
- En todos los órganos del partido.

Asimismo, expresa que la delegación responde al refuerzo de las funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal. En este sentido, precisa que el esquema de delegados es de dos tipos: el primero obedece a ejercer funciones de los órganos que quedan sin titulares, en tanto el mecanismo estatutario de sustitución o nueva elección se activa; el segundo, son aquellos que reforzarán la tarea del partido, pero que en forma alguna y bajo ningún supuesto puede sustituir a los órganos estatutariamente electos en sus funciones, por tanto, están acotados a la coyuntura y ejercicio de auto organización del partido.

Con respecto a la tercera pregunta⁶ del artículo 38°, Morena manifestó que los Lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de Morena, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios del partido político tendrán un nivel de obligatoriedad o vinculación completa, en todo lo que no se oponga a la autonomía legislativa y del grupo parlamentario frente al partido.

- f) Por lo que hace a las normas adicionadas al Estatuto para la creación del Instituto Nacional de Formación Política, Morena dio respuesta en los términos siguientes:

En relación con la primera pregunta de este tema⁷, el partido político contesta en el sentido de que el Instituto Nacional de Formación Política en un órgano interpartidista, acorde con el artículo 14°, inciso H, numeral 1 de la reforma Estatutaria, con funciones de formación de cuadros y militantes, y capacitación en materia electoral.

⁶ c) *¿Cuál sería el nivel de obligatoriedad o vinculación estatutaria de los Lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de Morena, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios, en el tenor de lo establecido en el quinto párrafo del numeral 38°?*

⁷ a) *¿Cuál sería la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Formación Política dentro del ordenamiento jurídico mexicano?*

Respecto a los cuestionamientos segundo y tercero⁸, Morena manifiesta que la autonomía en el funcionamiento y gestión del Instituto Nacional de Formación Política es para efectos de la organización de los eventos de formación y de capacitación, desde la elección de los temas, los contenidos, los tiempos, el seguimiento de cada participante, la elaboración de materiales y contenidos, el tipo de acercamiento con la militancia, limitado por los documentos básicos de Morena.

Asimismo, expresa que la autonomía se dirige al cumplimiento de su objetivo general de: *“... informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea...”*

Tocante al cuarto cuestionamiento⁹, el partido político responde que el Instituto Nacional de Formación Política:

- Tendrá las funciones que deriven de su naturaleza descrita.
- Tendrá las facultades necesarias para efectos de su autonomía, con los alcances mencionados.
- Las obligaciones son las que se desprenden del Estatuto, así como de las funciones y facultades ya mencionadas.

Por lo que se refiere a la quinta pregunta¹⁰, Morena afirma que se creará una comisión, según se señala en el Estatuto, con funciones de coordinación.

⁸ d) ¿A qué se refiere la autonomía en el funcionamiento y gestión del Instituto Nacional de Formación Política y cuáles son sus alcances?

e) ¿En qué sentido el Instituto Nacional de Formación Política será dirigido por un Consejo interno y un Presidente?

⁹ f) ¿Cuáles son las funciones, facultades y obligaciones particulares del Instituto Nacional de Formación Política?

¹⁰ g) ¿A qué órgano de Morena corresponde la aprobación de los lineamientos para la coordinación de las actividades y funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política?

En lo concerniente al sexto cuestionamiento¹¹, el partido político contesta que el Comité Ejecutivo Nacional es competente para elegir o nombrar al Presidente y los integrantes del Consejo y de la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política, en términos del Tercero transitorio.

En relación con el séptimo cuestionamiento¹², Morena afirma que el Consejo y la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política no necesariamente se conformará por integrantes de otros órganos, pero tampoco es excluyente.

Respecto al octavo cuestionamiento¹³, la respuesta es que el periodo de ejercicio de los cargos del Presidente, del Consejo y de la Comisión del Instituto será cada tres años, en términos del artículo 10 del Estatuto.

En referencia al noveno cuestionamiento¹⁴, el partido político responde en el sentido de que las atribuciones del Presidente, del Consejo y de la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política, se desprenden de la naturaleza, autonomía y funciones del propio Instituto, así como las que se establecerán en el reglamento correspondiente (Lineamientos), acorde al artículo Tercero transitorio, que señala que el Instituto presentará un programa de trabajo y sus Lineamientos al Consejo Nacional de Morena.

Con respecto a la décima pregunta¹⁵, la respuesta de Morena es en el sentido de que no hubo cambio estatutario en esa materia; razón por la cual los informes de ingresos y gastos de las prerrogativas de

¹¹ h) *¿Qué órgano de Morena es competente para elegir o nombrar, mediante un procedimiento democrático, al Presidente y los integrantes del Consejo y de la Comisión, del Instituto Nacional de Formación Política?*

¹² i) *¿El Consejo y la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política se conformarán por integrantes de otros órganos de Morena?*

¹³ j) *¿Cuál es el periodo de ejercicio de los cargos del Presidente, del Consejo y de la Comisión, del Instituto Nacional de Formación Política?*

¹⁴ k) *¿Cuáles son las atribuciones del Presidente, del Consejo y de la Comisión, del Instituto Nacional de Formación Política?*

¹⁵ l) *¿Cuál es el órgano responsable para presentar ante el Instituto Nacional Electoral los informes de ingresos y gastos de las prerrogativas de financiamiento público locales y federales de Morena, con que, en su caso, contará el Instituto Nacional de Formación Política?*

financiamiento público locales y federales son responsabilidad de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, y de los secretarios o encargados de finanzas de cada estado.

- g) En relación con la modificación al artículo 67° estatutario, el cuestionamiento formulado¹⁶ fue respondido en el sentido de que la condonación de aportaciones a militantes se realizará cuando así se determine por el Comité Ejecutivo Nacional, cumpliendo con el principio de legalidad y en términos del artículo 56 de la LGPP.

De manera enunciativa, el partido político expresa que se considerará una situación excepcional, para efectos de la condonación, la que tengan los militantes en municipios que atravesaron por eventos naturales catastróficos; también, aquellos que atraviesan por severos conflictos sociales o de delincuencia.

Asimismo, se considerará excepcional la situación sociodemográfica y/o socioeconómica de los militantes en cada municipio, considerando las diferencias que existen entre los ingresos en uno y otro municipio, y comunidad del país, así como los niveles de funciones que en su caso desempeña cada militante.

Igualmente, se considerarán circunstancias excepcionales las dificultades enteramente personales de cada militante, incluyendo afectaciones repentinas en sus capacidades físicas o problemáticas familiares, que afecten justificadamente su ingreso personal.

Todo lo anterior, de manera meramente enunciativa, según lo expresado por el partido político.

Revisión de la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones al Estatuto de Morena

17. En este apartado se estudiará la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto de Morena, aprobadas por el V Congreso Nacional

¹⁶ “(...) *tocante a la condonación de aportaciones, señalar cuáles son las situaciones excepcionales y cómo se justificarán (...)*”

Extraordinario, teniendo en cuenta los motivos de disenso planteados por diversas ciudadanas y ciudadanos militantes en sus escritos; las respuestas de Morena a las vistas que de los mismos se le dio; la respuesta que el representante suplente dio al requerimiento de la DEPPP con las observaciones de fondo a las modificaciones estatutarias; así como las observaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto.

- 18.** De conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 2, inciso a), relacionado con el 35 de la LGPP, los partidos políticos deben disponer de Documentos Básicos, los cuales, de manera general, deberán cumplir con los extremos que al efecto precisa el artículo 36, párrafo 1; y, en particular, ajustarse a las previsiones de los artículos 37 por lo que hace a la Declaración de Principios, 38 en cuanto al Programa de Acción, así como 39 al 41 y 43 al 48 respecto de los Estatutos, todos del mismo ordenamiento general.
- 19.** En relación a las modificaciones de los Estatutos de los partidos políticos, es de precisar que, la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-40/2004, en su Considerando Segundo determinó que este Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas disposiciones que sufran modificaciones en su sustancia y sentido, y que si los preceptos cuyo contenido se mantiene ya fueron motivo de una declaración anterior, conforme al principio de seguridad jurídica, no es factible que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de ellos. En este sentido serán analizadas sólo las modificaciones presentadas por Morena.
- 20.** De lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la LGPP, se advierte que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en la mencionada Ley y en la normativa interna que aprueben sus órganos de dirección.
- 21.** De conformidad con lo previsto en el artículo 36, párrafo 1 de la LGPP, para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los Documentos Básicos, este Consejo General atenderá el derecho de los partidos políticos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

22. La Sala Superior, en sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, aprobó la Jurisprudencia 3/2005, de rubro “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”, la cual describe los elementos mínimos que deben contener los Estatutos de los Partidos Políticos Nacionales para ser considerados democráticos, mismos que también se encuentran inmersos en la LGPP. El texto de la mencionada jurisprudencia es del tenor siguiente:

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus Estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral Federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente

por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-781/2002. Asociación Partido Popular Socialista. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-259/2004. José Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 122".

- 23.** Por su parte, la Sala Superior, en sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, aprobó la Tesis VIII/2005, vigente y obligatoria, de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS", la cual establece los criterios mínimos que debe seguir la autoridad electoral en el

ejercicio de la supervisión de la constitucionalidad y legalidad de las normas estatutarias de los institutos políticos, para armonizar la libertad de autoorganización de los mismos y el derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes, y que a la letra señala lo siguiente:

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral fundamental de

asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes.

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 559 y 560".

- 24.** Para el estudio de las modificaciones al Estatuto de Morena, se procede de acuerdo con la clasificación que se describe a continuación:
- a) Modificaciones que se refieren al ejercicio de su libertad de autoorganización: artículos 6º Bis; 10º; 11º; 14º, tercer párrafo, inciso d.; 14º Bis, primer párrafo, inciso H.; 32º, segundo párrafo, inciso a.; 34º, tercer párrafo; 38º, párrafos primero al sexto, incisos c. y f.; 41º, segundo párrafo, incisos i. y j.; 54º in fine; 67º, primer párrafo; 72º; 73º y 74º.
 - b) Modificaciones que se adecuan a la normatividad electoral vigente: artículos 14º, tercer párrafo, inciso a.; 14º Bis in fine; 36º; 44º, primer párrafo, inciso r. y 64º, primer párrafo, inciso j.
- 25.** Por lo que hace a las modificaciones a los artículos estatutarios señalados en el inciso a) del considerando anterior, del análisis efectuado, se concluye que las mismas no contravienen el marco constitucional y legal aplicable a

los Partidos Políticos Nacionales, además de que se realizan en ejercicio de su libertad de autoorganización, conforme a la citada Tesis VIII/2005 vigente y obligatoria, así como a los artículos 34 y 36, párrafo 1 de la LGPP, las cuales, entre otras, consisten en:

- Se precisa que, para ser candidato a un cargo partidista o de elección popular, se tomará en cuenta la trayectoria, los atributos éticos y políticos, así como la antigüedad en la lucha por causas sociales.

Previo al estudio de la constitucionalidad y legalidad de la modificación señalada, esta autoridad electoral toma en consideración que María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), consideran que el artículo 6° Bis es anti-estatutario, pues altera el orden previsto en los artículos 53°, inciso c) y 64° del Estatuto, al pretender regular, a partir de la consecución de una candidatura, el cumplimiento de los deberes estatuarios de la militancia, para otorgar o negar tal candidatura. Mientras que en el diseño estatutario vigente, si un militante incumple con sus obligaciones puede ser investigado y, en su caso, sancionado por resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Asimismo, estiman que acreditar un perfil político idóneo, mediante la exposición y valoración de su trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con efectos vinculatorios, representa una ponderación formal de las obligaciones de la militancia, previstas en el artículo 6°, cuyo cumplimiento deberá demostrar el interesado para la valoración de la idoneidad del perfil correspondiente.

A juicio de este Consejo General, y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 34° estatutario, el Congreso Nacional es el responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos del partido, puesto que establece a su favor una facultad exclusiva y amplia de configuración normativa al interior del instituto político, cuyos límites, entre otros, son el respeto a las previsiones de la LGPP. La facultad regulatoria del Congreso Nacional también encuentra apoyo en la libertad de autoorganización de dicho instituto político, reconocido en el artículo 36 del mismo ordenamiento legal. La aludida libertad de configuración normativa comprende la determinación, por el Congreso Nacional, de los requisitos y procedimientos aplicables para la postulación de candidaturas, tanto a cargos directivos internos como a cargos de elección popular.

En segundo término, la libertad de regulación de las elecciones internas de dirigentes de los partidos políticos encuentra asidero en el artículo 39, párrafo 1, inciso f), de la LGPP, al mandar que los Estatutos de los partidos políticos establecerán las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; en el artículo 40, párrafo 1, inciso c) de la misma ley, la cual dispone que los Estatutos deben establecer como derecho de los militantes, postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus Estatutos; y, finalmente, en el artículo 44, párrafo 1, inciso a), fracción II del mismo ordenamiento legal, se preceptúa, entre los Lineamientos básicos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos, la necesidad de que la convocatoria al proceso interno otorgue certidumbre, cumpla con las normas estatutarias y, entre su contenido, fije requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado.

De tal suerte, el establecimiento en el artículo 6° Bis del Estatuto de requisitos para acceder a una candidatura a cargos internos y de elección popular de Morena, con efectos vinculatorios, está fundado adecuadamente en la LGPP y encuadra dentro del ámbito de atribuciones del Congreso Nacional, por lo que su adición estatutaria está formalmente justificada.

Ahora bien, el artículo 6° Bis y las normas relacionadas e invocadas por los inconformes establecen lo siguiente:

“ ...

Artículo 6º. *Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):*

- a.** *Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular;*
- b.** *Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en*

situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad;

- c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión impreso Regeneración;*
 - d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios;*
 - e. Aportar regularmente recursos para el sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de este Estatuto;*
 - f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y en el exterior;*
 - g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior, distrital, estatal o nacional;*
 - h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad.*
- (...).*

Artículo 6º Bis. *La trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular.*

...

Artículo 53°. *Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:*

(...)

- b. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de MORENA, sus Reglamentos y acuerdos tomados por los órganos de MORENA;*

...

Artículo 64°. *Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser sancionadas con:*

- a. Amonestación privada;*
- b. Amonestación pública;*
- c. Suspensión de derechos partidarios;*
- d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA;*
- e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de MORENA;*
- f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;*

- g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido expulsado de MORENA;*
- h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o candidato;*
y
- i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.*
- j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.*
... ”

Atento a lo regulado en dichas normas internas, las características o atributos a ponderar para ser candidato/a fijados en el artículo 6° Bis estatutario, en realidad no alteran el orden de lo previsto en los artículos 53°, inciso c) y 64° del Estatuto, ni invaden la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para conocer, investigar y, en su caso, sancionar el incumplimiento a las obligaciones estatutarias cometidas por la militancia. Se corrobora lo anterior, pues de una interpretación sistemática y funcional del artículo 6° Bis, con las atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones, previstas en el artículo 46°, incisos c., d., f., y l, así como con la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dispuesta en el artículo 49°, incisos e., f., g., y n., del Estatuto, normas que no fueron modificadas, se concluye que la valoración de la idoneidad del perfil de cada aspirante corresponderá únicamente a la Comisión Nacional de Elecciones, quedando a salvo las funciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

En este orden, corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones:

- 1) Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;
- 2) Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;
- 3) Validar y calificar los resultados electorales internos; y,
- 4) Organizar las elecciones para la integración de los órganos de conducción, dirección y ejecución.

En tanto que, dentro del ámbito competencial de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se encuentra:

- 1) Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por militantes;
- 2) Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración;

- 3) Conocer de las quejas, denuncias o procedimientos de oficio que se instauren en contra de los dirigentes nacionales; y,
- 4) Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena, con excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia.

Por ende, no existe disonancia normativa, sino que, se inscribe dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Elecciones.

El establecimiento del artículo 6° Bis permite al Congreso Nacional determinar las características o atributos estatutarios que deberán reunirse para la postulación de candidaturas. Por otro lado, el Estatuto ya prevé disposiciones tendentes a garantizar los parámetros para verificar el cumplimiento de las características o atributos y el procedimiento relativo en las convocatorias a la elección de los diversos cargos de dirigentes del partido político. Por ejemplo, los artículos 44°, incisos j., y q., así como 46°, inciso a., disponen la función de la Comisión Nacional de Elecciones para proponer al Comité Ejecutivo Nacional, para su emisión, las convocatorias para los procesos electorales internos; también ordena que las bases específicas de todas estas Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias correspondientes.

A este respecto, la Sala Superior, en la Tesis XXXII/2018, sostuvo el criterio consistente en que los partidos políticos, en ejercicio de su derecho de autoorganización, tienen la facultad de definir la forma de gobierno y organización que estimen adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidaturas, siempre y cuando los requisitos y procedimientos internos de selección no restrinjan irrazonablemente el ejercicio de los derechos político-electorales de su militancia y demás ciudadanía. Asimismo, determinó que resulta válido, en el contexto constitucional, exigir a quienes busquen ser postulados a un cargo de elección popular, el conocimiento de sus documentos básicos, en tanto que dicha medida busca fortalecer los sistemas partidistas de participación democrática para acceder a los cargos electivos, preservando los valores constitucionales que promueven los partidos como entidades de interés público. El rubro y texto de la Tesis en mención, establece lo siguiente:

***“DERECHO A SER VOTADO. EL REQUISITO PARA SER POSTULADO
CONSISTENTE EN EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS***

DEL PARTIDO POLÍTICO ES CONSTITUCIONAL.— De conformidad con los artículos 35, fracción II, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 39 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos, en ejercicio de su derecho de autoorganización, tienen la facultad de definir la forma de gobierno y organización que estimen adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidaturas a cargos de elección popular. Lo anterior, siempre que los requisitos y procedimientos internos de selección no restrinjan irrazonablemente el ejercicio de los derechos político-electorales de su militancia y demás ciudadanía. En tal sentido, considerando que los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de la ciudadanía a los órganos del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, es válido, en el contexto constitucional, exigir a quienes busquen ser postulados a un cargo de elección popular, el conocimiento de sus documentos básicos, en tanto que dicha medida busca fortalecer los sistemas partidistas de participación democrática para acceder a los cargos de elección popular, preservando los valores constitucionales que promueven los partidos como entidades de interés público.

Sexta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-106/2018.—Recurrente: Rodolfo Campos Ballesteros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—29 de marzo de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Ausente: José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Pedro Antonio Padilla Martínez, Carlos A. de los Cobos Sepúlveda y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar.”

Nota: Subrayado propio.

En el presente caso, a la luz de este criterio orientador, se estima que los requisitos para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular, establecidos en el artículo 6° Bis del Estatuto, en relación con lo establecido en los incisos a., al h., del artículo 6° estatutario, resultan apegados al criterio de razonabilidad, pues constituyen exigencias acordes con el nivel de responsabilidad y compromiso que deberán asumir las y los aspirantes que sean registrados, en caso de obtener el triunfo en los comicios internos e integrarse al órgano directivo correspondiente, lo cual es un mecanismo adoptado por el partido político para asegurar el cumplimiento de sus fines constitucionales y obligaciones legales. De igual manera, los requisitos cuestionados no restringen irrazonablemente el ejercicio de los derechos político-electorales de la militancia, especialmente el derecho a postularse y ser votado dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus Estatutos, pues así lo reconoce el artículo 5°, inciso j., del Estatuto,

relacionado con el artículo 40, párrafo 1, inciso c), de la LGPP. Esto significa que cualquier militante que cumpla los requisitos, características o atributos legales y estatutarios tiene derecho a participar en dichos procesos comiciales internos.

Por otro lado, es de considerarse que, la determinación de negar el registro de la candidatura, es un acto que la militancia interesada tiene derecho pleno a impugnar ante la instancia jurisdiccional interna del partido político y, en su caso, ante los tribunales electorales, según dispone el artículo 40, párrafo 1, incisos h) e i) de la LGPP, en relación con el artículo 5º, inciso j., del Estatuto de Morena, por lo que el derecho de la militancia queda intocado.

En el mismo orden de ideas, el artículo 44º, incisos a., k., y m., estatutario, dispone lo siguiente:

“...

Artículo 44º. *La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:*

a. *La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.*

(...)

k. *Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá votar por una persona.*

(...)

m. *En los Distritos designados para candidaturas de afiliados de MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor posicionado. En los Distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto.*

...”

Acorde con esta normativa interna, el procedimiento de elección de candidaturas de Morena para contender comicios federales y locales, en todos los casos, debe regirse por las bases y principios previstos en el artículo 44º del Estatuto.

En este contexto, es claro que el artículo 6° Bis no trastoca los mandatos respecto al uso equilibrado de los métodos de elección, insaculación y encuesta, así como sus reglas básicas de aplicación que ordena el artículo 44° en cita.

A juicio de esta autoridad electoral, debe entenderse que la valoración de la trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones estatutarias de quienes aspiran a una candidatura, es un acto que podría verificarse de manera previa, o bien, durante el desarrollo de las Asambleas Distritales Electorales, siempre que la decisión final de las candidaturas resulte de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta. En otras palabras, la adición del artículo 6° Bis no suprime los efectos de los métodos de selección de candidaturas, sino que, en su oportunidad, debe coexistir y complementarse con ellos.

Además, es importante destacar que la adición de cuenta, está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el caso, se concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto.

Por otro lado, sobre la adición del artículo 6° Bis, Morena respondió las observaciones de fondo y el requerimiento de la DEPPP en los términos precisados en el considerando 16, inciso b) de esta Resolución.

Al respecto, este Consejo General estima que la trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, como características vinculantes para acceder a una candidatura interna o de elección popular, a valorarse por la Comisión Nacional de Elecciones, toda vez que instrumentan al interior del partido político el ejercicio del derecho humano al voto pasivo; para verificar su apego al estándar de constitucionalidad, es necesario efectuar un test de proporcionalidad, en el cual se verifique si tal medida atiende a un fin jurídicamente legítimo, así

como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo. Lo anterior, acorde con la Tesis XXI/2016, emitida por la Sala Superior, de rubro *“CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO”*.

Fin de la norma. De la lectura del artículo 6° Bis estatutario, se infiere que tiene por finalidad establecer las características generales a cumplirse por quienes aspiren a obtener una candidatura a un cargo de elección interno o de un cargo de elección popular, postulado por Morena, a fin de participar en el Proceso Electoral respectivo. Tales características consisten en la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales del aspirante, mismos que, a su vez, se relacionan con las responsabilidades y obligaciones de la militancia previstas en el artículo 6° del Estatuto.

Se estima que el fin de la norma analizada es jurídicamente legítimo, pues con ella el partido político pretende regular internamente las vías de acceso a las candidaturas a cargos directivos, para la integración de órganos de dirección, así como para acceder a las candidaturas a todos los cargos de elección popular para su posterior registro legal ante las autoridades electorales competentes. En esa virtud, la legitimidad de la norma encuentra asidero en el fin constitucional de los Partidos Políticos Nacionales de contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, según el mandato del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo de la Constitución.

Necesidad de la norma. En este contexto si bien es cierto que el artículo 6° Bis del Estatuto adicionó características complementarias a las calidades estatutarias previamente existentes a fin de acceder a las candidaturas, ello no es obstáculo para que el partido político regule los esquemas que estime pertinentes para hacer posible dicho acceso. Por lo cual, la medida es necesaria para regir los procesos electorales internos, en ambos tipos de elección.

Idoneidad de la norma. La normativa bajo análisis se considera idónea, debido a que la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, son características o cualidades que se

someterían a la valoración de la Comisión Nacional de Elecciones, bajo los parámetros e indicadores que se establezcan en el reglamento respectivo. En este sentido, resulta válido que el partido político regule dichos aspectos en un reglamento, pues dicha normativa forma parte de su régimen interno, susceptible de crear derechos y obligaciones de los militantes, así como atribuciones y deberes a los órganos directivos. En tal sentido, la Tesis LXXVI/2016 de la Sala Superior estableció el criterio de que las disposiciones que rigen los asuntos internos de los partidos, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de sus militantes y afiliados, establecidas en sus Reglamentos, son susceptibles de considerarse como normas partidarias y, por ende, de observancia obligatoria, máxime que también son objeto de un estudio de legalidad por parte de la autoridad administrativa electoral. Esto, pues la normativa interna de los partidos políticos debe analizarse de manera integral, y no como una estructura compuesta por diversos ordenamientos autónomos e independientes, constituyendo una unidad jurídica interna que debe atender a los fines constitucionales que delimitan su existencia jurídica.

El texto íntegro de esta Tesis establece lo siguiente:

“PARTIDOS POLÍTICOS. LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE MILITANTES Y AFILIADOS, PUEDEN PREVERSE EN REGLAMENTOS.- De lo establecido en los artículos 36, párrafos 1 y 2, y 39, inciso k), de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, la autoridad administrativa electoral atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines; y que los partidos políticos deben establecer las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. Bajo ese contexto, si bien los Estatutos se encuentran contemplados dentro de los documentos básicos de los partidos políticos, también lo es que todos los instrumentos normativos reglamentarios, se encuentran dirigidos a materializar y hacer efectivos los principios partidarios; el ámbito de actuación de sus órganos; las condiciones para el ejercicio de facultades; y el régimen disciplinario previsto en los Estatutos de los institutos políticos. Consecuentemente, las disposiciones que rigen los asuntos internos de los partidos, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de sus militantes y afiliados, establecidas en sus Reglamentos, son susceptibles de considerarse como normas partidarias y, por ende, de observancia obligatoria, máxime que también son objeto de un estudio

de legalidad por parte de la autoridad administrativa electoral. Lo anterior, ya que la normativa interna de los partidos políticos debe analizarse de manera integral, y no como una estructura compuesta por diversos ordenamientos autónomos e independientes, constituyendo una unidad jurídica interna que debe atender a los fines constitucionales que delimitan su existencia jurídica.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1677/2016.—Actor: Gerardo Occelli Carranco.—Responsables: Comisión Nacional Jurisdiccional y Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido de la Revolución Democrática.—13 de julio de 2016.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del Carmen Alanís Figueroa.—Ausente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez, José Eduardo Vargas Aguilar, Enrique Martell Chavez, Víctor Manuel Rosas Leal, y Genaro Escobar Ambríz.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 63 y 64.”

Nota: Subrayado propio.

Proporcionalidad de la norma. A juicio de este Consejo General, la norma analizada es proporcional al fin que persigue, pues la valoración de la trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales son parámetros orientados a demostrar el cumplimiento de las responsabilidades estatutarias de los militantes, sin dejar de aplicar los artículos 42°, 43°, 44°, 46°, incisos c y d, 49° y 49° bis, del Estatuto, acorde con lo manifestado en la respuesta de Morena al requerimiento de la DEPPP.

En tal sentido, la proporcionalidad subyace en el derecho que le asiste al partido político para definir en su normativa interna las calidades necesarias para registrar las candidaturas correspondientes, de acuerdo con determinados parámetros que deberán ser objetivos y medibles, a fin de valorar individualmente a cada aspirante, y orientar la decisión atinente.

Por otro lado, dicha valoración se propone hacer adicionalmente a las “responsabilidades (obligaciones)” establecidas en los incisos a. al h., del artículo 6° estatutario, de carácter vinculante, el cual no fue modificado.

Por otro lado, el criterio de proporcionalidad se cumple pues a juicio de este Consejo General los elementos de valoración en análisis no imponen cargas excesivas a la militancia o ciudadanía que aspire a cargos de dirección interna o a precandidaturas o candidaturas de elección popular, al limitarse a valorar las características señaladas, por los medios que fije la normativa reglamentaria.

De ahí que se estime que la norma en análisis cumple el estándar de regularidad constitucional, así como los principios rectores de legalidad y certeza en materia electoral derivados del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo de la Constitución.

No obstante, para garantizar a la militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a Morena para que la reglamentación que emita establezca de manera obligatoria:

- Los mecanismos concretos y el procedimiento de valoración de aspirantes que deben establecerse de manera previa al proceso de selección correspondiente, en el reglamento que emita el órgano competente del partido político.
 - Los criterios de valoración deberán considerar el principio de igualdad de oportunidades de las y los aspirantes.
 - La valoración respectiva debe basarse en parámetros objetivos y medibles, a fin de garantizar condiciones de equidad entre las personas aspirantes a una candidatura interna o de elección popular.
 - Los resultados de tal valoración deben ser públicos y abiertos entre la militancia, tratándose de cargos internos, y ante la ciudadanía, respecto a cargos de elección popular.
- Se establece que, quien ocupe un cargo de dirección dentro del partido, sólo podrá postularse de manera sucesiva para un cargo distinto del mismo nivel, y de hacerlo por dos periodos consecutivos tendrá que esperar un plazo de tres años para volver a integrarlo.
 - Se establece que los Consejeros Nacionales podrán postularse de manera sucesiva en dos ocasiones.

Previo al estudio de la constitucionalidad y legalidad de la reforma al tema señalado, esta autoridad electoral toma en consideración los argumentos vertidos por María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), en los que afirman que dichas modificaciones generan asimetría en el principio de reelección en los cargos partidistas.

Ambos argumentan que la asimetría en el principio de reelección deriva de que la reforma a los artículos 10° y 11° permite a los integrantes de los comités ejecutivos y a los consejeros de Morena ser postulados de manera sucesiva hasta en dos ocasiones, lo cual estiman incompatible con el artículo 17°, parte final, del Estatuto, el cual permite la reelección de los representantes de los comités de protagonistas una sola vez en forma sucesiva.

Al respecto, los artículos 10° y 11° del Estatuto, en su reforma, establecen:

“Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional) solo podrá postularse de manera sucesiva para distinto cargo del mismo nivel hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar pasar un período de tres años. No se permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea.

Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y estatales sólo podrán postularse de manera sucesiva hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser Consejeras o consejeros nacionales y estatales, en ese mismo nivel, deberán dejar pasar un período de tres años.”

Con base en el principio de autoorganización de que gozan los partidos políticos, es válido que el Congreso Nacional de Morena, en las normas estatutarias reformadas, haya determinado regular la reelección de los integrantes de los comités ejecutivos y los consejos, con un parámetro diferenciado de la reelección de los representantes de los comités de Protagonistas.

La diferencia en la temporalidad de la reelección se estima congruente, en mérito de la distinta naturaleza de los cargos, pues en un caso se trata de la reelección hasta en dos ocasiones, de integrantes de comités ejecutivos y de consejos del partido, y en otro, la reelección por una vez es aplicable sólo a los representantes de los comités de protagonistas ante la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior -artículo 18°, párrafos primero y segundo del Estatuto-; es decir, se trata de dirigentes con un nivel de responsabilidad diferente, lo cual dota de razonabilidad a la medida, máxime que, en el caso de los representantes de los comités de protagonistas, la tarea fundamental de todos los comités son sólo los trabajos de información, concientización y organización -artículo 46°, segundo párrafo del Estatuto.

Por otro lado, es necesario resaltar que la reforma estatutaria regula la reelección de cargos de dirección ejecutiva, así como de consejeros estatales y nacionales, estableciendo límites.

Tratándose de integrantes de comités ejecutivos:

- La postulación sucesiva debe ser para diverso cargo del mismo nivel; esto es, no es posible reelegirse en el mismo puesto directivo del comité que se integra. A este respecto, la no ocupación sucesiva del mismo cargo no entraña una reelección en sentido estricto.
- La postulación no puede hacerse en más de dos ocasiones, en el mismo nivel del comité.
- En caso de ocurrir la postulación y ocupación de los cargos en dos ocasiones, para ser postulado por una tercera vez, deberá dejarse pasar un periodo de tres años.

Tratándose de consejeros estatales y nacionales:

- La postulación sucesiva no puede hacerse en más de dos ocasiones, en el mismo nivel del consejo.
- En caso de ocurrir la postulación en dos ocasiones, para ser postulado por una tercera vez, deberá dejarse pasar un periodo de tres años.

Como puede apreciarse, las modificaciones a los artículos 10º y 11º para regular la reelección de los dirigentes contienen limitaciones objetivas en el tiempo y en las calidades que deben satisfacerse para la continuación en los cargos, lo cual se traduce en la existencia de un mecanismo de control del poder, que impide que la reelección sea ilimitada, absoluta o por periodos excesivamente largos. En tal sentido, este Consejo General estima que las normas modificadas, al regular la reelección con las acotaciones mencionadas, son idóneas para permitir la participación efectiva y el ejercicio del derecho al voto pasivo de las y los militantes que aspiren a ocupar tales cargos directivos, así como para lograr la alternancia de dirigentes.

En relación con el tema en estudio, la Sala Superior en la sentencia dictada en los expedientes SUP-JDC-2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008 Acumulados, consideró lo siguiente:

“...

La reelección, en sí misma, puede estar prevista en la normativa interna de los partidos políticos, pero regulada y acotada en los términos que la libertad de decisión política y derecho de autoorganización de los propios partidos políticos lo estime necesario, a efecto de evitar que las dirigencias sean permanentes y vitalicias, y, por el contrario, permitir y hacer realidad la renovación periódica de todos los integrantes de los órganos de dirección, ya sea en forma simultánea o escalonada.

Con la reelección indefinida se podría caer en el riesgo de abuso del poder para intereses particulares y en detrimento de los de la colectividad o impedir la participación de ciudadanos que pudieran aportar nuevas ideas al ocupar algún cargo, haciendo realidad la alternancia en los órganos de dirección de los partidos políticos y ofreciendo distintos estilos de gobierno.

...”

Tomando en cuenta lo expuesto, se estima que, la regulación de la reelección en el Estatuto de Morena toma en cuenta la implementación de mecanismos de control de poder, que son acordes con la Jurisprudencia 3/2005. Esto es, el Estatuto establece un periodo corto de mandato de tres años para todos los órganos directivos que, eventualmente, en caso de que la o el dirigente efectivamente sea postulado y reelecto, podría extenderse a seis o a nueve años su mandato, con la salvedad de que los integrantes de comités ejecutivos no pueden postularse sucesivamente al mismo cargo.

Ahora bien, se estima que la regulación de la reelección en esos términos, que permitiría la ocupación sucesiva de distintos cargos en los comités ejecutivos y de un mismo cargo en los consejos de Morena, hasta por un máximo de nueve años, se encuentra dentro del parámetro constitucional de la reelección legislativa, hasta por un máximo de doce años, previsto en el artículo 59 de la Constitución.

A su vez, se considera que la reforma a las normas en comento no es contraria al principio de progresividad aducido, pues acorde con el precedente citado de la Sala Superior, la reelección puede estar prevista en la normativa interna de los partidos políticos, pero regulada y acotada en los términos que la libertad de decisión política y derecho de autoorganización de los propios partidos políticos lo estime necesario, a efecto de evitar que las dirigencias sean permanentes y vitalicias. En el caso analizado, la

regulación de la reelección tiene los límites objetivos descritos, circunstancia que acota de manera racional e idónea la elección consecutiva de dirigentes. De ahí que la norma motivo de inconformidad no limite de manera excesiva o desproporcionada, y mucho menos impida, a las y los militantes la posibilidad de ser postulados y electos para integrar los órganos ejecutivos y los consejos de Morena.

- Se estipula que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinarán los municipios donde sea necesario establecer Comités Ejecutivos Municipales.

Previo al estudio de la modificación precisada, esta autoridad electoral toma en consideración lo señalado en los escritos de María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), así como María del Carmen Gómez Ortega (SUP-JE-54/2018), en los que afirman lo siguiente:

- La modificación al artículo 14º, inciso d., consistente en que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinarán aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, conculca el principio democrático.
- Los artículos 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución y 39, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, ordenan la renovación de los órganos internos mediante un procedimiento democrático, donde se garanticen el derecho a elegir dirigentes y candidatos, mediante voto directo o indirecto, y a ser electos como tales.
- En tanto que, existe la posibilidad de suspender el proceso de renovación de dirigencias, sin mecanismos de control de poder, al darse a los mencionados órganos directivos nacionales la facultad discrecional para decidir aquellos municipios donde haya condiciones para elegir comités municipales.
- No se ajusta al mayor grado de participación de los militantes ni respeta el derecho a votar y ser votado en asambleas municipales.

Igualmente, Erasmo García Flores (SUP-JDC-460/2018) y Jaime Hernández Ortiz (SUP-JDC-462/2018), consideran que la reforma al artículo 14º, inciso d., estatutario, al disponer que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinarán aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, da margen a la

discrecionalidad y el abuso de poder, pues no se establece en qué consisten tales condiciones, lo cual hace posible que donde no se elijan comités municipales sean nombrados delegados del Comité Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, la atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, para determinar aquellos municipios del país donde existan condiciones para elegir a los comités ejecutivos municipales, encuentra sustento en el derecho de autoorganización del partido político, en su modalidad de determinación de las funciones, facultades y obligaciones que les corresponde realizar, lo cual a su vez se funda en el artículo 39, párrafo 1, inciso e), de la LGPP. Es decir, en principio, el Congreso Nacional de Morena tiene libertad de configuración normativa interna, para fijar el ámbito de competencia de cada uno de los órganos del partido político, que se encuentran regulados estatutariamente.

Así, desde un punto de vista material, la norma no conculca el principio democrático de renovación periódica de los comités ejecutivos municipales, pues el hecho de facultar en tales términos a los órganos nacionales de mérito, de ninguna manera exime del deber que tienen los órganos competentes del partido político para iniciar oportunamente los procedimientos que corresponda para lograr la renovación periódica y efectiva de dirigentes, en todos los niveles, incluido el municipal.

En este sentido, acorde con los principios de certeza y congruencia normativa, este Consejo General estima pertinente determinar que la atribución señalada en el artículo 14°, inciso d., estatutario deberá sujetarse a las mismas medidas e interpretación jurídica del artículo 38°, párrafo tercero del Estatuto, relativo a la designación de delegados a cargo del Comité Ejecutivo Nacional. Pues de tal manera se formula una interpretación armónica y un contrapeso entre ambas disposiciones.

De tal suerte, la facultad del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones para determinar los municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, no debe entenderse como un mecanismo ordinario o discrecional, o que a la postre haga nugatoria la renovación efectiva de los comités ejecutivos municipales, a través de los procedimientos democráticos establecidos estatutariamente. En consecuencia, la determinación de los municipios, donde haya o no haya, condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que haya lugar, bajo los

parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los términos ya precisados.

Por su parte, Morena respondió las observaciones de fondo y el requerimiento de la DEPPP sobre la modificación al artículo 14°, inciso d., del Estatuto, acorde con lo expuesto en el considerando 16, inciso c) de esta Resolución.

Sobre este aspecto, los parámetros poblacionales, de densidad de militancia, así como coyunturales, expresados por Morena para que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinen los municipios en los que se habrá de elegir comités ejecutivos municipales, se estiman acordes con el principio de autoorganización, para efectos de definir su estrategia política electoral.

No obstante, el ejercicio de dicha atribución deberá sujetarse, invariablemente, a los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los términos expuestos.

- Se faculta a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional para determinar la conformación de regiones o zonas de atención.

Previo al estudio relativo a esta modificación, se toma en consideración lo expresado por María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018): la reforma al artículo 14°, inciso d., vulnera el principio estatutario de división territorial de los órganos ejecutivos al facultar a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional para determinar la conformación de regiones o zonas de atención para facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités de Morena en su ámbito territorial.

Asimismo, estiman que tal disposición es contraria al artículo 32°, inciso d., estatutario, el cual, en lo que interesa, establece que el Comité Ejecutivo Estatal conducirá a Morena en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal, así como que el secretario/a de organización deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con los Comités Municipales. De esta forma, consideran que la determinación de regiones o zonas de atención atenta contra la estructura organizativa municipal, estatal y nacional de los órganos del partido, pues tanto la Secretaría de

Organización Estatal como la Nacional serían el vínculo con los órganos municipales, lo cual genera falta de certeza en las funciones en cada nivel, al no establecerse la competencia que corresponda a cada una de ellas.

A juicio de este Consejo General, Morena, como entidad de interés público nacional, bajo el principio de autoorganización, en relación con lo previsto en el artículo 34 de la LGPP, tiene derecho a definir en su Estatuto las bases, reglas y procedimientos necesarios para alcanzar sus fines constitucionales. Una forma de alcanzar este cometido es mediante la configuración concreta de la estructura bajo la cual se organizará. Lo anterior, tiene asidero en el principio de libertad de autoorganización de los institutos políticos, así como en el artículo 39, párrafo 1, inciso d), de la LGPP.

En particular, la atribución dada a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional para determinar la conformación de regiones o zonas de atención, a fin de facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités en su ámbito territorial, se estima acorde con dicha libertad autoorganizativa.

Es del conocimiento público que la conformación de regiones o zonas de atención fue definida en el Estatuto con el cual Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional, mediante la Resolución INE/CG94/2014, que emitió este Consejo General el nueve de julio de dos mil catorce, cuya constitucionalidad y legalidad fue declarada desde entonces, sin que ningún militante del partido político la haya impugnado oportunamente; por tanto, es una norma firme y, además, aun realizando el análisis de la inconformidad con dicha norma, no se actualiza la violación argumentada.

La circunstancia de conformar tales regiones, no demerita la principal atribución conferida al Comité Ejecutivo Estatal de conducir al partido en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal, ni obstaculiza el deber de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de mantener el vínculo y la comunicación permanentes con los Comités Municipales, así como coordinar la afiliación y la realización de asambleas municipales. Ello, en virtud de que la integración de tales zonas de atención es un criterio de organización meramente operativo, el cual carece de implicaciones normativas en la configuración y funcionamiento regular de los órganos directivos estatales y municipales, cuyas funciones se mantienen incólumes.

- Se crea el Instituto Nacional de Formación Política y se establecen sus objetivos e integración.

Sobre el particular, María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), consideran que las modificaciones y adiciones estatutarias para integrar el Instituto Nacional de Formación Política son contrarias a los artículos 41, Base I de la Constitución y 39, párrafo 1, inciso e), de la LGPP, pues no establecen un mecanismo de selección democrático para la designación de su Presidente, Consejo interno y Comisión de administración. Tal es así, pues el Artículo Transitorio Tercero, al establecer un mecanismo de designación directa de tales cargos por el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de su Presidente, informando de esto al Consejo Nacional, es contrario a los principios democráticos establecidos en los artículos 2°, 42° y 43° del Estatuto, pues en el artículo 14° Bis, inciso h) reformado, se considera a dicho Instituto parte de la estructura de Morena.

A su juicio, es necesario que dichos nombramientos cuenten con la legitimación de los integrantes del partido político, dada la cuantía del cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales de financiamiento que se le destinarán, por lo que deberían ser nombrados por el Consejo Nacional.

Finalmente, argumentan deficiencias en la regulación del Instituto de Formación de Morena, al no señalarse el número de integrantes del Consejo interno y la Comisión de administración, el periodo de duración de los cargos, así como la revocación o limitación de los mandatos. Además, la regulación del órgano de formación política carece de mecanismos para su renovación periódica; un sistema de rendición de cuentas de sus facultades de gestión y administración; la periodicidad con que deban rendir informe y el órgano encargado de aprobar las cuentas que rinda; así como de reglas para citar a sesión, el quórum, forma de deliberación y toma de decisiones en su Consejo y Comisión. Elementos que juzgan indispensables para que su integración se considere democrática.

Sobre el particular, lo señalado respecto al mecanismo de designación directa por el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de su Presidente, de los cargos de Presidente del Instituto, de los integrantes de su Consejo y de la Comisión que habrá de administrar los recursos, informando de esto al Consejo Nacional, no contraviene los principios democráticos establecidos en los artículos 2°, 42° y 43° del Estatuto, pues debe interpretarse en el contexto de la norma de tránsito en que se inserta, de manera que únicamente tendrá aplicación en la primera designación de tales cargos del

Instituto Nacional de Formación Política. Lo anterior, pues es de explorado derecho que las normas transitorias de cualquier cuerpo normativo tienen una aplicación limitada en el tiempo y una función de aplicación gradual del nuevo ordenamiento, de manera que se logre cumplir con la finalidad de la norma sustantiva.

En este contexto, la norma sustantiva se integra por los artículos 72° y 73° adicionados al Estatuto, en tanto que la regla de tránsito, contenida en el Artículo Transitorio Tercero, al disponer la designación de los referidos cargos del Instituto Nacional de Formación Política, mediante la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la presidencia del mismo, debe entenderse, para todos los efectos legales a que haya lugar, como una medida excepcional, aplicable por única ocasión. A su vez, la medida se estima idónea, razonable y proporcional dada la premura planteada en la norma combatida, para lograr la integración e inicio de funciones de dichos cargos, de tal suerte que, a partir del ejercicio dos mil diecinueve, administre el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del partido, a fin de destinarlas a la formación y capacitación política, ideológica y éticamente de la militancia de Morena.

En esta línea argumentativa, es de interpretarse que la segunda designación de los integrantes de los citados cargos, pertenecientes al Instituto Nacional de Formación Política, deberán nombrarse en los términos establecidos en el Estatuto para los órganos ejecutivos del partido político, pues el mismo constituye un órgano que forma parte de la estructura orgánica de Morena, acorde con lo dispuesto en el artículo 14° Bis, inciso H, numeral 1, del Estatuto modificado. La idoneidad de la medida para la designación de los dirigentes del citado Instituto de Formación a través del Comité Ejecutivo Nacional, al ser excepcional y única, a su vez, encuentra justificación en la necesidad de concretar de una manera pronta y eficaz el mandato legal de que los partidos políticos deberán contar con un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de las y los militantes, que les permita ejercer el derecho a recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, así como que los cñia al cumplimiento de su obligación de formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político, acorde con lo dispuesto en los artículos 40, párrafo 1, inciso g); 41, párrafo 1, inciso h); y 43, párrafo 1, inciso g), de la LGPP. De tal suerte, en su primera renovación, los integrantes de los órganos en análisis deberán ajustarse al procedimiento de renovación

ordinario, apegado al mandato del artículo 39, párrafo 1, inciso e), de la LGPP.

Por otro lado, se estima que hay deficiencias en la regulación del Instituto de Formación de Morena, al no señalarse el número de integrantes del Consejo interno y la Comisión de administración, el periodo de duración de dichos cargos, así como la revocación o limitación de los mandatos, porque la configuración del Instituto Nacional de Formación Política, desde el punto de vista formal, tiene fundamento en el artículo 34° del Estatuto, que como se ha expresado, otorga al Congreso Nacional de Morena una facultad exclusiva y amplia de configuración normativa al interior del instituto político, cuyos límites, entre otros aspectos, son el respeto a las previsiones de la LGPP, así como que dicha facultad normativa también tiene sustento en la libertad de autoorganización del partido político, reconocido en el artículo 36 del mismo ordenamiento legal.

La aludida libertad de configuración normativa comprende la determinación de la estructura orgánica del partido político, mediante el establecimiento de órganos internos, en particular, del órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes, mandatado en el artículo 43, párrafo 1, inciso g) de la LGPP. Con fundamento en ello, Morena tiene libertad de configurar al órgano encargado de la educación y capacitación cívica de sus militantes y dirigentes.

Por lo anterior, la integración específica del Consejo Interno y de la Comisión de administración del Instituto Nacional de Formación Política, la duración y renovación de los cargos de sus dirigentes, las reglas para citar a sesión, el quórum, forma de deliberación y toma de decisiones, en su caso, deberán establecerse válidamente en un instrumento normativo interno diverso al Estatuto de Morena, como en el caso son los Lineamientos que se presenten al Consejo Nacional, los cuales deberán regir éste y otros aspectos que se estime necesario. De ahí que sean infundadas las deficiencias alegadas.

Sin embargo, a fin de evitar la generación de incertidumbre jurídica a la militancia sobre la integración y funcionamiento concretos que tendrá el órgano de formación y capacitación política, este Consejo General considera pertinente ordenar a Morena para que a la brevedad posible someta a consideración y, en su caso, aprobación del órgano competente, los Lineamientos respectivos.

Sobre esa base, se infiere que la adición de los artículos 72º y 73º estatutarios se encuentra apegada a la LGPP, habida cuenta que el primero de ellos prevé los principios que aplicarán a la capacitación y formación, como son un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación; y el segundo dispone la creación del Instituto Nacional de Formación Política, las funciones que se le encomiendan y su estructura orgánica básica, compuesta por un Consejo interno y un Presidente, que coordinará sus actividades y funcionará bajo los Lineamientos que se establezcan. Lo anterior, sin menoscabo de que en dichos Lineamientos o en la reglamentación interna que en su caso emita el partido político, se establezca una estructura operativa mayor.

Ahora bien, a pesar de que no se desarrolla la normativa estatutaria respecto de facultades de gestión y administración de las prerrogativas de financiamiento, es claro que el partido político, se encuentra sujeto al régimen de fiscalización del origen y destino de la totalidad de los recursos que ejerza, así sean de origen público o privado, en términos de las disposiciones que en la materia establecen la Constitución, la LGPP y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Por lo anterior, las prerrogativas de financiamiento público federal y local que, en su caso, sean captadas por el Instituto Nacional de Formación Política para cumplir con sus fines estatutarios, deberán informarse y transparentarse a la militancia de Morena en los términos de la legislación aplicable.

Por otro lado, Morena dio respuesta a las observaciones de fondo y al requerimiento formulado por la DEPPP respecto a la adición de los artículos 14º Bis, apartado H, numeral 1; 72º; 73º; 74º, así como transitorio Tercero del Estatuto, relativas a la creación del Instituto Nacional de Formación Política, acorde con lo manifestado en el inciso f) del considerando 16 de esta Resolución.

Sobre este tópico, se estima que la creación de dicho Instituto es acorde con el principio de autoorganización del partido político, debido a que:

- Se trata de un órgano al interior del partido político, con atribuciones de formación de cuadros y militantes, así como capacitación en materia electoral.

- La autonomía en el funcionamiento y gestión de dicho Instituto será exclusivamente para efectos de cumplir su objetivo general, definido en el artículo 73° estatutario.

- Tocante a las funciones particulares del mencionado Instituto, así como de su Presidente, del Consejo y de la Comisión, serán las que se desprenden del Estatuto y las que se establezcan en el reglamento o Lineamientos.

Sobre la aprobación de dichos Lineamientos, este Consejo General estima pertinente dar certeza respecto al órgano competente para aprobar tal normativa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41°, inciso f., del Estatuto, corresponde al Consejo Nacional elaborar, discutir y aprobar los Reglamentos del partido, en tanto que el Artículo Transitorio Tercero dispone, en lo que interesa, que el Instituto presentará un programa de trabajo y sus Lineamientos al Consejo Nacional de Morena, de lo cual se desprende que la facultad de aprobar dicha normatividad corresponde al Consejo Nacional.

Acorde con el Artículo Transitorio Tercero, se entenderá que el Comité Ejecutivo Nacional, es el órgano facultado para elegir o nombrar, por primera vez, al Presidente y los integrantes del Consejo y de la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política. Sin menoscabo que, en las elecciones sucesivas, se sigan los procedimientos electivos ordinarios.

La duración de los integrantes de sus órganos será de tres años, en términos del artículo 10° del Estatuto.

Con respecto a la obligación de la presentación de los informes de ingresos y gastos de las prerrogativas de financiamiento público locales y federales que dispondrá el Instituto en mención, el partido político precisó que dicha tarea será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y de los secretarios o encargados de finanzas del partido político en cada estado.

A mayor abundamiento, dicha aclaración se ajusta a las observaciones expresadas por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, en la respuesta a la solicitud de revisión estatutaria que le fue formulada por la DEPPP, expresadas en el considerando 15 de este instrumento. Esto, pues el origen y destino del financiamiento público o privado, federal o local, que sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Formación Política para cumplir su objeto y funciones, invariablemente, deberá comprobarse ante la

Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través de las secretarías de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales de Morena, de acuerdo con la fuente de los recursos. Esto, ajustándose a las disposiciones particulares que en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos establecen la Constitución, la LGPP, el Reglamento de Fiscalización, y demás normatividad administrativa aplicable.

En conclusión, el Instituto Nacional de Formación Política es un órgano interno de Morena, como se desprende del artículo 14º Bis, inciso H, numeral 1, que no cuenta con personalidad ni patrimonio propios; razón por la cual, todo lo relativo a la administración de los recursos que le confiera el propio partido, ya sean recursos federales o locales, y la rendición de cuentas, se tendrá que llevar a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en las entidades federativas.

Así las cosas, la autonomía en su funcionamiento y gestión del Instituto Nacional de Formación Política, a que se refiere el artículo 73º, no implica de ninguna manera autonomía financiera.

En consecuencia, se estima que las normas estatutarias analizadas, que regulan al Instituto Nacional de Formación Política se ajustan al estándar de constitucionalidad y legalidad.

- Se faculta al Congreso Nacional para emitir Reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y su Presidente.
- Se autoriza al Comité Ejecutivo Nacional para ejercer funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional, así como el Consejo Nacional, con excepción de las que sean exclusivas de dichos órganos.

Con respecto a estos dos últimos temas de reforma estatutaria, durante su análisis se tomará en consideración lo expuesto por María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), quienes afirman la inexistencia de un órgano como principal centro decisor del partido político, pues el artículo 34º estatutario dispone que la autoridad superior de Morena será el Congreso Nacional, por lo cual, delegar atribuciones sin

especificar las mismas genera difusión o concurrencia de atribuciones entre el Congreso, Consejo y Comités Ejecutivos nacionales, por lo que no existe certeza de cuál es el máximo órgano decisor, en términos de la Jurisprudencia 3/2005.

Asimismo, estiman que a lo largo de la reforma estatutaria se otorga un mayor número de facultades al Comité Ejecutivo Nacional en detrimento de los órganos ejecutivos estatales y municipales, con lo cual se les limita la toma de decisiones. En este sentido, el Comité Ejecutivo Nacional asume competencia concurrente de facultades inicialmente otorgadas al Congreso y Consejo Nacional, sin que a los mismos se les den mayores facultades, lo cual centraliza más decisiones en el Comité Ejecutivo Nacional, situación que tildan de antidemocrática, por el número reducido de sus integrantes.

A juicio de este Consejo General, la libertad de autoorganización, prevista en el artículo 36, párrafo 1 de la LGPP, otorga a los partidos políticos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines, al tiempo que el artículo 39, párrafo 1, inciso d) de la misma ley mandata el establecimiento estatutario de la estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político, en tanto que el artículo 43 de dicho ordenamiento legal dispone la estructura mínima obligatoria de los órganos internos de los partidos políticos.

Sobre dichas bases legales, se estima válida la regla de delegación de atribuciones del Congreso Nacional y del Consejo Nacional al Comité Ejecutivo Nacional, prevista en los artículos 38º, párrafo segundo y 41º, inciso j., modificado, pues exceptúa de la delegación de funciones aquellas facultades exclusivas al otorgante; es decir, no pueden delegarse las facultades exclusivas del propio Congreso Nacional o del Consejo Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional, lo cual dota de certeza y de un límite objetivo al régimen de delegación de funciones.

Asimismo, el párrafo primero del artículo 34º estatutario, el cual no fue reformado, dispone expresamente que la autoridad superior del partido será el Congreso Nacional, de ahí que el marco de distribución y delegación de atribuciones no ponga en duda cuál es el órgano superior del partido político.

Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 34º reformado establece la facultad del Congreso Nacional para emitir Reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su

presidente, lo cual se estima apegado al principio de autoorganización, dada la libertad de configuración normativa interna y atento al principio general del derecho que señala: *el que puede lo más puede lo menos*. De ahí que dotar de facultades al Congreso Nacional como órgano directivo supremo, sin menoscabo de que sean concurrentes con otros órganos, no genera afectación, siempre que la facultad sea ejercida por uno u otro órgano de manera cierta.

En la misma lógica, la norma estatutaria en estudio no establece una facultad concurrente en favor del Comité Ejecutivo Nacional, en la inteligencia de que no es libre ni optativo para dicho órgano ejercer las atribuciones del Congreso o Consejo nacionales, sino que inexorablemente requieren de un acto formal de delegación.

Finalmente, la reforma deja intocada la facultad de los Comités Ejecutivos Estatales, para conducir políticamente a Morena en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal, y las secretarías que lo integran tienen funciones expresas, acorde con el artículo 32º, párrafo primero, e incisos a., al m., del Estatuto.

Por otro lado, Morena respondió las observaciones de fondo y el requerimiento de la DEPPP sobre la modificación al artículo 41º, párrafo segundo, inciso i., del Estatuto, acorde con lo expuesto en el considerando 16, incisos d) y e) de esta Resolución.

Sobre el particular, se cumple con el principio electoral de certeza, pues el partido político manifestó que las facultades exclusivas del Consejo Nacional que no podrán delegarse al Comité Ejecutivo Nacional son las contenidas en los incisos a., b., c., d., y e., del artículo 41º estatutario, a saber:

“ ...

- a. *Evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas de plan de acción para el período siguiente;*
- b. *Elegir y, en su caso, decidir la revocación de mandato o aprobar la sustitución de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o de éste en su conjunto, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 40º del presente Estatuto;*
- c. *Sustituir a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ausentes por renuncia, fallecimiento, inhabilitación o revocación de mandato, con la aprobación mayoritaria de los y las integrantes del Consejo Nacional;*
- d. *Sustituir a los consejeros nacionales por renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 29º en su inciso f; y,*

e. Conocer las resoluciones que, sobre conflictos entre órganos de dirección de MORENA, quejas en relación a una integración ilegal o facciosa de órganos de dirección; o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas en procesos electorales municipales, estatales o nacionales haya emitido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

... ”

Por lo que hace a las atribuciones del Congreso Nacional, el partido político manifestó que la modificación de sus documentos básicos es facultad exclusiva no delegable, por lo que todas las demás facultades del Congreso son delegables.

A este respecto, la aclaración se estima apegada a los principios de autoorganización y certeza en la materia, al definirse la facultad del Congreso Nacional que no podrá delegarse al Comité Ejecutivo Nacional.

- Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional para acordar, a propuesta de su Presidente, el nombramiento de delegados con la finalidad de atender temas o funciones específicas.

En relación con esta reforma, se toma en consideración lo aducido por María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), así como María del Carmen Gómez Ortega (SUP-JE-54/2018), quienes estiman que es inconstitucional la adición del párrafo tercero del artículo 38º estatutario, que faculta al Comité Ejecutivo Nacional para acordar, a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal. Esto, debido a que la renovación de los órganos directivos internos debe ser mediante procedimiento democrático, lo cual no se satisface, pues la designación no emanaría de la voluntad de los militantes. Además, el Estatuto establece en sus artículos 29º, inciso f., y 41º, inciso d., un método de sustitución de secretarios, por lo que es innecesario nombrar delegados, para ocupar vacantes en los órganos ejecutivos.

Sobre el mismo tópico, argumentan que la figura de delegado está reconocida en precedentes, cuando existan casos urgentes de atención, los cuales deben especificarse en la norma estatutaria, así como su temporalidad, de lo contrario no tendría contrapesos.

Erasmus García Flores (SUP-JDC-460/2018) y Jaime Hernández Ortiz (SUP-JDC-462/2018), también sostienen que la designación de delegados por el Comité Ejecutivo Nacional contraviene el artículo 39, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, al no establecer normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos. Asimismo, considera que facultar al Comité Ejecutivo Nacional para acordar, a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal, contraviene el derecho de la militancia de participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en las asambleas en las que se adopten decisiones relacionadas con la elección de dirigentes, previsto en el artículo 40, párrafo 1, de la LGPP.

Asimismo, afirman que tal modificación permitirá crear estructuras paralelas a nivel federal, en estados, municipios y Distritos por encima de la elección de la militancia, mediante la designación de delegados distintos a aquellos electos estatutariamente para la integración del Congreso Nacional y el Consejo Nacional, lo cual atenta contra el principio de certeza. Además, no se establecen las funciones de los delegados que designe el Comité Ejecutivo Nacional. Argumenta que la gravedad del caso estriba en que el Presidente del Partido podrá nombrar un delegado en funciones de Secretario General o de cualquier otra secretaría del partido sin que sea electo por el Congreso Nacional.

Por otra parte, Erasmus García Flores y Jaime Hernández Ortiz sostienen que el artículo Transitorio Sexto del Estatuto modificado viola los derechos de la militancia y los principios democráticos que debe tener el partido político, pues en términos del artículo Transitorio Sexto de la reforma estatutaria, hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en caso de ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional o de los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos de lo establecido en el artículo 38º del Estatuto modificado.

Esto, pues consideran que dicha norma beneficia directamente a los presidentes de los comités ejecutivos, secretarios generales y de organización de los treinta y dos estados de la República, en su calidad de delegados del Congreso Nacional, pues fueron ellos mismos quienes aprobaron dicha norma, que al permitirles volverse a postular y elegir para una segunda ocasión, genera un conflicto de interés, violenta el principio de

imparcialidad así como los derechos de la militancia de votar, postularse y ser votados a cargos directivos, así como a exigir elecciones libres y auténticas.

A juicio de esta autoridad, conforme con el principio de autoorganización de que gozan los partidos políticos, en principio, tiene libertad de configuración normativa para definir las bases, reglas y procedimientos necesarios para cumplir sus fines. Pues no debe pasar desapercibido que la elección de los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, en relación con el artículo 34, párrafo 2, inciso a) de la LGPP, se consideran asuntos internos.

Sobre esa base, dicho órgano superior partidario está facultado para definir los parámetros de organización y funcionamiento internos, lo cual se traduce en la atribución para crear, modificar o suprimir dentro de la estructura del partido político los órganos y cargos que estime necesarios, a fin de cumplir con los fines que constitucionalmente tiene asignados.

Por otra parte, la creación en el Estatuto de la figura de delegados, así como su nombramiento por el Comité Ejecutivo Nacional, a juicio de esta autoridad electoral, es acorde con el principio de integración y renovación democrática de los órganos internos, sustancialmente, en razón de que de una interpretación literal, sistemática y funcional de los artículos 38° párrafo tercero y Transitorio Sexto del Estatuto reformado, no se advierte que tales delegados, en caso de ser nombrados, tengan la calidad de órganos directivos ordinarios del partido político, ni que puedan coexistir paralelamente a cualquiera de los órganos directivos que se encuentren integrados al momento de la designación. Esto, ya que se trata de una figura extraordinaria y con un fin y objetivo específico, que permiten la continuidad y transición de los órganos directivos y mantener así su funcionamiento efectivo al cual están obligados, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso f) de la LGPP.

Cabe destacar que el nombramiento de delegados por un órgano nacional de carácter ejecutivo es un mecanismo adoptado en los Estatutos vigentes de diversos Partidos Políticos Nacionales con registro, regulación que no representa, por sí sola, una afectación al principio de integración y renovación democrática, en tanto se trata de un mecanismo extraordinario y excepcional para atender situaciones urgentes o coyunturales en determinado lugar y por un lapso limitado, o bien, atiende a la necesidad de evitar la existencia de

vacío de poder ante la falta de integración o renovación oportuna de algún órgano directivo, en los términos establecidos en los respectivos Estatutos.

A este respecto, la Sala Superior, en la sentencia de seis de abril de dos mil dieciséis dictada en el expediente SUP-RAP-149/2016, con motivo de una controversia sobre la validez de la designación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional de dos delegados de Morena, para ejercer funciones de representación legal y de administración y finanzas, respectivamente, en el Estado de Sinaloa, determinó:

“(…)

Bajo este contexto, se estima que la designación de delegados por parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, realizada el treinta de noviembre de dos mil quince y cinco de enero de dos mil dieciséis, recaída en favor de Raúl de Jesús Elenes Angulo y Tomás Aguayo Acosta para ejercer funciones, respectivamente de representación legal y administración de finanzas en el Estado de Sinaloa, misma que se dejó sin efectos por parte de la autoridad responsable, es la que debe subsistir pues tal proceder del Comité Ejecutivo Nacional encuentra una justificación razonable ante la situación extraordinaria de que en Sinaloa, no estaba integrado el Comité Ejecutivo Estatal derivado de la anulación del Congreso Estatal de tres de octubre de dos mil quince, así como de la solicitud de suspensión de entrega de prerrogativas, además debe destacarse el hecho que está en curso el Proceso Electoral Ordinario en la entidad y han iniciado las campañas.

“(…)”.

Acorde con el citado precedente, a juicio de este Consejo General, la facultad de designación de delegados por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contenida en el artículo 38º, párrafo tercero, constituye una medida ajustada al principio de libertad autoorganizativa y, por ende, válida; sin embargo, dicha atribución no debe entenderse como un mecanismo ordinario o discrecional para integrar los órganos directivos, o que a la postre haga nugatoria la elección de los Comités Ejecutivos del partido político, o de cualquier otro órgano que deba elegirse a través de los procedimientos democráticos establecidos estatutariamente. Por lo cual, en su caso, dicha norma deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que haya lugar, bajo los parámetros siguientes:

- **Excepcionalidad.** La designación debe obedecer a circunstancias extraordinarias, coyunturales, o bien, a causas de fuerza mayor, que dada su urgencia sería imposible superar de manera pronta aplicando los procedimientos estatutarios ordinarios.

- **Razonabilidad.** El ejercicio de dicha medida debe estar justificada y razonada, en relación con la excepcionalidad de las circunstancias que la originan.
- **Temporalidad.** Al tratarse de designaciones extraordinarias, por su naturaleza, se entienden limitadas en el tiempo, hasta en tanto los órganos competentes del partido político elijen a los integrantes de los órganos directivos ordinarios que corresponda.
- **Certeza.** Con base en este principio, y atento al precedente jurisdiccional citado, las personas que sean designadas como delegados asumirán las funciones que estatutariamente correspondan al cargo que, en su caso, se encuentre vacante. En este sentido, se interpreta que los delegados designados deben ejercer funciones adscritas estatutariamente, a fin de dotar de certeza su actuación.

Por otro lado, no se afecta el derecho de la militancia para participar en la elección de dirigentes ni para postularse para ser electos a cargos internos en todos los niveles, pues la designación de delegados de ninguna manera suprime la obligación del partido político de renovar a los integrantes de los órganos directivos mediante los procedimientos preestablecidos y con la oportunidad precisada en el Estatuto.

Ahora bien, la atribución conferida al referido órgano directivo no se entiende comprendida para la designación de delegados al Congreso Nacional ni al Consejo Nacional de Morena, cuya elección sigue los procedimientos establecidos estatutariamente, sino que se restringe a los integrantes de los Comités Ejecutivos a nivel nacional, estatal, distrital, municipal, así como delegados a nivel regional. Lo anterior, se advierte de la interpretación literal, sistemática y funcional de los artículos motivo de inconformidad, en la inteligencia de que el artículo Transitorio Tercero del Estatuto se refiere expresamente al supuesto de ausencias del Comité Ejecutivo Nacional o de los Comités Ejecutivos Estatales, para que opere la designación de delegados, en tanto que el artículo 38º, párrafo tercero hace referencia al resto de los niveles mencionados.

En las relatadas condiciones, este Consejo General estima que el párrafo tercero de artículo 38º, así como el artículo Transitorio Sexto del Estatuto

modificado no conculcan el mandato legal de establecimiento en Estatutos de procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos de dirección internos.

Ahora bien, es necesario tener la posibilidad de nombrar delegados por el Comité Ejecutivo Nacional, toda vez que los artículos 29º y 41º de la norma estatutaria, únicamente rigen la sustitución de los coordinadores distritales por destitución o inhabilitación definitiva, renuncia al partido o a su cargo, y fallecimiento, así como la sustitución de los consejeros nacionales por renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato.

Finalmente, mediante los artículos Transitorios Segundo y Sexto se aprobó una prórroga en las funciones de quienes integren los órganos de conducción, dirección y ejecución contemplados en el artículo 14º Bis estatutario, así como que serán electos entre el veinte de agosto y el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, para un periodo de 3 años, ello de ningún modo impide a la militancia que así lo desee, participar en dicho Proceso Electoral interno, conforme a los requisitos estatutarios y bases que establezca en su momento la convocatoria ateniende.

Por su parte, Morena dio respuesta a las observaciones y al requerimiento de la DEPPP sobre la modificación al artículo 38º párrafo tercero del Estatuto, conforme a lo expresado en el considerando 16, incisos e) de esta Resolución.

Concerniente a este aspecto, este Consejo General estima que el ejercicio de la atribución del Comité Ejecutivo Nacional para nombrar delegados en órganos ejecutivos, conforme a los criterios y condiciones expresadas por el partido político, son compatibles con el principio de autoorganización, pues definen los alcances y limitaciones de dicha facultad. De ahí que la reforma a este artículo se considere constitucional y legal.

No obstante, se reitera que el ejercicio de la facultad de delegación se deberá sujetar en todos los casos a los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los términos indicados.

- Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional para designar representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, que podrá delegar a la representación ante el Consejo General del INE.

En lo que concierne a esta modificación estatutaria, se considera lo afirmado por María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018): la facultad otorgada al Comité Ejecutivo Nacional, en el artículo 38º, párrafo cuarto del Estatuto, para nombrar representantes ante los Organismos Electorales del país, invade la autonomía de las dirigencias estatales, pues deben ser los comités ejecutivos estatales quienes decidan sobre dichos nombramientos en sus respectivos estados.

Al respecto, refieren que el artículo 23, párrafo 1, inciso j) de la LGPP regula el derecho de los partidos políticos para nombrar a sus representantes, en términos de las constituciones locales y demás legislación aplicable. De ahí que diversas leyes electorales locales otorguen a los órganos directivos estatales la facultad de nombrar a sus representantes ante los Organismos Públicos Locales electorales (OPLES), de tal suerte que el Estatuto no puede limitar el reconocimiento de este derecho a las dirigencias estatales.

A consideración de esta autoridad electoral administrativa, conforme con el artículo 43, párrafo i, inciso b), de la LGPP no es posible inferir la autonomía de los órganos ejecutivos locales frente a los órganos ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Tal es así, que conforme al principio de autoorganización es válido que el órgano facultado para reformar los Estatutos de cada partido político configure la distribución de competencias y atribuciones entre los órganos ejecutivos a nivel nacional o local, mientras que las facultades de cada instancia y nivel estén delimitadas. Por ello, se estima que el nivel de concentración o desconcentración de atribuciones entre los órganos ejecutivos de los partidos políticos es un asunto interno de libre configuración, en tanto que la fórmula adoptada no deje sin operación regular a la estructura del partido, ni afecte los derechos de la militancia.

En esa virtud, la reforma analizada no conculca el artículo 23, párrafo 1, inciso j) de la LGPP, el cual dispone el derecho de los partidos políticos a nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, justamente porque la condicionante para que surta efecto el nombramiento respectivo, es que sea realizado en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable. Esto es, mientras el nombramiento cumpla los requisitos particulares de la ley electoral local respectiva y sea realizado por el órgano facultado que dispongan los Estatutos del partido político, surtirá efectos ante la autoridad electoral.

- Se otorga al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal la función de conducir políticamente a MORENA en el estado.

Tocante a esta reforma, se observa que María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), argumentan que la modificación al artículo 32º, inciso a., estatutario, que revocó al Presidente/a del Comité Ejecutivo Estatal la función de representar legalmente a Morena en el estado respectivo, y le otorgó la atribución de conducir políticamente al partido político en dicho ámbito, es contrario al artículo 43, párrafo 1, inciso b) de la LGPP. Afirman que la contravención se configura pues la citada disposición de ley otorga a los comités estatales la facultad de representar legalmente al partido político en la entidad, lo cual reconoce autonomía a los órganos ejecutivos locales frente a los órganos ejecutivos nacionales. Asimismo, afirman que tal reforma menoscaba las facultades ejecutivas de los órganos estatales y los deja en una situación de dependencia del Comité Ejecutivo Nacional, lo cual transgrede el principio de mecanismos de control de poder.

La norma estatutaria modificada establece:

“Artículo 32º. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. (...).

*Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, **garantizando la paridad de género**, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:*

*a. Presidente/a, quien **conducirá políticamente** a MORENA en el estado; (...).”*

La modificación consistió en transformar la facultad de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal para representar política y legalmente a Morena en el estado, en la facultad para conducir políticamente al partido político en el mismo ámbito.

En tanto que, el artículo 43º, párrafo 1 inciso b) de la LGPP, prevé:

“Artículo 43.

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

(...)

b) *Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;*”

En este contexto normativo, la disposición de ley citada no otorga expresamente a los comités estatales la facultad de representar legalmente al partido político en la entidad, sino que brinda al partido político la libertad de configuración normativa para optar entre un comité nacional o local u órgano equivalente, que será el representante del partido.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la conjunción ‘o’ se usa como conjunción disyuntiva que “denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”. Conforme con lo anterior, el argumento semántico utilizado en esta fase de interpretación gramatical conduce a sostener de manera válida que, con base en la libertad de autoorganización, los partidos políticos pueden regular en sus Estatutos su representación, según corresponda, en alguna de las modalidades siguientes:

- Representación del partido político a cargo del comité nacional.
- Representación del partido político conferida al comité nacional y a los comités locales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Se corrobora lo anterior, dado que, si el legislador federal hubiera estimado el imperativo de que la representación de los partidos políticos recayera tanto en el órgano de dirección nacional como en los locales, así lo habría establecido expresamente, o bien, habría empleado la conjunción copulativa “y” en la disposición analizada, de modo que establecería: *“Un comité nacional y local para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido. (...)”*.

Por otro lado, del análisis a la disposición reformada, a la luz de lo dispuesto en el artículo 43, párrafo i, inciso b), de la LGPP, no es posible inferir una autonomía de los órganos ejecutivos locales frente a los órganos ejecutivos nacionales ni el menoscabo a las facultades ejecutivas de los órganos estatales aducida por los inconformes, pues como se ha sostenido, conforme al principio de autoorganización, el Congreso Nacional de Morena tiene

libertad para definir estatutariamente las bases, reglas y procedimientos necesarios para cumplir los fines de ese instituto político, entre las cuales quedan comprendidas las normas relativas a la organización interna del partido político. En este sentido, en ninguna disposición estatutaria se prevé el principio de autonomía entre determinados órganos directivos ni bases normativas para configurarla. Tampoco se menoscaban las atribuciones ejecutivas de los comités estatales, pues permanecen incólumes el párrafo primero y los incisos b., al m., del artículo 32º del Estatuto, los cuales establecen que el Comité Ejecutivo Estatal conducirá a Morena en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal, así como las funciones específicas de las distintas secretarías que lo integran.

- Se dispone que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dicte medidas cautelares y suspenda los derechos de los militantes por violaciones a lo establecido en el Estatuto, conforme al debido proceso.

Con respecto a este tópico, se toma en cuenta que María del Rocío Pacheco Chávez y Gustavo Alberto Arnaud Franco (SUP-JDC-454/2018), sostienen que mediante la adición al artículo 54º estatutario se facultó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para dictar medidas cautelares y suspensión de derechos por violaciones al Estatuto, en términos del Reglamento de Honestidad y Justicia que se emita. Lo cual estiman, incumple lo ordenado en la sentencia SUP-JDC-670/2017, de seis de septiembre de dos mil diecisiete, en virtud de que en ella se advierte una serie de normas reglamentarias que debían ser aprobadas por el Congreso Nacional, sin que hayan sido puestas a su consideración. En vez de ello, tales normas se integraron en una adición al Estatuto, sin establecerse los mecanismos de defensa de los militantes frente al dictado de medidas cautelares, lo que viola los derechos de audiencia y defensa de los militantes.

En primer lugar, la norma estatutaria adicionada por el V Congreso Nacional Extraordinario, en relación con las atribuciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dispone:

“Artículo 54º. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares, y suspensión de derechos por violaciones a lo establecido en este Estatuto,

conforme al debido proceso. El desarrollo de dicha facultad se establecerá en el Reglamento de Honestidad y Justicia que a efecto se emita en aplicación de esta norma.”

Ahora bien, habida cuenta que lo mandatado por la Sala Superior mediante la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente SUP-JDC-670/2017, en modo alguno restringe al Congreso Nacional de Morena para que en ejercicio de sus atribuciones modifique su Estatuto, a fin de regular las medidas cautelares y la suspensión de derechos de la militancia.

Esto es así dado que, la sentencia dictada si bien versa sobre la emisión de “Normas Reglamentarias para Notificación, Plazos y Dictado de Medidas Cautelares por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena” por parte del Congreso Nacional Extraordinario efectuado el diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, no ordenó que tales normas debían ser aprobadas por el Congreso Nacional, sino por el órgano competente, es decir, por el Consejo Nacional, en términos del Estatuto vigente. De ahí que no exista mandato jurisdiccional en dicho fallo para que el Congreso Nacional de Morena apruebe la normativa interna mencionada, ni algún reglamento interno en esa materia.

Con independencia de lo anterior, desde otro ángulo, la adición de un quinto párrafo al artículo 54° estatutario, no viola los derechos de audiencia y defensa de los militantes de Morena pues, con independencia de la ausencia del reglamento interno en las materias señaladas por ellas, lo cierto es que el párrafo segundo del artículo 47° y los párrafos primero al tercero del artículo 54° del Estatuto, los cuales no fueron modificados, establecen las bases normativas y las formalidades esenciales del procedimiento para que los militantes ejerzan plenamente sus derechos de audiencia y defensa, cuando sean llamados a comparecer a los procedimientos para conocer de quejas y denuncias, o bien, en los procedimientos oficiosos iniciados por la Comisión de Honestidad y Justicia.

“...

Artículo 47°. (...).

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 54°. *El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas.*

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de pruebas y alegatos.

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno de la Comisión establecidas en el reglamento respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y los comisionados que disientan podrán formular votos particulares.

... ”

Por lo tanto, en el Estatuto de Morena quedan a salvo los derechos fundamentales de audiencia y defensa de las y los militantes, mismos que deberán respetarse en la reglamentación que al efecto emita el órgano competente del partido político, que en el caso concreto es el Consejo Nacional de Morena, lo que deberá hacerse en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior, dictada en los autos del expediente SUP-JDC-670/2017, de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la cual, no obstante los requerimientos de esta autoridad, al día de emisión de este resolución Morena no ha cumplido.

- Se establece una prórroga de los órganos directivos hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

Con respecto a este tema, se toma en consideración lo aducido por Gilberto Rafael Cantón Méndez (SUP-JDC-453/2018), Erasmo García Flores (SUP-JDC-460/2018), Jaime Hernández Ortiz (SUP-JDC-462/2018), así como Mauricio Rafael Ruíz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez (SUP-AG-119/2018), quienes se inconforman con el Artículo Transitorio Segundo del Estatuto, en tanto que el primero de ellos también controvierte los artículos Sexto y Octavo transitorios. Por su parte, María del Carmen Gómez Ortega (SUP-JE-54/2018), se inconforma con los artículos transitorios Segundo y Sexto. Sin embargo, en los cuatro casos el eje de sus respectivas inconformidades es la ilegalidad de la prórroga en el ejercicio de los cargos dirigentes de Morena, así como la postergación de las elecciones internas hasta noviembre de dos mil diecinueve, aspectos aprobados por el V Congreso Nacional Extraordinario.

En ese contexto, Gilberto Rafael Cantón Méndez argumenta que los artículos transitorios Segundo, Sexto y Octavo del Estatuto modificado suspendieron el procedimiento electivo para la renovación de los cargos internos que corresponde realizar cada tres años, para ser prorrogados hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Estima que tal determinación no tiene fundamento, pues conforme al artículo 34º del Estatuto, el Congreso Nacional carece de la facultad para suspender un proceso electivo interno, al tiempo que tal determinación si bien se basó en una coyuntura extraordinaria derivada de los triunfos obtenidos por Morena en el Proceso Electoral, ello no puede disolver la actividad electoral interna.

Por otro lado, sostiene que la prórroga citada vulnera el principio de celebración periódica de elecciones, en particular la renovación cada tres años de los órganos de conducción, dirección y ejecución de Morena, en términos de los artículos 10º, 11º, 17º, 20º, 21º, 24º, 30º, 32º, 38º y 40º de la norma estatutaria vigente. Asimismo, afirma que la prórroga contraviene lo establecido en la Jurisprudencia 3/2005 de la Sala Superior, por no garantizarse: *“... La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio...”*.

Considera que la determinación de posponer el proceso de elección de dirigentes de Morena viola la prohibición constitucional de suspensión de

derechos político-electorales de las personas, prevista en el artículo 29 de la Constitución. Lo anterior, pues al haberse suspendido el Proceso Electoral interno, existe imposibilidad de ejercer los derechos de votar y ser votado, así como el de afiliación a Morena, en los términos y temporalidad regulada estatutariamente, es decir, cada tres años, al cumplirse el periodo estatutario.

Por su parte, Erasmo García Flores (SUP-JDC-460/2018) y Jaime Hernández Ortiz (SUP-JDC-462/2018), alegan la inconstitucionalidad del artículo Transitorio Segundo del Estatuto, pues al prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección y ejecución contemplados en el artículo 14° Bis estatutario, hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, contradice los tiempos marcados en las normas del propio Estatuto, pues ninguna norma interna de Morena faculta prórrogas ni la modificación de plazos. Por otro lado, estiman que dicha norma transitoria cancela los procesos electorales internos de forma arbitraria al establecer prórrogas en las funciones de los órganos directivos, que no están previstas en la norma.

Finalmente, Mauricio Rafael Ruíz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez (SUP-AG-119/2018), argumentan que es antidemocrática la falta de renovación de los órganos directivos previstos en el artículo 14° Bis del Estatuto, pues los mismos fueron electos únicamente para un periodo de tres años. Bajo ese concepto, si la duración de los tres años no fue modificada, la prórroga excede dicho mandato para el cual fueron electos los dirigentes. Asimismo, refieren que el transitorio Segundo no expone fundamentación, además de que la reforma no está vigente, por lo que ante la *vacatio legis* lo procedente es aplicar el Estatuto en vigor, es decir, renovar los órganos directivos desde el mes de agosto del presente año.

Primeramente, es necesario tener en cuenta el texto de las normas transitorias, las cuales disponen:

***“SEGUNDO.-** Atendiendo a las condiciones extraordinarias y transitorias que hoy vive MORENA; frente a la renovación de órganos estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos diecisiete Congresos Estatales; así como la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; siendo además que en septiembre iniciarán los procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y que es necesario contar con un padrón confiable debidamente credencializado con fotografía; así como la necesaria instrumentación de un proceso de capacitación y formación para quienes integren los órganos internos y los gobiernos*

emanados de MORENA, frente a la nueva situación política de un régimen basado en la austeridad republicana y el combate a la corrupción, lucha reconocida en los documentos básicos de MORENA, resulta razonable fortalecer a MORENA como partido movimiento, por lo que es menester prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección y ejecución contemplados en el artículo 14 bis del Estatuto al 20 de noviembre de 2019.

(...)

SEXTO.- Conforme a las consideraciones del transitorio SEGUNDO y en términos del artículo 14 bis del Estatuto los órganos de conducción, dirección y ejecución, serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. El Congreso Nacional con funciones electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2019. Dichos órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de género, y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos de lo establecido en el artículo 38 del presente Estatuto. Dicha determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según corresponda.

(...)

OCTAVO.- El Comité Ejecutivo Nacional emitirá normas, Lineamientos y Reglamentos que deriven de la presente reforma conforme al siguiente calendario:

PERIODO	ACTIVIDAD
20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019	Proceso de credencialización de los Protagonistas del Cambio verdadero, con el objeto de contar con un padrón confiable y completo para la realización de la elección interna.
20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019	Revisión de la integración y fortalecimiento de Comités de Protagonistas del cambio Verdadero
20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019	Proceso electivo para la renovación de órganos de MORENA.

Ahora bien, conforme al artículo 34 del Estatuto vigente, la prórroga aprobada en el ejercicio de los cargos que desempeñan los integrantes de los órganos directivos de conducción, dirección y ejecución, previstos en el artículo 14° Bis del Estatuto, hasta el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, así como la definición de los plazos y las reglas de tránsito para efectuar el proceso de renovación de tales órganos dirigentes, no requiere de una facultad estatutaria explícita a favor del Congreso Nacional del partido político.

Tal es así, pues el párrafo tercero del citado artículo, al disponer que el Congreso Nacional *“Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de MORENA”* establece a su favor una facultad exclusiva y amplia de configuración normativa al interior del instituto político. A su vez, esa facultad regulatoria del Congreso Nacional está fundada en la libertad de autoorganización de dicho instituto político, reconocido en el artículo 36 de la LGPP. En esa virtud, se estima que la facultad del Congreso Nacional para configurar la vida interna del instituto político en el Estatuto, comprende la capacidad para determinar normas ordinarias o permanentes en el texto de los artículos estatutarios, como en el régimen transitorio que estime necesario para permitir su paulatina implementación.

El derecho de autoorganización citado, a su vez, encuentra sustento en la Tesis VIII/2005 de la Sala Superior, con el rubro *“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS”*, cuyo sentido es congruente con lo que prevé el artículo 36, párrafo 1, de la LGPP, sobre la ponderación del derecho a auto regularse y organizarse internamente.

Por otro lado, es de resaltar que los artículos transitorios mencionados no implicaron suprimir las reglas y procedimientos para realizar elecciones internas a fin de elegir y renovar a quienes integran los órganos de dirección, entre el veinte de agosto y el veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

Desde otro ángulo, la Jurisprudencia 48/2013 de la Sala Superior, vigente y obligatoria, ha sostenido el criterio de que, cuando concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias, no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, hasta que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contra, con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que se extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las actividades propias del partido político para el logro de sus fines. El rubro y texto de esta Jurisprudencia establecen lo siguiente:

“DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS, POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS.—El artículo 27, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exige que la integración y renovación de los

órganos directivos de un partido político se realice a través de procedimientos democráticos, es decir, que los militantes del ente político mediante el sufragio, elijan a sus representantes. En ese contexto, cuando concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas, y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias, no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, hasta que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contra; ello con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que se extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las actividades propias del partido político para el logro de sus fines, lo cual se imposibilitaría, de estimar el cese inmediato de las atribuciones de los dirigentes a la conclusión del encargo, sin haber elegido a quienes deban realizarlas.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-51/2007.—Actor: Guillermo Bernardo Galland Guerrero.—Responsable: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-484/2007 y acumulado.—Actores: Juan Martínez Gutiérrez y otros.—Autoridad responsable: Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-4970/2011.—Actores: Carlos Sotelo García y otros.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—26 de agosto de 2011.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: David R. Jaime González, Enrique Martell Chávez y José Eduardo Vargas Aguilar.

Nota: El contenido del artículo 27, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretados en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 39, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 40 y 41...”.

Nota: Subrayado propio.

En el caso analizado, la prórroga es explícita a través de una reforma estatutaria aprobada por el órgano competente, situación que, por mayoría de razón a la citada Jurisprudencia, se encuentra justificada expresamente en el Artículo Transitorio Segundo, con base en los argumentos siguientes:

- Dadas las condiciones extraordinarias y transitorias del partido político, teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos diecisiete Congresos Estatales, y la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

- En septiembre iniciarán los procesos electorales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
- Es necesario contar con un padrón confiable debidamente credencializado con fotografía.
- Existe necesidad de instrumentar un proceso de capacitación y formación para quienes integren los órganos internos y los gobiernos emanados de Morena, frente a la nueva situación política de un régimen basado en la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

En este sentido, el V Congreso Nacional Extraordinario, de manera explícita en el Artículo Transitorio Segundo aprobado, argumentó cuáles son las causas extraordinarias y transitorias por las que estima no es viable la renovación de los órganos directivos al término de su periodo ordinario; es decir, externó la motivación que le llevó a determinar la prórroga motivo de inconformidad, con efectos temporales, no definitivos, para lograr desarrollar los fines del partido político.

Ahora bien, formalmente no existe contradicción entre las normas transitorias y las normas estatutarias, que disponen la duración de tres años para ejercer cargos partidistas, habida cuenta que, por definición, la finalidad de un régimen transitorio es fijar reglas de excepción, acotadas en el tiempo, bajo supuestos específicos, para dar cabida a un cambio de situación. Por ello, a consideración de esta autoridad, la prórroga aprobada por el Congreso Nacional no es un acto antidemocrático, pues se trata de una medida estrictamente excepcional y temporal, que no podrá extenderse más allá del veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

El artículo 25, párrafo 1, inciso I) de la LGPP prevé que las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas; sin embargo, no debe perderse de vista que, con base en el derecho de autoorganización partidista, la expectativa de que las modificaciones estatutarias sean declaradas constitucionales y legales por esta autoridad, no limita al partido político para que en los hechos planee o prepare su implementación de manera anticipada. Así, resultaría ocioso que el partido político iniciara el Proceso Electoral interno, cuando su pretensión es que las modificaciones estatutarias presentadas al Instituto,

que plantean la prórroga de los cargos, sean declaradas constitucionales y legales.

En tal contexto, esta autoridad electoral pondera que, con la postergación del inicio del proceso de renovación de la dirigencia de Morena, acorde con las reglas del Estatuto vigentes en el momento que se lleven a cabo los comicios internos, dicho partido político no deja de cumplir con la obligación de mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, consignada en el artículo 25, párrafo 1, inciso f) de la LGPP. De ahí que la prórroga en la renovación de las dirigencias en realidad no pone en riesgo ni mucho menos en una situación crítica la operación ordinaria del partido político, en sus diversos niveles organizativos.

Ahora bien, los artículos transitorios tampoco conculcan el principio de celebración periódica de elecciones, pues la reforma estatutaria no cancela la posibilidad de seguir realizando elecciones internas, en los términos que establece el propio Estatuto, cada tres años. De modo que, como se dijo, la prórroga por un año en la elección de las dirigencias actuales se ajusta a causas extraordinarias y transitorias, luego entonces, no tiene los alcances que manifiestan los inconformes.

Aunado a lo anterior, el marco estatutario sí garantiza los derechos de elección de dirigentes y candidatos. Esto, pues el artículo 5º, inciso j., del Estatuto vigente, que no fue modificado, establece como garantía de los afiliados de Morena, los derechos establecidos en el artículo 40 de la LGPP, en cuyos incisos a) y b), se incluyen, entre otros, los derechos de la militancia a participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular; así como el derecho a postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios. De tal suerte, cualquier persona afiliada a Morena está en aptitud de ejercer tales derechos, en los términos y procedimientos que dispone el Estatuto.

Por otro lado, este Consejo General estima que la posposición del proceso de elección de dirigentes tampoco viola la prohibición constitucional de suspensión de derechos político-electorales de las personas, prevista en el artículo 29 constitucional. En efecto, el párrafo segundo del mencionado

artículo dispone que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos políticos, entre otros, pero tal limitante tiene sentido únicamente en los supuestos consignados en el párrafo primero de ese artículo; es decir, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

- Se disminuye la aportación económica al partido político por parte de los legisladores o representantes populares y se determina la condonación de dicho pago en caso de situaciones excepcionales y plenamente justificadas.

Sobre este tópico, el artículo 67°, párrafo primero estatutario fue reformado para reducir las aportaciones de los integrantes de Morena del 50% a entre el 5% y el 10%, con base en las percepciones totales en el caso de legisladores o representantes populares electos por el partido político, según se determine por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, así como la condonación del pago en situaciones excepcionales y justificadas.

Tal modificación se estima apegada a los principios de autoorganización y libre configuración normativa a cargo del Congreso Nacional, por lo que respecta a la determinación de la obligación de los militantes del pago de cuotas y la forma de cubrirlas. A su vez, la modificación en estudio no contraviene lo previsto en los artículos 41, párrafo 1, inciso c), 56, párrafo 1, inciso a) y 56, párrafo 2, inciso c) de la LGPP, en materia de determinación de montos y periodicidad de las cuotas ordinarias al partido político.

Por lo tanto, dicha modificación se apega al marco legal vigente.

En adición a lo anterior, el partido político dio respuesta a las observaciones al artículo 67° del Estatuto y al requerimiento realizado por la DEPPP, en los términos señalados en el considerando 16, inciso g) de esta Resolución.

Sobre el tema, esta autoridad electoral considera que la modificación de las aportaciones de los legisladores o representantes populares electos por Morena, para quedar entre el cinco y el diez por ciento de sus percepciones totales, así como la posibilidad de condonar el pago de las mismas a militantes por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, atendiendo a situaciones excepcionales y plenamente justificadas, se ajusta a los

principios de autoorganización y certeza electoral, en razón de que la condonación deberá realizarse:

- Previo acuerdo fundado y motivado del Comité Ejecutivo Nacional, ajustándose en lo conducente al artículo 56 de la LGPP, en cuanto a las aportaciones o cuotas de militantes.
 - Se otorgará ante una situación excepcional, entendiendo como tal, de manera enunciativa, aquella que tengan los militantes en municipios que atravesaron por desastres naturales; severos conflictos sociales o de delincuencia. Así como por la situación sociodemográfica y/o socioeconómica de los militantes en cada municipio, considerando las diferencias que existen entre los ingresos en uno y otro municipio, y comunidad del país, así como los niveles de funciones que en su caso desempeña cada militante.
 - Se entenderán como circunstancias excepcionales las dificultades personales de cada militante, incluyendo afectaciones repentinas en sus capacidades físicas o problemáticas familiares, que afecten justificadamente su ingreso personal.
- Se garantiza la paridad de género en la integración del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales.

En relación con este aspecto, se reformó el artículo 38° del Estatuto para establecer que el Comité Ejecutivo Nacional estará conformado garantizando la paridad de género. En el mismo sentido, se modificó el artículo el artículo 32°, párrafo segundo, para conformar los Comités Ejecutivos Estatales con paridad de género.

Asimismo, en el Artículo Transitorio Sexto estatutario se previó que los órganos de conducción, dirección y ejecución, a elegirse el veinte de noviembre de dos mil diecinueve por el Congreso Nacional con funciones electivas, tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de género.

Al respecto, el Consejo General del INE considera que la normativa reformada se ajusta al principio de paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a cargos legislativos, aplicado al caso concreto como estándar constitucional para alcanzar la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres en la competencia política, acorde con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, así como 3, párrafo 4 y 25, párrafo 1, inciso r) de la LGPP.

En concomitancia con ello, las modificaciones estatutarias bajo estudio cumplen el criterio obligatorio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 20/2018, de rubro **“PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN”**, por cuanto a que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas, cuyo texto íntegro establece:

“PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.—*De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres.*

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-369/2017 y acumulados.—Actores: Santiago Vargas Hernández y otro.—Órganos responsables: Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT y otros.—22 de junio de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala, Omar Espinoza Hoyo, Jesús González Perales y Carmelo Maldonado Hernández. Recurso de reconsideración. SUP-REC-1319/2017.—Recurrentes: Agustín Nava Huerta y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.—18 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-20/2018.—Actora: Diana Cosme Martínez.—Autoridad responsable: Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.—14 de febrero de 2018.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Reyes Rodríguez

Mondragón y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Magali González Guillén y Jorge Armando Mejía Gómez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

Nota: Subrayado propio.

En consecuencia, la modificación bajo estudio se encuentra apegada al marco constitucional y legal en materia de paridad de género.

- 26.** Por otro lado, el artículo 72, párrafo segundo del Estatuto establece que la capacitación y formación del Instituto Nacional de Formación Política incluirá, de forma transversal, un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación y será ejercida en términos del artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGPP. Al respecto, este Consejo General estima pertinente expresar la finalidad de que los partidos políticos destinen el 3% de su financiamiento para actividades ordinarias permanentes a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pues dicho financiamiento se puede ejercer no solamente en cursos y talleres, sino también para investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros.

En tal virtud, a fin de dar claridad sobre esta circunstancia y evitar confusiones en la normativa interna de Morena, esta autoridad electoral considera necesario vincular a dicho partido político para que en el siguiente Congreso Nacional que celebre incluya una reforma al artículo 72 de su Estatuto con la finalidad de que se elimine la referencia al artículo 52, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGPP.

- 27.** En lo relativo a las modificaciones a los artículos precisados en el inciso b) del considerando 24, éstas fueron realizadas con base en el artículo 44 de la Constitución y consisten en la armonización con la denominación de la Ciudad de México y de las alcaldías.
- 28.** El texto íntegro del Estatuto de Morena, así como la clasificación de las modificaciones precisadas en los considerandos que anteceden forman parte

integral de la presente Resolución, como ANEXOS UNO y DOS; en treinta y nueve y catorce fojas útiles, respectivamente.

29. Con base en el análisis de los documentos presentados por Morena respecto a la celebración de su V Congreso Nacional Extraordinario y en virtud de los razonamientos vertidos en los considerandos anteriores, este Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y legalidad de las modificaciones al Estatuto de Morena.
30. A efecto de garantizar el principio de certeza con que debe actuar esta autoridad, resulta pertinente vincular a Morena, a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto, para que a la brevedad posible conozcan y aprueben el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los Lineamientos o reglamento que regule la integración y funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política, así como los demás Reglamentos que, en su caso, deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto y los remita a esta autoridad, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, para efectos de lo establecido en el artículo 36, párrafo 2 de la LGPP, así como 53 al 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
31. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su sesión extraordinaria privada efectuada el nueve de noviembre del presente año, aprobó el Anteproyecto de Resolución en cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8 de la LGIPE somete a la consideración del Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Bases I y V de la Constitución; relacionado con los artículos 42, párrafo 8 y 55, párrafo 1, inciso o) de la LGIPE; 10, párrafo 2, inciso a); 25, párrafo 1, inciso I); 34; 35 y 36 de la LGPP; 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; así como la Jurisprudencia 3/2005 y la Tesis VIII/2005 invocadas, y en ejercicio de las facultades previstas en

los artículos 43, párrafo 1 y 44, párrafo 1, incisos j) y jj) de la citada LGIPE dicta la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional denominado Morena, conforme al texto aprobado en el V Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se ordena a Morena para que en el siguiente Congreso Nacional que celebre modifique el artículo 73 del Estatuto para que quede expresamente señalado que la autonomía en el funcionamiento y gestión del Instituto de Formación Política no implica autonomía financiera, esto es, no cuenta con personalidad ni patrimonio propios. De ahí que todo lo relacionado con la administración de recursos federales y locales, así como con la rendición de cuentas, deberá ser llevado a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en cada entidad federativa.

Adicionalmente, deberá incorporarse en la redacción del citado precepto estatutario, que tanto el programa de trabajo como los Lineamientos de funcionamiento de dicho instituto, serán aprobados por las instancias correspondientes del partido político, en los términos establecidos en el Estatuto. Lo anterior, en términos de lo razonado en las porciones conducentes del Considerando 25 de esta Resolución.

TERCERO. Se tienen por atendidos los motivos de inconformidad expresados en los escritos signados por Aviud de la Fuente Plata, Gilberto Rafael Cantón Méndez, María del Rocío Pacheco Chávez, Gustavo Alberto Arnaud Franco, Erasmo García Flores, Jaime Hernández Ortiz, María del Carmen Gómez Ortega, Mauricio Rafael Ruiz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez, en contra de las modificaciones realizadas al Estatuto de Morena, en los términos expresados en el Considerando 25 de la presente Resolución.

CUARTO. Se vincula a Morena para que en el siguiente Congreso Nacional que celebre incluya una reforma al artículo 72 de su Estatuto con la finalidad de que se

elimine la referencia al artículo 52, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGPP, acorde con lo expresado en el Considerando 26 de la presente Resolución.

QUINTO. Se vincula a Morena, a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto, para que a la brevedad posible conozcan y aprueben el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los Lineamientos o reglamento que regule la integración y funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política, así como los demás Reglamentos que, en su caso, deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto y los remita a este Instituto, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, para efectos legales y reglamentarios conducentes, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 30 de esta Resolución.

SEXTO. En el nombramiento de delegados/as que realice el Comité Ejecutivo Nacional para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal deberán observarse los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza.

SÉPTIMO. La atribución del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones para determinar aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, señalada en el artículo 14°, inciso d., del Estatuto de Morena, deberá sujetarse a las mismas medidas e interpretación jurídica del artículo 38°, párrafo tercero del Estatuto, relativo a la designación de delegados a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.

OCTAVO. Notifíquese por oficio la presente Resolución al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para que, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, rija sus actividades al tenor de las Resoluciones adoptadas al respecto.

NOVENO. Notifíquese la presente Resolución a Aviud de la Fuente Plata, Gilberto Rafael Cantón Méndez, María del Rocío Pacheco Chávez, Gustavo Alberto Arnaud Franco, Erasmo García Flores, Jaime Hernández Ortiz, María del Carmen Gómez Ortega, Mauricio Rafael Ruiz Martínez e Isaac Alberto Martínez Ramírez, en los domicilios señalados en los juicios ciudadanos respectivos.

DÉCIMO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.

Estatuto de MORENA

MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.

CAPÍTULO PRIMERO: Definiciones esenciales.

Artículo 1°. El nombre de nuestro partido es MORENA. Su emblema es un logo que representa la igualdad sin jerarquías con el uso de letras minúsculas. De tipografía moderna y sin adornos permite su legibilidad a la distancia como una entidad clara, representativa, diferente y distinguible apoyado con el uso de un color que se reconoce de entre otras fuerzas políticas. Se trata de un símbolo en tipografía Surface Bold, versión 1000 disposición Open Type, Post Script contornos en minúsculas. El logotipo está enmarcado en un rectángulo horizontal de proporciones 6:1 - 12:2 - 24:4 y así sucesivamente. El color del emblema es Pantone 1805.

Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político nacional a partir de los siguientes objetivos:

- a. La transformación democrática y pacífica del país, como objetivo superior;
- b. La formación de una organización de hombres y mujeres libres y decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación;

ANEXO UNO

- c. La integración plenamente democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones;
- d. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política;
- e. La batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad;
- f. El mayor despliegue de energías, identidades, memoria y creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra patria.

Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos:

- a. Buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados por la Constitución;
- b. Que a las y los Protagonistas del cambio verdadero no los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio;
- c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean;
- d. Asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás;
- e. Luchar por constituir auténticas representaciones populares;
- f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo;

ANEXO UNO

g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general;

h. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas;

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder;

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido.

CAPÍTULO SEGUNDO: Garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero

Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los menores

ANEXO UNO

de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país.

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías (derechos):

- a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la transformación de nuestro país;
- b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de nuestro partido;
- c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y los derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los ciudadanos en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de México, con el fin de lograr su plena soberanía;
- d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al servicio de grupos de intereses creados;
- e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la población -especialmente de aquella que ha sido excluida del sistema educativo en todos sus niveles-, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país;

ANEXO UNO

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de participar en MORENA;

g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro partido;

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los órganos estatutarios correspondientes;

i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada instancia, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital o Municipal extraordinario, observando las formalidades que establece este Estatuto.

j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):

a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y soberanía popular;

b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad;

c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión impreso Regeneración;

ANEXO UNO

- d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios;
- e. Aportar regularmente recursos para el sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de este Estatuto;
- f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y en el exterior;
- g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior, distrital, estatal o nacional;
- h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad.
- i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular.

CAPÍTULO TERCERO: Principios democráticos.

Las tareas fundamentales que realizarán los Protagonistas del cambio verdadero para hacer posible la transformación del país serán las de concientización, organización y defensa del pueblo de México y del patrimonio nacional. Para estar en condiciones de llevarlas a cabo, es imprescindible que nuestro partido exprese lo mejor de la sociedad mexicana y se constituya en sustento para una verdadera transformación democrática del país.

ANEXO UNO

Artículo 7°. Todos los órganos de dirección de MORENA se constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en términos de género, como de edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales y de procedencia (regional, estatal, municipal, comunitaria), así como la diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de México.

Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.

Artículo 9°. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones, y las y los Protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la transformación del país.

Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional) solo podrá postularse **de manera sucesiva** para **distinto** cargo del mismo nivel **hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar pasar** un período de tres años. No se permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea.

Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y estatales sólo podrán **postularse** de manera sucesiva **hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser consejeras o consejeros nacionales y estatales, en ese mismo nivel, deberán dejar pasar** un período de tres años.

Artículo 12°. Quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente en MORENA.

Artículo 12° Bis. MORENA accederá a las prerrogativas y financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución y de las leyes generales, federales y locales aplicables.

ANEXO UNO

Adicional a lo establecido en el párrafo anterior, MORENA podrá recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:

- a) Financiamiento por la militancia;
- b) Financiamiento de simpatizantes;
- c) Autofinanciamiento, y
- d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

En todo momento, el financiamiento público y privado deberá ser aplicado para el cumplimiento de los fines de MORENA, de conformidad con los principios del programa y lo señalado en la legislación electoral.

Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva.

Artículo 13° Bis. MORENA garantizará la transparencia de su información hacia la ciudadanía y contará con un órgano que garantizará el acceso a la información conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. El reglamento correspondiente desarrollará la organización del órgano de transparencia y la forma en que habrá de cumplirse la ley.

MORENA garantizará la protección de datos personales de los Protagonistas del cambio verdadero, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos casos.

CAPÍTULO CUARTO: Estructura organizativa

Artículo 14°. Para hacer posibles estos objetivos, MORENA se organizará sobre la base de la siguiente estructura:

Las bases de la estructura organizativa de MORENA las constituirán los comités de las y los Protagonistas de cada barrio, colonia, comunidad o pueblo, o en el exterior.

ANEXO UNO

Podrán establecerse comités a partir del lugar de residencia de los Protagonistas, así como de acuerdo con sus afinidades, identidades (de género, culturales, sociales, étnicas, etc.) o participación en actividades sectoriales (fábricas, escuelas, ejidos, comunidades agrarias, centros laborales, culturales, deportivos, socio-ambientales, juveniles, etc.);

a. Los comités de Protagonistas integrarán la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior. Las y los Protagonistas que no hayan sido registrados en un Comité de Protagonistas tendrán derecho de asistir a la Asamblea Municipal con voz y voto, si aparecen en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, como lo establecen los Artículos 15° y 18° del presente estatuto. Dichas asambleas serán la autoridad principal de MORENA en el ámbito territorial al que correspondan. Para los efectos de este Estatuto, se considerará a las **alcaldías de la Ciudad de México** como equivalentes a los municipios;

b. Cada Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior se constituirá en Congreso Municipal cada tres años y elegirá a un Comité Municipal. Los Comités Municipales tendrán la obligación de registrar a los Comités de Protagonistas, de integrar a los y las Protagonistas que se afilien a MORENA a comités existentes, de formar nuevos Comités de Protagonistas y afiliar a nuevos Protagonistas del Cambio Verdadero;

c. Como órgano auxiliar de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, cada Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior elegirá a dos representantes, que apoyarán a la Coordinación Distrital;

d. En el caso de estados con más de cincuenta municipios, o de municipios de más de cien mil habitantes, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo **Nacional** podrá **determinar** la conformación de regiones o zonas de atención, para facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités de Morena en su ámbito territorial. **El Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinarán aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales.**

e. Las coordinaciones distritales serán la base para integrar los Congresos y Consejos Estatales, así como al Comité Ejecutivo Estatal;

ANEXO UNO

f. La representación de los Comités de Mexicanos en el Exterior de MORENA ante el Congreso Nacional será establecida en la convocatoria respectiva.

g. El Congreso Nacional reunirá a todos las y los consejeros estatales del país y a las y los representantes de los Comités de Mexicanos en el Exterior de MORENA. Quienes lo integren elegirán a los consejeros nacionales, y al Comité Ejecutivo Nacional;

h. En el Consejo Nacional de MORENA se elegirá la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:

A. Órgano constitutivo:

1. Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero

B. Órganos de conducción:

1. Asambleas Municipales

2. Consejos Estatales

3. Consejo Nacional

C. Órganos de dirección:

1. Congresos Municipales

2. Congresos Distritales

3. Congresos Estatales

4. Congreso Nacional

D. Órganos de ejecución:

ANEXO UNO

1. Comités Municipales

2. Coordinaciones Distritales

3. Comités Ejecutivos Estatales

4. Comité Ejecutivo Nacional

E. Órganos Electorales:

1. Asamblea Municipal Electoral

2. Asamblea Distrital Electoral

3. Asamblea Estatal Electoral

4. Asamblea Nacional Electoral

5. Comisión Nacional de Elecciones

F. Órganos Consultivos:

1. Consejos Consultivos Estatales

2. Consejo Consultivo Nacional

3. Comisiones Estatales de Ética Partidaria

G. Órgano Jurisdiccional:

1. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

H. Órgano de Formación y Capacitación

1. Instituto Nacional de Formación Política

ANEXO UNO

Para efectos del presente Estatuto, **la Ciudad de México** se entenderá como entidad federativa y las **Alcaldías** como municipios.

Artículo 15°. La afiliación de Protagonistas del cambio verdadero podrá hacerse en trabajo casa por casa, por internet, o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o internacional de MORENA. Todas y todos los Protagonistas deberán ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

Corresponderá a las secretarías de organización de los distintos niveles ejecutivos: municipal, estatal, nacional o internacional, proponer su incorporación a un Comité de Protagonistas o la conformación de un nuevo comité. Los Protagonistas de MORENA también podrán organizarse en los comités que libremente constituyan y registren ante cualquier secretaría de organización municipal, estatal, nacional o internacional. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional creará un registro nacional de comités de Protagonistas.

Cada comité de MORENA deberá guiarse por lo establecido en los Artículos 2° a 6° del presente Estatuto, y realizar sus actividades territoriales de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en su ámbito territorial. En el caso de que realice actividades correspondientes a un sector, coordinará sus iniciativas y actividades con las secretarías que correspondan a nivel municipal, estatal o nacional.

Artículo 16°. Los comités de Protagonistas de MORENA se integrarán con un mínimo de cinco y un máximo de sesenta miembros; realizarán sus actividades en un municipio o en la ciudad, departamento o provincia del país extranjero en que radiquen; y se reunirán cuando menos cada treinta días. Las y los Protagonistas del cambio verdadero que procedan de diversos barrios, comunidades o pueblos del mismo municipio o distrito, o de diversas ciudades o provincias de un país del exterior, podrán ser registrados como comité en alguno/a de ellos; deberán comprometerse a afiliar Protagonistas y constituir nuevos comités.

Todos los comités de Protagonistas que se constituyan - territoriales, por afinidad o actividad sectorial - deberán ser registrados obligatoriamente por el Comité Municipal o del ámbito territorial que les corresponda. Así mismo, los trabajos de

ANEXO UNO

información, concientización y organización serán la tarea fundamental de todos los comités de Protagonistas, sin excepción.

Artículo 17°. Cada Comité de Protagonistas que se constituya en MORENA deberá, con la participación de todos sus integrantes, elegir democráticamente a dos representantes, quienes serán responsables de convocar a las reuniones del comité, mismas que serán ordinarias o extraordinarias y en las que podrán tratarse todos los temas que les correspondan y sobre los que tengan facultades, entendiéndose por ordinarias las que se celebren al menos cada treinta días y extraordinarias las que puedan ser convocadas en cualquier momento; informar a la Asamblea Municipal o del ámbito territorial que les corresponda a los mexicanos en el exterior, de sus actividades; incorporar a los nuevos Protagonistas registrados ante el Comité Municipal o, en el caso de los comités en el exterior, ante la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional, para su incorporación al Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y coadyuvar en la formación de nuevos comités; coordinar las actividades territoriales del comité; acordar con el Comité Municipal o de su ámbito territorial su plan de actividades; con la Secretaría municipal, estatal y nacional que corresponda en lo que se refiera a su actividad sectorial; integrar la Asamblea Municipal o del ámbito territorial que les corresponda en el exterior e informar de sus actividades en cada asamblea. Los representantes de los comités de Protagonistas durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos una sola vez en forma sucesiva.

Artículo 18°. La Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior en cada ámbito territorial será convocada de manera ordinaria por el Comité Municipal cada tres meses, y de manera extraordinaria, para tratar asuntos urgentes, cuando lo soliciten el propio comité o la quinta parte de los Protagonistas registrados en el ámbito territorial. La convocatoria deberá contener fecha, lugar, hora y asuntos a tratar. Se difundirá por perifoneo, de manera personal y en medios electrónicos, con el apoyo de los coordinadores distritales y sus auxiliares, con no menos de siete días de anticipación.

Se considerará que la asamblea tiene quórum para iniciar con la asistencia de la mitad más uno de los representantes de comités de Protagonistas en su ámbito territorial. El Comité Municipal contará con el tiempo que transcurra entre asamblea y asamblea para invitar e incorporar a todos los Protagonistas de la demarcación a

ANEXO UNO

un Comité de Protagonistas. Los Protagonistas que estén integrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, en el municipio correspondiente, y todavía no hayan sido incorporados a un Comité de Protagonistas, tendrán derecho a voz y voto en la asamblea. Los acuerdos de la asamblea serán tomados por mayoría o consenso. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional validará el listado de comités de Protagonistas para los efectos del quórum de estas asambleas, de conformidad con el registro mencionado en este Estatuto. En caso de que no existan comités de Protagonistas en un municipio, el quórum lo harán la mitad más uno de las y los afiliados.

Artículo 19°. La Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior de MORENA deberá:

- a. Conocer el informe de actividades de los comités de Protagonistas y, en su caso, de la Coordinación Distrital en su ámbito territorial;
- b. Discutir y resolver sobre el plan de acción territorial y sectorial de MORENA en su ámbito territorial;
- c. Recibir el informe del Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior sobre el registro de nuevos afiliados a MORENA, así como de su incorporación a un Comité de Protagonistas;
- d. Determinar, con la aprobación de las dos terceras partes de los asistentes a la asamblea, la revocación de mandato de integrantes del Comité Ejecutivo Municipal, o de éste en su conjunto, previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva, en presencia de al menos un representante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Dicha causa sólo procederá en casos graves, como la violación de los fundamentos señalados en el Artículo 3° del presente estatuto, en sus párrafos f, g, h é i;
- e. Decidir, en su caso, la sustitución de sus representantes auxiliares ante la Coordinación Distrital, señalados en el artículo 14 c.

Artículo 20°. Una vez cada tres años, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitirá una convocatoria para realizar los congresos municipales. Los comités ejecutivos estatales incorporarán a la convocatoria, fecha, lugar y hora para cada

ANEXO UNO

municipio y deberán difundirla, con el auxilio de la estructura distrital y municipal, por medio de invitación domiciliaria, en los estrados de los comités ejecutivos, en la página web del partido y a través de redes sociales, con no menos de treinta días de anticipación. Adicionalmente, se podrá difundir por perifoneo, en medios electrónicos y en algún diario de circulación nacional o estatal. Los congresos municipales de cada entidad federativa se realizarán en el periodo que establezca la convocatoria.

Se considerará que el congreso municipal tiene quórum para iniciar con la asistencia de la mitad más uno de los representantes de comités de Protagonistas en su ámbito territorial. Todas las y los Protagonistas del cambio verdadero registrados en el ámbito territorial en que se lleve a cabo el congreso y que asistan formarán parte del mismo, y tendrán derecho a voz y voto. Los acuerdos del congreso serán tomados por mayoría o consenso. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional validará el listado de comités de Protagonistas para los efectos del quórum de los congresos, de conformidad con el registro mencionado en este Estatuto. En caso de que no existan comités de Protagonistas en un municipio, el quórum lo harán la mitad más uno de las y los afiliados. Para efectos de la participación en el congreso municipal, el registro de afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará por lo menos 30 días antes de su realización.

El congreso será presidido por un/una integrante del Comité Ejecutivo Estatal, quien elaborará y firmará el acta correspondiente, y deberá:

- a. Recibir el informe del Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior saliente sobre las actividades realizadas en el período;
- b. Recibir el informe del Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior saliente sobre el número de Protagonistas que consten en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero en su ámbito territorial y el número de cargos que pueden ser elegidos para el comité, a partir del número de Protagonistas en su ámbito territorial, de acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional;
- c. Informar a los presentes cuáles secretarías formarán parte del Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior;

ANEXO UNO

d. Elegir al nuevo Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior;

e. Con excepción de los Comités de Mexicanos en el Exterior y de municipios que contengan varios distritos, elegir a quienes representarán al municipio en el Congreso Distrital, de conformidad con la convocatoria que se emita en los términos del artículo 24 del presente Estatuto.

Artículo 21°. El Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior en cada ámbito territorial, deberá integrarse por no menos de cinco y no más de once personas. Contará, al menos, con presidente, quien conducirá los trabajos de MORENA en el municipio y convocará a las sesiones, mismas que serán ordinarias o extraordinarias y en las que podrán tratarse todos los temas que les correspondan y sobre los que tenga facultades el Comité; secretario general, quien elaborará las convocatorias para la Asamblea Municipal, elaborará las actas de las asambleas, y conducirá a MORENA en ausencia del presidente; secretario de organización, quien se encargará de registrar a las y los Protagonistas del cambio verdadero en el municipio, e informará al Comité Ejecutivo Estatal; secretario de finanzas, quien se encargará de procurar recursos y rendir cuentas sobre su uso a la Asamblea Municipal y al Comité Ejecutivo Estatal; secretario de formación y capacitación política, quien deberá llevar a cabo actividades de preparación política y electoral. El comité durará en su encargo tres años. Sesionará de manera ordinaria al menos una vez cada quince días y extraordinaria cuando se considere necesario o a petición de la tercera parte de sus integrantes. Sus integrantes podrán ser sustituidos, en caso de renuncia, revocación, inhabilitación o fallecimiento, en una Asamblea Municipal ordinaria, con el voto de la mitad más uno de los asistentes de acuerdo con las normas establecidas en los Artículos 7°, 8°, 9°, 10° y 19° del presente Estatuto.

Artículo 22°. Cada uno de los participantes en el congreso municipal o de Mexicanos en el Exterior podrá votar hasta por 2 integrantes del total de los cargos que correspondan al Comité Municipal. En la votación no se admitirán planillas o grupos, y se elegirá de manera libre, secreta y en urnas. Todos las y los integrantes de los comités municipales o de Mexicanos en el Exterior deberán ser residentes en ese ámbito territorial. El método de elección será el siguiente: quienes aspiren a ocupar un cargo en el Comité Municipal deberán registrarse ante el/la representante acreditado/a de la Comisión Nacional de Elecciones, quien hará del conocimiento

ANEXO UNO

de la asamblea los nombres y cargos que serán sometidos a votación. Cada congresista recibirá una sola papeleta electoral en la que podrá votar hasta por dos nombres indicando los dos cargos correspondientes para los que están postulados. Ocuparán los cargos los Protagonistas que obtengan la mayor votación para cada uno de los mismos.

Artículo 23°. Cada Comité Municipal o de Mexicanos en el Exterior de MORENA será responsable de:

- a. Integrar el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, registrar obligatoriamente a los comités de Protagonistas en su ámbito territorial e informar trimestralmente al Comité Ejecutivo Estatal;
- b. Convocar, cuando menos una vez cada tres meses, a sesión de Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior, presidirla e informar de sus actividades, conforme lo indican los Artículos 18° y 19° del presente Estatuto;
- c. Informar de la renuncia o inhabilitación de alguno/a de los integrantes del comité, y proceder a su sustitución mediante elección, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Artículo 21° del presente Estatuto;
- d. Coordinar las actividades de MORENA en el municipio o en el ámbito en que resida el Comité de Mexicanos en el Exterior y cumplir con las resoluciones de los congresos nacional y estatal en los períodos inter congresos;
- e. Coadyuvar en la difusión de la convocatoria al congreso municipal;
- f. En el caso de los Comités de Mexicanos en el Exterior, la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional determinará el ámbito territorial en que se realizará el congreso en que se elegirá a los representantes del exterior al Congreso Nacional de Morena.

Artículo 24°. A partir de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, cada tres años deberán realizarse Congresos Distritales (correspondientes al ámbito de los distritos electorales federales) preparatorios a la realización de los congresos estatales. Los comités ejecutivos estatales serán responsables de organizar y presidir estos congresos, así como de elaborar y firmar

ANEXO UNO

el acta respectiva. Los comités ejecutivos estatales incorporarán en la convocatoria, fecha, lugar y hora para cada distrito y deberán difundirla, con el auxilio de la estructura distrital y municipal, por medio de invitación domiciliaria, en los estrados de los comités ejecutivos, en la página web del partido y a través de redes sociales, con no menos de treinta días de anticipación. Adicionalmente, se podrá difundir por perifoneo, en medios electrónicos y en algún diario de circulación nacional o estatal. Los congresos distritales de cada entidad federativa se realizarán en el periodo que establezca la convocatoria.

Serán convocados al Congreso Distrital todos los afiliados a MORENA en el distrito correspondiente; y se considerarán delegados efectivos los que asistan al mismo. El Congreso Distrital tendrá quórum con la presencia de la mitad más uno de los representantes de los comités de Protagonistas registrados en ese distrito, cuando se trate de distritos contenidos en un mismo municipio. En el caso de los distritos que comprendan varios municipios, el quórum se integrará con la presencia de la mitad más uno de los representantes de los municipios existentes en el distrito. En caso de que no existan comités de Protagonistas o representantes de los municipios incluidos en el distrito, el quórum lo hará la mitad más uno de las y los afiliados.

Para efectos de la participación en el Congreso Distrital, el registro de afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará por lo menos 30 días antes de su realización.

Artículo 25°. Los congresos distritales de MORENA deberán:

- a. Informar de las actividades realizadas en los municipios que conforman el distrito durante el período;
- b. Tomar las resoluciones que correspondan, de acuerdo con la convocatoria y los objetivos de los congresos estatal y nacional de MORENA;
- c. Elegir, de acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, al número de delegados que les representarán ante los congresos estatal y nacional, quienes conformarán la Coordinación Distrital respectiva. El número de delegados no podrá ser menor de cinco ni mayor de doce integrantes por distrito electoral federal. Durarán en su encargo tres años.

ANEXO UNO

Las coordinaciones distritales serán electas a propuesta de las y los delegados al Congreso Distrital. El número de coordinadores distritales será definido en la convocatoria que expida el Comité Ejecutivo Nacional. Durarán en su encargo tres años. Sesionarán de manera ordinaria cada tres meses y extraordinaria las veces que sean necesarias, y en las que podrán tratarse todos los temas que les correspondan y en los que tengan facultades, se llevará a cabo siempre a convocatoria del Comité Ejecutivo Estatal. Para sesionar requerirán un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Las coordinaciones distritales tendrán la función de apoyar y fortalecer el trabajo territorial de los comités municipales y estatales de MORENA.

Artículo 26°. Las votaciones que se lleven a cabo durante el Congreso Distrital para elegir las coordinaciones distritales serán universales, secretas y en urnas. Las y los delegados efectivos podrán votar hasta por dos candidatos para integrarlas. No se organizarán planillas o grupos. Los coordinadores electos serán quienes hayan obtenido mayor número de votos y asumirán simultáneamente el cargo de congresistas estatales y nacionales y consejeros estatales.

Artículo 27°. El Congreso Estatal de MORENA quedará instalado, de conformidad con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional con base en lo establecido en el Artículo 34° del presente Estatuto, cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más uno de las y los delegados efectivos.

Artículo 28°. Cada Congreso Estatal será responsable de:

- a. Integrar el documento de resoluciones de los congresos distritales, a ser presentado ante el Congreso Nacional;
- b. Derogado.
- c. Instalar la sesión inaugural del Consejo Estatal.

Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más uno de los/las

ANEXO UNO

consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos de los presentes. El Consejo Estatal será responsable de:

- a. Coordinar a MORENA en el estado;
- b. Elaborar, discutir y aprobar el plan de acción de MORENA en el estado;
- c. Elegir a los cinco integrantes de la Comisión Estatal de Ética Partidaria.
- d. Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, como lo establecen los Artículos 31º y 32º del presente estatuto;
- e. Determinar, con la aprobación de dos terceras partes del Consejo Estatal, la revocación de mandato de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, o de éste en su conjunto, previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva por todos los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Dicha causa sólo procederá en casos graves, como la violación de preceptos señalados en el Artículo 3º del presente Estatuto, en sus párrafos f, g, h é i;
- f. Sustituir a las y los coordinadores distritales que hayan sido destituidos o inhabilitados definitivamente, renunciado al partido o a la propia Coordinación Distrital o fallecido. Dicha sustitución se realizará con base en la prelación de votación para coordinadores distritales consignada en el acta del Congreso Distrital correspondiente. La Presidencia del Consejo Estatal comunicará esta determinación a quien deba asumir su lugar en ese órgano y en la Coordinación Distrital, e informará lo conducente a la Presidencia del Consejo Nacional;
- g. Representar al estado en el Congreso Nacional de MORENA;
- h. Presentar las resoluciones adoptadas por el Congreso Estatal ante el Congreso Nacional;
- i. Cumplir con las resoluciones del Congreso Nacional;
- j. Conocer las opiniones y recomendaciones que, sobre conflictos entre órganos de dirección de MORENA, quejas con relación a una integración ilegal o facciosa de órganos de dirección, o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas

ANEXO UNO

en procesos electorales municipales o distritales, haya emitido la Comisión Estatal de Ética Partidaria

k. Presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral del partido en cada uno de los procesos electorales en que MORENA participe en los ámbitos estatal y municipal.

Artículo 30°. Las comisiones estatales de Ética Partidaria se integrarán por cinco miembros de reconocida probidad y autoridad moral, que se elegirán por consenso en los consejos estatales. Tendrán como función emitir recomendaciones y opiniones sobre los conflictos entre Protagonistas, basándose en los principios contenidos en la declaración de principios y el estatuto de MORENA. Dichas comisiones se coordinarán con la Secretaría Nacional para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, Espirituales y Cívicos. Durarán en su encargo tres años. En caso de fallecimiento, renuncia o destitución de uno o más de los miembros de la comisión, el Consejo Estatal elegirá a quienes les sustituyan por consenso.

Artículo 31°. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal, las y los representantes de la Comisión Nacional de Elecciones recibirán las propuestas y perfiles de quienes aspiren a ocupar los cargos de presidente del Consejo Estatal y de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal; valorará que correspondan a lo establecido en los Artículos 7°, 8°, 9° y 10° del presente Estatuto, así como en términos de género, edad y experiencia según sea el caso y los someterá al Consejo Estatal para su elección. Primero se elegirá a el/la presidente/a del Consejo Estatal, quien será el/la que obtenga más votos de entre quienes sean propuestos para esa responsabilidad. En la siguiente votación se definirán los y las integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, para la cual cada consejero recibirá una sola papeleta electoral en la que podrá votar hasta por dos nombres indicando los dos cargos correspondientes para los que están postulados. Ocuparán los cargos los consejeros que obtengan la mayor votación para cada uno de los mismos. En caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, tocará al representante acreditado de la Comisión Nacional de Elecciones, hacer las consultas correspondientes entre los consejeros que reúnan las características y condiciones necesarias para ocupar los cargos vacantes, y someterá las propuestas para su votación al Consejo Estatal. Las votaciones se realizarán de manera secreta, universal y en urnas. No se admitirán planillas o grupos.

ANEXO UNO

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. Será responsable de determinar fecha, hora y lugar en las convocatorias para la realización de congresos distritales y municipales, emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.

Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, **garantizando la paridad de género**, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:

- a. Presidente/a, quien **conducirá políticamente** a MORENA en el estado;
- b. Secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá al/la Presidente en su ausencia;
- c. Secretario/a de Finanzas, quien se encargará de procurar, recibir y administrar las aportaciones de las y los Protagonistas del cambio verdadero y de las y los ciudadanos para garantizar el funcionamiento de nuestro partido en el estado; informará de su cabal administración ante el Consejo Estatal, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y, en su caso, ante la autoridad electoral competente;
- d. Secretario/a de organización, quien deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con los Comités Municipales, y hacerse cargo de coordinar las tareas de afiliación y la realización de asambleas municipales;
- e. Secretario/a de comunicación, difusión y propaganda, quien será responsable de emitir los comunicados, boletines y documentos del Comité Ejecutivo Estatal e informará de ellos a la secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
- f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será el vínculo con las organizaciones magisteriales en el estado y defenderá en todos los ámbitos de su actuación el derecho a la educación; coordinará la organización de la

ANEXO UNO

participación de integrantes de MORENA en los cursos nacionales de formación política y las iniciativas de formación política en el estado.

En los casos en que así lo determine la convocatoria correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional, en función al número de consejeros y consejeras estatales, podrán agregarse:

g. Secretario/a de Jóvenes, quien se encargará de coordinar la actividad de las y los jóvenes en los comités de Protagonistas de MORENA en los municipios; y convertirse en vínculo de las organizaciones juveniles con MORENA a nivel nacional;

h. Secretario/a de Mujeres, quien será responsable de coordinar las actividades de las mujeres en los comités de Protagonistas de MORENA en el estado, y promover su vínculo con MORENA a nivel nacional;

i. Secretario/a de Asuntos Indígenas y Campesinos, quien se encargará de promover la organización de los indígenas y campesinos de MORENA en el estado, y constituir el vínculo con las organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional;

j. Secretario/a de Derechos Humanos y Sociales, quien será responsable de promover actividades para el bienestar de la población y encargado de acciones en defensa de los derechos humanos y sociales de los integrantes de MORENA en el estado;

k. Secretario/a de Arte y Cultura, quien coordinará al sector de artistas y trabajadores de la cultura de MORENA y se constituirá en vínculo fundamental con intelectuales, trabajadores de la cultura, académicos y artistas para promover el interés y la participación en nuestro partido, así como organizar la realización de actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de MORENA en el estado;

l. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero en el estado, así como de difundir la lucha de MORENA.

ANEXO UNO

m. Secretario/a de la Producción y el Trabajo, quién será responsable de establecer el vínculo con las organizaciones de trabajadores sindicalizados, de la economía informal, migrantes, jornaleros y las organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad en la entidad, luchará por el reconocimiento de sus derechos, así como por su incorporación a la actividad política; además, promoverá el fomento de la planta productiva estatal y del mercado interno, el combate a las prácticas monopólicas y la defensa de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

Artículo 33°. El número de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal no podrá ser superior al treinta por ciento de los y las consejeros estatales, lo que deberá ser previsto en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. El Comité Ejecutivo Estatal podrá auxiliarse de un consejo consultivo integrado por personas de probada honestidad y reputación reconocida en la cultura, las artes, la ciencia y la vida pública. La función de las y los integrantes de este consejo consultivo será apoyar con información y análisis el desempeño de las funciones del comité, así como colaborar en la difusión de los objetivos y plan de acción de MORENA en el estado.

Artículo 34°. La autoridad superior de nuestro partido será el Congreso Nacional. Se reunirá de manera ordinaria cada tres años, al concluir los procesos electorales federales, y de manera extraordinaria, cuando lo soliciten por escrito la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los consejos estatales. Las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional sólo podrán abordar los temas para los cuales sean convocadas, serán presididas por el presidente del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional y tendrán que ser convocadas al menos con una semana de anticipación.

El Comité Ejecutivo Nacional será responsable de emitir la convocatoria al Congreso Nacional ordinario con tres meses de anticipación. Esta contendrá los períodos en que deberán realizarse los congresos distritales y estatales, así como el número de los/las delegados/as a ser electos/as en cada uno de los primeros. La convocatoria incluirá también el número de representantes que serán electos por los Comités de Mexicanos en el Exterior al Congreso Nacional, y la fecha, hora y lugar en que tendrá verificativo éste último. Los documentos que servirán de base a la discusión en los Congresos Distritales, Estatales y Nacional deberán hacerse públicos con cuando menos dos meses de anticipación y se distribuirán a todas y todos los

ANEXO UNO

Protagonistas del cambio verdadero en los congresos municipales y distritales, así como por medios electrónicos e impresos.

El Congreso Nacional se instalará con la mitad más uno de los delegados y delegadas al Congreso y elegirá por mayoría a su mesa directiva. Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de MORENA, **con la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente**. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por la transformación del país que asuma nuestro partido.

Artículo 35°. Las y los delegados efectivos al Congreso Nacional serán las y los integrantes de los consejos estatales, la representación de los Comités de Mexicanos en el Exterior, el Comité Ejecutivo Nacional saliente que será responsable de emitir la convocatoria y de organizar el Congreso. El Congreso no podrá contar con menos de mil quinientos ni más de tres mil seiscientos delegados efectivos. La Comisión Nacional de Elecciones será responsable de organizar todas las elecciones y votaciones que tengan lugar durante el Congreso.

Artículo 36°. Una vez aprobado por mayoría el Reglamento del Congreso Nacional y votada a mano alzada la mesa directiva, las y los delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 integrantes del Consejo Nacional, para completar un total de 300 Consejeros y Consejeras Nacionales. Serán Consejeros y Consejeras no sujetos a votación en el Congreso las y los 96 Presidentes, Secretarios Generales y de Organización de los estados y **de la Ciudad de México**; así como hasta 4 representantes de los Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por dichos comités en la forma que señale la convocatoria. Cada delegada o delegado podrá votar hasta por diez de las y los consejeros elegibles, tomando en cuenta los Artículos 7°, 8°, 9°, 10° y 11° del presente Estatuto. No se admitirán planillas o grupos, y la votación será universal, secreta y en urnas. Será Presidente o Presidenta del Consejo Nacional quien obtenga la mayoría en la votación para consejeros y consejeras nacionales.

Artículo 37°. Terminada la votación para integrar el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones recibirá las propuestas y perfiles de las y los consejeros nacionales que aspiren a ocupar cargos de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; valorará que correspondan a lo establecido en los Artículos 7°, 8°, 9°, 10°

ANEXO UNO

y 11° del presente Estatuto, así como en términos de género, edad y experiencia, a lo que se requiera en cada caso, y los someterá al Congreso Nacional para su votación. En caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, tocará a la propia Comisión Nacional de Elecciones hacer las consultas correspondientes entre los consejeros que reúnan las características y condiciones necesarias para ocupar los cargos vacantes. Las y los congresistas nacionales votarán uno por uno los cargos del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a Congresos Municipales **de conformidad con el artículo 14 inciso d)**; así como las convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional.

Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas que les sean exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de los y las consejeros y consejeras nacionales; **y urgente cuando así se convoque por la Presidencia o la Secretaría General.** Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los presentes.

Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal.

Designará representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad que podrá delegar a la representación ante el Consejo General del INE.

Establecerá los lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de MORENA, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios de MORENA.

ANEXO UNO

Estará conformado, **garantizando la paridad de género**, por veintiún personas cuyos cargos y funciones serán los siguientes:

- a. Presidente/a, deberá conducir políticamente al partido y será su representante legal en el país, responsabilidad que podrá delegar en la Secretaria General en sus ausencias; coordinará la elaboración de la convocatoria a los Congresos Distritales, Estatales y Nacional;
- b. Secretario/a General, quien se encargará de convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y del seguimiento de los acuerdos; representará política y legalmente a MORENA en ausencia de la o el presidenta/e;
- c. Secretario/a de Organización, quien deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales; será responsable del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y elaborará, para su aprobación y publicación por el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización de los Congresos Municipales **y coordinará la acción electoral del partido en todos sus niveles**;
- d. Secretario/a de Finanzas, quien deberá procurar y administrar los recursos financieros aportados por ciudadanas y ciudadanos y Protagonistas del cambio verdadero; además será responsable de la administración del patrimonio de MORENA y de la presentación de los informes de ingresos y egresos, de precampaña y campaña a que se refiere la legislación electoral. Éste será el órgano responsable que establece el artículo 43, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.
- e. Secretario/a de Comunicación, difusión y propaganda, quien será responsable de la edición impresa de Regeneración, de la página electrónica, las ediciones, boletines de prensa y comunicados que emita el Comité Ejecutivo Nacional;
- f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será responsable de realizar actividades relacionadas con la defensa del derecho a la educación, será el vínculo de MORENA con las organizaciones magisteriales y **coadyuvará con las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA**;

ANEXO UNO

g. Secretario/a de Jóvenes, quien promoverá la vinculación de los jóvenes de MORENA con organizaciones que compartan sus valores, experiencias, aspiraciones e inquietudes en el país; se encargará también de la realización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las y los jóvenes y para promover su organización y participación política;

h. Secretaria de Mujeres, quien será responsable de promover el conocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres entre las afiliadas a MORENA; tendrá a su cargo la vinculación con organizaciones afines en el país, así como la promoción y organización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las mujeres y para promover su participación política;

i. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero en el país, así como de difundir en las organizaciones del movimiento LGBT, la lucha de MORENA;

j. Secretario/a de Indígenas y Campesinos, quien será responsable de promover la organización de los indígenas en MORENA; su vinculación con las organizaciones y pueblos indígenas y de campesinos del país; así como de participar en foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de los pueblos originarios, su organización y participación política;

k. Secretario/a del Trabajo, quien será responsable de establecer el vínculo con las organizaciones de trabajadores sindicalizados, de la economía informal, migrantes, jornaleros y las organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad; luchará por el reconocimiento de sus derechos, así como por su incorporación a la actividad política;

l. Secretario/a de la Producción, quien promoverá el fomento de la planta productiva nacional y del mercado interno; el combate a las prácticas monopólicas y la defensa de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes;

m. Secretario/a de Defensa de los Derechos Humanos, quien se encargará de vincularse con los organismos de derechos humanos en el país y promoverá el reconocimiento y la defensa de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos;

ANEXO UNO

n. Secretario/a de Estudios y Proyecto de Nación, quien se encargará de coordinar las actividades de estudio y análisis de la realidad nacional y mantener actualizado el nuevo proyecto de nación, así como realizar las actividades que promuevan el debate nacional para la transformación del país;

o. Secretario/a para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, Espirituales y Cívicos, quien se encargará de promover el conocimiento y difundir en la sociedad los fundamentos de una nueva concepción de las relaciones que deben privar entre los seres humanos y alimentar su actividad pública;

p. Secretario/a de Arte y Cultura, quien promoverá el conocimiento y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país; fomentará el acercamiento de académicos, artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura con MORENA; coordinará la realización de actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de MORENA en todo el país;

q. Secretario/a de Defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional, quien será responsable de organizar las actividades de estudio y defensa de los recursos naturales y estratégicos del país, en particular, el petróleo y la energía eléctrica; coordinará las actividades de MORENA para evitar que estos recursos se entreguen en manos privadas nacionales o extranjeras, y promoverá la sustentabilidad;

r. Secretario/a de Bienestar, quien coordinará las acciones de MORENA en defensa de los derechos sociales, la vivienda, la salud, la alimentación y la seguridad social; coadyuvará en el conocimiento y crítica de programas sociales condicionados o sujetos a coacción; buscará apoyar a los integrantes de MORENA para enfrentar situaciones de desastre, carencias o riesgos graves a su integridad;

s. Secretario/a de Combate a la Corrupción, quien será responsable de dar seguimiento a las denuncias que MORENA y la sociedad civil hagan de la corrupción de funcionarios públicos y de actividades ilícitas en beneficio de intereses particulares; así como de la defensa de que la justicia se aplique sin reservas o beneficios para los poderosos;

ANEXO UNO

t. Secretario/a de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales, quien se encargará de realizar actividades en promoción y defensa de los derechos de las asociaciones y de su participación económica, social, política y cultural;

u. Secretario/a de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, quien establecerá vínculos con los mexicanos que radiquen en el exterior y organizará las secciones de MORENA en otros países; establecerá los vínculos con las organizaciones progresistas de América Latina y el mundo y los organismos internacionales y estados, para difundir un conocimiento alternativo de nuestro país y sus problemas.

Artículo 39°. El Comité Ejecutivo Nacional se auxiliará de un Consejo Consultivo Nacional, integrado por un mínimo de 50 personas y un máximo de 250, de probada honestidad y reputación reconocida en la cultura, las artes, la ciencia y la vida pública, cuya responsabilidad será elaborar análisis y propuestas para el cumplimiento del plan de acción del Consejo Nacional, contribuir a la difusión de los principios y objetivos de MORENA, y fungir como comisionados electorales en los procesos electorales internos a nivel federal, estatal y local.

Artículo 40°. El Consejo Nacional elegirá a los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Cada consejero/a podrá votar por dos candidatos o candidatas a la comisión. Podrán ser electos como integrantes de la Comisión los miembros del Consejo Nacional y del Consejo Consultivo Nacional. Durarán en su cargo tres años.

Asimismo, determinará, con la aprobación de dos terceras partes del Consejo Nacional, la procedencia de la revocación de mandato de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, o de éste en su conjunto, previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva por todos los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Dicha causa sólo procederá en casos graves, como la violación a los fundamentos señalados en el Artículo 3° del presente Estatuto, en sus incisos f, g, h é i.

Artículo 41°. El Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales. Sesionará de manera ordinaria cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias, con el quórum de la mitad más uno

ANEXO UNO

de sus integrantes. Será convocado por su Presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera parte de los consejeros nacionales.

Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes:

- a. Evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas de plan de acción para el período siguiente;
- b. Elegir y, en su caso, decidir la revocación de mandato o aprobar la sustitución de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o de éste en su conjunto, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 40° del presente Estatuto;
- c. Sustituir a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ausentes por renuncia, fallecimiento, inhabilitación o revocación de mandato, con la aprobación mayoritaria de los y las integrantes del Consejo Nacional;
- d. Sustituir a los consejeros nacionales por renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 29° en su inciso f;
- e. Conocer las resoluciones que, sobre conflictos entre órganos de dirección de MORENA, quejas en relación a una integración ilegal o facciosa de órganos de dirección; o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas en procesos electorales municipales, estatales o nacionales haya emitido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia;
- f. Elaborar, discutir y aprobar los reglamentos del partido;
- g. Presentar, discutir y aprobar la Plataforma Electoral del partido en cada uno de los procesos electorales federales en que MORENA participe;
- h. Proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal;

ANEXO UNO

i. Delegar facultades al Comité Ejecutivo Nacional, para el correcto funcionamiento del partido, excepto aquellas exclusivas al propio Consejo Nacional.

j. Las demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de MORENA.

Artículo 41° Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución señalados en el Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán bajo las siguientes reglas, salvo las particulares que rigen el funcionamiento de cada órgano:

a. Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la celebración de las sesiones o según lo marque este Estatuto.

b. En la emisión de las convocatorias deberá precisarse mínimamente lo siguiente:

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el Estatuto;

2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión;

3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;

4. Orden del día; y

5. Firmas de los integrantes del órgano convocante.

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página electrónica de MORENA, los estrados del órgano convocante, los estrados de los comités ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso Regeneración y/o redes sociales.

d. Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la orden del día para su discusión en cada sesión, se entregarán de forma anexa con la convocatoria a los integrantes del órgano correspondiente de manera impresa y/o a través de los correos electrónicos que para el efecto faciliten los convocados.

e. Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias.

ANEXO UNO

1. Ordinarias: sesiones que deben celebrarse periódicamente de acuerdo con lo establecido en el Estatuto.

2. Extraordinarias: sesiones convocadas cuando el órgano facultado para ello lo estime necesario o a solicitud de la tercera parte de sus integrantes, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria.

f. En el desarrollo de las sesiones se aplicarán los criterios siguientes:

1. A las sesiones asistirán los integrantes del órgano respectivo. También podrán asistir personas que no sean miembros del órgano cuando la mayoría simple de sus integrantes así lo acuerde o lo establezca el presente Estatuto;

2. El Presidente de la Mesa Directiva del órgano o el/la Secretario General del comité ejecutivo respectivo, declarará instalada la sesión, previa verificación de la existencia del quórum;

3. Una vez instaladas la sesiones, los acuerdos adoptados serán válidos con el voto de la mitad más uno de los presentes;

4. Los órganos podrán declararse en sesión permanente cuando así lo determinen, conforme al anterior inciso; y

5. En cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y entregada a los integrantes del órgano en la siguiente sesión.

g. Para la renovación o sustitución de alguno de los integrantes de los órganos de dirección en el caso de destitución, inhabilitación definitiva o revocación del mandato, renuncia, o fallecimiento, se estará a lo siguiente:

1. Para ser destituido, inhabilitado definitivamente o revocado el mandato de cualquier miembro de un órgano, este deberá ser escuchado previamente por el órgano correspondiente, antes de la emisión del acto que lo destituya o revoque. En todos los casos se respetará el derecho al debido proceso.

ANEXO UNO

2. En la sustitución de consejeros nacionales y estatales se aplicará el criterio de prelación conforme al listado de la votación obtenida en el Congreso respectivo; en caso de empate se aplicará el criterio de género y/o insaculación. La aplicación del procedimiento de prelación será realizada por los consejos correspondientes con aval de la Comisión Nacional de Elecciones.
3. En la sustitución de integrantes de comités ejecutivos se convocará a la asamblea o consejo que los eligió para hacer una nueva elección del encargo correspondiente con la mitad más uno de los votos de los presentes.
4. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación relacionada con las elecciones internas de dirigentes y candidatos.

CAPÍTULO QUINTO: Participación electoral

Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero en las elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito la transformación democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad en la sociedad mexicana. Quienes participen en los procesos internos y constitucionales de elección de precandidaturas y candidaturas deben orientar su actuación electoral y política por el respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. Los Protagonistas del cambio verdadero no participan en los procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a los mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que demanda el pueblo de México.

En los procesos electorales se cumplirá lo siguiente:

- a. La plataforma electoral para cada elección federal o local en que se participe, deberá aprobarse por el Consejo Nacional y en su caso, por los consejos estatales y estará sustentada en la declaración de principios y programa de acción de MORENA;
- b. Los candidatos estarán obligados a sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña en la que participen.

Artículo 43°. En los procesos electorales:

- a. Se buscará garantizar la equidad de la representación, en términos de género, edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia y de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad cultural, lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al pueblo de México;
- b. No participarán servidores y funcionarios públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación que señala la ley;
- c. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes de MORENA por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a MORENA;
- d. No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo grado por afinidad;
- e. Se cancelará el registro del/la precandidata/precandidato o candidata/candidato que realice conductas que implique compra, presión o coacción de la voluntad de los miembros de MORENA y/o de los ciudadanos; y,
- f. Se observarán todas las normas conducentes del capítulo tercero de este estatuto.

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:

- a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.
- b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades externas.

ANEXO UNO

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares.

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su aprobación final.

e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, con por lo menos 30 días de anticipación.

f. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les corresponda hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por voto universal, directo y secreto. Cada afiliado podrá votar por un hombre y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan más votos participarán, junto con los diez electos en cada uno de los demás distritos -de la circunscripción, en el caso federal, y de la misma entidad, en el caso local, en el proceso de insaculación.

g. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité Ejecutivo Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realizará el proceso de insaculación frente al conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales.

h. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada precandidato que resulte insaculado se ubicará secuencialmente en orden de prelación de la lista correspondiente. El primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de equidad de géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o viceversa.

ANEXO UNO

i. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de extraer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar para realizar un sorteo.

j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones.

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá votar por una persona.

l. Un año antes de la jornada electoral se determinará por el método de insaculación qué distritos serán destinados a candidaturas externas y cuáles serán asignados para afiliados del partido. En ambos casos, a través de encuestas se determinará quienes serán los candidatos. Dichas encuestas se realizarán en el momento que marque la Ley.

m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto.

n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para candidatos externos podrán participar afiliados a MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido podrán participar externos, cuando la propia Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados o que su inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en un distrito asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un distrito destinado para candidato externo.

ANEXO UNO

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de representación uninominal, a través de las respectivas asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio.

p. Las instancias para definir las precandidaturas de MORENA en los diversos procesos electorales son:

1. Asamblea Municipal o Delegacional Electoral

2. Asamblea Distrital Electoral

3. Asamblea Estatal Electoral

4. Asamblea Nacional Electoral

5. Comisión Nacional de Elecciones

q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias correspondientes.

r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las asambleas municipales electorales. **Para los efectos de este Estatuto, se considerará a las alcaldías de la Ciudad de México como equivalentes a los municipios.**

ANEXO UNO

s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter inapelable.

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las candidaturas se considerará como única y definitiva.

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para su aprobación final.

v. La Comisión Nacional de Elecciones designará Comisiones Estatales de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas referentes a los procesos de selección de candidatos en cada entidad.

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus atribuciones respectivas.

Artículo 45°. El Comité Ejecutivo Nacional designará a la Comisión Nacional de Elecciones de entre los miembros del Consejo Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en su encargo tres años. De acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, la Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un número variable de titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo quince integrantes.

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes competencias:

ANEXO UNO

- a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias para la realización de los procesos electorales internos;
- b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto;
- c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;
- d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;
- e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;
- f. Validar y calificar los resultados electorales internos;
- g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, según lo dispone el Artículo 44° de este Estatuto;
- h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo señalado en el presente Estatuto;
- i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las encuestas;
- j. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para su aprobación final;
- k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección de candidatos de MORENA en las entidades federativas;
- l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14° Bis del Estatuto de MORENA.

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación relacionada con los procesos electorales internos de los órganos estatutarios y de los candidatos a cargos de elección popular.

CAPÍTULO SEXTO: De la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 48°. Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento respectivo considerará los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos de MORENA, como el diálogo, arbitraje y la conciliación, como vía preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita.

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

- a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA;
- b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de MORENA;
- c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes.
- d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

ANEXO UNO

- e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del cambio verdadero;
- f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de oficio que se instauren en contra de los dirigentes nacionales de MORENA;
- g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia;
- h. Elaborar un registro de todos aquellos afiliados o afiliadas a MORENA que hayan sido sancionados;
- i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que sean necesarias para cumplir con sus facultades;
- j. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de las normas de MORENA;
- k. Informar semestral y públicamente a través de su Presidente los resultados de su gestión;
- l. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de los Comisionados;
- m. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus sesiones;
- n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que se le planteen en los términos de este Estatuto;
- o. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión plenaria, así como sus resoluciones mediante los medios implementados para tal efecto;
- p. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar la presidencia de la comisión, cargo que ocupará por el período de un año, con la posibilidad de reelección por una sola vez;

ANEXO UNO

q. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar la secretaría de la comisión, cargo que ocupará por el período de un año, con la posibilidad de reelección por una sola vez.

Para el ejercicio de sus atribuciones contará con apoyo técnico y jurídico.

Artículo 49° Bis. A fin de resolver las controversias entre miembros de MORENA y/o entre sus órganos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contará con medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en aquellos casos que no estén relacionados con violaciones a principios y/o faltas graves al Estatuto; serán de sujeción voluntaria, y se atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las normas legales.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación de promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio

Artículo 50°. Serán públicas las sesiones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en las que se desahoguen pruebas y formulen alegatos.

Artículo 51°. Son requisitos para ser integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los siguientes:

- a. No haber sido sancionado por las instancias competentes de MORENA;
- b. Ser de reconocida probidad y honorabilidad y
- c. No pertenecer a algún órgano de ejecución y dirección

Artículo 52°. Durante el tiempo en que se encuentren en funciones, los titulares de la comisión no podrán desempeñar ningún otro cargo dentro de MORENA, ni podrán ser candidatos a ningún cargo dentro de los órganos de dirección de MORENA, ni candidatos de elección popular durante su encargo, a menos que se separen del mismo con la anticipación que señale la ley.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de la Comisión Nacional de Elecciones, tienen el deber de excusarse, ante el Pleno de la Comisión

ANEXO UNO

a la que pertenezcan, del conocimiento de los asuntos en que tengan interés directo o indirecto, de acuerdo con los supuestos establecidos en sus respectivos reglamentos.

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:

- a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista o público;
- b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA y sus reglamentos;
- c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los órganos de MORENA;
- d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades partidarias;
- e. Dañar el patrimonio de MORENA;
- f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de MORENA;
- g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro partido;
- h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA durante los procesos electorales internos; y
- i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.

Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para

ANEXO UNO

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas.

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de pruebas y alegatos.

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno de la Comisión establecidas en el reglamento respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y los comisionados que disientan podrán formular votos particulares.

En los procedimientos para resolver los conflictos competenciales, el órgano interesado en plantear el conflicto competencial enviará una promoción a la Comisión Nacional con su planteamiento correspondiente. La Comisión dará vista a los órganos que tengan interés opuesto para que éstos en un plazo de cinco días hábiles expresen lo que a su derecho convenga. La Comisión resolverá en un plazo de quince días hábiles.

Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA puede plantear consultas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la interpretación de las normas de los documentos básicos. La Comisión Nacional tendrá un plazo de diez días para resolver la consulta.

La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares, y suspensión de derechos por violaciones a lo establecido en este estatuto, conforme al debido proceso. El desarrollo de dicha facultad se establecerá en el Reglamento de Honestidad y Justicia que a efecto se emita en aplicación de esta norma.

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente acreditados.

Artículo 57°. Derogado

Artículo 58°. En ningún plazo o término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones de la Comisión Nacional. Dichos términos se computarán contando los días hábiles, entendiendo como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen la Ley Federal del Trabajo. Durante los procesos electorales internos, todos los días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá habilitar días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que así lo exija.

Artículo 59°. Las notificaciones que se lleven a cabo de acuerdo a los procedimientos surtirán efectos el mismo día en que se practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente. Durante los procesos electorales, se podrán notificar actos o resoluciones en cualquier día y hora.

ANEXO UNO

En el Reglamento de Honestidad y Justicia se establecerán los plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones, y se determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera personal.

Para realizar las notificaciones que correspondan, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia de MORENA y habilitar al personal que considere pertinente.

Artículo 60°. Las notificaciones dentro de los procedimientos llevados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se podrán hacer:

- a. Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por instructivo;
- b. En los estrados de la Comisión;
- c. Por correo ordinario o certificado;
- d. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia indubitable de recibido;
- e. Por fax; y
- f. Por mensajería o paquetería, misma que surtirá efectos de notificación personal para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 61°. Se notificará personalmente a las partes los autos, acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se cite a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha para la práctica de alguna diligencia, se formule requerimiento, se decrete el desechamiento o sobreseimiento, las excusas, la resolución definitiva, o los que así determine la Comisión.

Las notificaciones se harán dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, una vez emitido el auto o dictada la resolución. Durante el proceso electoral interno, las notificaciones se realizarán de inmediato, no pudiendo exceder de un plazo de veinticuatro horas.

Artículo 62°. Derogado

Artículo 63°. Para hacer cumplir sus determinaciones, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debidos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá aplicar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las siguientes medidas de apremio:

- a. Apercibimiento; y
- b. Amonestación.

Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser sancionadas con:

- a. Amonestación privada;
- b. Amonestación pública;
- c. Suspensión de derechos partidarios;
- d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA;
- e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de MORENA;
- f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;
- g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido expulsado de MORENA;
- h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o candidato; y
- i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.

ANEXO UNO

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en **la Ciudad de México**. En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.

Artículo 65°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia impondrá sanciones tomando en cuenta la gravedad de la falta. A este efecto serán aplicables la jurisprudencia y las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Reglamento que apruebe el Consejo Nacional.

Artículo 66°. Derogado.

CAPÍTULO SÉPTIMO: De las finanzas de MORENA

Artículo 67°. MORENA se sostendrá fundamentalmente de las aportaciones de sus propios integrantes, quienes, salvo situaciones de desempleo o pobreza extrema, los menores de edad y los residentes en el extranjero, contribuirán con el equivalente a un peso diario, de conformidad con el reglamento respectivo. En el caso de legisladores o representantes populares electos por MORENA, éstos deberán aportar el equivalente **entre el cinco y el diez** por ciento de sus percepciones totales, (salario, aguinaldo bonos, prestaciones) **según se determine, atendiendo los límites establecidos en la normatividad aplicable y por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, el pago podrá ser condonado por éste atendiendo a situaciones excepcionales y plenamente justificadas.**

La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional es el órgano responsable de la administración del patrimonio de MORENA, de sus recursos financieros y la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña a que se refiere la legislación electoral.

Artículo 68°. Los recursos que, en su caso, reciba MORENA como prerrogativas otorgadas al partido de acuerdo con la legislación electoral vigente deberán ser utilizados exclusivamente en apoyo a la realización del programa y plan de acción de MORENA, preferentemente en actividades de organización, concientización y formación política de sus integrantes.

ANEXO UNO

Artículo 69°. Para ser registrado como candidato o candidata externo a puestos de elección popular, la persona que acepte dicha representación de MORENA deberá aportar al partido el equivalente al cincuenta por ciento de sus percepciones totales (salario, aguinaldo, bonos, prestaciones), durante el tiempo que dure su encargo.

Artículo 70°. No se considerará como salario, ni incluirá prestaciones individuales, la aportación económica que reciba cualquier dirigente de MORENA para la realización de sus tareas en nuestro partido. Dicha aportación no podrá exceder en ningún caso de treinta salarios mínimos. Todas las erogaciones que se autoricen por este concepto deberán ser aprobadas por el Consejo Nacional, y de ellas rendirá cuentas la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional deberá cumplir con la presentación de informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña, que señala la legislación electoral vigente.

CAPÍTULO OCTAVO: De la reforma de los documentos básicos.

Artículo 71°. La reforma a los documentos básicos requerirá la aprobación de un Congreso Nacional ordinario o extraordinario. Podrán proponer su reforma los distintos órganos de MORENA, los Protagonistas del cambio verdadero y la autoridad electoral.

CAPÍTULO NOVENO: Del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA

Artículo 72°. Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, ideológica y éticamente a los Protagonistas del Cambio Verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa del voto en términos del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos.

La capacitación y formación del instituto incluirá, de forma transversal, un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos.

ANEXO UNO

Artículo 73°. El Instituto Nacional de Formación Política es un órgano que gozará de autonomía en su funcionamiento y gestión, cuyo objetivo general será informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea. Será dirigido por un Consejo interno y un Presidente que coordinará sus actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan.

Artículo 74°. Para la ejecución de sus funciones contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido que serán administradas por la Comisión creada para tal efecto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las adiciones, derogaciones y reformas al presente Estatuto, entrarán en vigor en términos de lo que establezca la legislación aplicable. Quedan insubsistentes todas las normas que se opongan a la presente reforma. Una vez aprobadas las reformas al Estatuto, se publicará en la página de internet de Morena.si y en los estrados de la Sede Nacional. Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional y a la representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para subsanar las observaciones y precisiones que realice el INE respecto a las modificaciones al presente Estatuto.

SEGUNDO.- Atendiendo a las condiciones extraordinarias y transitorias que hoy vive MORENA; frente a la renovación de órganos estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos diecisiete Congresos Estatales; así como la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; siendo además que en septiembre iniciarán los procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y que es necesario contar con un padrón confiable debidamente credencializado con fotografía; así como la necesaria instrumentación de un proceso de capacitación y formación para quienes

ANEXO UNO

integren los órganos internos y los gobiernos emanados de MORENA, frente a la nueva situación política de un régimen basado en la austeridad republicana y el combate a la corrupción, lucha reconocida en los documentos básicos de MORENA, resulta razonable fortalecer a MORENA como partido movimiento, por lo que es menester prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección y ejecución contemplados en el artículo 14 Bis del Estatuto al 20 de noviembre de 2019.

TERCERO.- En términos de lo establecido en el Capítulo Noveno, se crea el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, que contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido a partir del ejercicio de 2019. El Instituto presentará un programa de trabajo y sus lineamientos al Consejo Nacional de MORENA. Los nombramientos del Presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo y la Comisión que habrá de administrar los recursos, serán propuestos por la Presidencia al Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional.

CUARTO.- Se instruye al Comité Ejecutivo Nacional para proponer al Consejo Nacional los criterios para instrumentar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6º Bis.

QUINTO.- Con base en lo establecido en el transitorio SEGUNDO la credencialización con fotografía estará a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

SEXTO.- Conforme a las consideraciones del transitorio SEGUNDO y en términos del artículo 14 Bis del Estatuto los órganos de conducción, dirección y ejecución, serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. El Congreso Nacional con funciones electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2019. Dichos órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de género, y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos de lo establecido en el


ANEXO UNO


artículo 38 del presente Estatuto. Dicha determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según corresponda.


SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia propondrán e instrumentarán un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al interior de MORENA.


OCTAVO.- El Comité Ejecutivo Nacional emitirá normas, lineamientos y reglamentos que deriven de la presente reforma conforme al siguiente calendario:

PERIODO	ACTIVIDAD
20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019	Proceso de credencialización de los Protagonistas del Cambio verdadero, con el objeto de contar con un padrón confiable y completo para la realización de la elección interna.
20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019	Revisión de la integración y fortalecimiento de Comités de Protagonistas del cambio Verdadero
20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019	Proceso electivo para la renovación de órganos de MORENA.


 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO		CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA	
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
Estatuto de MORENA	Estatuto de MORENA		
Artículos 1° al 6°. No presentan cambios.	Artículos 1° al 6°. No presentan cambios.		
	Artículo 6° Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular.	Art. 40 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Artículos 7° al 9°. No presentan cambios.	Artículos 7° al 9°. No presentan cambios.		
Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional o coordinadores distritales) sólo podrá postularse para otro cargo del mismo nivel después de un período de tres años, y sólo por una ocasión más . No se permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea.	Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional) sólo podrá postularse de manera sucesiva para distinto cargo del mismo nivel hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a integrar un cargo de dirección ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar pasar un período de tres años . No se permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea.	Jurisprudencia 3/2005	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Artículo 11°. Los consejos estatales y nacional admitirán la reelección del 30 por ciento de sus miembros de un período a otro . Las y los consejeros sólo podrán reelegirse de manera sucesiva por una única ocasión. En adelante, para volver a ser consejeros o consejeros deberán dejar pasar un período de tres años.	Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y estatales sólo podrán postularse de manera sucesiva hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser consejeros o consejeros nacionales y estatales, en ese mismo nivel, deberán dejar pasar un período de tres años.	Jurisprudencia 3/2005	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Artículos 12° al 13°. No presentan cambios.	Artículos 12° al 13°. No presentan cambios.		


 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO			
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>Artículo 14°. (...) (...) a. Los comités de Protagonistas integrarán la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior. Las y los Protagonistas que no hayan sido registrados en un Comité de Protagonistas tendrán derecho de asistir a la Asamblea Municipal con voz y voto, si aparecen en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, como lo establecen los Artículos 15° y 18° del presente estatuto. Dichas asambleas serán la autoridad principal de MORENA en el ámbito territorial al que correspondan. Para los efectos de este Estatuto, se considerará a las delegaciones del Distrito Federal como equivalentes a los municipios;</p> <p>(...)</p> <p>d. En el caso de estados con más de cincuenta municipios, o de municipios de más de cien mil habitantes, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal podrá proponer al Consejo Estatal la conformación de regiones o zonas de atención, para facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités de Morena en su ámbito territorial. De ser aprobadas, corresponderá al Comité Ejecutivo Estatal su operación, sin que ello modifique o altere la estructura organizativa de MORENA;</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 14°. (...) (...) a. Los comités de Protagonistas integrarán la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior. Las y los Protagonistas que no hayan sido registrados en un Comité de Protagonistas tendrán derecho de asistir a la Asamblea Municipal con voz y voto, si aparecen en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, como lo establecen los Artículos 15° y 18° del presente estatuto. Dichas asambleas serán la autoridad principal de MORENA en el ámbito territorial al que correspondan. Para los efectos de este Estatuto, se considerará a las alcaldías de la Ciudad de México como equivalentes a los municipios;</p> <p>(...)</p> <p>d. En el caso de estados con más de cincuenta municipios, o de municipios de más de cien mil habitantes, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional podrá determinar la conformación de regiones o zonas de atención, para facilitar la actividad territorial y los vínculos con los comités de Morena en su ámbito territorial. El Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinarán aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales.</p> <p>(...)</p>		<p>Adecuación a la normatividad vigente.</p> <p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>


		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
Artículo 14° Bis. (...)	Artículo 14° Bis. (...)		
Para efectos del presente Estatuto, el Distrito Federal se entenderá como entidad federativa y las delegaciones como municipios.	H. Órgano de Formación y Capacitación 1. Instituto Nacional de Formación Política Para efectos del presente Estatuto, la Ciudad de México se entenderá como entidad federativa y las Alcaldías como municipios.	Art. 40 numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos	En ejercicio de su libertad de autoorganización. Adecuación a la normatividad electoral vigente.
Artículos 15° al 31°. No presentan cambios.	Artículos 15° al 31°. No presentan cambios.		
Artículo 32°. (...)	Artículo 32°. (...)	Jurisprudencia 20/2018	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:	Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, garantizando la paridad de género , cuyos cargos y funciones serán los siguientes:		
a. Presidente/a, quien representara política y legalmente a MORENA en el estado;	a. Presidente/a, quien conducirá políticamente a MORENA en el estado;		
(...)	(...)		
Artículo 33°. No presenta cambios.	Artículo 33°. No presenta cambios.		
Artículo 34°. (...)	Artículo 34°. (...)		
El Congreso Nacional se instalará con la mitad	El Congreso Nacional se instalará con la mitad	Art. 30 numeral 1, inciso c) y 34	En ejercicio de su libertad

 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO			
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
más uno de los delegados y delegadas al Congreso y elegirá por mayoría a su mesa directiva. Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de MORENA. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por la transformación del país que asuma nuestro partido.	más uno de los delegados y delegadas al Congreso y elegirá por mayoría a su mesa directiva. Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de MORENA, con la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por la transformación del país que asuma nuestro partido.	de la Ley General de Partidos Políticos	de autoorganización.
Artículo 35°. No presenta cambios.	Artículo 35°. No presenta cambios.		
Artículo 36°. Una vez aprobado por mayoría el Reglamento del Congreso Nacional y votada a mano alzada la mesa directiva, las y los delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 integrantes del Consejo Nacional, para completar un total de 300 Consejeros y Consejeras Nacionales. Serán Consejeros y Consejeras no sujetos a votación en el Congreso las y los 96 Presidentes, Secretarios Generales y de Organización de los estados y del Distrito Federal ; así como hasta 4 representantes de los Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por dichos comités en la forma que señale la convocatoria. Cada delegada o delegado podrá votar hasta por diez de las y los consejeros elegibles, tomando en cuenta los Artículos 7°, 8°, 9°, 10° y 11° del presente Estatuto. No se admitirán planillas o grupos, y la votación será universal, secreta y en urnas. Será Presidente o Presidenta del Consejo Nacional quien obtenga la mayoría en la votación para consejeros y consejeras nacionales.	Artículo 36°. Una vez aprobado por mayoría el Reglamento del Congreso Nacional y votada a mano alzada la mesa directiva, las y los delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 integrantes del Consejo Nacional, para completar un total de 300 Consejeros y Consejeras Nacionales. Serán Consejeros y Consejeras no sujetos a votación en el Congreso las y los 96 Presidentes, Secretarios Generales y de Organización de los estados y de la Ciudad de México ; así como hasta 4 representantes de los Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por dichos comités en la forma que señale la convocatoria. Cada delegada o delegado podrá votar hasta por diez de las y los consejeros elegibles, tomando en cuenta los Artículos 7°, 8°, 9°, 10° y 11° del presente Estatuto. No se admitirán planillas o grupos, y la votación será universal, secreta y en urnas. Será Presidente o Presidenta del Consejo Nacional quien obtenga la mayoría en la votación para consejeros y consejeras nacionales.		Adecuación normativa vigente.

		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>Artículo 37°. No presenta cambios.</p> <p>Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a Congresos Municipales; así como las convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional.</p> <p>Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los y las consejeros nacionales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los presentes.</p>	<p>Artículo 37°. No presenta cambios.</p> <p>Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a Congresos Municipales de conformidad con el artículo 14 inciso d); así como las convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional.</p> <p>Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas que les sean exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de los y las consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque por la Presidencia o la Secretaría General. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los presentes.</p> <p>Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los</p>	<p>Jurisprudencia 3/2005</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>

 CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal.</p> <p>Designará representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad que podrá delegar a la representación ante el Consejo General del INE.</p> <p>Establecerá los lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de MORENA, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios de MORENA.</p> <p>Estará conformado por veintitún personas, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>c. Secretario/a de Organización, quien deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales; será responsable del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y elaborará, para su aprobación y publicación por el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización de los Congresos Municipales;</p> <p>(...)</p> <p>f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será responsable de realizar actividades relacionadas con la defensa del derecho a la educación; será el vínculo de</p>	<p>órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal.</p> <p>Designará representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad que podrá delegar a la representación ante el Consejo General del INE.</p> <p>Establecerá los lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de MORENA, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios de MORENA.</p> <p>Estará conformado, garantizando la paridad de género, por veintitún personas cuyos cargos y funciones serán los siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>c. Secretario/a de Organización, quien deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales; será responsable del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y elaborará, para su aprobación y publicación por el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización de los Congresos Municipales y coordinará la acción electoral del partido en todos sus niveles;</p> <p>(...)</p> <p>f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será responsable de realizar actividades relacionadas con la defensa del derecho a la educación, será el vínculo de</p>	<p>Jurisprudencia 20/2018</p>	


 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO			
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>MORENA con las organizaciones magisteriales; organizará los cursos nacionales de formación; dirigirá el centro nacional de formación y capacitación política, que es el órgano señalado en el artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos y promoverá la creación de escuelas regionales y estatales de formación en el país.</p> <p>(...)</p>	<p>MORENA con las organizaciones magisteriales y coadyuvará con las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA;</p> <p>(...)</p>		
<p>Artículos 39° al 40°. No presentan cambios.</p> <p>Artículo 41°. (...) Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>i. Las demás que se deriven de la ley, el Estatuto y los reglamentos de MORENA.</p>	<p>Artículos 39° al 40°. No presentan cambios.</p> <p>Artículo 41°. (...) Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>i. Delegar facultades al Comité Ejecutivo Nacional, para el correcto funcionamiento del partido, excepto aquellas exclusivas al propio Consejo Nacional.</p> <p>j. Las demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de MORENA.</p>	<p>Art. 39 de la Ley General de Partidos Políticos</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
<p>Artículo 41° Bis al 43. No presentan cambios.</p> <p>Artículo 44°. (...)</p> <p>5. (...)</p> <p>q. (...)</p>	<p>Artículo 41° Bis al 43. No presentan cambios.</p> <p>Artículo 44°. (...)</p> <p>5. (...)</p> <p>q. (...)</p>		

 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO			
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las asambleas municipales electorales.	r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las asambleas municipales electorales. Para los efectos de este Estatuto, se considerará a las alcaldías de la Ciudad de México como equivalentes a los municipios.		Adecuación a la normativa electoral vigente.
(...)	(...)		
Artículo 45° al 53°. No presentan cambios.	Artículo 45° al 53°. No presentan cambios.		
Artículo 54°. (...)	Artículo 54°. (...)		
	La comisión estará facultada para dictar medidas cautelares, y suspensión de derechos por violaciones a lo establecido en este estatuto, conforme al debido proceso. El desarrollo de dicha facultad se establecerá en el Reglamento de Honestidad y Justicia que a efecto se emita en aplicación de esta norma.	Art. 46 de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Artículos 55° al 63°. No presentan cambios.	Artículos 55° al 63°. No presentan cambios.		
Artículo 64°. (...)	Artículo 64°. (...)		
j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal . En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.	j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México . En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.		Adecuación a la normativa electoral vigente.
Artículo 65° al 66°. No presentan cambios.	Artículo 65° al 66°. No presentan cambios.		

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>Artículo 67°. MORENA se sostendrá fundamentalmente de las aportaciones de sus propios integrantes, quienes, salvo situaciones de desempleo o pobreza extrema, los menores de edad y los residentes en el extranjero, contribuirán con el equivalente a un peso diario, de conformidad con el reglamento respectivo. En el caso de legisladores o representantes populares electos por MORENA, éstos deberán aportar el equivalente al cincuenta por ciento de sus percepciones totales (salario, aguinaldo, bonos, prestaciones).</p> <p>(...)</p> <p>Artículo 68° al 71°. No presentan cambios.</p>	<p>Artículo 67°. MORENA se sostendrá fundamentalmente de las aportaciones de sus propios integrantes, quienes, salvo situaciones de desempleo o pobreza extrema, los menores de edad y los residentes en el extranjero, contribuirán con el equivalente a un peso diario, de conformidad con el reglamento respectivo. En el caso de legisladores o representantes populares electos por MORENA, éstos deberán aportar el equivalente entre el cinco y el diez por ciento de sus percepciones totales, (salario, aguinaldo bonos, prestaciones) según se determine, atendiendo los límites establecidos en la normatividad aplicable y por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, el pago podrá ser condonado por éste atendiendo a situaciones excepcionales y plenamente justificadas.</p> <p>(...)</p> <p>Artículo 68° al 71°. No presentan cambios.</p>	<p>Art. 40 numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p> <p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
	<p>CAPÍTULO NOVENO: Del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA</p> <p>Artículo 72°. Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, ideológica y éticamente a los Protagonistas del Cambio Verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa del voto en términos del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley</p>		

		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p>	
<p>CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA</p>			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
	<p>General de Partidos Políticos.</p> <p>La capacitación y formación del instituto incluirá, de forma transversal, un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos.</p>		
	<p>Artículo 73°. El Instituto Nacional de Formación Política es un órgano que gozará de autonomía en su funcionamiento y gestión, cuyo objetivo general será informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea. Será dirigido por un Consejo interno y un Presidente que coordinará sus actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan.</p>		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
	<p>Artículo 74°. Para la ejecución de sus funciones contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido que serán administradas por la Comisión creada para tal efecto.</p>		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
	<p>ARTÍCULOS TRANSITORIOS</p>		

<div> <div> INE Instituto Nacional Electoral </div> </div> <div> CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA </div> <div> DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO </div>			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
	<p>PRIMERO.- Las adiciones, derogaciones y reformas al presente Estatuto, entrarán en vigor en términos de lo que establezca la legislación aplicable. Quedan insubsistentes todas las normas que se opongan a la presente reforma. Una vez aprobadas las reformas al Estatuto, se publicará en la página de internet de Morena.sí y en los estrados de la Sede Nacional. Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional y a la representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para subsanar las observaciones y precisiones que realice el INE respecto a las modificaciones al presente Estatuto.</p>		
	<p>SEGUNDO.- Atendiendo a las condiciones extraordinarias y transitorias que hoy vive MORENA; frente a la renovación de órganos estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos diecisiete Congresos Estatales; así como la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; siendo además que en septiembre iniciarán los procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y que es necesario contar con un padrón confiable debidamente credencializado con fotografía; así como la necesaria instrumentación de un proceso de capacitación y formación para quienes integren los órganos internos y los gobiernos</p>		

 CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
	<p>emanados de MORENA, frente a la nueva situación política de un régimen basado en la austeridad republicana y el combate a la corrupción, lucha reconocida en los documentos básicos de MORENA, resulta razonable fortalecer a MORENA como partido movimiento, por lo que es menester prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección y ejecución contemplados en el artículo 14 Bis del Estatuto al 20 de noviembre de 2019.</p>		
	<p>TERCERO.- En términos de lo establecido en el Capítulo Noveno, se crea el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, que contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido a partir del ejercicio de 2019. El Instituto presentará un programa de trabajo y sus lineamientos al Consejo Nacional de MORENA. Los nombramientos del Presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo y la Comisión que habrá de administrar los recursos, serán propuestos por la Presidencia al Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional.</p>		
	<p>CUARTO.- Se instruye al Comité Ejecutivo Nacional para proponer al Consejo Nacional los criterios para instrumentar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6° Bis.</p>		
	<p>QUINTO.- Con base en lo establecido en el transitorio SEGUNDO la credencialización</p>		

		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
	<p>con fotografía estará a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.</p>		
	<p>SEXTO - Conforme a las consideraciones del transitorio SEGUNDO y en términos del artículo 14 Bis del Estatuto los órganos de conducción, dirección y ejecución, serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. El Congreso Nacional con funciones electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2019. Dichos órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de género, y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos de lo establecido en el artículo 38 del presente Estatuto. Dicha determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según corresponda.</p>		
	<p>SÉPTIMO - El Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia propondrán e instrumentarán un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al interior de MORENA.</p>		

INE

Instituto Nacional Electoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN								
	<p>OCTAVO.- El Comité Ejecutivo Nacional emitirá normas, lineamientos y reglamentos que deriven de la presente reforma conforme al siguiente calendario:</p> <table> <tr> <th>PERIODO</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> <tr> <td>20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019</td> <td>Proceso de credencialización de los Protagonistas del Cambio verdadero, con el objeto de contar con un padrón confiable y completo para la realización de la elección interna.</td> </tr> <tr> <td>20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019</td> <td>Revisión de la integración y fortalecimiento de Comités Protagonistas del cambio Verdadero</td> </tr> <tr> <td>20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019</td> <td>Proceso electivo para la renovación de órganos de MORENA.</td> </tr> </table>	PERIODO	ACTIVIDAD	20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019	Proceso de credencialización de los Protagonistas del Cambio verdadero, con el objeto de contar con un padrón confiable y completo para la realización de la elección interna.	20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019	Revisión de la integración y fortalecimiento de Comités Protagonistas del cambio Verdadero	20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019	Proceso electivo para la renovación de órganos de MORENA.		
PERIODO	ACTIVIDAD										
20 de septiembre de 2018 al 20 de agosto de 2019	Proceso de credencialización de los Protagonistas del Cambio verdadero, con el objeto de contar con un padrón confiable y completo para la realización de la elección interna.										
20 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2019	Revisión de la integración y fortalecimiento de Comités Protagonistas del cambio Verdadero										
20 de agosto de 2019 al 20 de noviembre de 2019	Proceso electivo para la renovación de órganos de MORENA.										

VOTO CONCURRENTE

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL IDENTIFICADA COMO INE/CG1481/2018 SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL “MORENA”.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el suscrito emite el presente voto concurrente, pues no obstante haber votado a favor del sentido de la Resolución en lo general, el suscrito no comparte diversas manifestaciones plasmadas en el considerando 25 y con lo aprobado en los resolutivos SEGUNDO, SEXTO y SÉPTIMO, todos ellos relacionados con la imposición al partido político, por parte de la autoridad electoral, de un contenido (o criterio interpretativo) específico obligatorio a su Estatuto que vulnera su derecho de auto organización concretada en el contenido de las modificaciones aprobadas por su Congreso Nacional, pues con motivo de las órdenes o condiciones impuestas por el Consejo General del INE, en los hechos se tergiversan las modificaciones aprobadas por la autoridad máxima del partido político.

Nuevos requisitos de elegibilidad.

La modificación al Estatuto aprobada por el Congreso Nacional del partido político y presentada para su revisión constitucional y legal al Consejo General adicionó el artículo 6 Bis al Estatuto del partido político, estableciendo una regla en el sentido que para ser candidato a un cargo partidista o de elección popular, se tomará en cuenta la trayectoria, los atributos éticos y políticos, así como la antigüedad en la lucha por causas sociales.

Respecto a esta adición, en la Resolución se hace un extenso análisis sobre su constitucionalidad y legalidad, análisis que abarca de las páginas 34 a 45 de la propia Resolución, en donde también se analizan las argumentaciones de diversos militantes de Morena que impugnaron la legalidad de la nueva norma.

En la Resolución se concluye que es constitucional y legal la adición de este dispositivo al Estatuto, en resumen, porque el Congreso Nacional cuenta con facultades para determinar el contenido del Estatuto y con base en el libertad de configuración normativa puede establecer los requisitos y procedimientos aplicables para la postulación de candidaturas a cargos directivos o de elección popular, en particular porque el artículo

44, párrafo 1, inciso a) fracción II de la Ley General de Partidos Políticos permite que la convocatoria para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular contenga requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; porque no se invaden facultades de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y tal reforma es armónica con la facultad de la Comisión Nacional de Elecciones de valorar la idoneidad del perfil de cada aspirante; porque en términos similares lo ha considerado la Sala Superior en la tesis XXXII/2018 al establecer que es válido que un partido político exija el conocimiento de sus documentos básicos a quien busque ser postulado electoralmente; porque la negativa de registro de la candidatura puede ser impugnada; y porque al aplicarse un test de proporcionalidad a la norma adicionada se llega a la conclusión que tiene un fin legítimo, es necesaria, es idónea y es proporcional.

Con base en todo lo anterior, el Acuerdo concluye que:

De ahí que se estime que la norma en análisis cumple el estándar de regularidad constitucional, así como los principios rectores de legalidad y certeza en materia electoral derivados del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo de la Constitución.

Sin embargo, inmediatamente después de declarar la constitucionalidad y legalidad de la norma adicionada, en el Acuerdo se ordena categóricamente al partido político a que la reglamentación que emita al respecto contenga en forma obligatoria ciertos parámetros, en los términos siguientes:

No obstante, para garantizar a la militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a Morena para que la reglamentación que emita establezca de manera obligatoria:

- *Los mecanismos concretos y el procedimiento de valoración de aspirantes que deben establecerse de manera previa al proceso de selección correspondiente, en el reglamento que emita el órgano competente del partido político.*
- *Los criterios de valoración deberán considerar el principio de igualdad de oportunidades de las y los aspirantes.*




- *La valoración respectiva debe basarse en parámetros objetivos y medibles, a fin de garantizar condiciones de equidad entre las personas aspirantes a una candidatura interna o de elección popular.*
- *Los resultados de tal valoración deben ser públicos y abiertos entre la militancia, tratándose de cargos internos, y ante la ciudadanía, respecto a cargos de elección popular.*

Desde mi punto de vista, esta orden terminante al partido político para que obligatoriamente establezca normas específicas en su régimen reglamentario interno, sin lugar a dudas rebasa la facultad del Consejo General del INE para revisar la constitucionalidad y legalidad de los documentos básicos del partido político, inmiscuyéndose indebidamente en la vida interna del partido político, cuyos órganos internos competentes son los únicos que pueden fijar contenido a su normativa interna. El desarrollo de su normativa interna corresponde por entero al partido político y no a la autoridad electoral.

Por otra parte, dicha parte considerativa de la Resolución provoca incongruencia interna en la misma, pues por un lado se hace un estudio amplio que culmina en que la adición analizada es constitucional y legal y, posteriormente, introduciendo en forma indebida una duda sobre la legalidad de la misma norma, señala que “para garantizar a la militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a Morena para que la reglamentación que emita establezca de manera obligatoria” ciertos criterios normativos que dicta la autoridad electoral. Si ya ha sido declarada la constitucionalidad y legalidad de la norma de mérito, incluso aplicando un test de proporcionalidad constitucional, no se entiende por qué deba imponerse la obligación al partido político de establecer ciertas normas en su legislación interna. En otras palabras, resulta contradictorio que se valide la constitucionalidad de una norma y al mismo tiempo se constriña al partido político a crear obligatoriamente cierto contenido normativo a la reglamentación secundaria de la norma estatutaria.

Comités Ejecutivos Municipales y designación de delegados.

En sus artículos 14 y 38, el Estatuo modificado faculta al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones del partido político a determinar los municipios donde sea necesario establecer Comités Ejecutivos Municipales y al Comité Ejecutivo Nacional a designar delegados para temas o funciones específicas, respectivamente.



En la Resolución también se concluye declarar la constitucional y legalidad de la modificación a estas disposiciones, no obstante de nueva cuenta en forma indebida se impone que tales normas sean aplicadas invariablemente conforme a ciertos criterios, lo que se traduce que quien en realidad da contenido normativo a esos dispositivos internos del partido político es la autoridad electoral.

En cuanto a la facultad para determinar los Municipios donde existen condiciones para elegir Comités Ejecutivos Municipales, en la Resolución se dice (páginas 41 a 51 y resolutive SEXTO):

De tal suerte, la facultad del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones para determinar los municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, no debe entenderse como un mecanismo ordinario o discrecional, o que a la postre haga nugatoria la renovación efectiva de los comités ejecutivos municipales, a través de los procedimientos democráticos establecidos estatutariamente. En consecuencia, la determinación de los municipios, donde haya o no haya, condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que haya lugar, bajo los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los términos ya precisados.

...

Sobre este aspecto, los parámetros poblacionales, de densidad de militancia, así como coyunturales, expresados por Morena para que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinen los municipios en los que se habrá de elegir comités ejecutivos municipales, se estiman acordes con el principio de auto organización, para efectos de definir su estrategia política electoral.

No obstante, el ejercicio de dicha atribución deberá sujetarse, invariablemente, a los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, en los términos expuestos.

...

SÉPTIMO. La atribución del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones para determinar aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales, señalada en el artículo 14°, inciso d., del



Estatuto de MORENA, deberá sujetarse a las mismas medidas e interpretación jurídica del artículo 38º, párrafo tercero del Estatuto, relativo a la designación de delegados a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.

En el mismo sentido, respecto a la facultad de designar delegados, en la Resolución se menciona (páginas 64 y 65):

Acorde con el citado precedente, a juicio de este Consejo General, la facultad de designación de delegados por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contenida en el artículo 38º, párrafo tercero, constituye una medida ajustada al principio de libertad auto organizativa y, por ende, válida; sin embargo, dicha atribución no debe entenderse como un mecanismo ordinario o discrecional para integrar los órganos directivos, o que a la postre haga nugatoria la elección de los Comités Ejecutivos del partido político, o de cualquier otro órgano que deba elegirse a través de los procedimientos democráticos establecidos estatutariamente. Por lo cual, en su caso, dicha norma deberá interpretarse y aplicarse, para todos los efectos legales a que haya lugar, bajo los parámetros siguientes:

- *Excepcionalidad. La designación debe obedecer a circunstancias extraordinarias, coyunturales, o bien, a causas de fuerza mayor, que dada su urgencia sería imposible superar de manera pronta aplicando los procedimientos estatutarios ordinarios.*
- *Razonabilidad. El ejercicio de dicha medida debe estar justificada y razonada, en relación con la excepcionalidad de las circunstancias que la originan.*
- *Temporalidad. Al tratarse de designaciones extraordinarias, por su naturaleza, se entienden limitadas en el tiempo, hasta en tanto los órganos competentes del partido político elijen a los integrantes de los órganos directivos ordinarios que corresponda.*
- *Certeza. Con base en este principio, y atento al precedente jurisdiccional citado, las personas que sean designadas como delegados asumirán las funciones que estatutariamente correspondan al cargo que, en su caso, se encuentre vacante. En este sentido, se interpreta que los delegados designados deben ejercer funciones adscritas estatutariamente, a fin de dotar de certeza su actuación.*

...

SEXTO. *En el nombramiento de delegados/as que realice el Comité Ejecutivo Nacional para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a*



nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal deberán observarse los parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza.

Como es evidente, en la Resolución se condiciona la aplicación de los artículos 14 y 38 del Estatuto del partido político a que se haga observando los criterios de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza que la autoridad electoral crea e impone, sin existir ninguna justificación concreta para ello, ya que la verificación de la constitucionalidad y legalidad de la norma debe efectuarse en forma abstracta y no considerando que el partido político utilizará arbitrariamente esas facultades, es decir, prejuiciando el uso que dará el partido política a tales normas, pues sólo de esa forma se justifica que el Consejo General del INE imponga criterios de aplicación obligatorios para supuestamente evitar una aplicación arbitraria de las normas internas del partido político, lo que por cierto no acontece al revisar la constitucionalidad y legalidad de otros partidos políticos.

Con esta determinación de la mayoría del Consejo General se vulneran los principios de buena fe y de presunción de inocencia del partido político, pues tales criterios de aplicación normativa sólo se justificarían si el partido político hiciera un uso arbitrario de las mismas, es decir para los ojos de la mayoría del Consejo General dado que de antemano conocen que el partido político utilizará tales normas de forma arbitraria, se anticipan a ello y en forma diligentemente previsor y paternal le imponen al partido político tales criterios de aplicación para evitar arbitrariedades que no han acontecido.

Desde luego no puedo estar de acuerdo con imponer obligatoriamente al partido político ciertos criterios para aplicar su propia normativa interna ya que, además de dar un trato inequitativo al partido político que no se da a otros partidos políticos al revisar la constitucionalidad y legalidad de sus documentos básicos, se están dando directivas al partido político que significan sin lugar a dudas intervenir en su vida interna.

Dichos criterios de aplicación son más propios del estudio jurisdiccional de un caso concreto, una vez que se cuenta con un acto concreto de aplicación que pueda vulnerar otras normas fundamentales del partido político (por ejemplo, la renovación efectiva de los comités ejecutivos municipales), pero esos criterios no pueden ser impuestos en forma abstracta y general por parte de la autoridad administrativa electoral.



Instituto Nacional de Formación Política

Otra de las modificaciones sustanciales al Estatuto del partido político se refieren a la creación de su Instituto Nacional de Formación Política, en los términos siguientes:

CAPÍTULO NOVENO: Del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA

Artículo 72°. Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, ideológica y éticamente a los Protagonistas del Cambio Verdadero, a todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo de representación interna o de elección popular, incluida la capacitación en materia de defensa del voto en términos del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos.

La capacitación y formación del instituto incluirá, de forma transversal, un enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 73°. El Instituto Nacional de Formación Política es un órgano que gozará de autonomía en su funcionamiento y gestión, cuyo objetivo general será informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea. Será dirigido por un Consejo interno y un Presidente que coordinará sus actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan.

*Artículo 74°. Para la ejecución de sus funciones contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido **que serán administradas por la Comisión creada para tal efecto.***

Transitorios

*TERCERO.- En términos de lo establecido en el Capítulo Noveno, se crea el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, que contará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales del Partido a partir del ejercicio de 2019. El Instituto presentará un programa de trabajo y sus lineamientos al Consejo Nacional de MORENA. Los nombramientos del Presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo y **la Comisión que habrá de administrar los recursos**, serán propuestos por la Presidencia al Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional.*



De la simple lectura de los artículos adicionados al Estatuto del partido político se observa que el Instituto Nacional de Formación Política funcionará con el cincuenta por ciento de las prerrogativas locales y federales y que la administración de esos recursos corresponde a la "Comisión creada para tal efecto" (artículo 74 del Estatuto modificado), siendo meridianamente clara la intención del partido político que esos recursos sean administrados por esa Comisión, tan es así que en el transitorio TERCERO del Estatuto modificado, al referirse a la integración transitoria de los órganos del Instituto se reitera que dicha Comisión "habrá de administrar los recursos" del Instituto.

No obstante ello, en la parte considerativa correspondiente (página 58) y resolutivo SEGUNDO de la Resolución se señala:

*En conclusión, el Instituto Nacional de Formación Política es un órgano interno de Morena, como se desprende del artículo 14° Bis, inciso H, numeral 1, que no cuenta con personalidad ni patrimonio propios; razón por la cual, **todo lo relativo a la administración de los recursos que le confiera el propio partido, ya sean recursos federales o locales, y la rendición de cuentas, se tendrá que llevar a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en las entidades federativas.***

*Así las cosas, la autonomía en su funcionamiento y gestión del Instituto Nacional de Formación Política, a que se refiere el artículo 73°, **no implica de ninguna manera autonomía financiera.***

En consecuencia, se estima que las normas estatutarias analizadas, que regulan al Instituto Nacional de Formación Política se ajustan al estándar de constitucionalidad y legalidad.

...

SEGUNDO. Se ordena a Morena para que en el siguiente Congreso Nacional que celebre modifique el artículo 73 del Estatuto para que quede expresamente señalado que la autonomía en el funcionamiento y gestión del Instituto de Formación Política no implica autonomía financiera, esto es, no cuenta con personalidad ni patrimonio propios. De ahí que todo lo relacionado con la administración de recursos federales y locales, así como con la rendición de cuentas, deberá ser llevado a cabo a través de los órganos competentes a nivel nacional y en cada entidad federativa.



...

Es claro que lo argumentado y ordenado en la Resolución va en sentido contrario de lo aprobado por el Congreso Nacional del partido político para que la Comisión del Instituto Nacional de Formación Política que se cree para tal efecto, administre los recursos de este instituto, sin que exista justificación para que el Consejo General del INE ordene al partido modifique su Estatuto y establezca una redacción específica que le dicta la propia autoridad administrativa electoral para que la administración de los recursos lo efectúen otras autoridades distintas a las que el Congreso Nacional del partido político determinó.

En tal sentido, si bien no está de más reiterar en la Resolución que las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas del partido político corresponde a los órganos del mismo que señala la ley y la normatividad en la materia que ha emitido o emita el Instituto Nacional Electoral, lo que es inadmisibles es que en la Resolución el Consejo General del INE varíe en forma sustancial la determinación clara del partido político que sea el propio Instituto Nacional de Formación Política el que administre sus recursos a través de una Comisión creada para tal efecto, y la autoridad electoral dirija que sean otros órganos del partido político quienes administren esos recursos, haciendo nugatoria esta parte de las modificaciones al Estatuto del partido.

Sobre el particular, debe llamarse la atención que en ninguna de las respuestas al requerimiento formulado al partido político, se indica que el mismo interprete su norma estatutaria adicionada en el sentido que el Instituto Nacional de Formación Política, a través de su Comisión creada para tal efecto, no administrará los recursos que se le asignen, por lo que resulta absolutamente ilegal que el Consejo General del INE señale categóricamente que dicho Instituto no tiene autonomía financiera, ya que de lo aprobado por el órgano máximo de dirección de Morena en su Estatuto, se desprende precisamente que el Instituto administrara sus recursos, por conducto de una Comisión creada para tal efecto, lo que significa en términos claros que al INTERIOR del partido político, dicho Instituto sí cuenta con autonomía financiera, lo que no se contrapone a que las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas de esos recursos ante el INE se efectúen a través de los órganos partidarios que la ley y la normativa electoral señalan.



Resulta totalmente incongruente que se sostenga en la Resolución que las normas adicionadas al Estatuto referentes al Instituto Nacional de Formación Política "se ajustan al estándar de constitucionalidad y legalidad" y al mismo tiempo se le ordene al partido político modificar la redacción de esas normas a lo que la autoridad administrativa electoral cree es lo apropiado con lo que, siendo lo más grave, modifica la sustancia de las adiciones aprobadas por el órgano competente del partido político.

Razones por las cuales me veo obligado a emitir este voto concurrente para apartarme de tales consideraciones y determinaciones.



JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Y también le pido, en este caso, que realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación._____

Continúe Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución mencionado._____

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, identificado en el orden del día como el punto 11._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1482/2018) Pto. 11_____

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”

A N T E C E D E N T E S

- I. En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, otorgó registro a la asociación Comité Organizador Político Migrante Mexicano como Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, (en lo subsecuente la Agrupación), a través de la Resolución identificada con la clave INE/CG114/2017, publicada el uno de junio de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.
- II. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, aprobó diversas modificaciones al Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación, mediante Resolución identificada con la clave INE/CG587/2017, publicada el tres de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación.
- III. La Agrupación se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeta a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
- IV. El veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Agrupación realizó la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, durante la cual, entre otros puntos, se aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos.
- V. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante DEPPP) escrito a través del cual la Presidenta de la Mesa Ejecutiva

Nacional de la Agrupación comunicó modificaciones a sus Estatutos, aprobadas en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, de veintisiete de octubre de esta anualidad, y presentó la documentación soporte correspondiente al tiempo que solicitó se declare la procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones.

- VI.** En alcance a la documentación presentada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escritos recibidos en la DEPPP los días quince y veinte de noviembre del año en curso, la Presidenta de la Agrupación, remitió diversa documentación relativa a la preparación de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, así como las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación.
- VII.** El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la DEPPP, mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6604/2018, requirió a la Presidenta de la Agrupación diversa documentación complementaria, en un término de cinco días hábiles.
- VIII.** La Presidenta de la Agrupación, mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dio respuesta al mencionado requerimiento y aportó la documentación solicitada.
- IX.** En alcance a la documentación señalada, el siete de diciembre del año en curso se recibió en la DEPPP escrito mediante el cual la Presidenta de la Agrupación remitió versión impresa y electrónica de los Estatutos modificados de la Agrupación.
- X.** La DEPPP integró el expediente con la documentación presentada por la Agrupación que acredita la celebración de la sesión de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho.
- XI.** En su sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de diciembre del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General vigilar que las agrupaciones políticas nacionales cumplan con las obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.
3. Según se indica en el antecedente IV de esta Resolución, la Agrupación, a través de su Segunda Asamblea Nacional Ordinaria efectuada el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, aprobó diversas modificaciones a sus Estatutos.
4. La Agrupación cumplió con lo previsto en el artículo 8, párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo Reglamento), que establece la obligación de las agrupaciones políticas nacionales de comunicar al Instituto la modificación de sus documentos básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente.

Lo anterior es así tomando en consideración que la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Agrupación, en la cual se aprobaron modificaciones a sus Estatutos, se llevó a cabo el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de diez días hábiles, corrió del veintinueve de octubre al doce de noviembre de dicha anualidad, como se muestra a continuación.

Octubre de 2018						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						27
28	29	30	31			

Noviembre de 2018						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12					

En esta tesitura, la Presidenta de la Agrupación informó al Instituto Nacional Electoral la modificación a sus Estatutos el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que la comunicación fue realizada dentro del plazo reglamentario establecido.

5. Los días cinco, quince y veinte de noviembre, así como el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Agrupación remitió la documentación soporte con la que se pretende acreditar que los actos relacionados con la preparación, integración, convocatoria, instalación, sesión y determinaciones de la asamblea nacional ordinaria efectuada el veintisiete de octubre del año en curso, en la cual se aprobaron modificaciones a sus Estatutos, fueron realizados conforme a su normativa estatutaria. La documentación entregada para dicha asamblea se detalla a continuación:

A. Actos para la realización de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho.

a) Originales.

- Convocatoria de veinte de octubre de dos mil dieciocho a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria.
- Acta levantada con motivo de la realización de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria y lista de asistencia.
- Listado de nombres con datos personales de los asistentes a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria.

b) Diversa documentación.

- Impresión de pantalla de la ubicación del domicilio en que se efectuó la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria.
- Impresión de correos electrónicos dirigidos a integrantes de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria a los cuales se adjuntó la convocatoria correspondiente.
- Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas con respecto a los Estatutos vigentes de la Agrupación.
- Impresión del texto de los Estatutos de la Agrupación, con las modificaciones aprobadas en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria.
- Disco compacto que contiene archivos con el cuadro comparativo de las modificaciones a los Estatutos y la versión modificada de Estatutos, de la Agrupación.

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la DEPPP auxilió a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la documentación presentada por la Agrupación, a efecto de verificar que los actos de preparación, integración, instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la sesión de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria se apegue a la normativa estatutaria aplicable.
7. La Asamblea Nacional de la Agrupación cuenta con la atribución de modificar sus Estatutos, conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto, numerales 1 y 2 de su propia norma estatutaria, que a la letra establece:

“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. *Son atribuciones de la Asamblea Nacional:*

- 1. Emitir, reformar y resolver, sobre la aprobación, derogación, reformas y adiciones a los Documentos Básicos.*
- 2. Para cualquier modificación, aprobación, derogación, o adición a los documentos básicos. Se deberán observar los siguientes requisitos.*
 - a) Presentar propuesta por escrito.*
 - b) Especificar por escrito las razones.*

c) Sólo se tomará en cuenta las opiniones recibidas de los miembros activos, así como las aportaciones de los órganos estatales o en reuniones de consulta convocadas para ese efecto.

d) Toda propuesta, anexo, reforma, adición, modificación, que no sea por escrito votada y aceptada por los órganos de dirección correspondiente, quedan invalidadas de formalidad para su conocimiento.

(...).”

8. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la DEPPP de este Instituto, analizó la documentación presentada por la Agrupación. Del estudio realizado se constató que la preparación, integración, instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la sesión de la Asamblea Nacional Ordinaria, de veintisiete de octubre de este año, se realizaron con apego a lo previsto en los artículos: vigésimo primero; vigésimo segundo, párrafo tercero; vigésimo cuarto, numerales 1 y 2, así como trigésimo quinto, numeral 14; de los Estatutos vigentes de la Agrupación, en razón de lo siguiente:

A. Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, efectuada el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho.

- a) La convocatoria a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria fue expedida por la Presidenta de la Mesa Ejecutiva Nacional el veinte de octubre de esta anualidad, con siete días de antelación a su realización; la misma contiene el respectivo orden del día, fecha, hora, lugar de realización y fue comunicada vía correo electrónico a los integrantes de la asamblea, en concordancia con los artículos vigésimo segundo, párrafo tercero y trigésimo quinto, numeral 14 de los Estatutos.
- b) En términos de la convocatoria, la realización de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria se justificó al tener por objeto conocer y, en su caso, aprobar, entre otros asuntos, la modificación a dos artículos de los Estatutos de la Agrupación.
- c) La Segunda Asamblea Nacional Ordinaria se integró por diez de los quince integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional y once de catorce delegados estatales y de la Ciudad de México acreditados a la fecha por la Agrupación ante la DEPPP. Cabe destacar que de acuerdo con

la convocatoria, también son integrantes de la asamblea nacional los nueve delegados electos para asistir a la Primera Asamblea Nacional Extraordinaria; sin embargo, ninguno de ellos asistió a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria.

En consecuencia, acorde con los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo, párrafo tercero de los Estatutos de la Agrupación, y con la propia convocatoria, la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria contó con la asistencia de veintiuno de los treinta y ocho integrantes acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 55.26% en primera convocatoria.

- d) La Segunda Asamblea Nacional Ordinaria fue dirigida por la Presidenta de la Mesa Ejecutiva Nacional.
- e) En términos del acta de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, la propuesta de modificación a los artículos trigésimo tercero, numeral 2 y trigésimo quinto, numeral 1 de los Estatutos de la Agrupación fue expuesta a los asistentes por el Secretario de la Mesa Ejecutiva Nacional y encuentra razón en atender a las reformas a la “Ley bancaria” vigente a fin de incorporar en los mismos las palabras “poder cambiario”. Del acta se corrobora que los asistentes a la asamblea (miembros activos), una vez expuesta la propuesta de modificación, no emitieron opiniones sobre la misma ni los integrantes de los órganos estatales presentes realizaron aportaciones al respecto.

En este sentido, se estima que la propuesta de modificaciones estatutarias sometidas a conocimiento de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria satisface los requisitos establecidos en el artículo vigésimo cuarto, numeral 2 de los Estatutos, así como el estándar esencial de certeza, pues la Agrupación optó por someter la propuesta de modificación estatutaria a la opinión de los miembros activos y a las aportaciones de los integrantes de los órganos estatales presentes durante la Asamblea, sin que se hayan manifestado al respecto, en vez de organizar reuniones de consulta convocadas para ese efecto.

En consecuencia, los miembros activos y dirigentes asistentes a la Asamblea Nacional conocieron el sentido y alcance de las modificaciones y tuvieron la oportunidad de manifestarse sobre las mismas, antes de la votación correspondiente.

Aunado a lo anterior, la propuesta de modificación a los Estatutos se anexó por escrito al acta de la Asamblea Nacional, fue votada y aceptada por los órganos de dirección presentes durante la misma, como se detalla en el inciso siguiente. Por lo cual se concluye que los referidos requisitos fueron acreditados.

- f) Los asistentes a la Asamblea Nacional Ordinaria aprobaron por unanimidad las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación, por lo cual se obtuvo una votación superior al 50% más uno, exigida por la norma estatutaria vigente. Lo cual se apega al artículo vigésimo segundo, párrafo tercero de la norma estatutaria.

- 9. Del estudio de dichas modificaciones, se advierte que sin referirse directamente a los elementos que determinan la democracia al interior de la agrupación se refieren a un aspecto de su funcionamiento interno, que cabe referirlos al ejercicio de su libertad de autoorganización, y que no contravienen las disposiciones legales y constitucionales aplicables: artículos trigésimo tercero, numeral 2 y trigésimo quinto, numeral 1.

Las mismas se refieren a la adición de una facultad de la Mesa Ejecutiva Nacional y del Presidente de la misma, consistente en la atribución del poder cambiario.

Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas resultan procedentes pues se realizaron en ejercicio de la libertad de auto-organización de la agrupación y las mismas no contravienen el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

- 10. De conformidad con lo precisado en el considerando que antecede, este Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”, conforme al

texto aprobado en la sesión de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil dieciocho.

11. El resultado del análisis del cumplimiento señalado en los considerandos anteriores se relaciona como ANEXOS UNO y DOS, denominados: “Estatutos” y “Cuadro Comparativo de la Reforma a los Estatutos”, mismos que en cuarenta y tres y dos fojas útiles, respectivamente, forman parte integral de la presente Resolución.
12. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de diciembre del presente año, aprobó el Anteproyecto de Resolución en cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales somete a la consideración del Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos: 20; 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; y 42, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”, conforme al texto aprobado en la sesión de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, en términos de los considerandos de esta Resolución.

Segundo. Comuníquese la presente Resolución a la Mesa Ejecutiva Nacional de la Agrupación para que a partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.

Tercero. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.



ESTATUTOS

ESTATUTOS

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana tiene como objetivo constituirse como una Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos de su Contenido Ideológico, Plan de Acción, Declaración de Principios, Estatutos y Línea Política, por ende y para efecto de los presentes Estatutos se denominará: “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana” (APNMM).

ARTÍCULO SEGUNDO. Se constituye como Agrupación Política Migrante Mexicana integrada libre y democráticamente por ciudadanos mexicanos que se expresa en la diversidad social, con la presencia predominante y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, así como grupos y organizaciones constituidos por individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja. Contribuiremos y estableceremos condiciones que mejoren la calidad de vida de los migrantes y sus familias en México. Así como individuos que pertenecen a sectores de escasos recursos, pueblos y comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo, o capacidad diferencia. Agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que su Plan de Acción e Ideología se identifique con la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana. Organizará y representará a las organizaciones a través de un método democrático, basado en los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a sus ciudadanos. Que tiene su domicilio en Avenida Eugenia 926 12, Colonia del Valle Centro, 03100 Delegación Benito Juárez, y para el logro de sus objetivos cuenta con una Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones Estatales, así como representación en el extranjero donde se prestarán servicios públicos propios de la Agrupación y en general para el desarrollo de sus actividades y funciones.

La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, promoverá la participación de los mexicanos radicados en el exterior, así como su participación con los tres niveles de gobierno como integrantes de nuestra nación mexicana, ya que son parte fundamental en el desarrollo del país. Cabe destacar su participación política en la

promoción del voto de los mexicanos en el exterior, así como su participación en la vida política de la Nación, en los términos y condiciones que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPÍTULO SEGUNDO

OBJETIVO SOCIAL, EMBLEMA, LEMA DE LA AGRUPACIÓN, ESLOGAN Y CONSIGNA

ARTÍCULO TERCERO. Los objetivos de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana tienen además de lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los siguientes:

1. Fomentar y proponer reformas y enmiendas jurídicas, políticas públicas y los programas necesarios, que con el ejercicio del gobierno se deben aplicar para promover un interés de Nación real, comprometidos con el desarrollo sustentable que dote de una mejor calidad de vida a las familias mexicanas y de esta manera evitar la causa y efecto de una migración creciente y desordenada, principalmente en los lugares de origen. Fortalecer las condiciones de respeto a nuestros connacionales, con relaciones diplomáticas y acuerdos más efectivos, salvaguardando las respectivas soberanías de los países involucrados en la agenda migratoria.
2. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación transversalizada de valores éticos de tolerancia, lealtad, disciplina, compromiso, justicia, respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
3. Brindar la información suficiente para facilitar la gestión, trámites y obtener documentos oficiales con el objeto de mejorar la calidad de vida de la comunidad migrante donde quiera que se encuentren y su familia en México. Así como la promoción de un respaldo pleno del gobierno mexicano en el extranjero ejerciendo los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Formularemos propuestas a las necesidades de México y los mexicanos radicados en el exterior, con respecto a su integración en el mundo, promoviendo su participación en el desarrollo y otros temas críticos que tiene que resolver el Estado y la sociedad.

ANEXO UNO

4. La difusión de nuestra Ideología, Plan de Acción, Principios y Valores.
5. Fortalecer y promover la educación socio-política con programas de capacitación para todos sus afiliados y simpatizantes.
6. Garantizar y vigilar los derechos de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida nacional entre hombres y mujeres.
7. Coordinar, organizar y dirigir toda clase de estudios de investigación política, económica y social, formularemos programas comunitarios, institucionales, ponencias e iniciativas de ley, entre otros.
8. Promover la identidad como forma de respeto a la diversidad cultural y étnica de nuestro país y de la conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia tanto a las personas como a sus comunidades.
9. Practicaremos la igualdad como el trato idéntico que se debe otorgar a las personas sin que medie ningún tipo de limitante por raza, sexo, preferencia o condición social.
10. Ejerceremos la libertad como facultad del ser humano, que nos permita decidir y llevar a cabo determinadas acciones, según la inteligencia y voluntad, para la expresión de las ideas, para ejercer profesión legal, de culto, de asociación y de tránsito.
11. Fomentaremos la participación, en los procesos electorales Federales. De acuerdo al reglamento interno de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.
12. Alcanzar y ejercer democráticamente el poder para poder llevar a la práctica los Documentos Básicos.
13. Desarrollaremos relaciones amplias y constructivas, con partidos políticos y organizaciones nacionales e internacionales.
14. Aquellos que sean complementarios de estos.

ANEXO UNO

ARTÍCULO CUARTO. Para la realización de sus objetivos podrá aceptar el apoyo a su ideario, sus programas de acción, a candidatos o candidatas, de agrupaciones políticas cuyos principios sean compatibles con la APNMM, manteniendo siempre la independencia absoluta y en los términos que marcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales y los propios Estatutos.

La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, podrá hacer acuerdos de participación, con partidos políticos y/o coaliciones, y acuerdos de colaboración con organizaciones y agrupaciones políticas.

ARTÍCULO QUINTO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana se distingue por:

Su nombre.- Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana

Su sede.- El domicilio de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana es en la Ciudad de México. Establecerá Delegaciones Estatales en cualquier parte de la República Mexicana. En el caso del extranjero se someterán a los domicilios convencionales como lo marcan los Estatutos y reglamentos internos de la Agrupación, así como las leyes electorales, quedarán sometidos a la jurisdicción de los tribunales y autoridades, de la Ciudad de México con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios presentes y futuros.

ARTÍCULO SEXTO. Su Emblema. Es un rectángulo en proporción de 10 x 60 cm. estilizado con las siguientes características:

Descripción del color.



ANEXO UNO

1. Las líneas representan los cuatro puntos cardinales que dan referencia para conocer nuestra ubicación y guiarnos en el camino de sur a norte, buscando la luz que nos marca el destino en busca de un futuro mejor.


Al centro un hexágono irregular y dentro de este las siglas de la Agrupación. (APNMM).

En la parte superior amarilla el título: Agrupación Política Nacional y en la parte inferior amarilla: Migrante Mexicana.

2. Los colores. Las líneas en negro, reflejan la migración de nuestros hermanos que parten del sur hacia el norte, basándose en los cuatro puntos cardinales.
3. Blanco. Refleja los fundamentos y principios que forman a la familia es el cimiento de la pureza, la transparencia, el desarrollo integral, es la dignidad que nos identifica como seres humanos.
4. Verde. Es el símbolo de nuestra naturaleza en todo su esplendor, es la germinación de nuestra tierra próspera y fértil en un cambio constante, es el color que da alegría, esperanza al desarrollo y crecimiento, es la parte vital de nuestra vida y que debe ser custodiada por los seres humanos.

ESQUEMA DE COLORES

VERDE


CMY	253-132-247	
CMYK	99-33-95-28	
RGB	0-107-71	
HSB	160-100-42	
PANTONE	#006B47	

5. Rojo. Es el color de la revolución de ideas y propuestas que produce cambios, es el color de la sangre que corre dentro del cuerpo. Lleno de pasión por alcanzar los ideales y lograr las metas, llenos de vitalidad y optimismo, nos impulsa a la determinación y el compromiso que nos motiva con pensamientos de libertad.

ANEXO UNO

ESQUEMA DE COLORES

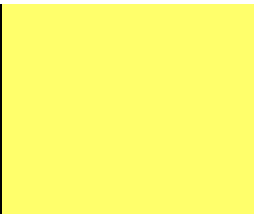
ROJO

CMY	40-255-255	
CMYK	12-100-100-4	
RGB	207-17-37	
HSB	354-92-81	
PANTONE	#CF1125	

6. Amarillo. Refleja el brillo del sol y la omnipresencia y en su esplendor denota el honor, la lealtad, elementos y principios sin los cuales no podríamos sobrevivir.

ESQUEMA DE COLORES

AMARILLO

CMY	10-0-184	
CMYK	4-0-72-0	
RGB	255-255-107	
HSB	60-58-100	
PANTONE	#FFFF6B	

7. El uso del emblema o logotipo, será de uso obligatorio en todos los actos y documentación oficiales de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.
8. El Lema o Eslogan “Por un Derecho Pleno Constitucional de los Mexicanos Radicados en el Exterior y su Familia en México”. Es la frase que debe garantizar los derechos políticos a los ciudadanos mexicanos, donde quiera que se encuentren. Y deberá usarse en los documentos y eventos de la Agrupación.
9. La Consigna. El derecho de cada mexicano es recuperar el rostro en el marco de la igualdad la justicia y la libertad. Esta consigna refleja la realidad de las comunidades migrantes en una sociedad internacional, que parte de su comunidad de origen en busca de un mejor futuro, aun cuando son

discriminados y perseguidos por su calidad de indocumentados, negándose toda garantía para su supervivencia, enfrentando la falta de identidad al no ser aceptados en la sociedad receptora y en algunos casos rechazados por su comunidad de origen una vez que retornan a ella.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El nombre, lema, consigna y logotipo, sólo podrán ser usados por la Agrupación y también obtendrán los derechos de autor de sus productos y publicaciones, todos los símbolos, nombres, marcas y derechos de autor, serán propiedad exclusiva de la Agrupación.

La Mesa Ejecutiva Nacional deberá prescribir las reglas, regularizaciones y norma indicando el procedimiento para emitir el uso o despliegue de todos los nombres, símbolos, marcas o derechos de autor, tiene la autoridad exclusiva para emitir licencias a los que tengan un cargo y estén debidamente registrados.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS INTEGRANTES, SU AFILIACIÓN Y ADHESIÓN

ARTÍCULO OCTAVO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, está conformado por hombres y mujeres mayores de 18 años, que de forma individual, libre, pacífica y voluntaria, se afilian al mismo, debiendo cumplir para ello con los requisitos que señalan los Documentos Básicos y aceptar como válidas las resoluciones de la Agrupación, así como estudiar la historia e ideología de la propia Agrupación. De cumplir con estos requisitos podrá ser considerado miembro activo de la Agrupación.

ARTÍCULO NOVENO. Los ciudadanos que quieran participar en la Agrupación podrán hacerlo como:

1. Los miembros fundadores son los que otorgaron la escritura constitutiva de la Agrupación y se consideran miembros vitalicios.
2. Los miembros activos o afiliados, son todas aquellas personas que cumplen con los requisitos señalados en los acuerdos que hayan firmado el compromiso de aceptación de la normatividad de la (APNMM) haber colaborado por lo menos 3 meses en las actividades y que se comprometan

ANEXO UNO

a contribuir con la realización de los objetivos de la Agrupación. Así como cumplir con las cuotas.

3. Los miembros activos deberán de recibir la notificación por escrito de su estatus como miembro activo por parte de la APNMM.
4. La calidad de miembro activo se refrendará cada 6 años conforme al procedimiento previsto en el reglamento correspondiente.
5. Los miembros adherentes. Son miembros adherentes de la APNMM, todos los ciudadanos que tengan algún cargo en la estructura de la Agrupación.
6. La adherencia a la APNMM, se refrendará cada 4 años en los términos disposiciones y reglamentos.
7. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, reconoce como simpatizantes a los ciudadanos no afiliados que se interesan y participan con sus programas y actividades.
8. Ningún miembro activo que ocupe un cargo en las Delegaciones Estatales, podrán a la vez ocupar un cargo en la estructura Nacional y viceversa.

ARTÍCULO DÉCIMO. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:

1. Solicitar su afiliación como miembros activos de la Agrupación.
2. Participar de los beneficios sociales culturales y recreativos derivados de los programas de la Agrupación.
3. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, tendrá la autoridad exclusiva de brindar a cualquier individuo la membrecía honoraria en reconocimiento de su servicio público a la comunidad. Las solicitudes para tal designación se hará de forma de recomendación directamente a la Mesa Ejecutiva Nacional. Por cualquier entidad afiliada explicando la base para brindar tal designación a los miembros honorarios por esa razón no se les considera miembro activo y no podrán asumir cargos oficiales de la Agrupación, ni en ninguna entidad de afiliados.

ANEXO UNO

4. Los afiliados a la Agrupación cualquiera que sea su nivel o función estructural, que realicen actividades a favor de la APNMM no recibirán remuneración alguna por su actividad. Por consiguiente, no tendrán carácter de empleados, o trabajadores de la APNMM, igualmente aquellos que realicen proselitismo, a favor de la misma no serán considerados, como trabajadores por lo que la labor de los activistas en su momento apoye o realicen será cooperación social.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DE LOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN. La afiliación a la Agrupación se hará por escrito ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante las Delegaciones Estatales correspondientes, o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para este fin.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN. Las personas que deseen afiliarse deberán:

1. La Agrupación mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.
2. Mostrar credencial de elector vigente.
3. Encontrarse en pleno uso de sus derechos políticos e inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.
4. Llenar formato de afiliación.
5. Ser de nacionalidad mexicana.
6. Contar con 18 años de edad.
7. Afiliarse personalmente y por escrito, presentando original de su credencial de elector vigente.
8. Aceptar el Reglamento interno, el Acta Constitutiva, la Declaración de Principios, la Ideología y comprometerse a acatar como válidas las

ANEXO UNO

resoluciones de la Agrupación, si el interesado no puede cumplir este requisito, por causas imputables a la Agrupación, será considerado miembro a partir de 90 días contados desde el momento que firmó su solicitud y demostró haber cumplido con el resto de los requisitos.

9. No haber sido condenado o condenada por delitos graves contra el patrimonio público, mal uso de facultades o de atribuciones, de ilícitos semejantes, actos ilegales de represión y corrupción o delincuencia organizada entre otros así como las condiciones y requisitos que establece la ley.
10. El simpatizante deberá registrarse y cumplir con tres meses de asistencia activo en las reuniones donde podrá opinar, pero no votar, antes de ser aceptado oficialmente.
11. Los afiliados adherentes protestarán por escrito, respetar los Documentos Básicos, así como las resoluciones que emanen de los órganos internos.

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS, OBLIGACIONES, NORMAS INTERNAS, ESTÍMULOS, DE LOS MIEMBROS ACTIVOS Y ADHERENTES

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.

DERECHOS

1. Todos los miembros activos tienen los mismos derechos e igualdad de condiciones.
2. Asistir a las Asambleas Nacionales si así lo indica la convocatoria.
3. Votar u ser votado bajo las reglas de la APNMM.
4. Recibir una identificación que lo acredite como miembro de la Agrupación.

ANEXO UNO

5. Ser representado por la APNMM, en toda clase de gestiones oficiales o privadas en donde se deba intervenir.
6. Debe contar con un expediente dentro de la Agrupación que acredite su militancia y participación.
7. Participar en la formación ideológica y capacitación política y todo lo necesario para el cumplimiento de sus deberes como militantes. Estas actividades deberán ser comunicadas por estrados y a través de sus Órganos Directivos.
8. Recibir toda información técnica o informativa que emita la Agrupación mediante los órganos de información que marca el reglamento.
9. Manifestar libremente su opinión dentro y fuera de la Agrupación, así como presentar propuesta y protesta por escrito, de lo cual deberá recibir respuesta en un tiempo no mayor de diez días hábiles con la resolución que recaiga sobre ello.
10. Con fundamento en la garantía de acceso a la información que prevé el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos y militantes de la Agrupación tienen derecho a la información de este, en los términos, condiciones y requisitos que establece la Ley en la materia.
11. Todo miembro activo que cumpla cabalmente con los requisitos de la APNMM, tiene derecho a ser electo en la integración o renovación de los órganos de la dirigencia de la APNMM.
12. Exigir el cumplimiento de los acuerdos de la APNMM, e impugnar por los medios legales y estatutarios.
13. Tener acceso a expresarse en su propia lengua y a traductores durante la toma de decisiones y eventos de la APNMM.

ANEXO UNO

14. Tener acceso a la jurisdicción interna de la APNMM, y ser defendido por este cuando sea víctima de atropello e injusticia, así como a la defensoría jurídica cuando sus garantías sociales e individuales sean violentadas.
15. En la APNMM, nadie podrá ser excluido o discriminado por motivo de sexo, etnia, religión, estado civil, condición económica, social y cultural de residencia u origen o cualquier otra de carácter diferente.
16. Proponer iniciativas, proyectos, programas y propuestas para mejorar las actividades de la APNMM.
17. Incorporarse a los sectores, movimiento territorial u organizaciones de acuerdo a sus intereses y causas sociales.
18. Los miembros integrados en la organización básica también podrán organizarse en grupos homogéneos por razón de oficio, profesión, actividad, edad u otra similar de acuerdo con los reglamentos internos.
19. Los miembros que residan en el extranjero, podrán organizarse y formar parte de la estructura de la APNMM de conformidad con el reglamento.
20. Participar y votar en las elecciones internas.
21. Los demás que les marquen los Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.

1. Conocer, promover y defender los Documentos Básicos, cumplir con los reglamentos internos y la demás normatividad que al efecto expida la Agrupación.
2. Asumir y cumplir con los principios de doctrina de la APNMM. Ajustando su conducta a los mismos, así como transmitirlos a otros ciudadanos.

ANEXO UNO

3. Acudir a las reuniones de trabajo que involucren a la APNMM y representarlo en actos oficiales, cuando sean designados expresamente para ello.
4. Desarrollar con responsabilidad, compromiso y honradez, el trabajo que la APNMM, le encomiende.
5. Estar registrados ante las autoridades competentes y todos los órganos de dirección ejecutivos.
6. Canalizar a través de la Comisión de Honor y Justicia las inconformidades, denuncias, quejas, contra otros miembros de la APNMM, por escrito.
7. Participar en los procesos electorales constitucionales de carácter Nacional, cuando exista acuerdo de participación con algún partido político y/o coalición, en apoyo a los candidatos presentados por la APNMM.
8. Abstenerse de apoyar a personas, o agrupaciones públicas o privadas contrarias a la APNMM.
9. Ningún miembro puede hacer proselitismo, gestión o cualquier actividad que involucre a la APNMM, sin previa autorización.
10. En caso de recibir beneficios y/o compensaciones para la Agrupación, deben ser canalizados por las vías aprobadas por los órganos facultados de la Agrupación.
11. Apoyar, fomentar y votar en los convenios que beneficien e impulsen a la APNMM.
12. Estar al pendiente de las notificaciones y convocatorias, hechas por cualquier medio electrónico o impreso que realice la APNMM. Se publicarán por estrados en las oficinas o en la página de internet, o correo electrónico.
13. Acudir al Instituto de Capacitación Política para su capacitación ideológica y electoral.

ANEXO UNO

14. Apoyar en los gastos a la APNMM, de acuerdo a sus posibilidades personales. Cuando lo determine la Secretaría de Administración y Finanzas, para atender circunstancias financieras extraordinarias. Estarán exceptuados del cumplimiento los miembros activos residentes fuera del territorio nacional.
15. Estar al corriente de sus cuotas cuando sean designados servidores públicos en los términos establecidos por el estatuto correspondiente.
16. Mantener los principios y valores por los cuales nos constituimos, contribuir a dignificar su imagen.
17. Ratificar por escrito públicamente su afiliación y compromiso con la APNMM, manteniendo sus acciones en beneficio de la comunidad.
18. Los miembros de la APNMM, y todas sus instancias de dirección, rechazarán todo medio de control político, corporativo, clientelar o de cualquier otra naturaleza que impida, coarte o limite la libertad de los integrantes de los movimientos y organizaciones para determinar libre y democráticamente las cuestiones que lo afecten y pugnarán por la cancelación de cualquier control.
19. Los demás que se desprendan de los Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.

PRINCIPIOS

La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana. Se constituye observando principios y normas de conducta al interior del mismo contenidas en la Declaración de Principios, Estatutos, Programa de Acción, Línea Política y las Resoluciones tomadas en la Asamblea Nacional. Los principios y normas ideológicas se sustentan en bases sólidas que son incombinales e inamovibles, ya que son leyes universales que rigen la vida del ser humano. Principios que rigen la esencia de la vida y forman parte esencial de una convivencia pacífica y próspera que además demanda el cumplimiento de nuestros derechos y obligaciones. Por ello la APNMM,

ANEXO UNO

adopta los principios y normas como estandarte de bienestar y progreso que contribuye a generar un ambiente de tranquilidad, armonía y esperanza para nuestra sociedad.

NUESTROS PRINCIPIOS SE BASAN EN:

1. **FRATERNIDAD.** Para la APNMM, es importante integrar tan alto principio universal, dentro de la vida interna del mismo, como un verdadero sentido humano que defina los derechos de cada individuo, ya que es un concepto de unidad entre los seres humanos, en fin es importante remarcar, la palabra fraternidad en nuestros principios.
2. **RESPETO.** Es el reconocimiento de que algo, o alguien tiene valor, se define como otro de sus principios, ya que a su vez son el sustento de la moral y la ética, es importante recalcar que la APNMM, no impone criterios sino es participe del libre albedrío, dándose a sí mismo y a sus afiliados la libertad de expresión siempre dentro del marco del respeto a las leyes e instituciones y ciudadanos de la misma. Para la APNMM, el respeto es el regalo más grande que se puede dar a otros.
3. **HONESTIDAD.-** La honestidad es vital para la estructura de la APNMM, ya que es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse, con coherencia y sinceridad, es decir la verdad. La Agrupación, sólo avalará principios como la honestidad, la verdad y la sinceridad, para el sano fluir y el desarrollo de México y sus instituciones. Es menester enfatizar en tan alto principio y hacerlo parte de la vida política de la Agrupación y cada uno de sus integrantes interesados en trabajar en pro de nuestra patria.
4. **LEALTAD.** Es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe a su Estado o Nación y así mismo, también se puede decir que la lealtad es la capacidad de no engañar, no mentir, no traicionar a los demás, es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir los pactos y compromisos adquiridos de lo cual la Agrupación, también está comprometida, obligada y orgullosa de hacer de este principio otro pilar de nuestros fundamentos. La lealtad es entonces el cumplimiento de la palabra

ANEXO UNO

dada, que cumple fielmente lo prometido, lo hace consiente y voluntariamente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.

NORMAS.

1. Las normas establecidas en los presentes estatutos serán de observancia, obligatoria para todos los miembros sectores y organizaciones, así como la práctica de los Documentos Básicos, Estatutos e Ideología de la Agrupación.
2. Ideología, Declaración de Principios, El Capitulo primero segundo y tercero que forman parte de los Documentos Básicos sólo podrán ser modificados por unanimidad de votos por los órganos facultados.
3. Por unanimidad de votos de los integrantes de la Asamblea Nacional, se podrá reformar o adicionar, el Plan de Acción, siempre y cuando existan propuestas para enriquecer y perfeccionar la vida interna del mismo.
4. Las reformas y adiciones se harán del conocimiento a la autoridad electoral en los términos de Ley.
5. Los demás que sean necesarios.

LOS ESTÍMULOS

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La Agrupación Política Migrante Mexicana pretende retomar la esencia primigenia de los principios de la democracia clásica, siempre enarbolada por los grandes pensadores griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, cuya filosofía transformó la ideología universal del ser humano.

No obstante el tema de la migración, ha estado siempre presente en la historia de la humanidad en todo tiempo y espacio geográfico los movimientos migratorios se han dado por diferentes razones. Ejemplo, persecuciones políticas, por luchas ideológicas, por conflictos religiosos, por razones económicas, por racismo,

ANEXO UNO

discriminación y por factores ambientales, hambrunas, epidemias, desastres naturales, etc. Y también por el problema de la tenencia de la tierra.

Cabe destacar que ha habido episodios históricos en los cuales han sobresalido grandes personajes que han dejado de lado los intereses personales y retomado el ideal de la democracia. Se han convertido en verdaderos defensores de la justicia, luchadores sociales incorruptibles, que han tratado de hacer realidad y de poner en práctica derechos naturales inalienables que todo individuo posee, como la libertad, la fraternidad y la igualdad. En este contexto histórico, debemos mencionar a personajes ilustres que dieron su vida luchando y defendiendo diferentes causas sociales, entre ellos el tema de la migración.

Como Ejemplo Don Benito Juárez García, Libertador y Promotor de las Reformas del Estado Mexicano, forjador de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsó la reforma para la separación del Estado y la Iglesia. Promulgó las Leyes de Reforma, elevando a rango Constitucional los derechos del hombre declarando que todos los mexicanos somos libres desde nuestro nacimiento, nos dejó como legado un país libre de la opresión del clero y el ejército estableciendo la libertad de conciencia y de culto, sobresaliendo en todo tiempo su actitud en defensa de las clases más desprotegidas, logrando la soberanía y democracia de nuestro país entre otras acciones tenemos sus frase celebres,” Entre los Individuos como entre las Naciones el Respeto al Derecho ajeno es la Paz”. “Los Hombres no son nada sino sus principios y acciones”.

Otro Ejemplo que no se puede soslayar es sin duda aquel que acuñó la famosa frase de “Yo tengo un Sueño”. De Martin Luther King, quien en todo momento combatió las políticas racistas gubernamentales que trataban de marginar los derechos políticos de la gente de color, lo cual llevó a estos grupos sociales a escenificar enfrentamientos desiguales que lamentablemente pusieron en evidencia la pobreza espiritual del hombre.

Es digno reconocer la figura sobresaliente de nuestro caudillo Emiliano Zapata Salazar Jefe del movimiento revolucionario del sur, luchó para derrocar los poderes dictatoriales existentes exigiendo la restitución inmediata de las tierras para las clases marginadas, generoso incorruptible e invencible, partidario de los principios no de los hombres. En octubre de 1915 promulgó la Ley Agraria sirviendo de antecedente en el Artículo 27 de la Constitución de 1917. Luchó por mantener sus

ANEXO UNO

ideales, vencer o morir era su lema, sólo así podía proteger a los indefensos. El sueño del caudillo del sur se resume en dos palabras” Tierra y Libertad”. Convirtiéndose así en la leyenda de los pobres.

Estos son algunos antecedentes y referentes históricos de grandes dirigentes mundiales que han dejado una huella indeleble en la lucha por la defensa de los derechos del hombre a nivel nacional. Es justo y necesario mencionar también a un líder Chicano quien en 1957, en su pequeño lugar del sur de los E. U llamada tierra amarilla concentro la atención pública en la figura de Reies López Tijerina quien planteó diferentes demandas territoriales en Nuevo México, con base en las disposiciones del viejo Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en donde México perdió el cincuenta y uno por ciento del territorio.

López Tijerina, se convirtió en un dirigente popular representante de los ideales de los grupos de migrantes. Su prédica teñida de mesianismo y de peculiar nacionalismo, le valieron plantear su tesis sobre la unión de las razas y que con una gran fuerza de convicción lo hicieron ver que se trataba de un hombre excepcionalmente inteligente con una gran habilidad política y un carisma social inusitado.

La lucha por la tierra; emprendida por la organización creada y encabezada, por Reies López Tijerina, es uno de los capítulos históricos entre México y Estados Unidos no sólo por la fractura crítica que implica en las relaciones entre el poder de la seducción de esa lucha y sus ecos conmovieron a los mexicanos.

En atención a los paradigmas expuestos anteriormente se puede resumir que han existido grandes dirigentes en cualquier parte del mundo tratase de hombres y de mujeres, que sin limitación alguna han dado su vida y derramado su sangre en aras de defender a las clases más vulnerables, ya sean campesinos, obreros, indígenas, comerciantes, niños y mujeres, o de cualquier otra persona perseguida por el abuso de autoridad.

Estamos conscientes que todos estos luchadores sociales se han caracterizado por su rectitud, su probidad, por su honestidad, su lealtad, por su calidad humana y por ser promotores de la justicia social. Así pues, consideramos que los estímulos honoríficos, premios que la Agrupación otorgue a sus militantes y/o dirigentes, deberán contar con estos atributos con estos principios éticos y con estos valores

ANEXO UNO

humanitarios. Así mismo, queremos manifestar que sería una falta de respeto si ignoráramos o dejáramos de mencionar a muchos ilustres desconocidos por la historia oficial y que han caído en el anonimato. Por lo tanto, proponemos que el nombre de reconocimiento que se otorgue a cualquier miembro destacado de nuestra Agrupación se llame PREMIO AL MIGRANTE UNIVERSAL.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Los estímulos honoríficos en la Agrupación serán siempre de carácter honorífico.

1. Medalla de la Orden al Mérito “Lic. Benito Juárez García”.
2. Medalla de la Orden a la Constancia “Martin Luther King”.
3. Medalla de la Orden del Esfuerzo “Emiliano Zapata Salazar”.
4. Medalla de la Orden de la Lealtad y Honestidad “Reies López Tijerina”.

CAPÍTULO QUINTO DE LAS ASAMBLEAS, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.

SON ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN

1. La Asamblea Nacional.
2. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México.

SON ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA AGRUPACIÓN

1. La Mesa Ejecutiva Nacional que es la representante Nacional de la Agrupación.
2. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.

ANEXO UNO

Para la toma de decisiones por los afiliados o los dirigentes al interior de la misma se seguirá indistintamente el principio de mayoría para la adopción de acuerdos privilegiando la identidad, el consenso y la unidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Los integrantes de los órganos de dirección nacional, y estatal ocuparán su cargo cuatro años, contados a partir de la fecha en la que inicio formalmente el reconocimiento ante el Instituto Nacional Electoral con derecho a un periodo a reelección similar de tiempo.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.

DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La Asamblea Nacional. Es el máximo órgano de la Agrupación y se integra de la siguiente forma:

1. Los miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional.
2. Los Delegados Estatales y de la Ciudad de México.
3. 30 Delegados electos en las Asambleas Estatales de acuerdo a la convocatoria, para participar en la Asamblea Nacional.

Para los efectos a que se refieren las fracciones anteriores, se deben de atender los principios de representación proporcional y equidad de los miembros de la Agrupación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.

De las Asambleas Ordinaria y Extraordinarias.

La Asamblea Nacional Ordinaria se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando sea necesario. La Asamblea Nacional Extraordinaria sólo conocerá de los temas para los que sea convocada.

ANEXO UNO

La Asamblea Nacional Ordinaria deberá ser convocada por el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional con un mínimo de siete días naturales de anticipación a la fecha de su realización, en tanto que la Asamblea Extraordinaria será convocada por el presidente con un mínimo de 72 horas de anticipación. Para que pueda sesionar se requerirá el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes en primera convocatoria o en segunda convocatoria una hora después con al menos el 33 % de los integrantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y serán de observancia general para todos los miembros de la Agrupación, inclusive para quienes no se encuentren presentes y para los disidentes. La Convocatoria contendrá el respectivo orden del día, fecha, hora, lugar y se publicará en los estrados de las oficinas de la Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones Estatales o en la página de Internet, o por correo electrónico.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Para que la Asamblea Nacional Extraordinaria puede sesionar y tomar acuerdos basados en el principio de legalidad, se requerirá de la asistencia del cincuenta por ciento más uno en primera convocatoria, o en segunda convocatoria una hora después de la hora mencionada con al menos el 33% de los integrantes, las resoluciones se tomaran por mayoría de votos y serán de observancia general para todos los miembros de la APNMM. Inclusive para los que se encuentren presentes, ausentes y disidentes. La convocatoria deberá de incluir el orden del día, fecha, lugar, hora, respectivo y se publicará en las oficinas de la Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, o en la página de internet o se notificará por correo electrónico.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

1. Emitir, reformar y resolver, sobre la aprobación, derogación, reformas y adiciones a los Documentos Básicos.
2. Para cualquier modificación, aprobación, derogación, o adición a los documentos básicos. Se deberán observar los siguientes requisitos.
 - a) Presentar propuesta por escrito.
 - b) Especificar por escrito las razones.

ANEXO UNO

- c) Sólo se tomará en cuenta las opiniones recibidas de los miembros activos, así como las aportaciones de los órganos estatales o en reuniones de consulta convocadas para ese efecto.
 - d) Toda propuesta, anexo, reforma, adición, modificación, que no sea por escrito votada y aceptada por los órganos de dirección correspondiente, quedan invalidadas de formalidad para su conocimiento.
3. Conocer la situación política y electoral que observe la Agrupación y definir las políticas y línea de acción a seguir.
 4. Elegir al Presidente y Secretario General, de la Mesa Ejecutiva Nacional.
 5. Revisar y analizar el informe anual que emita la Mesa Ejecutiva Nacional de las actividades realizadas.
 6. Las decisiones relativas al patrimonio que no sean competencia de otros órganos de la Agrupación.
 7. Las demás relacionadas con asuntos de interés general para la Agrupación que sean sometidas a su consideración, de acuerdo a la convocatoria respectiva y las que por decisión mayoritaria acuerden discutir, mas no aprobar, sin que se haya convocado para ello.
 8. Conocer el Plan Nacional de Imagen y Comunicación de la Agrupación.
 9. Revisar y analizar el informe anual de la Agrupación sobre la situación financiera que guarda.
 10. Integrar las propuestas de nombramientos, programas y presupuesto de ingresos y egresos para su aprobación.
 11. Remitir a la Secretaría General de la Agrupación, un tanto en original de las actas de sesión levantadas por las Asambleas de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
 12. Las demás que les proporcionen los presentes Estatutos.

DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México se integrarán de la siguiente forma:

1. El pleno de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
2. Las Delegaciones Estatales, elegirán en sesión a 20 miembros activos, que asistirán a la Asamblea Estatal, los cuales tendrán derecho a voz y voto.
3. Para los efectos a que se refieren las fracciones anteriores se debe de atender el principio de representación proporcional y equidad de miembros activos de la Agrupación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. La Asamblea Estatal y de la Ciudad de México deberá reunirse por lo menos cada año en sesión ordinaria o cuantas veces sea necesario con carácter de extraordinaria. Las Asambleas Extraordinarias Estatales y de la Ciudad de México sólo conocerán de los temas para los que sean convocados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México deberán convocarse con un mínimo de diez días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su realización. En tanto la de carácter extraordinario con 72 horas de anticipación a petición del Delegado Estatal o en su caso de la Ciudad de México. Para que las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México puedan sesionar y tomar acuerdos basados en el principio de legalidad, se requerirá la asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes en primera convocatoria, en segunda convocatoria una hora después con al menos con el 33% de los convocados, Las resoluciones serán de observancia general para todos los miembros de la Agrupación, en sus respectivas jurisdicciones inclusive para los que no se encuentren presentes y disidentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. La Convocatoria será expedida por el Secretario General Estatal o de la Ciudad de México a petición del Delegado, conforme al acuerdo respectivo. La convocatoria deberá de contener su respectivo orden del día, hora, fecha, lugar, y se publicará en los estrados de las oficinas de las

ANEXO UNO

Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, o en la página de internet o por correo electrónico.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. La Asamblea Estatal y de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Integrar las propuestas de programas y presupuestos (ingresos y egresos) para la aprobación por la Mesa Ejecutiva Nacional.
- b) Conocer o aprobar en su caso, otros asuntos que le sean sometidos de conformidad con la convocatoria respectiva.
- c) Evaluar la situación política, económica y social de la entidad de que se trate, en relación con la Declaración de Principios y el Programa de Acción de la Agrupación.
- d) Conocer y aprobar el informe que deberá rendir la Delegación Estatal y de la Ciudad de México acerca de las actividades realizadas.
- e) Organizar y aprobar las estrategias de acción para la entidad federativa que se trate.
- f) Resolver los asuntos específicos que se señalen en la convocatoria.
- g) Los demás que marquen los presentes Estatutos.
- h) El Delegado y el Secretario de la Delegación Estatal, así como los de la Ciudad de México actuarán con carácter homologado al celebrarse la Asamblea Estatal y de la Ciudad de México, los acuerdos se tomarán por mayoría simple y serán de observancia general para todos los miembros de la Delegación Estatal y de la Ciudad de México en su jurisdicción correspondiente.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

MESA EJECUTIVA NACIONAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. La Mesa Ejecutiva Nacional es el órgano que tendrá la representación, dirección y administración general de la Agrupación y vigilará el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. La Mesa Ejecutiva Nacional está integrada por:

1. El Presidente
2. Secretario General
3. Secretaría de Administración y Finanzas
4. Secretaría de Acción Electoral
5. Secretaría de Asuntos Jurídicos
6. Secretaría de Organización
7. Secretaría de Desarrollo Social y Económico
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en las entidades en que se desarrollen estas actividades
9. Secretaría de Gestión Social
10. Secretaría de Atención al Migrante
11. Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios donde haya presencia de estos pueblos o comunidades
12. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables

ANEXO UNO

13. Secretaría de Atención a la Juventud
14. Secretaría de Promoción Política de la Mujer
15. Secretaría de Afiliación

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Mesa Ejecutiva Nacional sesionará de forma ordinaria cada mes, debiendo ser convocada por el Secretario General a petición del Presidente de la misma al menos con 72 horas antes, o de manera extraordinaria con 24 horas de anticipación cuando menos, y sólo para tratar exclusivamente los asuntos que la motivaron. El quórum para que la Mesa Ejecutiva Nacional pueda sesionar tiene que ser del 50 por ciento más uno en primera convocatoria y en segunda con al menos el 33% de los integrantes.

En ambos casos la convocatoria deberá contener: fecha, hora, lugar de la sesión, así como la orden del día y deberá ser publicada en los estrados de las oficinas de la Sede Nacional, o en la página de internet, o se notificará por correo electrónico.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades y Deberes de la Mesa Ejecutiva Nacional:

1. Ejercer por medio de su Presidencia la representación legal, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil de la ciudad de México en materia común y para toda la Republica en materia Federal, en la ley General de Títulos y operaciones de Crédito y en la Ley Federal del Trabajo.
2. En consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requiera clausula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, y para suscribir títulos de crédito. **Así como el poder cambiario.** Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente.
3. La Mesa Ejecutiva Nacional mantendrá una estructura básica permanente cuya regulación formara parte del reglamento interno.

ANEXO UNO

4. Formular y aprobar los programas de actividades a nivel nacional.
5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Asamblea Nacional, así como vigilar y observar el cumplimiento de los Documentos Básicos por parte de los miembros de la Agrupación.
6. La Mesa Ejecutiva Nacional, procurará mantener relaciones y vinculación estrecha con las organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales.
7. Aplicará las resoluciones de la Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México. Se informará en un periodo de no más de veinte días hábiles las resoluciones.
8. Designará a los representantes de la Agrupación en las instancias electorales correspondientes de acuerdo a lo señalado en el reglamento.
9. Solicitará a la Comisión de Honor y Justicia sanción para miembros de la Agrupación que hayan contravenido los Documentos Básicos para que sean turnados a la instancia correspondiente.
10. Mantener informados a los Delegados Estatales sobre las políticas de la Agrupación y propiciar deliberaciones tendientes a la ejecución de las tareas políticas y de organización.
11. Contratará a la comisión de auditores externos con el propósito de revisar el informe de administración y fianzas los cuales serán:
 - a) Contratados por la Mesa Ejecutiva Nacional para auditar libros y records financieros de la Agrupación.
 - b) La Agrupación, contratará cada que sea necesario estos servicios de auditoría.
 - c) La declaración financiera de los auditores se le deberá proporcionar a cada área autorizada para su conocimiento.

ANEXO UNO

- d) La comisión estará conformada por 2 auditores, cuyo empleo no debe ser dentro de la Agrupación.
- 12. Posponer la convocatoria en proceso de renovación de la Órganos Directivos, cuando el periodo de su mandato concluya dentro de los meses anteriores al inicio de un proceso electoral constitucional. El acuerdo definirá el plazo para la convocatoria respectiva.
- 13. El Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional podrá nombrar a uno o varios secretarios adjuntos para auxiliar al Secretario General.
- 14. Vetar previo dictamen fundado y motivado, las resoluciones o acuerdos de todas las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México si resultan ser contrarias a los reglamentos y Estatutos, principios y objetivos de la Agrupación, o inconvenientes para el desarrollo de sus trabajos. La Delegación Estatal y de la Ciudad de México correspondiente podrá pedir que lleve el asunto para su resolución final ante la Comisión de Honor y Justicia, con audiencia de las partes interesadas.
- 15. Los demás que señalen los Estatutos.

TRIGÉSIMO CUARTO. El Presidente de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, lo será también de la Asamblea Nacional, es la máxima autoridad, contará y representará legalmente a la Agrupación, en los términos y facultades a que se refiere el artículo trigésimo tercero numerales 1. y 2. de los presentes Estatutos.

TRIGÉSIMO QUINTO. El Presidente de la Agrupación contará con las siguientes atribuciones y responsabilidades:

- 1. Representará legalmente a la Agrupación, ante toda clase de autoridades e instituciones electorales, personas jurídicas y físicas, nacionales e internacionales con poder general para actos de administración, dominio pleitos y cobranzas. **Así como el poder cambiario.**
- 2. Formulará querellas y denuncias interpondrá demandas de cualquier materia, así como desistirse ante toda clase de autoridades, bien sean

ANEXO UNO

electorales, civiles, penales, laborales, administrativas, juntas de conciliación arbitraje y demás.

3. Con facultad para celebrar cualquier acto jurídico a nombre y representación, de la Agrupación, podrá otorgar a su vez poder especial y poder general para actos de administración y dominio de acuerdo a las necesidades de la Agrupación. Para que a su vez ejerza ante cualquier autoridad, y a su vez revocar los que haya otorgado. El Presidente delegará en la Secretaría de Asuntos Jurídicos poder para supervisar todas las actividades relacionadas con la representación legal de la Agrupación.
4. Solicitar al Secretario General que convoque a la sesión de la Mesa Ejecutiva Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar acuerdos.
5. Organizar y analizar sobre las cuestiones políticas relevantes, organizar y analizar sobre las cuestiones políticas relevantes.
6. Asistir a la Asamblea Nacional.
7. Designar a los Secretarios de la Mesa Ejecutiva Nacional, Delegaciones Estatales, de la Ciudad de México y Mesas Directivas en el exterior.
8. Nombrar a los miembros funcionarios y auxiliares de apoyo que se requieran, para el estudio y ejecución de las necesidades de la APNMM.
9. Citar a la Mesa Ejecutiva Nacional para tratar asuntos de su competencia.
10. Contratar, designar o remover libremente al personal administrativo de la Mesa Ejecutiva Nacional y de oficinas que dependan de esta.
11. Nombrar representantes para todo tipo de actos y ceremonias a los que sea invitada la Agrupación.
12. Convocar en su caso a Asambleas Estatales para la elección o reelección de los delegados Estatales y su Secretario General.

ANEXO UNO

13. Convocar en tiempo y forma a las Asambleas Nacionales Ordinarias y Extraordinarias.
14. Emitir las constancias de designación a los Delegados Estatales con las funciones y atribuciones que les correspondan.
15. Presentar el informe anual de Actividades de la Agrupación.
16. Elaborar programas y proyectos de gestión social mediante los cuales la Agrupación, contribuya a lograr mejores niveles de vida y desarrollo para sus militantes, organizaciones, adherentes y ciudadanos en general.
17. Promover la celebración de convenios de colaboración con empresas u organizaciones destinadas a la producción de bienes o prestaciones para favorecer el acceso de la ciudadanía a tales bienes y servicios.
18. Acordar la celebración de acuerdos con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar la adhesión de otras agrupaciones en los términos de los reglamentos internos.
19. Autorizar los acuerdos de participación según lo establezcan las leyes en la materia.
20. Nombrar a los representantes para asistir a las Asambleas Estatales y de la Ciudad de México.
21. Los demás que ordenen los presentes Estatutos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Cuando el Presidente no se encuentre en territorio Nacional, el Secretario General ejercerá la representación.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Presidente durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez en forma consecutiva.

El Presidente podrá ser sustituido por el Secretario General, sólo en caso de falta absoluta de este. La Mesa Ejecutiva Nacional convocará en un plazo no mayor de treinta días a la Asamblea Extraordinaria Nacional, la cual elegirá al Presidente para

ANEXO UNO

terminar el periodo anterior, mientras tanto el Secretario General fungirá como Presidente Interino.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional designará para los asuntos del despacho a su cargo, al personal necesario para el buen desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Las Atribuciones de las Secretarías de la Mesa Ejecutiva Nacional tendrán un enfoque esencialmente de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación para la operación seguimiento y evaluación en los términos de estos estatutos y el reglamento respectivo.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. El Secretario General, es la autoridad encargada de coordinar los trabajos al interior de la Agrupación y establecer los canales de cooperación entre diversas áreas, como la operación y el seguimiento en los términos estatutarios, y el reglamento respectivo y las funciones específicas que se le encomienden.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Funciones y atribuciones del Secretario General.

1. Suplir temporalmente al Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional en caso de ausencia.
2. Fungir como Secretario de la Mesa Ejecutiva Nacional, de la Asamblea Nacional y de los órganos de gobierno.
3. A petición del Presidente convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Mesa Ejecutiva Nacional.
4. Coadyuvar con el Presidente en la elaboración del programa anual del trabajo, con base en las propuestas de las diferentes secretarías.
5. Formular el proyecto del reglamento interno con atribuciones y seguimiento en la materia de organización, para su posterior aprobación por la Mesa Ejecutiva Nacional.

ANEXO UNO

6. Vigilar y supervisar la estricta aplicación del programa anual de la Mesa Ejecutiva Nacional, así como los correspondientes de las Delegaciones.
7. Dar a conocer los acuerdos de la Mesa Ejecutiva Nacional y del Presidente.
8. Proporcionar a cada secretaría copia de los acuerdos que sobre su materia se hayan tomado en las reuniones de la Mesa Ejecutiva Nacional, y en la Asamblea Nacional.
 - a) Coordinar el trabajo Nacional de cada una de las delegaciones Estatales, de la Ciudad de México, con la Mesa Ejecutiva Nacional.
 - b) Vigilar que las Delegaciones se mantengan dentro de los términos estatutarios del periodo para el cual fueron electos.
 - c) Dar audiencias y promover las demandas de los militantes a las diferentes instancias, de acuerdo con las normas y trámites correspondientes.
 - d) Los demás que le proporcionen los Estatutos y demás acuerdos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Administración y Finanzas es el órgano responsable de la administración de todos los recursos que se obtengan por concepto de financiamiento, donativos aportaciones privadas y otros que ingresen a la cuenta nacional de la Agrupación. Estará auxiliado por un cuerpo técnico en la materia para ser apoyado en sus funciones y por lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Recibirá, administrará, distribuirá y custodiará los recursos, para el funcionamiento de la Agrupación.
- b) Desarrollará acciones prioritarias para el financiamiento de la Agrupación.
- c) Presentará los informes de ingresos y egresos de carácter ordinario, y de las campañas políticas en las que participe la Agrupación ante la autoridad electoral.

ANEXO UNO

- d) Presentar ante la Mesa Ejecutiva Nacional para su discusión y aprobación, el informe y la aplicación del financiamiento.
- e) Evaluar la rentabilidad de los programas anuales de la Mesa Ejecutiva Nacional, de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
- f) Elaborar con base en los programas anuales el presupuesto de ingresos y egresos de la Agrupación, desagregado por Delegaciones y presentarlo para su aprobación a la Mesa Ejecutiva Nacional.
- g) Implementar los mecanismos de operación y control interno que deberán respetar todos los miembros.
- h) Administrar, controlar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Agrupación.
- i) Coordinar la administración de los recursos humanos conforme al presupuesto y programas autorizados, atendiendo a la normatividad aplicable.
- j) Implementar los mecanismos de control que se desprendan del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reglamentos para la fiscalización de los recursos de la Agrupación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Es competencia de la Secretaría de Acción Electoral, siempre que se celebren acuerdos de participación.

- a) En coordinación con las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, analizar el plan Nacional de Elecciones que someterá para su revisión al Presidente de la APNMM.
- b) Preparar y organizar las estructuras electorales delegacionales necesarias para los procesos Electorales Federales.

ANEXO UNO

- c) Proponer al Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional los nombres de los militantes que deberán representar a la APNMM, observando que los estatutos se cumplan en su cabalidad, que hayan observado y cumplido con las instrucciones dentro del mismo.
- d) Coordinar y vigilar a los comisionados que la Agrupación designe ellos deben observar estrictamente los reglamentos electorales y cumplir las instrucciones que se les dicten.
- e) Implementar y participar en la organización, supervisión y evaluación de los mecanismos y estrategias electorales, en conjunto con las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.
- f) En conjunto con las demás secretarías, implementar las estrategias necesarias de promoción y difusión de la Agrupación, en procesos electorales.
- g) Verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos integrando la información a su expediente para que sean verificados por los órganos competentes.
- h) Proponer iniciativas y reformas a las leyes electorales en beneficio de los Mexicanos del Exterior.
- i) Promover con la presidencia de la Mesa Ejecutiva Nacional la participación de los miembros activos de la Agrupación en los procesos internos de selección para ocupar cargos de elección popular.
- j) Promover el cumplimiento de las reglas de equidad de género, previstas en las leyes electorales y en los propios Estatutos.
- k) Con la presidencia de la Mesa Ejecutiva Nacional, emitir la convocatoria a los procesos de selección de candidatos previstas en las leyes de la materia y los presentes Estatutos.
- l) Establecer las condiciones de elegibilidad y calificar las mismas para los efectos de los procesos electorales.

ANEXO UNO

- m) Toda controversia que se suscite en los procesos de selección de candidatos y la violación a las normas establecidas por las leyes en la materia y los propios Estatutos, tendrán que ser turnados a la Comisión de Honor y Justicia.
- n) Para el funcionamiento y desarrollo de esta Secretaría de Acción Electoral, a propuesta del Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional, esta secretaría se integrará con tres comisionados más, electos por la Mesa Ejecutiva Nacional.
- o) La Secretaria de Acción Electoral se regirá con los principios que marcan los Estatutos, practicando la objetividad y la imparcialidad.
- p) La Secretaria de Acción Electoral, presentará a la Secretaría de Administración y Finanzas informes trimestrales de los ingresos y egresos de los gastos electorales a nivel nacional.
- q) Coadyuvar con los órganos Estatales y de la Ciudad de México encargados de la administración y gastos electorales para su revisión y autorización por los órganos correspondientes.
- r) Los demás que le marquen los Estatutos y reglamentos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Es competencia de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, vigilar que a Agrupación Política Migrante Mexicana, cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la normatividad que nos señale el Instituto Nacional Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un vez reconocida como APNMM esta secretaría mediante poder notarial que la presidencia le otorgue podrá celebrar cualquier acto jurídico a nombre y representación dela Agrupación para que lo ejerza ante cualquier autoridad Federal, Estatal y Municipal.

ANEXO UNO

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. La Secretaría de Organización tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Desarrollar en coordinación con la Presidencia y la Secretaría General los diagnósticos estatales.
- b) Atender, vigilar y comunicar el plan de trabajo a los coordinadores de los diferentes sectores con la finalidad de ampliar su participación en los diferentes programas.
- c) Supervisar el buen funcionamiento de toda la estructura de la Agrupación, conforme a los programas y actividades aprobadas por los Documentos Básicos.
- d) Desarrollar el Programa Nacional de Credencialización, organizarlo y llevarlo a cabo en tiempo y forma.
- e) Apoyar a la Mesa Ejecutiva Nacional en todo lo relacionado con sus funciones.
- f) Suplir al Secretario General en ausencia de este.
- g) Coadyuvar con el Secretario de Administración y Finanzas en la emisión de manuales y procedimientos, normas y guías específicas relacionadas con la materia administrativa.
- h) Los demás que les marquen los Estatutos correspondientes.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Secretaría de Desarrollo Social y Económico. La creación y administración de políticas públicas en las diversas funciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, tienen como objetivo ayudar a cumplir con un deber social, político y patriótico y el fortalecimiento de los derechos de nuestros sectores más vulnerables, por ello tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Formular e integrar, en atención a las necesidades nacionales, estatales y regionales, el Programa Nacional de Políticas Públicas que contemplan la

ANEXO UNO

industria, el comercio, vivienda, productos artesanales, agrícolas, textiles y alimentarios, preferentemente en los estados de mayor expulsión de sus ciudadanos al exterior.

- b) Informar, orientar y capacitar a las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, sobre los mecanismos para acceder a los programas y proyectos federales, estatales, empresariales o internacionales, para su correcta aplicación.
- c) Promover la vinculación comercial en los mercados existentes y estimular la apertura de nuevos mercados, en coordinación con la Secretaría de Atención al Migrante y otras comisiones involucradas.
- d) En coordinación con las organizaciones de Ciencia y Tecnología, se establecerán vínculos con instituciones educativas, de investigación y de gobierno afines para promover a la Agrupación, y obtener convenios de colaboración o participación conjunta en eventos, planes o proyectos, así como estudios de investigación, pasantías o servicios sociales.
- e) Organizar jornadas de educación y formación binacional, que fortalezcan los conocimientos de la Agrupación para un mejor desempeño en sus funciones y actuar diario.
- f) Desarrollar políticas públicas en materia de Ecología para la formulación de propuestas y proyectos autosustentables.
- g) Investigar sobre políticas ambientales y de bienestar social, que propongan medidas preventivas en capacitación y orientación a los inmigrantes. En el país que se encuentren.
- h) En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y otras secretarías involucradas, promover la vinculación comercial en los mercados existentes, y estimular la apertura de nuevos mercados.
- i) Los demás que se señalen en los Estatutos.

ANEXO UNO

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. De la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. El más grave de los problemas que enfrenta nuestra Nación Mexicana es el del campo. Es uno de los problemas que constantemente se ven agravados por los intereses políticos falta de oportunidades, desarrollo tecnológico y sustentable. Por lo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Gestionar ante las Instituciones Gubernamentales, el apoyo jurídico social que se requiere para llevar a cabo los proyectos y programas propios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- b) Establecer acciones favorables con organizaciones, empresas e instituciones a fin de promover a grupos de personas relacionados con estas actividades.
- c) Fortalecer los lazos binacionales con organizaciones, empresas y dependencias internacionales. Con la finalidad de establecer los canales para la inversión, producción o exportación de productos agropecuarios.
- d) Adoptar las medidas necesarias para proporcionar preparación, de elementos técnicos y materiales a nuestra gente.
- e) Procurar a los agricultores, ganaderos y pesqueros, información y orientación, para el mejor desarrollo de sus actividades, como un factor de autonomía y libertad en sus derechos laborales y humanos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Secretaría de Gestión Social. En México la necesidad de gestión social es apremiante en todos los sectores de la población. Es necesario promover la participación de todas las instituciones gubernamentales para dar la debida atención a las demandas sociales y de desarrollo regional y municipal, procurando promover los derechos humanos de nuestra población. Por ello la Secretaría de Gestión Social tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Establecer en forma conjunta con la Secretaría de Asuntos Jurídicos el Programa de Gestión Social con las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, e investigar y evaluar los resultados.

ANEXO UNO

- b) Promover la asistencia jurídico-legal binacional, con el objetivo de apoyar a los mexicanos del exterior en sus trámites de gestoría social en los tres niveles del gobierno en México y sus representaciones en el exterior, dependencias de los gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.
- c) Formular programas estratégicos para representar a los miembros afiliados en sus necesidades de gestoría social y sus garantías individuales.
- d) Gestionar con las Instituciones Gubernamentales su debida participación en la solución de los problemas sociales, dando prioridad a las personas con capacidad diferenciada, y adultos mayores migrantes y su familia aquí en México, así como a los grupos indígenas, mujeres, jóvenes y pensionados.
- e) Establecer, gestionar y formular programas estratégicos de concertación con las organizaciones para la promoción gestoría y atención a la demanda de los nacionales y connacionales.
- f) Los demás que señalen los Estatutos y los que él Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional le confiera.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Secretaría de Atención al Migrante. El tema de la movilidad humana es una característica fundamental en el mundo actual. Esto se comprueba con la existencia de más de 90 millones de trabajadores migrantes en el mundo, que se desplazan a consecuencia del desempleo, presionados por la crisis económica y la violencia en los países menos desarrollados, como el caso de nuestra nación mexicana. Por ello nuestra APNMM, interpreta que el tema de los migrantes ocupa un espacio crucial en la agenda pública de las relaciones bilaterales entre México y otros países del mundo, destacando principalmente Estados Unidos de América; ya que los mexicanos en el exterior de esta sociedad moderna han sido fuente de plusvalía y riqueza para las sociedades, sin embargo, a los migrantes nunca se nos ha reconocido justamente en base en la plusvalía que hemos generado y seguimos generando, dando origen a diversos rostros culturales, sociales, económicos, jurídicos e incluso de seguridad nacional. Por ello y por la importancia que reviste a nuestra Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, aspiramos a ser interlocutores de un cambio en la cultura política de nuestro país. Para México, este fenómeno ha trastocado todos

los aspectos de la vida pública y privada del ámbito familiar y comunitario en los migrantes y su familia en México. Esta situación causa impactos positivos, como negativos en la vida de los familiares de quien decide emigrar, creando un vacío, obligando a la familia a vivir en la disfuncionalidad cuando se trata de los padres de familia y viceversa, cuando se trata de algún otro miembro de la familia se convierte en el sustento familiar por medio del envío de las remesas como único apoyo económico. Es bien sabido que las aportaciones de los migrantes a la economía nacional ocupa en varios casos el primer lugar del producto interno, sin embargo su contribución al desarrollo está por debajo de las posibilidades reales de estos recursos. Adicionalmente debemos destacar los abusos de los que somos sujetos, deshumanizándonos y negándonos nuestras garantías individuales que marca la Constitución obligándonos a vivir en la clandestinidad. Por ello tenemos la plena convicción de la necesidad de una Secretaría Nacional que defienda los derechos de los migrantes dentro y fuera del país.

ARTÍCULO QUNCUAGÉSIMO. Para el desarrollo de sus actividades, la Secretaría de Atención al Migrante tiene las siguientes atribuciones:

- a) Diseñar, ejecutar y supervisar políticas públicas encaminadas a la protección legal, social, psicológica, de salud, para los migrantes.
- b) Proponer temas de incidencia legal que se reflejen en la protección de los trabajadores migrantes.
- c) Impulsar leyes y normas a nivel nacional e internacional que fomenten una migración ordenada, y protejan los derechos civiles, sociales y económicos de este sector.
- d) Propiciar y establecer políticas basadas en valores respecto a mejorar la legislación nacional con relación a la migración internacional, y promover los derechos de los trabajadores.
- e) Dar información gratuita y comprensible en las diferentes lenguas primigenias para mantener informados a los migrantes y su familia, en el tránsito, destino y retorno, implementando mecanismos de asesoría legal, vinculada con las instituciones gubernamentales.

ANEXO UNO

- f) Promover los derechos políticos de los inmigrantes radicados en otros países.
- g) Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en la promoción del voto de los mexicanos del exterior.
- h) Coordinar sistemas de seguridad nacional para prevenir la discriminación y abuso de otros hermanos migrantes de cualquier parte del mundo.
- i) Crearemos, fortaleceremos y apoyaremos a todas las instituciones responsables de gestionar la protección y tránsito, destino y retorno de los mexicanos donde quiera que se encuentren.
- j) En forma conjunta con la Mesa Ejecutiva Nacional y las diferentes comisiones se definirá la misión y la visión de las políticas migratorias, indispensables para lograr cualquier meta política. Realizar el monitoreo y evaluación de los objetivos generales y específicos, que se traduzcan y definan la agenda binacional de los migrantes.
- k) Fortalecer los mecanismos institucionales de protección y asistencia a víctimas.
- l) Gestionar y mantener estrecha relación de cooperación bilateral y multilateral con gobiernos y organismos internacionales de protección y asistencia a víctimas.
- m) Obtener y producir datos estadísticos y censales.
- n) Concientizar sobre los derechos humanos de los migrantes a la sociedad civil, medios de comunicación y gobiernos.
- o) Gestionar ante las instituciones correspondientes los fondos para la repatriación de muertos y mutilados en el país de residencia que se encuentren.
- p) Estructurar cursos y capacitación especializada sobre el tema de género con todas las Instituciones Gubernamentales.

ANEXO UNO

- q) Para el desarrollo y funcionamiento esta secretaría contará con comisiones técnicas, que colaboren para el buen desempeño de su actividad.
- r) Los demás que le proporcionen los presentes Estatutos y demás acuerdos.

ARTÍCULO QUNCUAGÉSIMO PRIMERO. Es competencia de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios:

- a) Coordinar, elaborar, integrar y planear el Programa de Acción Nacional Indígena de Pueblos Primigenios, que atienda las causas y necesidades de este sector.
- b) Gestionar ante las Instituciones Gubernamentales la debida atención a las demandas de las comunidades indígenas e impulsar el fortalecimiento de los programas de salud, educación y apoyo jurídico a los militantes de extracción indígena.
- c) Establecer una estrecha vinculación con las instituciones encargadas de programas sociales, así como las organizaciones no gubernamentales tanto de atención social como de derechos humanos, a fin de fortalecer los mecanismos de protección en todos los ámbitos a los grupos indígenas y su familia.
- d) Proponer temas de incidencia política, fundamentando las acciones o actividades que se necesiten desarrollar por parte de las secretarías correspondientes.
- e) Representar a la APNMM. En eventos o actos afines a las competencias de la secretaría.
- f) Los demás que le den los presentes Estatutos.

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO SEGUNDO. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables. Es competencia de la Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables:

Promover acciones que lleven al bienestar y dar atención a todas aquellas personas que se encuentran en desventaja social, como son: los niños, los ancianos, mujeres maltratadas, migrantes e indígenas.

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO TERCERO. Secretaría de Atención a la Juventud.

La Secretaría de Atención a la Juventud estará integrada en los estados, donde sus acciones de desarrollo o función estructural, se afiliaran libre voluntaria e individualmente al mismo, debiendo cumplir con los requisitos que señalan los Documentos Básicos, Declaración de Principios, su Ideología e Historia de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.

La Secretaría de Atención a la Juventud tiene los siguientes objetivos:

- a) Crear y promover iniciativas que atiendan las necesidades de todos los jóvenes mexicanos.
- b) Impulsar políticas públicas que beneficien sus necesidades sociales políticas educativas y culturales.
- c) Participar en los cargos de dirigencia y candidaturas de elección popular.
- d) Vincularse con la población en apoyo al servicio social.
- e) Participar en la escuela de capacitación política e ideología.
- f) Ser parte de la educación y desarrollo para ser electos en cargos de dirigencia o elección popular.
- g) Referente a la edad se establece un límite mínimo de 18 años y un máximo de 29 años, en los cargos de dirigencia, o elección popular.
- h) Los demás que establezcan los Estatutos.

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO CUARTO. Es competencia de la Secretaría de la Promoción Política de la Mujer:

- a) En la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana las mujeres se integrarán en la colaboración y construcción de la Agrupación.
- b) Participarán en los Órganos de Dirección Nacional y Estatales.
- c) Estarán comprometidas a cumplir con los Documentos Básicos, la Declaración de Principios y Estatutos, los cuales aceptaron libre, voluntaria e individualmente.
- d) Las representantes de la Secretaría de la Promoción Política de la Mujer serán designadas a nivel Nacional y Estatal, en los términos de la reglamentación estatutaria de la APNMM.

ARTÍCULO QUINCUGÉSIMO QUINTO. Secretaría de Afiliación. Es competencia de la Secretaría de Afiliación:

- a) Realizar las acciones de afiliación que den soporte a la Agrupación.
- b) Concentrar los formatos de afiliación que den soporte a la Agrupación.
- c) Realizar la captura y mantenimiento del padrón de afiliados en medio magnético.
- d) Generar los sistemas de foto credencialización de la membrecía.
- e) Elaborar y poner en práctica programas de capacitación y formación de cuadros en materia político electoral.
- f) Impulsar estrategias de participación política de la sociedad con el fin de coadyuvar a una opinión pública mejor informada y al desarrollo de una cultura política democrática.
- g) Los demás que le proporcionen los Estatutos.

ANEXO UNO

DE LA ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Los Órganos de Dirección durarán en su cargo cuatro años, con la posibilidad de un periodo de reelección. Al finalizar su cargo se convocará a Asamblea Nacional Extraordinaria para que esta elija a los nuevos integrantes de tales órganos. En caso de ausencia o renuncia de algunos de los integrantes, la Mesa Ejecutiva Nacional elegirá un interino hasta que se convoque a Asamblea Nacional Extraordinaria.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.

El Presidente de La Mesa Ejecutiva Nacional designará de conformidad con los Estatutos a los representantes de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, atendiendo los siguientes puntos:

1. Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, donde el respectivo este en proceso de formación, se establecerá un acuerdo en el que se señalen sus funciones, obligaciones y plazo de funcionamiento y de constitución de las obligaciones directivas en su territorio.
2. Las demás que les confieran los Estatutos y demás acuerdos.

DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA EN LOS ESTADOS Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México.

1. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana, podrá tener presencia en los treinta y dos estados de la República Mexicana por medio de sus Delegaciones Estatales.
2. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, tienen a su cargo la representación y dirección de la APNMM en las entidades federativas en que se encuentren. Los Delegados Estatales, desarrollarán las tareas de vinculación y enlace de los programas que apruebe, las Delegaciones

ANEXO UNO

Estatales, y/o de la Ciudad de México, así como las acciones que acuerde la Mesa Ejecutiva Nacional.

3. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, sesionarán de forma ordinaria cada tres meses, debiendo ser convocada por el Secretario General a petición del Delegado de la misma al menos con 72 horas antes o de manera extraordinaria con 24 horas de anticipación cuando menos, y sólo para tratar exclusivamente los asuntos que la motivaron. El quórum para que las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México pueda sesionar tiene que ser del 50 por ciento más uno en primera convocatoria y en segunda con al menos el 33% de los integrantes.
4. En ambos casos la convocatoria deberá contener: fecha, hora, lugar de la sesión, así como la orden del día y deberá ser publicada en los estrados de las oficinas de la sede Estatal o de la Ciudad de México, o en la página de internet, o se notificará por correo electrónico.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, establecerán la estructura integrada por:

1. Delegado
2. Secretario General
3. Secretaría de Organización
4. Secretaría de Acción Electoral
5. Secretaría de Administración y Finanzas
6. Secretaría de Desarrollo Social
7. Secretaría de Atención y Defensa del Migrante
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las entidades en que se desarrolle esta actividad

ANEXO UNO

9. Secretaría de Acción Indígena y Pueblos Primigenios, donde haya presencia de estos pueblos y comunidades
10. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables
11. Secretaría de Promoción Política de la Mujer
12. Secretaría de Atención a la Juventud
13. Los demás que sean necesarios para el desarrollo social de la Delegación Estatal y de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO. El titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer y el titular de la Secretaría de Atención a la Juventud, contarán con un coordinador dentro de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, con las atribuciones y representatividad suficiente para su cabal funcionamiento.

En los estados en que haya presencia de pueblos primigenios y comunidades indígenas se instalará la Secretaría de Asuntos Indígenas y Pueblos Primigenios.

Los miembros de las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México, así como los titulares estarán en su cargo por cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Los Delegados Estatales y de la Ciudad de México, tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Representar legalmente a la APNMM, en el estado que le corresponda.
- b) Dirigir la labor política y de organización de la APNMM en el estado que representen para el cumplimiento de los Documentos Básicos y las resoluciones de los órganos de dirección superior.
- c) Elaborar su agenda política anual, incluyendo dentro de la misma a las organizaciones políticas, sociales y económicas en el estado.

ANEXO UNO

- d) Vigilar que los representantes de las delegaciones den seguimiento a la línea política, Estatutos y Programa de Acción.
- e) Formular, desarrollar y proponer de acuerdo a las circunstancias, características y necesidades, el Plan de Trabajo Anual, que se someterá para su aprobación a la Mesa Ejecutiva Nacional de la APNMM.
- f) Solicitar al Secretario General de la Delegación Estatal que convoque a la sesión de la Asamblea Estatal o de la Ciudad de México, y a la sesión de la Delegación Estatal o de la Ciudad de México, presidir sus sesiones y ejecutar acuerdos.
- g) Estar en permanente comunicación con el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional, para presentar iniciativas, recibir directrices y asegurar la coordinación adecuada de los trabajos.
- h) Nombrar, contratar y remover libremente a los funcionarios administrativos y empleados de la Delegación Estatal, determinar sus facultades y obligaciones, vigilando la normatividad administrativa del mismo.
- i) Presentar ante la Mesa Ejecutiva Nacional los informes semestrales de las actividades de la APNMM, en el estado. Así como el informe financiero y de actividades en los términos reglamentarios y del informe a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Mesa Ejecutiva Nacional.
- j) Informar sobre las medidas pertinentes para asistir a la convocatoria de la Asamblea Nacional.
- k) Mantener actualizado el padrón electoral de la entidad federativa a su cargo, cumpliendo estrictamente las normas reglamentarias de afiliación y acreditación del trabajo de organización.
- l) Mantener relación permanente con la Secretaría de Acción Electoral, con la finalidad de impulsar los trabajos de investigación, estudio y análisis de las circunstancias políticas en que se encuentra el país, así como la observación de los problemas económicos sociales y de divulgación ideológica.

m) Los demás que les otorguen los Estatutos.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Los Delegados Estatales y de la Ciudad de México, propondrán a los secretarios que integren las Delegaciones Estatales o de la Ciudad de México, los cuales serán ratificados por el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional, atendiendo el cumplimiento de los Documentos Básicos, Estatutos y Líneas de Acción. Para ello serán aplicadas las disposiciones relativas de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional, en un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad de la APNMM.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO. El Secretario General de la Delegación Estatal sustituirá al Delegado en sus faltas temporales que no podrán exceder de un mes durante el periodo de sus funciones. En caso de falta absoluta del Delegado de la Delegación Estatal, se convocará en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días para elegir a un nuevo Delegado Estatal, en estos términos el Secretario General, fungirá como Delegado Estatal provisional y todos los demás, mantendrán sus mismos cargos y funciones.

Las Secretarías Estatales y de la Ciudad de México, trabajarán de una forma homologada en sus respectivas funciones con las Secretarías de la Mesa Ejecutiva Nacional.

DE LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO. Se considera como afiliado o militante, en el exterior a los ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos electorales, que cuenten con una credencial de elector vigente emitida por el Registro Federal Electoral. Los afiliados o miembros del exterior tendrán que comprobar por lo menos un año en el país de residencia para que puedan participar como inmigrantes o mexicanos radicados en el exterior. Además de lo que fijan los artículos: 34, numerales 1 y 2; 35, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán cumplir con lo establecido en los presentes Estatutos.

Cada país será considerado como una sola identidad, independientemente de su división interna o de la cantidad de población mexicana inmigrante.

ANEXO UNO

Los miembros de la Agrupación la representarán en el país de destino en que se encuentren, y conformarán una Mesa Directiva de la siguiente manera:

1. Un Delegado de Enlace.
2. Un Secretario General.
3. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de la Agrupación.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DELEGADO DE ENLACE.

1. Dirigir la labor Política de la Agrupación.
2. Elaborar la agenda política anual.
3. Cumplir con las resoluciones superiores.
4. Organizar las Asambleas en su lugar de destino y convocar a los participantes.
5. Cumplir con las resoluciones de la Mesa Ejecutiva Nacional.
6. Difundir la labor política y de organización de la Agrupación.
7. Los dirigentes del exterior apoyarán y coadyuvarán en las tareas de información, promoción y defensa de los derechos humanos, laborales de este segmento, en la medida que las leyes locales lo permitan y regulen.

CAPÍTULO SEXTO

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO. La Comisión de Honor y Justicia, es el órgano autónomo e independiente; encargado de garantizar, vigilar y hacer respetar los derechos estatutarios de todos los miembros de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.

ANEXO UNO

La Comisión de Honor y Justicia tendrá autoridad y amplias facultades para intervenir entre las partes en conflicto, para que mediante el diálogo encuentre la solución que reconcilie a las partes y fortalezca la unidad de la Agrupación.

Para garantizar la autonomía, objetividad e imparcialidad, no podrán formar parte de la Comisión de Honor y Justicia, los miembros de ningún órgano de dirección de la Agrupación.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Honor y Justicia se integrará por cinco miembros activos de cualquier entidad federativa designados por la Mesa Ejecutiva Nacional. La Comisión de Honor y Justicia tendrá una vigencia máxima de cuatro años, con opción a reelegirse por un periodo igual.

- a) Para que esta comisión pueda sesionar, deberá contar en primera convocatoria con el 50% más uno de sus integrantes y los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de no existir quórum se llevará a cabo una segunda convocatoria la cual se llevará a cabo quince minutos después de la primera y se celebrará con el 33% de los integrantes.
- b) Las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia se convocarán a petición del Presidente de la misma con una anticipación de 24 horas. La convocatoria a la sesión de la Comisión de Honor y Justicia deberá contener: la fecha, hora y lugar de la sesión, además de la orden del día.
- c) Las resoluciones y acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia se tomarán con el voto de todos sus integrantes el Presidente contará con voto de calidad y sus fallos causan ejecutoria al día siguiente de que sean publicados en los estrados de la Sede Nacional, siendo éstos de carácter definitivo, inapelable e inatacable por ningún miembro u órgano de dirección de la Agrupación, incluyendo la Asamblea Nacional.

La Comisión de Honor y Justicia responderá de su gestión ante la Asamblea Nacional.

ANEXO UNO

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Las funciones y facultades de la Comisión de Honor y Justicia son:

- a) Vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los miembros y de los órganos directivos de la Agrupación.
- b) Establecer los procesos sancionadores.
- c) Imponer las sanciones que procedan.
- d) Garantizar a los acusados pleno derecho a su defensa, observando en todo momento el principio de audiencia.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. La Comisión de Honor y Justicia estará integrada por:

- a) Un Presidente.
- b) Un Secretario.
- c) Tres Vocales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

SANCIONES

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO. Las faltas y sanciones de los afiliados serán determinadas por la Comisión de Honor y Justicia, cada afiliado que sea sometido a un procedimiento sancionador tendrá el derecho de audiencia y de un procedimiento justo en el cual pueda manifestar lo que a su derecho convenga, así como presentar las pruebas necesarias.

Las faltas en que pueden incurrir los afiliados son:

1. Afiliarse a otra Agrupación
2. Difundir información reservada de la APNMM.

ANEXO UNO

3. No estar al corriente con sus cuotas.
4. Presentarse en estado inconveniente en alguna de las Asambleas o reuniones de los órganos de APNMM.
5. Actuar de manera violenta en alguna sesión de los órganos de la APNMM.
6. Atentar contra los bienes patrimoniales y financieros de la Agrupación.
7. No cumplir con los presentes ordenamientos estatutarios reglamentos mandatos y acuerdos que emanen de nuestra Agrupación, así como a las disposiciones establecidas en las leyes que nos rigen.
- 8.
9. Faltar injustificadamente hasta en tres ocasiones a las reuniones de trabajo, sesiones, Asambleas Nacionales Ordinarias y Extraordinarias.
10. Mostrar deshonestidad acreditada al desempeñar su cargo.
11. Prestarse a maniobras que contravengan a los ideales y objetivos de nuestra Agrupación con personas u organizaciones ajenas a nuestra Agrupación.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Las sanciones a que puede ser sometido por las faltas antes mencionadas serán:

1. Amonestación.
2. Abstenerse a votar en tres asambleas.
3. Suspensión de derechos.
4. Suspensión temporal del cargo.
5. Expulsión.

ANEXO UNO

Todas las sanciones, amonestaciones o expulsión sólo serán válidas si están por escrito.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. En los casos de indisciplina, incumplimiento de su cargo o la infracción a los Estatutos y reglamentos internos de la Agrupación, podrán ser sancionados con: amonestaciones, sustitución del cargo que desempeñen, en su caso suspensión en sus derechos o expulsión de la Agrupación. Conforme a los siguientes Estatutos:

- a) Las amonestaciones procederán, cuando se trate de infracciones leves, y no sean reiterativas.
- b) La sustitución del cargo se acordara en los casos de incumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión.
- c) La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, abandono continuo o el incumplimiento de sus deberes estatutarios y obligaciones, Se le suspenderán sus derechos como miembro activo del órgano correspondiente. La suspensión de derechos implica la separación de sus actividades en la Agrupación indefinidamente.
- d) La inhabilitación para ser dirigente o candidato será declarada en los casos de deslealtad a la Agrupación, incumplimiento manifiesto de las funciones como dirigente.
- e) La expulsión podrá solicitarse cuando sus causas señaladas sean graves o reiteradas así como ataques de hecho o de palabra a los principios y programas de la Agrupación. Fuera de sus reuniones oficiales, por acciones o declaraciones que dañen gravemente a la APNMM.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. La suspensión del cargo se llevará a cabo si previamente se le concedió el derecho de audiencia, por los órganos correspondientes, de acuerdo al lugar de procedencia, y surtirá efecto de manera inmediata. El recurso de revocación se llevará a cabo por la Comisión de Honor y Justicia a partir del día siguiente de la notificación y se contará con cuatro días hábiles respetando el derecho de audiencia.

ANEXO UNO

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. La Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de México informarán por medio de los estrados de las oficinas, la expulsión del miembro activo de su jurisdicción cuando se haya comprobado que hace proselitismo para otro partido sin acuerdo previo de la dirigencia, que ha traicionado los Documentos Básicos y reglamentos, previo proceso sancionatorio resuelto por la Comisión de Honor y Justicia.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. El documento de declaración de expulsión estará en los estrados de la sede Nacional y sedes Estatales, por quince días. El miembro activo podrá impugnar en un término de cuatro días hábiles ante la Comisión de Honor y Justicia.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Los miembros activos que cometan infracciones e ilícitos en una jurisdicción que no es la suya serán sancionados por la Comisión de Honor y Justicia, a petición del Delegado de la entidad afectada.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. La Comisión de Honor y Justicia, deberá informar sobre las resoluciones en un plazo no mayor de diez días a partir de que se reciba la solicitud de sanción, o expulsión o el recurso de apelación o el recurso correspondiente. Las resoluciones serán de carácter irrevocable.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. De existir conductas ilícitas imputables a miembros activos o adherentes, la Comisión de Honor y Justicia iniciara de oficio el procedimiento respectivo en el marco disciplinario que los estatutos marquen y las leyes correspondientes.

1. La Comisión de Honor y Justicia y la Mesa Ejecutiva Nacional, podrán previo procedimiento sancionatorio, acordar medidas cautelares, suspensión del cargo, suspensión temporal de los derechos del miembro activo adherente o su expulsión.
2. Al aplicar las sanciones la Comisión de Honor y Justicia, rigurosamente cuidará que se haya aplicado el Reglamento interno de disciplina, asegurando que previamente se le concedió sus garantías de defensa al interesado.
3. En ningún caso las medidas cautelares podrán ser mayores de un año.
4. Los demás previstos en el presente reglamento.

RENUNCIA

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Todo miembro afiliado que renuncie a la Agrupación deberá hacerlo por escrito explicando los motivos de su renuncia con treinta días de anticipación. Y:

- a) Debe entregar la documentación y propiedades en su caso de la Agrupación que estén en su posición.
- b) Su membrecía de miembro en la Agrupación no es transferible.

ARTICULO OCTAGÉSIMO. Todo miembro o representante de la Agrupación que haya renunciado o sea suspendido por haber infringido el reglamento interno y quiera regresar al término del mismo deberá:

- a) Someter su solicitud por escrito de reingreso la cual se evaluará conforme a su conducta en pro de la Agrupación para determinar su ingreso en un término no mayor de quince días.
- b) Nadie que renuncie a la Agrupación o sea expulsado podrá hacer mesas alternas o corrientes, con el nombre de la Agrupación.

Las demás resoluciones respectivas conforme a lo dispuesto por los Estatutos.

CAPÍTULO OCTAVO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO OCTAGÉSIMO PRIMERO. La Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana se disolverá y liquidará por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por resolución de la Asamblea Nacional.
- b) Por resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual determine la pérdida de registro como Agrupación Política Nacional.

ANEXO UNO

- c) Por lograr el registro como Partido Político Nacional.

ARTÍCULO OCTAGÉSIMO SEGUNDO. El procedimiento a seguir en el caso de procedencia de la liquidación de la Agrupación, la Asamblea Nacional designará una Comisión Liquidadora encargada de su liquidación, la cual estará conformada por el Presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional y cuatro Delegados de las Delegaciones Estatales, quienes realizarán dicha liquidación.

- a) La liquidación se realizará con base al inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Agrupación, considerados en los últimos estados financieros.
- b) La Comisión Liquidadora realizará los cobros y pagos de las cuentas pendientes a la fecha en que se haya realizado la aprobación de liquidación de la Agrupación Política Nacional.


ARTÍCULO OCTAGÉSIMO TERCERO. La Asamblea Nacional tendrá la facultad de decidir sobre el destino de todos los bienes y patrimonios propiedad de la Agrupación Política Nacional en liquidación; optando entre la donación a una Fundación, Institución u Organización Social facultada para recibir donativos, o a la aplicación en la Organización Política o Asociación Civil que decida constituir la Asamblea Nacional, para la continuidad en la lucha del ideario de la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.

TRANSITORIOS


PRIMERO. Los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación de procedencia legal y constitucional por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las normas relacionadas con la Mesa Ejecutiva Nacional, las Delegaciones Estatales, los Secretarios Nacionales y Estatales, entrarán en vigor a partir de la constitución de los mismos. Mientras tanto seguirán en vigor las normas que rigen actualmente.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de las modificaciones estatutarias, quedan sin efecto las disposiciones internas que se opongan a las mismas.

ANEXO DOS

		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p>	
<p>CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”</p>			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>ESTATUTOS</p> <p>ARTS. PRIMERO al TRIGÉSIMO SEGUNDO. (No presentan cambios)</p> <p>ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades y Deberes de la Mesa Ejecutiva Nacional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) 2. En consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requiera clausula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, y para suscribir títulos de crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente. 3. (...) <p>ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. (No presenta cambios)</p> <p>TRIGÉSIMO QUINTO. El Presidente de la Agrupación contará con las siguientes atribuciones y responsabilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Representará legalmente a la Agrupación, ante toda clase de autoridades e instituciones electorales, personas jurídicas y 	<p>ESTATUTOS</p> <p>ARTS. PRIMERO al TRIGÉSIMO SEGUNDO. (No presentan cambios)</p> <p>ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades y Deberes de la Mesa Ejecutiva Nacional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) 2. En consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requiera clausula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, y para suscribir títulos de crédito. Así como el poder cambiario. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente. 3. (...) <p>ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. (No presenta cambios)</p> <p>TRIGÉSIMO QUINTO. El Presidente de la Agrupación contará con las siguientes atribuciones y responsabilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Representará legalmente a la Agrupación, ante toda clase de autoridades e instituciones electorales, personas jurídicas y 		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>

ANEXO DOS

<div>  <div> INE Instituto Nacional Electoral </div> </div>		<div> DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO </div>	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL MIGRANTE MEXICANA”			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>físicas, nacionales e internacionales con poder general para actos de administración, dominio pleitos y cobranzas.</p> <p>2. (...) ARTS. TRIGÉSIMO SEXTO al OCTAGÉSIMO TERCERO (No presentan cambios)</p>	<p>físicas, nacionales e internacionales con poder general para actos de administración, dominio pleitos y cobranzas. Así como el poder cambiario.</p> <p>2. (...) ARTS. TRIGÉSIMO SEXTO al OCTAGÉSIMO TERCERO (No presentan cambios)</p>		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Parlamento Ciudadano Nacional”. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Proyecto de Resolución mencionado. _____

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 12. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1483/2018) Pto. 12 _____

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL”

A N T E C E D E N T E S

- I. En sesión extraordinaria celebrada el diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, otorgó registro como Agrupación Política Nacional a la asociación de ciudadanos denominada “Parlamento Ciudadano Nacional” (en lo subsecuente la Agrupación), a través de la Resolución identificada con la clave CG321/2008.
- II. El Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil nueve, aprobó diversas modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación, mediante Resolución identificada con la clave CG115/2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil nueve.
- III. La Agrupación se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeta a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
- IV. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Agrupación realizó su Asamblea Nacional Extraordinaria, en la cual se aprobaron, entre otros asuntos, diversas modificaciones a los Documentos Básicos.
- V. El veintitrés de noviembre del presente año se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante DEPPP) escrito a través del cual la C. Martha Flores Gutiérrez, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación, comunicó las modificaciones a sus Documentos Básicos, a saber: Declaración de Principios,

Programa de Acción y Estatutos, aprobadas en la Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el veintiocho de septiembre de esta anualidad, y presentó la documentación soporte correspondiente, al tiempo que solicitó se declare la procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones.

- VI.** El siete de diciembre del año en curso, en alcance al escrito mencionado en el antecedente previo, la C. Martha Flores Gutiérrez, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación remitió diversa documentación relacionada con las publicaciones de las convocatorias a las Asambleas Nacional y Estatales.
- VII.** La DEPPP integró el expediente con la documentación presentada por la Agrupación que acredita la celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
- VIII.** En su sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de diciembre del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

C O N S I D E R A N D O

- 1.** El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2. El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General vigilar que las agrupaciones políticas nacionales cumplan con las obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.
3. Según se indica en el antecedente IV de esta Resolución, la Agrupación, a través de su Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, aprobó diversas modificaciones a sus Documentos Básicos.
4. La Agrupación no cumplió con lo previsto en el artículo 8, párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo el Reglamento), que establece la obligación de las agrupaciones políticas nacionales de comunicar a este Instituto la modificación de sus documentos básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente.

Lo anterior es así tomando en consideración que la Asamblea Nacional Extraordinaria de la Agrupación, en la cual se aprobaron modificaciones a sus Documentos Básicos, se llevó a cabo el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de diez días hábiles corrió del día uno al doce de octubre de dicha anualidad, como se muestra a continuación.

Septiembre de 2018						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					28	29
30						

Octubre de 2018						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	

En esta tesitura, la Presidenta de la Agrupación informó al Instituto Nacional Electoral la modificación a sus Documentos Básicos el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que la comunicación fue realizada fuera del plazo reglamentario establecido.

Por lo anterior, y tomando en consideración que fue hasta el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho que la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación informó de la modificación realizada, se advierte que se hizo fuera del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento; por lo que resulta procedente dar vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.

5. El veintitrés de noviembre y siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Agrupación, por medio de la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, remitió la documentación soporte con la que se pretende acreditar que los actos relacionados con la preparación, integración, convocatoria, instalación, sesión y determinaciones de la Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiocho de septiembre del año en curso, en la cual se aprobaron diversas modificaciones a los Documentos Básicos, fueron realizados conforme a su normativa estatutaria vigente.

La documentación entregada es la que se detalla a continuación:

A. Actos de las Asambleas Estatales, relacionados con la elección de los integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales y de los Delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria.

a) Originales.

- Razones de notificación por estrados de las convocatorias a las Asambleas Estatales celebradas en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; de fechas treinta y treinta y uno de junio, así como uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de julio del año en curso, respectivamente.
- Convocatorias a las Asambleas Estatales celebradas en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; de fechas treinta y treinta y uno de

junio, así como uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de julio del presente año, respectivamente.

- Listas de asistencia y actas de las Asambleas Estatales celebradas, en primera convocatoria, en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; los días uno, tres, cuatro, cinco, siete, nueve, diez, doce y catorce de agosto de esta anualidad, respectivamente.
- Listas de asistencia y actas de las Asambleas Estatales celebradas, en segunda convocatoria, en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; los días diez, doce, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veinte, veintidós y veinticuatro de agosto del año en curso, respectivamente.
- Manifestaciones de afiliación a la Agrupación de los asistentes a las Asambleas Estatales celebradas, en segunda convocatoria, en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; los días diez, doce, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veinte, veintidós y veinticuatro de agosto del presente año, respectivamente.

b) Copias simples.

- Credenciales de elector de los asistentes a las Asambleas Estatales celebradas, en segunda convocatoria, en Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; los días diez, doce, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veinte, veintidós y veinticuatro de agosto de esta anualidad, respectivamente.

B. Actos de la Asamblea Nacional Extraordinaria, relacionados con las modificaciones de los Documentos Básicos.

a) Originales.

- Razón de notificación por estrados de la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de veintisiete de agosto del año en curso.
- Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de veintisiete de agosto del presente año.
- Bitácora de notificaciones telefónicas de la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria.

- Lista de asistencia y acta de la Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el veintiocho de septiembre de esta anualidad.
- b) Diversa documentación.
- Impresión de los cuadros comparativos de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación, así como el texto aprobado por la Asamblea Nacional Extraordinaria.
 - Disco compacto que contiene cuadros comparativos de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación, así como el texto aprobado por la Asamblea Nacional Extraordinaria.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la DEPPP auxilió a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la documentación presentada por la Agrupación, a efecto de verificar que los actos de preparación, integración, instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiocho de septiembre del presente año, se apegara a la normativa estatutaria aplicable.
7. La Asamblea Nacional de la Agrupación cuenta con la atribución de modificar sus Documentos Básicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 17, de su propia norma estatutaria, que a la letra establece:

“ARTÍCULO 17

Corresponde en forma única a la Asamblea Nacional la modificación o derogación de la Declaración de Principios, Programa de Acción y de los Estatutos, salvo lo indicado en los artículos transitorios de los presentes Estatutos. (...)”

8. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la DEPPP, analizó la documentación presentada por la Agrupación. Del estudio realizado se constató que la preparación, integración, instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la Asamblea Nacional Extraordinaria, de veintiocho de septiembre del año en curso, se realizaron con apego a lo

previsto en los artículos 11, 15, 16, 18, 21-A, 35 y 37 de los Estatutos vigentes de la agrupación, en razón de lo siguiente:

A. Asambleas Estatales.

- a) Conforme a los artículos 21-A, párrafo segundo y 35, párrafo segundo de los Estatutos, las convocatorias a las Asambleas Estatales se colocaron en las oficinas de sus respectivas sedes con un mes de anticipación y fueron signadas por la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.
- b) Toda vez que, ninguna de las Asambleas Estatales cumplió con el quórum establecido en el artículo 35, párrafo cuarto de la norma estatutaria aplicable, se llamó a los integrantes de las mismas en segunda convocatoria, con al menos 8 días de diferencia, acorde a lo establecido en el párrafo tercero del artículo antes mencionado.
- c) Conforme a lo establecido en los artículos 11, párrafo primero; 15, párrafo primero, fracción V; 16; 35, párrafo cuarto y 37 de los Estatutos, las Asambleas Estatales sesionaron en segunda convocatoria con los asistentes presentes y aprobaron por unanimidad la integración de sus respectivos Comités Ejecutivos Estatales, así como los 15 delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria.

B. Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

- a) Acorde con el artículo 18 de los Estatutos, la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria fue expedida por la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y firmada por los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales, con por lo menos un mes de anticipación, misma que contiene orden del día, lugar, fecha y hora de celebración.
- b) Conforme al artículo 21-A, párrafo primero de la norma estatutaria aplicable, la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria se notificó vía telefónica a sus integrantes y se publicó en la sede nacional de la Agrupación.

- c) La Asamblea Nacional Extraordinaria se constituyó con la presencia de 145 de los 151 integrantes, lo que representa el 96.03%.
 - d) Los integrantes de la Asamblea Nacional Extraordinaria aprobaron por unanimidad las modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación, por lo que se cumple con el artículo 11 de los Estatutos.
- 9. Como resultado del análisis realizado en los considerandos que anteceden, se confirma la validez de la Asamblea Nacional Extraordinaria, y se procede al estudio de las reformas realizadas a los Documentos Básicos de la Agrupación.
- 10. Respecto de las modificaciones a la Declaración de Principios, contenidas en el título del documento y en el segundo párrafo; así como a las modificaciones realizadas al Programa de Acción, contenidas en el título del documento y en los párrafos décimo tercero al décimo octavo, se advierte que resultan procedentes, pues fueron realizadas en ejercicio de su libertad de autoorganización y buscan adecuar dichos documentos básicos a la modificación estatutaria relativa al cambio de su denominación.
- 11. Por lo que hace a las modificaciones realizadas a los Estatutos, éstas serán clasificadas conforme a lo siguiente:
 - a) Se deroga del texto vigente: artículo 6, párrafo primero, fracción IV.
 - b) Adecuación a la normatividad electoral vigente: artículos 4; 5; 31, párrafo primero, fracciones IV y V; 32; 34; 35; 37 y 41.
 - c) Aquellas modificaciones que sin referirse directamente a los elementos que determinan la democracia al interior de la Agrupación sí se refieren a la estructura y organización de diversos aspectos de su vida interna, que cabe referirlos al ejercicio de su libertad de autoorganización, y que no contravienen las disposiciones legales y constitucionales aplicables: artículos 1; 2, párrafo primero; 3; 6, párrafo primero, fracciones I y IV; 7; 8; 9; 10, párrafo primero, fracción II; 12, párrafo primero, fracciones II, III, IV y V; 13, párrafo primero, fracción III; 14, párrafo primero; 15, párrafo primero, fracción V; 17; 18; 21, párrafo primero; 24, párrafo primero, fracción I; 26; 27, párrafo primero,

fracciones IV y V; 29, párrafo primero, fracciones I, II y III; 33; 34; 38, párrafo primero, fracciones I y II; 40, párrafo primero, fracciones I, II y III; 42; 43 y 45.

Los artículos de los Estatutos de la Agrupación señalados en los incisos a) y b) de este Considerando no han de ser objeto de valoración por parte de esta autoridad electoral, toda vez que fueron derogados, o bien, son adecuaciones a la normatividad electoral vigente, por lo cual no contienen modificaciones sustanciales que afecten el sentido del texto vigente, por lo que conforme al principio de seguridad jurídica, no es factible que esta autoridad emita un nuevo pronunciamiento en virtud de que ya fueron motivo de una declaración anterior.

Los artículos vertidos en el inciso c) se analizan en el siguiente considerando.

12. En lo relativo a las reformas señaladas en el considerando 11, inciso c) de la presente Resolución las mismas se refieren a la sustitución de los términos asociación u organización por Agrupación Política Nacional y militantes por asociados; al cambio de la denominación de la Agrupación, de “Parlamento Ciudadano Nacional” a “México Adelante”, así como de su lema y emblema; se adicionan diversas atribuciones correspondientes al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tales como expedir nombramientos internos y documentos externos propios de las actividades de la Agrupación, realizar cualquier trámite o promoción ante el Instituto Nacional Electoral u otra autoridad federal, estatal o municipal y nombrar o remover al personal directivo o de administración.

Respecto al cambio de la denominación de la Agrupación, es preciso señalar que, de la literalidad del sustantivo propio “México” no se advierte que en ningún caso exista derecho exclusivo para usarlo, dado que este vocablo en la denominación de una agrupación o partido político no conduce al incumplimiento del objeto para el que están previstos (caracterizarlos y diferenciarlos), sino que esto sólo se puede dar en el caso de que su combinación produzca una denominación similar o semejante que pueda confundir a la ciudadanía.

Atendiendo a la naturaleza y origen del concepto “México” como país, no puede concebirse como unívoco o de propiedad exclusiva, debiéndose tomar en consideración que distintas agrupaciones o partidos políticos, coinciden en

ubicar al país como principio o fin último de sus propósitos, sin que ello origine confusión.

En atención a esto, legalmente no podría considerarse que existe el derecho de uso exclusivo de tal sustantivo, sino que, por el contrario, existe plena libertad para su uso, siempre con la previsión de que la denominación que formen no genere confusión en la ciudadanía, para lo cual podría servir como elemento distintivo la combinación que se le da, como el orden y lugar en que se empleen con otras palabras.

Por lo que, el uso de la locución “México” no constituye un elemento de confusión suficiente.

Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas resultan procedentes toda vez que se realizaron en ejercicio de la libertad de autoorganización de la Agrupación, y las mismas no contravienen el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

13. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y legalidad de las modificaciones realizadas a los Documentos Básicos de la Agrupación, conforme a los textos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
14. El resultado del análisis del cumplimiento señalado en los considerandos anteriores se relaciona como ANEXOS UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO y SEIS denominados: “Declaración de Principios”, “Programa de Acción” y “Estatutos”; así como “Cuadro Comparativo de la Reforma a la Declaración de Principios”, “Cuadro Comparativo de la Reforma al Programa de Acción” y “Cuadro Comparativo de la Reforma a los Estatutos”, mismos que en cinco, cinco, doce, DOS, DOS y DIECIOCHO fojas útiles, respectivamente, forman parte integral de la presente Resolución.
15. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de diciembre del presente año, aprobó el Anteproyecto de Resolución en cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales somete a la consideración del Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8 y 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1 y 44, párrafo 1, incisos j) y jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Parlamento Ciudadano Nacional”, conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en términos de los considerandos de esta Resolución.

Segundo. Procede el cambio de denominación de la Agrupación Política Nacional “Parlamento Ciudadano Nacional” para ostentarse como “México Adelante”.

Tercero. Se ordena a la Agrupación Política Nacional “México Adelante” para que en un plazo de noventa días, contado a partir de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, formalice ante las autoridades fiscales y/o administrativas competentes, el cambio de denominación aprobado por este Consejo General, y una vez hecho lo anterior entregue a este Instituto copia de los documentos que así lo acrediten.

Cuarto. Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento, en términos de lo razonado en el Considerando Cuarto de esta Resolución.

Quinto. Comuníquese la presente Resolución al Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación para que, a partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rijas sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.

Sexto. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DE **MÉXICO ADELANTE**

La democracia tiene como fundamento la honra y dignidad del ser humano e impulsa su desarrollo más allá que cualquier otra forma de gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, obliga necesariamente al Estado a evitar la intromisión ilegal en la vida privada de las personas. Promueve el desarrollo cívico del ser humano al reconocerle su capacidad de participar en el gobierno, involucrándose en la vida pública, en la toma de decisiones con base en el libre flujo de información, en la discusión abierta para promocionar el bien público con apego a los valores democráticos, y que son: el respeto a la dignidad humana, el apego a la legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.

México Adelante y sus asociados se obligan a observar la Constitución y respetan las leyes e instituciones que de ella emanen; así mismo se obligan a promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Se debe promover el avance de la cultura democrática de los mexicanos a través de todos los medios posibles. Ello requiere hacer explícito su fundamento: la igualdad de dignidad, derechos y deberes de todas las personas, así como el reconocimiento de los mismos a las generaciones del futuro.

La sociedad a la que aspiramos es la sociedad tolerante, democrática y pluralista. Una democracia que persista en su voluntad de promover la equidad, la fraternidad, y la libertad. Somos partidarios de la cooperación social, estamos convencidos que, el orden social se construye mejor en el sentido de responsabilidad de los ciudadanos y en su buena disposición para obrar sin el temor a las sanciones. Los ciudadanos organizados, ingresamos para cumplir con nuestro deber democrático y hemos comprendido que no puede haber democracia donde no haya un pueblo dispuesto a ejercer el poder.

Nos proponemos dignificar a la política no haciendo política a nombre del pueblo, sino con y junto a él, nos esforzaremos porque el pueblo se enamore de México y recupere su confianza en sí mismo y participe activamente en el destino de nuestra Nación, sienta la Constitución como suya y el gobierno como algo propio.

Los ciudadanos organizados aspiramos al gobierno democrático, gobierno por la mayoría y tolerancia ante el disenso, libertad de pensamiento, palabra, prensa e igualdad de todos ante la Ley. Sin embargo, ni divinizamos a la mayoría ni la consideramos infalible; no suponemos que constituya de por sí, prueba de la bondad de una política, en orden al bien común, el que los más la apoyen. Nunca recomendaremos la dictadura de la mayoría ni la opresión violenta de la minoría.

Aspiramos a estructurar un sistema político que permita la pacífica colaboración y fomenta la progresiva ampliación e intensificación de las relaciones sociales. Pero además de lo anterior, la democracia es la posibilidad de cambiar de gobierno de manera civilizada, a través del voto, y ésta es la gran ventaja, pero sin agotarse en ella. La democracia así vista, es la posibilidad que tienen los electores para ratificar a los buenos gobiernos y deponer a los malos.

La democracia, como la entendemos, es un régimen político donde todos, gobernantes, legisladores, magistrados, partidos políticos, empresarios, trabajadores del campo y la ciudad en general, se comprometen a convivir pacíficamente, respetando cada uno la esfera de libertad del otro y subordinando esa libertad a valores humanos y sociales absolutos e intocables. La democracia es un sistema de derechos de participación política. Ella hace posible que los ciudadanos ejerzan influencia en las decisiones políticas, pero la democracia no constituye aún una garantía para el desenvolvimiento de una sociedad contractual y una democracia consensual. Por lo tanto, ella sólo realiza el valor básico de la participación, e incluso sólo en el ámbito político. Las mayorías corren el riesgo de tratar a las minorías de las formas más autoritarias, con intolerancia, sin el debido respeto al derecho de autodeterminación.

Somos partidarios de la democracia participativa, es decir, que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que decida, también, en buena medida, por sí mismo. Creemos en completar la democracia representativa con formas de democracia participativa, tales como iniciativas legislativas populares, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas independientes, plebiscito, referéndum y aceptación de iniciativas ciudadanas de todo tipo. Estos elementos de democracia participativa preservan a las mayorías de caer en la tentación de silenciar a las minorías y quitarles su libertad de acción: son

mecanismos que permitirán profundizar los niveles democráticos, que renovarán la vida política del país y que reducirán el poder de las élites políticas.

Como premisa fundamental se encuentra la consolidación, fortalecimiento y desarrollo del Estado Soberano, constitucional y democrático, que tiene como principio constitutivo la soberanía popular, cuyo fundamento se encuentra en la existencia de un régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y en general a la sociedad organizada, éticos en cuanto a la probidad en la imparcialidad de sus decisiones y apoyos favoreciendo la justicia y apegándose a las obligaciones constitucionales, señalándose por sus prácticas eminentemente democráticas a fin de contribuir a la educación y formación de un ciudadano demócrata e interesado en el quehacer político, un ciudadano que conciba y aplique la política de manera tolerante y racional, a fin de originar una ciudadanía capaz de integrar, negociar y concertar soluciones veraces con el consenso de la mayoría y aceptables para el tejido social, ubicar en tiempo y forma las controversias producto del conflicto, inseparable a toda vida en sociedad, y hacer que se cumplan los acuerdos tomados en beneficio del pueblo.

Fomentaremos la soberanía nacional y bajo ningún concepto aceptará pacto o acuerdo alguno que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos extranjeros, no aceptamos financiamiento prohibido por **la Ley General** de Instituciones y Procedimientos Electorales ni aceptamos subordinación alguna de tipo religioso.

La sociedad civil debe participar y ejercer con responsabilidad el derecho a la información y la transparencia, para avanzar en la calidad ética de la relación entre entidades gubernamentales, ciudadanos y sus organizaciones, en tanto que el gobierno debe abrir sus procesos de decisión y acción a la ciudadanía. Se han dado pasos positivos y valiosos en esta materia, que requieren ser consolidados.

México es una nación con historia, dignidad y futuro. Ni el comercio ni la globalización de las comunicaciones pueden substituir la decisión política que da sustento a nuestra comunidad nacional. Después de veinte años de prevalencia de la agenda económica de la economía global sobre el proyecto de nación, es el momento de subordinar la dinámica económica al proyecto ético-político del país. Sin proyecto productivo propio, en la era de la economía global, la nación no puede realizar sus objetivos sociales, culturales y políticos.

La política de desarrollo económico debe ser integral y promover la creación de riqueza y su distribución de manera equitativa entre la población, los factores y sectores de la producción y las regiones del país. En los últimos veinte años se ha aceptado críticamente la agenda impuesta del Consenso de Washington, que no tiene como objetivo el desarrollo económico. Se ha adoptado una postura pasiva ante los mercados y se ha reducido de manera irracional el tamaño, capacidades y responsabilidades del estado para la promoción de la justicia y el desarrollo económico. La política monetaria ha conducido la política salarial, resultando en una tendencia constante a la reducción del poder adquisitivo del salario y por tanto del mercado interno. Es indispensable la modificación de la economía política, para tener una verdadera política de desarrollo económico, que permita altas tasas de crecimiento con control de la inflación.

La competitividad nacional no se ha establecido aún como el referente de la política económica. Sin dejar de considerar la moderación de la inflación como objetivo de extraordinaria importancia, se requiere alcanzarlo mediante el aumento de la producción y la productividad y no sólo mediante la política monetaria recesiva, a través del denominado "corto".

La prioridad de México debe ser el crecimiento económico, el apoyo a las empresas nacionales, el mercado interno y el empleo, sin descuidar los mercados globales. Ello es imposible sin un método de trabajo coordinado entre empresarios, sindicatos, gobierno y el sector conocimiento. Las formas institucionales del pasado no se han actualizado para estos propósitos, en función de objetivos estratégicos que se deben alcanzar en cada una de las cadenas productivas.

El sistema de planeación democrática plasmado en la Constitución refleja aún el centralismo presidencialista. Éste requiere ser reformado y establecer mecanismos y procesos para la conceptualización, diseño, consenso, determinación por derecho positivo, ejecución, evaluación política y modificación de políticas de Estado, con la participación de las fuerzas políticas y organizaciones productivas y sociales. Por ello se debe promover la conformación de dicho **consenso** y hacer compatible la planeación nacional y la que conducen las entidades federativas.

No se ha avanzado en el compromiso del Poder Ejecutivo de construir, con la participación de la sociedad organizada, una visión del desarrollo nacional a largo

plazo, que se ha definido como 25 años. Se requiere actuar con celeridad, pues es indispensable la reflexión y propuesta de un desarrollo para el siglo XXI, capaz de dar una adecuada perspectiva a las decisiones presentes.

La mayor parte de los programas sectoriales 2001-2006 tienen que ver con el desarrollo económico: Programa Nacional de Financiamiento 2001-2006; de Desarrollo Empresarial; de Política Laboral; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Programa Sectorial Agrario; Programa Especial de Ciencia y Tecnología; de Comunicaciones y Transportes; de Turismo; de Vivienda; de Mejora Regulatoria; de Comercio Exterior y Promoción a la Inversión. Cabe señalar que a pesar de la demanda explícita de los industriales; a la fecha no se tiene un programa sectorial de política industrial.

Los programas sectoriales representan esfuerzos para dar contenido y visión a las acciones gubernamentales. Su enfoque metodológico es diverso y no se ha establecido la sinergia entre los mismos. Sin embargo, alcanzar los objetivos que plantean, sólo será posible si se deciden y llevan a cabo las modificaciones propuestas de la economía política. El método de planeación es cuestión sustantiva y no meramente de operación.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y de las entidades federativas, pueden quedar en referentes sin eficacia para transformar la realidad, en tanto no se modifique la actual economía política. El límite para su realización lo establece la raquítica fuerza presupuestal, que se convierte en el verdadero techo de lo posible.

La inercia de gobernar sobre la sociedad y no con la sociedad aún prevalece en múltiples espacios burocráticos. Se requiere que el gobierno lleve a cabo sus responsabilidades, mediante un trabajo más cercano y corresponsable con las organizaciones de trabajadores, empresarios y especialistas para hacer las modificaciones que requiere el modelo de desarrollo. Sin éstas, la economía no avanzará de acuerdo a las estimaciones gubernamentales, por el efecto conjunto de los limitantes estructurales mencionados.

Se debe establecer una política de estado que incorpore: desarrollo industrial, desarrollo de programación en español y de sitios en el ciberespacio en nuestro idioma, formación de especialistas, estrategias de desarrollo de infraestructura,

acuerdo con los operadores, desarrollo institucional de los municipios para la difusión de la red en pequeñas comunidades, desarrollo de la cibercultura en las empresas, financiamiento de equipos para su acelerada difusión entre la población de menores ingresos y estudios sistemáticos sobre el cambio cultural. El programa e-México debe avanzar a una visión integral.

México es un país con importante potencial energético y debe desarrollar todas las fuentes de energía de hidrocarburos, petróleo, electricidad, en todas sus fuentes hidro, gas, nuclear, solar, geotermia e hidrógeno. La cuestión central es considerar al sector energético como palanca del desarrollo productivo, industrial y tecnológico de la nación. Por ello es inadecuado como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, avanzar hacia una Alianza Energética de América del Norte, pues en las actuales condiciones no tiene otro significado que ofrecer recursos naturales sin valor agregado. Tomar acuerdos de esta naturaleza sin proyecto nacional acordado y decidido con la participación de la sociedad mexicana, conduciría a riesgos innecesarios para el país.

En virtud de lo anterior, se debe mantener la actual definición constitucional de sectores estratégicos, bajo control exclusivo del estado, lo que se refiere a la explotación de los hidrocarburos, así como la propiedad sobre las redes de transmisión de energía eléctrica. México no debe hacer modificaciones constitucionales para hacer las inversiones que se requieren en esta materia, sino modificar el régimen fiscal de las empresas paraestatales, para dotarlas de capacidades crecientes de inversión y aumentar su autonomía de gestión. En este marco, se deberá planear conjuntamente con el sector privado, el desarrollo del sector, para cubrir de manera creciente las demandas del sector paraestatal, con la oferta de bienes, tecnologías, consultoría, ingeniería y servicios ofertados por empresas nacionales.

PROGRAMA MÉXICO ADELANTE

Este es un concepto vacío de contenido positivo: la agenda del futuro es el desarrollo de todas y cada una de las personas y comunidades. Se debe formular el problema en términos positivos y establecer con criterios éticos, el establecimiento de condiciones para el desarrollo de toda persona, con una clara definición de responsabilidades, derechos y deberes, para personas, comunidades e instituciones públicas. Se requiere orientar el esfuerzo hacia la generación de desarrollo humano y riqueza material y no sólo superar la condición de pobreza. El desarrollo humano debe ser el objetivo a alcanzar para todas y cada una de las personas. Realizar este imperativo ético requiere la modificación de la actual economía política y ofrecer verdaderas oportunidades de desarrollo económico y de empleo para las actuales y futuras generaciones de mexicanos. Perpetuar el actual modelo económico sin modificación alguna, muy probablemente sólo dará continuidad a las tendencias al aumento de la pobreza.

La política social debe estructurarse alrededor de las necesidades resultantes del cambio demográfico, y establecer políticas para anticiparlas y crear las condiciones más favorables a su satisfacción. Existen previsiones sobre la probable evolución de la población hasta el 2050, que constituyen un referente sobre lo que se requiere hacer a futuro. Esto debe ser el eje de las definiciones estratégicas de la política social.

La política de desarrollo social debe considerar de manera integral a las instituciones de seguridad social, cuya viabilidad financiera requiere ser asegurada. En estas instituciones se tiene tal vez una de las explicaciones de la estabilidad política y paz social del país en el último medio siglo, pues a través del IMSS y el ISSSTE, se ofrecen servicios médicos y seguridad social para 70 millones de mexicanos, así como la atención de 700 mil partos y 2.5 millones de operaciones cada año. Estas instituciones deben ser fortalecidas a futuro, como lo ha comprometido el Ejecutivo Federal.

Somos mexicanos, hombres y mujeres del campo, de las clases populares e indígenas conscientes de que a pesar de la grave situación de desesperanza y desastre económico, político y social en que se debate el campo mexicano y la sociedad en general, hemos valorado serenamente diferentes vías y propuestas de

acortamiento del camino que recorten nuestras comunidades y pueblos, hemos valorado objetivos, medios y resultados de la aplicación práctica de diferentes paradigmas políticos, pero sobre todo hemos valorado las señales que nuestro pueblo nos envía y que se expresa en urnas; la creación de escenarios transformadores, de nuestra realidad económica, política y social por métodos democráticos, demanda de millones de mexicanos. Y la advertencia de que sin modificar las condiciones de miseria e injusticia que impulsa a luchadores sociales a adoptar la violencia armada como forma de lograr justicia social, democracia y desarrollo sustentable, surgirán una y otra vez los brotes insurreccionales. Nos imponemos el deber de convencer a la sociedad y al gobierno de convertir futuros escenarios de guerra en escenarios transformadores, de discusión, debate y propuesta; privilegiaremos el diálogo y la reflexión y optaremos por el camino democrático y sus formas para recuperar soberanía popular e incidir en el rumbo del país.

Favorecemos una política social que empareje las condiciones de vida distintas, cuyo objetivo sea socorrer a los ciudadanos y grupos sociales desfavorecidos y capacitarlos para que puedan afrontar con dignidad y autonomía los azares de la existencia. Su objetivo no es organizar sistemas de asistencia vitalicia, sino esforzarse por secundar a las personas y grupos sociales de forma tal que puedan prescindir lo más pronto posible del auxilio social. La política social que proponemos invoca la dignidad del hombre y cree en la fuerza de su personalidad. Por eso atribuye al individuo y al grupo social desfavorecido un mayor poder de autocuración. La activación de la ayuda propia como respuesta a la promoción y el estímulo confirma su concepción. Una vez que se ha alcanzado la meta; esto es, la activación de la autoayuda, la asistencia se hace superflua. También las instituciones sociales se entienden como temporales. El Estado debe asumir deberes asistenciales donde sea preciso y durante el tiempo que sea necesario, pero debe suprimir las prestaciones cuando estas sean prescindibles, y afectar los fondos liberados al alivio de las necesidades reales que hayan surgido en otros campos.

Un futuro social promisorio requiere un trabajo conjunto, que complemente salario suficiente, salud y educación básica, requiere enfatizar la formación ciudadana, los valores cívicos y el respeto a la ley. Si no hay economía de crecimiento, difícilmente se aspirará a asignar el 8% del PIB mínima necesaria para resolver los problemas educativos del país. La educación pública necesita aumentar el gasto por

estudiante, mismo que ha disminuido considerablemente los anteriores diez años. Se estima que ha decrecido creando menos de la mitad del que se asignaría en 1993.

La educación pública, logro disminuir las posiciones de oficio en México, se reconoce, con todo el avance en la materia. Ésta educación, sin embargo, no sólo debe ser vínculo para la movilidad social, sería también generadora de ciencia y tecnología. La educación media y superior pueden ser detonadores de procesos productivos importantes, por lo que ella debe vincularse con una política de desarrollo económico con dependencia y soberanía de otorgar riqueza para todos, equidad y justicia social.

Sociedad y gobierno, se deben comprometer en la construcción de una educación básica de calidad que desarrollen las facultades de las personas, que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los seres humanos en sus personas y social. Este tipo de educación requiere también de acuerdos y aulas en buenas condiciones, materiales, con el equipamiento necesario para el desempeño de novedosas prácticas educativas, especialmente se necesitan verdaderas unidades educativas.

Es necesario que los recursos económicos humanos y materiales, lleguen a todos los negocios, para abatir los rezagos en aquellas localidades alejadas y dispersas o en muchas de las zonas urbanas marginadas de la gran mayoría de las ciudades más pobladas.

Las cifras estadísticas actualizadas y la evaluación que la Organización de las Naciones Unidas hacen referentes a los niveles de vida de la población de México, el analfabetismo, la pobreza extrema de las comunidades indígenas y regiones marginadas, la insalubridad, la desnutrición, el desempleo, el déficit en vivienda y servicios, el monto de la deuda interna y deuda externa, el monto de la inversión extranjera, la importación de alimentos, la exportación de materias primas principalmente petróleo crudo, el retraso y la dependencia tecnológica, la emigración de la juventud y de la población económicamente activa, la inseguridad pública, el abstencionismo electoral, la impunidad, la represión, el narcotráfico, el surgimiento de grupos armados paramilitares y guerrilleros. etc., nos conduce a la conclusión inequívoca de que efectivamente nuestro país está en crisis económica, política, social y ambiental, y que ha perdido parte importante de su soberanía

nacional. Que ésta solo puede reconstruirse con la participación patriótica, consciente y decidida de la mayoría de sus ciudadanos, para realizar profundos cambios en la base misma de la sociedad y en la estructura del estado para corregir el rumbo de la Nación.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad social para efecto de dar cumplimiento a nuestros postulados de índole político, económico y social nos proponemos organizar a nuestros afiliados hombres y mujeres para que ejerzan las prerrogativas y obligaciones ciudadanas en los términos que estipulan los artículos de la Constitución General de la República.

Para ello afiliaremos a los ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad de manera voluntaria y pacífica directamente en sus centros de estudio, trabajo o de vida y sembraremos nuestra estructura organizativa conforme a lo señalado en nuestros estatutos que rigen nuestra vida interna.

En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de **México Adelante**.

México Adelante tomará las siguientes medidas para formar ideológica y políticamente a los afiliados infundiéndoles el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política: a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se formarán círculos de estudio; c) se invitará a eventos realizados por la propia organización o por otra institución; d) se invitará a respetar a los adversarios; e) se invitará a respetar los derechos de los adversarios en la lucha política.

México Adelante tomará las siguientes medidas para preparar la participación activa de sus asociados en los procesos electorales: recomendará que se fijen bien tanto en los partidos por los que voten como en los candidatos; recomendará que conozcan sus propuestas, sus currículas; promoverá que practiquen el sufragio para disminuir el abstencionismo electoral.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS NACIONALES

México Adelante se propone las modificaciones necesarias para enriquecer y fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin de incorporar figuras como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la aceptación de iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes, de tal forma que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que también ejerza de manera directa el rumbo de su gobierno.

Para **México Adelante** la democracia no sólo es una abstracción ni se reduce a la participación electoral, sino que se traduce en un conjunto de derechos de los ciudadanos que les permitan vivir en paz y armonía y que les permitan fortalecer su condición soberana, para traducirlos en acciones de gobierno. Tales derechos son la alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y la salud y fortalecen la vida democrática.

México Adelante propone crear una nueva política y un nuevo trato del Estado mexicano hacia a los ciudadanos de la república.

=>Es necesario crear las condiciones económicas, políticas y sociales que estructuren un verdadero cambio, a favor de los trabajadores del país.

=>Por la revisión y modificación al artículo 27 constitucional que disminuya el límite de la pequeña propiedad agrícola y ganadera, que prohíba la propiedad de la tierra a las sociedades anónimas por acciones que encubren latifundios, que proteja la tierra ejidal como patrimonio familiar y sea en los hechos imprescriptible, inalienable e inembargable.

=>Por la reglamentación de la fracción xx del artículo 27 constitucional mediante la promulgación de la ley de desarrollo rural integral.

=>Por la promulgación de una ley de amnistía para todos los campesinos e indígenas y luchadores sociales presos o perseguidos por defender sus legítimos derechos de la tierra y las causas sociales.

ANEXO DOS

=>Por el reconocimiento a las organizaciones campesinas, indígenas y sociales en sus distintas formas, como entidades de interés público, y como interlocutores válidos de los intereses de la sociedad rural frente al estado.

=>Por la entrega inmediata a los campesinos de los predios donde existen concesiones ganaderas vencidas, o concesiones de la comisión nacional del agua entregada a particulares y prestanombres.

=>Por la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas en las que desde hace 9 años no existe actuación de la autoridad agraria.

=>Por que se instituya el Programa de Organización y Fomento como una política institucional.

=>Que se creen los Fondos para el Desarrollo Agrario y Fondos para la creación y consolidación de la micro industria como un instrumento al alcance de la mano de los campesinos y de los pequeños y medianos empresarios del país.

=>Que exista un reconocimiento constitucional del derecho a la tierra como un derecho al trabajo de los campesinos sin tierra y del fomento a las actividades productivas en todas sus ramas y que se creen instrumentos para lograrlo.

=>Que se instrumente un Programa de Regularización de Tierras, sobre aquellas que poseen campesinos en calidad de poseionarios en propiedad privada o ejidal así como un programa de Fomento y Financiamiento a todas la actividades productivas del país.

ESTATUTOS
DE LA DENOMINACIÓN

ARTÍCULO 1

La **Agrupación Política Nacional** se denominará “**México Adelante**”, es una **Agrupación** Política Nacional de ciudadanos mexicanos, con la disposición de participar de manera pacífica y por la vía democrática en la vida política del país.

DEL OBJETO

ARTÍCULO 2

La **Agrupación Política Nacional** se constituye con el objeto siguiente:

- I.- Participar pacíficamente en la vida política del país.
- II.- Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como contribuir a la creación de una opinión pública mejor informada.
- III.- Solicitar registro ante el Instituto **Nacional** Electoral como Agrupación Política Nacional.
- IV.- Realizar actividades editoriales, de educación y capacitación política, realizar investigación económica, política y social.

ARTÍCULO 3

El lema de la **Agrupación Política Nacional** es “**Por ti y Contigo, ¡Vamos Adelante!**”.

El emblema de la **Agrupación Política Nacional** “**MÉXICO ADELANTE**” es un rectángulo en color gris y quien en la parte inferior lleva la leyenda **Agrupación Política Nacional** también en color gris claro y en la parte superior de (“**MEXICO**”) en la “**O**” lleva tres plumas simulando un penacho las plumas de abajo color verde (pantone 7481), la de en medio Color fiusha (pantone 248) y la de arriba Color Naranja Brillante (pantone bright red). Las siglas cambian de “**PCN**” a “**MA APN**”. Los colores que la **Agrupación Política Nacional** usará son verde, fiusha, naranja y gris.

ANEXO TRES



DEL DOMICILIO

ARTÍCULO 4

El domicilio de **Agrupación Política Nacional** estará en la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer delegaciones, comités o representaciones en cualquier otro lugar del país.

DE LA NACIONALIDAD

ARTÍCULO 5

La nacionalidad de la **Agrupación Política Nacional** es mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación alguna en la **Agrupación Política Nacional** y ésta no admitirá como asociados a personas de nacionalidad distinta de la mexicana. Nos obligamos a no aceptar pacto o acuerdo en cualquier forma que nos sujete o subordine a cualquier extranjero, organización internacional o partido político extranjero. Así mismo no aceptamos o pedimos apoyo de cualquier tipo proveniente de ministros de los cultos religiosos o de sectas, o de organizaciones religiosas e iglesias, o de cualquiera de las personas e instituciones que **la Ley General** de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe como proveedores de financiamiento.

DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 6

El patrimonio de la **Agrupación Política Nacional** se integrará:

I.- Con las aportaciones voluntarias, ordinarias o extraordinarias, de los **asociados** o simpatizantes.

II.- Con los rendimientos financieros.

III.- Con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran.

Derogado.

IV.- Con los ingresos provenientes de sorteos, bailes, y demás actividades lícitas y permitidas que realice la **Agrupación Política Nacional**.

ARTÍCULO 7

El patrimonio de la **Agrupación Política Nacional** se destinará exclusivamente al cumplimiento del objeto social, por lo que no podrá ser aplicado para otros fines.

DE LA DURACIÓN

ARTÍCULO 8

La duración de la **Agrupación Política Nacional** será de 99 años.

DE LOS ASOCIADOS

ARTÍCULO 9

Son asociados las personas que en este acto constituyen la **Agrupación Política Nacional** y aquellas personas que cumplan con los requisitos de ingreso señalados en estos Estatutos.

ARTÍCULO 10

Será asociado quien reúna los siguientes requisitos:

I.- Ser mexicano por nacimiento o naturalización, en pleno goce de sus derechos civiles y Políticos y tener dieciocho años o más.

II.- Haber presentado y suscrito cédula de afiliación de manera libre, individual y pacífica y cumplir con los documentos básicos, a saber, Principios, Programa de Acción y los Estatutos de la **Agrupación Política Nacional**.

ARTÍCULO 11

La toma de decisiones de los asociados o sus representantes adoptará la regla de mayoría simple (cincuenta por ciento más uno de los asistentes) o especial según lo establecen los presentes estatutos, asimismo, las resoluciones tomadas en

asambleas u órganos equivalentes serán válidos para todos los asociados, incluidos los disidentes o ausentes.

Se tendrán por instaladas legalmente las sesiones de todos los órganos cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus integrantes.

ARTÍCULO 12

Son derechos de los asociados:

I.- Gozar de voz y voto en las asambleas generales y convenciones, sea de manera directa o a través de delegados cuando así lo establezca la convocatoria respectiva.

II.- Participar en los órganos de dirección y administración de la **Agrupación Política Nacional** de acuerdo a los presentes Estatutos.

III.- Renunciar a la **Agrupación Política Nacional** en cualquier tiempo mediante aviso por escrito.

IV.- Disfrutar los beneficios que otorgue la **Agrupación Política Nacional**.

V.- Solicitar y recibir la información relacionada con el objeto de la **Agrupación Política Nacional** ante los órganos correspondientes de la **Agrupación Política Nacional**.

VI.- Elegir y ser electos en Asamblea Nacional como candidatos a puestos de elección popular cuando se postulen mediante acuerdo de participación en elecciones constitucionales con algún Partido Político, en los términos de estos Estatutos y los que establezcan las leyes electorales vigentes.

ARTÍCULO 13

Son obligaciones de los asociados:

I.- Cumplir con las disposiciones que emanen del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de gobierno interno.

II.- Cubrir las aportaciones a las que de manera voluntaria se haya comprometido.

III.- No realizar acciones contrarias a los principios e intereses de la **Agrupación Política Nacional**.

VI.- Guardar orden, respeto y tolerancia hacia los demás compañeros en los procesos de desahogo de la orden del día de las asambleas.

DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

ARTÍCULO 14

Para el logro de sus objetivos la **Agrupación Política Nacional** se estructura de la siguiente manera.

ANEXO TRES

En el ámbito nacional

I.- La Asamblea Nacional.

II.- El Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez está integrado por los siguientes funcionarios:

- a) Un presidente;
- b) Un secretario de finanzas;
- c) Un secretario de investigación;
- d) Un secretario de capacitación política; y
- e) Un secretario de tarea editorial.

III.- Las Comisiones Nacionales Permanentes de Honor y Justicia y la de Asuntos Electorales.

En el ámbito estatal:

I.- Un Comité Ejecutivo Estatal, que a su vez estará integrado por los siguientes funcionarios:

- a) Un presidente;
- b) Un secretario de finanzas;
- c) Un secretario de investigación;
- d) Un secretario de capacitación política; y
- e) Un secretario de tarea editorial;

ARTÍCULO 15

La Asamblea Nacional es el órgano supremo de **México Adelante**, sus decisiones son obligatorias para todos sus **asociados** y estará formada por los siguientes integrantes o sus suplentes legales:

I.- El Comité Ejecutivo Nacional;

II.- Los Presidentes de las Comisiones Nacionales Permanentes;

III.- Los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y **de la Ciudad de México**;

IV.- **3** delegados electos por cada entidad federativa en donde la agrupación tenga representación.

ARTÍCULO 16

Los delegados a la asamblea a la asamblea nacional serán nombrados por los Comités Ejecutivos Estatales y durarán en su cargo el tiempo que dure la asamblea nacional a la que fueron convocados.

ARTÍCULO 17

Corresponde en forma única a la Asamblea Nacional la modificación o derogación de la Declaración de Principios, Programa de Acción y de los Estatutos. Podrá decidir sobre la conveniencia de la disolución de la **Agrupación Política Nacional**. Los acuerdos que se tomen en la Asamblea Nacional se considerarán válidos con el voto, al menos, del 50 % más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional nombrará una mesa directiva integrada por un Presidente, un Secretario y un vocal para el desahogo de la orden del día.

ARTÍCULO 18

La Asamblea Nacional, se reunirá en forma ordinaria cada tres años. La que tenga el carácter de extraordinaria podrá ser convocada para tratar asuntos de urgente resolución, o los demás que se encuentran establecidos en los Estatutos, por uno o todos los representantes legales de **México Adelante** firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos, o por el 25 por ciento de los **asociados**. La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 19

La asamblea nacional decidirá la renovación, reelección o revocación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mismo que elegirá a los restantes integrantes del comité ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 20

Cuando en la Asamblea Nacional la votación esté empatada el Presidente de la mesa directiva tendrá voto de calidad, siendo la misma persona, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la mesa directiva.

ARTÍCULO 21

La convocatoria a la Asamblea Nacional ordinaria podrá ser realizada indistintamente por uno o todos los representantes legales de **México Adelante** firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos.

La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 21-A

La convocatoria para la Asamblea Nacional se hará mediante comunicación escrita, telefónica o electrónica a los integrantes de la Asamblea Nacional, mismos que se darán por notificados por este medio en caso de ser localizados, en el caso de que por causas ajenas a los convocantes los integrantes no sean localizados se darán por notificados exhibiendo la convocatoria en la oficina de la sede nacional. La convocatoria para la Asamblea Estatal se hará colocando la misma de manera visible en la oficina de la sede estatal. La convocatoria a reuniones del Comité Ejecutivo Nacional la hará el Presidente o Secretario de finanzas mediante comunicación escrita, telefónica o electrónica a sus integrantes, mismos que se darán por notificados por este medio en caso de ser localizados, en el caso de que por causas ajenas a los convocantes los integrantes no sean localizados se darán por notificados exhibiendo la convocatoria en la oficina de la sede nacional. La convocatoria a reuniones de las Comisiones Nacionales Permanentes, las harán los Presidentes de las mismas mediante comunicación escrita, telefónica o electrónica a sus integrantes, mismos que se darán por notificados por este medio en caso de ser localizados, en el caso de que por causas ajenas a los convocantes los integrantes no sean localizados se darán por notificados exhibiendo la convocatoria en la oficina de la sede nacional. Todas las convocatorias contendrán orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; en el caso de la asamblea estatal se deberá expedir cuando menos con tres días de anticipación a la fecha de la celebración de la primera asamblea (para elegir al primer Presidente del Comité Ejecutivo Estatal), para las posteriores asambleas estatales se expedirá la convocatoria con un mes de anticipación a la fecha de su celebración. En el caso de las reuniones de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal, así como de las Comisiones Nacionales Permanentes se convocará cuando menos con tres días de anticipación a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 22

Las Comisiones Nacionales Permanentes son:

- I.- De Honor y Justicia.
- II.- De Asuntos Electorales.

ARTÍCULO 23

Los presidentes, secretarios y vocales de las comisiones nacionales permanentes serán electos por asamblea de presidentes de los comités ejecutivos estatales, convocada al propósito por cualquiera de los representantes legales. Los integrantes de las Comisiones Nacionales de Honor y Justicia y de Asuntos

ANEXO TRES

Electores tendrán la responsabilidad de conducir sus acciones de manera transparente, independiente, profesional e imparcial.

Las Comisiones Nacionales estarán integradas por tres miembros, los cuales serán un Presidente, un Secretario y un Vocal. Las funciones de las Comisiones Nacionales serán establecidas en los Reglamentos que para cada una de ellas habrá de emitirse por parte de, al menos, la mayoría simple del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 24

La Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales tendrá las siguientes funciones:

- I.- Realizar el estudio de los perfiles curriculares de los aspirantes a candidatos de nuestra **Agrupación Política Nacional** a puestos de elección popular en caso de convenio con algún Partido Político Nacional.
- II.- La Comisión fijará una postulación democrática para seleccionar al o los candidatos a puestos de elección popular, dado el caso.
- III.- Conjuntamente con el presidente nacional firmará los convenios con el partido en cuestión.

ARTÍCULO 25

Las resoluciones de la Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales se harán con aprobación de mayoría de votos de sus integrantes.

ARTÍCULO 26

Ningún dirigente estatal o nacional de la **Agrupación Política Nacional** podrá ocupar de manera simultánea dos o más puestos directivos en los órganos nacionales y/o estatales en la misma **Agrupación Política Nacional**.

ARTÍCULO 26-A

En caso de ausencia del presidente del comité ejecutivo nacional o del comité ejecutivo estatal, el secretario de finanzas respectivo ocupará temporalmente el cargo hasta que concluya la ausencia o se realiza una nueva elección conforme a los presentes estatutos.

ARTÍCULO 26-B

Son facultades del comité ejecutivo nacional:

- a) Aprobar la convocatoria a asamblea nacional;

- b) Representar a la agrupación ante cualquier autoridad, a través de su presidente y/o secretario de finanzas
- c) Recibir el informe que presente de forma anual el secretario de finanzas.

ARTÍCULO 27

Corresponden al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes facultades:

- I.- Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus reuniones y ejecutar sus acuerdos.
- II.- Presidir las reuniones con los demás integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales y **de la Ciudad de México**.
- III.- Celebrar acuerdos y convenios con las direcciones de organizaciones y agrupaciones ideológicamente afines.
- IV.- Representar jurídica y legalmente a la **Agrupación Política Nacional** y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554 del código civil vigente para **la Ciudad de México** y sus correlativos en los demás Estados de la República.
- V.- Es facultad del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el expedir los nombramientos internos y documentos externos propios de las actividades, realizar cualquier trámite o promoción ante el Instituto Nacional Electoral o ante cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal; nombrar y remover al personal directivo o de administración que se considere necesario.**

ARTÍCULO 27-A

Las resoluciones de los asuntos específicos del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales, así como de las Comisiones Nacionales Permanentes se harán con la aprobación del 50% más uno de sus integrantes.

ARTÍCULO 28

El comité ejecutivo nacional durará seis años, lo mismo que los comités ejecutivos estatales y las comisiones nacionales permanentes.

ARTÍCULO 29

Son atribuciones del Secretario de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional:

- I.- Diseñar, operar y mantener actualizados los programas nacionales de **asociados**, así como el Registro Nacional de **asociados**, en coordinación con sus homólogos en todo el país.
- II.- Establecer programas nacionales, estatales y municipales de capacitación política, cívica, histórica y electoral para los **asociados** y público en general.

III.- Dictar y coordinar cursos, pláticas, conferencias, etc., relacionadas con el objeto social de la **Agrupación Política Nacional**.

IV.- Convocar a reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y ejecutar sus acuerdos.

ARTÍCULO 30

Son facultades del Secretario de Investigación del Comité Ejecutivo Nacional:

I.- Elaborar y coordinar los trabajos de Investigación económica, política y social.

II.- Participar en eventos de la política, la sociedad y la economía para orientar las investigaciones en función de las necesidades nacionales.

ARTÍCULO 31

Son funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:

I.- Recabar de los **asociados** las aportaciones ordinarias y extraordinarias y otorgar los recibos correspondientes.

II.- Llevar los registros de las cuentas corrientes que maneje la **Agrupación Política Nacional** y preparar los presupuestos de ingresos y egresos.

III.- Administrar el patrimonio y ejercer y aplicar los recursos financieros de la **Agrupación Política Nacional**, así como administrar al personal que labore para la **Agrupación Política Nacional**.

IV.- Ser el Órgano responsable de la Administración del Patrimonio y recursos financieros de la **Agrupación Política Nacional**, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos según lo establece la **Ley General de Partidos Políticos** para las Agrupaciones Políticas Nacionales o según el ordenamiento legal que lo sustituya.

V.- Representar jurídica y legalmente a la **Agrupación Política Nacional** y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554 del código civil vigente para la **Ciudad de México** y sus correlativos en los demás Estados de la República.

ARTÍCULO 32

El órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros de la **Agrupación Política Nacional** rendirá al menos un informe anual respecto del estado de las finanzas de la Agrupación ante el Comité Ejecutivo Nacional, también hará lo mismo ante la Asamblea Nacional y en general proporcionará información financiera ante cualquier **asociado** que lo solicite o ante la entidad correspondiente del Instituto **Nacional** Electoral.

ARTÍCULO 33

Son funciones de la Secretaría de Tarea Editorial del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:

- I.- Diseñar y coordinar el trabajo editorial de la **Agrupación Política Nacional** de acuerdo a lo establecido como tarea editorial en la normatividad aplicable a la **Agrupación Política Nacional**.
- II.- Coordinar la edición de los distintos medios de divulgación impresos de la **Agrupación Política Nacional**.

ARTÍCULO 34

Las funciones que se establecen para las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, serán las mismas, en lo general, que desempeñarán las Secretarías de los Comités Ejecutivos Estatales o de **la Ciudad de México**, circunscribiéndose al ámbito de sus respectivas jurisdicciones y que no contravengan las funciones del Comité Ejecutivo Nacional. En caso de existir duda sobre el ejercicio de una función, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal presentará por escrito una consulta ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aclaración.

ARTÍCULO 35

En la primera elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales y de **la Ciudad de México** se observará el procedimiento siguiente: el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o cualquier representante legal convocará a asamblea de asociados a la elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales o de **la Ciudad de México** mediante sufragio universal, secreto y directo quienes cumplirán con el quórum descrito en este mismo artículo, en primera convocatoria y la segunda convocatoria se dará por emitida en el mismo acto y llevada a cabo sesenta minutos después de la hora fijada con la presencia de los asistentes si no se cumple el quórum requerido, dándose por válida si a los acuerdos a que lleguen los asistentes se producen por unanimidad.

Para la elección de los posteriores Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y de **la Ciudad de México** se observará el procedimiento siguiente: serán elegidos en asamblea de asociados mediante sufragio universal, secreto y directo a convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en primera convocatoria y con los asistentes en segunda convocatoria la que se realizará con al menos ocho días de diferencia en relación a la anterior.

La duración de sus funciones en ambos casos es por seis años.

ANEXO TRES

Las asambleas estatales o **de la Ciudad de México** tendrán Quórum con la mitad más uno de sus integrantes, de acuerdo al padrón de la Secretaría de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional en primera convocatoria, o con los asistentes, en segunda convocatoria de acuerdo a los procedimientos descritos en este mismo artículo.

ARTÍCULO 36

Los miembros de los Comités Ejecutivos Estatales podrán ser revocados de sus puestos en asamblea de asociados, mediante el sufragio universal, secreto y directo por la mitad más uno de sus asistentes. Se considera convocada la asamblea de asociados antes referida con escrito al propósito dirigido al Comité Ejecutivo Nacional con la firma de al menos el 25 % de los asociados de la correspondiente entidad federativa, según el registro nacional de afiliados.

ARTÍCULO 37

Los demás miembros de los Comités Ejecutivos Estatales y **de la Ciudad de México** serán designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal o **de la Ciudad de México**.

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 38

La Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I.- Proteger la vigencia de los derechos de los **asociados**
- II.- Fijar las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones de los **asociados**.
- III.- Aplicar las sanciones, amonestaciones y suspensiones a los infractores de los presentes Estatutos, la Declaración de Principios, el Programa de Acción o lo establecido por los Órganos de Dirección.
- IV.- Otorgar estímulos a los asociados distinguidos.

ARTÍCULO 39

Las resoluciones de la comisión nacional permanente de honor y justicia deberán estar fundadas y motivadas y se harán con la aprobación de la mayoría de sus integrantes.

ARTÍCULO 40

El carácter de **asociado** de la **Agrupación Política Nacional** se pierde por las siguientes causales:

- I.- Por separación voluntaria del **asociado**, previo aviso por escrito.
- II.- Por la expulsión acordada por la Comisión **Nacional Permanente** de Honor y Justicia cuando el expulsado haya realizado violación reiterada de nuestros principios o haya actuado en forma grave en contra de los intereses de nuestra **Agrupación Política Nacional**.

La **Agrupación Política Nacional** dispondrá también de las siguientes medidas disciplinarias válidas para todos sus **asociados**.

- III.- Amonestación verbal o por escrito por aquellas infracciones que se consideren leves y que no causen daños a la **Agrupación Política Nacional**.
- IV.- En caso de reincidencia, el infractor podrá hacerse acreedor a una suspensión en sus derechos equivalente a un período que puede ir de un mes a un año.

ARTÍCULO 41

Es función del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales o de la **Ciudad de México**, convocar a la Comisión **Nacional Permanente** de Honor y Justicia, para establecer las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento respectivo. Los fallos que determine la Comisión de Honor y Justicia serán inapelables.

ARTÍCULO 42

Ningún **asociado** a la **Agrupación Política Nacional** podrá ser suspendido ni expulsado sin que el órgano competente haga de su conocimiento por escrito los cargos que existan en su contra, el nombre de su acusador y los medios de defensa que tiene a su alcance.

ARTÍCULO 43

Todo **asociado** de la **Agrupación Política Nacional** tendrá el derecho de ser escuchado en su defensa por sí o por persona de su confianza, y la oportunidad de presentar las pruebas y alegatos que considere convenientes, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha que determine la instancia correspondiente, también tendrá el derecho de audiencia y defensa empleando los recursos legales que considere pertinentes en el proceso de aplicación de sanciones por faltas cometidas según lo establecen los presentes Estatutos.

DE LA DISOLUCIÓN

ARTÍCULO 44

Declarada la disolución por la Asamblea Nacional, la misma nombrará tres liquidadores quienes la liquidarán de acuerdo a lo que establece la ley.

ARTÍCULO 45

México Adelante se sujeta a la normatividad electoral vigente y a los acuerdos que al respecto emita el Consejo General del Instituto **Nacional** Electoral, aplicable a todas las Agrupaciones Políticas Nacionales en el carácter de entidades de interés público, en materia de disposición de los bienes y derechos, de la disolución y liquidación, y cumplimiento de las obligaciones, para el caso de pérdida o cancelación de registro.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNO

De ser necesario y para efectos de facilitar aperturas de cuentas bancarias o por algún motivo que lo amerite se faculta a cualquier representante o apoderado legal de la Agrupación Política Nacional que cambie el nombre de la Agrupación Política Nacional para efectos de registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevo nombre que será notificado a quien corresponda en el Instituto Nacional Electoral para fines de cambio de nombre de México Adelante como Agrupación Política Nacional (en su caso) a otro nombre distinto (como Agrupación Política Nacional, en su caso).

DOS

Lo no previsto en los presentes Estatutos, aplican lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos y los Acuerdos tomados en la Asamblea Nacional.

TRES

Los Presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, declare la procedencia Legal y Constitucional de los mismos.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de septiembre de 2018.




**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA AGROPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL”**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DE PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL</p> <p>La democracia tiene como fundamento la honra y dignidad del ser humano e impulsa su desarrollo más allá que cualquier otra forma de gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, obliga necesariamente al Estado a evitar la intromisión ilegal en la vida privada de las personas. Promueve el desarrollo cívico del ser humano al reconocerle su capacidad de participar en el gobierno, involucrándose en la vida pública, en la toma de decisiones con base en el libre flujo de información, en la discusión abierta para promocionar el bien público con apego a los valores democráticos, y que son: el respeto a la dignidad humana, el apego a la legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.</p>	<p>DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DE MÉXICO ADELANTE</p> <p>La democracia tiene como fundamento la honra y dignidad del ser humano e impulsa su desarrollo más allá que cualquier otra forma de gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, obliga necesariamente al Estado a evitar la intromisión ilegal en la vida privada de las personas. Promueve el desarrollo cívico del ser humano al reconocerle su capacidad de participar en el gobierno, involucrándose en la vida pública, en la toma de decisiones con base en el libre flujo de información, en la discusión abierta para promocionar el bien público con apego a los valores democráticos, y que son: el respeto a la dignidad humana, el apego a la legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.</p>	<p>Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
<p>Parlamento Ciudadano Nacional y sus asociados se obliga a observar la Constitución y respetan las leyes e instituciones que de ella emanan; así mismo se obligan a promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.</p> <p>(...)</p>	<p>México Adelante y sus asociados se obligan a observar la Constitución y respetan las leyes e instituciones que de ella emanan; así mismo se obligan a promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
<p>Fomentaremos la soberanía nacional y bajo ningún concepto aceptará pacto o acuerdo</p>	<p>Fomentaremos la soberanía nacional y bajo ningún concepto aceptará pacto o acuerdo</p>		<p>Adecuación a la normativa electoral</p>

		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p>	
<p>CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA AGROPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL”</p>			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>alguno que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos extranjeros, no aceptamos financiamiento prohibido por el código federal de instituciones y procedimientos electorales ni aceptamos subordinación alguna de tipo religioso. (...)</p>	<p>alguno que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos extranjeros, no aceptamos financiamiento prohibido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni aceptamos subordinación alguna de tipo religioso. (...)</p>		<p>vigente.</p>
<p>El sistema de planeación democrática plasmado en la Constitución refleja aún el centralismo presidencialista. Este requiere ser reformado y establecer mecanismos y procesos para la conceptualización, diseño, consenso, determinación por derecho positivo, ejecución, evaluación política y modificación de políticas de estado, con la participación de las fuerzas políticas y organizaciones productivas y sociales. Por ello se debe promover la conformación de dicho Consejo y hacer compatible la planeación nacional y la que conducen las entidades federativas. (...)</p>	<p>El sistema de planeación democrática plasmado en la Constitución refleja aún el centralismo presidencialista. Este requiere ser reformado y establecer mecanismos y procesos para la conceptualización, diseño, consenso, determinación por derecho positivo, ejecución, evaluación política y modificación de políticas de Estado, con la participación de las fuerzas políticas y organizaciones productivas y sociales. Por ello se debe promover la conformación de dicho consenso y hacer compatible la planeación nacional y la que conducen las entidades federativas. (...)</p>		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>

ANEXO CINCO

		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p>		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p>	
<p>CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL”</p>					
PROGRAMA NACIONAL	PARLAMENTO CIUDADANO	TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de Parlamento .	En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de México Adelante .	En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de Parlamento .	En el mismo sentido anterior, capacitaremos política y electoralmente a nuestros afiliados y ciudadanía en general, elaboraremos los materiales de discusión y formación política que se requieran editar masivamente para difundir la doctrina de México Adelante .	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Parlamento Ciudadano Nacional tomará las siguientes medidas para formar ideológica y políticamente a los afiliados infundiéndolos en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política: a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se invitará a eventos realizados por la propia organización o por otra institución; d) se invitará a respetar a los adversarios; e) se invitará a respetar los derechos de los adversarios en la lucha política.	México Adelante tomará las siguientes medidas para formar ideológica y políticamente a los afiliados infundiéndolos en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política: a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se invitará a eventos realizados por la propia organización o por otra institución; d) se invitará a respetar a los adversarios; e) se invitará a respetar los derechos de los adversarios en la lucha política.	Parlamento Ciudadano Nacional tomará las siguientes medidas para formar ideológica y políticamente a los afiliados infundiéndolos en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política: a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se invitará a eventos realizados por la propia organización o por otra institución; d) se invitará a respetar a los adversarios; e) se invitará a respetar los derechos de los adversarios en la lucha política.	México Adelante tomará las siguientes medidas para formar ideológica y políticamente a los afiliados infundiéndolos en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política: a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se invitará a eventos realizados por la propia organización o por otra institución; d) se invitará a respetar a los adversarios; e) se invitará a respetar los derechos de los adversarios en la lucha política.	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
Parlamento Ciudadano Nacional tomará las siguientes medidas para preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales: recomendará que se fijen bien tanto en los partidos por los que voten como en los candidatos; recomendará que conozcan sus propuestas, sus currículas; promoverá que practiquen el sufragio para disminuir el abstencionismo electoral.	México Adelante tomará las siguientes medidas para preparar la participación activa de sus asociados en los procesos electorales: recomendará que se fijen bien tanto en los partidos por los que voten como en los candidatos; recomendará que conozcan sus propuestas, sus currículas; promoverá que practiquen el sufragio para disminuir el abstencionismo electoral.	Parlamento Ciudadano Nacional tomará las siguientes medidas para preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales: recomendará que se fijen bien tanto en los partidos por los que voten como en los candidatos; recomendará que conozcan sus propuestas, sus currículas; promoverá que practiquen el sufragio para disminuir el abstencionismo electoral.	México Adelante tomará las siguientes medidas para preparar la participación activa de sus asociados en los procesos electorales: recomendará que se fijen bien tanto en los partidos por los que voten como en los candidatos; recomendará que conozcan sus propuestas, sus currículas; promoverá que practiquen el sufragio para disminuir el abstencionismo electoral.	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL”

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS NACIONALES</p> <p>Parlamento se propone las modificaciones necesarias para enriquecer y fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin de incorporar figuras como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la aceptación de iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes, de tal forma que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que también ejerza de manera directa el rumbo de su gobierno.</p>	<p>PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS NACIONALES</p> <p>México Adelante se propone las modificaciones necesarias para enriquecer y fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin de incorporar figuras como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la aceptación de iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes, de tal forma que el ciudadano no sólo delegue su capacidad de decidir en sus representantes elegidos, sino que también ejerza de manera directa el rumbo de su gobierno.</p>	<p>Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
<p>Para Parlamento la democracia no sólo es una abstracción ni se reduce a la participación electoral, sino que se traduce en un conjunto de derechos de los ciudadanos que les permitan vivir en paz y armonía y que les permitan fortalecer su condición soberana, para traducirlos en acciones de gobierno. Tales derechos son la alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y la salud y fortalecen la vida democrática.</p>	<p>Para México Adelante la democracia no sólo es una abstracción ni se reduce a la participación electoral, sino que se traduce en un conjunto de derechos de los ciudadanos que les permitan vivir en paz y armonía y que les permitan fortalecer su condición soberana, para traducirlos en acciones de gobierno. Tales derechos son la alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y la salud y fortalecen la vida democrática.</p>	<p>Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>
<p>Parlamento propone crear una nueva política y un nuevo trato del estado mexicano hacia a los ciudadanos de la república. (...)</p>	<p>México Adelante propone crear una nueva política y un nuevo trato del Estado mexicano hacia a los ciudadanos de la república. (...)</p>	<p>Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.</p>	<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO


CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
ESTATUTOS DE LA DENOMINACIÓN ARTÍCULO 1 La Asociación se denominará " parlamento ciudadano nacional ", La Asociación es una Organización Política Nacional de ciudadanos mexicanos, con la disposición de participar de manera pacífica y por la vía democrática en la vida política del país.	ESTATUTOS DE LA DENOMINACIÓN ARTÍCULO 1 La Agrupación Política Nacional se denominará " México Adelante ", es una Agrupación Política Nacional de ciudadanos mexicanos, con la disposición de participar de manera pacífica y por la vía democrática en la vida política del país.	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
DEL OBJETO ARTÍCULO 2 La asociación se constituye con el objeto siguiente: I.- Participar pacíficamente en la vida política del país. II.- Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como contribuir a la creación de una opinión pública mejor informada. III.- Solicitar registro ante el Instituto Federal Electoral como Agrupación Política Nacional. IV.- Realizar actividades editoriales, de educación y capacitación política, realizar investigación económica, política y social.	DEL OBJETO ARTÍCULO 2 La Agrupación Política Nacional se constituye con el objeto siguiente: I.- Participar pacíficamente en la vida política del país. II.- Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como contribuir a la creación de una opinión pública mejor informada. III.- Solicitar registro ante el Instituto Nacional Electoral como Agrupación Política Nacional. IV.- Realizar actividades editoriales, de educación y capacitación política, realizar investigación económica, política y social.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTÍCULO 3 El lema de la asociación es "por una ciudadanía informada ". El emblema de la Asociación es un triángulo en tres colores negro, rojo y azul . Las siglas son: PCN . Los colores que la asociación usará son el rojo, el negro y el azul .	ARTÍCULO 3 El lema de la Agrupación Política Nacional es " Por ti y Contigo, ¡Vamos Adelante! ". El emblema de la Agrupación Política Nacional " MÉXICO ADELANTE " es un rectángulo en color gris y quien en la parte inferior lleva la leyenda Agrupación Política Nacional también en color gris claro y en la parte		En ejercicio de su libertad de autoorganización.

<div> </div> <div> <p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS</p> <p>DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO</p> </div>			
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
	<p>superior de ("MEXICO") en la "O" lleva tres plumas simulando un penacho las plumas de abajo color verde (pantone 7481), la de en medio Color fiusha (pantone 248) y la de arriba Color Naranja Brillante (pantone bright red). Las siglas cambian de "PCN" a "MA APN". Los colores que la Agrupación Política Nacional usará son en verde, fiusha, naranja y gris.</p>		
<p>DEL DOMICILIO ARTÍCULO 4</p> <p>El domicilio de la Asociación estará en la ciudad de México, D.F., sin perjuicio de establecer delegaciones, comités o representaciones en cualquier otro lugar del país.</p>	<p>DEL DOMICILIO ARTÍCULO 4</p> <p>El domicilio de Agrupación Política Nacional estará en la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer delegaciones, comités o representaciones en cualquier otro lugar del país.</p>		Adecuación a la normatividad vigente.
<p>DE LA NACIONALIDAD ARTÍCULO 5</p> <p>La nacionalidad de la Asociación es mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación alguna en la Asociación y ésta no admitirá como asociados a personas de nacionalidad distinta de la mexicana. Nos</p>	<p>DE LA NACIONALIDAD ARTÍCULO 5</p> <p>Nacional es mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación alguna en la Agrupación Política Nacional y ésta no admitirá como asociados a</p>		Adecuación a la normatividad vigente.


CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
obligamos a no aceptar pacto o acuerdo en cualquier forma que nos sujete o subordine a cualquier extranjero, organización internacional o partido político extranjero. Así mismo no aceptamos o pedimos apoyo de cualquier tipo proveniente de ministros de los cultos religiosos o de sectas, o de organizaciones religiosas e iglesias, o de cualquiera de las personas e instituciones que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe como proveedores de financiamiento.	personas de nacionalidad distinta de la mexicana. Nos obligamos a no aceptar pacto o acuerdo en cualquier forma que nos sujete o subordine a cualquier extranjero, organización internacional o partido político extranjero. Así mismo no aceptamos o pedimos apoyo de cualquier tipo proveniente de ministros de los cultos religiosos o de sectas, o de organizaciones religiosas e iglesias, o de cualquiera de las personas e instituciones que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe como proveedores de financiamiento.		
<p>DEL PATRIMONIO</p> <p>ARTÍCULO 6</p> <p>El patrimonio de la sociedad se integrará:</p> <p>I.- Con las aportaciones voluntarias, ordinarias o extraordinarias, de los afiliados o simpatizantes</p> <p>II.- Con los rendimientos financieros.</p> <p>III.- Con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran.</p> <p>IV.- Con los recursos y financiamiento público de acuerdo con la ley en la materia.</p> <p>V.- Con los ingresos provenientes de sorteos, bailes, y demás actividades lícitas y permitidas que realice la Asociación.</p>	<p>DEL PATRIMONIO</p> <p>ARTÍCULO 6</p> <p>El patrimonio de la Agrupación Política Nacional se integrará:</p> <p>I.- Con las aportaciones voluntarias, ordinarias o extraordinarias, de los asociados o simpatizantes.</p> <p>II.- Con los rendimientos financieros.</p> <p>III.- Con los bienes muebles e inmuebles que se adquieran.</p> <p>Derogado.</p> <p>IV.- Con los ingresos provenientes de sorteos, bailes, y demás actividades lícitas y permitidas que realice la Agrupación Política Nacional.</p>		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
<p>ARTÍCULO 7</p> <p>El patrimonio de la Asociación se destinará exclusivamente al cumplimiento del objeto social, por lo que no podrá ser aplicado para otros fines.</p>	<p>ARTÍCULO 7</p> <p>El patrimonio de la Agrupación Política Nacional se destinará exclusivamente al cumplimiento del objeto social, por lo que no podrá ser aplicado para otros fines.</p>		En ejercicio de su libertad de autoorganización.

		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
DE LA DURACIÓN ARTÍCULO 8 La duración de la asociación será de 99 años.	DE LA DURACIÓN ARTÍCULO 8 La duración de la Agrupación Política Nacional será de 99 años.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
DE LOS ASOCIADOS ARTÍCULO 9 Son asociados las personas que en este acto constituyen la Asociación y aquellas personas que cumplan con los requisitos de ingreso señalados en estos Estatutos.	DE LOS ASOCIADOS ARTÍCULO 9 Son asociados las personas que en este acto constituyen la Agrupación Política Nacional y aquellas personas que cumplan con los requisitos de ingreso señalados en estos Estatutos.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTÍCULO 10 Será asociado quien reúna los siguientes requisitos: I.- Ser mexicano por nacimiento o naturalización, en pleno goce de sus derechos civiles y Políticos y tener dieciocho años o más. II.- Haber presentado y suscrito cédula de afiliación de manera libre, individual y pacífica y cumplir con los documentos básicos, a saber, Principios, Programa de Acción y los Estatutos de la Asociación .	ARTÍCULO 10 Será asociado quien reúna los siguientes requisitos: I.- Ser mexicano por nacimiento o naturalización, en pleno goce de sus derechos civiles y Políticos y tener dieciocho años o más. II.- Haber presentado y suscrito cédula de afiliación de manera libre, individual y pacífica y cumplir con los documentos básicos, a saber, Principios, Programa de Acción y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional .		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTÍCULO 11 ARTÍCULO 12 Son derechos de los asociados: I.- Gozar de voz y voto en las asambleas generales y convenciones, sea de manera directa o a través de delegados cuando así lo establezca la convocatoria respectiva. II.- Participar en los órganos de dirección y administración de la Asociación de acuerdo a	ARTÍCULO 11 ARTÍCULO 12 Son derechos de los asociados: I.- Gozar de voz y voto en las asambleas generales y convenciones, sea de manera directa o a través de delegados cuando así lo establezca la convocatoria respectiva. II.- Participar en los órganos de dirección y administración de la Agrupación Política		No presenta cambios.
			En ejercicio de su libertad de autoorganización.

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>los presentes estatutos.</p> <p>III.- Renunciar a la Asociación en cualquier tiempo mediante aviso por escrito.</p> <p>IV.- Disfrutar los beneficios que otorgue la Asociación.</p> <p>V.- Solicitar y recibir la información relacionada con el objeto de la Asociación ante los órganos correspondientes de la Asociación.</p> <p>VI.- Elegir y ser electos en asamblea nacional como candidatos a puestos de elección popular cuando se postulen mediante acuerdo de participación en elecciones constitucionales con algún Partido Político, en los términos de estos estatutos y los que establezcan las leyes electorales vigentes.</p>	<p>Nacional de acuerdo a los presentes Estatutos.</p> <p>III.- Renunciar a la Agrupación Política Nacional en cualquier tiempo mediante aviso por escrito.</p> <p>IV.- Disfrutar los beneficios que otorgue la Agrupación Política Nacional.</p> <p>V.- Solicitar y recibir la información relacionada con el objeto de la Agrupación Política Nacional ante los órganos correspondientes de la Agrupación Política Nacional.</p> <p>VI.- Elegir y ser electos en Asamblea Nacional como candidatos a puestos de elección popular cuando se postulen mediante acuerdo de participación en elecciones constitucionales con algún Partido Político, en los términos de estos Estatutos y los que establezcan las leyes electorales vigentes.</p>		
<p>ARTÍCULO 13</p> <p>Son obligaciones de los asociados:</p> <p>I.- Cumplir con las disposiciones que emanen del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de gobierno interno.</p> <p>II.- Cubrir las aportaciones a las que de manera voluntaria se haya comprometido.</p> <p>III.- No realizar acciones contrarias a los principios e intereses de la Asociación.</p> <p>VI.- Guardar orden, respeto y tolerancia hacia los demás compañeros en los procesos de desahogo de la orden del día de las asambleas.</p>	<p>ARTÍCULO 13</p> <p>Son obligaciones de los asociados:</p> <p>I.- Cumplir con las disposiciones que emanen del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de gobierno interno.</p> <p>II.- Cubrir las aportaciones a las que de manera voluntaria se haya comprometido.</p> <p>III.- No realizar acciones contrarias a los principios e intereses de la Agrupación Política Nacional.</p> <p>VI.- Guardar orden, respeto y tolerancia hacia los demás compañeros en los procesos de desahogo de la orden del día de las asambleas.</p>		En ejercicio de su libertad de autoorganización.

		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION ARTICULO 14 Para el logro de sus objetivos La Asociación se estructura de la siguiente manera. En el ámbito nacional I.- La Asamblea Nacional. II.- El Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez está integrado por los siguientes funcionarios: a) Un presidente b) Un secretario de finanzas c) Un secretario de investigación d) Un secretario de capacitación política e) Un secretario de tarea editorial III.- Las Comisiones Nacionales Permanentes de Honor y Justicia y la de Asuntos Electorales. En el ámbito estatal: I.- Un Comité Ejecutivo Estatal, que a su vez estará integrado por los siguientes funcionarios: a) Un presidente b) Un secretario de finanzas c) Un secretario de investigación f) Un secretario de capacitación política g) Un secretario de tarea editorial	DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA AGRUPACIÓN POLITICA NACIONAL ARTÍCULO 14 Para el logro de sus objetivos la Agrupación Política Nacional se estructura de la siguiente manera. En el ámbito nacional I.- La Asamblea Nacional. II.- El Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez está integrado por los siguientes funcionarios: a) Un presidente; b) Un secretario de finanzas; c) Un secretario de investigación; d) Un secretario de capacitación política; y e) Un secretario de tarea editorial. III.- Las Comisiones Nacionales Permanentes de Honor y Justicia y la de Asuntos Electorales. En el ámbito estatal: I.- Un Comité Ejecutivo Estatal, que a su vez estará integrado por los siguientes funcionarios: a) Un presidente; b) Un secretario de finanzas; c) Un secretario de investigación; d) Un secretario de capacitación política; y e) Un secretario de tarea editorial;		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTICULO 15 La Asamblea Nacional es el órgano supremo de Parlamento Ciudadano Nacional , sus decisiones son obligatorias para todos sus miembros y estará formada por los siguientes integrantes o sus suplentes legales: I.- El Comité Ejecutivo Nacional	ARTÍCULO 15 La Asamblea Nacional es el órgano supremo de México Adelante , sus decisiones son obligatorias para todos sus asociados y estará formada por los siguientes integrantes o sus suplentes legales: I.- El Comité Ejecutivo Nacional;	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
III.- Los Presidentes de las Comisiones Nacionales Permanentes IV.- Los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito federal V.- 15 delegados electos por cada entidad federativa en donde la agrupación tenga representación.	II.- Los Presidentes de las Comisiones Nacionales Permanentes; III.- Los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México ; IV.- 3 delegados electos por cada entidad federativa en donde la agrupación tenga representación.		
ARTICULO 16	ARTICULO 16		No presenta cambios.
ARTICULO 17 Corresponde en forma única a la Asamblea Nacional la modificación o derogación de la Declaración de Principios, Programa de Acción y de los Estatutos, salvo lo indicado en los artículos transitorios de los presentes estatutos . Podrá decidir sobre la conveniencia de la disolución de la Asamblea Nacional . Los acuerdos que se tomen en la Asamblea Nacional se considerarán válidos con el voto, al menos, del 50 % más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional se considerará válidos con el voto, al menos, del 50 % más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional nombrará una mesa directiva integrada por un Presidente, un Secretario y un vocal para el desahogo de la orden del día.	ARTICULO 17 Corresponde en forma única a la Asamblea Nacional la modificación o derogación de la Declaración de Principios, Programa de Acción y de los Estatutos. Podrá decidir sobre la conveniencia de la disolución de la Agrupación Política Nacional . Los acuerdos que se tomen en la Asamblea Nacional se considerarán válidos con el voto, al menos, del 50 % más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional nombrará una mesa directiva integrada por un Presidente, un Secretario y un vocal para el desahogo de la orden del día.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTICULO 18 La Asamblea Nacional, se reunirá en forma ordinaria cada tres años. La que tenga el carácter de extraordinaria podrá ser convocada para tratar asuntos de urgente resolución, o los demás que se encuentran establecidos en los estatutos, por uno o todos los representantes legales de Parlamento Ciudadano Nacional firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más	ARTICULO 18 La Asamblea Nacional, se reunirá en forma ordinaria cada tres años. La que tenga el carácter de extraordinaria podrá ser convocada para tratar asuntos de urgente resolución, o los demás que se encuentran establecidos en los Estatutos, por uno o todos los representantes legales de México Adelante firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
uno de los integrantes del comité ejecutivo nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos, o por el 25 por ciento de los afiliados . La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.	integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos, o por el 25 por ciento de los asociados . La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.		
ARTICULO 19	ARTICULO 19		No presenta cambios.
ARTICULO 20	ARTICULO 20		No presenta cambios.
ARTICULO 21	ARTICULO 21		
La convocatoria a la asamblea nacional ordinaria podrá ser realizada indistintamente por uno o todos los representantes legales de Parlamento Ciudadano Nacional firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del comité ejecutivo nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos.	La convocatoria a la Asamblea Nacional ordinaria podrá ser realizada indistintamente por uno o todos los representantes legales de México Adelante firmando la convocatoria respectiva al menos la mitad más uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; o bien podrá ser convocada por al menos la mitad más uno de los Comités Ejecutivos Estatales legalmente constituidos.	Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.
La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.	La convocatoria contendrá orden del día, lugar, fecha y hora de celebración; deberá expedirse cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de su celebración.		
ARTICULO 21-A	ARTICULO 21-A		No presenta cambios.
ARTICULO 22	ARTICULO 22		No presenta cambios.
ARTICULO 23	ARTICULO 23		No presenta cambios.
ARTICULO 24	ARTICULO 24		
La Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales tendrá las siguientes funciones: I.- Realizar el estudio de los perfiles curriculares	La Comisión Nacional Permanente de Asuntos Electorales tendrá las siguientes funciones: I.- Realizar el estudio de los perfiles curriculares	Art. 21, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos.	Adecuación a la normatividad electoral vigente.



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
de los aspirantes a candidatos de nuestra Asociación a puestos de elección popular en caso de convenio con algún Partido Político Nacional. II.- La Comisión fijará una postulación democrática para seleccionar al o los candidatos a puestos de elección popular, dado el caso. III.- Conjuntamente con el presidente nacional firmará los convenios con el partido en cuestión.	de los aspirantes a candidatos de nuestra Agrupación Política Nacional a puestos de elección popular en caso de convenio con algún Partido Político Nacional. II.- La Comisión fijará una postulación democrática para seleccionar al o los candidatos a puestos de elección popular, dado el caso. III.- Conjuntamente con el presidente nacional firmará los convenios con el partido en cuestión.		
ARTICULO 25 ARTICULO 26 Ningún dirigente estatal o nacional de la Asociación podrá ocupar de manera simultánea dos o más puestos directivos en los órganos nacionales y/o estatales en la misma Asociación .	ARTICULO 25 ARTICULO 26 Ningún dirigente estatal o nacional de la Agrupación Política Nacional podrá ocupar de manera simultánea dos o más puestos directivos en los órganos nacionales y/o estatales en la misma Agrupación Política Nacional .		No presenta cambios. En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTICULO 26-A ARTICULO 26-B ARTICULO 27 Corresponden al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes facultades: I.- Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus reuniones y ejecutar sus acuerdos. II.- Presidir las reuniones con los demás integrantes de los comités ejecutivos estatales y del Distrito Federal . III.- Celebrar acuerdos y convenios con las direcciones de organizaciones y agrupaciones ideológicamente afines. IV.- Representar jurídica y legalmente a la Asociación y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554	ARTICULO 26-A ARTICULO 26-B ARTICULO 27 Corresponden al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes facultades: I.- Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus reuniones y ejecutar sus acuerdos. II.- Presidir las reuniones con los demás integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México . III.- Celebrar acuerdos y convenios con las direcciones de organizaciones y agrupaciones ideológicamente afines. IV.- Representar jurídica y legalmente a la Agrupación Política Nacional y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con		No presenta cambios. En ejercicio de su libertad de autoorganización.



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
del código civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República.	el artículo 2554 del código civil vigente para la Ciudad de México y sus correlativos en los demás Estados de la República. V.- Es facultad del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el expedir los nombramientos internos y documentos externos propios de las actividades, realizar cualquier trámite o promoción ante el Instituto Nacional Electoral o ante cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal; nombrar y remover al personal directivo o de administración que se considere necesario.		
ARTICULO 27-A	ARTICULO 27-A		No presenta cambios.
ARTICULO 28	ARTICULO 28		No presenta cambios.
ARTICULO 29 Son atribuciones del Secretario de capacitación política del Comité Ejecutivo Nacional: I.- Diseñar, operar y mantener actualizados los programas nacionales de afiliación , así como el Registro Nacional de Afiliación , en coordinación con sus homólogos en todo el país. II.- Establecer programas nacionales, estatales y municipales de capacitación política, cívica, histórica y electoral para los asociados y público en general. III.- Dictar y coordinar cursos, pláticas, conferencias, etc., relacionadas con el objeto social de la Asociación . IV.- Convocar a reuniones del comité ejecutivo nacional y ejecutar sus acuerdos.	ARTICULO 29 Son atribuciones del Secretario de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional: I.- Diseñar, operar y mantener actualizados los programas nacionales de asociados , así como el Registro Nacional de asociados , en coordinación con sus homólogos en todo el país. II.- Establecer programas nacionales, estatales y municipales de capacitación política, cívica, histórica y electoral para los asociados y público en general. III.- Dictar y coordinar cursos, pláticas, conferencias, etc., relacionadas con el objeto social de la Agrupación Política Nacional . IV.- Convocar a reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y ejecutar sus acuerdos.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTICULO 30	ARTICULO 30		No presenta cambios.



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>ARTÍCULO 31</p> <p>Son funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:</p> <p>I.- Recabar de los asociados las aportaciones ordinarias y extraordinarias y otorgar los recibos correspondientes.</p> <p>II.- Llevar los registros de las cuentas corrientes que maneje la Asociación y preparar los presupuestos de ingresos y egresos.</p> <p>III.- Administrar el patrimonio y ejercer y aplicar los recursos financieros de la Asociación, así como administrar al personal que labore para la Asociación.</p> <p>IV.- Ser el Órgano responsable de la Administración del Patrimonio y recursos financieros de la Asociación, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos según lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para las Agrupaciones Políticas Nacionales o según el ordenamiento legal que lo sustituya.</p> <p>V.- Representar jurídica y legalmente a la Asociación y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el código civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en los demás Estados de la República.</p>	<p>ARTÍCULO 31</p> <p>Son funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:</p> <p>I.- Recabar de los asociados las aportaciones ordinarias y extraordinarias y otorgar los recibos correspondientes.</p> <p>II.- Llevar los registros de las cuentas corrientes que maneje la Agrupación Política Nacional y preparar los presupuestos de ingresos y egresos.</p> <p>III.- Administrar el patrimonio y ejercer y aplicar los recursos financieros de la Agrupación Política Nacional, así como administrar al personal que labore para la Agrupación Política Nacional.</p> <p>IV.- Ser el Órgano responsable de la Administración del Patrimonio y recursos financieros de la Agrupación Política Nacional, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos según lo establece la Ley General de Partidos Políticos para las Agrupaciones Políticas Nacionales o según el ordenamiento legal que lo sustituya.</p> <p>V.- Representar jurídica y legalmente a la Agrupación Política Nacional y designar mandatarios o apoderados, de conformidad con el artículo 2554 del código civil vigente para la Ciudad de México y sus correlativos en los demás Estados de la República.</p>		<p>Adecuación a la normatividad vigente.</p>
<p>ARTÍCULO 32</p> <p>El órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros de la Asociación rendirá al menos un informe anual respecto del estado de las finanzas de la</p>	<p>ARTÍCULO 32</p> <p>El órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros de la Agrupación Política Nacional rendirá al menos un informe anual respecto del estado de las</p>		<p>Adecuación a la normatividad vigente.</p>



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"


TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
Agrupación ante el Comité Ejecutivo Nacional, también hará lo mismo ante la asamblea nacional y en general proporcionará información financiera ante cualquier asociado que lo solicite o ante la entidad correspondiente del Instituto Federal Electoral.	finanzas de la Agrupación ante el Comité Ejecutivo Nacional, también hará lo mismo ante la Asamblea Nacional y en general proporcionará información financiera ante cualquier asociado que lo solicite o ante la entidad correspondiente del Instituto Nacional Electoral.		
ARTÍCULO 33 Son funciones de la Secretaría de tarea editorial del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes: I.- Diseñar y coordinar el trabajo editorial de la Asociación de acuerdo a lo establecido como tarea editorial en la Asociación . II.- Coordinar la edición de los distintos medios de divulgación impresos de la Asociación .	ARTÍCULO 33 Son funciones de la Secretaría de Tarea Editorial del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes: I.- Diseñar y coordinar el trabajo editorial de la Agrupación Política Nacional de acuerdo a lo establecido como tarea editorial en la Agrupación Política Nacional . II.- Coordinar la edición de los distintos medios de divulgación impresos de la Agrupación Política Nacional .		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
ARTÍCULO 34 Las funciones que se establecen para las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, serán las mismas, en lo general, que desempeñarán las Secretarías de los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal , circunscribiéndose al ámbito de sus respectivas jurisdicciones y que no contravengan las funciones del Comité Ejecutivo Nacional. En caso de existir duda sobre el ejercicio de una función, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal presentará por escrito una consulta ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aclaración.	ARTÍCULO 34 Las funciones que se establecen para las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, serán las mismas, en lo general, que desempeñarán las Secretarías de los Comités Ejecutivos Estatales o de la Ciudad de México , circunscribiéndose al ámbito de sus respectivas jurisdicciones y que no contravengan las funciones del Comité Ejecutivo Nacional. En caso de existir duda sobre el ejercicio de una función, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal presentará por escrito una consulta ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aclaración.		Adecuación a la normatividad vigente.



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>ARTICULO 35</p> <p>En la primera elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal se observará el procedimiento siguiente: el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o cualquier representante legal convocará a asamblea de asociados a la elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal mediante sufragio universal, secreto y directo quienes cumplirán con el quórum descrito en este mismo artículo, en primera convocatoria y la segunda se dará por emitida en el mismo acto y llevada a cabo sesenta minutos después de la hora fijada con la presencia de los asistentes si no se cumple el quórum requerido, dándose por válida si a los acuerdos a que lleguen los asistentes se producen por unanimidad.</p> <p>Para la elección de los posteriores Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal se observará el procedimiento siguiente: serán elegidos en asamblea de asociados mediante sufragio universal, secreto y directo a convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, en primera convocatoria y con los asistentes en segunda convocatoria la que se realizará con al menos ocho días de diferencia en relación a la anterior.</p> <p>La duración de sus funciones en ambos casos es por seis años.</p> <p>Las asambleas estatales o del Distrito Federal tendrán Quórum con la mitad más uno de sus integrantes, de acuerdo al padrón de la</p>	<p>ARTICULO 35</p> <p>En la primera elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México se observará el procedimiento siguiente: el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o cualquier representante legal convocará a asamblea de asociados a la elección del Presidente de los Comités Ejecutivos Estatales o de la Ciudad de México mediante sufragio universal, secreto y directo quienes cumplirán con el quórum descrito en este mismo artículo, en primera convocatoria y la segunda convocatoria se dará por emitida en el mismo acto y llevada a cabo sesenta minutos después de la hora fijada con la presencia de los asistentes si no se cumple el quórum requerido, dándose por válida si a los acuerdos a que lleguen los asistentes se producen por unanimidad.</p> <p>Para la elección de los posteriores Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México se observará el procedimiento siguiente: serán elegidos en asamblea de asociados mediante sufragio universal, secreto y directo a convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en primera convocatoria y con los asistentes en segunda convocatoria la que se realizará con al menos ocho días de diferencia en relación a la anterior.</p> <p>La duración de sus funciones en ambos casos es por seis años.</p> <p>Las asambleas estatales o de la Ciudad de México tendrán Quórum con la mitad más uno de sus integrantes, de acuerdo al padrón de la</p>		<p>Adecuación a la normatividad vigente.</p>


		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
Secretaría de capacitación política del Comité Ejecutivo Nacional en primera convocatoria, o con los asistentes, en segunda convocatoria de acuerdo a los procedimientos descritos en este mismo artículo.	Secretaría de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional en primera convocatoria, o con los asistentes, en segunda convocatoria de acuerdo a los procedimientos descritos en este mismo artículo.		
ARTÍCULO 36 ARTÍCULO 37 Los demás miembros de los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal serán designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal o del Distrito Federal	ARTÍCULO 36 ARTÍCULO 37 Los demás miembros de los Comités Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México serán designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal o de la Ciudad de México.		No presenta cambios.
DE LAS SANCIONES ARTÍCULO 38 La Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia tendrá las siguientes atribuciones: I.- Proteger la vigencia de los derechos de los afiliados II.- Fijar las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones de los afiliados. III.- Aplicar las sanciones, amonestaciones y suspensiones a los infractores de los presentes estatutos, la declaración de principios, el programa de acción o lo establecido por los órganos de Dirección. IV.- Otorgar estímulos a los asociados distinguidos.	DE LAS SANCIONES ARTÍCULO 38 La Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia tendrá las siguientes atribuciones: I.- Proteger la vigencia de los derechos de los asociados. II.- Fijar las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones de los asociados. III.- Aplicar las sanciones, amonestaciones y suspensiones a los infractores de los presentes Estatutos, la Declaración de Principios, el Programa de Acción o lo establecido por los Órganos de Dirección. IV.- Otorgar estímulos a los asociados distinguidos.		Adecuación a la normatividad electoral vigente.
ARTÍCULO 39 ARTÍCULO 40 El carácter de miembro de la Asociación se pierde por las siguientes causales:	ARTÍCULO 39 ARTÍCULO 40 El carácter de asociado de la Agrupación Política Nacional se pierde por las siguientes		En ejercicio de su libertad de autoorganización.



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO
CIUDADANO NACIONAL"**

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>I.- Por separación voluntaria del afiliado, previo aviso por escrito.</p> <p>II.- Por la expulsión acordada por la Comisión de Honor y Justicia cuando el expulsado haya realizado violación reiterada de nuestros principios o haya actuado en forma grave en contra de los intereses de nuestra Asociación.</p> <p>La asociación dispondrá también de las siguientes medidas disciplinarias válidas para todos sus afiliados.</p> <p>III.- Amonestación verbal o por escrito por aquellas infracciones que se consideren leves y que no causen daños a la Asociación.</p> <p>IV.- En caso de reincidencia, el infractor podrá hacerse acreedor a una suspensión en sus derechos equivalente aun período que puede ir de un mes a un año.</p>	<p>causales:</p> <p>I.- Por separación voluntaria del asociado, previo aviso por escrito.</p> <p>II.- Por la expulsión acordada por la Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia cuando el expulsado haya realizado violación reiterada de nuestros principios o haya actuado en forma grave en contra de los intereses de nuestra Agrupación Política Nacional.</p> <p>La Agrupación Política Nacional dispondrá también de las siguientes medidas disciplinarias válidas para todos sus asociados.</p> <p>III.- Amonestación verbal o por escrito por aquellas infracciones que se consideren leves y que no causen daños a la Agrupación Política Nacional.</p> <p>IV.- En caso de reincidencia, el infractor podrá hacerse acreedor a una suspensión en sus derechos equivalente a un período que puede ir de un mes a un año.</p>		<p>Adecuación a la normatividad vigente.</p> <p>A adecuación a la electoral vigente.</p>
<p>ARTÍCULO 41</p> <p>Es función del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal, convocar a la Comisión de Honor y Justicia, para establecer las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento respectivo. Los fallos que determine la Comisión de Honor y Justicia serán inapelables.</p>	<p>ARTÍCULO 41</p> <p>Es función del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales o de la Ciudad de México, convocar a la Comisión Nacional Permanente de Honor y Justicia, para establecer las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento respectivo. Los fallos que determine la Comisión de Honor y Justicia serán inapelables.</p>		
<p>ARTÍCULO 42</p> <p>Ningún afiliado a la Asociación podrá ser suspendido ni expulsado sin que el órgano</p>	<p>ARTÍCULO 42</p> <p>Ningún asociado a la Agrupación Política Nacional podrá ser suspendido ni expulsado sin</p>		<p>En ejercicio de su libertad de autoorganización.</p>


		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO	
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
competente haga de su conocimiento por escrito los cargos que existan en su contra, el nombre de su acusador y los medios de defensa que tiene a su alcance.	que el órgano competente haga de su conocimiento por escrito los cargos que existan en su contra, el nombre de su acusador y los medios de defensa que tiene a su alcance.		
ARTÍCULO 43 Todo afiliado de la Asociación tendrá el derecho de ser escuchado en su defensa por sí o por persona de su confianza, y la oportunidad de presentar las pruebas y alegatos que considere convenientes, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha que determine la instancia correspondiente, también tendrá el derecho de audiencia y defensa empleando los recursos legales que considere pertinentes en el proceso de aplicación de sanciones por faltas cometidas según lo establecen los presentes estatutos.	ARTÍCULO 43 Todo asociado de la Agrupación Política Nacional tendrá el derecho de ser escuchado en su defensa por sí o por persona de su confianza, y la oportunidad de presentar las pruebas y alegatos que considere convenientes, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha que determine la instancia correspondiente, también tendrá el derecho de audiencia y defensa empleando los recursos legales que considere pertinentes en el proceso de aplicación de sanciones por faltas cometidas según lo establecen los presentes Estatutos.		En ejercicio de su libertad de autoorganización.
DE LA DISOLUCIÓN ARTÍCULO 44 ARTÍCULO 45 Parlamento Ciudadano Nacional se sujeta a la normatividad electoral vigente y a los acuerdos que al respecto emita el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aplicable a todas las Agrupaciones Políticas Nacionales en el carácter de entidades de interés público, en materia de disposición de los bienes y derechos, de la disolución y liquidación, y cumplimiento de las obligaciones, para el caso de pérdida o cancelación de registro.	DE LA DISOLUCIÓN ARTÍCULO 44 ARTÍCULO 45 México Adelante se sujeta a la normatividad electoral vigente y a los acuerdos que al respecto emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicable a todas las Agrupaciones Políticas Nacionales en el carácter de entidades de interés público, en materia de disposición de los bienes y derechos, de la disolución y liquidación, y cumplimiento de las obligaciones, para el caso de pérdida o cancelación de registro.		No presentan cambios.
		Art. 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.	En ejercicio de su libertad de autoorganización.



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL"

TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
<p>ARTICULOS TRANSITORIOS</p> <p>UNO</p> <p>Se faculta por única vez al Comité Ejecutivo Nacional a realizar las modificaciones a los documentos básicos, principios, programas y estatutos y solventar las observaciones que solicite el Instituto Federal Electoral a través de sus funcionarios con motivo de la presentación de la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Nacional.</p>	<p>ARTICULOS TRANSITORIOS</p> <p>UNO</p> <p>De ser necesario y para efectos de facilitar aperturas de cuentas bancarias o por algún motivo que lo amerite se faculta a cualquier representante o apoderado legal de la Agrupación Política Nacional que cambie el nombre de la Agrupación Política Nacional para efectos de registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevo nombre que será notificado a quien corresponda en el Instituto Nacional Electoral para fines de cambio de nombre de México Adelante como Agrupación Política Nacional (en su caso) a otro nombre distinto (como Agrupación Política Nacional, en su caso).</p>		
<p>DOS</p> <p>De ser necesario y para efectos de facilitar aperturas de cuentas bancarias o por algún motivo que lo amerite se faculta a cualesquier representante y apoderado legal de la Asociación que cambie el nombre de la Asociación para efectos de registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevo nombre que será notificado a quien corresponda en el Instituto Federal Electoral para fines de cambio de nombre de parlamento ciudadano nacional como agrupación política nacional (en su caso) a otro nombre distinto (como agrupación política nacional, en su caso).</p>	<p>DOS</p> <p>Lo no previsto en los presentes Estatutos, aplican lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos y los Acuerdos tomados en la Asamblea Nacional.</p>		

<div>  <div> INE Instituto Nacional Electoral </div> </div> <div> DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO </div>			
<div> CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA "PARLAMENTO CIUDADANO NACIONAL" </div>			
TEXTO VIGENTE	TEXTO REFORMADO	FUNDAMENTO LEGAL	MOTIVACIÓN
TRES Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional electo en acto constitutivo (según acta constitutiva) serán los primeros de su género y durarán seis años.	TRES Los Presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, declare la procedencia Legal y Constitucional de los mismos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de septiembre de 2018.		

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

De nueva cuenta, realice las gestiones necesarias para publicar esta Resolución en el Diario Oficial de la Federación. _____

Continúe con el siguiente asunto Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre la implementación del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral 2017-2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Informe mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente. _____

El Informe que tenemos frente a nosotros es un Informe que nos presenta la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto de los resultados que derivaron de la implementación del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, en el recién concluido Proceso Electoral 2017-2018. _____

Como bien recordaremos, ésta es una de las múltiples medidas de inclusión que se han aprobado en el Consejo General de este Instituto, precisamente para generar las condiciones necesarias para garantizar que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos puedan participar en las distintas etapas y en las distintas formas necesarias en un Proceso Electoral, más allá de cualquier condición que pudiesen presentar, sin absolutamente alguna discriminación. _____

Éste es el segundo Proceso Electoral en el que se aplica el Protocolo para que personas con discapacidad puedan ser funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, y me parece que de la misma forma que ocurrió con el Informe que se rindió en el 2017, luego de la primera implementación de este Protocolo, lo que

advertimos es las medidas adicionales, no solo el cumplimiento de las medidas establecidas en el Protocolo, sino un conjunto de medidas adicionales que se han establecido por parte de las Juntas Locales y Distritales de nuestros Consejos Locales y Distritales, y por supuesto, por parte de los Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, precisamente para garantizar que todas las ciudadanas y los ciudadanos estén en condiciones de participación. _____

Si bien tenemos aquí, o más bien es importante señalar que el número de ciudadanas y ciudadanos sorteados es casi el 1 por ciento, el 13 por ciento que fue sorteado para poder ser funcionario de Mesa Directiva de Casilla. _____

Y la aplicación del Protocolo implicó no solamente medidas de capacitación y de sensibilización, y por supuesto, de participación por parte de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, sino incluso el establecimiento de adecuaciones adicionales para poder garantizar el ejercicio del derecho al voto en las mejores condiciones, incluso, de accesibilidad posible, señalábamos ya en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica cómo la aplicación de los Protocolos no solamente conlleva el que se tomen las medidas expresamente previstas, sino una conciencia que nos lleva a advertir cuestiones adicionales. En el 2017 pudimos ver cómo una medida adicional que no se había previsto era que en distintas escuelas donde se instalaba más de una casilla, a veces teníamos casillas instaladas en la planta baja y en el primer piso. _____

Y merced a la sensibilización que derivó del Protocolo se buscó que todas las casillas que se instalaron en la escuela se instalarán en la planta baja, precisamente para generar las mejores condiciones de accesibilidad, con independencia de la posibilidad que hubiese existido de colocar rampas para poder acceder al primer piso; pero hay una accesibilidad mayor más allá de la rampa poniéndolas en la planta baja. _____

En este Informe que está a nuestra consideración también advertimos algunas medidas adicionales que tienen que ver con, incluso, apoyarnos de aliados estratégicos para poder fortalecer las capacitaciones y el seguimiento oportuno a las necesidades que pueden tener las y los ciudadanos que deciden participar como funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. _____

Ya se ha implementado y se ha normalizado me parece que de una forma adecuada y que es deseable el hecho que, incluso, un tema que fue de amplia discusión, que fue el que los funcionarios que tuvieran algún tipo de discapacidad pudiesen ser apoyados por una persona de su confianza. Esto ha podido ocurrir en ya 2 Procesos Electorales sin absolutamente ningún cuestionamiento, porque precisamente todas y todos debemos tener el mismo derecho a participar. _____

Agradezco que ante una petición que se formuló en la Comisión de Capacitación se haya incluido también en qué entidades y en qué Distritos fue donde se incluyeron estas medidas adicionales, porque creo que se debe de reconocer el trabajo del personal del Instituto que ha buscado ir más allá de lo que está ordenado por parte de este Consejo General para generar las mejores condiciones. Esto ha ocurrido con este Protocolo, hemos avanzado con el Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans, con las medidas afirmativas adoptadas en materia tanto de paridad, como de participación indígena. _____

Y recientemente se ha aprobado un nuevo formato para poder identificar a todos los votantes, las personas que acudan a votar en las distintas elecciones para poder seguir avanzando con las adecuaciones que puedan ser necesarias a las casillas para poder cumplir con un compromiso de este Instituto de que todas las personas puedan votar, todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan votar en este país y todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan participar en este país, generar las condiciones que nos lleven a ese objetivo que es el que debe de guiar nuestro actuar. _____

Nada más señalar que agradezco a la Dirección Ejecutiva, por supuesto, al Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica que me pidió que presentara este Informe y, sin duda, a todo el personal en las Juntas Locales, en las Juntas Distritales, en nuestros Consejos y a los Capacitadores Asistentes Electorales, a los Supervisores Electorales y a las funcionarias y los funcionarios con discapacidad que accedieron a poder participar para recibir el voto de sus vecinos y de sus vecinas el día 1 de julio. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente._____

También quiero pronunciarme sobre este Informe que me parece que es muy relevante, y solamente recordar que en mayo del 2017 este Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, y esto obviamente abrió la posibilidad de que estas personas con discapacidad pudieran fungir como funcionarios de Casilla el día de la Jornada Electoral y también contar con el apoyo que necesitan para poder llevar a cabo esas actividades._____

También destacar que en el Protocolo se previó que las personas con discapacidad que fungieran como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla el día de la elección, podrían estar acompañados de una persona de su confianza o también ser apoyadas por algún Capacitador-Asistente Electoral o algún otro funcionario de la propia casilla. Y eso también lo resalto porque de los datos que nosotros vamos a ver en este Informe, precisamente esta posibilidad que hay de que una persona con discapacidad sea apoyada por una persona de su confianza fue la modalidad que más se utilizó el día de la Jornada Electoral._____

Además, también el Protocolo planteaba que las casillas deberían de estarse instalando en lugares accesibles, y también la posibilidad de hacer los ajustes razonables para que en el caso de que los inmuebles no fueran tan accesibles poner rampas o algún otro apoyo._____

Gracias a este Protocolo entonces el pasado 1 de julio de 2018 tuvimos 776 personas con discapacidad que fungieron como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla._____

También tenemos conocimiento de que las personas con discapacidad física o motriz son las que más participaron como funcionarios de casilla, seguidos de las personas con discapacidad visual, y también seguido de las personas con otro tipo de discapacidades._____

Y como les decía, de estas 776 personas, 348 solicitaron que fueran apoyados por una persona de su confianza._____

La participación de las personas con discapacidad en la organización de las elecciones en nuestro país coloca al Instituto Nacional Electoral a la vanguardia en la implementación de acciones afirmativas de ajustes razonables, permitiéndonos afirmar que la elección que el Proceso Electoral 2017 y 2018 fue el proceso más incluyente que hemos tenido en nuestro país._____

Ello se logró, obviamente, gracias a todas las acciones y Acuerdos que fueron aprobados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral y también en las reuniones de trabajo con organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad._____

Conocer cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y cómo las podemos afrontar permite entender el significado de la frase “nada de nosotros sin nosotros”, que es obviamente la que enarbola a las personas con discapacidad._____

Y sin duda, el Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, es una de las herramientas más importantes que aprobó este Consejo General, pero también además de estas herramientas, contamos con una serie de actividades, de acciones que se han estado llevando a cabo a lo largo de todo este año, obviamente con el acompañamiento de las distintas Consejeras y Consejeros Electorales que integran este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y por ejemplo, podríamos resaltar que de enero al 23 de mayo de 2018, un total de 25 mil 28 personas con algún tipo de discapacidad acudieron a los módulos a obtener su Credencial para Votar._____

También que este 1 de julio de 2018 se instalaron 31 casillas especiales en hospitales, salvo el estado de Nayarit, para el voto de las personas hospitalizadas, sus acompañantes y persona de guardia, y éstas también son acciones que hemos estado implementando para favorecer a las personas con discapacidad, y hay que estarlas reconociendo._____

También se distribuyó un formato para el registro de personas con discapacidad que acudieron a votar este 1 de julio de 2018, y se están, obviamente, haciendo los análisis de la información planteada en estos formatos. _____

También el Instituto Nacional Electoral realizó 3 debates presidenciales con interpretación de Lengua de Señas Mexicanas, destacando la participación de intérpretes sordos también, haciendo la interpretación en estos debates. _____

Y solamente recordarles que de estos 3 debates presidenciales, tuvieron más de 19 millones de vistas en Facebook, Twitter y YouTube, y obviamente esto también ayuda a tener más o menos una idea de cuántas personas con discapacidad se pudieron ver beneficiados con esta medida. _____

También tenemos una herramienta para hacer accesible la página web del Instituto Nacional Electoral, que también fue utilizada para las personas con discapacidad, y también tuvimos 1 mil 926 promocionales de televisión de Partidos Políticos Nacionales, locales, coaliciones, y candidaturas independientes. _____

De estos promocionales, solamente tuvimos algunos que tenían intérprete de Lengua de Señas Mexicanas. _____

También destaco aquellas acciones adicionales a las señaladas en el protocolo, que nuestros compañeros en las Juntas y Consejos Distritales estuvieron llevando a cabo, como realizar la capacitación con el apoyo del Instituto Colimense para la Discapacidad y la Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, obviamente en el estado de Coahuila. Proporcionar sillas de ruedas y lupas en alguna otra entidad federativa, y también contar con el acompañamiento de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas y personas capacitadoras que conocen esta forma de comunicación al momento de hacer la capacitación de las personas con discapacidad que fungirían finalmente como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. _____

Entonces, creo que debemos de resaltar el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral en relación con las personas con discapacidad, y también el trabajo que han hecho nuestras compañeras y compañeros en las Juntas Distritales, para poder, obviamente, tener estas medidas adicionales. _____

Solamente haría algún tipo de observación al Informe, para que podamos realmente verificar cuáles son medidas adicionales y cuáles no la son, y simplemente están cumpliendo con lo que ya se dijo en el Protocolo. _____

Y solamente señalar que seguramente nosotros como institución seguiremos trabajando de la mano con las personas con discapacidad. Yo lo he dicho aquí muchas veces, somos una institución incluyente y seguiremos enarbolando la bandera que dice: “nada de nosotros sin los otros”, para que las personas con discapacidad sepan que cuentan con esta institución que está al pendiente de sus necesidades, y también viendo la manera de poderlas estar salvaguardando y cumpliendo. _____

Sería todo. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Al poco tiempo que me incorporé a los trabajos del Instituto Nacional Electoral, aprobamos el Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla. _____

Y encontré este trabajo muy avanzado, puede contribuir ya al mismo en la recta final. _

Hoy quiero celebrar que lo hayamos aprobado y que se haya implementado, primero en 2017 y luego en las pasadas elecciones. _____

Quiero compartir algunos datos que me llamaron la atención del Informe que se nos presenta, se señala que para el Proceso Electoral 2017-2018 se sortearon 11 millones 623 mil 878 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 112 mil 229 tenían alguna discapacidad, 50 mil 928 fueron mujeres y 48 mil 543 eran hombres. De estas personas solo el 3 por ciento de la ciudadanía sorteada con discapacidad aceptó participar, y en el 98 por ciento de los casos mencionó que no aceptaba participar justamente por su discapacidad. _____

Creo que, esto nos pone un área de oportunidad, tenemos que averiguar cuáles fueron las causas específicas por lo que ellos consideraron que su discapacidad era un impedimento para que pudieran desempeñarse como funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, y en su momento podamos adoptar acciones de nivelación adicionales para que estas personas puedan incorporarse a hacer esta labor. _____

Respecto a la ciudadanía sorteada que aceptó participar y fue capacitada por tipo de discapacidad, en el 50 por ciento de los casos presentaban una discapacidad física o motriz, en el 5 por ciento mental o psicosocial, en el 6 por ciento intelectual, en el 12 por ciento auditiva, en el 22 por ciento visual y en el 4 por ciento de lenguaje. _____

Finalmente, fueron designados 1 mil 963 ciudadanos con discapacidad como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, 1 mil 122 hombres y 841 mujeres, 9 de ellos y ellas como Presidentes de Mesa Directiva de Casilla. _____

El 80 por ciento de la ciudadanía con discapacidad que fue designada aceptó participar, el día de la Jornada Electoral participaron 776 personas como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que tenían alguna discapacidad. _____

Una de las medidas más innovadoras que aprobamos en este Protocolo fue la posibilidad de que estas personas con discapacidad pudieran desempeñar su labor como funcionarios o funcionarias de Mesa Directiva de Casilla con el acompañamiento de una persona, este acompañamiento se lo podría brindar alguno de sus compañeros de la Mesa Directiva de Casilla o, en su defecto, algún Capacitador Asistente Electoral que nosotros contratáramos ex profeso para apoyar a esa persona con discapacidad o, incluso, alguna persona de su confianza. _____

Quiero decir que esta medida fue utilizada por muchas personas, 575 funcionarios solicitaron acompañamiento para las actividades que desarrollarían durante la Jornada Electoral, 21 solicitaron el acompañamiento de otro funcionario de Mesa Directiva de Casilla, 15 de un Capacitador Asistente Electoral y 539 de una persona de confianza. Es decir, que esta medida sí propició que más personas con discapacidad pudieran desempeñarse como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla. _____

El día de la Jornada Electoral de los 776 funcionarios con discapacidad que se presentaron 372, es decir, el 48 por ciento eran ciudadanos que durante la segunda etapa de capacitación habían solicitado acompañamiento, por lo que el día de la Jornada Electoral el 100 por ciento de estos ciudadanos que se presentaron y que previamente habían solicitado acompañamiento contaron con un acompañante. _____

Del acompañamiento de los 372 ciudadanos, 348 recibieron el acompañamiento por una persona de confianza, 14 por otro funcionario de la Mesa Directiva de Casilla y 10 por un Capacitador Asistente Electoral adicional que nosotros contratamos para que llevara a cabo esa labor. _____

Celebro la implementación de este Protocolo, no obstante, el Informe nos deja el reto de averiguar lo que ya mencionaba, por qué la ciudadanía o gran parte de esta ciudadanía con discapacidad decidió no participar porque consideraron que su propia discapacidad era un impedimento. _____

Tenemos que averiguar qué podemos hacer para que garanticemos que estas personas también puedan participar y que su discapacidad no se convierta en un obstáculo para ejercer derechos de ciudadanía como lo es participar como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, esto no debe ser una limitante para su participación y en términos generales, celebro mucho que nos hayan presentado estos datos, creo que son muy útiles para seguir trabajando en esta materia. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Permítame intervenir sobre este punto, porque me parece que es particularmente relevante. _____

Las Elecciones de 2018, lo dijimos en su momento, fueron las elecciones más grandes de nuestra historia democrática, por donde se les quiera ver por el número de ciudadanos involucrados como potenciales electores en el Listado Nominal, por el número de casillas a instalar, por el número de ciudadanas y ciudadanos que se requerían para administrar, recibir y contar los votos de los vecinos en las casillas, por

el número de cargos de elección popular en disputa, lo que convirtieron a nuestra elección en la elección más grande de la historia. _____

También nos propusimos que fuera la elección más explicada de la historia y esto logró conformarse, realizarse con lo que a esta elección se le coloca como un punto de referencia a nivel mundial, por las acciones que tomó esta autoridad directamente, por la vinculación que se tuvo con los medios de comunicación, por la construcción de redes de acompañamiento de parte de organizaciones de la sociedad civil, porque somos la única autoridad electoral en el mundo que ha logrado suscribir Convenios con Google, con Facebook y con Twitter, por lo exitoso que los mecanismos de chequeo o verificación de hechos como Verificado 2018 tuvieron, con lo que vuelven esta la elección más explicada de la historia. _____

Fue también una elección probablemente la más compleja de la historia, desde el punto de vista de las complejidades de la organización y también por el contexto de violencia en el que esta elección tuvo que realizarse y, sin embargo, el mismo Kofi Annan vino aquí a advertirnos con preocupación las tareas que teníamos que realizar en medio de un contexto de violencia que ni detonó la elección pero que padeció la elección porque ese ya estaba ahí y sin embargo, no hubo una sola casilla que dejara de instalarse por cuestiones de violencia. Les pido, por favor, si me ayudan guardando silencio mientras intervienen los miembros del Consejo General, en los términos del artículo 16 del Reglamento, Gracias _____

Ésta, fue no solo la elección, decía, más grande, no solo la más compleja, no solo la más explicada, sino también hoy podemos decirlo con los datos que este Informe nos presenta, la elección más influyente de nuestra historia. _____

Los datos comparativos respecto de la inclusión como funcionarios de casilla, que nos revela este Informe, evidencia cómo elección tras elección, el número de personas con algún tipo de discapacidad, de las muy distintas índoles, físicas, mentales, intelectuales, auditivas, visuales, etcétera, elección tras elección, Proceso Electoral tras Proceso Electoral, en los últimos 3 años ha venido incrementándose de manera particularmente relevante. _____

De 249 personas con alguna discapacidad que intervinieron como funcionarios de casilla en el año 2016, pasamos a 134 en el año 2017, recuerden que las elecciones eran elecciones, digamos, numéricamente en términos del número de casilla más pequeñas, el número de elecciones fue menor en 2017 respecto de 2016; a 776 en 2018. _____

Y no solamente el volumen de la elección lo que ejemplifica este hecho, sino también los resultados positivos, creo yo, ya se mencionaba aquí, de un acuerdo para incluir, para maximizar, digámoslo así, las posibilidades de que personas con discapacidad puedan ejercer esto que es un derecho, como ha sido reconocido por las instancias jurisdiccionales, es decir, fungir como funcionarios de casilla. _____

Éste también es un dato, me parece, del que como país tenemos que estar orgullosos, no hay ningún país en el mundo, los análisis hechos de cara a la presentación de este Informe así lo revelan, la interacción con instituciones, en instituciones como International Foundation for Electoral Systems (IFES) como Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), nos han ayudado a poder afirmar con la claridad con la que lo estoy haciendo, que no hay ninguna elección en el mundo que haya tenido el grado de inclusión que ha tenido la Elección de México en 2018. _____

En ningún lugar del mundo, se toman medidas como la que tomamos aquí, de habilitar como funcionarios del Instituto Nacional Electoral, a personas que eran requeridas por alguien con algún tipo de discapacidad, para poder cumplir su función dentro de la casilla. _____

En ningún lugar del mundo ha habido un número de personas con discapacidad visual fungiendo como funcionarios de casilla, incluso escrutadores, es decir, responsables de que los votos se contaran, y creo que eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Esto es, sí, el producto de una decisión del Instituto, sí es el producto de una decisión no gratuita, lo debo decir, del Instituto, sino una decisión que fue el resultado de una serie de venturosos contextos de exigencia desde distintas

organizaciones de la Sociedad Civil, que nos plantearon la necesidad de tomar este Protocolo, este mecanismo de inclusión, con lo que se revela una vez más aquello que en otras ocasiones hemos señalado como algo venturoso. _____

La construcción de un Sistema Democrático implica una serie de responsabilidades compartidas, y la responsabilidad de este Instituto, más allá de las que legalmente le competen, es escuchar a la sociedad, así como a las organizaciones de la sociedad, supone la corresponsabilidad de generar contextos de exigencia a esta institución. _____

Creo que, algo que no deberemos dejar pasar simple y sencillamente como una cuantificación numérica este Informe revela, insisto, lo que hoy la sociedad mexicana debe no solo conocer, sino además de lo que debe sentirse orgullosa. En 2018 tuvimos la elección más grande, la elección más compleja, la elección más explicada, probablemente la elección más libre en nuestra historia, y también la elección más incluyente, no solo en la historia mexicana, sino a nivel internacional, como un punto de paradigma adicional a los que ya esta elección está haciendo a nivel mundial como un punto de referencia, esto no se construyó de la noche a la mañana, como no llegamos a la democracia el 1 de julio, esto es producto de una construcción paulatina, gradual de sedimentos que se van acumulando y que hoy, insisto, creo que coloca al tema de las elecciones como uno de los grandes, sin menospreciar todo lo que hay que hacer en esta materia, como uno de los grandes temas resueltos del proceso de transición a la democracia del que todos, porque todos somos corresponsables en esa historia, debemos sentirnos orgullosos. _____

Si no hay más intervenciones, me parece que podemos dar por recibido este Informe. . Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan de Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que aprobó este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 2016 tiene como objetivo crear las condiciones necesarias, trabajar en esa dirección para que la ciudadanía haga suyo el espacio público y lo haga en el sentido más amplio con el fin de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática. _____

La instrumentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica requiere que cada año este Consejo General conozca y apruebe un Plan Anual de Actividades para poner en práctica lo que en el 2016 se definió como las grandes líneas y objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. _____

El Plan de Implementación del 2019, que es el que se ha agendado para este punto en la sesión del Consejo General, tiene 2 grandes objetivos transversales. El primero de ellos es realizar acciones que contribuyan a fortalecer y promover nuestra cultura constitucional de valores, prácticas e instituciones democráticas. _____

Y un segundo objetivo es que la rendición de cuentas y la transparencia sean los ejes principales de lo que en la estrategia se denominada “la exigencia, corresponsabilidad y la incidencia ciudadana”. A su vez estos 2 objetivos se desdoblan en un conjunto de líneas de trabajo articuladas en 11 actividades que serán impulsadas desde el Instituto Nacional Electoral en colaboración con diversos actores y aliados estratégicos. _____

Para la implementación de estas actividades se tomarán en cuenta criterios de alcance Regional y Local. _____

El Plan 2019 incluye una descripción detallada de cada uno de los Proyectos que se propone desarrollar, se identifica el objetivo, el eje estratégico, la línea de acción, la población objetivo, los componentes y productos que se espera obtener y, desde luego, su programación en el tiempo._____

Además, para cada actividad se generarán indicadores que forman parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia._____

En suma, el Plan Anual de Implementación 2019 que se pone el día de hoy a consideración de este Consejo General, busca reforzar las acciones contenidas en los 3 ejes de la Estrategia Nacional de Cultura Política, que son: verdad, diálogo y exigencia._____

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade._____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Al contrario, Consejero Electoral Benito Nacif, muchas gracias._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación por favor._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 14._____

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1484/2018) Pto. 14_____

INE/CG1484/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2019 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2023

G L O S A R I O

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
ENCCÍVICA: Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
INE: Instituto Nacional Electoral.
JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
LGIE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
OPL: Organismos Públicos Locales.

A N T E C E D E N T E S

1. Mediante Acuerdo INE/CG732/2016 del 14 de octubre de 2016, el Consejo General aprobó la ENCCÍVICA 2017-2023.
2. Por acuerdo INE/CG846/2016, del 14 de diciembre de 2016, se aprobó la creación del Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento del diseño e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
3. En cumplimiento del Acuerdo INE/CG732/2016, el 14 de diciembre de 2016, se presentó a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el Plan Inicial Implementación 2017 de la ENCCÍVICA.

4. Asimismo, el 30 de junio de 2017 se presentó a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el Plan Anual de Implementación 2018 de la ENCCÍVICA.

CONSIDERANDOS

1. Que el artículo 30 de la LGIPE, establece entre los fines del INE, el contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
2. Que el artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE dispone que el INE se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en dicho ordenamiento legal.
3. Que el artículo 34, párrafo 1, incisos a) al d) de la LGIPE señala que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva constituyen los órganos centrales del INE.
4. Conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del INE.
5. Que tal y como lo establece el artículo 44, párrafo 1, inciso b) y jj) de la LGIPE, son atribuciones del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus Comisiones, las actividades de los mismos; solicitar los informes específicos que estime necesarios; y dictar los acuerdos para hacer efectivas las atribuciones que le señala el propio ordenamiento.

6. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE, entre otras, la JGE tiene como atribución supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto.
7. Que de acuerdo con el artículo 58, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) y j) de la citada Ley, dentro de las atribuciones de la DECEyEC se encuentran, elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los OPL sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía; diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales..
8. Que el Acuerdo CG732/2016 por el que se aprueba la ENCCÍVICA, establece que cada año y durante su vigencia, el Consejo General, a propuesta de la JGE y previo conocimiento de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, deberá aprobar un programa y calendario para el año siguiente de que se trate, sobre la base de los objetivos y de los resultados que con la implementación de la Estrategia se estén alcanzando en todo el país.
9. Que el mismo Acuerdo establece que la DECEyEC impulsará el cumplimiento de las acciones que se desprendan de la ENCCÍVICA, para lo cual contará con el apoyo y participación de las demás unidades y áreas del INE, conforme lo acuerde la JGE en el ejercicio de sus atribuciones.
10. Que en cumplimiento a dicho acuerdo la DECEyEC ha presentado informes trimestrales y anuales sobre el cumplimiento a los respectivos planes de implementación de cada año.
11. Que sobre la base de los considerandos anteriores, la DECEyEC ha preparado una propuesta de Plan de Implementación de la ENCCÍVICA para el año 2019, misma que ha sido del conocimiento de la Comisión respectiva.

12. La citada propuesta programática toma en cuenta los tres ejes estratégicos y ocho líneas de acción de la Estrategia, pero también atendiendo a los desafíos para la consolidación de una cultura democrática –aspiración central de la ENCCIVICA— en el actual contexto nacional e internacional en el que las democracias se desenvuelven, descansa en dos objetivos transversales, a saber: 1) Consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones; y 2) La rendición de cuentas y la transparencia como ejes de la incidencia, la corresponsabilidad y la exigencia ciudadanas. A su vez, esos dos objetivos se desdoblan en líneas de trabajo a partir de las cuales han llevado a la formulación una cartera de proyectos o actividades a realizar en 2019, sujeto a la disponibilidad presupuestal con que se cuente para ese ejercicio fiscal.

Con base en los Antecedentes y Considerandos anteriores, el Consejo General aprueba el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Anual de Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Se instruye a la DECEyEC para que realice lo conducente y dar cumplimiento a las actividades contenidas en dicho Plan.

TERCERO.- La DECEyEC podrá realizar modificaciones en función del presupuesto aprobado para 2019 y deberá informar de ello a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Consejo General.

QUINTO.- La Secretaría Ejecutiva publicará un extracto de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que remita el presente Acuerdo a la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.



Plan de implementación ENCCÍVICA 2019

**Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica**

Diciembre de 2018



CONSEJERO PRESIDENTE

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

**CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA**

Dr. Benito Nacif Hernández

Presidente

Lic. Enrique Andrade González

Integrante

Dr. Ciro Murayama Rendón

Integrante

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles

Integrante

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez

Integrante

SECRETARIO EJECUTIVO

Lic. Edmundo Jacobo Molina

DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

Contenido

1	CONTEXTO.....	1
2	OBJETIVO SUPERIOR DE LA ENCCÍVICA	2
3	EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE ENCCÍVICA	2
4	OBJETIVOS TRANSVERSALES ENCCÍVICA 2019	3
5	CARTERA DE PROYECTOS 2019	5
5.1	VERDAD	5
5.1.1	<i>Línea 1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía</i>	<i>5</i>
	CÁTEDRA INTERNACIONAL ENCCÍVICA (FRANCISCO I. MADERO).....	5
5.1.2	<i>Línea 2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos</i>	<i>7</i>
	JORNADAS ESTATALES PARA LA DIFUSIÓN Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA.....	7
5.1.3	<i>Línea 3. Apropiación del derecho a saber</i>	<i>8</i>
	FARO DEMOCRÁTICO PARA ESTUDIANTES Y PROFESORADO EN LÍNEA	8
5.2	DIÁLOGO	10
5.2.1	<i>Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático</i>	<i>10</i>
	FORO INTERNACIONAL «LOS RETOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO EN EL SIGLO XXI»	10
	TALLERES DE PLÁTICAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DIRIGIDAS A LA INFANCIA SOBRE SU EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ELECTORAL Y CIUDADANA	11
	SOCIALIZACIÓN Y DELIBERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018, PARA EL IMPULSO DE UNA AGENDA PÚBLICA	12
5.2.2	<i>Línea 5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático</i>	<i>14</i>
	RED CIUDADANA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.....	14
5.2.3	<i>Línea 6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares</i>	<i>16</i>
	CONTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE FORMACIÓN CÍVICA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA	16
	MÉXICO DEBATE	17
5.3	EXIGENCIA.....	19
5.3.1	<i>Línea 7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada</i>	<i>19</i>
	ESCUELA DE LA BUENA POLÍTICA	19
5.3.2	<i>Línea 8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos</i>	<i>20</i>
	INCIDENCIA DE JÓVENES Y DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN POLÍTICAS PÚBLICAS	20
6	CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN	23

Presentación

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) es la propuesta del INE para combatir la debilidad de nuestra cultura democrática y generar las condiciones para que las y los mexicanos se apropien del espacio público. Bajo tres ejes estratégicos –verdad, diálogo y exigencia- la ENCCÍVICA se ha propuesto ocho líneas de acción que, impulsadas por diversos actores en clave de gobernanza, contribuirán al fortalecimiento de nuestra cultura cívica. Para implementar la ENCCÍVICA el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó que cada año se propusiera un plan anual de implementación que atendiera las actividades básicas a desarrollar conforme las temporalidades señaladas en la propia ENCCÍVICA.

El presente documento representa la propuesta institucional para la implementación de la ENCCÍVICA durante su tercer año. Tomando como base el esquema de política pública bajo el cual ha sido planteada la ENCCÍVICA, la implementación durante 2019 busca capitalizar la experiencia acumulada durante 2017 y 2018, para que las alianzas estratégicas, las relaciones interinstitucionales y el interés de diversos aliados por participar en la Estrategia sean un activo fundamental para detonar las acciones contenidas en este Plan. Por otra parte, también se busca aprovechar la experiencia en la instrumentación de diversos programas desarrollados previamente, para convertirlos en modelos replicables por los Organismos Públicos Locales en colaboración con las Juntas Locales del INE y múltiples actores a lo largo del país.

Para el 2019, la implementación de la ENCCÍVICA tendrá a su favor los avances obtenidos en los años previos. En 2017 se construyeron alianzas con actores clave para el desarrollo de actividades y programas. También se estructuró el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, instalándose el Comité Técnico de Seguimiento y diseñándose los diversos mecanismos que lo integran: de información estadística, de operación y de seguimiento y gobernanza. Durante el primer año gran parte de los esfuerzos se centraron, además, en una estrategia de comunicación y difusión para posicionar y generar un mecanismo de apropiación de la ENCCÍVICA por parte de diversos actores.

Durante 2018 la ENCCÍVICA acompañó el proceso electoral poniendo énfasis en la pedagogía pública alrededor del proceso electoral y sus diferentes etapas, así como del papel de las instituciones electorales en las mismas. Gracias a ello se consolidaron iniciativas para el debate público en torno a las plataformas de los candidatos, así como para dar a conocer sus propuestas; se establecieron dinámicas de deliberación en espacios universitarios y mecanismos de acercamiento con la ciudadanía para incentivar el voto libre y razonado. En este contexto se logró llevar a cabo la primera sesión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza y diseñar una versión 2.0 de la plataforma informática del Sistema de Monitoreo, misma que se tendrá lista en los primeros meses de 2019.

Tomando en cuenta lo anterior y bajo un breve análisis de contexto que ratifica el diagnóstico de diez componentes realizado en la ENCCÍVICA, este Plan de implementación se propone continuar

fortaleciendo nuestra cultura política democrática, guiándose por dos objetivos. El primero de ellos, buscará realizar acciones que contribuyan a fortalecer y promover nuestra democracia constitucional, sus valores, prácticas e instituciones. Un segundo objetivo será que la rendición de cuentas y la transparencia sean los ejes principales de la exigencia, la corresponsabilidad y la incidencia ciudadana. Ambos planteamientos buscan reforzar las acciones contenidas en este gran paraguas propuesto por los tres ejes de la ENCCÍVICA: verdad, diálogo y exigencia, así como contribuir a la apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos.

Dentro de este Plan se establecen once actividades primordiales que serán impulsadas desde el INE en colaboración con diversos actores. No obstante, y tomando en cuenta que la ENCCÍVICA está diseñada para sumar múltiples actores, este Plan propone diversas líneas de trabajo sobre las cuales se sugiere que los aliados de la ENCCÍVICA trabajen de manera prioritaria durante este año, en conjunto con el INE, en concordancia con los objetivos propuestos. Para la factibilidad de la implementación de estas actividades, se tomarán en cuenta criterios de alcance regional y local y de focalización estratégica.

Es importante considerar que dentro de este Plan subyacen algunos temas de manera transversal. En primer lugar, todos los programas serán construidos con perspectiva de género, atendiendo lo que la propia ENCCÍVICA señala respecto de que el acceso a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones de hombres y mujeres, no sólo atañe y afecta las expectativas y oportunidades, sino también el desarrollo democrático de la sociedad en su conjunto. Vale decir que en el marco de la propia ENCCÍVICA, todas las actividades propuestas deberán ser susceptibles de ser monitoreadas y evaluables, de lo cual deberá ser registrado en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia. Por último, como se señala al final del propio documento, la difusión de los diferentes proyectos constituirá un acompañamiento fundamental para el éxito de los mismos.

1 Contexto

En el diagnóstico que dio origen a la ENCCÍVICA se identificó que la ciudadanía tiene un ejercicio limitado del poder público, cuenta con medios insuficientes para exigir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno y tiene acceso limitado a procesos deliberativos sobre temas de interés colectivo. Asimismo, esta ciudadanía enfrenta problemáticas estructurales que aquejan al país, como son la pobreza y la desigualdad, además de la corrupción, la impunidad y la falta de controles sociales al ejercicio del poder, así como la violencia y la inseguridad pública.

A dos años de la implementación de esta Estrategia, este diagnóstico sigue vigente. En los ámbitos internacional y nacional han surgido nuevas inquietudes que merecen ser consideradas desde la perspectiva de la ENCCÍVICA para 2019, en especial aquellos asuntos públicos relacionados con el ámbito de la cultura democrática, el ejercicio de los derechos humanos y los retos de la democracia.

Durante los últimos años, indicadores Internacionales como *Freedom in the World* 2018 de *Freedom House* y el *World Report* 2018 de *Human Rights Watch*, así como encuestas de valores y de actitudes políticas (*Encuesta Mundial de Valores* y *Latinobarómetro*) sistemáticamente han identificado la erosión de los derechos humanos y de la democracia en el mundo, incluso bajo gobiernos electos democráticamente.

Entre otros hallazgos, el reporte de *Freedom House* afirma que la democracia está bajo amenaza y en retroceso en todo el mundo: 2017 fue el décimo segundo año consecutivo en que hubo declive de la libertad mundial. El número de países que sufrieron disminuciones en los derechos políticos y las libertades civiles duplica aquellos con mejoría (71 ante 35). Por su parte, *Human Rights Watch* identificó que el incremento del populismo autoritario pareciera ser menos inevitable que hace un año; hoy, se han arraigado tendencias políticas en el mundo que, en nombre del pueblo, ganan adeptos excluyendo minorías, atacan principios de derechos humanos y fomentan el debilitamiento en las instituciones democráticas.

Los datos de la Encuesta Mundial de Valores permiten decir que la democracia tiene un alto aprecio en todos los continentes. Asimismo, el rechazo a las autoridades religiosas y a los militares en los asuntos de gobierno permite ver un proceso de secularización y modernización política. Sin embargo, el análisis de las cifras nos pone alerta de riesgos potenciales para las democracias, pues es consistente el decremento del soporte a las democracias. La preferencia por la democracia coexiste con la aceptación, aunque no mayoritaria, de tener “un líder político fuerte que no tenga que molestar por el congreso y las elecciones” y “tener expertos, no un gobierno, que tomen las decisiones de acuerdo con lo que ellos creen que es mejor para el país”. América Latina vive un desencanto hacia los resultados de la democracia y pone en duda su efectividad para afrontar los retos estructurales de sus sociedades en su región. *Latinobarómetro* 2018, al medir la satisfacción con la democracia, encuentra que en la región el 24% de las personas entrevistadas afirman estar “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con sus democracias; en México esa satisfacción se reduce a 16%.

Así, en el mundo se delibera sobre el futuro de la democracia, haciendo énfasis en preocupaciones como la polarización política, nacionalismos excluyentes, la creciente intolerancia y la violación a los derechos humanos. Esto se conjuga con élites gobernantes que no se auto-contienen en el ejercicio del poder, e incluso invaden esferas de otros poderes y de la sociedad civil.

En este contexto internacional de discusión democrática, México y su democracia está siendo objeto también de una intensa deliberación en la opinión pública. La discusión actual gira en torno a temas que se requieren abordar más allá de una postura dicotómica, sino bajo una postura abierta que permita



entablar un diálogo entre ciudadanía, gobierno, instituciones, partidos políticos, sociedad civil organizada, entre otros. Los temas que encontramos en el debate son la democracia representativa y la democracia participativa; mayorías y minorías; la ciudadanía y el pueblo; los equilibrios del poder y la rendición de cuentas; las instituciones y los órganos autónomos del Estado; las consultas populares y la revocación de mandato; paridad y violencia de género; pluralidad, diversidad, consensos y disensos; clientelismo y procesos electorales; entre otros.

2 Objetivo superior de la ENCCÍVICA

Fomentar las condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie del espacio público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.

3 Ejes estratégicos y líneas de acción de ENCCÍVICA

La ENCCÍVICA se propone fortalecer la cultura democrática del país por medio de tres ejes estratégicos y ocho líneas de acción, estos ejes son:

- ◆ **Verdad.** Promover la generación y difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía tenga una idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos, así como el intercambio de sus propias experiencias.
- ◆ **Diálogo.** Configurar espacios donde se privilegie la interacción, intercambio y deliberación de ideas y posiciones entre múltiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia que convoque a la acción colectiva de la ciudadanía.
- ◆ **Exigencia.** Desarrollar mecanismos y procesos de formación en donde la ciudadanía no únicamente vigile a las instituciones, sino también participe activamente en la toma de decisiones en distintos ámbitos de acción.

La articulación entre estos Ejes Estratégicos y las ocho líneas de acción de la ENCCÍVICA se pueden visualizar en el siguiente diagrama.



4 Objetivos transversales ENCCÍVICA 2019

El contexto internacional y nacional que afronta la democracia es un imperativo para que la ENCCÍVICA, retomando sus ejes estratégicos y sus líneas acción, responda de manera focalizada con acciones programáticas y proyectos al escenario que hoy se presenta. Para ello, manteniendo el objetivo superior de la estrategia, durante 2019 la ENCCÍVICA establece dos objetivos transversales para su implementación:

- 1. Consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones**
- 2. La rendición de cuentas y la transparencia como ejes de la incidencia, la corresponsabilidad y la exigencia ciudadanas.**

Las líneas de trabajo que se articularán bajo estos objetivos son:

Objetivo transversal 1. Consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones

Líneas de trabajo:

- Promover, como imperativo democrático, la expresión de la sociedad y la apropiación del espacio público, rescatando la importancia del ejercicio de los derechos humanos como un componente fundamental de la vida democrática.
- Impulsar la capacitación y la formación de redes ciudadanas para la preservación de la democracia constitucional.
- Desarrollar conocimiento, capacidades y prácticas en todos los niveles educativos impulsando el desarrollo curricular, contenidos y actividades en la comunidad escolar que promuevan la conciencia cívica y la importancia de la democracia constitucional en tres niveles: ejercicio de los derechos humanos, la importancia de las instituciones democráticas y valores democráticos.
- Promover la cultura cívica en instituciones educativas en todos los niveles impulsando el desarrollo de actividades y contenidos en la comunidad escolar que fomentan los valores democráticos y la cultura de la paz.
- Incentivar la formación en los partidos políticos y sus cuadros para impulsar la deliberación y discusión en torno a plataformas y agendas que promuevan la institucionalidad democrática, el debate público y el reconocimiento al derecho a la diversidad de opiniones y posturas (los derechos de las minorías).

Objetivo transversal 2. La rendición de cuentas y la transparencia como ejes de la corresponsabilidad, la incidencia y la exigencia ciudadanas.

- Impulsar la creación de redes y el asociacionismo entre las organizaciones y grupos de la sociedad civil, y fomentar su vinculación con otros actores, a fin de construir agendas y emprender prácticas de participación ciudadana que exijan e incidan en la transparencia y la rendición de cuentas.
- Promover la deliberación y documentación de buenas prácticas desde la sociedad civil organizada y de las instituciones para la construcción de capital social democrático y ciudadanía. Las buenas prácticas incluyen, entre otros aspectos, la identificación de metodologías para la deliberación pública, la incidencia y la construcción de acuerdos.
- Impulsar el desarrollo de contenidos curriculares y extracurriculares de educación cívica que promuevan la comprensión del funcionamiento de la institucionalidad democrática y el desarrollo de actitudes y competencias necesarias para la convivencia democrática, destacando la importancia del asociacionismo como medio para la exigencia y la incidencia ciudadana.
- Promover mecanismos para fomentar el diálogo en el entorno escolar para la promoción, difusión y defensa del derecho a saber y el derecho a participar en el gobierno de los ciudadanos.
- Fomentar el diálogo con y entre los partidos políticos, para promover la apropiación del derecho a saber y los contrapesos a las instancias del poder público que fomente una cultura de rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

5 Cartera de Proyectos 2019

5.1 Verdad

5.1.1 Línea 1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía

Cátedra internacional ENCCÍVICA (Francisco I. Madero)

Objetivo	Crear un espacio académico permanente en universidades que concentre a académicos reconocidos a nivel internacional y nacional para formar estudiantes de licenciatura y posgrado con un nivel de excelencia de preparación sobre la consolidación de las democracias en el siglo XXI. Se espera que con ello, las personas atendidas se conviertan en profesionales que trabajen en salvaguardar los derechos humanos, el desarrollo económico y el bienestar social.
Eje estratégico	Verdad
Línea de acción	Línea 1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía
Descripción	Se buscará concertar con universidades, la inclusión de una cátedra en la que participen académicos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. La Cátedra busca combinar la docencia e investigación, de modo que se generen convocatorias a las que profesores y alumnos acudan con propuestas de investigación que contribuyan a la deliberación sobre la democracia en el Siglo XXI. El proyecto será factible a partir de la adopción de la Cátedra por parte de diversas universidades a través de convenios específicos.
Población objetivo	Población con estudios profesionales certificados inscritos en programas de licenciatura y posgrado de las universidades promotoras de la cátedra en las áreas de ciencias sociales y políticas.
Alianzas/ actores claves	Entre otros: <ul style="list-style-type: none"> • Universidad Nacional Autónoma de México • El Colegio de México • Universidad Autónoma Metropolitana • Instituto Tecnológico Autónomo de México • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey • Centro de Investigación y Docencia Económica • Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de estudios acreditable en sus respectivos programas de licenciatura y posgrado para cursos presenciales, en línea y conferencias magistrales durante un semestre escolar. ▪ Conferencias magistrales impartidas por invitados internacionales ▪ Definición de los términos de la colaboración de la institución con las universidades, determinando contribuciones en materia de recursos humanos, materiales y logísticos. ▪ Emisión de la convocatoria para inscripción, procedimientos de admisión y evaluación. ▪ Difusión y publicación de las conferencias magistrales, así como de las cátedras del profesorado.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de contenido curricular y modalidades de impartición a la Cátedra a presentar ante las Universidades (enero 2019). • Presentación de la propuesta a las instancias universitarias correspondientes (febrero 2019). • Recepción de observación e integración de las aportaciones para retroalimentación (marzo 2019). • Elaboración de los convenios de colaboración entre el INE y las universidades participantes (abril 2019). • Firma de los convenios entre el INE y las universidades convocantes (mayo 2019). • Concertar los requisitos de registro, admisión y evaluación (julio 2019). • Emisión de la convocatoria para inscripción (agosto 2019). • Dictaminación de solicitudes (noviembre 2019). • Integración del calendario y programa curricular de la cátedra, con la definición de plantilla de profesorado invitado (junio-diciembre 2019). • Cátedra internacional (enero- junio 2020). • Evaluación de los resultados y preparación de la Cátedra Internacional 2021 (julio-diciembre 2020).

5.1.2 Línea 2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos

Jornadas estatales para la difusión y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia

Objetivo	Promover la democracia constitucional y sus instituciones
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos
Descripción	<p>Se suscribirán alianzas entre las Juntas Locales del INE, los OPL, comisiones estatales de derechos humanos y universidades locales para realizar actividades diversas (foros, campañas, producción y distribución de materiales, pláticas, entre otras) para la promoción de la democracia constitucional y sus instituciones.</p> <p>Se busca generar una amplia promoción de la democracia constitucional y los derechos humanos diferentes niveles y a través de diferentes instancias a nivel local. Se generará un catálogo de actividades posibles en el marco de las jornadas de modo que se incentive la participación de múltiples actores y que las actividades que se lleven a cabo sean evaluables en el marco de la ENCCÍVICA.</p>
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Población en general • Sociedad civil
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPL y Juntas Locales Ejecutivas del INE ▪ Organizaciones de la sociedad civil ▪ Comisión Nacional e instancias estatales de Derechos Humanos. ▪ Instituciones de cooperación que promuevan la democracia
Componentes (productos)	Foros, campañas, producción y distribución de materiales, pláticas, articulados idealmente bajo ejes temáticos vinculados con desafíos e intereses ciudadanos en el ámbito local (estatal, metropolitano, municipal, etc.)
Temporalidad	Cuatro momentos del año: mayo, julio, septiembre y noviembre

5.1.3 Línea 3. Apropiación del derecho a saber

Faro democrático para estudiantes y profesorado en línea

Objetivo	Generar contenidos para alumnado y profesorado sobre temas relacionados con democracia, ciudadanía, derechos humanos, participación social y elecciones, de acceso universal a través de plataformas en internet y otros mecanismos de distribución idóneos.
Eje estratégico	Verdad
Línea de acción	Línea 3. Apropiación del derecho a saber
Descripción	Se generarán materiales educativos diferenciados para distintos niveles educativos y edades y se pondrán a disposición de la ciudadanía posicionándolos en los primeros lugares de los motores de búsqueda en internet. Se posicionará al INE como un referente obligado para la búsqueda de materiales para temas electorales y en conceptos clave como “democracia”, “ciudadanía”, “derechos políticos”, entre otros.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Población escolarizada de educación básica (primaria y secundaria) y educación media (bachillerato y preparatoria). • Profesorado de educación básica y media de las materias de formación cívica y ética, historia de México, historia universal y ciencias sociales. • Población migrante (Mexicanos residentes en el extranjero)
Alianzas/ actores claves	<p>Entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretaría de Educación Pública ▪ Instituto Nacional de Evaluación Educativa ▪ Universidad Pedagógica Nacional ▪ Organizaciones de la Sociedad Civil ▪ Profesionales del diseño y la enseñanza ▪ Desarrolladores de plataformas y/o navegadores en tecnologías de la información y la comunicación
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Historia de la democracia en México. Quinto año de primaria. Tercero de secundaria. Bachillerato. • Historia de las elecciones en México. Quinto año de primaria. Tercero de secundaria. Bachillerato. • Los valores y habilidades necesarias de la democracia. Primero, segundo y tercero de primaria. Tercero de secundaria. Bachillerato.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> ○ Elaboración de contenidos para primaria, secundaria y bachillerato para alumnado. (Primer semestre de 2019)

- Elaboración de herramientas pedagógicas para profesorado de primaria, secundaria y bachillerato. (Primer semestre de 2019)
- Validación de contenidos y herramientas pedagógicas por parte de las autoridades del INE y alianzas estratégicas (primer semestre trimestre de 2019)
- Consolidación de contenidos y herramientas pedagógicas para producción editorial y tecnológica (tercer trimestre de 2019)
- Presentación de contenidos y herramientas pedagógicas a través de los sustratos materiales y tecnológicos procedentes de acuerdo a la disponibilidad institucional y los convenios con alianzas estratégicas.

5.2 Diálogo

5.2.1 Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático

Foro Internacional «Los retos de la democratización del mundo en el siglo XXI»

Objetivo	Realización de un Foro Internacional con exposiciones de líderes mundiales en el ámbito político y académico.
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático
Descripción	Se llevará a cabo un foro con diversos ponentes internacionales sobre los retos de la democratización del mundo en el s. XXI. El foro busca incentivar la deliberación sobre este tema a nivel nacional como internacional.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hombres y mujeres interesados en política. ▪ Profesionistas enfocados en los ámbitos político y académico
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretaría de Relaciones Exteriores. ▪ Organismos Internacionales ▪ Embajadas de los Gobiernos interesados. ▪ Universidades.
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de discusiones temáticas que aborden los principales retos de los regímenes democráticos en el siglo XXI. • Mesas temáticas de discusión sobre los aspectos sociales, culturales e institucionales que impiden la democratización de nuestras sociedades.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> ○ Definición de calendario e invitados (primer trimestre de 2019) ○ Realización del Foro Internacional (segundo trimestre de 2019)

Talleres de pláticas de personas adultas mayores dirigidas a la infancia sobre su experiencia de participación política, electoral y ciudadana

Objetivo	Generar conciencia entre la población infantil y juvenil sobre los avances y desafíos de nuestro sistema político-electoral y las formas de participación ciudadana derivada de una reflexión originada por la narración de la experiencia de personas adultas mayores que les comparta, en formato de charla, cómo era la participación política y ciudadana en los años de su infancia y juventud.
Eje estratégico	Verdad
Línea de acción	Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático
Descripción	Se realizará una convocatoria a personas adultas mayores para participar en jornadas que se realizarán en espacios escolares. Se busca reconocer el potencial social de los adultos mayores para la transmisión de valores y experiencia en términos de participación social. Se elaborarán las cartas descriptivas y guías para el desarrollo de las actividades de modo que se puedan homologar en los lugares en donde se lleven a cabo. Este programa también busca transmitir la importancia de la participación a niñas, niños y adolescentes, así como a reflexionar sobre los diferentes contextos para la participación política en el país.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Población adulta mayor con voluntad para realizar esas pláticas en escuelas y centros comunitarios. • Población infantil y juvenil interesada en estos talleres.
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personas adultas mayores (60 años de edad o más) insaculadas con voluntad y aptitud para ser integrantes de mesas directivas de casilla de procesos electorales anteriores. ▪ Personas adultas mayores inscritas en programas sociales a nivel federal o estatal que deseen participar. ▪ Escuelas públicas y privadas. ▪ Organizaciones de padres de familia. ▪ Secretaría de Educación Pública. ▪ Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ▪ Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. ▪ Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria a personas adultas mayores para contar sobre las elecciones y la participación ciudadana a niñas, niños y adolescentes

Programación	<ul style="list-style-type: none"> • Convenios de colaboración en espacios escolares para realizar las pláticas en una clase de formación cívica y ética, de manera preferente, o en casas de la cultura de las localidades. • Elaboración de las memorias de las pláticas. • Ejercicio a niñas, niños y adolescentes para que detecten las diferencias del pasado y la actualidad, mediante dibujos o ensayos.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Integración de alianzas (primer trimestre de 2019) ○ Elaboración del cuaderno metodológico (primer trimestre de 2019) ○ Elaboración de guías de apoyo (segundo trimestre 2019) ○ Emisión de la convocatoria y periodo de registro (segundo trimestre de 2019) ○ Calendarización de sedes y actividades (tercer trimestre de 2019) ○ Realización de pláticas (cuarto trimestre de 2019) ○ Informe preliminar (diciembre de 2019)

Socialización y deliberación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, para el impulso de una agenda pública

Objetivo	Realizar acciones de divulgación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, y contribuir a la deliberación y articulación de una agenda de política pública en la materia.
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático
Descripción	Con base en una estrategia de difusión y socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, el INE promoverá la realización de diversas acciones con la finalidad de informar y sensibilizar a la sociedad en general, así como a instituciones públicas, académicas y organismos internacionales en la materia para, impulsar acuerdos y compromisos que permitan atender lo expresado en la Consulta. Para ello se utilizarán medios de comunicación digitales e impresos, se generarán materiales y publicaciones dirigidas por un lado, a niñas, niños y adolescentes y, por el otro, a público especializado con el fin de contribuir al análisis, la reflexión y la generación de propuestas de política pública.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niñas, niños y adolescentes. ▪ Instituciones públicas, académicas, organismos internacionales y público especializado

Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Público en general.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Congreso de la Unión ▪ Secretaría de Educación Pública. ▪ Instituciones Educativas ▪ Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. ▪ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ▪ Instituciones de educación superior ▪ Comisión Nacional de Derechos Humanos. ▪ Comisiones Estatales de Derechos Humanos ▪ Organizaciones de la sociedad civil
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización y análisis de resultados • Mesas y foros de deliberación de resultados de la Consulta • Generación de materiales y publicaciones • Elaboración de propuestas de política pública • Seguimiento de compromisos establecidos por instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el impulso de una agenda de política pública
Programación	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistematización y análisis de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (primer trimestre de 2019) ○ Presentación de resultados de la Consulta en instituciones públicas, universidades, y escuelas (abril a septiembre de 2019) ○ Generación de materiales y publicaciones (abril a diciembre de 2019). ○ Elaboración de propuestas de política pública (último trimestre de 2019, una vez que se agoten las mesas y foros de deliberación). ○ Seguimiento de compromisos (a partir de abril de 2019, por el resto del año y, en función de los propios compromisos, en 2020)



5.2.2 Línea 5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático

Red Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Crear una red de voluntariado con ciudadanas y ciudadanos surgidos de la insaculación y capacitación de procesos electorales de 2012 a 2018 para apoyar las labores institucionales de difusión, promoción y educación cívica. Consolidar una red de voluntariado que permita atender los programas de participación ciudadana y fomento a la cultura democrática.
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático
Descripción	Se buscará que la experiencia de participación de CAES y Funcionarios de Casilla, sea capitalizada para la conformación de un voluntariado potencial para diversos programas del INE. A partir de las bases de datos con las que se cuenta, se generará una red para la distribución de información y materiales que promuevan la participación de estas personas en diversos programas del INE.
Población objetivo	Mujeres y hombres que participaron como Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores o que participaron como integrantes de mesas directivas de casilla a partir de los procesos electorales federales de 2012.
Alianzas/ actores claves	Personas insaculadas que hayan cumplido los requisitos y que aceptaron participar como integrantes de mesas directivas de casilla, así como los Capacitadores y Supervisores Electorales.
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> Integración de las bases de insaculados aptos de los procesos electorales 2012 a 2018 susceptibles a una comunicación directa por medio electrónico, postal o telefónico. Incorporación en la capacitación en procesos electorales federales de 2021 en adelante de una carta de aceptación para seguir recibiendo información del INE y sobre las actividades institucionales. Elaboración de un boletín mensual de distribución donde se consignen las actividades institucionales, el plan de actividades de ENCCÍVICA, dar a conocer materiales de educación cívica y difusión, e invitación a actividades de promoción del voto. Distribución de materiales focalizados a este voluntariado.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> Depuración de las bases de datos de listado de personas que cumplen los requisitos y dispuestas a ser integrantes de mesas directiva de casilla de los procesos electorales federales de 2012 a 2018 (primer trimestre de 2019).

- Elaboración del primer boletín y presentación a comisión (primer trimestre 2019).
- Integración del listado de personas en atención a susceptibilidad de comunicación vía electrónica y correo postal, para administración de oficinas centrales (segundo trimestre 2019).
- Integración del listado de personas en atención a susceptibilidad de comunicación telefónico para distribución en juntas distritales (segundo trimestre 2019).
- Impresión de boletines para distribución local (a partir del segundo semestre de 2018).
- Distribución de boletines mensuales para su distribución por medio electrónico (a partir del segundo semestre de 2018).
- Establecer servicio de atención por medio electrónico para atención a usuarios de la red (tercer trimestre de 2019).
- Creación de un espacio en internet para uso de este voluntariado con materiales de difusión, capacitación, promoción del voto y publicaciones, así como la posibilidad de establecer chats de comunicación horizontal de manera que sea posible el establecimiento de mecanismos de cooperación ciudadana independientes al INE (cuarto trimestre de 2019).
- Informe de avance (diciembre de 2019).

5.2.3 Línea 6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares

Contribución de contenidos de formación cívica en la educación pública

Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir a la generación de contenidos de Formación Cívica y Ética de los Libros de Texto Gratuito para cuarto a sexto año de primaria. Participar en el diseño curricular de Formación Cívica y Ética de las Escuelas Normales del país. Elaborar un texto de Educación Cívica para primero de secundaria.
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares
Descripción	Se buscará propiciar un mayor acercamiento entre el INE y la SRE para la participación en el diseño curricular de la materia de Formación Cívica y Ética. Se propondrá la elaboración de textos para grados específicos.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Población escolarizada de primaria (cuarto, quinto y sexto grados). Población escolarizada de primero de secundaria. Estudiantes normalistas del país.
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Universidad Pedagógica Nacional. Departamentos de educación normalista de las entidades federativas.
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de contenidos de los libros de texto gratuitos para cuarto, quinto y sexto grados de primaria, en atención a un horizonte objetivo de formación cívica democrática. Documento de recomendaciones dirigidos al Comité de Expertos de los Libros de Texto Gratuitos proponiendo contenidos. Evaluación de contenidos curriculares en la formación normalista en materia de formación cívica y ética. Documento de recomendaciones dirigidos a las instancias educativas correspondientes para su incorporación al plan de estudios del magisterio nacional. Convenio de colaboración con UPN e INEE para edición de Formación Cívica y Ética para primer año de secundaria. Propuesta editorial de un libro de Formación Cívica y Ética publicado por el INE y las alianzas estratégicas.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de Libros de Texto Gratuitos de cuarto, quinto y sexto año de primaria, así como del diseño curricular de las escuelas normales (primer bimestre de 2019). Integración de documentos recomendatorios para la SEP y las escuelas normales (primer bimestre de 2019). Presentación ante comisión de documentos recomendatorios para la SEP y escuelas normales (segundo bimestre de 2019).

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Envío de documentos recomendatorios a la SEP y escuelas normalistas (segundo bimestre de 2019) ○ Convenio de colaboración UPN e INEE para publicación de un libro de Formación Cívica y Ética para primer año de secundaria (primer trimestre de 2019). ○ Elaboración de contenidos del libro de Formación Cívica y Ética para primero de secundaria (primer semestre de 2019). ○ Aprobación de contenidos de Formación Cívica y Ética para primero de secundaria (tercer trimestre de 2019). ○ Edición y formación del libro de Formación Cívica y Ética para primero de secundaria (segundo semestre de 2019).
--	--

México Debate

Objetivo	Fomentar la cultura de diálogo y deliberación en niñas, niños y adolescentes y jóvenes dentro y fuera de los espacios escolares
Eje estratégico	Diálogo
Línea de acción	Línea 4. Creación de espacios para el diálogo democrático Línea 6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares
Descripción	Se desarrollará una metodología para la implementación de esquemas de debate dentro y fuera de los entornos escolares y de formación de niñas, niños y adolescentes. Se buscará transitar de los esquemas de oratoria al debate argumentativo que implica que los interlocutores dialoguen para compartir sus ideas y opiniones sobre temas específicos, basados en argumentos debidamente fundamentados, respetando y valorando la opinión de los oponentes.
Población objetivo	Niñas, niños, adolescentes en secundaria, preparatoria y jóvenes en universidades públicas y privadas.
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPL, Juntas Locales y Distritales ▪ Instituciones de educación básica y educación media ▪ Secretaría de Educación Pública ▪ Autoridades estatales de juventud ▪ Organizaciones de la sociedad civil
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología (manuales) para el desarrollo de debates para diferentes niveles: secundaria, preparatoria y universitarios • Alianzas con asociaciones y organismos de debate a nivel nacional e internacional para la participación de los ganadores en competencias nacionales e internacionales

Programación

- Acercamiento con diversas asociaciones y organismos de debate (enero-febrero 2019)
- Desarrollo de manuales y metodologías para el desarrollo de debates (marzo- mayo de 2019)
- Aprobación y presentación de manuales y metodologías (junio de 2019)
- Periodo de pilotaje (agosto-noviembre 2019)

5.3 Exigencia

5.3.1 Línea 7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada

Escuela de la buena política

Objetivo	Contribuir a la formación de cuadros de los partidos políticos, proveyendo espacios de especialización para el desarrollo, fortalecimiento y actualización de capacidades, habilidades, metodologías y competencias para la democracia, con énfasis en la cultura democrática y la rendición de cuentas.
Eje estratégico	Exigencia
Línea de acción	7. Exigencia del cumplimiento de la palabra pública empeñada
Descripción	En cumplimiento con sus atribuciones, el INE buscará contribuir a la formación de cuadros con una oferta de cursos dirigidos a dirigentes de los partidos políticos en materia de democracia y participación, apoyando las labores de educación y formación de las instancias que los partidos tengan para tal fin.
Población objetivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigentes y cuadros en funciones de los diferentes partidos políticos nacionales ▪ Dirigentes en activo de las organizaciones juveniles de cada uno de los partidos políticos nacionales
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> • Órganos directivos de los partidos, las oficinas responsables del área de formación y sus fundaciones o centros de investigación • Universidades y académicos especialistas en la materia del proyecto • OPL y Juntas Locales del INE • Organizaciones de la sociedad civil • Instituciones de cooperación que promuevan la democracia
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definición de una Agenda de formación política para liderazgos democráticos. ▪ Diseño de la oferta educativa para los partidos políticos ▪ Impartición de un primer programa de formación política para dirigentes y cuadros de los partidos políticos.
Programación	<ul style="list-style-type: none"> ○ Durante el primer semestre: a) se analizará la oferta educativa en materia de democracia y participación; b) se establecerá alianza con instituciones educativas, centros de investigación u otras instituciones interesadas en la formación democrática; c) se definirá una Agenda de formación y d) Se realizará el diseño de la oferta educativa. ○ Segundo semestre realizar la gestión, incluyendo identificar opciones de financiamiento, y la impartición del programa de formación.

5.3.2 Línea 8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos

Incidencia de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas

Objetivo	Desarrollar competencias en las y los ciudadanos para su participación efectiva en la democratización de prácticas y políticas públicas, con el fin último de mejorar la calidad de la ciudadanía y fortalecer la vida comunitaria.
Eje estratégico	Exigencia
Línea de acción	8. Promoción de la incidencia ciudadana en la solución de problemas públicos
Descripción	Se promoverá la implementación de programas de incidencia de jóvenes en algunas entidades. El INE pondrá a disposición de los OPL y las Juntas Locales, manuales para la implementación de programas de incidencia previamente piloteados por el INE para que, en coordinación con diversos actores se puedan promover en las 32 entidades de la república. Se busca que los programas sean detonados de acuerdo a las posibilidades de implementación locales. Los programas son: JuventudActúaMX y Talentum Mujeres
Población objetivo	Jóvenes entre 18 y 29 años
Alianzas/ actores claves	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPL, Juntas Locales y Distritales ▪ Universidades públicas y privadas ▪ Autoridades estatales de juventud ▪ Organizaciones de la sociedad civil ▪ Población migrante (Mexicanos residentes en el extranjero)
Componentes (productos)	<ul style="list-style-type: none"> • Reproducción de manuales que se tomarán de base para la réplica del modelo a nivel local • Desarrollo del modelo –en sus diferentes etapas- en al menos 10 entidades. Las etapas son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Establecimiento del comité interinstitucional. ○ Convocatoria pública y selección de participantes ○ Etapa de capacitación (diplomado 40 horas/ 5 días) ○ Proceso de acompañamiento – seguimiento de planes de incidencia ○ Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias (Evaluación de resultados) • Publicación de buenas prácticas

Programación	<ul style="list-style-type: none">○ Reproducción de los manuales del modelo (primer bimestre 2019)○ Establecimiento del comité interinstitucional (primero y segundo bimestre de 2019)○ Elaboración de la convocatoria (segundo bimestre de 2019)○ Publicación de la convocatoria (segundo bimestre de 2019)○ Selección de participantes y publicación de ganadores (tercer bimestre de 2019).○ Impartición de diplomado en 10 entidades (cuarto bimestre de 2019)○ Implementación de planes de incidencia y acompañamiento (cuarto al sexto bimestre de 2019).○ Encuentro Nacional para el intercambio de experiencias (primer bimestre de 2020)○ Selección y publicación de buenas prácticas (segundo y tercer bimestre de 2020).
--------------	---



Actividades permanentes

Las labores institucionales de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica elaboran y producen contenidos susceptibles de ser insumos para los distintos proyectos del Plan 2019.

Nos referimos entre otros a los siguientes proyectos:

◆ Campaña institucional de difusión en favor de la democracia constitucional

Como una actividad permanente, se buscará impulsar una campaña institucional en favor de la democracia constitucional. La campaña buscará realizar acciones de comunicación y difusión en distintos niveles, tomando como objetivos los que se han planteado en este plan de implementación.

Esta campaña buscará respaldarse de acciones territoriales a través de las juntas locales y distritales y apoyarse en la campaña prevista por la DECEyEC en su Estrategia de Difusión cuyo objetivo es “promover y difundir el ejercicio responsable de los derechos políticos, humanos y sociales para que esto constituya la base del conocimiento a partir del cual sea posible dialogar sobre acciones específicas y posteriormente exigir a quienes corresponda el cumplimiento de sus responsabilidades”.

◆ Programas de Promoción del Voto

En el marco de sus atribuciones legales y con base en las lecciones aprendidas de la implementación del **Plan de impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el proceso electoral 2017-2018**, la (DECEyEC) implementará un Programa de trabajo en materia de promoción de participación ciudadana en los procesos electorales locales 2018-2019. El programa tendrá el objetivo de promover que las y los ciudadanos ejerzan un voto libre y razonado mediante la adquisición de conocimiento que les brinden certeza sobre los procesos electorales locales 2018-2019, incluidos procesos extraordinarios en caso de que éstos se lleven a cabo.

- El trabajo que se realizará se mantendrá bajo la óptica de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con los siguientes objetivos particulares:
- Acordar mecanismos de coordinación entre el INE y los OPL, así como de alianzas estratégicas con otros actores, para incentivar la participación ciudadana mediante la adquisición de conocimiento en materia de cultura cívica y participación ciudadana
- Informar a las y los ciudadanos sobre la arquitectura, la función y el compromiso de las instituciones electorales de garantizar el ejercicio de derechos políticos electorales, a través de la generación y difusión de contenidos en distintos formatos y plataformas.
- Impulsar un intercambio de conocimiento y opiniones entre la ciudadanía y expertos sobre la integridad de las elecciones, así como la importancia de los cargos a elegir en el ámbito local para la atención de problemas y demandas sociales.



6 Consideraciones de implementación

Los programas contenidos en este documento estarán sujetos al presupuesto que se apruebe para la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en 2019. De ser necesaria la realización de ajustes, éstos serán presentados a la Comisión de Capacitación Electoral de Capacitación Electoral y Educación Cívica y, las modificaciones presupuestales serán del conocimiento y aprobación de la Junta General Ejecutiva.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar un extracto de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación._____

Del mismo modo, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el Resolutivo Quinto del Acuerdo INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra nacionalidad._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

De manera muy breve, sólo para expresar que con este Proyecto de Acuerdo estamos acatando una sentencia del 23 de agosto del 2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ha ordenado inaplicar un apartado del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que en las Convocatorias para la renovación de los Consejeros Electorales se elimine la expresión “que no haya adquirido otra nacionalidad”, es un esquema de ampliación de derechos que ha acordado, en su momento, la Sala Superior, tenemos amplia coincidencia y entonces, en la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales este tema será revisado con antelación para traerlo a la consideración del Consejo General, con lo

cual los Proyectos de Convocatorias que están agendados en puntos subsecuentes incluirán esta medida que modificará al Reglamento de los que rige la renovación de los Consejeros Electorales, particularmente, en los artículos 9 y el 11 del propio Reglamento de Designación y Remoción de dichos Consejeros._____

Entonces, es un acatamiento específico con el cual ha habido unanimidad de parte de los Consejeros Electorales._____

También hemos incluido una propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, un lenguaje incluyente no sexista y no discriminatorio en el texto del Proyecto de Acuerdo para poder ir, obviamente, con todo el cuidado de la redacción que deben tener estos documentos._____

Es todo, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 15. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1485/2018) Pto. 15_____

INE/CG1485/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA DESIGNACIÓN Y LA REMOCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL RESOLUTIVO QUINTO DEL ACUERDO INE/CG1303/2018, PARA SUPRIMIR EL PRECEPTO CORRESPONDIENTE A LA NO ADQUISICIÓN DE OTRA NACIONALIDAD

GLOSARIO

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CPEUM:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Instituto:	Instituto Nacional Electoral.
OPL:	Organismo Público Local.
Reglamento:	Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Reglamento de Comisiones:	Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Tribunal:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

- I. El 11 de marzo de 2015, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG86/2015, por el que se emitió el Reglamento.
- II. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG28/2017, por el que se modificaron diversas disposiciones de dicho ordenamiento.
- III. El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal resolvió los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados, relacionados con las reformas al citado Reglamento, en el sentido de modificar el acto impugnado.
- IV. En cumplimiento de la sentencia referida, el 14 de julio de 2017, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG217/2017, por el que se modificó el diverso INE/CG28/2017, que aprobó la reforma al Reglamento.
- V. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG572/2017, por el que se reformó el Reglamento en relación con las vacantes y ausencias temporales de las Presidencias de los OPL.
- VI. El 23 de agosto de 2018, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia del expediente SUP-JDC-421/2018, para resolver la impugnación INE/CG652/2018 en cuyo Considerando QUINTO y Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, estableció:

“QUINTO. Efectos

145. *En razón de lo antes expuesto, lo procedente es inaplicar al caso concreto el artículo 100, párrafo 2 inciso a) de la LEGIPE, por consiguiente, revocar el acuerdo por el que aprueba la convocatoria para la designación de las y los consejeros del OPLE de Aguascalientes, únicamente por lo que hace a la base tercera, numeral 1, en la parte que señala "que no haya adquirido otra nacionalidad"*

146. *En consecuencia, de conformidad con el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución federal, se deberá informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la presente ejecutoria, respecto de la inaplicación del referido precepto.*

147. *Toda vez que se advierte que el periodo de registro en la convocatoria reclamada transcurrió del trece al diecisiete de agosto, y dado el momento en que se está resolviendo el presente juicio, a efecto de no hacer nugatorio el derecho del actor de participar en el proceso para integrar autoridades electorales, es que se le otorga un plazo de tres días a partir de la notificación de la presente sentencia para que, esté en aptitud de presentar la documentación requerida en la convocatoria respectiva.*

148. *Por lo anterior, se vincula al INE para que tome las medidas necesarias para que, en su caso, alguno de sus órganos desconcentrados en Aguascalientes reciba la documentación correspondiente y le dé el trámite consecuente, en el plazo otorgado.*

149. *Por lo anteriormente expuesto y fundado*

RESUELVE

PRIMERO. *Se **declara la inaplicación** del artículo 100, párrafo 2, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la porción "que no haya adquirido otra nacionalidad".*

SEGUNDO. *Se **revoca** en lo que fue materia de impugnación el acuerdo y convocatoria controvertidos, para los efectos precisados.*

TERCERO. *Se **vincula al Instituto Nacional Electoral** para el cumplimiento de la presente sentencia."*

VII. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG1303/2018 en acatamiento a la sentencia referida en el antecedente anterior, para eliminar de las Convocatorias de los procesos de selección y

designación de Consejeras y Consejeros de OPL, el precepto normativo correspondiente a "que no haya adquirido otra nacionalidad".

- VIII.** El 11 de diciembre de 2018, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el resolutivo Quinto del Acuerdo INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra nacionalidad.

CONSIDERANDO

Fundamento legal

1. El artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado C, párrafo tercero, de la CPEUM determina que le corresponde al Instituto designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los OPL, en términos de esta Constitución.
2. El artículo 32, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE determina que son atribuciones del Instituto, entre otras, la elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los OPL.
3. El artículo 35 de la LGIPE dispone que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
4. El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE establece que el Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los OPL, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro consejeros electorales.

5. El artículo 43, párrafo 1, de la LGIPE menciona que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquellos que así determine, así como los nombres de los miembros de los Consejos Locales de los OPL y de los consejos distritales designados en los términos de esta Ley.
6. El artículo 44, párrafo 1, incisos a) y jj), de la LGIPE determina que el Consejo General tiene las atribuciones de aprobar y expedir los Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto; asimismo, la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en dicha ley o en otra legislación aplicable.
7. El artículo 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE prevé que la Unidad Técnica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tiene entre sus atribuciones el coadyuvar con la Comisión de Vinculación con los OPL en la integración de la propuesta para conformar sus Consejos.
8. El artículo 98, párrafos 1 y 2, de la LGIPE dispone que los OPL son autoridad en la materia electoral local, y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la CPEUM, la LGIPE, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.
9. El artículo 99 de la LGIPE establece que los OPL contarán con un órgano de dirección superior integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.
10. El artículo 100 de la LGIPE prevé que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados por el Consejo General, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por dicha ley y los requisitos para ser consejero electoral local, así como que, en caso de

que ocurra una vacante de consejero electoral local, el Consejo General hará la designación correspondiente.

11. El artículo 101, párrafo 1, de la LGIPE determina el procedimiento para la selección del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los OPL, para lo cual el Consejo General emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, considerando los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir; la Comisión tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación, y la inscripción y entrega de documentos para el proceso de designación se hará en cada entidad federativa o ante la Secretaría del Consejo General.
12. Los artículos 116 de la CPEUM, en el numeral 2, del inciso c), de su fracción IV, y 101, párrafos 3 y 4, de la LGIPE, prevén que, cuando ocurra una vacante de Consejero o Consejera Presidente y de Consejera o Consejero Electoral, el Consejo General llevará a cabo el mismo procedimiento previsto para cubrirla en sus distintas etapas de selección y designación; asimismo, si dicha vacante se verifica dentro de los primeros cuatro años del encargo, se elegirá un sustituto o sustituta para concluir el periodo, y cuando ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá para un nuevo periodo.
13. Con la finalidad de hacer operativa la atribución prevista en el artículo 100 de la LGIPE y garantizar la ocupación de las vacantes que se susciten en los cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejeras o Consejeros Electorales de los OPL, el Consejo General, mediante acuerdo INE/CG86/2015, aprobó el Reglamento, el cual ha sido modificado por los diversos Acuerdos INE/CG28/2017, INE/CG217/2017 e INE/CG572/2017.

Motivación del acuerdo

14. De acuerdo con la resolución de la Sala Superior del Tribunal recaída en el expediente SUP-JDC-421/2018, mediante la cual determinó procedente inaplicar al caso en concreto el artículo 100, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE, relativa a la porción “*que no haya adquirido otra nacionalidad*”, bajo el principio *pro persona*, resulta necesario maximizar el derecho de las y los aspirantes

que, en Convocatorias futuras, participen en algún proceso de selección y designación de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o Consejero Electoral de algún OPL, eliminando el mencionado precepto legal de los requisitos establecidos en el Reglamento.

Bajo esa línea argumentativa, la Sala Superior del Tribunal analizó si la medida considerada en la legislación era racional y justificada, estudiando los diversos elementos que integran el test de proporcionalidad; esto es: que la intervención del legislador persiga un fin constitucionalmente válido; que la medida resulte idónea para lograr dicho fin; que no existan medidas alternativas idóneas que sean menos lesivas para el derecho fundamental, y que el grado de realización sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental. Con base en lo anterior, la Sala Superior revisó lo siguiente:

1) Finalidad: Esta etapa conlleva a evaluar si la limitación a los derechos fundamentales se encuentra justificada, atendiendo a los valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.

Es así que el artículo 100, párrafo 2, inciso a) de la LGIPE, establece la restricción con base en que los OPL son los encargados de organizar los procesos electorales, fomentar la participación ciudadana, entre otras cuestiones que son actividades propias del Estado, las cuales constituyen un interés nacional o público, por tanto, dicha restricción cumple un fin adecuado.

2) Idoneidad: Consiste en calificar si la medida impugnada tiende a alcanzar, en algún grado, los fines perseguidos por el legislador, sin que maximice o minimice la restricción impuesta.

En tanto que la nacionalidad conlleva un lazo jurídico que une a los individuos que tienen una historia común y que comparten un proyecto de desarrollo para el futuro con el Estado, la Sala Superior consideró que es la forma idónea para lograr que en la conformación de la autoridad electoral prevalezca la búsqueda del interés nacional, en tanto que, las autoridades electorales de las entidades federativas se conformen por individuos que vean por los valores considerados preponderantes por el legislador federal.

3) Necesidad: Como se citó en el considerando anterior, la Sala Superior determinó que la norma reclamada no supera el test de necesidad, ya que existen medidas alternas que se pudiesen configurar para alcanzar el fin pretendido, restringiendo en menor grado los derechos fundamentales.

La mera existencia de una doble nacionalidad de un ciudadano mexicano, no lo limita para ejercer el cargo de consejero electoral.

Por lo que toca a la exigencia de independencia, objetividad e imparcialidad son válidamente exigidas a los encargados de llevar a cabo la función electoral, en lo individual, como consejeros electorales, en cualquiera de los ámbitos determinados por la geografía electoral.

Entre las medidas que establece la propia normativa electoral a efectos de que las actuaciones de los órganos electorales se apeguen a los principios rectores, y que con ello se alcance el fin determinado por el legislador son: 1) Se trata de un órgano colegiado que conlleva el control de sus pares, los que puede hacer notar cualquier irregularidad que se suscite; 2) La legislación estatal prevé diversos medios de impugnación para el control constitucional y legal de la actuación del OPL; y, 3) La Ley de Medios dispone que la Salas del Tribunal, podrán resolver los medios de impugnación interpuestos en conta de las actuaciones de los órganos jurisdiccional y administrativo de una entidad federativa.

Por tanto, si bien es cierto que la restricción consistente en ser mexicano por nacimiento “que no adquiriera otra nacionalidad”, está confeccionada como un medio idóneo para alcanzar un fin adecuado, al haber medidas alternas que logren lo buscado por el legislador, con un menor impacto en el derecho fundamental de los justiciables, es que no supera el subtest de necesidad, que trae como consecuencia la inaplicación de la disposición en que se sustenta tal limitante.

Al respecto, no se debe perder de vista la argumentación de la Sala Superior del Tribunal, en relación con la prueba de necesidad:

“127. En este sentido, cabe señalar que, como ha quedado previamente establecido, el hecho de que en el artículo 32 de la Constitución federal se haya establecido la

posibilidad de que, en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, se prevea que existan determinados cargos o funciones para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, ello no implica que el precepto cuestionado -es decir el artículo 100, párrafo 2, inciso a), de la LEGIPE- supere el subtest de necesidad, puesto que la mera existencia de una doble nacionalidad de un ciudadano nacido mexicano, no lo limita para ejercer el cargo de consejero electoral, como se demuestra a continuación.

(...)

142. En efecto, como ha quedado evidenciado, de conformidad con el marco normativo que rige la actuación de quienes integran un OPLE, existen distintos medios de control constitucional y legal, con la finalidad de garantizar la correcta actuación de consejeras y consejero electorales, por lo que el establecer el requisito bajo análisis resulta una restricción no razonable, atendiendo al elemento de necesidad que integrar el presente test de proporcionalidad.

143. En consecuencia, si bien la restricción prevista en el artículo 100, párrafo 2, inciso a) de la Ley Electoral, y su correlativo en la base tercera, numeral 1, de la convocatoria controvertida, está confeccionada como un medio idóneo para alcanzar un fin adecuado, al haber medidas alternas que logren lo buscado por el legislador con un menor impacto en el derecho fundamental de los justiciables es que no supera el subtest de necesidad y por consiguiente debe determinarse la inaplicación de la disposición en que se sustenta tal limitante.

144. A similar conclusión llegó el Pleno de esta Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-894/2017, en el que se determinó la inaplicación al caso concreto, de la porción normativa del artículo 83 apartado 1 inciso a), de la LGIPE, que establece que para integrar mesa directiva de casilla se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y en consecuencia se modificó el Acuerdo relativo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, solo en la parte del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, para que no se le excluyera en automático de la insaculación al actor por tener doble nacionalidad, en caso de que salga sorteado su mes y la letra del alfabeto de su primer apellido.”

15. Aunado a ello, en el Resolutivo QUINTO del Acuerdo INE/CG1303/2018, el Consejo General mandató a la Comisión para que una vez que concluyera el proceso de selección y designación de las y los Consejeros de los OPL que se encontraba en curso, presentara una propuesta de modificación al Reglamento para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra nacionalidad.

Es así que el referido proceso de selección y designación concluyó con los nombramientos correspondientes, realizados por el Consejo General el pasado 31 de octubre.

16. Derivado de lo anterior, en acatamiento al mandato del Consejo General y en atención a lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal, esta autoridad considera que es el momento procesal oportuno para actualizar el Reglamento, toda vez que la misma disposición se encuentra incluida en los artículos 9, numeral 1, inciso a) y 11, numeral 1, inciso e), fracción i del referido instrumento normativo, entendiéndose el mismo como la base sobre la cual se emitirán futuras convocatorias para diversos procesos de selección y designación de los funcionarios mencionados.

Dicho supuesto se robustece de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo 1, del citado Reglamento, señalando que su objeto es regular las atribuciones conferidas por la CPEUM y por la LGIPE al Instituto, relativas a la selección, designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL.

17. Para efectos prácticos y mayor claridad en las modificaciones que deben impactarse en el Reglamento, se incluye el siguiente cuadro en el que se detalla la redacción actual y la que se propone conforme al acatamiento de la sentencia respectiva:

TEXTO VIGENTE	DEBE DECIR
Artículo 9 1. Los requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a los cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejera o	Artículo 9 1. Los requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a los cargos de Consejera o Consejero Presidente y

TEXTO VIGENTE	DEBE DECIR
Consejero Electoral del Organismo Público, son los siguientes:	Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público, son los siguientes:
<p>a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiriera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;</p> <p>b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;</p> <p>...</p> <p>e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;</p> <p>f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo en el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;</p> <p>g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;</p> <p>...</p> <p>i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; y</p>	<p>a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;</p> <p>b) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;</p> <p>...</p> <p>e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;</p> <p>f) Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo en el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;</p> <p>g) No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;</p> <p>...</p> <p>i) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en</p>

TEXTO VIGENTE	DEBE DECIR
<p>j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor, o titular de dependencia de los ayuntamientos.</p>	<p>cualquier institución pública federal o local; y</p> <p>j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, ni subsecretaria, subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor, o titular de dependencia de los ayuntamientos.</p>
<p>Artículo 11</p> <p>1. Las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de selección y designación deberán registrarse en el sistema habilitado por el Instituto que para cada caso determine el Consejo General, conforme a lo siguiente:</p> <p>e) Carta con firma autógrafa en la que la o el aspirante manifieste bajo protesta de decir verdad:</p>	<p>Artículo 11</p> <p>1. Las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de selección y designación deberán registrarse en el sistema habilitado por el Instituto que para cada caso determine el Consejo General, conforme a lo siguiente:</p> <p>e) Carta con firma autógrafa en la que la o el aspirante manifieste bajo protesta de decir verdad:</p>

TEXTO VIGENTE	DEBE DECIR
<p>i. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;</p> <p>ii. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;</p> <p>...</p>	<p>i. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;</p> <p>ii. No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;</p> <p>...</p>

18. Con base en los argumentos expuestos, se considera oportuno aprobar la reforma del “*Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales*”.

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones señalados y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, segundo párrafo, Base V, Apartado C, párrafo tercero y 116, Base IV, inciso c), numerales 2 y 3 de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 35; 42, párrafo 5; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos a) y jj); 60, párrafo 1, inciso e) ; 98, párrafos 1 y 2; 99; 100; 101, párrafos 1, y 4; 102, párrafos 1 y 2; 103 párrafos 1 y 5; 104; 119, párrafos 1, de la LGIPE; 7, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones; este Consejo General determina emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo por el que se modifica el Reglamento.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Unidad Técnica haga del conocimiento de los órganos máximos de dirección de los OPL el contenido del presente Acuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y el Reglamento, en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, modificándose el Reglamento.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Sírvanse a proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Y por favor, continúe con el siguiente asunto Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Se trata de Convocatorias que usualmente aprueba este Consejo General, para poder cubrir vacantes en los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de los Órganos Electorales de las entidades federativas. Y en esta ocasión quisiera decir que la Comisión de Vinculación acordó proponerle a esta instancia superior la posibilidad de que de manera simultánea se pudiera desahogar el Concurso para la renovación de 3 plazas de Consejeras y Consejeros, en el órgano electoral de Chiapas. _____

No hay en este caso vacantes, pero ocurre que 3 de los integrantes de este órgano electoral concluirán sus actividades el 31 de mayo del año próximo, y por consecuencia, nosotros tendríamos que emitir una Convocatoria de manera inmediata en las primeras semanas del año siguiente. _____

Entonces, la Comisión consideró, debo decir, a propuesta del Consejero Electoral Jaime Rivera, que pudiéramos desahogar de manera simultánea los concursos de

selección para cubrir vacantes en los estados de Guerrero y Durango, pero que adicionalmente esas 3 vacantes que se van a generar hasta el día 31 de mayo en el caso de Chiapas, pudiera también de una vez desahogarse el proceso de selección, con la acotación de que haremos la designación de los Consejeros Electorales, igual a más tardar el 15 de marzo, pero nosotros lo haríamos con efectos a partir del día 1 de junio, es decir, una vez que concluya el periodo de los Consejeros Electorales que se encuentran en funciones, con lo cual no lastimaríamos absolutamente ninguna situación vinculada al periodo para el que fueron asignados originalmente dichas Consejeras y Consejeros Electorales y el Instituto estaría en condiciones de administrar de mejor manera este proceso de selección. _____

Creo que, por economía procesal es importante que lo hagamos de esa manera. _____

Luego diría también que se trata de 2 vacantes, en los otros órganos electorales, para poder cubrir 2 plazas ahí. _____

También en las Convocatorias se cuida la parte de la paridad de género, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, las etapas están claramente señaladas, y solamente pediría que se tuviera en consideración una solicitud de aplicar 2 correcciones que están en la página 6, antecedente 7, donde debe corregirse una fecha donde actualmente dice el 1 de julio, debe decir el 1 de junio. _____

Y en la página 15 correspondiente al numeral 6, que se refiere a la valoración curricular y a la entrevista, dice “del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Durango y de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero”, debiendo decir, “a efecto de equiparar las condiciones de las y los aspirantes a los cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Durango, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero”, es decir, estamos incluyendo la parte que tiene que ver con el estado de Chiapas. _____

Aquí le daré al Secretario del Consejo, estos ajustes que son estrictamente de forma, no modifican el fondo del asunto. _____

Por lo demás las Convocatorias incluyen todas las etapas que usualmente desahogamos en estos procedimientos y, por supuesto, está claro el calendario al cual va a sujetarse el Concurso de Selección. _____

Debo decir también que la Comisión ha acordado darle la mayor publicidad posible por todos los medios al alcance del Instituto y de los Órganos Electorales, tomando en consideración que estas plazas tienen un período previo, que es el vacacional, obviamente nos interesa darle la mayor difusión posible a las Convocatorias. _____

Así que, lo haremos prácticamente a partir del día de mañana con la aprobación por parte de este Consejo General de las mismas. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 16, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente, así como las correcciones que apuntó el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en su intervención. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1486/2018) Pto. 16 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, DURANGO Y GUERRERO

Glosario

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatorias:	Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero.
CPEUM:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto:	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
OPL:	Organismo(s) Público(s) Local(es).
IEPC Chiapas	Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
IEPC Durango:	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
IEPC Guerrero:	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
Reglamento Interior:	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento:	Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

- I. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que entró en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual inició su vigencia el día 24 de mayo de 2014.
- II. El 20 de junio de 2014, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG69/2014, por el que se aprobó el modelo de convocatoria para la designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y de Consejeras y Consejeros Electorales de OPL.
- III. El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el Consejo General aprobó la Designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL, dentro de los cuales se encontraba el correspondiente al estado de Guerrero. En el resolutivo Tercero del Acuerdo referido, se mandató que las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 1º de octubre del mismo año, siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo.
- IV. El 25 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG99/2015, mediante el cual aprobó las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Presidentes y las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
- V. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG809/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC Durango. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandato que el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 4 de setiembre del mismo año, siendo ésta la fecha en que iniciaron el cargo.

- VI.** El 18 de mayo de 2016, el Consejo General aprobó la Resolución INE/CG379/2016 por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal, recaída a los recursos de apelación identificados con la clave SUP-RAP-118/2016 y sus acumulados, interpuestos contra la Resolución INE/CG80/2016, respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/CG/17/2015 y sus acumulados UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015, UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015 y UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, incoado en contra de la Consejera Presidenta y las y los Consejeros Electorales del IEPC Chiapas, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar una de las causales de remoción, previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la LGIPE.
- VII.** El 31 de mayo de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG447/2016, mediante el cual se aprobó la designación del consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del IEPC Chiapas. En los resolutivos Primero y Quinto del referido Acuerdo se estableció que el período de designación de tres Consejeras y Consejeros Electorales sería de 3 años, así como que las Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 1º de junio del mismo año, siendo ésta la fecha en que iniciaron el cargo.
- VIII.** El 22 de agosto de 2018, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del Consejo General, la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, por así atender a sus intereses presentó su renuncia al cargo de Consejera Electoral del IEPC Guerrero con efectos a partir de esa misma fecha.
- IX.** El 23 de agosto de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG1217/2018 por el que se aprobaron los Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial para las y los aspirantes de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que obtuvieron la mejor puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros Electorales.
- X.** El 23 de agosto de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG1218/2018, mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a

dicha etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

- XI.** El 23 de agosto de 2018, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia del expediente SUP-JDC-421/2018, para resolver la impugnación INE/CG652/2018 en cuyo Considerando QUINTO y resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, estableció:

“QUINTO. Efectos

145. *En razón de lo antes expuesto, lo procedente es inaplicar al caso concreto el artículo 100, párrafo 2 inciso a) de la LEGIPE, por consiguiente, revocar el acuerdo por el que aprueba la convocatoria para la designación de las y los consejeros del OPLE de Aguascalientes, únicamente por lo que hace a la base tercera, numeral 1, en la parte que señala "que no haya adquirido otra nacionalidad"*
146. *En consecuencia, de conformidad con el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución federal, se deberá informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la presente ejecutoria, respecto de la inaplicación del referido precepto.*
147. *Toda vez que se advierte que el periodo de registro en la convocatoria reclamada transcurrió del trece al diecisiete de agosto, y dado el momento en que se está resolviendo el presente juicio, a efecto de no hacer nugatorio el derecho del actor de participar en el proceso para integrar autoridades electorales, es que se le otorga un plazo de tres días a partir de la notificación de la presente sentencia para que, esté en aptitud de presentar la documentación requerida en la convocatoria respectiva.*
148. *Por lo anterior, se vincula al INE para que tome las medidas necesarias para que, en su caso, alguno de sus órganos desconcentrados en Aguascalientes reciba la documentación correspondiente y le dé el trámite consecuente, en el plazo otorgado.*
149. *Por lo anteriormente expuesto y fundado*

RESUELVE

PRIMERO. Se **declara la inaplicación** del artículo 100, párrafo 2, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la porción "que no haya adquirido otra nacionalidad".

SEGUNDO. Se **revoca** en lo que fue materia de impugnación el acuerdo y convocatoria controvertidos, para los efectos precisados.

TERCERO. Se **vincula al Instituto Nacional Electoral** para el cumplimiento de la presente sentencia.”

- XII.** El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG1303/2018 en acatamiento a la sentencia referida en el antecedente anterior, para eliminar de las Convocatorias de los procesos de selección y designación de Consejeras y Consejeros de OPL, el precepto normativo correspondiente a "que no haya adquirido otra nacionalidad".
- XIII.** El 16 de noviembre de 2018, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión, Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Consejero Presidente del IEPC Durango, el C. Francisco Javier González Pérez, en virtud de que recibió el nombramiento para desempeñarse como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Durango, presentó su renuncia formal al cargo de Consejero Electoral del OPL de dicha entidad, para el que fue designado a partir del 4 de septiembre de 2015.
- XIV.** El 11 de diciembre de 2018, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se modifica el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el resolutive Quinto del Acuerdo INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra nacionalidad.
- XV.** El 11 de diciembre de 2018, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban las Convocatorias para la designación de las vacantes de Consejeras o Consejeros Electorales generadas en los Organismos Públicos Locales de las entidades de Chiapas, Durango y Guerrero.

C O N S I D E R A N D O

A. Fundamento legal

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1 de la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores, y será autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.
2. El numeral 2, del inciso c), de la fracción IV, del artículo 116 de la CPEUM, establece que para el caso de que ocurra una vacante de Consejera o Consejero Electoral Estatal, el Consejo General hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley.
3. El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, señala que dicho ordenamiento reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración de los OPL.
4. El artículo 6, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el Instituto en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en dicha ley.
5. El artículo 32, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, señala que el Instituto tendrá como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL.
6. El artículo 35, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7. El artículo 42, párrafo 5 de la LGIPE, dispone que el Consejo General integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales designados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.
8. El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) de la LGIPE, señalan que es atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, las demás señaladas en dicha Ley o en otra legislación aplicable.
9. Los artículos 60, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i), del Reglamento Interior, establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos de los OPL.
10. El artículo 98, párrafo 1 de la LGIPE, estipula que los OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño, y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
11. El artículo 99, párrafo 1 de la LGIPE consigna que los OPL contarán con un órgano de dirección superior integrado por una o un Consejero Presidente y seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones con derecho a voz.
12. El artículo 100, párrafo 1 de la LGIPE contempla que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por dicha Ley.

13. En el artículo Transitorio Décimo de la LGIPE, se dispuso que el Consejo General debería realizar los nombramientos de las y los Consejeros Electorales de los OPL de forma escalonada, en los siguientes términos:
 - a) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años;
 - b) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y
 - c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años.
14. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE, establece los requisitos para ser Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un OPL.
15. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I, inciso a) del Reglamento, señalan que la Comisión tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación.
16. El párrafo 1, inciso a), del artículo 101 de la LGIPE, dispone que el Consejo General emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir las y los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir.
17. El párrafo 3, del artículo 101 de la LGIPE, establece que cuando ocurra una vacante de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General llevará a cabo el mismo procedimiento previsto.
18. El artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a) a d) del Reglamento, mandata que el Consejo General tiene la atribución de aprobar las convocatorias para establecer los procedimientos de selección y designación para ocupar los cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de los OPL.
19. El artículo 6, párrafo 1, fracción I, inciso e) del Reglamento, establece como atribución del Consejo General, dentro del proceso de selección y designación de las y los consejeros presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales, resolver, en el ámbito de su competencia lo no previsto en dicho Reglamento.

20. El artículo 7, párrafo 1 del Reglamento, determina que el proceso de selección de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL consistirá en una serie de etapas tendentes a la elección de las y los ciudadanos para ocupar estos cargos, y se sujetará a los principios rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en la materia, en especial por el principio de máxima publicidad.
21. El artículo 8 del Reglamento, señala que el proceso de selección y designación inicia con la publicación del Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la convocatoria pública. Asimismo, establece que las convocatorias serán propuestas por la Comisión al Consejo General, debiendo contener como mínimo:
- a) Bases;
 - b) Cargos y periodos de designación;
 - c) Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados;
 - d) Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los interesados;
 - e) Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales;
 - f) Etapas y plazos del proceso de selección y designación;
 - g) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
 - h) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la notificación a las y los aspirantes;
 - i) Forma en que se realizará la notificación de la designación;
 - j) Los términos en que rendirán protesta las y los candidatos que resulten designados, y
 - k) La atención de los asuntos no previstos.
22. El artículo 10 del Reglamento, señala que la convocatoria deberá difundirse ampliamente en medios de comunicación nacionales y de las entidades correspondientes; así como en instituciones diversas de las entidades que se trate.
23. El artículo 11 del Reglamento, refiere que las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y designación deberán registrarse en el sistema habilitado por el Instituto mediante un formato de solicitud que deberá ser requisitado y firmado por la o el aspirante. Dicho artículo también establece la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de registro.

24. Los artículos 12 y 13 del Reglamento, establecen las obligaciones de la Secretaría Ejecutiva, las Juntas Locales y Distritales respecto al registro de las y los ciudadanos interesados en el proceso de selección y designación.
25. El artículo 23 del Reglamento, establece que el proceso de selección y designación considera la participación de las representaciones de los partidos políticos y los plazos con los que cuentan para presentar las observaciones correspondientes.
26. El artículo 24 del Reglamento, prevé el mecanismo por el cual la Comisión integra la propuesta que se debe presentar al Consejo General y las condiciones legales para elaborar la propuesta de designación de las y los candidatos que ocuparán los cargos en los órganos máximos de dirección de los OPL. El Consejo General designará por mayoría de ocho votos a la Consejera o Consejero Presidente y/o a las y los Consejeros Electorales, especificando el periodo para el que son designados.
27. El artículo 28, párrafo 1 del Reglamento, establece que la designación de la o el Consejero Presidente y de las Consejeras y los Consejeros Electorales será por un periodo de siete años, y no podrán ser reelectos.
28. El artículo 33 del Reglamento, dispone que en todos los casos que se genere una vacante en el cargo de Consejera o Consejero Presidente, y Consejera o Consejero Electoral, la Comisión a través de la Unidad Técnica, deberá iniciar los trabajos para llevar a cabo un nuevo proceso de selección y designación.
29. En la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre otros aspectos, el apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos en el artículo 41, Base V, Apartado A de la CPEUM y en el artículo 30, párrafo 2 de la LGIPE.

B. Objeto de las Convocatorias y cargos a designar.

Con la publicación de la LGIPE en el Diario Oficial de la Federación, se materializó la voluntad del Constituyente permanente al diseñar un esquema institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros de los OPL, sea una atribución del Instituto.

En el artículo Décimo transitorio de la LGIPE, se dispuso que en las entidades federativas en las que la elección habría de celebrarse después del 2015, el Consejo General debería realizar los nombramientos de las y los Consejeros Electorales de los OPL con antelación al inicio de su siguiente Proceso Electoral. Para dicho efecto, debería realizar nombramientos de forma escalonada, en los siguientes términos:

- a) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años;
- b) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y
- c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años.

En virtud de lo anterior, y derivado del acatamiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal recaída a los recursos de apelación identificados con la clave SUP-RAP-118/2016 y sus acumulados, en 2016 se realizó el nombramiento de las y los integrantes del Consejo General del IEPC Chiapas, dentro de los cuales se consideró a tres Consejeras y Consejeros Electorales por un periodo de 3 años, a través del Acuerdo INE/CG447/2016, mismos que iniciaron su cargo el 1º de junio de 2016, por lo que concluirán su cargo el 31 de mayo de 2019.

Derivado del escrito de renuncia de fecha 22 de agosto de 2018, con efectos a partir de esa misma fecha presentado por la C. Alma Delia Eugenio Alcaraz, Consejera Electoral del IEPC Guerrero, designada mediante Acuerdo INE/CG165/2014 por un período de seis años, se actualiza el supuesto normativo establecido en el artículo 101, párrafo 3 de la LGIPE, así como en el artículo 31, párrafo 1, inciso a) del Reglamento, consistente en la generación de una vacante de Consejera o Consejero Presidente por renuncia.

Asimismo, con motivo del escrito de renuncia presentado por el C. Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral del IEPC Durango, designado mediante Acuerdo INE/CG809/2015 por un periodo de seis años, se actualiza el supuesto normativo señalado en el párrafo anterior.

Ahora bien, en ambos casos, la Consejera Electoral de Guerrero y el Consejero Electoral de Durango, fueron designados por un periodo de seis años en atención a lo establecido en el artículo Décimo Transitorio de la LGIPE. Es así que, al generarse una vacante en el órgano superior de dirección en los OPL de las entidades antes referidas, durante los tres

últimos años del encargo correspondiente, debe designarse, respectivamente, a una Consejera o Consejero Electoral por un periodo de siete años, en atención al supuesto normativo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la LGIPE.

Al respecto, se debe precisar que de las 3 entidades en las cuales se llevará a cabo el proceso de selección y designación de 2019, de conformidad con lo que establece el artículo 100 y 101 de la LGIPE, corresponde a este Consejo General emitir una Convocatoria, con la finalidad de hacer un llamado público a las y los ciudadanos interesados en participar, a efecto de cubrir en una entidad, un total de 3 vacantes y, en 2 entidades, designar solamente una vacante, conforme a la siguiente tabla:

Tabla 1. Número de cargos por entidad en los órganos superiores de dirección de los OPL

Núm	Entidad	Cargos a designar y periodo
1	Chiapas	3 (7 años)
2	Durango	1 (7 años)
3	Guerrero	1 (7 años)
Total		5

De ahí que en términos de lo que disponen la CPEUM, la LGIPE y el Reglamento, es necesario expedir el presente Acuerdo para aprobar las Convocatorias para la selección y designación de los integrantes de cada uno de los órganos superiores de dirección de los OPL de las entidades referidas en la tabla 1.

3 Contenido de la Convocatoria.

a) Aspectos generales

En la Base Primera de la Convocatoria se establece el mecanismo por el cual, las y los interesados en participar deberán de requisitar los formatos que serán puestos a su disposición por el Instituto para que, una vez impresos y firmados,

sean entregados en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva o en las Juntas Locales y Distritales de las entidades de Chiapas, Durango y Guerrero, junto con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de requisitos.

b) Cargos y periodos a designar

La designación de la o el Consejero Electoral de los OPL en las entidades señaladas en el Considerando anterior, será para un periodo de 7 años, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafos 3 y 4, de la LGIPE.

c) Requisitos y documentación a entregar.

Los artículos 100, párrafo 1, de la LGIPE y 9 del Reglamento, así como la Convocatoria derivada del presente Acuerdo establecen los requisitos que deben cumplir quienes participen en el procedimiento de designación y la documentación que están obligados a presentar para acreditar su cumplimiento.

d) Participación de aspirantes en un proceso anterior.

Considerando que, en las entidades antes referidas, previamente se realizó al menos un proceso de selección y designación de Consejeras o Consejeros Electorales, se prevé la posibilidad de que la o el aspirante que haya participado en la Convocatoria anterior y hubiera presentado originales o copias certificadas del acta de nacimiento, título o cédula profesional de nivel licenciatura, podrá solicitar que la autoridad verifique en sus archivos si cuenta con el acervo de tales documentos, y en caso de ser afirmativo, tener por cumplido el requisito de la presentación de dicha documentación.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 18 de enero de 2019, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de

cuarenta y ocho horas los remita a la Unidad Técnica los documentos digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

e) Etapas del proceso de selección y designación.

En concordancia con el artículo 7 del Reglamento, las Convocatorias especifican cada una de las etapas en las que se divide el proceso de selección y designación, así como las fechas definidas para cada una de ellas, conforme a lo siguiente:

- I. ***Convocatoria pública.***
- II. ***Registro de las y los aspirantes y cotejo documental:***
 1. Habilitación de los formatos en el portal del Instituto: 20 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019.
 2. Entrega de formatos y documentación en la Secretaría Ejecutiva o en las Juntas Local y Distritales del Instituto de las entidades en las que se lleva a cabo el proceso de selección y designación: 14 al 18 de enero de 2019, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
- III. ***Verificación de los requisitos legales:*** corresponderá a la Comisión aprobar la lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en la LGIPE, el Reglamento y la Convocatoria, a más tardar el 1 de febrero de 2019.
- IV. ***Examen de conocimientos:*** será presentado el 9 de febrero de 2019, en las sedes que previamente defina y publique la Comisión, a través de la Unidad Técnica, en el portal del Instituto www.ine.mx. De igual forma, se establece que pasarán a la siguiente etapa las 10 mujeres y los 10 hombres que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de

conocimientos, con excepción de las vacantes a designar en el IEPC Chiapas, en cuya convocatoria se establece que accederán a la etapa de ensayo las 12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de conocimientos, para todos los casos siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis.

No pasa inadvertido que en las Convocatorias aprobadas con anteriormente para las entidades de Durango y Guerrero se consideró un mayor número de mujeres y hombres en razón de que se debía designar un mayor número de cargos. Sin embargo, en el presente caso se trata de una sola vacante a designar, por lo que se considera que con lo establecido en el párrafo anterior se contará con un número suficiente de perfiles a elegir.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas que incluye las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación del 40%. El segundo será de conocimientos técnicos y comprenderá las áreas teórico normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto el día 20 de diciembre de 2018, mismo día en que se habilitarán los formatos de registro de aspirantes, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, párrafo 4, del Reglamento.

- V. ***Ensayo presencial:*** este Consejo General considera pertinente aplicar en estos procesos de selección y designación los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial aprobados mediante el Acuerdo INE/CG1217/2018, tomando en consideración como fecha de aplicación el 23 de febrero de 2019, misma que se especifica en las Convocatorias derivadas del presente Acuerdo.

VI. **Valoración curricular y entrevista:** este Consejo General juzga oportuno que los criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la entrevista sean los mismos que los aprobados mediante el Acuerdo INE/CG1218/2018, a efecto de equiparar las condiciones de las y los aspirantes a los cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del IEPC Chiapas, IEPC Durango e IEPC Guerrero, con las establecidas para esta etapa en los procesos de selección y designación de 2018, aprobados con motivo de la emisión del Acuerdo INE/CG1303/2018 a través del cual se modificaron las Convocatorias aprobadas mediante Acuerdo INE/CG652/2018, en acatamiento a las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018.

f) Fecha de designación.

Este Consejo General considera conveniente que en la convocatoria respectiva se especifique lo siguiente:

En el caso del IEPC Chiapas, la designación se hará a más tardar el 15 de marzo de 2019, y las y los Consejeros Electorales iniciarán sus funciones el 1º de junio de 2019, quienes durarán en su encargo 7 años.

Respecto a la designación de la Consejera o el Consejero Electoral del IEPC Durango y de la Consejera o el Consejero Electoral del IEPC Guerrero previstas en el presente Acuerdo, estas se llevarán a cabo a más tardar el 15 de marzo de 2019, quienes entrarán en funciones al día siguiente de la aprobación por el Consejo General y durarán en su encargo 7 años.

Este Consejo General estima pertinente emitir las Convocatorias para designar los cargos antes mencionados en un solo momento, considerando las mismas fechas para la aplicación del examen de conocimientos y del ensayo presencial, con la finalidad de racionalizar los recursos humanos y financieros, así como para garantizar condiciones similares a las y los aspirantes a cargos de Consejeras y Consejeros Electorales.

g) Paridad de género.

Conforme a lo establecido en el Reglamento, en cada una de las etapas, la Comisión procurará observar el principio de paridad de género.

En ese sentido, las vacantes generadas en los OPL de las entidades referidas podrán ser ocupadas por hombres y mujeres procurando una conformación paritaria, respecto de la integración total de cada órgano máximo de dirección.

h) Transparencia.

Por último, en la Base Décima Primera de las Convocatorias se establece que en cada una de las etapas se harán públicos los resultados en los medios que determine la Comisión de Vinculación. Asimismo, se define que la información y documentación que integran los expedientes individuales de las y los aspirantes estará protegida en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueban las Convocatorias para la selección y designación de las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de Chiapas, Durango y Guerrero, las cuales forman parte del presente Acuerdo como Anexos 1, 2 y 3, respectivamente.

SEGUNDO. Se aprueba la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial, así como los criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la entrevista, aprobados mediante los Acuerdos INE/CG1217/2018 e INE/CG1218/2018 respectivamente, los cuales serán aplicables al presente proceso de selección y designación y forman parte integrante del presente Acuerdo como anexos 4 y 5, respectivamente.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione la difusión de las Convocatorias en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral, en los Estrados de las oficinas del Instituto en los estados de Chiapas, Durango y Guerrero, en un periódico de circulación nacional y uno local.

CUARTO. Se instruye a los Vocales Ejecutivos Locales de las entidades federativas donde se realizará la designación de consejeros, para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para que la convocatoria se publique en los portales de Internet del OPL correspondiente, la gaceta o periódico oficial de las entidades federativas en las que se realizará el proceso de selección y designación.

QUINTO. En virtud de la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial aprobado mediante el Acuerdo INE/CG1217/2018, se instruye a la Unidad Técnica para que lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar para la suscripción del Convenio de colaboración con el COLMEX, como la institución responsable de la aplicación y evaluación del ensayo presencial.

SEXTO. Se instruye a los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales de las entidades federativas donde se realizará la designación de consejeros, para que difundan el contenido de la Convocatoria, en las universidades, instituciones de educación superior, colegios, organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones indígenas y con líderes de opinión y en Órganos Constitucionales Autónomos, tanto a nivel federal como local.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas y, por conducto de la Unidad Técnica, a los OPL cuyo órgano superior de dirección será renovado.

OCTAVO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto para que proporcionen a la Comisión y a la Unidad Técnica el apoyo necesario para la organización y desarrollo de las actividades previstas en las Convocatorias objeto del presente Acuerdo.

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación a los cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación a los cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **20 de diciembre de 2018 al 18 de enero 2019**.

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **14 al 18 de enero de 2019**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Quien así lo requiera, entre el **7 y el 18 de enero de 2019**, en los horarios mencionados, podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Calle 16 Poniente Sur 250, Col. Xamaipak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29067.

Junta Distrital 01

Avenida 5 de Mayo No. 214, Col. Centro, Palenque, Chiapas, C.P. 29960,

Junta Distrital 02

Calle 6a. Oriente Lote 4 entre 2a. y 3a. Avenida Sur, Barrio Orizaba, Bochil, Chiapas, C.P. 29770.

Junta Distrital 03

4ta. Avenida Norte Poniente No. 158, Barrio Norte, Ocosingo, Chiapas, C.P. 29950.

Junta Distrital 04

Calle Constitucional No. 22, Col. Centro, Pichucalco, Chiapas, C.P. 29520.

Junta Distrital 05

Boulevard Juan Sabines No. 5, Col. Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29250.

Junta Distrital 06

Carretera Tuxtla a Chicoasén kilómetro 1.5 No. 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29025.

Junta Distrital 07

Calle 5 de Febrero No. 47, Barrio Nicatán, Tonalá, Chiapas, C.P. 30500.

Junta Distrital 08

3ra. Calle Norte Poniente No. 76, Barrio de Guadalupe, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30020.

Junta Distrital 09

15 Poniente Norte No 206, Colonia Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29030.

Junta Distrital 10

2da. Avenida Sur Poniente No. 265, Barrio de Guadalupe, Villaflores, Chiapas, C.P. 30470.

Junta Distrital 11

Avenida Ignacio Allende No. 7, Col. Centro, Margaritas, Chiapas, C.P. 30187.

Junta Distrital 12

Primera Calle Oriente No. 7 entre central y primera norte, Col. Centro, Tapachula, Chiapas, C.P. 30700.

Junta Distrital 13

2da. Calle Poniente No. 38, Col. Centro, Huehuetán, Chiapas, C.P. 30660.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes a los cargos de

Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;

7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;

- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Electoral;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 18 de enero de 2019, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **14 al 18 de enero de 2019**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Chiapas, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

La ciudadana o ciudadano designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Chiapas, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo

necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **21 de enero de 2019**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **1 de febrero de 2019**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **20 de diciembre de 2018**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Chiapas.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **9 de febrero de 2019**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **15 de febrero de 2019**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta las **18:00 horas** del día **18 de febrero de 2019**, para solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **19 de febrero de 2019**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **23 de febrero de 2019**.

Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, serán aplicables en esta etapa.

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de Vinculación en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, la que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación o a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **1 de marzo de 2019**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **1 de marzo de 2019**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta las **18:00 horas** del día **4 de marzo de 2019**, al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión de ensayo. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **5 de marzo de 2019**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista, así como las cédulas individual e integral, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1218/2018, serán aplicables en esta etapa.

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.

- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de la lista de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafo 1, inciso f), de la Ley General y 24, párrafo 2, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una sola lista con los nombres de la totalidad de los candidatos a ocupar todas las vacantes.

La propuesta de las o los candidatos deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las o los aspirantes.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **15 de marzo de 2019**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme

a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Chiapas, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

Las ciudadanas o ciudadanos que hayan sido designados como Consejeras o Consejeros Electorales, deberán acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeñan ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga los nombres de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que los acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o Consejeros Electorales designados **inciarán su encargo y rendirán protesta el día 1 de junio de 2019**, en la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva 01(961) 602-70-99

Junta Distrital 01 01(916) 3-45-13-70

Junta Distrital 03 01(919) 6-73-03-40

Junta Distrital 05 01(967) 6-31-52-94

Junta Distrital 07 01(966) 6-63-21-35

Junta Distrital 09 01(961) 6-18-44-98

Junta Distrital 11 01(963) 6-36-13-94

Junta Distrital 13 01(964) 6-42-07-30

Junta Distrital 02 01(919) 6-53-09-37

Junta Distrital 04 01(932) 6-88-0152

Junta Distrital 06 01(961) 6-71-99-14 Ext.
01

Junta Distrital 08 01(963) 6-32-34-92

Junta Distrital 10 01(965) 6-55-39-89

Junta Distrital 12 01(962) 6-26-67-80

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **20 de diciembre de 2018 al 18 de enero 2019**.

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **14 al 18 de enero de 2019**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Quien así lo requiera, entre el **7 y el 18 de enero de 2019**, en los horarios mencionados, podrá asistir a las oficinas referidas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida 5 de Febrero No. 1001-A Pte., Zona Centro, Durango, Durango, C. P. 34000.

Junta Distrital 01

Boulevard Domingo Arrieta No. 2125, Colonia 8 de Septiembre, Durango, Durango, C. P. 34196.

Junta Distrital 02

Avenida Allende No. 610 Nte., Zona Centro, Gómez Palacio, Durango, C. P. 35000.

Junta Distrital 03

Calzada José Ramón Valdéz No. 407 Pte., Guadalupe Victoria, Durango, C. P. 34700.

Junta Distrital 04

Dr. Atl No. 60, esquina con Ramírez, Colonia Centro, Durango, Durango, C. P. 34000.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, que durará en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;

4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;

- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Electoral;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 18 de enero de 2019, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **14 al 18 de enero de 2019**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Durango, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

La ciudadana o ciudadano designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Durango, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **21 de enero de 2019**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **1 de febrero de 2019**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los

aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **20 de diciembre de 2018**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Durango.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **9 de febrero de 2019**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 10 aspirantes mujeres y 10 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y

cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 10, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **15 de febrero de 2019**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta las **18:00 horas** del día **18 de febrero de 2019**, para solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **19 de febrero de 2019**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 10, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **23 de febrero de 2019**.

Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, serán aplicables en esta etapa.

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de Vinculación en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, la que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación o a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **1 de marzo de 2019**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **1 de marzo de 2019**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta las **18:00 horas** del día **4 de marzo de 2019**, al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión de ensayo. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **5 de marzo de 2019**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista así como las cédulas individual e integral, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1218/2018, serán aplicables en esta etapa.

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de la lista de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafo 1, inciso e), de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta cinco aspirantes para que de ésta se designe a quien ocupará el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **15 de marzo de 2019**, por mayoría de ocho votos, a la Consejera o Consejero Electoral que iniciará el encargo

de siete años en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Durango, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de la Consejera o Consejero Electoral designado será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

La o el ciudadano que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Durango; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

La Consejera o el Consejero Electoral designado **iniciará su encargo y rendirá protesta al día siguiente de la aprobación por el Consejo General**, en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

La Consejera o el Consejero Electoral designado no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-618) 204-01-00 / (01-618) 204-01-08 / (01-618) 204-01-09

Junta Distrital 01 (01-618)135-41-54 /
(01-618) 135-41-55
Junta Distrital 03 (01-676) 101-42-32 /
(01-676) 101-42-13

Junta Distrital 02 (01-871) 715-59-19 /
(01-871) 715-28-61
Junta Distrital 04 (01-618) 811-42-50 /
(01-618) 811-40-92

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **20 de diciembre de 2018 al 18 de enero 2019**.

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **14 al 18 de enero de 2019**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Quien así lo requiera, entre el **7 y el 18 de enero de 2019**, en los horarios mencionados, podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Calle Encino No. 4, Col. Vista Hermosa, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39050.

Junta Distrital 01

Venustiano Carranza No. 904, Linda Vista, Ciudad Altamirano, Guerrero, C.P. 40664.

Junta Distrital 02

Av. Bandera Nacional No. 19, Centro, Iguala de la Independencia, Guerrero, C.P. 40000.

Junta Distrital 03

Paseo de Zihuatanejo Poniente No. 68, El Hujal, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, C.P. 40880.

Junta Distrital 04

Av. Emiliano Zapata No. 86, Bella Vista, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39550.

Junta Distrital 05

Av. Paseo Celeste No. 20, Col. Barrio de San Francisco, Tlapa de Comonfort, Guerrero, C.P. 41304.

Junta Distrital 06

Prolongación Av. Revolución No. 1222, Fracc. Tabachines, Chilapa de Álvarez, Guerrero, C.P. 41100.

Junta Distrital 07

Av. Francisco I. Madero No. 29, Fracc. 20 de noviembre, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39096.

Junta Distrital 08

Av. Juan N. Álvarez No. 35-A, La Villa, Ayutla de los Libres, Guerrero, C.P. 39213.

Junta Distrital 09

Av. Lázaro Cárdenas No. 13, La Popular, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39799.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que durará en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su

- equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos

- personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
- a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
 - h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
 - i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero o de cualquier otra entidad federativa;
 - j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Electoral;
 - k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;

- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 18 de enero de 2019, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **14 al 18 de enero de 2019**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Guerrero, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma

inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

La ciudadana o ciudadano designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Guerrero, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,

señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **21 de enero de 2019**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **1 de febrero de 2019**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **20 de diciembre de 2018**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Guerrero.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional

Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **9 de febrero de 2019**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 10 aspirantes mujeres y 10 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 10, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **15 de febrero de 2019**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta las **18:00 horas** del día **18 de febrero de 2019**, para solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día

19 de febrero de 2019. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 10, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **23 de febrero de 2019**.

Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, serán aplicables en esta etapa.

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de Vinculación en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema

central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, la que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación o a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **1 de marzo de 2019**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **1 de marzo de 2019**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta las **18:00 horas** del día **4 de marzo de 2019**, al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx

o ante la Unidad de Vinculación, la revisión de ensayo. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **5 de marzo de 2019**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista, así como las cédulas individual e integral, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1218/2018, serán aplicables en esta etapa.

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de

Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de la lista de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafo 1, inciso e), de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta cinco aspirantes para que de ésta se designe a quien ocupará el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **15 de marzo de 2019**, por mayoría de ocho votos, a la Consejera o Consejero Electoral que iniciará el encargo de siete años en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Guerrero, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de la Consejera o Consejero Electoral designado será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

La o el ciudadano que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

La Consejera o el Consejero Electoral designado **inciará su encargo y rendirá protesta al día siguiente de la aprobación por el Consejo General**, en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

La Consejera o el Consejero Electoral designado no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-747) 491-66-30

Junta Distrital 01 (01-767) 672-03-03
Junta Distrital 03 (01-755) 103-20-88
Junta Distrital 05 (01-757) 476-04-72
Junta Distrital 07 (01-747) 116-17-85
Junta Distrital 09 (01-744) 442-74-73

Junta Distrital 02 (01-733) 332-10-67
Junta Distrital 04 (01-744) 486-13-87
Junta Distrital 06 (01-756) 475-12-44
Junta Distrital 08 (01-747) 455-13-51

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENSAYO PRESENCIAL QUE REALIZARÁN LAS 12 ASPIRANTES MUJERES Y LOS 12 ASPIRANTES HOMBRES DE LAS ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ, QUE OBTENGAN LA MEJOR CALIFICACIÓN EN EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES CORRESPONDIENTES.

Primero. Institución responsable

La institución de educación superior responsable de la aplicación y calificación de los ensayos es el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México A.C. (COLMEX).

Segundo. Sobre la aplicación

Conforme a lo establecido en las Convocatorias respectivas, a partir de las 09:00 horas -tiempo del centro del país- del sábado 22 de septiembre de 2018, las 12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres, así como las personas que, en su caso, hubieran empatado en la posición 12, de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de conocimientos (siempre y cuando hayan obtenido una calificación igual o mayor a 6), realizarán un ensayo de manera presencial en las sedes correspondientes, por medio de una computadora que se pondrá a su disposición.

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales en el portal del Instituto www.ine.mx y notificados a las y los aspirantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado.

Las y los aspirantes contarán con **tres horas** para la redacción del ensayo y no podrán acceder al lugar de la aplicación con soportes documentales, ni dispositivos electrónicos. Los aplicadores del ensayo no serán responsables del resguardo de los documentos o dispositivos electrónicos que, en su caso, lleven los aspirantes,

por lo que será responsabilidad de éstos evitar llevarlos o prever con sus propios medios su cuidado.

Las y los aspirantes deberán presentarse en la sede correspondiente, cuando menos, treinta minutos antes de la hora prevista para el inicio y deberán acreditarse con alguno de los siguientes medios de identificación oficial:

- Credencial para Votar con fotografía vigente.
- Comprobante de trámite de expedición de la Credencial para Votar con fotografía, acompañado de otra identificación con fotografía.
- Pasaporte vigente.
- Cédula Profesional.

Tercero. Objetivo del ensayo

A través de la elaboración de un ensayo original escrito durante un periodo máximo de tres horas de forma presencial, se evaluará la idoneidad de las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales referidos en las Convocatorias de 2018.

La elaboración del ensayo permitirá evaluar la habilidad de las y los aspirantes para definir y situar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización del problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, del análisis de los riesgos y las oportunidades, para desarrollar propuestas operativas a efecto de gestionar o resolver el problema identificado; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción, debiendo sustentar claramente, los argumentos planteados.

Cuarto. Características formales del ensayo

El ensayo es un escrito original, redactado de forma presencial y capturado en una terminal de cómputo, en el cual los aspirantes analizarán un planteamiento problemático del ámbito electoral. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales:

- 1) Será redactado de una forma clara y contará con una estructura coherente.

- 2) Tendrá una extensión mínima de 750 y máxima de 1,000 palabras (la extensión exacta de cada ensayo podrá ser visualizada en la pantalla durante su redacción).

El incumplimiento de los requisitos respecto de la extensión del ensayo, dará lugar a una penalización de -10% (diez por ciento) de la calificación final.

Los temas para la elaboración del ensayo versarán sobre problemáticas del ámbito electoral, relacionadas con las responsabilidades y las atribuciones legales, así como con las facultades y funciones operativas de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

El día de la aplicación se pondrán a consideración de las y los aspirantes, **dos mociones** (cuestiones problemáticas del ámbito electoral), de las cuales deberán elegir con libertad, una de ellas, para el desarrollo de su ensayo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el **COLMEX**, no proporcionarán fuentes bibliográficas o guías de estudio a las y los aspirantes para la preparación del ensayo.

Quinto. Criterios específicos de evaluación

Se evaluarán las capacidades de análisis, de comprensión, de argumentación y de síntesis de las y los aspirantes. En particular, se calificarán los siguientes atributos fundamentales:

1. Definir y delimitar una problemática del ámbito político-electoral dentro de las competencias que atañen a los Consejeros Electorales;
2. Identificar los actores relevantes y los escenarios posibles, analizando los riesgos, las oportunidades y los retos por resolver, tomando en consideración el contexto de la entidad y del país;
3. Desarrollar propuestas para aplicar los procedimientos administrativos y las disposiciones legales disponibles, a efecto de gestionar o resolver el problema identificado; y
4. Elaborar una estrategia en el marco de sus atribuciones y competencias legales, además de formular un posicionamiento institucional colegiado y coherente que

pueda ser comunicado en forma clara a todos los involucrados, a los medios de comunicación y a la opinión pública.

Lo anterior no implica que la opinión o punto de vista personal de las o los aspirantes vaya a ser sujeto a evaluación.

Sexto. Ponderación de los criterios de calificación

El ensayo será calificado con base en los siguientes criterios:

1. Los elementos de fondo equivaldrán al **85%** (ochenta y cinco por ciento) de la calificación final y éstos serán ponderados de la forma siguiente:
 - a) Definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, con referencia a hechos o casos anteriores relevantes para analizarlo; **15%**
 - b) Identificar a los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y las oportunidades, tomando en consideración el contexto concreto de la entidad y del país; **20%**
 - c) Desarrollar propuestas operativas para aplicar los procedimientos administrativos y las disposiciones legales disponibles, a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; **25%**
 - d) Elaborar una estrategia y una ruta crítica de acción, con base en las atribuciones y competencias de los OPL; construir un posicionamiento institucional colegiado que pueda ser comunicado en forma clara a los actores involucrados, a los medios y a la ciudadanía. **25%**
2. Todo lo anterior deberá considerar los antecedentes relevantes y las facultades y las competencias de los OPL.
3. El **15%** restante de la calificación final corresponderá a los elementos formales (redacción, ortografía y sintaxis).
4. **El incumplimiento** de la extensión requerida (entre 750 y 1,000 palabras) será penalizado con **-10%** de la calificación final.

Séptimo. Dictamen del ensayo

El **COLMEX** integrará una Comisión Dictaminadora con un grupo de especialistas, que cuentan con amplios conocimientos en materia político-electoral y con experiencia en este tipo de procesos de evaluación.

Cada ensayo será dictaminado anónimamente por tres especialistas designadas y designados por el **COLMEX**, en forma separada. Cada especialista le asignará la calificación al ensayo de manera independiente.

Para llevar a cabo las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de cada criterio, se utilizarán los criterios enunciados en los puntos cuarto, quinto y sexto.

Para integrar la calificación del ensayo, se utilizarán números enteros, considerando una escala de 0 al 100, en donde el cero es la calificación más baja y cien la más alta. Para que una calificación sea aprobatoria, deberá ser igual o mayor a 70.

Para que un ensayo sea considerado como idóneo, deberá contar con al menos dos dictámenes aprobatorios, es decir, que al menos dos de los tres dictaminadores le hayan asignado calificaciones iguales o mayores a 70.

Se considerarán como no idóneos aquellos ensayos que obtengan menos de dos calificaciones aprobatorias, independientemente del promedio de las tres calificaciones asignadas.

Octavo. Desarrollo de la aplicación y garantía de anonimato

Las y los aspirantes identificarán su ensayo únicamente con el número de folio otorgado para la aplicación de la presente etapa. Lo anterior, con el propósito de garantizar el anonimato de la y el aspirante para que los académicos que llevarán a cabo la evaluación del mismo, no puedan conocer la identidad de las personas que están calificando.

Una vez terminada la elaboración del ensayo se contará y registrará el número total de palabras, se realizará un respaldo electrónico en una memoria USB y se imprimirá un ejemplar del mismo que será firmado o rubricado, en cada una de sus partes, por la o el aspirante, antes de ser resguardado por el representante del **INE**.

Adicionalmente, se realizará un respaldo electrónico, en formato Word y en formato PDF, de los ensayos elaborados en cada entidad federativa, únicamente identificados con el folio otorgado para esta prueba. El conjunto de estos archivos será entregado al **COLMEX** para su evaluación y Dictamen.

Noveno. Entrega de dictámenes

Conforme a los folios asignados para la aplicación de la etapa del ensayo presencial, el **COLMEX** entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a través de la **Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales**, a más tardar el **11 de octubre de 2018, a las 18:00 horas**.

Décimo. Publicación de resultados

La Comisión de Vinculación ordenará la publicación de los nombres y las calificaciones de las y los aspirantes cuyos resultados les permitan acceder a la siguiente etapa. La información se publicará en el portal www.ine.mx, a más tardar el **11 de octubre de 2018**.

En dicha publicación se presentarán las calificaciones de cada uno de los tres evaluadores sobre cada ensayo, respetando el principio de doble ciego.

Décimo Primero. Solicitud de revisión del ensayo presencial

A partir de la publicación de resultados, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán hasta el **15 de octubre de 2018**, para solicitar por escrito, en su caso, al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del ensayo.

De ser el caso que las Juntas Locales reciban solicitudes de revisión, deberán remitirlas, por la vía más expedita, a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, para los efectos procedentes.

Décimo Segundo. Diligencia de revisión del ensayo presencial

Las o los aspirantes que presenten solicitud de revisión del Dictamen del ensayo presencial serán notificados por correo electrónico de la fecha, hora y lugar en que se realizará la diligencia correspondiente, para que estén en posibilidades de asistir a la revisión. Dicho acto deberá efectuarse a partir del **16 de octubre de 2018**.

Para la revisión de los dictámenes de cada ensayo presencial se integrará una Comisión Revisora con tres especialistas. Se llevará a cabo la revisión de los dictámenes con base en la valoración de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en los presentes Lineamientos, con el objeto de que el sustentante conozca en qué medida cumplió o no con los mismos.

La ausencia del sustentante a la revisión correspondiente no impedirá la realización de dicho acto. En todo caso, la Comisión Revisora a través de la Unidad Técnica, informará al sustentante el resultado de la revisión del Dictamen de su ensayo, mediante el correo electrónico proporcionado en su registro.

El Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los **Organismos Públicos Locales** o el funcionario que se designe levantará un acta en la cual se asentarán las actuaciones generadas en la diligencia de revisión, misma que deberá firmarse por duplicado por quienes intervienen en dicho acto.

Los resultados que se obtengan de las revisiones serán definitivos y serán comunicados de inmediato a la Comisión para los efectos conducentes. De igual forma, se comunicarán a las y los Consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, para que dentro del término de dos días hábiles puedan remitir las observaciones a que haya lugar.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un Dictamen idóneo pasará a la siguiente etapa del proceso de selección y designación, asimismo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que dentro del término de dos días hábiles puedan remitir las observaciones a que haya lugar.

CRITERIOS PARA REALIZAR LA VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE ACCEDEN A DICHA ETAPA, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ.

Primero. De la entrevista y valoración curricular

La entrevista y valoración curricular serán consideradas una misma etapa, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (Reglamento) y en la Base Séptima, numeral 6 de las Convocatorias para la designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales los Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz (Convocatorias), aprobadas mediante Acuerdo INE/CG652/2018.

Segundo. Sujetos

Pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por los representantes de los partidos políticos y/o Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que no accedan a esta etapa.

Tercero. Responsables

La evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Las y los aspirantes se abstendrán de buscar contacto con las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el plazo de vigencia de la Convocatoria, para tratar asuntos relacionados con el proceso de selección de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

Cuarto. Propósito

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias gerenciales indispensables para el desempeño en el cargo de Consejera o Consejero Electoral.

El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a los principios rectores de la función electoral en su desempeño profesional.

En la valoración curricular se tomará en cuenta la información que cada aspirante proporcionó al momento de su registro en la Convocatoria, esto es, los datos que las y los propios aspirantes aportaron y la documentación que para tal fin acompañaron.

La finalidad de la entrevista es obtener información sobre las aptitudes y competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo a partir de un intercambio de ideas sobre las capacidades de la o el aspirante frente a situaciones y hechos que se hayan suscitado en su vida profesional y en su trayectoria laboral.

De igual forma, en su caso, también podrá utilizarse la información de otras fuentes que aporten elementos objetivos para el conocimiento del desempeño de los aspirantes en sus distintos ámbitos profesionales.

Quinto. Aspectos a considerar

Para la valoración curricular y la entrevista de las y los aspirantes, se considerarán los siguientes aspectos:

- Historia profesional y laboral,
- Apego a los principios rectores de la función electoral,
- Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo,
- Participación en actividades cívicas y sociales; y
- Experiencia en materia electoral.

Sexto. Calendario de entrevistas

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario que previamente apruebe la Comisión. La información sobre el calendario se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y se integrará con la información siguiente: fecha de entrevista, horario, aspirante y sede.

Lo anterior se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico que hayan proporcionado, debiendo acusar de recibida dicha notificación, a través de ese mismo medio. Dicha notificación se publicará en los estrados de las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral de las entidades en las que se desarrolla el proceso de selección y designación.

Séptimo. De la entrevista

Con el objeto de obtener información de las y los aspirantes en relación con su apego a los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad.

La entrevista tendrá una ponderación del 70% del total de esta etapa, desglosada conforme a lo siguiente:

- El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y

- El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
 - Liderazgo: 15%
 - Comunicación: 10%
 - Trabajo en equipo: 10%
 - Negociación: 15%
 - Profesionalismo e integridad: 5%

La entrevista será presencial, se realizará en un formato de panel con, al menos, tres Consejeras o Consejeros Electorales, y considerará lo siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre, tendrá una duración total de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral asentará el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada y conforme a una valoración de cada caso, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual, a través de una transmisión y recepción simultánea de audio y video mediante el uso de tecnologías de la información.

La información que dispongan las y los Consejeros del Consejo General, provendrá únicamente de la Unidad Técnica, sin que los aspirantes puedan entregar documentación o información de forma directa a los entrevistadores.

Las entrevistas serán transmitidas, en tiempo real, el mismo día de su realización en el portal del Instituto www.ine.mx; serán grabadas en video y estarán disponibles para su consulta en el mismo portal.

Octavo. De la valoración curricular

Para la valoración curricular de las y los aspirantes, se considerarán los siguientes aspectos:

1. Historia profesional y laboral,
2. Participación en actividades cívicas y sociales, y
3. Experiencia en materia electoral.

La ponderación de la valoración curricular será del 30% del total de esta etapa, desglosado de la siguiente manera:

- El 25% para historia profesional y laboral.
- El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
- El 2.5% para experiencia en materia electoral

Noveno. Instrumento que se utilizará para el registro de la calificación

Para la valoración curricular y la entrevista se emitirá una cédula individual que contendrá un valor cuantificable para cada uno de los aspectos a valorar.

Al término de la entrevista cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar en la cédula de valoración curricular y entrevista el valor cuantificable de cada uno de los rubros que la conforman. Para ello, las y los Consejeros Electorales emplearán la cédula cuyo formato se identifica como **Anexo 1.1**, que forma parte de los presentes Criterios.

Décimo. Procedimiento para la calificación

El valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista será en una escala porcentual según las ponderaciones que correspondan a cada rubro, el cual será asignado por cada Consejera y Consejero Electoral en el ejercicio de su facultad discrecional.

Una vez que las y los Consejeros asienten las calificaciones en las cédulas individuales correspondientes al formato identificado como **Anexo 1.1**, conforme al

criterio Noveno, las entregarán debidamente requisitadas a la Secretaría Técnica de la Comisión.

La Secretaría Técnica de la Comisión procederá a llenar la cédula integral de las y los aspirantes con la totalidad de las calificaciones, misma que forma parte de estos Criterios como **Anexo 1.2**.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de las y los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Décimo Primero. De la integración de las listas de candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 101, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 24 párrafo 2, del Reglamento, la Comisión presentará al Consejo General del Instituto Nacional Electoral una sola lista con los nombres de la totalidad de las y los candidatos a ocupar el cargo de Consejeras y Consejeros Electorales los Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, en la que se procurará la paridad de género, así como tener una composición multidisciplinaria y multicultural que fortalezca la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

Las propuestas de las y los candidatos contendrán un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección y las calificaciones obtenidas por las y los candidatos en cada una de ellas, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes.

Una vez elaboradas las propuestas de las y los candidatos, respaldadas con los dictámenes respectivos, la Comisión deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor de setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.


CÉDULA INDIVIDUAL DE VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA

Fecha de entrevista

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL O LA ASPIRANTE

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Folio	Sede de entrevista	Entidad federativa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno

VALORACIÓN CURRICULAR	%	Puntuación 30%
1. Historia profesional y laboral	25	
2. Participación en actividades cívicas y sociales	2.5	
3. Experiencia en materia electoral	2.5	

ENTREVISTA	%	Puntuación 70%
4. Apego a los principios rectores	15	
5. Idoneidad para el cargo		
5.1 Liderazgo	15	
5.2 Comunicación	10	
5.3 Trabajo en equipo	10	
5.4 Negociación	15	
5.5 Profesionalismo e integridad	5	

Calificación	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (1)


CÉDULA INTEGRAL DE VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA
Fecha de entrevista
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL O LA ASPIRANTE

Folio	Sede de entrevista	Entidad federativa
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno

VALORACIÓN CURRICULAR (30%)	%	Consejero(a)				Promedio
		1	2	3	4	
1. Historia profesional y laboral	25	0	0	0	0	0.00
2. Participación en actividades cívicas y sociales	2.5	0	0	0	0	0.00
3. Experiencia en materia electoral	2.50	0	0	0	0	0.00

ENTREVISTA (70%)	%	Consejero(a)				Promedio
		1	2	3	4	
4. Apego a los principios rectores	15	0	0	0	0	0.00
5. idoneidad para el cargo						
5.1 Liderazgo	15	0	0	0	0	0.00
5.2 Comunicación	10	0	0	0	0	0.00
5.3 Trabajo en equipo	10	0	0	0	0	0.00
5.4 Negociación	15	0	0	0	0	0.00
5.3 Profesionalismo e integridad	5	0	0	0	0	0.00

Calificación Final	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-------------

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (1)

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (2)

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (3)

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (4)

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Consejeras, Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra Castillo, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Honorable Consejo General. _____

Aprovecho la naturaleza de este punto del orden del día, porque es necesario hacer del conocimiento público a nivel nacional que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas no ha entregado al Partido Revolucionario Institucional en Chiapas el Financiamiento Público que le corresponde por actividades ordinarias por un monto total de 19 millones 837 mil 608 pesos 32 centavos. _____

En efecto, de enero a diciembre del año en curso, indebidamente a todos los partidos políticos en esta entidad federativa se han dado ministraciones mensuales de solo el 35.49 por ciento, lo cual es a todas luces una violación grave al derecho que tienen los partidos políticos a la asignación y distribución del Financiamiento Público consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. _____

El día 22 de enero del año 2018, el Instituto Electoral Local de Chiapas emitió un Acuerdo por el cual determinó que los montos de financiamiento que le correspondían a cada partido político acorde a lo establecido en la Carta Magna. _____

Por lo que es incongruente que sea el mismo Organismo Público Local Electoral el que incumpla su propio Acuerdo. _____

No pasa desapercibido que en esta problemática tiene mucha responsabilidad el Gobierno de Chiapas, esto así porque el 30 de octubre del año 2017 el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas aprobó un Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual. _____

El 31 de diciembre de ese año, mediante el Decreto 046 se expidió el Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal del 2018, en el cual no se otorgó ni siquiera el 50 por ciento de lo proyectado por el Organismo Público Local. _____

Estamos conscientes que, desde el 6 de febrero del año 2018, desde este año, el Instituto Electoral Local ha solicitado reiteradamente al Secretario de Hacienda del Estado la ampliación de recursos para estar en condiciones óptimas de asignar la totalidad de las ministraciones que corresponde a cada uno de los partidos políticos, y la respuesta, como siempre, ha sido la misma: “el Gobernador no lo autorizó”. Esto es grave, ya que hay una Resolución de fecha 6 de junio emitida por el Tribunal Electoral de Chiapas en la cual se dio la razón a los partidos políticos que se inconformaron, y se ordenó al Organismo Público Local agotar todas las medidas necesarias, eficaces y suficientes para obtener los recursos necesarios y cubrir el monto de las prerrogativas faltantes. _____

Ante las peticiones del Instituto Electoral Local, el Director General de Presupuesto y Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Chiapas ha insistido que no existen recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos aprobado así por el Congreso Local, ni recursos pendientes que librar que permitan atender esta solicitud. _____

Ante dicha omisión financiera, el 23 de agosto de este año, nuestro partido político presentó incidente de incumplimiento de sentencia el 3 de diciembre de esta anualidad, el Tribunal Electoral Local determinó vincular a la Secretaría de Hacienda y

al Congreso de Chiapas para resolver el problema, y debieron informar dentro de los siguientes 3 días hábiles. _____

Hoy estamos a 19 de diciembre de este año y aún no hay respuesta alguna. Por eso la necesidad de denunciar la conducta infractora no solo del Instituto Electoral Local, no solo también de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, no solo también del Congreso Local, sino en todo caso también del propio Gobernador de Chiapas. _____

En consecuencia, en esta atenta, solicitamos a este Instituto Nacional Electoral intervenga de forma directa para buscar una solución pronta y expedita para regularizar la ministración de la prerrogativa de Financiamiento Público que se adeuda a mi representado. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora representante. _____

Atendiendo a su planteamiento, más allá del punto específico que nos ocupa aquí, que si bien no es una responsabilidad directa de este Instituto porque se trata de un financiamiento local, y entendiendo que es un estado, Chiapas, con un enorme cantidad de complejidades donde se han planteado incluso Reformas legales, hay controversias jurídicas abiertas, repito, que sin ser una responsabilidad de esta propia institución, creo que la coordinación con el propio Instituto y el seguimiento sobre el punto es absolutamente, digamos, viable de hacer. _____

No me atrevo a plantear que la Comisión de Vinculación, Presidida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, que si no es un abuso de mi parte, creo que podría ser el correcto conducto para dar un seguimiento sobre el punto, en el entendido de que nosotros no tenemos una competencia necesaria para poder instruir al Organismo Público Local en determinado momento respecto del punto de que se trate, entendiendo además que la situación en la que se encuentra el propio Instituto Electoral del estado, es derivado de una cuestión incluso de suficiencia de recursos, que no es competencia del propio Instituto. _____

En todo caso, creo que vale la pena dar seguimiento al punto por la vía del órgano, digamos, competente de este Consejo General que sería la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Por supuesto, tomo su ofrecimiento de que la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales le dé seguimiento a esta preocupación que ha expresado el Partido Revolucionario Institucional. Me voy a acercar con la representante del partido político para tener mayor información sobre el tema. _____

Pero, también quisiera reflexionar en el sentido de que el tema del financiamiento en el caso de Chiapas, financiamiento de los partidos políticos, ha sido problemático, incluso durante el Proceso Electoral del 2018. Fue muy complejo más o menos hacia el mes de abril de este año, no había habido todavía la asignación correspondiente de las partidas del financiamiento a los partidos políticos. _____

Ese detalle venía de un conjunto de diferendos donde se pretendió, por vía de modificaciones legales y por resoluciones judiciales, cambiar el monto del financiamiento asignado a los partidos políticos. _____

¿Cómo lo hicieron? Cambiando la fórmula de asignación, es decir, en lugar de calcular contra el .65 del costo de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo hicieron con porcentajes menores y esto generó un conjunto de diferendos con los partidos políticos, amén de que las instancias locales no entregaron el recurso oportunamente al Organismo Público Local. _____

Entonces, esa parte tiene, digamos, un contexto de conflicto previo y con mucho gusto señorita representante, si nos permite, lo revisamos y estaremos atentos en términos del ofrecimiento que hizo el Consejero Presidente, le daremos seguimiento a través de la Comisión de Vinculación y le estaremos informando con toda oportunidad. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Si no hay intervenciones adicionales, podemos dar por recibido este Informe, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales de las entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente. _____

El Informe que se pone a su consideración tiene por objeto hacer público el procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales que se inscriben a cada uno de los Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinarios que se encuentran en curso. _____

En relación con las Elecciones Ordinarias, el Informe da cuenta de las acciones de difusión que se han realizado por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como un total de 75 acciones que se han desarrollado por parte de las Juntas Locales y Distritales de este Instituto, con la finalidad de promover la participación y el registro de observadores y observadoras electorales. _____

A la fecha de corte, se ha presentado únicamente una solicitud de acreditación para el Proceso Electoral Local Ordinario en Aguascalientes, mientras que el resto de las entidades con Proceso Ordinario aún no cuentan con alguna solicitud. _____

No obstante, también da cuenta de las acciones que se han llevado a cabo para incentivar el registro correspondiente. _____

Donde sí tenemos un conjunto de registros es en las Elecciones Extraordinarias, el documento que tenemos frente a nosotros nos informa de 1 mil 83 solicitudes de acreditación de las cuales 63 fueron ingresadas a través del Instituto Nacional Electoral, y 1 mil 20 a través de los Organismos Públicos Locales. De ellas, 425 fueron presentadas en el estado de Chiapas, y 658 en Nuevo León, mientras que en el estado de Oaxaca no se presentó solicitud alguna. _____

Del universo de solicitudes el 48.9 por ciento son de mujeres, mientras que el restante 51.1 por ciento son de hombres. _____

Y en cuanto a rangos de edad el 38.9 de las solicitudes presentadas fueron por interesados de 18 a 30 años de edad. _____

También es importante señalar que a la fecha de corte 1 mil 65 personas ya han tomado el curso de capacitación y han sido aprobadas; el 49.6 por ciento de las solicitudes que corresponde a 450 ciudadanas y ciudadanos; 163 de ellas, es decir, el 36.2 por ciento corresponde a mujeres y el 63.8 restante corresponde a hombres; el 40 por ciento de ellas corresponde a jóvenes entre 18 y 30 años. _____

Todas las solicitudes que han sido aceptadas y las personas que han sido acreditadas como observadores tienen un carácter individual, es decir, no se presentaron vía agrupaciones. _____

Y solo concluiría señalando que ésta es una de las actividades clave para la construcción de la confianza en torno a los Procesos Electorales, por lo que me parece que resulta relevante no solo hacer público el avance en la acreditación de los observadores y observadoras, sino fortalecer el compromiso del Instituto con la difusión de esta actividad para construir elecciones libres y transparentes que puedan estar siempre a la vista de todas y de todos. _____

Asimismo es importante recordar que las y los observadores que funjan como tal durante las diversas Jornadas Electorales tienen obligaciones, pero también responsabilidades que deben de seguir; por lo que durante los cursos de capacitación y al momento de ser acreditados las autoridades reiterarán este compromiso a las y los ciudadanos que busquen realizar esta actividad con el objetivo de garantizar que el ejercicio de vigilancia sobre nuestros Procesos Electorales se realicen en estricto

apego a la Ley, a las condiciones de transparencia, imparcialidad a las que deben de sujetar su actuar. _____

Estamos en tiempo para que más ciudadanas y ciudadanos participen como observadores electorales en los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el año próximo. Y me parece que la responsabilidad con la que se participe a través de esta vía y que se desarrollen las actividades permitirá que la transparencia y la confianza sean el eje de los distintos Procesos Electorales, hay un conjunto muy importante de acreditaciones presentadas como se ha dado cuenta en el estado de Nuevo León, para la Elección Extraordinaria de Monterrey que se celebrará el 23 de diciembre próximo, es decir, este domingo en la cual, por supuesto, que siempre será bienvenida la vigilancia, pero en estricto apego a los derechos y a las responsabilidades y obligaciones que tienen quienes funjan como observadoras y observadores electorales acorde a la finalidad que tiene esta figura en nuestra Legislación. _____

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe. _____

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sancionadores de queja y oficiosos en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 8 apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden de día o bien solicitar la apertura de una ronda de discusión en lo general. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. _____

Quisiera reservar los apartados 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 y 19.8, por favor. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Para reservar el apartado 19.1. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Si no hay más reservas, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respecto de los Proyectos de Resolución, identificados en el orden del día con los números de apartado 19.2 y 19.3. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 19.2 y 19.3. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1487/2018 e INE/CG1488/2018)
Ptos. 19.2 y 19.3 _____

INE/CG1487/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA CON REGISTRO LOCAL EN EL ESTADO DE DURANGO, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente número **INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO**, integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG530/2017**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido MORENA, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en cuyo Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO**, en relación con el Considerando **17.2.10**, inciso **a)**, conclusión **11**, mismo que a la letra dice:

“DÉCIMO PRIMERO. Por razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.10 correspondiente al Comité Ejecutivo Durango, de la presente Resolución, se imponen a MORENA, las sanciones siguientes:

a) 8 faltas de carácter formal: Conclusiones: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16.

Una multa equivalente a 72 (setenta y dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a \$5,435.28 (cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 28/100 M.N.).

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

Adicionalmente respecto a la conclusión 11, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso.

Al respecto, se transcribe la parte conducente del dictamen consolidado:

“Estados de cuenta y conciliaciones bancarias

De la verificación a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se identificaron dos cuentas bancarias, sin embargo, se observó que omitió presentar los contratos de apertura, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias correspondientes. Los casos en comento se detallan a continuación:

<i>Institución Financiera Nombre Completo</i>	<i>Clabe</i>	<i>Número De Cuenta</i>	<i>Nomenclatura de la Cuenta</i>	<i>Estados de Cuenta Faltantes</i>	<i>Conciliaciones Bancarias Faltantes</i>	<i>Contrato Bancario</i>
BANORTE/IXE	072190002823267885	282326788	CBCEEACTESP	<i>Enero a diciembre</i>	<i>Enero a diciembre</i>	<i>No presentó</i>
BANORTE/IXE	072190002823267979	282326797	CBCEE-OP.O	<i>Enero a diciembre</i>	<i>Enero a diciembre</i>	<i>No presentó</i>
AFIRME	062180001361093082	136109308	CBCEEACTESP	<i>Enero a diciembre</i>	<i>Enero a diciembre</i>	<i>No presentó</i>
BBVA BANCOMER	012180001102978361	110297836	CBCEE-OP.O	<i>Enero a diciembre</i>	<i>Enero a diciembre</i>	<i>No presentó</i>

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/11291/17, de fecha 4 de julio de 2017, recibido por su partido el mismo día.

Escrito de respuesta sin número y sin fecha, presentado mediante el SIF el día 7 de agosto de 2017, por medio del cual Morena manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se presenta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias solicitadas por la autoridad electoral en el apartado correspondiente.”

Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por Morena, se determinó lo siguiente:

*El sujeto obligado presentó los estados de cuenta de las cuentas de cheque núm. 0282326788 y 0282326797 así como las conciliaciones de la cuenta 0282326797; por tal razón la observación **quedó atendida** en cuanto este punto.*

Adicionalmente, omitió presentar las conciliaciones bancarias de la cuenta 0282326788, 136109308 y 110297836, los contratos de apertura de cuenta y la documentación que permita verificar el manejo mancomunado de las mismas como se detalla a continuación:

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

<i>Institución Financiera Nombre Completo</i>	<i>Clabe</i>	<i>Número De Cuenta</i>	<i>Nomenclatura de la Cuenta</i>	<i>Estados de Cuenta Faltantes</i>	<i>Conciliaciones Bancarias Faltantes</i>	<i>Contrato Bancario</i>
BANORTE/IXE	072190002823267885	282326788	CBCEEACTESP		Enero a diciembre	No presentó
BANORTE/IXE	072190002823267979	282326797	CBCEE-OP.O			No presentó
AFIRME	062180001361093082	136109308	CBCEEACTESP	Enero a diciembre	Enero a diciembre	No presentó
BBVA BANCOMER	012180001102978361	110297836	CBCEE-OP.O	Enero a diciembre	Enero a diciembre	No presentó

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/13199/17, de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por su partido el mismo día.

Escrito de respuesta número CEN/Finanzas/225/2017, de fecha 5 de septiembre de 2017, presentado mediante el SIF el día 6 de septiembre de 2017, mediante el cual Morena manifestó lo que a la letra se transcribe:

“No se presenta documentación correspondiente la cuenta 110297836 BBVA BANCOMER CBCEE-OPO ya que esta cuenta se apertura en el mes de febrero 2017. Se adjunta estado de cuenta del mes de febrero en el cual se detalla la apertura de la cuenta.”

*De la verificación a la documentación presentada se constató que Morena presentó únicamente las conciliaciones bancarias de la cuenta 0282326788; sin embargo, de la cuenta 136109308 omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, además omitió presentar el contrato de apertura de las cuentas 282326788, 282326797 y 136109308; por lo tanto, la observación **no quedó atendida**.*

*En consecuencia, al no presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en los artículos 54, numerales 1, 4 y 5; y 102, numeral 3; y 296 del RF. **(Conclusión 11 MORENA/DG)***

*Adicionalmente se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias.”
(Fojas 1 a 5 del expediente)*

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO**, publicar el acuerdo de inicio y sus respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto; y notificar al Secretario del Consejo General, y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo referido. (Foja 6 del expediente)

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.

- a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 7 y 8 del expediente)
- b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de recepción y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 9 del expediente)

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General del Instituto. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 10 y 11 del expediente)

V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 12 y 13 del expediente)

VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso a Morena.

- a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17994/2017, se notificó a la representación de Morena ante el Consejo General el inicio del procedimiento oficioso de mérito, solicitando que por su conducto se hiciera del conocimiento a la representación del partido en el estado de Durango. (Fojas 14 y 15 del expediente)

VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

- a) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/580/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría), proporcionara la documentación soporte relacionada con la conclusión que originó el procedimiento de mérito. (Foja 16 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

- b)** El diez de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0046/2018, la Dirección de Auditoría remitió la documentación que fue adjuntada en el informe de periodo normal, primer y segundo ajuste, así como los estados de cuenta que el Partido Político Morena presentó como evidencia en su oportunidad. (Fojas 17 y 18 del expediente)
- c)** El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/223/2018, se remitieron los estados de cuenta correspondientes a los meses faltantes, con la finalidad que se lleve a cabo la valoración de los mismos; a efecto de que, de ser el caso, se informara si fueron reportadas en el informe correspondiente las conciliaciones bancarias respectivas; (Foja 118 del expediente).
- d)** El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2553/2018, la Dirección de Auditoría remitió la documentación solicitada. (Fojas 126 y 127 del expediente)

VIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- a)** El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/4879/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes a las cuentas bancarias 062180001361093082 de Banca Afirma S.A., así como las cuentas bancarias 072190002823267885 y 072190002823267979 del Banco Mercantil del Norte S.A., correspondientes al ejercicio 2016. (Fojas 19 a 23 del expediente)
- b)** El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7903273/2018, la Comisión remitió la documentación solicitada. (Fojas 24 a 112 del expediente)

IX. Ampliación de plazo para resolver.

- a)** El dos de marzo de dos mil quince, dado el estado procesal que guardaba el procedimiento de cuenta y de la investigación que debía realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el proyecto de resolución respectivo. (Foja 113 del expediente)

- b) En la misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo referido previamente. (Fojas 114 y 115 del expediente)
- c) Asimismo, en la citada fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de término del procedimiento de mérito. (Fojas 116 y 117 del expediente)

X. Emplazamiento.

- a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43045/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al representante propietario de MORENA, para que contestara por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga. (Fojas 211 a 213 del expediente)
- b) A la fecha de aprobación de la presente resolución, MORENA no ha respondido el emplazamiento formulado por la autoridad instructora.

XI. Acuerdo de Alegatos.

El siete de septiembre de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 214 del expediente)

XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.

- a) A través del oficio INE/UTF/DRN/43552/2018 con fecha día siete de septiembre de la presente anualidad, se notificó a MORENA la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO, a fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes. (Fojas 215 y 216 del expediente)
- b) El siete de septiembre, mediante escrito sin número, MORENA dio contestación al oficio de emplazamiento, mediante el cual remitió información en cuanto a las cuentas bancarias materia de la investigación de esta resolución. (Fojas 217 a 220 del expediente)

XIII. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 221 del expediente)

XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento.

De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve consiste en determinar si el Partido Morena con acreditación local en el estado de Durango, se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en una cuenta bancaria, de la cual omitió presentar dentro de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, los estados de cuenta.

Esto es, debe determinarse si el instituto Político Morena con acreditación local en el estado de Durango, incumplió con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos mismo que se transcribe a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 78.

I. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:

(...)

b) Informes anuales de gasto ordinario:

(...)

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

(...)”

Dicho precepto normativo impone a los partidos políticos la obligación de reportar dentro de sus informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y egresos, acompañado en todo momento la documentación soporte correspondiente; y en el caso de reporte de cuentas bancarias, contratos de apertura, los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, así como la documentación que permita a la autoridad fiscalizadora tener certeza del manejo de las operaciones realizadas. Esto, a efecto de que la autoridad electoral cuente con medios de convicción suficientes que le permitan tener certeza sobre los movimientos realizados por los entes políticos, mismos que deberán realizarse dentro del margen de las reglas para el debido manejo y control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Cabe señalar que los ingresos, ya sea en efectivo o en especie, que reciban los partidos políticos, deberán registrarse en su contabilidad y ser depositados en cuentas bancarias, así como ser reportadas en el Informe Anual de ingresos y egresos junto con la documentación que ampare la apertura de cada una de las cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de recursos, presentando así los estados de cuenta del periodo correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. En caso de que las cuentas bancarias fueran canceladas, los institutos políticos se encuentran obligados a reportar ante la autoridad electoral dicha cancelación y remitir la documentación correspondiente proporcionada por la institución bancaria.

En este sentido, el artículo en comento señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos de reportar dentro de sus informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos, así como su empleo y aplicación; 2) La obligación de presentar, junto con su informe anual, la documentación contable de las operaciones reportadas; y 3) La obligación de reportar en el Informe Anual la apertura de cada una de las cuentas bancarias que utilicen, presentando, entre otros, los estados de cuenta del periodo correspondiente al ejercicio que se fiscaliza.

Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.

De la referida Resolución **INE/CG530/2017**, así como del Dictamen Consolidado, se desprende que Morena con acreditación local en el estado de Durango, omitió poner a disposición de la autoridad fiscalizadora la totalidad de la información que le fue requerida para comprobar la naturaleza de los recursos respecto de **una cuenta bancaria**.¹

Previo al pronunciamiento de fondo es importante aclarar que no obstante que en la conclusión 11 del dictamen consolidado se hace referencia a 3 cuentas bancarias, de su análisis se advierte que únicamente respecto de 1 cuenta omitió presentar los estados de cuenta bancarios, en la cual se ordenó el inicio del procedimiento oficioso de mérito; toda vez que las conductas infractoras relacionadas con las 2 restantes cuentas bancarias fueron sancionadas en la Resolución INE/CG530/2017, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

¹ En el dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Morena, identificado con el número INE/CG529/2017, se realizaron observaciones a cuatro cuentas bancarias; en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido subsanó la falta respecto de la cuenta de Bancomer terminación 7836; y las dos cuentas de Banorte/IXE terminación 6788 y 6797 fueron sancionadas en la Resolución INE/CG530/2017 por la omisión de presentar el contrato de apertura, en consecuencia únicamente se analiza lo correspondiente a la cuenta terminación 9308 respecto de la cual no se entregaron los estados de cuenta bancarios.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

Institución Financiera Nombre Completo	Número De Cuenta	Conducta infractora
BANORTE/IXE	282326788	Forma - No presentó contrato de apertura (Sancionada en la resolución INE/CG530/2017)
BANORTE/IXE	282326797	Forma - No presentó contrato de apertura (Sancionada en la resolución INE/CG530/2017)
AFIRME	136109308	Procedimiento oficioso. Omisión de presentar los estados de cuenta bancarios del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Es decir, el sujeto obligado fue sancionado por no presentar los contratos de apertura de las cuentas bancarias número: 0282326788 y 0282326797 de Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte); sin embargo, omitió presentar los estados de cuenta de los meses de enero a diciembre de la cuenta de cheques 000136109308 de Banca Afirme, S.A. (Afirme).

En consecuencia, la omisión de presentar los estados de cuenta de la cuenta bancaria 136109308 de la institución bancaria Banca Afirme S.A, correspondientes al ejercicio 2016, generó en la autoridad fiscalizadora electoral la presunción que la documentación omitida pudiera contener información relativa a movimientos registrados en la cuenta bancaria que podrían no estar reportados dentro del informe anual.

Por tal motivo, este Consejo General consideró que lo conducente era mandar el inicio de un procedimiento oficioso, en contra de MORENA, con acreditación local en el estado de Durango, con la finalidad de verificar la posible omisión de presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias del periodo objeto de revisión, con la finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen y destino de los recursos manejados en dicha cuenta.

Ante tal situación, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera los estados de cuenta correspondientes al ejercicio 2016, respecto de la cuenta investigada mismos que fueron proporcionados por dicha autoridad a través del oficio 214-4/7903273/2018.

Con dicha información, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría efectuar un análisis a los estados de cuenta bancarios que no fueron enviados durante la revisión del informe anual, de cuya respuesta se advierte la metodología utilizada la cual consistió en la verificación de cada uno de los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios contra los registros contables en el Sistema Integral

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

de Fiscalización, realizados por el sujeto obligado, así como la comparación de saldos de los estados de cuenta contra los saldos de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, se procedió a analizar los movimientos de cargo y abono reflejados en los estados de cuenta que fueron proporcionados, constatándose que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados contablemente dichos movimientos, los cuales muestran los ingresos y egresos del ejercicio ordinario 2016 del partido Morena con acreditación local en el estado de Durango, no identificando operaciones que pudieran afectar el origen y destino de los recursos, tal como se muestra a continuación:

PERIODO	TIPO DE POLIZA	SUBTIPO DE POLIZA	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	CARGO	ABONO	SALDO
1-1-02-00-0000	Bancos		AFIRME			Saldo inicial			\$0.00
Agosto	Primer ajuste	EG	2	02/08/2017	31/08/2016	BANCOS	\$33,174.96	\$0.00	\$33,174.96
Noviembre	Normal	DR	4	14/12/2016	24/11/2016	BANCOS LM 02 TB 231116 LOGISTICA DEL EVENTO	\$0.00	\$13,000.00	\$20,174.96
Noviembre	Normal	DR	3	14/12/2016	28/11/2016	BANCOS LM 02 TB 231116 BOLETO DE AVIÓN	\$0.00	\$5,617.30	\$14,557.66
Noviembre	Primer ajuste	DR	3	03/08/2017	30/11/2016	BANCOS	\$0.00	\$14,000.00	\$557.66
Diciembre	Normal	EG	5	20/02/2017	19/12/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS A MUJ	\$170.00	\$0.00	\$727.66
Diciembre	Normal	DR	2	22/12/2016	20/12/2016	BANCOS LM 02 TB 201216 HOSPEDAJE PONENTE LUZ MARY ALZATE Q	\$0.00	\$671.22	\$56.44
TOTAL de cargos, abonos y saldo final							\$33,344.96	\$33,288.52	\$56.44

De igual forma, la citada Dirección informó que fueron localizadas sus respectivas conciliaciones bancarias, de cuya verificación se advierte que no presentan inconsistencias y que los saldos que reflejan corresponden a los movimientos reportados en los mismos estados de cuenta.

Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la adminiculación del mismo, se advierte que no se actualiza infracción alguna que amerite sanción, toda vez que al momento de realizar el análisis a los estados de

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-183/2017/DGO

cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad correspondiente al ejercicio 2016, los mismos no presentaron anomalías que pudieran presumir la omisión de algún procedimiento establecido por la normatividad electoral en materia de fiscalización.

Cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constituye una prueba documental pública, misma que genera certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de convicción al que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito de sus facultades.

De igual forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el informe presentado por Banca Afirme S.A., la cual, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar dentro del expediente prueba en contrario que controvierta la autenticidad de los mismos ni la veracidad de los hechos a los que se refieren, se debe considerar que genera convicción sobre la información consignada en dicha documental, y por lo tanto, hace prueba plena.

Por lo anterior, resulta válido concluir afirmar que los estados de cuenta proporcionados por el funcionario autorizado de la Institución de Banca Múltiple hacen prueba de la información que consignan o reflejan, en caso de no ser impugnados en cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime que coinciden con la información aportada por el sujeto obligado y que no existe elemento probatorio en el expediente que controvierta su autenticidad o contenido.

Por lo anterior, este Consejo General arriba a la siguiente conclusión:

- Respecto de las operaciones reflejadas en los estados de cuenta correspondientes al dos mil dieciséis, respecto de la cuenta 136109308 aperturada en la institución bancaria Banca Afirme S.A, a nombre del Partido Morena con acreditación Local en el estado de Durango, no se advierten elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos

Derivado de lo antepuesto, este Consejo General concluye que Partido Morena con acreditación Local en el Estado de Durango, no incumplió con lo establecido en el

artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, en consecuencia, los hechos analizados en el presente considerando deben declararse **infundados**.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de **MORENA** con acreditación local en el estado de **Durango**, en los términos del **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1488/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLÍTICO DE COAHUILA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos locales.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria celebrada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG548/2017**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Locales correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, en relación con el Punto Resolutivo **TRIGÉSIMO OCTAVO**, Considerando **18.4.2**, inciso **h)**, conclusión **27**, por los hechos que a continuación se transcriben.

*“**TRIGÉSIMO OCTAVO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos correspondientes.”*

**“18.4.2 PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO
POLÍTICO DE COAHUILA**

(...)

h) Procedimiento Oficioso: Conclusión 27.

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 27 lo siguiente:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Conclusión 27

“SDIPPC/CO. El sujeto obligado omitió informar 2 cuentas bancarias confirmadas por la CNBV en su oficio núm. 214-4/6727253/2017 se propone el inicio de un procedimiento oficioso.”

**I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO.**

Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si el sujeto obligado cumplió con la obligación de aplicar el financiamiento, estricta e invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como para acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, de conformidad con el artículo 54 de la LGPP, esta autoridad realizó la solicitud a la CNBV, mediante el oficio siguiente:

Oficio
INE/UTF/DA-F/7923/17

La CNBV presentó respuesta a la solicitud como se detalla a continuación:

Núm. de oficio de la CNBV
214-4/6727253/2017

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH

Derivado de la respuesta emitida por la CNBV en su Oficio núm. 214-4/6727253/2017 se desprende la siguiente información rendida por la institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A.:

Núm. de Cuenta	Tipo
0445428834	Cheques
0445431030	Inversión
0467132245	Cheques
0467137053	Inversión

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/11220/17, de fecha 4 de julio de 2017, con cédula de notificación electrónica folio INE/UTF/DA-F/SNE/422/2017, del mismo día.

Sin escrito de respuesta, con vencimiento al 8 de agosto de 2017.

De la revisión a la documentación presentada en el SIF se constató que no realizó manifestación alguna respecto a esta observación, así mismo no presentó la documentación que le fue requerida.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/12923/17 de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el partido el mismo día, con cédula de notificación electrónica folio INE/UTF/DA-F/SNE/851/2017, del mismo día.

Sin escrito de respuesta.

Derivado de la respuesta emitida por la CNBV se localizaron 4 cuentas a nombre del sujeto obligado, sin embargo, solo se encuentra el registro en el SIF de 2 de éstas como se muestra en el cuadro que antecede; aunado a lo anterior el partido omitió presentar contratos de apertura, estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

(...)"

II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH**, notificar al Secretario del Consejo General de su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 1 del expediente).

III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.

- a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 3 del expediente).
- b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 4 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de mérito (Foja 5 del expediente).

V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de Instituto el inicio del procedimiento de mérito (Foja 7 del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17988/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso de mérito (Foja 9 del expediente).

VII. Solicitudes de documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.

- a) El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/013/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría), a efecto de que remitiera toda la información o documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo sancionador (Foja 10 del expediente).
- b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/136/2018, se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría, a efecto de que remitiera toda la información o documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo sancionador (Foja 11 del expediente).
- c) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/218/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, a efecto de que remitiera toda la información o documentación relacionada con el presente procedimiento administrativo sancionador. (Fojas 12 del expediente).
- d) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1157/2018, la Dirección de Auditoría dio contestación a los oficios mencionados en los incisos anteriores, señalando que remitía un CD con los informes de primera y segunda vuelta, así como la captura de pantalla que muestra el Reporte de Catálogo Auxiliar de cuentas bancarias. (Foja 13 del expediente).

VIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27090/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información respecto de las cuentas bancarias referidas en la presente Resolución y las cuentas ligadas a las mismas. (Foja 17 del expediente).
- b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7921577/2018, signado por el C, Alfonso del Castillo González, Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, se recibió la documentación solicitada. (Foja 20 del expediente).

IX. Ampliación de término para resolver.

- a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplía el plazo de sesenta días naturales para presentar al Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 38 del expediente).
- b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22079/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, el Acuerdo de Ampliación mencionado en el inciso anterior. (Foja 39 del expediente).
- c) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22080/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo de Ampliación mencionado en el inciso anterior. (Foja 41 del expediente).

X. Razones y constancias.

- a) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.6.6, sub apartado

“Catálogos Cuentas Bancarias” de la contabilidad del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?executioon=e5s1. (Foja 43 del expediente).

- b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.7.5, sub apartado “Catálogo Auxiliar de Inversiones en Valores” de la contabilidad del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/inversionValores/consulta?executioon=e3s1. (Foja 44 del expediente).

XI. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila.

- a) El dos de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/46431/2018, se solicitó información al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila respecto al proceso de liquidación del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila.
- b) El siete de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del correo carlos.arriaga@iec.org.mx, se recibió respuesta por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, proporcionando la información solicitada.

XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de los presentes, las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, así como el Consejero Electoral

Doctor Ciro Murayama Rendón y por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Doctor Benito Nacif Hernández.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización **es competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el

desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VII, con relación al artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que:

“Artículo 30

Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VII. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja.

(...)”

“Artículo 32.

Sobreseimiento

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

(...)

III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo procedimiento de liquidación haya concluido.

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:

- La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que el sujeto denunciado no haya perdido su registro y/o si este ya concluyó.
- En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación

de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobreesa el procedimiento de mérito.

En el caso que nos ocupa, se desprende lo siguiente:

Hechos: El primero de noviembre de dos mil dieciséis, dio inicio formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila, en el que participaron los partidos políticos debidamente constituidos y registrados ante el Instituto Electoral de Coahuila, entre ellos el Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila.

En ese sentido, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete en sesión extraordinaria, se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis identificado con el número **INE/CG548/2017**.

En ella se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, en relación con el Punto Resolutivo **TRIGÉSIMO OCTAVO**, Considerando **18.4.2**, inciso **h**), **conclusión 27**.

Por lo que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH**.

Expuesto lo anterior, esta autoridad dio inicio con la sustanciación del procedimiento oficioso, realizando sendas diligencias:

- El siete de diciembre de dos mil diecisiete, con oficio INE/UTF/DRN/17988/2017 se le notificó al Representante Propietario del Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso.
- Mediante los oficios INE/UTF/DRN/013/2018 del diecisiete de enero, INE/UTF/DRN/136/2018 del veinte de febrero y INE/UTF/DRN/218/2018 del veintisiete de marzo, todos del presente año, se solicitó a la Dirección de

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH

Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), entregara toda la documentación que obrara en su poder para poder iniciar el estudio de mérito.

- En virtud de lo anterior el tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/136/2018, la Dirección de Auditoría proporciono la documentación que obraba en su poder consistente en los oficios de primera y segunda vuelta INE/UTF/DA-F/11220/17 y INE/UTF/DA-F/12923/17 respectivamente, así como el oficio 214-4/6727253/2017 dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- De esa forma al realizar el análisis de la información obtenida de la Dirección de Auditoría, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27090/2018, se procedió a requerir nuevamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que proporcionara los contratos de apertura y las cuentas ligadas a las cuentas observadas en el presente procedimiento.
- El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7921577/2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió los contratos de las cuentas de cheques ++++++834 y ++++++245. De su análisis se corroboró que las cuentas ++++++030 y ++++++053 materia del presente procedimiento son cuentas vinculadas en automático a las cuentas de cheques, sin que el cliente las haya solicitado. Cabe señalar que las cuentas ++++++834 y ++++++245, están debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización.¹

Ahora bien, el trece de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo IEC/CG/001/2018 el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, determinó la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, pues al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales del cuatro de junio de dos mil diecisiete, se ubicó en la causal prevista en el numeral 78, incisos b) y c), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

¹ https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/Catalogos/cuentasBancarias/consulta?execution=e5s1.

Dicho acuerdo en la parte medular señala lo siguiente:

“(…)

PRIMERO.- Se declara la pérdida y cancelación del registro como partido político local de la entidad de interés público denominada a Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila , en virtud de no haber obtenido el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Gobernador(a), Diputaciones Locales y Ayuntamientos, que tuvieron lugar el cuatro (04) de junio de dos mil diecisiete (2017) durante la jornada Electoral relativa al Proceso Local Ordinario 2 016-2017.

(…)

SÉPTIMO.- Notifíquese a los interesados, así como al C.P. Jorge Ajax Cabello Hernández, Interventor dentro del procedimiento de pérdida de registro y liquidación del Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, para los efectos que se deriven en el ámbito de sus atribuciones, en específico, respecto de la asunción de las funciones de liquidador, establecidas en los artículos 40 y 41 del Reglamento para el Procedimiento de Pérdida de Registro y Liquidación de Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral de Coahuila.

(…)”

Visto lo anterior, respecto al caso que nos ocupa es importante señalar lo que establece el artículo 96 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 392 del Reglamento de Fiscalización:

“Ley General de Partidos Políticos

(…)

Artículo 96.

(…)

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

(...)

“Reglamento de Fiscalización

(...)

Artículo 392.

De las reglas del procedimiento de liquidación.

1. El partido político que hubiere perdido o le haya sido cancelado su registro, se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el Interventor a nombre del partido político son las siguientes:

(...)

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General, y

(...).

Como se puede observar, aun cuando un partido político pierde o le es cancelado su registro y se extingue su personalidad jurídica, conserva sus obligaciones en materia de fiscalización hasta que concluya el procedimiento de liquidación.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-0308/2009** y su acumulado **SUP-RAP-0321/2009** lo siguiente:

“(…)

*De lo hasta aquí argumentado, también se colige que si bien el Interventor está obligado a pagar únicamente las sanciones a que el partido en liquidación se hizo acreedor, hasta antes de perder su registro, empero, dicha limitación opera únicamente para el caso de sanciones que se impongan por conceptos diversos a la revisión de informes anuales de gastos, al ser la misma, consecuencia directa de la fiscalización del financiamiento público recibido por el partido en liquidación durante la vigencia de su registro, de ahí que en términos del artículo 32, fracción 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, **subsista la obligación de los dirigentes y candidatos de cumplir con las obligaciones derivadas en materia de fiscalización, hasta la conclusión del procedimiento de liquidación.**”*

[Énfasis añadido]

(…)”

Bajo esta línea argumentativa, si un partido político pierde su registro y como consecuencia su personalidad jurídica, también es cierto que responde frente a sus obligaciones a efecto de enfrentar su proceso de liquidación; luego entonces, los procedimientos oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en su contra no podrán sobreseerse hasta en tanto no concluya el proceso de liquidación.

No obstante lo anterior, en virtud del antecedente de la declaratoria de pérdida de registro y para efecto de tener certeza respecto del estatus de la liquidación en la que se encuentra el Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, esta Autoridad solicitó mediante oficio **INE/UTF/DRN/46431/2018** al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila informara dicha situación.

En respuesta, mediante oficio número **IEC/SE/2949/2018**, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila informó que con fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, a través de Acuerdo número **IEC/CPPP/028/2018**, se dio por concluido el proceso de liquidación del otrora Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila.

En consecuencia, toda vez que el proceso de liquidación del Partido Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila ha finalizado, y se

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH

actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se considera procedente decretar el **sobreseimiento** en virtud de que el otrora partido ha perdido su registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento de mérito, y su liquidación ha concluido.

3. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** el presente procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del **Partido Social Demócrata Independiente Partido Político de Coahuila**, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el apartado 19.1, que fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quien tiene el uso de la palabra._____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente._____

De forma breve, porque es un asunto que ya se ha discutido en reuniones de trabajo y en Comisiones y es un criterio que incluso ya he sostenido en este Consejo General, que tiene que ver con sacarle el mayor problema y en realidad, ni siquiera, creo yo, forzando los elementos que se derivan de pruebas técnicas, particularmente de fotografías que suben en su momento los propios candidatos y candidatas a sus páginas de Facebook, las cuales, por cierto no niegan, es decir, en la investigación habría que preguntarles que se pronuncien expresamente sobre ello o incluso, que nosotros encontramos videos de YouTube y es el caso de esta ocasión._____

Creo que, si no hay elementos que desacrediten esas pruebas técnicas, objetivamente hablando, no debíamos despreciar tanto lo que nos arrojan incluso en este caso se hicieron muchas diligencias, muchas investigaciones que tampoco contradicen esas pruebas técnicas, es decir, creo que el Instituto pudo haberse ahorrado esfuerzos y logrado una conclusión en este caso, distinta porque sí son muy explícitos los elementos que hay, las fotografías donde el propio, entonces dirigente partidista reconoce que está entregando bienes en ciertas comunidades en tal día, en el estado de Tabasco._____

Entonces, me aparto de esta temática del Proyecto de Resolución para considerar que debiera ser fundado._____

Es cuanto Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente._____

En este caso tal como lo manifesté en la Comisión de Fiscalización, yo sí acompaño el sentido del Proyecto de Resolución, comparto en gran medida las reflexiones que pone sobre la mesa el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, porque sí es un caso muy particular, es decir, es un caso en el que se denuncian un conjunto de gastos que no es que estén asociados a la producción de un video, sino de videos en los que se da cuenta de un conjunto de acciones y un conjunto de gastos, que me parece que sí nos deben de llevar a pensar cómo realizar una investigación más amplia que nos permita llegar a la verdad de los hechos._____

¿Qué pasa?, sí se realizaron un conjunto de actividades de investigación, sí se acudió, incluso con las personas que aparecen en estos videos dando cuenta de la entrega de ciertos bienes y al momento de preguntarles, no solamente a los directamente involucrados y por “directamente involucrados” me refiero al denunciado, sino a las personas que habrían resultado participes o beneficiarias de estas entregas, lo que tenemos como respuesta es que nos negaron el que las cuestiones hayan sido así._____

Creo que, tendríamos que pensar cuál es la mejor forma de dirigir estas investigaciones, porque resulta un tanto complejo, que podamos ver un video en el que se esté diciendo que tal servidor público y dirigente de un partido político está haciendo entrega de tales y tales bienes, que es un video que está en sus redes, que está promocionando, que está difundiendo y que no hay nada._____

Pero, en este caso estamos diciendo que no hay nada después de acudir con quienes aparecen en esos mismos videos._____

Insisto, creo que vale la pena reflexionar si hay una mejor forma de llegar a la verdad de los hechos y llegar a acreditar determinadas conductas que, en el plano del espacio público parecieran muy evidentes que se está acreditando, pero con los elementos que hoy tenemos en el Proyecto de Resolución y, precisamente, porque se hicieron indagaciones con las personas involucradas, aunque en algunos casos, no nos dieron respuesta, acompañaré el sentido del Proyecto de Resolución que nos presenta el área._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente._____

Para señalar que también acompaño el sentido de la propuesta que se ha formulado y éste es uno de los casos muy particulares en los que se puede realizar, precisamente la línea de investigación que se siguió frente a los indicios que se pueden tener y de los indicios que tenemos la misma fuente indiciaria, por lo que no se van a poder corroborar unos, pero sí tenemos otras pruebas que se contraponen a los indicios generados inicialmente con las pruebas técnicas, que es: que las personas manifiestan que no han recibido ninguna parte de estos beneficios._____

Creo que, sí, la línea de investigación en momentos futuros debe de ser muy precisa, sobre todo, en las páginas de los partidos políticos, de los candidatos, pedirles que se pronuncien respecto de este tema, no sólo respecto del acto y la no participación del

acto, pero en este en concreto con todas las diligencias que tenemos y los indicios simples que no se llegan a corroborar, pero que sí se ven contrarrestados con otras pruebas, me lleva y me arriba a la conclusión presentada en el Proyecto de Resolución y por tanto, lo acompañaré._____

Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala._____

Si no hay más intervenciones._____

Secretario del Consejo, por favor procedamos a la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 19.1._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

10 votos._____

¿En contra? 1 voto._____

Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1489/2018) Pto. 19.1_____

INE/CG1489/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL C. CANDELARIO PÉREZ ALVARADO, OTORRA PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el escrito sin número signado por el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en presuntos gastos no reportados el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016, así como gastos sin objeto partidista por parte del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 1 a 21 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial:

"(...)

HECHOS:

"1.- Que el 24 de diciembre de 2015, dio inicio el Proceso Electoral Extraordinario para elegir Presidente Municipal y regidores para el Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

2. Que con fecha 1 al 8 de enero de 2016, se señaló fecha para la Presentación de las Plataformas Electorales de todos los partidos políticos con registro ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

3.-Que con fecha 9 de enero de 2016, dieron inicio las Precampañas de todos aquellos precandidatos de los partidos políticos, concluyendo el día 23 del mismo mes y año.

4.-Que a partir del día 24 de enero al 8 de febrero de esta anualidad, se estuvo en el tiempo de las intercampañas, por lo tanto, ningún precandidato de partido políticos podía realizar ninguna actividad de corte electoral.

5.-Que del 05 al 08 de febrero de 2016 fue el plazo para el Registro de Candidatos a dicho cargo electivo, tanto para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes.

6.-Que con fecha 16 de enero de 2016, el Diputado Federal de Representación Proporcional y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, hizo entrega de Molinos Eléctricos en distintas comunidades o rancherías del municipio de Centla, Tabasco; por cierto municipio muy cercano al municipio de Centro, Tabasco; es decir, una hora con cuarenta y cinco minutos, es la distancia entre uno y otro municipio, con la peculiaridad de que en éste último municipio se está realizando un Proceso Electoral extraordinario. Dicha entrega fue twiteada por el propio CANDELARIO PEREZ ALVARADO en su cuenta <https://twitter.com/DipCandelarioPA>, como también publicada en la página de su instituto político y que es del tenor siguiente: <http://prdtabasco.org/>; acto que se realizó en la fecha de las intercampañas, en la que no se puede realizar ninguna actividad de corte electoral, y sí de propaganda política, entendiéndose ésta última, como aquella que constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos políticos, ciudadanos y organizaciones difundan su

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB**

ideología, programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social y que pueden o no, estar vinculadas a un Proceso Electoral; conductas que considero están fuera de la legalidad.

Los medios de comunicación difundieron la ilegal conducta del presunto responsable en los términos siguientes:

Activa PRD la entrega de pollitos y molinos. El dirigente Candelario Pérez, presumió en redes sociales la repartición de las dádivas en Bosques de Saloya. FOTOGRAFIA. (Cortesía) 300 seguidores tiene el legislador federal en sus cuentas de redes sociales, donde agradeció el apoyo tras la repartición.

16/01/2016- 05:05 hrs. /Centro, Tabasco.

El diputado federal y dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, presumió en su cuenta de Twitter que este partido ha retomado la entrega de pollitos, material de construcción y molinos de bajo costo.

La entrega la realizó en la zona conurbada de Villahermosa, específicamente en Bosques de Saloya y en el municipio de Centla. En la misma cuenta el legislador federal agradece el apoyo a sus 300 seguidores.

Esta misma práctica de entrega de pollitos, material de construcción y molinos, la realizó el actual alcalde de Cárdenas, Rafael Acosta, mismo que le valió una queja ante el Instituto Electoral.

Llama la atención que ahora la dirigencia del PRD nuevamente active este programa cuando hay en puerta un Proceso Electoral extraordinario.

www.tabascohoy.com/2/notas/291302/activa-prd-la-entrega-de-pollitos-y-molinos.

Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD. FOTOGRAFIA.

Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD. FOTOGRAFIA.

Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD. FOTOGRAFIA.

Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD. FOTOGRAFIA.

Banderazo de salida a la entrega de materiales de construcción a bajo costo para habitantes de Bosques de Saloya. FOTOGRAFIA.

Banderazo de salida a la entrega de materiales de construcción a bajo costo para habitantes de Bosques de Saloya. FOTOGRAFIA.

Banderazo de salida a la entrega de materiales de construcción a bajo costo para habitantes de Bosques de Saloya. FOTOGRAFIA.

Banderazo de salida a la entrega de materiales de construcción a bajo costo para habitantes de Bosques de Saloya. FOTOGRAFIA.

<https://twitter.com/DipCandelarioPA>

Es de recalcar, que además de la distribución y entrega de los molinos, también se hace entrega de pollitos y material para la construcción de casas habitación.

6.- Atento a lo narrado en el punto inmediato anterior, el C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO, y de acuerdo a lo que él mismo expresa en el video que subió a la página del partido que dirige, precisa lo siguiente: 'ESTA GENERADO LA POSIBILIDAD DE OPORTUNIDADES, EN COMBINACIÓN CON LA DIRIGENCIA Y DE LA DIPUTACION FEDERAL...' es decir, la adquisición de los molinos por parte del C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO, es al parecer entre una aportación que otorga el partido que dirige y otra con cargo a las dietas que como Diputado Federal percibe, y obviamente la otra mitad la entregan los ciudadanos beneficiados al momento que se les hace entrega de los molinos, en ese sentido, si bien es cierto que vale la pena apoyar a la ciudadanía con éstos tipos de apoyos, cierto es también que esos apoyos no deber ser comprados con dinero destinado o etiquetado para actividades ordinarias permanentes de todo partido político, de ahí que se esté ante una ilegalidad al utilizarse e incluso desviarse dinero para lo que no es propio de un instituto político, por tanto la autoridad electoral fiscalizadora en sus facultades que le concede la propia carta magna y las leyes de la materia, debe proceder de inmediato a la realización de todas las pesquisas necesarias para llegar al verdad histórica de los hechos y con ello determinar que sanción imponer al denunciado por utilizar dinero destinado a las actividades ordinarias de un partido para otras que no le corresponde realizar.

7.- Por otro lado, y con fecha 23 de febrero de 2016, de una camioneta de redilas ISUZU con placas de circulación VS47966, se observaron una gran y enorme cantidad de molinos eléctricos, y que al parecer serían o fueron depositados en un bunker o casa secreta del C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO, y que presuntamente serán entregados en comunidades del Estado de Tabasco en beneficio de pobladores.

8.- La conducta del C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO y del Partido de la Revolución Democrática viola los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1,3 numeral 1, 7 inciso d), 25 párrafo 1 inciso a) y n) , 72 párrafo 2 incisos de la a) a la g), de la Ley General de Partidos Políticos; 190, 196, 199 párrafo 1 inciso a), c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , al estarse utilizando y en su caso desviando dinero público destinado para las Actividades Ordinarias Permanentes del Partido de la Revolución Democrática, dinero que se está utilizando para la compra de MOLINOS ELECTRICOS, pollitos y material para la construcción.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión...

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I.- Los partidos políticos son entidades...

II.-La ley garantizará que los partidos políticos...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes...

Artículo 3.

1.- Los partidos políticos son entidades de interés público...

Se recalca pues el origen de los partidos políticos y su participación activa para que el pueblo acceda al poder y para ello realiza actividades ordinarias permanentes como lo es la afiliación de militantes, de ahí que reciba financiamiento público.

Así mismo y continuando con la citada ley, en su numeral 7 se establecen las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, entre ellas el registro de los partidos políticos, es decir, precepto secundario que se ajusta a lo ordenado por el artículo 41 de la Carta Magna que da origen y nacimiento a estos institutos políticos.

Artículo 7.

1.- Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:

a) El registro de los Partidos Políticos Nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales; (SIC)

Por otro lado el artículo 25 de la ley partidaria, señala las obligaciones de los partidos políticos, como la precisada en el inciso a y n del mismo, es decir,

conducir sus actividades ordinarias permanentes dentro de la legalidad y respetando el Estado democrático, pero la que en el caso concreto nos ocupa la de aplicar el Financiamiento Público para los fines que han sido entregados, inciso n) de dicho artículo que tiene correlación y clarificación con lo mandatado en el numeral 72 párrafo 1 y 2, en la que se describe en qué consisten los gastos ordinarios: (SIC)

Artículo 25...

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les haya sido entregados;"

Artículo 72.

1.- Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.

2.- Se entiende como rubros de gasto ordinario...

De lo anterior se desprende que el Partido de la Revolución Democrática debe encaminar su conducta a los cauces legales y con ello respetar el estado democrático, destinando su financiamiento público a lo mandatado en la constitución, pero sobre todo a lo precisado en los numerales de la Ley General de Partidos Políticos y particularmente en el artículo 72 y todos sus incisos.

Por otro lado, debe entenderse también que las actividades políticas permanentes se clasifican en:

- Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deber de ser realizadas de manera permanente.*

- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.*

Por otro lado y como se advierte de la Jurisprudencia electoral que más adelante citare, la Sala Superior señala, que los partidos políticos , como entidades de interés público, deben destinar el financiamiento público que reciben a sus propias actividades y fines, lo que impide utilizarlo para apoyar actividades o

funciones de un órgano de gobierno de los ámbitos federal, local o municipal, o del propio partido al utilizarlo para la compra de molinos, pollitos o materiales para la construcción, pues ello podría provocar un desequilibrio entre las distintas fuerzas políticas o contendientes, afectando los principios de imparcialidad y equidad que rigen en el derecho electoral.

FINANCIAMIENTO PUBLICO. LOS PARTIDOS POLITICOS DEBEN DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS...

Así las cosas, CANDELARIO PEREZ ALVARADO Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y Diputado Federal de Representación Proporcional de dicho partido, violenta los principios de imparcialidad y equidad que rigen el Derecho Electoral, pues destina dinero público y debidamente etiquetado, para la compra de molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción, cuyas actividades no son propias de los partidos políticos, de ahí que el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión como órgano encargado de supervisar de manera permanente la sustanciación de los procedimientos en materia de fiscalización y formular los Proyectos de Resolución que presente a la Comisión y, en su caso, proponer las sanciones correspondientes, se debe sancionar a CANDELARIO PEREZ ALVARADO como Presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, lo mismo que en su calidad de Diputado Federal, por utilizar el dinero de su dieta para fines que no le son propios, como por no utilizar el Financiamiento Público destinado para las Actividades Ordinarias Permanentes, y sí utilizarlo para la compra de molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción, en su caso y de encontrar que se está ante un injusto legal penal, de vista a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y se proceda a la indagatoria correspondiente y sea un Juez penal que de igual modo sancione.

Solicitando desde este momento, gire atentos oficios a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efectos de que informe la dieta que percibe quincenal o mensualmente el Diputado Federal CANDELARIO PEREZ ALVARADO, si tiene otra partida presupuestal para otros gastos y cuáles son, y la forma en que los justifica ante el área financiera de la cámara baja.

Por otro lado, requiera al denunciado para que exhiba las facturas de la compra de los molinos eléctricos, pollitos y material de construcción, así mismo para que informe si estos gastos son justificados como gastos ordinarios, el costo de cada molino eléctrico, empresa a quien le compra los molinos, pollitos y el material para la construcción, gastos por traslado de los molinos, pollos y material de construcción de la empresa donde los compra a la bodega que para tal efecto tiene destinado y proporcione el domicilio de la misma, el costo del flete para ir a entregar los mismos a las comunidades del estado de Tabasco..."

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

I. Pruebas técnicas. Consistentes en un video, ocho imágenes extraídas de una red social, una página de internet y una dirección electrónica correspondiente a nota periodística.

II. Presuncional legal y humana.

III. Instrumental de actuaciones.

III. Acuerdo de prevención. El dos de marzo de dos mil dieciséis, se acordó tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente número **INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB**; registrarlo en el libro de gobierno; notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como prevenir al quejoso para que aclarara el objeto de su pretensión, previniéndole que, en caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 23 a 24 del expediente)

IV. Notificación de la recepción del escrito de queja y prevención al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/4179/2016, se notificó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja y prevención al denunciante. (Foja 25 del expediente).

V. Notificación de la prevención al quejoso. El tres de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/4180/2016, se notificó al quejoso la prevención realizada respecto de su escrito inicial a efecto de que aclarara el objeto de su pretensión, previniéndole que, en caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 33, numeral 1 en relación con el 31, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 26 a 27 del expediente)

VI. Desahogo de la prevención. El cinco de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la prevención formulada, manifestando lo que se transcribe a continuación: (Fojas 28 a 29 del expediente)

“...me permito señalar que la denuncia se centra principalmente sobre el uso indebido e ilegal del Financiamiento Público en específico de las actividades ordinarias permanentes para la compra de molinos eléctricos y otros materiales por parte del C CANDELARIO PEREZ ALVARADO, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-TABASCO, con lo que doy cumplimiento a dicha prevención...”

VII. Solicitud de información y documentación al C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco y otrora Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados (Previo a la admisión del procedimiento).

a) El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/4181/2016, se requirió al C. Candelario Pérez Alvarado, en su calidad de Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, diversa información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 42 a 44 del expediente)

b) El diez de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el C. Candelario Pérez Alvarado, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 45 a 47 del expediente)

c) El siete de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/4183/2016, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Tabasco, notificara al C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información formulada mediante diverso INE/UTF/DRN/4182/2016. (Fojas 30 a 31 del expediente)

d) El ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/4182/2016, se requirió al C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, diversa información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 32 a 38 del expediente)

e) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

VIII. Acuerdo de admisión de queja e inicio del procedimiento. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó el inicio del

procedimiento de queja respectivo; proceder al trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador de mérito; así como notificar al Partido de la Revolución Democrática y al C. Candelario Pérez Alvarado, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco el inicio del procedimiento de queja; y publicar el acuerdo respectivo en los estrados del Instituto.(Fojas 48 a 49 del expediente)

IX. Publicación en estrados del Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.

a) El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 50 del expediente)

b) El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan los estrados de este Instituto, el citado Acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento respectiva, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dichos documentos fueron publicados oportunamente (Foja 52 del expediente)

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de marzo de mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/6401/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 53 del expediente)

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JD04/VE/0099/2016, se notificó al C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 57 a 64 del expediente)

XII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JD04/VE/0100/2016 se notificó al Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante

el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 65 a 72 del expediente)

XIII. Requerimientos de información al C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco.

a) El doce de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 75 a 78 del expediente).

b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JD04/VE/0176/2016, se notificó al C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva. (Fojas 79 a 88 del expediente)

c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el C. Candelario Pérez Alvarado dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 89 a 90 del expediente)

d) El diez de enero de dos mil diecisiete, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva formulada por esta autoridad. (Fojas 125 a 127 del expediente).

e) El trece de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0013/2017, se notificó al C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva. (Fojas 128 a 135 del expediente).

f) El veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 137 a 139 del expediente)

XIV. Requerimiento de información al C. Javier López Cruz, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JD04/VE/0175/2016, se notificó por estrados al Lic. Javier López Cruz, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la solicitud de información respectiva. (Fojas 91 a 103 del expediente)

b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 106 a 108 del expediente)

XV. Acuerdo de ampliación del plazo para la debida integración del expediente y la resolución del presente procedimiento.

a) El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dada la naturaleza de las de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo para presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 110 del expediente)

b) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/16855/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, sobre la ampliación del plazo para presentar el Proyecto de Resolución del presente expediente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 112 del expediente)

c) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/16854/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, sobre la ampliación del plazo para presentar el Proyecto de Resolución del presente expediente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 111 del expediente)

XVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

- a) El veinte de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/469/2016 se solicitó a la Dirección de Auditoría Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), diversa información a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos respecto de los hechos denunciados. (Fojas 113 y 114 del expediente).
- b) El veintidós de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA-L/1104/16, la Dirección de Auditoría dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Foja 115 del expediente).
- c) El quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/107/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos respecto de los hechos denunciados. (Fojas 116 a 117 del expediente).
- d) El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/0208/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 118 a 121 del expediente).
- e) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/479/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en el marco del Informe Anual del ejercicio dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, reportó dentro su gasto ordinario conceptos relativos a la compra de molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción. (Fojas 122 a 123 del expediente).
- f) El treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/1349/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Foja 124 del expediente).
- g) El diez de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/416/2017, se solicitó la Dirección de Auditoría diversa documentación para efectos de allegarse mayores elementos respecto de los hechos denunciados. (Fojas 161 a 162 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

h) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

i) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/279/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara los números de cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Estatal o Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco y del C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Diputado Federal, correspondientes al ejercicio 2016. (Fojas 233 a 234 del expediente).

j) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1874/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 468 a 469 del expediente)

k) El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1376/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, el Comité Ejecutivo Nacional o Comités Directivos Estatales del Partido de la Revolución Democrática realizaron operaciones con “Incubadora Mexicapán, S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” y, si tenía registro o si había detectado (mediante visitas de verificación, monitoreo, etc.) la utilización de los vehículos con número de placas VS-12-602, VR-03-549 y VS-47-966 por parte del citado instituto político para llevar a cabo sus actividades ordinarias, de precampaña o campaña durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis. (Fojas 1523 a 1524 del expediente).

l) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum número INE/UTF/DA/3302/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 1525 a 1526 del expediente)

XVII. Solicitud de información al Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de Tabasco.

a) El doce de mayo de dos mil diecisiete, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 142 a 143 del expediente).

b) El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/TAB/VS/213/17, se notificó al Secretario de Comunicaciones y Transportes

del estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva. (Fojas 148 a 159 del expediente).

c) El primero de junio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, recibido por telegrama, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Tabasco, dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Foja 160 del expediente).

XVIII. Solicitud de información a la Presidenta Municipal de Centla en el estado de Tabasco.

a) El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara a la Presidenta Municipal de Centla en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 175 a 177 del expediente).

b) El treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/1493/2018, se solicitó a la Presidenta Municipal de Centla en el estado de Tabasco, informara la totalidad de Programas Sociales que estuvieron activos en el periodo comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 a cargo del citado Municipio y, si en el mismo se realizaron o tuvo conocimiento de la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material para construcción a los habitantes del Municipio de Centla, en la localidad de Bosques de Saloya. (Fojas 178 a 187 del expediente)

c) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

XIX. Solicitud de información al C. Rafael Acosta de León, otrora Presidente Municipal de Cárdenas en el estado de Tabasco.

a) El diez de abril de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al C. Rafael Acosta de León, otrora Presidente Municipal de Cárdenas en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva. (Fojas 196 a 198 del expediente).

b) El dieciséis y veintiuno de abril de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/CLTAB/CP/1868/2018 e INE/CLTAB/CP/2004/2018, se solicitó al C. Rafael

Acosta de León, otrora Presidente Municipal de Cárdenas en el estado de Tabasco, informara si había participado en la entrega de molinos, pollitos y materiales de construcción entre los pobladores de diversos municipios cercanos a la zona conurbada de Villahermosa, Tabasco; la totalidad de Programas Sociales que estuvieron activos en el periodo comprendido del primero de enero al veintinueve de febrero de dos mil dieciséis a cargo del Municipio referido y, si con motivo de alguno de estos Programas Sociales o por alguna otra razón, el municipio realizó o tuvo conocimiento de la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material para construcción a los habitantes del Municipio de Centla, en la localidad de Bosques de Saloya, así como si tuvo conocimiento de la realización de programas o actividades sociales llevadas en beneficio de los pobladores del estado de Tabasco, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 199 a 216 del expediente)

c) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio PM/082/2018 el Presidente Municipal Constitucional de Cárdenas; Tabasco, dio respuesta a lo solicitado, informando el desconocimiento de la realización o participación de actividades llevadas a cabo en beneficio de los pobladores, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Fojas 217 a 225 del expediente)

XX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

a) El diecinueve de abril de 2018, mediante oficio INE/UTF/DRN/26556/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV), remitir los números y estados de cuenta en todas las instituciones bancarias existentes a nombre del C. Candelario Pérez Alvarado, por el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. (Fojas 374 a 377 del expediente)

b) El veintiséis de abril y cuatro de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficios 214-4/7929035/2018 y 214-4/7929078/2018, el Director General Adjunto de la CNBV, remitió copia de los informes rendidos por Banco Mercantil del Norte, S.A. y HSBC México, S.A., por medio de los cuales se da respuesta a lo solicitado. (Fojas 378 a 421 del expediente)

c) El primero de junio de 2018, mediante oficios INE/UTF/DRN/31827/2018, INE/UTF/DRN/31828/2018 e INE/UTF/DRN/31077/2018 se solicitó a la CNBV, remitir los contratos de apertura y estados de cuenta correspondientes a los

ejercicios 2015 y 2016, respecto de diversas cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 471 a 482 del expediente)

d) El seis y doce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficios 214-4/7940065/2018, 214-4/7921982/2018 y 214-4/7921992/2018, el Director General Adjunto de la CNBV, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 483 a 557 del expediente)

XXI. Solicitud de información a la Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.

a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26092/2018, se solicitó al Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, proporcionara los “Informes de actividades o informe de resultados”, correspondiente al ejercicio 2016, que presentó el Diputado Federal de la LXIII Legislatura, el C. Candelario Pérez Alvarado, de la 3ra Circunscripción, estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 235 a 236 del expediente)

b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio LXIII/UT-SATS/0105/2018, el Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 237 a 359 del expediente)

XXII. Solicitud de información al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco.

a) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho oficio. (Fojas 226 a 227 del expediente).

b) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/11924/2018, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, el periodo del encargo de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Tabasco que ocupó el C. Candelario Pérez Alvarado; exhibiera los “INFORMES DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016”, que fueron presentados por el C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco. (Fojas 228 a 232 del expediente).

c) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 453 a 460 del expediente)

XXIII. Solicitud de información al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco.

a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 446 a 447 del expediente).

b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/2974/2018, se solicitó al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC y demás datos con los que cuente en sus registros, respecto del propietario de un vehículo ISUZU. (Fojas 571 a 580 del expediente).

c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio SSP/DGAJyT/DP/MAT/2057/2018, el Secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 564 a 569 del expediente)

d) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 1400 a 1401 del expediente).

e) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0361/2018, se solicitó al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC, el historial de los propietarios de los vehículos y demás datos con los que cuente en sus archivos, respecto de los propietarios de dos vehículos. (Fojas 1417 a 1420 del expediente)

f) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio SSP/DGPEC/4114/2018, el Encargado de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 1423 a 1433 del expediente)

XXIV. Solicitud de información al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco.

a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 446 a 447 del expediente).

b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/2976/2018, se solicitó al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC y demás datos con los que cuente en sus registros, respecto del propietario del vehículo ISUZU con placas de circulación VS47966. (Fojas 592 a 603 del expediente)

c) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número SPF/PF/988/2018, el Procurador Fiscal del estado de Tabasco, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 605 a 607 del expediente)

d) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 1400 a 1401 del expediente).

e) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0360/2018, se solicitó al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC, el historial de los propietarios de los vehículos y demás datos con los que cuente en sus archivos, respecto de los propietarios de dos vehículos. (Fojas 1402 a 1412 del expediente)

f) El quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número SPF/PF/1815/2018, el Procurador Fiscal del estado de Tabasco, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1413 a 1416 del expediente)

XXV. Solicitud de información al Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla, en el estado de Tabasco.

a) El quince y diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla, en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 448 a 451 del expediente).

b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/2973/2018, se solicitó al Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla, estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC y demás datos con los que cuente en sus registros, respecto del propietario de un vehículo ISUZU. (Fojas 559 a 562 del expediente).

c) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

XXVI. Solicitud de información al Director de Tránsito Municipal de Cárdenas, en el estado de Tabasco.

a) El quince y diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Director de Tránsito Municipal de Cárdenas, en el estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 448 a 451 del expediente).

b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/2975/2018, se solicitó al Director de Tránsito Municipal de Cárdenas, en el estado de Tabasco, el nombre, domicilio, RFC y demás datos con los que cuente en sus registros, respecto del propietario de un vehículo ISUZU. (Fojas 581 a 591 del expediente).

c) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

XXVII. Solicitud de información al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto.

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29230/2018, se solicitó al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, si en los archivos de esa Unidad Técnica se inició algún procedimiento administrativo sancionador en contra del C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Diputado Federal y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco; así como en contra del C. Rafael Acosta León, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, durante los ejercicios 2015 y 2016; y en caso afirmativo, remitirá copia certificada de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. (Fojas 466 a 467 del expediente)

b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/7822/18, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Foja 470 del expediente)

XXVIII. Solicitud de información al Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

a) El doce de julio de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 610 a 611 del expediente).

b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/CLTAB/CP/6052/2018, se solicitó al Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, si en los archivos de que obran en su poder se inició algún procedimiento administrativo sancionador en contra del C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Diputado Federal y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco; así como en contra del C. Rafael Acosta León, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, durante los ejercicios 2015 y 2016; y en caso afirmativo, remitirá copia certificada de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. (Fojas 613 a 614 del expediente)

c) El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio CCE/329/2018, el Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 615 a 1354 del expediente)

XXIX. Solicitud de información al C. Miguel Ramos Ramón.

a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al C. Miguel Ramos Ramón, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 608 a 609 del expediente)

b) El ocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0091/2018 notificado por estrados, se solicitó al C. Miguel Ramos Ramón, informara si el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, realizó una carga y descarga de su vehículo de molinos eléctricos; las personas que lo contrataron para llevar a cabo dicho traslado, el monto de la contraprestación que cobró por el servicio, así como los documentos respectivos. (Fojas 1356 a 1365 del expediente)

c) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

XXX. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.

a) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1288/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) del ciudadano Miguel Ramos Ramón. (Fojas 1366 a 1367 del expediente)

b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/19792/2018, el citado Director dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 1368 a 1369 del expediente)

c) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1353/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) de los siguientes ciudadanos: Aleyda Cruz Palma, Mario Campos Barahona, Martha Isabel de la Cruz y Florinda Regil Hernández. (Fojas 1395 a 1396 del expediente)

d) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/21356/2018, el citado Director dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 1397 a 1399 del expediente)

XXXI. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

a) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43804/2018, se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la constancia de situación fiscal del contribuyente Miguel Ramos Ramón. (Foja 1370 del expediente)

b) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-0259, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5” del Servicio de Administración Tributaria dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 1371 a 1372 del expediente)

XXXII. Razones y constancias.

a) El doce de abril de dos mil dieciséis, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página señalada por el quejoso en su escrito inicial: edición digital del periódico local “Tabasco Hoy”. (Foja 163 del expediente).

b) El doce de abril de dos mil dieciséis, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la red social Twitter, página señalada por el quejoso en su escrito inicial, en la cual se encontró una cuenta del PRD en Tabasco, identificada con las siglas: @TabascoPRD. (Fojas 164 a 167 del expediente).

c) El primero de noviembre de dos mil dieciséis, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página señalada por el quejoso en su escrito inicial <http://prdtabasco.org>. (Fojas 168 a 171 del expediente)

d) El quince de enero de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página internet <http://www.congreso.gob.mx/>, a fin de verificar que el C. Candelario Pérez Alvarado, ocupaba el cargo de Diputado Federal. (Fojas 172 a 174 del expediente)

e) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, apartado “Ordinario” del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 190 a 191 del expediente)

f) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia, se integró al expediente la búsqueda de las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación la página de internet y específicamente en la red social denominada Facebook, dicha búsqueda se realizó ingresando a los sitios de internet <https://www.facebook.com/prdoficialtabasco/videos/588086488008744/> así como <https://www.facebook.com/prdoficialtabasco/?fref=photo>. (Fojas 192 a 195 del expediente)

g) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia, se dio cuenta de la diligencia realizada con el propósito de obtener mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos investigados, haciéndose constar que en la dirección electrónica: <https://www.youtube.com/channel/UCHbM0GMz3KUD9m-plan635q>, la cual corresponde a un canal del portal de internet de YouTube denominado “PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco”, se advirtió una lista de 39 videos, por lo que al revisar cada uno de ellos, se desprenden los siguientes videos marcados con los números 15 y 16, titulados: “Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.” y “Fortalece PRD acciones de desarrollo social”, descargándose el contenido de los mismos en un disco compacto. Fojas 1392 a 1394 del expediente)

XXXIII. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.

a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28356/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, el emplazamiento respectivo, con copia simple de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que, en un plazo de cinco días contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que

a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 422 a 430 del expediente).

b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado Representante Propietario dio respuesta al emplazamiento de formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político: (Fojas 431 a 445 del expediente)

“(…)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa de la parte quejosa, en todo momento, son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de queja, del inicio del procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben de observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas en hechos claro y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo

menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora , pues la omisión de alguna de éstas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (SIC) y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización (...)"

XXXIV. Solicitud de información al Partido de la Revolución Democrática.

a) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44942/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto informara en qué consistió el programa de aves de corral a bajo costo; si fue implementado por el C. Candelario Pérez Alvarado; placas o matrículas de los vehículos utilizados, el nombre de las personas que hicieron la distribución, información de los proveedores y si participaron los CC. Eduardo Pérez García, Miguel Sebastián Méndez Ramírez y Miguel Ramos Ramón. (Fojas 1508 a 1512 del expediente)

b) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado Representante propietario dio respuesta el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 1513 a 1522 del expediente)

XXXV. Solicitud de información al Gobernador del estado de Tabasco.

a) El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, notificara al Gobernador del estado de Tabasco, la solicitud de información respectiva contenida en dicho acuerdo. (Fojas 1527 a 1530 del expediente)

b) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0400/2018, se solicitó al C. Gobernador del estado de Tabasco, informara si el Gobierno del estado de Tabasco implementó programas sociales relativos a la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

costo o de manera gratuita, si dicho Gobierno tuvo conocimiento de la realización de dichos programas o actividades por parte del Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado; así como información en relación a vehículos, personas físicas y proveedores. (Fojas 1532 a 1546 del expediente)

c) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número CGAJ/1580/2018, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del estado de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 1569 a 1584 del expediente)

XXXVI. Solicitud de información a diversas personas físicas y morales.

Nombre de la física o moral	Oficio y fecha de notificación	Fojas del expediente	Fecha de presentación de la respuesta
Eduardo Pérez García	INE/JLETAB/VE/0359/2018 24 de octubre de 2018	1438 a 1450	No dio respuesta
Miguel Sebastián Méndez Ramírez	INE/JLETAB/VE/0358/2018 25 de octubre de 2018	1451 a 1461	31 de octubre de 2018
Martha Isabel de la Cruz	INE/JLETAB/VE/0401/2018 31 de octubre de 2018	1595 a 1600	No dio respuesta
Florinda Regil Hernández	INE/JLETAB/VE/0402/2018 31 de octubre de 2018	1589 a 1594	No dio respuesta
Aleyda Cruz Palma	INE/JLETAB/VE/0405/2018 31 de octubre de 2018	1605 a 1611	4 de noviembre de 2018
Mario Campos Barahona	INE/JLETAB/VE/0406/2018 6 de noviembre de 2018	1618 a 1631	No dio respuesta
Roberto Hernández Ramos	INE/JLETAB/VE/0417/2018 8 de noviembre de 2018	1642 a 1655	No dio respuesta
Israel Armando López Ramón	INE/JLETAB/VE/0418/2018 5 de noviembre de 2018	1661 a 1674	No dio respuesta
"Incubadora Mexicapam, S.A. de C.V."	INE/OAX/JL/VE/1313/2018 24 de octubre de 2018	1469 a 1476	31 de octubre de 2018
"Incubadora del Soconusco"	INE/12JDE/VE/709/2018 25 de octubre de 2018	1498 a 1505	26 de octubre de 2018

XXXVII. Acuerdo de Alegatos. Mediante Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar a las partes, para que, en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 1374 del expediente)

XXXVIII. Notificación de alegatos al Partido Morena.

a) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44173/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido

Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, formulara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1375 a 1376 del expediente)

b) El cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado por el citado Representante Propietario presentó sus alegatos, manifestando su desistimiento del expediente citado al rubro, como se detalla a continuación: (Fojas 1377 a 1378 del expediente)

“(…)

En relación con el procedimiento sancionador citado al rubro, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a mi representada el plazo para manifestar alegatos, manifiesto que las imputaciones hechas valer por mi representada en contra del C. Candelario Pérez Alvarado, en su calidad de otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco en 2016, constituyen hechos que únicamente afectan el interés de la promovente, por lo tanto, mediante el presente hago valer el correspondiente desistimiento por así convenir a los intereses de mi representada.

“(…)”

XXXIX. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática.

a) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44174/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, formulara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1379 a 1380 del expediente)

b) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado por el citado Representante Propietario, presentó sus alegatos, señalando medularmente lo siguiente: (Fojas 1381 a 1391 del expediente)

“(…)”

En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

(...)

Bajo estas premisas, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral arribe a la conclusión en el presente asunto no se advierte conducta alguna que pueda ser analizada y sancionada dentro de los rubros de competencia del Instituto Nacional Electoral y menos, dado que no son cuestiones que se encuentren relacionadas con la fiscalización, por lo que, con apoyo y fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como en la fracción I del numeral 1, fracción del diverso 31 de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, es dable desechar de plano por incompetencia, la queja que se contesta.

(...)

Bajo esta circunstancia, atendiendo al criterio jurídico normativo de antes expuesto, es dable obtener que en el supuesto no concedido de que se acredite la existencia de los hechos materia de reproche en el asunto que nos ocupa, son imputables única y exclusivamente al C. CANDELARIO PÉREZ ALVARADO, en su carácter de Diputado Federal, cuya actuación obedeció a la función realizada como servidor público, misma que forma parte de un mandato constitucional, que de ninguna manera se encuentra sujeta a la tutela del Partido de la Revolución Democrática, por lo que, es válido concluir que al ser un acto puro realizado por un servidor público, no existe algún grado de responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática, por algún tipo de infracción a la norma electoral, o a la norma en materia de fiscalización de los ingresos y egresos del instituto político que se representa, ya sea del ordinario, de precampaña o de campaña.

*Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.
(...)"*

XL. Cierre de Instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XLI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de los presentes, las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, así como el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón y por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Doctor Benito Nacif Hernández.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Cabe destacar, que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización un escrito signado por el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentando alegatos y del que se advierte la intención de presentar su desistimiento a la queja de mérito, manifestando medularmente lo siguiente:

“(…)

En relación con el procedimiento sancionador citado al rubro, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a mi representada el plazo para manifestar alegatos, manifiesto que las imputaciones hechas valer por mi representada en contra del C. Candelario Pérez Alvarado, en su calidad de otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco en 2016, constituyen hechos que únicamente afectan el interés de la promovente, por lo tanto, mediante el presente hago valer el correspondiente desistimiento por así convenir a los intereses de mi representada.

“(…)”

En este sentido, se atiende al significado del verbo “desistir”, el cual, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal”.

Ahora bien, esta figura procesal que debe atenderse según se planteé en cada caso concreto, es decir, si el desistimiento va encaminado a la demanda o instancia, o bien a la acción, pues en uno y otro supuesto, la consecuencia es diferente¹.

En la primera hipótesis, aun cuando se pierden todos los derechos y situaciones procesales al desistirse, si no ha prescrito el derecho de acción, puede volver a ejercitarse mediante la presentación de una nueva demanda. En cambio, con el desistimiento de la acción se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer en el juicio, sin que pueda volver a ejercerlo.

Para la doctrina, este acto procesal evidencia la intención de abandonar la instancia o de interrumpir el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de algún otro trámite de un procedimiento iniciado.

Al desistimiento se le ha considerado como un acto de autocomposición que constituye una de las formas extraordinarias, a través de la cual puede ponerse fin a la pretensión planteada.

Los procesalistas lo definen, en términos generales, como la renuncia de la parte actora a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, y distinguen cuatro formas: a) de la acción, b) de la instancia, c) del derecho, y d) de un acto del procedimiento.

El desistimiento de la acción (supuesto que acontece en el caso), extingue la relación jurídico-procesal, porque quien la haya intentado deja sin algún efecto legal su propósito inicial.

Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte lo siguiente:

“(…)

La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia y se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia o de seguimiento de una actividad determinada a efecto de establecer que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas para tal efecto.

¹ Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, expediente SM-JDC-42/2012, sentencia dictada el 8 de marzo de 2012

La actividad fiscalizadora tiene por objeto comprobar la situación jurídica y financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su regularización, así como a la imposición de la sanción correspondiente.

Actualmente, la función de fiscalización no sólo constituye una actividad meramente comprobadora sobre los hechos materia de la misma, sino que ha llegado a conformarse como una actividad en la cual se verifica y, a su vez, se aplican las normas jurídicas que regulan la situación fiscalizada.

Si bien comúnmente la fiscalización se entiende referida a cuestiones financieras, esto es, relacionadas al control y comprobación de los ingresos y egresos de un ente, lo cierto es que dicho término también abarca lo atinente a la vigilancia y evaluación a efecto de establecer si las actividades y sus resultados cumplen o se desvían de los objetivos previstos.

*Considerar lo contrario, traería como consecuencia trastornar el diseño legal establecido, cuya finalidad es que la revisión de los informes de los partidos políticos sea desarrollada por un órgano técnico en la materia, ajeno a intereses políticos o de otra índole y, a través del cual, el desarrollo de esta función se realice de manera profesional e imparcial.
(...)"*

En este contexto, en relación a la voluntad expresa del quejoso de abandonar la pretensión intentada en esta instancia, este Consejo General considera que no ha lugar dado que el escrito de queja promovido por ese instituto político, no sólo es para la defensa del interés jurídico, directo y personal del Partido Morena, sino que sus causas y efectos también involucran la protección del interés público.

Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la acción realizada mediante el escrito de queja, es decir, la denuncia por presuntas infracciones al origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, no es para la defensa de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena de los principios rectores de la materia electoral, y particularmente, en fiscalización, tales como la legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación² ha establecido que el procedimiento de queja en materia de

² Al dictar sentencia dentro del expediente SUP-RAP-283/2018.

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se trata de un procedimiento que se rige predominantemente por el principio inquisitivo, dado que inmiscuye posibles infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos públicos, por lo que la investigación derivada de la queja se deberá dirigir, prima facie, a corroborar los indicios que se advierten de los elementos de prueba aportados por el denunciante, lo cual implica que la autoridad instructora se debe allegar de las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o desvanecerlos. Esto es, el campo dentro del cual la autoridad puede actuar en la investigación de los hechos, se tendrá que dirigir sobre la base de los indicios que surjan de los elementos aportados.³

Por tanto, el partido político quejoso no puede desistirse válidamente de la queja promovida toda vez que no es el único titular del interés jurídico afectado, pues corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad, lo cual implica que este Consejo General, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, con la supervisión de la Comisión de Fiscalización, ante el conocimiento de presuntas irregularidades en materia de fiscalización, debe de iniciar con la investigación respectiva y continuar con la instrucción del procedimiento administrativo de queja hasta resolver en definitiva sobre los hechos puestos a su conocimiento mediante la formulación de la resolución correspondiente.

Es decir, toda vez que se ha ejercido una acción que no sólo obedece al interés jurídico particular del Partido Morena, sino que atiende a la facultad tuitiva que, en su calidad de entidad de interés público, le concede la Constitución federal, la Legislación Electoral y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 8/2009, con el rubro y texto siguiente:⁴

³ A mayor abundamiento sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con rubro: **"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN"**, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-152/2018, han sostenido que se está ante una manifestación del Derecho Administrativo Sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función, y 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación. En virtud de lo anterior, es dable concluir que los procedimientos en materia de fiscalización se rigen primordialmente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos utilizados por los sujetos obligados.

⁴ Consultable a fojas doscientas cincuenta y nueve a doscientas sesenta, de la citada "Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno), intitulado "Jurisprudencia".

“DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN TUTITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO.- De la interpretación sistemática del artículo 41, párrafo segundo, bases I, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 62 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo presentes los principios que rigen el sistema electoral mexicano, sustantivo y procesal, así como la naturaleza y fines de los partidos políticos, se arriba a la conclusión de que, cuando un partido político promueve un medio de impugnación, en materia electoral, en ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o de grupo o bien del interés público, resulta improcedente su desistimiento, para dar por concluido el respectivo juicio o recurso, sin resolver el fondo de la litis, porque el ejercicio de la acción impugnativa, en ese caso, no es para la defensa de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena de los mencionados principios rectores de la materia electoral, sustantiva y procesal. Por tanto, el partido político demandante no puede desistir válidamente del medio de impugnación promovido, porque no es el titular único del interés jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad, lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe iniciar o continuar la instrucción del juicio o recurso, hasta dictar la respectiva sentencia de mérito, a menos que exista alguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento, del medio de impugnación.”

Adicionalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido conforme al artículo 11, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que procede el sobreseimiento cuando el promovente se desiste expresamente, por escrito, del medio de impugnación. En el mismo sentido, los artículos 77, fracción I, y 78, fracción I, inciso b) del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecen que la Sala tendrá por no presentado un medio de impugnación, cuando no se haya dictado el auto de admisión y el actor se desista expresamente por escrito.

Sin embargo, por una parte, la figura del desistimiento no se encuentra contemplada en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para que este Consejo General se encuentre en aptitud de desechar o sobreseer el procedimiento de mérito por dicha causal, y de igual forma, dado el principio inquisitivo que rige los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización, esta autoridad dictará todas aquellas

medidas necesarias para desarrollar de manera ordenada la indagatoria, realizar una investigación con las características de ley y conducir el procedimiento de manera adecuada, a efecto de poner el expediente en estado de resolución; sin que sea jurídicamente viable dar por terminada la investigación que se lleve a cabo en el expediente de mérito mediante la presentación de un escrito por medio del cual el denunciante pretenda desistirse de su acción. En consecuencia, por los razonamientos y consideraciones establecidos en el presente apartado, no procede el desistimiento hecho valer por el quejoso.

3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el **fondo del presente asunto** consiste en determinar si existe responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática al omitir comprobar el origen, destino y aplicación de recursos utilizados, para la distribución de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción, realizada por Partido de la Revolución Democrática y el entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y Diputado Federal por el principio de Representación Proporcional, el C. Candelario Pérez Alvarado; asimismo esta autoridad deberá analizar si se configura un gasto no reportado con motivo del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016 y consecuentemente si el mismo tiene un objeto partidista.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 72, 78, numeral 1, inciso b) y 80, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y los artículos 442, numeral 1, inciso a) y 443, numeral 1, inciso l) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(...)”

“Artículo 72

1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.

2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:

a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

b) Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;

c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y

f) Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas.”

“Artículo 78

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:

(...)

b) Informes anuales de gasto ordinario:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.

(...)”

“Artículo 80

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

b) Informes anuales:

I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de sesenta días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en el artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para que, en un plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración del Dictamen Consolidado a que se refiere la fracción siguiente;

IV. Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte días para emitir el Dictamen Consolidado, así como el Proyecto de Resolución respectivo, para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y

VI. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con diez días para su discusión y aprobación.”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 442

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

a) Los partidos políticos;
(...)”

“Artículo 443

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(...)

I) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

(...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 96.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)"

"Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,

por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

La certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, razón por la cual, si un ente político no presenta la documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.

Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.

Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Previo al análisis de los elementos de prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, es importante establecer que de los hechos denunciados en el escrito de queja se advierte que el mismo se encuentra presuntamente relacionado con la omisión de reportar a la autoridad electoral diversos conceptos de gasto realizados durante el ejercicio ordinario correspondiente al ejercicio 2016, que a dicho del quejoso, podrían traducirse en una ilegalidad al no aplicar el financiamiento que dispongan los sujetos obligados exclusivamente para los fines que fueron entregados.

Consecuentemente, esta autoridad electoral deberá analizar y adminicular cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica, y los principios rectores

de la función electoral⁵ con el objeto de poder determinar si efectivamente tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar diversos conceptos de gasto.

Cabe precisar que, al desahogar la prevención, el quejoso hizo del conocimiento de la autoridad adicionalmente como hecho denunciado lo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“vengo a manifestar que he aclarado el sentido de los hechos de la queja me permito señalar que la denuncia se centra principalmente sobre el uso indebido e ilegal Financiamiento Público en específico de las actividades ordinarias permanentes para la compra de molinos eléctricos y otros materiales por parte del C. Candelario Pérez Alvarado, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-Tabasco, con lo que doy cumplimiento a dicha prevención.

De igual forma manifiesto que existen conductas en la denuncia que implica se de vista a la autoridad electoral local, por posibles faltas en campaña a la normatividad de tabasco. De igual forma solicito se de vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso con la queja presentada por las irregularidades cometidas en violación, entre otros, al artículo 25 párrafo 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y demás normatividad aplicable.”

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito, así como diversos requerimientos de información al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto y de Participación Ciudadana de Tabasco y al C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, a fin de que esta autoridad se allegara de mayores elementos sobre los hechos denunciados.

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la investigación motivo del presente procedimiento de queja, consiste en determinar la posible omisión del reporte de gastos y uso indebido del financiamiento público, en específico de las actividades ordinarias permanentes durante el ejercicio dos mil dieciséis, por parte del Partido de la Revolución Democrática y su entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco.

⁵ Conforme a lo establecido en el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Lo anterior, toda vez que del escrito de queja se desprenda la denuncia de los siguientes hechos:

- Que el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, el C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y otrora Diputado Federal hizo entrega de molinos eléctricos en distintas comunidades del Municipio de Centla, estado de Tabasco.
- Que el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis una camioneta de redilas marca Isuzu, con placas de circulación VS47966, transportaba molinos eléctricos que serían o fueron depositados en un búnker o casa secreta del C. Candelario Pérez Alvarado y que presuntamente serían entregados en comunidades del estado de Tabasco.
- Que el C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática utilizan financiamiento público destinado para las Actividades Ordinarias Permanentes del citado instituto político para la compra de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción, para los habitantes del Municipio de Centla y Bosques de Saloya en el estado de Tabasco.

A continuación, se presenta el análisis del medio probatorio presentado:

Elementos probatorios aportados
Un video respecto a la supuesta cobertura de la entrega de molinos en fecha 16 de enero de 2016, y en el que supuestamente el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco el C. Candelario Pérez Alvarado, realiza el presunto reparto de Molinos eléctricos.
8 imágenes extraídas de la cuenta en twitter del PRD en Tabasco, identificada con las siglas @TabascoPRD, con dirección electrónica https://twitter.com/tabascoprdr
La página de internet con dirección electrónica: http://prdtabasco.org
La nota periodística con dirección electrónica http://www.tabascohooy.com/2/notas/291302/activa-prd-la-entrega-de-pollitos-y-molinos

Lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas, para acreditar y probar la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014

de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”**, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en específico lo relativo al artículo 21 numeral 3 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

Es importante insistir, el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, las pruebas técnicas, debido a su naturaleza, por sí mismas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

En razón de lo anterior, es preciso señalar que la naturaleza de los medios de prueba con los que cuenta la autoridad, por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en todo caso, de los presuntos gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente de mérito.

Al respecto, cabe señalar que el quejoso refiere que, al momento de suscitarse los hechos denunciados (dieciséis de enero y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis), el C. Candelario Pérez Alvarado ocupaba los cargos de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, por lo que, a efecto de dilucidar si dicho ciudadano tenía ambas calidades, esta autoridad solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, informara el periodo del cargo que ocupó el C. Candelario Pérez Alvarado como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político en el estado Tabasco; por lo que, en respuesta a lo solicitado, informó que el C. Candelario Pérez Alvarado ocupó dicho cargo del treinta de octubre de dos mil catorce al tres de noviembre de dos mil diecisiete.

De igual forma, la autoridad fiscalizadora procedió a levantar razón y constancia de la página internet <http://www.congreso.gob.mx/>, de la cual se advierte que el C. Candelario Pérez Alvarado, ocupó el cargo de Diputado Federal por el Principio de Representación Proporcional del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, la cual abarcó el periodo del primero de septiembre de dos mil quince, al treinta de abril de dos mil dieciocho.⁶

Lo anterior, se visualiza a través del siguiente cuadro:

C. Candelario Pérez Alvarado	Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Tabasco	Diputado Federal por el Principio de Representación Proporcional de la LXIII Legislatura	Temporalidad en la que reunió ambas calidades	Hechos denunciados
Temporalidad	30 de octubre del 2014 al 3 de noviembre de 2017	1 de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2018	1 de septiembre de 2015 al 3 de noviembre de 2017	16 de enero y 26 de febrero de 2016

⁶ De conformidad con el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 2, numeral 2; 4, numerales 1 y 2 y 14, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años, integrándose una nueva legislatura, la cual iniciará funciones el primero de septiembre del primer año legislativo y concluirá a más tardar el treinta de abril del tercer año legislativo.

Así las cosas, se concluye que el C. Candelario Pérez Alvarado durante la temporalidad de los hechos denunciados, tuvo las calidades de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Una vez establecido lo anterior, del análisis al escrito de denuncia y de los elementos de prueba de carácter técnico aportados por el quejoso, resulta lo siguiente:

Se procedió a realizar la búsqueda de las direcciones electrónicas ofrecidas como prueba por el quejoso, a efecto de verificar la existencia de los mismos, respecto de la repartición de los conceptos denunciados a la autoridad fiscalizadora, por lo que se procedió a levantar diversas razones y constancias.

Dichas búsquedas se realizaron en internet y específicamente en la red social denominada Twitter, toda vez que dicha página electrónica fue señalada por el quejoso en su escrito inicial para proveer a la autoridad de elementos probatorios, en la cual se encontró una cuenta del PRD en Tabasco, identificada con las siglas @TabascoPRD, identificable con el link <https://twitter.com/tabascoprld>, encontrándose la página del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, y al desplazarse hacia la parte de abajo, ya que las publicaciones están colocadas en orden cronológico, se localizó material fotográfico relativo a la entrega de molinos eléctricos y material para construcción a la población de las comunidades de Centla y Bosques de Saloya, Tabasco, como se desprende a continuación:

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Inicio Sobre nosotros Buscar en Twitter



PRD
@TabascoPRD
Por las causas de nuestra gente, en el PRD se construyen conciencias de lucha por el bien común. Por un Tabasco mejor. Democracia Ya, Patria para Todos.
prdtabasco.org
677 fotos y videos

TWEETS 1.568 SIGUIENDO 104 SEGUIDORES 1.279 ME GUSTA 595

Tweets Tweets y respuestas Medios

PRD @TabascoPRD · 4 hrs
Logran diputados federales del PRD recursos para viviendas. - Más información en: prdtabasco.org/logran-diputad



TWEETS 1.568 SIGUIENDO 104 SEGUIDORES 1.279 ME GUSTA 595

Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 15 ene.
Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD



Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 14 ene.
Gracias a ustedes por estos #300Seguidores, refrendo mi compromiso con #Tabasco y con #Mexico @TabascoPRD Democracia Ya, Patria Para Todos

TWEETS 1.568 SIGUIENDO 104 SEGUIDORES 1.279 ME GUSTA 595

Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 15 ene.
Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD



Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 15 ene.
Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD



TWEETS 1.568 SIGUIENDO 104 SEGUIDORES 1.279 ME GUSTA 595

Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 15 ene.
Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD



Retwitteado por PRD
Candelario Pérez A @DipCandelarioPA · 15 ene.
Hoy retomamos la entrega de molinos eléctricos a bajo costo en apoyo a familias de comunidades de Centla @TabascoPRD



CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB



De igual forma se levantó la razón y constancia específicamente en la página digital del periódico local “Tabasco Hoy”, toda vez que una publicación hecha en dicha página fue señalada por el quejoso en su escrito inicial para proveer a la autoridad de elementos probatorios, dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link <http://www.tabascohoy.com/2/notas/291302/activa-prd-la-entrega-de-pollitos-y-molinos> por lo que se desplegó un artículo o nota periodística con la fecha dieciséis de enero de dos mil dieciséis, la cual contiene lo siguiente:



CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Por otro lado, derivado de las facultades de investigación con las que cuenta esta autoridad, a efecto de allegarse de elementos de convicción que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados, mediante razón y constancia en la red social denominada Facebook, se hizo constar la búsqueda realizada en la red social Facebook, específicamente a las direcciones electrónicas que siguientes: <https://www.facebook.com/prdoficialtabasco/videos/588086488008744/> y <https://www.facebook.com/prdoficialtabasco/?fref=photo>, en las cuales se desplegó la página en dicha red social del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, por lo que al desplazarse hacia la parte de abajo, ya que las publicaciones se encuentran colocadas en orden cronológico, se localizaron publicaciones relativas a la supuesta entrega de molinos eléctricos y material para construcción a la población de las comunidades del Municipio de Centla y Bosques de Saloya, Tabasco, como se desprende a continuación:



CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB



Adicionalmente, la autoridad fiscalizadora levanto razones y constancias, respecto de la búsqueda realizada en el portal de internet denominado YouTube, localizando un canal de nombre “PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco”⁷, en el cual se advirtió

⁷ Mismo que es visible a través de la dirección electrónica: <https://www.youtube.com/channel/UCHbM0GMz3KUD9m-plan635g>.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

una lista de 39 videos, por lo que al revisar cada uno de ellos, se desprenden los siguientes videos marcados con los números 14, 15 y 16 titulados: “*Entrega PRD Tabasco molinos eléctricos a bajo costo*”; “*Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.*” y “*Fortalece PRD acciones de desarrollo social*”, con fechas de publicación del dieciocho de noviembre de dos mil quince, ocho y veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

En este sentido, las razones y constancias en comento constituyen documentales públicas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Ahora bien, derivado de las pruebas técnicas proporcionadas en el escrito de queja, se procedió a requerir a los sujetos denunciados a efecto de allegarse de mayores elementos respecto de la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a los habitantes del Municipio de Centla y Bosques de Saloya, Tabasco, obteniéndose los siguientes resultados:

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
2-marzo-2016	C. Candelario Pérez Alvarado, Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.	INE/UTF/DRN/4181/2016 4-marzo-2016	<p>“1. Declaro que no he realizado la entrega de ‘molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción’ a los habitantes del municipio de Centla, mucho menos a la localidad de bosques de Saloya, razón por la cual no forma parte de ningún programa derivado de mi cargo como Diputado Federal.</p> <p>2. Declaro que la denunciada entrega de ‘molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción’ a los habitantes del municipio de Centla y de la localidad de bosques de Saloya, no forman parte de algún programa de actividades inherentes a mi desempeño como Diputado Federal, razón por la cual desconozco en que consiste el programa y el mecanismo mediante el cual se selecciona a las personas a las que supuestamente se otorgan dichos artículos, de igual forma desconozco que costo cubren los beneficios para dichas personas, en virtud que no es una actividad que esté realizado.</p> <p>3. De igual forma que se contestó el punto que antecede al no ser una actividad que esté realizando se desconoce lo siguiente:</p> <p>a) Desconozco las características de cada uno de los citados productos, en virtud que no he realizado ninguna</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
			<p>compra de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción".</p> <p>b) Declaro que no cuento con la documentación, los contratos y facturas que ampare la adquisición de los multicitados productos, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Diputado Federal.</p> <p>c) Desconozco cuál fue el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas de dichos artículos, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Diputado Federal.</p> <p>d) Desconozco la clasificación y la cantidad de los supuestos artículos comprados, de igual forma desconozco cuantos han sido distribuidos y cuantos se tienen por entregar, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Diputado Federal.</p> <p>e) Desconozco de donde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos ya señalados, así como la logística de su distribución en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Diputado Federal.</p> <p>4. Desconozco si los supuestos artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia, de igual forma no conozco el precio en que fueron vendidos y que uso se dio a los recursos recabados con dichas ventas, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Diputado Federal.</p> <p>Por otra parte deseo precisar a esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional, que en virtud de que la denuncia se refiere a hechos que supuestamente acontecieron en el municipio de Centla y la localidad de Bosques de Saloya, localidades que son totalmente ajenas al área geográfica electoral correspondiente al municipio de Centro, Tabasco, lugar en donde se está desarrollando la Elección Extraordinaria, de lo cual se puede concluir que este asunto no tiene ninguna relación con el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario 2015-2016, razón por la cual esta Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para conocer de dicha denuncia, pues la misma relata hechos que supuestamente sucedieron en otro municipio distinto al municipio de Centro, Tabasco, razón por la cual dicha queja debe ser desechada, al carecer esta autoridad de competencia para conocer de la supuesta entrega de molinos eléctricos pollitos y material para la construcción."</p>
2-marzo-2016	C. Candelario Pérez Alvarado, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido	INE/UTF/DRN/4182/2016 8-marzo-2016	No atendió el requerimiento

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
	de la Revolución Democrática en Tabasco.		
16-mayo-2016	C. Candelario Pérez Alvarado, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco.	INE/04JDE/VE/0176/2016 17-mayo-2016	<p><i>"1. Declaro que ni el Partido de la Revolución Democrática ni la presidencia ha realizado la entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla, mucho menos a la localidad de bosques de Saloya.</i></p> <p><i>2. Declaro que la denuncia por la supuesta entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla y de la localidad de bosques de Saloya, no forman parte de algún programa de actividades inherentes al Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco ni mucho menos al comité ejecutivo, razón por la cual desconozco en que consiste el programa y el mecanismo mediante el cual se selecciona a las personas a las que supuestamente se otorgan dichos artículos, de igual forma desconozco que costo cubren los beneficios para dichas personas.</i></p> <p><i>3. De igual forma que se contestó el punto que antecede al no ser una actividad que esté realiza' el Partido de la Revolución Democrática ni la Presidencia se desconoce lo siguiente:</i></p> <p><i>a) Desconozco las características de cada uno de los citados productos, en relación a los "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción". Este no es un programa que esté realizando el Partido de la Revolución Democrática.</i></p> <p><i>b) Declaro que no cuento con la documentación, los contratos y facturas que ampare la adquisición de los multicitados productos, en virtud que el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia está realizando dicha actividad,</i></p> <p><i>c) Desconozco cuál fue el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas de dichos artículos en virtud que el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia está realizando dicha actividad,</i></p> <p><i>d) Desconozco la clasificación y la cantidad de los supuestos artículos comprados, de igual forma desconozco cuantos han sido distribuidos y cuantos se tienen por entregar, en virtud que el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia está realizando dicha actividad,</i></p> <p><i>e) Desconozco de donde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos ya señalados, así como la logística de su distribución en virtud que el</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
			<p><i>Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia está realizando dicha actividad,</i></p> <p><i>4.- Desconozco si los supuestos artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia, de igual forma no conozco el precio en que fueron vendidos y que uso se dio a los recursos recabados con dichas ventas, en virtud que es una actividad ajena al Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia pues no forman parte de ningún programa que esté realizando el en virtud que el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, ni la presidencia, siendo totalmente ajeno a la realización de los supuestos hechos denunciados.</i></p> <p><i>Por otra parte deseo precisar a esta comisión de Fiscalización que el en virtud que el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, siempre ha sido respetuoso de la ley u los recursos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, les entrega han sido destinados para los fine y objetivos que la ley establece, y es falso como dolosamente lo afirma el denunciante que el Instituto Político que represente este haciendo mal uso del financiamiento público en específico de las actividades ordinarias permanente y es falso y se niega que dichos recursos se esté utilizando para comprar por la supuesta entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" por parte del suscrito, por el contrario podemos afirmar que dichos recurso siempre se han aplicado para los fines establecidos en la ley, como podrá comprobarse con el informe que rinde y se ha rendido ante este órgano de fiscalización."</i></p>
16-mayo-16	C. Javier López Cruz, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.	INE/JD04/VE/175//2016 17-mayo-2016	<p><i>"1. Manifiesto que ni el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, ni el C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, realiza o ha realizado la entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla, mucho menos a la localidad de bosques de Saloya.</i></p> <p><i>2. Declaro que la denunciada por la supuesta entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla y de la localidad de bosques de Saloya, Tabasco. (SIC) no forman parte de ningún programa, ni de ninguna actividad del Partido de la Revolución democrática, mucho menos de su Comité Ejecutivo, razón por lo cual desconozco en que consiste dicho programa, así como cuál es su fundamento, así como cuál es su mecanismo mediante el cual se seleccionan a las personas a las cuales se le otorga dichos artículos y cuál es su costo que cubren los beneficiados.</i></p> <p><i>3. Manifiesto que como ya los señalé en líneas anterior, en relación a los molinos eléctricos, pollitos y material para la</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
			<p>construcción esta no es un programa del partido de la revolución democrática, ni de su presidente el C. Candelario Pérez Alvarado, razón por lo cual desconozco:</p> <p>a) desconozco las características de los productos, pues como ya lo manifesté este no es un programa del partido de la revolución democrática, ni de su presidente el C. Candelario Pérez Alvarado.</p> <p>b) Declaro que no cuento con la documentación, los contratos y facturas que amparen la adquisición de dichos productos, en virtud de que ni el partido de la revolución democrática, ni el C. Candelario Pérez Alvarado, están realizando dicha actividad, pues no se trata de un programa del Partido de la revolución democrática.</p> <p>c) Desconozco cuál fue el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas de dichos artículos, en virtud que es una actividad que esté realizando el C. Candelario Pérez Alvarado, mucho menos el Partido de la Revolución democrática.</p> <p>d) Desconozco la clasificación y la cantidad de los supuestos artículos comprados, de igual forma se desconoce cuantos han sido distribuidos y cuantos se tienen por entregar, en virtud que es una actividad que no está realizando el Partido de la Revolución democrática, así como tampoco lo está realizando el C. Candelario Pérez Alvarado en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.</p> <p>e) Desconozco de donde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos ya señalados, así como la logística de su distribución en virtud que es una actividad que no está realizando el Partido de la Revolución democrática ni el C. Candelario Pérez Alvarado, como Dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco.</p> <p>4. Desconozco si los supuestos artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia, de igual forma no conozco el precio en que fueron vendidos y que uso se dio a los recursos recabados con la supuesta ventas, en virtud que como ya lo manifesté en puntos anterior dicha actividad es totalmente ajeno al partido de la revolución democrática, y a su Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, pues no forma parte de ningún programa que estén realizado el Partido de la Revolución democrática, siendo totalmente ajeno a la realización de los supuestos hechos denunciados.</p> <p>Por otra parte deseo precisar a esta Comisión de Fiscalización que el Partido de la Revolución Democrática, siempre ha sido respetuoso de la ley y los recurso que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, les entrega ha sido destinados para los fines y objetivos que</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
			<i>la ley establece, y es falso como dolosamente lo afirma el denunciante que el instituto político que represento, este haciendo mal uso, del financiamiento público en específico de las actividades ordinarias permanente y es falso y se niega que dicho recurso se esté utilizando para comprar molino eléctricos y otros materiales, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado, presidente del comité ejecutivo estatal, por el contrario podemos afirmar que dichos recursos siempre se han utilizado para los fines que están establecidos en la ley, como podrá comprobarse con los informe que se rinde y se han rendido ante el órgano de fiscalización."</i>
12-enero-2017	C. Candelario Pérez Alvarado, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco.	INE/JD04/VE/00013/2017 13-enero-2017	<p><i>"1. Declaro que no he realizado la entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla, mucho menos a la localidad de bosques de Saloya, razón por la cual no forma parte de ningún programa derivado de mi cargo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco.</i></p> <p><i>2. Declaro que la denuncia por la supuesta entrega de "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción" a los habitantes del municipio de Centla y de la localidad de bosques de Saloya, no forman parte de algún programa de actividades inherentes a mi desempeño como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco ni mucho menos al comité ejecutivo, razón por la cual desconozco en que consiste el programa y el mecanismo mediante el cual se selecciona a las personas a las que supuestamente se otorgan dichos artículos, de igual forma desconozco que costo cubren los beneficios para dichas personas, en virtud que no es una actividad que esté realizando.</i></p> <p><i>3. De igual forma que se contestó el punto que antecede al no ser una actividad que esté realizando se desconoce lo siguiente:</i></p> <p><i>a) Desconozco las características de cada uno de los citados productos, en relación a los "molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción".</i></p> <p><i>b) Declaro que no cuento con la documentación, los contratos y facturas que ampare la adquisición de los multicitados productos, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco.</i></p> <p><i>c) Desconozco cuál fue el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas de dichos artículos en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

Fecha del requerimiento	Sujeto requerido	Número de oficio/ Fecha de notificación	Respuesta
			<p><i>Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco.</i></p> <p><i>d) Desconozco la clasificación y la cantidad de los supuestos artículos comprados, de igual forma desconozco cuantos han sido distribuidos y cuantos se tienen por entregar, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco.</i></p> <p><i>e) Desconozco de donde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos ya señalados, así como la logística de su distribución en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco</i></p> <p><i>4. - Desconozco si los supuestos artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia, de igual forma no conozco el precio en que fueron vendidos y que uso se dio a los recursos recabados con dichas ventas, en virtud que es una actividad que no estoy realizando y que es ajena a las actividades que realizo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco."</i></p>

Los escritos de respuestas detallados en el cuadro anterior, constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En este sentido, y derivado de las respuestas obtenidas del entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y otrora Diputado Federal de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se obtuvo lo siguiente:

- Niega de forma lisa y llana que haya realizado la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material para construcción a los habitantes de Centla, y bosques de Saloya.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

- Niega que haya entregado o participado en los hechos motivo del presente procedimiento.
- Manifiesta que la supuesta entrega de molinos eléctricos, pollitos y material para construcción, no forman parte de ningún programa, ni de ninguna actividad del Partido de la Revolución Democrática.
- Desconoce absolutamente las características de cada uno de los citados productos denunciados.
- Declara que no cuenta con documentación, contratos, facturas que amparen la adquisición de citados productos.
- Desconoce el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas.
- Desconoce de dónde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos, así como la cantidad que se distribuyeron y cuantos se entregaron.
- Desconoce si los artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia.

Adicionalmente, del análisis a la respuesta a proporcionada por el Representante Propietario de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se obtuvo lo siguiente:

- Niega de forma lisa y llana que haya realizado la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material para construcción a los habitantes de Centla, y bosques de Saloya.
- Niega que haya entregado o participado en los hechos motivo del presente procedimiento.
- Manifiesta que la supuesta entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción, no forman parte de ningún programa, ni de ninguna actividad del Partido de la Revolución Democrática.

- Desconoce absolutamente las características de cada uno de los citados productos denunciados.
- Declara que no cuenta con documentación, contratos, facturas que amparen la adquisición de citados productos.
- Desconoce el método de distribución que se empleó para la entrega de las personas beneficiadas.
- Desconoce de dónde se obtuvieron los recursos económicos para la compra de los artículos, así como la cantidad que se distribuyeron y cuantos se entregaron.
- Desconoce si los artículos fueron vendidos a bajo costo como se denuncia.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y a efecto de allegarse de mayores elementos que permitieran la debida integración del expediente que por esta vía se resuelve, esta autoridad realizó diversos requerimientos de información, tal y como se expone a continuación:

Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización:

Mediante oficio INE/UTF/DRN/479/2017, se solicitó a la mencionada Dirección, a fin de que informara si, en el marco del Informe Anual 2016 el Partido de la Revolución Democrática, reporto los conceptos relativos a la compra de molinos eléctricos, pollitos y material para la construcción.

En respuesta a el Director de la Dirección de Auditoria informó lo siguiente:

“(…)

Le informó que, derivado del análisis realizado a los informes y registros de operaciones reportados por el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco en el SIF, correspondientes a los gastos de operación ordinaria del ejercicio 2016, no se localizaron gastos por los conceptos de molinos eléctricos; material de construcción ni animales de granja (pollos).

“(…)”

Como puede advertirse, la respuesta formulada por la Dirección de Auditoría, constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral

1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Adicionalmente, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que, durante el ejercicio dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución Democrática no registró gastos por concepto de compra distribución u otro similar relativo a la entrega y distribución de molinos eléctricos, materiales para construcción y animales de granja “pollitos”, señalados por el quejoso.

Dicha búsqueda quedo asentada en la Razón y Constancia, que levantó la autoridad fiscalizadora al ingresar a la contabilidad del Partido de la Revolución Democrática en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.0, apartado “Ordinario”, ejercicio 2016, al ingresar en el buscador de internet el siguiente link: https://sif.ine.mx/sif_ordinario/app/polizas/consulta?execution=e4s1, con la finalidad de localizar los registros contables relativos a la compra y distribución de molinos eléctricos, materiales para construcción y animales de granja “pollitos”.

Es preciso subrayar que la razón y constancia referida constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados al emitirse por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo, determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.

El SIF tiene como fin que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en

conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco y Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco:

Por otra parte, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto a la denuncia consistente en que el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en una camioneta de redilas marca ISUZU presuntamente se transportaron molinos eléctricos a un bunker o casa secreta del C. Candelario Pérez Alvarado, para entregarse a diversas comunidades del estado de Tabasco⁸ esta autoridad realizó sendos requerimientos de información a diversas autoridades⁹ a efecto de obtener información en relación al nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con los que contaran en sus registros, respecto del propietario del vehículo ISUZU con placas de circulación VS47966, obteniendo como resultado que el vehículo en comento se encuentra registrado a nombre del C. Miguel Ramos Ramón.

Por lo anterior, esta autoridad procedió a requerir información al citado ciudadano, para que señalara si el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, realizó una carga y descarga de molinos eléctricos en su vehículo con placas de circulación VS47966; las personas que lo contrataron para llevar a cabo dicho traslado, el monto de la contraprestación que cobró por el servicio, así como los documentos respectivos, llevándose a cabo la notificación respectiva mediante estrados.¹⁰

Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta alguna.

Ahora bien, en observancia al principio de exhaustividad con el que se conduce esta autoridad y a efecto de obtener mayores datos para la localización del C. Miguel

⁸ A foja doce, párrafo segundo del escrito de queja, se denunció lo siguiente: "7.- Por otro lado, y con fecha 23 de febrero de 2016, de una camioneta de redilas ISUZU con placas de circulación VS47966, se observaron una gran y enorme cantidad de molinos eléctricos, y que al parecer serían o fueron depositados en un bunker o casa secreta del C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO, y que presuntamente serán entregados en comunidades del Estado de Tabasco en beneficio de pobladores"

⁹ Se realizaron solicitudes de información al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Centla, en el estado de Tabasco y Director de Tránsito Municipal de Cárdenas, en el estado de Tabasco, sin embargo, éstos dos últimos no dieron contestación al requerimiento formulado.

¹⁰ Mediante acta circunstanciada formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se hizo constar que una vez constituidos en la dirección respectiva para realizar la notificación del oficio INE/JLETAB/VE/0091/2018 dirigido al C. Miguel Ramos Ramón, la calle no tenía nomenclatura ni numeración exterior, por lo que se procedió a preguntar con vecinos del lugar con respecto a la persona buscada, manifestando que no lo conocían, motivo por el cual, se procedió a la notificación del oficio atinente mediante los estrados de la Junta Local Ejecutiva antes mencionada.

Ramos Ramón, o en su caso, un domicilio diverso del ciudadano en comento, se procedió a requerir información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, así como al Servicio de Administración Tributaria¹¹, sin embargo, las respuestas proporcionadas no arrojaron datos adicionales para la ubicación del citado ciudadano.

Dada la falta de información que ayudaran a dilucidar los hechos materia del presente procedimiento, se procedió a realizar diligencias adicionales a efecto de allegarse de mayores elementos respecto de la distribución de los bienes denunciados, mismas que consistieron medularmente en lo siguiente:

Presidenta Municipal de Centla en el estado de Tabasco

El veintiocho de marzo del año en curso, mediante oficio INE/CLTAB/CP/1493/2018, se solicitó a la Presidenta Municipal de Centla en el estado de Tabasco información respecto a la totalidad de Programas Sociales que estuvieron activos en el periodo comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 a cargo del Municipio en mención, también, si con motivo de alguno de estos Programas Sociales o por alguna otra razón, el municipio realizó o tuvo conocimiento de la entrega de “molinos eléctricos, pollitos y material para construcción” a los habitantes del Municipio de Centla, en la localidad de Bosques de Saloya, y si personal de ese Ayuntamiento Municipal, brindó apoyo al C. Candelario Pérez Alvarado y/o al Partido de la Revolución Democrática, principalmente por cuanto hace a facilitar la entrega de dichos bienes.

Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se obtuvo respuesta alguna por parte de dicho Ayuntamiento.

Presidente Municipal de Cárdenas en el estado de Tabasco:

Mediante oficio INE/CLTAB/CP/1868/2018, se solicitó al Presidente Municipal de Cárdenas, en el estado de Tabasco, informara si había participado en la entrega de molinos, pollitos y materiales de construcción entre los pobladores de diversos municipios cercanos a la zona conurbada de Villahermosa, Tabasco; la totalidad de Programas Sociales que estuvieron activos en el periodo comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 a cargo del Municipio en mención; y si con motivo de alguno de estos Programas Sociales o por alguna otra razón, el municipio realizó o tuvo conocimiento de la entrega de “molinos eléctricos, pollitos y material para

¹¹ Mediante oficios INE/UTF/DRN/1288/2018 e INE/UTF/DRN/43804/2018, respectivamente.

construcción” a los habitantes del Municipio de Centla, en la localidad de Bosques de Saloya, y si personal de ese Ayuntamiento, brindó apoyo al C. Candelario Pérez Alvarado y/o al Partido de la Revolución Democrática, principalmente por cuanto hace a facilitar la entrega de dichos bienes.

En respuesta a lo solicitado, mediante oficio número PM/082/2018, se informó el desconocimiento de la realización o participación de actividades llevadas a cabo en beneficio de los pobladores, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la entrega de molinos eléctricos pollitos y materiales para la construcción, como a continuación se detalla:

“2.- (...) por lo que respecta a este punto que se contesta, me permito adjuntar el presente escrito una relación de los programas que estuvieron activos en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por parte de este ayuntamiento constitucional de Cárdenas, Tabasco, especificando el nombre del programa y partida presupuestal que se afectó para tal fin.

3.- (...) me permito informar que este Ayuntamiento no cuenta con algún registro que refiera al conocimiento, realización o participación de la entrega de molinos eléctricos pollitos y materiales para la construcción a los habitantes del municipio de Centla, en la localidad de Bosques de Saloya, Tabasco.

4.- (...) me permito informar que este Ayuntamiento no cuenta con algún registro que refiera al conocimiento, realización o participación de actividades llevadas a cabo en beneficio de los pobladores, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la entrega de molinos eléctricos pollitos y materiales para la construcción.

5.- (...) me permito informar que este H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco que me Honro en presidir, no lleva a cabo programas en beneficio de personas que no pertenezcan a este municipio, los programas que aquí se gestionan son en beneficio exclusivamente de los habitantes de Cárdenas, Tabasco, por lo que después de una búsqueda minuciosa, no se encontró registro alguno que refiera a algún programa gestionado o realizado por este ayuntamiento en beneficio de habitantes de algún otro municipio del Estado de Tabasco ni de ningún otro de la república Mexicana.

6.- (...) con respecto a este punto me permito informar que este ayuntamiento en ningún momento ha dispuesto del personal a su cargo a fin de brindar apoyo al C. Candelario Pérez Alvarado y/o al Partido de la Revolución Democrática, principalmente por cuanto hace a la entrega de molinos eléctricos, pollitos y materiales para la construcción.

7.- (...) por lo que hace a este punto señalo que, derivado de lo manifestado en los puntos anteriores, no hay más documentos ni aclaraciones que se pudieran rendir del informe realizado.”

La citada respuesta proporcionada por el Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática

De igual forma, esta autoridad procedió a requerir al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, para que informará el periodo del encargo de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco que ocupó el C. Candelario Pérez Alvarado, y exhibiera los “INFORMES DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016”, que fueron entregados por el C. Candelario Pérez Alvarado, de conformidad con el artículo 77, inciso d), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.¹²

En respuesta a lo solicitado, mediante escrito sin número, el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática dio respuesta a lo solicitado, informando que el periodo del encargo que ocupó el C. Candelario Pérez Alvarado como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco fue del 30 de octubre de 2014 al 3 de noviembre de 2017; y con respecto a los informes de resultados, manifestó que los mismos no obran en poder del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que no fueron entregados por el C. Candelario Pérez Alvarado, motivo por el cual fue destituido de su cargo en la sesión del octavo pleno del citado Consejo Estatal realizada el 3 de noviembre de 2017

Así las cosas, dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de la autoridad genere convicción sobre la veracidad de los

¹² “Artículo 77. La Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tendrá las siguientes funciones y atribuciones: (...) d) Presentar al Consejo Estatal, en representación del Comité Ejecutivo Estatal, por lo menos cada tres meses, los informes de las actividades realizadas por él mismo; (...)”

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura:

Adicionalmente, mediante oficio número INE/UTF/DRN/26092/2018, se solicitó al Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, proporcionara los “Informes de actividades o informe de resultados”¹³, correspondiente al ejercicio 2016 que presentó el C. Candelario Pérez Alvarado, Diputado Federal de la LXIII Legislatura, 3ra Circunscripción, del estado de Tabasco, Curul D-110, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En atención a dicha solicitud, mediante oficio número LXIII/UT-SATS/0105/2018, el citado Director dio respuesta a lo solicitado, remitiendo la impresión de 122 hojas relativas a los informes de actividades correspondientes a septiembre – diciembre 2015 y enero – agosto 2016, presentados por el entonces Diputado Federal, el C. Candelario Pérez Alvarado.

Dicha respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, constituye una documental pública, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Ahora bien, del estudio y análisis de los informes de actividades presentados por el entonces Diputado Federal, el C. Candelario Pérez Alvarado, se advierte que contienen temas relativos al diagnóstico de las finanzas públicas, actividades y productos legislativos, así como documentos de la asesoría parlamentaria en expedientes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, del contenido de dichos informes no se advierte la utilización de recursos o referencia alguna respecto a la compra y distribución de molinos eléctricos, pollitos

¹³ De conformidad con el artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados, entre las obligaciones de los diputados se encuentra la de presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual se deberá de enviar una copia para su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

y material de construcción para las comunidades del Municipio de Centla y Bosques de Saloya, en el estado de Tabasco.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos sobre el posible uso o aplicación de recursos por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, así como por parte del C. Candelario Pérez Alvarado, mediante oficios INE/UTF/DRN/31077/2018, INE/UTF/DRN/31827/2018, INE/UTF/DRN/31828/2018 se solicitó a la CNBV los contratos de apertura y estados de cuenta correspondientes al ejercicio dos mil quince y dos mil dieciséis de las cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco en las instituciones financieras Banco Nacional de México, S.A., BBVA Bancomer, S.A. y HSBC México, S.A.¹⁴

De igual forma, mediante oficios INE/UTF/DRN/26556/2018, se solicitó a la CNBV remitir de todas las instituciones bancarias los números de cuenta, estados de cuenta del ejercicio dos mil dieciséis, los contratos de apertura y las tarjetas de firmas a nombre del C. Candelario Pérez Alvarado.

En respuesta a lo solicitado, mediante oficios 214-4/7921992/2018, 214-4/7940065/2018 y 214-4/7921982/2018, el Director General Adjunto del CNBV, remitió copia de los informes rendidos por Banco Nacional de México, S.A., BBVA Bancomer, S.A. y HSBC México, S.A., por medio de los cuales enviaron los documentos solicitados respecto del Partido de la Revolución Democrática. De igual forma, mediante oficios 214-4/7929035/2018 y 214-4/7929078/2018, el citado Director General Adjunto del CNBV, remitió copia de los informes rendidos por Banco Mercantil del Norte, S.A. y HSBC México, S.A., por medio de los cuales se enviaron los documentos solicitados del C. Candelario Pérez Alvarado.

Las citadas respuestas, constituyen documentales públicas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.

¹⁴ Mediante oficio INE/UTF/DA/1874/2018, la Dirección de Auditoría informó que durante el ejercicio dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco contaba con cuentas bancarias abiertas en Banco Nacional de México, S.A., BBVA Bancomer, S.A. y HSBC México, S.A., motivo por el cual sólo de éstas instituciones bancarias se solicitó información.

Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Al respecto, derivado del análisis realizado por la autoridad instructora a los contratos y estados de cuenta remitidos, no se desprende ningún gasto o pago realizado por el Partido de la Revolución Democrática, ni por el C. Candelario Pérez Alvarado, por la compra o adquisición de molinos eléctricos, pollitos y materiales de construcción, ni tampoco se detectaron movimientos realizados con proveedor alguno que brindara los conceptos antes referidos.

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto y al Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Siguiendo con la línea de investigación respecto a la presunta compra y distribución de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción por parte de los sujetos incoados, mediante oficios INE/UTF/DRN/29230/2018 e INE/CLTAB/CP/6052/2018, se solicitó al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto y al Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informaran si durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis iniciaron algún procedimiento administrativo sancionador en contra del C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Diputado Federal y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco; así como en contra del C. Rafael Acosta León, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco¹⁵ y en caso afirmativo, remitieran copia certificada de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

En contestación a lo requerido, mediante oficio INE-UT/7822/18, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto manifestó que después de realizar una revisión a sus archivos y bases de datos con los que cuenta, no se encontró registro o documento alguno relacionado con la solicitud formulada.

Por otra parte, mediante oficio CCE/329/2018, el Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informó que durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis se iniciaron los

¹⁵ Lo anterior, toda vez que, de la prueba técnica aportada en el escrito de queja consistente en una nota periodística, contiene el señalamiento de que el C. Rafael Acosta León, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, presuntamente realizó la entrega molinos eléctricos, pollitos y material de construcción.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

procedimientos administrativos sancionadores SE/PES/PVEM-CPA/018/2016, SE/PES/RQM-ALDC/026/2015 y SE/PES/PT-ALDLC/039/2015 y su acumulado SE/PES/PRI-RAL/047/2015, el primero de ellos en contra del C. Candelario Pérez Alvarado y los dos restantes en contra del C. Rafael Acosta León, por lo cual, remitió copia certificada de los expedientes citados, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

Expediente	Sujetos Denunciados	Actos denunciados	Sentido de la Resolución
SE/PES/PVEM-CPA/018/2016	Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Presidente el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco.	Vulneración al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la participación del C. Candelario Pérez Alvarado en un acto público portando una camisa con el emblema del Partido de la Revolución Democrática.	Sobreseimiento, toda vez que los hechos denunciados no constituyeron infracción alguna a la normativa electoral local.
SE/PES/RQM-ALDC/026/2015	Rafael Acosta León, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco y otros.	Actos de presión y coacción al voto por la presunta distribución de paquetes de láminas.	Desechado de plano el escrito de queja, en virtud de que la emisión y realización del programa "ramo 33" no actualiza infracción alguna a la normativa electoral local.
SE/PES/PT-ALDLC/039/2015 y su acumulado SE/PES/PRI-RAL/047/2015	Rafael Acosta León, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco y otros.	Actos de presión y coacción al voto por la presunta distribución de paquetes de láminas y artículos diversos.	Infundado, al no acreditarse los hechos denunciados.

En este contexto, las respuestas emitidas por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto y el Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco constituyen documentales públicas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Así las cosas, de los expedientes remitidos por el Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, no se

advierte que los hechos denunciados en cada uno se encuentren relacionados con los que hechos que son materia de la presente Resolución, y de igual forma, los mismos fueron declarados como sobreseídos, desechados o infundados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al no actualizarse infracción alguna a la normativa electoral local y no acreditarse los hechos denunciados.

No obstante, esta autoridad procedió a emplazar al Partido de la Revolución Democrática a efecto que manifestara las aclaraciones que a su derecho conviniera; derivado de lo cual formuló respuesta en los términos que han quedado precisados en el antecedente identificado con el número XXXIII de la presente Resolución.

Videos titulados “*Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.*” y “*Fortalece PRD acciones de desarrollo social*”

Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación en el expediente de mérito y en particular, de los videos titulados: “*Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.*” y “*Fortalece PRD acciones de desarrollo social*”¹⁶, con fecha de publicación del ocho de enero de dos mil dieciséis y dieciocho de noviembre de dos mil quince, respectivamente, del contenido de los mismos se observó con respecto al primero, el presunto programa de materiales de construcción a bajo costo implementado por parte de los sujetos incoados, apareciendo dos personas de nombre Aleyda Cruz Palma y Mario Campos Barahona como supuestos beneficiarios de dichos materiales, así como la presunta utilización de los vehículos con placas de circulación VS-12-602 y VR-03-549.

De igual forma, con relacion al segundo video, titulado “*Fortalece PRD acciones de desarrollo social*”, se advierte el presunto programa de aves de corral (pollitos) a bajo costo implementado por parte de los sujetos incoados, en el que aparecen las CC. Martha Isabel de la Cruz y Florinda Regil Hernández como supuestas beneficiarias de dicho programa; los CC. Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, en sus supuestas calidades de Encargado de las Gestiones Sociales y coordinador distrital, ambos del Partido de la Revolución Democrática; la utilización de un vehículo con placas de circulación VS-47-966¹⁷; así como las

¹⁶ Alojados en el canal de nombre “*PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco*”, en el portal de internet denominado YouTube, de los cuales se levantó razón y constancia, tal y como se dio cuenta en párrafos precedentes de la presente Resolución.

¹⁷ Al respecto, cabe señalar que se trata del mismo vehículo en el que ha dicho del quejoso, se transportaron molinos eléctricos a un bunker o casa secreta del C. Candelario Pérez Alvarado, para entregarse a diversas comunidades del estado de Tabasco, cuyo propietario es el C. Miguel Ramos Ramón y cuyas diligencias realizadas con relación a dicho ciudadano, se dio cuenta anteriormente en la presente Resolución.

personas morales “Incubadora Mexicapán, S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” como los presuntos proveedores de las aves de corral en mención.

En este contexto, a efecto de obtener información sobre el domicilio de los ciudadanos antes mencionados, la autoridad fiscalizadora solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) de los ciudadanos en comento; y en caso de resultar positiva dicha búsqueda, expidiera y remitiera copias de las capturas de pantalla de la búsqueda realizada en dicho sistema. Al respecto, mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/21356/2018, el citado Director dio respuesta a lo solicitado.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora realizó la búsqueda de los CC. Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez en la contabilidad del Partido de la Revolución Democrática en el SIF, obteniendo como resultado que en la contabilidad número 125, correspondiente al Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco¹⁸ se desprende que el C. Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, trabajaron para el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil dieciséis, en sus calidades de secretario y auxiliar contable, respectivamente.

Por otra parte, a fin de obtener mayores elementos sobre los propietarios de los vehículos con placas de circulación o matrículas VS-12-602, VR-03-549, supuestamente utilizados en el programa de materiales de construcción a bajo costo, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco y Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de dicha entidad federativa, el nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con los que contaran en sus archivos, respecto de los propietarios de los vehículos referidos; obteniendo como resultado que el primero de ellos, se encuentra registrado a nombre del C. Mario Campos Barahona¹⁹, y el segundo, a nombre de los CC. Roberto Hernández Ramos e Israel Armando López Ramón.²⁰

¹⁸ A través de las siguientes pólizas: póliza número 12, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación mayo; póliza número 12, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo diario, periodo de operación mayo; póliza número 84, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación enero; póliza número 172, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación junio; póliza número 177, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo diario, periodo de operación junio; póliza número 232, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación febrero y póliza número 277, ejercicio 2016, tipo normal, subtipo diario, periodo de operación febrero.

¹⁹ Tal y como fue establecido previamente, en el video titulado: “*Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.*” el C. Mario Campos Barahona, aparece como presunto beneficiario de dicho programa.

²⁰ Derivado de la información proporcionada mediante oficio SSP/DGPEC/4114/2018, se informó con relación al vehículo con placas de circulación o matrícula VR-03-549, que hasta el once de febrero de dos mil dieciséis, el C. Roberto Hernández

Así las cosas, derivado de la información obtenida, se procedió a formular diversas solicitudes de información a las personas físicas y morales que se mencionan a continuación:

Programa de aves de corral (pollitos) a bajo costo	
Beneficiarios	Martha Isabel de la Cruz
	Florinda Regil Hernández
Trabajadores del Partido de la Revolución Democrática	Eduardo Pérez García
	Miguel Sebastián Méndez Ramírez
Proveedores	"Incubadora Mexicapan, S.A. de C.V."
	"Incubadora del Soconusco"

- **Martha Isabel de la Cruz y Florinda Regil Hernández.**

En este contexto, se procedió a requerir a las CC. Martha Isabel de la Cruz y Florinda Regil Hernández a efecto de que informaran si durante los años 2015 o 2016 fueron beneficiarias del programa de aves de corral (pollitos) a bajo costo; señalaran si el Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado, realizaron la entrega de las aves de corral (pollitos); informaran las aves de corral (pollitos) que adquirieron, si fue de manera gratuita o a bajo costo (especificando el monto pagado por cada pollito y el monto total); así como el lugar y fecha en que le fueron entregados.

Al respecto, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco notificó los requerimientos de información a ambas ciudadanas, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no dieron respuesta a lo solicitado por esta autoridad²¹.

- **Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez.**

De igual forma, se formularon solicitudes de información a los CC. Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez a efecto de que confirmaran o rectificaran si participaron con el Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado en el reparto de pollitos o aves de corral en el estado de Tabasco; informaran el nombre del proveedor o proveedores con los cuales fueron

Ramos fue el propietario de dicho vehículo, toda vez que en dicha fecha se realizó el movimiento de cambio de propietario del vehículo en comento a favor del C. Israel Armando López Ramón.

²¹ Mediante cédulas de notificación, se hizo constar que las diligencias de notificación de los oficios números INE/JLETAB/VE/0401/2018 e INE/JLETAB/VE/0402/2018 fueron practicadas directamente con las CC. Martha Isabel de la Cruz y Florinda Regil Hernández, respectivamente.

adquiridos; remitieran copia de la documentación soporte que amparara la compra de los pollitos o aves de corral citados; y explicara en qué consistían las funciones que realizaban como “Secretario” y “Encargado de las Gestiones Sociales del PRD” (en relación al C. Eduardo Pérez García), así como como “auxiliar contable “ y “*Coordinador distrital del PRD*” (respecto al C. Miguel Sebastián Méndez Ramírez).

En este contexto, por cuanto hace al C. Eduardo Pérez García, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco notificó por estrados el requerimiento de información al citado ciudadano²², sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta a lo solicitado.

Por otra parte, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Miguel Sebastián Méndez Ramírez, dio respuesta a lo solicitado, manifestando lo siguiente:

- Negó participar en la entrega de aves de corral en el estado de Tabasco.
 - Desconoce el supuesto proveedor con el cual fueron adquiridas las aves de corral, así como el nombre los presuntos beneficiarios.
 - Desconoce la existencia de contratos, facturas, recibos y demás documentación relacionada con la supuesta adquisición de aves de corral, así como el monto y la forma de pago utilizada.
 - Señalo que las funciones que realizó como auxiliar contable en el Partido de la Revolución Democrática son las que de manera genérica realiza cualquier profesional en la contabilidad, negando realizar funciones de “Coordinador distrital del PRD”, ya que dicha figura no existe en el organigrama del citado instituto político.
-
- **“Incubadora Mexicapam, S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco”**

Asimismo, se solicitó a los Representantes y/o Apoderados legales de las personas morales “Incubadora Mexicapam, S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” confirmaran o rectificaran si el Partido de la Revolución Democrática y/o los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, realizaron operaciones con su representada para la compra de pollitos o aves de corral; en su caso, informaran si realizaron una

²² Mediante acta circunstanciada número INE/UTF/TAB/724/2018, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se hizo constar que “... *no se encontró el domicilio señalado en la colonia Miguel Hidalgo al C. Eduardo Pérez García...*”, motivo por el cual se procedió a la notificación del oficio atinente mediante los estrados de la Junta Local Ejecutiva antes mencionada.

aportación o donación de pollitos o aves de corral a los sujetos antes mencionados; informaran en su caso, si sus representadas realizaron directamente o fueron gestoras o intermediarias en la entrega de pollitos o aves de corral referidos e informaran si su representada o los dueños, socios o accionistas eran propietarios del vehículo con placas de circulación VS47966.

En respuesta a lo solicitado, el representante legal de “Incubadora Mexicapam, S.A. de C.V.” informó que ni el Partido de la Revolución Democrática ni los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez realizaron operaciones con su representada para la compra de pollitos o aves de corral; que su representada no realizó ninguna aportación o donación de pollitos o aves de corral a los sujetos antes mencionados; y de igual forma, manifestó que su representada no es propietaria del vehículo con placas de circulación VS-47-966, desconociendo al propietario del mismo.

Por su parte, el Representante legal de “Incubadora del Soconusco” manifestó que su representada no realizó operaciones con el Partido de la Revolución Democrática ni los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez; por lo cual se encontraba imposibilitado para proporcionar la información solicitada; que no se utilizaron vehículos propiedad de su representada para realizar la supuesta entrega de aves de corral; que no se realizó aportación o donación alguna al Partido de la Revolución Democrática ni los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez; ni que su representada realizó directamente o fue intermediaria en la entrega de aves de corral referida.

Programa de materiales de construcción a bajo costo	
Beneficiarios	Aleyda Cruz Palma
	Mario Campos Barahona
Propietarios de vehículos	Mario Campos Barahona
	Roberto Hernández Ramos e Israel Armando López Ramón

- **Aleyda Cruz Palma y Mario Campos Barahona**

De igual forma, esta autoridad formuló solicitudes de información a la C. Aleyda Cruz Palma y al C. Mario Campos Barahona, a efecto de que señalaran si durante los años 2015 o 2016 fueron beneficiarios del programa de materiales de construcción a bajo costo; si el Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado realizaron la entrega de dichos materiales; señalaran los

materiales de construcción que adquirieron, si les fueron entregados de manera gratuita o a bajo costo (especificando el tipo de material de construcción que adquirieron, el monto pagado por cada uno y el monto total); el nombre de los beneficiarios e informaran el vehículo utilizado para realizar la distribución o reparto de los materiales.

Asimismo, al C. Mario Campos Barahona se le requirió de manera adicional informara si su vehículo con placas de circulación o matrícula VS-12-602 fue utilizado para realizar la distribución o reparto de los materiales de construcción.

En respuesta a lo solicitado, la C. Aleyda Cruz Palma informó que no fue apoyada, que solo le pidieron apoyo para grabar un video, desconociendo el nombre de las personas que según fueron apoyadas, así como el vehículo en el cual estaba el material, sin saber o tener conocimiento si habían contratado el mismo para dichos fines.²³

En este contexto, por cuanto hace al C. Mario Campos Barahona, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco notificó el requerimiento de información al citado ciudadano²⁴, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta a lo solicitado.

- **Roberto Hernández Ramos e Israel Armando López Ramón**

Por otro lado, se requirió a los CC. Roberto Hernández Ramos e Israel Armando López Ramón, a efecto de que informaran si durante el año 2015 o 2016 (según sea el caso), el vehículo (camión) con placas de circulación o matrícula VR-03-549 fue utilizado para realizar el transporte o distribución de materiales de construcción; informaran si el Partido de la Revolución Democrática, el C. Candelario Pérez Alvarado o en su caso, especificaran la persona física o moral que solicitó el uso del vehículo; remitieran una relación con el tipo de material que transportó y distribuyó el vehículo, la cantidad de materiales transportados; el lugar y fecha de entrega de los mismos.

²³ Mediante respuesta recibida por correo electrónico el cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, la C. Aleyda Cruz Palma dio contestación a lo solicitado.

²⁴ Mediante acta circunstanciada número INE/UTF/TAB/726/2018, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se hizo constar que una vez constituidos en el domicilio, no se encontró al C. Mario Campos Barahona, por lo que se dejó citatorio con la C. Gladys Méndez Córdoba y al acudir al domicilio nuevamente conforme a lo establecido en el citatorio, no se volvió a encontrar a la persona buscada, por lo que se procedió a dejar copia del oficio respectivo a la C. Gladys Méndez Córdoba.

Al respecto, en relación al C. Roberto Hernández Ramos, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco notificó por estrados el requerimiento de información al citado ciudadano²⁵, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta a lo solicitado.

Asimismo, relativo al C. Israel Armando López Ramón, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco notificó el requerimiento de información al citado ciudadano²⁶, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al mismo.

- **Solicitudes de información**

A efecto de seguir con la investigación de los hechos denunciados y en particular, del contenido de los videos titulados: “*Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.*” y “*Fortalece PRD acciones de desarrollo social*”²⁷, mediante oficio INE/UTF/DRN/1376/2018 **se solicitó a la Dirección de Auditoría** informara si durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, el Comité Ejecutivo Nacional o Comités Directivos Estatales del Partido de la Revolución Democrática realizaron operaciones con “Incubadora Mexicapan, S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” e informara si tenía registro o si había detectado (mediante visitas de verificación, monitoreo, etc.) la utilización de los vehículos con número de placas o matrículas VS-12-602, VR-03-549 y VS-47-966 por parte del citado instituto político para llevar a cabo sus actividades ordinarias, de precampaña o campaña durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis.

²⁵ Mediante acta circunstanciada número INE/TAB/727/18, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se hizo constar que “... *cerciorándome de estar en el domicilio correcto por así constar en la nomenclatura y en el número del inmueble, además de verificar que la calle, número y colonia correspondían al domicilio. No se encontró el C. Roberto Hernández Ramos, por lo que procedí a pegar un citatorio en el domicilio antes mencionado, en el cual indicaba que me presentaría el día 05 de noviembre a las doce horas con treinta minutos para realizar la notificación, por lo que al siguiente día me constituí en el domicilio como especifica el citatorio, sin embargo, no se volvió a encontrar a la persona en el domicilio...*”, motivo por el cual se procedió a la notificación del oficio atinente mediante los estrados de la Junta Local Ejecutiva antes mencionada.

²⁶ Mediante acta circunstanciada número INE/TAB/727/18, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se hizo constar que una vez constituidos en el domicilio, no se encontró al C. Roberto Hernández Ramos, por lo que se fijó el citatorio respectivo en el domicilio y al acudir al domicilio nuevamente conforme a lo establecido en el citatorio, no se volvió a encontrar a la persona buscada, por lo que se procedió a dejar copia del oficio respectivo al C. Andrés López Ramón.

²⁷ Alojados en el canal de nombre “PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco”, en el portal de internet denominado YouTube, de los cuales se levantó razón y constancia, tal y como se dio cuenta en párrafos precedentes de la presente Resolución.

En respuesta a lo solicitado, la citada Dirección de Auditoría informó que derivado del análisis y búsqueda realizada a los archivos correspondientes al gasto ordinario de los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis del Partido de la Revolución Democrática, no se encontró registro alguno relacionado con las personas morales “Incubadora Mexicapam S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco”, y respecto a los vehículos referidos, señaló que no contaba con la información.

De igual forma, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos en el expediente que por esta vía se resuelve, **se solicitó al Gobernador del estado de Tabasco** informara si el Gobierno del estado de Tabasco implementó programas sociales relativos a la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita, para las comunidades del estado de Tabasco, de noviembre de dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis; si dicho Gobierno participó o tuvo conocimiento de algún programa social del gobierno federal, municipal o alguna otra autoridad o en su caso, partido político, para realizar la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita; si se tuvo conocimiento de la realización de dichos programas o actividades por parte del Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado; señalara si los vehículos con número de placas o matrículas VS-12-602, VR-03-549 y VS-47-966, fueron propiedad del Gobierno del estado de Tabasco, durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis; indicara si los CC. Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, fueron trabajadores del Gobierno del estado de Tabasco, durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis; informara si los CC. Martha Isabel de la Cruz, C. Florinda Regil Hernández, Aleyda Cruz Palma y Mario Campos Barahona fueron beneficiarios de los programas sociales implementados; e informara si el Gobierno del estado de Tabasco realizó operaciones con los proveedores “Incubadora Mexicapam S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis.

En respuesta a lo solicitado, mediante oficio número CGAJ/1580/2018, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del estado de Tabasco, dio respuesta a lo solicitado, informando lo que se señala a continuación:

- El Gobierno del estado de Tabasco no implementó programas sociales relativos a la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita en las fechas indicadas.
- Que el Gobierno en mención no participó, ni tuvo conocimiento oficial respecto de algún programa social del gobierno federal, municipal o alguna otra autoridad o partido político, para realizar la entrega de molinos eléctricos,

pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita para las comunidades de Tabasco.

- No se tuvo conocimiento de la realización de dichos programas o actividades por parte del Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado.
- Que los vehículos con número de placas o matrículas VS-12-602, VR-03-549 y VS-47-966 no fueron ni son propiedad del Gobierno del estado de Tabasco.
- Que los CC. Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, no fueron trabajadores del Gobierno del estado de Tabasco, desconociendo si participaron en las actividades referidas.
- Que al no existir un programa social para la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita, se desconoce si los CC. Martha Isabel de la Cruz, C. Florinda Regil Hernández, Aleyda Cruz Palma y Mario Campos Barahona fueron beneficiarios de los mismos.
- Que el Gobierno del estado de Tabasco no realizó operaciones con “Incubadora Mexicapam S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis.

Por otra parte, **se solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática** ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral explicara en qué consistió el programa de aves de corral a bajo costo; si el mismo fue implementado por el C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Diputado Federal, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco; informara en su caso, en qué consistió la gestoría realizada por el Partido de la Revolución Democrática en el programa de aves de corral a bajo costo; señalara si el Partido de la Revolución Democrática era propietario del vehículo con placas de circulación VS-47-966; informara el nombre de los proveedores con los cuales fueron adquiridos los pollitos o aves de corral señalados; indicara si en dicho programa participaron los CC. Eduardo Pérez García, Miguel Sebastián Méndez Ramírez y Miguel Ramos Ramón, así como las funciones realizadas por cada uno en el Partido de la Revolución Democrática.

En atención a la solicitud de información, el citado Representante Propietario informó que el Partido de la Revolución Democrática no tuvo algún grado de participación en el programa de aves de corral a bajo costo; que el citado programa corrió a cargo del C. Candelario Pérez Alvarado, única y exclusivamente en su carácter de Diputado Federal; que no se realizó ninguna clase de gestoría en dicho programa por parte del Partido de la Revolución Democrática; que no tenía

información sobre los vehículos utilizados y que vehículo con placas de circulación VS-47-966 no es propiedad del citado instituto político; que no se tiene conocimiento del nombre del proveedor o proveedores con los cuales fueron adquiridos los pollitos o aves de corral referidos; que se ignora si en el citado programa participaron los CC. Eduardo Pérez García, Miguel Sebastián Méndez Ramírez y Miguel Ramos Ramón; que las funciones que realizaron los ciudadanos antes mencionados fueron las siguientes: el C. Eduardo Pérez García, como secretario de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal; el C. Miguel Sebastián Méndez Ramírez como auxiliar administrativo y el C. Miguel Ramos Ramón como recepcionista, en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, debido a la discapacidad que presentaba.

Con relación a lo estudiado en el presente apartado, a partir de los medios de prueba aportados por el denunciante y los recabados por esta autoridad, soportados con las constancias que obran en el expediente y precisadas en los párrafos que anteceden, valoradas en su conjunto y atendiendo a las reglas de la lógica, se concluye lo siguiente:

- Se denuncia que el C. Candelario Pérez Alvarado, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco y otrora Diputado Federal, realizó la presunta distribución de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción para los habitantes del Municipio de Centla y Bosques de Saloya en el estado de Tabasco, y que una camioneta de redila marca Isuzu, con placas de circulación VS47966, transportaba molinos eléctricos que serían o fueron depositados en un búnker o casa secreta del C. Candelario Pérez Alvarado para que fueran entregados en comunidades del estado de Tabasco.
- Para tratar de acreditar lo anterior, el quejoso aportó las pruebas técnicas consistentes en un video, ocho imágenes extraídas de la red social twitter, una dirección electrónica y una nota periodística.
- El entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, el Representante Propietario de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, negaron que hubieran participado en los hechos denunciados y que la supuesta entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción, no formaron parte de ningún programa o actividad llevada a cabo por el Partido de la Revolución Democrática.

- La Dirección de Auditoría informó que durante el ejercicio dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución Democrática no registró gastos por concepto de molinos eléctricos; pollitos y material de construcción.

Asimismo, informó que derivado del análisis y búsqueda realizada a los archivos correspondientes al gasto ordinario del Partido de la Revolución Democrática de los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis, no se encontró registro alguno relacionado con las personas morales “Incubadora Mexicapam S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco”.

- De la revisión realizada a las operaciones registradas por el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil dieciséis, no se detectaron erogaciones realizadas por los conceptos denunciados por el quejoso.
- De las diligencias realizadas respecto al propietario de una camioneta de redilas marca Isuzu, con placas de circulación VS47966, que presuntamente transportaba molinos eléctricos que serían o fueron depositados en un búnker o casa secreta del C. Candelario Pérez Alvarado, no se pudo localizar al propietario de la misma (C. Miguel Ramos Ramón), no obstante que personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, se dirigió a la dirección proporcionada²⁸; sin embargo, al preguntar por la persona buscada, vecinos del lugar manifestaron que no lo conocían, por lo que fue notificado por estrados.
- De la respuesta proporcionada por el Presidente Municipal de Cárdenas en el estado de Tabasco, informó que el Ayuntamiento no cuenta con algún registro que refiera al conocimiento, realización o participación de actividades llevadas a cabo en beneficio de los pobladores, por parte del C. Candelario Pérez Alvarado y el Partido de la Revolución Democrática, consistentes en la entrega de molinos eléctricos pollitos y materiales para la construcción, de igual forma, se proporcionó una relación de los programas que estuvieron activos en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en el cual no se advirtió un programa similar al denunciado.

²⁸ Se realizaron solicitudes de información al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco, a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, así como al Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, informaron un mismo domicilio del C. Miguel Ramos Ramón, en el cual fue practicada la diligencia de notificación correspondiente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

- Del análisis al informe anual sobre el desempeño de labores correspondiente al primer periodo legislativo del C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Diputado Federal, proporcionado por el Director de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, no se advierte la utilización de recursos para la compra o entrega de molinos eléctricos, pollitos y materiales de construcción para las comunidades del Municipio de Centla y Bosques de Saloya, en el estado de Tabasco.
- Del examen a los estados de cuenta y contratos proporcionados por al CNBV, por las instituciones bancarias: Banco Mercantil del Norte S.A., y HSBC México S.A., a través de la solicitud realizada a la CNBV, no se desprende ningún gasto o pago realizado por el Partido de la Revolución Democrática, ni por el C. Candelario Pérez Alvarado, por la compra o adquisición de molinos eléctricos pollitos y materiales de construcción, ni tampoco se detectaron movimientos realizados con proveedor alguno que brindara los conceptos antes referidos.
- De las respuestas obtenidas por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto y el Coordinador de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, no se advierten denuncias realizadas en contra del Partido de la Revolución Democrática y el C. Candelario Pérez Alvarado, por los hechos materia de investigación y resolución del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización que por esta vía se resuelve.
- El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Coordinador General de Asuntos Jurídicos informó que el Gobierno referido no implementó programas sociales relativos a la entrega de molinos eléctricos, pollitos y material de construcción a bajo costo o de manera gratuita; que no se tuvo conocimiento de la realización de dichos programas o actividades por parte del Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado; que los vehículos con número de placas o matrículas VS-12-602, VR-03-549 y VS-47-966 no fueron ni son propiedad del Gobierno del estado de Tabasco; que los CC. Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez no fueron trabajadores del Gobierno del estado y que no se realizaron operaciones con “Incubadora Mexicapam S.A. de C.V.” e “Incubadora del Soconusco” durante los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB

- De la solicitud de información realizada al C. Miguel Sebastián Méndez Ramírez, dicho ciudadano manifestó que no participó en la entrega de aves de corral en el estado de Tabasco; desconociendo el supuesto proveedor con el cual fueron adquiridas las aves de corral, así como el nombre los presuntos beneficiarios, negando realizar funciones de “Coordinador distrital del PRD”, puesto que realizó funciones de auxiliar contable en el Partido de la Revolución Democrática.
- La C. Aleyda Cruz Palma informó que no fue apoyada con el programa material de construcción a bajo costo, desconociendo el nombre de las personas que según fueron apoyadas, así como el vehículo en el cual estaba el material, sin saber o tener conocimiento si habían contratado el mismo para dichos fines.
- El representante legal de “Incubadora Mexicapam, S.A. de C.V.” informó que ni el Partido de la Revolución Democrática ni los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez realizaron operaciones con su representada para la compra de pollitos o aves de corral; que su representada no realizó ninguna aportación o donación de pollitos o aves de corral a los sujetos antes mencionados; y de igual forma, manifestó que su representada no es propietaria del vehículo con placas de circulación VS-47-966, desconociendo al propietario del mismo.
- El Representante legal de “Incubadora del Soconusco” manifestó que su representada no realizó operaciones con el Partido de la Revolución Democrática, como tampoco con los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez; por lo cual se encontraba imposibilitado para proporcionar la información solicitada; que no se utilizaron vehículos propiedad de su representada para realizar la supuesta entrega de aves de corral; que no se realizó aportación o donación alguna al Partido de la Revolución Democrática ni los CC. Candelario Pérez Alvarado, Miguel Ramos Ramón, Eduardo Pérez García y Miguel Sebastián Méndez Ramírez; ni que su representada realizó directamente o fue intermediaria en la entrega de aves de corral referida.
- De las respuestas proporcionadas a las solicitudes de información, no se desprende prueba alguna al menos de carácter indiciario, que los sujetos

incoados realizaran la presunta compra y distribución de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción para los habitantes del Municipio de Centla, Bosques de Saloya y diversas comunidades en el estado de Tabasco.

- Si bien el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto refiere que el programa de aves de corral a bajo costo corrió a cargo del C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Diputado Federal, esta autoridad no cuenta con elementos o datos que permitan acreditar la existencia de dicho programa, que el mismo fue implementando por el C. Candelario Pérez Alvarado y menos aún, que dicho ciudadano erogara recursos para la compra de aves de corral (pollitos) para ser entregados a diversas comunidades del estado de Tabasco.

Del mismo modo, no pasa desapercibido para esta autoridad que, si bien del escrito de queja se advierte la denuncia por la compra y distribución de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y materiales de construcción, el quejoso realiza dicha manifestación de manera vaga, genérica e imprecisa, toda vez que no señala las calles, avenidas, lugares de referencia y fechas en los cuales fueron entregados.

Lo anterior es así toda vez que, aun y cuando el denunciante refiere que el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, los sujetos incoados realizaron la entrega de molinos eléctricos,²⁹ el elemento circunstancial relativo a la temporalidad, es decir, el momento en que se percató el quejoso de dicha entrega o respecto al día en que fueron entregados presuntamente diversos molinos eléctricos no se cumple, toda vez que, la fecha que señalada por el denunciante, corresponde a la fecha contenida en imágenes extraídas de redes sociales, así como a la fecha de una nota periodística³⁰, lo cual impide a esta autoridad tener la certeza sobre la temporalidad de la supuesta repartición del artículo mencionado.

²⁹ Al respecto, cabe señalar que por cuanto hace a los demás conceptos denunciados consistentes en aves de corral (pollitos) y material de construcción, el quejoso no hace referencia a fecha alguna en la cual supuestamente fueron entregados, pues únicamente en el hecho marcado como 6 del escrito de denuncia, refiere que el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, los sujetos incoados hicieron la entrega de molinos eléctricos en distintas comunidades del Municipio de Centla, estado de Tabasco, sin proporcionar mayores datos o elementos de los conceptos denunciados.

³⁰ Conviene recordar que entre los medios probatorios aportados por el quejoso, se encuentran 8 imágenes extraídas de la cuenta en twitter del PRD en Tabasco, identificada con las siglas @TabascoPRD, con dirección electrónica: <https://twitter.com/tabascoprdr> y la nota periodística con liga electrónica: <http://www.tabascohoy.com/2/notas/291302/activa-prd-la-entrega-de-pollitos-y-molinos>

De igual forma, el denunciante refiere que el reparto de los molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y materiales de construcción se realizó a los habitantes de las comunidades del Municipio de Centla, Bosques de Saloya, sin aportar mayores elementos que permitieran a la autoridad fiscalizadora contar con indicios suficientes para ubicar a las personas de dichas comunidades y el número de éstas que hicieron entrega de dichos conceptos, así como a los ciudadanos beneficiarios de los mismos.

Ahora bien, de los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, cabe señalar que en relación a las pruebas técnicas consistentes en un video titulado: *“Entrega PRD Tabasco molinos eléctricos a bajo costo”*, imágenes extraídas de la red social twitter y una dirección electrónica, referentes a la supuesta entrega de molinos eléctricos en el Municipio de Centla, Tabasco, por parte del Partido de la Revolución Democrática y su entonces Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político en el estado de Tabasco, el C. Candelario Pérez Alvarado, el quejoso no describe, ni de las pruebas se advierte un número aproximado ni determinado de dichos conceptos; no se señala el nombre o datos de las personas que se beneficiaron de dicha repartición, ni se desprenden otros elementos de prueba con los cuales esta autoridad pueda seguir una línea de investigación adicional a la expuesta a lo largo de la presente Resolución.

Asimismo, de la prueba técnica consistente en una nota periodística, se señala que en la red social twitter, el C. Candelario Pérez Alvarado, en su carácter de Diputado Federal y dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, refirió la entrega de pollitos, material de construcción y molinos en Bosques de Saloya y en el Municipio de Centla, Tabasco; sin embargo, no se establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dichos hechos, y de igual forma, la fuente de la nota está basada en redes sociales, es decir, hacen referencia a hechos publicados por terceros, esto es, por medios de comunicación diversos.

Por otra parte, en relación a los videos titulados: *“Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo.”* y *“Fortalece PRD acciones de desarrollo social”* de las respuestas recibidas derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad a presuntos beneficiarios de los citados programas, trabajadores del Partido de la Revolución Democrática y proveedores, éstos manifestaron no ser beneficiarios o participar en dichos programas, ni tampoco proveer las aves de corral o pollitos referidos en uno de los videos en comentario, señalando los presuntos

beneficiarios y proveedores no tener relación alguna con el Partido de la Revolución Democrática y el C. Candelario Pérez Alvarado.

Así las cosas, si bien esta autoridad levantó razones y constancias de las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, con las citadas documentales solamente se dio cuenta sobre la existencia de dichos elementos probatorios, más no aprueba el contenido ni hace ciertas las fechas contenidas en cada una de ellas, pues conforme a su carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen.³¹

De igual forma, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, no es posible desprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron llevados a cabo los actos denunciados, resultando necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar³², lo cual acorde a la investigación realizada durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, no aconteció.

En este contexto, derivado de los hechos denunciados, las pruebas técnicas proporcionadas por el quejoso, así como las líneas de investigación adicionales seguidas por la autoridad fiscalizadora³³, no se desprende programa social, político o algún otro para llevar a cabo la entrega a bajo costo o de manera gratuita de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción en el estado de Tabasco; ni que el Partido de la Revolución Democrática y/o el C. Candelario Pérez Alvarado organizaran, gestionaran, participaran o llevaran a cabo la compra, transporte, distribución y entrega de dichos conceptos; o que los sujetos incoados

³¹ Conforme a lo señalado en la jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: **"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"**, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.

³² Tal como lo establece la jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: **"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR"**, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

³³ Derivado de los videos alojados en un canal de nombre **"PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco"**, en el portal de internet denominado YouTube, titulados: **"Apoya PRD Tabasco a familias con material de construcción a bajo costo."** y **"Fortalece PRD acciones de desarrollo social"** de los cuales se dio cuenta en la presente Resolución.

realizaran movimientos bancarios o efectuaran pagos con persona física o moral alguna que proveyera los conceptos antes referidos³⁴.

De igual forma, no se obtuvieron elementos circunstanciales relativos al modo, tiempo y lugar en que se realizó el presunto reparto de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción en el estado de Tabasco, así como elementos a partir de los cuales se permita conocer el método, modalidad o bajo que sistemática fueron repartidos, así como conocer la calle, colonia, localidad, lugares públicos o privados, o cualquier otro dato que generaran indicios de la ubicación donde se repartieron dichos conceptos, así como la fecha en las cuales acontecieron.

Por lo anterior, no es posible desprender ningún elemento adicional que genere indicios mínimos y suficientes para acreditar la entrega de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción a los habitantes del Municipio de Centla, Bosques de Saloya, así como a diversas comunidades del estado de Tabasco, pues no fue posible acreditar la existencia de los hechos denunciados por el quejoso. En consecuencia, se procedió a la elaboración de esta Resolución. Lo anterior, en atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo

³⁴ Lo anterior, derivado de la revisión realizada por esta autoridad a los estados de cuenta del Partido de la Revolución Democrática y del C. Candelario Pérez Alvarado remitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual fue desarrollado en la presente Resolución.

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Lo anterior permite establecer las razones por las cuales la autoridad fiscalizadora a pesar de contar únicamente con las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, fueron tomadas de forma indiciaria para investigar los hechos denunciados y en su caso, adminicularlas con otros elementos de convicción que surgieran durante el desarrollo de la investigación, sin embargo, del cumulo de diligencias realizadas, así como de las líneas de investigación adicionales seguidas, de ninguna se desprende ni de manera indiciaria la realización de los hechos denunciados, por lo que se acredita que esta Autoridad fue exhaustiva en su actuar dentro del presente apartado.³⁵

Es decir, se considera que la actuación de esta autoridad fue exhaustiva y apegada a Derecho, porque tuvo como punto de partida precisamente, los elementos probatorios inicialmente aportados y aun llevando a cabo diversas diligencias de investigación, no se obtuvieron elementos para concluir que los hechos motivo de la denuncia se habían actualizado.

³⁵ Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia identificada con la clave 12/2001, consultable a fojas trescientas cuarenta y seis a trescientas cuarenta y siete, de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y en materia electoral", tomo "Jurisprudencia" Volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "**EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.** Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo."

En este contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por el quejoso, toda vez que de las actuaciones realizadas no se desprendieron elementos adicionales que permitieran corroborar el dicho del quejoso, esta autoridad considera que realizar mayores requerimientos a los ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado, constitucional ni legalmente.

En este contexto, cabe señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone de relieve el principio que prohíbe excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, de la que no escapa la función investigadora realizada por esta autoridad, toda vez que, si bien el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la autoridad fiscalizadora para investigar lo relacionado a presuntas conductas infractoras a la normatividad electoral, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria realizada carezca de límites.³⁶

De igual forma, el artículo 468, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la facultad de investigación para el conocimiento cierto de los hechos que se denuncian ante este Instituto, debe realizarse de manera seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.³⁷

Al respecto, cabe citar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-011/2002, en el que consideró lo siguiente:

³⁶ Lo anterior, guarda relación con la jurisprudencia 63/2002, con rubro: "**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS GOBERNADOS**", emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual, dicho órgano jurisdiccional estableció con respecto a que las amplias facultades con que cuenta el Instituto Federal Electoral para investigar y allegarse oficiosamente elementos de prueba en los procedimientos administrativos sancionadores, se encuentran limitadas por los derechos fundamentales de la persona consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derechos que deben ser respetados por toda autoridad quien, por mandato constitucional, tiene la obligación de fundar y motivar las determinaciones en las que se requiera causar una molestia a los gobernados, porque la restricción eventual permitida de los derechos constitucionales debe ser la excepción, y por esta razón, resulta necesario expresar los hechos que justifiquen su restricción.

³⁷ Dicho criterio es acorde lo establecido por el la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-349/2018, al establecer que, en la función investigadora realizada por la autoridad, ésta debe observar ciertos criterios básicos en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

“(…)

Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial cuidado en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su caso, serán objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean investigadas, así como el tiempo que permanecerá la afectación, pues de no ser así se correría el riesgo de cometer un exceso o abuso en la investigación de los hechos materia de la queja; así, se impedirá aplicar sobre terceros (respecto de quienes no se tiene indicio o principio de prueba alguno en relación con los hechos denunciados), medidas de considerable afectación, en tanto que no existen motivos racionalmente suficientes para tener una mínima convicción sobre la probabilidad o verosimilitud en su participación en los hechos que dieron origen a la queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración para el esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente ponderado el éxito previsible de la medida en la consecución del fin probatorio que se pretende, y que las molestias que se les infieran sean las mínimas posibles.

La **idoneidad** también hace relación con la intencionalidad o actitud que la autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su realización habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el conocimiento de la verdad objetiva por encima de prejuicios o hipótesis preconcebidas, descontando la intención de perjudicar o beneficiar a alguien.

Dicha característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien encarna a la autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar la información, si lo hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más allá de los objetivamente necesarios; así como la previsión del manejo que hará con el resultado de tales investigaciones, utilizándolo exclusivamente en lo que contribuya a esclarecer el asunto y devolviendo, en su momento, lo que estime inconducente, o bien, vedando el conocimiento a terceros, respecto de los informes o documentación de los que manifiestamente no se pueda obtener elementos para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Por lo que toca al criterio de **necesidad**, también llamado por la doctrina, de manera uniforme, como de intervención mínima, tiene como finalidad que, ante la posibilidad de llevar a cabo varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, que afectaran en alguna medida los derechos fundamentales de personas relacionadas con los hechos denunciados, se elija la medida que los afecte en menor grado, con lo cual se disminuye la molestia originada por la intromisión de la autoridad investigadora en la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos.

Llega a ser indispensable que por el criterio de **proporcionalidad** en el procedimiento administrativo, la autoridad pondere los valores e intereses

*constitucionalmente protegidos, según las circunstancias del caso concreto, conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los intereses individuales de una persona física o moral, guarda una relación razonable con la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, de tal suerte que si una actuación determinada comporta una excesiva afectación, pudiera considerarse inadmisibile.
(...)”*

[Énfasis añadido]

Así, se debe guardar consistencia con los criterios de **prohibición de excesos o abusos, idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad**, en virtud de que la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas que generen si quiera indicios respecto de lo que se denuncia, procurando tomar las determinaciones que en el menor grado afecten los derechos de las personas vinculadas con los hechos denunciados.³⁸

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir sentencia dentro del expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-349/2018, estableció que en caso de que el resultado de investigaciones realizadas no arroje la verificación de hecho alguno, o bien, no se generen nuevos indicios relacionados con la materia de la queja (como en el caso que nos ocupa), se justificará que esta autoridad no instrumente nuevas medidas orientadas a generar principios de prueba en relación con esos u otros hechos, porque la base de su actuación radica en la existencia de indicios derivados de los elementos probatorios inicialmente aportados, así como de la existencia de las personas y cosas relacionadas con éstos; y que tal como quedó establecido en párrafos precedentes, con las diligencias instrumentadas a partir de las pruebas técnicas aportadas en el escrito de queja, no fue posible acreditar la existencia de los hechos denunciados, ni tampoco se desprendieron mayores elementos o indicios sobre los mismos.

Debe señalarse que, si bien no pasa desapercibido que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos

³⁸ Sobre ese punto, se debe mencionar que en la tesis de jurisprudencia publicada en la Compilación 1997-2012 “Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”, Volumen 1, páginas 501 y 502, con el rubro “**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD**”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que en la función investigadora la autoridad debe observar ciertos criterios básicos en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. No obstante lo anterior, esta Autoridad en aras de ser exhaustiva, realizó sendas diligencias con la finalidad de llegar a la verdad material respecto de los hechos denunciados, sin obtener ningún indicio que permitiera concatenar las pruebas técnicas que a manera de indicio proporcionó el quejoso.

Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a continuación se transcribe para mayor referencia:³⁹

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido de la Revolución Democrática y el Candelario Pérez Alvarado, entonces candidato a Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, vulneraran lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 72, 78, numeral 1, inciso b) y 80, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización y los artículos 442, numeral 1, inciso a) y 443, numeral

³⁹ Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.

1, inciso i) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, motivo por el cual, el procedimiento de mérito se declara como **infundado**.

4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a) y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento oficioso instaurado en contra del **Partido de la Revolución Democrática**, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

TERCERO. Notifíquese a los interesados.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL C. CANDELARIO PÉREZ ALVARADO, OTRORA PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones por las que no comparto las consideraciones contenidas en la Resolución aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo General, lo anterior al declararse infundado el procedimiento respecto de los gastos no reportados en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016, así como el gastos sin objeto partidista que fueron denunciados.

Litis

En el procedimiento de mérito se denunció del PRD y el C. Candelario Pérez Alvarado, otrora Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Tabasco, los gastos no reportados en el Informe Anual correspondientes al ejercicio 2016, así como los gastos sin objeto partidista, por la entrega de aves de corral (pollitos), material de construcción y molinos eléctricos a bajo costo.

Motivo del disenso

No se comparte lo razonado y aprobado por la mayoría de los integrantes de este Consejo General, respecto que los hechos denunciados fueron soportados en pruebas técnicas de los cuales no es posible desprender ningún elemento adicional que genere indicios mínimos y suficientes para acreditar la entrega de molinos eléctricos, aves de corral (pollitos) y material de construcción a los habitantes del Municipio de Centla, Bosques de Saloya, así como a diversas comunidades del Estado de Tabasco, pues se concluye que no fue posible acreditar la existencia de los hechos denunciados por el quejoso.

Concepto de la prueba.¹

La prueba definida por Ángel Martínez Pineda se debe entender como el *"...examen y exactitud, argumento y demostración, operación mental que confirma y justifica, razonamiento que funda la verdad de una proposición que exige la evidencia que el teorema reclama y necesita (...). Es esencialmente indestructible, porque se funda en premisas que dan firmeza y solidez al silogismo, al manejarse con maestría el argumento y disparar certeramente las baterías de la fuerza dialéctica."*

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales, conceptualiza a la prueba conforme a lo siguiente:

Artículo 206.- Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro medio de prueba, establecer su autenticidad

Pruebas indiciarias.

Al respecto, se tiene que estas nacen a partir de sospechas y que se conceptualiza como *"Según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, se apreciará el valor de los indicios."*²

Asimismo, el *"...indicio suple la falta de prueba histórica y muchas veces es el único medio para conocer la verdad de un hecho delictivo..."*³

En este sentido la "prueba" es concebida en sentido estricto y amplio, primero cuando se le trata para la obtención o determinación del juzgador acerca de los hechos, discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulta necesario para la resolución del conflicto sometido a su análisis.

¹

<https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo%20LA%20PRUEBA%20EN%20EL%20SISTEMA%20ACUSATORIO%20%28Mag.%20Aguilar%29%20Modulo%20VII.pdf>

² Benavente, H / Pastrana, J.D. El Juicio Oral Penal, Técnica y Estrategias de Litigación Oral (Serie Nuevo Sistema Procesal Acusatorio). Flores Editor. 2009. Pág. 219.

³ Barragán, C. Derecho Procesal Penal. Mc Graw Hill. México. 2004. Pág. 483.



Sin embargo, también forma parte de la verdad que los sujetos en un proceso pretenden probar sobre los hechos controvertidos, por lo cual se denomina "prueba" a los medios, instrumentos y conductas humanas con las cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho.

Así las cosas, las pruebas constituyen un elemento necesario para convencer al juzgador de la existencia o no de hechos que se litigan en un proceso, esto es una idea que denota necesidad ineludible de demostración, verificación o investigación de la verdad de aquello que se ha afirmado durante un procedimiento.

Valoración de pruebas técnicas.

Al respecto, sostengo que esta autoridad atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad, respecto de las pruebas técnicas que fueron aportadas en el presente procedimiento y, en general, en todos los procedimientos que conozca esta autoridad, debe partir de la base que cuando no hay prueba directa del hecho que precisa ser analizada su existencia, pero que de la investigación que se realiza se puede concatenar con otros hechos o elementos que, analizados en su conjunto, nos podrían llevar a la conclusión de la acreditación del hecho sujeto a análisis.

En este contexto, es mi convicción que deben considerarse como válidas y suficientes las pruebas técnicas para acreditar los hechos que se denuncian o investigan y, por tanto, para declarar fundado un procedimiento, como es el caso, cuando el análisis integral de los elementos de pruebas y los recabados por esta autoridad de forma natural y lógica permitan una pluralidad y variedad de elementos que permitan demostrar la existencia del hecho que se pretende probar, máxime cuando estos elementos guardan estrecha relación con el hecho en discusión.

Asimismo, estimo que en las resoluciones de este Consejo General debe observarse que el análisis de las pruebas técnicas solamente puede emplearse cuando con las pruebas presentadas no es posible probar un elemento real del cual derive la responsabilidad del sujeto investigado o, cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente, debido a lo cual se requiere que el análisis jurídico de esta autoridad esté sustentada de forma adecuada mediante un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente las sanciones en los procedimientos que se resuelven.

Al respecto, considero que resultan orientadoras la Jurisprudencia y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros señalan lo siguiente: "PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD."⁴ y "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES."⁵

En razón de lo anterior y, contrario a las consideraciones contenidas en la resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales, estimo que en la valoración adminiculada de pruebas técnicas aportadas por el quejoso debieron analizarse los elementos siguientes:

- Las certificaciones realizadas por la UTF en la red social Facebook, respecto de diversas publicaciones (05 fotografías y 1 video) en las que se hace referencia a la entrega de molinos eléctricos y material para construcción a la población de las comunidades del Municipio de Centla y Bosques de Saloya, Tabasco, en los mismos elementos se identifica al C. Candelario Pérez Alvarado como dirigente estatal del partido como participante, al PRD como su promotor, se hace referencia a "Otro programa social del PRD Tabasco" y la actividad realizada, esto es la entrega de los bienes denunciados.
- Asimismo las certificaciones de la red social YouTube, en el canal de nombre "PRD, Comité Ejecutivo Estatal Tabasco", en el cual se identificaron 03 videos en los que se señala al C. Candelario Pérez Alvarado como dirigente estatal del partido como participante, quien además hace el señalamiento que es un programa del PRD en Tabasco, al PRD como su promotor, pues se aprecian diversas imágenes del partido y está contenido en el mismo canal que administra el partido y se contiene testimonios de las personas beneficiadas en la entrega de los bienes denunciados.
- La manifestación libre y voluntaria del Representante Propietario del PRD ante el Consejo General del Instituto, quien señaló al contestar un requerimiento a la UTF, que el programa de aves de corral a bajo costo corrió a cargo del C. Candelario Pérez Alvarado, única y exclusivamente en su carácter de Diputado Federal.

⁴ Registro No. 166 315. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pág. 2982. I.Io.P. J/19.

⁵ Registro No. 2 004 757. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013; Tomo 2; Pág. 1058. 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.).

No debe pasarse por alto, que a la par de las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, la propia UTF generó razones y constancias que validaron los hechos denunciados y que, por su propia naturaleza, constituyen documentales públicas y hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, lo cual además fue corroborado por propio el representante del partido denunciado quien aceptó alguno de los hechos.

En suma, se considera que existían los elementos suficientes para determinar fundado el procedimiento, toda vez que fueron acreditados los hechos que tenían como base un indicio; existe una pluralidad de elementos con los cuales se ratificaron dichos indicios; se confirmó la concordancia de los hechos con los diversos elementos recabados en el procedimiento que ratifican los indicios proporcionados por el quejo, lo que da fuerza o eficacia para acreditar la afirmación presumida; es por ello que considero que el razonamiento en función del nexo causal debió realizarse tomando como base la identificación del vínculo entre el hecho denunciado y lo probado atendiendo a la reglas de la lógica.

Por las razones expresadas no acompaño las consideraciones contenidas en la Resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales.



JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 19.4, que fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra. ____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente. _____

En este caso estamos ante un procedimiento que deriva de una denuncia porque una Coalición y su candidato omitieron reportar gastos por conceptos de lonas, espectaculares, publicidad impresa, así como gastos derivados de distintos eventos llevados a cabo en un Municipio en Chihuahua por parte del candidato denunciado. ____
En este caso, estoy parcialmente de acuerdo con el Proyecto de Resolución, pediría un conjunto de votaciones diferenciadas tal cual lo señalé en la Comisión de Fiscalización. _____

En primer lugar señalar, me parece que es inadecuado, no cumple el Proyecto de Resolución con un principio de exhaustividad, porque hay lonas que tenemos acreditadas en el Proyecto de Resolución y que no son valoradas, que no encuentran un cruce con la información que está alojada en el Sistema Integral de Fiscalización. Por lo que me parece que tendrían que ser analizadas y a partir del análisis considerarse gastos no reportados. _____

En ese punto por lo que hace a las lonas que se valoraron, me separaría del Proyecto de Resolución. _____

Por otra parte en este Proyecto tenemos una circunstancia que creo que es positiva y, sin embargo, no estamos aprovechando, es positivo porque ante la denuncia del conjunto de eventos y de gastos asociados a esos eventos la Unidad Técnica de Fiscalización decidió solicitar que se elaboraran un conjunto de cuestionarios a las

personas que vivían, trabajaban, eran locatarias o transeúntes en los lugares donde se llevaron a cabo los eventos. _____

Esto me parece que es una buena práctica por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización y que debe de ser aprovechada precisamente para poder tener información cuando no pudimos hacer una visita de verificación respecto de determinados eventos. _____

Donde me separo no es en la realización de los cuestionarios, sino en la forma como se está valorando el resultado de estos cuestionarios, específicamente se denunció que se habían entregado alimentos, que se habían entregado aguas, que habían pagado transporte para llegar al evento. _____

No obstante que tenemos un conjunto de ciudadanas y ciudadanos a los que les preguntamos, que nos contestan que dan cuenta que sí se les entregaron bebidas, en particular varios de ellos señalan que se les dieron aguas, señalan que les dieron alimentos. Ahí sí puede haber más dispersión sobre qué significó el concepto alimentos. _____

Y varios que también nos dan cuenta que sí hubieron gastos en transporte, lo que se dice es que no tenemos circunstancias suficientes, porque no tenemos otros elementos con qué concatenar esta información que nos dieron. Por lo que no hay elementos para acreditar los gastos. _____

¿Qué no teníamos más elementos para acreditar estos gastos? Lo sabíamos desde que acudimos a hacer los cuestionarios, la cuestión es cómo formulamos el cuestionario y qué valoración hacemos en torno a las respuestas que tenemos de estos cuestionarios. _____

En ese sentido, me separaría de las valoraciones en torno a los cuestionarios, me parece que no es exhaustiva la valoración. _____

Y, por último, pediría una votación diferenciada por lo que hace a los criterios de sanción, al monto de reducción de ministraciones del 25 por ciento y a la matriz de precios que se emplea en este Proyecto de Resolución. _____

Pediría este conjunto de votaciones en lo particular, por favor. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

De manera muy breve voy a pedir que se vote por separado el tema de la matriz de precios, porque no estoy de acuerdo con los parámetros que se han seguido, es un tema que ya también ha sido muy explorado, que no quiero abundar en ello, y sí separarlo de las otras votaciones que pide la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, porque en las otras votaciones he votado conforme a la propuesta del Proyecto de Resolución. Por favor, nada más pediría que la matriz de precios se vote por separado. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Esta es una queja que por gastos de campaña no reportados y el procedimiento se estima parcialmente fundado por lo que concierne a eventos, particularmente a gastos relacionados con grupos musicales, templete y equipos de sonido. _____

En otros aspectos, otros conceptos de gasto que fueron también materia de la queja, se determinó que no había suficientes elementos como para declararlos fundados. La Unidad Técnica de Fiscalización, como lo comentó la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, respecto a los gastos relacionados con la entrega de comida,

bebidas, contratación de transporte, etcétera; lo que hizo fue una encuesta o recabar la opinión de un grupo de personas, porque no sabemos qué tan representativas estas personas sean de la totalidad que asistieron, por lo que concierne a los 4 eventos y algunas de ellas dijeron, por ejemplo, haber recibido comida aunque la gran mayoría de las personas entrevistadas no dijeron, no confirmaron haber recibido comida o bebida, o tampoco transporte. _____

Entonces, lo que hace el criterio seguido es: si la gran mayoría te está diciendo que no recibieron esto, entonces, toma la declaración de la mayoría; estamos hablando en casos de 80, 90 o más del 90 por ciento de los entrevistados que te están diciendo que, te están dando una información distinta a la que proporciona el quejoso. Entonces, el criterio que propuso la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión y que la Comisión validó fue, si la gran mayoría te dice que no recibieron comida, bebida, transporte, pues entonces no tenemos elementos para declararlo fundado por lo que concierne a estos gastos no reportados. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Si no hay más intervenciones, procedamos con la votación, Secretario del Consejo. ____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: A partir de las intervenciones de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, al igual que la Consejera Electoral Claudia Zavala, les propongo una votación en lo general y luego en lo particular 2: una por lo que hace a la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por la forma de evaluar los resultados de los cuestionarios y el monto de la reducción; y otra que involucra a las 2, en donde entiendo que es en el mismo sentido por lo que hace a la matriz de precios. _____

¿Estoy en lo correcto? _____

Hay una tercera ¿cierto? _____

La valoración de gastos no reportados, la primera; la segunda, la forma de evaluar los resultados de los cuestionarios, ¿estoy bien? _____

La tercera, por lo que hace al monto de la reducción, y lonas, lonas y bardas, no valoradas, perdón. _____

Creo que, de estas 4 de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín podrían ir en una sola votación en lo particular, y luego a parte por lo que hace a la matriz de precios para considerar también la opinión de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 19.4, excluyendo como ya lo mencioné de esta votación en general las 4 propuestas de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, al igual que lo que hace a la matriz de precios. _____

Los que estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular las 4 observaciones que hizo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que tiene que ver con la no valoración de gastos no reportados, la forma de evaluar los resultados de los

cuestionarios, el monto de la reducción, y por lo que se refiere a lonas no valoradas, primero en el sentido del Proyecto de Resolución, como viene el Proyecto. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

9 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere a la matriz de precios, como viene el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. _____

8 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1490/2018) Pto. 19.4 _____

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR CHIHUAHUA AL FRENTE”, INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO EN CONTRA DE SU ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI, EL C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

G L O S A R I O

Comisión	Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dirección de Auditoría INE	Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. Instituto Nacional Electoral.
Ley de Instituciones	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos.
Ismael Pérez	El C. Ismael Pérez Pavía, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Meoqui, postulado por la

	otrora coalición “Por Chihuahua al Frente”, integrada por los el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.
PAN	Partido Acción Nacional.
MC	Movimiento Ciudadano.
Coalición	La otrora coalición “Por Chihuahua al Frente”, integrada por los el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.
Reglamento de Procedimientos UTF y/o Unidad Técnica	Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Unidad Técnica de Fiscalización.
SIF	Sistema Integral de Fiscalización.
Junta Local	Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua.
ID-INE	Número de identificador único del espectacular, proporcionado por el Instituto Nacional Electoral al proveedor del espectacular mediante el Registro Nacional de Proveedores

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica, recibió el escrito de queja signado por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Ing. Arturo Meraz González, por medio del cual remitió el Acuerdo de diez de julio del presente año, mismo que en el Resolutivo Segundo, ordenó dar vista a esta Unidad Técnica del escrito de queja suscrito por el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz, en contra de la Coalición, así como en contra de Ismael Pérez, por hechos que podrían construir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua. (Fojas 07-17 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso:

“(…)

C. RAMÓN OCTAVIO LERMA SÁENZ, mexicano mayor de edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Agustín Melgar No. 501, Barrio Nuevo, Cd. Meoqui, Chihuahua, en calidad de Representante como Candidato del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esta Asamblea Municipal, acudo a solicitar respetuosamente. Sirva este escrito para solicitar formalmente a esta Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, la revisión y Auditoría con respecto al tope de campaña de la elección de Ayuntamiento de nuestro municipio en específico al candidato y a los partidos políticos que conformaron la coalición Por Chihuahua al Frente (sic) Ismael Pérez Pavía y Partido Acción Nacional y Partido Movimiento Ciudadano respectivamente.

Sirva este escrito para solicitar formalmente a esta Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, la revisión y Auditoría con respecto del tope de campaña de la elección de Ayuntamiento de nuestro municipio en específico al candidato y a los partidos políticos que conformaron la coalición Por Chihuahua al Frente Ismael Pérez Pavía y Partido Acción Nacional y Partido Movimiento Ciudadano respectivamente.

Lo anterior con fundamento en el Art. 28 numeral 8); Art 31 num 1) en sus incisos a), b), c), d), e), f), j), n) y o); Art. 35 un sus apartados 1), 2), y 3); Art 37 en su apartado 1) inciso c) en los numerales I,II y III además apartados 2) y 3); Art. 38 en su apartado 1) en sus incisos a), b), c), d), e), f) en sus numerales I, II, III y IV y g); Art. 118 en sus apartados 1) y 2) en sus incisos a), b), c) y d); Art. 119 en su apartado I) inciso a) y apartado III.

Lo anterior sustentado ante los anexos que a continuación se presentan (sic)



Ubicada en Ave. Álvaro Obregón sin número salida a Julimes, colonia Lázaro Cárdenas c.p.33131 entre calles José de la Luz Blanco y Canal revestido de riego,



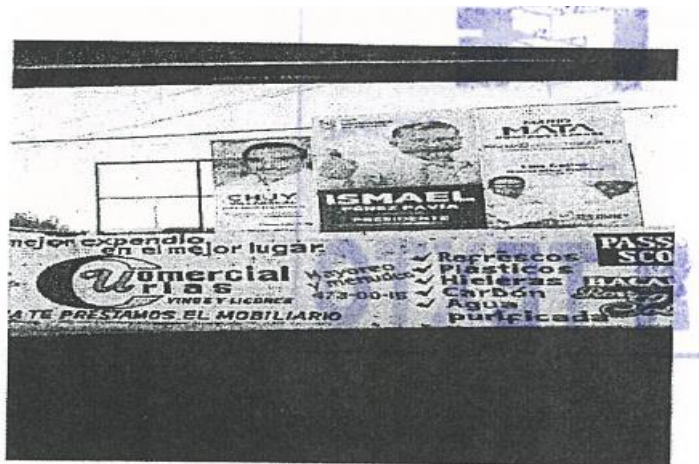
Ubicada en C. Doblado y Boulevard los Pelicanos entre calles Álamo y Río san Pedro entrada sur de la cabecera municipal.



Ubicada en calle Emilio Vázquez Gómez sin número frente a gasolinera del centro colonia Lázaro Cárdenas 33131 entre calles 5 de Mayo y Álvaro Obregón.



Ubicada en negocio HR frente a la plaza principal de Lázaro Cárdenas a un costado de Autobuses Rápidos Delicias cp. 33131



Ubicada en C. Pascual Orosco sin número al final de la calle 2 de abril cerca de Estadio de Beisbol General Pedro Meoqui entre calles 2 de Abril y Priv. 2 de Abril.



C. de Mayo sin número entre calles Emilio Vázquez Gomes y cjon (sic) 7 de junio col. Lázaro Cardenas cp. 33131



Ubicada en C. Leona Vicario sin número entre calles Ferrocarril y Eduardo Gomes al cruce de las vías ferroviarias col centro 33130 cabecera municipal.



Ubicada en calle Ferrocarril y Degollado en negocio Desponchadora el Trake cerca de gasolinera en carretera Meoqui-Julimes col. Centro cp. 33130



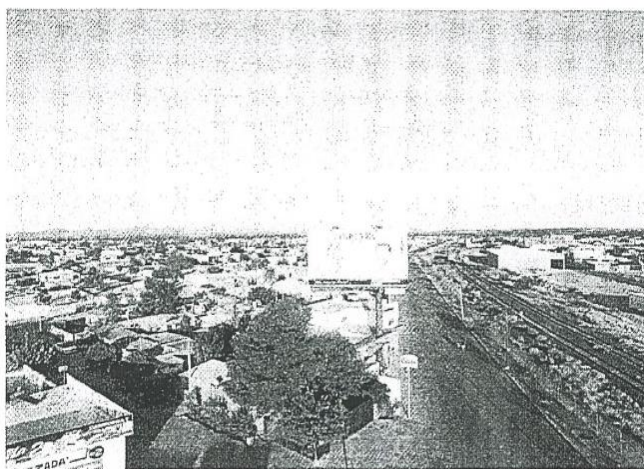
Ubicada en calle Meoqui sin número entre Ave. Hidalgo y c. Aldama centro Meoqui cp. 33130 frente presidencia municipal.



Ubicada en C. Aldama sin número entre vías ferroviarias y gasolinera cp. 33130 con registro ante el INE RNP 000000179213.



Ubicada en C. Porfirio Díaz y C. Ocampo col. Centro Meoqui 33130 espectacular del negocio Comercial Urías con registro ante el INE RNP 000000158414



Ubicada en C. Eulalio Gómez y C. Matamoros sin número cp. 33130 col Villezcas espectacular del negocio Comercial Urías con registro ante el INE RNP 000000178540

Cabe mencionar que además de las lonas fue la elaboración de los bastidores de metal y la renta de los espacios donde fueron instalados cada uno de los espectaculares.



Publicidad con la que inicio en su campaña con una reproducción estimada de 50,000 ejemplares de cada uno, algunos a media carta y otros a doble carta por ambos lados. Cabe dejar en claro que durante el transcurso de la campaña se modificaron varios otros ejemplares diferentes con una cantidad aproximada de 50,000 ejemplares.

Otro de los eventos que gastó bastante recurso económico fue al inicio y cierre de campaña con varios eventos (sic).



Al inicio de su campaña tuvo a bien arrancar con un grupo musical denominado Frenética Sonora Dinamita que al no ser local se cotizan cerca de los \$100,000 pesos más el espectacular del fondo que no se contemplan en las lonas antes mencionadas.



Para el cierre de campaña tuvo a bien realizar tres en lugares distintos dentro del municipio, con diversos grupos cotizados en los seccionales dentro de los \$20,000 pesos cada uno solo el grupo más lo demás relativo que se acostumbra a dar durante el cierre para la imagen anterior fue en la cabecera municipal en la cual se presentaron Banda La Ruca la cual está estimada en un cobro de \$4,500 pesos por la hora presentada y Tropicalísimo Apache con un costo por su participación de \$150,000 pesos.

Además de que se obsequió a cada asistente un platillo de comida de valor aproximado de \$60 pesos cada uno por un total de 1,500 personas dando un total de \$90,000 pesos.

Se contrataron 8 camiones para el traslado o acarreo al evento de las comunidades al lugar del evento con un costo por camión de \$1,800 pesos cada uno informando el encargado de los camiones que laboran para los transportes Ortiz-Delicias.

Sin más por el momento y sabiendo de antemano que el instituto tiene herramientas para medir los costos de cada una de las lonas, así como cada uno de los trípticos quedo a disposición de lo establecido en los Artículos antes mencionados en este documento.

(...)"

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó admitir el escrito de queja aludido y, en consecuencia, dar inicio al procedimiento administrativo sancionador identificado con el número **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**; además, ordenó notificar la

recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General, así como al Consejero Presidente de la Comisión y, por último, notificar y emplazar a los sujetos denunciados del procedimiento. (Foja 18 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH.

a) El seis de julio de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en los estrados en el edificio “C”, planta baja, de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja número **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**, así como la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 20 del expediente).

b) El primero de agosto del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo del procedimiento de queja número **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**, así como la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 21 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral Presidente de la Comisión. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/41977/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**. (Fojas 26-27 del expediente).

VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/41976/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo General, el inicio del procedimiento administrativo sancionador identificado con el número expediente **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**. (Foja 28 del expediente).

VII.- Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al quejoso. Mediante el oficio INE/JLE/2191/2018, de fecha de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta Local informó al quejoso, el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz, el inicio del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente **INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH**. (Foja 132 - 138 del expediente).

VIII. Emplazamiento a los sujetos Denunciados.

a) **PAN.** Mediante el oficio INE/UTF/DRN/41979/2018, de nueve de agosto del año en curso, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario del PAN ante el Consejo General, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el

emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera la pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 29-30 del expediente).

Al respecto, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Representante del PAN ante el Consejo General, el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/41979/2018, el cual de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el PAN. (Fojas 62-76 del expediente)

“(…)

HECHOS

Señalo que **NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS**, que señala la parte actora, ya que será esta quien deberá probar todos y cada uno de los hechos mencionados en su escrito inicial.

CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES DE DERECHO Y PRETENSIÓN DEL DENUNCIANTE.

PRIMERO. Respecto de los hechos que señala el denunciante, es que me permito desglosar de manera pormenorizada a los agravios identificados, así como a dar contestación a los mismos, por lo que de un análisis de los mismos **NIEGO TODOS Y CADA UNO DE ELLOS**, en virtud que **ninguno de los señalados es un hecho propio** del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA o del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL por lo que las infracciones son indebidamente imputadas a mi persona. Ahora bien, por lo que respecta al DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, el mismo ya fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 6 de agosto del año en curso, el cual fue notificado el día 9 de agosto y venció el día lunes 13 de agosto, no fue impugnado en tiempo y forma por la parte quejosa.

En este sentido, se afirma categóricamente que no se ha incurrido en omisión de reportar los ingresos y egresos efectuados en la campaña de la Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, y mucho menos se ha incurrido en algún tipo de rebase de topes de gastos de campaña.

En este sentido, se informa a esa autoridad fiscalizadora, que todos y cada uno de los gastos efectuados en la campaña de C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA, candidato de la Coalición “Por Chihuahua al Frente”, se encuentra debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”. Por ello, no debe de pasar por alto de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el quejoso es completamente impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubica (sic) en modo, tiempo y lugar. Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los hechos señalados y del estudio del expediente en mención se desprende que no se encuentra ubica en modo, tiempo, lugar.

*Lo anterior, es acorde al principio general de Derecho “**el que afirma está obligado a probar**”, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.*

Por lo que principio (sic), corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada, es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

*Por otra parte, el actor **solicita una revisión y auditoria con respecto al tope de gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía**, candidato a la Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, en primer lugar, es oportuno mencionar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación actividad que arroja hechos probadas en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declarados por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por Unidad de Fiscalización.*

Por lo que, en razón de lo antes expuesto, es precisar señalar que el pasado 6 de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado en el cual se determinaron las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña, identificado como INE/CG1108/2018, y derivado de dicho Dictamen la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (PARTIDOS POLÍTICOS INDEPENDIENTES), identificada como INE/CG1109/2018, y de la cual se desprende que la campaña del C. Ismael Pérez Pavía se encuentra ajustada a la normatividad en materia de fiscalización, y por lo tanto no existe una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

Por lo que para acreditar lo anterior, se adjuntaran al presente escrito como pruebas las relativas a la identificación en la contabilidad del sujeto obligado, respecto de las fotografías anexadas por el quejoso en su escrito inicial.

Por otra parte, el acto menciona que existió una reproducción estimada de 50,000 ejemplares de volantes para la campaña de la Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, por lo que, si atendemos a la densidad de la población del citado municipio, se puede observar claramente que son cifras que para nada coinciden con la realidad.

En tal consecuencia los argumentos del incoante deben declararse infundados.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS

El denunciante al intentar demostrar con su dicho con simples fotografías, así como en notas periodísticas de diferentes medios de comunicación, con sus consideraciones expuestas en ningún momento demuestra su dicho ya que al tener la carga de la prueba él debe acreditar sus afirmaciones.

De lo anterior se puede apreciar que la prueba técnica a la que la parte actora pretende que se le brinde valor probatorio, carece de los elementos mínimos

para causar convicción en el juzgador, y que por la naturaleza de la queja que se presenta, también el actor debe señalar donde se pueden encontrar los caudales probatorios que pueden demostrar su dicho, sin olvidar que de conformidad con lo dispuesto en las leyes electorales en las que todas son acordes respecto de la carga de la prueba, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que señala respecto a la carga de la prueba señala que:

Artículo 15

1. (...)

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

*El anterior precepto afirma que por lo que respecta a la pretensión del actor, **al solicitar una revisión y auditoría con respecto al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Chihuahua**, dicha aseveración carece de la debida carga probatoria ya que del análisis de las fotografías que obran en el escrito presentado por el quejoso, los mismos no cuentan con la fuerza probatoria con la que pretenda demostrar su dicho, por lo que ninguna manera se demuestran las presuntas infracciones a la **normatividad electoral en materia de fiscalización**, por parte del **C. Ismael Pérez Pavía**, así como por el Partido Acción Nacional.*

En otro tenor, cabe precisar que el actor no adjunta ningún medio de convicción a su dicho, es decir, señala que los actos de los que se duele se basan en simples fotografías, sin que del estudio del expediente en comento se desprenda certificación por parte de la Autoridad Electoral.

(...)

Al tratarse de hechos negados por parte del que suscribe, no corresponde acreditar hechos negativos con pruebas, sino que el denunciante es quien tiene la carga de la prueba.

Por ende, al examinar los hechos denunciados y las constancias que obran en el expediente con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia,

se debe arribar a la conclusión de que no existen las supuestas conductas infractoras.

Dichas pruebas no demuestran los actos que se le atribuyen a mi representado, ya que son fácilmente alterables por lo que incluso el actor podría haber realizado la manipulación de los mismos.

De igual forma no existe una prueba fehaciente de la existencia de los actos que se denuncian, pues no existe una certificación de autoridad alguna que haga constar su existencia.

Por lo que la autoridad deberá realizar una valoración exhaustiva de la prueba aportada por el denunciante con base en que la impresión que se acompaña de las imágenes, las cuales no reúnen los elementos mínimos para darle valor probatorio alguno.

Además de que del análisis del Dictamen Consolidado en materia de fiscalización se desprende la inexistencia de la conducta que indebidamente se pretende atribuir al C. Ismael Pérez Pavía.

*Por los motivos y fundamentos expuestos, se solicita respetuosamente se declare la **INEXISTENCIA**, de las infracciones, materia de este procedimiento.*

PRUEBAS:

1. Documental técnica, consistente en Disco Compacto el cual contiene copia de la relación de los espectaculares, lonas, pendones, etc., así como facturas reportadas en la contabilidad de los gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía.

2. La Presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los intereses de mi representado.

3. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones que obren en el presente asunto, y que benefician a mi representado.

(...)"

b) MC. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41978/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario de MC ante el Consejo General, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera la pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 31-32 del expediente).

Sobre el particular, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Representante de MC, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/41978/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por MC. (Fojas 37-45 del expediente)

“(…)

Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/41978/2018, del nueve de agosto de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el día catorce del mismo mes y año, por medio del cual solicita que un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba la pruebas que respalden sus afirmaciones.

Por lo que hace que la queja interpuesta por el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz, en contra de la coalición “Por Chihuahua al Frente” integrado por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, derivado del presupuesto no reporte de diversos conceptos de gasto como lo son las lonas y espectaculares, así como los gastos derivados de los eventos de arranque y cierre de campaña, en el marco del proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que estableció en el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano se determinó que:

MUNICIPIO DE JUAREZ		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	MC	MC
Sexto Regidor	PAN	PAN
Séptimo Regidor	PAN	PAN
Octavo Regidor	PAN	PAN
Noveno Regidor	PAN	PAN
Décimo Regidor	PAN	PAN
Onceavo Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE JULIANES		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE LA CRUZ		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	MC	MC
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE LOPEZ		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	MC	MC
Primer Regidor	MC	MC
Segundo Regidor	MC	MC
Tercer Regidor	MC	MC
Cuarto Regidor	MC	MC
Quinto Regidor	MC	MC

MUNICIPIO DE MADERA		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	PAN	PAN
Sexto Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE MADERA		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Séptimo Regidor	PAN	PAN
Octavo Regidor	PAN	PAN
Noveno Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE MAGUACHIC		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	PAN	PAN

MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	MC	MC
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	MC	MC
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	MC	MC
Quinto Regidor	MC	MC

MUNICIPIO DE MATACHILAN		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	MC	MC
Quinto Regidor	MC	MC

MUNICIPIO DE MAYANOROC		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Quinto Regidor	MC	MC

MUNICIPIO DE MEDOLAN		
CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente Municipal	PAN	PAN
Primer Regidor	PAN	PAN
Segundo Regidor	PAN	PAN
Tercer Regidor	PAN	PAN
Cuarto Regidor	PAN	PAN
Sexto Regidor	PAN	PAN
Séptimo Regidor	PAN	PAN

Por lo antes señalado el **Partido Acción Nacional**, al ser el responsable de reportar ante el Sistema Integral de Fiscalización, todos y cada uno de los gastos relativos a la campaña señalada, en consecuencia, es el partido encargado de proporcionar a esa Unidad Técnica de Fiscalización los argumentos respectivos en la etapa de emplazamiento, así como presentar la documental técnica contable y su momento los alegatos respectivos.

Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar responsabilidades.

Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para **precisar su observancia en los procedimientos sancionadores electorales y reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política** de los Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.

Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, **cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad** motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.

El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la Jurisprudencia 21/2013:

(...)

Es decir, Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los gastos que se realicen en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema Integral de Fiscalización, por lo tanto, no le asiste la razón al actor ya que en ningún momento hemos incumplido la normatividad electoral y en particular las obligaciones que señala el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos mismos que citamos a continuación:

(...)

Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas presentadas por el recurrente no se desprende ni acredita de forma evidente circunstancias que puedan motivar a que el Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas señaladas.

En consecuencia al no contener las promocionales (anuncios, videos) denunciados, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, **cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad**, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela

de derechos fundamentales, como la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.

*En este sentido, dado que **NO EXISTEN** pruebas fehacientes, determinantes, objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano hayan transgredido las normas denunciadas por el representante del Partido de la Revolución Democrática, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el denunciante.*

DEFENSAS

(...)

A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:

1. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** - *Que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que benefician a mi representado.*
2. **PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. –**

PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el juzgador, en acatamiento a la Ley, debe tener como acreditado un hecho desconocido que deriva de un hecho conocido, probado o admitido. En esta clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una vinculación obligatoria entre un hecho probatorio o admitido, hecho conocido, con otro hecho que debe deducirse obligatoriamente, por ser consecuencia legal del primero.

PRESUNCIONES HUMANOS. Aquellos medios de prueba en los que le juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada, tiene por acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho probado o de un hecho admitido.

(...)”.

c) Ismael Pérez. Mediante el oficio INE/JLE/2102/2018, de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, la Junta Local notificó a Ismael Pérez, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera la pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 104 - 107 del expediente).

El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, Ismael Pérez dio contestación al oficio INE/JLE/2102/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por Ismael Pérez. (Fojas 46 - 61 del expediente)

“(…)

HECHOS

Señalo que **NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS**, que señala la parte actora, ya que será esta quien deberá probar todos y cada uno de los hechos mencionados en su escrito inicial.

CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES DE DERECHOS Y PRETENSIÓN DEL DENUNCIANTE

PRIMERO.- Respecto de los hechos que señala el denunciante, es que me permito desglosar de manera pormenorizada a los agravios identificados, así como a contestación a los mismos, por lo que de un análisis de los mismos **NIEGO TODOS Y CADA UNO DE ELLOS**, en virtud que **ninguno de los señalados es un hecho propio** del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA por lo que las infracciones son indebidamente imputadas a mi persona.

Ahora bien, por lo que respecta al DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SINDICOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, el mismo ya fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 6 de agosto del año en curso, el cual no fue impugnado en tiempo y forma.

En este sentido, se afirma categóricamente que no se ha incurrido en omisión de reportar los ingresos y egresos efectuados en la campaña de la (sic)

Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, y mucho menos se ha incurrido en algún tipo de rebase de topes de gastos de campaña.

En este sentido, se informa a esa autoridad fiscalizadora, que todos y cada uno de los gastos efectuados en la campaña del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA,

candidato de la Coalición "Por Chihuahua al Frente", se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF". Por ello, no debe de pasar por alto de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el quejoso es completamente impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar. Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los hechos señalados y del estudio del expediente en mención se desprende que no existen certificaciones por parte de la autoridad correspondiente, que confirmen las acusaciones vertidas.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho **"el que afirma está obligado a probar"**, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciado, es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Por otra parte, el actor **solicita una revisión y auditoria con respecto al tope de gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía**, candidato a la Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, en primer lugar. es oportuno mencionar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación actividad que arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización

Por lo que, en razón de lo antes expuesto, es preciso señalar que el pasado 6 de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado en el cual se determinaron las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso. si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña, identificado como INE/CG1108/2018, y derivado de dicho Dictamen la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE

CHIHUAHUA (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES), identificada como INE/CG 1109/2018, y de la cual se desprende que la campaña del C. Ismael Pérez Pavía se encuentra ajustada a la normatividad en materia (sic)

de fiscalización, y por lo tanto no existe una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

Por lo que para acreditar lo anterior, se adjuntarán al presente escrito como pruebas las relativas a la identificación en la contabilidad del sujeto obligado, respecto de las fotografías anexadas por el quejoso en su escrito inicial.

En tal consecuencia los argumentos del incoante deben declararse infundados.

(...)

*Por los motivos y fundamentos expuestos, se solicita respetuosamente se declare la **INEXISTENCIA**, de las infracciones, materia de este procedimiento.*

PRUEBAS:

1. Documental técnica, consistente en Disco Compacto el cual contiene copia de la relación de los espectaculares, lonas, pendones, etc., así como facturas reportadas en la contabilidad de los gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía.

2. La Presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los intereses de mi representado.

3. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones que obren en el presente asunto, y que benefician a mi representado.

(...)"

IX. Requerimiento a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del INE. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/1229/2018, la Unida Técnica solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, la Lic. Daniela Casar García, que en el ámbito de sus atribuciones determinara la existencia del perfil de la red social "Facebook", correspondiente al perfil personal de Ismael Pérez. (Fojas 86-87 del expediente)

El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1520/2018, la cual contiene la verificación del contenido de la liga del perfil de la red social “*Facebook*”, correspondiente al perfil personal de Ismael Pérez. (Fojas 91-95 del expediente)

X. Razón y constancia.

- a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y constancia respecto de la ubicación del domicilio del Ismael Pérez. (Fojas 33-36 del expediente).
- b) El veintidós de agosto del presente año, la Unidad Técnica realizó una búsqueda dentro del SIF a fin de verificar la agenda de eventos reportada por parte de Ismael Pérez.
- c) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica verificó el reporte contable de Ismael Pérez dentro del SIF, donde se dio cuenta de las pólizas once (11) y siete (7), del subtipo diario, ambas del periodo uno (1), donde se constató el reporte del gasto por concepto de lonas, volantes y espectaculares por parte del candidato denunciado. (Fojas 80-85 del expediente).
- d) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y constancia respecto de la búsqueda del perfil de Ismael Pérez en la red social “*Facebook*”, de la que se desprende diversas publicaciones respecto de los presuntos eventos de arranque de campaña el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho y de cierre de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro y veintiséis todos de junio del presente año. (Fojas 139-142 del expediente).
- e) En esa misma fecha, la UTF emitió razón y constancia, respecto de la consulta en Internet de diversos portales de noticias, respecto a la presunta realización de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez, que a decir del quejoso contó con la presencia del grupo musical “*Frenetika Sonora Dinamita*”, el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. (Fojas 143-146 del expediente).
- f) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y constancia, respecto de la consulta de diversos portales de noticias por Internet, derivado de la presunta realización de un evento de cierre de campaña que supuestamente contó con la presencia de los grupos musicales “*Sonora*

Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 147-149 bis del expediente).

- g) En la misma fecha, la UTF emitió razón y constancia donde se dio cuenta de la consulta en Internet de diversos portales de noticias digitales, derivado del presunto evento de cierre de campaña que supuestamente contó con la presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 150 - 153 del expediente).
- h) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la UTF emitió razón y constancia, respecto de la consulta en Internet de diversos portales de noticias digitales, derivado de la presunta realización de un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, que a dicho del quejoso, contó con la presencia de los grupos musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteña Banda”, el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 154-157 del expediente).
- i) El cuatro de octubre, la Unidad Técnica emitió razón y constancia, respecto de la consulta a la red social “Facebook”, en particular el perfil del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, del que se desprende un video del evento de arranque de campaña señalado por el quejoso, el veintisiete de mayo del presente año. (Fojas 296-297 del expediente).
- j) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica verificó el reporte contable de Ismael Pérez dentro del SIF, donde se dio cuenta la póliza cuatro (4), del subtipo diario, ambas del periodo uno (1), donde se constató el reporte del gasto por concepto de lonas por parte del candidato denunciado. (Fojas 299-304 del expediente).

XI. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Chihuahua.

- a) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la presidencial seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, a fin de que los habitantes de dicha comunidad informaran respecto del presunto cierre de campaña de Ismael Pérez, el día veintitrés de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 112-113 del expediente)

El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, consistentes en treinta (30) cuestionarios. (Fojas 227-257 del expediente)

- b) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, a fin de que los habitantes de dicha comunidad informaran respecto del presunto cierre de campaña de Ismael Pérez, el día veinticuatro de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 114-115 del expediente).

El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, consistentes en treinta (30) cuestionarios. (Fojas 227-257 del expediente)

- c) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la explanada de la presidencia municipal de Meoqui, el día veintiséis de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 116-117 del expediente).

El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, consistentes en treinta y tres (33) cuestionarios. (Fojas 193-226 del expediente)

- d) Mediante acuerdo de once de septiembre del corriente, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la intersección de las calles Meoqui e Hidalgo (a un costado de la Plaza Principal) en el municipio de Meoqui, el día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. (Fojas 127-128 del expediente).

El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, consistentes en treinta y dos (32) cuestionarios. (Fojas 159-191 del expediente)

XII.- Solicitud de información a la Dirección de Auditoría.

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1277/2018, del once de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera las actas de verificación que se realizaron con motivo de las visitas de verificación de los eventos de cierre y arranque de campaña de Ismael Pérez que, en su caso, se hubieran verificado. (Foja 129 del expediente).

El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría comunicó que dichos eventos no fueron verificados. (Fojas 130 - 131 del expediente).

- b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1391/2018, del treinta de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la matriz de precios respecto de los conceptos de gasto por grupos musicales, templetes y equipos de sonido. (Fojas 318 - 319 del expediente).

El seis de noviembre dos mil dieciocho, el Director de Auditoría remitió la información solicitada. (Fojas 352 - 359 del expediente).

XIII. Notificación de inicio del periodo de alegatos a las partes.

- a) **MC.** Mediante oficio INE/UTF/DRN/44975/2018, de fecha dieciocho de octubre del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de MC ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. (Fojas 308 - 309 del expediente).

Mediante escrito de veintidós de octubre del presente año, el Representante Propietario de MC ante el Consejo General, presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica. (Fojas 312 - 317 del expediente).

- b) **PAN.** Mediante oficio INE/UTF/DRN/44974/2018, de fecha dieciocho de octubre del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del PAN ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. (Fojas 310 - 311 del expediente).

Mediante escrito presentado el veintidós de octubre del presente año, la Representante del PAN ante el Consejo Local del INE en Chihuahua, la C. Maya Aida Arróniz Ávila, presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica. (Fojas 320 - 335 del expediente).

- c) **Ismael Pérez.** Mediante acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, la Unidad Técnica solicitó a la Junta Local notificara el inicio de la etapa de alegatos a Ismael Pérez.

Mediante escrito presentado el veintidós de octubre del presente año, Ismael Pérez presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica. (Fojas 336 - 351 del expediente).

- d) **C. Ramón Octavio Lerma Sáenz.** Mediante acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, la Unidad Técnica solicitó a la Junta Local notificara el inicio de la etapa de alegatos al quejoso, el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz.

No obstante lo anterior, el quejoso no remitió su escrito de alegatos.

XIV. Cierre de Instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 359 del expediente)

XV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue presentado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; mismo que fue aprobado en lo general por unanimidad de los Consejeros Electorales presentes, las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández; y, en lo particular, con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, en cuanto hace al concepto de gasto por lonas y la valoración de los cuestionarios elaborados por la Junta Local.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, todos de la Ley de Instituciones; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos, la Unidad Técnica es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley de Instituciones, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, la Comisión es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley de Instituciones, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento.

En ese sentido, de la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, consiste en determinar si la otrora Coalición y su entonces candidato Ismael Pérez, omitieron de reportar los gastos por concepto de lonas, espectaculares, publicidad impresa, así como los gastos derivados de cuatro eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de Meoqui, Chihuahua, por parte del candidato denunciado.

En consecuencia, debe determinarse si el denunciado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos; 443 numeral 1, inciso f) de la Ley de Instituciones; y de los artículos 96, numeral 1; y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley de Partidos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

(...)”

Ley de Instituciones

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder el tope de gastos de campaña;

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser

reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

(...)”

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador, al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Por otra parte, del artículo 443 antes señalado, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber de respetar el principio de legalidad, esto es, cumplir con la normatividad que regula su actuar respecto del uso de recursos. En la especie, ceñirse al tope de gastos de campaña, establecido por la autoridad, pues de no hacerlo, éste vulneraría el principio de legalidad.

En ese orden de ideas, es de señalar que la finalidad de dicho principio, es que el sujeto obligado actúe siempre y en todos los casos de acuerdo a lo que prevé el constituyente permanente, el legislador y las autoridades electorales, cada una, según su ámbito normativo-competencial, esto es, de acuerdo a los principios del estado democrático.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el siguiente apartado se analizarán los hechos denunciados, en su caso los controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes.

2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por las partes.

En ese sentido, el quejoso se duele de la presunta omisión, atribuida a los sujetos obligados de reportar diversos conceptos de gasto que se enlistan a continuación y, que ha dicho del quejoso, deviene en un rebase al tope de gastos de campaña:

- Nueve (9) lonas.
- Tres (3) espectaculares.
- Cincuenta mil (50,000) ejemplares de publicidad impresa.
- Cuatro (4) eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de Meoqui, Chihuahua, por parte del candidato denunciado.

Al respecto, el denunciante adjunta como elemento de prueba para sustentar su dicho, nueve (9) placas fotográficas de las presuntas lonas, tres (3) imágenes de los espectaculares denunciados, tres (3) imágenes de la publicidad impresa denunciada, así como dos (2) placas fotográficas de los supuestos eventos organizados por Ismael Pérez.

Ahora bien, por lo que hace a los hechos controvertidos, así como a las pruebas aportadas por los sujetos incoados, es de señalar que MC manifestó que en el

convenio de coalición celebrado entre el PAN y ese instituto político, correspondía al PAN proporcionar los argumentos y documentales a la Unidad Técnica.

En ese sentido, tanto el PAN como el candidato denunciado, en sus escritos en contestación al emplazamiento y alegatos, negaron todos los hechos denunciados por el quejoso toda vez que los señalaron como hechos que no fueron propios de la campaña de Ismael Pérez; además, manifestaron que las pruebas aportadas por el denunciante son pruebas técnicas y en ningún momento comprueban su dicho. Para sustentar sus argumentos, el PAN presentó la siguiente prueba:

- Disco compacto, el cual contiene tres (3) pólizas de la contabilidad de Ismael Pérez y un archivo en formato “Excel”.

2.2 Diligencias de Investigación

Para hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar las siguientes diligencias:

Primeramente, el veintidós de agosto del presente año, la Unidad Técnica realizó una búsqueda dentro del SIF a efecto de verificar la agenda de eventos de Ismael Pérez; sin embargo, de la revisión del sistema referido se desprende que el candidato denunciado no realizó el reporte de evento alguno durante la etapa de campaña.

En ese sentido, los días veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, ambos del año en curso, la Unidad Técnica verificó si los sujetos obligados registraron algún gasto por los conceptos denunciados dentro del SIF, por lo que se hizo constar que en la contabilidad 55592, se encuentran reportadas las siguientes pólizas:

Concepto	Cantidad Reportada	Póliza	Tipo / Subtipo
Volantes	54,500	11	Normal Diario
Lonas	6	11	Normal Diario
Lonas	425	4	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000179213	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000158414	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000178540	1	7	Normal Diario

Por otra parte, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/1229/2018, la Unida Técnica solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, la Lic. Daniela Casar García, que en el ámbito de sus atribuciones certificara la existencia del perfil de la red social “Facebook” correspondiente al candidato incoado, por lo que esa Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1520/2018, la cual contiene la certificación aludida.

Ahora bien, toda vez que el quejoso denuncia la realización de tres eventos de cierre de campaña de Ismael Pérez, el primero de ellos en la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, el día veintitrés de junio del año en curso, el cual supuestamente contó con la presentación de los grupos musicales “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, alimentos y transporte; el treinta de agosto del corriente, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera en las inmediaciones de la Presidencia antes señalada, con la finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de la localidad referida respecto del evento denunciado. Por lo anterior, el catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias de las diligencias practicadas en las que se desprende que, de las treinta (30) personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; no obstante lo anterior, sólo nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

En el mismo sentido, respecto al segundo evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, el veinticuatro de junio del corriente, el cual presuntamente contó con la presencia de los grupos musicales “Real Norteño Banda” y “La Sonora Lagunera”, alimentos y transporte, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones a su personal a efecto que se constituyera en la plaza mencionada, para que aplicara un cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de la localidad referida.

En consecuencia, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran las diligencias practicadas de las que se desprende que de las treinta y dos (32) personas cuestionadas, veintisiete (27) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas aseguraron que

estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; no obstante lo anterior, únicamente una (1) de las personas cuestionadas pudo confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

A su vez, por lo que hace al tercer evento de cierre de campaña señalado por el quejoso en la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, el veintiséis de junio del año en curso, que presuntamente contó con la presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”, alimentos y transporte; por lo que, el treinta de agosto del presente año, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera en las inmediaciones del lugar referido, con la finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de la localidad referida respecto de del evento antes mencionado.

Por lo anterior, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias y evidencias documentales de las diligencias practicadas de las treinta y tres (33) personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas afirmaron que se realizó el evento señalado por el quejoso, a su vez veintidós (22) de ellas confirmaron que estuvo presente la agrupación musical señalada por el quejoso; no obstante lo anterior, únicamente nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron asegurar la entrega de alimentos y cuatro (4) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Además, el quejoso denuncia la realización de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez a un costado de la Plaza Principal del Municipio de Meoqui Chihuahua”, el día veintisiete de mayo del año en curso, el cual, a su dicho, contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, alimentos y transporte; razón por la cual, el treinta de agosto del presente año, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera en la explanada referida, con la finalidad que se realizara un cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de la localidad informen respecto de la celebración del evento antes mencionado.

Por lo anterior, el catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran la diligencia practicada, de las que se desprende que de las treinta y dos (32) personas cuestionadas, veintidós (22) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez diecinueve (19) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; sin embargo, únicamente cuatro (4) de las personas cuestionadas

pudieron confirmar la entrega de alimentos y dos (2) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Asimismo, el once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio **INE/UTF/DRN/1277/2018**, se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en caso de haber realizado alguna visita de verificación a los eventos de cierre y arranque de campaña de Ismael Pérez, remitiera las actas correspondiente a los siguientes eventos:

Evento	Lugar	Fecha del evento
Arranque de campaña	Calle Meoqui e Hidalgo (a un costado de la Plaza Principal), Municipio de Meoqui, Chihuahua	27.05.18
Cierre de campaña	Presidencia seccional de Guadalupe Victoria, en el Municipio de Meoqui, Chihuahua	23.06.18
Cierre de campaña	La plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Meoqui, Chihuahua	24.06.18
Cierre de campaña	Explanada de la Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua	26.06.18

Por lo anterior, el trece de septiembre siguiente, a través del oficio **INE/UTF/DA/3191/2018**, la Dirección de Auditoría informó que dichos eventos no fueron objetos de verificación por ésta.

En ese tenor, el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y constancia respecto de la consulta realizada dentro del portal de la red social “Facebook”, en específico en el perfil personal de Ismael Pérez de la que se desprende diversas publicaciones en las que promociona el evento de arranque de campaña el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho y así como los de cierre de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro y veintiséis todos de junio del presente año.

De igual forma, en esa misma fecha, la UTF realizó una consulta en Internet respecto a la presunta realización al evento de arranque de campaña mismo que, a dicho del quejoso, contó con la presencia de la “Frenetika Sonora Dinamita”, el día veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, en la que se obtuvo como resultado que en la página digital “El Pionero, Delicias Digital”, se señala la realización del evento denunciado, así como la participación del grupo musical antes referido; además, se dio cuenta del portal digital “Código Delicias Periodismo Libre”, la cual en su

contenido menciona la realización del evento y de la presentación grupo musical señalados por el quejoso.

Asimismo, en misma fecha la UTF emitió razón y constancia respecto de la consulta en Internet de los portales digitales de “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, de la que se desprende que en su contenido señalan la realización de un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, el cual contó con la participación de “La Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho.

De igual manera, se consultó en Internet sobre la presunta realización al evento de cierre de campaña, mismo que contó con la presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache” el día veintiséis de junio del dos mil dieciocho, de la cual se obtuvieron: una página digital que tiene por nombre “La Región Periodismo Sano”, la cual en su contenido señala la próxima realización del evento señalado por el quejoso, así como la participación del grupo musical antes referido y otra que tiene por nombre “Meoqui Noticias”, que en su contenido menciona el evento y el grupo musical señalado por el quejoso.

Además, el cuatro de octubre del año en curso, la Unidad Técnica emitió razón y constancia respecto de la consulta en Internet con relación a la presunta realización al tercer evento de cierre de campaña señalado por el quejoso, mismo que presuntamente contó con la presencia de los grupos musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteña Banda”, el día veinticuatro de junio del dos mil dieciocho; de lo anterior, se desprende una página digital que tiene por nombre “Radizia, Delicias el Valor de Chihuahua”, la cual en su contenido refiere la próxima realización del evento señalado por el quejoso, así como la participación de los grupos musicales antes referidos y, otra página digital que tiene por nombre “Meoqui Noticias”, que en su contenido menciona el evento y los grupos musicales antes señalados.

Asimismo, en esa misma fecha, la Unidad Técnica emitió razón y constancia respecto de la consulta realizada dentro del portal de la red social “Facebook”, en específico en el perfil de la agrupación musical denominada “Frenetika Sonora Dinamita”, de la que se desprende la publicación de un video del evento de arranque de campaña denunciado, el veintisiete de mayo del presente año.

De tal manera, mediante oficio INE/UTF/DRN/1391/2018, del treinta de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la matriz de precios respecto de los conceptos de gasto por grupos musicales, templete y equipos de sonido. Por lo que, el seis de noviembre del corriente, mediante oficio INE/UTF/DA/3304/18, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada.

2.2 Valoración de pruebas

Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el seguimiento de la línea de investigación trazada, en este apartado se procederá a realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo éstas las siguientes:

a) Documentales Públicas

Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.

- **Razón y constancia.** De veintidós de agosto de septiembre de dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta que de la consulta a los reportes contables del candidato denunciado dentro del SIF, no existe registro alguno dentro de la agenda de eventos por parte de Ismael Pérez.

- **Razón y constancia.** De veintitrés de agosto del dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta que dentro del SIF, en específico en la contabilidad 55592, se encuentran registradas las siguientes pólizas:

Concepto	Cantidad Reportada	Póliza	Tipo / Subtipo
Volantes	54,500	11	Normal Diario
Lonas	6	11	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000179213	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000158414	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000178540	1	7	Normal Diario

- **Razón y constancia.** De trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta de la consulta del perfil de Ismael Pérez, la red social “Facebook”, de la que se desprende diversas publicaciones donde promociona los presuntos eventos de arranque de campaña el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho y de cierre de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro y veintiséis todos de junio del presente año.

- **Razón y constancia.** De trece de septiembre del año en curso.

Documental pública que da cuenta respecto de la consulta en Internet de los portales digitales “El pionero, Delicias Digital” y “Código Delicias Periodismo Libre”, donde se hace referencia a la realización de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez, que contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho.

- **Razón y constancia.** De trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta respecto de la consulta en Internet de los portales digitales de los periódicos “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, de la que se desprende que en su contenido señalan la realización de un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, el cual contó con la participación de “La Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho.

- **Razón y constancia.** De trece de septiembre del corriente.

Documental pública que da cuenta de la consulta en Internet de los periódicos digitales “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, la cual en su contenido señala la realización del evento de cierre de campaña de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por parte del candidato denunciado, así como de la presunta presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”.

- **Razón y constancia.** De trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta de la consulta en Internet por parte de la Unidad Técnica a los periódicos digitales “Radizia, Delicias el Valor de Chihuahua” y “Meoqui Noticias”, de la que se desprende la realización de un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, que contó con la presencia de los grupos musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteña Banda”, el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho.

- **Razón y constancia.** De cuatro de octubre del año en curso.

Documental pública que da cuenta de la consulta del perfil de la agrupación musical denominada “Frenetika Sonora Dinamita” en la red social “Facebook”, de la que se desprende la publicación de un video del evento de arranque de campaña de Ismael Pérez, el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho.

- **Razón y constancia.** De veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Documental pública que da cuenta que dentro del SIF, en específico en la contabilidad 55592, se encuentran registradas las siguientes pólizas:

Concepto	Cantidad Reportada	Póliza	Tipo / Subtipo
Lonas	425	4	Normal Diario

- **Treinta y dos (32) cuestionarios.** Evento de arranque de campaña el veintisiete de mayo del año en curso.

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la Plaza Principal del Municipio de Meoqui Chihuahua, donde se preguntó si el día veintisiete de mayo del año en curso se llevó a cabo un evento de arranque de campaña y que el mismo contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, alimentos y transporte.

- **Treinta (30) cuestionarios.** Evento de cierre de campaña el veintitrés de junio del año en curso.

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, donde se cuestionó si el veintitrés de junio del año en curso se llevó a cabo un evento de cierre de campaña que supuestamente contó con la presentación de los grupos musicales “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, alimentos y transporte para los invitados al evento.

- **Treinta y dos (32) cuestionarios.** Evento de cierre de campaña el veinticuatro de junio del año en curso.

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, donde se preguntó si el veinticuatro de junio del corriente, se llevó a cabo un evento del cual presuntamente contó con la presencia de los grupos musicales “Real Norteño Banda” y “La Sonora Lagunera”, alimentos para los asistentes y transporte.

- **Treinta y tres (33) cuestionarios.** Evento de cierre de campaña el veintiséis de junio del año en curso.

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, donde se preguntó si el veintiséis de junio del año en curso, se llevó a cabo un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, el cual presuntamente contó con la presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”, alimentos y transporte para los invitados al evento.

b) Técnicas

Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

- **Nueve (9) placas fotográficas.** Consistente en nueve fotografías de las presuntas lonas remitidas por el quejoso.
- **Tres (3) imágenes.** Consistente en tres fotografías de los espectaculares denunciados presentadas por el quejoso.
- **Tres (3) imágenes.** Consistente en tres imágenes de la publicidad impresa denunciada, las cuales fueron aportadas por el quejoso.
- **Dos (2) placas fotográficas.** Consistente en tres fotografías de los supuestos eventos organizados por Ismael Pérez remitidas por el quejoso.
- **Disco compacto.** Consistente en un disco compacto remitido por el PAN, que contiene diversas pólizas contables de Ismael Pérez.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”**, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

2.3 Vinculación de Pruebas

Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002¹, referente a los alcances de las pruebas documentales.

Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se desprende determinar la presunta omisión del reporte de los conceptos de gasto que se enlistan a continuación y, que ha dicho del quejoso, deviene en un rebase al tope de gastos de campaña:

- Nueve (9) lonas.
- Tres (3) espectaculares.
- Cincuenta mil (50,000) ejemplares de publicidad impresa.
- Cuatro (4) eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de Meoqui, Chihuahua, por parte del candidato denunciado.

En ese sentido, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera:

- A. Gastos Reportados.**
- B. Gasto No Acreditados.**
- C. Gastos No Reportados.**

A. Gastos Reportados.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció el presunto rebase de tope de gastos de campaña derivado de los gastos por concepto de publicidad impresa, lonas y espectaculares.

Al respecto, para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos probatorios dos (2) placas fotográficas de las presuntas lonas y tres (3)

¹PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

imágenes de los espectaculares denunciados, mismas que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización², son considerados de carácter técnico.

Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no encontrarse administradas con otros elementos de convicción, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

Asimismo, se cuenta con la documental privada consistente en un disco compacto remitido por el PAN en contestación al emplazamiento, del que se desprenden las pólizas 4, 7 y 11, todas del tipo normal, subtipo diario, con el fin de acreditar el reporte del gasto por los conceptos denunciados.

Aunado a lo anterior, se cuenta con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias del veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, todas de dos mil dieciocho, en las que se hizo constar la búsqueda de los registros realizados en el SIF, por parte de Ismael Pérez, encontrándose el registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro:

Concepto	Cantidad Denunciada	Cantidad Reportada	Póliza	Tipo / Subtipo
Lonas	9	6	11	Normal Diario
Lonas	9	425	4	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000179213	1	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000158414	1	1	7	Normal Diario
Espectacular INE-RNP-000000178540	1	1	7	Normal Diario

² Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: **III. Técnicas**; Artículo 17. Prueba técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Además, es de destacar que de la documentación comprobatoria de las pólizas señaladas anteriormente, se advierte que de las nueve (9) lonas denunciadas existen dos (2) lonas³ idénticas a las reportadas por Ismael Pérez dentro del SIF como se puede advertir en el **ANEXO A**.

Por otro lado, por lo que hace a los espectaculares, existe coincidencia en los ID-INE de los espectaculares reportados con los señalados por el quejoso a la autoridad fiscalizadora dentro del SIF, como se puede visualizar en la siguiente tabla:⁴

ESPECTACULAR DENUNCIADO	ESPECTACULAR REPORTADO
INE-RNP-000000178540	
	
INE-RNP-000000178540	
	

³ Una de las lonas señaladas por el quejoso se encuentra reportado dentro del SIF como espectacular con ID-INE-000000179210.

⁴ Las lonas denunciadas son idénticas entre sí, por lo que no es necesario hacer la comparación de cada una de ellas con las lonas reportadas por los sujetos incoados dentro del SIF.

ESPECTACULAR DENUNCIADO	ESPECTACULAR REPORTADO
INE-RNP-000000158414	
	

Así las cosas, dichas razones y constancias en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.

Finalmente, de la revisión de los elementos de convicción aportados por las partes y las pruebas obtenidas por la Unidad Técnica, una vez adminiculados, esta autoridad pudo constatar que los incoados realizaron el registro dentro del SIF del gasto por concepto de espectaculares y lonas.

En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora de lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente apartado se declara como **infundado**.

B. Gastos No Acreditados.

Ahora bien, el quejoso denuncia cincuenta mil (50,000) ejemplares de volantes y siete (7) lonas que presuntamente no fueron reportadas a la Unidad Técnica por parte de los sujetos obligados.

Al respecto, para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos probatorios siete (7) placas fotográficas de las presuntas lonas y tres (3) imágenes de la publicidad impresa denunciada, mismas que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización⁵, son considerados de carácter técnico.

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

En este sentido, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan.

En virtud de lo anterior, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y dado que no se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados, no resulta posible desprender algún indicio con suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos sólo se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con

⁵ Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan acreditar los hechos que refieren.

Ahora bien, considerando a la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas, se cuenta con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias del veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, todas de dos mil dieciocho, en las que se hizo constar la búsqueda de los registros realizados en el SIF, por parte de Ismael Pérez, encontrándose el registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro:

Concepto	Cantidad Denunciada	Cantidad Reportada	Póliza	Tipo / Subtipo
Volantes	50,000	54,500	11	Normal Diario
Lonas	9	6	11	Normal Diario
Lonas	9	425	4	Normal Diario

En ese sentido, cabe destacar que cuatro (4) de las lonas denunciadas tienen dimensiones, diseño y características similares a las señaladas por el quejoso como se puede ver en el **ANEXO B**.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos de volantes y lonas, se advirtió que lo que reportó el sujeto incoado fue en cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.

C. Gastos No Reportados.

Ahora bien, el quejoso señala que los sujetos incoados fueron omisos en reportar el gasto por la realización de un evento de arranque de campaña, así como la organización de tres eventos de cierre de campaña.

Por lo anterior, para sustentar su dicho el quejoso remite la prueba técnica consistente en una (1) placa fotográfica para acreditar la realización del evento de cierre, misma que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son considerados de carácter técnico.



Al respecto, toda vez que el denunciante remite únicamente pruebas técnicas de los presuntos eventos, se cuenta con la documental pública que constata que la Unidad Técnica procedió a realizar una búsqueda dentro del SIF, a efecto de verificar la agenda de eventos de Ismael Pérez; sin embargo, de la revisión del sistema referido, se desprende que el candidato denunciado no realizó el reporte de evento alguno durante la etapa de campaña, situación que generó indicios suficientes para esta autoridad electoral, por lo que se inició la investigación de los hechos denunciados.

En ese sentido, se estudiarán los eventos denunciados por el quejoso en particular, quedando de la siguiente manera:

- **Arranque de campaña.** Veintisiete de mayo del dos mil dieciocho.
- **Primer evento de cierre de campaña.** Veintitrés de junio del dos mil dieciocho.
- **Segundo evento de cierre de campaña.** Veinticuatro de junio del dos mil dieciocho.
- **Tercer evento de cierre de campaña.** Veintiséis de junio del dos mil dieciocho.

Arranque de campaña.

Al respecto, por lo que hace al evento de arranque de campaña que presuntamente contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, se cuenta con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias de fecha trece de septiembre del corriente, emitidas por la Unidad Técnica, donde se da cuenta que en los portales digitales de los periódicos “El Pionero, Delicias Digital” y “Código Delicias Periodismo Libre”, se publicaron notar de carácter noticioso que

confirman la realización de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez señalando que el mismo tuvo verificativo a un costado de la presidencia municipal de Meoqui; además, el portal de “Código Delicias Periodismo Libre” escribe “se culminó con un número musical a cargo de la Frenetika Sonora Dinamita”.



Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del perfil de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica dio cuenta de una publicación de Ismael Pérez donde hace una invitación al público a su evento de arranque de campaña y en la que manifiesta “Nos acompañará la Frenetika Sonora Dinamita”.



Asimismo, se cuenta con la razón y constancia emitida por la autoridad fiscalizadora, por medio de la cual se constató que dentro de la red social “Facebook”, en

específico en el perfil del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, se encuentra una publicación de un video de un evento con un fondo referente a Ismael Pérez, del veintisiete de mayo del año en curso que menciona “*Trabajando andamos en meoqui (sic) chihuahua (sic) cierre de campaña*”.



Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta y dos (32) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de la Plaza Principal del Municipio de Meoqui, donde se cuestionó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la plaza referida, respecto de la celebración del evento antes mencionado y, si en el mismo se entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende que de las personas cuestionadas, veintidós (22) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez diecinueve (19) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; sin embargo, únicamente cuatro (4) de las personas cuestionadas pudieron confirmar la entrega de alimentos y dos (2) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios concatenados entre sí, se desprende lo siguiente:

- El veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal del Municipio de Meoqui, Chihuahua, se llevó a cabo un evento durante la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.
- Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez.
- El evento referido fue amenizado por el grupo musical denominado “Frenetika Sonora Dinamita”.
- La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera prestado el servicio de transporte a los asistentes.
- Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por los conceptos de gasto de un (1) grupo musical y un (1) template y equipo de sonido, en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF.

Primer evento de cierre de campaña.

Sobre el particular, por lo que refiere al primer evento de cierre de campaña que presuntamente contó con la presentación de los grupos musicales denominados “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, se cuenta con las documentales públicas

consistentes en las razones y constancias de fecha trece de septiembre del año en curso, emitidas por la UTF por las que se da cuenta que en los portales digitales de los periódicos “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, se publicaron artículos de carácter noticioso que confirman la realización del primer evento de cierre de campaña de Ismael Pérez a un costado de la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, municipio de Meoqui; además, en el sitio de “Meoqui Noticias” se señala la invitación del candidato incoado al evento *“Invito a todos los vecinos de Guadalupe Victoria a que nos acompañen en el cierre de campaña que tendremos en el seccional, para que escuchen las propuestas que tenemos y continuar transformando el municipio a beneficio de todos los meoquenses (sic)”*.



Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica dio cuenta de una publicación de Ismael Pérez donde señala que estará presente en el evento de cierre de campaña a un costado de la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, municipio de Meoqui, el veintitrés de junio del corriente junto con las agrupaciones musicales “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”.



Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta (30) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, donde se preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la plaza referida respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó con la presentación de los grupos musicales referidos y, si en el mismo se entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende que de las personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; no obstante lo anterior, sólo nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral.

Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios concatenados entre sí, se desprende lo siguiente:

- El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, en la Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento durante

la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

- Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez.
- El evento referido fue amenizado por los grupos musicales denominados “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”.
- La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera prestado el servicio de transporte a los asistentes.
- Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el concepto de gasto de dos (2) grupos musicales y un (1) templete y equipo de sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF.

Segundo evento de cierre de campaña.

Al respecto, por lo que hace al segundo evento de cierre de campaña que, a dicho del quejoso, contó con la presentación de los grupos musicales denominados “Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”, se cuenta con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias de fecha trece de septiembre del año en curso, emitidas por la Unidad Técnica por las que se verificó que en los portales digitales de los periódicos “Radiza, Delicias Valor Chihuahuense” y “Meoqui Noticias”, se advierten notas periodísticas que confirman la realización del segundo evento de cierre de campaña de Ismael Pérez en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui; además, en ambos periódicos resaltan las palabras del candidato denunciado que señalan *“Invito a toda la comunidad de Cárdenas a que me acompañe al cierre de campaña y escuche mis propuestas para un mayor progreso del seccional y todo el municipio. Ya realizamos acciones a beneficio de Cárdenas, en menos de dos años trajimos apoyos que no se habían otorgado en por lo menos los últimos seis años”*.



Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica constató la publicación de Ismael Pérez, de quince de junio del dos mil dieciocho, donde señala que estará presente en el evento de cierre de campaña en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, el veinticuatro de junio del corriente junto con las agrupaciones musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”.



Aunado a lo anterior, se tienen las documentales públicas consistentes en treinta y dos (32) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, donde se preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la plaza referida, respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó con la presentación de los grupos musicales aludidos y, si en el mismo se entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende que de las personas cuestionadas, veintisiete (27) personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; no obstante lo anterior, únicamente una (1) de las personas cuestionadas pudo confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral.

Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios concatenados entre sí, se desprende lo siguiente:

- El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento durante la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.
- Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez.
- El evento referido fue amenizado por los grupos musicales denominados “Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”.
- La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera prestado el servicio de transporte a los asistentes.
- Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el concepto de gasto de dos (2) grupos musicales y un (1) templete y equipo de sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF.

Tercer evento de cierre de campaña.

Al respecto, por lo que hace al tercer evento de cierre de campaña que presuntamente contó con la presentación de la agrupación musical “Tropicalísimo Apache”, se cuenta con la documental pública consistente en la razón y constancia de fecha trece de septiembre del corriente, emitida por la Unidad Técnica, donde se da cuenta que en los portales digitales de los periódicos “La Región, periodismo sano” y “Meoqui Noticias”, las cuales confirman la realización de un evento de cierre de campaña de Ismael Pérez a un costado de la presidencia municipal de Meoqui; además, en ambos periódicos verificados se describen declaraciones del candidato incoado *“Vamos a darle a conocer a nuestra gente parte de los logros que obtuvimos en menos de dos años y nuestros compromisos principales para darle continuidad al desarrollo de Meoqui”*.



Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica constató la publicación de Ismael Pérez, de quince de junio del dos mil dieciocho, donde señala que estará presente en el evento de cierre en la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, el veintiséis de junio del año en curso, junto con el grupo musical “Tropicalísimo Apache”.



Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta y tres (33) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, donde se preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la plaza referida, respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó con la presentación de los grupos musicales referidos y, si en el mismo se entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende que de las personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas afirmaron que se realizó el evento señalado por el quejoso, a su vez veintidós (22) de ellas confirmaron que estuvo presente la agrupación musical señalada por el quejoso; no obstante lo anterior, únicamente nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron asegurar la entrega de alimentos y cuatro (4) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados.

Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral.

Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios concatenados entre sí, se desprende lo siguiente:

- El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento durante la etapa

de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

- Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez.
- El evento referido fue amenizado por el grupo musical denominado “Tropicalísimo Apache”.
- La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera prestado el servicio de transporte a los asistentes.
- Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el concepto de gasto de un (1) grupo musical y un (1) templete y equipo de sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF.

En consecuencia, toda vez que los sujetos denunciados omitieron realizar el registro de los conceptos de gasto consistentes en seis (6) grupos musicales y cuatro (4) templates y equipos de sonido, en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF; de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, el presente apartado se declara como **fundado**.

2.4 Conclusiones

De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado de estudio de fondo.

- A. Gastos Reportados.**
- B. Gastos No Acreditados.**
- C. Gastos No Reportados.**

A. Gastos Reportados.

Con respecto al presunto rebase de tope de gastos de campaña derivado de los gastos por concepto de dos (2) lonas y tres (3) espectaculares, tal y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no contó con los elementos de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos representaron un gasto para los sujetos incoados, razón por la cual, la presente queja deviene **infundada** por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 445, numeral 1, inciso e) de la Ley de Instituciones; y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

B. Gastos No Acreditados.

En ese sentido, en cuanto hace a los conceptos de siete (7) lonas y cincuenta mil (50,000) ejemplares de publicidad impresa, tal y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no contó con los elementos de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos representaron un gasto, razón por la cual, de igual forma la presente queja deviene **infundada** por dichos conceptos, pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y el 127 del Reglamento de Fiscalización.

C. Gastos No Reportados.

Ahora bien, resulta necesario señalar que, por lo que hace al evento de arranque y a los tres (3) eventos de cierre de campaña, tal y como fue señalado en el apartado de vinculación de pruebas quedó cabalmente acreditado que los incoados fueron omisos en reportar las aportaciones referidas dentro del SIF, siendo éstos los siguientes conceptos:

- Seis (6) grupos musicales.
- Cuatro (4) templetes y equipos de sonido.

En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, esta autoridad tiene por acreditada la omisión de los sujetos incoados de reportar diversos conceptos de gasto; por consiguiente, deviene **fundado** el procedimiento en que se actúa, por lo que hace a la omisión de reportar seis (6) grupos musicales, cuatro (4) templetes y equipos de sonido.

Bajo esa tesitura, los sujetos obligados vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, incisos b), fracción I de la Ley de Partidos, 96, numeral 1 y el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten en el **considerando 4**.

3. Determinación del Costo

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁶:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se

⁶ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En la conducta infractora de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁷

En ese entendido se procedió la determinar el valor más alto de la matriz de precios en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, a fin de establecer el costo de los egresos no reportados.

⁷ “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. (...)”

Entidad	ID matriz	Proveedor	Descripción	Valor	Referencia Contable
Chihuahua	2127	Diego Bueno Terán	Templete y equipo de sonido	\$8,960.00	P1/PN/DR-16/17-04-18

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Proveedor	Clave Unidad	Descripción	Documento	Valor Utilizado	Importe
1	Pieza	1	01010101	H87	Evento de Lucha Libre el sábado 17 de Abril en el parque Ramón Guzmán en Cd. Juárez, Chih. en favor de la candidata a Diputada Federal Daniela Alvarez Hernández por el Distrito 4		\$6,465.51	\$6,465.51
300	Piezas	1	01010101	H87	Bolts		\$2.87	\$861.00
200	Piezas	1	01010101	H87	Paquetes de palomitas		\$4.31	\$862.00
150	Piezas	1	01010101	H87	Algodones de azúcar		\$17.24	\$2,586.00
1	Pieza	1	01010101	H87	Templete con sonido		\$6,000.00	\$6,000.00
1	Pieza	1	01010101	H87	Servicio de sillas y brinca brinca		\$2,327.58	\$2,327.58
1	Pieza	1	82101505	H87	Servicio de reparto de publicidad		\$1,293.10	\$1,293.10
1	Pieza	1	01010101	H87	Cantante		\$2,155.17	\$2,155.17
1	Pieza	1	01010101	H87	Servicio de volanteo masivo		\$5,379.31	\$5,379.31
20	Piezas	1	53101602	H87	Camisas para promotores		\$11.379	\$2,275.80

Importe con Letra	Treinta y cinco mil treinta y ocho pesos con 35/100 MN	Importe	
Forma de Pago	OS - Transferencia electrónica de fondos	Subtotal:	\$30,205.45
Condiciones de Pago		Descuento:	\$0.00
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	IVA trasladado al 0.140000%	\$4,832.92
No. Cta. Pago		Total:	\$35,038.37
Días de crédito			
Línea del CFDI:	G03 - Gastos en general		

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CRO

Sello Digital del CFDI

f/VUscrwanfU8++CPdbzC5w
 PGdpN+3CoDJ7IGXal pFeuO8
 v2dGrq2A8hb/Oa5vpC6hz9G5

Sello Digital del SAT

WfWb3WV7bWTTQQ18+McufNKxJZe0D4V0lppA/O5jts/Oxdk#

Código Original del complemento de certificación del SAT

[illegible]

2341

el estado de Chihuahua con características similares, por lo que se obtuvo el siguiente importe:

Nombre de la Agrupación	Concepto	Valor sin IVA	IVA	Total
Sonora Deliciosa	Grupo Musical en el mes de febrero, 2 horas de servicio, solo incluye presentación del grupo sin equipo de audio.	\$16,000.00	\$2,560.00	\$18,560.00

000355



Sonora Deliciosa
Cesar Parada Santana
Av. 4ª Pte #1100
Col. Del Empleado
Tel. 639-474-24-70
Cel. 639-110-22-88
Delicias Chihuahua

Asunto: Cotización
A quien Corresponda
Antonio Martínez Martínez

Por medio de la presente y después de saludarlo, le comunicamos los costos del servicio musical del Grupo Sonora Deliciosa, y los servicios que se incluyen. Para la fecha del mes de Febrero de 2019 en Chihuahua Chihuahua.

Costo total del servicio \$16 000 (son diez y seis mil pesos).
En caso de requerir factura el total sería más IVA

2 horas de música en turnos de 45 minutos por 15 de descanso. Las 2 horas serian seguidas.
En el precio solo incluye la presentación del grupo con su instrumental personal, sin audio ni iluminación, el equipo de audio y equipo de iluminación tendrá que ser facilitado por el organizador del evento.

Esperamos y se decida a contratar nuestros servicios.
Quedo a sus órdenes como su más y seguro servidor.



En consecuencia, se establecieron los siguientes costos de los egresos no reportados por parte de los sujetos denunciados:

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
Template y Equipo de Sonido	4	\$6,690.00	\$26,760.00
Grupo Musical	6	\$18,560.00	\$111,360.00
Total			\$138,120.00

En esa tesitura, al no reportar las aportaciones por los conceptos señalados por un monto de **\$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)**, se reitera que la Coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), numeral 1, de la Ley de Partidos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de la conducta materia de análisis.

4. Individualización de la Sanción.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley de Instituciones y la Ley de Partidos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley de Partidos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley de Partidos, especifica que “el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido reportar los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al INE, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de

responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.⁸

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto, bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que, ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,

⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;

d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se presente.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido

político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en el **considerando 2.4, apartado C**, se identificó que la Coalición omitió reportar el ingreso recibido, en beneficio de su campaña.

Por consiguiente, en el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado, consistente en haber incumplido con su obligación de reportar el ingreso recibido, atentando contra lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto realizado por concepto de seis (6) grupos musicales y cuatro (4) templete equipos de sonido, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, concretándose en el estado de Chihuahua, detectándose en el marco del procedimiento que nos ocupa.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado.

En ese sentido, el análisis del costo se realizó en el **considerando 3 “Determinación del Costo”**.

En ese orden de ideas, la Coalición vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley Partidos⁹ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁰, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad

⁹ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

¹⁰ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el **PAN** y **MC** cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que

mediante Acuerdo **IEE/CE40/2017**, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, determinó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2018 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante ese organismo electoral, quedando de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO	FINANCIAMIENTO PÚBLICO ACTIVIDADES ORDINARIAS
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$41,958,951.98
MOVIMIENTO CIUDADANO	\$10,614,194.05

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido incoado está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a la Coalición, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

PARTIDO POLÍTICO	DICTAMEN / RESOLUCIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2018	MONTO POR SALDAR
PAN	INE/CG516/2017	\$5,435.28	-	\$5,435.28
PAN	INE/CG516/2017	\$6,500.00	-	\$6,500.00
PAN	INE/CG516/2017	\$26,000.00	-	\$26,000.00
PAN	INE/CG516/2017	\$200,936.00	-	\$200,936.00
PAN	INE/CG516/2017	\$20,055.24	-	\$20,055.24
PAN	INE/CG516/2017	\$2,871.00	-	\$2,871.00
PAN	INE/CG516/2017	\$4,350.00	-	\$4,350.00

PARTIDO POLÍTICO	DICTAMEN / RESOLUCIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2018	MONTO POR SALDAR
PAN	INE/CG516/2017	\$33,872.00	-	\$33,872.00
PAN	INE/CG516/2017	\$12,024.43	-	\$12,024.43
PAN	INE/CG516/2017	\$3,500.00	-	\$3,500.00
PAN	INE/CG516/2017	\$137,905.44	-	\$137,905.44
PAN	INE/CG516/2017	\$168,961.29	-	\$168,961.29
PAN	INE/CG1109/2018	\$806.00	-	\$806.00
PAN	INE/CG1109/2018	\$403.00	-	\$403.00
PAN	INE/CG1109/2018	\$5,689.79	-	\$5,689.79
PAN	INE/CG1109/2018	\$62.64	-	\$62.64
PAN	INE/CG1109/2018	\$564.20	-	\$564.20
PAN	INE/CG1109/2018	\$886.60	-	\$886.60
PAN	INE/CG1109/2018	\$564.20	-	\$564.20
PAN	INE/CG1109/2018	\$7,657.00	-	\$7,657.00
PAN	INE/CG1109/2018	\$1,853.80	-	\$1,853.80
PAN	INE/CG1109/2018	\$9,913.80	-	\$9,913.80
PAN	INE/CG1109/2018	\$7,092.80	-	\$7,092.80
PAN	INE/CG1109/2018	\$10,155.60	-	\$10,155.60
PAN	INE/CG1109/2018	\$37,727.78	-	\$37,727.78
PAN	INE/CG1109/2018	\$13,791.17	-	\$13,791.17
PAN	INE/CG1109/2018	\$9,924.41	-	\$9,924.41
PAN	INE/CG1109/2018	\$101,512.83	-	\$101,512.83
PAN	INE/CG1109/2018	\$37,084.71	-	\$37,084.71
PAN	INE/CG1109/2018	\$4,390.13	-	\$4,390.13
Total		\$872,491.14	\$0.00	\$872,491.14

PARTIDO POLÍTICO	DICTAMEN / RESOLUCIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2018	MONTO POR SALDAR
MC	INE/CG526/2017	\$327,070.22	-	\$327,070.22
MC	INE/CG526/2017	\$545,117.03	-	\$545,117.03
MC	INE/CG526/2017	\$186,741.03	-	\$186,741.03
MC	INE/CG317/2022	\$2,264.70	-	\$2,264.70
MC	INE/CG317/2022	\$305.31	-	\$305.31
MC	INE/CG317/2022	\$284.52	-	\$284.52
MC	INE/CG317/2022	\$391.75	-	\$391.75
MC	INE/CG1109/2018	\$806.00	-	\$806.00
MC	INE/CG1109/2018	\$4,310.54	-	\$4,310.54
MC	INE/CG1109/2018	\$806.00	-	\$806.00
MC	INE/CG1109/2018	\$46,466.24	-	\$46,466.24

PARTIDO POLÍTICO	DICTAMEN / RESOLUCIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2018	MONTO POR SALDAR
MC	INE/CG1109/2018	\$48,240.25	-	\$48,240.25
MC	INE/CG1109/2018	\$15,363.46	-	\$15,363.46
MC	INE/CG1109/2018	\$161.20	-	\$161.20
MC	INE/CG1109/2018	\$241.80	-	\$241.80
MC	INE/CG1109/2018	\$161.20	-	\$161.20
MC	INE/CG1109/2018	\$1,934.40	-	\$1,934.40
MC	INE/CG1109/2018	\$483.60	-	\$483.60
MC	INE/CG1109/2018	\$2,498.60	-	\$2,498.60
MC	INE/CG1109/2018	\$1,773.20	-	\$1,773.20
MC	INE/CG1109/2018	\$2,579.20	-	\$2,579.20
MC	INE/CG1109/2018	\$9,544.22	-	\$9,544.22
MC	INE/CG1109/2018	\$3,488.83	-	\$3,488.83
MC	INE/CG1109/2018	\$2,511.90	-	\$2,511.90
MC	INE/CG1109/2018	\$25,680.29	-	\$25,680.29
MC	INE/CG1109/2018	\$9,381.53	-	\$9,381.53
MC	INE/CG1109/2018	\$1,110.60	-	\$1,110.60
Total		\$1,239,717.62	\$0.00	\$1,239,717.62

En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los integrantes de la **Coalición** al mes de octubre de dos mil dieciocho, si bien tienen saldos por pagar, los mismos son menores a la cantidad de ministración del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de esos institutos políticos, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

Además, debe tenerse en cuenta que, el tres de marzo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua mediante Resolución IEE/CE76/2018 aprobó la renuncia del Partido de la Revolución Democrática y en consecuencia, la modificación al convenio de coalición parcial, denominada "Por Chihuahua al Frente"; quedando en la cláusula OCTAVA del referido convenio, los montos de financiamiento que aportara cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, de la siguiente forma:

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición (Clausula 8va)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
PAN	\$14,685,633.19	75%	\$11,014,224.89	79.81%
MC	\$3,714,967.92	75%	\$2,786,225.94	20.19%
TOTAL			\$13,800,450.83	100%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.**¹¹

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)

*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones***

¹¹ Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.

(...)

En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.**

(...)

De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.**

(...)”.

[Énfasis añadido]

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente político, se actualizó al omitir reportar los egresos realizados, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el ente político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo revisión de Informes de Gastos de Campaña.

- Que el ente político no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (ciento por ciento)** sobre el monto involucrado (\$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)), cantidad que asciende a un total de **\$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)**.¹²

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición de cada uno de los partidos,¹³ este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **PAN** en lo individual lo correspondiente al **79.81% (setenta y nueve punto ochenta y un por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento

¹² Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

¹³ De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$110,233.57 (ciento diez mil doscientos treinta y tres pesos 57/100 M.N.)**.

Además, a **MC** en lo individual, lo correspondiente al **20.19% (veinte punto diecinueve por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$27,886.42 (veintisiete mil ochocientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley de Instituciones, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua, para la elección de Presidente Municipal en Meoqui.

Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es¹⁴ el límite que se establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. Es decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición o candidato puede gastar para realizar las actividades de campaña en una elección determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la obtención del voto.

¹⁴ Consultable en el glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la siguiente dirección electrónica: <http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert>

Además, es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del rebase de tope de gasto de campaña.

Tal y como se estableció en los apartados anteriores, esta autoridad acreditó la siguiente conducta infractora a la normatividad electoral en materia de fiscalización:

- Omitir reportar el gasto por concepto de seis (6) grupos musicales y cuatro (4) templates y equipos de sonido, determinándose un monto involucrado de \$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.).

Así las cosas, y toda vez que se advierte un monto total involucrado que asciende a **\$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)**, en el presente apartado se determinará si se generó un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua, por parte de **Ismael Pérez**.

En este contexto, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica **IEE/CE02/2018**, aprobado el trece de enero de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se estipuló el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidentes Municipales dentro del Proceso Electoral Local 2017 – 2018, en el estado de Chihuahua.

En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó con respecto al tope de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal, con relación al municipio de Meoqui, lo siguiente:

MUNICIPIO	TOPE MAXIMO DE GASTO DE CAMPAÑA
MEOQUI	\$695,537.70

Por lo que, esta autoridad procede a sumar el monto de \$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), al total de egresos del candidato señalado con anterioridad, obteniéndose los siguientes resultados finales:

Candidato	Cargo de la candidatura y Entidad Federativa	Egresos del candidato previo a los efectos de la presente Resolución ¹⁵ (A)	Monto involucrado (B)	Total de gastos (C)=(A)+(B)	Tope de gastos de campaña (D)	Monto restante en el tope de gastos (E)=(C)-(D)	Porcentaje de rebase
Ismael Pérez	Presidente Municipal Meoqui	\$175,605.54	\$138,120.00	\$313,725.54	\$695,537.70	\$381,812.16	No se acredita rebase

De lo descrito en la tabla anterior, se modifican las cifras del monto determinado al entonces candidato Ismael Pérez, en relación a los límites al tope de gastos de establecido para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

6. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **parcialmente fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la **Coalición**, así como en contra de su entonces candidato **Ismael Pérez**, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2.4** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se sanciona al **PAN** con una reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$110,233.57 (ciento diez mil doscientos treinta y tres pesos 57/100 M.N.)**.

Además, se sanciona a **MC** con una reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$27,886.42 (veintisiete mil ochocientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.)**.

TERCERO. Se modifican las cifras del monto determinado al entonces candidato Ismael Pérez, en relación a los límites al tope de gastos de campaña analizados en el **Considerando 5**, de la presente Resolución.

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como al quejoso, informándoles que, en términos del **considerando 6**, en contra de la presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de conformidad con la ley aplicable.

QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que la multa determinada en el resolutivo anterior, sea pagada a dicho Organismo Público Local Electoral, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley de Instituciones, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado.

SEXTO. Se instruye al I Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley de Instituciones, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, sea destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:
Gracias, Secretario del Consejo. _____

Vamos ahora al Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 19.5. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

En este caso seré muy breve, mi diferencia en torno a este Proyecto es una diferencia que hemos discutido en muchas ocasiones, que tiene que ver con la no revisión del Kárdex para efecto de determinación si los gastos son reportados o no reportados, lo que nos lleva, como se ha señalado en distintas ocasiones, a cajas negras en las que no sabemos cuánto, efectivamente, se gastó en un determinado bien, que puede ser entregado en distintos momentos. _____

Entonces, pediría una votación en lo particular por lo que hace a los Kárdex. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Procedemos con la votación Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 19.5, excluyendo de esta votación, por lo que se refiere a los Kárdex. ____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere a los Kárdex como viene el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

8 votos. _____

¿En contra? 2 votos. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1491/2018) Pto. 19.5 _____

INE/CG1491/2018

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ, OTRORA CANDIDATO A SENADOR POR MAYORIA RELATIVA, POSTULADO POR LA OTRORA COALICIÓN DENOMINADA “POR MEXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF/UTF/675/2018

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El tres de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja signado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la entonces Coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos; Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora Candidato a Senador de la República por el estado de México, denunciando hechos que considera, podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de realización de eventos de campaña, mismos que según el quejoso, beneficiaron al denunciado. (Fojas 2 a la 51 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

***“ASUNTO:** Ampliación de la queja presentada el día trece de julio ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.*

***Expedientes:** INE/Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/2018.*

***ACTOR:** Partido Revolucionario Institucional.*

***QUEJA:** Omisión de reportar gastos de campaña, así como en tiempo real, y en consecuencia el rebase de tope de gastos de campaña.*

**LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

**L.C. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE
FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

PRESENTES.

MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GOMEZ, en mi carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, personalidad que se encuentra debidamente reconocida por esta autoridad electoral, comparezco ante Usted debido para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8; 17; 41, Base V, Apartado c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en representación del Partido Revolucionario Institucional, por el cual vengo a ampliar la queja contenida en el expediente INE/Q-COF-UFT/495/2018.

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enuncia que los principios de **legalidad**, **equidad** y de **certeza** son rectores en la materia electoral.*

*El **principio de legalidad** consiste en el respeto irrestricto a las reglas establecidas en todo ordenamiento jurídico, tratándose de las competencias electorales, donde los sujetos, es decir, los destinatarios de esas normas, deben ajustar sus conductas a las hipótesis normativas.*

*El **principio de equidad** consiste en que la ley establece mecanismos o instrumentos a través de los cuales, todos los destinatarios de la norma, dependiendo su actuar o función, tienen garantizado el ejercicio de ciertos derechos o prerrogativas, en la medida de lo posible, lo más igualitario posible, donde, además, se asegura que ninguno de los sujetos de la norma obtenga beneficios o ventajas mayúsculas sobre los demás destinatarios del ordenamiento jurídico.*

*En este tenor, dichos principios al ser **rectores**, rigen a todos los destinatarios de la norma, sea en su calidad de autoridad o beneficiario de la misma, en todo acto electoral, por tanto, su respeto debe ser irrestricto.*

Ahora bien, para el caso de que alguno o algunos destinatarios de las normas jurídicas, en este caso las de carácter electoral, infrinjan, vulneren o violen alguno de los principios rectores, el cuerpo normativo prevé que serán sus autoridades, las encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades tanto de la propia autoridad, así como de los destinatarios de la misma.

*De igual forma, los **principios rectores**, así como todas las conductas y actos regulados en la normatividad electoral, son de observancia obligatoria, dado que las disposiciones electorales son de **orden público**, es decir, el respeto, la observancia y la tutela de los principios rectores de la materia electoral, no puede eximirse a ningún sujeto (sea en su calidad de destinatarios, autoridad o tercero), por tanto, es irrenunciable.*

Asimismo, es menester enunciar la interpretación del principio de legalidad producida por la máxima autoridad electoral nacional:

...

*La reforma constitucional y legal del año 2014 dotó de atribuciones **fiscalizadoras** al INE para "establecer una fiscalización efectiva y oportuna de los recursos" que utilizen los partidos y candidatos. Lo anterior, considerando que "la equidad [...] es uno de los más grandes y añejos reclamos" en nuestro sistema político.*

La Unidad Técnica de Fiscalización se creó como órgano técnico del INE para realizar la función de fiscalización:

...

Las facultades de investigación y verificación de la UTF tienen por objeto cumplir con el principio de CERTEZA que rige a los procesos electorales.

En relación al gasto directo en eventos de Juan Zepeda, caben las siguientes consideraciones:

- a. *Dentro de los 78 eventos que el entonces el candidato reportó al SIF, 3 fueron cancelados y 75 realizados. Del total de 78 eventos, 8 los clasificó como ONEROSOS y 70 como NO ONEROSOS; sin embargo, los elementos aportados en la queja respecto de los eventos clasificados como NO ONEROSOS muestran enormes similitudes y dispendio de recurso respecto de aquellos que fueron clasificados como ONEROSOS, circunstancia que constituye un claro indicador de que el otrora candidato intentó engañar a la autoridad electoral. Es por ello que se debe revisar a fondo cada uno de esos eventos (tanto aquellos en los que hubo presencia de auditores INE, como en los que no), tomando en consideración, entre otras cosas, los requisitos establecidos en el acuerdo INE/CG597/2017 que establece las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, para el PEF 2017-2018, a efecto de reclasificar estos eventos, cuantificarlos y sumarlos a su tope de gastos de campaña.*
- b. *Además de los eventos ya incluidos en el escrito inicial de la queja, en redes sociales se identificaron otros 8 eventos realizados por el entonces candidato Juan Zepeda, 4 de los cuales fueron reportados como NO ONEROSOS y los otros cuatro NO FUERON REPORTADOS a la autoridad electoral, mismos que deben ser investigados, cuantificados y sumados al tope de gastos.*
- c. *De una investigación realizada por esta representación, se advirtió que el INE no cumplió con el 20% del alcance de visitas a los eventos de Juan Zepeda, en términos de lo ordenado en el acuerdo CF/012/2017, lo que permitió a ese candidato realizar un sinnúmero de gastos de campaña sin reportarlos en el SIF.*

En consecuencia, se solicita a esa autoridad que profundice en la investigación de los indicios probatorios aportados consistentes en los links de redes sociales y redes abiertas, respecto de los cuales se solicitó oportunamente su certificación, para que cuantifique todos aquellos que implicaron gastos no reportados y los sume al tope de gastos de este candidato.

De la información pública visible en la página del INE, en el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización, se advierte que en el rubro denominado como "Prorrates", el otrora candidato Juan Zepeda no tiene cargado gasto alguno, a pesar de que fue público y notorio que participó en múltiples actos de campaña en compañía de otros candidatos, en los que participó haciendo uso de la palabra y solicitando el voto a su favor y/o a favor de la coalición que lo postuló como candidato. En consecuencia, esa autoridad debe investigar a fondo, en ejercicio de sus facultades, todos aquellos eventos en los que Juan Zepeda participó y obtuvo un beneficio, con la finalidad de realizar el prorrates de gastos que corresponda.

ELEMENTOS DE PRUEBA NUEVOS RELACIONADOS CON LA QUEJA BASAL

EVENTOS REPORTADOS POR JUAN ZEPEDA COMO NO ONEROSOS Y QUE SI SE DESPRENDE QUE SEAN ONEROSOS (NO DETECTADOS PREVIAMENTE).

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	Fecha	Municipio	Asis- tente s	Descripción	Link a publicación en la red social Facebook
43	29/04/2018	Ixtapaluca	400	MONITOREADO POR EL INE Audio y sonido vallas Viseras ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE) BANDERAS BANDERAS BANDERAS LONAS PARA EL EVENTO (PARA TAPAR) PLANTA DE LUZ PLAYERAS SILLAS TEMPLETE Y ESCENARIOS VINILONAS VINILONAS VINILONAS VINILONAS	https://twitter.com/prdedome/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepe/status/990636515205271553 https://twitter.com/prdedome/status/990608914596196352
44	12/05/2018	Tlalnepantla	300	Evento que encabeza Juan Zepeda en el que se observa un templete que forma parte de un camión de carga. Una lona que cubre una superficie de alrededor de 300 metros cuadrados. Chalecos, gorras, banderas, playeras.	https://twitter.com/JuanZepe/status/995350419751698434 https://twitter.com/Quadratin/status/995350419751698434
					Edomx/status/995398768286674944 https://twitter.com/JuanZepe/status/995429192119607296
45	31/05/2018	Acolman	150	Evento político encabezado por Juan Zepeda donde se observan banderas con los logos de los partidos de la coalición y otros utilitarios. El evento se realiza en un área abierta cubierta con una lona de aproximadamente 10 x 18 metros.	https://twitter.com/JuanZepe/status/1002351556132593665
46	01/06/2018	San Simón de Guerrero	200	Evento encabezado por Juan Zepeda en la plaza principal de la localidad. Se observan playeras amarillas con el nombre del candidato y una lona de 12 metros cuadrados con su imagen y nombre.	https://twitter.com/JuanZepe/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1836445816421347

**43) Ixtapaluca
(Imagen)**

FECHA	29-04-18
LUGAR	IXTAPALUCA
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	En #Ixtapaluca #ElFrenteVa #PorElEdomexAlFrente #PorMéxicoAlFrente
CONSECUTIVO	1
	https://twitter.com/prdedome/status/990662507479097345

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$15,000.00	\$15,000.00
2	VALLAS	30	58.00	\$1,740.00
3	TEMPLETE	1	\$8,000.00	\$8,000.00
	TOTAL			\$16,740.00

C	UTILITARIOS
1	BANDERA PAN
2	BANDERA AMARILLA
3	BANDERA NARANJA
4	GORRA MC
5	GORRA PRD

**44) Tlalnepantla
(Imagen)**

FECHA	12-05-18
LUGAR	TLALNEPANTLA
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	En #Tlalnepantla vamos a ganar este 1 de julio, el #Frente es la mejor opción! #JuanZepedaSenador
CONSECUTIVO	2
	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434 https://twitter.com/Quadratin_Edomx/status/995398768286674944 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296
LINK	

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	TEMPLETE / TRAILER	1	\$15,000.00	\$15,000.00
TOTAL				\$15,000.00

C	UTILITARIOS
1	BANDERA PAN
2	BANDERA PRD
3	BANDERA NARANJA MC
4	BANDERA COALICIÓN
5	CHALECO AZUL
6	LONA JUAN ZEPEDA

**45) Acolman.
(Imagen)**

FECHA	31-05-18
LUGAR	ACOLMAN
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	En #Acolman acompañando a Enrique Valencia, candidato a presidente municipal, Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 39 y Norma Espinosa, candidata a diputada federal por el distrito 5. ¡Desde el Senado haremos posible el cambio en ésta región!
CONSECUTIVO	3
LINK	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	TEMPLETE	1	\$8,000.00	\$8,000.00
2	LONA DE APROX 20X10 MTS	1	\$5,000.00	\$5,000.00
TOTAL				\$13,000.00

C	UTILITARIOS
1	BANDERA PRD
2	BANDERA NARANJA MC
3	BANDERA BLANCA PRD
4	CAMISA BLANCA
5	LONA JUAN ZEPEDA

**46) San Simón de Guerrero.
(Imagen)**

FECHA	1-06-18
LUGAR	SAN SIMÓN DE GUERRERO
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Finalizamos nuestra gira en los municipios del sur del #Edomés en #SanSimónDeGuerrero acompañando a Sara Mora, candidata a presidenta municipal y Rosalva Hernández, candidata a diputada local por el distrito X. No nos queda duda que tenemos a los mejores candidatos a senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales. ¡El sur ganará con el Frente!
CONSECUTIVO	4

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$8,000.00	\$8,000.00
TOTAL				\$8,000.00

C	UTILITARIOS
1	PLAYERA AMARILLA ZEPEDA
2	LONA JUAN ZEPEDA

**EVENTOS NO REPORTADOS AL INE POR JUAN ZEPEDA (NO DETECTADOS
PREVIAMENTE).**

#	Fecha	Municipio	Asis- tente s	Descripción	Link a publicación en la red social Facebook
15	15/06/2018	San Martín de las Pirámides	200	Recorrido y evento político. Se observa un enlonado, lona de identificación con la imagen y nombre de Juan Zepeda. Micrófono y bocinas. Matracas y batucada. Se observan banderas de distintos colores. Playeras tipo polo negras con el nombre de Juan Zepeda, chalecos amarillos, gorras, camisas blancas bordadas con los logos de la coalición y personalizadas. Template de 24 metros cuadrados. Dos micrófonos alámbricos.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/
16	15/06/2018	Teotihuacán	300	Recorrido por el mercado y calles de Teotihuacán, donde Juan Zepeda entrega utilitarios diversos. Se observan chalecos y banderas con los logos de los partidos que forman la coalición.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957
17	26/06/2018	La Paz	1500	JUAN ZEPEDA acompaña al candidato a Presidente Municipal de La Paz, en la comunidad de San Isidro. El evento se desarrolla en un área cubierta con estructura metálica. Se observan banderas, chalecos, gorras, equipo de sonido.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804
18	26/06/2018	Chapa de Mota	250	JUAN ZEPEDA encabeza un evento de cierre de campaña en un auditorio cerrado. Se observan lonas de identificación con su nombre e imagen. Chalecos, 200 banderas con logos del PAN, PRD y MC.	https://twitter.com/JuanZepe/status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781

**15) SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
(Imagen)**

FECHA	15/06/2018
LUGAR	SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	San Martín de las Pirámides
CONSECUTIVO	1
LINK	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$8,000.00	\$8,000.00
2	LONA	1	4,000.00	4,000.00
3	BATUCADA	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL				\$13,500.00

C	UTILITARIOS
1	LONA JUAN ZEPEDA
2	CAMISA BLANCA

**16) TEOTIHUACAN.
(Imagen)**

FECHA	15/06/2018
LUGAR	TEOTIHUACAN
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	San Martín de las Pirámides
CONSECUTIVO	2
LINK	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957

C	UTILITARIOS
1	CAMISA BLANCA
2	BANDERA PAN BLANCA
3	BANDERA PRD AMARILLA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

17) LA PAZ
(Imagen)
Fecha 26/06/2018

LUGAR	LA PAZ
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Llegada de José Luis Mondragón, candidato a presidente municipal de La Paz a su cierre regional de campaña en la comunidad de San Isidro. Llegó acompañado de Juan Zepeda y Omar Ortega.
CONSECUTIVO	3
LINK	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$10,000.00	\$10,000.00
2	VALLAS	30	58.00	1,740.00
3	TEMPLETE	1	5,000.00	5,000.00
4	FLORES	1	2,000.00	2,000.00
5	LONA DE APROX 30X10	1	5,000.00	5,000.00
6	SILLAS	500	7.50	3,750.00
TOTAL				\$27,490.00

C	UTILITARIOS
1	LONA JUAN ZEPEDA
2	BANDERINES PRD
3	BANDERA PRD AMARILLA
4	BANDERA PRD JUAN ZEPEDA
5	CAMISA BLANCA
6	PLAYERA JUAN ZEPEDA

18) CHAPA DE MOTA
(Imágenes)

FECHA	26/06/2018
LUGAR	CHAPA DE MOTA
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Cerramos campaña en #ChapaDeMota! Cada día estamos más cerca del triunfo
CONSECUTIVO	4
LINK	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	LUGAR CERRADO	1	\$3,000.00	\$3,000.00
2	SILLAS	500	7.50	3,750.00
3	AUDIO	1	5,000.00	5,000.00
TOTAL				\$11,750.00

C	UTILITARIOS
1	LONA 60X1 MT JUAN Z
3	BANDERA PRD AMARILLA
4	BANDERA PAN
5	BANDERA MOVIMIENTO C

EVENTO REALIZADOS EN CAMPAÑA CONJUNTO CON EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Fecha	Municipio	Asistentes	Descripción	Link a publicación
23/04/2018	Naucalpan	3000	Evento realizado en un auditorio al que asiste el candidato	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

		presidencial Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/videos/1865415063524422/ https://twitter.com/JuanZepeda_/status/1010654864819380225 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/1010704793696854016
11/04/2018	Toluca	Evento al que asisten Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/photos/a.316400948425849.73368.306365536096057/1782383788494217/?type=3&theater https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/posts/1781594165239846

...”

Aunado a lo anterior, para el efecto de soportar el valor otorgado a los gastos en la queja basal y en el presente escrito, se presenta a esta autoridad las cotizaciones con el proveedor Comercializadora Gabo, Razón Social: Magali Vara Miranda, RFC: VAMM790409E15, para el efecto de soportar el valor real de los gastos erogados por los denunciados, en los anexos correspondientes.

III. Elementos de prueba aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- **DOCUMENTAL TÉCNICA.** Consistente en trece fotografías y treinta y ocho URL's, relacionadas con los eventos denunciados.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/564/2018, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado, el día 31 de julio de 2018, mediante el cual se solicita la certificación de dieciséis URL's.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/568/2018, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado, el día 1 de agosto de 2018, mediante el cual se solicita la certificación de seis URL's

- **DOCUMENTAL.** Consistente en el oficio que sirva girar esta Unidad Técnica de Fiscalización a Oficialía Electoral, con el de que le remita la certificación de las URL's antes mencionadas.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en un anexo que contiene tablas con la fecha y el lugar de realización de los supuestos 64 eventos de campaña denunciados, así como una cotización realizada por el quejoso.

IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, formar el expediente con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**; admitirse a trámite y sustanciación; notificar al Secretario del Consejo General así como al Consejero Presidente de la Comisión de la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento en que se actúa; así como notificar y emplazar a los partidos políticos denunciados (Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática), así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, y publicar dicho acuerdo en estrados de este Instituto. (Foja 1 del expediente).

V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de queja.

a) El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijo en los estrados del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 52 del expediente).

b) El diez de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y la cédula respectiva fueron publicados oportunamente. (Foja 53 y 54 del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41175/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 55 del expediente).

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos

mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41176/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 56 del expediente).

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41181/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 57 a la 59 del expediente).

b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de oficio, se recibió respuesta por el Maestro Camerino Eleazar en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 60 a la 105 del expediente).

“(…)

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

...

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar

que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

La parte quejosa, denuncia 4 eventos, con el argumento de "EVENTOS REPORTADOS POR JUAN ZEPEDA COMO NO ONEROSOS Y QUE, SI SE DESPRENDEN QUE SEAN ONEROSOS", de los cuales se hace los siguientes comentarios:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
43	29/04/2018	Ixtapaluca	400	Audio y sonido, vallas, viseras, artistas (payasos, grupos de danza, zancos, botargas y lucha libre), banderas, lonas para el evento, planta de luz, playeras, sillas, templete y escenarios, vinilonas.	https://twitter.com/prdedomex/status/990662507479097345	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Juan Zepeda con la póliza PN3/DR-125/06-18
44	12/05/2018	Tlalnepantla	300	Evento que encabeza Juan Zepeda en el que se observa un templete que forma parte de un camión de carga. Una lona que cubre una superficie de alrededor de 300 metros cuadrados, chalecos, gorras, banderas, playeras.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Fernanda Rivera, Aldo Bruno Guerrero Vázquez candidato por el Distrito electoral federal 19 del Estado de México Tlalnepantla de Baz; los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18,
						PN2/DR-51/05-18 Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
45	31/05/2018	Acolman	150	Evento político encabezado por Juan Zepeda donde se observan banderas con los logotipos de los partidos de la coalición y otros utilitarios. El evento se realiza en un área abierta cubierta con una lona de aproximadamente 10 x 18 metros.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Enrique Valencia, candidato a presidente municipal, Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 39 y Norma Espinosa, candidata a diputada federal por el distrito 5, los gastos

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18 Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.-
						PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
46	01/06/2018	San Simón de Guerrero	200	Evento encabezado por Juan Zepeda en la plaza principal de la localidad. Se observan playeras amarillas con el nombre del candidato y una lona de 12 metros cuadrados con su imagen y nombre.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Sara Mora candidata a presidenta municipal y Rosalva Hernández, candidata a diputada local por el distrito 10, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18;

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
15	15/06/2018	San Martín de las Pirámides	200	Recorrido y evento político. Se observa un enlonado, lona de identificación con la imagen y nombre de Juan Zepeda. Micrófono y bocinas. Matracas y batucada. Se observan banderas de distintos colores. Playeras tipo polo negras con el nombre de Juan Zepeda, Chalecos amarillos, gorras, camisas blancas bordadas, con los logos de la coalición y personalizadas. Template de 24 metros cuadrados. Dos micrófonos inalámbricos.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Erick Ruiz Medina candidato a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-67/06-18.
16	15/05/2018	Teotihuacán	300	Recorrido por el mercado y calles de Teotihuacán, donde Juan Zepeda entrega utilitarios diversos. Se observan chalecos y banderas con los logos de los partidos que forman la coalición.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 39 y René Monterrubio, candidato a Presidente Municipal, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-
						42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-67/06-18.
17	26/06/2018	La Paz	1500	Juan Zepeda acompaña al	https://www.facebook.com/	El evento se encuentra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
				candidato a presidente municipal de La Paz, en la comunidad de San Isidro. El evento se desarrolla en un área cubierta con estructura metálica. Se observan banderas, chalecos, gorras, equipo de sonido.	PRDedomex/pagina/videos/1869945586404703/	registrado en la contabilidad del candidato (a) José Luis Mondragón, candidato a presidente municipal de La Paz, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.-
						PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
18	26/06/2018	Chapa de Mota	250	Juan Zepeda encabeza un evento de cierre de campaña en un auditorio cerrado. Se observan lonas de identificación con su nombre e imagen. Chalecos, 200 banderas con logos del PAN, PRD y MC.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011447752012660741	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Leticia Zepeda Martínez candidata a presidenta municipal, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
1	23/04/2018	Naucalpan	3000	Evento realizado en un auditorio al que asiste el candidato presidencial Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536	El evento se encuentra registrado en la póliza de diario número 7 del tercer periodo. P3C/DR-07/06-18; los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.-

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
2	11/04/2018	Toluca		Evento al que asisten Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1781594165239846	El evento se encuentra registrado en el PERIODO DE OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:200, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO y en la póliza PERIODO DE OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:34, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:EGRESOS, de la contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortes.; los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18,
						PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didacticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.

No deba pasar por desapercibido que la parte quejosa ofrece como pruebas para soportar sus imputaciones diversas fotografías alojadas en la página personal de la red social Facebook y twitter, del PRD estado de México, que denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe

pasar por desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como son la de Facebook y twitter de los ciudadanos, precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora.

*En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, **para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía**, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, **de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora**, pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, **medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores**, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.*

Bajo estas circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.

...

En este mismo contexto, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes sociales.

2. También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se haya

efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo indubitadamente ni administrándolo con algún otro medio de convicción que robustezca sus aseveraciones.

Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente criterio judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:

...

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja son oscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde su particular y subjetivo punto de vista, lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad litteram" de la siguiente forma:

En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.

Misma suerte corre lo relativo a los eventos que denuncia el quejoso y que identifica como "anexo 1", de los cuales, se concreta a mencionar una supuesta fecha, un supuesto municipio, número de supuestos asistentes, supuesto costo del evento, por lo que desde este momento **se objeta en todo su contenido, alcance y valor que se le pretenda dar**, dado que, dado que la acusación vertida no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, por lo que en términos de lo expuesto con anterioridad, argumento que se solicita se tenga por reproducido en este acto, como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, el escrito de queja, al no cumplir con las premisas antes mencionadas, debe ser desechado de plano.

Así mismo, la objeción de los costos o precios indicados por la parte actora en el asunto que nos ocupa, son sumamente exagerados que caen en los desproporcionales conforme a cualquier precio de mercado.

...

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.

Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento..."

(...)"

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41180/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 106 a la 108 del expediente).

b) El dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0813/2018, el C. Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 109 a la 111 del expediente).

“(…)

Al respecto me permito manifestar; en primer orden de ideas, que cada Partido Político, así como candidatos serán responsables en lo individual de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan a la campaña respectiva; así como de responder en forma individual de las controversias jurídicas que se generen con motivo del Proceso Electoral 2017-2018.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la cláusula SEXTA, ÚLTIMO PÁRRAFO del Convenio de coalición "Por el Estado de México al Frente", que a la letra señala:

...

En esa tesitura; queda de manifiesto que, si bien es cierto que el C. C. Juan Manuel Zepeda Hernández, contendió como candidato a Senador de la República por la Coalición "Por México al Frente", también lo es, que se encuentra signado por el Partido de la Revolución Democrática.

*Corolario a lo anterior, es **menester ADHERIRME a los argumentos esgrimidos por el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid**, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante escrito de Contestación a Emplazamiento fechado el 21 de julio de 2018, deducido del expediente citado al epígrafe del presente libelo...”*

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41179/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 112 a la 114 del expediente).

b) El catorce de agosto del dos mil dieciocho, mediante escrito con número de oficio MC-INE-760/2018, el C. Juan Miguel Castro Rendón dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 115 a la 119 del expediente).

“(…)

Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/41179/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el ocho de agosto de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja interpuesta por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República por el Estado de México, por la Coalición "Por México al Frente", integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, a efecto que esa autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda, ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En cuanto a lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:

DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará conformado por un representante propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.

Aunado a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Coalición, que se desprende:

Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de los gastos de campaña del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas y los Candidatos a Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad del Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.

Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad; en tanto que de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los postuló en la entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.

Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración.

Las sanciones que se impongan a la Coalición serán cubiertas por todos los Partidos Políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad es el Partido de la Revolución Democrática, al ser el partido que postulo al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, como candidato al Senado por el Estado de México, por lo tanto, son los encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes, sus alegatos y la documental técnica contable que deberá de acompañar para demostrar su dicho.

...

Para acreditar nuestro dicho ofrecemos las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTAL. - Consistente en el convenio de coalición "Por México al Frente" conformado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cual obra en archivos de ese instituto, el cual también puede ser consultado en la siguiente liga:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95266/CGex201803-23-rp-3-a1.pdf>.

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que esta autoridad, pueda deducir de los hechos aportados y en todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida.

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie a MOVIMIENTO CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida..."

(...)"

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Juan Manuel Zepeda Hernández Candidato a Senador de la Republica.

a) El día diez de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE29-MEX/VE/774/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, corriéndole traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 122 a la 126 del expediente).

b) El catorce de agosto del año dos mil dieciocho, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 127 a la 173 del expediente).

“(…)

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

...

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los (hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos

claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en mi campaña como candidato a Senador de la Republica, del Estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

(CUADRO INSERTO)¹

No deba pasar por desapercibido que la parte quejosa ofrece como pruebas para soportar sus imputaciones diversas fotografías alojadas en la página personal de la red social Facebook y twitter, del PRD estado de México, que denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que fa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como son la de Facebook y twitter de los ciudadanos, precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora.

En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder

¹ La transcripción del cuadro se omite en virtud de que es el mismo que presento en su escrito de desahogo el Partido de la Revolución Democrática, el cual se encuentra en el Antecedente VIII de la presente Resolución.

libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los interesados, consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.

■ *Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontáneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.*

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja son oscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos antifilológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde su particular y subjetivo punto de vista, lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad litteram" de la siguiente forma:

...

En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante. Misma suerte corre lo relativo a los eventos que denuncia el quejoso y que identifica como o "anexo 1", de los cuales, se concreta a mencionar una supuesta fecha, un supuesto municipio, número de supuestos asistentes, supuesto costo del evento, por lo que desde este momento se objeta en todo su contenido, alcance y valor que se le pretenda dar, dado que, dado que la acusación vertida no se encuentra ubicada en modo,

tiempo, lugar y circunstancias, por lo que en términos de lo expuesto con anterioridad, argumento que se solicita se tenga por reproducido en este acto, como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesa, el escrito de queja, al no cumplir con las premisas antes mencionadas, debe ser desechado de plano. Así mismo, la objeción de los costos o precios indicados por la parte actora en el asunto O que nos ocupa, son sumamente exagerados que caen en los desproporcionales conforme a cualquier precio de mercado.

Pese a lo anterior, de los eventos denunciados, en aquellos que, conforme a los escasos y oscuros datos proporcionados por el quejoso se pudieron ubicar, se manifiesta lo siguiente:

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. *Constante en todos y cada una de las Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de mi campaña como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.*

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, *Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a mis intereses como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.*

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, *Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a mis intereses como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos,...*

(...)"

XII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41177/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Emilio Suarez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 174 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral.

a) El diez de agosto dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1158/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara en sus archivos se localizaban registros de los gastos con motivo de la realización de los eventos denunciados, materia de la queja. (Fojas 175 a la 179 del expediente).

b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/3100/18, mediante el cual la Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento de información. (Fojas 180 y 181 del expediente).

c) El treinta y uno de agosto dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1243/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, realizo nuevamente un requerimiento de información respecto de 6 eventos. (Fojas 216 y 217 del expediente).

d) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/3166/18, mediante el cual la Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento de información. (Fojas 218 y 219 del expediente).

XIV. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1213/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, realizar la certificación de las ligas electrónicas ofrecidas como prueba de los eventos. (Fojas 183 a la 185 del expediente).

b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/3110/2018 mediante el cual se recibió la certificación de las ligas electrónicas. (Fojas 186 a la 215 del expediente).

XV. Solicitud de información a Facebook.

a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42632/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a los titulares de la Red Social Facebook si había pautado en las ligas electrónicas presentadas por el quejoso relacionadas con los eventos materia de la queja. (Fojas 220 a la 226 del expediente).

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió escrito dando respuesta al requerimiento realizado mediante el cual se comenta lo siguiente comenta que no se encontró información comercial respecto a las URL's y no están, ni estuvieron asociadas a una campaña publicitaria. (Fojas 227 y 228 del expediente)

XVI. Razón y Constancia.

a) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se integró al expediente, Razón y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de hacer constar pólizas encontradas en el SIF de uno de los eventos denunciados. (Foja 182 del expediente).

b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en San Martín Pirámides, Teotihuacán, Estado de México, mismo que fue celebrado el quince de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato a Presidente Municipal por el referido municipio y quien se encuentra relacionado con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición "Por México al Frente". (Foja 352 del expediente)

c) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Ixtapaluca, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintinueve de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito XII, la C. Rocío Guzmán Suárez

y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 349 del expediente)

d) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en San Simón de Guerrero, Estado de México, mismo que fue celebrado el uno de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Presidente Municipal por dicho municipio, la C. Sara Mora de Jesús y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 350 del expediente)

e) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Chapa de Mota, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Presidente Municipal por dicho municipio, la C. Leticia Zepeda Martínez y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 351 del expediente)

f) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mismo que fue celebrado el doce de mayo de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por los CC. María Fernanda Rivera Sánchez y Juan Manuel Zepeda Hernández, ambos entonces candidatos al Senado de la República; postulados por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 354 del expediente)

g) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Acolman, Estado de México, mismo que fue celebrado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XXXIX por el Estado de México,

la C. Griselda Araceli Sánchez Quezada y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 355 del expediente)

h) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en La Paz, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato a Presidente Municipal por el referido municipio y quien se encuentra relacionado con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 356 del expediente)

i) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Toluca, Estado de México, mismo que fue celebrado el once de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato C. Juan Manuel Zepeda Hernández, al cargo al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Fojas 397 a la 399 del expediente)

j) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Naucalpan, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato C. Juan Manuel Zepeda Hernández, al cargo al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Fojas 400 a la 402 del expediente)

XVII. Solicitud a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral para la remisión de los oficios solicitados por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en los cuales solicito la certificación de las ligas electrónicas a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral y anexo sus acuses a la queja de mérito mismos que se precisan a continuación:

a) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1368/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección

del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remitiera copias de las certificaciones realizar por esa Dirección que fue solicitada por el quejoso mediante los oficios **PRI/REP-INE/564/2018 y PRI/REP-INE/568/2018**. (Fojas 389 y 390 del expediente).

b) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/3530/2018 mediante el cual se recibió copias de las certificaciones solicitadas. (Fojas 357 a la 388 del expediente).

XVIII. Alegatos. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y dos horas formularan sus alegatos.

a) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46373/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 409 y 410 del expediente).

b) A la fecha esta autoridad no tiene conocimiento que el partido político haya manifestado respuesta alguna.

c) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46375/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 407-408 del expediente).

d) En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-876/2018 el Partido Movimiento Ciudadano dio contestación al requerimiento; ratificando su escrito de contestación a la queja y adicionando, que en su consideración al quejoso no le asiste la razón, ya que el actuar fue conforme a derecho, en virtud de que fue registrado de manera oportuna e idónea en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que atendiendo las pruebas ofrecidas por los denunciados se solicita que se declare infundado. (Fojas 411-416 del expediente).

e) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46374/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 403-404 del expediente).

f) En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Partido de la Revolución Democrática dio contestación de alegatos, manifestando nuevamente que los hechos denunciados son imprecisos, no aportan medios de prueba idóneos, oscuros e inverosímiles, además que no proporciona elementos que brinden certeza para establecer de manera precisa los eventos en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como reiterando el cuadro y señalando lo mismo que manifestó en su contestación al emplazamiento, mismo que ya ha sido transcrito en el antecedente VIII. (Fojas 417-444 del expediente).

g) El treinta de octubre de dos mil dieciocho en vía de colaboración, se notificó al quejoso la apertura de la etapa de alegatos, mediante oficio. INE/UTF/DRN/46372/2018, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 405-406 del expediente).

h) En fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el quejoso dio contestación manifestando que los sujetos denunciados no han actuado en congruencia con el régimen de transparencia y rendición de cuentas, en el que se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación que compruebe el destino de los recursos que se reciben, por lo tanto no se puede corroborar la licitud en sus operaciones además de que no utilicen mecanismos ilegales que coloquen a algún contendiente en una situación de ventaja. Aunado a lo anterior se concatena con las pruebas ofrecidas, por lo que para el quejoso el presente procedimiento es evidente que debe ser resuelto como fundado. (Fojas 445-451 del expediente).

i) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, en vía de colaboración, se notificó al candidato denunciado C. Juan Manuel Zepeda Hernández, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.

j) A la fecha esta autoridad no tiene conocimiento que el denunciado haya manifestado respuesta alguna.

XIX. Cierre de Instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la

Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández.

CONSIDERANDOS

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y toda vez que el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las causales de sobreseimiento, mismas que deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Lo anterior a fin de proteger el principio *non bis in ídem*, que constituye una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:

**“Artículo 32.
Sobreseimiento**

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

*I. El procedimiento respectivo haya **quedado sin materia**”*

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que los hechos denunciados, consistentes en la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de la realización de 78² eventos de campaña por parte de la otrora Coalición denominada “Por México al Frente” y su entonces candidato a Senador de la República por el estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, fueron materia del procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de expediente INE/Q-COF/UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF/UTF/602/2018, el cual fue resuelto en la Resolución identificada con el número **INE/CG1066/2018**³ así como en el Dictamen y la Resolución respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017- 2018, identificada con el numero **INE/CG1097/2018**⁴, aprobados todos, en la sesión extraordinaria de este Consejo General celebrada el seis de agosto del dos mil dieciocho. **Aseveración que encuentra sustento en el hecho, de que el quejoso pretendía una ampliación respecto a lo denunciado en los expedientes INE/Q-COF/UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-**

² El quejoso Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su escrito presentado el trece de julio de julio de dos mil dieciocho, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández (escrito que dio origen al expediente INE/Q-COF/UTF/602/2018 mismo que se resolvió en la Resolución INE/CG1066/2018) , señala que toma la cifra de 78 eventos del SIF, sistema de informática propio del Instituto y cuya información y documentación es analizada y estudiada en su totalidad al momento de la elaboración del Dictamen Consolidado que en cada caso corresponda.

³<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97832/CGex201808-6-rp-1-310.pdf>

⁴<https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-agosto-2018/>

COF/UTF/602/2018; señalando entre (otras circunstancias) de nueva cuenta, 78 eventos; que referenciaban o fungían como antecedentes en su escrito; y que a consideración de la Unidad Técnica, motivaba no una ampliación; sino un estudio diverso.

Por lo que nos permitimos exponer a continuación los razonamientos expuestos en la Resolución **INE/CG1066/2018**.

El dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja presentado por el C. Alejandro Hernández Acosta en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Órgano Electoral Distrital desconcentrado Número 25 del Instituto Electoral del estado de México, en contra de las Coaliciones “Por México al Frente” y “Por el estado de México al Frente”, así como a los CC. Juan Manuel Zepeda Hernández, Candidato a Senador y Araceli Casasola Salazar Candidata a Diputada Local por el Distrito 25, ambos en el estado de México, denunciando hechos que a su consideración constituían infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en irregularidades en los Identificadores Únicos en espectaculares, en consecuencia, el día cinco del mismo mes y año se tuvo por admitida la queja mencionada bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018**, derivado de la sustanciación y en relación con los hechos denunciados, el día trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, otro escrito de queja, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, mediante el cual denunció supuestos gastos no reportados por concepto de la realización de **78 eventos de campaña** así como diversos gastos no reportados por concepto de propaganda en la vía pública que beneficiaron al referido candidato a Senador de la República por el Estado de México, postulado por la Coalición “Por México al Frente.

En razón de lo anterior y por existir litispendencia y conexidad en la causa, se tuvo por recibida bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/602/2018** y se ordenó su respectiva acumulación al expediente primigenio número **INE/Q-COF-UTF/495/2018** a efecto que se identificara con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF/UTF/675/2018

En este contexto, el quejoso denunció que el entonces candidato incoado había realizado erogaciones por concepto de la realización de 78⁵ eventos de campaña de los cuales 42 habían sido reportados como no onerosos, cuando a dicho del quejoso, debieron ser reportados como onerosos, asimismo refiere que 24 de los eventos no habían sido reportados, situación que es incongruente tomando en cuenta que la información que tomo la extrajo de os propios informes publicados por este Instituto, como se observa, es oportuno señalar que la parte acusadora señala que la información proporcionada en su escrito de queja, relacionada con los eventos denunciados, la tomo de los datos publicados por este propio Instituto.

Para mayor claridad se anexa tabla con la relación de los eventos denunciados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**.

FECHA	MUNICIPIO	DISTRITO	EVENTOS
15/04/2018	26-Chalco	33-Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias
16/04/2018	55-Metepec	27-Metepec	Inauguración De La Escultura Simbólica De La Olla Voraz
17/04/2018	66-Atumba	06-Teotihuacán	Convivencia En La Zona De Las Pirámides
18/04/2018	60-Nezahualcóyotl	20-Cd. Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl
19/04/2018	105-Tlalnepantla De Baz	18-Tlalnepantla De Baz	Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
20/04/2018	105-Tlalnepantla De Baz	18-Tlalnepantla De Baz	Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
23/04/2018	107-Toluca	26-Toluca	Acompañame
29/04/2018	40-Ixtapaluca	21-Amecameca	Recorrido En Ixtapaluca Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 20416
30/04/2018	60-Nezahualcóyotl	31-Cd. Nezahualcóyotl	Firma Del Pacto Por La Infancia Y Compromiso
02/05/2018	34-Ecatepec De Morelos	04-Nicolás Romero	El Luto Lo Vivimos Todos
05/05/2018	61-Nicolás Romero	04-Nicolás Romero	Escuchar Para Legislar
07/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Develación De La Placa
08/05/2018	60-Nezahualcóyotl	31-Cd. Nezahualcóyotl	Corrupción En Las Fuerzas Policiales Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 19165
08/05/2018	60-Nezahualcóyotl	25-Cd. Nezahualcóyotl	En Busca De La Policía Ejemplar.
09/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Desarrollo Sustentable
12/05/2018	105-Tlalnepantla De Baz	19-Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández
13/05/2018	38-Huixquilucan	18-Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes
14/05/2018	122-Valle De Chalco Solidaridad	32-Valle De Chalco Solidaridad	Por Un Salario Constitucional Digno
16/05/2018	58-Naucalpan De Juárez	22-Naucalpan	Ellos También Son Banda No Al Maltrato Animal Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 26110
21/05/2018	105-Tlalnepantla De Baz	19-Tlalnepantla De Baz	A Trabajos Iguales Salarios Iguales
23/05/2018	32-Chimalhuacán	25-Chimalhuacán	Agua Con El Agua
24/05/2018	26-Chalco	33-Chalco	Acompañando A Alicia Aguila Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 25277
24/05/2018	22-Coacatlán	33-Chalco	Acompañando A Tomás Suárez
24/05/2018	60-Nezahualcóyotl	25-Cd. Nezahualcóyotl	Arranque De Campaña Y Toma De Protesta
24/05/2018	60-Nezahualcóyotl	25-Cd. Nezahualcóyotl	Acompañando A Teresa Álvarez
24/05/2018	32-Chimalhuacán	25-Chimalhuacán	Acompañando A Giovanni Sandoval
25/05/2018	110-Tultepec	02-Tultepec	Este 1 De Julio Vamos A Ganar Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 25786
25/05/2018	20-Coacalco De Berriozábal	06-Coacalco	Acompañando En Coacalco A Mi Amigo Agustín Barrera Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 25976
25/05/2018	109-Tultepec	02-Tultepec	Estamos En Tultepec
26/05/2018	17-Ayapango	21-Amecameca	En Ayapango Con Mis Amigos Martín Velázquez
26/05/2018	100-Tezcoco	38-Tezcoco	En Tezcoco Las Mujeres Ponen El Ejemplo
26/05/2018	9-Amecameca	21-Amecameca	Reconocemos Las Calles De Amecameca

⁵ Cabe señalar que en relación a los eventos denunciados el quejoso aportó como elementos de prueba links y fotografías de publicaciones hechas en el perfil de Facebook del entonces candidato Juan Manuel Zepeda Hernández.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

27/05/2018	38-Huixquilucan	18- Huixquilucan	Iniciemos Este Domingo Acompañando En Huixquilucan
28/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Estado Laico No Sólo Libertad Religiosa También De Las Más Importantes, Libertad De Pensamiento.
29/05/2018	68-Ozolotepec	18- Huixquilucan	En Recorrido Por Las Calles De Ozolotepec.
31/05/2018	2-Acolman	05- Teotihuacán	En Acolman Acompañando A Enrique Valencia
01/06/2018	106-Tlatlaya	36-Tejupilco	Más De 12 Mil Personas Nos Recibieron En San Pedro Limón En Tlatlaya
01/06/2018	8-Amatepec	36-Tejupilco	En San Simón Amatepec Con Elida Castelán
01/06/2018	123-Luvianos	36-Tejupilco	En Luvianos
01/06/2018	83-Tejupilco	36-Tejupilco	Cada Que Vengo A Tejupilco Me Hacen Sentir En Casa
01/06/2018	78-San Simón De Guerrero	36-Tejupilco	Cerramos Este Día En San Simón De Guerrero
02/06/2018	108-Tonatico	35-Tenancingo	Caminando En Tónico
03/06/2018	111-Valle De Bravo	36-Tejupilco	Iniciamos Recorrido En Valle De Bravo
03/06/2018	42-Lxtapan Del Oro	36-Tejupilco	En Ixtapan Del Oro
03/06/2018	112-Villa De Allende	09-San Felipe Del Progreso	Gran Recibimiento El Que Nos Dieron En San Felipe Santiago
04/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Un Orgullo Estar En Mi Neza
04/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Acompañando A Mi Amiga Araceli Casasola Por Las Calles De Nezahualcóyotl
06/06/2018	110-Tultitlán	02-Tultepec	Los Derechos De Los Migrantes
10/06/2018	32-Chimalhuacán	25- Chimalhuacán	Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones.
11/06/2018	32- Chimalhuacán	25- Chimalhuacán	Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones.
18/06/2018	26-Chalco	33- Chalco	Hoy En Chalco Con Ricardo Anaya Candidato A Presidente De México, Acompañamos A Rosario Espejel Candidata A Presidenta Municipal A Alicia Águila Candidata A Diputada Federal Por El Distrito 33 Y Las Dirigencias De Los Partidos Del Frente.
18/06/2018	60- Nezahualcoyotl	25-Cd Nezahualcóyotl	Recorriendo Las Calles De Mi Neza.
19/06/2018	60- Nezahualcóyotl		En Neza Mi Gente Mi Banda Siempre Apoyándome
19/06/2018	60- Nezahualcóyotl		En El Recorrido Por Neza
21/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Reunión En Neza Acompañando A Ricardo Anaya.

Dichos eventos, fueron materia de revisión de los informes de ingresos y gastos realizada por parte de esta autoridad fiscalizadora, y estudiados en la Resolución INE/CG1066/2018. Permittiéndonos resaltar lo expuesto en el Antecedente **XVI**; donde se indicó mediante Razón y Constancia la revisión realizada al Sistema Integral de Fiscalización relacionada con el ID de Contabilidad 42856, correspondiente a la Coalición “Por México al Frente” correspondiente a la campaña de los CC. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato a Senador de la República por el Estado de México postulado por al otrora Coalición “Por México al Frente”; de dicha revisión, se obtuvo que los gastos por concepto de la realización de los eventos denunciados, mismos que ya eran del conocimiento de la autoridad por haber sido publicados en el portal del Instituto, fueron reportados en las siguientes pólizas:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

Conceptos Denunciados	Numero de Póliza	Tipo de Póliza ⁶
Eventos	Póliza 7	Corrección
	Póliza 14	Normal
	Póliza 14	Normal
	Póliza 11	Normal
	Póliza 77	Normal
	Póliza 30	Normal
	Póliza 16	Normal
	Póliza 15	Normal
	Póliza 13	Normal
	Póliza 10	Normal
	Póliza 13	Normal

No puede dejarse de observar, que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, dicha Resolución fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional, aduciendo que la determinación de este Consejo implicó falta de exhaustividad. A dicha apelación le fue asignado el número de expediente **SUP-RAP-220/2018**; y fue resuelto el diecinueve de agosto de la presente anualidad, confirmando el acto impugnado.

No obstante, lo anterior, con la finalidad de determinar si la información expuesta líneas arriba, corresponde plenamente con lo señalado en el escrito de queja que diera origen a la presente Resolución; se expone la comparación correspondiente en el cuadro que se presenta a continuación:

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
	Fecha	Municipio	Eventos	Fecha	Municipio	Eventos
1.	15/04/2018	Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias.	15/04/2018	Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias.
2.	16/04/2018	Metepec	Inauguración de la escultura simbólica de la ola voraz.	16/04/2018	Metepec	Inauguración de la escultura simbólica de la ola voraz.
3.	17/04/2018	Otumba	Convivencia en la zona de las Pirámides.	17/04/2018	Otumba	Convivencia en la zona de las Pirámides.

⁶ Cabe señalar, que la Sala Superior del TEPJF en el estudio de fondo que realizó dentro de la Sentencia recaída al medio de impugnación **SUP-RAP-220/2018**, realizó la revisión de las pólizas y de la documentación contenida en ellas, resolviendo que las mismas amparaban el gasto denunciado con motivo de la realización de los eventos denunciados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
4.	18/04/2018	Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl.	18/04/2018	Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl.
5.	19/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.	19/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
6.	20/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya y Juan Zepeda para dialogar encuentro de ideas.	20/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya y Juan Zepeda para dialogar encuentro de ideas.
7.	23/04/2018	Toluca	Acompáñame.	23/04/2018	Toluca	Acompáñame.
8.	29/04/2018	Ixtapaluca	Recorrido en Ixtapaluca.	29/04/2018	Ixtapaluca	Recorrido en Ixtapaluca.
9.	30/04/2018	Nezahualcóyotl	Firma del pacto por la infancia y compromiso.	30/04/2018	Nezahualcóyotl	Firma del pacto por la infancia y compromiso.
10.	02/05/2018	Ecatepec De Morelos	El luto lo vivimos todos.	02/05/2018	Ecatepec De Morelos	El luto lo vivimos todos.
11.	06/05/2018	Nicolás Romero	Escuchar para legislar.	06/05/2018	Nicolás Romero	Escuchar para legislar.
12.	07/05/2018	Toluca	Develación de la placa.	07/05/2018	Toluca	Develación de la placa.
13.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	Corrupción en 'las fuerzas policiales.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	Corrupción en 'las fuerzas policiales.
14.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	En busca de la policía ejemplar.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	En busca de la policía ejemplar.
15.	09/05/2018	Toluca	Desarrollo Sustentable.	09/05/2018	Toluca	Desarrollo Sustentable.
16.	12/05/2018	Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández.	12/05/2018	Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández.
17.	13/05/2018	Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes.	13/05/2018	Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes.
18.	14/05/2018	Valle De Chalco Solidaridad	Por un salario constitucional digno.	14/05/2018	Valle De Chalco Solidaridad	Por un salario constitucional digno.
19.	16/05/2018	Naucalpan De Juárez	Ellos también son banda no al maltrato animal.	16/05/2018	Naucalpan De Juárez	Ellos también son banda no al maltrato animal.
20.	21/05/2018	Tlalnepantla De Baz	A trabajos iguales salarios iguales.	21/05/2018	Tlalnepantla De Baz	A trabajos iguales salarios iguales.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
21.	23/05/2018	Chimalhuacán	Aguas con el agua.	23/05/2018	Chimalhuacán	Aguas con el agua.
22.	24/05/2018	Chalco	Acompañando a Alicia Águila.	24/05/2018	Chalco	Acompañando a Alicia Águila.
23.	24/05/2018	Cocotitlán	Acompañando a Tomás Suárez.	24/05/2018	Cocotitlán	Acompañando a Tomás Suárez.
24.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Arranque de campaña y toma de protesta.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Arranque de campaña y toma de protesta.
25.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a Teresa Álvarez.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a Teresa Álvarez.
26.	24/05/2018	Chimalhuacán	Acompañando a Giovanni Sandoval.	24/05/2018	Chimalhuacán	Acompañando a Giovanni Sandoval.
27.	25/05/2018	Tultitlán	Este 1 de julio vamos a ganar.	25/05/2018	Tultitlán	Este 1 de julio vamos a ganar.
28.	25/05/2018	Coacalco De Berriozábal	Acompañando en Coacalco a mí Amigo Agustín Barrera.	25/05/2018	Coacalco De Berriozábal	Acompañando en Coacalco a mí Amigo Agustín Barrera.
29.	25/05/2018	Tultepec	Estamos en Tultepec.	25/05/2018	Tultepec	Estamos en Tultepec.
30.	26/05/2018	Ayapango	En Ayapango con mis amigos Martin Velázquez.	26/05/2018	Ayapango	En Ayapango con mis amigos Martin Velázquez.
31.	26/05/2018	Texcoco	En Texcoco las mujeres ponen el ejemplo.	26/05/2018	Texcoco	En Texcoco las mujeres ponen el ejemplo.
32.	26/05/2018	Amecameca	Recorremos las calles de Amecameca.	26/05/2018	Amecameca	Recorremos las calles de Amecameca.
33.	27/05/2018	Huixquilucan	Iniciemos este domingo acompañando en Huixquilucan.	27/05/2018	Huixquilucan	Iniciemos este domingo acompañando en Huixquilucan.
34.	28/05/2018	Toluca	Estado laico no sólo libertad religiosa también de las más importantes, Libertad de Pensamiento.	28/05/2018	Toluca	Estado laico no sólo libertad religiosa también de las más importantes, Libertad de Pensamiento.
35.	29/05/2018	Otzolotepec	En recorrido por las calles de Ozolotepec.	29/05/2018	Otzolotepec	En recorrido por las calles de Ozolotepec.
36.	31/05/2018	Acolman	En Acolman acompañando a Enrique Valencia.	31/05/2018	Acolman	En Acolman acompañando a Enrique Valencia.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
37.	01/06/2018	Tlatlaya	Más de 12 mil personas nos recibieron en San Pedro Limón en Tlatlaya.	01/06/2018	Tlatlaya	Más de 12 mil personas nos recibieron en San Pedro Limón en Tlatlaya.
38.	01/06/2018	Amatepec	En San Simón Amatepec con Elida Castelán.	01/06/2018	Amatepec	En San Simón Amatepec con Elida Castelán.
39.	01/06/2018	Luvianos	En Luvianos.	01/06/2018	Luvianos	En Luvianos.
40.	01/06/2018	Tejupilco	Cada que vengo a Tejupilco me hacen sentir en casa.	01/06/2018	Tejupilco	Cada que vengo a Tejupilco me hacen sentir en casa.
41.	01/06/2018	San Simón De Guerrero	Cerramos este día en San Simón De Guerrero	01/06/2018	San Simón De Guerrero	Cerramos este día en San Simón De Guerrero
42.	02/06/2018	Tonatico	Caminando en Tónico.	02/06/2018	Tonatico	Caminando en Tónico.
43.	03/06/2018	Valle De Bravo	Iniciamos recorrido en Valle De Bravo.	03/06/2018	Valle De Bravo	Iniciamos recorrido en Valle De Bravo.
44.	03/06/2018	Ixtapan Del Oro	En Ixtapan del Oro.	03/06/2018	Ixtapan Del Oro	En Ixtapan del Oro.
45.	03/06/2018	Villa De Allende	Gran recibimiento el que nos dieron en San Felipe Santiago.	03/06/2018	Villa De Allende	Gran recibimiento el que nos dieron en San Felipe Santiago.
46.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Un orgullo estar en mi Neza.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Un orgullo estar en mi Neza.
47.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a mi amiga Araceli Casasola por las calles de Nezahualcóyotl	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a mi amiga Araceli Casasola por las calles de Nezahualcóyotl
48.	06/06/2018	Tultitlán	Los derechos de los migrantes	06/06/2018	Tultitlán	Los derechos de los migrantes
49.	10/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.	10/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.
50.	11/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.	11/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
51.	18/06/2018	Chalco	Hoy en Chalco con Ricardo Anaya candidato a Presidente de México, acompañamos a Rosario Espejel Candidata a Presidenta Municipal a Alicia Águila candidata a Diputada Federal por el Distrito 33 y las dirigencias de los partidos del frente.	18/06/2018	Chalco	Hoy en Chalco con Ricardo Anaya candidato a Presidente de México, acompañamos a Rosario Espejel Candidata a Presidenta Municipal a Alicia Águila candidata a Diputada Federal por el Distrito 33 y las dirigencias de los partidos del frente.
52.	18/06/2018	Nezahualcóyotl	Recorriendo las calles de mi Neza.	18/06/2018	Nezahualcóyotl	Recorriendo las calles de mi Neza.
53.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En Neza mi gente mi banda siempre apoyándome.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En Neza mi gente mi banda siempre apoyándome.
54.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En el recorrido por Neza.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En el recorrido por Neza.
55.	21/06/2018	Nezahualcóyotl	Reunión en Neza acompañando a Ricardo Anaya.	21/06/2018	Nezahualcóyotl	Reunión en Neza acompañando a Ricardo Anaya.

Ahora bien, como puede apreciarse en la tabla anterior, se encuentran reflejados 55 eventos; si bien es cierto el quejoso denuncia 78 eventos (tanto en los hechos narrados en el escrito que originara el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**; tanto como en los narrados en el escrito que originara el expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**), también lo es que únicamente aporta información respecto de 72, de los cuales 10 se encuentran duplicados y 7 de ellos no aporta elementos de probanza.

Es importante resaltar que las autoridades judiciales que han estudiado lo realizado por este Consejo respecto de los eventos señalados; han concluido que fue correcto el procedimiento administrativo en materia de fiscalización identificado con el número de Resolución **INE/CG1066/2018**, ya que la aprobación del Dictamen Consolidado y la Resolución sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye el acto administrativo, por regla general, que resuelve respecto de los ingresos y gastos ejercidos por los candidatos para la obtención del voto, a menos que se presenten hechos novedosos

⁷, hipótesis que en la especie no se actualizo, ya que los eventos denunciados ya habían sido reportados y esta autoridad fiscalizadora ya tenía conocimiento de los mismos.

Bajo esa tesitura y en virtud de que en el escrito de ampliación de queja, que dio origen al procedimiento en que se actúa; se hace referencia a los 78 eventos estudiados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**, así como a la investigación realizada respecto del probable incumplimiento del candidato a Senador de la Republica por el Estado de México, postulado por la Coalición “Por México al Frente”, Juan Manuel Zepeda Hernández; y atendiendo al hecho de que dichos gastos fueron materia de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral que transcurre, mediante pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora; **se concluye en el sobreseimiento del procedimiento sancionador en que se actúa.**

Lo anterior, en virtud de que esta autoridad determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos denunciados fueron materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad fiscalizadora y aprobados por este Consejo General el día seis de agosto de dos mil dieciocho mediante el Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados identificados con los números INE/CG1095/2018 e INE/CG1097/2018, respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización. Se advierte que los hechos puestos no son novedosos o desconocidos para esta autoridad administrativa, pues tal y como se advierte de las constancias que integran el expediente, el recurrente únicamente refiere que el sujeto incoado rebasó el tope de gastos de campaña por la realización 78 eventos de campaña el cual ya fue objeto de estudio, revisión y análisis en la revisión a los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en consecuencia en el caso en concreto se actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0220-2018.pdf

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/2002⁸, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. - El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de **improcedencia** de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de **improcedencia** se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la **improcedencia** radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. **Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución auto compositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que**

⁸ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.

un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-001/2000](#) y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-046/2000](#). Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-047/2000](#). Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria."

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de **sobreseimiento** contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.

Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que los gastos devengados con motivo de la realización de un evento por parte de los sujetos incoados fueron reportados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, por lo que, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el **sobreseimiento**.

3. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, esta autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, de lo cual se desprende que

en su escrito de queja, el denunciante, señala, además de los eventos estudiados en el Considerando anterior, el gasto no reportados por concepto de la realización de diez eventos de campaña, los cuales no habían sido denunciados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**, en razón de lo cual, el gasto erogado por la realización de estos diez eventos, debe ser investigado y determinar si dichos gastos fueron reportados por los sujetos incoados. Es decir, el **fondo del presente asunto** se constriñe determinar si la otrora Coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora candidato al Senado de la Republica por el Estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos por la omisión de reportar gastos por la realización de diez eventos de campaña celebrados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, que beneficiaron a su candidatura y por ende un probable rebase de topes de gastos de campaña.

Lo anterior en contravención de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223 numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)

b) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

Documentación de los egresos

1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”

(...)”

“Artículo 223

Responsables de la rendición de cuentas

(...)

7. Los partidos serán responsables de:

(...)

b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo General.

(...)

d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y campañas.

(...)”

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su empleo y aplicación.

Esto es, los institutos políticos tienen la obligación de presentar informes de campaña de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el Proceso Electoral correspondiente.

En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la

ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio a la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente

con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo** del procedimiento que nos ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El dos de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, oficio sin número signado por el Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, a través del cual remite escrito de queja signado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a su entonces Candidato al Senado de la Republica el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, denunciando que los incoados habían incurrido en una supuesta omisión de reportar la totalidad de gastos erogados por concepto de la realización de diez eventos celebrados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, los cuales, supuestamente representaron un beneficio a su candidatura y por ende un probable rebase al tope de gastos establecido por la normatividad electoral.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el apartado será el siguiente:

A. Gastos de campaña reportados.

B. Rebase de topes de campaña.

A. Gastos de campaña reportados.

- 10 Eventos de campaña

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Como ya se estableció en el **Considerando 2**, en su escrito inicial, el quejoso, denuncia supuestos irregularidades en 78 eventos de campaña, hechos que ya quedaron resueltos de conformidad con lo expuesto en el citado Considerando.

Ahora bien, dentro del escrito de queja que da sustento al presente expediente, se señalan 10 nuevos eventos, cuyos gastos de realización, supuestamente, no fueron reportados por la entonces Coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato al Senado de la República por el estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández.

En consecuencia, en el presente apartado se estudiarán los gastos realizados con motivo de los 10 eventos que a continuación se indican:

I D	FECH A	LUGAR	LINK APORTADO COMO PRUEBA	OBSERVACIONES
1	11-04-2018	Toluca	https://twitter.com/prdedomex/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/990636515205271553 https://twitter.com/prdedomex/status/990608914596196352	Reportado en el SIF
2	23-04-2018	Naucalpan	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536	De la revisión al link portado se constató que el evento denunciado se llevó a cabo el 23 de junio del 2018 y no de abril como lo denuncia el quejoso. Reportado en el SIF
3	29-04-2018	Ixtapaluca	https://twitter.com/prdedomex/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/990636515205271553	En dicho evento participó también Miriam Carranza, candidata a diputada federal por el Distrito 21 y Rocío Guzmán Suárez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 12, con cabecera en Ixtapaluca. Dicho evento fue reportado por la candidata Rocío Guzmán Suárez y el gasto fue prorrateado conjuntamente con el otrora candidato Juan Manuel Zepeda Hernández en la Póliza PD-

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	FECHA	LUGAR	LINK APORTADO COMO PRUEBA	OBSERVACIONES
				77/06-18 del periodo 2. (información conciliada con lo remitido por la Dirección de Auditoría en el oficio INE/UTF/DA/3276/2018) Reportado en el SIF
4	12-05-2018	Tlalnepantla	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296	Reportado en el SIF
5	31-05-2018	Acolman	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665	Reportado en el SIF
6	01-06-2018	San Simón de Guerrero	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1836445816421347	Reportado en el SIF
7	15-06-2018	San Martín de las Pirámides	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/	El evento denunciado corresponde a un evento de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54729
8	15-06-2018	Teotihuacán	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de San Juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54746
9	26-06-2018	Chapa de la Mota	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536	De la revisión a los links aportados como medio de prueba se constató que el evento denunciado no se realizó el día 26 de junio como lo indica el quejoso, si no el día 25 del mismo mes. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54677
10	26-06-2018	La Paz	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/	El evento denunciado corresponde a un evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de la Paz. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54706

Es importante señalar que para sostener sus afirmaciones el quejoso anexó a su escrito inicial únicamente 21 URL's, las cuales remiten al perfil de Facebook del PRD en el estado de México, así mismo adjunta 13 imágenes con las que pretende probar la existencia de gastos denunciados.

Es menester señalar que, tanto las imágenes como las URL's, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014⁹ determinó que las

⁹ **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.**-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera

pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.

De este modo, la autoridad fiscalizadora procedió a notificar a las partes el inicio del procedimiento en que se actúa y se emplazó a los partidos políticos integrantes de la entonces Coalición “Por México al Frente”, así como a su otrora candidato al Senado de la Republica, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández.





Los sujetos incoados tuvieron por atendidas sus manifestaciones, en las que, tanto el Partido de la Revolución Democrática como su entonces candidato, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, remitieron información y documentación soporte relativa al reporte que realizaron en el informe de campaña correspondiente respecto de los gastos con motivo de los eventos denunciados, dicha información se transcribo en el Antecedente VIII de la presente Resolución.

Por lo anterior, y con la finalidad de corroborar la información proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática y por el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, la autoridad fiscalizadora en ejercicio de sus facultades de investigación procedió realizar diligencias que le permitieran allegarse de mayores elementos para esclarecer los hechos denunciados, en razón de ello, el veintitrés y veinticuatro de octubre del año en curso, se levantaron razones y constancias a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los eventos referidos previamente; como resultado de lo anterior, se hizo constar que dichos eventos fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en la parte conducente a la “Agenda de Eventos” de los candidatos; C. Lucio René Monterrubio López, otrora candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, Eric Ruiz Medina otrora candidato a Presidente Municipal de San Martin de las Pirámides, C. Leticia Zepeda Martínez, otrora candidata a Presidente Municipal de Chapa de Mota y José Luis Mondragón Gámez, otrora candidato a Presidente Municipal de la Paz, todos en el estado de México; mismos, que participaron en dichos eventos y por ende obtuvieron un beneficio a sus


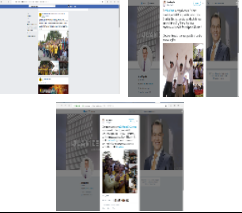



fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018






campañas, en la tabla inserta a continuación, se muestra la información y documentación localizada en el SIF:

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportadas por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
1	11/04/2018	Toluca	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1781594165239846 	- Lonas - Chalecos - Camisas - Banderas	Póliza 1, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación militante-donación de lonas. Póliza 4, Periodo 1, Normal, Diario. Registro Pasivo por la compra de chalecos. Póliza 2, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación Militante-Donación Especie Chalecos. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Registro por la compra de cinco camisas de vestir. Póliza 3, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación Militante-especie camisas. Póliza 7, Periodo 1, Normal, Diario. Registro Pasivo de Gastos compra de banderas.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como no Oneroso	Reportado
2	23/04/2018 (aunque en escrito queja aparece como evento del 23 de abril evidencias pertenecen a publicaciones del 23 de junio)	Naucalpan	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1010704793696854016 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536 	- Chalecos - Vinilonas - Banderas - Camisas - Templete	Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Póliza 4, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 1E191159- B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ, en favor de Partido Acción Nacional, monto \$49,184.00, por concepto de chalecos. Póliza 7, Periodo 3, Corrección, Diario, prorrato evento Naucalpan, por concepto de Sonido, Pantallas, Carpas, banderas, otros gastos. Cargo a Senadores MR. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Registro por la compra de cinco camisas de vestir.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como oneroso	
3	29/04/2018	Ixtapaluca	https://twitter.com/prdedomexp/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda/status/990636515205271553 	- Camisa - Banderas - Gorras - Chamarras - Chalecos - Playeras	Póliza 2, Periodo 1, Normal, Diario. Factura con folio fiscal 178FC1AA-A608-4C0D-822C-664940C9927, emitida por Julieta Sánchez García, a favor del PAN, la cual ampara el pago por la cantidad de \$173,246.00, por concepto de dípticos, lonas impresas, gorras, playeras, chalecos y pulseras. Póliza 66, Periodo 3, Normal, Diario. Folio Fiscal 4D4C998A-BF51-40C1-98CA-3BBAC1E1781F, Expedido Grupo Exiplastic S.A. de C.V., en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de: bolsa ecológica, gorras, playera y banderas de tela. Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal B347E3AD-4429-4171-A382-7A1C3305C869, Emisor PRODUCTOMX SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas. Póliza 64, Periodo 3, Normal, Diario. Folio Fiscal B5E76353-BCF6-43D0-9121-211F3798AD1, Expedido Grupo Exiplastic S.A. de C.V., en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de: playera amarilla juventudes de izquierda y playera blanca juventudes de izquierda	Perfil: Rocío Guzmán Suárez ID de Contabilidad: 44173 (Pólizas 2, 66, 22 y 64) Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 (Póliza PD-77/06-18 del periodo 2.)	Evento Reportado por la candidata Rocío Guzmán Suárez como oneroso. El C. Juan Manuel Zepeda Hernández lo reporta (Recorrido En Ixtapaluca Con La Candidata Rocío Guzmán candidata Diputada Federal)	Reportado
4	12/05/2018	Tlalneantla	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296 	- Chalecos - Banderas - Camisas - Vinilonas - Sonido - Estructura metálica	Póliza 4, Periodo 3, Normal, Diario. Registro pasivo Factura 204 por compra de chalecos. Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Registro pasivo compra de banderas. Póliza 59, Periodo 2, Normal, Diario. Registro pasivo compra de vinilos. Póliza 54, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación militante de lonas, sonido, sillas y aguas para la apertura de campaña de la candidata federal Alicia Águila Méndez del Distrito 33. Póliza 4, Periodo 1, Normal, Diario. Pago de Factura AFAD87 Adriana Beatriz Torres Aguilera en favor de María Fernanda Rivera Sánchez candidata a Senadores MR en el estado de México por concepto de camisas y playera de mujer.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 (Pólizas 4, 22, 59 y 54) Perfil: María Fernanda Rivera Sánchez ID de Contabilidad: 42845 (Pólizas 4)	Evento Reportado como no oneroso.	Del análisis a las pruebas aportadas se determinó que el evento denunciado fue de la entonces candidata María Fernanda Rivera Sánchez y el otrora candidato Juan Manuel Zepeda participo en él, no obstante, lo anterior se determinó que en las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF Reportado

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportados por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
								
5	31/05/20	Acolman	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665 	- Camisa - Banderas	Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 7, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de banderas, por un importe de \$4,176.00 pesos.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado en el ID de contabilidad 54905 perteneciente al otrora candidata la C. Griselda Araceli Sánchez Quezada	Reportado
6	01/06/20	San Simón de Guerrero	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1836445816421347 	- Playeras - Vinilonas - Camisa	Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 26, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal D867C037-3C34-48E5-AA23-349DAED99850, Emisor PRODUCOMX SA DE C.V. en favor de Partido Acción Nacional. Por un monto de \$378,000.00. Por concepto de playeras.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como no oneroso	Reportado
7	15/06/20	San Martín Pirámides	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/ 	- Camisa - Playeras - Vinilona - Banderas	Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 86, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 00001000000404762739, emisor Grupo Exiplastic, S.A. DE C.V. en favor de Partido Acción Nacional por la cantidad de \$1,073,000.00 por concepto de gorras, playeras, banderas de tela. Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso. Póliza 12, Periodo 1, Normal, Diario. Bocina y micrófono en los eventos del candidato C. Lucio Rene Monterrubio López	Perfil: Lucio René Monterrubio López ID de Contabilidad: 54746 (Póliza 12) Gasto prorrateado con Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado en el ID de contabilidad 54746 perteneciente al otrora candidato Lucio René Monterrubio López	Si bien el evento se reportó como "No Oneroso" del análisis a las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF, los cuales se detallan en esta tabla.
8	15/06/20	Teotihuacán	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957 	- Gorras - Banderas - playeras - Vinilonas - camisas	Póliza 13, Periodo 1, Normal, Diario. Emisor Jaime Hernández Aguilar en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de playeras y banderas. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 Perfil: Lucio René Monterrubio López ID de Contabilidad: 54746 (Póliza 13)	Evento Reportado oneroso en el ID de contabilidad 54746 perteneciente al otrora candidato Lucio René Monterrubio López.	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de san Juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportados por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
9	26/06/20	Chapa de Mota	https://twitter.com/JuanZepeda/_status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781 	<ul style="list-style-type: none"> - Chalecos - Playeras - Banderas 	<p>Póliza 11, periodo 1, Normal, Diario. Folio fiscal 5214C2F9-0140-442E-ABD0-6C6FCA422CE1, Emisor Juan Cristóbal Martín Pérez, emitido en favor de Ana María Zaldívar Juárez, donante a favor del Partido Acción Nacional. Por un monto de \$5,320.00 por concepto de playeras.</p> <p>Póliza 41, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 1E191159-B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ, en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$49,184.00, por concepto de chalecos.</p> <p>Póliza 82, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E3DE6C90-16A3-A5FD-C7FCAA0FEFB2, emisor Alma Rosa Lagunas Enríquez, en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$556,800.00, por concepto de banderas.</p>	<p>Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández</p> <p>ID de Contabilidad: 42856</p>	<p>Evento Reportado como no oneroso, evento reportado en el ID de contabilidad por la C. Leticia Zepeda Martínez.</p>	<p>Si bien el evento se reportó como "No Oneroso" del análisis a las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF, los cuales se detallan en esta tabla.</p>
10	26/06/20	La Paz	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/186997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/    	<ul style="list-style-type: none"> - Banderas - Gorras - Chalecos - Playeras - vinilonas - Camisa 	<p>Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos.</p> <p>Póliza 93, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal FF069AC-4EFF-11E6-AF72-00155D014008, Emisor DISEÑO Y PRODUCCION HGV SA DE CV. Emitido en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$626,400.00, por concepto de playeras.</p> <p>Póliza 8, periodo 3, Normal, Ajuste. Folio fiscal 1E191159-B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, Emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ, en favor de Partido Acción Nacional. Por un monto de \$49,184.00, por concepto de chalecos.</p> <p>Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal B347E3AD-4429-4171-A382-7A1C3305C869, Emisor PRODUCOMX SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas.</p> <p>Póliza 58, Periodo 2, Normal, Diario. Folio Fiscal 46819dc8-6b2f-4e49-8ed9-6180064461ae, emisor: Alma Rosa Lagunas Enríquez, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de gorras.</p> <p>Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso.</p> <p>Póliza 65, Periodo 3, Normal, Diario. Emisor Grupo Exiplastic S.A. de C.V. en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas.</p> <p>Póliza 15, Periodo 1, Normal, Diario. Emisor Graciela Arredondo, a favor Partido Acción Nacional, concepto de Lonas Menores a 12mtrs.</p> <p>Póliza 3, Periodo 2, Normal, Diario. Emisor Juan Cristobal Martinez Perez, a favor de Partido Acción Nacional, Folio Fiscal 59B71994-47B1-40F8-AD37-8949517C8D1. Por concepto de camisas publicitarias.</p>	<p>Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández</p> <p>ID de Contabilidad: 42856 (Pólizas 6, 93, 8, 22, 58 y 88)</p> <p>Perfil: José Luis Mondragón Gámez</p> <p>ID de Contabilidad: 54706 (Pólizas 15 y 65)</p>	<p>Evento Reportado como oneroso en el ID de contabilidad 54706 por el C. José Luis Mondragón Gámez..</p>	<p>Reportado</p>

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

No obstante lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad procedió a formular una consulta a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, ambas de este Instituto, mediante los oficios INE/UTF/DRN/1158/2018 e INE/UTF/DRN/1243/2018, a efecto de que informara si en sus archivos se localizaban registros correspondientes a los gastos relacionados con los eventos denunciados, a lo cual, la citada Dirección señaló que respecto a los eventos señalados se localizó reporte de los gastos realizados en los **ID** de Contabilidad **42856, 54746, 44429, 54677** para mayor referencia la referida Dirección adjunto en medio magnético la información y documentación soporte, misma que obra en el expediente en que se actúa la cual coincide con la información vertida en la tabla arriba inserta.

Ahora bien, como se obtuvo de la revisión a los elementos de prueba, 6 de los eventos denunciados, se celebraron en conjunto con otros candidatos, a saber:

ID	FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	REFERENCIA
1	29-04-2018	Ixtapaluca	En dicho evento participo también Miriam Carranza, candidata a diputada federal por el Distrito 21 y Rocío Guzmán Suárez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 12, con cabecera en Ixtapaluca. Dicho evento fue reportado por la candidata Rocío Guzmán Suárez y el gasto fue prorrateado conjuntamente con el otrora candidato Juan Manuel Zepeda Hernández. (información conciliada con lo remitido por la Dirección de Auditoría en el oficio INE/UTF/DA/3276/2018) Reportado en el SIF	A
2	12-05-2018	Tlalnepantla	Del análisis a las pruebas aportadas se determinó que el evento denunciado fue de la entonces candidata María Fernanda Rivera Sánchez y el otrora candidato Juan Manuel Zepeda participo en él, no obstante, lo anterior se determinó que en las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF Reportado en el SIF	A
3	15-06-2018	San Martín de las Pirámides	El evento denunciado corresponde a un evento de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54729	B

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

4	15-06-2018	Teotihuacán	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de san juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54746	A
5	26-06-2018	Chapa de la Mota	De la revisión a los links aportados como medio de prueba se constató que el evento denunciado no se realizó el día 26 de junio como lo indica el quejoso, si no el día 25 del mismo mes. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54677	B
6	26-06-2018	La Paz	El evento denunciado corresponde a un evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de la Paz. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54706	A

En relación a dichos eventos se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/1243/2018 informara si respecto al gasto relacionado con los eventos señalados se localizaba en sus archivos, el registro o reporte del prorrateo del gasto con motivo de la realización de los mismos, lo anterior en virtud de que el candidato denunciado, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández había participado en ellos, a lo cual la citada Dirección señaló mediante diverso INE/UTF/DA/3276/2018 que los eventos marcados con en la columna “Referencia” con la letra A, reportaron gastos que fueron prorrateados entre los candidatos beneficiados, los eventos marcados con la letra B, fueron registrados como “No onerosos”, por tal razón no elementos que nos lleven a concluir que existen gastos susceptibles de prorratearse, relacionados con la organización del evento.

No es óbice señalar que la autoridad sustanciadora en aras de exhaustividad, mediante oficio INE/UTF/DRN/1213/2018, solicito el apoyo a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a efecto de realizar la certificación de las ligas electrónicas relacionadas con los eventos denunciados; como resultado de dicha solicitud, se concluye la existencia de las referidas ligas y aportadas por el quejoso como medio de prueba.

Debe decirse que la información y documentación remitida por las **Direcciones de Auditoría y Oficialía Electoral**, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de

Fiscalización, razón por la cual la misma tiene **valor probatorio pleno** respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

De la información remitida por la oficialía electoral concatenada con las razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, podemos concluir que 2 de los eventos, no se realizaron en la fecha que denuncia el quejoso, de acuerdo a los registros en el Sistema Integral de Fiscalización y las mismas ligas electrónicas ofrecidas por el quejoso, incluso las manifestaciones hechas por el C. Juan Manuel Zepeda Hernández en su Cuenta de Twitter y la cuenta de en la Red Social Facebook a nombre de “PRD Estado de México”, donde concuerda con las fechas registradas en el SIF, por lo que se indica en las tablas antes insertas, las fechas correctas de los eventos, no obstante lo anterior, esta autoridad se allegó de elementos suficientes que le permitieron determinar que en relación a los eventos denunciados, los mismos fueron reportados así como los gastos devengados.

De lo anterior podemos entender que:

- a) Sí se encontraron los registros contables de todos y cada uno de los eventos denunciados.
- b) Se pudo constatar que la página de la Red Social Facebook que hace referencia el quejoso, si coincide con la del “PRD Estado de México” de la cual aportó sus pruebas.

Por lo anterior y con el ánimo de exhaustividad, la Autoridad Fiscalizadora, solicitó al Representante Legal de la Red Social “**Facebook**” que proporcionara información referente a las ligas electrónicas, en el sentido de la existencia de algún gasto generado por el pautado; a lo que el requerido manifestó que ninguna de ellas conto con pautado o gasto involucrado.

Esta Autoridad no omite en mencionar que, con relación a la prueba anexada al escrito de queja denominada “Anexo 1” (cotización de eventos), cabe señalar que los mismos constituyen documentales privadas de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

No obstante, es menester de esta autoridad fiscalizadora hacer constar que dicha cotización de eventos no fue relacionados por el quejoso en su apartado de hechos del escrito de queja; asimismo es de mencionar que dicha cotización se trata sólo de un ejercicio del gasto que correspondería por los supuestos eventos

denunciados, por lo que no genera convicción alguna a este Consejo General respecto de la realización de los eventos.

En razón de lo anterior, esta autoridad concluye que tras haber tenido a su disposición información aportada tanto por el quejoso, como derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad es indudable que existen elementos que acreditan la existencia de los diez eventos denunciados así como el reporte de los gastos derivados de los mismos, y en los casos señalados el prorrateo que correspondía, por lo anterior se concluye que los gastos relacionados con motivo de los eventos denunciados sí fueron reportados y registrados por la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora Candidato al Senado de la República el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, y por cuanto hace a los gastos prorrateados los mismos también fueron reportados por los CC. Lucio René Monterrubio López, otrora candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, Eric Ruiz Medina otrora candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides, C. Leticia Zepeda Martínez, otrora candidata a Presidente Municipal de Chapa de Mota y José Luis Mondragón Gámez, otrora candidato a Presidente Municipal de la Paz, todos en el estado de México.

Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que la coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora candidato al Senado de la República por el Estado de México, Juan Manuel Zepeda Hernández, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual, respecto a los gastos no reportados por concepto de 10 eventos de campaña, deben declararse **infundado**.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República, en términos de lo señalado en el **Considerando 2**, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República, en términos de lo señalado en el **Considerando 3**, de la presente Resolución.

TERCERO. Notifíquese al quejoso.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral del Estado de México, para que éstos a su vez, estén en posibilidad de notificar al **C. Juan Manuel Zepeda Hernández**; a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias._____

Continuamos con el turno el Proyecto de Resolución, identificado como apartado 19.6, mismo que fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Este Proyecto de Resolución también tiene que ver con la denuncia de un conjunto de gastos no reportados, en general acompaño el sentido del Proyecto de Resolución. Sin embargo, me separo en torno a un gasto en particular que tiene que ver con el gasto de una pantalla en el evento de arranque de campaña, el 6 de mayo de 2018.____
¿Por qué específicamente me aparto respecto de este evento?, porque si bien es cierto que la denuncia que presenta el quejoso es, podríamos decir, bastante genérica, dentro de los gastos que señala que no están reportados, sí indica que uno de ellos es el gasto de la pantalla en ese evento y presenta una fotografía en la que se advierte esa pantalla, lo que el Proyecto de Resolución señala es que si entramos al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) sí está reportado ese evento, lo cual es absolutamente cierto, hay una póliza que ampara ese evento, pero no ampara la pantalla._____

Dentro de los múltiples gastos que ampara esa póliza no es la pantalla, pero el detalle es que la muestra y las imágenes que como muestra nos aporta el propio denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), también contemplan esa pantalla, es decir, la imagen que nos presenta el denunciante y la imagen que el denunciado carga al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en las 2 se advierte la misma pantalla, por lo que no creo que podamos decir que hay una prueba técnica en la foto del denunciante que no tiene ningún otro elemento con el cual concatenarse._____

Las 2 fotografías, la que se presenta en la queja y la muestra que se aporta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte del denunciado para acreditar los gastos de ese evento, incorpora esa pantalla a pesar de que la póliza no contempla la

pantalla, por lo que pediría una votación en lo particular, porque creo que la pantalla tiene que ser un gasto no reportado._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente._____

También este es un tema de criterios, el que prevaleció a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización en la Comisión, es que el gasto reportado incluía los elementos que aparecían en la fotografía, donde efectivamente había una coincidencia entre la fotografía que aportaba el quejoso y la que se encontraba en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y por esa razón la pantalla no se cuantifica como un rubro específico, sino que se considera incluida dentro del gasto reportado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif._____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación, por favor.____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente._____

A partir de la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín les propondría una votación en lo general, excluyendo de ésta por lo que hace al gasto de la pantalla a la cual hizo referencia._____

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 19.6 excluyendo de esta votación lo

que hace a la pantalla a la que hizo referencia a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

Ahora, someto a su consideración como viene el Proyecto de Resolución, la consideración de la pantalla en el evento a la que hizo referencia a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Quienes estén a favor, de cómo viene el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo._____

7 votos._____

¿En contra? 3 votos._____

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1492/2018) Pto. 19.6_____

INE/CG1492/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JUAN LÓPEZ BLANCO, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, POSTULADO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El primero de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número CEEPC/SE/3414/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, a través del cual remite el Acuerdo de fecha diecinueve de julio del año en curso, dictado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el cual en su Punto de Acuerdo Primero, se ordena remitir el escrito de queja suscrito por el C. Delfino Quiroz Cruz, en su carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal Electoral de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, en contra del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por el Partido de la Revolución Democrática, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por supuestos gastos no reportados, así como un posible rebase de topes de gastos de campaña por parte del otrora candidato, el C. Juan López Blanco.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS:

1.-Con fecha 06 de mayo del 2018, se llevó a cabo el arranque de campaña del Candidato a Presidente Municipal del PRD Juan López Blanco, en la plaza principal de Villa de Guadalupe, S.L.P. iniciando aproximadamente a las 5 de la tarde, dando a conocer mencionado evento en su perfil de Facebook de nombre Juan López Blanco.

*2.- Evento del cual puedo apreciarse de forma evidente y clara por su servidor y por muchas personas que asistieron al mismo, siendo que fue público y masivo. Por lo tanto, se pudo ver que fue costoso, ya que como se pudo observar, el candidato mencionado conto con el siguiente equipo de música y sonido: **audio, escenario, pantallas, grupo musical, banda musical, mariachi y animadores en el evento. También a la gente que asistió le dieron comida y bebida.***

3.-Así las cosas, el arranque de campaña dio inicio aproximadamente a las 5:00 pm para terminar aproximadamente a las 2:00 am, siendo que fue un evento que permaneció durante 9:00 horas, lo cual incrementa su costo, por lo que aproximadamente y según los gastos realizados ascienden aproximadamente a \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/N). Siendo esto motivo de que deja a los demás candidatos en desigualdad por el tope de campaña, particularmente a la candidata del partido al cual represento, ya que se esta violando los dispositivos relacionados con los gastos y el tope de campaña que marca la Ley Electoral del Estado de S.L.P.

*4.- Así mismo me he percatado de que existe en todo el municipio un número considerable de bardas que están pintadas con el logotipo del PRD a nombre del candidato **JUAN LOPEZ BLANCO**, así como un número importante de pendones y mantas, sí bien es cierto en el puro arranque de campaña aproximadamente se erogaron \$150,000.00 (CIENTO CIENCIENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con esto ya se rebasó el tope de campaña, ahora bien, sumándoles las bardas, mantas, pendones y calcomanías, añadiendo todo esto*

ya excedería de manera desmedida y evidente el gasto total del tope de campaña del candidato del PRD Juan López Blanco.

(...)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- **PRUEBA TÉCNICA (VIDEO Y AUDIO, C´D – DVD).** Consistente en un disco compacto original que contiene 2 videos con audio, en uno de ellos se aprecia una grabación de elementos que en ningún punto tiene relación con los hechos denunciados en el procedimiento en el que se actúa, ya que se muestra a un menor de edad bailando, dicha probanza resulta insuficiente y notoriamente inverosímil para acreditar su dicho; en el segundo video se aprecia una grabación de un evento de campaña que llevó a cabo el candidato a presidente municipal de Villa de Guadalupe por el PRD Juan López Blanco, sin que del mismo se desprendan circunstancias de tiempo y lugar.
- **PRUEBA TÉCNICA.** Consiste en una impresión a color de una página de Facebook a nombre de Juan López Blanco, de fecha 4 de mayo del 2018, donde se puede apreciar la publicidad y el grupo que asistirá al arranque de campaña.
- **PRUEBA TÉCNICA.** Consistente en una impresión a color de una página de Facebook a nombre del Juan López Blanco, de fecha 2 de mayo del 2018.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP**, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, así como notificar al partido político y al otrora candidato denunciados remitiéndoles las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 34 a 35 del expediente)

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión

del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 36 del expediente)

b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 37 del expediente)

V. Notificación de inicio de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41358/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de mérito. (Foja 38 del expediente)

VI. Notificación de inicio de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41357/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de mérito. (Foja 39 del expediente)

VII. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41359/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 40 y 41 del expediente)

VIII. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41361/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 42 y 43 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del Partido De la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 44 a 57 del expediente)

“(…)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que se no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por parte de la quejosa, en todo momentos son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdadero9os o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealdad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan , a

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, el asunto de que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Juan López Blanco, candidato a presidente Municipal del Villa de Guadalupe, estado de san Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

De esta manera, es pertinente manifestar que el evento celebrado el 6 de mayo del 2017, que se denuncia en el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", reporte que se efectuó a través en el PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA: 1, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCION DE LA PÓLIZA: RSES-11 APORTACIÓN DE HUGO NULEZ A CANDIDATO, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, OTROS GASTOS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, RSES-111 APORTACIÓN DE NULEZ A CANDIDATO, DESCRIPCIÓN: BANDA MUSICAL, SONIDO Y TEMPLETE, instrumento jurídico contable que a continuación se reproduce para mayor referencia:

(imagen)

A la póliza en comento se adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido, misma que consistió en:

• Formato "RSES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL, número 0111, de fecha 6 de mayo del 2018, emitido a favor de Hugo Muñoz Hernández, por concepto de aportación de escenario y grupo, mismo que a continuación se reproduce, para mayor referencia:

(imagen)

- *Evidencia fotográfica del bien aportado*

(imagen)

- *Credencial para votar emitida a favor del C. Hugo Núñez Hernández*

(imagen)

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.

Es mérito de lo anterior, es importante destacar que, si bien es cierto se llevó a cabo el evento denunciado, también lo es que el mismo no se llevó a cabo en la forma y en los términos que lo pretende hacer valer la parte quejosa.

En este sentido, se informa que al evento que, al evento en comento, solo se presentó un grupo musical, el cual, se encuentra debidamente reportado, y se utilizó un escenario, mismo que, también se encuentra debidamente reportado ante la autoridad fiscalizadora.

Por lo que se niega categóricamente la existencia de los demás gastos de manera infundada y sin ofrecer algún medio de prueba imputa el quejoso, consistentes en audio, pantallas, banda musical, mariachi, animador de eventos, comida y bebidas, no realiza las especificaciones cuantitativas y cualitativas de cada uno de los objetos de gastos que acusa, y más aun no exhibe algún medio de prueba idóneo con la que acredite los extremos de sus acusaciones.

*En este sentido, no pasa pro desapercibido que, en el escrito inicial de queja, como prueba el denunciante argumenta ofrecer como prueba (VIDEO Y AUDIO CD-DVD), prueba técnica que desde este momento, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le presenta dar**, toda vez que suponiendo sin conceder que existiera dicha probanza, en primer lugar, no se le corrió traslado a mi presentado para que se pronunciara sobre su contenido.*

En segundo lugar, respecto de dicha probanza, en el supuesto no concedido de su existencia, el quejoso, omite dar cabal cumplimiento a las premisas legales para su procedencia, pues deja de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo tiempo que reproduce la prueba, es decir, deja de realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, requisito

que es indispensable, para realizar una vinculación de la prueba con los hechos denunciados.

Pues si es sabido que las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, como lo es la que se objeta en cuanto su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar en el asunto que nos ocupa, debe ofrecerse con una descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretende probar, premisas de procedencia que en la especie no se cumplen.

(...)

Igual suerte corre lo relativo a las supuestas pintas de bardas que denuncia la parte actora en el asunto que nos ocupa, imputación que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, conforme a lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, lo cual, se solicita que se tenga por reproducido en este acto como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal.

Así mismo, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que la imputación vertida por el quejoso, es genérica, vaga e imprecisa, pues no indica:

- El número de supuestas pintas de bardas.*
- Las características cualitativas de las supuestas pintas de bardas.*
- Los domicilios en que se encuentran colocadas las supuestas pintas de bardas.*

Más aún, no ofrece algún medio de prueba idóneo con la que se acredite la existencia de al menos 1 punta de barda, de las que denuncia.

*De igual manera, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar** a los supuestos costos que indique el quejoso, tanto del evento celebrado el 6 de mayo del 2018, el cual, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", como a las supuestas pintas de bardas denunciadas, importes que a todas luces son excesivos e irreales conforme a los precios de mercado.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que, lo manifestado por el quejoso en el asunto que nos ocupa, solamente se le debe considerar como

argumentaciones subjetivas sin sustento legal; siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador.

(...)

IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal, postulado por el Partido de la Revolución Democrática.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/750/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente, a efecto que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el presente oficio, conteste por escrito lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que estime convenientes. (Fojas 58 a la 67 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 68 a la 81 del expediente)

“(...)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados, dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por parte de la quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al

proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealdad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo , lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

(...)

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del suscrito C. Juan López Blanco, candidato a presidente Municipal del Villa de Guadalupe, estado de san Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

De ésta manera, es pertinente manifestar que el evento celebrado el 6 de mayo del 2017, que se denuncia en el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", reporte que se efectuó a través en el PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA: 1, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCION DE LA PÓLIZA: RSES-11 APORTACIÓN DE HUGO NULEZ A CANDIDATO, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, OTROS GASTOS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, RSES-111 APORTACIÓN DE NULEZ A CANDIDATO, DESCRIPCIÓN: BANDA MUSICAL, SONIDO Y TEMplete, instrumento jurídico contable que a continuación se reproduce para mayor referencia:

(imagen)

A la póliza en comento se adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido, misma que consistió en:

• Formato "RSES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL, número 0111, de fecha 6 de mayo del 2018, emitido a favor de Hugo Núñez Hernández, por concepto de

aportación de escenario y grupo, mismo que a continuación se reproduce, para mayor referencia:

(imagen)

- *Evidencia fotográfica del bien aportado*

(imagen)

- *Credencial para votar emitida a favor del C. Hugo Núñez Hernández*

(imagen)

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.

Es mérito de lo anterior, es importante destacar que, si bien es cierto se llevó a cabo el evento denunciado, también lo es que el mismo no se llevó a cabo en la forma y en los términos que lo pretende hacer valer la parte quejosa.

En este sentido, se informa que al evento que, al evento en comento, solo se presentó un grupo musical, el cual, se encuentra debidamente reportado, y se utilizó un escenario, mismo que, también se encuentra debidamente reportado ante la autoridad fiscalizadora.

Por lo que se niega categóricamente la existencia de los demás gastos de manera infundada y sin ofrecer algún medio de prueba imputa el quejoso, consistentes en audio, pantallas, banda musical, mariachi, animador de eventos, comida y bebidas, no realiza las especificaciones cuantitativas y cualitativas de cada uno de los objetos de gastos que acusa, y más aun no exhibe algún medio de prueba idóneo con la que acredite los extremos de sus acusaciones.

*En este sentido, no pasa pro desapercibido que, en el escrito inicial de queja, como prueba el denunciante argumenta ofrecer como prueba (VIDEO Y AUDIO CD-DVD), prueba técnica que, desde este momento, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le presenta dar**, toda vez que suponiendo sin conceder que existiera dicha probanza, en primer lugar, no se le corrió traslado a mi presentado para que se pronunciara sobre su contenido.*

En segundo lugar, respecto de dicha probanza, en el supuesto no concedido de su existencia, el quejoso, omite dar cabal cumplimiento a las premisas legales para su procedencia, pues deja de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo tiempo que reproduce la prueba, es decir, deja de realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, requisito que es indispensable, para realizar una vinculación de la prueba con los hechos denunciados.

*Pues si es sabido que las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, como lo es la que se objeta en cuanto su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar en el asunto que nos ocupa, debe ofrecerse con una descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretende probar, premisas de procedencia que en la especie no se cumplen.
(...)*

Igual suerte corre lo relativo a las supuestas pintas de bardas que denuncia la parte actora en el asunto que nos ocupa, imputación que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, conforme a lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, lo cual, se solicita que se tenga por reproducido en este acto como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal.

Así mismo, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que la imputación vertida por el quejoso, es genérica, vaga e imprecisa, pues no indica:

- *El número de supuestas pintas de bardas.*
- *Las características cualitativas de las supuestas pintas de bardas.*
- *Los domicilios en que se encuentran colocadas las supuestas pintas de bardas.*

Más aún, no ofrece algún medio de prueba idóneo con la que se acredite la existencia de al menos 1 punta de barda, de las que denuncia.

*De igual manera, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar** a los supuestos costos que indique el quejoso, tanto del evento celebrado el 6 de mayo del 2018, el cual, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, como a las supuestas pintas de bardas denunciadas, importes que a todas luces son excesivos e irreales conforme a los precios de mercado.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que, lo manifestado por el quejoso en el asunto que nos ocupa, solamente se le debe considerar como argumentaciones subjetivas sin sustento legal; siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador.

(...)"

c) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/798/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, notificó la solicitud del requerimiento de pruebas del procedimiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, para que ofrezca y exhiba las pruebas que estime convenientes.

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (DAPPAPO).

a) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1162/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara el número de póliza en la cual fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, el evento de campaña denunciado, celebrado por el C. Juan López Blanco, candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, así como los gastos del mismo. (Fojas 84 y 85 del expediente)

b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3075/18 la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a lo solicitado anexando copia simple de la póliza PD-2/06-2018, en donde se encuentran registrados los gastos por concepto de banda musical, sonido y templete. (Fojas 86 a la 94 del expediente)

c) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1195/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informe el número de póliza en la cual se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos por concepto de pantalla, mariachi, animadores y alimentos y bebidas. (Foja 97 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

d) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3119/18 la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 98 a la 100 del expediente)

e) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1347/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informe si derivado del monitoreo realizado durante el periodo de campaña se localizaron bardas o propaganda colocada en vía pública correspondiente al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe.

XI. Razones y Constancias.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación del registro de los gastos por concepto de realización del evento denunciado dentro del expediente que en esta vía se resuelve, evento que a dicho del denunciante, beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro del evento, a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, identificador 00004, con el nombre “Arranque de Campaña”**. (Fojas 82 y 83 del expediente)

b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los gastos, los cuales fueron denunciados dentro del expediente que en esta vía se resuelve, mismos que a dicho del denunciante, beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro de banda musical, sonido y templete a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, con el número de póliza 1.** (Fojas 95 y 96 del expediente)

c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los gastos, los cuales fueron denunciados dentro del expediente citado al rubro, mismo que beneficiaron a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad

Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro de lonas a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, con el número de póliza 2.** (Fojas 101 y 102 del expediente)

d) El diez de septiembre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de verificar si la página de la red social denominada Facebook del C. Juan López Blanco es oficial, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo la dicha red social el perfil del candidato, dando como resultado que no es oficial la página. (Fojas 103 y 104 del expediente)

e) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de gastos por concepto de pinta de bardas, mismas que beneficiaron la campaña del C. Juan López Blanco otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), **que no existe registro alguno del concepto de pinta de bardas.**

XII. Solicitud de información al C. Hugo Núñez Hernández. Mediante acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, realice lo conducente a efecto de notificar el oficio a efecto de que en un plazo improrrogable de cinco días a partir de que reciban respectiva, formulen por escrito lo que a su derecho convenga.

XIII. Acuerdo de alegatos. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 105 del expediente)

XIV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43924/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento citado al rubro. (Fojas 106 y 107 del expediente)

XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43925/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento citado al rubro. (Fojas 108 y 109 del expediente)

b) Mediante oficio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación de alegatos del Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 110 a la 115 del expediente)

XVI. Notificación de alegatos al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática.

a) Mediante acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, realice lo conducente a efecto de notificar la apertura de alegatos al C. Juan López Blanco, a efecto de que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que reciban respectiva, formulen por escrito sus alegatos, exponiendo lo que a su derecho convenga (Fojas 116 y 117 del expediente)

XVII. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 119 del expediente).

XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en lo general, por votación unánime de los presentes, las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif Hernández y en lo particular, por cuanto hace al concepto de gasto denominado “pantalla”, fue aprobado con tres votos a favor de los presentes y uno en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y

cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017¹; INE/CG614/2017² e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizando todos los documentos y actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el **fondo** del presente asunto, se constriñe en determinar si el Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de un evento de campaña celebrado el día seis de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados por concepto de bardas, pendones y mantas, y por ende un posible rebase de gastos de campaña.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

¹ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

² Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

(...)

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

(...).”

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de ingresos.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser

reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

“Artículo 127.

Documentación de los egresos.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

(...)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el nueve de agosto de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja de referencia.

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro³ de las erogaciones conducentes.

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en los artículos 83, numerales 2, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el Partido Revolucionario Institucional, así como de su candidato.

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y legalmente permitidos.

3 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado en el evento de campaña un beneficio al C. Oscar Bautista Villegas, candidato a Diputado Federal por el distrito 03 en el estado de San Luis Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, serán sumadas a su informe relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos carecen de objeto partidista para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio a la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente

con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma. Es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El primero de agosto del dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja presentado por el C. Delfino Quiroz Cruz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal de Villa Guadalupe, quien denunció que el Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí; el C. Juan López Blanco, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de un evento de campaña celebrado el día seis de mayo del dos mil dieciocho así como gastos por concepto de bardas, pendones y mantas y por ende, un posible rebase de topes de gastos de campaña.

El quejoso señala en su escrito inicial que, derivado de la realización del evento de campaña denunciado, se desprenden gastos por concepto de audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, así mismo señala que a los asistentes al evento se les dieron alimentos y bebidas

Así mismo, en el escrito de queja el C. Delfino Quiroz Cruz, denuncia un supuesto gasto de campaña no reportado por concepto de un “**número considerable de bardas y un número importante de pendones y mantas**”, sin aportar mayores elementos de probanza más que su mención en el escrito de denuncia.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el apartado será el siguiente:

- A. Gastos de campaña por concepto de realización del evento de campaña del 6 de mayo 2018.**
- B. Gastos de campaña por concepto de bardas, pendones y mantas.**

A. Gastos de campaña por concepto de realización del evento de campaña del 6 de mayo 2018.

En este apartado se analizará el hecho denunciado consistente en la realización de un evento de campaña que ha dicho del quejoso, tuvo verificativo el día seis de mayo del dos mil dieciocho el cual, a dicho del quejoso beneficio la candidatura del C. Juan López Blanco, el denunciante señala que en dicho evento se erogaron gastos por concepto de audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, así mismo señala que a los asistentes al evento se les dieron alimentos y bebidas

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Para sostener sus afirmaciones el quejoso anexó a su escrito dos imágenes de captura de pantalla, en una de ellas se puede observar una supuesta publicación en el perfil de Facebook de Juan López Blanco en la cual se hace una invitación al evento de arranque de campaña el domingo 6 de mayo del 2018 a las 17:00 horas en la casa de campaña del PRD para salir a realizar un recorrida a las calles de la comunidad; en la otra imagen se observa otra publicación de Facebook en la cual aparece únicamente una imagen del candidato con su nombre y el logo del PRD.

Así mismo adjunta un disco compacto el cual se encuentra rotulado como “*prueba 1*”, este contiene un video, en donde no se puede apreciar ningún elemento ni circunstancia que permitan probar la existencia de los gastos denunciados tales como audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, ya que se

muestra a un menor de edad bailando, dicha probanza resulta insuficiente y notoriamente inverosímil para acreditar su dicho.

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, el video relacionado en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/2014⁴, emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: *“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieran contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretendan acreditar con estas”*

En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

En razón de lo anterior y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por el sujeto denunciado en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y a emplazar al C. Juan López Blanco, en su calidad de candidato Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática, en el estado de San Luis Potosí, los cuales fueron notificados a través de los oficios número INE/SLP/JLE/VE/750/2018 e INE/UTF/DRN/41361/2018, respectivamente.

⁴ **PRUEBAS TÉCNICAS, SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.** De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

En este mismo sentido, mediante oficio número INE/UTF/DRN/41359/2018, se le requirió al denunciante para que aclarara su escrito de queja y aportara mayores elementos y circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba respecto de la existencia de los hechos denunciados, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos así como la omisión de una narración expresa y clara o la ausencia de elementos probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.

Ahora bien, en el caso concreto el quejoso no desahogo el requerimiento y no subsano la deficiencia de su denuncia, al omitir hacer una narración expresa y clara de los conceptos denunciados (evento de campaña del 6 de mayo, bardas, pendones y mantas), tampoco aportó elementos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran a esta autoridad dilucidar si los incoados incurrieron en una conducta infractora de la normativa electoral en materia de fiscalización.

No obstante, lo anterior, ésta autoridad electoral en ejercicio del principio de exhaustividad que rige su actuar y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y con el ánimo de allegarse mayores elementos que le permitieran esclarecer los hechos denunciados, procedió a realizar diversas diligencias para obtener elementos que le permitirán realizar un pronunciamiento en relaciona los hechos denunciados, en razón de ello, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó mediante oficio número **INE/UTF/DRN/1162/2018** a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara si en sus registros se localizaba el reporte de los gastos erogados por el C. Juan López Blanco con motivo del evento de campaña de fecha 6 de mayo del 2018 y en su caso proporcionara el número de póliza en la cual fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, el mencionado evento de campaña, celebrado por el entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

A lo cual, la referida Dirección de Auditoría, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3075/18 informó que el evento materia del presente curso, fue registrado por el sujeto denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad número 54551, correspondiente al C. Juan López Blanco, así mismo remitió copia simple de la póliza **PD-2/06-2018**, en donde se encuentran registrados los gastos por concepto de **banda musical, sonido y templete**.

A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el registro del evento del cual se generaron diversos gastos no reportados por concepto de: **equipo de sonido, escenario, grupo musical**, se procedió a efectuar una nueva búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos especificados anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fechas: trece de agosto, veinte de agosto y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho levanto Razón y Constancia de las búsquedas realizadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados.

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Gastos	Documentación encontrada en el SIF	Agenda de Eventos
06 de mayo de 2018	"Arranque de campaña"	Villa de Guadalupe, San Luis Potosí	-Equipo de sonido - Escenario -Grupo Musical	-Evento registrado: identificador 00004, no oneroso, publico, "Arranque de campaña". -Equipo de sonido, escenario⁵, grupo musical: Póliza número 1, Periodo 2, normal, concepto: RSES-111 Aportación del C. Hugo Núñez Hernández.	Dicho evento fue registrado en la Agenda de Eventos en el SIF con el identificador 00004.

⁵ Cabe señalar que el quejoso denuncia el concepto de gasto de "pantalla" y como se observa en la documentación contenida en el SIF, específicamente en la evidencia, se observa que, en la fotografía cargada por el denunciado, se aprecia que en el escenario hay una pantalla, por tanto, este concepto se encuentra amparado en la póliza señalada en el cuadro.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Gastos	Documentación encontrada en el SIF	Agenda de Eventos
					

En este sentido, de la información remitida por la Dirección de Auditoría así como de la información obtenida del SIF mediante Razón y Constancia se desprende que los conceptos de gasto denunciados consistente en el reporte del evento de arranque de campaña de seis de mayo del 2018, fue reportado en la agenda de eventos correspondiente asimismo señalo que los gastos vinculados con la realización del referido evento, consistentes en audio, escenario, pantalla y grupo musical, fueron reportados por el C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en su informe de campaña correspondiente, razón por la cual, dichos conceptos de gasto fueron materia de revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.

Por cuanto hace a los supuestos gastos no reportados por concepto de mariachi, animadores alimentos y bebidas la quejosa no señala ni aporta mayores elementos de que la simple mención en el escrito de queja.

Por lo que fue omisa en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo, tiempo y lugar dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

De los conceptos anteriormente señalados, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del entonces candidato y partido político denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que

concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí y el Partido de la Revolución Democrática por los conceptos señalados

Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.**⁶

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no existen elementos que lleven a concluir que el C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática hayan transgredido lo preceptuado en el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización motivo por el cual esta autoridad considera declarar **infundado** el presente apartado.

B. Gastos de campaña por concepto de bardas, pendones y mantas.

Respecto a estos conceptos el quejoso no aportó mayores elementos que la simple mención en su escrito de queja, sin señalar cantidades ni ubicaciones de las supuestas bardas, pendones y mantas con propaganda en favor del entonces candidato, el C. Juan López Blanco.

Por lo que fue omiso en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo, tiempo y lugar

⁶ Jurisprudencia 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

Ahora bien, derivado de la lectura al escrito de queja que nos ocupa, la autoridad fiscalizadora advirtió que por cuanto hace a los supuestos gastos no reportados por concepto de **bardas, pendones y mantas**, dicho escrito no aportaba circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionados con los conceptos denunciados y carecía de elementos probatorios que le permitieran a la autoridad trazar una línea de investigación, que le posibilitara realizar diligencias con la finalidad de acreditar o desmentir los hechos denunciados.

No obstante, lo anterior, la autoridad fiscalizadora solicito al quejoso mediante oficio INE/UTF/DRN/41359/2018 que aclarara su escrito de queja y aportara mayores elementos y circunstancias de modo, tiempo y lugar y, aportara elementos de prueba respecto de la existencia de las bardas y lonas denunciadas, fenecido el termino otorgado para tal fin, el denunciante no desahogo el requerimiento y no subsano la deficiencia de su denuncia, al omitir hacer una narración expresa y clara de los conceptos denunciados (bardas, pendones y mantas), tampoco apporto elementos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran a esta autoridad dilucidar si los incoados incurrieron en una conducta infractora de la normativa electoral en materia de fiscalización

No obstante, lo anterior, esta autoridad, en apego y observancia al principio de exhaustividad que rige su actuar, procedió a revisar la documentación contenida en el Dictamen Consolidado, así como la Resolución correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, por cuanto hace a los gastos por concepto de pinta de bardas y de propaganda colocada en la vía pública, de dicha revisión, se obtuvo que en el referido documento, no se realizaron observaciones relacionadas con algún gasto reportado o la omisión de reportarlo por concepto de pinta de bardas, pendones o mantas así mismo mediante Razón y Constancia de fecha dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, signada por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar que de una búsqueda realizada al Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), que derivado de los procedimientos de monitoreo realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización, no se localizaron bardas, pendones o mantas con propaganda a favor o que en su caso, beneficiara a la candidatura del C. Juan López Blanco.

Derivado de lo anterior y una vez que esta autoridad electoral valoro la totalidad de los elementos probatorios encontrados, se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza de la existencia de las supuestas bardas, pendones o mantas con propaganda en favor del otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco, de las cuales se duele el quejoso y que dieron origen al procedimiento de mérito; en consecuencia, no es posible sostener que el partido político no tenía la obligación de reportar en su informe de campaña gasto alguno por concepto de la propaganda de mérito.

En las relatadas condiciones, y toda vez que no se desprende que las bardas, pendones o mantas, de las cuales se duele el quejoso existan, se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor del Partido de la Revolución Democrática y de su entonces candidato, el C. Juan López Blanco el principio jurídico *“Indubio pro reo”*, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. *El aforismo “in dubio pro reo” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.*

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. *Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.*

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. “

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.”

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio *in dubio pro reo* es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8º, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

En consecuencia, del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral federal concluye que **no se cuenta con certeza de que el Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco hubiesen omitido reportar en su informe de campaña egresos por concepto de propaganda o publicidad consiente en bardas, mantas, pendones, misma suerte que corren los conceptos consistentes en: grupo musical, alimentos y bebidas, pantalla;** por lo tanto, esta autoridad considera que no hay elementos que permitan afirmar que el partido político ni su otrora Candidato el C. Juan López Blanco, se hubieran beneficiado de los referidos gastos, mismos que dieron origen al presente procedimiento, por lo que no se acredita la vulneración a la normativa electoral en materia de fiscalización.

Se hace hincapié en que la imagen que acompaña al escrito de queja, la misma no arroja indicio alguno que permita determinar la existencia de los demás conceptos denunciados por lo que, en estricto cumplimiento a los principios rectores de la autoridad electoral, los de certeza, objetividad, inocencia y legalidad, consagrados en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que únicamente se cuenta con una apreciación subjetiva del denunciante y una imagen proporcionada por el quejoso y en ésta no es posible advertir si correspondan o no al evento en estudio. Por lo que, al no existir un enlace lógico o nexo de causalidad entre el hecho que se conoce y el que se pretende conocer, ésta autoridad se encuentra imposibilitada para determinar la responsabilidad, por lo que hace a los conceptos en mención.

Aunado a que ésta autoridad no puede basar sus actuaciones en presunciones y sin contar con una prueba fehaciente, sobre todo si se trata de la imposición de alguna sanción, pues debe imperar el principio in dubio pro reo.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

En consecuencia y en base en los elementos aportados por el quejoso así como de los que se allegó la autoridad es de concluir que el Partido **Revolución Democrática** y su **y su entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco**, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, por lo que respecta al presente apartado.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **el Partido de la Revolución Democrática, y su candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco**, en los términos del **Considerando 2 apartado A y B** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese al quejoso.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Procedamos ahora con el Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 19.7. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

En el Proyecto de Resolución que ahora está a nuestra consideración, no habría de acompañar el Proyecto en su totalidad, porque me parece que la investigación que nos presenta la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización no es una investigación exhaustiva, hay un conjunto de eventos que están denunciados y respecto de los mismos, en algunos casos hay más gastos que se pueden advertir de las propias pruebas técnicas que nos presenta como prueba el quejoso, respecto de aquellos gastos que están reportados por el denunciado. Y a pesar de que existe esta coincidencia en algunos gastos, pero las imágenes muestran gastos adicionales, no se realizó alguna investigación adicional para poder acreditar si se habían erogado o no se habían erogado esos gastos. _____

Por otra parte, en otro de los eventos se nos señala que el quejoso no proporciona circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso se declara infundado. _____

Sin embargo, en ese caso lo que tenemos es que tampoco se le requirió que presentara mayores circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo que si se iba a llegar a una conclusión de esta naturaleza primero se debió de haber hecho un requerimiento al menos, al quejoso sobre el tema. _____

Y además hay un conjunto de gastos respecto de los cuales nuevamente no se hace un cruce con el Kárdex. _____

Por lo que por estas valoraciones no acompañaría el Proyecto de Resolución que ahora se presenta a nuestra consideración. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Brevemente, también es un tema relacionado con los criterios que sigue la Comisión a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización para valorar pruebas relacionadas con posibles gastos no reportados, en este caso se propone declarar infundados la supuesta omisión de reportar gastos de 17 eventos, gastos particularmente relacionados con un evento, que de acuerdo con el quejoso se celebró el 22 de junio y se declara fundada la omisión de reportar 7 mesas y 20 sillas. _____

Lo que tiene la Unidad de Fiscalización para valorar son fotografías, las declaraciones del quejoso y las declaraciones en este caso del denunciado. Y tras la valoración de las pruebas no hay elementos para desvirtuar lo que el denunciado declara respecto a que esos 17 eventos, fueron caminatas no onerosas. Y los indicios que están en el expediente no permiten imputar en forma fehaciente la realización de un gasto, y por esa razón se propone esta parte de la queja declararla infundada. _____

Ese es el criterio que prevaleció en la Comisión de Fiscalización, Consejero Presidente. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para solicitar en la votación que se separe el criterio de sanción, porque viene disminuido, para poder acompañar lo demás. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. _____

Secretario del Consejo, por favor, tome la votación. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entiendo que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín iría en contra de todo el Proyecto de Resolución, pero dada la intervención del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña tendríamos que someter una votación en lo general y otra en lo particular por lo que hace al criterio de sanción. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional, identificado en el orden del día como el apartado 19.7, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente y excluyendo de la misma por lo que se refiere al criterio de sanción. _____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

9 votos. _____

¿En contra? 1 voto. _____

Aprobado en lo general por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

Ahora someto a su consideración en lo particular, el criterio de sanción como viene el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, en el sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

7 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Aprobado en lo particular por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1493/2018) Pto. 19.7 _____

INE/CG1493/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL C. ELIO MOLINA SALINAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por el C. José Luis García Canales. El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito signado por el C. José Luis García Canales, mediante el cual denuncia probables violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, así como el probable rebase de tope de gastos de campaña del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas por el Partido Revolucionario Institucional.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en su escrito de queja inicial:

“(…)

HECHOS.

I. Mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el cual se fijan los topes de gastos de las Campañas para las Elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, identificado con el número CEEICG1491201 7; se determinó:

"Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba los Topes de Gastos de las Campañas en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, conforme a las tablas identificadas con los números XXXIV y XXXV contenidas en el Considerando Décimo Séptimo del presente Acuerdo."

(cuadro inserto)

Esto es, el monto definitivo de tope de gasto de campaña en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, específicamente para la renovación del ayuntamiento del municipio de Agualeguas, Nuevo León, se estableció en la suma de \$78,004.12 setenta y ocho mil cuatro pesos 12/100 en moneda nacional.

II. Conforme a las documentales existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se tiene que el C. ELIO MOLINA SALINAS, presentó sus informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos, en los términos en que son de verse; destacándose del apartado de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de la página de internet de esta Unidad Técnica de Fiscalización, lo siguiente:

a. Que el C. ELIO MOLINA SALINAS, reportó un total de ingresos por la cantidad \$49,213.02 cuarenta y nueve mil doscientos trece pesos 02/100 M. N., con un total de gastos por la suma de \$48,819.91 cuarenta y ocho mil ochocientos diecinueve pesos 91/100 M. N.

b. Con un detalle de gastos que a continuación se precisan:

(imagen inserta)

Así como un detalle de eventos realizados en cantidad de 15 quince, todos ellos bajo el tipo de públicos y clasificados como no onerosos: destacándose que respecto todos y cada uno los refirió "por realizar"; específicamente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

Fecha de evento	Evento	Lugar del evento
25/05/2018	Recorrido centro	Aldama
26/05/2018	Recorrido Rancho Nuevo	López Mateos
27/05/2018	Recorrido Cieneguitas	Conocido
28/05/2018	Recorrido Tres Hermanos	Conocido
29/05/2018	Recorrido Ojo de Agua	Conocido
30/05/2018	Recorrido en los Garza	Hidalgo
31/05/2018	Recorrido en La Escondida	Juárez
1/06/2018	Recorrido en Nogales	Escobedo
2/06/2018	Recorrido en Lagunillas	Conocido
3/06/2018	Recorrido Centro	Guadalupe Victoria
4/06/2018	Recorrido Agualeguas	Conocido
5/06/2018	Recorrido centro	Abasolo
6/06/2018	Recorrido centro	Rayón
7/06/2018	Recorrido en Los Nogales	Escobedo
8/06/2018	Recorrido Agualeguas	Allende

Es el caso que contrario a lo expuesto, el C. ELIO MOLINA SALINAS, realizó incluso diversos actos de campaña que no reportó, como son los consignados en las copias certificadas allegadas a la presente y que hacen evidente que:

El C. Rodolfo Rodríguez Cantú, representante ante la Comisión Municipal de Agualeguas, Nuevo León, del Partido Movimiento Ciudadano, solicitó información sobre si el Partido Revolucionario Institucional había solicitado permiso para diversos actos de campaña, en el periodo comprendido del mes de abril al día 28 de junio de 2018; el C. César Saucedo Hernández, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del municipio de Agualeguas, Nuevo León, informó que efectivamente el Partido Revolucionario Institucional realizó solicitudes para los siguientes eventos:

Inicio de campaña en el Centro Cívico Municipal, de dicha municipalidad, en fecha 29 de abril de 2018.

Acto de campaña en la calle Venustiano Carranza entre Pablo González y Galena, en fecha 27 de mayo de 2018.

Acto de campaña en el Techo Polivalente de la Comunidad Ojo de Agua, en fecha 16 de junio de 2018.

Cierre de campaña en la calle Francisco T. Casso entre Morelos y Zaragoza, en fecha 27 de junio de 2018.

Eventos que cotejados con los 15 informados, no fueron informados debidamente más sin embargo fueron realizado y en efecto el C. ELIO MOLINA SALINAS verificó los siguientes actos de campaña:

El día 29 de abril de 2018 inició su campaña en el Centro Cívico Municipal de Agualeguas, Nuevo León; realizándose una inversión aproximada por la suma de \$46,400.00 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva:

(cuadro inserto)

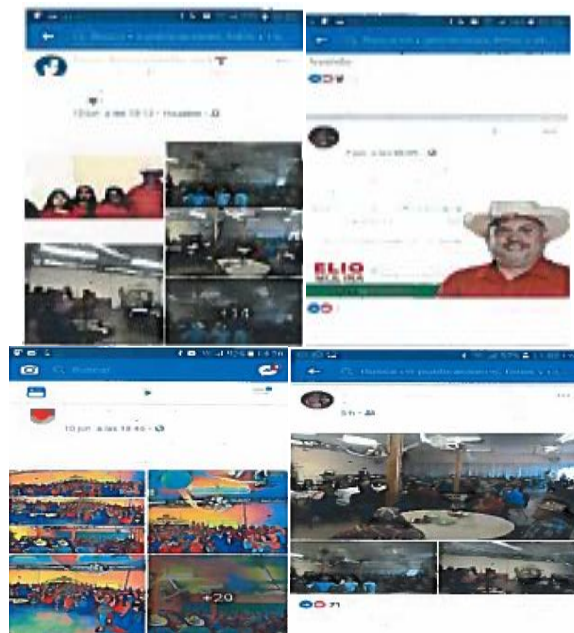
**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL**



El día 10 de junio de 2018, el Partido Revolucionario Institucional, realiza un acto de campaña en la localidad de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica específicamente en el lugar identificado como "IWS Reception Hall 320 Broadway ST. Houston 77012", al cual asistieron 200 personas, entre ellas el candidato a Alcalde el C. Elio Molina Salinas, y dos personas más; realizándose una inversión por la suma de \$180,612.70 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva:

(Se inserta cuadro)

*Acto de campaña que fue denunciado por el Suscrito y por el cual se integra ante esta Unidad Técnica de Fiscalización el **Expediente Número INE/Q-COF.UTF/591/2018/NL**. Haciéndose evidente con el siguiente material fotográfico:*





Acto de campaña en el Techo Polivalente de la Comunidad Ojo de Agua, en fecha 16 de junio de 2018, mismo que se hace evidente con el siguiente material fotográfico:



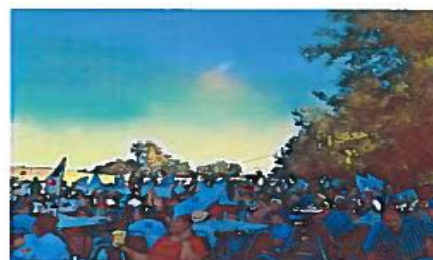
Realizándose para tal acto de campaña una inversión aproximada por- la suma de \$180,612.70 pesos ello conforme a la siguiente tabla descriptiva:

(Se inserta cuadro)

Acto de campaña de fecha 22 de junio de 2018, en la comunidad de Los Nogales; Realizándose para tal acto de campaña una inversión aproximada por la suma de \$9,860.00 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva:

(Se inserta cuadro)

Acto de campaña que se hace evidente con las siguientes fotografías:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL



En fecha 27 de junio de 2018, el Partido Revolucionario Institucional verificó un acto de campaña como cierre de la misma, con una inversión aproximada de \$55,100.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

(Se inserta cuadro)

Acto de campaña que se hace evidente con las siguientes fotografías:

(Se insertan fotos)

Actos de campaña que sin lugar a una duda tuvieron un costo económico, tal y como se hace evidente de las series de fotografías y videos allegados a la presente; costos económicos no informados mucho menos pormenorizados de forma alguna, pero que hacen presumibles las siguientes erogaciones con una inversión de \$299,063.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

FECHA	EVENTOS SIN INFORMAR	COSTO TOTAL
29/04/2018	INICIO DE CAMPAÑA	\$46,400.00
10/06/2018	HOUSTON	\$180,163.00
16/06/2018	OJO DE AGUA	\$7,540.00
22/06/2018	NOGALES	\$9,860.00
27/06/2018	CIERRE	\$55,100.00
	TOTAL	\$299,063.00

Cantidad de dinero la anterior a la que habría que sumar la manifestada en su informe del C. ELIO MOLINA SALINAS.

La actitud y decisión del Partido Revolucionario Institucional y su Candidato es manifiesta: ocultar a la autoridad que en realidad se hicieron un mayor número de eventos o actos de campaña, pues es indudable que, a un mayor número de actos de campaña, una mayor inversión económica.

Por supuesto que exceder el tope de gastos de campaña, genera ventaja en la contienda y con ello se ha violentado el principio de Equidad; y ello atribuido tanto al Partido Acción Nacional como su candidato el C. ELIO MOLINA SALINAS.

...
...

(...)"

PRUEBAS

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

DOCUMENTALES TÉCNICAS.

- Catorce imágenes insertas en el escrito de queja en las cuales se aprecian los eventos denunciados y en una de ellas se observa un volante que contiene la invitación al evento de cierre de campaña del candidato incoado.
- Un disco compacto, el cual contiene: siete carpetas con cuarenta y tres fotografías relacionadas con los eventos de campaña denunciados, así como un archivo que contiene unas tablas los costos de gastos realizados a juicio del quejoso; cinco archivos, los cuales contienen, copia de la credencial para votar del C. José Luis Canales García, tabla de los supuestos gastos sin prorratear, copias simples de la certificación de las solicitudes para obtener el permiso correspondiente de la autoridades municipales para llevar a cabo los eventos denunciados así como un archivo que contiene copia del escrito de queja.
- Copias certificadas expedidas por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Agualeguas, estado de Nuevo León, de las solicitudes realizadas por el candidato incoado, para obtener el permiso de la realización de eventos en dicho Municipio.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución, el mismo diez de agosto del año en curso se acordó integrar el expediente respectivo, y se le asignó el número **INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL**, mismo que fue registrado en el libro de gobierno. (Fojas 1 - 2 del expediente)

IV. Publicación en estrados el acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 23 del expediente)

b) El quince de agosto dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este instituto, los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 24 del expediente)

V. Notificación del inicio de procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41507/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL. (Foja 25 del expediente)

VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41508/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretarios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL. (Foja 26 del expediente)

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, al C. José Luis García Canales.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/1323/2018, se notificó el inicio de procedimiento al C. José Luis García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Estado de Nuevo León. (Fojas 27 a la 32 del expediente)

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41509/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de mérito, corréndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integran el presente expediente. (Fojas 43 a la 46 del expediente)

b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, recibió oficio mediante el cual el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente señala lo que a la letra dice: (Fojas 47 a la 65 del expediente)

“(…)

En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los márgenes constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan.

Lo que actualiza la improcedencia prevista en los artículos 466, punto 1, inciso c), punto 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, y en dicho supuesto, la autoridad electoral debe decretar como improcedente la denuncia y sancionar al promovente por la conducta infractora prevista en la misma Ley.

Esto es así, por dos situaciones:

PRIMERO: *Parte de los hechos denunciados relativos a un supuesto evento el día 10 de junio del presente año, en la Ciudad Houston, Texas, he de señalar que los mismos ya fueron sujetos de denuncia e investigación, y consecuentemente resueltos por esa misma autoridad en el procedimiento administrativo sancionador **INE/Q-COF-COFUTF/591/2018/NL**, en fecha en fecha 06 de agosto del presente año, y dado que son falsos los hechos denunciados se declaró infundado.*

SEGUNDO: *Los hechos denunciados respecto al punto II de hechos, el mismo únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en fotografías y video-audios, que sólo generaliza Por presuntos hechos denunciados, sin que por otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y documentales que acompaña consistente en la copias certificadas expedidas por el Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, he de señalar que es cierto única y*

exclusivamente en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los eventos se hubieran realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizó fue el del día 27 de Junio del 2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma, y en ese evento, carece de razón y alcance legal su manifestación, ya que resulta inatendible e inoperante considerar que por solo presentar una solicitud, ella sea causa suficiente para que se realice el evento, y bajo esa lógica lo niego lisa y llanamente su realización como lo expone el denunciante.

Por lo tanto, la autoridad electoral advertida y constatada la frivolidad de la denuncia respecto a la suscrita y debe proceder en los términos del 466, punto 1, inciso c), punto 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales. Actuar en contrario, permitiría generar incertidumbre a la ciudadanía con la promoción de este tipo de denuncias que no alcanzan los fines pretendidos por sus quejosos, afectando el estado de derecho y los intereses de los ciudadanos, ante la falta de seriedad al acudir a las instancias electorales afectando el uso y desgaste de los elementos humanos y materiales de autoridades administrativas y jurisdiccionales en cuestiones evidentemente frívolas; ya que es indudable que estas conductas deben reprimirse y evitarse.

Para lo anterior, resulta obligatorio a la autoridad electoral atender los preceptos legales referidos y orientador en su aplicación el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis siguiente:

(...)

Por lo antes expuesto, advertida que fue la improcedencia de la infundada denuncia presentada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe elaborar un Proyecto de Resolución por el que se proponga a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el desechamiento, de conformidad con lo previsto en el 466, punto 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o en el caso que así procediere, ese H. Tribunal de Justicia Electoral resolver la improcedencia de la causa y la frivolidad de la denuncia interpuesta con la sanción que en derecho proceda imponer al promovente.

Por lo antes expuesto me permito rendir ante esa autoridad electoral, en tiempo y forma legal, contestación de los hechos que se me imputan de forma:

AD CAUTELAM

EN RELACIÓN A LOS HECHOS ESENCIALMENTE SE LE HIZO DEL CONOCIMIENTO A MI REPRESENTADO EN EL ACUERDO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE NO SE LE CORRIO TRASLADO DE O TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTA EL EXPEDIENTE, SINO DE UN DISCO CERTIFICADO QUE APARENTEMENTE CONTIENE CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

Resulta improcedente los hechos que le atribuyen a mi representado en este expediente, ya que en ningún momento ordenó, contrató, solicitó, requirió ni acordó o pactó la realización de los inexistentes eventos que se atribuye el denunciante; y en ese evento, tampoco se le puede atribuir al Partido Revolucionario Institucional como una situación que se traduce en el presunto posibles ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones del denunciante en dicho sentido; y consecuentemente, te arrojó la carga de la prueba para que demuestre lo contrario conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación:

(...)

Luego entonces, si no realicé el citado evento es aplicable la tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que a la letra dice:

RUBRO: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR.

TEXTO: De la interpretación de los artículos 341, párrafo 1, inciso c), y 344 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, se colige que para atribuir responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de promocionales violatorios de la normativa electoral, es necesario que se tengan elementos, por lo menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto infractor, en tanto que resultarla desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento. Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-157/2010—Recurrente: José Enrique Doger Guerrero. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal.—6 de octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza—Secretaría: Marcela Elena Fernández Domínguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de enero de dos mil once, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, página 36.

ALEGATOS

EL QUEJOSO EN NINGÚN MOMENTO ACREDITA FEHACIENTEMENTE QUE HUBIERE REALIZADO LOS EVENTOS DENUNCIADOS.

El denunciante en su escrito señala que realicé eventos en las fechas que refiere y como los refiere, y esta afirmación es infundada debido a que en términos de la legislación Electoral vigente, en ningún momento invité, organicé ó realicé dicho evento denunciado; y consecuentemente no se acredita que origina el presunto posibles ingresos y gastos no reportados.

El denunciante al no aportar los elementos de convicción suficientes, no logra demostrar que el Partido Revolucionario Institucional que postuló al C. Elio Molina Salinas como Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, haya originado

ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y, por otro lado, tampoco logra demostrar que haya invitado, organizado y realizado el evento denunciado, ya que con las probanzas que ofrece y que son documentales simples e instrumentales que dicho sean de paso editadas por él, ya que no existe elemento de prueba alguno que autentifique o certifique su autenticidad e inviolabilidad de las mismas, no lleva a establecer que el denunciante sorprende la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y del candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, y no acredita sus hechos denunciados; máxime que el evento denunciado es inexistente, dado que no se invitó, organizó y mucho menos se realizó, por lo que carece de veracidad, certeza y congruencia lo manifestado por el denunciante.

En términos de lo anterior es que la denuncia que por este medio se atiende deberá desecharse en atención a lo siguiente:

El denunciante no acredita que los eventos se hubieren realizado y mucho menos se hubiera invitado y organizado el mismo, ya que las probanzas que ofrece carecen de autenticidad o veracidad, máxime que provienen de acuerdo a su ofrecimiento de una red social que no es ni del Partido ni del otrora Candidato, lo que significa que la misma fue editado por su oferente.

No aporta los elementos de prueba que permitan tener certeza de que el otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, hubiere realizado la invitación, y menos aún que los eventos, sino sus probanzas solo son instrumentales editadas por él que tratan de sorprender la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León.

Al tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convicción donde se pueda atribuirle a mi representado la responsabilidad por los hechos denunciados, se solicita a ésta autoridad que aplique a mi favor, la jurisprudencia siguiente:

RUBRO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RALES.

(...)

En atención a la jurisprudencia que se cita, es que se solicita a ésta autoridad desestime los argumentos vertidos por el accionante debido a que no aporta los elementos de convicción necesarios para atribuirme responsabilidad alguna.

Esta autoridad deberá considerar que, la parte actora no solo debe manifestar su dicho, sino que debe de aportar elementos que lleven a esta autoridad a tener convicción sobre lo afirmado, es decir exhibir las pruebas necesarias, para lo cual es importante referir un poco al respecto de la teoría de la prueba, misma que nos señala lo siguiente:

(...)"

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. Elio Molina Salinas.

a) El quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-VE-JLE-NL/1322/2018, se notificó al C. Elio Molina Salinas, candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, en el estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito; asimismo se le emplazó corréndole traslado con las constancias que integran el expediente de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto denunciados. (Fojas 33 a la 35 del expediente)

b) Mediante escrito, sin número recibido en fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, el C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice: (Fojas 36 a la 42 del expediente)

"(...)

En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los márgenes constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan.

(...)

Esto es así, por dos situaciones:

PRIMERO: *Parte de los hechos denunciados relativos a un supuesto evento el día 10 de junio del presente año, en la Ciudad Huoston, Texas, he de señalar que los mismos ya fueron sujetos de denuncia e investigación, y consecuentemente resueltos por esa misma autoridad en el procedimiento administrativo sancionador INE/Q-CONF-COFUTF/591/2018/NL, en fecha en fecha 06 de agosto del presente año, y dado que son falsos los hechos denunciados se declaró infundado.*

SEGUNDO: *Los hechos denunciados respecto al punto II de hechos, el mismo únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en fotografías y video-audios, que sólo generaliza los presuntos hechos denunciados, sin*

que por Otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y la documentales que acompaña consistente en la copias certificadas expedidas por el Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, he de señalar que es cierto única y exclusivamente en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los eventos se hubieran realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizó fue el del día 27 de Junio del 2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma; y en ese evento, carece de razón y alcance legal su manifestación, ya que resulta inatendible e inoperante considerar que por solo presentar una solicitud, ella sea causa suficiente para que se realice el evento, y bajo esa lógica 10 niego lisa y llanamente su realización como lo expone el denunciante.

Por lo tanto, la autoridad electoral advertida y constatada la frivolidad de la denuncia respecto a la suscrita y debe proceder en los términos del 466, punto 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales. Actuar en contrario, permitiría generar incertidumbre a la ciudadanía con la promoción de este tipo de denuncias que no alcanzan los fines pretendidos por sus quejosos, afectando el estado de derecho y los intereses de los ciudadanos, ante la falta de seriedad al acudir a las instancias electorales afectando el uso y desgaste de los elementos humanos y materiales de autoridades administrativas y jurisdiccionales en cuestiones evidentemente frívolas; ya que es indudable que estás conductas deben reprimirse y evitarse.

(...)"

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1253/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera la información registrada en sus archivos en relación a los quince eventos denunciados, así como los gastos correspondientes a los mismos. (Foja 66 y 67 del expediente)

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio número INE/UTF/DA/3176/2018, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. (Foja 68 del expediente)

c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1292/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría remitiera la información registrada en sus archivos en relación a cinco eventos denunciados, así como los gastos correspondientes a los mismos. (Foja 96 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

d) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio número INE/UTF/DA/3193/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. (Fojas 97 y 98 del expediente)

e) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1328/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría, informara si dentro de sus archivos, se localizaba registro de los gastos correspondientes al evento de campaña de fecha 22 de junio del 2018. (Foja 105 del expediente)

f) El quince de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio número INE/UTF/DA/3221/18, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. (Foja 106 del expediente)

h) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1371/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría, informara el costo unitario de cada uno de los conceptos relacionados con la realización de los eventos de campaña celebrados en fechas, dieciséis y veintidós de junio del dos mil dieciocho de conformidad con la matriz de precios. (Foja 109 del expediente)

i) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio número INE/UTF/DA/3311/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. (Foja 135 a la 137 del expediente)

XI. Solicitud de información a la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León.

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/42639/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, información relativa a los saldos pendientes por pagar de todos los partidos políticos acreditados ante el Consejo General de ese órgano electoral, respecto de las sanciones pecuniarias impuestas a cada uno de ellos y el estado que guardan las mismas. (Foja 99 del expediente)

b) Mediante oficio número SECEE/04221/2018, la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 100 a la 104 del expediente)

XII. Razón y Constancia.

a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia respecto de la búsqueda realizada, la cual se integró al expediente, junto con las constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el Informe de Campaña del sujeto incoado. (Foja 107 y 108 del expediente)

b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho respecto de la búsqueda y verificación en la red social denominada Facebook, específicamente en la liga <https://www.facebook.com/pg/YoSoyDeAguaqueguas/photod/?ref=page>, en relación a los eventos denunciados, mismos que a dicho del quejoso beneficiaron a la campaña del C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal de Aguaqueguas Nuevo León por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizó dentro del perfil de Facebook de dicho candidato fotografías que demuestran la realización de dichos eventos. (Foja 111 y 112 del expediente)

XIII. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.

a) El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/46410/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integran el presente expediente. (Foja 115 a la 119 del expediente)

b) El seis de noviembre de dos mil dieciocho mediante escrito, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. (Foja 138 a la 146 del expediente)

XIV. Emplazamiento al C. Elio Molina Salinas, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Aguaqueguas, en el estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

a) Mediante Acuerdo de fecha veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, se le solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto, notificar al C. Elio Molina Salinas, candidato al cargo de Presidente Municipal de Aguaqueguas, en el estado de

Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento y correrle traslado con las constancias que integran el expediente de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto denunciados. (Foja 113 y 114 del expediente)

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta alguna por parte del otrora candidato denunciado.

XV. Acuerdo de alegatos. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 69 y 70 del expediente)

XVI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El mediante el oficio INE/UTF/DRN/43825/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado. (Foja 95 del expediente)

b) A la fecha de la presente Resolución no se recibió contestación alguna por parte del Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

XVII. Notificación de alegatos a la C. Elio Molina Salinas.

a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1608/2018, se notificó al C. Elio Molina Salinas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado. (Foja 71 a la 78 del expediente)

XVIII. Notificación de alegatos al C. José Luis García Canales.

a) Mediante escrito con número de oficio INE/VE/JLE/NL/1607/2018, se notificó al C. José Luis García Canales, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado. (Foja 79 a la 81 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho el C. José Luis García Canales, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior. (Foja 82 a la 94 del expediente)

XIX. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.

XX. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, con tres votos a favor, de la Consejera Electoral Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, del Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón, y del Consejero Presidente de la Comisión, el Doctor Benito Nacif Hernández y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017¹; INE/CG614/2017² e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y toda vez que el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las causales de sobreseimiento, mismas que deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que

¹ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

² Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Lo anterior a fin de proteger el principio *non bis in ídem*, que constituye una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:

“Artículo 32.
Sobreseimiento

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

*I. El procedimiento respectivo haya **quedado sin materia**”*

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que uno de los hechos denunciados en la misma, consistente en la supuesta omisión por parte del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, de reportar en el informe de campaña correspondiente los gastos por concepto de la realización un evento de campaña celebrado en el extranjero, en específico, en Houston Texas, ya que los mismos fueron materia de la Resolución **INE/CG1004/2018**³ de este Consejo General.

Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad aplicable (cuestión formal).

³ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97765>

A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a continuación:

- Que el C. Elio Molina Salinas, fue postulado como candidato a Presidente Municipal de Agualeguas Nuevo León, por el Partido Revolucionario Institucional, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.
- Que el C. José Luis García Canales, presentó el escrito de queja en contra del C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando la supuesta omisión de reportar gastos en el extranjero, en específico en Houston Texas, en los Estados Unidos de América, lugar donde presuntamente llevó a cabo un evento de campaña el 10 de junio de 2018.
- El quejoso señala en su escrito inicial, que, en relación al evento denunciado, celebrado en Houston Texas⁴, se derivan gastos por concepto de; hospedaje, mobiliario, renta de sonido, local, transporte y comida.

No pasa desapercibido para esta autoridad señalar que el quejoso pretende acreditar la existencia de los supuestos gastos denunciados, únicamente con imágenes de capturas de pantalla de la red social Facebook, tomadas de las cuentas de usuarios que compartieron la información correspondiente a la presencia del C. Elio Molina Salinas en el evento que se estudia.

Cabe señalar que dichas probanzas constituyen documentales técnicos, mismas que en términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, pueden generar indicios de los hechos denunciados, sin embargo, su carácter es imperfecto, teniéndose que administrar con mayores elementos de prueba para acreditar los hechos controvertidos.

Ahora bien, dentro de las afirmaciones vertidas en el escrito de queja, se advierte el señalamiento de la celebración de un acto de campaña, en Houston, Texas, en el que a decir del quejoso se realizó proselitismo a favor del C. Elio Molina Salinas.

⁴ No es óbice señalar que el quejoso en su escrito inicial aporta como medio de en imágenes de capturas de pantalla de la red social Facebook, de usuarios que compartieron la información correspondiente a la presencia del C. Elio Molina Salinas en el evento que presuntamente tuvo verificativo en Houston Texas en los Estados Unidos de América el día 10 de junio, mismas que fueron ofrecidas como medio de probanza en el expediente **INE/Q-COF-UTF/591/2018/NL**, el cual como ya se señaló, fue resuelto por esta autoridad a través de la Resolución **INE/CG1004/2018**

De este modo, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha establecido que, para poder determinar actos de campaña en el extranjero, deberán acreditarse tres elementos⁵, mismos que se señalan a continuación aun cuando en la multicitada Resolución **INE/CG1004/2018** ya se llevó a cabo el estudio jurídico correspondiente:

I. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña electoral en el extranjero son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular.

II. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos de campaña electoral en el extranjero, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como propósito fundamental promover a un partido político o posicionar a un candidato o cargo de elección popular y obtener ventaja frente a los adversarios en una contienda electoral.

III. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, en el caso, la configuración de ésta infracción se concretiza en cualquier tiempo, quedando prohibidas en todo momento las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 del código electoral federal.

Como se observa, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal, resulta indispensable para que esta autoridad electoral se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos de campaña electoral en el extranjero.

En este contexto, debe decirse que el conocimiento de los asuntos en los que se denuncie la realización de conductas que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, dentro de los que también podrían encontrarse las relacionadas con la presunta comisión de actos de campaña electoral en el extranjero, siguen la premisa general de que, en principio, pueden constituir materia de un procedimiento administrativo en materia de fiscalización instruido por el Instituto Nacional Electoral.

Ahora bien, como ya se explicó en la Resolución **INE/CG1004/2018**, del análisis al contenido de las imágenes aportadas se desprende que no se advierte presencia de propaganda con que refiera al candidato o partido incoados.

⁵ Criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-395/2012.

En este mismo tenor, debe decirse que no basta la simple condición del sujeto susceptible de infringir la normativa electoral federal, para arribar a la conclusión de que cualquier actividad o manifestación que realice el C. Elio Molina Salinas, permita colegir una intención de posicionarse indebidamente mediante la realización de actos de campaña en el extranjero.

No es óbice señalar que si bien obran en autos elementos que acreditaban la existencia del evento denunciado, se carece de probanza alguna que demostrara la vinculación del material impugnado con los entes denunciados, es decir la realización de actos de campaña en el extranjero, situación que ya fue analizada y resulta en diverso proveído de este Consejo General.

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de **sobreseimiento** contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.

Sirve de apoyo 1000788. 149. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 189.

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. *El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición*

de Cernelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 1000788, 149. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 189. -1- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.

Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que en relación al evento denunciado, el cual presuntamente se llevó a cabo en Houston Texas, no se acreditó el elemento subjetivo, esto, al no poder determinarse la presencia del candidato incoado en el supuesto evento de campaña, situación que ya se analizó en la Resolución identificada con el número INE/CG1004/2018, en razón de lo anterior, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el **sobreseimiento, por lo que hace únicamente a la omisión de reportar gastos en el extranjero, en específico en Houston Texas, en los Estados Unidos de América, lugar donde presuntamente llevó a cabo un evento de campaña el diez de junio de dos mil dieciocho**

3. Estudio de fondo. Que al haber resuelto las consideraciones de previo y especial pronunciamiento se procede a resolver sobre el **fondo** del presente asunto, consistente en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de diecinueve eventos de campaña, así como un posible rebase de tope de gastos de campaña, en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Nuevo León.

Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas incumplieron en lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

(...)

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

(...).”

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados ...”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de ingresos.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

“Artículo 127.

Documentación de los egresos.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los sujetos obligados cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los

demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y

gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el diez de agosto de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja de referencia.

Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja **INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL** que por esta vía se resuelve.

En fecha siete de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito signado por el C. José Luis García Canales, en el cual denuncia probables violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, así como el probable rebase de tope de gastos de campaña del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas por el Partido Revolucionario Institucional, en el cual el quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados así como un posible rebase de topes de campaña, consistentes en **la realización de diecinueve eventos de campaña** que supuestamente beneficiaron al candidato incoado, a saber:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento
1	25/05/2018	Recorrido centro	Aldama
2	26/05/2018	Recorrido Rancho Nuevo	López Mateos
3	27/05/2018	Recorrido Cieneguitas	Conocido
4	28/05/2018	Recorrido Tres Hermanos	Conocido
5	29/05/2018	Recorrido Ojo de Agua	Conocido
6	30/05/2018	Recorrido en los Garza	Hidalgo
7	31/05/2018	Recorrido en La Escondida	Juárez
8	1/06/2018	Recorrido en Nogales	Escobedo
9	2/06/2018	Recorrido en Lagunillas	Conocido
10	3/06/2018	Recorrido Centro	Guadalupe Victoria
11	4/06/2018	Recorrido Agualeguas	Conocido
12	5/06/2018	Recorrido centro	Abasolo
13	6/06/2018	Recorrido centro	Rayón
14	7/06/2018	Recorrido en Los Nogales	Escobedo
15	8/06/2018	Recorrido Agualeguas	Allende
16	29/04/2018	Inicio de campaña	Centro Cívico Municipal
17	27/06/2018	Cierre de campaña	Calle Francisco T. Casso
18	16/06/2018	Evento	Ojo de agua
19	22/06/2018	Evento	Nogales

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos a determinar si los conceptos de gastos fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los mismos, por lo que, una vez realizada la premisa en cita, a fin de determinar el registro de los eventos conducentes.

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido políticos por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, en el caso concreto, especificando todos los gastos efectuados por el Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León el C. Elio Molina Salinas.

Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará en los siguientes apartados de la siguiente manera:

- A. Gastos reportados por concepto de la realización de diecisiete eventos de campaña.**
- B. Evento de fecha 22 de junio del 2018, respecto del cual no se advierten circunstancias de tiempo y lugar que acrediten la existencia del mismo**
- C. Gastos no reportados por concepto de la realización de un evento de campaña**

Señalando lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados correspondientes.

A. Gastos reportados por concepto de la realización de diecisiete eventos de campaña.

En el presente apartado, se estudiará el concepto denunciado por el quejoso, consistente en la realización de diecisiócho eventos de campaña, mismos que supuestamente beneficiaron la candidatura del C. Elio Molina Salinas. Ahora bien, debe señalarse que, el denunciante, para sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba, un listado de eventos, **mismos que se enuncian en el siguiente cuadro:**

Fecha de evento	Evento	Lugar del evento
25/05/2018	Recorrido centro	Aldama
26/05/2018	Recorrido Rancho Nuevo	López Mateos
27/05/2018	Recorrido Cieneguitas	Conocido
28/05/2018	Recorrido Tres Hermanos	Conocido
29/05/2018	Recorrido Ojo de Agua	Conocido
30/05/2018	Recorrido en los Garza	Hidalgo
31/05/2018	Recorrido en La Escondida	Juárez
1/06/2018	Recorrido en Nogales	Escobedo
2/06/2018	Recorrido en Lagunillas	Conocido
3/06/2018	Recorrido Centro	Guadalupe Victoria
4/06/2018	Recorrido Agualeguas	Conocido
5/06/2018	Recorrido centro	Abasolo
6/06/2018	Recorrido centro	Rayón
7/06/2018	Recorrido en Los Nogales	Escobedo
8/06/2018	Recorrido Agualeguas	Allende
29/04/2018	Inicio de campaña	Centro Cívico Municipal
27/06/2018	Cierre de campaña	Calle Francisco T. Casso

Para efecto de resolver sobre la existencia o inexistencia violaciones a la normativa electoral por parte del otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas,

Nuevo León y del Partido Revolucionario Institucional, se cita la conducta que se les imputa, se analizarán sus manifestaciones, pruebas y alegatos.

La conducta imputada al otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León y del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el emplazamiento realizado por esta autoridad electoral y con el requerimiento de información, esto de conformidad con lo dictado en el acuerdo de fecha veintitrés de agosto del año en curso.

No obstante, lo anterior, y de conformidad con el derecho de audiencia previsto en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los sujetos incoados el Partido Revolucionario Institucional y el C. Elio Molina Salinas, manifestaron esencialmente lo siguiente:

“él mismo únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en fotografías y video-audios, que solo generaliza los presuntos hechos denunciados, sin que por otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y la documentales que acompaña consistente en copias certificadas, he de señalar que es cierto única y exclusivamente en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los eventos se hubieran realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizó fue el del día 27 de junio de 2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma; y en ese evento, carece de razón y alcance legal de manifestación, ya que resulta inatendible e inoperante considerar que por solo presentar una solicitud, ella sea causa suficiente para que se realice el evento, bajo esa lógica lo niego lisa y llanamente su realización como lo expone el denunciante”

(...)

En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los márgenes constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan.

(...)

Resulta improcedente los hechos que le atribuyen a mi representado en este expediente, ya que en ningún momento ordenó, contrató, solicitó, requirió ni acordó o pactó la realización de los inexistentes eventos que se atribuye el denunciante; y en ese evento, tampoco se le puede atribuir al Partido Revolucionario Institucional como una situación que se traduce en el presunto posibles ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones del denunciante en dicho sentido; y consecuentemente, te arrojo la carga de la prueba para que demuestre lo contrario conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación:

(...)

el denunciante en su escrito señala que realicé eventos en las fechas que refiere y como los refiere, y esta afirmación es infundada debido a que, en términos de la legislación Electoral vigente, en ningún momento invité, organicé ó realicé dicho evento denunciado; y

consecuentemente no se acredita que origina el presunto posibles ingresos y gastos no reportados.

El denunciante al no aportar los elementos de convicción suficientes, no logra demostrar que el Partido Revolucionario Institucional que postuló al C. Elio Molina Salinas como Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, haya originado ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y, por otro lado, tampoco logra demostrar que haya invitado, organizado y realizado el evento denunciado, ya que con las probanzas que ofrece y que son documentales simples e instrumentales que dicho sean de paso editadas por él, ya que no existe elemento de prueba alguno que autentifique o certifique su autenticidad e inviolabilidad de las mismas, no lleva a establecer que el denunciante sorprende la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y del candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, y no acredita sus hechos denunciados; máxime que el evento denunciado es inexistente, dado que no se invitó, organizó y mucho menos se realizó, por lo que carece de veracidad, certeza y congruencia lo manifestado por el denunciante.

En términos de lo anterior es que la denuncia que por este medio se atiende deberá desecharse en atención a lo siguiente:

(...)

No aporta los elementos de prueba que permitan tener certeza de que el otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, O hubiere realizado la invitación, y menos aún que los eventos, sino sus probanzas solo son instrumentales editadas por él que tratan de sorprender la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León.

El denunciante no acredita que los eventos se hubieren realizado y mucho menos se hubiera invitado y organizado el mismo, ya que las probanzas que ofrece carecen de autenticidad o veracidad, máxime que provienen de acuerdo a su ofrecimiento de una red social que no es ni del Partido ni del otrora Candidato, lo que significa que la misma fue editado por su oferente”.

Como soporte de su dicho, es menester señalar que las pruebas ofrecidas por el denunciante, en el presente, consistentes en 44 fotografías y 3 videos, constituyen solo pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA**

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo contenido es del tenor siguiente:

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.**

Ahora bien, para esclarecer los hechos denunciados, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría mediante oficios INE/UTF/DRN/1253/2018, INE/UTF/DRN/1292/2018 e INE/UTF/DRN/1328/2018, informara si 17 eventos denunciados, fueron reportados por el candidato incoado en su respectivo informe de campaña, a lo cual la referida Dirección de Auditoría respondió mediante oficios INE/UTF/DA/3176/2018, INE/UTF/DA/3193/2018 e INE/UTF/DA/221/2018, la información que se indica en la siguiente tabla:

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
1	29/04/2018	Inicio de campaña	Centro Cívico Municipal	Reportado en el ID CONTABILIDAD 51464, en la póliza PN1/DR-2/29-04-1, por concepto de renta de salón por la cantidad de \$3,500.00, póliza PN1/DR-3/29/04/18, por concepto de equipo de sonido por la cantidad de \$12,000.00.	Reportado
2	25/05/2018	Recorrido centro	Aldama	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00001, como Evento No Oneroso.	Reportado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
3	26/05/2018	Recorrido Rancho Nuevo	López Mateos	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00002, como Evento No Oneroso.	Reportado
4	27/05/2018	Recorrido Cieneguitas	Conocido	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00003, como Evento No Oneroso.	Reportado
5	28/05/2018	Recorrido Tres Hermanos	Conocido	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00004, como Evento No Oneroso.	Reportado
6	29/05/2018	Recorrido Ojo de Agua	Conocido	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00005, como Evento No Oneroso.	Reportado
7	30/05/2018	Recorrido en los Garza	Hidalgo	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00006, como Evento No Oneroso.	Reportado
8	31/05/2018	Recorrido en La Escondida	Juárez	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00007, como Evento No Oneroso.	Reportado
9	1/06/2018	Recorrido en Nogales	Escobedo	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00008, como Evento No Oneroso.	Reportado
10	2/06/2018	Recorrido en Lagunillas	Conocido	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 00009, como Evento No Oneroso.	Reportado
11	3/06/2018	Recorrido Centro	Guadalupe Victoria	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000010, como Evento No Oneroso.	Reportado
12	4/06/2018	Recorrido Agualeguas	Conocido	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000011	Reportado
13	5/06/2018	Recorrido centro	Abasolo	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000012, como Evento No Oneroso.	Reportado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
14	6/06/2018	Recorrido centro	Rayón	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000013, como Evento No Oneroso.	Reportado
15	7/06/2018	Recorrido en Los Nogales	Escobedo	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000014, como Evento No Oneroso.	Reportado
16	8/06/2018	Recorrido Agualeguas	Allende	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51464, en la agenda de eventos con el identificador 000015, como Evento No Oneroso.	Reportado
17	27/06/2018	Cierre de campaña	Calle Francisco T. Casso	Reportado en el ID CONTABILIDAD 51464, el gasto se reportó en la póliza PN1/DR-5/26-06-18, la cual contiene el contrato celebrado entre el grupo "FILIBERTO RUBIO Y SU CONJUNTO" y el Sr. Elio Molina, el cual ampara el pago por la cantidad de \$8,000.00, la Factura No. de serie del CSD del emisor 00001000000403752175, por concepto de "SERVICIOS DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL FILIBERTO RUBIO EL DIA 27 JUNIO 2018 EN AGUALEGUAS NL", recibo de aportación así como evidencias y muestras del gasto.	Reportado

De lo anterior se desprende que la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones y otros, de este Instituto Nacional Electoral, señala en su respuesta de fecha siete de septiembre de la presente anualidad, que los eventos mencionados, fueron reportados en el informe de campaña del otrora candidato, el C. Elio Molina Salinas y registrados, dentro del Sistema Integral de Fiscalización, ahora bien, no es óbice señalar que la Dirección de Auditoría señaló que los eventos denunciados como "recorridos" y "caminatas" fueron reportados como eventos no onerosos.

Ahora bien, no obstante lo anterior, y en concordancia al principio de exhaustividad en la investigación y ante las posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema

Integral de Fiscalización de la cual se verifico la información remitida por la Dirección de Auditoria.

En este sentido se desprende de la información y documentación soporte adjunta en las pólizas remitidas por la Dirección de Auditoria, concuerda con lo denunciado por el quejoso, y que estas fueron, registradas, en el Sistema Integral de Fiscalización, (SIF); cumpliendo totalmente, con los Lineamientos establecidos por esta autoridad Fiscalizadora. esta autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte del mismo, atribuible a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las **autoridades electorales**, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, **están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento** y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[Énfasis añadido]

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca: "Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, **obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas**, así

*como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, **resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate**; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario.”*

[Énfasis añadido]

En conclusión, de lo anterior y los elementos de prueba aquí presentados y concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por lo que respecta, a los eventos mencionados en el presente apartado denunciados por el C. José Luis García Canales, materia del presente procedimiento, se encuentran registrados dentro de los sistemas institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en concreto del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registrado con el **ID contabilidad 51464** del perfil del candidato denunciado; por lo tanto el C. Elio Molina Salinas, y el Partido Revolucionario Institucional no incumplieron con la normativa electoral al estar debidamente registrada, las operaciones por concepto de eventos no onerosos; como ha quedado acreditado.

Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas obligaciones, de los partidos políticos y candidatos. Aunado a que el Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y administrada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora.

Cabe hacer mención que la información obtenida de dicho sistema, es considerada como cierta y veraz, por lo tanto, constituye prueba plena para ésta autoridad electoral, de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría; permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.

Debe entonces concluirse que los sujetos denunciados presentaron a través del citado Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe, en el cual se puede apreciar que efectivamente, fueron registrados.

No se omite señalar que esta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y toda vez que denunciaron gastos que deben ser

reportados por los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional, ante su representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del oficio número **INE/UTF/DRN/41509/2018**, así como al candidato denunciado el C. Elio Molina Salinas a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León mediante oficio **INE/VE/JLE/NL/1322/2018**.

Ahora bien, debe precisarse que no le asiste la razón al denunciante, según las siguientes precisiones, con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se realizó una razón y constancia, en la cual se desprende que se trata del perfil del candidato en mención, en la cual informa la realización de los eventos, aunado a que el denunciante aportó pruebas técnicas al respecto, así como las documentales públicas consistentes en la copia certificada de las solicitudes a la Presidencia Municipal para llevar a cabo los eventos objeto de denuncia, por lo que devienen de infundados los argumentos vertidos por los sujetos denunciados, por lo que no resulta eficaz para desvirtuar la conducta imputada.

Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que Partido Revolucionario Institucional, así como su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

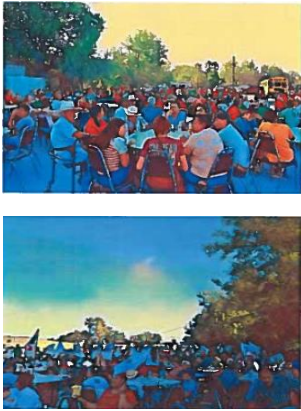
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción alguna, en materia de fiscalización, por lo que, el Partido Revolucionario Institucional ni su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, respecto a los gastos no reportados por concepto de 17 eventos de campaña, deben declararse el procedimiento de mérito se declara **infundado por lo que hace al apartado A**, de la presente Resolución.

B. Evento de fecha 22 de junio del 2018, respecto del cual no se advierten circunstancias de tiempo y lugar que acrediten la existencia del mismo

En relación al evento identificado por esta autoridad como **ID 18**, se estudia en el presente apartado ya que el quejoso no aportó mayores elementos en su escrito de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

queja más que dos fotografías de las cuales no se advierten circunstancias de tiempo y lugar.

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
18	22/06/2018	N/A	Nogales 	N/A	En relación a este evento el quejoso no apporto mayores elementos en su escrito de queja más que dos fotografías de las cuales no se advierten circunstancias de tiempo y lugar.

En relación al evento marcado en la tabla que antecede con el **ID 18**, celebrado el 22 de junio del 2018, al respecto el quejoso solo adjunta dos fotografías de las cuales no se desprende que se trate de algún acto de campaña del candidato denunciado ni se observa propaganda alguna a su favor.

De los conceptos anteriormente señalados, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor de la entonces candidata y partido político denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña del C. Elio Molina Salinas, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León y el Partido Revolucionario Institucional por los conceptos denunciados en el escrito de queja. Por lo que ésta autoridad se encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto.

C. Gastos no reportados por concepto de la realización de un evento de campaña.

En este apartado nos avocaremos al estudio de un evento de campaña, celebrado el 16 de junio del 2018, en el Techo Polivalente de la Comunidad de Ojo de Agua, Nuevo León.

Ahora bien, en relación a este evento, el quejoso aporta dos fotografías, a saber:



En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a solicitar información mediante oficio número INE/UTF/DRN/1292/2018, a la Dirección de Auditoría respecto del evento llevado a cabo el día 16 de junio del 2018, en el Techo Polivalente de la Comunidad Ojo de Agua; respecto del cual, la referida Dirección de Auditoría informó mediante oficio INE/UTF/DA/3221/18 que respecto al evento citado y los gastos erogados con motivo de éste, no se localizaron registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización como parte del Informe de campaña presentado por el candidato incoado y por el Partido Revolucionario Institucional.

En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a revisar las constancias que integran el escrito de queja en el cual se localizó copia certificada del oficio 1375/SA/2018 suscrito por el Secretario del R. Ayuntamiento de Aqualaguas, Nuevo León en el cual señala que con fecha 13 de junio de 2018, se recibió en esa oficina un oficio suscrito por el C. Elio Molina Salinas, entonces candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario Institucional, donde solicitó permiso para utilizar el Techo Polivalente de la comunidad Ojo de Aguas, para llevar a cabo una reunión de campaña el día 16 de junio del 2018 en un horario de 18:00 hrs a 21:00 hrs.

Cabe señalar que de conformidad con el numeral 2, artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.

Ahora bien, en relación con el evento denunciado, el quejoso aportó como elemento de prueba dos fotografías de las cuales se aprecia una reunión de personas las cuales portan playeras verdes con la leyenda *“Elio Molina candidato a Alcalde Agualeguas”*



Del análisis a las fotografías aportadas se observa que los participantes en el evento denunciado, portan playeras con propaganda en favor del entonces candidato, el C. Elio Molina, mismas que fueron reportadas y registradas en el Sistema Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad 51464, en las Pólizas 17, periodo 1, tipo normal y en la Póliza 7, periodo 1, tipo normal.

En razón de lo anterior, y tomando en consideración la documental pública en relación con las fotografías aportadas por el quejoso y con la información localizada en el Sistema Integral de Fiscalización se colige que el evento denunciado sí se trató de un evento de campaña el cual beneficio la candidatura del C. Elio Molina Salinas, entonces candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

Bajo esta tesitura, esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de prueba que obran en el expediente por cuanto hace al evento materia del presente apartado, se arriba a la conclusión de que éste no fue reportado ni tampoco reportó los gastos por concepto de la realización del mismo.

- ✓ Que, de los hechos narrados en la queja de mérito, se hace denuncia de la realización de 1 evento de campaña del C. Elio Molina Salinas, candidato a Presidente Municipal de Agualeguas Nuevo León, en el Techo Polivalente de la Comunidad de Ojo de Agua.
- ✓ Anexo a la queja se desprenden pruebas técnicas tales como dos fotografías de las cuales se advierte la realización del evento de campaña.
- ✓ Que del análisis de las fotografías aportadas como elemento de prueba se pueden observar gastos por concepto de playeras con propaganda en favor del candidato denunciado, así como gastos por concepto de 7 mesas y 20 sillas.⁶

Razón por la cual, este Consejo General arriba a la conclusión de que hubo gastos por concepto de 7 mesas y 20 sillas, que se utilizaron para el evento de campaña denunciado, y las cuales no fueron reportados por el entonces candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, y por lo tanto existe incumplimiento a la normatividad electoral.

Ahora bien, es importante señalar que las fotografías proporcionadas por el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, mismas que al ser adminiculadas entre sí, así como lo vertido de la solicitud de información a la Dirección de Auditoría de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), aunado a las copias certificadas de los escritos de solicitud realizados por el candidato incoado para que se le otorgara permiso de llevar a cabo el evento de campaña denunciado, expedidas por el Secretario del Ayuntamiento de Agualeguas hacen prueba plena, por lo que hace al evento realizado en fecha ,16 de junio del 2018, llevado a cabo en la el Techo Polivalente de la comunidad Ojo de Agua, Agualeguas, Nuevo León, evento respecto del cual, no se encuentran reportados en el informe de campaña del sujeto denunciado gasto por concepto de sillas, mesas situación que se constató de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización

⁶ Conceptos que se pueden observar en las fotografías aportadas como elemento probatorio.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

En consecuencia, este Consejo General concluye que toda vez que el Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, incumplieron con lo establecido en artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y II de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; razón por la cual los hechos materia del presente Apartado, deben declararse **fundados**.

4. Determinación del costo

Una vez acreditada la infracción se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización informara el valor más alto respecto del costo unitario por concepto de sillas y mesas, con las características similares a la de los acreditados, en base con la matriz de precios.

Así las cosas, la referida autoridad remitió la cotización solicitada por concepto de **mesas, sillas**, siendo éstos los precios por cada uno de los conceptos señalados:

ID	Nombre del sujeto obligado	Proveedor	Núm. Factura /cotización/ID del RNP/Folio Fiscal	Entidad federativa	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Importe con IVA
14029	Todos por Sonora	Decoración y Organización de Eventos Maxrent S de RL de CV	FE95336D-5E22-11E8-BDFD-00155D014007	Sonora	Silla	1	Pieza	4.872
9836	Candidato Independiente	Comercializadora y Servicios Exxon SA de CV	7673A544-40CA-4A07-B53E-143AF74B6705	Nuevo León	Mesa	1	Pieza	92.80

No es óbice señalar que, para la determinación del costo de las erogaciones realizadas por concepto de 7 mesas y 20 sillas, utilizadas en el evento de campaña de fecha 16 de junio del 2018, esta autoridad se apegará a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, la normatividad en comento establece que, la determinación del valor por gastos vinculados con la obtención del voto, se sujetará a lo siguiente:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. En este sentido se procedió a determinar el valor más alto de la matriz de precios, a fin de establecer el costo por concepto de 7 mesas y 20 sillas.

En lo que respecta al costo por concepto de mesas y sillas, se tomará como base lo señalado en el cuadro que antecede.

Consecuentemente, al sumarse los costos de 7 mesas y 20 sillas, acreditados se obtiene lo siguiente:

EVEN TO 16 DE JUNIO 2018	CONCEPTO	COSTO UNITARIO MATRIZ	UNIDAD	TOTAL
29-04-18	mesas	\$92.80	7	\$649.60
	sillas	4.87	20	\$97.40
TOTAL				\$747.00

Visto lo anterior, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral que rigen en la valoración de pruebas, esta autoridad electoral obtuvo un costo por concepto de mesas y sillas –elemento objetivo- concluyendo:

Por consecuencia, respecto a utilización de 7 mesas y 20 sillas en un evento de campaña celebrado el 16 de junio del 2018, mismo que beneficio al entonces candidato postulado al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, el monto cuantificado asciende a la cantidad de **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una contienda electoral tienen derecho a publicitar su candidatura mediante eventos de campaña, también lo es que **tienen obligación de reportar en el informe de campaña de que se trate, todos los egresos realizados con motivo de los mismos, en el caso específico, el gasto por concepto de utilización de 20 sillas y 7 mesas, situación que no aconteció.**

En este tenor, tal egreso debe ser considerado para efectos de los respectivos topes de campaña y debe sumarse el beneficio obtenido por la publicidad descrita en la presente Resolución, para ello es necesario apuntar que respecto a dichos mesas y sillas se acreditó el beneficio de dicha propaganda al otrora candidato a al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, el C. Elio Molina Salinas postulado por el Partido Revolucionario Institucional , por ende esta autoridad colige que deberá sumarse el gasto realizado por la utilización de 7 mesas y 20 sillas para un evento de campaña por un total de **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

En este contexto, se procederá a cuantificar a la cifra final de egresos dictaminandos el monto involucrado considerado como omiso, para quedar en los siguientes términos:

Topes de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal en Agualeguas, Nuevo Leon (A)	Monto por acumular, derivados del procedimiento de merito. (B)	Total de egresos Dictaminados. (C)	Suma (B) + (C)= (D)	Rebase Determinado
\$78,004.12	\$747.00	\$48,641.11	\$49,388.11	NO

5. Individualización de la sanción

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe

precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por

⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas derivado de la sustanciación de la queja que por esta vía se resuelve, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de 20 sillas y 7 mesas realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo Leon.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo

dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁸

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁹:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

⁹ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹⁰ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹¹, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

¹⁰ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

¹¹ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados a continuación, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes por saldar al mes de octubre del año 2018.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del

partido político derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias^[1], el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en los párrafos que anteceden de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

^[1] Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**., cantidad que asciende a un total de **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.¹³

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

¹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

¹³ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra el **C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional**, en términos de lo señalado en el **Considerando 2**, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional** en los términos del **Considerando 3, apartado A y B**, de la presente Resolución.

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional** en los términos del **Considerando 3, apartado C** de la presente Resolución, por lo que se impone una multa que asciende a los **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que le sea sumado al tope de gastos de campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el **C. Elio Molina Salinas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional** monto de **\$747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, para efectos del tope de gastos de campaña; de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 4 y Considerando 5** de la presente Resolución.

QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

SEXTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, a efecto de que la multa determinada en el Resolutivo **TERCERO** sea pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, será destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SÉPTIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Finalmente, pasamos al Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 19.8._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Nuevamente en este Proyecto de Resolución no acompañaré el sentido del mismo, pero me parece que el Proyecto de Resolución más allá de que no haya una investigación completa o que haya en algunos efectos de una inadecuada investigación, me parece, lo que tiene el Proyecto de Resolución es un conjunto de inconsistencias que no creo que pueden ser acompañadas en este Consejo General porque en un primer momento no hace pronunciamiento sobre todos los gastos denunciados con independencia de que no estén acreditados, el Proyecto de Resolución tiene que pronunciarse respecto de todos los gastos que se denuncian.____

En segundo lugar, no acompaño la valoración que se hace respecto de la caravana vehicular, la cabalgata, la bicicletada, en el sentido de que estos son eventos que en sí mismos no generan ningún gasto, me parece que esto es contra la realidad de cuándo se llevan a cabo los mismos._____

En una ocasión anterior que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña que hacía una objeción en particular con las caravanas, se oponía a un Proyecto de Resolución, yo lo acompañaba porque en ese había llevado una investigación específica en torno a la misma, eso no es lo que tenemos en este caso a pesar de que la evidencia que nos presentan el propio denunciante sí nos llevaría a un conjunto de posibles gastos en torno a estos eventos._____

Y luego tenemos un conjunto de casos, por ejemplo, se determina el precio de un grupo musical con una póliza de venta de equipo de sonido a pesar de que no son el

mismo concepto, por lo que no podría servir para efectos de la matriz de precios, estamos amparando playeras de un evento del 4 de junio con pólizas del 22 y el 23 de junio, es decir, pólizas posteriores amparan playeras que se entregaron en eventos anteriores, más allá de una discusión de si se debió haber cruzado Kárdex o no se podría acreditar un gasto anterior con una póliza posterior._____

Lo mismo ocurre con propaganda utilitaria, luego al tomar en cuenta el valor de la matriz de precios respecto de las sillas no corresponde el valor con aquel que está en la matriz de precios y además están tomando precios que no son de Nuevo León, a pesar de que los hechos ocurrieron en Nuevo León, resulta que la matriz de precios de Nuevo León, no incluye la renta de carpa, grupo musical ni renta de salón para Nuevo León._____

Me cuesta un poco de trabajo pensar que en el estado de Nuevo León, en todo el Estado, en todos los Procesos Electorales Federal y Locales no hubo un solo evento, uno de un solo candidato que hubiese rentado una carpa, que hubiese rentado un grupo musical y que hubiese rentado un salón, pero no solamente me cuesta trabajo, porque aquí me podrían decir: “bueno, es que puede ocurrir, nada más que tenemos una queja que resolvimos hace un par de semanas o hace un par de meses en las que exactamente la discusión eran los grupos por si era un grupo norteco o no era un grupo norteco, también no era en Nuevo León, no estaba en la matriz de precios y resulta que al final sí había alguno en la matriz de precios, el problema es que la matriz de precios ya está incompleta y al estar incompleta una matriz de precios no tenemos los precios correspondientes para poder aplicar._____

Por supuesto, no acompaño los criterios de sanción. Si bien, entiendo que en este caso la Sala Regional Monterrey nos dio únicamente 10 días para resolver el asunto, esto nos puede justificar por qué no se hicieron mayores investigaciones más no explica por qué hay inconsistencia en el Proyecto de Resolución, porque las inconsistencias que estoy señalando no tienen que ver con investigaciones, tienen

que ver con la congruencia y la lógica del Proyecto de Resolución, y eso me parece que sí se podría hacer en 10 días._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente._____

Muy brevemente Consejero Presidente para explicar también el criterio que prevaleció en la Comisión de Fiscalización._____

Esta es una queja, yo les llamaría “las quejas ómnibus, porque es una sola queja, es un solo procedimiento, pero en realidad la cantidad de hechos que está denunciando el quejoso es diversa y compleja, va desde eventos de campaña, pintas de bardas, diferentes, incluso, un evento realizado en Estados Unidos._____

La queja se declara “parcialmente fundada” por gastos no reportados y se impone una sanción que asciende a 28 mil 530 pesos._____

La Unidad Técnica de Fiscalización lo que tiene que hacer es, analizar las pruebas aportadas por el quejoso que en muchos casos son fotografías o notas y partir de eso, hacer las inferencias que puedan hacerse con solidez para determinar si, efectivamente, hay gastos implicados en lo que se ve en las fotografías o no, particularmente en 13 de los 17 eventos encuentra que sí hubo un reporte en la agenda, todos ellos fueron onerosos. No se acreditó que hubiera gastos en 13 eventos que aparecen descritos como una bicicletada, una cabalgata y una caravana. . En ellos, el candidato dijo que los ciudadanos participaron de forma espontánea y la propaganda del partido político que se usó sí se reportó en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el rubro correspondiente._____

Los 7 eventos restantes sí se encontraron gastos no reportados por sillas, mesas, equipo de sonido, carpa y renta y eso es lo que se procede a valorar y sancionar como tal. _____

Respecto a las bardas, particularmente, el candidato no tuvo reportes por este concepto y de todas las bardas que se denunciaron se encontraron 42 bardas distintas y en todos los casos se procede a sancionar por omitir esta obligación de reporte. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Si no hay más intervenciones, creo que podemos pasar a tomar la votación, Secretario del Consejo, por favor. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 19.8. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

6 votos. _____

¿En contra? 3 votos. _____

Aprobado por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1494/2018) Pto. 19.8 _____

INE/CG1494/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por el C. José Luis García Canales. El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, firmado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito firmado por el C. José Luis García Canales, denunciando probables violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, así como el probable rebase de topes de gastos de campaña del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León; el C. Ignacio Castellanos Amaya.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial:

“(…)

El Suscrito José Luis García Canales, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal el inmueble ubicado en la calle Diego de Montemayor, número 1126, Barrio Antiguo, colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León;

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

autorizando para tales efectos al Licenciado Jonatán Raúl Ruíz Martínez, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que, por medio del presente ocurso, con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los artículos 27; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 38; y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, se presenta formal queja en contra del C. Ignacio Castellanos Amaya, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral para la renovación de Ayuntamiento en el Municipio de Agualeguas, Nuevo León; que con motivo del desarrollo de su campaña electoral dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, y de los gastos excesivos que ha efectuado, al 27 de junio del 2018, ha rebasado los topes de gastos de campaña autorizados por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral mediante Acuerdo identificado con el número CEEICG14912017. Basando la presente queja en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

HECHOS

I. Mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el cual se fijan los topes de gastos de las Campañas para las Elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, identificado con el número CEEICG1491201 7; se determinó:

(inserta imagen)

Esto es, el monto definitivo de tope de gasto de campaña en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, específicamente para la renovación del ayuntamiento del municipio de Agualeguas, Nuevo León, se estableció en la suma de \$78,004.12 setenta y ocho mil cuatro pesos 12/100 en moneda nacional.

II. Conforme a las documentales existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se tiene que el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, presentó sus informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos, en los términos en que son de verse; destacándose del apartado de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de la página de internet de esta Unidad Técnica de Fiscalización, lo siguiente:

a) *Que el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, reportó un total de ingresos por la cantidad \$27,760.90 veintisiete mil setecientos sesenta pesos 90/100 M. N., con un total de gastos por la suma de \$19,001.31 diecinueve mil un peso 31/100 M. N.*

b) *Con un detalle de gastos que a continuación se precisa:*

(inserta imagen)

Así como un detalle de eventos realizados en cantidad de 13 trece, todos ellos bajo el tipo de públicos, y clasificados como no onerosos; específicamente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Fecha de evento	Evento	Lugar del evento
14/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
15/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
16/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
17/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
18/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
19/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
20/05/2018	Presentación del candidato	Plaza
28/05/2018	Recorrido con vecinos	Calles de la colonia
29/05/2018	Recorrido con vecinos	Calles de la colonia
30/05/2018	Recorrido con vecinos	Calles de la cabecera
31/05/2018	Reunión con vecinos	Una cuadra de la pista
1/06/2018	Recorrido con vecinos	Calles de la Congregación
2/06/2018	Recorrido con vecinos	Calles de la cabecera

Es el caso que contrario a lo expuesto, el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, realizó incluso diversos actos de campaña que no reportó, como son los consignados en las copias certificadas allegadas a la presente y que hacen evidente que:

El C. Rodolfo Rodríguez Cantú, representante ante la Comisión Municipal de Agualeguas, Nuevo León, del Partido Movimiento Ciudadano, solicitó información sobre si el Partido Acción Nacional había solicitado permiso para diversos actos de campaña, en el período comprendido del mes de abril al día 28 de junio de 2018; el C. César Saucedo Hernández, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del municipio de Agualeguas, Nuevo León, informó que efectivamente el Partido Acción Nacional realizó solicitudes para los siguientes eventos:

Apertura de campaña en la plaza principal, de dicha municipalidad, en fecha 29 de abril de 2018.

Cierre de campaña en nave de la colonia Mira Sierra, la placita y sus calles, en fecha 27 de junio de 2018.

Acto de campaña en la calle Morelos entre Guerrero y Juárez en la comunidad de Los Garza, en fecha 27 de mayo de 2018.

Acto de campaña en la calle Victoria entre Matamoros y Juárez, en fecha 17 de junio de 2018.

Eventos que cotejados con los 13 informados, no fueron informados debidamente, más sin embargo fueron realizados. A la vez el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA verificó los siguientes actos de campaña:

En fecha 10 de mayo de 2018, siendo del conocimiento público, realizó un acto de campaña visitando domicilios del centro de la ciudad, repartiendo rosas, como es de verse en la serie de fotografías ahora ofrecida como prueba:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL**



En fecha 27 de mayo de 2018, realiza un acto de campaña, correspondiente a una caravana vehicular, demostrándose con la serie de fotografías y vídeo que lo hacen evidente:



En fecha 4 de junio de 2018 en el Parque Recreativo El Nogalar de Agualeguas, Nuevo León, se verificó un acto de campaña, por parte del candidato de Acción Nacional:





En fecha 13 de junio de 2018, momento de la verificación del debate organizado por la Comisión Municipal Electoral, el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA verificó un acto de campaña a las afueras del recinto, tal y como es evidenciado:



El día 17 de junio de 2018, el candidato del Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña aprovechando la festividad del día del padre:



En fecha 20 de junio de 2018, el candidato del Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña denominado "bicicleteada":



En fecha 21 de junio de 2018, el candidato del Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña en la comunidad de Rancho Nuevo:





En fecha 24 de junio de 2018, el candidato del Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña en la comunidad de La Escondida:





En fecha 27 de junio de 2018, el candidato del Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña como cierre de la misma:



Actos de campaña que sin lugar a una duda tuvieron un costo económico, tal y como se hace evidente de las series de fotografías y videos allegados a la presente; costos económicos no informados mucho menos pormenorizados de forma alguna, pero que hacen presumibles las siguientes erogaciones:

Al realizar el Partido Acción Nacional en fecha 10 de mayo de 2018, un acto de campaña visitando domicilios del centro de la ciudad, repartiendo 300 rosas; evento con un costo de \$6,960.00 pesos, al estimarse un valor unitario por rosa de \$20.00 pesos dando un subtotal de \$6,000.00 pesos, con un impuesto al valor agregado por la suma de \$960.00 pesos.

Acto de campaña correspondiente a una caravana vehicular por las calles del centro de la ciudad, en el cual participaron 128 vehículos, respecto de los cuales, estimando un valor económico por unidad de \$700.00 pesos nos da un resultado de \$89,600.00

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

pesos, al que, sumando el correspondiente IVA, por la suma de \$14,336.00 pesos, finalmente arroja la inversión de \$103, 936.00 pesos en el citado acto de campaña.

En fecha 4 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional, realizó un acto de campaña en el Parque Recreativo El Nogalar de Agualeguas, Nuevo León, al cual asistieron 100 personas, realizándose una inversión como a continuación se detalla, alcanzando la suma total de \$12,760.00 pesos.

PERSONAS	100				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
PARQUE	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$480.00	\$3,480.00
MOBILIARIO (mesa y sillas)	10	\$100.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
RENTA DE SONIDO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
COMIDA	100	\$60.00	\$6,000.00	\$960.00	\$6,960.00
					\$12,760.00

En fecha 13 de junio de 2018, momento de la verificación del debate organizado por la Comisión Municipal Electoral, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña a las afueras del recinto, con una inversión de \$16,240.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	250				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
SONIDO	1	3000	\$3,000.00	\$480.00	\$3,480.00
RENTA DE DRON	1	2000	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
BATUCADA (HORAS BATUCADA)	2	4000	\$8,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
TECHOS	2	\$500	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
					\$16,240.00

El día 17 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña aprovechando la festividad del día del padre, con una inversión de \$13,456.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	500				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
SONIDO CON GRUPO	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00
INMOBILIARIO	20	\$80.00	\$1,600.00	\$256.00	\$1,856.00
AGUAS	500	\$10.00	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00
					\$13,456.00

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

En fecha 20 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña denominado "bicicleteada", con una inversión de \$4,408.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	100				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
RENTA DE CAMIONETA Y TRAILA	1	\$1000	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
RENTA DE BICICLETAS	40	\$50	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
RENTA DE VEHICULO MOTORIZADO	1	\$800.00	\$800.00	\$128.00	\$928.00
					\$4,408.00

En fecha 21 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña en la comunidad de Rancho Nuevo, con una inversión de \$6,960.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	150				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
CENTRO SOCIAL	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$480.00	\$3,480.00
MOBILIARIO (mesa y sillas)	15	\$50.00	\$750.00	\$120.00	\$870.00
PREMIOS	25	\$50.00	\$1,250.00	\$200.00	\$1,450.00
SONIDO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
					\$6,960.00

En fecha 24 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña en la comunidad de La Escondida, con una inversión de \$96,570.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	450				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
CENTRO SOCIAL	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$480.00	\$3,480.00
MOBILIARIO (mesa y sillas)	45	\$50.00	\$2,250.00	\$360.00	\$2,610.00
COMIDA Y AGUA	60	\$450.00	\$27,000.00	\$4,320.00	\$31,320.00
SONIDO Y GRUPO POR HORA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
RENTA DE CABALLOS	40	\$500.00	\$20,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

PERSONAS	450				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
CAMIONETA Y TRAILA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,160.00
					\$96,570.00

En fecha 27 de junio de 2018, el Partido Acción Nacional verificó un acto de campaña como cierre de la misma, con una inversión de \$82,940.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

PERSONAS	450				
	Unidades	Precio por unidad	Subtotal	IVA	Total
TECHO POLIVALENTE	1	\$2,000.00	\$2,000.00	\$320.00	\$3,480.00
MOBILIARIO (mesa y sillas)	50	\$50.00	\$2,500.00	\$400.00	\$2,610.00
COMIDA Y AGUA	60	\$450.00	\$27,000.00	\$4,320.00	\$31,320.00
SONIDO Y GRUPO POR HORA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
PREMIOS	20	\$400.00	\$8,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
RENTA DE DRON	1	\$2,000.00	\$2,000.00	\$160.00	\$2,320.00
					\$82,940.00

En resumen, el Partido Acción Nacional verificó los actos de campaña antes precisados, con una inversión de \$560,443.00 pesos, conforme se detalla en la siguiente tabla:

FECHA	EVENTOS SIN PRORRATEAR	COSTO TOTAL
10/05/2018	Día de las madres	\$6,960.00
27/05/2018	Caravana	\$103,936.00
04/06/2018	Evento Nogalar	\$12,760.00
09/06/2018	Houston	\$216,213.00
13/06/2018	Debate	\$16,240.00
17/06/2018	Día del padre	\$13,456.00
20/06/2018	Bicicleteada	\$4,408.00
21/08/2018	Rancho nuevo	\$6,960.00
24/06/2018	Precierre	\$96,570.00
27/06/2018	Cierre	\$82,940.00
TOTAL		\$560,443.00

Debo hacer referencia que en la sumatoria se contempla el acto de campaña realizado en los Estados Unidos de Norteamérica, ya denunciado por el Suscrito y por el cual se lleva el Expediente Número INE/Q-COF-UTF/585/2018/NL; ante esta Unidad Técnica de Fiscalización.

Por otro lado, a la vez de todo lo expuesto existió pinta de bardas; en efecto, el candidato de Acción Nacional pintó diversas bardas en diversos lugares de la cabecera municipal

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

de Agualeguas, así como de la zona rural del municipio; la serie de fotografías allegadas a la presente hace evidente que dicho Partido Político y su candidato realizaron una inversión económica superior al tope de campaña, y eso es más que evidente; en efecto en disco compacto se allegan 59 impresiones fotográficas del mismo número de bardas pintadas. Aquí unos ejemplos:



La actitud y decisión del Partido Político de Acción Nacional y su Candidato es manifiesta: ocultar a la autoridad que en realidad se hicieron un mayor número de eventos o actos de campaña, pues es indudable que, a un mayor número de actos de campaña, una mayor inversión económica.

Por supuesto que exceder el tope de gastos de campaña, genera ventaja en la contienda y con ello se ha violentado el principio de Equidad; y ello atribuido tanto al Partido Acción Nacional como su candidato el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA.

CONSIDERACIONES DE DERECHO.

En cuanto al fondo del presente asunto, solicito de esta Unidad Técnica de Fiscalización, en todo momento considere y tenga presente el Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el cual se fijan los topes de gastos de las Campañas para las Elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, identificado con el número CEEICG1491201 7; y que determinó:

"Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba los Topes de Gastos de las Campañas en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, conforme a las tablas identificadas con los números XXXIV y XXXV contenidas en el Considerando Décimo Séptimo del presente Acuerdo."

(Se inserta tabla)

Bajo tal determinación, como es de verdad sabida y de explorado derecho, una de las premisas que rigen la materia electoral es la de que todo candidato a cargo de elección popular debe respetar y no rebasar por ningún motivo el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral.

En tal sentido, todos los actos de campaña que se relacionan en el apartado de hechos, y de los que se ha proporcionado una cotización aproximada de los costos de cada uno de ellos, encuadran a perfección con lo establecido en los artículos referentes al rebase del tope de gasto de campaña en que ha incurrido el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA. Debiéndose considerar el contenido del artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(...).

PRUEBAS

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- Fotografías correspondientes al festejo del día de las madres, donde se atribuye la participación del C. Ignacio Castellanos Amaya.
- Fotografías de un evento reconocido como caravana vehicular.
- Fotografías de un evento reconocido "Parque recreativo el Nogalar de Agualeguas, Nuevo León.
- Fotografías de un evento en el extranjero.
- Un video, contenido en un disco compacto de un evento en el extranjero.
- Fotografías de un evento materializado del debate organizado por la Comisión Municipal Electoral.
- Fotografías de un evento del festejo del día del padre.
- Fotografías de un evento denominado como "Bicicleteada", del festejo del día del padre.
- Fotografías de un evento en la comunidad de Rancho Nuevo.
- Fotografías de un evento en la comunidad de la Escondida.
- Fotografías de un evento de cierre de campaña de fecha 27 de junio de 2018.

- Fotografías de pinta de bardas relativas a la propaganda electoral del C. Ignacio Castellanos Amaya.
- Copia certificada, expedida por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Agualenguas, Nuevo León.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. El mismo diez de agosto del mismo año se acordó integrar el expediente respectivo, asignarle el número **INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL**, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; admitir la queja y proceder al trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador; así como notificar al promovente y a los sujetos incoados.

IV. Publicación en estrados el acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento

b) El quince de agosto dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este instituto, los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.

V. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41510/2018, se notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de queja.

VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41511/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al Partido Acción Nacional.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41512/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integraban el presente expediente.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. Ignacio Castellanos Amaya.

a) El quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/1325/2018, se notificó al C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito; asimismo se le emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto denunciados.

b) Mediante escrito, de fecha diecisiete de agosto de agosto de dos mil dieciocho, el C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice:

“(…)

Aunado, debe señalarse que el promoverte como ya se dijo fue postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano para integrar el ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo León, este Partido Político que consiguió solamente 609 sufragio según la dirección electrónica siguiente

(…)

En consecuencia el denunciante tiene la responsabilidad de acreditar en primer lugar que los hechos se hayan llevado acabo, lo cual no hace y en segundo lugar comprobar

que dichos eventos en el supuesto de que hubiesen existido, esto hayan sido determinantes para la derrota del partido que lo postula, lo cual no realiza, ya que solo se limita a realizar acusaciones temerarias, frívolas y sin fundamento, con cifras que carecen de un fundamento ya que en todo su escrito con gran irresponsabilidad establece costos a los eventos ficticios que el denunciante inventó, por consiguiente haciendo su demanda frívola, y sus pretensiones sin sustento. Por lo que, al no hacer referencia alguna, mucho menos acreditar como supuesto rebase tope de campaña es determinante en el resultado de la elección esta demanda debe ser desechada.

(...)

De lo anterior mente citado se puede llegar a la conclusión de que existe una obligación por parte del denunciante de aportar todos los elementos necesarios a la autoridad para efectos de comprobar sus dichos, sin embargo, en el caso concreto el denunciante solo se limita a realizar acusaciones temerarias y sin medios probatorios sólidos que demuestren sus acusaciones.

(...)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja, al promoverlo el C. José Luis García Canales.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-VE-JLE-NL/1324/2018, se notificó al C. José Luis García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1172/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, consistente en que, si se encontraban debidamente reportados, eventos y bardas, que se detallaron en el mismo.

b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/3080/18, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral, dio cumplimiento a lo requerido por esta autoridad.

c) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1404/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, consistente en que, si se encontraban debidamente reportados, eventos y bardas, que se detallaron en el mismo.

d) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/3313/18, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral, dio cumplimiento a lo requerido.

XI. Solicitud de información al Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León.

a) Mediante el escrito de fecha de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/42639/2018 solicito al Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, información relativa de los saldos pendientes por pagar de todos los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León, respecto de las sanciones pecuniarias impuestas a cada Partido Político

b) El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTVOPL/9316/2018, el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, dio cumplimiento a lo requerido por esta autoridad.

XII. Escrito de queja integrado. El uno de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. José Luis García Canales, por su propio derecho, en contra del C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León postulado por el Partido Acción Nacional. Lo anterior a fin de denunciar la supuesta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de pinta de bardas a favor de dicho candidato, hechos que a consideración del quejoso constituyen una infracción a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Nuevo León.

XIII . Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso:

HECHOS

“(…)

I. Mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal por el cual se fijan los topes de gastos de las campañas para la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-108, identificado con el número CEEICG149201 7; se determinó la siguiente tabla:

(…)

Esto es, el monto definitivo de tope de gasto de campaña en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, específicamente para la renovación del ayuntamiento del municipio de Agualeguas, Nuevo León, se estableció en la suma \$78,004.12 setenta y ocho mil cuatro pesos 12/100 en moneda nacional.

II. Conforme a las documentales existes en el Sistema Integral de Fiscalización, se tiene que el C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, presentó sus informes de campaña sobre origen, monto y destino de los recursos, en los términos que son de verse;

(se inserta Imagen)

AGRAVIOS

Me causa agravio la omisión del reporte de gastos de publicidad por concepto de un total de 59 bardas pintadas con publicidad del otrora candidato, mismas que están ubicadas en la colonia centro del municipio de Agualeguas, Nuevo León, para efectos de que lo anterior tenga valor probatorio pleno para esta Autoridad se anexa a este escrito una fe de hechos realizada ante Notario con cada una de las bardas, así como su ubicación en específico, y se solicita la visita de inspección judicial antes esta autoridad para la comprobación de la misma, no obstante la prueba de valor probatorio pleno que se adjunta.

Esta publicidad debió presentarse dentro de los topes de gasto de la campaña, por lo tanto, procede que exista una acumulación al tipo de gastos en cuanto al precio más alto de la matriz de precios con el que cuenta la autoridad. Esto con la finalidad de no dejar de contabilizar ninguno de los actos de campaña realizados por Ignacio Castellanos Amaya y su equipo de trabajo, mismo que señalamos rebasó el tope de gastos autorizado por la Autoridad Electoral.

(se inserta Imagen)

I. En relación a lo anterior también se omite justificar la renta de las diversas bardas como espacios publicitarios y cuanto fue el costo por cada una de ellas, esto se demuestra a totalidad en las imágenes que se anexan como pruebas en su apartado correspondiente, además de la fe de hechos que se adjunta a la presente queja, y mismas que solicitamos también esta autoridad fiscalizadora realice una inspección o visita de verificación a fin de comprobar los hechos narrados, y que tienen factores similares, entre otras a las siguientes imágenes:

(se inserta Imagen)

II. *Estimación de los costos por concepto de los moldes usados, para uniformidad de las imágenes en la barda, moldes que tuvieron que ser utilizados para tener resultados similares a estos:*

(se inserta Imagen)

III. *Estimación de los costos derivado de los horarios o sueldos que cobraron las personas por la pinta de la barda, entendiéndose por estos la cantidad exacta de dinero que se les pago a los trabajadores por sus servicios, en donde claramente se mencionen la totalidad de bardas pintadas, así como cuanto es el costo por cada una de ellas y la variación de precios dependiendo de circunstancias tales como:*

- 1) *Tamaño de la publicidad en la barda (largo y ancho).*
- 2) *Instrumentos utilizados.*
- 3) *Demás cuestiones técnicas.*

(se inserta Imagen)

IV. *La omisión en el reporte de la estimación de los costos accesorios a la pinta de la barda, como son herramientas e instrumentos de pinturas: Broches, rodillos, cintas, cajas, pinturas spray, entre otros.*

(se inserta Imagen)

V. *Y, por último, la estimación de los costos de las pinturas utilizadas para la pinta de las bardas, por las siguientes pintas similares a estas y todos los estilos de bardas que se enumeran en el apartado respectivo:*

(se inserta Imagen)

(...)"

PRUEBAS

PRUEBA TECNICA. *Consistente en la serie de fotografías allegadas a la presente, en donde es evidente las 59 pinta de bardas en controversia.*

DOCUMENTAL PUBLICA. *Consistente en el Acta Fuera de protocolo número 2029 misma que contiene la fe de hechos que certifica la existencia de las bardas con publicidad a nombre del multicitado candidato, realizado el 11 de septiembre de 2018.*

PRUEBA TECNICA. *Consistente en la visita de verificación que debe realizar esta Autoridad Electoral, a fin de verificar la existencia de las bardas con publicidad a nombre del multicitado candidato.*

XIV. Acuerdo de integración. El ocho de octubre de dos mil dieciocho se acordó la integración del escrito de queja suscrito por el C. José Luis García Canales, denunciando probables violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, así como la supuesta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de pinta de bardas a favor del candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León; el C. Ignacio Castellanos Amaya.

XV. Publicación en estrados el acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

a) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento

b) El once de agosto dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este instituto, los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicado oportunamente.

XVI. Notificación de integración de procedimiento de queja al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44346/2018, se notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la integración del procedimiento administrativo de queja.

XVII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44347/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la integración del procedimiento de mérito.

XVIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al Partido Acción Nacional.

a) El nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44345/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la integración y emplazamiento de la queja de mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integraban el presente expediente.

b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0877/2018, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice:

“(…)

Debe señalarse que resulta totalmente falso que el Partido que represento haya sido omiso en reportar los gastos que señalan en el escrito que presentará el promovente, consistente en la pinta de bardas relacionada con elección del ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo León.

Ahora bien, debe precisarse como se refirió en el escrito de contestación que se rindiera dentro del presente expediente, y lo cual no debe pasar desapercibido para esa autoridad que quien denuncia es el C. José Luis García Canales, hijo de quien contendiera en la misma elección del Ayuntamiento de Agualeguas, el C. José Luis García Montemayor, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano y quien además forma parte de la plantilla encabezada por su padre como advierte.

(…)”

IXX. Notificación de integración del escrito de queja al promoverlo el C. José Luis García Canales. El quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/1600/2018, se notificó al C. José Luis García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, la integración del escrito de queja.

XX. Notificación de integración y emplazamiento del escrito de queja al C. Ignacio Castellanos Amaya.

a) El quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/1601/2018, se notificó al C. José Luis García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral la integración y emplazamiento de la queja de mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integraban el presente expediente.

b) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho el C. José Luis García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42,

numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice:

“(…)

Lo referido en el escrito presentado por el promovente respecto a una supuesta omisión de reporte de gastos, pues como ya se señaló ya fue emitido el Dictamen consolidado sin que se haya detectado alguna observación, por ende, no existe irregularidad alguna con los gastos relacionados con la elección del Ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo León.

Aunado a lo anterior, debe desecharse lo presentado por el citado García Canales, pues no precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino solo se limita a realizar acusaciones temerarias, ya que este solo ofrece como pruebas imágenes pretendiendo acreditar la supuesta pinta de bardas, con lo cual resulta insuficiente para acreditar los extremos que pretende, pues de las mismas no se desprende fecha cierta respecto el contenido de esas imágenes.

(…)

Por consiguiente el denunciante incumple con la carga de la prueba pues basa si denuncia en simples manifestaciones que no se encuentran sustentadas con probanza alguna con la que siquiera pudiera generar indicios respecto los hechos que refiere y en consecuencia, debe decretarse inexistente la supuesta infracción que se duele.

(…)”

XXI. Notificación de emplazamiento al Partido Acción Nacional.

a) El treinta y no octubre dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/46411/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que integraban el presente expediente.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta

XXII. Notificación de emplazamiento al C. Ignacio Castellanos Amaya.

a) El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/1639/2018, se notificó al C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito;

asimismo se le emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto denunciados.

b) A la fecha de elaboración del proyecto de mérito, no se tiene respuesta.

Acuerdo de alegatos. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes.

XXIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/43893/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado.

b) Mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral formulo los alegatos que a continuación se señalan:

“(…)

Al respecto, se niega rotundamente la realización de los hechos denunciados y lo cual se acredita pues el promovente no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino solo se limita a realizar acusaciones temerarias ya que este solo ofrece como pruebas imágenes del portal de Facebook: fotografías y videos respecto a la supuesta realización de eventos y de igual modo inserta diversos recuadros con los cuales pretende acreditar el monto respecto al costo que supuestamente tuvieron dichos eventos que como ya se dijo no acredita la realización de los mismos, resultando igualmente insuficiente la simple manifestación del promovente respecto a dichos montos para tenerlos por ciertos, y respecto de cada uno de estos ya que se dio contestación en específico dentro de la contestación rendida en su debida oportunidad.

(…)”

XXIV. Notificación de alegatos a la C. Ignacio Castellanos Amaya.

a) Mediante oficio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó al C. Ignacio Castellanos Amaya, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado.

b) Mediante escrito el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, el C. Ignacio Castellanos Amaya formuló los alegatos que a continuación se señalan:

“(…)

Al respecto, se niega rotundamente la realización de los hechos denunciados y lo cual se acredita pues el promovente no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino solo se limita a realizar acusaciones temerarias ya que este solo ofrece como pruebas imágenes del portal de Facebook: fotografías y videos respecto a la supuesta realización de eventos y de igual modo inserta diversos recuadros con los cuales pretende acreditar el monto respecto al costo que supuestamente tuvieron dichos eventos que como ya se dijo no acredita la realización de los mismos, resultando igualmente insuficiente la simple manifestación del promovente respecto a dichos montos para tenerlos por ciertos, y respecto de cada uno de estos ya que se dio contestación en específico dentro de la contestación rendida en su debida oportunidad.

(…)”

XXV. Notificación de alegatos al quejoso el C. José Luis García Canales.

a) Mediante oficio de fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó al C. José Luis García Canales, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado.

b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, esta autoridad no recibió escrito alguno del C. José Luis García Canales.

XXVI. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXVII. Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la quinta sesión extraordinaria urgente de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por tres votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera, del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón y del Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández y un voto en contra de la Consejera Electoral, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.

En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Fiscalización, se modifica el proyecto en los términos siguientes:

- En el cuadro de los eventos no reportados, se homologaron las referencias a los conceptos no reportados, incluyendo la carpa y el grupo musical en cuya determinación de costo se incluyen el sonido y bocinas.
- En relación al concepto de bolsas y mandiles, se señala que los mismos, fueron reportados en el SIF y se indica en que pólizas se localizan.
- Se homologa en el proyecto la cantidad de bardas no reportadas, dando un total de 42.
- En relación a la matriz de precios, se cita el procedimiento del párrafo 2 del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para fortalecer la motivación de la determinación del costo.

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017¹; INE/CG614/2017² e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y toda vez que el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las causales de sobreseimiento, mismas que deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

¹ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

² Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

Lo anterior a fin de proteger el principio *non bis in ídem*, que constituye una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:

“Artículo 32.
Sobreseimiento

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

*I. El procedimiento respectivo haya **quedado sin materia**”*

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que uno de los hechos denunciados en la misma, consistente en la supuesta omisión por parte del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, de reportar en el informe de campaña correspondiente los gastos por concepto de la realización un evento de campaña celebrado en el extranjero, en específico, en Texas, en los Estados Unidos Americanos, ya que los mismos fueron materia de la Resolución **INE/CG1046/2018**³ de este Consejo General.

Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad aplicable (cuestión formal).

³ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97971/CGex201808-6-rp-1-226.pdf>

A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a continuación:

- La presunta realización de un evento de campaña en el extranjero, en específico en Texas, en los Estados Unidos Americanos.
- En dicho expediente se estableció que, de conformidad al sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral, la autoridad competente para determinar, en primera instancia, si se trata de un acto de campaña realizado en el extranjero -como hecho principal- es el Organismo Público Local Electoral del Estado de Nuevo León, al tratarse de una irregularidad cuyo impacto solo podría vincularse al Procedo Electoral Local Ordinario celebrado en esta entidad federativa.

En este contexto, debe decirse que el conocimiento de los asuntos en los que se denuncie la realización de conductas que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, dentro de los que también podrían encontrarse las relacionadas con la presunta comisión de actos de campaña electoral en el extranjero, siguen la premisa general de que, en principio, pueden constituir materia de un procedimiento administrativo en materia de fiscalización instruido por el Instituto Nacional Electoral.

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de **sobreseimiento** contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.

Sirve de apoyo 1000788. 149. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 189.

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. *El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o*

sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Cernelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 1000788. 149. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 189. -1- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.

Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que los gastos devengados con motivo de la realización de

un evento de campaña en el extranjero, mismo que ya fue materia de la Resolución **INE/CG1046/2018** de este Consejo General, por lo que, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el **sobreseimiento, por lo que hace únicamente a la omisión de reportar gastos en el extranjero, en específico en Texas, en los Estados Unidos Americanos, lugar donde presuntamente llevó a cabo un evento de campaña.**

3. Estudio de fondo. Que al haber resuelto las consideraciones de previo y especial pronunciamiento se procede a resolver sobre el **fondo** del presente asunto, consistente en determinar si el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de veintitrés eventos de campaña y por el supuesto gasto de **cincuenta y nueve pinta de bardas**, así como un posible rebase de tope de gastos de campaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Nuevo León.

Esto es, debe determinarse si el Partido Acción Nacional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya incumplieron en lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

1. Comprenden los realizados en bardas, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

(...)

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

(...).”

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados ...”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de ingresos.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

“Artículo 127.

Documentación de los egresos.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los sujetos obligados cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente

con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el diez de agosto de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja de referencia.

Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja **INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL** que por esta vía se resuelve.

En fecha siete de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito signado por el C. José Luis García Canales, en el cual denuncia probables violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, así como el probable rebase de tope de gastos de campaña del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya por el Partido Acción Nacional, en el cual el

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados así como un posible rebase de topes de campaña, consistentes en **la realización de veintitrés eventos y cincuenta y nueve pinta de bardas de campaña**, de las cuales únicamente aportó la dirección de 56 supuestas bardas, aún y cuando en su escrito de queja señaló 59, conceptos que a dicho del denunciante, beneficiaron al candidato incoado, a saber:

EVENTOS		
ID	Fecha de evento:	Evento
1	29/04/2018	Apertura de campaña
2	10/05/2018	reparto de rosas en domicilio
3	14/05/2018	Recorrido casa
4	15/05/2018	Recorrido casa
5	16/05/2018	Recorrido casa
6	17/05/2018	Recorrido casa por casa
7	18/05/2018	Recorrido casa
8	19/05/2018	Recorrido casa por casa
9	20/05/2018	Presentación del candidato
10	27/05/2018	Comité municipal termina en loc. de los garza
11	28/05/2018	Recorrido con vecinos
12	29/05/2018	Recorrido con vecinos
13	30/05/2018	Recorrido con vecinos
14	31/05/2018	Reunión con vecinos
15	1/06/2018	Recorrido con vecinos
16	2/06/2018	Recorrido con vecinos
17	4/06/2018	Convivio
18	13/06/2018	Debate
19	17/06/2018	Festividad del día del padre
20	20/06/2018	Bicicleteada
21	21/06/2018	Invitación a dar propuestas del candidato
22	24/06/2018	Cabalgata azul
23	27/06/2018	Cierre de campaña

BARDAS	
ID	Ubicación de pinta de bardas
1.	Calle Juárez entre Vicente Canales y Escobedo
2.	Calle Vicente Canales entre Matamoros y Juárez
3.	Calle Morelos entre Gómez Farías y Escobedo
4.	Calle Matamoros entre Victoria y Guerrero
5.	Calle M. Ocampo entre Morelos y Juárez
6.	Calle Zaragoza entre Parás y Victoria
7.	Calle Galeana entre Zaragoza y Morelos
8.	Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González
9.	Calle Guerrero entre Hidalgo y Aldama
10.	Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos
11.	Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos
12.	Calle Guerrero entre Matamoros e Hidalgo
13.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás
14.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Vicente Canales y Fco. García
15.	Calle Juan José Hinojosa entre Jiménez y Lerdo de Tejada
16.	Calle Félix Salazar entre Juan Ovidio Villarreal y Ocampo
17.	Calle Parás entre Hidalgo y Matamoros
18.	Calle Río Conchos entre Río Bravo y Río Purificación
19.	Calle Pablo González entre Rayón y Prolongación Rayón
20.	Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo
21.	Calle Zaragoza entre Galeana y Parás

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

BARDAS	
22.	Calle Juárez entre Morelos e Iturbide
23.	Calle Morelos entre Juárez e Iturbide
24.	Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías
25.	Calle Guerrero entre Hidalgo y Matamoros
26.	Calle Juan Ovidio Villarreal entre Félix y Prof. Felipe Rodríguez
27.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás
28.	Calle 2 de abril entre Hidalgo y Boulevard Don Víctor Gómez Garza
29.	Calle Hidalgo entre Parás y Galeana
30.	Fco. T. Casso entre Aldama e Hidalgo
31.	Calle Morelos entre Vicente Canales y Escobedo
32.	Calle Victoria entre Matamoros e Hidalgo
33.	Calle Guerrero entre Juárez y Matamoros
34.	Calle Palmas Col. Jardín entre Fresnos y del Ébano
35.	Calle Allende entre Álvaro Obregón y Madero
36.	Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González
37.	Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías
38.	Calle Matamoros entre Guerrero y Fco. T. Casso
39.	Calle Guerrero entre Victoria y Privada Guerrero
40.	Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo
41.	Calle Aldama entre Fco. T. Casso y Guerrero
42.	Calle Lerdo de Tejada entre Félix Salazar e Israel Cavazos
43.	Calle Aldama entre Guerrero y Victoria
44.	Carretera a Parás entre Boulevard Don Víctor Gómez Garza
45.	Calle Madero entre Juárez y Morelos
46.	Calle Morelos entre Sarabia y Aldama
47.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Gómez Farías
48.	Calle Zaragoza entre Galeana y Pablo González Congregación Los Garza
49.	Calle S/N Congregación Los Garza
50.	Carretera El Ébano kilómetro 23 aprox. entre la Congregación de Los Nogales y La Escondida (Rancho La Esmeralda)
51.	Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales
52.	Calle Zaragoza entre Julio Garza y Reforma Congregación Los Garza
53.	Carretera al Ojo de Agua a un kilómetro de entronque
54.	Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales
55.	Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza
56.	Carretera El Ébano, de Aqualaguas a Los Nogales kilómetro 17

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos a determinar si los conceptos de gastos fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los mismos, por lo que, una vez realizada la premisa en cita, a fin de determinar el registro de los eventos conducentes.

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido

políticos por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, en el caso concreto, especificando todos los gastos efectuados por el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León el C. Ignacio Castellanos Amaya.

Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará en los siguientes apartados de la siguiente manera:

- A. Gastos de campaña reportados por concepto de la realización de trece eventos.**
- B. Tres eventos denunciados respecto de los cuales no se acreditaron elementos susceptibles de ser cuantificados por no generar gastos**
- C. Gastos de campaña no reportados por concepto de la realización de siete eventos.**
- D. Gastos de campaña no reportados por concepto de cincuenta y nueve bardas.**

Señalando lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados correspondientes.

- A. Gastos de campaña reportados por concepto de la realización de trece eventos.**

En el presente apartado, se estudiará el concepto denunciado por el quejoso, consistente en la realización de trece eventos de campaña, mismos que supuestamente beneficiaron la candidatura del C. Ignacio Castellanos Amaya, en su escrito inicial, para sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba, un listado de eventos, **mismos que se enuncian en el siguiente cuadro:**

ID	Fecha de evento:	Evento	Lugar del evento
1	14/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad
2	15/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad
3	16/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad
4	17/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
5	18/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

ID	Fecha de evento:	Evento	Lugar del evento
6	19/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad
7	20/05/2018	Presentación del candidato	De la comunidad
8	28/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad
9	29/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad
10	30/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad
11	31/05/2018	Reunión con vecinos	De la comunidad
12	1/06/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad
13	2/06/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad

Para efecto de resolver sobre la existencia o inexistencia violaciones a la normativa electoral por parte del otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León y del Partido Acción Nacional, se analizarán sus manifestaciones, pruebas y alegatos.

Como soporte de su dicho, es menester señalar que las pruebas ofrecidas por el denunciante, en el presente, las consistentes en fotografías y videos, constituyen solo pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN**, cuyo contenido es del tenor siguiente:

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.**

Ahora bien, para esclarecer los hechos denunciados, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría mediante oficios INE/UTF/DRN/1172/2018 e INE/UTF/DRN/1450/2018, informara si los 23 eventos denunciados, fueron reportados por el candidato incoado en su respectivo informe de campaña, a lo cual la referida Dirección de Auditoría respondió mediante oficio INE/UTF/DA/3080/2018, la información que se indica en la siguiente tabla:

ID	Fecha de evento	Evento	Lugar del evento	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
1	14/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00001, como Evento No Oneroso.	Reportado
2	15/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00002, como Evento No Oneroso.	Reportado
3	16/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00003, como Evento No Oneroso.	Reportado
4	17/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00004, como Evento No Oneroso.	Reportado
5	18/05/2018	Recorrido casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00005, como Evento No Oneroso.	Reportado
6	19/05/2018	Recorrido casa por casa	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00006, como Evento No Oneroso.	Reportado
7	20/05/2018	Presentación del candidato	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00007, como Evento No Oneroso.	Reportado
8	28/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00008, como Evento No Oneroso.	Reportado
9	29/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00009, como Evento No Oneroso.	Reportado
10	30/05/2018	Recorrido con vecinos	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00010, como Evento No Oneroso.	Reportado
11	31/05/2018	Reunión con vecinos	De la comunidad	Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00011, como Evento No Oneroso.	Reportado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

ID	Fecha evento	de	Evento	Lugar evento	del	Evento Reportado en el SIF	Observaciones
12	1/06/2018		Recorrido con vecinos	De la comunidad		Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00012, como Evento No Oneroso.	Reportado
13	2/06/2018		Recorrido con vecinos	De la comunidad		Reportado en el ID CONTABILIDAD: 51401, en la agenda de eventos con el identificador 00013, como Evento No Oneroso.	Reportado

De lo anterior se desprende que la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones y otros, de este Instituto Nacional Electoral, señala en su respuesta de fecha siete de septiembre de la presente anualidad, que los eventos mencionados, fueron reportados en el informe de campaña del otrora candidato, el C. Ignacio Castellanos Amaya y registrados, dentro del Sistema Integral de Fiscalización; ahora bien, no es óbice señalar que la Dirección de Auditoría señaló que los eventos denunciados como “recorridos” y “caminatas” fueron reportados como eventos no onerosos.

Ahora bien, no obstante lo anterior, y en concordancia al principio de exhaustividad en la investigación y ante las posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización para reafirmar la información remitida por la Dirección de Auditoría, obteniéndose lo siguiente:

Identificador	Evento	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Tipo	Nombre	Responsable	Estado
00001	NO ONEROSO	14/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00002	NO ONEROSO	15/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00003	NO ONEROSO	16/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00004	NO ONEROSO	17/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00005	NO ONEROSO	18/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00006	NO ONEROSO	19/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00007	NO ONEROSO	20/05/2018	12:00	14:00	PUBLICO	PRESENTACION	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00008	NO ONEROSO	20/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00009	NO ONEROSO	24/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00010	NO ONEROSO	30/05/2018	09:00	18:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00011	NO ONEROSO	31/05/2018	17:00	21:00	PUBLICO	REUNION	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00012	NO ONEROSO	01/06/2018	17:00	21:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO
00013	NO ONEROSO	02/06/2018	14:00	20:00	PUBLICO	RECORRIDO	NEDIA VAZQUEZ	REALIZADO

Se desprende de la información contenida en las pólizas correspondientes, que concuerdan con lo denunciado por el quejoso, y que éstas fueron registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF); cumpliendo totalmente, con los

Lineamientos establecidos por esta autoridad Fiscalizadora. esta autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte del mismo, atribuible a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, **están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento** y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[Énfasis añadido]

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca: "Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, **obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas**, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al

*demandado, **resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate**; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario.”*

[Énfasis añadido]

En conclusión, de lo anterior y los elementos de prueba aquí presentados y concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por lo que respecta, a los eventos mencionados en el presente apartado denunciados por el C. José Luis García Canales, materia del presente procedimiento, se encuentran debidamente registrados dentro de los sistemas institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en concreto del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registrado con el **ID contabilidad 51401** del perfil del candidato denunciado; por lo tanto el C. Ignacio Castellanos Amaya, y el Partido Acción Nacional no incumplieron con la normativa electoral al estar debidamente registrada, las operaciones por concepto de eventos no onerosos; como ha quedado acreditado.

Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas obligaciones, de los partidos políticos y candidatos. Aunado a que el Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora.

Ahora bien, de la información obtenida de dicho sistema, es considerada como cierta y veraz, por lo tanto, constituye prueba plena para ésta autoridad electoral, de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría; permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.

Debe entonces concluirse que los sujetos denunciados presentaron a través del citado Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe, en el cual se puede apreciar que efectivamente, fueron debidamente registrados.

De este modo, esta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y toda vez que denunciaron gastos que deben ser reportados por los

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y el emplazamiento al Partido Acción Nacional, ante su representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del oficio número **INE/UTF/DRN/41512/2018**, así como al candidato denunciado el C. Ignacio Castellanos Amaya a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León mediante oficio **INE/VE/JLE/NL/1325/2018**.


Ahora bien, derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, se concluye y debe precisarse que no le asiste la razón al denunciante, según las siguientes precisiones; con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, ésta autoridad realizó una razón y constancia con la finalidad de verificar si las imágenes de los eventos denunciados en el escrito de denuncia, provenían del perfil del candidato denunciado; perfil contenido en la red social denominada Facebook del incoado, en la cual se desprende que, en efecto se trata del perfil del otrora candidato Ignacio Castellanos Amaya; del mismo modo en dicho se perfil se pudo verificar que informaba de la realización de los eventos en mención, aunado a que el denunciante aportó pruebas técnicas al respecto, así como las documentales públicas consistentes en la copia certificada de las solicitudes realizadas a la Presidencia Municipal; solicitudes, para llevar a cabo los eventos objeto de denuncia, por lo que devienen de infundados los argumentos vertidos por los sujetos denunciados, argumentos que resultan ineficaces para desvirtuar la conducta imputada.

Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción alguna, en materia de fiscalización, por lo que, el Partido Acción Nacional, ni su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, respecto a los gastos no reportados por concepto de 13 eventos de campaña, deben declararse el procedimiento de mérito se declara **infundado por lo que hace al apartado A**, de la presente Resolución.

B. Tres eventos denunciados respecto de los cuales no se acreditaron elementos susceptibles de ser cuantificados por no generar gastos

El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso menciona en su escrito inicial y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte de gastos por parte de los sujetos denunciados; sin embargo, derivado de los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, así como de las diligencias llevadas a cabo por esta autoridad, no se acreditó la existencia de los gastos denunciados. Tales conceptos son los siguientes:

ID	Fecha del evento	Evento	Elementos probatorios aportados	Descripción de lo denunciado
1	20 de junio	Bicicleteada		Presuntos gastos no reportados derivado de una bicicleteada.
2	24 de junio de 2018	Cabalgata		Presuntos gastos no reportados derivado de una cabalgata
3	27 de mayo de 2018	Caravana		Presuntos gastos no reportados derivado de una caravana.

Al respecto, en relación a la denuncia consistente en el presunto gasto realizado por los sujetos incoados por la participación de personas con bicicletas, caballos y vehículos consistentes en autos tipo sedán y un autobús, es menester señalar que las pruebas aportadas por el denunciante consistentes en fotografías, en términos

de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen pruebas técnicas, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.

Por lo anterior, consta en autos del expediente en que se actúa, los escritos de desahogo de notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento correspondiente, suscritos por el el C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional de fecha diecisiete de agosto y dieciséis de octubre, ambos, de dos mil dieciocho, a través de los cuales, manifestó con relación a los conceptos materia del presente apartado, que durante los recorridos a manera de cabalgata, bicicleteada y caravana denunciada, de manera espontánea y voluntaria se unieron durante el trayecto ciudadanos y simpatizantes, ya sea a pie, en bicicletas, caballos, vehículos o cualquier otro medio de transporte de su propiedad, sin que lo anterior constituyera un gasto por parte de los sujetos incoados, pues los mismos no fueron contratados u arrendados para realizar tal recorrido, ya que éstos pertenecían a los ciudadanos que participaron en el recorrido sin que de los elementos con que cuenta esta autoridad pudiera determinarse que existió erogación alguna.

Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción II, 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente realizar el análisis minucioso de las pruebas presentadas por el quejoso, de las cuales se advierte que de las fotografías no se desprende la ubicación geográfica ni localidad donde transitan, nombre o características de persona alguna

En consecuencia, si bien se acredita de las imágenes insertas, la participación de diversos ciudadanos en la caravana, cabalgata y bicicletada, no se advierte que dicha participación fuera de manera onerosa, es decir que existiera un pago, o en su caso, aportación por el uso de los medios de transporte utilizados, los cuales no se puede presumir se trate de medios de transporte rentados para dicho fin.

De igual forma, de las pruebas técnicas, no se desprende que los medios de transporte observados fueran contratados u arrendados; que contuvieran algún tipo de rotulado que los identificara como un medio de transporte rentado; o que, por el uso de los mismos, existiera una relación contractual o comercial a cargo del partido político o candidato denunciado. Debe decirse que aun y cuando del estudio de las imágenes se da cuenta de banderas o banderines con el emblema del Partido Acción Nacional y de una camisa que porta el candidato denunciado con propaganda alusiva a su campaña, dichos elementos fueron debidamente reportados en el Sistema integral de Fiscalización.⁴

En consecuencia, de las constancias que obran en el expediente, no se tienen elementos para considerar que los medios de transporte utilizados en la caravana referida, participaron a través de pago, aportación o contratación de los mismos, pues por la naturaleza del hecho que se denuncia se colige que los ciudadanos que formaron parte de la caravana, bicicletada y cabalgata en comento, participaron con sus vehículos, motos o caballos de manera voluntaria, sin mediar pago o aportación alguna a favor de los sujetos denunciados.

Para robustecer los anterior, resulta oportuno mencionar que ofrecer como medio de prueba fotografías y videos en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.

Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-

⁴ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98046/CGex201808-6-dp-3-17.pdf>

Gasto por concepto de playeras las cuales se encuentran reportadas en el SIF en la Póliza 17, Periodo 2, Normal y en la Póliza 16, Periodo 2, Normal, Póliza 19, Periodo 2, Normal.

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio, mismas que no pudieron ser corroboradas o verificadas con las diligencias practicadas por esta autoridad.

Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente **SUP-RAP-184/2017**, se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia.

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es

por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido Acción Nacional y el C. Ignacio Castellanos Amaya, entonces candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.

C. Gastos de campaña no reportados por concepto de la realización de siete eventos.

En este apartado nos avocaremos al estudio de siete eventos de campaña, los cuales se mencionan a continuación en la siguiente tabla:

No.	Fecha	Evento	Lugar
1	29/04/2018	Inicio de Campaña	No se indica
2	10/05/2018	Reparto de rosas en domicilio	Centro de la Ciudad
3	04/06/2018	Convivio	Parque Recreativo Nogalar
4	13/06/2018	Debate	Comisión Municipal Electoral
5	17/06/2018	Festividad del día del padre	Victoria entre Matamoras y Juárez
6	21/06/2018	Invitación a dar propuestas del candidato	No se indica -
7	27/06/2018	Cierre de Campaña	No se indica -

En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad fiscalizadora, procedió a solicitar información mediante oficio número INE/UTF/DRN/1172/2018, a la Dirección de Auditoría respecto del cual, la referida Dirección de Auditoría informó mediante diverso, INE/UTF/DA/3080/18 que respecto a los eventos citados y los gastos erogados con motivo de éstos, no se localizaron registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización como parte del Informe de campaña presentado por el candidato incoado y por el Partido Acción Nacional.

En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad fiscalizadora, a efecto de allegarse de mayores elementos necesarios para la debida integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a revisar las constancias que integran el escrito de queja en el cual se localizó **el oficio 1374/SA/2018** suscrito por el Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo León en el cual señala que con fechas; veintinueve de abril, veintisiete de mayo, diecisiete y veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esa oficina un oficio suscrito por la C. Nidia

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL




Vázquez Cervantes, Presidenta del CDM; Agualeguas, mediante los cuales solicitó permiso al Presidente Municipal de Agualeguas para llevar a cabo eventos dentro de dicha comunidad; no obstante lo anterior cabe hacer mención que, en específico, los de fechas veintinueve de abril, veintisiete de mayo, diecisiete y veintisiete de junio, todos del dos mil dieciocho; son eventos que para esta autoridad electoral crea la convicción de su realización cierta, ya que aunado a la solicitud de la propia presidenta del partido, se cuenta con fotografías y videos en los que se pueden apreciar los mismos.

Cabe señalar que de conformidad con el numeral 2, artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.






Ahora bien, en relación con los siete eventos denunciados, materia del presente apartado, el quejoso aportó como elemento de prueba fotografías en las que se aprecia lo siguiente:

ID	Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Conceptos de gasto determinados del análisis a los elementos de prueba aportados por el quejoso.	Documentación encontrada en el SIF / Reportado	Elementos de prueba con que cuenta la autoridad
1	10 de mayo de 2018	Entrega de rosas	 	-Rosa (1)	No se localizó registro del gasto ni del evento así como tampoco documentación soporte en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el quejoso. Fotografías de Facebook, extraídas del perfil del candidato incoado, verificadas mediante Razón y Constancia levantada por el Titular de la UTF, de la cual se desprende que la fotografía publicada por el incoado, coincide con las presentadas por el denunciante. 

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL





ID	Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Conceptos de gasto determinados del análisis a los elementos de prueba aportados por el quejoso.	Documentación encontrada en el SIF / Reportado	Elementos de prueba con que cuenta la autoridad
2	29 de abril de 2018	Inicio de campaña	 	-Sillas -Mesas -Carpa	No se localizó registro del gasto ni del evento así como tampoco documentación soporte en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el denunciante. Videos de Facebook, extraídos del perfil del candidato incoado. Copia certificada de solicitud dirigida al Presidente Municipal de Agua Leguas Nuevo León, en la cual consta la petición de permiso para utilizar el espacio donde se llevó a cabo el evento de campaña. 

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

ID	Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Conceptos de gasto determinados del análisis a los elementos de prueba aportados por el quejoso.	Documentación encontrada en el SIF / Reportado	Elementos de prueba con que cuenta la autoridad
3	04 de junio de 2018		 	- sillas	No se localizó registro del gasto ni del evento así como tampoco documentación soporte en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el denunciante Videos y fotografías de Facebook. 
4	13 de junio de 2018			-grupo musical (bocinas, cantante y sonido)	No se localizó registro del gasto ni del evento así como tampoco documentación soporte en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el denunciante Videos de Facebook. Copia certificada de solicitud dirigida al Presidente Municipal de Agua Leguas Nuevo León, en la cual consta la petición de permiso para utilizar el espacio donde se llevó a cabo el evento de campaña. 

⁵ En la fotografía se observa gasto por concepto de playeras las cuales se encuentran reportadas en el SIF en la Póliza 17, Periodo 2, Normal y en la Póliza 16, Periodo 2, Normal, razón por la cual se tiene como gasto reportado.


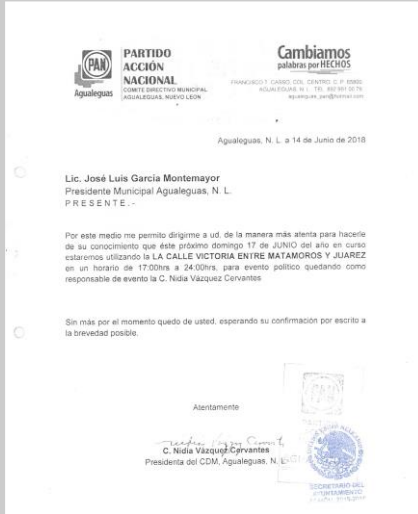
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

ID	Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Conceptos de gasto determinados del análisis a los elementos de prueba aportados por el quejoso.	Documentación encontrada en el SIF / Reportado	Elementos de prueba con que cuenta la autoridad
5	21 de junio de 2018			-Mandiles ⁶ -Bolsas ⁷ -Sillas. -Renta de salón	No se localizó registro del gasto ni del evento así como tampoco documentación soporte en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías. Aportadas por el denunciante. Fotografías de Facebook, extraídas del perfil del candidato incoado, verificadas mediante Razón y Constancia levantada por el Titular de la UTF, de la cual se desprende que la fotografía publicada por el incoado, coincide con las presentadas por el denunciante. 
6	27 de junio de 2018	Cierre de Campaña		-Mesas -sillas	No se encontró documentación, ni está reportado en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el denunciante. Copia certificada de solicitud dirigida al Presidente Municipal de Agua Leguas Nuevo León. 

⁶ Dicho concepto susceptible de gasto fue reportado por el C. Ignacio Castellanos Amaya en el ID de contabilidad 51401, en las pólizas 1, periodo 1, tipo corrección, subtipo diario, póliza 8, periodo 2, tipo normal; póliza 1, periodo 1, tipo corrección, subtipo ajuste.

⁷ Dicho concepto de gasto fue reportado por el C. Ignacio Castellanos Amaya en el ID de contabilidad 51401, en las pólizas 24, periodo 2, tipo normal, por concepto de transferencia en especie estatal.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

ID	Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Conceptos de gasto determinados del análisis a los elementos de prueba aportados por el quejoso.	Documentación encontrada en el SIF / Reportado	Elementos de prueba con que cuenta la autoridad
7	17 de junio de 2018			Sillas Mesas	No se encontró documentación, ni está reportado en el SIF	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías aportadas por el denunciante. Copia certificada de solicitud dirigida al Presidente Municipal de Agua Leguas Nuevo León. 

En relación a los conceptos observados en las imágenes tales como playeras, gorras y camisas, los mismos se encuentran registrados en el SIF en las pólizas |Póliza 17, Periodo 2, Normal y en la Póliza 16, Periodo 2, Normal, razón por la cual se tiene como gasto reportado y por ende no forman parte de los gastos que deben ser sancionados.

En la misma situación se encuentran los conceptos de gasto tales como; bolsas, mandiles (propaganda utilitaria) la cual se localizó reportada por el C. Ignacio Castellanos Amaya, en el ID de contabilidad 51401, en las Pólizas 1, Periodo 1, Tipo Corrección, Subtipo Diario, Póliza 8, Periodo 2, Tipo Normal; Póliza 1, Periodo 1, Tipo Corrección, Subtipo Ajuste, Póliza 24, Periodo 2, Tipo Normal, por concepto de Transferencia en especie estatal.

Del análisis a las fotografías aportadas se observa la realización de siete eventos de campaña en favor del entonces candidato, el C. Ignacio Castellanos Amaya, eventos que no fueron reportados ni registrados en el Sistema Integral de

Fiscalización (SIF) así como tampoco los gastos erogados con motivo de la realización de los mismos, aunado a que existe la certeza de la realización de dichos eventos, esto, en razón de la instrumental de actuaciones, la cual no favorece al denunciado, toda vez que de las mismas se desprende que el denunciado en su perfil de Facebook, realizó la publicación de los eventos arriba mencionados, así como el contenido de los videos que fueron aportados por el quejoso en los cuales se aprecia la realización de los eventos arriba denunciados; todo esto aunado al contenido del oficio número 1374/SA/2018, de fecha 19 de julio de 2018, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Agualeguas y; las certificaciones que contienen las solicitudes realizadas por la Presidenta del Comité Directivo Municipal de Agualeguas en Nuevo León, del Partido Acción Nacional, para realizar los eventos en mención; en consecuencia, la documentales mencionadas, en relación con las fotografías aportadas por el quejoso y concatenada con los resultados arrojados por el Sistema Integral de Fiscalización se colige que los eventos denunciados se trataron de siete eventos de campaña en beneficio del entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional, a la Presidencia Municipal de Agualeguas Nuevo León.

No es óbice señalar que las copias certificadas expedidas por el Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo León, constituyen una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente realizar el análisis minucioso de las pruebas presentadas por el quejoso, de las cuales se advierte lo siguiente:

Esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de prueba que obran en el expediente por cuanto hace al evento materia del presente apartado, se arriba a la conclusión de que estos no fueron reportados, así como tampoco los gastos por concepto de la realización de los mismos.

- ✓ Que, de los hechos narrados en la queja de mérito, se denuncia la realización de 7 eventos de campaña del C. Ignacio Castellanos Amaya, candidato a Presidente Municipal de Agualeguas Nuevo León.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

- ✓ Anexo a la queja se desprenden pruebas técnicas tales como diversas fotografías y videos de las cuales se advierte la realización de los eventos de campaña.
- ✓ Documental Pública consistente en el oficio número 1374/SA/2018, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en el cual informa sobre las solicitudes de realización de actos de campaña realizadas por el Partido Acción Nacional.
- ✓ Copia Certificada de las solicitudes para realizar eventos de campaña, suscritas por la Presidenta del Comité Directivo Municipal, Agualeguas Nuevo León, del Partido Acción Nacional.
- ✓ Que del análisis de las fotografías y videos aportadas como elemento de prueba se pueden observar gastos por concepto de 180 sillas, 10 mesas, 1 rosa, grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), carpa, renta de salón.⁸

Razón por la cual, este Consejo General arriba a la conclusión de que hubo gastos por concepto de 10 mesas, 1 carpa, 180 sillas, 1 rosa, y 1 equipo de grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), la renta de un salón, conceptos que se utilizaron para el evento de campaña denunciado, y las cuales no fueron reportados por el entonces candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, postulado por el Partido Acción Nacional, y por lo tanto; existe incumplimiento a la normatividad electoral.

Ahora bien, es importante señalar que las fotografías proporcionadas por el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, mismas que al ser administradas entre sí, así como lo vertido de la solicitud de información a la Dirección de Auditoria de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), aunado a las copias certificadas de los escritos de solicitud realizados por el candidato incoado para que se le otorgara permiso de llevar a cabo el evento de campaña denunciado, expedidas por el Secretario del Ayuntamiento de Agualeguas hacen prueba plena, por lo que hace a los eventos denunciados y




⁸ Conceptos que se pueden observar en las fotografías aportadas como elemento probatorio.

mencionados en líneas anteriores, mismos que no se encuentran reportados en el informe de campaña del sujeto denunciado gasto por concepto de sillas, mesas situación que se constató de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización.






En consecuencia, este Consejo General concluye que se actualiza una infracción, en materia de fiscalización, por lo que, el Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, el procedimiento de mérito se declara **fundado por lo que hace al apartado C**, de la presente Resolución.

D. Gastos de campaña no reportados por concepto de cincuenta y nueve bardas







En el presente apartado, se estudiará el concepto denunciado por el quejoso, consistente en la pinta de cincuenta y nueve bardas, mismas que supuestamente beneficiaron la candidatura del C. Ignacio Castellanos Amaya, en su escrito inicial, para sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba, un listado de pintas de bardas con propaganda alusiva al candidato incoado, mismas que se señalan en el siguiente cuadro:

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
1.	Calle Juárez entre Vicente Canales y Escobedo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
2.	Calle Vicente Canales entre Matamoros y Juárez		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.25
3.	Calle Morelos entre Gómez Farias y Escobedo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	8.8
4.	Calle Matamoros entre Victoria y Guerrero	Barda en blanco	N/A	Barda en blanco	0

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
5.	Calle M. Ocampo entre Morelos y Juárez		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
6.	Calle Zaragoza entre Parás y Victoria		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	10
7.	Calle Galeana entre Zaragoza y Morelos	Barda en Blanco		Barda en Blanco	0
8.	Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.4
9.	Calle Guerrero entre Hidalgo y Aldama		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	12
10.	Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	7.6
11.	Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos	Barda Repetida	N/A	N/A	0
12.	Calle Guerrero entre Matamoros e Hidalgo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	8.0

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
13.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	8.0
14.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Vicente Canales y Fco. García		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	10.8
15.	Calle Juan José Hinojosa entre Jiménez y Lerdo de Tejada		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	10.2
16.	Calle Félix Salazar entre Juan Ovidio Villarreal y Ocampo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
17.	Calle Parás entre Hidalgo y Matamoros		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
18.	Calle Río Conchos entre Río Bravo y Río Purificación		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	9.0




CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
19.	Calle Pablo González entre Rayón y Prolongación Rayón		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
20.	Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	18.75
21.	Calle Zaragoza entre Galeana y Parás		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	12.0
22.	Calle Juárez entre Morelos e Iturbide		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	12.0
23.	Calle Morelos entre Juárez e Iturbide	Barda Repetida con ID 22	N/A	N/A	0
24.	Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
25.	Calle Guerrero entre Hidalgo y Matamoros		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
26.	Calle Juan Ovidio Villarreal entre Félix y Prof. Felipe Rodríguez		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.0
27.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás	Barda Repetida con 13	N/A	N/A	0
28.	Calle 2 de abril entre Hidalgo y Boulevard Don Víctor Gómez Garza		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	8.0
29.	Calle Hidalgo entre Parás y Galeana		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	5.6
30.	Fco. T. Casso entre Aldama e Hidalgo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	7.5
31.	Calle Morelos entre Vicente Canales y Escobedo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
32.	Calle Victoria entre Matamoros e Hidalgo		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
33.	Calle Guerrero entre Juárez y Matamoros	Barda en blanco	N/A	N/A	0
34.	Calle Palmas Col. Jardín entre Fresnos y del Ébano		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	8.0
35.	Calle Allende entre Álvaro Obregón y Madero		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.4
36.	Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González	Barda Repetida con la 8	N/A	N/A	0
37.	Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías	Barda Repetida con la 24	N/A	N/A	0
38.	Calle Matamoros entre Guerrero y Fco. T. Casso		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	4.8
39.	Calle Guerrero entre Victoria y Privada Guerrero		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.4


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
40.	Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo	Barda Repetida	N/A	N/A	0
41.	Calle Aldama entre Fco. T. Casso y Guerrero		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	3.20
42.	Calle Lerdo de Tejada entre Félix Salazar e Israel Cavazos		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
43.	Calle Aldama entre Guerrero y Victoria		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	3.60
44.	Carretera a Parás entre Boulevard Don Víctor Gómez Garza		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	2.50
45.	Calle Madero entre Juárez y Morelos	Barda en Blanco	N/A	N/A	0
46.	Calle Morelos entre Sarabia y Aldama	Barda en Blanco	N/A	N/A	0
47.	Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Gómez Farías		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
48.	Calle Zaragoza entre Galeana y Pablo González Congregación Los Garza		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
49.	Calle S/N Congregación Los Garza		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
50.	Carretera El Ébano kilómetro 23 aprox. entre la Congregación de Los Nogales y La Escondida (Rancho La Esmeralda)		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	10.0
51.	Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales	Barda Repetida con 50	N/A	N/A	0
52.	Calle Zaragoza entre Julio Garza y Reforma Congregación Los Garza		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
53.	Carretera al Ojo de Agua a un kilómetro de entronque		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	3.0
54.	Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales	Barda Repetida con 47	N/A	N/A	0

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

Consecutivo	Bardas	Imagen	SIF	Observaciones	M2.
55.	Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza	Barda Repetida con 52	N/A	N/A	0
56.	Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza	Barda Repetida con 58	N/A	N/A	0
57.	Carretera El Ébano, de Agualeguas a Los Nogales kilómetro 17	Barda Repetida con 50 y 51	N/A	N/A	0
58.	Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza	Barda Repetida con 56	N/A	N/A	0
59.	Carretera El Ébano de Agualeguas a los Nogales, kilómetro 17		No se localizó registro del gasto por concepto de pinta de bardas	No reportado	6.0
Total					284.8 mts

59 bardas denunciadas, 12 se encuentran repetidas y 5 en blanco dando un total de 42 bardas, mismas que son materia del presente apartado.

En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a solicitar información mediante oficio número INE/UTF/DRN/1172/2018, a la Dirección de Auditoría respecto del registro por concepto de pinta de bardas; respecto del cual, informó mediante oficio INE/UTF/DA/3080/18 que no se cuenta con registros de gastos erogados con motivo de pinta de bardas, ni se localizaron registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) como parte del Informe de campaña presentado por el candidato incoado y por el Partido Acción Nacional.

Del análisis realizado a las fotografías aportadas se observa que, en efecto, en la Comunidad de Agualeguas, se encontraron pintas de bardas a favor del denunciado, mismas que no que no fueron reportadas ni registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. Aunado a lo anterior y de conformidad con el contenido del instrumento notarial número 2,039, de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el titular de la Notaría Pública número cincuenta y siete, en el estado de Nuevo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

León, el Lic. Pablo Quiroga González, en el cual hace constar esencialmente lo siguiente:

(...)

A solicitud me trasladé al Municipio de Agualeguas, Nuevo León, iniciando a las 11:00 horas y me constituí en los siguientes lugares: -----

1. Calle Juárez entre Vicente Canales y Escobedo
2. Calle Vicente Canales entre Matamoros y Juárez
3. Calle Morelos entre Gómez Farías y Escobedo
4. Calle Matamoros entre Victoria y Guerrero
5. Calle M. Ocampo entre Morelos y Juárez
6. Calle Zaragoza entre Parás y Victoria
7. Calle Galeana entre Zaragoza y Morelos
8. Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González
9. Calle Guerrero entre Hidalgo y Aldama
10. Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos
11. Calle Vicente Canales entre Juárez y Morelos
12. Calle Guerrero entre Matamoros e Hidalgo
13. Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás
14. Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Vicente Canales y Fco. García
15. Calle Juan José Hinojosa entre Jiménez y Lerdo de Tejada
16. Calle Félix Salazar entre Juan Ovidio Villarreal y Ocampo
17. Calle Parás entre Hidalgo y Matamoros
18. Calle Río Conchos entre Río Bravo y Río Purificación
19. Calle Pablo González entre Rayón y Prolongación Rayón
20. Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo
21. Calle Zaragoza entre Galeana y Parás
22. Calle Juárez entre Morelos e Iturbide
23. Calle Morelos entre Juárez e Iturbide
24. Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías
25. Calle Guerrero entre Hidalgo y Matamoros
26. Calle Juan Ovidio Villarreal entre Félix y Prof. Felipe Rodríguez
27. Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Guadalupe Victoria y Parás
28. Calle 2 de abril entre Hidalgo y Boulevard Don Víctor Gómez Garza
29. Calle Hidalgo entre Parás y Galeana
30. Fco. T. Casso entre Aldama e Hidalgo
31. Calle Morelos entre Vicente Canales y Escobedo
32. Calle Victoria entre Matamoros e Hidalgo
33. Calle Guerrero entre Juárez y Matamoros
34. Calle Palmas Col. Jardín entre Fresnos y del Ébano
35. Calle Allende entre Álvaro Obregón y Madero
36. Calle Rayón entre Lerdo de Tejada y Pablo González
37. Calle Matamoros entre Álvaro Obregón y Gómez Farías
38. Calle Matamoros entre Guerrero y Fco. T. Casso
39. Calle Guerrero entre Victoria y Privada Guerrero
40. Calle Vicente Canales entre Matamoros e Hidalgo
41. Calle Aldama entre Fco. T. Casso y Guerrero
42. Calle Lerdo de Tejada entre Félix Salazar e Israel Cavazos
43. Calle Aldama entre Guerrero y Victoria
44. Carretera a Parás entre Boulevard Don Víctor Gómez Garza
45. Calle Madero entre Juárez y Morelos
46. Calle Morelos entre Sarabia y Aldama

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

- 47. Boulevard Don Víctor Gómez Garza entre Gómez Farías
- 48. Calle Zaragoza entre Galeana y Pablo González Congregación, Los Garza
- 49. Calle S/N Congregación Los Garza
- 50. Carretera El Ébano kilómetro 23 aprox. entre la Congregación de Los Nogales y La Escondida (Rancho La Esmeralda)
- 51. Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales
- 52. Calle Zaragoza entre Julio Garza y Reforma Congregación Los Garza
- 53. Carretera al Ojo de Agua a un kilómetro de entronque
- 54. Entronque Carretera El Ébano y Carretera Cerralvo Congregación Los Nogales
- 55. Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza
- 56. Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza
- 57. Carretera El Ébano, de Agualeguas a Los Nogales kilómetro 17
- 58. Carretera El Ébano kilómetro 30 a un kilómetro de entronque Los Garza
- 59. Carretera El Ébano de Agualeguas a los Nogales, kilómetro 17

Acto continuo Me constituí en los lugares antes mencionados, Doy fe de que todas las bardas antes mencionadas se encuentran con propaganda del Partido Acción Nacional, que a la letra dicen así, NACHO CASTELLANOS ALCALDE AGUALEGUAS, (LOGO DEL PAN EN CIRCULO)2018-2021, otras bardas, YO CON NACHO PAN, se tomaron 59 fotografías de cada uno de los lugares donde me constituí, agregando las fotografías a la presente Acta Fuera de Protocolo. Co o anterior se dio por concluida la presente diligencia a las 21:35 veintiún horas y treinta y cinco minutos del día de hoy.-----DOY FE.-----

Documental en la cual se puede advertir la intervención del notario público en actos posteriores la Jornada Electoral, consisten básicamente en dar fe de hechos, en el cual es dable resaltar que en los términos de lo establecido por la ley que regula al notariado, una de las excepciones son las diligencias realizadas fuera de la oficina notarial. Actividades que en específico deben cumplir con los siguientes requisitos, a saber;

- 1.- Hacer constar la actuación en acta levantada fuera de protocolo;
- 2.- En dicha acta se debe expresar lugar, hora, día, mes y año en que se realice la actuación notarial;
- 3.- Firma de las personas que intervengan, así como en caso de no querer o no poder hacerlo, así se debe hacer constar, sin que ello afecte la validez de la actuación;
- 4.- Hacer constar en la intervención si durante la diligencia se imprimen fotografías o bien, existe alguna filmación, de tal manera que se refleje en el acta correspondiente, de la manera más fidedigna todo lo acontecido (...). Entre otros requisitos, que en el presente fueron cumplidos a cabalidad.

Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículos 15, numeral 1, fracción II, 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En virtud de lo anterior y de conformidad con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a las que debe sujetarse el órgano Resolutor para valorar las pruebas que obran en autos, y éste Consejo atento a lo que dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda vez que en dicha acta notarial se consignan hechos que adminiculados con lo denunciado por el quejoso y lo que se observa de las imágenes aportados por éste, se arriba a la conclusión de que existe la certeza de lo ahí asentado, es decir, que existieron pintas en bardas a favor del C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León.

Razón por la cual, este Consejo General arriba a la conclusión de que hubo gastos por concepto de pinta de bardas, las cuales no fueron reportados por el entonces candidato a Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, postulado por el Partido Acción Nacional, y por lo tanto existe incumplimiento a la normatividad electoral.

Ahora bien, es importante señalar que las fotografías proporcionadas por el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, mismas que al ser adminiculadas entre sí, así como lo vertido de la solicitud de información a la Dirección de Auditoria de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Del mismo modo es importante señalar que las fotografías proporcionadas por el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, mismas que al ser adminiculadas entre sí, así como lo vertido de la solicitud de información a la Dirección de Auditoria de partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada del Sistema Integral de

Fiscalización (SIF), hacen prueba plena, por lo que hace a cuarenta y cinco pintas de bardas, en el Municipio de Agualeguas Nuevo León.

En consecuencia, este Consejo General concluye que se actualiza infracción alguna, en materia de fiscalización, por lo que, el Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C: Ignacio Castellanos Amaya incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, el procedimiento de mérito se declara **fundado por lo que hace al apartado D** de la presente Resolución.

4. Determinación del costo

Una vez acreditada la infracción se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización informara el valor más alto respecto del costo unitario por concepto de sillas mesas, rosa, grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), carpa y salón, así como de pinta de 42 bardas, con las características similares a la de los acreditados, en base con la matriz de precios. Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en la entidad.
- En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente al estado de Nuevo León, como se indica a continuación⁹:

⁹ Toda vez que no se identificó información suficiente en Nuevo León para valorar el bien requerido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad con la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la encuesta Intercensal 2015.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL**

ID	Nombre del sujeto obligado	Proveedor	Núm. Factura /cotización/ID del RNP/Folio Fiscal	Entidad federativa	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Importe con IVA
2731	Partido de la Revolución Democrática	Desarrollo Publicitario Anduaga SA de CV	0DB20321-5D65-11E8-B2F5-00155D014009	Ciudad de México	Carpa	1	Servicio	\$406.00
9836	Candidato Independiente	Comercializadora y Servicios Exxon SA de CV	7673A544-40CA-4A07-B53E-143AF74B6705	Nuevo León	Mesa	1	Pieza	92.80
14029	Todos por Sonora	Decoración y Organización de Eventos Maxrent S de RL de CV	FE95336D-5E22-11E8-BDFD-00155D014007	Sonora	Silla	1	Pieza	4.872
9809	Candidato Independiente	Eventos y Producciones Jokary SA de CV	7F8374CE-8553-4E89-AB2C-601242397626	Nuevo León	Grupo por hora, incluye equipo de sonido	1	Servicio	6,000.00
12261	Partido Acción Nacional	CSDCI del Pacifico S.A de C.V	50BA0397-6267-5BAE-E520-48CC70FD1213	Querétaro	Rosa	1	pieza	11.89
2991	Juntos Haremos Historia	Héctor Arturo Pérez del Valle	01C592F6-B019-4495-BD0B-399DCC2BAC69	Ciudad de México	Renta de salón	1	Servicio	5,800.00

ID	Nombre del sujeto obligado	Proveedor	Núm. Factura /cotización/ID del RNP/Folio Fiscal	Entidad federativa	Concepto	Cantidad	Importe con IVA
9446	Partido Revolucionario Institucional	Monumentos Publicitarios S de RL de CV	201502121194271	Nuevo León	Pinta de bardas	M ²	\$50.94

Como se puede observar en los cuadros que anteceden el valor más alto de la matriz de precios y con las características similares a las solicitadas, el costo unitario de una **rosa, grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), silla, mesa, renta de salón, carpa y bardas**, siendo, éstos los precios por cada uno de los conceptos señalados:

Al respecto, la normatividad en comento establece que, la determinación del valor por gastos vinculados con la obtención del voto, se sujetará a lo siguiente:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PIBpc = PIB / Población.$$

Así pues, la segmentación de los datos en cuantiles permite identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León como sigue: Quinta Roo, Querétaro, Baja California, Sonora, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Ciudad de México y Campeche.

Ahora bien, no se omite señalar que toda vez que no se identificó información suficiente en Nuevo León para valuar el bien requerido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad con la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la encuesta Intercensal 2015.

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: $PIBpc = PIB / Población$.

Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León como sigue: Quintana Roo, Querétaro, Baja California, Sonora, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Ciudad de México y Campeche.

Lo anterior, como ya se indicó, de conformidad con lo señalado en el párrafo 2 del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice:

“Artículo 27.

Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados:

...
...

2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

...”

Consecuentemente, al sumarse los costos de 10 mesas 180 sillas, 1 rosa, 1 equipo de sonido, 1 carpa y la renta de un salón, así como por la pinta de 42 bardas con un total de 284.80 mts², acreditados se obtiene lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL

CONCEPTO	COSTO UNITARIO MATRIZ	UNIDAD	TOTAL
Mesas	\$92.80	10	\$928.00
Sillas	\$4.87	180	\$876.60
Rosa	\$11.89	1	\$11.89
Grupo por hora, incluye equipo de sonido	\$6,000.00	1	\$6,000.00
Carpa	\$406.00	1	\$406.00
Salón	\$5,800.00	1	\$5,800.00
Bardas	\$50.94 (mt ²)	284.8 mts ²	\$14,507.71
Total			\$28,530.20

Visto lo anterior, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral que rigen en la valoración de pruebas, esta autoridad electoral obtuvo un costo por concepto de mesas, sillas, rosa, grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), carpa y la renta de un salón, así como pinta de bardas –elemento objetivo- concluyendo:

Por consecuencia, los gastos no reportados, respecto a utilización de 10 mesas 180 sillas, 1 rosa, 1 grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), 1 carpa y la renta de un salón, derivado de la realización de 7 eventos de campaña así como por la pinta de 42 bardas, mismos que beneficiaron al entonces candidato postulado al cargo de Presiente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya, el monto cuantificado asciende a la cantidad de **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.

Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una contienda electoral tienen derecho a publicitar su candidatura mediante eventos de campaña, también lo es que **tienen obligación de reportar en el informe de campaña de que se trate, todos los egresos realizados con motivo de los mismos, en el caso específico, de 10 mesas 180 sillas, 1 rosa, 1 grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), 1 carpa y la renta de un salón, así como por la pinta de 42 bardas (284.80 mts²); situación que no aconteció.**

En este tenor, tal egreso debe ser considerado para efectos de los respectivos topes de campaña y debe sumarse el beneficio obtenido por la publicidad descrita en la presente Resolución, para ello el C. Ignacio Castellanos Amaya postulado por el Partido Acción Nacional, por ende, esta autoridad colige que deberá sumarse el gasto por un total de **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.

En este contexto, se procederá a cuantificar a la cifra final de egresos dictaminado el monto involucrado considerado como omiso, para quedar en los siguientes términos:

Tope de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal en Agualeguas, Nuevo León (A)	Monto por acumular, derivados del procedimiento de mérito. (B)	Total de egresos Dictaminados. (C)	Suma (B) + (C)= (D)	Rebase Determinado
\$78,004.12	\$28,530.20	\$19,933.97	\$48,464.17	NO

5. Individualización de la sanción

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva

a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁰:

¹⁰ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por

lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas derivado de la sustanciación de la queja que por esta vía se resuelve, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de 180 sillas, 10 mesas, 1 rosa, 1 grupo musical (incluye bocinas, cantante y sonido), 1 carpa, renta de 1 salón y 42 bardas, con propaganda alusiva a la campaña denunciada, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran

¹¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹²:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

¹² Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹³ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁴, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

¹³ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) *Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)*

¹⁴ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados a continuación, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes por saldar al mes de octubre del año 2018.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades

ordinarias^[1], el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en los párrafos que anteceden de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

^[1] Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁵

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.¹⁶

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.

¹⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

¹⁶ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** lo relativo a la omisión de reportar gastos en el extranjero, en específico en Texas, en los Estados Unidos Americanos, ya que los mismos fueron materia de la Resolución **INE/CG1046/2018**¹⁷ de este Consejo General, en los términos del **Considerando 2**, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado por el Partido Acción Nacional** en los términos del **Considerando 3, apartados A y B**, de la presente Resolución.

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **C. Ignacio Castellanos Amaya, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado por el Partido Acción Nacional** en los términos del **Considerando 3, apartado C y D** de la presente Resolución, por lo que se impone una **multa equivalente a \$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que le sea sumado al tope de gastos de campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el **C. Ignacio Castellanos Amaya, postulado por el Partido Acción Nacional** monto de **\$28,530.20 (veintiocho mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.)**, para efectos del tope de gastos de

¹⁷ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97971/CGex201808-6-rp-1-226.pdf>

campaña; de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 4 y Considerando 5** de la presente Resolución.

QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

SEXTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, a efecto de que la multa determinada en el resolutivo **TERCERO** sea pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, será destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SÉPTIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL C. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones por las que no acompaño la Resolución aprobada por la mayoría del Consejo General. Considero que la misma violenta en forma importante los principios de certeza y legalidad que deben ser observados por este Instituto el emitir sus resoluciones.

En efecto, disiento declarar infundado el concepto de “**caravanas**”, en virtud que no se tienen elementos para considerar que los medios de transporte utilizados en la caravana referida participaron a través de pago, aportación o contratación de estos, pues por la naturaleza del hecho que se denuncia se colige que los ciudadanos que formaron parte de la caravana participaron con sus vehículos de manera voluntaria, sin mediar pago o aportación alguna a favor de los sujetos denunciados.

A mi juicio, las consideraciones contenidas en la resolución adolecen del principio de exhaustividad, ya que la autoridad sustanciadora debió haber agotado la facultad investigadora en relación con las pruebas aportadas por el propio quejoso, consistentes en la publicación en Facebook de una invitación para asistir a la caravana el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, saliendo del Comité Directivo Municipal del instituto político Acción Nacional, así como las dos fotografías en las que se observan automóviles y un camión ondeando banderas de dicho instituto político, como se aprecia a continuación:

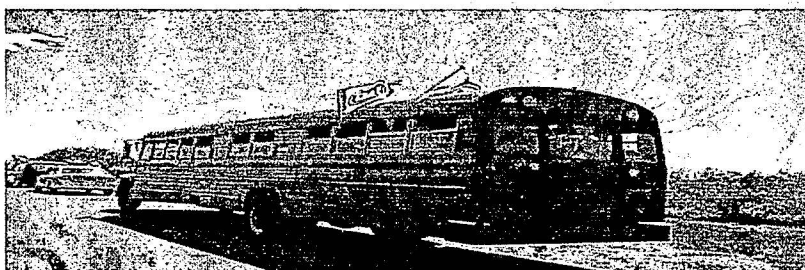




3

Me gusta

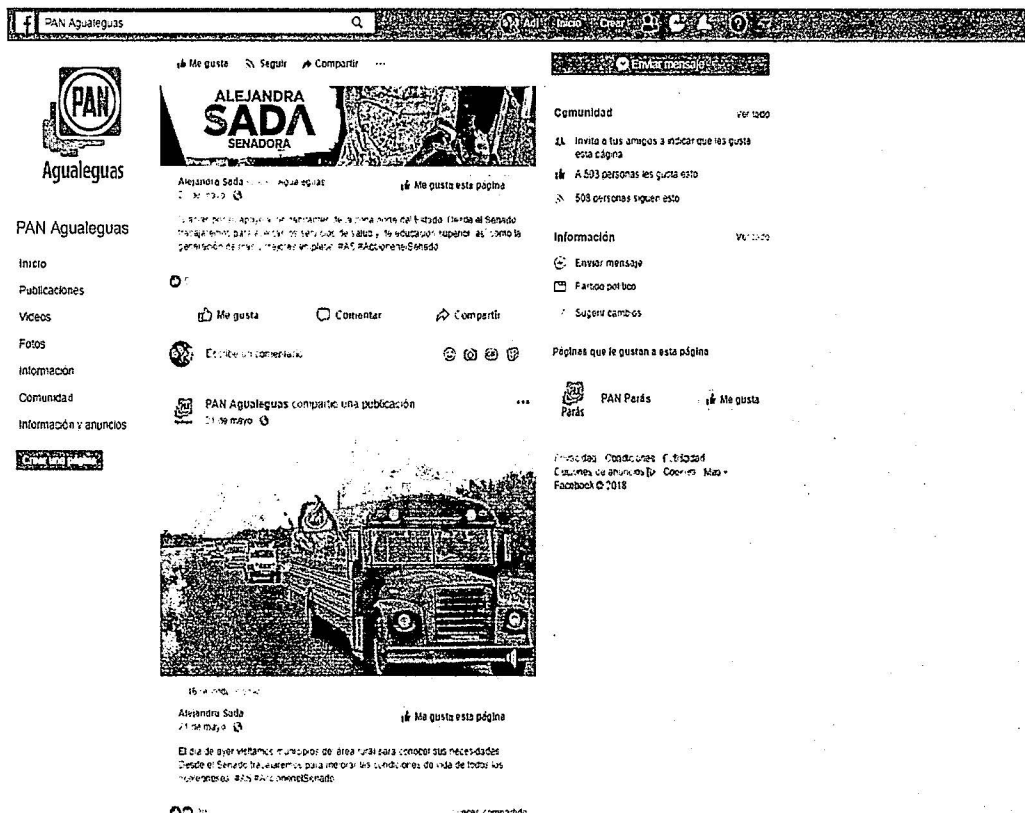
Comentar



3

Lo anterior es así en virtud que la autoridad sustanciadora debió haber levantado razón y constancia de la página de Facebook aparentemente del partido Acción Nacional de Agualeguas, en la que el veintiuno de mayo del presente año, aparece la publicación de un video con una duración de :54 segundos, en la se escucha una voz que dice: "Vamos de Agualeguas la cabecera de Agualeguas, rumbo a Nogales con Nacho, Alejandra y Samuel", en el que se observa el camión azul ondeando banderas de ese instituto político, así como 5 camionetas y 2 automóviles también oleando banderas del partido denunciado, como se observa a continuación:

Handwritten signature



En ese sentido, de las fotografías aportadas por el quejoso en relación con el autobús es coincidente con la fotografía publicada en el perfil de Facebook aparentemente de Acción Nacional en Agualeguas, es decir, se presume que el autobús asistió a la caravana denunciada el veintisiete de mayo, así como al evento publicado el veintiuno de mayo, por lo tanto, **se puede inferir que su participación en la caravana no es de forma espontánea**, sino que se pudiera traducir en un gasto erogado o una aportación.

Asimismo, se observan de las fotografías aportadas por el quejoso tres automóviles en caravana ondeando banderas del instituto político denunciado, por lo que necesariamente se tuvo que realizar un gasto para el pago del combustible a fin que los mismos puedan funcionar, concepto el cual debió ser reportado en Sistema Integral de Fiscalización al tratarse de un acto de campaña a favor del otrora

candidato denunciado, por lo tanto, **no se puede concluir que ese tipo de gastos son no onerosos sin mayor investigación.**

Asimismo, es oportuno señalar que las caravanas son una práctica recurrente más aún en las elecciones municipales, al ser un dispendio de recursos al privilegiar la movilización y el amedrentamiento del adversario mediante el despliegue de recursos.

Ahora bien, considero que la resolución deja de realizar el pronunciamiento de todos los conceptos denunciados, ya que, en el evento de cuatro de junio del presente año, se denunció la renta de sonido y comida, en el caso del evento de trece de junio de dos mil dieciocho, la renta de dron y techos, en el evento de veintisiete de junio del presente año, el concepto de comida y agua, sonido y grupo por hora, premios y renta de dron, y finalmente en relación al evento del diecisiete de junio de dos mil dieciocho, sonido con grupo y aguas, sin embargo, no existe algún pronunciamiento en la resolución respecto de los mismos.

Además, estimo que en el dictado de todas las determinaciones del Instituto deben agotar todos los medios para investigar los hechos que determinen el accionar de la autoridad y que estos hechos se adecuen a lo que realmente aconteció, estableciendo una adecuada relación entre la norma y los hechos, con la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la realidad.

No debe perderse de vista que es obligación para esta autoridad que las resoluciones que emita deben atender los principios de **congruencia**¹, así como de debida **fundamentación y motivación**², atentos a la garantía de legalidad.

En suma, se considera que es obligación de esta autoridad ceñir sus determinaciones en los términos claros y precisos que prevé la ley, entendiendo la obligación que se tiene como autoridad para estudiar todos y cada una de las pretensiones sometidas a su conocimiento, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica de las resoluciones.



¹ Jurisprudencia 28/2009. CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.

² Jurisprudencia 5/2002. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Finalmente, no comparto la indebida reducción de los criterios de sanción respecto a la infracción consistente en gasto no reportado por los sujetos obligados que era sancionado originalmente con una multa equivalente al 150% sobre el valor del costo determinado, siendo ahora la multa del 100%.


En efecto, el cambiar durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, los criterios que esta autoridad ha tomado crean inseguridad jurídica en relación con la actuación de esta, además de mermar el modelo mismo de la fiscalización.

Sostengo lo anterior, al considerar que la sanción en los procedimientos sancionadores tiene como principal función coadyuvar a salvaguardar los principios constitucionales y valores intrínsecos de una elección democrática como son: certeza, equidad y legalidad.

Tan es así, que de los **708** procedimientos sancionadores en materia de fiscalización resueltos del 1° de enero al 28 de noviembre de 2018³, en **453** procedimientos se denunció la omisión de reportar los gastos por parte de los sujetos obligados, es decir, el 63.98 %.

En ese sentido, considero que la sanción tiene como propósito inhibir la realización de las conductas reprochables por parte del sujeto sancionado basado en el temor al castigo o a la represión, situación que no acontece en este tipo de asuntos al bajar el criterio de sanción, para sancionar solamente con el monto involucrado.

Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales de este Instituto.



JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

³ Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. Sesión Ordinaria del Consejo General el 28 de noviembre de 2018.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:

Gracias. _____

Secretario del Consejo, informe el contenido de las Resoluciones aprobadas e identificas con los apartados 19.4, 19.7 y 19.8 a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondientes para los efectos conducentes. _____

Continúe del mismo modo, Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:

Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Mi intervención estaba planeada para el siguiente punto, en éste pido una disculpa, porque realmente, a menos que alguien tuviera alguna

observación que amerite respuesta, preferiría reservar mi intervención para el siguiente punto. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:

Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Pregunto, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra en este punto?. __

No siendo así, Secretario del Consejo, por favor, tome usted la votación relativa al punto 20. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 20, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente en funciones. __

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1495/2018) Pto. 20_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE SE CONSIDERAN COMO DE APOYO CIUDADANO Y PRECAMPAÑA CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2018-2019, EN LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS, ASÍ COMO LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR DE DICHOS PROCESOS

ANTECEDENTES

- I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).
- II. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
- III. Que el 7 de septiembre de 2016 en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, con ello se brinda mayor transparencia, información, así como la rendición de cuentas depositada en un instrumento que garantiza certeza jurídica en las elecciones articulando de manera precisa, clara y ordenada la secuencia de normas y actos necesarios que se realizan en una elección.

- IV. Que en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 5 de enero de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.
- V. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 12 de septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por el que se modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto. En el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández.
- VI. El 6 de agosto de 2018 en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG1176/2018, mediante el cual se establece el calendario y plan integral de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

C O N S I D E R A N D O

- 1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
- 2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.
4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
7. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.
10. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
11. Que el artículo 195, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece que se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político. Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el Consejo General deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez concluidas las convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan los gastos del proceso de selección interna de los candidatos que serán considerados como gastos ordinarios, de aquellos gastos que se considerarán como de precampaña. En ese sentido, en el presente Acuerdo, se incluyen disposiciones que dan cumplimiento al numeral 2 del artículo en comento.
12. Que de conformidad con el Artículo 226, numeral 2, de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán treinta antes del inicio formal de los procesos electorales, el plazo legal para que los partidos políticos

determinen, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, indicando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.

13. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, señala que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
15. Que el artículo 199, numeral 1 inciso b) de la LEGIPE, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
16. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos eventos en que los precandidatos a una

candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

17. Que en términos de lo preceptuado por el artículo 227, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.
18. Que en atención a lo establecido en el artículo 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les serán aplicables, en lo conducente, a las precampañas y a los precandidatos, las normas establecidas en la citada Ley, respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.
19. Que en el Acuerdo INE/CG345/2014 mediante el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta planteada por el Partido Movimiento Ciudadano, en relación con los derechos y obligaciones de los precandidatos únicos en el Proceso Electoral, precisó que quienes ostentan la calidad de precandidatos únicos no tienen permitido llevar a cabo actos que tengan por objeto promover su imagen o la recepción de su mensaje ante los ciudadanos o sufragantes en general, pues al publicitar sus plataformas electorales, programas de gobierno o exhibir su imagen frente al electorado, tendrían una ventaja indebida frente al resto de los contendientes que se encuentran en un proceso interno en su respectivo partido político, con lo que se vulnera el principio de equidad, rector de los procesos electorales. A partir de las razones expuestas, las actividades de los precandidatos únicos deben restringirse a aquéllas que estén dirigidas a quienes tienen un nivel de intervención directa y formal en su designación o ratificación como candidato, dado que no se encuentran en una etapa de competencia con otros contendientes.”

- 20.** Que de conformidad con la Tesis XVI/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro “PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA”, cuando se convoca a participar en la contienda interna, pero únicamente hay un candidato, en ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación, y para observar los principios de equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe estimarse que éste puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político por el que pretende obtener una candidatura siempre y cuando no incurra en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el Proceso Electoral.
- 21.** Tanto la Sala Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido, atendiendo a la naturaleza de las precampañas, que si únicamente se presenta un precandidato al procedimiento de selección interna de un partido político o, se trata de un candidato electo mediante designación directa, resulta innecesario el desarrollo de un procedimiento de precampaña pues no se requiere de promoción de las propuestas al interior del instituto político de que se trate al estar definida la candidatura para el cargo de elección popular que corresponda.
- 22.** Sin embargo, tal prohibición no puede ser aplicable de forma absoluta, ya que debe valorarse en el contexto de cada contienda interna, pues no en todos los casos, el sólo hecho de ser precandidato único garantiza de forma inmediata la postulación de dicha persona como candidato del partido al cargo de elección popular en cuestión.
- 23.** Que la H. Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SM-JRC-1/2015 y SM-JDC-18/2015 ACUMULADOS, estableció un nuevo criterio en cuanto a la figura del precandidato único, al señalar que el precandidato, en términos de la normativa aplicable, se encontraba en la posibilidad jurídica de hacer actos, para que los delegados de su partido pudieran contar con elementos para definir su voto en favor o en contra, de la postulación sometida a su consideración.

- 24.** Que el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, estipula que son obligaciones de los partidos políticos aplicar el financiamiento público y privado del cual dispongan, exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.
- 25.** Que el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, rechaza cualquier apoyo económico político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos. Asimismo, el artículo 54, numeral 1 de la Ley de mérito, prohíbe que bajo cualquier circunstancia los partidos políticos o precandidatos a cargos de elección popular reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los Estados y de los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal y de los órganos de gobierno del Distrito Federal; de los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; de los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de las personas morales; y de las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
- 26.** Que el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de las precampañas y de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.
- 27.** Que conforme al artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, los informes de precampaña serán presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

- 28.** Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.
- 29.** Que este Consejo General estima necesario determinar normas aplicables a todos los partidos políticos, tanto locales, como nacionales con registro o acreditación local, con la finalidad de determinar los gastos que se considerarán como de precampañas, así como los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, respecto de las precampañas correspondientes a los procesos electorales federal y locales 2018-2019.
- 30.** Que este Consejo General estima necesario determinar la normatividad aplicable al procedimiento para la presentación y revisión de los informes de precampaña de conformidad con los plazos y procedimientos de revisión contemplados en la Ley General de Partidos Políticos, en el Reglamento de Fiscalización y en el Manual General de Contabilidad.
- 31.** Que la Tesis XXIV/2016 emitida por la Sala Superior con rubro “PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO”, define el tratamiento que se le dará a la propaganda genérica exhibida previo y durante la precampaña, según se lee de su texto:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 83, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 29, 32, 32 bis, 195, 216 y 218, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se considera como gastos de precampaña o campaña la propaganda que los partidos políticos difundan por cualquier medio, como pueden serlo anuncios espectaculares o bardas. La propaganda que se difunde en estos medios se puede clasificar, según su contenido, como genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato o candidato en particular. En este orden de ideas, si bien los partidos políticos

pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña y campaña, en caso de que no sea retirada al iniciar esas fases de la etapa de preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña o campaña, los gastos deben ser contabilizados y 14 prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas o campañas que se desarrollen.”

- 32.** Que las precampañas de los Procesos Electorales Locales 2018- 2019, serán financiadas por los partidos políticos con financiamiento público ordinario y recursos de fuentes privadas.
- 33.** Que corresponde al Instituto Nacional Electoral ejercer la facultad de fiscalización sobre las operaciones de ingreso y gasto, relacionadas con las precampañas de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
- 34.** Que en términos de artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General podría ajustar los plazos establecidos en la ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos la misma.
- 35.** Que en virtud de lo anterior, resulta necesario precisar la normatividad aplicable a los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y determinar las reglas básicas para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos.
- 36.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 377 de la LGIPE, el Consejo General, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 378 de la LGIPE, los aspirantes a candidatos independientes deberán presentar un informe de ingresos y egresos, dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano.
38. Que el artículo 425 de la LGIPE, señala que la revisión de los informes que, los aspirantes a una candidatura independiente, presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera, estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto.
39. Que el artículo 427 de la LGIPE, establece las facultades de la Comisión de Fiscalización, entre las que se encuentran: i) Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes a una candidatura independiente, en los que especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; ii) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los aspirantes a una candidatura independiente; iii) Ordenar visitas de verificación a los aspirantes a una candidatura independiente con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.
40. Que de conformidad con el artículo 428, numeral 1, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con la facultad de regular el registro contable de los ingresos y egresos de los aspirantes a una candidatura independiente, determinar las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en dicha Ley, así como proponer a la Comisión de Fiscalización la emisión de las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los aspirantes a una candidatura independiente.

41. Que el artículo 428, numeral 1, incisos e) y d) de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene entre sus facultades la de vigilar que los recursos de los aspirantes a una candidatura independiente y candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley, así como recibir y revisar los informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a una candidatura independiente.
42. Que el artículo 429 de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá garantizar el derecho de audiencia de los aspirantes a una candidatura independiente con motivo de los procesos de fiscalización y que estos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la citada Unidad Técnica de Fiscalización sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.
43. Que el artículo 430 de la LGIPE, señala que los aspirantes a una candidatura independiente deberán presentar los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo a las siguientes reglas :i) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta bancaria abierta; ii) Acompañar los estados de cuenta bancarios; y iii) Entregarlos junto con la solicitud de registro correspondiente.
44. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 401 de la LGIPE, no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o candidatos independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos; las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal, ahora Ciudad de México; los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México; los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; los organismos internacionales de cualquier

naturaleza; los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y las empresas mexicanas de carácter mercantil.

45. Que este Consejo General estima necesario determinar normas aplicables a aquellos aspirantes a una candidatura independiente, con la finalidad de determinar los gastos que se considerarán como para la obtención del apoyo ciudadano; así como los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, respecto del periodo de obtención del apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electorales local ordinario 2018-2019; y la normatividad aplicable al procedimiento para la presentación y revisión de los informes de ingresos y egresos para la obtención del apoyo ciudadano, de conformidad con los plazos y procedimientos de revisión contemplados en la LGPP, en el Reglamento de Fiscalización y en el Manual General de Contabilidad.
46. Que el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización dispone que, los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:
- a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.*
 - b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.*
 - c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.*
 - d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.*
 - f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.*
 - g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.*
 - h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*

j) Las personas morales.

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.

l) Personas no identificadas.

2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivados de transacciones comerciales, serán procedentes siempre y cuando sean pactados y documentados en la factura y contrato o convenio, al inicio de la operación que le dio origen. Para el caso de bonificaciones, los recursos se deberán devolver mediante transferencia proveniente de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de servicio.”

- 47.** Que desde la aprobación del presente, y para ser coherentes con los criterios adoptados por el Consejo General, existe la prohibición que existe de recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, en el entendido que en múltiples antecedentes se ha establecido, que la persona física con actividad empresarial encuadra en el concepto “empresa mexicana con actividad mercantil” y, por ende, en la prohibición prevista en el artículo 401, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, toda vez que su actividad es comercial, con fines de lucro.
- 48.** Que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes se financiarán con recursos privados de origen lícito.
- 49.** Que corresponde al INE ejercer la facultad de fiscalización sobre las operaciones de ingreso y gasto, relacionadas con el período de obtención de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 42; 44, numeral 1, inciso jj); 190, 191; 192, numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral 1, 199, 227, 231, 377, 378, 425, 427, 428, 429, 430 y 401 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, 54, 75, 79 y 83, de la Ley General de Partidos

Políticos y 29, 32, 32 bis, 121, 195, 216, 218, del Reglamento de Fiscalización y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña para los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019, correspondiente a los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso”

I. GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Artículo 1. Los aspirantes a una candidatura independiente que realicen actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano correspondientes a los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019 o procesos electorales extraordinarios que se deriven, les serán aplicables en materia de fiscalización la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad, el registro de operaciones a través del Sistema Integral de Fiscalización, los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la materia.

Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4 y 211, párrafo 2, 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de apoyo ciudadano los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares, gastos relacionados con la contratación de empresas o prestadores de servicios para la captación de apoyo ciudadano; así como los gastos erogados por concepto de remuneraciones a personal que presten sus servicios para los fines de la Asociación Civil y la búsqueda del apoyo ciudadano;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todos los casos el aspirante deberá indicar con toda claridad en el medio impreso que se trata de propaganda o inserción pagada;

d) Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;

e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de campaña;

f) Gastos realizados por los aspirantes en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos cuyos resultados se den a conocer durante el periodo de apoyo ciudadano.

Artículo 3. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.

Artículo 4. En el caso de los eventos realizados por los aspirantes correspondientes a caminatas, visitas a domicilio, o actividades que realicen al aire libre, en lugares distintos a plazas públicas o inmuebles, deberán de reportar el costo inherente al mismo, el cual será considerado para efectos de los topes de gastos. Estos eventos deben, invariablemente, ser incluidos en la agenda de eventos y deberá adjuntarse la evidencia gráfica del desarrollo de la actividad en la póliza correspondiente.

Artículo 5. Los aspirantes podrán otorgar, a sus simpatizantes, reconocimientos por actividades políticas (REPAP) por actividades de apoyo electoral exclusivamente durante el período de obtención de apoyo ciudadano, para lo cual deberá observar las reglas establecidas en el artículo 134 del Reglamento de Fiscalización, los cuales se registrarán en la cuenta de "Otros Gastos" y el aspirante deberá especificar en su catálogo auxiliar que corresponde al pago de REPAP.

Artículo 6. Los aspirantes solo pueden celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y, deberán presentar los avisos de contratación, de conformidad con el artículo 261 bis del Reglamento de Fiscalización.

MEDIOS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS DE APOYO CIUDADANO

Artículo 7. La captación, clasificación, valuación y registro de los ingresos y egresos del período de obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes se realizarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y mediante el Sistema Integral de Fiscalización:

a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, los aspirantes deberán realizar los registros de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que se realiza la operación y hasta tres días posteriores a su realización mediante el Sistema Integral de Fiscalización, atendiendo a lo siguiente:

1. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se realizan; es decir cuando éstos se reciben en efectivo o en especie.
2. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los gastos, en el momento en que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, lo que ocurra primero, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF A2 "Postulados básicos".
3. En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional y a valor nominal aun cuando existan bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 de "Valuación de las operaciones" del Título 1, Registro de operaciones, del Reglamento de Fiscalización.
 - a) La información tendrá el carácter de definitiva y sólo podrán realizarse modificaciones por requerimiento de la autoridad fiscalizadora.
 - b) La presentación y revisión de los informes que presenten los aspirantes a una candidatura independiente a través del Sistema Integral de Fiscalización, se deberá realizar con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE.
 - c) Los aspirantes a candidatos independientes no podrán bajo ninguna circunstancia presentar nuevas versiones de los informes sin previo requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Los cambios o modificaciones a los informes presentados sólo podrán ser resultado de la solicitud de ajuste notificados por la autoridad, los cuales serán presentados en los mismos medios que el primer informe.
 - d) La notificación de los oficios de errores y omisiones se realizará a través del Sistema Integral de Fiscalización. Asimismo, los aspirantes a candidatos independientes deberán informar a la Unidad Técnica los nombres completos, dirección y teléfono de sus responsables financieros,

dentro de los 5 días posteriores a la aprobación del presente Acuerdo o posteriores a que tengan la calidad de aspirantes a candidatos independientes.

e) En el caso de intermitencias en la operación del Sistema Integral de Fiscalización, se deberá atender a lo dispuesto en el Plan de Contingencia del sistema, definido por el Instituto, documento en el cual se detallará el procedimiento para realizar los reportes de errores y el medio de atención por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización.

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO

Artículo 8. Los aspirantes a candidatos independientes, incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, los cuales serán presentados con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE.

Artículo 9. Derivado de la revisión de ingresos y gastos relativos a la obtención del apoyo ciudadano, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los dictámenes y resoluciones, respecto de los procesos electorales federal y locales 2018-2019 que se celebren en cada entidad federativa.

Artículo 10. Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos a la fiscalización de los informes de obtención del apoyo ciudadano, respecto de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, que se celebren en cada entidad federativa y se hayan determinado sanciones económicas, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se informará a los Organismos Públicos Locales electorales, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen el cobro de las sanciones impuestas.

Artículo 11. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia

de Fiscalización, así como las reglas locales vigentes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo que no se opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de Fiscalización, en cuyo caso prevalecerán las Leyes Generales y el Reglamento de Fiscalización.

Artículo 12. Los servidores públicos que aspiren a una candidatura o aquellos que busquen reelegirse por esta vía de conformidad con los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la carta magna, no podrán utilizar recursos financieros, materiales y humanos de carácter público para buscar el apoyo ciudadano, ni hacer tareas de proselitismo o realizar propaganda de carácter institucional en la que se promoció su nombre, imagen, voz o símbolo. Los recursos públicos ejercidos en contravención del párrafo anterior, se considerarán una aportación de ente prohibido.

Artículo 13. Los aspirantes a una candidatura independiente deberán presentar sus agendas de actos públicos de conformidad con el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 14. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en su conjunto, superiores a los \$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), se hará del conocimiento de las autoridades hacendarías y financieras y se verificará que dichas aportaciones correspondan a la capacidad económica de quien las realizó. De no existir correspondencia, se sancionará al receptor del recurso por recibir aportaciones de persona no identificada.

Artículo 15. Si se reciben aportaciones por montos superiores a los gastos reportados en la obtención del apoyo ciudadano, el diferencial será transferido a las aportaciones de la campaña y serán considerados para efectos del límite de aportaciones del candidato.

Artículo 16. De conformidad con el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización, no se consideran aportaciones realizadas a las Asociaciones Civiles y aspirantes, los servicios prestados por simpatizantes que no tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada; siempre y cuando el servicio no se preste

de manera permanente y/o ésta no sea la única actividad que desempeña el simpatizante.

Se considerará que se trata de servicios prestados en forma permanente que deben cuantificarse y registrarse en el Sistema Integral de Fiscalización, cuando exista evidencia de que los servicios prestados por los simpatizantes se realizaron durante cinco o más días de una semana.

En caso de que se trate de actividades realizadas por simpatizantes de forma gratuita, voluntaria y desinteresada, se deberá recabar y registrar en el Sistema Integral de Fiscalización un escrito en formato libre, con la fecha, el nombre, la clave de elector, detallando las actividades realizadas y la firma autógrafa del simpatizante y el período en el que prestó sus servicios al aspirante, los cuales deberán ser presentados como documentación adjunta al informe.

II. GASTOS DE PRECampaña.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Artículo 1. Los partidos políticos y precandidatos que realicen actividades de precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019 o procesos electorales extraordinarios que se deriven, les serán aplicables en materia de fiscalización la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad, el registro de operaciones a través del Sistema Integral de Fiscalización, los acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la materia.

GASTOS DE PRECampaña.

Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento

de Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:

- a)** Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
- b)** Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
- c)** Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
- d)** Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;
- e)** Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
- f)** Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos;

Artículo 3. Los partidos políticos, a más tardar tres días antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate, deberán retirar toda su propaganda genérica e institucional, siendo genérica aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato en particular.

1. Los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña, sin embargo, en caso de que no sea retirada al iniciar esa fase de la etapa de preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña, los gastos deben ser contabilizados y prorrateados entre las precampañas beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas que se desarrollen.
2. Si el partido no tiene precandidatos y difunde propaganda genérica, deberá reportar los gastos como de operación ordinaria correspondiente a los procesos internos de selección de candidatos, por lo que, en su conjunto, no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno.

Artículo 4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.

Artículo 5. Los eventos realizados por los precandidatos correspondientes a caminatas, visitas a domicilio o actividades que realicen al aire libre en lugares distintos a plazas o inmuebles públicos, se atenderán a lo siguiente:

1. Todo evento de este tipo invariablemente deberá tener su propio registro en la agenda de eventos, independientemente de que se relacione, vincule o desprenda de otro. El registro deberá hacerse en términos del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. Asimismo, en el SIF se deberá adjuntar la evidencia fotográfica del mismo y, en su caso, los comprobantes de gasto en la póliza correspondiente establecidos en el Reglamento de Fiscalización. El evento podrá ser sujeto de visitas de verificación, de

acuerdo a las reglas que para tal efecto haya emitido la Comisión de Fiscalización.

Artículo 6. Los precandidatos podrán otorgar a sus simpatizantes, Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP) por actividades de apoyo electoral, para lo cual deberán observar las reglas establecidas en el artículo 134 del Reglamento de Fiscalización, los cuales se registrarán en la cuenta de “Otros Gastos” especificando el identificador que de acuerdo al catálogo auxiliar del REPAP corresponda al beneficiado del pago.

Artículo 7. Los sujetos obligados solo pueden celebrar operaciones con proveedores inscritos en el RNP, y presentar los avisos de contratación, de conformidad con el artículo 261 bis del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 8. Para acreditar que los gastos realizados en eventos relacionados con procesos internos de selección de candidatos a que se refiere el artículo 72, numeral 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos como gasto ordinario, se atenderá lo siguiente:

1. Los eventos deben tener el propósito explícito y único de desahogar el procedimiento de selección de candidatos que se haya establecido en la convocatoria respectiva.
2. Los partidos políticos deberán levantar un acta de cada evento, en la que conste que el acto se realiza en términos estatutarios, las características, objeto del evento y el número de asistentes, la cual se deberá adjuntar en el Sistema Integral de Fiscalización al momento de hacer el registro de sus operaciones.
3. Deberá presentar muestras fotográficas, video o reporte de prensa del evento, de las que se desprendan todos los gastos erogados con motivo del mismo, una descripción pormenorizada de la propaganda exhibida, colocada o entregada durante la celebración del evento, así como de los demás elementos que acrediten un gasto por parte del sujeto obligado.
4. El sujeto obligado deberá invitar a la Unidad Técnica a presenciar la realización del evento con siete días de antelación a la celebración, así como su ubicación, horario, los temas a tratar y el número estimado de asistentes.

5. La Unidad Técnica podrá designar a quien la represente para asistir, y levantar un acta que contendrá los elementos señalados en los artículos 297, 298 y 299 del Reglamento de Fiscalización.
6. De las constancias que se levanten con motivo de la observación a que se hace referencia en el numeral anterior, la Unidad Técnica procederá a entregar copia de la misma a la persona con quien se haya entendido la diligencia. Dichas actas o constancias harán prueba plena de las actividades realizadas en los términos que consten en el acta respectiva. Estas visitas se realizarán de conformidad con la normatividad correspondiente y las actas cumplirán con los requisitos previstos para aquéllas que se levantan con motivo de las visitas de verificación.

MEDIOS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS

Artículo 9. La captación, clasificación, valuación y registro de los ingresos y egresos de las precampañas de los partidos políticos se realizarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y mediante el Sistema Integral de Fiscalización.

- a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados deberán realizar los registros de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en el que deban registrarse y hasta tres días posteriores a su realización mediante el Sistema Integral de Fiscalización, atendiendo a lo siguiente:
 - i. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se realizan; es decir cuando éstos se reciben en efectivo o en especie.
 - ii. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los gastos, en el momento en que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, lo que ocurra primero, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF A2 “Postulados básicos”.
 - iii. En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional y a valor nominal aun cuando existan bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 de “Valuación de las

operaciones” del Título I, Registro de operaciones, del Reglamento de Fiscalización.

- b)** La información tendrá el carácter de definitiva, una vez presentado el informe correspondiente y sólo podrán realizarse modificaciones por requerimiento de la autoridad fiscalizadora.
- c)** Las cuentas de balance deberán reconocerse en la contabilidad del periodo ordinario 2019 una vez concluida la precampaña y acreditarse con la documentación soporte y muestras respectivas. Las disposiciones de este Acuerdo no eximen a los partidos de la obligación de reportar los ingresos y gastos de precampaña en el informe anual 2019. Por ello, dichas contabilidades al ser detectadas en precampaña, y que de ellas emanen saldos que correspondan a operación ordinaria, deberán traspasarse al gasto ordinario.
- d)** La revisión de los informes de precampaña que presenten los partidos políticos a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de sus precandidatos, se deberá realizar con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE.
- e)** Los sujetos obligados no podrán bajo ninguna circunstancia presentar nuevas versiones de los informes sin previo requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Los cambios o modificaciones a los informes presentados sólo podrán ser resultado de la solicitud de ajuste notificados por la autoridad, los cuales serán presentados en los mismos medios que el primer informe.
- f)** La notificación de los oficios de errores y omisiones se realizará a través del Sistema Integral de Fiscalización y para el caso de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, se deberá mandar copia al Comité Ejecutivo Nacional. La notificación se realizará a los representantes de finanzas del CEN o del CEE u órgano equivalente, según corresponda, que estén registrados en el SIF. A fin de actualizar la información del sistema, tanto los Partidos Políticos Nacionales como los partidos políticos locales

deberán informar a la Unidad Técnica los nombres completos, dirección y teléfono de sus responsables financieros, dentro de los 5 días posteriores a la aprobación del presente Acuerdo. Tratándose de las representaciones locales de partidos nacionales, será el responsable de finanzas del CEN quien, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 40 del reglamento de fiscalización, actualice en el SIF los datos de sus responsables de finanzas estatales.

- g) En el caso de intermitencias en la operación del Sistema Integral de Fiscalización, se deberá atender a lo dispuesto en el Plan de Contingencia del sistema definido por el Instituto, documento en el cual se detallará el procedimiento para realizar los reportes de errores y el medio de atención por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización.

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRECAMPAÑA

Artículo 10. Los precandidatos, incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE. Se deberá presentar un informe por precandidato.

Artículo 11. Derivado de la revisión de ingresos y gastos de precampañas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los dictámenes y resoluciones, respecto de los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019, que se celebren en cada entidad federativa.

Artículo 12. Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos a la fiscalización de los informes de precampaña y se hayan determinado sanciones económicas tanto a partidos políticos, como a precandidatos según corresponda, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se informará a los Organismos Públicos Locales electorales, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen la retención de las ministraciones o el cobro de las sanciones impuestas.

Artículo 13. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como las reglas locales vigentes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo que no se opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de Fiscalización, en cuyo caso prevalecerán las Leyes Generales y el Reglamento de Fiscalización.

Artículo 14. Los servidores públicos que busquen reelegirse a través de un partido político, de conformidad con los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la carta magna, no podrán utilizar recursos financieros, materiales y humanos de carácter público para hacer promover la candidatura de su partido, ni hacer tareas de proselitismo o realizar propaganda de carácter institucional en la que se promoció su nombre, imagen, voz o símbolo. Los recursos públicos ejercidos en contravención del párrafo anterior, se considerarán una aportación de ente prohibido.

Artículo 15. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o en su conjunto, superiores a los \$240,000.00, se hará del conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso de que el monto de aportación no corresponda con la capacidad económica del donante, para fines electorales se analizará como posible aportación de un ente prohibido. La determinación emitida por las referidas autoridades deberá hacerse del conocimiento de la autoridad electoral a la brevedad para que en caso de no existir correspondencia entre el origen y destino del recurso se sancione a los sujetos obligados implicados por la aportación de persona no identificada.

SEGUNDO. Queda estrictamente prohibido para los sujetos obligados el recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, en el entendido que en múltiples antecedentes se ha establecido, que la persona física con actividad empresarial encuadra en el concepto “empresa mexicana con actividad mercantil” y, por ende, en la prohibición prevista los artículos 401, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 54, de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, del Reglamento de Fiscalización toda vez que su actividad es comercial, y se considera con fines de lucro.

TERCERO. El contenido del presente Acuerdo será vigente para las precampañas electorales que desarrollen sus actividades en los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como de aquellos procesos extraordinarios que se deriven.

CUARTO. La Unidad Técnica de Fiscalización presentará a la Comisión de Fiscalización para su aprobación un programa de trabajo de la fiscalización de los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas, y campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos y candidatos, en la implementación del presente Acuerdo, el cual difundirá entre los sujetos obligados.

QUINTO. La Unidad Técnica de Fiscalización emitirá los procedimientos y manuales para la asignación de cuentas de acceso, así como para el uso y operación del módulo de Precampaña del Sistema de Contabilidad en Línea.

SEXTO. Con la aprobación del presente Acuerdo, se da cumplimiento al artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que respecta a las precampañas correspondientes a los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como de aquellos procesos extraordinarios que se deriven.

SÉPTIMO. Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de Fiscalización.

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, notifique a los Organismos Públicos Locales y a su vez estén en condiciones de notificar a los partidos políticos locales y sujetos obligados que desarrollen sus actividades de precampaña en los Procesos Electorales Locales 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Por favor, sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, asimismo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las consultas planteadas por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional y por el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Primero, estas consultas relacionadas con el pago anticipado de multas, el cálculo de remanentes del ejercicio ordinario de los partidos políticos en oposición al de gastos de campaña, la Comisión de Fiscalización por unanimidad decidió traer las respuestas al Consejo General por la relevancia de las respuestas que se está proponiendo a las consultas de los partidos políticos, donde están implícitos criterios generales que tienen que ver con la contabilidad ordinaria de los partidos políticos, relacionado con el cálculo de los remanentes. _____

La pregunta formulada por el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, tiene directamente que ver con el uso de recursos ordinarios de los partidos políticos, para el pago anticipado de multas que han sido impuestas por autoridades electorales, ya sea locales que es el caso, o federales que en la respuesta también que se propone también se incluye un criterio respecto a las federales. _____

Las 2 preguntas, la del Partido Acción Nacional que es un poco más compleja, incluye la pregunta sobre la posibilidad de hacer reservas en los términos de sus propios Estatutos; las 2 respuestas que se proponen responden a una misma lógica que busca, por un lado, definir cómo se calculan los remanentes, y por otro lado, promover el comportamiento financiero responsable de los partidos políticos _____

Hasta ahora, este Consejo General había emitido criterios respecto al cálculo de los remanentes en el caso del financiamiento público de campañas, esa contabilidad es una contabilidad relativamente sencilla porque es una contabilidad de flujo de efectivo, y en su momento la Comisión de Fiscalización y este Consejo General definieron qué hacer cuando al cierre quedaran cuentas por cobrar o liquidar, cómo se calculaban los remanentes y cuál era el plazo para la liquidación de estos pasivos, estas obligaciones con proveedores, principalmente. _____

En el caso del financiamiento ordinario, el cálculo de los remanentes es un poco más complejo, porque es un cálculo que no solamente tiene que ver con el flujo de efectivo dirigido a actos de campaña o propaganda de campaña, y el restante o el excedente que se tiene que regresar. _____

Los partidos políticos traen una balanza compuesta de activos y pasivos, y que el financiamiento anual que reciben puede dirigirse hacia la cancelación de pasivos, utilizar los potenciales remanentes para cancelar pasivos, adelantar pagos a esos pasivos, incluyendo entre ellos los pasivos fiscales que se derivan de multas impuestas por autoridades electorales, que ya están firmes. _____

Una parte de la respuesta tiene que ver con aquellas multas que aún no han sido confirmadas por el Tribunal Electoral, ése es un pasivo contingente. Aún no forma parte de la balanza de los partidos, la instrucción es mantenerla en una cuenta de orden y no pueden utilizarse recursos del financiamiento ordinario para el pago, para hacer reservas en caso de que se confirmara esa multa. Eso forma parte de la respuesta, pero el financiamiento ordinario se puede utilizar para cancelar pasivos con bancos, por ejemplo, deuda bancaria con coto financiero, se puede utilizar para cancelar pasivos con proveedores, cuentas por cobrar que pueden tener costo

financiero o no tener costo financiero y por supuesto también se puede utilizar para pagar de forma adelantada deudas que se tengan por concepto de multas impuestas por autoridades electorales, cuando éstas ya están firmes._____

Parte de las preguntas que formula el Partido Acción Nacional, tienen que ver con la posibilidad de hacer reservas para fondear con financiamiento ordinario el gasto de campañas que se van a realizar más adelante, el criterio de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica que se propone de este Consejo General es que esas reservas se pueden hacer pero se tienen que ejercer dentro del año fiscal o dentro del ejercicio y no se pueden transferir de un ejercicio a otro, la respuesta va en ese sentido porque ése es el criterio que estableció la Sala Superior en el momento en que dictó la sentencia donde definió que la devolución de los remanentes es una obligación de los partidos políticos porque esos recursos se les otorga con el propósito de destinarlos a los fines que tienen los partidos políticos._____

La clave para entender la respuesta y sus implicaciones para las finanzas de los partidos políticos, es que haya un criterio de anualidad y que el ejercicio tiene que realizarse dentro de ese periodo establecido por toda la normatividad en materia de fiscalización y de forma responsable los partidos políticos pueden utilizar estos recursos para desendeudarse, ir cancelando pasivos que se vienen acumulando con el paso del tiempo, disminuir el costo financiero de esos pasivos e incluso hacer vía fideicomisos destinar esos recursos a fines específicos y vigilados por un fiduciario.____

Es todo Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Muchas gracias. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif._____

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Obdulio Ávila Mayo, representante del Partido Acción Nacional._____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Muchas gracias, Consejero Presidiendo en funciones._____

Es de explorado derecho que el artículo 41, base V, apartado B, penúltimo y últimos párrafos de la Constitución Federal, establece que este Consejo General del Instituto Nacional Electoral le corresponde la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las campañas de los candidatos en los procesos electorales, federales y estatales. _____

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos de su competencia. ____

En atención al Proyecto de respuesta que se somete al Pleno sobre la consulta que hace la Tesorería del Partido Acción Nacional sobre considerar un monto en la reserva para el pago de sanciones, y más allá de lo argüido en el Proyecto de respuesta. Me permito hacer un llamado sobre el fondo del asunto planteado a una reflexión conjunta y profunda de este Consejo General respecto a la reglamentación que en materia de fiscalización nos hemos impuesto. _____

Los partidos políticos hemos realizado grandes esfuerzos para dar cabal cumplimiento a las obligaciones y aun así hay procesos que seguimos padeciendo tanto de la autoridad electoral, como de los propios sujetos obligados. _____

Por ello, estimamos que deben procesarse nuestras discrepancias en un análisis que nos permita simplificar al Reglamento de Fiscalización para mejorar la eficacia de su cumplimiento. _____

Desde nuestra visión debemos avanzar en ajustar y revisar en mesas de trabajo el cómo podemos cumplir las reglas de forma eficaz, que el Sistema Integral de Fiscalización sea una herramienta de apoyo, menos compleja, es decir, debemos encontrar la manera de cómo cumplir la normatividad al pie de la letra, pues a pesar de los esfuerzos seguimos siendo sancionados por cuestiones ajenas a la transparencia de los ingresos y gastos de los recursos. _____

En síntesis, honorable Pleno, apremia una mesa de revisión del Reglamento de Fiscalización. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Sobre este mismo tema consideramos pertinente que se emitan los Lineamientos respecto al reintegro de los remanentes de los partidos políticos del Proceso Electoral del 2017 al 2018, con la finalidad de que se regule el procedimiento para reintegrarlos. Lo anterior toda vez que a la fecha únicamente se cuenta con el Acuerdo INE-471/2016 que regula el reintegro de remanentes de las campañas electorales del año 2015 y del año 2016. _____

Que en el Acuerdo que se emita se establezca alguna posibilidad para que con el remanente del Proceso Electoral del 2017 y el 2018, se puedan cumplir obligaciones derivadas de las sanciones de dicho Proceso Electoral, y que permitan la viabilidad financiera de los institutos políticos. _____

Lo anterior como se planteó en la mesa de trabajo realizada el lunes 17 de diciembre, presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, por supuesto ir por el rumbo de una construcción de una simplificación del Reglamento de Fiscalización para que sea perfectible como cualquier Reglamento, como cualquier Ley. _____

Y ahí mismo en esa reunión del 17 de diciembre pasado, nosotros tocando el principio de anualidad al que hace referencia el Consejero Electoral Benito Nacif, que también sea analizada la implementación de otras figuras utilizadas en la administración pública federal, como son los famosos ADEFAS, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, que puedan resultar aplicables de manera favorable para el tema de los remanentes, que es una inquietud generalizada en nuestros institutos políticos, además de otras. _____

Entonces, a mí me parece pertinente el que en estos días que aunque sean navideños podamos seguir trabajando, como decimos en mi tierra, “construyendo

adobes” para llegar con posturas muy sólidas y poder enriquecer todo este tema de los remanentes porque como también lo establecí en esa junta del 17 de este mes, la naturaleza del recurso público que se da a los partidos políticos:_____

Punto 1 para el funcionamiento ordinario, que es el más elevado, el más grande; punto 2 para campañas electorales; y el otro es el financiamiento especial para lo del 3 por ciento para todo lo que tiene que ver con eventos especiales y de capacitación política especialmente para las mujeres._____

Pero, en el caso de las campañas electorales, nosotros propusimos que el origen natural del recurso público que se aplica a las campañas y que por tal puede generar un remanente sea aplicado para una multa que sea origen de las mismas campañas políticas, entonces no se está cambiando la naturaleza del recurso, finalmente todos los recursos son públicos, pero si lo que el Tribunal Electoral o esta autoridad considera que no se puede aplicar de lo ordinario por ser de campaña electoral, pues lo que el remanente de la campaña electoral vaya a cubrir sea una sanción de cualquier campaña electoral, y ayuda a los partidos políticos financieramente hablando. Muchas gracias._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora representante._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente._____

Quiero expresar mi disposición y entiendo que puede ser compartida por más colegas, para hacer una revisión del Reglamento de Fiscalización, la hemos hecho de manera periódica después de cada Proceso Electoral vemos qué puede mejorarse._____

Y la experiencia es que entre mayores sean las facilidades para rendir cuentas, también es mayor el cumplimiento de las obligaciones, nos ocurrió con el tema de representantes de los partidos políticos en las mesas de casillas, entonces cuenten con esa disposición._____

También estamos nosotros analizando la posibilidad de mejorar el Sistema Integral de Fiscalización para simplificar el trabajo, como bien se dice, llevar a cabo la fiscalización implica mucho trabajo para los sujetos obligados y para la autoridad electoral, entonces todo lo que se pueda avanzar, es bienvenido, y estaremos, muy atentos a sus sugerencias, supongo que el Consejero Electoral Benito Nacif que ahora preside la Comisión de Fiscalización nos convocará. _____

Ahora, sobre el Proyecto de Resolución en concreto, el cual respaldo, quiero decir que este tema de los remanentes se debe a una decisión externa al Instituto Nacional Electoral. _____

El Instituto Nacional Electoral en ningún momento planteó que los partidos políticos con su financiamiento ordinario, no tuvieran derecho a ahorros. Habíamos sí avanzado también por determinación del Tribunal Electoral, en la definición de que los remanentes del financiamiento que va etiquetado a gasto de campaña, se reintegraran a la Hacienda respectiva, pero después tuvimos una sentencia que nos llevó a tener que hacer unos Lineamientos para definir qué sería entendido como remanente, e incluso ahí se abrió la posibilidad de que se crearan algunos Fideicomisos para hacer frente a pasivos laborales, para poder construir infraestructura, bienes inmuebles. _____

El sentido del Proyecto de Resolución es básicamente reiterar que los partidos políticos pueden usar sus recursos en un ejercicio para cubrir los pasivos, y si lo quieren hacer de forma adelantada está bien. Decía en la Comisión de Fiscalización que nosotros no vamos a tener la conducta que antes había en el Sistema Bancario donde se penalizaba a quien adelantaba pagos, para salir de una deuda. No somos eso. _____

También, aprovechamos para dejar claro a los Organismos Públicos Locales, porque nos lo preguntan una y otra vez, si pueden modificar los plazos para las sanciones, que el Consejo General como autoridad única en materia de fiscalización pone a los partidos políticos. Los Organismos Públicos Locales solo son ejecutores de las sanciones. _____

Ahora bien, qué pasa si un partido político en alguna entidad quiere salir de la sanción antes y usar sus propios recursos para cubrir la multa correspondiente, y después ya seguir recibiendo su financiamiento sin retenciones, eso sí se puede hacer, pero lo que no puede hacer el Organismo Público Local es alargar, prolongar plazos que ya van tanto en la Resolución que vota este Consejo General, como en las sentencias cuando ya quedan firmes. _____

Y ahí no solo se estaría yendo en contra de la decisión de esta autoridad, sino incluso de sentencias del Tribunal Electoral, lo cual es más delicado, entonces, que quede claro a los Organismos Públicos Locales que no está en el ámbito de su decisión, estar ofreciendo u obsequiando plazos distintos a los que están establecidos en sentencias del Tribunal Electoral. _____

Hay otro tema que tocaba la representante del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que ver con los remanentes de campaña, y tiene usted razón en que debemos de dar claridad, entiendo que en el mes de enero próximo, estaremos en condiciones de notificar los montos y de trazar la ruta que, en parte está ya prevista en el artículo 222 Bis del propio Reglamento de Fiscalización, pero es necesario aterrizarla, conversar con ustedes una vez que se notifiquen estos montos, el Acuerdo tiene que pasar por la Comisión de Fiscalización y si bien, los partidos políticos no forman parte de la misma, también creo que ha sido una parte que no vamos a abandonar que es la de conversar estos asuntos en Grupo de Trabajo con los propios partidos políticos. _____

Así que, este Acuerdo creo que da certeza sobre un asunto, que insisto, nos cayó externamente, nosotros no dijimos que los partidos políticos no pudieran usar sus economías para prepararse con procesos electorales futuros, etcétera, el Financiamiento Público de los partidos políticos es de los partidos políticos, por no hablar del privado también y entonces, tratarlos como si fueran parte de la Administración Pública y creer que lo que no se gastan es equivalente a un subejercicio, es una decisión que no comparto, pero que nos fue impuesta por la autoridad que estamos obligados a acatar. _____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente. _____

Me parece que sin duda este es el principio de lo que terminará siendo la atención a varias consultas o preocupaciones o peticiones que desde hace ya un par de meses tal vez, nos han formulado los partidos políticos en las distintas mesas que se han realizado, incluso cuando se celebró la primera mesa de trabajo en torno a las afiliaciones indebidas, al tema de cómo regularizar el Padrón de Afiliaciones, ya ahí mismo se empezaron a plantear algunas preocupaciones o sugerencias de solución similares a las que en algunos de los casos están en las consultas que al día de hoy estamos respondiendo. _____

Hay un punto que creo que hay una gran coincidencia, no estoy segura si es absolutamente unánime, pero al menos es muy coincidente la postura de todos los integrantes del Consejo General, que es, ninguno habíamos planteado que los remanentes se hicieran respecto a ordinario. _____

Habemos, al menos algunos de nosotros, que sí votamos a favor de que se hicieran los remanentes de campaña, pero el financiamiento de campaña y el financiamiento ordinario son 2 financiamientos muy distintos que tienen 2 naturalezas muy distintas y que tienen 2 finalidades muy distintas, precisamente por las características específicas del de campaña, hubo quienes votamos porque sí se debía de devolver lo que no había sido erogado, sin embargo, nunca se hizo un planteamiento en torno a esa misma condición en gasto ordinario, porque eso me parece que atenta contra la lógica misma de no solamente cómo operan los partidos políticos, sino cómo se les ha permitido operar, digamos, ¿y a qué me refiero con esto?, si nos vamos a poner así de cuidadosos con que las cosas sean exactamente en esos términos, bueno entonces por qué puede haber transferencias federales a lo local. _____

Si nos vamos a poner de esa forma, por qué pueden prorratar gastos en una campaña Federal con una campaña Local. No, no nada más entre campañas federales, porque los recursos se entregan a federales o los recursos se entregan a locales, ¿cómo pueden compartir gastos entre Federal y entre Local? _____

Pero, entonces dónde viene la lógica de que pueden decidir este año, el año próximo se puede decidir algún partido político que destina el 90 por ciento de su financiamiento a la elección de Baja California, ¿y el 10 por ciento a las otras 4? y, sin embargo, no va a poder hacer eso con Nayarit del siguiente año, porque resulta que está en el siguiente año calendario; pero mientras se hayan mantenido dentro del mismo año calendario, sí se va a poder distribuir como se quiera. _____

Parece un tanto absurdo, esto es lo que no se limitaba al momento de permitir hacer ahorros, el no exigir el remanente del financiamiento ordinario permitía que se hicieran ahorros también a partir de las distintas condiciones presupuestales que se tienen no solo a nivel Federal entre los partidos políticos, sino que un propio partido político puede tener a nivel Local en distintas entidades con un nivel de competitividad mayor o menor en distintas entidades. _____

Y me parece que la decisión del Tribunal Electoral un poco no reconoce cuál es la naturaleza y cuáles son las finalidades de los partidos políticos, y no reconoce la naturaleza o la razón de ser para haber incorporado el principio de Financiamiento Público a la Constitución Política, que es una medida para generar condiciones de competencia en los distintos partidos políticos, una medida de condiciones de equidad. _____

Estando en desacuerdo con este principio, lo que tenemos es establecer reglas que no contravengan una orden que recibimos de la Sala Superior, la Sala Superior estableció que se tenían que regresar los remanentes, que sí tenemos que hacer un cálculo de esa naturaleza, estas reglas se tienen que abrir con una racionalidad, ¿acorde a lo que nos están ordenando?, me parece que sí, pero no pueden ir más allá de lo que nos están ordenando, no pueden ir más allá de las reglas mismas del Sistema. _____

En principio no me parece que se pueda establecer como un efecto del financiamiento de campaña el pago de multas de campaña, creo que exactamente es la diferencia entre las naturalezas de un financiamiento y de otro. _____

Sin embargo, creo que lo que se está aprobando en estas respuestas sí es acorde a la propia finalidad, siempre generará un poco de extrañeza que se habla de que no se tienen recursos, y lo que se está pensando son los remanentes de los recursos, siempre causará un poco de extrañeza. _____

Con independencia de eso si los partidos políticos desean emplear para gastos que ya erogaron en ese año, es decir, pagar la multa, no planeo para una multa que capaz voy a pagar el año próximo o que capaz me van a imponer el año próximo; porque también tiene que ver con la propia naturaleza del cobro de sanciones que estableció el Tribunal Electoral. _____

Aquí al menos mayoritariamente este Consejo General cuando se instauró el Instituto Nacional Electoral, al poco tiempo que se instauró el Instituto Nacional Electoral, de las primeras decisiones que adoptamos si no me falla la memoria fue por mayoría, fue que el cobro de las multas en fiscalización fuera de inmediato, es decir, se impone la sanción y se cobra, con independencia de que se establezca algún medio de impugnación, ¿bajo qué lógica? bajo la lógica que la propia Constitución Política establece que los medios de impugnación no causan una suspensión respecto del acto que se impugna, bajo esa lógica, por supuesto, cualquier multa que se impusiera podría estarse pagando en ese momento, de inmediato, el problema es que el Tribunal Electoral también dijo que eso no se podía, que no podíamos imponer una multa hasta que no estuviera firme, y es un criterio que se ha aplicado en fiscalización, en quejas en las distintas áreas, a determinación del propio Tribunal Electoral. _____

Entonces, creo que si bien estoy de acuerdo en que vale la pena tener un conjunto de pláticas para ver si hay otros mecanismos que se pueden implementar o no, lo que no podemos perder de vista es las reglas básicas que nos ha establecido el Tribunal Electoral y que en ciertos casos como estos no son criterios, sino son órdenes para

casos específicos y que tenemos que cumplir con ellas en esos términos, y por otra parte, la naturaleza misma del Sistema para no desvirtuarlo en aras de obtener un resultado; creo que eso se logra con la respuesta que el día de hoy se está dando, sí se logra este equilibrio para que no violentemos el propio Modelo pero demos oportunidad a que los partidos políticos, si esa es su decisión pagar alguna multa en el año calendario previo a que se cierre la cortinilla para efectos de determinar si hay o no hay remanentes, por supuesto que lo pueda llevar a cabo._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

De manera muy breve, solo para referirme a algunos de los aspectos que se han mencionado aquí, y quisiera aludir un poco a la intervención del ciudadano Obdulio Ávila, representante del Partido Acción Nacional; hay un tema que a mí me parece que es importante que revisemos en este nuevo esquema que hemos estado aplicando los Consejeros Electorales con los partidos políticos, en el sentido de sentarnos a revisar estructuralmente qué está pasando con algunos de los temas que llevan finalmente a que la institución imponga ciertas sanciones a los partidos políticos, señaladamente, el caso de las afiliaciones indebidas, señaladamente este tema de los remanentes que los partidos políticos eventualmente podrían tener, aquí en las respuestas estamos manejando la idea de que el remanente evidentemente es un tema que se refiere a los sobrantes del ejercicio del gasto ordinario que tienen los partidos políticos y que por consecuencia ése no se va a poder utilizar, sino se tendrá que devolver, pero obviamente antes de que eso ocurra, los partidos políticos pueden canalizar sus recursos para todo lo que sea necesario tratándose de multas o de otros compromisos que tengan los partidos políticos._____

Pero, hay un punto que es de fundamental importancia, creo que vale la pena que en alguna reunión de trabajo que tengamos a través de la Comisión de Fiscalización o alguna otra, podamos revisar con mucho cuidado los conceptos de las multas a los cuales los partidos políticos se hace acreedores cuando hay ciertas infracciones a la normativa electoral. _____

Un caso concreto en materia de fiscalización ha sido que durante las campañas electorales hay ciertos retrasos para presentar la información comprobatoria de los ingresos o de los egresos de los partidos políticos en el Sistema Integral de Fiscalización, ¿qué significa esto? que en el Reglamento hemos colocado la norma de que dentro de los 3 días posteriores a la realización de una cierta operación, se tiene que presentar la comprobación correspondiente en el Sistema de Fiscalización. Y esta cuestión a veces no ocurre, de hecho, ha sido, particularmente en los últimos 2 años uno de los temas que mayores multas le ha colocado al partido político, es decir, hay cierto incumplimiento con algunas reglas, lo digo en términos absolutamente constructivos. _____

Creo que, vale la pena que nos sentemos a revisar esos puntos, y entonces cuando aquí se habla de que se pueda modificar el Reglamento de Fiscalización tengamos en consideración 2 elementos, una parte los compromisos concretos que los partidos políticos van a tener frente a cierto tipo de obligaciones que están establecidas en el Reglamento o en la legislación, y obviamente la forma en que el Instituto Nacional Electoral verá y desahogará los procedimientos correspondientes. _____

Hemos construido, por ejemplo, un esquema específico para la recuperación de los cuadernillos de los Listados Nominales de electores que se entregan a los partidos políticos en las Mesas Directivas de Casilla, y que también por mandato específico de los Acuerdos de este Consejo General deben ser devueltos. _____

Ahora hay modalidades, a la conclusión de los trabajos de la Mesa Directiva de Casilla, o bien, dentro de los 10 días posteriores. _____

En una reunión que recientemente tuvimos con la Comisión Nacional de Vigilancia, me decía la representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Nacional de Vigilancia, que ustedes han tomado la determinación de que los cuadernillos se quedan para hacer un conjunto de actividades del partido político desde, digamos así, instancias centrales de los partidos políticos, del partido político, y no se distribuyan a las Mesas Directivas. Eso eventualmente facilitaría la devolución de los cuadernillos. Sin embargo, en algunos Comités Directivos no se ha concretado todavía la entrega total de esos cuadernillos. _____

Pero, sí debo reconocer que entre autoridades y partidos políticos hemos logrado una recuperación superior al 80 por ciento de esos cuadernillos, con lo cual el reporte que tenían, había entidades federativas donde no se había devuelto un solo cuadernillo por ningún partido político. _____

Tener hoy día un promedio de 80 por ciento en la recuperación de los cuadernillos, me parece que es verdaderamente halagüeño. _____

Entonces, estaría de acuerdo en que generemos algún esquema de trabajo para revisar temas del Reglamento de Fiscalización y de otros, pero en esa perspectiva que realmente sea constructiva, porque al final de cuentas ustedes tienen una representación legítima de los partidos políticos y cuidan los intereses de los partidos políticos que representan, pero nosotros representamos a la autoridad electoral en esta materia, y por supuesto que también tenemos, no les diré a ustedes que gusto en establecer las sanciones, sino la obligación de hacerlo cuando hay infracciones a las normas. _____

Entonces, si podemos llevar las cosas en un esquema mucho más ordenado entre los partidos políticos y la autoridad electoral, yo creo que eso no vulnera absolutamente ninguna regla, me parece que es un esquema que podemos transitar de manera adecuada, y vuelvo a insistir, hay varios puntos que recientemente han venido demostrando la actitud que tiene la institución de poder contribuir en esa parte. _____

Este tema del financiamiento de los llamado remanentes del financiamiento ordinario, me da la impresión de que se establece con toda claridad que simplemente ustedes pueden gastar el dinero de cada ejercicio como lo consideren pertinente, esa parte es así mientras sea obviamente para los efectos y los objetos del partido político como está establecido en la legislación. _____

Si tienen comprometidas cantidades por multas o por compromisos con terceros, es un hecho que lo pueden aplicar para disminuir. _____

Alguien había propuesto la posibilidad de que se pudieran separar algunas cantidades para la eventualidad de multas por procedimientos que ya estén en etapa de Resolución por el Tribunal Electoral, pero eso lleva a muchas complicaciones al propio partido político, porque eventualmente tendríamos que hacer una separación con una expectativa de tiempo incierta. _____

Si el Tribunal Electoral decide, por ejemplo, que un procedimiento que está ahora en etapa de Resolución no lo resuelve en enero, sino hasta marzo o abril del año que sigue, porque no hay un plazo específico que se pueda observar, imagínense ustedes retener esas cantidades cuando la obligación es regresarlo porque lamentablemente la decisión del Tribunal Electoral sí los convirtió toda proporción guardada en una especie de entidad de la administración pública en esa materia, porque tienen que regresar el dinero, entonces mejor utilícenlo en otro tipo de compromisos donde ya existen obligaciones concretas de los partidos políticos. _____

Entonces, insisto, estamos en la lógica de poder revisar estos aspectos, creo que también a la autoridad le agilizaría mucho el trabajo en la materia de fiscalización, en los procedimientos ordinarios, en una serie de cuestiones que vinculan al Instituto con los partidos políticos. _____

Entonces, me sumo a la idea de que podamos revisar estas cuestiones, pero con una mirada en la cual cada quien asuma la parte que le toca, a los partidos políticos, las obligaciones que les tocan y obviamente a la autoridad en el ánimo constructivo de mejorar las condiciones. _____

El Reglamento de Fiscalización es mucho más grande, por ejemplo, que la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones es mucho más grande que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces hemos llegado por la vía de la facultad reglamentaria del Instituto a construir una especie, déjenme ponerle comillas para que aquí los juristas no me vayan a regañar, pero es una especie de leyes adjetivas, toda proporción guardada, insisto, pero aquí está la mejor disposición de la institución para que podamos avanzar en estos temas y generar condiciones que a ustedes les permitan cumplir con sus obligaciones, pero también la parte nuestra que quede perfectamente a salvo. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. _____

Nada más para dejar claro el compromiso de convocar a las representaciones de los partidos políticos, particularmente a sus áreas de finanzas para escuchar sus propuestas, observaciones respecto al Reglamento y otros temas que relacionados con la fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos políticos. Creo que, estaremos convocando en el mes de enero próximo a nuestra primera reunión, y que sea esto parte de un diálogo y una conversación que mantengamos regularmente en relación a la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, que es un tema que creo que amerita estar, teniendo este intercambio a partir de la experiencia de los partidos políticos y la experiencia de la autoridad fiscalizadora que es el Instituto Nacional Electoral. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante suplente del Partido Acción Nacional._____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente._____

Consejero Presidente solo para agradecer la buena recepción de la propuesta que realizan los Consejeros Electorales Benito Nacif, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños, y solamente esperaríamos el señalamiento de la fecha en el mes de enero para poder iniciar estas reuniones de trabajo y no hago omisión de que por supuesto lo haremos asumiendo cada uno en el marco de nuestras responsabilidades, cualquier propuesta de revisión reglamentaria._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación que corresponde._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el punto 21, tomando en consideración la fe de errata circulada previamente._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1496/2018) Pto. 21_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE DA RESPUESTA A LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR EL DR. OMAR FRANCISCO GUDIÑO MAGAÑA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y POR EL MTRO. MAURICIO ENRIQUE GUZMÁN YÁÑEZ, CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A N T E C E D E N T E S

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V apartado B, penúltimo y último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de los candidatos.
- III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

- IV. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.
- V. En sesión extraordinaria celebrada el 6 de junio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG45/2014, se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
- VI. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 12 de septiembre de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG1305/2018 por el que se modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros Órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y, de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto. En el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Ciro Murayama Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández.
- VII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP-639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

- VIII. Que el 15 de marzo de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.
- IX. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 11 de mayo de 2018, se aprobó el Acuerdo INE/CG459/2018, por el cual se emiten Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- X. El 18 de octubre y 22 de noviembre del presente año del presente año, se recibió el oficio número TESO/179/18, signado por el C. Edgar Mohar Kuri, del Partido Acción Nacional, y el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Tesorero Nacional y Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional respectivamente, mediante los cuales realizan una consulta sobre el tratamiento que se otorgará a los fondos previstos en los artículos 10,13,inciso c), 16, 18 y 21 del Reglamento para la administración del financiamiento del Partido Acción Nacional con la finalidad de que se informe si los mismos pueden ser considerados “reservas” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, inciso I) y 12 del mencionado Acuerdo INE/CG459/2018.

El día 22 de noviembre del presente año, se recibió el oficio número TESO/204/18, signado por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional, realiza una segunda consulta a efecto de que se informe si la provisión que determina la NIF C-9, para el caso de reintegrar el remanente aprobado en el Acuerdo INE/CG459/2018 puede calcularse con las sanciones asignadas al ejercicio fiscal inmediato anterior y/o del remanente reintegrado por los sujetos obligados.

- XI. El 04 de diciembre del presente año, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/STCVOPL/823/2018, mediante el cual se remite una consulta del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, formulada mediante el diverso P/0299/2018, en la cual solicita se informe si es posible efectuar el pago anticipado de las sanciones económicas.
- XII. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de Acuerdo, que fue aprobado en la Sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Ciro Murayama Rendón, así como y el Consejero Presidente de la Comisión Dr. Benito Nacif Hernández.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.
3. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Comisión Fiscalización tendrá como facultad el resolver las consultas que realicen los partidos políticos.

6. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
7. Que el artículo 199, numeral 1, inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá, proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas.
8. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.
9. Que el artículo 16, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, dispone que, si la Comisión de Fiscalización advierte que la respuesta a la consulta implica criterios de interpretación del Reglamento; o bien, si la Unidad Técnica propone un cambio de criterio a los establecidos previamente por la Comisión, tendrá diez días a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta o de concluido el plazo para subsanar los requisitos omitidos, para remitir el proyecto de respuesta a la Comisión para que ésta resuelva lo conducente en la sesión respectiva.
10. Que el artículo 16, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, dispone que, si la consulta involucra la emisión de respuesta con aplicación de carácter obligatorio o en su caso, se emitan normas para los sujetos obligados, tendrá diez días para a partir del día siguiente al de la recepción para remitir el proyecto de respuesta a la Comisión para efectos de que esta lo someta a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General.
11. Que, considerando la naturaleza de la fiscalización, el momento procesal oportuno para realizar el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación y, en el caso local, a su similar, es una vez que haya causado estado el Dictamen Consolidado.

12. Que el Consejo General determina que las normas son aplicables a todos los partidos políticos, así como la utilización de los medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos previstos y que es aplicable la normatividad y al procedimiento para la presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos, de conformidad con los plazos y procedimientos de revisión contemplados en la Ley General de Partidos Políticos, en el Reglamento de Fiscalización y en el Manual General de Contabilidad.
13. Que la Norma de Información Financiera (NIF) C-9 establece las normas para el reconocimiento contable de las provisiones en los estados financieros, distinguiéndolas del resto de los pasivos por la existencia de incertidumbre acerca del momento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su liquidación.
14. Que la NIF D-3 establece las normas para el reconocimiento y valuación de provisiones por concepto de beneficios que la entidad otorga a sus empleados (pasivo laboral).
15. Que la NIF D-5 señala las normas para la valuación, presentación y revelación de los arrendamientos en los estados financieros de una entidad a fin de evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de una entidad.
16. Que los sujetos obligados voluntariamente pueden realizar el pago de manera anticipada de todas las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; precisando que las sanciones económicas que han sido impuestas, pero no fueron impugnadas, así como aquellas que, habiendo sido impugnadas, hayan sido confirmadas o modificadas por la autoridad jurisdiccional, deberán ser registradas por los sujetos obligados como cuentas por pagar en el rubro de pasivos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base V, apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 16, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da respuesta al Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional, en los términos siguientes:

Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña.
Encargado del Despacho de la Tesorería
Nacional del Partido Acción Nacional

Presente

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se da respuesta a los oficios número TESO/179/18, TESO/203/18 y TESO/204/18, mismos que son del tenor siguiente:

TESO/179/18 y TESO/204/18

“¿Los fondos previstos en los artículos 10, 13, inciso c), 16, 18 y 21 del Reglamento para la Administración del Financiamiento del Partido pueden ser considerados como “reservas”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, inciso I) y 12 del Acuerdo INE/CG459/2018?”

TESO/203/18

“¿la provisión que determina la NIF C-9 apartado 41.17 y 41.18 en relación con los artículos 2, inciso I), para el caso de reintegrar el remanente aprobado en el Acuerdo INE/CG459/2018 puede calcularse con las sanciones asignadas al ejercicio fiscal inmediato anterior; y/o del remanente reintegrado por los sujetos obligados en términos de los artículos 6 y 7 de dichos Lineamientos; los sujetos obligados puedan sufragar las multas que se generen dentro del ejercicio fiscal concluido, con la reserva correspondiente para efectos de no afectar al ejercicio en que quede firme multas de ejercicios anteriores?”

De la lectura integral a los escritos de consulta, esta Comisión de Fiscalización advierte que se solicita se le informen diversas cuestiones relacionadas con el procedimiento de reserva y/o provisión establecido en el Acuerdo INE/CG459/2018.

Atento a ello, con la finalidad de dar respuesta oportuna a la consulta planteada, se le informa que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG459/2018 por el que se emiten “Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores”, los fondos para contingencias y obligaciones se tratarán como reservas solo si serán destinadas para la adquisición y remodelación de inmuebles propios, para pasivos laborales y para contingencias, y se integraran de acuerdo a las NIF, C-9, para pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, D-3, para beneficio de los empleados y D-5, para arrendamiento.

En ese sentido, la autoridad reconoció en los Lineamientos la posibilidad de que los partidos políticos generaran reservas para 3 cuestiones:

1. Adquisición y remodelación de inmuebles propios.
2. Reservas para pasivos laborales.
3. Reservas para contingencias.

Conviene aclarar que de conformidad con la NIF A-5 “Elementos Básicos de los Estados Financieros” los pasivos se definen como una obligación presente, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a una entidad.

Si bien la NIF C-9 “Provisiones, Contingencias y Compromisos”, prevé la creación de provisiones por la existencia de incertidumbre sobre el importe a pagar y/o sobre el momento de su liquidación, es preciso señalar que para su reconocimiento y valuación deberán existir las siguientes condiciones:

- a. Existir una obligación presente (legal, contractual o asumida) como consecuencia de operaciones ocurridas en el pasado.
- b. Es probable que se presente una salida de recursos económicos.

- c. La obligación se puede cuantificar en términos monetarios de manera confiable.

En este sentido, el reconocimiento de una provisión es procedente cuando existe certeza razonable de la existencia de una obligación presente a la fecha del estado de situación financiera, lo que significa que, a esa fecha es probable que la entidad tenga que enfrentar la obligación presente. Y en los casos en que no pueda hacerse una estimación confiable, se estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento en los estados financieros de una entidad.

Respecto a los oficios TESO/179/18 y TESO/203/18, es importante señalar que, todo pasivo debe reconocerse como consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado; por lo tanto, aquellas obligaciones que se espera ocurran en el futuro no deben reconocerse como un pasivo, pues no han afectado económicamente a la entidad; por lo que una posible multa, que no ha sido generada, que no ha sido notificada, y que no puede ser cuantificable no debe reconocerse en los estados financieros en la medida en que todavía no se ha confirmado si la entidad tiene una obligación presente que suponga una salida de recursos económicos, al no estar generada no cumplen con los criterios de reconocimiento de las NIF porque no puede hacerse una estimación suficientemente confiable de la cuantía de la obligación.

Al respecto, es importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado el mismo criterio al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-140/2018 de fecha 27 de junio de 2018, en el cual señala que las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos no fueron parte de las excepciones a la devolución de remanentes que señaló la misma Sala Superior en el SUP-RAP-758/2017.

Así, en dicha ejecutoria se ordenó al Instituto Nacional Electoral establecer el procedimiento mediante el cual se devolverían los remanentes, para lo cual debía precisarse cómo se calcularía el monto a reintegrar, definiendo la fórmula para tal fin, así como plazos y las formas en que debían devolverse.

De igual forma, se definirían diversos conceptos, en torno a los cuales giraba la devolución de los remanentes, dentro de los cuales estaba el presupuesto devengado, por implicar una afectación al cálculo final de los recursos públicos no empleados.

Asimismo, se mencionó que dicho presupuesto devengado se trataba de obligaciones adquiridas por los partidos políticos a partir de operaciones no pagadas, así como de obligaciones legales, lo que debía tomarse en cuenta para garantizar los derechos de terceros frente a compromisos de pago adquiridos por los entes políticos.

Por lo tanto, resulta evidente que la Sala Superior en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-758/2017, no buscó que **las sanciones por imponerse en el futuro**, se pagarán con los recursos públicos del ejercicio respecto del cual se devolvería el remanente.

Así, no es posible considerar un monto en la reserva para el pago de sanciones argumentando que, en caso contrario, se encontraría en imposibilidad para hacerles frente; pues, debe tomarse en cuenta que de origen los partidos políticos tienen recursos para solventar dichas sanciones.

Lo anterior toda vez que adicionalmente al financiamiento público, los partidos tienen acceso al financiamiento privado que recaben a través de los distintos medios que permite la Ley General de Partidos Políticos, en tal sentido, se advierte que los partidos políticos pueden hacer frente a las sanciones que les son impuestas, independientemente de que se contemple un fondo de reserva o no, máxime que las mismas atienden a un ejercicio del *ius puniendi* del Estado, motivo por el cual, su pago no puede encontrarse inmerso como una garantía en su favor.

Esto es así ya que el fin último de las sanciones consiste en inhibir las conductas irregulares cometidas por los sujetos infractores por lo que no puede considerarse que exista algo similar a un derecho al pago de sanciones con financiamiento público, pues se parte de que los partidos ajustan su proceder al marco normativo que los regula, no sólo en la materia electoral, sino en aquellas en las que se encuentra inmerso su actuar.

Ahora bien, es importante señalar que el artículo 86 del reglamento de Fiscalización dispone que las sanciones económicas impugnadas por los sujetos obligados, pendientes de ser resueltas por el Tribunal, deberán ser registradas en cuentas de orden como contingencias, mientras que aquellas que han sido impuestas, pero no fueron impugnadas, deberán ser registradas como cuentas por pagar en el rubro de pasivos.

Lo anterior toda vez que, se consideran **contingentes** los activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros de la entidad, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia o, en su caso, la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad.

En consecuencia, una vez que el Tribunal resuelva los recursos de impugnación, si fuese confirmada se registrará como pasivo o si fuese favorable al sujeto obligado, se procederá a su cancelación, reversando el registro inicial.

Por lo que hace al oficio TESO/204/18, es necesario destacar que en el Acuerdo INE/CG459/2018, el Artículo 3 establece cómo se determina el Remanente de operación, a saber:

“Artículo 3. Para determinar el remanente del ejercicio ordinario federal o local se aplicará de manera específica lo siguiente, conforme a la balanza consolidada del ámbito federal o local, según sea el caso:

I. Remanente de operación ordinaria.

Financiamiento público para operación ordinaria.

(-) Gastos devengados a disminuir para efectos de remanente.

Gastos registrados en el SIF durante el ejercicio para operación ordinaria, incluyendo los de precampaña, actividades específicas y desarrollo del liderazgo político para las mujeres destinado del recurso de operación ordinaria.

(-) Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.

(-) Aportaciones en especie de militantes, simpatizantes y precandidatos.

(-) Gastos para actividades específicas o similares en el ámbito local, de recursos otorgados para ese fin, sin exceder el monto del financiamiento aprobado por el INE u OPLE.

(-) Pago de pasivos contraídos en ejercicios anteriores (2017 y anteriores) *

(-) Salidas de recursos no afectables en la cuenta de gastos.

(+) Pagos en el ejercicio de adquisición de activo fijo y activos intangibles.

(+) Pagos de bienes registrados en la cuenta Gastos por amortizar.

(+) Pagos de arrendamientos comprometidos.

(-) Egresos por transferencias en efectivo y en especie a campañas, o transferencias del ámbito federal (CEN o CDE) al local (CEE o CDM/CDD), y del local al federal, según sea el caso.

(-) Reservas para contingencias y obligaciones (NIF C-9, D-3 y D-5).

(+) Adquisición y remodelación de inmuebles propios.

(+) Reservas para pasivos laborales.

(+) Reservas para contingencias

(=) Déficit o remanente de la operación ordinaria con financiamiento público.

(+) Gastos no comprobados según Dictamen.

(-) Déficit de la operación ordinaria con financiamiento público del ejercicio anterior. **

(=) Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de operación ordinaria.

**** Esta disminución solo se aplicará para determinar el remanente del ejercicio 2018.***

***** Este concepto se aplicará para determinar el remanente del ejercicio 2019 y subsecuentes, siempre y cuando se haya presentado déficit de la operación de ordinario con financiamiento público en el ejercicio anterior.***

Para las reservas para contingencias y obligaciones, y las rentas comprometidas, los partidos políticos las deberán determinar, valorar y documentar debidamente, con base en las NIF C-9, D-3 y D-5.

II. Remanente de actividades específicas.

Financiamiento Público aprobado para actividades específicas o similar en el ámbito local.

(-) Gastos para actividades específicas o similar en el ámbito local

Gastos registrados en el ejercicio para actividades específicas o similar en el ámbito local hasta por el monto del FPAE o similar aprobado por el INE u OPLE

(=) Déficit o remanente de actividades específicas o similar en el ámbito local

(+) Gastos no comprobados Dictamen

(=) Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de actividades específicas o similar en el ámbito local

En el caso en el que se determine en el Dictamen que quedó firme, que el gasto no corresponde a Actividades Específicas y se debe reclasificar al Gasto Ordinario, se deberá disminuir del monto de “Gastos para actividades específicas o similar en el ámbito local” y sumar en el gasto ordinario para el cálculo del remanente de financiamiento público de ordinario.”

Por lo anterior el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización dispone que, si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad de los sujetos obligados, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías otorgadas.

Por último, el sujeto obligado deberá observar y aplicar lo dispuesto en el artículo 12 del citada Acuerdo INE/CG459/2018, en el cual se menciona que, respecto de las reservas para contingencias y obligaciones, los sujetos obligados deberán constituir fideicomisos e informarán de los mismos a la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro de los 10 días siguientes a que ocurra la constitución y/o modificaciones al contrato.

Por lo anteriormente expuesto, se informa que los fondos previstos en los artículos 10, 13, inciso c), 16, 18 y 21 del Reglamento para la Administración del Financiamiento del Partido Acción Nacional no pueden ser considerados como “reservas” en términos del Acuerdo INE/CG459/2018.

Por los argumentos expuestos anteriormente, se concluye lo siguiente:

1. Respecto a lo consultado mediante escritos TESO/179/18 y TESO/204/18, se le informa que los fondos previstos en los artículos 10, 13, inciso c), 16, 18 y 21 del Reglamento para la Administración del Financiamiento del Partido Acción Nacional no pueden ser considerados como “reservas”, porque éstas no representan obligaciones presentes que suponga una salida cierta de recursos económicos, y no puede hacerse una estimación suficientemente confiable de la cuantía de la obligación.

2. Respecto de la consulta planteada en el escrito TESO/203/18, se le informa que las posibles sanciones económicas que aún no han sido impuestas a los partidos políticos, no pueden ser cuantificables ni estimadas de manera confiable, por lo tanto, no deben reconocerse como pasivos en los estados financieros. Lo anterior, toda vez que no es posible confirmar si los institutos políticos tienen una obligación que implique la salida de recursos económicos.

Así mismo, se le informa que la creación de reservas para el pago de sanciones no encuadra en el supuesto de las provisiones del párrafo 41.17 de la NIF C-9, pues no existe una obligación presente, debido a que no ha ocurrido un evento pasado. Aunado a que en el caso concreto que plantea el Partido Acción Nacional, la posible obligación, es decir las sanciones derivadas de la revisión al Informe Anual no son independientes de las actuaciones futuras que este lleve a cabo para prevenirlas, ya que las infracciones se actualizan una vez agotadas las etapas del proceso de fiscalización, específicamente la garantía de audiencia mediante los oficios de errores y omisiones de primera y segunda vuelta.

Por lo que respecta a las sanciones económicas que han sido impuestas, pero fueron impugnadas y están pendientes de resolverse por el Tribunal Electoral, se deberán registrar como contingencias en cuentas de orden; en caso de que el Tribunal confirme la sanción, esta se registrará como pasivo, en caso contrario, se procederá a su cancelación.

SEGUNDO. Se da respuesta al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, en los términos siguientes:

Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez
Consejero Presidente del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato

Presente

Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 37 del Reglamento de Elecciones, se

da respuesta al oficio número P/0299/2018, mediante el cual realiza la siguiente consulta:

“Me permito hacer referencia a escrito signado por el licenciado Baltasar Zamudio Cortes, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, recibido en esta misma fecha, por medio del cual plantea lo siguiente:

1. Como es de su conocimiento, mediante Acuerdo INE/CG/120/2018 que fue notificado a mi representada el Instituto Nacional Electoral determinó la imposición de una multa derivado de las observaciones al gasto ejercido durante el Proceso Electoral 2018, mismo que en los términos del acuerdo CGIEEG/333/2018 del Instituto que usted preside, ya inició el proceso de cobro, habiendo deducido el monto de \$515,848.89 de la prerrogativa que corresponde al mes que corre, por lo que existe un saldo pendiente de \$1,837,685.92, para estar en condiciones de saldar el monto total de la multa impuesta.

2. Que, derivado de lo anterior, el instituto político que presido ha realizado gestiones administrativas y financieras que permitan tener solvencia para dar cumplimiento incluso anticipado al pago de las obligaciones impuestas, dejando a salvo el pago de obligaciones derivadas de la propia Legislación Electoral, las tributarias y las derivadas de acuerdo con terceros, sean de índole laboral o mercantil.

Por lo anterior, solicito de usted de ser posible me informe

Único. *De no haber impedimento legal alguno para realizar pago anticipado de las obligaciones aludidas, cual es el procedimiento para ello, datos de la cuenta para transferencia y demás necesarios para su debida instrumentación y transparencia.*

(...)

En vista de lo anterior, y en razón de que este órgano electoral, al ejecutar multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral, no puede descontar más del 50% de la ministración mensual que por concepto de financiamiento público corresponde a los partidos políticos, se consulta si es factible que un partido político realice el pago anticipado de las obligaciones fijadas (vía transferencia de recursos), o bien solicite el descuento de cantidades superiores al 50% de la ministración mensual, y en su caso, cuál sería el procedimiento aplicable para su realización.”

Al respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Técnica de Fiscalización advierte que la consulta consiste en determinar si es posible que el Partido de la Revolución Democrática realice el pago anticipado a las multas impuestas derivadas de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de gobernador, diputado local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de Guanajuato.

De conformidad con el artículo 191 numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene facultades para resolver en definitiva el proyecto de Dictamen, así como la resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los sujetos obligados; **así como en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan de conformidad con la normatividad aplicable.**

Por su parte, las sanciones que derivan de la resolución en cita son recurribles ante las Salas Superior y/o Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; autoridades que en su caso podrán confirmar, modificar o revocar la sanción económica impuesta. Por tanto, **una vez que las sanciones han causado estado, no son susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago.**

En este sentido, es importante mencionar que el quince de marzo de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto Nacional aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los "Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito Federal y Local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña", al efecto, son aplicables los Lineamientos Quinto y Sexto, mismos que para mayor claridad, se transcriben a continuación:

"Quinto

Exigibilidad

Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las sanciones que no

hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o tribunales electorales locales, se consideran firmes en el momento que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. **Asimismo, se consideran firmes aquellas sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.

Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto."

"Sexto

De la información que se incorporará en el SI

(...)

B. Sanciones en el ámbito local

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de la misma y en el destino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas:

a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas **se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva.**

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada uno de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos locales, aspirantes y candidatos independientes;

(...)

g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de dichos sujetos las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.

h) El OPLE registrará en el SI de forma mensual si los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido del financiamiento de los partidos políticos locales.

i) En caso de que los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes incumplan con el pago voluntario de la sanción, el OPLE solicitará a la Secretaría de Finanzas o equivalente en la Entidad Federativa que se trate, realizar las diligencias necesarias para el cobro hasta su conclusión y le dará seguimiento y registro en el SI.

2. El OPLE deberá destinar el monto de la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente, a través del mecanismo respectivo.

3. Una vez que el OPLE ejecute las sanciones y los sujetos obligados realicen el pago voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en la Entidad Federativa que se trate, lleve a cabo el cobro, el OPLE capturará en el SI las retenciones realizadas a Partidos Políticos y sobre aquellas de las que tengan conocimiento que han cobrado las autoridades locales hacendarias.”

Asimismo, es importante señalar que en la Resolución INE/CG1120/2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, concluyó que las sanciones que se deben imponer al Partido de la Revolución Democrática, consisten en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad total de las sanciones económicas impuestas.

Por lo anteriormente expuesto, se hace de su conocimiento que las sanciones que han causado estado no son susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por lo que no es posible para el Organismo Público Local Electoral hacer efectiva la sanción económica de una manera diferente a la señalada por el Consejo General, razón por la cual se deben realizar reducciones del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual hasta alcanzar la cantidad total de las sanciones impuestas.

Es importante mencionar que las sanciones económicas que han sido impuestas, pero no fueron impugnadas, así como aquellas que habiendo sido impugnadas, hayan sido confirmadas por la autoridad jurisdiccional, **deberán ser registradas como cuentas por pagar en el rubro de pasivos.**

No obstante lo anterior, **los sujetos obligados pueden realizar el pago de pasivos de manera anticipada**, en consecuencia, se hace de su conocimiento que, una vez realizada la retención mensual correspondiente a la sanción económica impuesta al partido político y entregada la prerrogativa mensual correspondiente por el Organismo Público Local Electoral, no existe impedimento para que el partido realice un pago adicional, si cuenta con solvencia suficiente para ello, mismo que será reconocido en el ejercicio anual correspondiente.

Lo anterior, considerando que no estaría modificando la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la forma de hacer efectiva la multa, pues únicamente se realizaría la retención de la ministración mensual correspondiente conforme al Acuerdo INE/CG61/2017, y el partido tendría la libertad para que *motu proprio* realice un pago adicional si así lo estimara conveniente, es necesario aclarar que los Organismos Públicos Locales Electorales carecen de atribuciones para aumentar o disminuir el porcentaje de reducción de ministración determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al imponer las sanciones económicas.

Finalmente se informa que, en caso de realizarse el pago adicional por parte del instituto político, este tendría que efectuarse mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta que sea señalada por el Organismo Público Local Electoral.

Es necesario precisar que los remanentes son el resultado de la diferencia entre el financiamiento público recibido, y los gastos efectivamente erogados con este recurso en el ejercicio anual de que se trate, en este sentido, los pagos de pasivos que realicen los partidos de manera anticipada, dentro del ejercicio anual de que se trate, no deberán entenderse como una aplicación de los remanentes, pues estos serán determinados hasta la revisión del informe anual correspondiente.

Por los argumentos expuestos anteriormente, se concluye lo siguiente:

1. Los pasivos que sean cubiertos de manera anticipada, no se consideran pagados con remanentes, toda vez que las multas reconocidas como pasivos

ya forman parte de la contabilidad que la autoridad electoral debe analizar para determinar el remanente correspondiente.

2. Los partidos políticos pueden adelantar el pago de sanciones económicas una vez que éstas han causado estado, siempre y cuando dichas sanciones se encuentren debidamente registradas en el rubro de pasivos.
3. Lo anterior, de ninguna manera puede ser interpretado como una facultad de los Organismos Públicos Locales Electorales para modificar el monto ni la forma de pago, de las resoluciones del Consejo General, ya que carecen de atribuciones para ello.
4. Los partidos políticos de manera voluntaria pueden realizar pagos adicionales de pasivos derivados de sanciones, mediante cheque o transferencia bancaria, a la cuenta que sea señalada por la autoridad electoral que corresponda, mismos que serán reconocidos en el ejercicio anual correspondiente.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que por su conducto se notifique al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las representaciones de los Partidos Políticos Nacionales ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales a efecto de notificarlo a los Organismos Públicos Locales, para los efectos siguientes: 1) En el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones que en derecho corresponda para dar cumplimiento al presente Acuerdo y, 2) Notifiquen a los Partidos Políticos Locales a la brevedad posible.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Del mismo modo continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias. ____

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para expresar que estamos recurriendo a una saludable práctica que ha tenido el Instituto para que todas aquellas credenciales de elector que estén prácticamente perdiendo su vigencia en estos meses y que por alguna razón no puedan ser sustituidas o remplazadas por los poseedores de las mismas, puedan utilizarse para el ejercicio del voto en las elecciones locales del próximo año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. _____

Estamos hablando de que las llamadas “credenciales 18” que concluyen vigencia tienen un universo total de 389 mil 826 en estas 5 entidades federativas; que las credenciales vigencia 2018 son 152 mil 205 adicionales y que, por consecuencia, estamos hablando de 542 mil 031 credenciales que podrían ser utilizadas para el

ejercicio del voto, se trata de una medida en la cual el Instituto está privilegiando el ejercicio del voto para estas personas. _____

Y también se establece a la conclusión del Proceso Electoral estos plásticos serán retirados de los listados de credenciales vigentes para que puedan ser remplazadas en su momento por las personas que las poseen. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponda. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 22, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente. _____

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1497/2018) Pto. 22 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LAS CREDENCIALES PARA VOTAR QUE PIERDEN VIGENCIA EN EL AÑO 2018 SEAN UTILIZADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON ELECCIONES ORDINARIAS LOCALES A CELEBRARSE EL 2 DE JUNIO DE 2019 Y, EN SU CASO, ELECCIONES EXTRAORDINARIAS LOCALES EN 2019

ANTECEDENTES

- 1. Vencimiento de las Credenciales para Votar que pierden vigencia en 2018.** El 20 de junio de 2014, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG50/2014, en el punto Quinto, que la vigencia de las Credenciales para Votar que tengan como recuadros para el marcaje del año de la elección federal los números

12	15	18	09
----	----	----	----

, denominadas “18”, concluiría el 31 de diciembre de 2018, y que los registros de esas ciudadanas y ciudadanos serían excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el 1º de enero de 2019.

En el Punto Sexto del Acuerdo referido en el párrafo que precede, el órgano superior de dirección aprobó que los registros de ciudadanos cuya Credencial para Votar contengan de manera expresa su vigencia en el cuerpo de la mica, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el primer día del año siguiente en que expire su vigencia.

- 2. Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.** El 6 de agosto de 2018, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
- 3. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia.** El 11 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General, apruebe que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el

año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019.

4. **Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 17 de diciembre de 2018, en su cuarta sesión ordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores mediante Acuerdo INE/CRFE-03SO: 17/12/2018, aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente para que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), d), e), f) y 2; 31, párrafo 1; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos gg) y jj); 156, párrafos 2, incisos a), c), d) y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 82, párrafo 1, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones).

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta

Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM dispone que son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Adicionalmente, el artículo 36, fracción I de la CPEUM, en relación con el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores.

Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM establece que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

A su vez, la citada disposición constitucional determina en el Apartado B, inciso a), párrafo 3, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGIPE que, para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Por su parte, el artículo 133 de la CPEUM mandata que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren bajo su tutela.

Entre las disposiciones particulares previstas en instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos prevé que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto.

Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, los estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE señala que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Asimismo, el párrafo 2 del propio artículo citado en el párrafo que precede, determina que todas las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

No debe perderse de vista que, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la propia ley y las demás que le confiera ésta.

Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

Asimismo, el artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero.

El artículo 130 de la LGIPE ordena que las ciudadanas y los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE debe incluir a las ciudadanas y a los ciudadanos en el Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar, toda vez que éste es el documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de voto.

Así, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que las ciudadanas y los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se procederá a formar las Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se les haya entregado su Credencial para Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales.

Asimismo, el artículo 156, párrafo 2, incisos a), c) y d) de la LGIPE dispone que la Credencial para Votar deberá contener, entre otros, los espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate, el año de emisión y el año en que expira su vigencia.

El párrafo 5 de la disposición legal anteriormente aludida señala que la Credencial para Votar tendrá una vigencia de diez años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término la ciudadana o el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

No es óbice manifestar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció en la Jurisprudencia 29/2002, en el siguiente sentido:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, **los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa**, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que **las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental.** Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

Ahora bien, conforme al artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, dicho ordenamiento tiene como objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los Organismos Públicos Locales (OPL) de las entidades federativas.

En este sentido, a fin de salvaguardar de manera más amplia los derechos político-electorales de la ciudadanía para solicitar su inscripción al Padrón Electoral, actualizar su situación registral y obtener su Credencial para Votar con la que podrán ejercer su derecho al sufragio, el artículo 82, párrafo 1, inciso h) del Reglamento de Elecciones prevé que este Consejo General apruebe un ajuste a la vigencia de la Credencial para Votar cuyo vencimiento tiene lugar en el año de la elección respectiva.

Por lo anteriormente señalado, este Consejo General tiene las atribuciones legales y reglamentarias para aprobar que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019.

TERCERO. Motivos para aprobar que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019.

La CPEUM, la LGIPE y el Reglamento de Elecciones revisten al INE de atribuciones para la organización de los Procesos Electorales Federales y Locales, entre las cuales destacan aquellas relacionadas con la formación y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de la ciudadanía para la organización de los comicios en las entidades federativas.

De cara a los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el 2 de junio de 2019 en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, deviene necesario implementar acciones que aseguren la adecuada planeación y organización de éstos, a fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de establecer mecanismos que permitan contar con instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE y los OPL.

Con la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 en el Acuerdo INE/CG1176/2018, este Consejo General definió las actividades y los plazos que deberán observar el INE y los OPL para el debido desarrollo de sus comicios locales. Dicha información fue integrada con base en la legislación vigente tanto a nivel

federal como local, y se tomó en cuenta la información proporcionada por las áreas ejecutivas de ambas autoridades electorales.

Al respecto, en el Acuerdo INE/CG50/2014, este Consejo General aprobó, entre otros aspectos, que la vigencia de las Credenciales para Votar que tengan como recuadros para el marcaje del año de la elección federal, los números

12	15	18	09
----	----	----	----

, denominadas “18”, concluya el 31 de diciembre de 2018; además, que los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que cuenten con estas credenciales, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el 1º de enero de 2019.

Asimismo, en ese mismo Acuerdo se determinó que las Credenciales para Votar expedidas en el año 2008, que contienen de manera expresa su vigencia hasta el año 2018 en el cuerpo de la mica, denominadas “vigencia 2018”, serán excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores a partir del 1º de enero de 2019.

En el marco de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 a celebrarse en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas el próximo 2 de junio de 2019, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en esas entidades, cuyas Credenciales para Votar pierden vigencia en el año 2018, asciende a un total de 542,031 registros con corte al 14 de diciembre de 2018, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	CREDENCIALES “18”	CREDENCIALES “VIGENCIA 2018”	TOTAL
Aguascalientes	39,793	15,221	55,014
Baja California	127,558	42,697	170,255
Durango	70,912	22,755	93,667
Quintana Roo	24,698	15,579	40,277
Tamaulipas	126,865	55,953	182,818
TOTAL	389,826	152,205	542,031

No debe pasar por inadvertido que, en cumplimiento del referido Acuerdo INE/CG50/2014, en el marco de la campaña de difusión e información que la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica (DECEyEC) y la

DERFE promueven para invitar a la ciudadanía a renovar las Credenciales para Votar denominadas “18” y “vigencia 2018”, pudiera presentarse el caso de que exista un número de ciudadanas y ciudadanos residentes en las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2018-2019 que no actualicen su credencial y, en consecuencia, sean excluidos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Sobre este punto, debe señalarse que la aplicación del principio *pro homine* es de carácter obligatorio para todas las instancias del Estado Mexicano. Este principio implica, conforme a un criterio jurisdiccional, que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para las personas; es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de poner límites a su ejercicio.¹

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia.²

En ese contexto, una de las principales obligaciones del INE consiste en velar por la protección más amplia de los derechos político-electorales de la ciudadanía; por lo que, en caso de ser posible y sin afectar la instrumentación de la elección que se trate, una de las vías para la ampliación de esos derechos, es mediante la aprobación de la extensión de la vigencia de aquellas Credenciales para Votar que cumplen con su periodo respectivo de validez y, que, en su oportunidad no fueron renovadas por la ciudadanía de cara a las contiendas electorales de que se traten.

¹ Tesis Aislada integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro 179233. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, febrero de 2005, página 1,744.

² Tesis Aislada integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con registro 2000630. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 2.

Se trata de una medida que atiende el canon constitucional *pro persona* en materia de derechos humanos y encuentra como referencia una interpretación sistemática y funcional de la legislación aplicable en sintonía con el artículo 1º de la CPEUM, de modo que favorece la protección más amplia del derecho al voto.

Es así que, para maximizar los derechos humanos de la ciudadanía, se estima oportuno que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018, denominadas “18” y “vigencia 2018”, sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019, y que los registros respectivos sean excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente al que concluyan los referidos comicios, a fin de salvaguardar el derecho al sufragio de las mexicanas y los mexicanos que por cualquier circunstancia no puedan actualizar su Credencial para Votar y emitir su voto.

De igual manera, se estima conveniente que la ampliación de la vigencia de las credenciales “18” y “vigencia 2018” también se aplique para las entidades federativas que celebrarán elecciones extraordinarias locales durante 2019, derivadas de los comicios relativos a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 que deban celebrarse el próximo año, así como de los que, en su caso, resulten de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y que se tengan que celebrar con posterioridad al 2 de junio de 2019.

De esta manera, esta autoridad electoral está en posibilidad de atender el principio *pro homine* al aplicar una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos.

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General puede aprobar que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019, además de las elecciones extraordinarias locales que se celebren en 2019, y que los registros respectivos sean excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores al día siguiente al que concluyan los referidos comicios.

Igualmente, resulta conveniente instruir a la DECEyEC y a la DERFE para que, en el marco de la campaña de difusión e información que promueven para invitar a la ciudadanía a renovar las Credenciales para Votar denominadas “18” y “vigencia 2018”, informen que el plazo para reemplazar estas credenciales —de conformidad con las fechas que este Consejo General apruebe para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019— finalizará el 15 de enero de 2019 y comuniquen, a partir del día siguiente y en caso de no haber sido renovadas, que dichas credenciales podrán ser utilizadas para sufragar en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, las elecciones extraordinarias locales en 2019.

Es importante resaltar que la Comisión Nacional de Vigilancia, por tratarse del órgano de vigilancia de los trabajos relativos al Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde convergen las representaciones de los partidos políticos y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, recomendó a este órgano superior de dirección que las Credenciales para Votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades federativas que tendrán elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019, cuyos motivos para aprobar se expusieron en los considerandos del presente Acuerdo.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba extender la vigencia de las Credenciales para Votar que tengan como recuadros para el marcaje del año de la elección federal los números

12 15 18 09, denominadas “18”, así como aquellas expedidas durante el año 2008 que contengan de manera expresa su vigencia hasta 2018 en el cuerpo de la mica, denominadas “vigencia 2018”, para que puedan ser utilizadas en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019; así como aquellas que se celebren en 2019, derivadas de los Procesos Electorales Locales 2017-2018.

SEGUNDO. Se aprueba que los registros de las ciudadanas y los ciudadanos con domicilio en las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019, cuyas Credenciales para Votar se encuentran en el supuesto referido en el Punto Primero del presente Acuerdo, serán excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de los respectivos comicios locales.

TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores instrumenten las acciones para informar a la ciudadanía que reside en las entidades federativas que celebran elecciones ordinarias locales el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019, que el plazo para renovar las Credenciales para Votar denominadas “18” y “vigencia 2018” finalizará el 15 de enero de 2019, y comunicar, a partir del día siguiente y en caso de no haber sido renovadas, que dichas credenciales podrán ser utilizadas para sufragar en las respectivas Jornadas Electorales locales.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este órgano superior de dirección.

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Electorales haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019, lo aprobado por este Consejo General.

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido, por favor, que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. _____

Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. _____

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 23. _____

Quienes estén por la afirmativa sírvase levantar la mano, por favor. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1498/2018) Pto. 23 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL USO DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019”, ASÍ COMO LOS PLAZOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y LOS CORTES DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019

ANTECEDENTES

- 1. Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.** El 6 de agosto de 2018, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
- 2. Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia.** El 11 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General, apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
- 3. Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 17 de diciembre de 2018, en su cuarta sesión ordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores mediante Acuerdo INE/CRFE-04SO: 17/12/2018, aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), d), e), f) y 2; 31, párrafo 1; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos l), gg) y jj); 133, párrafos 1 y 2, Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 82, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); 2; 3; 9 de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE).

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM dispone que son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Adicionalmente, el artículo 36, fracción I de la CPEUM, en relación con el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores.

Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM establece que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

A su vez, la citada disposición constitucional determina en el Apartado B, inciso a), párrafo 3, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGIPE que, para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Por su parte, el artículo 133 de la CPEUM mandata que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren bajo su tutela.

Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos prevé que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto.

Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, los estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE señala que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los procesos electorales locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

No debe perderse de vista que, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la propia ley y las demás que le confiera ésta.

Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

Asimismo, el artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero.

El artículo 130 de la LGIPE, ordena que las ciudadanas y los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE debe incluir a las ciudadanas y a los ciudadanos en el Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar, toda vez que éste es el documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de voto.

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; además, emitirá los Lineamientos en los que se

establezcan los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores en los Procesos Electorales Locales.

Así, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que las ciudadanas y los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se procederá a formar las Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas a quienes se les haya entregado su Credencial para Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales.

El artículo 138 de la LGIPE prevé que la DERFE, con el fin de actualizar el Padrón Electoral, realizará anualmente a partir del 1º de septiembre y hasta el 15 de diciembre del año que corresponda, una campaña anual intensa para convocar a la ciudadanía a actualizar su situación registral.

Durante el periodo de actualización, deberán de acudir a las oficinas de esa Dirección Ejecutiva, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al Padrón Electoral, todos aquellos ciudadanos que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total, o bien, que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total.

Además, deberán acudir aquellos ciudadanos que se encuentren incorporados en el Padrón Electoral y que no hubieren notificado su cambio de domicilio; hubieren extraviado su Credencial para Votar, o bien, aquellos suspendidos en sus derechos políticos, hubieren sido rehabilitados.

Así, el artículo 139, párrafo 1 de la LGIPE refiere que las ciudadanas y los ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral en períodos distintos a los establecidos para la campaña anual intensa; esto es, desde el día siguiente al de la elección y hasta el día 30 de noviembre del año previo de la elección federal ordinaria.

El párrafo 2 del precepto legal aludido dispone que las mexicanas y los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años de edad entre el 1º de diciembre del año previo a las elecciones y el día de los comicios,

deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 30 de noviembre del año previo a la elección.

Bajo esa línea, el artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE establece que la solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

- a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- b) Lugar y fecha de nacimiento;
- c) Edad y sexo;
- d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
- e) Ocupación;
- f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y
- g) Fotografía, firma y, en su caso, huellas dactilares de la o del solicitante.

El párrafo 2 del precepto legal referido advierte que el personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

- a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;
- b) Distrito Electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio,
y
- c) Fecha de la solicitud de inscripción.

Por su parte, el párrafo 3 de la disposición invocada señala que a la ciudadana o al ciudadano que solicite su inscripción se le entregará un comprobante de su solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su Credencial para Votar.

En términos del artículo 143, párrafo 1 de la LGIPE, podrán solicitar la expedición de la Credencial para Votar o la rectificación de sus datos ante la oficina del INE responsable de la inscripción, aquellas ciudadanas y

ciudadanos que, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar; habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio, o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio.

Aunado a lo anterior, el párrafo 3 del artículo en comento contempla que en el año de la elección las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en el supuesto referido en el inciso a) del párrafo anterior, podrán promover la instancia administrativa correspondiente para obtener su Credencial para Votar hasta el último día de enero del año de la elección. En los casos previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, las ciudadanas y los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14 de marzo.

Así también, los párrafos 4 y 5 del artículo en mención, aluden que en las oficinas del Registro Federal de Electores existirán a disposición de la ciudadanía los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales.

El párrafo 6 del artículo en comento refiere que la resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la Credencial para Votar o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para tal efecto, las ciudadanas y los ciudadanos tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del medio de impugnación respectivo.

El artículo 146 de la LGIPE indica que las Credenciales para Votar que se expidan estarán a disposición de las y los interesados en las oficinas o módulos que determine el INE hasta el 1º de marzo del año de la elección.

También, el artículo 147, párrafo 1 de la LGIPE señala que las Listas Nominales de Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar.

En ese sentido, el artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE establece que el 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la DERFE entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las Listas Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de diciembre del año previo a la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su Credencial para Votar a esa fecha.

Además, el párrafo 2 del artículo en comento señala que los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de marzo inclusive.

Por su parte, el párrafo 3 de la misma disposición legal prevé que, de las observaciones formuladas por los partidos políticos, se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) a más tardar el 15 de abril.

De igual forma, el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE dispone que, una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, la DERFE elaborará e imprimirá las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía que contendrán los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar hasta el último día de febrero inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en esa ley.

Además, el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE prevé que las solicitudes de trámite realizadas por las ciudadanas y los ciudadanos residentes en territorio nacional, que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del INE correspondiente a su domicilio a obtener su Credencial para Votar, a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquél en que se hayan presentado, serán canceladas.

Asimismo, el artículo 156, párrafo 5 de la LGIPE señala que la Credencial para Votar tendrá una vigencia de diez años, contados a partir del año de su

emisión, a cuyo término la ciudadana o el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

De conformidad con el artículo 254, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla se desarrollará, entre otros aspectos, de la siguiente forma:

- a) El Consejo General del INE, en el mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Este procedimiento se realizará con el corte del listado nominal al 15 de diciembre del año previo al de la elección, y
- b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1º al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, a partir de las Listas Nominales de Electores integradas con las ciudadanas y los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar al 15 de diciembre del año previo a la elección, un 13 por ciento de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50; para ello, las Juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del INE. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación los miembros del Consejo Local y de la Comisión Local de Vigilancia de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine.

Finalmente, el artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE dispone que este Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la misma.

Conforme al artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, dicho ordenamiento tiene como objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los Organismos Públicos Locales (OPL) de las entidades federativas.

Por su parte, el artículo 29, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones mandata que el INE y los OPL formalizarán un convenio general de coordinación que establezca las bases generales de coordinación para la organización de los Procesos Electorales Locales.

Así, el párrafo 2, incisos b) y c) de dicho artículo, señala que entre los rubros que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación entre el INE y los OPL, se encuentran las campañas de actualización y credencialización, así como lo relativo a las Listas Nominales de Electores.

A fin de salvaguardar de manera más amplia los derechos político-electorales de la ciudadanía para solicitar su inscripción al Padrón Electoral, actualizar su situación registral y obtener su Credencial para Votar con la que podrán ejercer su derecho al sufragio, el artículo 82 del Reglamento de Elecciones prevé que este Consejo General apruebe, con el conocimiento de la CNV, un ajuste a los plazos para la actualización al Padrón Electoral y la generación de la Lista Nominal de Electores para el proceso electoral que corresponda, entre otros, a los siguientes rubros:

- a) Campaña anual intensa;
- b) Campaña anual de actualización permanente;
- c) Inscripción de jóvenes que cumplan los 18 años hasta el día de la elección, inclusive;
- d) Fecha de corte de las Listas Nominales de Electores que se entregarán para revisión a los partidos políticos;
- e) Fecha de corte para la impresión de las Listas Nominales de Electores definitivas, así como de las adendas, si las hubiere;
- f) Fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para la primera y segunda insaculaciones de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, y
- g) Vigencia de la credencial para votar cuyo vencimiento tiene lugar en el año de la elección respectiva.

El artículo 89 del Reglamento de Elecciones advierte que para el acceso y verificación del Padrón Electoral y la generación, entrega, revisión, uso, resguardo, reintegro y destrucción de las bases de datos y, en su caso, de los impresos de las listas nominales de electores, los sujetos obligados, según corresponda, deberán observar todas las previsiones y los mecanismos de seguridad para la protección de los datos personales, establecidos en la LGIPE y en los Lineamientos AVE, además de lo referido en el Anexo 19.1 del propio Reglamento, consistente en el protocolo de seguridad para el acceso y manejo de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, así como el Acuerdo INE/CG860/2016.

Bajo esa arista, el artículo 92, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones dispone que la DERFE, una vez revisadas las observaciones que en su caso hubiera enviado la CNV, elaborará el procedimiento de entrega de las Listas Nominales de Electores para su revisión por las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante los órganos de vigilancia, de las candidaturas independientes y de los partidos políticos con registro local, mismo que hará del conocimiento de la Comisión del Registro Federal de Electores.

El párrafo 2 del artículo referido detalla los objetivos específicos que debe cumplir el procedimiento de entrega de esos listados.

El párrafo 3 del ordenamiento en cita establece que la entrega de las Listas Nominales de Electores a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante los OPL deberá atender, además, a lo dispuesto en los convenios generales de coordinación y anexos que para tal efecto se suscriban.

El artículo 92, párrafos 4 y 5 del Reglamento de Elecciones señala que la recepción, análisis y dictamen de procedencia de las observaciones formuladas por los partidos políticos a las Listas Nominales de Electores por parte de la DERFE, así como la generación del informe final, se hará conforme a lo señalado en la LGIPE, así como al procedimiento que determine la DERFE. La propuesta del procedimiento será hecha del conocimiento de la CNV. Además, dicho informe podrá ser entregado a los OPL, en términos de los convenios y anexos técnicos correspondientes.

El párrafo 6 del artículo 92 del ordenamiento en comento, prevé que el resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores que se hubieren

entregado a los partidos políticos para revisión, en el marco de cualquier proceso electoral, estará sujeto a los Lineamientos señalados en el artículo 89 del mismo Reglamento.

Ahora bien, el párrafo 8 de la misma disposición reglamentaria advierte que el procedimiento de generación, entrega, reintegro, resguardo, borrado seguro y destrucción de las listas nominales para su revisión por los representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia, de los candidatos independientes y de los partidos políticos con registro local, se ajustará a las disposiciones generales emitidas por este Consejo General, entre las que se encuentra el Anexo 19.2 del Reglamento de Elecciones.

El artículo 93 del Reglamento de Elecciones refiere que la DERFE generará y entregará a los OPL las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, las adendas respectivas, si las hubiere, las Listas Nominales de Electores producto de instancias administrativas y resoluciones del TEPJF, con base en las disposiciones generales que emita este Consejo General, así como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración que sean suscritos entre el INE y los OPL. De la misma manera, tales documentos serán entregados a las y los funcionarios de casilla por conducto de los Consejos correspondientes, así como a las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes.

Así, el artículo 94, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Elecciones señala que las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes, devolverán los tantos impresos de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y los listados adicionales que hayan recibido y utilizado en la Jornada Electoral respectiva, de conformidad con las disposiciones generales que emita este Consejo General, entre ellas, el Anexo 19.3 del propio Reglamento. En el caso de elecciones locales, el costo que se origine de esta actividad, estará a cargo del OPL, en términos del convenio general de coordinación y su respectivo anexo financiero que suscriba con el INE.

El artículo 96, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones prevé que los formatos de Credencial para Votar que se hayan generado y no hayan sido recogidos por sus titulares en los plazos determinados para tal efecto, serán resguardados, con base en el procedimiento que se detalla en el Anexo 2 del Reglamento en cita.

Refuerza lo anterior lo dispuesto por el artículo 45, párrafo 1, incisos h) y k) del Reglamento Interior, el cual señala que para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la DERFE, entre otras, emitir los mecanismos para la inscripción de la ciudadanía al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como la actualización de estos instrumentos, al igual que determinar los correspondientes mecanismos para la revisión de estos instrumentos registrales, entre los que se encuentra la atención a las observaciones realizadas por los partidos políticos.

No es óbice señalar que el TEPJF se pronunció en la Jurisprudencia 29/2002, en el sentido que sigue:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

Asimismo, el TEPJF manifestó lo siguiente en la Jurisprudencia 8/2008:

CREDENCIAL PARA VOTAR. CASOS EN QUE RESULTA PROCEDENTE SU REPOSICIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL.- De una interpretación de los artículos 146, 154, 159 y 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativos al plazo en que puede solicitarse la reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende situaciones

ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya que en el caso de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha de prevalecer la aplicación de la disposición legal más favorable. De ahí que si el ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el robo, extravío o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad a dicha temporalidad, debe reponerse para permitir al ciudadano ejercer su derecho a votar en los comicios respectivos.

Adicionalmente, es de resaltar que el TEPJF emitió la Jurisprudencia 13/2018, en cuyo contenido se advierte lo siguiente:

CREDENCIAL PARA VOTAR. LA LIMITACIÓN TEMPORAL PARA LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL ES CONSTITUCIONAL. Con fundamento en los artículos 34, 35 y 36, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 25, párrafo 1, inciso b), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 23, párrafo 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como 9, 130, 131, 134, 135, 136, 147 y 151 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el derecho al voto, como derecho fundamental, se encuentra sujeto a limitaciones constitucionales y legales. En ese sentido, la ciudadanía debe cumplir con las obligaciones relativas a la obtención de la credencial para votar e inscripción en el Padrón Electoral dentro de los plazos señalados para tal fin. Por tanto, el establecimiento de un plazo inamovible para solicitar la inscripción en el Listado Nominal, o bien para la modificación de los datos asentados en él, por regla general, es constitucionalmente válido, al tratarse de una medida idónea, porque atiende a un fin legítimo; razonable, dado los trámites que debe realizar la autoridad electoral; proporcional, al no ser desmedida; y necesaria, por los tiempos requeridos para generar el Padrón Electoral e integrar debidamente la Lista Nominal.

Por lo que respecta a la entrega de las Listas Nominales de Electores en términos de los artículos 151 y 153 de la LGIPE, los Lineamientos AVE detallan las disposiciones complementarias para la entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la CNV, así como la entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía a las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.

En este sentido, el numeral 9 de los Lineamientos AVE señala que a los OPL les será entregada la información contenida en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, de conformidad con los Lineamientos que emita este Consejo General en cumplimiento del artículo 133, párrafo 2 de la LGIPE, referente a las disposiciones que establezcan los plazos y términos para el uso

del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores en los Procesos Electorales Locales.

El numeral 30 de los Lineamientos AVE señala que la DERFE entregará a más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, en medios magnéticos a los partidos políticos con registro nacional, las Listas Nominales de Electores para Revisión bajo la modalidad que señala el artículo 151 de la LGIPE.

A su vez, el numeral 33 de los Lineamientos AVE prevé que la DERFE entregará las Listas Nominales de Electores para Revisión, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones y distritos en cada entidad federativa. El primer apartado contendrá los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de febrero del año de la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan obtenido su Credencial para Votar.

El numeral 47 de los Lineamientos AVE señala que el INE, a través de los convenios de apoyo y colaboración que suscriba y en los términos que determine la LGIPE, podrá proporcionar a los OPL instrumentos, documentos y productos electorales que contengan datos personales que forman parte del Padrón Electoral, exclusivamente para el apoyo a sus Procesos Electorales Locales y/o de participación ciudadana.

El numeral 49, incisos b) y c) de los Lineamientos AVE advierte que, con base en los requerimientos del OPL de que se trate, la DERFE elaborará el convenio de apoyo y colaboración y el anexo técnico correspondiente en el que se establezcan, entre otros, los términos y alcances del uso de cada uno de los instrumentos y documentos electorales que el INE entregue a los OPL, así como el plazo para la revisión de los instrumentos y documentos electorales que el INE entregue a los OPL, así como para la presentación, en su caso, de observaciones.

A este respecto, para realizar el análisis y la dictaminación de procedencia de las observaciones, la CNV recomendó a la DERFE aplicar el Procedimiento para el tratamiento de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos

a la Lista Nominal de Electores para Revisión, en el marco de los Procesos Electorales Federales y Locales.¹

Por otra parte, el numeral 44 de los Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, dispone que para la actualización del Padrón Electoral la ciudadanía podrá solicitar los trámites de inscripción, corrección o rectificación de datos personales, cambio de domicilio, corrección de datos en dirección, reimpresión, reposición, reemplazo de credencial por pérdida de vigencia y reincorporación.

Por lo anteriormente señalado, este Consejo General tiene las atribuciones legales y reglamentarias para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

TERCERO. Motivos para aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”.

La CPEUM, la LGIPE y el Reglamento de Elecciones revisten al INE de atribuciones para la organización de los Procesos Electorales Federales y Locales, entre las cuales destacan aquellas relacionadas con la formación y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de las ciudadanas y los ciudadanos para la organización de los comicios en las entidades federativas.

De cara a los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el próximo domingo 2 de junio de 2019 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, deviene necesario implementar acciones que aseguren la adecuada planeación y organización de éstos, a fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho humano al sufragio. De ahí la importancia de establecer mecanismos que permitan contar con instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE y los OPL.

¹ Acuerdo 1-EXT/14: 29/11/2017, aprobado el 29 de noviembre de 2017.

En efecto, con la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 mediante el Acuerdo INE/CG1176/2018, este Consejo General definió las actividades y los plazos que deberán observar tanto el INE como los OPL para el debido desarrollo de sus respectivos comicios. Dicha información fue integrada con base en la legislación vigente tanto a nivel federal como local, y se tomó en cuenta la información proporcionada por las áreas ejecutivas de ambas autoridades electorales.

En este sentido, con la expedición de los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, se atiende lo dispuesto por el artículo 133, párrafo 2 de la LGIPE, ya que se definen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para la celebración de los comicios locales en las respectivas entidades federativas.

Con estos Lineamientos se regulan, entre otros, los aspectos relativos a las disposiciones generales de la información contenida en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; la conformación de las Listas Nominales de Electores para su Revisión y Exhibición, la entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y de los listados adicionales derivados de instancias administrativas y resoluciones favorables del TEPJF; disposiciones sobre la entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores, así como la confidencialidad de los datos personales.

Los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019” se encuentran ordenados de la siguiente manera:

- a) **Listas Nominales de Electores.** Los Lineamientos regulan la forma como el INE, a través de la DERFE, generará y entregará los listados nominales a los OPL, de conformidad con los requerimientos que se establezcan en los respectivos convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos técnicos, con el objetivo de que sean utilizadas exclusivamente para las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales.

De igual manera, prevé los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en dichos instrumentos, a fin de evitar algún uso distinto al expresamente previsto en la normatividad y lo establecido en los convenios que para tal efecto se suscriban.

En apoyo a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, los Lineamientos de referencia establecen que el INE, por conducto de la DERFE, integrará los siguientes instrumentos y productos electorales:

- I. Listas Nominales de Electores para Revisión;
 - II. Listas Nominales de Electores para Exhibición;
 - III. Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, y
 - IV. Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF (Listado Adicional).
- b) **Entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores.** Los Lineamientos establecen las disposiciones relativas a la suscripción de convenios y anexos técnicos por parte del INE y los OPL, a efecto de establecer las bases de apoyo y colaboración sobre el uso de los instrumentos y productos electorales con motivo del desarrollo de los Procesos Electorales Locales en sus respectivas entidades.

Además, precisa que en los convenios y anexos financieros respectivos se establecerá la forma en que cada autoridad electoral deberá asumir los costos generados para cada instrumento y producto relacionado con el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Para ello, el INE a través de la DERFE proporcionará los instrumentos, productos y servicios correspondientes, con el objetivo de que las diversas actividades de los comicios locales se efectúen en los periodos que se hayan establecido en la normatividad electoral y en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

De igual manera, se prevén medidas de seguridad para el intercambio de información confidencial y los mecanismos necesarios para realizar el reintegro de los listados nominales a la conclusión de las respectivas

jornadas electorales, en atención a las disposiciones contenidas en los Lineamientos AVE, así como en los convenios que para tal efecto se suscriban.

- c) **Confidencialidad de los datos personales.** En estos Lineamientos se definen los aspectos tendientes a garantizar la protección de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, a través de la implementación de los mecanismos necesarios que permitan salvaguardar la seguridad de la información de las ciudadanas y los ciudadanos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Con estos Lineamientos, el INE prevé las acciones necesarias a efecto de celebrar con los OPL los convenios generales de coordinación y colaboración y sus respectivos anexos técnicos, en los que se establecerán las bases para el uso de los instrumentos electorales y, con ello, garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los Procesos Electorales Locales correspondientes.

No sobra mencionar que los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019” atienden en sus términos los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Al respecto, se atiende al principio de licitud de los datos personales, en razón de que estos serán tratados en apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de evitar un uso indebido a los mismos.

Con relación al principio de finalidad, los Lineamientos en cita establecen que los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores serán tratados con el objetivo de garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los Procesos Electorales Locales 2018-2019 de las entidades federativas correspondientes.

Atendiendo el principio de lealtad, en los Lineamientos se especifican las acciones que realizará el INE a través de la DERFE para asegurar el uso del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores para los Procesos Electorales

Locales 2018-2019, previniéndose los procedimientos para tal efecto, por lo que no se podrán realizar actividades o acciones ajenas a las contempladas en los mismos Lineamientos, asegurando el uso de los datos personales proporcionados por la ciudadanía exclusivamente para el propósito para el que fueron otorgados.

Asimismo, los Lineamientos atienden el principio de consentimiento previo del titular de los datos personales que realizará la solicitud, el cual deberá otorgarse en forma libre, específica e informada, a partir de las disposiciones contenidas en la LGIPE que refieren la manifestación expresa de las ciudadanas y los ciudadanos al momento de realizar su trámite para inscribir o actualizar sus registros en el Padrón Electoral.

Se cumple con el principio de calidad de los datos personales, pues se busca que los procedimientos que se realicen para la generación, entrega, resguardo y reintegro de los instrumentos y productos electorales que se proporcionarán a los OPL de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2018-2019, se circunscriban únicamente para la instrumentación de las actividades en el marco de los correspondientes Procesos Electorales Locales.

En lo atinente al principio de proporcionalidad de los datos personales, la información que tratará el INE por conducto de la DERFE para definir los plazos y términos en los que se proporcionará a los OPL de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2018-2019 la información contenida en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, para la instrumentación de las actividades en el marco de los correspondientes Procesos Electorales Locales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legalmente conferidas, es proporcional a lo previsto en la LGIPE, de manera que dichos datos sean adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a efecto de lograr la minimización en la afectación de esos datos.

En cuanto al principio de información, los Lineamientos prevén el aviso de privacidad de los datos personales recabados por el Registro Federal de Electores, así como la mención expresa de la existencia y características principales del tratamiento a que serán sometidos los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, a través de los convenios respectivos, a fin de que las personas puedan tomar decisiones informadas al respecto.

En tal virtud, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan

las ciudadanas y los ciudadanos; entre otros, los relacionados con la formación del Padrón Electoral en cuanto a la inscripción y actualización, en la elaboración de la Lista Nominal de Electores y la emisión de la Credencial para Votar, para lo cual deberá tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, particularmente por lo que se refiere a la definición de los plazos, términos y condiciones en los que se proporcionará a los OPL de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2018-2019 la información contenida en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.

A su vez, los Lineamientos en cita dan cuenta de las previsiones del INE por conducto de la DERFE, los OPL, así como las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, para establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o bien, su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los casos que así corresponda.

Finalmente, los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, los cuales conforman el **Anexo** del presente Acuerdo, se apegan en todo momento a la normatividad aplicable, los principios plasmados en convenios y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, los principios constitucionales y legales propios de la función electoral, así como las disposiciones reglamentarias en la materia.

De la misma manera, es necesario precisar que, en la aplicación de los Lineamientos referidos en el párrafo anterior, se deberán observar las disposiciones señaladas en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, los Lineamientos AVE y la demás normatividad electoral aplicable en la materia.

Por las razones expuestas, resulta oportuno que este Consejo General apruebe los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”.

CUARTO. Motivos para aprobar los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

En seguimiento de los argumentos esgrimidos en el presente Acuerdo y a partir de una interpretación sistemática y funcional del artículo 133, párrafo 2, con relación al artículo Décimo Quinto Transitorio, ambos de la LGIPE, el artículo 82, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, así como el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, se advierte que este Consejo General tiene la atribución para pronunciarse sobre los plazos establecidos en esas disposiciones normativas y, en su caso, definirlos en aras del cumplimiento efectivo de las actividades y procedimientos electorales, circunstancia que resulta necesaria en los Procesos Electorales Locales 2018-2019 que desembocan en la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019, respecto de los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de las Listas Nominales de Electores.

Ello, además con la finalidad de armonizar los plazos legalmente establecidos y potenciar el derecho al voto de la ciudadanía, ampliando los periodos de inscripción o actualización en el Padrón Electoral, lo que supone contar con una Lista Nominal de Electores más actualizada y confiable.

De lo anterior se colige que el INE debe, en todo momento, velar por la más amplia protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, por lo que, en caso de ser posible y sin afectar la instrumentación de la elección de que se trate, una de las vías para la ampliación de esos derechos es mediante la aprobación de los plazos y periodos necesarios para que las ciudadanas y los ciudadanos estén en las mejores posibilidades de inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral.

De esta forma, se maximizan los derechos humanos referidos, ya que las ciudadanas y los ciudadanos contarán con una mayor posibilidad de solicitar su inscripción al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores o bien, actualizar sus datos en la misma, maximizando la garantía del derecho a votar en la elección de las y los representantes populares en su entidad federativa.

En efecto, el legislador previó que el Consejo General del INE sea la autoridad competente para pronunciarse sobre los plazos establecidos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de las Listas Nominales de

Electores para los procesos electorales de que se trate, a fin de ajustarlos en aras del cumplimiento efectivo de sus atribuciones.

A mayor abundamiento, debe señalarse que la aplicación del principio *pro homine* es de carácter obligatorio para todas las instancias del Estado Mexicano. Este principio implica, conforme a un criterio jurisdiccional, que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para las personas; es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de poner límites a su ejercicio.²

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia.³

Esta medida contribuirá a que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos tenga la posibilidad de acudir a los módulos de atención ciudadana a realizar los trámites para la obtención de su Credencial para Votar, lo que abre la posibilidad de obtener un mayor número de inscripciones de jóvenes mexicanas y mexicanos que llegan a la mayoría de edad.

Se trata de una medida que atiende el canon constitucional *pro persona* en materia de derechos humanos y encuentra como referencia una interpretación sistemática y funcional de la legislación aplicable en sintonía con el artículo 1º de la CPEUM, de modo que favorece la protección más amplia del derecho al voto de las personas.

En consideración de lo anterior y para mejor referencia, este Consejo General ha aprobado ajustar los plazos establecidos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de las Listas Nominales de Electores con motivo de procesos electorales federales y locales celebrados con anterioridad, a través

² Tesis Aislada integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro 179233. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005, página 1,744.

³ Tesis Aislada integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con registro 2000630. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2.

de los Acuerdos INE/CG112/2014, INE/CG992/2015, INE/CG795/2016 e INE/CG193/2017.

Bajo esa línea, en lo atinente a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, resulta indispensable que este órgano superior de dirección determine los plazos para la actualización del Padrón Electoral, así como los relativos a las Listas Nominales de Electores y la credencialización de las ciudadanas y los ciudadanos, con la finalidad de armonizarlos y potenciar el derecho al sufragio y, en consecuencia, se cuente con instrumentos electorales actualizados.

Ahora bien, respecto al Padrón Electoral y la credencialización, es menester definir los plazos para las campañas especiales de actualización al Padrón Electoral; los periodos de credencialización; la inscripción de jóvenes mexicanas y mexicanos que alcanzan la mayoría de edad hasta el día de la elección inclusive; las fechas de disposición de la Credencial para Votar en los módulos de atención ciudadana y, por último, el resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares.

Asimismo, se deben establecer las fechas del corte de las Listas Nominales de Electores para los respectivos procesos de insaculación y revisión, así como la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y de aquellos listados adicionales que resulten de la interposición de instancias administrativas que fueron procedentes y de resoluciones favorables del TEPJF. Lo anterior contribuirá a que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos tenga la posibilidad de realizar los trámites para la obtención de sus Credenciales para Votar, salvaguardando sus derechos político-electorales, y efectuar su sufragio el día de la Jornada Electoral.

A partir de lo señalado anteriormente, este Consejo General considera conveniente que se realicen ajustes en los siguientes rubros:

I. Campañas Especiales de Actualización.

En cumplimiento del mandato legal, el INE realiza campañas de actualización al Padrón Electoral mediante programas especiales para que las ciudadanas y los ciudadanos se inscriban y obtengan su Credencial para Votar o bien, para que acudan a los módulos de atención ciudadana e informen su cambio de domicilio y/o actualicen sus datos en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y obtengan su Credencial para Votar, conforme al artículo 138 de la LGIPE.

El referido precepto legal establece que la campaña de actualización intensa concluirá el 15 de diciembre de cada año; sin embargo, resulta conveniente que para los Procesos Electorales Locales 2018-2019 se amplíe dicho plazo, de manera que las campañas especiales de actualización concluyan el **15 de enero de 2019**, a efecto de que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con un periodo mayor para inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral y, en consecuencia, obtengan su Credencial para Votar, garantizando a la ciudadanía el ejercicio de su derecho al sufragio.

Las ciudadanas y los ciudadanos que no cuentan con su Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro grave, podrán solicitar la reposición de dicho instrumento electoral hasta el **31 de enero de 2019**.

En el periodo comprendido entre el **1º de febrero** y el **20 de mayo de 2019**, las ciudadanas y los ciudadanos podrán solicitar la reimpresión de sus respectivas Credenciales para Votar, por causa de deterioro, extravío o robo, y sin requerir que se realicen modificaciones de la información contenida en el Padrón Electoral de la o del ciudadano incluido en la Lista Nominal de Electores. Asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos podrán acudir al módulo de atención ciudadana hasta el **31 de mayo de 2019** para recoger su credencial reimpresa.

II. Inscripción de jóvenes mexicanas y mexicanos que cumplen 18 años.

Con la finalidad de armonizar el plazo de las campañas especiales de actualización con el periodo de inscripción de las mexicanas y los mexicanos que cumplan los 18 años de edad hasta el día de los comicios inclusive, de conformidad con lo previsto en el artículo 139, párrafo 2 de la LGIPE, y con ello maximizar sus derechos político-electorales en su calidad de ciudadanas y ciudadanos, se estima conveniente que acudan a los módulos de atención ciudadana a inscribirse en el Padrón Electoral y solicitar su Credencial para Votar hasta el **15 de enero de 2019**.

Lo anterior permitirá que las mexicanas y los mexicanos que alcanzan la mayoría de edad hasta el día de la elección inclusive, tengan las facilidades para realizar su inscripción en el Padrón Electoral y, con ello,

ejercer su derecho y cumplir con su obligación político-electoral constitucional y legalmente establecida.

III. Disponibilidad de las Credenciales para Votar en los Módulos de Atención Ciudadana.

En atención al principio *pro homine*, el INE contempla la necesidad de que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con un plazo mayor para la obtención de su Credencial para Votar, con lo cual se salvaguarde el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Bajo esa arista, las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el **15 de enero de 2019** o bien, la reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave al **31 de enero de 2019**, estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el **10 de abril de 2019**.

Ahora bien, para el caso de Credenciales para Votar producto de trámites de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de instancias administrativas o resoluciones favorables del TEPJF, estarán disponibles hasta el **31 de mayo de 2019**.

IV. Corte de la Lista Nominal de Electores para Insaculación.

Con el objeto de promover la participación de la ciudadanía en la integración de las mesas directivas de casilla y ante la definición de los plazos de las campañas especiales de actualización, resulta adecuado que para la Primera Insaculación la fecha de corte de la Lista Nominal de Electores con la que se sorteará a las ciudadanas y los ciudadanos que serán capacitados para integrar las mesas directivas de casilla de los comicios locales a que se refiere el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, sea el **15 de enero de 2019**.

V. Corte de la Lista Nominal de Electores para Revisión, así como el periodo para la entrega del informe sobre las observaciones.

Con la finalidad de que exista concordia entre todas las disposiciones legales referidas en el presente Acuerdo, este Consejo General estima oportuno que la fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para

Revisión que se entregará para observaciones de las representaciones de los partidos políticos, de conformidad con el contenido del artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE, tenga un corte al **15 de enero de 2019**.

Lo anterior facilitará que la Lista Nominal de Electores para Revisión sea entregada en medio óptico a las representaciones de los partidos políticos el **15 de febrero de 2019**.

Asimismo, se considera apropiado que el periodo para la recepción de observaciones que, en su caso, formulen las representaciones de los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, concluya el **14 de marzo de 2019**.

De esta manera, resulta factible que el periodo para la revisión y análisis sobre la procedencia de las observaciones a Lista Nominal de Electores para Revisión que realice la DERFE, comprenda entre el **15 de marzo** y el **14 de abril de 2019**.

El informe sobre el análisis realizado a las observaciones que, en su caso, formulen los partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión en términos de lo previsto en el artículo 151 de la LGIPE, sea entregado por la DERFE a este Consejo General y a la CNV el **15 de abril de 2019**.

VI. Corte para la generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y la Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF.

A efecto de que la DERFE genere e imprima las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía para los Procesos Electorales Locales 2018-2019, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral, se estima oportuno definir el término para la integración de la Lista Nominal de Electores hasta el día **10 de abril de 2019**, de tal suerte que se incluyan los registros de aquellas ciudadanas y ciudadanos que acudan a obtener su respectiva Credencial para Votar hasta esa fecha, inclusive.

En ese sentido, se considera pertinente que la DERFE realice la entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía a los

Consejos Locales, para su distribución respectiva, el **10 de mayo de 2019**.

También se considera oportuno establecer como corte para la generación e impresión de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y Resoluciones favorables del TEPJF, el **10 de mayo de 2019**, de tal forma que se incluya en el referido instrumento electoral a las ciudadanas y a los ciudadanos que tuvieron una resolución favorable a su Instancia Administrativa o Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y que se haya ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o la incorporación al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Asimismo, se considera oportuno que la DERFE efectúe la entrega de las Listas Nominales de Electores producto de Instancias Administrativas y Resoluciones favorables del TEPJF, el **24 de mayo de 2019**.

VII. Procesamiento de resoluciones favorables producto de Instancias Administrativas y/o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para su inclusión en la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 143, párrafos 1 y 6 de la LGIPE, podrán solicitar la expedición de la Credencial para Votar o bien, la rectificación ante la oficina del INE responsable de la inscripción, aquellas ciudadanas o ciudadanos que, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar; habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio, o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio. La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación o, bien, la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el TEPJF.

Por ello, se estima pertinente que el corte para el procesamiento de las resoluciones favorables para que las ciudadanas y los ciudadanos obtengan su Credencial para Votar con motivo de la interposición de las mencionadas Instancias Administrativas y/o de las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

sea el **10 de abril de 2019**, con la finalidad de que se incluyan en las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía.

VIII. Resguardo de Credencial para Votar por Procesos Electorales Locales 2018-2019.

Resulta oportuno que las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización o bien, solicitado la reposición de dicho instrumento electoral al **15 de enero de 2019**, y que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el **10 de abril de 2019**, sean resguardadas a partir del **22 de abril de 2019** en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas.

Asimismo, se establece que las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan interpuesto una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y obtuvieron una resolución favorable o, en su caso, hubieren solicitado la reimpresión de ésta y no la hayan recogido, éstas sean resguardadas a partir del **1º de junio de 2019** en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, conforme al procedimiento que, para tal efecto, determine la DERFE con el conocimiento y, en su caso, opinión de la CNV.

Lo anterior, con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía, a las autoridades electorales y a los actores políticos la certeza de que las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares en los términos previstos para ello, no serán utilizadas para el ejercicio del voto durante los comicios próximos a celebrarse.

IX. Retiro de los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas.

Se estima oportuno que los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes se cancelen en términos del artículo 155 de la LGIPE, sean retiradas del módulo de atención ciudadana a más tardar el **1º de marzo de 2019**.

En este contexto, y a fin de dar claridad a los rubros anteriormente señalados, en la siguiente tabla se describen los plazos para la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en el marco de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como para la generación de los listados nominales que se utilizarán durante los comicios locales del 2 de junio de 2019:

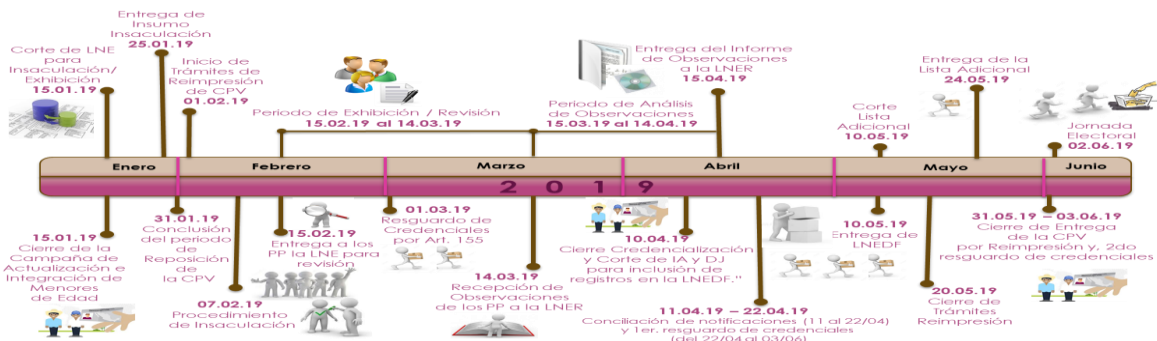
ACTIVIDAD O PROCESO	FUNDAMENTO LEGAL	AJUSTE EFECTUADO
Campañas especiales de actualización.	Artículo 138, párrafo 1 de la LGIPE. La Campaña Anual Intensa concluye hasta el 15 de diciembre de cada año.	La Campaña Anual Intensa para los Procesos Electorales Locales 2018-2019 concluirá el 15 de enero de 2019 , y la entrega de Credenciales para Votar será hasta el 10 de abril de 2019 .
Reposición de la Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro grave.	Artículo 138, párrafo 3, inciso b) de la LGIPE. Concluye hasta el 15 de diciembre de cada año.	El periodo para solicitar la reposición de la Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro grave concluirá el 31 de enero de 2019 . La entrega de la Credencial para Votar por reposición será hasta el 10 de abril de 2019 . La solicitud de reimpresión de la Credencial para Votar será del 1º de febrero hasta el 20 de mayo de 2019 . La entrega de la Credencial para Votar por reimpresión será hasta el 31 de mayo de 2019 .
Inscripción al Padrón Electoral de jóvenes mexicanos que cumplen 18 años.	Artículo 139, párrafo 2 de la LGIPE. A más tardar el día 30 de noviembre del año previo a la elección.	El periodo para la inscripción de menores de edad para votar en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, que cumplen 18 años hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, concluirá el 15 de enero de 2019 .

ACTIVIDAD O PROCESO	FUNDAMENTO LEGAL	AJUSTE EFECTUADO
Disponibilidad de la Credencial para Votar en los módulos de atención ciudadana.	Artículo 146, párrafo 1 de la LGIPE. Hasta el 1º de marzo del año de la elección.	Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el 15 de enero de 2019 o bien, la reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el 31 de enero de 2019 , estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el 10 de abril de 2019 . Las Credenciales para Votar producto de solicitudes de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2019 .
Corte de la Lista Nominal de Electores para la Primera Insaculación de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	Artículo 254, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE. Al 15 de diciembre del año previo al de la elección.	El corte de la Lista Nominal de Electores para la Primera Insaculación será al 15 de enero de 2019 .
Corte de la Listas Nominal de Electores para Revisión.	Artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE. Al 15 de diciembre del año previo de la elección.	El corte de la Lista Nominal de Electores para Revisión será al 15 de enero de 2019 .
Entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión.	Artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE. El 15 de febrero del año de la elección.	La fecha de entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión se realizará el 15 de febrero de 2019 .
Entrega de las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión.	Artículo 151, párrafo 2 de la LGIPE. Hasta el 14 de marzo del año de la elección, inclusive.	La entrega de las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión se realizará a más tardar el 14 de marzo de 2019 .

ACTIVIDAD O PROCESO	FUNDAMENTO LEGAL	AJUSTE EFECTUADO
Periodo para la revisión y análisis de las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión.	No aplica.	El periodo para que la DERFE revise y analice la procedencia de las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión será del 15 de marzo al 14 de abril de 2019.
Entrega del Informe a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión.	Artículo 151, párrafo 3 de la LGIPE. A más tardar el 15 de abril del año de la elección.	La DERFE hará entrega del Informe a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión al Consejo General y a la CNV a más tardar el 15 de abril de 2019.
Corte para la generación e impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía.	Artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE. Último día de febrero del año de la elección, inclusive.	El corte para la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía será el 10 de abril de 2019 , y su entrega a los OPL se realizará a más tardar el 10 de mayo de 2019.
Corte para el procesamiento de las resoluciones favorables de Instancias Administrativas y/o de las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.	Artículo 143, párrafo 3 de la LGIPE. Hasta el último día de enero para presentar una expedición de la Credencial para Votar, y a más tardar el 14 de marzo para presentar una solicitud de rectificación.	El corte para el procesamiento de las resoluciones favorables producto de Instancias Administrativas y/o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano será hasta el 10 de abril de 2019.
Corte de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF, así como su respectiva entrega.	No aplica.	El corte de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF será el 10 de mayo de 2019 y su entrega el 24 de mayo de 2019.

ACTIVIDAD O PROCESO	FUNDAMENTO LEGAL	AJUSTE EFECTUADO
Resguardo de las Credenciales para Votar que no hayan sido recogidas por sus titulares.	No aplica.	<p>Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización, así como de reposición hasta el 31 de enero de 2019, y que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 10 de abril de 2019, serán resguardadas del 22 de abril al 3 de junio de 2019 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p> <p>Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan interpuesto una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano o, en su caso, hubieren solicitado la reimpresión de ésta, serán resguardadas del 1º de junio hasta el 3 de junio de 2019 en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas.</p>
Retiro de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas.	<p>Artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE. Último día de febrero del año de la elección.</p> <p>Numeral 41 de los Lineamientos AVE. El 30 de marzo de cada año.</p>	Los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes se cancelen en términos del artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE, serán retiradas del módulo de atención ciudadana a más tardar el 1º de marzo de 2019 .

Para mayor claridad de lo antes expuesto, en el siguiente gráfico se presenta el esquema con los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019:



Por otra parte, se considera pertinente que el INE, a través de la DERFE, informe a la CNV acerca del número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, así como de aquellas producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y, de igual manera, se informe sobre el total de aquéllas que fueron entregadas a sus titulares hasta el **31 de mayo de 2019** inclusive, con motivo de la realización de dichos trámites.

De igual manera, resulta conveniente instruir a la DERFE para que coordine la instrumentación de las acciones para dar a conocer a la ciudadanía los plazos para la actualización del Padrón Electoral y la obtención de la Credencial para Votar en el marco de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

También, se considera pertinente instruir a la DERFE para que ponga a disposición de la ciudadanía, en los módulos de atención ciudadana en la semana posterior a la celebración de la Jornada Electoral, aquellas Credenciales para Votar que las ciudadanas y los ciudadanos solicitaron reimprimir por robo, extravío o deterioro grave, pero que no fueron recogidas en el periodo establecido.

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General puede aprobar los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

Es importante resaltar que la Comisión Nacional de Vigilancia, por tratarse del órgano de vigilancia de los trabajos relativos al Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde convergen las representaciones

de los partidos políticos y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, recomendó a este órgano superior de dirección aprobar los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, cuyos motivos para aprobar se expusieron en los considerandos del presente Acuerdo.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, de conformidad con el **Anexo** que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.

SEGUNDO. Se aprueban los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, de conformidad con lo siguiente:

1. Las campañas especiales de actualización concluirán el **15 de enero de 2019**;
2. El periodo para solicitar la reposición de la Credencial para Votar concluirá el **31 de enero de 2019**;

3. El periodo para solicitar la reimpresión de la Credencial para Votar se realizará **del 1º de febrero al 20 de mayo de 2019**;
4. La inscripción de las mexicanas y los mexicanos que cumplan 18 años de edad antes o bien, inclusive el día de la Jornada Electoral 2019, concluirá el **15 de enero de 2019**;
5. Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y/o actualización hasta el **15 de enero de 2019** o bien, la reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el **31 de enero de 2019**, estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el **10 de abril de 2019**;
6. Las Credenciales para Votar producto de solicitudes de reimpresión por robo, extravío o deterioro grave, así como de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, estarán disponibles hasta el **31 de mayo de 2019**;
7. La fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para realizar las tareas de la Primera Insaculación será el **15 de enero de 2019**;
8. La fecha de corte de las Listas Nominales de Electores para Revisión será el **15 de enero de 2019**;
9. La entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión se realizará el **15 de febrero de 2019**;
10. La entrega de las observaciones que se formulen a las Listas Nominales de Electores para Revisión se realizará a más tardar el **14 de marzo de 2019**;
11. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará el Informe a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión al Consejo General, a la Comisión Nacional de Vigilancia y a los Consejos de los Organismos Públicos Locales respectivos, a más tardar el **15 de abril de 2019**;
12. La fecha de corte para la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía será el **10 de abril de 2019**;

13. La entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía a los Organismos Públicos Locales se realizará a más tardar el **10 de mayo de 2019**;
14. El corte para el procesamiento de las resoluciones favorables recaídas a las Instancias Administrativas y/o de las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para la incorporación en la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos que las promovieron, será el **10 de abril de 2019**;
15. Las Credenciales para Votar de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan interpuesto una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano o, en su caso, hubieren solicitado la reimpresión de ésta, serán resguardadas **del 1º al 3 de junio de 2019** en las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas;
16. La fecha de corte de la Lista Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y Resoluciones favorables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el **10 de mayo de 2019**. El instrumento electoral referido integrará además a las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores en virtud de la aplicación de programas de depuración que se realicen con posterioridad al cierre de la credencialización;
17. La entrega de las Listas Nominales de Electores producto de Instancias Administrativas y Resoluciones favorables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los Consejos Locales para su distribución respectiva se realizará a más tardar el **24 de mayo de 2019**;
18. El primer resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el **10 de abril de 2019**, será **del 22 de abril al 3 de junio de 2019**, y
19. Los formatos de las Credenciales para Votar cuyas solicitudes se cancelen en términos del artículo 155 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 41 de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del

Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales, serán retiradas de los módulos de atención ciudadana a más tardar el **1º de marzo de 2019**.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informe a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que se generen por las solicitudes de reimpresión por causa de robo, extravío o deterioro grave, así como aquellas producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, e informe acerca del total de aquellas Credenciales para Votar que serán entregadas a sus titulares hasta el **31 de mayo de 2019** inclusive, con motivo de la realización de dichos trámites.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ponga a disposición de la ciudadanía, en los Módulos de Atención Ciudadana en la semana posterior a la celebración de la Jornada Electoral Local, aquellas Credenciales para Votar que las ciudadanas y los ciudadanos solicitaron reimprimir por robo, extravío o deterioro grave, que se encuentren resguardadas porque no fueron recogidas en el periodo establecido.

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores coordine la instrumentación de las acciones para dar a conocer a la ciudadanía los plazos para la actualización del Padrón Electoral y la obtención de la Credencial para Votar en los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este órgano superior de dirección.

SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Electorales haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas con Proceso Electoral Local 2018-2019, lo aprobado por este Consejo General.

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL USO DEL PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**Capítulo Único
Disposiciones generales**

1. Los presentes Lineamientos son de observancia general para los funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, quienes en el ámbito de su competencia se obligan a dar el debido cumplimiento de los mismos.
2. Los presentes Lineamientos serán aplicables para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por lo que hace al uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores de acuerdo a los requerimientos que formulen los Organismos Públicos Locales, en el marco de los Procesos Electorales Locales. La instrumentación de los Lineamientos se llevará a cabo conforme a los manuales y procedimientos técnico-operativos que emita dicha Dirección Ejecutiva por conducto de sus áreas operativas.

De la misma forma, estos Lineamientos serán aplicables para aquellos procedimientos de participación ciudadana, en los términos y condiciones previstos por la legislación electoral local. Los manuales y procedimientos se sujetarán a los presentes Lineamientos.

3. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, para la celebración de los Procesos Electorales Locales en las respectivas entidades federativas.
4. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos serán resueltas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con el conocimiento y en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia.
5. Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, las y los representantes de los Partidos Políticos nacionales y locales y, en su caso, las y los representantes de las Candidaturas Independientes,

en términos de lo dispuesto por el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores.

6. Las bases respecto del uso y destino de los instrumentos electorales actualizados a que refieren los presentes Lineamientos, se establecerán en los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos que el Instituto Nacional Electoral celebra con los Organismos Públicos Locales, atendiendo a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; a efecto de garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los Procesos Electorales Locales correspondientes.
7. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá informar mensualmente a la Comisión Nacional de Vigilancia, a la Comisión del Registro Federal de Electores, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del propio Instituto Nacional Electoral, de las actividades que se realicen en el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en el marco de los presentes Lineamientos.
8. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:
 - a) **Actualización:** Es el trámite o la acción que la ciudadanía realiza cuando acude a los módulos de atención ciudadana para actualizar sus datos personales o de domicilio que se tienen en el Padrón Electoral, y que al procesarlo genera un nuevo número de emisión de la Credencial para Votar;
 - b) **Centros de Consulta:** Centro Nacional de Consulta del Padrón Electoral y Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral;
 - c) **CNV:** Comisión Nacional de Vigilancia;
 - d) **Consejo General:** Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
 - e) **Convenios de Coordinación y Colaboración:** Instrumentos que firma el INE con cada OPL para la implementación de las actividades relacionadas con el objetivo de los presentes Lineamientos. Incluye, en su caso, los Anexos Técnicos que al efecto se determinen;

ANEXO

- f) **CRFE:** Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo General del INE;
- g) **Datos personales:** La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;
- h) **DERFE:** Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE;
- i) **INE:** Instituto Nacional Electoral;
- j) **Inscripción:** Trámite que realiza la ciudadanía que acude al módulo de atención ciudadana, y que cumple con los requisitos legales para incorporarse al Padrón Electoral y obtener su Credencial para Votar;
- k) **Juicio Ciudadano:** Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano;
- l) **JDE:** Junta Distrital Ejecutiva del INE;
- m) **JLE:** Junta Local Ejecutiva del INE;
- n) **LGIPE:** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- o) **Lineamientos:** Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019;
- p) **Lineamientos AVE:** Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales;

ANEXO

- q) **Lista Nominal de Electores:** Relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección de quienes hayan obtenido su Credencial para Votar;
- r) **Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición:** Lista Nominal de Electores para observaciones de los Partidos Políticos y la ciudadanía;
- s) **Listado Adicional:** Lista Nominal de Electores con fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del TEPJF;
- t) **LNEDF:** Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía;
- u) **OPL:** Organismo Público Local;
- v) **Padrón Electoral:** Es la relación en la que consta la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero. Se considera como información básica los siguientes datos:
 - I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
 - II. Lugar y fecha de nacimiento;
 - III. Edad y sexo;
 - IV. Domicilio actual y tiempo de residencia;
 - V. Ocupación;
 - VI. En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y
 - VII. Entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio;
- w) **Partidos Políticos:** Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos con registro ante el INE o ante el OPL correspondiente;

- x) **RedINE:** Red Nacional de Informática del INE;
- y) **Reimpresión de Credencial para Votar:** Trámite que realiza la ciudadana o el ciudadano para reponer su Credencial para Votar en caso de que se encuentre deteriorada, extraviada o le fue robada, siempre y cuando se encuentre incluido en la Lista Nominal de Electores y sin requerir que se realicen modificaciones de la información del Padrón Electoral; asimismo, se genera e imprime la Credencial para Votar con el mismo número de emisión de credencial y la misma fotografía de la ciudadana o del ciudadano. En dicho trámite se actualiza el Código de Identificación de Credencial;
- z) **Reincorporación:** Acción que se refiere a aquellos registros que, habiendo estado en el Padrón Electoral, fueron dados de baja, respecto de los cuales la ciudadana o el ciudadano solicita una Credencial para Votar por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
 - I. Rehabilitación de sus derechos político-electorales;
 - II. Inscripción de un mismo registro cuya solicitud hubiese sido cancelada por omisión en la obtención de su Credencial para Votar, y
 - III. Pérdida de vigencia de su Credencial para Votar;
- aa) **Reposición de Credencial para Votar:** Trámite que la ciudadanía puede solicitar, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Padrón Electoral y su Credencial para Votar se encuentre deteriorada, extraviada o le fue robada, y que al procesarlo genera un nuevo número de emisión de la Credencial para Votar; además, se actualizan los datos biométricos (fotografía, firma, huellas) de la ciudadana o del ciudadano y se genera un nuevo número de emisión de la credencial;
- bb) **TEPJF:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y
- cc) **UTVOPL:** Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE.

**TÍTULO II
PADRÓN ELECTORAL**

**Capítulo Primero
Uso y Entrega del Padrón Electoral**

**Sección Primera
Estadísticos del Padrón Electoral**

9. En apoyo a las actividades que se habrán de instrumentar en los Procesos Electorales Locales, la DERFE generará, de cada una de las secciones del Padrón Electoral, los estadísticos conforme se establece en los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos con los OPL.
10. La entrega de los estadísticos correspondientes a cada una de las secciones del Padrón Electoral se realizará mensualmente, por conducto de la Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia de la DERFE y de las JLE en cada una de las entidades federativas con Proceso Electoral Local, a la CNV y a los OPL, respectivamente; publicándose, además, en el Sistema de Información Ejecutiva de la DERFE.

**Sección Segunda
Verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de las
candidaturas a los cargos de elección popular**

11. La DERFE deberá verificar la situación registral de las candidaturas a los cargos de elección popular en el Padrón Electoral, conforme a lo establecido en los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos con los OPL.

A la conclusión de los trabajos realizados respecto de las verificaciones de la situación registral de los apoyos ciudadanos, se informará a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas en la CNV, a la CRFE y a los OPL que hayan solicitado la verificación de apoyos ciudadanos de las Candidaturas Independientes.

TÍTULO III LISTA NOMINAL DE ELECTORES

Capítulo Primero Listas Nominales de Electores

12. En apoyo a los Procesos Electorales Locales, la DERFE generará los instrumentos y productos electorales siguientes:
- a) **Lista Nominal de Electores para Revisión:** Es la relación que contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan obtenido su Credencial para Votar hasta el **15 de enero de 2019**, misma que será entregada a los Partidos Políticos para su revisión a más tardar el **15 de febrero de 2019**. Dicha relación servirá para que los Partidos Políticos y/o Candidaturas Independientes acreditados ante los OPL, formulen sus observaciones hasta el **14 de marzo de 2019** inclusive. Dichos listados no deberán incluir la fotografía de las ciudadanas y los ciudadanos;
 - b) **Lista Nominal de Electores para Exhibición:** Es la relación que contiene los nombres de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan obtenido su Credencial para Votar hasta el **15 de enero de 2019**, donde la ciudadanía pueda consultar a través de la página de Internet del INE o por medio de llamadas a INETEL, sobre su inclusión en el Padrón Electoral y en la correspondiente Lista Nominal de Electores, y en su caso formular las solicitudes de rectificación a la Lista Nominal de Electores;
 - c) **LNEDF:** Es la relación de ciudadanas y ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral con credencial vigente, y de aquellos que hayan obtenido su Credencial para Votar hasta el **10 de abril de 2019** y estará organizada por número de tanto conteniendo, número consecutivo, nombre completo, número de emisión y fotografía de la ciudadana o del ciudadano, agrupados por distrito electoral local y al interior por municipio, sección y casilla electoral, y al interior en orden alfabético, así como aquellos registros de ciudadanas y ciudadanos que hayan resultado favorecidos producto de Instancias Administrativas y resoluciones favorables del TEPJF a más tardar el **10 de abril de 2019**,

la cual será entregada a través de la JLE al OPL respectivo a más tardar el **10 de mayo de 2019**, y

- d) **Listado Adicional:** Es la relación que contiene el nombre completo, número de emisión, número de tanto y fotografía de las ciudadanas y los ciudadanos, entidad, distrito electoral local, municipio, sección y casilla electoral, y al interior en orden alfabético, que al **10 de mayo de 2019** hayan obtenido una resolución favorable con motivo de Instancias Administrativas o Juicios Ciudadanos y se haya ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o la incorporación al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a fin de ejercer su derecho al voto el día de la Jornada Electoral local. El Listado Adicional se entregará a la JLE a más tardar el **24 de mayo de 2019**, para que a su vez sea entregada a los OPL.

Capítulo Segundo

Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición

Sección Primera

Lista Nominal de Electores para Revisión

- 13. La DERFE integrará la Lista Nominal de Electores para Revisión con el nombre de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en cada una de las secciones del Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para Votar, en los términos de la LGIPE y los Lineamientos AVE.
- 14. La Lista Nominal de Electores para Revisión contendrá exclusivamente los datos siguientes:
 - a) Número consecutivo;
 - b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombres);
 - c) Estado;
 - d) Distrito Local;
 - e) Municipio, y
 - f) Sección electoral.

15. A más tardar el **15 de febrero de 2019**, la DERFE entregará en medio electrónico la Lista Nominal de Electores para Revisión a las representaciones de cada uno de los Partidos Políticos que participen en el Proceso Electoral Local correspondiente. En la misma fecha, la DERFE dispondrá en los Centros de Consulta los listados completos y diferenciados de las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en dichas relaciones.

La entrega se realizará bajo el esquema siguiente:

- a) A las y los representantes propietarios de los Partidos Políticos acreditados ante la CNV se les entregará un tanto de la Lista Nominal de Electores para Revisión en los términos de los Lineamientos AVE. Para tal efecto y con el fin de disponer oportunamente de este producto electoral, la DERFE solicitará por escrito a las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV, a más tardar el **8 de enero de 2019**, conforme al procedimiento de entrega establecido, confirmen la solicitud de dicho producto electoral a más tardar el **15 de enero de 2019**, precisando el nombre y cargo de las personas que designen para recibir el listado nominal;
- b) Las y los representantes de los Partidos Políticos con registro nacional acreditados ante el OPL deberán solicitar por escrito al OPL la entrega de un tanto de la Lista Nominal de Electores para Revisión a más tardar el **7 de enero de 2019**, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se usará para fines distintos a los previstos en la normatividad y que no se realizará una reproducción o copia de la misma. A través de la UTVOP, el OPL enviará a la DERFE, con copia de conocimiento para el Vocal del Registro Federal de Electores de la JLE correspondiente, la relación de representantes que solicitaron la Lista Nominal de Electores para Revisión anexando copia de los escritos de solicitud y los formatos de manifestación, a más tardar el **15 de enero de 2019**. La DERFE informará el **18 de enero de 2019** a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV de las solicitudes de entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión que sus representantes ante los OPL hayan formulado, anexando copia de los escritos de solicitud y de los formatos de manifestación.

La DERFE entregará los tantos solicitados a los OPL, por conducto de la JLE correspondiente, a más tardar el **14 de febrero de 2019** a efecto

de que al día siguiente los OPL realicen la entrega a las representaciones partidistas que lo solicitaron, con excepción de aquellos casos en los que la o el representante propietario del Partido Político acreditado ante la CNV manifieste expresamente que no se formalice alguna de las entregas, y

- c) Las y los representantes propietarios de los Partidos Políticos con registro local acreditados ante el OPL que requieran un tanto de la Lista Nominal de Electores para Revisión deberán solicitarlo por escrito al OPL a más tardar el **7 de enero de 2019**, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se usará para fines distintos a los establecidos en la normatividad electoral y que no se realizará una reproducción o copia de la misma. A través de la UTVOP, el OPL enviará a la DERFE, con copia de conocimiento para el Vocal del Registro Federal de Electores de la JLE correspondiente, la relación de representantes que solicitaron la Lista Nominal de Electores para Revisión, anexando copia de los escritos de solicitud y de los formatos de manifestación, a más tardar el **15 de enero de 2019**.

La DERFE, por conducto de la JLE correspondiente, entregará los tantos solicitados a los OPL, a efecto de que éstos realicen la entrega a las representaciones partidistas que lo solicitaron.

A más tardar el **22 de febrero de 2019**, la DERFE informará a la CNV de las entregas de la Listas Nominales de Electores para Revisión que hayan sido realizadas, precisando el nombre de la o del representante solicitante, el Partido Político al que representa, la fecha de entrega de la Listas Nominales de Electores para Revisión y el ámbito en que fue entregada, sea la CNV o el OPL.

Con la finalidad de proteger los datos personales de la ciudadanía, se aplicará un protocolo de seguridad en la generación, entrega, devolución, borrado y destrucción de las Listas Nominales de Electores para Revisión, en términos de lo establecido en los Lineamientos AVE. Este protocolo deberá asegurar que únicamente las y los representantes autorizados de los Partidos Políticos sean quienes tengan acceso a la información, mediante el uso de una llave privada personalizada creada por el propio representante del Partido Político.

Los OPL deberán informar de manera inmediata al INE, por conducto de la JLE, las sustituciones o cambios en los nombramientos de las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante esos organismos, incluyendo copia de conocimiento para el Vocal del Registro Federal de Electores de la JLE correspondiente, con la finalidad de que no se realice la entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión a dichos representantes.

- 16.** Los OPL recibirán hasta el **14 de marzo de 2019** las observaciones que formulen los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión. Las observaciones se harán señalando hechos y casos concretos e individualizados, y serán entregadas preferentemente en un medio óptico con la finalidad de agilizar y mejorar la búsqueda en el Padrón Electoral, en formato .TXT separado por el carácter “|” (“pipe” o “tubo”), el cual deberá contener los campos siguientes:
- a) Número consecutivo por sección que fue entregado en la Lista Nominal de Electores para Revisión, y que permite identificar de manera única a la ciudadana o del ciudadano;
 - b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombre);
 - c) Estado;
 - d) Sección Electoral;
 - e) Tipo de observación atendiendo preferentemente al catálogo de claves de observaciones al que se refiere el numeral 17 de los presentes Lineamientos, y
 - f) Campo o referencia que vincule los registros que se identifican como presuntos duplicados.

Para el caso de las observaciones que formulen los Partidos Políticos, se atenderán en términos de lo previsto en el “Procedimiento para el tratamiento de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión”, que fue aprobado por la CNV mediante el Acuerdo 1-EXT/14: 29/11/2017.

17. La DERFE emitirá el catálogo de Claves de Observaciones, a efecto de que los Partidos Políticos puedan utilizarlo al formular sus observaciones, el cual será hecho de conocimiento a los OPL por conducto de la UTVOPL.
18. Los OPL remitirán a la DERFE las observaciones de los Partidos Políticos de manera inmediata y a más tardar hasta el **15 de marzo de 2019**, la cual procederá a su análisis y, en caso de resultar legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores generando el correspondiente informe del resultado del análisis y dictaminación. Para realizar el análisis y la dictaminación de procedencia, se utilizará el “Procedimiento para el tratamiento de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión”, aprobado por la CNV mediante el Acuerdo 1-EXT/14: 29/11/2017.
19. A más tardar el **15 de abril de 2019**, la DERFE entregará el informe en medio electrónico a los miembros del Consejo General del INE, así como a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV, incluyendo un archivo con la relación de las observaciones formuladas y la respuesta obtenida a partir del análisis efectuado.

La DERFE proporcionará a los OPL, en medio electrónico, el informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se entregue a los Partidos Políticos con registro local acreditados ante él.

La DERFE pondrá a disposición la información de los resultados del análisis y la respuesta en los Centros de Consulta.

20. Los Partidos Políticos podrán impugnar ante el TEPJF el informe a que se refiere el numeral anterior, en los términos previstos en la LGIPE. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el TEPJF haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General sesionará para declarar que el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores son válidos y definitivos.
21. La devolución de las Listas Nominales de Electores para Revisión entregadas en medio electrónico a las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV y los OPL, se deberá efectuar a más tardar el **19 de marzo de 2019**, por la misma vía en que fue entregada y manifestando bajo protesta de decir verdad que la información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la DERFE determine su destino final de conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la CNV.

Sección Segunda
Lista Nominal de Electores para Exhibición

22. La DERFE pondrá a disposición la Lista Nominal de Electores para Exhibición de manera permanente en el servicio de consulta disponible en la página electrónica del INE, así como en los Centros Distritales de Información Ciudadana en cada JDE, donde la ciudadanía podrá consultar de forma electrónica su inclusión o exclusión en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores y, en su caso, formular las observaciones respectivas a través de los medios que disponga el INE.
23. Las observaciones que sean formuladas por la ciudadanía se harán llegar a la DERFE por conducto de la JLE, mediante la Instancia Administrativa que la ciudadana o el ciudadano promueva, la cual una vez que sea analizada y examinada, será resuelta y se hará del conocimiento de la ciudadana o del ciudadano correspondiente, así como de la CNV, mediante el informe que entregue el **15 de abril de 2019**.

Sección Tercera
Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía

24. El INE por conducto de la DERFE integrará la LNEDE que habrá de utilizarse en la Jornada Electoral local, con los nombres y fotografías de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral que hayan obtenido la Credencial para Votar hasta el **10 de abril de 2019**, en los términos establecidos en el Reglamento de Elecciones del INE.
25. El INE entregará la LNEDE a los OPL a más tardar el **10 de mayo de 2019**.
26. La entrega de la LNEDE se llevará a cabo en los términos de los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos con los OPL, en presencia del personal de la Oficialía Electoral del INE, mediante Acta Entrega-Recepción que será levantada por el personal de dicha Oficialía Electoral.
27. Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se reproducirá por ningún medio la LNEDE que le sea entregada con motivo de las actividades a desarrollar durante la Jornada Electoral local.

Sección Cuarta

Lista Nominal de Electores con fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Listado Adicional)

28. La DERFE integrará el Listado Adicional con el nombre y la fotografía de aquellas ciudadanas y ciudadanos que, habiendo presentado una Instancia Administrativa o un Juicio Ciudadano, hayan sido favorecidos con una resolución en la que se haya ordenado la generación, entrega de la Credencial para Votar y/o incorporación al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a efecto de garantizar su derecho al voto el día de la Jornada Electoral local, en los términos establecidos en el Reglamento de Elecciones del INE.
29. El Listado Adicional considerará a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que hayan sido favorecidos en la resolución de una Instancia Administrativa o por un Juicio Ciudadano hasta el **10 de mayo de 2019**. El Listado Adicional se entregará a la JLE a más tardar el **24 de mayo de 2019**, para que a su vez sea entregado a los OPL.
30. La entrega del Listado Adicional se llevará a cabo en los términos de los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos con los OPL, a través de la JLE de la entidad federativa que corresponda, y se hará en presencia del personal de la Oficialía Electoral del INE, mediante Acta Entrega-Recepción que será levantada por el personal de dicha Oficialía Electoral.
31. Los OPL deberán diseñar los mecanismos que garanticen que no se reproducirá por ningún medio el Listado Adicional que le sea entregado con motivo de las actividades a desarrollar durante la Jornada Electoral local.

Capítulo Tercero

Entrega, Resguardo y Devolución de las Listas Nominales de Electores

32. En los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos se establecerá la forma particular en que el INE y el OPL correspondiente deberán asumir los costos generados de los instrumentos y productos relacionados con el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, conforme al análisis y cálculo de los recursos humanos, materiales e insumos de cada una de las actividades a desarrollar y se elaborará el

correspondiente Anexo Financiero; asimismo, el o los periodos de aportación quedarán establecidos en el propio Convenio que para tal efecto se suscriba.

- 33.** La DERFE será la responsable de proporcionar debidamente actualizados los instrumentos, productos y servicios relacionados con el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, con la finalidad de que las actividades que se desarrollen durante el Proceso Electoral Local puedan ser llevadas a cabo en los períodos que hayan sido definidos.
- 34.** El intercambio de información confidencial entre los Centros de Impresión y las JLE, se llevará a cabo mediante las siguientes medidas de seguridad:
 - a) La información que genere el INE con motivo de las solicitudes que formulen los OPL deberá someterse a un método de cifrado que será determinado por el INE;
 - b) El envío y recepción de la información se llevará a cabo por equipos de cómputo dedicados (servidores) que estarán dentro de las instalaciones del INE;
 - c) El acceso a los servidores estará restringido para el uso exclusivo del personal autorizado;
 - d) Los equipos exclusivamente tendrán acceso a la RedINE, lo que garantiza que ninguna persona ajena al INE tendrá acceso a la información de los mismos;
 - e) Recibida la información de cada uno de los listados nominales por el Centro de Impresión o por la JLE, será almacenada en un servidor para realizar las actividades de impresión;
 - f) Corroborado el acceso a la información por el Centro de Impresión o por la JLE, la información deberá ser borrada del servidor donde fue recibida, y
 - g) Una vez concluidos los trabajos de impresión de los listados nominales, el Centro de Impresión o la JLE deberán llevar a cabo un procedimiento de borrado seguro, a fin de destruir la información contenida en el disco o discos o medio electrónico o cualquier otro medio donde hubiera sido copiada, guardada o grabada la información.

- 35.** La devolución de los tantos impresos de la LNEDF y el Listado Adicional que se hayan entregado y utilizado en la Jornada Electoral local por los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes, se realizará en términos de lo dispuesto en los Lineamientos AVE y demás normatividad aplicable.

TÍTULO IV
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL
PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES

Capítulo Único
Confidencialidad

- 36.** El INE y los OPL serán responsables de proteger los datos personales que obran en su poder dentro del ámbito de sus responsabilidades, además de salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGIPE, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad que emite el INE sobre la materia.
- 37.** La DERFE y sus áreas operativas implementarán los mecanismos que sean necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
- 38.** Los funcionarios públicos, las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas Independientes que tengan acceso a los instrumentos y productos electorales, únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos previstos en la legislación de la materia, así como de los compromisos adquiridos a través de los Convenios de Coordinación y Colaboración y sus respectivos Anexos Técnicos.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido realizar también en este caso las gestiones para que el Acuerdo recién aprobado se publique en el Diario Oficial de la Federación. _____

Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del Modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

En 1992 el Instituto Federal Electoral inició la expedición de la Credencial para Votar con Fotografía como uno de los elementos clave para darte solidez y máxima confiabilidad a uno de los instrumentos que hoy se ha convertido en la columna vertebral de la confianza y credibilidad en las elecciones, el Padrón Electoral, es decir, la relación de los mexicanos con 18 años o más, la base de datos más importante de los mayores de edad en este país. _____

Con la aplicación de la normativa transitoria de la Ley General de Población que en julio de 1992 estableció que en tanto se expidiera la Cédula de Identidad Ciudadana, la Credencial para Votar con Fotografía podría utilizarse como documento oficial de identificación, hoy esta credencial se ha convertido en el instrumento más acreditado de identificación para todo tipo de trámites en instituciones privadas y en instituciones públicas. _____

El Instituto Federal Electoral en su momento, y hoy el Instituto Nacional Electoral, han sido cuidadosos en concertar con diversas instituciones públicas y privadas, así como

con asociaciones civiles para reconocer a la Credencial para Votar y garantizar un uso seguro y auténtico de la misma. _____

Debo reconocer y dejar constancia del apoyo y participación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, donde los partidos políticos han propuesto diversas acciones para reforzar al referido instrumento electoral con elementos de seguridad que lo hacen infalsificable, de la misma forma, para implementar esquemas para la verificación de las credenciales que sean exhibidas como medio de identificación ante las propias instituciones privadas y públicas. _____

A lo largo de los años, el Instituto ha emitido 5 modelos de Credencial para Votar; el primero de ellos en 1992 con el formato que incorporó la fotografía Polaroid. _____

En octubre de 2001 el segundo formato incluyó la fotografía digital y se captaba la firma y huella dactilar al momento de la entrega de la credencial. _____

A partir de septiembre de 2008 se incorporó una fotografía fantasma y el dato de la CURP, así como la definición de la vigencia por 10 años a partir de la fecha de expedición. _____

En noviembre del año 2013, se reubicó la fotografía a lado izquierdo de la credencial para cumplir con estándares internacionales y se incorporó la impresión del fondo de la credencial en alta resolución, como la utilizan los billetes, así como tintas ópticamente variables, entre otras medidas de seguridad. _____

Y a partir de julio del año 2014 se hicieron las adecuaciones por el cambio del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral al Modelo que se produce actualmente, producto de la Reforma Electoral de ese momento. _____

En total se han expedido más de 245 millones de credenciales por el Instituto Federal Electoral y más de 60 millones por el Instituto Nacional Electoral. _____

El 23 de octubre del año 2013 este Consejo General aprobó que se consultara de forma expresa y por escrito a los ciudadanos sobre la incorporación visible de los datos de calle, número exterior y número interior del domicilio en el anverso de la Credencial para Votar y que, en todos los casos, dichos datos se incluyan de forma cifrada en el reverso de la misma. Esta opción quedó incorporada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el párrafo 4 del artículo 156. _____

Con la emisión de cada Modelo de Credencial para Votar se ha buscado actualizar los elementos de seguridad con las nuevas tecnologías, incorporar los elementos de información establecidos en la normativa vigente, y adoptar estándares internacionales para la emisión de documentos de identificación. _____

El Proyecto de Acuerdo que se está presentando plantea mantener los materiales y el diseño general de la Credencial para Votar de territorio nacional y del extranjero, considerando las siguientes adecuaciones: _____

Primero, incrementar de 32 a 50 el número de los caracteres para los nombres y apellidos de los ciudadanos, a fin de estandarizar estos datos con las actas de nacimiento emitidas por los registros civiles. _____

Siguiente, reubicar la firma de la o del titular en el anverso de la credencial, para tener en un mismo lado del documento los elementos asociados a su uso, como medio de identificación. _____

Siguiente, dar la opción a la ciudadanía o al ciudadano para que aparezca o no visible en el anverso de la credencial el dato del sexo. _____

Eliminar los datos repetidos del domicilio como el Estado, Municipio y localidad. _____

Resaltar los elementos de sección y uniendo en un solo campo el año de emisión y año de vigencia, para facilitar a la ciudadanía la visibilidad de los datos relevantes para ubicar su casilla y saber si su documento sigue siendo útil para votar y como medio de identificación. _____

También se reubica la huella dactilar digitalizada en los códigos de barra, considerando que se trata de un dato personal sensible. _____

Se actualiza el código dimensional PDF417, por códigos bidimensionales Quick Response (QR) de alta densidad, para almacenar datos de forma comprimida y encriptada, que permitirán verificar la autenticidad de la Credencial para Votar. _____

En particular, para la Credencial para Votar desde el extranjero, se propone omitir la leyenda “desde el extranjero” e integrarse ésta al código bidimensional Quick Response (QR) de alta densidad en el reservo de la credencial, con el objetivo de facilitar su reconocimiento como medio de identificación, homologando su imagen con la emitida en territorio nacional. _____

Finalmente se agrega un Punto de Acuerdo para que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presente al Consejo General la propuesta sobre el uso, funcionalidad y verificación de la información que contengan los códigos bidimensionales Quick Response (QR) de alta densidad, para el almacenamiento y acceso rápido que forman parte de los elementos del Modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional, y la credencial que se va a utilizar desde el extranjero. ____ Este Modelo propuesto permitirá fortalecer a la Credencial para Votar como el instrumento para el ejercicio del derecho al voto, así como el medio más seguro, más confiable y preferente de identificación de los ciudadanos mexicanos. _____

Quisiera también señalar a integrantes del Consejo General, que estamos proponiendo que se adopten algunas erratas que ha propuesto concretamente la Consejera Electoral Claudia Zavala, respecto del punto primero del Acuerdo, al final prácticamente del punto, después del año 2019, se agregaría “así como aquellas que se celebren en 2019, derivadas de los Procesos Electorales Locales 2017-2018”. ____

Hay también una propuesta de adición de parte del Consejero Electoral Enrique Andrade, que estoy entregando aquí a la consideración de la Secretaría del Consejo General. _____

Finalmente, Consejero Presidente, hago también patente un ajuste al Considerando Tercero del Proyecto de Acuerdo, que ha sugerido el Consejero Electoral Enrique Andrade, también lo entrego aquí a la Secretaría del Consejo General. _____

Finalmente, ayer en la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, hubo una interesante deliberación con relación al punto que tiene que ver con la supresión de la expresión desde el extranjero que se utiliza para los mexicanos que residen fuera del país, creo que es una medida que al retirar esa parte, elimina una distinción innecesaria entre los formatos de las credenciales con los mexicanos que residen dentro del país y con los que están fuera del propio país. _____

Por eso en la Comisión mayoritaria, se apoyó con el voto de todos los Consejeros Electorales a reserva de lo que aquí se acuerde en definitiva, también la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel para que la parte que tiene que ver con la identificación precisa del sexo de la persona, aparezca o no visible en la credencial, es un tema importante que ayer se acordó no presentar en el contexto de la mica. ____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ¿me permite una pregunta? _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Claro Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Puede concluir? __

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Le agradezco mucho Consejero Presidente. _____

Quiero decir que hicimos un Acuerdo con los representantes de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia, cosa que agradezco en verdad, para que el contenido del Código Quick Response (QR), es decir, la información que estará dentro del Código Quick Response (QR), sea definida con posterioridad, por eso viene una instrucción a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que eso se verifique, primero en la Comisión de Vigilancia, en la Comisión del Registro y se traiga obviamente a la consideración de este Consejo General, con lo cual me parece que podemos avanzar en todos los trámites que tienen que ver con la licitación correspondiente, dado que el Contrato actual está por concluir con la empresa respectiva. _____

Entonces, quiero agradecer la generosidad de los partidos políticos para que podamos hacer esto y el diseño del formato incluya los espacios del Código Quick Response (QR), en los términos que están planteados en el Proyecto de Acuerdo que ahora estamos presentando. _____

Muchas gracias a todos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Permítanme intervenir compañeras y compañeros del Consejo General, la construcción del Sistema Electoral Mexicano, ha generado bienes públicos que trascienden a las herramientas necesarias para la mera disputa de los poderes públicos en las urnas, tal vez el ejemplo más notable de ellos, sea la Credencial para Votar con Fotografía y todo el aparato técnico informático de infraestructura y por supuesto, el personal que sustenta el Registro Federal de Electores, el Padrón

Electoral y por ende, la base de datos sobre la que la Credencial para Votar se expide._____

La arbitrariedad opacidad en los resultados y falta de competencia en las elecciones organizadas hasta hace 30 años, sembraron entonces el germen de la desconfianza, no solo en las instituciones públicas, sino en general en los procesos comiciales, de ahí que hundan las preocupaciones vertebradoras de las reformas electorales desde 1990, desmontar los factores que alimentaban los señalamientos de alteración de los resultados en las elecciones._____

Para lograrlo, se diseñaron múltiples procedimientos y se transparentaron todos ellos, se involucró a los partidos políticos en prácticamente todas las instancias revisoras de las áreas de organización electoral y se ha mantenido una política de incorporación de innovaciones tecnológicas para que la ciencia y la tecnología contribuyan al proceso de construcción de confianza, tanto entre los partidos políticos como de cara a la sociedad._____

En el ámbito del Registro de Electores, y especialmente de la Credencial para Votar, el escrutinio público, partidista y académico ha sido tan acucioso que el Instituto Nacional Electoral hoy cuenta con la base de datos más grande y más actualizada y confiable de las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años y además de quienes no viven en el territorio nacional, como ustedes saben, rondamos ya el millón de solicitudes, de credencialización de mexicanos desde el extranjero._____

Todo ello, conformado con los mismos estándares técnicos, una base de datos de las y los ciudadanos mexicanos que residan en otros países mediante el proceso de credencialización foráneo._____

La confiabilidad lograda con la Credencial para Votar ha permitido que dicho documento se haya convertido en el instrumento privilegiado para acreditar la identidad de las y los ciudadanos mexicanos en las últimas 3 décadas. _____

Hoy por hoy la Credencial para Votar es el documento que el Estado Mexicano a través del Instituto Nacional Electoral ha construido de manera colaborativa y con corresponsabilidad de la ciudadanía, de especialistas y de partidos políticos para que las y los mexicanos de 18 años y más nos identifiquemos ante instituciones públicas, privadas, centros del sector salud, trámites notariales, educativos, bancarios, etcétera. _____

De ahí la importancia de no dejar en la incorporación de innovaciones tecnológicas para la producción de este mecanismo que es fundamental para que las y los mexicanos ejerzamos nuestro derecho a la identidad. _____

Ese es el motivo del Proyecto de Acuerdo que hoy está frente a nosotros, aumentar, como ya señalaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, las medidas de seguridad de la Credencial para Votar con mecanismos de seguridad y el uso de medidas de cifrado asimétrico que potencien su habilidad tanto en operaciones con instituciones públicas y/o privadas, como en procesos de participación ciudadana. ____ Estas innovaciones no implican la necesidad de reimprimir, como ustedes saben, o sustituir las credenciales vigentes, estas nuevas credenciales mantendrán un período de vigencia a la par de las anteriores conforme a la temporalidad establecida en cada credencial, es decir, coexistirán las credenciales del nuevo Modelo, como ha ocurrido cada vez que se aprueban cambios en la misma con los Modelos anteriores, con los hoy vigentes. _____

Se trata de aprovechar que el Contrato con la empresa que produce las actuales credenciales vencerá próximamente, para agregar esas nuevas medidas de seguridad basadas en la información que se pueda obtener un código Quick Response (QR), que la licitación que tendrá que hacerse para la producción de estos mecanismos de identidad en los próximos años pueda incorporarse en la licitación que ya se ha mencionado. _____

Me importa subrayar un punto adicional, el aumento de las medidas de seguridad que estamos planteando a este Consejo General fortalece la credencial, su robustez, su infalsificabilidad, pero no incrementará su costo, de hecho el costo de la Credencial para Votar que se produce este año y la que se producirá con las nuevas medidas de seguridad representa apenas un 40 por ciento del costo que en su momento representaban las credenciales Polaroid que se produjeron hasta 2001 por el Instituto Federal Electoral. _____

Y me importa también subrayar en los tiempos que corren la razonabilidad del presupuesto que se ha presentado a la consideración de la Cámara de Diputados por parte de esta institución, señalando un dato que es fundamental, el 32 por ciento de ese presupuesto, es decir un monto equivalente a 3 mil 300 millones de pesos es el

costo que tiene para esta institución el beneficio que le brindamos a la sociedad mexicana de contar con un mecanismo de identificación de manera gratuita. _____

No es un gasto, es una inversión en la maximización de un derecho que cotidianamente día tras día beneficia a la inmensa mayoría, al inmenso monto de la población de mexicanos. _____

Esta credencial, en otras palabras, será más segura y más barata que antes, pero además los insumos que se generan a partir del proceso de credencialización, es decir, la permanente y cotidiana actualización de la base de datos biométricos más grande y viva del Estado Mexicano, hoy el Registro Federal de Electores cuenta con más de 90 millones de registros, la base de datos que le sigue es la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con alrededor de 20 millones de registros, está siendo utilizada sin un costo adicional para el beneficio de las y los mexicanos a partir de numerosos mecanismos de autenticación que están en práctica y muchos otros que se instrumentarán en el futuro para garantizar que el robo de identidad, que la identificación de cadáveres desconocidos pueda seguir avanzando sin poner en riesgo la vulnerabilidad de los datos resguardados por el Instituto Nacional Electoral dentro del Registro Federal de Electores. _____

La Credencial para Votar es una contribución de la organización de las elecciones a la convivencia democrática en nuestro país, hace 30 años el principal tema de debate político en torno a las elecciones tenía que ver con el Padrón Electoral. En este mes se dieron, hace apenas 24 años, épicos debates en torno a la confiabilidad del entonces recién estrenado Padrón Electoral como una manera de inyectar certidumbre en los propios procesos electorales. _____

Hoy si bien la colaboración de los partidos políticos apunta a afinar y robustecer los mecanismos de seguridad de los datos contenidos en la credencial, la discusión ya no está como hace 30 años, en torno a la construcción de un Padrón Electoral confiable. _

Hoy tenemos gracias a ese esfuerzo y a esa colaboración uno de los Padrones más confiables, más actualizados y más seguros a nivel mundial. Eso es lo que se ha logrado gracias a una inversión política, técnica y humana que hoy nos permite, sin temores a vulnerar la confiabilidad de este mecanismo a apostar a un instrumento de identificación renovado, más seguro y que permita seguirle brindando a las y los

mexicanos el primordial mecanismo de seguridad con la posibilidad de que el mismo tenga un uso potencialmente mayor hacia el futuro. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. _____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. _____

Igualmente reconocer a las áreas ejecutivas, concretamente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el poder aprovechar esta oportunidad que se presenta por lo menos cada 5 años que se terminan los Contratos con las empresas productoras de las credenciales de elector para revisar el Modelo y, en su momento, poder actualizarlo. _____

Creo que, en esta oportunidad, esta actualización, como ya lo han referido el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y el Consejero Presidente, se aprovecha para incluir algunas medidas de seguridad adicionales que responden además a los tiempos modernos y al uso de la tecnología de punta en estas identificaciones, como sabemos, las empresas que producen las credenciales de elector son de las principales empresas en el mundo que producen los mecanismos de identificación, los billetes como es el caso de la empresa que tenemos actualmente, que bueno, produce el euro, de este tamaño son las medidas de seguridad y las empresas que hacen la identificación de los mexicanos. _____

Desde luego, solamente agradecer también al Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores que se haya valorado la propuesta para que en las credenciales que se expiden en el extranjero se suprima esta Leyenda que justamente dice abajo del Instituto Nacional Electoral, dice: “Credencial para Votar” y abajo dice: “desde el extranjero”, porque ha sido una petición recurrente de los mexicanos que se encuentran radicando, principalmente en Estados Unidos que han tramitado esta Credencial de Elector en los Consulados, ya poco más de 700 mil credenciales de elector entregadas en mano en Estados Unidos, y que muchas veces lo hacen para tener una identificación válida, no solamente ante las autoridades de aquel país, sino principalmente ante las autoridades mexicanas cuando vienen a México, ya sea de vacaciones, en temporada justamente navideña, en semana santa, etcétera, y cuando quieren hacer un trámite con la credencial que estamos expidiendo, en algunas

ocasiones se les ha dicho, por decir, desde el extranjero esta credencial no tiene validez en México. _____

Entonces, la idea justamente es aprovechar esta oportunidad para responder algunas de las solicitudes que han hecho las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, y poder no suprimir esta Leyenda para votar desde el extranjero, sino incluirla dentro de la información que tendremos en el Código Quick Response (QR), es decir, una información encriptada que no será visible a simple vista, sino que debería que tener un lector especial para verla. _____

Esto va a permitir que la credencial se homologue con la credencial que se está expidiendo en México, y con eso evitar alguna discriminación que pudieran tener los paisanos cuando vienen para acá. _____

Es explicar un poco las 2 adendas que se han circulado de parte de mi oficina, que es una de ellas justamente incluir en los considerandos esta situación, si bien en el artículo 156 de la Ley se dice que tiene que tener esta Leyenda la credencial, gracias a una interpretación conforme, en virtud de lo señalado en el artículo 1 constitucional, y a la interpretación de diversas instancias internacionales, se pueden tomar este tipo de medidas para poder justamente evitar un tema de discriminación y poder avanzar hacia una mejor garantía de los derechos humanos de estos connacionales que viven en Estados Unidos. _____

Creo que, es una buena oportunidad, se responde a una demanda en realidad muy reiterada y recurrente de los connacionales que están viviendo allá, y bueno, agradecer la votación que se tuvo en la Comisión del Registro Federal de Electores de manera unánime a favor, y desde luego también responder a una de las preocupaciones que tenía la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que en su momento lo hizo saber en la Comisión, de que sí sea encriptada la Leyenda textual “para votar desde el extranjero” justamente en el Código Quick Response (QR), porque además sería para poder cumplir con lo señalado en el artículo 156 de la Ley. _____

Y posteriormente en el Acuerdo en donde ya se dice cuáles son los elementos que tendrá la credencial en el anverso y en el reverso de la misma, poder también aclarar

que esta Leyenda desde el extranjero justamente se incluye dentro de la información que tendrá el Código Quick Response (QR). _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Obdulio Ávila, representante del Partido Acción Nacional. _____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Es sobre el ocultamiento optativo del elemento identidad sexo y la eliminación de la leyenda “desde el extranjero”. Quiero hacer las siguientes manifestaciones: _____

De conformidad al artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece de forma clara y precisa que la Credencial para Votar debe contener cuando menos diversos datos que dicho precepto legal denuncia, entre ellos hace énfasis en el sexo. _____

En el caso de las credenciales expedidas al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “para votar desde el extranjero”, por lo que, si bien es cierto el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, numeral 1, inciso g), establece que dentro de las atribuciones del Consejo General se encuentra la de aprobar el Modelo de la Credencial para Votar. _____

También es cierto que dichas atribuciones establecidas en el Reglamento referido deben apegarse a lo establecido en la Ley de la materia, en este caso dicho Modelo debe contener por los menos los datos enunciados en el artículo 156 citado, los cuales no pueden ser de forma encriptada como se propone en el Proyecto de Acuerdo, ya que la Credencial para Votar tiene una dualidad. _____

Uno, ser el instrumento electoral con el que el ciudadano ejerce su derecho al voto. ____

Dos, ser la identificación oficial con la que el ciudadano acredita su identidad. _____

Por lo que una identificación es el documento en el que consta el nombre y otra información de una persona y que sirve para identificarlo. Asimismo, la identidad conlleva un conjunto de características propias de una persona entre las que destacan siempre de manera general el nombre y el sexo de la persona. _____

Por lo tanto, atendiendo a las características de la identidad de toda persona el Legislador consideró necesario dejar visibles los datos que puedan ser de utilidad para identificar una persona a simple vista, ello sin tener que contar con un equipo tecnológico que descifre la información, entre ellos el sexo, y así velar por los derechos de los ciudadanos en cualquiera de sus esferas jurídicas. _____

Desde un punto de vista jurídico existe la necesidad de hacer la distinción entre los conceptos de hombre y mujer, empezando por los tratados internacionales desde la declaración universal de los derechos humanos que en su preámbulo destaca que considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad; la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es acorde con los tratados internacionales cuando distingue al hombre y a la mujer como los protagonistas para el goce de derechos. _____

Esto se ve plasmado en su artículo 4 mismo que establece que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. _____

En efecto, para fines jurídicos es necesario hacer la distinción entre hombres y mujeres para garantizar el acceso a derechos específicos para tal condición, la Credencial para Votar tiene diversos fines prácticos, no solo en materia electoral, es decir, el análisis del presente tema debe abarcar una visión amplia respecto a la utilización del documento de identificación por excelencia que significa la Credencial para Votar. _____

Podemos advertir que el principal grupo que encuentra beneficios legales y prácticos al tener visible la distinción del sexo en este documento de identificación son las mujeres, en diferentes materias este género encuentra un caudal de derechos exclusivos, por ejemplo, en materia civil y familiar. La Credencial para Votar tiene diversos fines prácticos que pueden agilizar los procesos cuando se identifica plenamente con la credencial el sexo de la persona. _____

A manera también de ejemplo la problemática puede versar en que un ciudadano pretenda realizar cualquier trámite presentando una Credencial para Votar sin género

visible con apariencia física de sexo opuesto al referido en su Acta de Nacimiento, y toda vez que su apariencia no corresponde al de su Acta de Nacimiento podría negársele el trámite ya sea en diversas instancias privadas, públicas o de interés social. _____

Otro ejemplo claro se refleja de forma común en los nombres sin géneros lo que crea duda en el sexo de la persona de que se trate. _____

Continuando con este ejemplo de los nombres sin género, trasladándolo a la materia laboral, la visibilidad del sexo en la credencial es relevante para cualquier ente gubernamental o para el sector privado que tiene la obligación de garantizar derechos propios de las mujeres como se establece, por ejemplo, en el artículo 123 de la Constitución Política cuando otorga un trato especial a las mujeres embarazadas. ____

En este sentido, si una empresa privada o ente de Gobierno no tiene claro el sexo de la persona puede privar a las mujeres de ese derecho fundamental. _____

Otro ejemplo en materia penal, los datos que contiene la Credencial para Votar también son relevantes. _____

Como es bien sabido, el Código Penal Federal tipifica diversos delitos que conllevan un tratamiento diferenciado en pro de las mujeres como son: el feminicidio, el aborto obligado, la violencia contra la mujer, entre otros. _____

La identificación del sexo en forma pronta por parte de las autoridades de seguridad pública y ministeriales, da pie a encausar estos delitos ante las instancias especializadas. _____

Por lo anterior, se considera que el bien jurídico a tutelar con la incorporación visible del sexo en la Credencial para Votar es el derecho fundamental a la identidad individual establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda persona tiene derecho a la identidad. _____

El derecho a la identidad es acorde a los atributos de la personalidad que constituyen el conjunto de cualidades que hacen a una persona única identificable, irrepetible e inconfundible. Dentro de estas cualidades se encuentra el sexo. No voy a referir a la tesis que tiene la Corte, pero esta representación considera necesario incorporar el sexo en la Credencial para Votar como elemento de la identidad individual para no

vulnerar este derecho humano, del cual se desprende, por ejemplo, el tema de la paridad de género._____

Como es bien sabido en fechas recientes, este tema ha tomado una especial relevancia la participación igualitaria entre hombres y mujeres en puestos de elección popular._____

Asimismo, en fechas recientes se presentó una iniciativa para que la paridad de género sea una obligación para la integración de los distintos poderes y niveles de Gobierno._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante._____

Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional._____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente._____

Nada más tengo esta pregunta, por qué hacer optativo algo que debe de ser obligatorio, ya que es un tema de identidad el establecer el sexo o el género dentro de la Credencial para Votar con Fotografía como ya se dijo, no voy a ser repetitiva y que representa un documento de identidad personal en la nación y también fuera de la nación y que podría complicar el acceso a programas nacionales no sólo de salud pública sino también a la justicia, acceso a la justicia, en temas también acceso a la inclusión financiera, que está muy en boga, sobre todo cuando se están generando Proyectos específicos para incluir a las mujeres en los procesos financieros._____

Y creo que esto es una política pública que no debe ser excluida esta obligatoriedad.____

Si el criterio que se tomó es el de alguna minoría, creo que habría que explicar quién lo propuso para aquí debatirlo en todo caso, porque sí generaría un problema si eso se vuelve optativo o se elimina. Hasta ahí mi intervención._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, ciudadana Marcela Guerra._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Quisiera explicar un poco la racionalidad de esta propuesta y por qué me parece que sí debe de considerarse como una cuestión opcional que las personas puedan decidir si aparece visible o no el dato del sexo en la Credencial para Votar. _____

Primero hay que reconocer que nosotros adoptamos un Protocolo de avanzada, el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. _____

Aunado a eso hicimos una campaña de difusión para que las personas que no tenían la posibilidad de cambiar, rectificar su Acta de Nacimiento, pudieran únicamente actualizar la fotografía de la Credencial para Votar, con la finalidad de que la expresión de género de la persona coincidiera con la fotografía de la Credencial para Votar, aun y cuando el nombre no se actualizara y aun y cuando el sexo no se actualizaba. _____

Una de las cuestiones más recurrentes que han pedido las organizaciones defensoras de derechos humanos y defensoras específicamente, de derechos de la comunidad trans, es que no aparezca el sexo en la Credencial para Votar, porque no aporta ningún elemento adicional y porque únicamente sirve, en este caso, para discriminar a las personas. _____

Ahora, dejar esta medida como opcional me parece que es adecuado. Creo que, además es la única situación que ahora podríamos remediar de manera inmediata, sin una modificación legislativa, que la tenemos a nuestro alcance en este momento para hacer una modificación menor, que además no va a ser obligatoria. _____

Reitero, la ciudadanía que quiera que sea visible el dato del sexo en la Credencial para Votar, va a tener esa opción para hacerlo. Quien no lo desee, pues entonces no va aparecer. _____

Seguramente quien no va a desear que aparezca ese dato son las personas que están sufriendo de discriminación. _____

Este elemento todavía está imponiendo barreras a las personas para garantizar su libre desarrollo de la personalidad de identidad, y su protección de datos personales,

reproduce y perpetúa la discriminación histórica y estructural que han sufrido las personas travesti, transexuales y transgénero, y es una incorporación visible del dato del sexo en la Credencial para Votar, lo único que nosotros tendríamos que modificar para evitar esta discriminación. _____

Hay que señalar que hay varios criterios de la Sala Superior que avalan que nosotros hagamos esta interpretación evolutiva del artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. _____

Por ejemplo, la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-182/2013, y en el expediente SUP-RAP-525/2012, ya se ha pronunciado al respecto de las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, para interpretar las leyes respecto de la modalidad de inclusión de datos que no resulten esenciales para la identificación de una persona. _____

La Sala Superior ha dicho expresamente que los datos que resultan realmente indispensables para la identificación de una persona es la fotografía, nombres y apellidos, y la edad, exclusivamente; no ha dicho que el sexo sea un elemento que sea indispensable para poder determinar la identidad de las personas. _____

Citando lo que ha dicho la Sala Superior, ha mencionado que es perfectamente legítimo que: "...la autoridad administrativa, en el ejercicio de su competencia, interprete la Legislación Electoral de la forma en que considere la protección más amplia de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de datos personales contenidos en la Credencial para Votar...". _____

Sigo citando: "...acorde con el nuevo entorno normativo que traza el artículo 1 de la Constitución Federal, todas las autoridades administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias deben interpretar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de la manera que más benefician a las personas...". _____

Dicha Sala Superior, determinó que si bien es cierto que la ciudadanía, así como las instituciones públicas y privadas suelen utilizar la Credencial para realizar diversos trámites, ésta no es la finalidad de la Credencial para Votar, por lo tanto, no es constitucionalmente válido que la misma se pueda justificar que tenga determinados

datos en su interior, la limitación de un derecho fundamental como el de la protección de datos personales sin consulta previa._____

En ese sentido, esta información específica del sexo está ligada, por ejemplo, a la intimidad de las personas, a la vida privada de las personas, al libre desarrollo de la personalidad. Me atrevería a decir que constituye un dato sensible, y por lo tanto, las personas tendrían derecho de poder ocultar esta información, sobre todo, cuando no está aportando ningún elemento adicional para que se pueda acreditar la personalidad o la identidad de una persona._____

En este momento contamos con herramientas para revertir una situación de discriminación, creo que debemos de aprovechar esta oportunidad para eliminar esta barrera que está constituyendo una discriminación más a la que se está enfrentando un grupo en situación de vulnerabilidad._____

Creo que, es una medida adecuada y acorde con nuestra realidad social, el dejar el dato del sexo no es una medida neutral porque está orillando a la discriminación, y yo sí voy a citar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una tesis aislada que dice: “discriminación indirecta o no explícita, su determinación requiere de análisis de factores contextuales y estructurales”, a través de la cual se pronunció en el sentido de que para poder establecer que una norma o política pública que no contemple una distinción, restricción, exclusión explícita sí genera un efecto discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el orden social o al pertenecer a determinado grupo social, es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en torno al género, la identidad sexogenérica, la orientación sexual, factores que pueden condicionar que aunque una norma o disposición se encuentre expresa en términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza la pertenencia étnica, entre otros, finalmente probó que una diferencia de trato irrazonable e injusta es en perjuicio de las personas._____

Hay que señalar que el principio de paridad de género no se puede ver vulnerado por esta situación, justamente lo que nosotros revisamos es la cuestión de género, incluso ya hay criterios de la Sala Superior en donde ha dicho que no vamos a revisar el sexo

de las personas para determinar cómo se van a integrar las listas de los partidos políticos, los registros de las candidaturas, y cumplir con el principio de paridad de género; lo que se tiene que ponderar es la autoadscripción de género de las personas. _____

El género en su caso, si me apuran un poco, es lo que puede llegar a determinar un elemento de la identidad de las personas, no así el sexo de las personas. _____

Pero, vale la pena resaltar, sobre todo, que ésta es una medida, reitero, opcional, quien no desee que se le quite o que no aparezca de manera visible el dato del sexo en la Credencial para Votar, va a poder optar para que aparezca ahí, y con eso las personas que a lo mejor requieran por alguna circunstancia que aparezca expresamente el dato del sexo en la Credencial para Votar podrán decir que así aparezca, y las personas que están sufriendo discriminación porque este elemento esté en la Credencial para Votar, podrán decidir también libremente que este elemento se elimine o por lo menos no aparezca visible. _____

Es importante señalar que también en una discusión sobre si aparecía completo o no el domicilio en la Credencial para Votar, la Sala Superior ya dijo que se puede interpretar si es visible o no. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez, representante del Partido del Trabajo. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Licenciado Adalid Martínez Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, debemos de centrar el debate, porque no es solo lo que se dijo al final, debemos de recordar por qué y después de escuchar en algunos medios de comunicación en días pasados el debate que ha generado este tema de este Proyecto de Acuerdo de un nuevo formato de credencial. _____

Empezaré de atrás hacia adelante sobre los Puntos de Acuerdo, quisiera pedir que en el Punto Segundo y Tercero de Acuerdo no quedara como un asunto optativo el que se genere una opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia sobre la información que

deberán de contener los códigos QR, porque cuando le ponen la leyenda “en su caso”, pues en su caso es que puede ser o no puede ser, y desde nuestra perspectiva debe de ser en una opinión de la Comisión el que se pronuncie sobre el contenido de esos códigos. _____

Otro tema que tenemos que decir es que la evolución y el alcance que tuvo la Reforma Constitucional al artículo 1, pues estamos viendo las dimensiones que da. ____ De lo que sí estoy convencido es que aun y con esa amplia interpretación de esos derechos humanos, lo que también jamás se debe de interpretar es un exceso ni tampoco generar derechos absolutos, porque deben de existir reglas, hay reglas para que puedas cumplir y hacer cumplir tus derechos y tus obligaciones. _____

Este Proyecto de Acuerdo del formato de credencial debo de decirles que obedece, y la autoridad lo debe de decir con todas sus letras, a que está próximo a vencerse el Contrato con la empresa que actualmente genera los formatos de credencial, hay que generar en ese asunto de transparencia del uso de los recursos públicos una licitación pública internacional. Y la mejor oferta es la que le va a generar este documento trascendente a esta institución y a este país, primero. _____

Segundo, con que se apruebe hoy este Proyecto de Acuerdo no es que el día de mañana se van a generar estos nuevos formatos de credencial, viene un proceso de análisis, viene un análisis de conformación, de procesos y procedimientos que no sabemos en qué tiempos se van a concluir, decía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ya llevamos 5 formatos de credencial. Esos han ido evolucionando y se han ido renovando conforme va pasando el tiempo, conforme el número de ciudadanos van actualizando su información o se van incorporando. _____

Esto también obedece a un asunto de la evolución de las tecnologías, no podemos irnos rezagando, y de eso también estoy convencido, por eso es que en el 90 por ciento de lo que se ha planteado estamos de acuerdo y convencidos. _____

Les recuerdo, 46 millones de ciudadanas conforman la Lista Nominal al día 14 de diciembre y 43 millones lo conformamos los hombres, y así está dividido nuestro andamiaje y la construcción de nuestra Lista Nominal y nuestro Padrón Electoral. _____

Estoy de acuerdo en lo que ha planteado el Consejero Presidente, en que esto no genera un costo adicional y que sí va a una política de reducción de costos. _____

Sí va hacia allá, pero en donde tenemos que tejer fino y acordar fino, es en algunas cosas que se han planteado aquí. _____

Pensé que ya teníamos claro cuál es el uso del instrumento, aunque se denomina “Credencial para Votar con Fotografía” y eso ya órganos jurisdiccionales también nos han dicho, que no podemos desvincular su uso para votar y para identificación tanto que este Consejo General ha aprobado programas, políticas, para el fortalecimiento de la Credencial para Votar con Fotografía como medio de identificación y para que se use en otras instancias de Gobierno que puedan usarse para que un ciudadano pueda acceder a otros derechos. Eso lo ha hecho este Instituto, con coadyuvancia sí de los partidos políticos, sí de los órganos de vigilancia, pero eso es lo que hemos construido. _____

Y por tanto, la Credencial no sólo es para votar y aquí escuché que el principio de la Credencial es votar. _____

Sí, sí es votar, pero se ha ido fortaleciendo para que sea un instrumento de identificación y para allá va el tema. _____

Creo que, también debemos de ser claros que debe de haber un programa, un Proyecto de difusión importante sobre lo que va a suceder. _____

Qué pasó y lo pusieron aquí y lo escuché de algunos, qué pasó cuando se permitió que la calle y el número fueran no visibles en el formato de Credencial y parecía una expectativa grande, que un número importante de ciudadanos iban a sacar su Credencial para Votar con Fotografía sin esos datos, pues la gran sorpresa es que es un número muy inferior el que se coloca en ese beneficio. Ese beneficio que ya no viene de una Sentencia del Tribunal Electoral, viene de la Ley, de la Reforma del año 2014, que se colocó en la Ley por eso está así y así se sigue cumpliendo. _____

Pongámonos de acuerdo, qué es lo mejor, pero no en un asunto de que pueda quizás más adelante generarnos problemas. _____

Miren, no sé y eso lo estoy analizando todavía sobre el alcance que pueda tener el que venga oculta la leyenda de Credencial para Votar con Fotografía desde el Extranjero. _____

Entiendo el beneficio, pero el alcance que pudiera dársele adicional que no va a corresponder con la realidad y del por qué alguien se empadrona desde el extranjero para ejercer el derecho, todavía estoy analizando. _____

No estoy en contra de que algunos apartados vengan ocultos sólo diré que eso sí, creo que debió de haberse analizado con mucha mayor profundidad para que no generara en esta sesión quizás un debate que es rico, pero que a la opinión pública pudiera generarle algún problema. _____

No estoy en contra, pero repito, creo que necesitaba más tiempo ese caso particular. _
Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Coincido plenamente con los argumentos que ha expuesto la Consejera Electoral Dania Ravel. Me parece que hoy en día se exige que nosotros tengamos una interpretación diferente y armónica, con las obligaciones que tenemos como Estado a partir de la implementación del artículo 1 constitucional, en donde todos y cada uno tenemos la obligación de promover, de garantizar, de respetar los derechos humanos frente a la estructura social que tenemos y que nos ha sido impuesta desde la identidad propia del género. _____

En esta parte se habla de un derecho a la identidad y la pregunta es: ¿y cuál es la identidad sexual?, ¿la que me asignaron al nacer o la que defino yo? _____

En el mundo contemporáneo se ha derribado precisamente el tipo de esas categorías hombre, mujer, y esas categorías han sido derribadas porque nos las han impuesto a los seres humanos en un acto social que decide el médico, que deciden los padres, a través de los genitales o la cuestión biológica con la que nace una persona. _____

Y si es esa categoría derribada, ya existen unos principios a nivel internacional que son los principios que definen precisamente la identidad de género a partir de la vivencia interna e individual del género, tal como cada una de las personas las sienten profundamente, la cual puede o no corresponder al sexo asignado al momento del

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría no involucrar la modificación de la apariencia, o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales, o de otra índole, siempre que la misma sea libremente elegida por la persona. _____

Y también incluye otras expresiones del género, como puede ser la vestimenta, el modo de hablar, el modo de comportarse o los modales. _____

Si partimos de esa premisa, me parece que es muy válido que demos la opción, porque finalmente lo que tenemos demostrado como autoridades y lo que hemos trabajado, ya lo decía la Consejera Electoral Dania Ravel, es que se ha convertido en un obstáculo, precisamente esa definición. _____

No se está incumpliendo con la Ley, el tema está ahí, está en unas claves también como lo es la CURP, la CURP define esa posición y ese acto social que nos dieron, la categoría de hombre o mujer. _____

Simple y sencillamente estamos transitando a hacer menor esa discriminación que a través de la identificación asignada del sexo, han tenido las personas. Y creo que la misma argumentación puede caber para las personas que residen en el extranjero. ____

¿Quiénes somos mexicanos?, nos van a definir y hay un obstáculo que se nos está presentando de fuera, porque dicen yo resido, ¿o para qué queremos esa leyenda que la Ley nos dice? La queremos para tener un control precisamente, y ese control lo estamos garantizando porque ese control sigue los registros, sigue existiendo en el propio Instituto y simplemente no es visible para no tener un elemento base que ha sido demostrado que genera problemas para el ejercicio de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero o para el ejercicio de los derechos de las personas que se identifican de otra forma al sexo que les fue asignado al nacer. _____

De ahí que quiero sugerir Consejero Presidente, de manera muy comedida que estos argumentos sean incluidos en el Punto de Acuerdo, porque veo que existe el disenso, no había señalado esto porque no había tenido ese pulso del disenso, pero frente al disenso estos son los argumentos que avalan la posición de este acto de autoridad. ____

Y me parece que deben quedar explícitos en el Acuerdo por si se ejerce el derecho de impugnar, la Sala Superior cuente con los elementos que nosotros tenemos para poder acordar en este sentido el nuevo Modelo de la Credencial. _____

Me parece Consejero Presidente, que ha sido muy completa la argumentación que ha expresado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel que podemos abonarlo también con estos principios internacionales que ya nos exigen reconocer la identidad de género y que podemos argumentar también para efecto de por qué dejar en los archivos y que sea optativo que no aparezca la leyenda “residente en el extranjero” de cómo estamos interpretando el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales frente y de manera armónica con el artículo 1 constitucional con los tratados internacionales con los principios que nos rigen, sugeriría Consejero Presidente y colegas, que lo incluyamos de esa manera para que pueda quedar de manera expresa cuáles son las razones de este cambio._____

Y este cambio también es armónico con lo que hemos venido actuando y derribando desde todas las acciones que se han implementado de parte de esta autoridad._____

El principio de progresividad nos exige ver hacia adelante y no dar un paso atrás, lamentablemente en estos temas una cuestión nos podría hacer retroceder en lo poco que hemos avanzado. Propongo esas inclusiones._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Debo de reconocer que me llama la atención la renuencia que advierto a una propuesta que formuló la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en la Comisión del Registro Federal de Electores y que, por supuesto acompañó, acompañé entonces y acompañó en este momento._____

Y por qué me llama la atención; porque creo que pediría que deconstruyéramos un poco en qué consiste esta propuesta, y al hablar de deconstruir primero hablemos de qué significa el concepto optativo, es decir, la ciudadana o el ciudadano decide, no es una medida que se le vaya a imponer a nadie; cada ciudadana que acuda a sacar su credencial se le pregunta: “¿quieres tu domicilio visible sí o no?” y decidirá; se le preguntará: “¿quieres tu sexo visible sí o no?” y decidirá._____

Cada una de las personas que acudan a tramitar ya sea una reposición, una Credencial nueva, etcétera en el Registro Federal de Electores, se le hará esa pregunta y será la decisión de la ciudadana o del ciudadano si se incorpora ese dato visible o no se incorpora el dato visible. _____

Primer concepto importante es optativo, segundo concepto importante es visible, no significa que no se tenga el dato, no significa que no se cuente con esa información, es si el dato aparece en la Credencial para Votar. _____

¿Hay efectos a la decisión de no dejar visible un dato? Por supuesto. _____

¿Hay efectos de no dejar visible el dato de domicilio? Por supuesto, cuando acuden al banco y necesitan un comprobante de domicilio, la Credencial no la hace comprobante de domicilio, se tiene que presentar un recibo que haga las veces de comprobante de domicilio. _____

Si se necesita el sexo de una persona para alguna cuestión, algún otro trámite, a los muchos que se han señalado, que no creo que el feminicidio sea uno de ellos, tengo la impresión que, en ese momento, sería bastante fácil determinar el sexo sin necesidad de una Credencial para Votar, no creo que eso sea lo que vaya a definirlo al momento de la investigación de un delito. _____

Pero, fuera de ese caso en general puede generar una obligación adicional, pero que es decisión de la persona asumir o no asumir esa carga adicional para efectos de otros trámites. Estos son los principios básicos. _____

La pregunta es, ¿por qué no hacerlo optativo?, ¿por qué no permitirle al ciudadano o a la ciudadana tomar esa decisión? _____

En esta discusión que se ha presentado me recordó una Sentencia dictada en 2008, en el amparo 6 de 2008, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un asunto que fue muy conocido, que fue el tema de la rectificación del Acta de Nacimiento en la Ciudad de México a partir del cambio de sexo, de la reasignación sexual, que en un primer momento se señala por parte del juez de la causa que al no venir previsto en el Código Civil se tenía que establecer en el Acta de Nacimiento una anotación marginal. _____

Y lo que la Suprema Corte define es que eso es una invasión terrible a la vida privada de las personas y que no debe de tenerse. _____

Voy a señalar algunos fragmentos, porque creo que resultan muy aplicables a la discusión que estamos teniendo ahora, se dice en la Sentencia, ¿cuáles eran los derechos fundamentales en juego en ese momento?, me parece que también aplican en este caso, dignidad humana, igualdad y no discriminación, derecho a la intimidad, derecho a la vida privada y a la propia imagen, el libre desarrollo a la personalidad humana y el derecho a la salud. _____

Y después continúa la Sentencia hablando de que efectivamente como todo derecho fundamental ninguno de estos derechos son derechos absolutos y tienen sus límites en los derechos de terceros, así como en el orden público y en el interés social que es lo que estoy escuchando que tiene que ver con los argumentos que se ponen sobre la mesa. _____

Sin embargo, dice que es innegable que el riesgo de lesión de la intimidad debe ser razonable para proteger aquellos permitiendo, por lo tanto, la invasión de la esfera privada de la persona, pues no es sostenible el sacrificio al derecho a la intimidad y a la vida privada propia por el mero hecho de salvaguardar derechos de terceros o el orden público, en tanto no puede exigirse al individuo que soporte sin más la publicidad de ciertos datos de su vida privada, más aún cuando este derecho a lo íntimo se vincula con otros, tales como la libre opción de un proyecto de vida y la no discriminación, en tanto se presenta la circunstancia innegable de ciertas minorías que por su condición sufren discriminación o marginación, lo que hace exigible fijar una postura desde la óptica de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. _ El ataque a la vida privada de la persona puede ocasionar un daño irreparable, en tanto toda persona tiene derecho a vivir su propia vida y a desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver a voluntad propia qué aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros para salvaguardar su dignidad humana. _____

Me parece que los argumentos expuestos en esta Sentencia resultan aplicables al caso que estamos analizando, es un derecho que estamos estableciendo para que sea una opción de las personas si se ejerce o no se ejerce. _____

Todas y cada una de las personas que acudan a un Módulo podrán solicitar que su dato sea visible y que éste aparezca en la Credencial para Votar, pero si hay una persona que decide que este dato no sea visible, tiene el derecho a decir “que no sea visible”._____

De la misma forma que ocurrió con el domicilio. _____

Ciertamente, cuando se dio la discusión del domicilio se pensó que iba haber una demanda mucho mayor y ésta ha ido en decremento, pero seguimos teniendo cerca de 4 o 5 por ciento de las credenciales que no tienen domicilio visible y es una decisión, y es el ejercicio de un derecho de cada una de estas personas que implican el 4 o 5 por ciento de las credenciales que están vigentes en este momento. _____

Y la pregunta es, ¿por qué limitar este derecho para que sea la decisión de las personas ejercerlo de una forma o ejercerlo de otra? _____

Evidentemente acompaño la propuesta que se está formulando en los términos que se ha señalado. _____

Sí creo que vale la pena fortalecer el acuerdo en los términos que está señalado, porque, ciertamente se advierte que las probabilidades se inclinan en una alta medida a que este acuerdo va a ser impugnado, pero creo que lo que no podemos perder de vista, no es quién no quiere ejercer ese derecho, es quién sí lo quiere ejercer y como institución, vamos a salvaguardar los derechos de algunos o vamos a salvaguardar los derechos de todas y de todos. _____

Y ahora, me voy a referir un momento a lo relativo a la leyenda de “Voto desde el Extranjero”. _____

En la Comisión manifesté algunas reservas, porque quería analizar qué impactos podría tener el quitar esta leyenda. _____

Tengo muy claro que hay un artículo de la Ley que establece claramente que debe de incluir la leyenda, nada más, creo que se puede incluir de una forma no visible, es decir, de una forma encriptada, _____

Creo que, se deberían tener las garantías que va a estar la leyenda tal cual encriptada en los códigos, precisamente, para cumplir con el marco de la Ley, pero no encontré algún impacto que esto tenga para el ejercicio de otros derechos o afectaciones en los usos que tiene la Credencial para Votar y, sin embargo, de las experiencias que han

sido narradas por los connacionales que tienen credenciales emitidas en el extranjero, la respuesta es que sí ha habido limitaciones al ejercicio de sus derechos, sí se ha convertido en algunas o muchas ocasiones, y regreso al punto, no es tan relevante si fue alguna o si fueran muchas, hay casos en los que se ha convertido en que se les considere ciudadanos de segunda, porque no pueden ejercer el mismo derecho con un mecanismo de identificación oficial, que tiene las mismas garantías, las mismas certezas y el mismo propósito como una credencial emitida en territorio nacional, por lo que si les ha generado una afectación, me parece que lo correcto es mantener la propuesta que viene en el Proyecto de Acuerdo y eliminar esa leyenda visible de la credencial. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todos. _____

En la Comisión del Registro Federal de Electores, cuando por parte de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel se expresó la posibilidad o la propuesta, más bien, de suprimir de la Credencial para Votar el dato de “sexo”, yo hice una contrapropuesta tomada de la propia Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que ella la presentaba como “al menos que fuera optativa” y quiero decir que apoyé y voté esa propuesta de tomar este dato de sexo como algo optativo dentro de la Credencial. _____

Voy a dar primero mis razones por las cuales veo legítima esa posición, pero voy a agregar también algunas consideraciones que me parecen pertinentes para no dar, no solo un mensaje equivocado, sino para no dar un fundamento y una motivación a este Proyecto de Acuerdo, que pueden estar muy equivocados. _____

Primero, no veo una contradicción que no pueda resolverse por parte de este Instituto entre el reconocimiento del sexo como uno de los elementos de la identidad, y la identidad de género libremente elegida por cada individuo. Eso es una contradicción que podemos resolver. _____

En general pienso que es conveniente incluir en la Credencial para Votar el sexo como un elemento de identificación de las personas. Primero, todas las personas tienen derecho a ser identificadas por su sexo, entre otros elementos de la identidad, pero también tienen derecho las personas que no deseen identificarse con un sexo o con el sexo predeterminado, o el sexo biológico, y pueden ejercer su derecho a optar por otra identidad de género. _____

Creo que, es conveniente mantener el dato en la Credencial, hay muchas razones, algunas ya han sido expuestas aquí en la mesa, hay muchas normas y políticas que dependen del dato de sexo y para casi todos los efectos nos piden la Credencial para Votar, es un dato útil, es un dato conveniente para, al menos casi toda la población. ____

Hay además nombres, digamos, el primer nombre, lo que se llama nombre de pila, aunque si somos laicos yo le llamaría el nombre civil, aparte de los apellidos, que son indistintos para ambos sexos y que conviene poder identificar fácilmente. _____

Entonces, hay muchas normas que distinguen jurídicamente el sexo, inclusive, por ejemplo, para facilitar el ejercicio de una norma que afortunadamente ya rige en nuestro Sistema Electoral como es la paridad de género en la representación política. .

Si este dato solo fuera encriptado, habría muchos problemas prácticos, obviamente no todos tienen el dispositivo para leer datos encriptados, y si bien el dato de sexo viene en la Clave Única de Registro de Población (CURP), no todas las personas que identifican a otra persona, o incluso el propio usuario de su Credencial saben leer las claves de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para encontrar ahí la clave del sexo. _____

De tal manera que hay buenas razones para que ese dato esté incluido para todos aquellos que quieran que sea incluido, hay miles de razones prácticas que no creo que sea necesario repetir. _____

Me da la impresión por algunas de las intervenciones de las Consejeras Electorales que han tomado la palabra al respecto, que por lo menos debería quedar muy claro el orden de los términos, el dato del sexo debe estar como una norma, y que efectivamente, el ciudadano o la ciudadana puedan elegir libremente omitir ese dato, pero cambiar un poco los términos para que tomemos como lo habitual que va el dato y a petición expresa, dado que es opcional, se pueda omitir el dato. _____

Es decir, todos tienen derecho a incluir el sexo como un dato de su identidad a menos que la persona solicite lo contrario._____

Me preocupa un poco, y voy a tener que ser breve porque veo que ya se me acaba el tiempo._____

Alguna de las motivaciones que se han dado de los argumentos, creo que debilitarían el Acuerdo si van así; no comparto el documento de que el dato del sexo no agrega información para la identificación; me parece de sentido común que sí agrega información útil._____

Ahora, decir que hay una identidad sexual asignada creo que conllevan una confusión entre el concepto de sexo y el concepto de género, el sexo está determinado biológicamente y el género es los roles que se dan, es una construcción social, y en todo caso puede ser una identidad libremente elegida por el individuo._____

Pero aquí, en la Credencial, no estamos hablando de género, estamos hablando de sexo, y el sexo no es algo que nos asignen, el sexo es una característica biológica diferente al concepto de género que sí es una identidad que además asociada a estereotipos, a roles impuestos, a muchas cosas que afortunadamente hemos identificado como un problema social que deberíamos superar, pero de ahí a confundirlo me parece que sí nos puede llevar a serios problemas._____

No implica discriminar identificar el sexo, al mismo tiempo, a nadie se le debe privar del derecho a tener la manifestación de género libremente elegida._____

Quiero decir, por último, para concluir que, si bien estoy de acuerdo con que sea optativo, algunas de las argumentaciones o motivaciones que se han dado, me harían dudar sobre la conveniencia de quitar ese dato._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera._____

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Obdulio Ávila, representante suplente del Partido Acción Nacional._____

El C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Ciudadano Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente._____

Celebro que los razonamientos sirvan para robustecer todos los acuerdos que se emitan en el pleno, no solamente éste. _____

Creo que, un organismo constitucional autónomo, como es el Instituto Nacional Electoral, su impacto y relevancia amerita que cada Acuerdo que se lleve al Pleno esté debidamente argumentado, motivado y la parte considerativa sea sumamente robusta. _____

Señalo 2 consideraciones nada más, el sexo no es un dato sensible porque forma parte de los atributos de la personalidad y del derecho humano a la identidad individual para ser reconocidos en el Estado, dentro del territorio del Estado. _____

No fue ni ha sido motivo de la intervención de esta representación abordar cómo se construye la identidad sexual o de género de cada persona. _____

Creo que, a la Credencial de Elector se le debe dar la mayor utilidad posible, no ir restringiendo su uso dado el alto costo que irroga al Estado que siempre se ve inmerso en una serie de críticas. _____

Y lo único que señalaría que estaríamos haciendo una contravención al derecho humano a la identidad, es lo que considera esta representación, como ya se ejemplificó, hacerlo optativo o eliminarlo haría nugatorios los beneficios jurídicos y prácticos que conlleva tener ese apartado dentro de la Credencial referida. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Decía en mi primera intervención que si hay algo que puede integrar la identidad sería el género, no el sexo, ya estaría en discusión, hay que decirlo. _____

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado en una tesis aislada que la preminencia del sexo psicosocial frente al morfológico para respetar a plenitud los derechos de identidad sexual y de género de una persona, y ha considerado que debe darse un carácter preminente al género que al sexo a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género, porque son

aspectos que se definen tanto por la visión que la persona tiene frente a sí mismo, como por su proyección ante la sociedad. _____

Es importante para mí señalar que no es la primera vez que se hace una interpretación del artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de los elementos que deben de conformar la Credencial para Votar y de si estos tienen que aparecer forzosamente de manera visible o no, según el texto literal del artículo 156. _____

Como lo hemos dicho, esta interpretación se hizo en su momento para determinar si podía aparecer o no completo el domicilio en la Credencial para Votar. _____

En ese momento la Sala Superior cuando conoció de la impugnación dijo que el Instituto Nacional Electoral había realizado, en ese momento el Instituto Federal Electoral, una interpretación evolutiva, sustituyendo una interpretación anterior por una más adecuada a la realidad social y tecnológica. _____

En ese sentido una de las cuestiones a interpretar consistió en determinar si el COFIPE exigía necesariamente la inclusión en forma visible del domicilio completo en la Credencial para Votar de conformidad con lo determinado de la Sala Superior, la respuesta contundente fue que no, toda vez que no es necesario que aparezca en forma visible el dato del domicilio completo para que la Credencial para Votar cumpla con su doble función, a saber como instrumento electoral y como documento de identificación oficial. _____

Es importante señalar que si existen personas que requieran que aparezca su sexo en la Credencial para Votar para tener acceso a un programa social, para tener acceso a un crédito específico para mujeres, lo puede pedir, puede solicitar que aparezca expresamente el dato del sexo y entonces no se le va a generar ningún perjuicio. _____

Estamos hablando nada más de un grupo de personas que pueden ver vulnerado sus derechos esenciales, fundamentales y que pueden ser discriminadas porque aparezca ese dato. Esas personas son las que seguramente van a pedir que no aparezca el dato del sexo. _____

Ahora, el hecho que la Credencial para Votar se use también como identificación, esto no es suficiente para que nosotros incluyamos ahí un dato que a lo mejor, desde la

perspectiva de algunos, pudiera ser más válida esta identificación si eso conlleva como perjuicio, que vulneren derechos fundamentales de las personas. _____

¿A qué derechos me estoy refiriendo? Pues al derecho a la intimidad, al derecho a la vida privada, al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. _____

Pero, vale la pena también referir que a mí me parece, reitero, que el sexo no es un elemento indispensable de la identidad de una persona. _____

A mí, desde mi perspectiva, creo que una cuestión que nos puede orientar en ese sentido son los datos que se contienen en la Cédula de Identidad, según la Ley General de Población y lo que dice es la siguiente: “Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Clave Única de Registro de Población, fotografía del titular, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, firma y huella dactilar”. _____

No está pidiendo en lo absoluto que se incluya el sexo de las personas, la Cédulas de Identidad no considera que el sexo sea un elemento indispensable para poder acreditar la identidad de las personas. _____

Entonces, desde mi perspectiva no vulneramos ningún derecho al poner “no visible” este dato a petición expresa de las personas. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra Castillo, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, el centro del debate no es el de establecer una discriminación en torno a un grupo de la comunidad transexual, lésbico, gay. Por supuesto que no, tienen derechos. _____

Por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, nosotros tenemos una Secretaría que atiende las demandas de este grupo y son muy legítimas, pero, por ejemplo, aquí me remito, es un tema de legalidad también, el artículo 156 que tiene que ver del compendio de Legislación Nacional Electoral viene sexo no viene género y ahí es donde me gustó mucho la intervención del Consejero Electoral Jaime Rivera,

en el sentido de que establece muy bien, con mucha claridad y precisión la diferencia entre lo que es la identidad biológica y el género que es todo lo que se construye a través de la cultura, y eso es aceptable. _____

Estamos viendo nosotros la pertinencia de generar certeza en un documento que no sólo es de identidad sino es para ejercer el derecho a votar y ser votado, y que en ese sentido, digo, si yo fuera un funcionario de casilla, entonces, no voy a entrar en una interpretación para ver o para determinar a cada persona. _____

Aquí creo que también coincido con el Consejero Electoral Jaime Rivera, en que sí agrega información útil. Por supuesto que es muy clara, además está en la Ley. _____

Entonces, sí quisiera que aquí en el apartado, por ejemplo, del mismo artículo 156 en el párrafo 4 viene lo del domicilio, pero no nos salgamos de la Ley hagamos lo que se debe de hacer para este documento que es un documento de identidad, pero, sobre todo, para ejercer el derecho al voto y para ser votado. _____

Hasta ahí mi intervención y en ningún momento el debate en el caso de su servidora, es para tratar de soslayar un derecho, derecho humano, por supuesto, de toda esta comunidad que merece todo el respeto. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del Partido del Trabajo. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. _____

No creo que el debate sea reconocimiento de derechos de una minoría o no, sí es cumplimiento de la Ley, sí con la interpretación amplia de los derechos también, pero ahora yo me quiero colocar en un extremo y lo quiero hacer porque si no te colocas en el extremo, pudiéramos llegar a esto. _____

Primero, si en un asunto de ampliación de derechos una persona dice que le vulneramos la protección de sus datos personales porque su nombre aparece en la Credencial para Votar con Fotografía, o la fotografía le vulnera su derecho porque no quiere que aparezca, o la clave de elector que ahí viene generada por la propia

autoridad y que viene en una liga, en un conjunto de datos, de números, de letras, en donde se genera también el tema de su sexo, viene M o H, o su CURP que igual nos digan: “no, es que a mí me vulneras porque ahí aparece mi identificación de sexo y entonces también elimínalo”. Ese es el extremo, porque quizá después vamos a llegar aquí a decir: “pues quitémoslo porque le vamos a vulnerar ese derecho” y creo que no debiera de ser ese fin ni ese planteamiento. _____

Segundo, el dato de sexo que habla la Ley viene acompañado de algo que es el documento probatorio con el que una persona llega al Módulo y se le hace el trámite, no es que un funcionario al arbitrio diga: “pues aquí le pongo M o aquí le pongo H”, viene de su Acta de Nacimiento emitida por la autoridad legalmente constituida en este país que genera ese documento, y eso es lo que detona, después de un tiempo que dejamos la buena fe en materia del Registro Federal de Electores, que una persona te comprobara qué es, con su Acta de Nacimiento. _____

Tercero, ¿qué es lo que no se ha terminado de debatir y que va en el punto segundo y tercero de este Proyecto de Acuerdo? El tema del contenido del QR y yo me voy al otro contenido, ¿para qué?, ¿quién lo va a poder leer?, ¿con qué fin lo va a poder leer?, ¿qué objetivo va a tener que alguien pueda leer el contenido de esa información que va a aparecer en el QR? _____

Hoy la Credencial para Votar con Fotografía tiene un QR, ¿qué es lo que tiene? Te remite a una página del Instituto Nacional Electoral, y lo único que dice es si esa Credencial es vigente, es lo que dice, por un asunto, por la protección de los datos personales de los ciudadanos que le entregaron de buena fe al Registro Federal de Electores para un tema, inscribirse en el Padrón y la Lista Nominal, y tener la Credencial y ejercer el derecho a votar. _____

Tenemos que terminar de definir eso, porque si cualquiera lo va a leer, yo les diré que sí, también estaría pensando si ese alcance que le vamos a dar a esos instrumentos informáticos que lejos de proteger, creo que pudieran generar una vulnerabilidad mayor a la información que las personas le dan al Instituto Nacional Electoral. _____

Repito, sin oponerme a que tengamos el Acuerdo de que la persona decida si va o no va, pero cumplamos con la Ley. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. _____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. _____

Nada más para hacer alguna aclaración adicional al tema de la Credencial que se expide desde el extranjero que no traiga la leyenda ya en el modelo de la nueva credencia, de manera visible. _____

Se había comentado que pudiera tener algunos riesgos de que con esta Credencial se pudiera intentar votar en territorio nacional. _____

Aquí, como podemos ver en el Proyecto de Acuerdo, en los formatos en los que se está proponiendo cómo quedaría esta Credencial desde el extranjero, no sería una Credencial idéntica, por supuesto a la que se expide en territorio nacional, porque la que se expide en el extranjero dice: "domicilio/adress", normalmente viene una dirección de otro país, aquí en el ejemplo es uno de Estados Unidos de América y trae una dirección que corresponde a Estados Unidos. _____

Y después de decir, por ejemplo, Houston Texas y el código postal de esa ciudad, viene el país al que corresponde, en este caso, United States of America, pero puede ser Argentina, España, etcétera, entonces creo que con esto se evita el riesgo de que pudiera tener un mal uso una Credencial que se expide en el extranjero y que fuera presentada en México. _____

Son varias peticiones, ustedes yo creo que han tenido la oportunidad, los que han podido platicar con los migrantes mexicanos ya sea aquí en México o allá en Estados Unidos, de que han señalado justamente estas situaciones de discriminación, que no necesariamente son en los bancos, pero también han sucedido en los bancos pero pueden ser en tiendas departamentales, pueden ser cuando solicitan algún servicio, para cambiar un cheque, en fin. _____

Entonces creo que realmente sí va a ser una situación que apoye a estos ciudadanos que tramitan su Credencial en el extranjero. _____

Desde luego, ya como habíamos dicho, hay más de 700 mil credenciales entregadas, y éstas justamente tienen la leyenda "desde el extranjero", creo que además de este

Proyecto de Acuerdo que en su momento pueda ser votado, también habrá que insistir en hacer una promoción tanto en los bancos y promoción aquí en el país para decir que esta Credencial es igualmente válida para identificarse, la que dice “desde el extranjero” y la que no lo dice. Sin embargo, lo hemos hecho, yo personalmente he acudido a la Comisión Nacional Bancaria, he estado platicando con los bancos, se comprometieron a tener alguna publicidad en las sucursales, pero bueno, aun así suceden estos temas de discriminación, entonces por eso creo que va a ser un avance y va a ser una situación, como las acciones afirmativas son, que va a ayudar a un grupo vulnerable, en este caso, a los migrantes mexicanos. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. _____

Comparto el conjunto de propuestas que incluye el Proyecto de Acuerdo, así como la iniciativa del Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

A lo largo de la discusión hubo algunas expresiones que quizá como le ocurrió al Consejero Electoral Jaime Rivera, me sorprendieron no por un disenso de fondo en la idea de que se haga la pregunta, como ya se hace tal cual la del domicilio, y entonces se empieza, creo, con que sí irá, y quien no lo quiera lo manifestará y no aparecerá. En eso estoy de acuerdo. _____

Pero, escuché, se decía que el sexo es una imposición social, una construcción social. _____

Y me parece que justamente lo que nosotros estamos haciendo es eliminar toda discriminación vinculada a la autodeterminación de género y de la identidad de género, no en el tema de sexo. Es decir, el sexo se determina en el par 23 de los cromosomas, es algo estrictamente biológico, “xx” o “xy”. Esa información es la que acaba reflejada en la Credencial, no una construcción social que alrededor de una persona tenga el género que tenga. _____

Sugiero que si se va a añadir esta reflexión en la parte considerativa, nos vayamos al documento de las Naciones Unidas titulado “Orientación Social e Identidad de Género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, la oficina del alto Comisionado, que señala cuál es la diferencia entre sexo y género, y dice claramente la diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe como un hecho biológico, y el segundo como una construcción social. _____

El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y el significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. _____

Si se va a incorporar a mí me gustaría que fuese con la precisión que los organismos internacionales especializados en derechos humanos le han dado al tema, para no confundirnos nosotros mismos. _____

Estoy de acuerdo con ello si es que se va a fortalecer la parte considerativa, insisto, escuché que el sexo es resultado de una construcción social, claramente es un acontecimiento biológico que escapa a la voluntad de cada uno de nosotros, es más, no es una decisión nuestra, el azar que está presente en la vida biológica y que se refiere a las especies animales de las que formamos parte, aunque tengamos construcciones intelectuales. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Es que vamos a darnos un poco de clase entonces. Primero, mi posición fue que los argumentos expuestos por la Consejera Electoral Dania Ravel se incluyeran. _____

Segundo, me doy por aludida porque lo que leí textual de un documento que tiene como fundamento elementos de género en los principios de Yogyakarta que son específicamente para el tema de trans, que son provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se toma como base todos los elementos

de trans, hacen esa distinción, pero no es mi interés teorizar aquí. Lo que pedí es que esos argumentos de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, pero la verdad es que sí creo que debemos de ponernos a analizar el tema en completo en la literatura especializada del tema y no descalificar nuestros argumentos. _____

Me parece razonable que podamos discutir los elementos, que podamos pensar diferente. No pedí que se incluyera lo mío, pedí que se incluyera lo que venía argumentado por parte de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que tiene el soporte que ya hemos utilizado en otros documentos. _____

Lo que digo y lo reitero, es el sexo es asignado, porque si no de otra forma dejamos de desconocer otras características biológicas que a veces nos dejan y dejan a las personas en el intermedio, sin definir desde nuestro ADN o desde nuestra biología cuál va a ser el sexo, pero no es mi intención ahora aquí discutirlo. Lo único que pediría es, que sí los argumentos expuestos que ya se han utilizado y que tiene muy bien armados la Consejera Electoral Dania Paola Ravel puedan ser incluidos y que también se abone desde el tema de los mexicanos residentes en el extranjero y quizás en otro momento, nos podamos poner a discutir cuál es el estado del arte en el tema de, precisamente, el derecho a esa identidad a la privacidad a la luz de los tratados internacionales y de la propia literatura actualizada. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

También me sumo a lo que viene en el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración en relación con la actualización del Modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, y estoy de acuerdo con lo que ya han defendido aquí en la mesa mis compañeras Consejeras Electorales, en el sentido de que, sí se debe tener la posibilidad de que el sexo sea una cuestión opcional si queremos que esté visible o no en la Credencial para Votar como sucede con el domicilio que también se incluye en la propia Credencial. _____

Creo que, es una cuestión para atender también a una población que está catalogada como un grupo vulnerable y también recordando que muchas personas trans ni siquiera pueden hacer el trámite de su género o de su sexo, porque en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país no se permite ese tipo de trámites salvo en 3, si no mal recuerdo. _____

Entonces, hay que atender también ese sector de la población, nosotros hemos estado trabajando desde el Instituto Nacional Electoral con las personas trans y con las organizaciones que las representan, y por eso también estamos haciendo esta propuesta. _____

Esta propuesta tiene como sentido fundamental, hacernos cargo de lo que se ha convertido la Credencial para Votar, ya no solamente es un documento electoral para sufragar el día de la Jornada Electoral. _____

Ahora, en la actualidad, aquí en México la Credencial para Votar es el documento oficial de identificación y tienen grandes virtudes, todos los códigos de seguridad, además, tiene una cuestión que es muy importante, es gratuita su expedición, o sea, eso no tiene ningún costo para los millones de mexicanas y mexicanos que tenemos acceso a este documento y haciéndonos cargo de esta situación es que precisamente, se está proponiendo que sea opcional incluir de manera visible el sexo de la persona. _____

Esto no implica que ese dato no se va a tener por el Instituto Nacional Electoral, claro que lo va a tener y de cada una de las personas sabemos a qué sexo corresponde, si es femenino o masculino. _____

Pero, es opcional que en la credencial aparezca, y esto va a ayudar, sobre todo a las personas trans. _____

Creo que, tenemos que reflexionar al respecto. _____

Lo mismo sería en relación con la Credencial para Votar desde el extranjero, o sea, sí, esa Credencial se expide para votar desde el exterior, pero muchos de nuestros connacionales pueden regresar al país y tendrían la posibilidad de identificarse con esta Credencial en territorio también nacional, sin que les pongan algún tipo de obstáculo porque la Credencial dice: “para votar desde el exterior”. _____

La mayoría de las personas que están aquí y que se dedican a los negocios, a hacer algún trámite, no están tan familiarizados con esa leyenda que está en esa Credencial que se expide para votar desde el extranjero. _____

Entonces, lo que estamos aquí buscando es simplemente hacernos cargo de circunstancias que pasan en la realidad, buscarles una solución, sin que eso vulnere de ninguna manera todos los requisitos y todas las cuestiones que nos obliga la propia Legislación. _____

Ahora, también les pediría que siempre tengamos una mente muy abierta, también para ir interpretando los artículos, por ejemplo, el artículo 156, en su párrafo 5, dice que la "...Credencial para Votar tendrá una vigencia de 10 años contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial...", o sea, perdería la vigencia. Pero, en un Acuerdo anterior, en el punto 22, nosotros aprobamos un Acuerdo por el que se aprueba que las credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018, fueran utilizadas en las entidades que se van a celebrar elecciones el próximo 2 de junio de 2019. _____

Si aplicamos la Ley a "raja tabla", estas credenciales hubieran perdido vigencia y hasta ahí hubiera terminado su actuación. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, el Consejero Electoral Enrique Andrade quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, gracias. .

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Por favor, ¿puede continuar con su intervención?. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, tiene el uso de la palabra Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

Rápidamente. Entonces, yo nada más les ponía este ejemplo que hemos aprobado en el punto 22, y donde no vi mayor argumentación en esta circunstancia de ampliar la vigencia de la Credencial para que pudieran votar las personas hasta en las elecciones del 2 de junio de 2019. _____

Entonces, sí les pediría tener esta mirada para poder apoyar estas modificaciones que se están previendo para la Credencial para Votar y que vuelvo a repetir, que nuestra Credencial para Votar es la identificación oficial en nuestro país, y que de verdad le sirva a toda la población, sin que ninguna persona se sienta discriminada. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Primero, quiero manifestarme a favor de suprimir de la Credencial para Votar expedida en el extranjero, la leyenda que está en el frente, y que como ya se explicó, puede conllevar algunas dificultades para los connacionales que se encuentren en territorio nacional, como es común que lo hagan muchos de ellos en visita, y que por esa leyenda puedan tener algunas dificultades de identificación, de reconocimiento de algunos trámites y demás. _____

Creo que, con eso no se pierde nada porque para fines electorales, la información de todas las credenciales expedidas desde el extranjero está debidamente registrada en el Padrón y en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero, de tal manera que solo podrían ejercer su derecho justamente desde el extranjero si se encuentra en esa Lista Nominal. Es decir, el Instituto Nacional Electoral tiene toda la base de datos y todos los instrumentos de lectura informática para asegurarse que esas credenciales se usen debidamente sin riesgo de cualquier otro uso electoral. _____

En esa medida, me parece que es procedente, es una medida justamente para evitar una dificultad que implicaría una discriminación. _____

Sobre el otro tema, creo que es conveniente para todos que la cuestión del sexo y el género y este dato se aborde de una manera equilibrada y racional, no es lo más

sano como punto de partida de la argumentación plantear un dilema entre la no identificación sexual o la discriminación, es decir, empecé diciendo que son 2 derechos que pueden perfectamente conciliarse._____

Ser identificado por el sexo es un derecho y también es un derecho no ser identificado por el sexo si así conviene algunas personas según su identidad de género libremente elegida y que debe ser respetada. Por esa razón, me inclino porque sí pueda ser un dato que se incluya o no a petición expresa de quien no quiera que se ponga ese dato._____

De tal manera que en la práctica lo más común va a ser que el dato de sexo se incluirá como uno de los datos mandados por la Ley y que también constituyen uno entre otros datos de identidad, lo excepcional y completamente legítimo, desde mi punto de vista, será omitir el dato a petición expresa de las personas que así lo quieran, y aquí estoy citando textualmente la expresión de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en su segunda intervención, que dice: “cuando expresamente lo soliciten, que sea omitido” me parece que es una solución bien equilibrada, incluyendo y nos permite superar un falso dilema entre identificación de algunos datos y discriminación._____

De verdad, creo que en esta mesa nadie quiere discriminar a nadie._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente._____

Me parece que no nos va a llevar a ningún lado en este momento tener un debate conceptual, y creo que no vale mucho la pena para efectos de esta decisión porque no creo que es la parte más relevante de esta decisión si conceptualmente se va a nombrar de una forma, se va a identificar en una forma, se va a asignar en un momento o en otro; creo que podemos dejar ese debate conceptual para otra circunstancia._____

Pero, lo que no podemos dejar para otra circunstancia o para otro momento es una realidad, y es una realidad, decía el representante del Partido del Trabajo una cosa que es real, ¿cómo se obtiene ese dato de sexo en la Credencial para Votar? De otro documento, del Acta de Nacimiento. _____

El problema es que, en el país, bien lo decía la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, en 3 estados de 32, es decir, en nada, 3 estados de 32 permiten que se haga una reasignación en el Acta de Nacimiento como trámite administrativo, en todos los demás tú tienes que ir a juicio, claro, el amparo lo vas a ganar. _____

Solo pregunto cuántas personas se pueden ir al amparo, 3 estados. Hay otros 3 que ya tienen iniciativas presentadas, pero todavía no están aprobadas, Nayarit, Michoacán, Ciudad de México. Si resulta que no naciste en Nayarit, Michoacán y Ciudad de México no tienes el derecho de hacer el trámite administrativo; Querétaro, Campeche y Coahuila esperemos a ver si se las aprueban o no se las aprueban, pero está la iniciativa presentada. _____

Ese es el término en el que estamos hoy, una persona que quiere hacer un trámite de esta naturaleza, si ponemos la opción, a fuerza necesariamente tiene que aparecer un sexo distinto al que reconoce. Y esto es un derecho, es un derecho tomar esa decisión. _____

Y no me iría al extremo que se señala tampoco, si me dicen que no quieren tener una Credencial para Votar para votar, qué bueno que me digan eso. La pregunta es ¿dónde eso resulta un término que le garantice mejor un derecho?, en este caso lo que estamos hablando es un tema de derechos, qué medidas se adoptan para ampliar el ejercicio de los derechos. _____

Se señalaba hace 2 o 3 puntos anteriores, ampliamos la vigencia de la Credencial para Votar, eso no es lo que dice la Ley, ¿por qué ampliamos la vigencia?, no fue porque se nos ocurrió y pensamos que tal vez sería lindo irnos en contra de la Ley. No, es porque lo que está en juego es un derecho, vamos a permitir que las personas que no han hecho este cambio de Credencial puedan Votar, votar es un derecho. _____

Entonces se opta por una interpretación, por una medida, por un procedimiento que garantice ese derecho, porque el no adoptar medidas también genera perjuicios, también genera contextos de discriminación, amplía las barreras para el ejercicio de

los derechos, y las autoridades estamos obligadas a eliminar las barreras para el ejercicio de los derechos, tanto de los grupos mayoritarios, como de los grupos minoritarios, y principalmente adoptar medidas para los grupos minoritarios. Esa es una obligación que tenemos precisamente que parte de la lógica y del principio de no discriminación, eso es lo que significa el principio, no discriminar no solo significa no hacer una acción positiva que discrimine, también implica no adoptar medidas para evitar contextos de discriminación. Eso es lo que significan las distintas vertientes de un principio, de un derecho constitucional que esta autoridad está obligada a salvaguardar. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Únicamente para decir que proporcionaré los argumentos que tengo, como lo solicitó la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, con mucho gusto se los haré llegar. ____

Me refiero exclusivamente en los argumentos que presenté a 2 tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a 2 criterios de recursos de apelación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____

No menciono lo que ella refería respecto a la asignación de sexo al nacer, que parece ser que eso podría generar un poco de escozor, sin embargo, quiero decir que es correcto conceptualmente hablando lo que ella ha dicho. _____

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el sexo asignado al nacer, que esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino, la asignación de sexo no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. _____

La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas por algunas personas, no encajan en el binario mujer-hombre, es correcto conceptualmente lo que ella ha referido, pero creo que vale la pena no entrar al meollo de estas cuestiones, ha

evolucionado mucho la doctrina, los criterios de Tribunales Electorales especializados en derechos humanos. _____

Entonces, para no errar quedémonos con algo más tradicional y ortodoxo, y podemos citar exclusivamente lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema y a no discriminar a las personas trans y eso podemos argumentarlo como la medida que estamos proponiendo en el nuevo formato de la Credencial para Votar dando la opción de que las personas puedan elegir si aparece de manera visible o no el sexo en la misma Credencial. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Permítanme aprovechando que estamos en la tercera ronda y todavía hay espacio para discusión, no estoy interviniendo, no me vayan a tomar el tiempo, estoy haciendo una moción de procedimiento. _____

Para efectos de la propia. No, no, es que tengamos un pequeño problema hasta donde yo advierto a partir de un consenso, me parece, generalizado, pero un problema a partir de un planteamiento que se ha hecho de tipo procedimental y me gustaría en todo caso, en su momento ordenar la votación que tendrá que realizar el Secretario Ejecutivo con claridad respecto del punto para evitar que en la generación de un engrose pueda haber. No sé, recoja el sentir de esta mesa. _____

Me parece si no he seguido mal la discusión, que existe una posición mayoritaria entre los Consejeros Electorales respecto de la alternativa a propósito del campo “sexo”, es decir, de la visibilidad o no a partir del campo “sexo”, pero me da la impresión de que los argumentos que se han vertido no necesariamente coinciden respecto de la argumentación que ha planteada la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y de la sugerencia de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, de que esa argumentación se coloque en la parte considerativa. _____

Me da la impresión que al no haberse considerado, a menos que me esté equivocando, pero me gustaría antes de proceder a la votación que haya claridad sobre el punto y si no, que eventualmente ese planteamiento de que se incorporen las consideraciones de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, sea sometida a

votación para que no haya ninguna duda respecto de lo que, repito, es una coincidencia, entiendo, de fondo pero no necesariamente en términos de la motivación y creo que es importante resolverlo por lo delicado y trascendente de este tipo de Acuerdos. _____

Así que, gracias por permitirme la moción, es de ustedes la palabra. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Consejero Presidente, quería clarificar las cosas, porque probablemente nos podamos ahorrar, justamente, un engrose que después se vuelva controvertido. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con mucho gusto le cedo la palabra, porque, además, creo que es importante. _____

Le cedo el uso de la palabra si ustedes no tienen inconveniente. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, voy a hacer mi intervención y seguramente la terminaré con una pregunta para la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Me parece que para la motivación puede ser muy útil y quizás ahorrarnos, efectivamente, discusiones que podrían salir sobrando o desviarnos del meollo del asunto, si ponemos como una de las motivaciones que para garantizar el derecho de las personas transgénero, transexual, etcétera, y su derecho a no ser discriminados, que el dato de opción, el dato de sexo pueda ser omitido a solicitud expresa de la persona interesada, que la consideración principal, y ahí tenemos una ventaja, este Consejo General ya ha tomado acuerdos precisamente para garantizar el derecho a votar, y en general derechos políticos de personas trans. _____

Me parece que eso podría ahorrarnos una discusión más abstracta, cuando podemos invocar simplemente una garantía que ya este Consejo General, repito, ha otorgado con sus acuerdos o ha reconocido, si el argumento justamente es para garantizar el derecho a la identidad de género de personas trans y que puedan optar por omitir ese dato, digamos, omitirlo en forma visible ese dato, se adopta esta disposición. _____

Digo, obviamente no es exactamente con esa redacción, pero sí invocando esa argumentación. _____

Entonces, quisiera preguntar a la Consejera Electoral Dania Ravel y tal vez ella tenga oportunidad en la siguiente ronda, si una consideración que invoque justamente el derecho que para garantizar el derecho de las personas trans, sería una de las motivaciones centrales de esta disposición. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. _____

Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido Revolucionario Institucional. _____

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. _____

En un principio yo no tenía la claridad de esta situación porque me voy a los datos duros de la Ley, como ya lo dije, pero escuchando los argumentos, la profundidad de los mismos, o de algunos de ellos, en este caso el Partido Revolucionario Institucional acompañará el que ese campo sea opcional, por así creer conveniente en el sentido de que se cierra la brecha o se estrecha la brecha de discriminación hacia cierto grupo como ya se ha dicho aquí, y por otras cuestiones que no es un tema ya de definir, que por cierto se hizo muy bien el sexo biológico o el género que es construido a través de una construcción social y cultural. _____

En ese sentido y por así convenir también en el caso del Partido Revolucionario Institucional, que tenemos nosotros una Secretaría que atiende todo este tipo de asuntos que precisamente busca cerrar esa brecha de discriminación, no solo del grupo transgénero, lésbico, gay, sino de otros grupos vulnerables que también son discriminados por muchas otras cuestiones, nosotros acompañaríamos el sentido de que este campo sea opcional. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias señora representante. _____

Entiendo que hay una moción de procedimiento de la Consejera Electoral Dania Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Dialogando con la Consejera Electoral Claudia Zavala, comentábamos que podríamos dejar el Proyecto como está, ya con la medida incluida, no reforzar la motivación, pero en su caso nosotros presentaríamos un voto concurrente para ahí poner toda nuestra argumentación que consideramos que puede sostener la medida que nosotros estamos adoptando y ya con eso, en caso de impugnación iría completo para la revisión en la Sala Superior. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. _____

Permítanme intervenir atendiendo la moción que ha presentado la Consejera Electoral Dania Ravel, a ver, me parece que aquí, insisto, más allá de la argumentación que coloca a este Instituto en un contexto legal que nos trasciende en muchos sentidos, porque finalmente, como ya se ha señalado, hay solo 3 estados en donde legalmente existe la posibilidad de cambiar voluntariamente el sexo, y este Instituto tiene en términos de los requisitos de lo que sexo legalmente significa, el dilema de eventualmente homogeneizar, sin entrar aquí demasiado en la discusión que ya se ha tenido, sexo con género. Es decir, yo creo que finalmente el propósito está claro, y las personas que habitan en un Estado en donde no existe esta posibilidad legal de determinar, digámoslo así, ad voluntatem el sexo, existe la alternativa de que no aparezca este campo visible en la credencial y es pertinente porque esa es una discusión que trasciende a la decisión que estamos tomando hoy en torno a la credencial y que tendrá que darse de manera muy amplia, de manera insistente, creo que la alternativa de ponerlo como voto concurrente abona a esta discusión pero que trasciende en estos momentos a esta autoridad. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del Partido del Trabajo. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Solo diré que sí estaríamos de acuerdo en el planteamiento en el sentido de que la persona decida si aparece visible o no, que es distinto a decir que no aparezca, no, no, va a aparecer en la Credencial para Votar con Fotografía, visible o no visible, ése es el asunto._____

Y solo, quisiera pedir muy encarecidamente algo: que en el Proyecto de Acuerdo podamos agregar un punto en donde se obligue a una campaña de difusión, una tarea y una capacitación al personal de módulo sobre este trabajo que se va a hacer con este Proyecto de Acuerdo._____

También teniendo claridad, como lo dije en nuestra primera participación, no se empieza mañana, o sea, es un trabajo que va a llevar otras cosas, buscar a la empresa que va a ganar el Concurso, etcétera, etcétera, para tener claridad de que no es mañana._____

Gracias Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante._____

Tiene la palabra el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática._____

El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente._____

Buenas tardes Consejeras, Consejeros y representantes._____

Sobre este tema en particular nos parece relevante el debate que se ha dado, pero sí nos parece correcto estas últimas participaciones, sobre todo las consideraciones que han hecho las 2 Consejeras Electorales, lo que tenemos que ver es cómo maximizar e interpretar los derechos humanos y también evitar la discriminación, pero lo que está en el fondo es cómo le damos certeza y viabilidad a un nuevo modelo de la Credencial de Elector, que permita llevar los datos que la Ley obliga, que cumplimos con el mandato legal y constitucional pero también incrementamos derechos, me parece que hay una comunidad de la diversidad sexual que vive circunstancias de represión, discriminación, y que, sería bueno que este órgano electoral tutelara ciertos derechos._____

Por lo tanto, no podemos ir en contra del principio de progresividad y de maximizar estos derechos. Pero, que sí ubiquemos el debate, finalmente esto llegará al Tribunal Electoral, y que tiene que llegar también a actualizar el marco normativo y legislativo y tendrá que ser un debate en la propia instancia legislativa para actualizar nuestra Ley Electoral. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Quisiera que se votara la argumentación propuesta, ¿por qué?, porque es el acto de autoridad, es a partir de eso donde se podría juzgar la impugnación. _____

Si quedamos en minoría y no se aprueba lo agregamos como voto concurrente, o sea esto es una consecuencia, pero sí que se vote la de la Consejera Electoral Dania Ravel, no mis palabras, la argumentación que tiene la Consejera Electoral Dania Ravel, que es acorde con lo que ya hemos dicho en este Consejo General. _____

Pero, sí primero que se vote, incluir esa argumentación para el acto de autoridad, por favor. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Nada más quisiera precisar que la implementación de esta medida en los módulos va a significar una pregunta adicional como se hace respecto del domicilio, que usted lo conoce muy bien, va uno a hacer algún trámite vinculado con la credencial, cambio de

domicilio, reposición por alguna cuestión de extravío o bien un alta al Padrón y nos preguntan, ¿quiere usted que el domicilio aparezca visible o no? _____

Entonces aquí será lo mismo respecto del sexo de la persona, ¿quiere usted que aparezca la información relativa a su sexo visible o no visible? Es decir, en el código Quick Response (QR) en este caso, que de todas maneras lo va a contener, por cierto, como está el domicilio hoy día en el propio código de la credencial. _____

Esa será la forma en que se va a implementar, creo que eso es básicamente la modalidad que vamos a asumir, no es un tema de que a priori se vaya a retirar, sino será una decisión de la persona que acuda al módulo a realizar el trámite conducente. Y a mí me parece correcta la propuesta de las 2 Consejeras Electorales, tanto de la Consejera Dania Ravel, como de la Consejera Electoral Claudia Zavala en el sentido de que se vote. Si se rechaza será importante que se agregue el voto particular con sus argumentos en el documento final para que en caso, espero que no, en caso de que hubiera alguna impugnación el Tribunal Electoral tuviera todos los elementos que han sido vertidos aquí en esta deliberación del Consejo General. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Si no hay inconveniente procedamos a la votación. _____

Secretario del Consejo, por favor. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Siguiendo la discusión les propongo una votación en lo general donde se incluiría la fe de erratas y la adenda que fueron circuladas previamente. _____

Entiendo que la propuesta que hizo el representante del Partido del Trabajo a fin de eliminar lo de “en su caso” en los Puntos de Acuerdo Segundo y Tercero, no habría objeción para que eso fuera también en la votación en lo general. _____

Y ya en lo particular, someteríamos a la consideración el engrose que propuso la Consejera Electoral Dania Ravel, solo el engrose. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 24, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas y la adenda circuladas previamente y la propuesta del representante del Partido del Trabajo, a fin de eliminar en los Puntos de Acuerdo Segundo y Tercero el enunciado “en su caso”._____

Los que están a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

Ahora someto a su consideración el engrose propuesto por la Consejera Electoral Dania Ravel, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

6 votos._____

¿En contra? 5 votos._____

Aprobado el engrose por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez) y 5 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

Consejero Presidente tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1499/2018) Pto. 24_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN TERRITORIO NACIONAL Y DESDE EL EXTRANJERO

ANTECEDENTES

1. **Modificación del modelo de Credencial para Votar.** El 21 de noviembre de 2012, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo CG732/2012, modificar el modelo de la Credencial para Votar.
2. **Función de los códigos de barras bidimensionales del modelo de Credencial para Votar.** El 23 de octubre de 2013, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo CG293/2013, la función de los códigos de barras bidimensionales en el modelo de Credencial para Votar aprobado mediante Acuerdo CG732/2012.
3. **Incorporación de variantes mínimas al modelo de Credencial para Votar.** El 20 de noviembre de 2013, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó, mediante Acuerdo CG360/2013, incorporar variantes mínimas al modelo de Credencial para Votar aprobado mediante Acuerdo CG732/2012.
4. **Actualización del modelo de Credencial para Votar.** El 30 de mayo de 2014, este órgano superior de dirección determinó, mediante Acuerdo INE/CG36/2014, actualizar el modelo de la Credencial para Votar aprobado mediante Acuerdo CG732/2012.
5. **Modelo de la Credencial para Votar desde el Extranjero.** El 14 de octubre de 2015, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG875/2015, el modelo de la Credencial para Votar desde el Extranjero.

6. **Recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia.** El 13 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a este Consejo General que apruebe la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.
7. **Aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 17 de diciembre de 2018, en su cuarta sesión ordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores mediante Acuerdo INE/CRFE-05SO: 17/12/2018, aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente para aprobar la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), d), e), f) y 2; 31, párrafo 1; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos ñ), gg) y jj); 131, párrafos 1 y 2; 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción I, apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM establece que son ciudadanas y ciudadanos de la República, las mujeres y los varones que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

Asimismo, el artículo 35, fracciones I y II de la CPEUM dispone que son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otros, votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Adicionalmente, el artículo 36, fracción I de la CPEUM, en relación con el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro Federal de Electores.

Bajo esa arista, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM establece que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

A su vez, la citada disposición constitucional determina en el Apartado B, inciso a), párrafo 3, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III de la LGIPE que, para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Por su parte, el artículo 133 de la CPEUM mandata que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico, en esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren bajo su tutela.

Entre las disposiciones particulares localizadas en instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y que se vinculan con el derecho a votar y ser votado, el artículo 21, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos prevé que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto.

Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, los estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Por otra parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y f) de la LGIPE señala que son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Con base en el artículo 44, párrafo 1, inciso ñ) de la LGIPE, este Consejo General tiene la atribución de aprobar los modelos de las Credenciales para Votar que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero.

Tampoco debe perderse de vista que, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c), d) y ñ) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar, y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la propia ley y las demás que le confiera ésta.

Conforme el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE prestará por conducto de la DERFE y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

Por su parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

Asimismo, el artículo 128 de la LGIPE estipula que en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de esa ley, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero.

El artículo 130 de la LGIPE ordena que las ciudadanas y los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra; asimismo, las ciudadanas y los ciudadanos participarán en la

formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el INE debe incluir a las ciudadanas y a los ciudadanos en el Registro Federal de Electores y expedirles la Credencial para Votar, toda vez que éste es el documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de voto.

Así, el artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que las ciudadanas y los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de LGIPE, una vez llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de la misma ley, se procederá a formar las Listas Nominales de Electores con los nombres de aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se les haya entregado su Credencial para Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 156, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, la Credencial para Votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos de la o del elector:

- a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellas y aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;
- b) Sección electoral en donde deberá votar la ciudadana o el ciudadano. En el caso de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
- c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- d) Domicilio;
- e) Sexo;

- f) Edad y año de registro;
- g) Firma, huella digital y fotografía de la o del elector;
- h) Clave de registro, y
- i) Clave Única del Registro de Población.

Además, tendrá:

- a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;
- b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del INE;
- c) Año de emisión;
- d) Año en el que expira su vigencia, y
- e) En el caso de la que se expida a la ciudadana o al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”.

El párrafo 4 de dicho precepto legal señala que en lo relativo al domicilio, la ciudadanía podrá optar entre solicitar que aparezca visible en el formato de su Credencial para Votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine este Consejo General.

El párrafo 5 de la disposición legal anteriormente aludida señala que la Credencial para Votar tendrá una vigencia de diez años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término la ciudadana o el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

Por su parte, el artículo 330, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE prevé que en el ejercicio del voto de las ciudadanas y los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el artículo 34 de la CPEUM y los señalados en el párrafo 1 del artículo 9 de esa misma ley, deberán, entre otros aspectos más, solicitar a la DERFE, cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

El artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE alude que las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

De igual manera, el artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que a partir del 1º de septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección presidencial, la DERFE pondrá a disposición de las y los interesados los formatos de solicitud de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, en los sitios que acuerde la Junta General Ejecutiva del INE, por vía electrónica o a través de los medios que determine esa misma.

El párrafo 4 del artículo en comento, describe que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su Credencial para Votar, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 136 de esa misma ley.

Asimismo, el párrafo 5 del propio artículo expone que la DERFE establecerá en las embajadas o en los consulados de México en el extranjero, los mecanismos necesarios para el trámite de credencialización. El INE celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

El párrafo 6 del multicitado artículo refiere que, para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abrirá un plazo de noventa días para el trámite de credencialización que el INE determinará para cada Proceso Electoral antes de que inicie el plazo de incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero a que se refiere el párrafo 1 de ese mismo artículo.

Por otra parte, el artículo 5, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior establece, entre las atribuciones de este Consejo General, la relativa a la aprobación del modelo de la Credencial para Votar.

En este sentido, el artículo 45, párrafo 1, inciso m) del Reglamento Interior establece la atribución que tiene la DERFE para emitir los procedimientos tendentes a definir los mecanismos para la expedición y entrega de la Credencial para Votar, incluyendo a las mexicanas y a los mexicanos residentes en el extranjero que hayan solicitado su inscripción al Padrón Electoral.

Por lo anteriormente señalado, este Consejo General tiene las atribuciones legales y reglamentarias para aprobar la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.

TERCERO. Motivos para aprobar la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.

Dada la importancia que cobra la Credencial para Votar en la vida cotidiana de la ciudadanía como instrumento para votar y como documento oficial de identificación, el INE reconoce la obligación de salvaguardar la integridad de sus datos, de tal manera que resulta necesario considerar la adecuación de sus elementos con la finalidad de robustecerla contra riesgos de falsificación, alteración, duplicación, diversificación y simulación; por lo anterior, este Instituto se encuentra en constante observancia a los avances tecnológicos que permitan mejorar los mecanismos y controles de seguridad necesarios para cumplir con dicha obligación.

Es así, que el modelo de la Credencial para Votar se ha venido actualizando, contribuyendo a mejorar la seguridad en el tratamiento y protección de los datos personales que contiene y permite atender los estándares internacionales de los documentos de identificación, logrando que este instrumento electoral continúe siendo un documento seguro y confiable.

Ahora bien, producto de una investigación de mercado realizada por la DERFE para actualizar el modelo actual de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, se identificaron diversas alternativas tecnológicas que permiten tener una visión amplia de las posibilidades a considerar, en particular a los elementos que la conforman.

Ante ello, las modificaciones que se proponen al modelo de la Credencial para Votar servirán de base para tener un instrumento con los elementos de información estrictamente necesarios que cumplan con la función del mismo, tanto como instrumento para votar y como documento oficial de identificación, sin dejar de atender lo establecido en el artículo 156 de la LGIPE.

Asimismo, como parte de la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero se incorporan elementos tecnológicos recientes, como es el caso de los códigos bidimensionales QR de alta densidad, que brindan un control de información acotada y pública para

tener la posibilidad de verificar la autenticidad de la credencial y los datos asentados en ella.

Una de las nuevas ventajas relacionadas con la inclusión de códigos bidimensionales QR de alta densidad en la Credencial para Votar, es la posibilidad de encriptar diversos datos personales de sus titulares y así contar únicamente con los datos idóneos, necesarios, proporcionales y útiles de manera visible en dicho instrumento electoral, a fin de garantizar sus propias finalidades constitucionales, es decir, como instrumento para votar y como medio de identificación.

Al respecto, conviene mencionar que el artículo 156, párrafos 1, incisos a), e), g) y 2, inciso e) de la LGIPE establece que entre los datos mínimos que debe contener la Credencial para Votar se encuentran la entidad, el municipio, la localidad, el sexo, la huella digital y, para el caso de las credenciales que se expidan en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”.

Sobre este punto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha pronunciado, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-525/2012 y SUP-RAP-182/2013, en el sentido de que, si bien el artículo 200, párrafo 1 del entonces vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es correlativo con el artículo 156 de LGIPE, se limitaba a señalar que la Credencial para Votar debería contener, entre otros elementos de información, el del domicilio, no especificaba o precisaba la forma en que éste debería incorporarse.

Además, la misma Sala Superior coincidió, en lo sustancial, con esta autoridad electoral en el sentido de que si bien para la función electoral se deben recabar los datos completos de ciudadanas y ciudadanos para ubicar su residencia dentro de un Distrito y una sección determinados en la Lista Nominal de Electores, no era necesario que apareciera la calle y números exterior e interior del domicilio de modo visible en la credencial puesto que, durante la Jornada Electoral, las ciudadanas y los ciudadanos deben sólo acreditar su identidad —mostrando los datos de identidad: fotografía, nombre y apellidos, edad— frente a las y los funcionarios de casilla y comprobar que están en la Lista Nominal de Electores. Asimismo, deben comprobar que la casilla es la que les corresponde, lo que se logra identificando el registro en la Lista Nominal de Electores y para ubicar la casilla se requiere sólo el número de sección que aparece en la credencial (artículos 175 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Siendo un principio de derecho “en donde la ley no distingue no cabe distinguir” y tomando en consideración que los elementos de la Credencial para Votar deben estar encaminados tan solo a la consecución de sus fines constitucionalmente válidos, tanto como instrumento para votar y como documento oficial de identificación, con base en el criterio de la Sala Superior del TEPJF anteriormente citado, resulta adecuado que la huella digital, la entidad, el municipio y la localidad de la o el titular queden integrados en los códigos bidimensionales QR de alta densidad al reverso de dicho instrumento electoral, puesto que para identificarse y votar en las elecciones que correspondan, basta que las ciudadanas y los ciudadanos acrediten su identidad con los datos relativos a la fotografía, nombre, apellidos y fecha de nacimiento, con lo cual apareciendo éstos de forma visible en el anverso de la credencial, quedarán garantizados tales derechos.

Ahora bien, con relación al dato de sexo, se considera oportuno que éste sea integrado al código bidimensional QR de alta densidad en el reverso de la credencial por las mismas razones expuestas con antelación y, de manera opcional, si es deseo de la ciudadana o el ciudadano, se podrá incluir de forma visible en el anverso de la misma.

En este punto resulta conveniente señalar que, en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil y personas que trabajan por la garantía y respeto de los derechos humanos de las personas trans, en respuesta a sus demandas y en cumplimiento a nuestras obligaciones como autoridad, desde el INE se han impulsado diversas acciones para asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas trans, entre ellas, el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, así como una campaña para invitar a esta población a que cambien la fotografía de su Credencial para Votar con la finalidad de que sea acorde con su identidad y expresión de género.

En concordancia con lo anterior, resulta necesario reiterar el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, tanto en el SUP-RAP-182/2013 como en el SUP-RAP-525/2012, respecto de las facultades que tiene el INE, antes Instituto Federal Electoral, para interpretar las leyes respecto de la modalidad de inclusión de datos que no resultan esenciales para la identificación de una persona (fotografía, nombre y apellidos, edad):

Es perfectamente legítimo que la autoridad administrativa, en el ejercicio de su competencia, interprete la Legislación Electoral de la forma en que considere la protección más amplia de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la protección de los datos personales contenidos en la credencial para votar.

Acorde con el nuevo entorno normativo que traza el artículo 1° de la Constitución Federal, todas las autoridades administrativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben interpretar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de manera que más beneficien a las personas.

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF determinó que, si bien es cierto que la ciudadanía, así como las instituciones públicas y privadas suelen utilizar la Credencial para Votar para realizar diversos trámites, ese no es un fin constitucionalmente válido de la misma y por lo tanto no puede justificar la limitación de un derecho fundamental como el de la protección de datos personales sin consulta previa.

En este sentido, aunado a la protección de datos personales, el dato referente al sexo se encuentra ligado con el derecho a la intimidad, la vida privada y al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, las personas tienen el derecho de decidir ocultar esta información, máxime cuando no aporta ningún elemento adicional para acreditar su identidad.

En este momento el INE cuenta con las herramientas para revertir una situación de discriminación a través de la cual se imponen barreras para la garantía del derecho a la identidad, libre desarrollo de la personalidad y protección de datos personales, y se reproduce y perpetúa la discriminación histórica y estructural que han sufrido las personas trans. Es por ello que esta medida resulta adecuada y acorde con la realidad social y tecnológica en la que nos encontramos.

El incorporar de manera visible del dato referente al sexo en la Credencial para Votar, en todos los casos, sin consultar a la o el titular de la credencial, podría resultar en discriminación indirecta en su perjuicio; a pesar de que parece ser una medida neutral existen ciertos factores, como la identidad de género, que finalmente provocan un trato diferenciado e injustificado hacia un sector poblacional.

Lo anterior, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Tesis Aislada de rubro: “DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O NO

EXPLÍCITA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE EL ANÁLISIS DE FACTORES CONTEXTUALES Y ESTRUCTURALES”, y que se cita a continuación:

Época: Décima Época
Registro: 2017989
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXI/2018 (10a.)
Página: 841

El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas, las políticas, las prácticas y los programas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa–, sino también cuando éstas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Ahora bien, para poder establecer que una norma o política pública que no contempla una distinción, restricción o exclusión explícita sí genera un efecto discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el orden social o al pertenecer a determinado grupo social –con el consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales–, es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en torno al género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica; las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos históricamente desaventajados, y las condiciones socioeconómicas. Estos factores pueden condicionar que una ley o política pública –aunque se encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre otros– finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusta o injustificable de acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social.

La SCJN, a través de la tesis aislada de rubro “REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL”, ha considerado que debe darse al género un carácter preeminente respecto al sexo, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género, porque son aspectos que definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad:

Época: Novena Época
Registro: 165693
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Civil
Tesis: P. LXXI/2009
Página: 20

REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL. Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF también se pronunció a través del SUP-JDC-304/2018, en el cual manifestó que en materia del cumplimiento del principio de paridad de género, las autoridades no pueden ni deben verificar el sexo de las personas, sino que lo que se debe tomar en cuenta es el género al que se autoadscriban:

Ni la autoridad electoral local ni alguna otra del Estado Mexicano se encuentran legitimadas para verificar, a través de un procedimiento, la adscripción sexogenérica de una persona.

Así, partiendo de que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, la tesis de la que parte esta Sala Superior es que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto.

Este órgano jurisdiccional considera que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona. Por lo que,

bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción manifiesta.

Se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el Estado Mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la justicia sino a condiciones dignas de vida que permita el ejercicio pleno de sus derechos y, entre ellos, los derechos político- electorales, el Estado se encuentra obligado a preservar los principios constitucionales que rigen en la renovación de los órganos de representación nacional, y, de manera particular, el principio de paridad de género.

En este sentido, se considera que el Estado debe garantizar que los lugares sean ocupados por personas que de forma auténtica se autoadscriban a tal condición, pues ello es lo que fortalece la irradiación del principio de representatividad y composición pluricultural.

En esa medida, la autoadscripción de una persona resulta suficiente para que la autoridad administrativa electoral la registre como persona postulada a un cargo de elección popular dentro del segmento previsto para el género en el que se auto percibe.

Por las consideraciones expuestas, este Consejo General estima conveniente aprobar que el dato de sexo sea integrado en el código bidimensional QR de alta densidad al reverso de la Credencial para Votar y, solo en caso de que su titular acepte, ser incorporado de manera visible en el anverso del referido instrumento electoral, asegurando con ello el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 de la LGIPE pero, sobre todo, generando acciones afirmativas que favorezcan a las personas trans y que eviten actos discriminatorios en su contra.

Por último, es conveniente mencionar que el INE ha recibido solicitudes recurrentes por parte de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, en el sentido de que no aparezca en la Credencial para Votar que se expide fuera del país, la leyenda “Desde el Extranjero”, refiriendo que se les ha restringido su derecho de identificación, pues al presentar ese instrumento electoral en algunas instituciones se les ha negado su aceptación en la realización de determinados trámites.

En esa tesitura, en atención a lo dispuesto en el artículo 1° de la CPEUM, que consagra el principio *pro persona*, deberá favorecerse en todo tiempo a las personas, buscando la protección más amplia de sus derechos; en tanto, en su párrafo tercero dispone la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, el propio artículo 1° establece en su párrafo quinto que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De esta manera, es necesario aplicar medidas que igualen las condiciones de nuestros connacionales que viven en el extranjero frente a quienes residen en territorio nacional, para lo cual, es importante resaltar que la Sala Superior del TEPJF emitió la Jurisprudencia 11/2015, bajo los rubros y contenido siguientes:

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.

Como puede observarse, las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos que se encuentran en desventaja como es el caso

de nuestros connacionales que residen en el extranjero, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales. Se trata de una medida proporcional razonable y objetiva que permite a la vez el cumplimiento del principio de certeza electoral.

Por tanto, es menester de esta autoridad electoral establecer directrices y orientar las acciones conducentes a garantizar que, para identificarse y ejercer el derecho del voto, las ciudadanas y los ciudadanos que vivan en territorio nacional o en el extranjero puedan hacer uso de su Credencial para Votar en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

Es por ello que se estima conveniente omitir la leyenda “Desde el Extranjero” para las Credenciales para Votar que se expidan en el extranjero y, de igual manera, sea integrada al código bidimensional QR de alta densidad en el reverso de la credencial, como elemento de control por parte de esta autoridad electoral y, con ello, se asegure a las ciudadanas y los ciudadanos que son titulares de las mismas su uso como instrumento para votar desde el extranjero y puedan utilizarla como medio de identificación tanto dentro como fuera del territorio nacional.

En virtud de los argumentos manifestados, a continuación se describen las características de los elementos que deberán contener estos instrumentos electorales:

A. Credencial para Votar en territorio nacional.

Respecto del modelo de Credencial para Votar en territorio nacional, se identificó conveniente mantener como material central el sustrato “Teslin” u otro material que proporcione las mismas o mejores características, y cuya durabilidad deberá ser como mínimo 10 años; así como el poliéster “Mylar” u otro similar que cumpla con las características de recubrimiento para el laminado del documento.

En lo concerniente a los elementos de seguridad de este modelo de credencial, se consideran al menos los siguientes para su conformación:

- a) Recuadros con microtexto;

- b) Elemento Ópticamente Variable (OVD);
- c) Incorporación de tintas de seguridad visible e invisibles;
- d) Diseño de seguridad de alta resolución, y
- e) Elemento táctil.

Sobre la distribución y tamaño de los datos, se incrementa el número de caracteres para los nombres y apellidos de sus titulares de 32 a 50; ello, en aras de maximizar el derecho de identificación de la ciudadanía, toda vez que se han presentado diversos casos en que el número de caracteres de los nombres y apellidos de las y los solicitantes excede los 32 elementos.

También se reubica la firma de la o del titular en el anverso de la credencial; se eliminan los datos repetidos del domicilio como el estado, municipio y localidad; se resalta el elemento referente a la sección; se reubica la huella dactilar y se establece una nueva distribución de la información, con la finalidad de facilitar la visibilidad de los datos con mayor uso del documento por la ciudadanía.

En cuanto a los elementos de control y lectura rápida, se cambia la denominación del código identificador OCR por el de “Sección + ID” de la ciudadana o el ciudadano, el cual consiste en un número consecutivo designado a cada uno de sus titulares con fines de identificación.

De igual manera, se incorporan códigos de barras tradicionales, así como códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido, con la finalidad de brindar un control de información acotada y pública, y así tener la posibilidad de verificar la autenticidad de la Credencial para Votar.

Además, el código bidimensional QR de alta densidad permitirá almacenar datos de forma comprimida y encriptada.

De esta manera, con la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional, este Instituto y la propia ciudadanía podrán

contar con elementos necesarios para corroborar la autenticidad del referido instrumento electoral.

B. Credencial para Votar desde el Extranjero.

Respecto de la fabricación de la Credencial para Votar desde el Extranjero, al igual que la expedida en territorio nacional, se mantiene el uso del sustrato “Teslin”, así como el poliéster “Mylar” para el laminado del documento.

Ahora bien, como se ha mencionado, resulta pertinente omitir la leyenda “Desde el Extranjero” e integrarse ésta al código bidimensional QR de alta densidad en el reverso de la credencial.

Para los elementos de seguridad, se consideran al menos los siguientes para su conformación:

- a) Recuadros con microtexto;
- b) Elemento Ópticamente Variable (OVD);
- c) Incorporación de tintas de seguridad visible e invisibles;
- d) Diseño de seguridad de alta resolución, y
- e) Elemento táctil.

En lo concerniente a la distribución y tamaño de los datos, se incrementa el número de caracteres para los nombres y apellidos de sus titulares, de 32 a 50; igualmente, en aras de maximizar el derecho de identificación de la ciudadanía residente en el extranjero, toda vez que se han presentado casos que el número de caracteres de los nombres y apellidos de las y los solicitantes excede los 32 elementos.

También se reubica la firma de la o del titular en el anverso de la credencial; se eliminan los datos repetidos del domicilio como el estado, municipio y localidad; se resalta el apartado referente a la sección; se reubica la huella dactilar y se establece una nueva distribución de los datos, con la finalidad de facilitar la visibilidad de los datos con mayor uso del documento por la ciudadanía residente en el extranjero.

En cuanto a los elementos de control y lectura rápida, se cambia la denominación del código identificador OCR por el de “Sección + ID” de la ciudadana o el ciudadano residente en el extranjero, el cual consiste en un número consecutivo designado a cada uno de sus titulares con fines de identificación.

Asimismo, se incorporan códigos de barras tradicionales y códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido, con la finalidad de brindar un control de información acotada y pública, para tener la posibilidad de verificar la autenticidad de la Credencial para Votar desde el Extranjero.

De igual manera, el código bidimensional QR de alta densidad permitirá almacenar datos de forma comprimida y encriptada.

En consecuencia, con la actualización del modelo de la Credencial para Votar desde el Extranjero, se logra contar con elementos que corroboren la autenticidad del instrumento electoral referido.

Por otra parte, se estima conveniente que la DERFE presente a este Consejo General, por conducto de la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE), con el conocimiento y opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), la propuesta sobre el uso, funcionalidad y verificación de la información que contengan los códigos bidimensionales QR de alta densidad que forman parte de los elementos del modelo de Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.

Asimismo, resulta necesario instruir a la DERFE para que, de requerirse realizar ajustes que no impliquen alguna modificación de fondo al modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el Extranjero, éstos sean determinados por la citada Dirección Ejecutiva, con la opinión de la CNV, para la presentación y aprobación de la CRFE.

Con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General puede aprobar la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero.

Es importante resaltar que la Comisión Nacional de Vigilancia, por tratarse del órgano de vigilancia de los trabajos relativos al Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar, en donde convergen las representaciones de los partidos políticos y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, recomendó a este órgano superior de dirección aprobar la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde el extranjero, cuyos motivos para aprobar se expusieron en los considerandos del presente Acuerdo.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente instruir al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la actualización del modelo de la “Credencial para Votar en territorio nacional” y la “Credencial para Votar desde el Extranjero”, de conformidad con los siguientes elementos de presentación, información, control, compuestos y de seguridad:

I. De presentación:

ELEMENTO	ANVERSO	REVERSO
Sustrato	Teslin de seguridad u otro material que proporcione las mismas o mejores características; la durabilidad del material deberá ser como mínimo 10 años	
Laminado	Poliéster Mylar u otro similar que cumpla con las características de recubrimiento	
Colores	CMYK y Gris INE	

II. De información:

ELEMENTO	ANVERSO	REVERSO
Nombre de la o del elector	✓ Hasta 50 caracteres	
Domicilio	✓	
Opción de ocultar calle, número interior y exterior	✓	
Sexo	✓ Opcional de manera visible	✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad
Fecha de nacimiento	✓	
Clave Única de Registro de Población (CURP)	✓	
Nombre y firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral		✓

III. De control:

ELEMENTO	ANVERSO	REVERSO
Clave de Elector	✓	
Número identificador "Sección + ID"		✓
Espacios libres para el marcado de voto para elecciones federales, locales y extraordinarias		✓
Leyenda "Desde el Extranjero" (en el caso de las credenciales que se emitan para votar desde el extranjero)		✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad

IV. Compuestos:

ELEMENTO	ANVERSO	REVERSO
Estado		✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad
Municipio		✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad
Localidad		✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad
Sección	✓	
Año de registro	✓	
Número de emisión	✓	
Año de emisión	✓	
Año en que expira la vigencia	Emisión y vigencia en un solo campo	
Fotografía digital de la ciudadana o del ciudadano	✓	
Código de barras unidimensional (CIC)		✓
Código QR		✓
Códigos bidimensionales QR de alta densidad		✓
Zona de lectura mecánica		✓
Huella digitalizada		✓ Se integra en el código bidimensional QR de alta densidad
Firma digitalizada	✓	
Elemento táctil	✓	

V. De seguridad:

ELEMENTO	ANVERSO	REVERSO
Dispositivo óptico variable (OVD) "INE"	✓	
Fondo de la credencial con diseño de alta seguridad en Offset	✓	
Tintas de seguridad visibles e invisibles	✓	
Imagen "fantasma"	✓	
Impresión arcoíris	✓	
Microlínea personalizada	✓	✓
Microtextos en Offset	✓	
Fondo con tramas en alta resolución		✓

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presente a este Consejo General, por conducto de la Comisión del Registro Federal de Electores, con el conocimiento y opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia, la propuesta sobre el uso, funcionalidad y verificación de la información que contengan los códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido que forman parte de los elementos del modelo de "Credencial para Votar en territorio nacional" y la "Credencial para Votar desde el Extranjero".

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que, de requerirse realizar ajustes que no impliquen alguna modificación de fondo al modelo de la "Credencial para Votar en territorio nacional" y la "Credencial para Votar desde el Extranjero", éstos sean determinados por la citada Dirección Ejecutiva, con la opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia, para la presentación y aprobación de la Comisión del Registro Federal de Electores.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores haga del conocimiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este órgano superior de dirección.

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le ruego que se sirva proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. _____

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:55 horas. _____

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de febrero de dos mil diecinueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. _____

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**